

Competencias profesionales para el ejercicio de la inspección de educación en la Comunidad de Madrid

José María Lozano Salinas

Programa de Doctorado en Educación

Departamento de Pedagogía

Facultad de Formación de Profesorado y Educación

Madrid, 2023

Competencias profesionales para el ejercicio de la inspección de educación en la Comunidad de Madrid

Tesis doctoral



José María Lozano Salinas

Directores

Dr. Javier M. Valle López
Dr. Jesús Manso Ayuso

Escuela de Doctorado
Programa de Doctorado en Educación
Universidad Autónoma de Madrid

– 2023 –

Competencias profesionales para el ejercicio de la inspección de educación en la Comunidad de Madrid

Tesis doctoral



José María Lozano Salinas

Directores

Dr. Javier M. Valle López

Dr. Jesús Manso Ayuso

Escuela de Doctorado
Programa de Doctorado en Educación
Universidad Autónoma de Madrid

– 2023 –

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en el presente documento se realizan con referencia a miembros de la comunidad educativa o a otros colectivos y se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituidos por términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino.

A ti, Pilar,
como todo.

A vosotros, Pilar, Jose y Daniel,
mis hijos:
horizontes cercanos de mi futuro.

Agradecimientos.

Tengo la convicción de que cualquier reto que afrontamos siempre requiere del trabajo colaborativo de distintos agentes, que unas veces con conciencia, convicción y esmero coadyuvan en su consecución, aunque no hayan tenido nada que ver en su gestación, y en otras ocasiones colaboran de una manera inconsciente, pero siempre animosa y desinteresada.

Esta ha sido también la gestación y apoyo en esta tarea, de iniciativa personal, pero que ha contado con el apoyo, el empuje, el consejo y el sostén de múltiples personas y colectivos que, de forma desinteresada y ciertamente animosa, se han convertido en imprescindibles para que esta semilla germine, reviente en verdor y dé fruto.

Abordar el desafío de la elaboración de una tesis doctoral; intentar aportar algún elemento académico de rigor al cúmulo investigativo universitario y pretender formar parte, aunque sea sólo en un reflejo, de las comunidades universitarias, es una aventura en la que, sin dudas, se encontrarán problemas, contratiempos, dificultades y desánimos y para las que tener apoyos junto a ti, no sólo es necesario, es imprescindible y fundamental.

Basten estas sencillas líneas para poner sobre blanco y explicitar a aquellas personas que consciente o inconscientemente, presentes o ya ausentes, con intención o sin ella, han aportado su báculo para sostener este proyecto y finalmente conducirlo a la meta, que posiblemente no sea merecida, pero que corresponde también a aquellos que han ayudado, probablemente más, que aquel que aparece como protagonista.

No puedo dejar de empezar el cúmulo de agradecimientos sin mencionar a mi mujer, Pilar y a mis tres hijos: Pilar, Jose y Daniel. Ellos han sido esos agentes que han colaborado de forma imprescindible para que esta labor pueda ver la luz. Ellos han soportado mis ausencias o mis devaneos académicos, conciliando la vida normal, familiar, cotidiana, que en este periodo histórico se nos ha hurtado por una pandemia mundial, con mis proyectos e iniciativas. Ese agradecimiento, que es también dedicatoria, debe ser eterna, pues en ellos podré alcanzar el horizonte digno a mi futuro.

Junto a ellos debo mencionar también al resto de mi familia que siempre y de una forma cercana han confiado primero en mí, y finalmente en el final feliz de este proyecto, en ocasiones de una forma más inconsciente que consciente. A mis padres, ausentes ya desde hace muchos años, demasiados; a mis hermanos, Francisco Javier, Teresa y Daniel; a mis cuñados y sobrinos. Buena gente y dulce reflejo de la sencillez de la vida familiar, así como al resto de los núcleos familiares primigenios, con una especial mención a la única tía que todavía nos acompañan: a mi querida tía Tere, que recientemente ha perdido a su marido, mi querido tío Modesto; y a mis primos. A mi familia política, nombrando en primer lugar a mis suegros, Pilar y Ángel que me han acogido como propio retoño al quedar huérfano tan pronto; al resto de la familia política y muy especialmente a Gema, a David, a Paula y a Guillermo, que siempre me llama padrino, y que al vivir tan cerca han hecho real la apertura e incremento constante y cotidiano de nuestro entorno familiar. También es necesario mencionar al resto de la vasta y fecunda familia que mi mujer ha aportado, como necesario ajuar, a nuestro matrimonio.

Y junto con ellos a las amistades que me quedan de mi juventud, auténtico tesoro fecundo y avejentado en el crisol de los años: a Ernesto, que como sacerdote salesiano hace fecunda su vocación en el trasiego de colegios y provincias; a Carlos y a su familia, a Antonio, Jesús, Luis Fernando y a D. Manuel de Castro. Debo agradecer de manera específica y afectuosa a la

congregación salesiana en general y a todos los salesianos que inculcaron en mí la inquietud escolar, docente y universitaria. Sólo puedo y debo ser agradecido con los hijos de D. Bosco.

En este apartado es obligado mencionar a aquellos compañeros, inspectores de educación, que también han colaborado con su ejemplo, cariño y estima en aportar un patrón que finalmente se convierte en edificio consciente y en encofrado de iniciativas de este tipo: desde el primer inspector del que oí hablar cuando ejercía como maestro en el colegio salesiano San Miguel Arcángel, D. Jesús Mesanza, hasta a D. Eduardo Sóler Fierrez, maestro de inspectores, y estudioso y precursor de la supervisión educativa, que en los últimos años de su vida me confió su devenir técnico, su desarrollo histórico, me permitió escribir su biografía y me obsequió con su cariño y con su amistad. En este apartado debo también mencionar a la ilustre Inspectora D^a M^a Teresa López del Castillo, investigadora incansable y estudiosa de la Inspección, que me ha permitido conocerla y compartir con ella momentos de una vida ya muy densa y gratificante para quienes la hemos disfrutado en sus escritos, para todos los inspectores presentes, y seguro, para las próximas generaciones de inspectores de educación.

Junto a ellos debo mencionar a numerosos inspectores y colectivos que me han aportado una gran riqueza técnica, profesional y personal y que han apostado cariñosamente por mí: a todas mis inspectoras jefas de distrito, unas durante mi ejercicio de estos casi veinte años de inspección y otras con anterioridad. A mis inspectores jefes, y también a aquellos que me han acompañado y han compartido conmigo las responsabilidades como Inspectores Jefes. Junto con ellos debo mencionar a otros muchos inspectores que me han enseñado y dirigido con generosidad y desinterés: a los Subdirectores Generales de Inspección desde que la Comunidad de Madrid asumió competencias en materia de enseñanza no universitaria. A todos he conocido y todos me han tratado con afecto y cariño. A todos los inspectores de la tercera promoción de la Comunidad de Madrid: «buena añada, ¡vive Dios!». Y a todos esos queridos inspectores que me han tenido que soportar, aguantar y comprender cuando asumí la Jefatura del Servicio de Inspección de la DAT Norte: a todos los tengo en la memoria, en la agenda y todos me han enriquecido personal y profesionalmente.

Es de rigor dedicar un apartado específico a los colectivos profesionales. Primero a la Asociación de Inspectores de Educación (ADIDE) y de forma muy especial a la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) que me ha acogido y ha impulsado mis inquietudes como auténtica familia desde los cuatro puntos cardinales. Mención especial debo realizar a los inspectores de Teruel y profesores de la Universidad de Zaragoza: José Luis Castán, impulsor y alma de GEINSP (Grupo de Estudios sobre la Inspección de Educación en España) y Lourdes Alcalá: ellos fueron los primeros que confiaron en este proyecto académico al avalar mi matrícula en el programa de doctorado de la UAM. Y mención igualmente especial en este agradecimiento debo hacer a Francisco Javier Galicia Mangas, compañero inspector y profesor también de la Universidad de Zaragoza que me ha proporcionado su criterio, su experiencia y múltiple y valiosa documentación.

Existe un proyecto que queda pendiente de un buen arquitecto y ese podría ser Jesús Marrodán, actual presidente de la Unión Sindical de Inspectores de Educación y es el de investigar y materializar la evolución asociativa de los Inspectores de Educación desde que en 1849 se creó el cuerpo: desde la Hermandad de Inspectores, de principios del siglo XX, a los colectivos actuales: USIE, ANIE, ADIDE, Insnoave o las secciones sindicales de CCOO, UGT y ANPE.

Vaya también mi agradecimiento y mi amistad a los exquisitos compañeros de la Subdirección General de Ordenación Académica, grupo trabajador y encomiables técnicos, que acogieron con generosidad mi solicitud de cese cuando quise dedicarme a este objetivo académico.

Junto con este grupo debo también mencionar de una manera muy especial y afectuosa a mis directores de tesis: a los doctores D. Javier M. Valle López y D. Jesús Manso Ayuso, siempre dispuestos y exquisitos en sus consejos y directrices. En ocasiones el azar, entorno del que no soy santo de devoción, te obsequia con regalos que no puedes por menos que apreciar, acoger y disfrutar. Este ha sido el sentir sincero con mis directores de tesis: profesores universitarios y académicos de gran valía y futuro prometedor que han dedicado su experiencia y su esfuerzo en orientar a este, siempre alumno. Los múltiples quehaceres del doctor Valle, como director del Grupo de Investigación sobre Políticas Educativas Supranacionales (GIPES) y como profesor y persona continuamente reclamado por distintas instancias –máxime en un momento de cambio curricular-, y las altas responsabilidades que ha asumido el doctor Manso, como decano de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la UAM, no les ha impedido asistir, dirigir y orientar este proyecto con un esmero y entrega envidiables. En este trayecto también he sentido cómo crecía la familia, al compartir afectuosamente la ilusión de la nueva paternidad de Jesús. Ahora entiendo lo que significa la paternidad académica y espero ser digno sucesor de su trayectoria.

El entorno académico y universitario me ha aportado y recordado unos valores que han seguido enriqueciendo mi vertiente personal y mi vertiente técnica: no debieran separarse nunca las decisiones educativas –políticas o no- de las evidencias y justificaciones científicas.

Debo mencionar también a la gran familia del GIPES, que me acogieron y me han aportado una ilusión y una frescura necesaria para quienes abordamos esta tarea con una cierta edad. Sus correos, convocatorias y comunicaciones siempre han contado con mi lectura atenta y cariñosa, con el oscuro deseo de nutrirme de la ilusión y de la envergadura académica de sus miembros. Personalizo ese agradecimiento en Adrián Neubauer quien me enseñó, en la lectura y defensa de su magnífica tesis doctoral, pormenores y detalles de la liturgia académica que tanto me ha enriquecido. Y menciono también en este apartado a la profesora universitaria asociada y compañera en el Servicio de la Unidad de Programas de la DAT Norte, Lourdes García, que siempre me ha animado, documentado e impulsado, y a la profesora de la Universidad Pontificia de Comilla, Evelia Franco, quien me ha ayudado en la validación estadística y en el vaciado e interpretación de los datos.

En este colectivo quiero mencionar también a todos los miembros de la Comisión Coordinadora de la EvAU durante los cursos 2018/2019 y 2019/2020: eran vicedecanos, profesores universitarios y técnicos de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid con quienes compartí la nuclear tarea de la organización de las evaluaciones de acceso a la universidad de aquellos años. Me viene a la memoria su rigurosidad y su entrega en esa tarea que considero que fue semiente de imitación y envidia en este objetivo. Debo mencionar a los representantes de la UAM en dicha Comisión: a Lis Paula San Miguel y a Carlos de Carlos; me hubiera gustado cruzarme con ellos por el campus en mis numerosas visitas a la UAM. Seguro que todavía hay tiempo para ello.

En cuanto a las personas implicadas directamente en el propio trabajo académico, debo mencionar en primer lugar a los padres de la herramienta: a José Moya, profesor titular de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación del Departamento de Educación de la

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y a Florencio Luengo del grupo Atlántida, quienes junto a un grupo de inspectores lideraron el diseño y la elaboración del instrumento en el seno de un proyecto financiado por COTEC. Y además es necesario mencionar a todos los inspectores de educación de la Comunidad de Madrid, a muchos de los cuales ya he mencionado, liderados por el Subdirector General de Inspección, que siempre me han mostrado su estima y disponibilidad y ha apoyado este proyecto. Junto a ellos me sobrecoge recordar a todos los demás agentes, directores de centros, docentes en ejercicio, presidentes y representantes de asociaciones de madres y padres de alumno o de asociaciones de familias de centros educativos y a los responsables de la Consejería de Educación.

Es obligado mencionar a los presidentes del Consejo de directores de la Comunidad de Madrid, de ADIMAD, de APRODIR, y de ADEACAM. A los presidentes de Escuelas Católicas, de la Fundación Tertio Milenio, así como a representantes de CECE-Madrid, ACADE, Mejora tu escuela pública (MEP), CICAIE y a la asociación de colegios independientes. A las presidentas de la FAPA Giner de los Ríos, de la CONFAPA, a los representantes sindicales (CCOO, UGT, ANPE, CSIF, CSIT, CGT, FSIE) y del colegio de doctores y licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Comunidad de Madrid que me han atendido y apoyado.

Es necesario mencionar el apoyo y la generosidad del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid en las personas de su actual presidenta, Pilar Ponce y de su secretario, mi buen amigo José Manuel Arribas; él me ha proporcionado contactos e información totalmente imprescindibles.

Todos ellos han sido agentes indispensables y meritorios del éxito de este proyecto, como umbral del resto de actores que han dado cuerpo a los datos y a las conclusiones.

Uno de los principales objetivos de la existencia humana es el de la consecución de la felicidad: yo he querido incardinar este objetivo de distintas formas. En esta etapa de mi vida pretendiendo elaborar y defender una tesis doctoral que pudiera recoger mis inquietudes académicas y mi experiencia profesional, a fin de intentar aportar algún elemento de enriquecimiento a la labor a la que he dedicado mi vida. En este objetivo de felicidad y donación, esencia misma de la propia humanidad, he contado con el esencial apoyo de aquellos a quienes he nombrado y a muchos otros, que han quedado en la maleza de mi memoria, pero que también han sido necesarios e imprescindibles. Son ellos los reales protagonistas de esta aventura, más que quien se ha podido beneficiar de su labor, en la seguridad de que lo realmente satisfactorio, siempre, no es la meta, sino el camino en el que hemos compartido etapas y sueños.

Sea este mi agradecimiento sincero hacia todos ellos.

Índice de contenidos

	Pág.
Índice de figuras y cuadros.....	5
Índice de tablas	7
Índice de imágenes	11
Índice de anexos	12
 Portada: <i>La visita de Inspección</i>	15
Resumen	17
Abstract	25
Introducción.....	27
Estructura de la tesis.....	31
 Capítulo 1. Metodología	35
1.1. Finalidad y objetivos de la investigación	36
1.2. Sistema metodológico	39
1.3. Investigación multifocal. Estudio histórico-comparado.	40
1.3.1. Método histórico	41
1.3.2. Método comparado.....	43
1.3.2.1. Planteamiento de estudio.....	43
1.3.2.2. La descripción e interpretación: parámetros e indicadores	44
1.3.2.3. La yuxtaposición.....	45
1.3.2.4. La comparación	45
1.3.2.5. Propuesta disciplinar.....	46
1.4. Investigación evaluativa. Estudio de encuesta	48
1.4.1. La investigación evaluativa y el ejercicio de las competencias inspectoras.....	48
1.4.2. Diseño inicial de la investigación evaluativa.....	55
1.4.2.1. Estructura de la investigación.	55
1.4.2.2. Validación del instrumento de recogida de datos	55
1.4.2.3. Selección de la población y variables utilizadas.....	60
1.4.2.4. Instrumento de recogida de datos.....	66
1.4.2.5. Gestiones para la adecuación ética de la investigación.....	69
1.4.2.6. Diseño de la administración del instrumento de recogida de datos.	70
1.4.2.7. Propuesta de muestras necesarias por sectores	73
1.4.3. Aplicación final de la investigación evaluativa	75
1.4.3.1. Versión final del instrumento y su validación estadística	75
1.4.3.2. Administración del instrumento de recogida de datos.....	75
Administración al sector de inspectores de educación	75
Administración al sector de directores de centros docentes	76
Administración al sector de familias de alumnos de enseñanza básica	77
Administración al sector de docentes de la enseñanza básica.....	78
Administración al sector de responsables educativos.....	79

	Pág.
1.4.3.3. Cronograma final del proceso de divulgación y de recogida de datos ...	81
1.4.3.4. Respuestas finales obtenidas y tratamiento de datos	81
1.4.3.5. Decisiones finales con base en las respuestas obtenidas	86
INVESTIGACIÓN MULTIFOCAL: Estudio histórico-comparado	89
Capítulo 2. Investigación histórica	91
2.1. Etapa prenortativa	93
2.1.1. Las Cédulas reales	93
2.1.2. Los aprobadores y examinadores de maestros.....	103
2.1.3. La Hermandad de San Casiano	104
2.1.4. Colegio Académico del noble arte de las primeras letras.	107
2.1.5. Los Celadores de la Junta General de Caridad	109
2.1.6. El Inspector de las Escuelas Reales.....	110
2.1.7. La Real Academia de Primera Educación	111
2.1.8. Las Juntas de Exámenes.	114
2.1.9. Los Censores de las Escuelas	116
2.1.10. Las Juntas Inspectoras de las Escuelas de Primeras Letras	118
2.1.11. La Inspección General de instrucción pública.	121
2.1.12. Las Juntas de Inspección	125
2.2. Etapa normativa.....	127
2.2.1. En las Constituciones.....	128
2.2.2. En las leyes educativas	137
2.2.3. En la normativa de desarrollo	163
2.2.4. En la normativa de la Comunidad de Madrid.....	179
2.3. Síntesis reflexiva	187
Capítulo 3. Investigación comparada internacional	193
3.1. La Inspección de Educación en la República Francesa.....	196
3.1.1. Acercamiento a la historia y estructura de la Inspección de Educación en la República Francesa	196
3.1.2. Las funciones asignadas en la legislación, a la Inspección de Educación de la República Francesa	211
3.2. La Inspección de Educación en la República Italiana	225
3.2.1. Acercamiento a la historia y estructura de la Inspección de Educación en la República Italiana	225
3.2.2. Las funciones asignadas en la legislación, a la Inspección de Educación de la República Italiana	241
3.3. La Inspección de Educación en Inglaterra.....	242
3.3.1. Acercamiento a la historia y estructura de la Inspección de Educación en Inglaterra.....	242
3.3.2. Las funciones asignadas en la legislación, a la Inspección de Educación de Inglaterra	257

	Pág.
3.4. El caso particular de Finlandia	288
3.4.1. Acercamiento a la historia, a la estructura del sistema educativo y a la asignación de funciones, propias de la inspección de educación, en Finlandia	288
3.4.2. Las funciones propias de la inspección de educación en la legislación de Finlandia	297
3.5. Síntesis reflexiva	310
 Capítulo 4. Investigación comparada disciplinar	 317
4.1. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social.....	319
4.1.1. Acercamiento a la historia y estructura de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la normativa española.....	319
4.1.2. Las funciones asignadas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la normativa española	325
4.2. La Inspección de Sanidad.....	355
4.2.1. Acercamiento a la historia y estructura de la Inspección de los servicios sanitarios en España	356
4.2.2. Las funciones asignadas a la Inspección de los servicios sanitarios en la normativa española.....	371
4.3. La Inspección de Hacienda.....	387
4.3.1. Acercamiento a la historia y estructura de la Inspección de Hacienda en España	387
4.3.2. Las funciones asignadas a la Inspección de Hacienda en la normativa española	406
4.4. Síntesis reflexiva	468
 INVESTIGACIÓN EVALUATIVA: Estudio de encuesta	 475
 Capítulo 5. Estudio de encuesta	 477
5.1. Resultados obtenidos en el estudio de encuestas.....	477
5.2. El ejercicio de las competencias inspectoras visto por los grupos prioritarios	479
5.2.1. Dimensión personal.....	481
5.2.2. Dimensión institucional.....	482
5.2.3. Dimensión de gestión del conocimiento	484
5.2.4. Dimensión de cultura institucional.....	486
5.3. Los aspectos diferenciadores en la percepción del ejercicio de las competencias inspectoras, por parte de los inspectores y de los directores.	489
5.3.1. Dimensión personal.....	491
5.3.2. Dimensión institucional.....	493
5.3.3. Dimensión de gestión del conocimiento	495
5.3.4. Dimensión de cultura institucional.....	497

	Pág.
Capítulo 6. Conclusiones	501
6.1. Conclusiones finales y propuestas.	501
6.1.1. La inspección educativa como agente del sistema educativo y facilitador de políticas de desarrollo educativo	502
6.1.2. La inspección educativa como agente de protección de menores	503
6.1.3. La inspección educativa como agente de innovación educativa	504
6.1.4. La inspección educativa como agente de comunicación fluida con los sectores de las comunidades educativas	505
6.1.5. La inspección educativa y la comunicación y coordinación interna para la mejora de la intervención educativa.....	507
6.1.6. La inspección educativa como agente formativo.....	508
6.1.7. La formación y evaluación de los inspectores de educación	509
6.2. Propuesta de líneas generales para el establecimiento de un Código Deontológico para la Inspección de Educación en la Comunidad de Madrid.....	511
6.3. Limitaciones y futuras líneas de investigación.....	522
A modo de epílogo	525
Referencias documentales.	529
Referencias bibliográficas	531
Referencias normativas nacionales y extranjeras.....	545
Tablas	563
Imágenes	655
Anexos	671

Índice de figuras y cuadros

	Pág.
Figura 1.A. Síntesis del enfoque metodológico, finalidad, objetivo general y objetivos específicos y estructura	21
Figura 1.B. Síntesis de la finalidad y objetivos de la investigación y estructura de la tesis.	39
Figura 1.2. Síntesis de los objetivos de investigación y sistema metodológico.....	40
Figura 1.3. Un modelo integrado de las funciones propias de la inspección educativa.....	51
Figura 1.4. Matriz de funciones y tareas de la inspección de educación.	53
Figura 1.5. Representación gráfica de la capacidad profesional de la inspección educativa.	54
Cuadro 1.6. Resultados de las pruebas KMO y Bartlett	57
Cuadro 1.7. Coeficientes de alfa de Cronbach por dimensiones	58
Cuadro 1.8. Evolución del número de ítems tras la aplicación piloto.....	59
Cuadro 1.9. Evolución de coeficientes de alfa de Cronbach por dimensiones en las dos versiones.....	60
Cuadro 1.10. Evolución de la población de inspectores de educación en la Comunidad de Madrid.	61
Cuadro 1.11. Datos de centros educativos por titularidad y Dirección de Área Territorial. Curso 2018/2019. Datos utilizados para la población de directores.....	61
Cuadro 1.12. Datos de docentes por etapa educativa, tipo de centro por financiación y Dirección de Área Territorial. Curso 2018/2019.....	62
Cuadro 1.13. Datos de censos de padres comunicados por parte de los centros de la DAT Norte afectados por el proceso de renovación de representantes de los consejos escolares en el curso 2021/2022.	63
Cuadro 1.14. Distribución de alumnado por Direcciones de Área Territorial. Curso 2018/2019.	63
Cuadro 1.15. Proyección de la población de madres y padres de alumnos por Direcciones de Área Territorial. Curso 2018/2019. Ratio 1/1'4993.	63
Cuadro 1.16. Población de responsables educativos por nivel –carga- y legislatura.	64
Cuadro 1.17. Resumen global. Población diana de la investigación por sectores y Direcciones de Área Territorial.	65
Cuadro 1.18. Variables incorporadas a la herramienta.	66
Cuadro 1.19. Enlaces y código bidi de acceso a las encuestas por sectores.....	68
Figura 1.20. Cronograma de divulgación y recogida de datos. Cuadro organizado por quincenas.....	73
Cuadro 1.21. Muestra necesaria en escenario por sectores para un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 5 %.	74
Cuadro 1.22. Muestra necesaria en escenario global de la población para un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 5 %.	74
Cuadro 1.23. Entidades representativas de directores de centros docentes con los que se contactó personalmente	77
Cuadro 1.24. Entidades representativas de asociaciones y federaciones de madres y padres con los que se contactó personalmente.....	78
Cuadro 1.25. Entidades y sindicatos docentes con los que se contactó personalmente.	79
Figura 1.26. Cronograma finalmente realizado para la divulgación y recogida de datos de los distintos sectores. Cuadro organizado por quincenas.	81

	Pág.
Cuadro 1.27. Resultados obtenidos y porcentaje válido.	81
Cuadro 1.28.1. Directores. Resultados obtenidos organizados en la variable DAT.....	82
Cuadro 1.28.2. Directores. Resultados obtenidos organizados en la variable antigüedad en la función directiva.	82
Cuadro 1.28.3. Directores. Resultados obtenidos organizados en la variable tipo de centro.	82
Cuadro 1.29.1. Inspectores. Resultados obtenidos organizados en la variable DAT.....	83
Cuadro 1.29.2. Inspectores. Resultados obtenidos organizados en la variable antigüedad en la función inspectora.	83
Cuadro 1.30.1. Familias. Resultados obtenidos organizados en la variable DAT.	83
Cuadro 1.30.2. Familias. Resultados obtenidos organizados en la variable tipo de centro	84
Cuadro 1.31.1. Docentes. Resultados obtenidos organizados en la variable DAT	84
Cuadro 1.31.2. Docentes. Resultados obtenidos organizados en la variable antigüedad en la función docente.	84
Cuadro 1.31.3. Docentes. Resultados obtenidos organizados en la variable tipo de centro. .	85
Cuadro 1.32.1 Responsables. Resultados obtenidos organizados en la variable antigüedad en la responsabilidad.	85
Cuadro 1.33. Margen de error para un nivel de confianza del 95 % en la muestra conseguida de los grupos prioritarios.....	86
Figura 3.1. Estructura del sistema educativo en la República Francesa.....	197
Cuadro 3.2. Datos estadísticos del sistema de inspección en la República Francesa, adaptados a la nueva organización, a partir de la propuesta realizada por Prats et al. (2005, 42).....	200
Figura 3.3. Estructura del sistema educativo en la República Italiana	228
Figura 3.4. Estructura del sistema educativo en Inglaterra.....	246
Cuadro 3.5. Costes medio por alumno o estudiante en el año 2015 en Finlandia	292
Figura 3.6. Estructura del sistema educativo en Finlandia.	293
Cuadro 5.1.1. Estadísticos descriptivos (media y desviación típica) de cada dimensión.....	478
Cuadro 5.1.2. Correlaciones entre las distintas dimensiones.....	478
Figura 5.2.1. Representación gráfica en diagrama radial del ejercicio de las competencias profesionales por parte de los inspectores de educación de la Comunidad de Madrid	480
Figura 5.2.2. Representación gráfica, en diagrama radial, de las dimensiones que componen el ejercicio de las competencias profesionales por parte de los inspectores de educación de la Comunidad de Madrid, percibida por los propios inspectores de educación y por lo directores de los centros docentes donde se imparte la enseñanza básica.....	489

Índice de tablas

	Pág.
Tabla I. Dimensión Personal. Evolución de la formulación de ítems desde la fase inicial a la definitiva	565
Tabla II. Dimensión Institucional. Evolución de la formulación de ítems desde la fase inicial a la definitiva	566
Tabla III. Dimensión de Gestión del Conocimiento. Evolución de la formulación de ítems desde la fase inicial a la definitiva	567
Tabla IV. Dimensión de Cultura Institucional. Evolución de la formulación de ítems desde la fase inicial a la definitiva	568
Tabla 1.1.1. Dimensión Personal. Cargas factoriales de cada ítem en su factor	569
Tabla 1.1.2. Dimensión Institucional. Cargas factoriales de cada ítem en su factor.	570
Tabla 1.1.3. Dimensión de Gestión del Conocimiento. Cargas factoriales de cada ítem en su factor	571
Tabla 1.1.4. Dimensión de Cultura Institucional. Cargas factoriales de cada ítem en su factor	572
Tabla 1.2.1. Estadísticos descriptivos (media y desviación típica) de cada uno de los ítems de la Dimensión Personal	573
Tabla 1.2.2. Estadísticos descriptivos (media y desviación típica) de cada uno de los ítems de la Dimensión Institucional.	574
Tabla 1.2.3. Estadísticos descriptivos (media y desviación típica) de cada uno de los ítems de la Dimensión de Gestión del Conocimiento.	575
Tabla 1.2.4. Estadísticos descriptivos (media y desviación típica) de cada uno de los ítems de la Dimensión de Cultura Institucional.	576
Tabla 2.1.1 Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación las tareas asignadas a los <i>veedores</i> en la cédula de Enrique II (1370)	577
Tabla 2.1.2. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las tareas asignadas a los <i>veedores</i> en la Real Cédula de Felipe II (1573).	578
Tabla 2.1.3. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las tareas asignadas a los <i>justicias</i> en la Real Cédula de Felipe II (1588)	579
Tabla 2.1.4. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las tareas asignadas a los <i>aprobadores</i> por parte del Consejo de Castilla (1600).	580
Tabla 2.1.5. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las tareas asignadas a los <i>examinadores</i> en la Real Cédula de Felipe III (1609)	581
Tabla 2.1.6. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación a las tareas asignadas a los miembros de la Hermandad de San Casiano (1647).	582
Tabla 2.1.7. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las tareas asignadas a los <i>visitadores</i> en la Real Cédula de Felipe V (1743)	583
Tabla 2.1.8. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las tareas asignadas a los <i>celadores</i> e <i>inspectores</i> de cuarteles en la Real Cédula de 1778.	584
Tabla 2.1.9. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las tareas asignadas a los <i>examinadores</i> y <i>visitadores</i> en la Real Provisión de Carlos III (1780)	585
Tabla 2.1.10. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las tareas asignadas a los <i>examinadores</i> y <i>comisionados</i> en la Real Cédula de Carlos III (1783). ...	586
Tabla 2.1.11. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las tareas asignadas al <i>Visitador</i> e <i>Inspector</i> y <i>Censor</i> en la Real Orden de 1791.	587
Tabla 2.1.12. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las tareas asignadas al <i>Zelador General</i> en la Real Orden de 1791.	588

	Pág.
Tabla 2.1.13. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las tareas asignadas al <i>Celador</i> y al <i>Visitador</i> en los Estatutos de la Real Academia de Primeras Letras (1797).....	589
Tabla 2.1.14. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las tareas asignadas a la Junta de Vigilancia en el Reglamento de la Junta de Exámenes (1804). ..	591
Tabla 2.1.15. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las tareas asignadas a los <i>Censores</i> en la Instrucción de 1816.	592
Tabla 2.1.16. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las tareas análogas aparecidas en el Reglamento General de Instrucción Pública de 1821.....	594
Tabla 2.1.17. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las tareas asignadas a las Juntas Inspectoras en el Plan y Reglamento de Primeras Letras de 1825.	595
Tabla 2.1.18. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las atribuciones y obligaciones asignadas a la Inspección General de Instrucción Pública en el Reglamento de 1826.....	597
Tabla 2.2.2.1. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las funciones atribuidas al Servicio de Inspección Técnica de Educación en la Ley 14/70.....	599
Tabla 2.2.2.2. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las funciones atribuidas a la inspección educativa en la Ley 1/90	600
Tabla 2.2.2.3. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las funciones asignadas a los inspectores de educación en la LOPEGCE 9/1995.	601
Tabla 2.2.2.4. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las funciones y atribuciones asignadas a los inspectores de educación en la LOCE 10/2002.....	602
Tabla 2.2.2.5.A. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las funciones asignadas a los inspectores de educación en la LOMLOE 3/2020 (I).....	603
Tabla 2.2.2.5.B. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las atribuciones asignadas a los inspectores de educación en la LOMLOE 3/2020 (II).....	604
Tabla 2.2.3.1. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las tareas asignadas a los Inspectores de Educación en el Decreto de 30 de marzo de 1849.....	605
Tabla 2.2.3.2. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las correspondencias asignadas a los Inspectores de Educación en el Reglamento de 20 de mayo de 1849.	606
Tabla 2.2.3.3. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las atribuciones y deberes asignadas a los inspectores de educación en el Real Decreto de 1913.	607
Tabla 2.2.3.4. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las funciones asignadas a los inspectores de educación en el Decreto de 1932.....	608
Tabla 2.2.3.5. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las funciones asignadas a los inspectores de educación en el Decreto 2915 de 1967.....	609
Tabla 2.2.3.6. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las funciones y atribuciones de los inspectores de educación en el Decreto 664 de 1973.	611
Tabla 2.2.3.7. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las funciones y atribuciones asignadas a los inspectores de educación en el Real Decreto 1524 de 1989.	613
Tabla 2.2.3.8. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las funciones asignadas a los inspectores coordinadores en la Orden de 1990.....	614
Tabla 2.2.3.9. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con los fines y funciones asignados a los inspectores de educación en la Orden de 1996.....	615
Tabla 2.2.4.1. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las funciones asignadas a los inspectores de educación en el Decreto 61/2019.	616

	Pág.
Tabla 2.2.4.2. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las funciones, atribuciones y actuaciones asignadas a los inspectores de educación en la Orden 732/2021.	617
Tabla 3.1.1. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las funciones de los inspectores de educación en países de la UE (I). República francesa.....	618
Tabla 3.1.2. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las funciones de los inspectores de educación en países de la UE (II). República francesa.....	620
Tabla 3.1.3. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las funciones de los inspectores de educación en países de la UE (III). República francesa.....	622
Tabla 3.2.1. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las funciones de los inspectores de educación en países de la UE (I). República italiana.	624
Tabla 3.3.1. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las funciones de los inspectores de educación en países de la UE (I). Inglaterra.	625
Tabla 3.4.1. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las funciones de los inspectores de educación en países de la UE (I). Finlandia.	626
Tabla 4.1.1. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las funciones de los inspectores de trabajo y seguridad social (I).	627
Tabla 4.1.2. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las funciones de los inspectores de trabajo y seguridad social (II).	628
Tabla 4.1.3. Vinculación de las atribuciones de la Ley Orgánica de Educación con las facultades de los inspectores de trabajo y seguridad social (III).	629
Tabla 4.2.1. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las funciones de los inspectores de sanidad (I).....	631
Tabla 4.2.2. Vinculación de las funciones de la Ley Orgánica de Educación con las funciones de los inspectores de sanidad (II).	632
Tabla 4.2.3. Vinculación de las atribuciones de la Ley Orgánica de Educación con las atribuciones de los inspectores de sanidad (III).	634
Tabla 4.3.1. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las funciones de los inspectores de hacienda (I).....	636
Tabla 4.3.2. Vinculación de atribuciones de la Ley Orgánica de Educación con las facultades de los inspectores de hacienda (II).	637
Tabla 5.1. Estadísticos descriptivos (media y desviación típica) de cada dimensión.	638
Tabla 5.2. Diferencias en las puntuaciones entre inspectores y directores. Estudio por dimensiones.....	638
Tabla 5.3. Resultados de pruebas no paramétrica aplicada a las muestras de los grupos prioritarios: inspectores y directores, por dimensiones.....	638
Tabla 5.4.1. Diferencias en las puntuaciones entre inspectores y directores. Dimensión Personal. Estudio por ítems.....	639
Tabla 5.4.2. Diferencias en las puntuaciones entre inspectores y directores. Dimensión Institucional. Estudio por ítems.....	640
Tabla 5.4.3. Diferencias en las puntuaciones entre inspectores y directores. Dimensión de Gestión del Conocimiento. Estudio por ítems.	641
Tabla 5.4.4. Diferencias en las puntuaciones entre inspectores y directores. Dimensión de Cultura Institucional. Estudio por ítems.	642
Tabla 5.5.1. Resultados de pruebas no paramétrica aplicada a las muestras de los grupos prioritarios: inspectores y directores. Ítems de la Dimensión Personal.	643
Tabla 5.5.2. Resultados de pruebas no paramétrica aplicada a las muestras de los grupos prioritarios: inspectores y directores. Ítems de la Dimensión Institucional.	644

	Pág.
Tabla 5.5.3. Resultados de pruebas no paramétrica aplicada a las muestras de los grupos prioritarios: inspectores y directores. Ítems de la Dimensión de Gestión del Conocimiento.	645
Tabla 5.5.4. Resultados de pruebas no paramétrica aplicada a las muestras de los grupos prioritarios: inspectores y directores. Ítems de la Dimensión de Cultura Institucional. .	646
Tabla 5.6. Resultados por variables y dimensiones de la población de directores de centros docentes de enseñanza básica.	647
Tabla 5.6.1. Variable correspondiente a la Dirección del Área Territorial.	647
Tabla 5.6.2.- Variable correspondiente a la antigüedad en el desempeño de la función directiva.	647
Tabla 5.6.3.- Variable correspondiente al tipo de centro en el que desarrollan sus funciones directivas.	647
Tabla 5.7. Resultados por variables y dimensiones de la población de inspectores de educación en la Comunidad de Madrid.	648
Tabla 5.7.1. Variable correspondiente a la Dirección del Área Territorial.	648
Tabla 5.7.2. Variable correspondiente a la antigüedad en el desempeño de la función inspectora.	648
Tabla 5.8. Resultados globales diferenciados de los sectores componentes de los grupos prioritarios.	648
Tabla 6.1. Relación del Real Decreto Legislativo 5/2015 y la Orden 732/2021 en lo relativo a la ética profesional, los principios éticos y el código de conducta de los inspectores de educación.	649
Tabla 6.2. Relación entre el Real Decreto Legislativo 5/2015 y la Orden 732/2021 en lo relativo a los principios éticos.....	650
Tabla 6.3. Relación entre el Real Decreto Legislativo 5/2015 y la Orden 732/2021 en lo relativo a los principios de conducta.	652

Índice de imágenes

	Pág.
Imagen 1. Póster. El ADN de la inspección educativa.	657
Imagen 2. Estructura dimensional testada en el análisis factorial confirmatorio.	659
Imagen 3. Evolución histórica. Etapa prenORMATIVA I.....	660
Imagen 4. Evolución histórica. Etapa prenORMATIVA II.....	661
Imagen 5. Evolución histórica. Etapa normativa. Cuerpos constitucionales.....	662
Imagen 6. Evolución histórica. Etapa normativa. Normativa educativa general I.....	663
Imagen 7. Evolución histórica. Etapa normativa. Normativa educativa general II.....	664
Imagen 8. Evolución histórica. Etapa normativa. Normativa que ha regulado a la Inspección Educativa.	665
Imagen 9. Evolución histórica. Etapa normativa. Normativa que ha regulado la Inspección Educativa en la Comunidad de Madrid.....	666
Imagen 10. Acceso a los archivos de resultados.	667
Imagen 11. Acceso a los archivos de tratamiento de datos.	668

Índice de Anexos.

	Pág.
Anexo I.A. Solicitud de Informe Favorable al Comité de Ética de la Investigación de la Universidad Autónoma de Madrid (CEI-UAM) para la realización del estudio de encuesta. Incluye todos los anexos remitidos.	673
Anexo I.B. Informe Favorable del Comité de Ética de la Investigación de la Universidad Autónoma de Madrid (CEI-UAM) para la realización del estudio de encuestas.	688
Anexo 1.1. Carta al Subdirector General de Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid.	689
Anexo 1.2. Propuesta de escrito del Subdirector General de Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid.	690
Anexo 1.3. Información de inspectores que han comunicado su decisión de no participar en la investigación.	691
Anexo 1.4. Plantilla del escrito remitido a todos los inspectores de educación invitando a participar en la investigación.	692
Anexo 1.5. Plantilla del escrito comunicando la incidencia del navegador IE 11 y la forma de solventarlo.	694
Anexo 1.6. Plantilla del escrito remitido a todos los inspectores de educación recordando la invitación a participar en la investigación.	695
Anexo 2.1. Plantilla del escrito remitido a las entidades representativas de los directores de centros educativos, presentando la investigación y solicitando su divulgación entre los directores de los centros.	697
Anexo 2.2. Plantilla del escrito remitido a las entidades representativas de los directores de centros educativos, volviendo a presentar la investigación y solicitando una nueva divulgación entre los directores de los centros.	700
Anexo 3.1. Plantilla del escrito remitido a las entidades representativas de los padres y madres de alumno –familias–, para presentar la investigación y solicitando la divulgación entre sus asociados.	703
Anexo 3.2. Cuentas de twitter investigadas.	706
Anexo 3.3. Ejemplo de tweet generado para facilitar el acceso y la divulgación de la encuesta entre las asociaciones y federaciones de padres (ejemplo).	710
Anexo 3.4. Hilo de respuesta generadas al tweet publicado para facilitar el acceso y la divulgación de la encuesta entre las asociaciones y federaciones de padres (ejemplo).	711
Anexo 4.1. Plantilla del escrito remitido a las entidades y sindicatos representativos de maestros, profesores y docentes, para presentar la investigación y solicitando la divulgación entre sus asociados.	712
Anexo 5.1. Plantilla del escrito remitido a todos los responsables educativos, invitando a participar en la investigación.	715
Anexo 5.2. Plantilla del escrito remitido a los responsables educativos, volviendo a presentar la investigación y reiterando la solicitud de participación.	717
Anexo 5.3. Mensajes relevantes recibidos desde el sector de responsables [A. B, C, D, E, F, G y H]	719
Anexo 5.4. Respuesta a los mensajes singulares, recibidos desde el sector de responsables.	724

Portada: *La visita de Inspección*

He querido colocar en la portada de esta tesis doctoral, la imagen de la obra escultórica de Miguel Ángel Sánchez, uno de los mejores representantes del neorrealismo español del siglo XX, titulada *La visita de Inspección*. La obra, bronce sobre mármol de 29/30 cm., fue inicialmente proyectada, según me relató directamente Eduardo Soler, amigo de Sánchez, para la entrada de la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, pero finalmente fue adquirida y dedicada a Eduardo Soler Fierrez por su autor, como puede apreciarse en la trasera del último pupitre.

Son muchos y variados los motivos por los que he decidido que esta imagen corone el trabajo.

En primer lugar, por lo que representa: una de las herramientas fundamentales con las que cuentan los inspectores de educación para realizar sus funciones y atribuciones. La obra representa una pequeña aula con ocho alumnos, de distintos sexos, en los que una alumna parece estar realizando una exposición en la pizarra, mientras es evaluada por la docente, de pie junto a ella y el inspector de educación, sentado en la mesa, realiza las funciones de supervisión de la tarea docente: una tarea compleja en la que se aúna la información, la orientación, la formación y el control. Las visitas de inspección, y en concreto las visitas a las aulas pueden realizarse de muchas maneras. Esta que se representa puede circunscribirse a unas décadas ya muy pasadas o a entornos de dudas razonables sobre la adecuada intervención docente (de ahí que el inspector ocupe el puesto de la maestra). En situaciones normalizadas de evaluación docente, el inspector suele ubicarse al final del aula, para procurar no interferir la sesión, supervisando la programación de aula, la dinámica metodológica y de aula, la atención a las diferencias del alumnado e incluso puede solicitarles sus trabajos para realizar una revisión de las producciones y del proceso de revisión, control, seguimiento y evaluación realizada previamente por el docente.

Eduardo Soler Fierrez me transmitió la importancia que las fuentes iconográficas tienen para la consolidación de las disciplinas, empeñándose durante toda su vida en justificar y fundamentar la existencia de la Supervisión Educativa dentro de las disciplinas de las Ciencias de la Educación. Existen pocas fuentes iconográficas relativas a la inspección de educación o son muy puntuales, pero esta obra escultórica es, sin duda, una de las más representativas.

En segundo lugar, por la génesis de la obra. Eduardo Soler y Miguel Ángel Sánchez, se conocieron por medio de un amigo común: Alejandro Peris, catedrático de Historia de Instituto, y llegaron a ser buenos amigos. Se da la entrañable circunstancia de que, en la Subdirección General de Ordenación Académica, tuve la oportunidad de trabajar con una de las hijas de Alejandro; con Carmen Peris Domínguez.

Soler me confió, reproduciendo conversaciones con Sánchez, que este cuando tenía unos 13 años y estaba a punto de acabar la primaria superior, *a su maestro le dolía que su padre lo dedicara al campo*. El inspector de educación, en una de sus visitas al colegio y al ver sus dibujos, solicitó que llamaran al padre de aquel aventajado niño para hablar con él y lo convenció finalmente para que su hijo siguiera estudiando. Finalmente, Sánchez continuó sus estudios, ejerció como catedrático de Bellas Artes e impartió clase en la Universidad Complutense y en la Universidad de Alcalá de Henares; hoy sus obras inspiran plazas y esquinas de numerosas localidades. Soler me apuntó que aquel Inspector podía ser Lillo Rodelgo (los Inspectores de Toledo Emilio José Lillo Rodelgo [1887-1981] y Amelia Asensi Beviá [1892-1974] fundaron la Casa de Maestros de Toledo) (García, 2015), pero dicho dato no ha podido ser confirmado pues

Miguel Ángel Sánchez vivió su niñez en Villa del Prado¹ y Lillo Rodelgo ejerció su labor en la provincia de Toledo, aunque la cercanía de dicha localidad a esa provincia hubiera posibilitado la citada intervención; de cualquier forma, es el propio Sánchez quien valora la intervención de un inspector en su desarrollo humano y profesional y pone en valor la acción, unas veces sistémica, holística y estructural que la inspección de educación puede tener en el sistema educativo, y otras veces, personal, individual, empática y realmente valiosa para el ejercicio de derechos y obligaciones y para la proyección de los distintos agentes del sistema: en este caso, para la proyección de un alumno, a fin de convertirse en activo feliz y valioso de una sociedad en desarrollo.

Con relación al proceso de elaboración de la escultura, Soler me describió que tuvo varios encuentros con Sánchez para explicarle lo que significaba la visita de la Inspección –llegó a leer su libro (Soler Fiérrez, 1991)-. Una vez que tenía hecha la prueba en barro, Sánchez pidió a Soler su opinión y ante ella Eduardo Soler comprobó que había cogido muy bien las ideas que le había dado en el encuentro anterior: *... solo giré un poco (el barro estaba fresco) la cabeza del inspector para que estuviera más atento a lo que se estaba haciendo en el mapa y le dije que sobre la mesa pusiera algo más de papeles para que se viera que el inspector llevaba documentos y nada más.*

Y por último, por el valor emotivo que dicha obra tiene para este modesto alumno. Debo reconocer que siempre me llamó la atención dicha obra cuando la descubrí en la portada del libro de M^a Teresa López del Castillo (2013): me transmitía una fuerza, una cercanía, el reflejo puntual, completo y complejo de una profesión a la que he querido dedicar mi vida, que hacía emerger dentro de mí el compromiso y la entrega para esos principios y funciones que considero esenciales para la calidad del sistema educativo y en suma, de la educación y de la proyección de la sociedad. Cuando la fortuna hizo que recibiera el encargo de realizar la biografía de Eduardo Soler Fiérrez, para la publicación de USIE: *Historias de vida de la Inspección. Referentes en la historia de la educación española* (Castán, 2021a), debo reconocer que me estremecí cuando descubrí y pude acariciar la obra en el despacho del domicilio de Eduardo, en el barrio de Chamberí; no podía dejar de poner mis ojos en ella: cada personaje, los detalles de los alumnos, los detalles del inspector, los papeles sobre la mesa, la cartera del inspector, el giro de la cabeza del inspector, que sabía que había sido ajustado por el propio Soler, los lapiceros y plumas sobre los pupitres, los propios pupitres pareados, el rústico crucifijo sobre la pizarra, Final y desafortunadamente Eduardo Soler Fiérrez falleció el 17 de febrero de 2021, cuando todavía podía haber tenido muchos años de docencia y ejemplo para muchos inspectores que estamos tan necesitados de ella, sin haber visto ni aquella biografía, que se construyó con afables, amistosos y embriagadores encuentros, llenos de pensamientos, reflexiones, experiencias y confidencias, ni esta tesis doctoral que él conocía y que me animaba a culminar.

Hoy, por la generosidad de su viuda, Pilar Montes Palomino, que ejerció como catedrática de italiano en el Instituto Beatriz Galindo de Madrid y de sus hijos, Pilar y Carlos Soler Montes, la obra luce en el salón de mi domicilio –creo que es mejor decir que lo engalana- y me recuerda todos los días y a todas horas la grandeza de este oficio y el compromiso y entrega permanente que requiere para los que lo ejercemos, con la seguridad de que estamos mejorando la vida de muchos alumnos y estamos poniendo los gérmenes de una sociedad mejor.

El que corone este trabajo es, de esta forma, ofrecimiento, agradecimiento y dedicación al inspector de educación Eduardo Soler Fiérrez.

¹ Blog “Miguel Ángel Sánchez. In memoriam”. Con acceso el 25 de marzo de 2020 en la url:

<http://villadelprado.blogspot.com/2008/10/miguel-ngel-snchez.html>

Resumen

Una de las intangibles señas de identidad que la inspección de educación, como institución reglada, ha tenido desde su creación a mediados del siglo XIX, ha sido la permanente duda sobre su propia pertinencia y existencia, o el cuestionamiento de su fundamentación epistemológica. Dicho cuestionamiento se ha visto reflejado de muy diversas formas y en muy diversos modos: desde los distintos requisitos y sistemas de acceso, cambiante según la época de la historia y el devenir político, hasta las funciones y atribuciones asignadas en los distintos decretos que lo han regulado.

Quizá un importante quicio de esa evolución supuso la supresión de la propia institución a mediados de la década de los ochenta del siglo XX, por la Ley 30/1984², cuando el Estado estaba abriendo la puerta a una incipiente democracia. Se puede pensar que los dirigentes políticos quisieron desprenderse de una institución que había sobrevivido al franquismo y que podría haberse mimetizado con él. Sin embargo, a pesar de la supresión de la institución, no se suprimieron las funciones, justificando, sin pretenderlo, la congruencia y necesidad de esa labor. Tras esos devaneos políticos y cronológicos el Estado volvió a restaurar la institución, volviendo a crear el específico cuerpo de funcionarios por el art. 37 de la Ley Orgánica 9/1995³, y en ese momento, las nuevas hornadas de inspectores, a lo largo de las siguientes décadas, impulsadas y sabiamente dirigidas por inspectores de raza: hombres y mujeres acrisolados en la adversidad y en los principios inexorables del sustento de los derechos de los alumnos, como mejor germen de una renovación social, empezaron una ingente producción bibliográfica para hacerse su hueco en el sistema educativo y para consolidar fuertemente su existencia, quizá con el propósito de que no se volvieran a reproducir la iniciativa de la Ley 30/1984.

Ese escenario se pretende enriquecer con las inquietudes y el desarrollo profesional del autor, después del ejercicio como inspector de educación durante casi veinte años: primero como inspector accidental y más tarde y tras la superación del proceso selectivo, como miembro perteneciente al Cuerpo de Inspectores de Educación. Ese elemento personal, experiencial, reflexivo en la práctica del oficio, sin pretender equipararse a las brillantes reflexiones de López del Castillo (1993) o de Torres Vizcaya (2019), procura aportar una visión algo diferenciada, que enriquezca ese deambular y pretende también devolver a la institución algo de lo mucho que de ella ha recibido, en forma de un compromiso académico e investigativo, con la doble función de enriquecer el propio futuro *desempeño* profesional y de contribuir a enriquecer el desarrollo de

² López del Castillo (2013) realiza una detallada descripción del proceso seguido y cómo los apartados 7 y 8 de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1984 suponen una *extraña pirueta legal, que no sabemos si tiene antecedentes en toda la historia de la administración española*. El primer párrafo del apartado 8 del texto original establecía:

Los actuales Cuerpos de Inspectores de Educación Básica, Inspectores de Bachillerato e Inspectores Técnicos de Formación Profesional quedan integrados en el Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa, cuya plantilla estará constituida por los efectivos actuales de los Cuerpos suprimidos, quedando amortizadas las vacantes que se produzcan en lo sucesivo.

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1984-17387&b=59&tn=1&p=19840803#dadecimoquinta> visitada el 20 de enero de 2022.

³ Muy significativa es la exposición de motivos de la propia LO 9/1995, que pone en valor, justifica y desglosa la importancia de la función inspectora.

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-25202>. Recuperada el 20 de enero de 2022.

quienes, ya hoy y en el futuro, *recorran* estos mismos caminos y desempeñen estas mismas funciones.

Es en este contexto en el que encuentra su sitio incómodo esta tesis doctoral que tiene como finalidad y pretende delimitar el perfil profesional de los inspectores de educación en la Comunidad de Madrid, al comienzo de la tercera década del siglo XXI, desde una percepción histórica, internacional y disciplinar; y desde la percepción que los principales actores del sistema educativo: los propios inspectores, los directores de los centros educativos, los docentes, las familias y los responsables educativos, tienen del ejercicio de las competencias inspectoras, generadas en la reciente teoría competencial, de la matriz compuesta por las funciones, atribuciones, tareas, destinatarios, producciones y herramientas técnicas que la normativa les asigna.

Para conseguir este propósito se ha diseñado el siguiente objetivo general y sus objetivos específicos:

Objetivo general: Estudiar y delimitar el perfil profesional de la Inspección Educativa en la Comunidad de Madrid, definido por el ejercicio de las competencias por parte de los inspectores de educación. Propuestas de mejora.

1. Analizar la evolución histórica de la inspección de educación en España y de las sinergias organizativas y estructurales vinculadas con el impulso normativo. (Estudio 1: estudio histórico).
2. Comparar los modelos de inspección de educación establecido en España con los principales modelos de inspección establecidos en los países de nuestro entorno. (Estudio 2: estudio comparado internacional).
3. Comparar el modelo de inspección de educación de nuestro Estado con otros modelos de inspección de otras disciplinas establecidos por las administraciones públicas. (Estudio 3: estudio comparado disciplinar).
4. Analizar el ejercicio de las competencias inspectoras en nuestro sistema educativo. (Estudio 4: estudio de encuesta).
 - Desde las percepciones que sobre la misma tienen los propios inspectores.
 - Desde las percepciones que sobre la misma tienen diversos agentes de las comunidades educativas (directores, profesores y familias).
 - Desde las percepciones que sobre las mismas tienen diversos responsables de la administración educativa.
 - Comparando las percepciones que sobre las mismas tienen los inspectores, los diversos agentes de la comunidad educativa y los responsables de la administración educativa.

De la definición de los propios objetivos específicos resultan los dos enfoques fundamentales: uno basado en un enfoque de investigación evaluativa y otro estudio de tipo histórico-comparado, que denominamos como *estudio multifocal*. Aunque estos objetivos específicos cuentan con entidad propia, el primero de ellos (situado en el capítulo quinto) constituye el principal propósito de la tesis, y los otros siguientes (situados en los capítulos segundo, tercero y cuarto), en cierta manera, se encuentran para nutrir su pertinencia y desarrollo. Este diseño justifica que las partes de la investigación de las fuentes documentales para el desarrollo de los tres primeros objetivos específicos no se vean específicamente reflejados en el capítulo de resultados, aunque lo nutren.

De esta forma, tal y como puede observarse en la siguiente figura, en el desarrollo de la investigación, primero nos encontramos con los estudios concretos realizados en torno a los tres

primeros objetivos específicos y, a continuación, con el llevado a cabo en el cuarto de los objetivos, desarrollado como estudio de encuestas.

Enfoque metodológico	Finalidad y objetivo general	Objetivos específicos	Estructura	
			Capítulo 1	Metodología
Estudio 1	Objetivo general	Objetivo específico 1	Capítulo 2	Histórica
Investigación Multifocal		Objetivo específico 2	Capítulo 3	Comparada
Estudio histórico-comparado:		Objetivo específico 3	Capítulo 4	
Histórico				
Comparado internacional				
Comparado disciplinar				
Estudio 2				
Investigación evaluativa		Objetivo específico 4	Capítulo 5	Cuantitativa
Estudio de encuesta				Resultados
	Finalidad de la investigación		Capítulo 6	Conclusiones
				Propuestas
				Código Deontológico
				Futuras líneas de investigación

Figura 1.A. Síntesis del enfoque metodológico, finalidad, objetivo general y objetivos específicos y estructura.

La tesis da comienzo, como es preceptivo, con la descripción de la metodología de estudio. En el capítulo primero se incluye la finalidad y los objetivos expuestos más arriba; el enfoque metodológico y su justificación, así como la descripción de los dos estudios generales expuestos y que conforman el conjunto de la investigación doctoral (en el segundo de ellos se especifica, la herramienta, su génesis, la población, el sistema de divulgación y captación de participantes, el procedimiento de aplicación y de recogida y análisis de datos).

Este capítulo cuenta con una aproximación al uso del método comparado para la realización de los primeros estudios iniciales, pero con la idea de racionalizar y simplificar el modelo de comparación asumido, que es descrito detalladamente. Las fases asumidas se corresponden con una acomodación de las etapas clásica propuesta por quien fue mi profesor en la Universidad Complutense, García Garrido (1991), utilizada por Manso (2012) y sistemáticamente expuestas por Cortés et al. (2016), que se circunscriben con la descripción e interpretación, la yuxtaposición y la comparación.

Planteamiento del estudio: En esta primera fase y de forma diferenciada se ha realizado la selección, identificación y justificación de los objetos de estudio dentro de cada estudio: histórico; comparado-internacional, y comparado-disciplinar, que se describirán más adelante.

La descripción e interpretación: La segunda fase del método comparado se ha centrado en analizar en profundidad las funciones y tareas atribuidas en cada uno de los estudios a la

inspección de educación y al resto de inspecciones, como unidades de control y evaluación. De esta forma se han podido seleccionar las categorías e indicadores, que han generado una estructura específica, reflejada en las distintas tablas y utilizadas en los distintos epígrafes denominados como síntesis reflexivas. Este proceso se ha implementado y desarrollado con la búsqueda de fuentes documentales y bibliografías pertinentes e imprescindibles, así como con datos aportados por Eurydice y por la OCDE.

Dado el objeto de la investigación doctoral y en la consideración de lo amplio que podría ser abrir las categorías a los distintos criterios, objetos y desarrollos en los que interviene la inspección de educación, se ha optado por racionalizar y concretar el estudio con las categorías de comparación reformuladas de las genéricamente expuestas en el «Estudio comparado de los modelos de inspección de España, Francia y Reino Unido» (2009), y en Galicia Mangas (2019), desde una propuesta más amplia.

De esta forma y dentro de las cuatro categorías que se proponen:

- I. El acceso a la Inspección de Educación; I.1. Formación requerida; I.2. Requisitos funcionales previos; I.3. Antigüedad y experiencia; I.4. Méritos añadidos.
- II. La organización de la Inspección de educación; II.1. Estructura nacional; II.2. Estructuras regionales; II.3. Estructuras comarcales; II.4. Organización funcional y/o específica).
- III. Las funciones atribuidas; III.1. La denominación del objeto asignado a la inspección de educación; III.2. El desglose descriptivo de las asignaciones funcionales.
- IV. El desarrollo de la inspección de educación; IV.1. La evaluación de la Inspección; IV.2. La formación de la inspección.

Nos centraremos en el presente estudio en la categoría tercera, relativa a las funciones atribuidas, realizando el estudio histórico, comparado internacional y comparado disciplinar.

La yuxtaposición: en esta fase, que consideramos fundamental, se ha realizado la necesaria confrontación de los datos con los parámetros e indicadores seleccionados, a fin de realizar la oportuna descripción e interpretación. Dicha labor ha quedado materializada en las distintas tablas.

La comparación: esta fase ha supuesto la culminación del estudio comparado a fin de obtener conclusiones a partir de semejanzas y diferencias. Cada uno de los capítulos tiene un bosquejo de las conclusiones extraídas en el epígrafe dedicado a la síntesis reflexiva, que se compendia, de forma más exhaustiva, en el capítulo de conclusiones. Cada síntesis reflexiva, elemento nuclear de la estructura, se nutre tanto de las investigaciones previas como de los concretos y literales tejidos normativos.

Este capítulo describe también el diseño y la aplicación de la investigación evaluativa concreta. Se inicia con la descripción y génesis de los apriorismos asumidos para el desarrollo coherente de la investigación. A continuación se expone un breve, pero significativo, acercamiento epistemológico a la denominación de los objetivos asignados, como elemento necesario para exponer seguidamente la descripción de la génesis y organización de la herramienta utilizada, siguiendo el mismo esquema y fundamento que el utilizado en *Capacidad Profesional Docentes, Buscando la Escuela de nuestro tiempo* (Moya et al., 2019) en lo relativo a las cuatro dimensiones, sobre las que se organiza: dimensión personal, dimensión institucional, dimensión de gestión del conocimiento y dimensión de cultura institucional.

El capítulo se desarrolla con una pormenorizada descripción de todos los procesos realizados para llevar a cabo la investigación evaluativa, comenzando con la necesaria y oportuna validación estadística, la propuesta de variables elegidas, así como la propuesta concreta de

secuenciación y su materialización efectiva en base a los distintos condicionantes específicos, que son expuestos.

La herramienta se compone de una serie de afirmaciones, clasificadas en las cuatro dimensiones mencionadas, para que se conteste el grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de ella, en una escala *Likert* (con escala de seis tramos y valores de 0 al 5: siendo el 0, totalmente en desacuerdo; y el 5, totalmente de acuerdo). El número y redacción de las distintas afirmaciones ha sido el mismo para los cinco sectores para facilitar la comparación de resultados⁴. En todos se pretende contrastar los resultados de unos y otros sectores para comparar las percepciones, con las variables pertinentes, según el sector, que también han aportado información valiosa.

De esta forma se expone el proceso y material elaborado para contar con el informe favorable del Comité de Ética para la investigación de la Universidad Autónoma de Madrid; se describe el proceso realizado para construir y alojar la encuesta concreta en los entornos digitales de la Unión Europea y específicamente en los servidores de EUsurvey con el fin de garantizar la integridad, confidencialidad, protección y anonimato de los datos; y se realiza el desarrollo seguido para describir la población y decidir la secuenciación, problemas y disfunciones relativas al cronograma inicialmente descrito y a la materialización concreta y consecución de los datos.

Como se ha señalado la población elegida se diferencia en cinco segmentos que desde el equipo investigador hemos considerado muy enriquecedores y conforman los principales actores o sectores de un sistema educativo y específicamente del sistema educativo de la Comunidad de Madrid: los inspectores de educación, los directores de los centros docentes, los propios docentes: maestros y profesores en ejercicio; las familias: madres y padres de los alumnos, así como, por último, los responsables educativos. En este último segmento se ha decidido incorporar a todos los responsables educativos con nivel orgánico superior al de subdirector general –nivel de complemento de destino, 30-, a los altos cargos y a los miembros de la comisión de educación del parlamento autonómico. La investigación doctoral ha circunscrito su alcance a la enseñanza básica, tal y como la entiende la Constitución Española –obligatoria y gratuita- y el art. 3 de la Ley Orgánica de Educación en lo relativo a los directores de los centros, los docentes y las familias.

Este proceso realizado, con los problemas, disgustos (nos permitimos utilizar esta palabra), apoyos o amenazas, se muestra muy interesante para poder realizar ajustes y acomodaciones, límites de lo inicialmente programado, así como propuestas de racionalización tangible y posible de futuras líneas y herramientas de investigación.

Con el capítulo segundo, se realiza un denso estudio histórico, con ciertos elementos comparados, de las funciones, tareas, responsabilidades, encomiendas o atribuciones (se muestra claramente el amplio abanico descriptivo de los objetos citados) asignadas a los inspectores de educación a lo largo de su recorrido y existencia. El capítulo se organiza en dos epígrafes bien diferenciadas: el primero relativo a la etapa prenortativa, previa a la creación del cuerpo de funcionarios en 1849; correspondiendo a la fase que Maíllo (1969) denomina *atécnica* en su *Historia crítica de la Inspección escolar en España*. En dicha fase se recorre desde fuentes documentales e investigaciones, los antecedentes y precursores de los inspectores de educación en nuestro Estado, comenzando el recorrido con las afamadas cédulas reales. En el segundo epígrafe de este capítulo se realiza un recorrido normativo de todos los impulsos gubernamentales y normativos que han configurado históricamente a la inspección de educación a lo largo de la historia formal, organizada en el tipo del tejido normativo específico:

⁴ Índice de fiabilidad por dimensiones [$\alpha^{(D. Personal)}=0,97$; $\alpha^{(D. Institucional)}=0,98$; $\alpha^{(D. Gestión del Conocimiento)}=0,97$; y $\alpha^{(D. de Cultura Institucional)}=0,97$].

desde las cartas constitucionales, las leyes educativas, los decretos u órdenes que han regulado a la inspección de educación y otras normas de menor rango. El capítulo cuenta con la referencia a tablas específicas en las que se yuxtaponen esas funciones asignadas con las que actualmente tiene atribuidas, habiendo optado por una opción cronológica concreta, dada la evolución de dicho tejido y la coyuntura normativa que hemos vivido.

El capítulo tercero realiza un estudio comparado de las funciones atribuidas a la inspección de educación en países de nuestro entorno, con las asignadas en nuestro Estado. En el capítulo se realiza una selección de distintos modelos de inspección y en base a fuentes documentales, investigaciones y estudios de carácter supranacional, internacional y comparado (normativa específica y Eurydice principalmente) se realiza en primer lugar un acercamiento a la historia, a la estructura y organización de cada una de las inspecciones seleccionadas y después se describen las funciones atribuidas a esas inspecciones de educación. Se ha pretendido realizar una selección que enriqueciera la investigación doctoral en base a paradigmas diferenciadores y concretos, a fin de poder aportar una fundamentación relevante susceptible, en su caso, de enriquecer propuestas de mejora o racionalmente innovadoras.

Este capítulo se organiza en epígrafes concretos relativos a cada una de las inspecciones: la inspección de la República Francesa; la inspección de la República Italiana; la inspección en Inglaterra, como representante de las inspecciones de educación en el resto de los países del Reino Unido: Irlanda del Norte, Escocia y País de Gales, con ciertas y singulares menciones, y por último un capítulo específico dedicado al caso concreto de Finlandia, por su singularidad.

El capítulo cuenta igualmente con las referencias a tablas específicas con una yuxtaposición de las funciones asignadas a las inspecciones de educación en los distintos estados y países con los asignados en el nuestro.

El cuarto capítulo se dedica a realizar, desde el análisis de fuentes documentales e investigaciones, un estudio comparado al que hemos denominado disciplinar y se ciñe al estudio histórico y funcional de inspecciones de disciplinas y áreas concretas. De esta forma se realiza un acercamiento a la historia y a la estructura de la inspección de trabajo, de la inspección de sanidad y de la inspección de hacienda.

El capítulo se estructura en un epígrafe específico para cada una de estas inspecciones, como fuente y germen para poder realizar, en el epígrafe final, una síntesis reflexiva de las conclusiones extraídas y de la yuxtaposición de las funciones, realizada en las tablas correspondientes, validando o apuntando aquellas susceptibles que enriquecer, de forma mutua, a las asignadas a la inspección de educación. La comparación se realiza añadiendo elementos de carácter histórico, con la finalidad de enriquecer la percepción diacrónica.

El capítulo quinto realiza la exposición de los resultados y un análisis lo más pormenorizado y comparado posible de estos. El capítulo continúa con un análisis interpretativo de los resultados y su explotación. De esta forma se llega a delimitar cuál es el perfil profesional de la inspección de educación, en el entorno concreto de la Comunidad de Madrid, y circunscrito a la enseñanza básica, definida por el ejercicio de las competencias profesionales por parte de los inspectores de educación, de una forma global desde la percepción de los actores mencionados, realizando un estudio, explotación y comparación de los resultados con la finalidad de aportar datos concretos que enriquezcan las conclusiones.

En el capítulo sexto se materializan las conclusiones concretas que se dirigen, de forma muy general hacia los ámbitos normativos, organizativos y funcionales. No obstante se muestran también propuestas relacionadas con la selección de los inspectores y con la formación de los inspectores de educación en ejercicio, que bien podría ser susceptible de enriquecer el constructo académico aportado, en estos momentos, en los que se está considerando la

modificación del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes, para utilizarse como elementos necesarios previos para la asunción de las funciones inspectoras; o podría igualmente servir de fuente para el desarrollo específico del futuro Real Decreto que desarrolle el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación y el desarrollo profesional de los inspectores de educación, que como propuesta se ha planificado en el Plan Anual Normativo para el ejercicio 2022 de la Administración General del Estado, como norma básica⁵, que hasta la fecha no se ha materializado

El capítulo cuenta con un epígrafe concreto que realiza, desde las fuentes documentales y normativas específicas y desde las aportaciones de distintos autores y de la propia investigación y ejercicio, unas líneas generales para el establecimiento de un código deontológico para los inspectores de educación en la Comunidad de Madrid, que bien puede extrapolarse a las inspecciones de educación de otras comunidades autónomas, en tanto que todas se desarrollan desde una normativa básica y pertenecen al mismo cuerpo funcional.

Este capítulo finaliza con una descripción de los límites encontrados en la investigación doctoral, así como de una propuesta de posibles y futuras líneas de investigación, realizada desde la reflexión-acción.

⁵ <https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2022/PAN%20202.pdf>

Abstract

The education inspectorate in Spain has been questioned as an institution in different ways throughout its history and especially in the last fifty years. Forty years ago, the institution itself was abolished, transferring its functions to the teachers themselves. Years later, in 1995, the institution was re-created, provoking an enormous amount of reflection and bibliographical production to justify its existence.

In the present thesis, the reflection on the relevance of the institution is enriched by the author's practice; in this way, the aim is to enrich one's professional future and also to enrich those who now and in the future will carry it out.

In this context, this doctoral research aim is to delimit the professional profile of education inspectors in the Community of Madrid in the first years of the 21st century in multiple ways: historically, internationally and disciplinarily (from the comparison with inspection units in other areas), and above all from the perception that the main agents of the education system have of the exercise of the inspector's competences.

To achieve this aim, the following general objective and its specific objectives have been designed:

General objective: To study and delimit the professional profile of the Education Inspectorate in the Community of Madrid, defined by the exercise of competencies by education inspectors. Proposals for improvement.

1. To analyse the historical evolution of education inspection in Spain and the organisational and structural framework of its regulatory evolution (Study 1: historical study).
2. Compare education inspection models in Spain with inspection models in other countries (Study 2: international comparative study).
3. To compare the model of education inspection in Spain with inspection models used by public administrations in other fields (Study 3: comparative disciplinary study).
4. To analyse the exercise of inspection powers in our education system (Study 4: survey study), based on the perceptions of the main agents: inspectors, head teachers, teachers, families, and education authorities.

These objectives propose two methodological approaches that complement each other: one of evaluative research (developed in study four) and another of a comparative historical type (developed in studies one, two, and three) -called the multifocal study-.

The doctoral research is structured as follows.

The first chapter focuses on the methodology used. This chapter describes the comparative method and also presents and describes the evaluative research tool and its application.

In the second chapter, a historical study of the functions and tasks assigned to education inspectors is carried out, comparing them with the functions currently assigned to education inspectors.

The third chapter investigates the functions of education inspectorates in France, Italy and England, comparing the functions assigned in each regulation with those carried out in Spain.

The fourth chapter compares the functions of labour, health and finance inspection and control units with those assigned to education inspectors. This is what we call a comparative disciplinary study (of disciplines). These three chapters have an epigraph called reflexive synthesis which synthesises the information and reflects on each study.

Chapter five presents the results of the evaluative research (the professional profile of education inspectors) and delimits their professional profile, differentiating it from that perceived by the agents consulted.

The last chapter draws interesting conclusions in which the findings of the evaluative research are interrelated with those of comparative studies. The conclusions cover organisational, functional, selective, training and regulatory aspects. The chapter proposes some general guidelines for establishing a code of ethics for education inspectors and ends with the difficulties encountered during the research and some interesting proposals for new lines of research.

Introducción

A continuación, en esta introducción, se delimita el objeto de la investigación de la tesis doctoral y se justifica su pertinencia.

Con relación al objeto, el planteamiento motor de esta investigación doctoral es delimitar y establecer operativamente el perfil profesional de los inspectores de educación, definido como tal por el ejercicio de sus competencias específicas, percibido por los principales agentes del sistema educativo, en un entorno administrativo concreto, como es en la Comunidad de Madrid, y que se despliega, en la nueva teoría curricular, por el bagaje competencial específico de las funciones y tareas asignadas, el modo en que se realiza y la finalidad concreta, que emergen y son requeridas normativamente por una sociedad moderna y democrática, para el control, la evaluación y la optimización del servicio educativo. Junto a este objetivo general, se han descubierto otros, menos específicos e intangibles, pero también valiosos, que consideramos que han fortalecido la investigación: entre ellos cabe señalar, el dar a conocer la figura, el trabajo y las funciones asignadas a la inspección de educación, entre los distintos actores del sistema educativo, que carecían de esta información. Este objetivo de carácter aparentemente subsidiario, consideramos que es de gran valor en una sociedad democrática en la que la rendición de cuentas de los servicios públicos, debe anteponerse a la imposición inopinada o arbitraria de estructuras inoperantes.

En este sentido se hace una propuesta de investigación doctoral que parte desde un exhaustivo estudio histórico: del porqué y paraqué de una inspección específicamente determinada para el sistema educativo, del significado de la inspección en nuestra historia, enriqueciéndose con el mismo panorama funcional de países de nuestro entorno, e igualmente de la asignada a otras disciplinas.

De ahí que se comience con el estudio relativo a la justificación de la creación de la inspección de educación en el siglo XIX, cuando se estaba forjando nuestra historia moderna, pero sin obviar los antecedentes y precursores de dicho acto. A partir de ese estudio histórico, con elementos comparados; de ese estudio comparado internacional y de ese estudio, que hemos denominado como comparado disciplinar, se realiza una investigación que recoge datos sobre la organización competencial y del ejercicio efectivo de las competencias requeridas para el cumplimiento de las funciones asignadas a los inspectores de educación en la Comunidad de Madrid, desde la percepción de los propios inspectores, así como de otros agentes esenciales del sistema educativo: específicamente los equipos directivos, el profesorado, las familias y los responsables educativos y políticos. Tras la reflexión sobre los resultados de esos datos, se pretende aportar una propuesta común susceptible de influir en la optimización de la labor de la Inspección Educativa; de las condiciones y requisitos para la selección de los inspectores de educación en el futuro y de la organización y formación de la inspección de educación y, por ende, en las generaciones venideras de inspectores. No es un planteamiento intimista y personal, sino con vocación de difusión, divulgación, generalización y con finalidad transformadora y de impacto real.

La inspección de educación en nuestra historia ha vivido grandes vaivenes y turbulencias: desde su creación por Decreto del Ministro de Fomento de 1849; su auge y olvido en determinados momentos históricos; su utilización y manipulación política, como herramienta de lo que Foucault denomina *tecnología del Poder* (Torres, 2019) de muy distintas formas; su apoyo y renovación durante la segunda república española, también como herramienta de políticas reformistas; las depuraciones sufridas y la vigencia y sometimiento disciplinado al régimen franquista; la supresión del cuerpo funcional, realizada a mediados de la década de los años ochenta del siglo pasado -siendo sustituida en sus funciones-; y el resurgimiento con una nueva

creación en la incipiente España autonómica, pero con una necesidad de enfocar sus funciones y competencias para servir de herramienta imprescindible para el control y para la mejora del sistema educativo en una sociedad democrática, descentralizada y plural, distanciándose de la influencia política.

Han sido, en los últimos treinta años, en los que se ha evidenciado de forma notoria la necesidad de reformular la existencia de la inspección de educación en la forma de definir su finalidad (para qué), su sentido (por qué), sus funciones (qué hace), sus atribuciones (con qué herramientas) y sus competencias (mediante qué desempeños). Ha sido en este periodo cuando se ha desplegado numerosas iniciativas investigadoras, reflexivas y académicas para dudar, ponderar o justificar su existencia; su pertinencia, su necesidad, así como de forma muy notable, justificar la existencia de la supervisión educativa como una disciplina esencial dentro de las Ciencias de la Educación (Soler, 1993; Pérez Figueiras, 2015).

De esta forma unos autores han abordado el horizonte de la inspección desde el eje mismo del futuro de los sistemas educativos. Así Casanova considera la función supervisora -la principal que desarrollan los inspectores de educación, según su criterio- como *eje sobre el cual deben girar los cambios, las reformas e innovaciones de los diferentes sistemas* (Casanova, 2015). Monarca y Fernández (2016) acentúan el marco obstaculizador de los inspectores como conclusión de su investigación sobre los procesos relacionados con la implementación de innovaciones y reformas educativas. Y Hernández (2019) explica a la inspección *desde el contexto socioeducativo al que sirve, desde las grandes leyes de educación que definen la política educativa, hasta su concreción en la cultura escolar* de cada establecimiento educativo.

Otros autores han reflexionado sobre la existencia y pertinencia de los inspectores de educación desde el análisis de las funciones y tareas que realizan. Fernández (2019) realiza un denso estudio sobre las funciones y atribuciones de la inspección desde la promulgación de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa y concluye que para la aplicación de cualquier modelo es necesaria e imprescindible su existencia. Naranjo y Pozo (2019) afirman que es en la visita a los centros y *en la visita de aula donde se realiza el nivel de concreción más importante* del trabajo de los inspectores, por las consecuencias que produce o debe generar. Y González (2019) ha realizado un amplio estudio, cuerpo básico de su tesis doctoral, para conocer la opinión y la visión de los inspectores de educación con respecto a su profesión y al modelo de inspección de la comunidad autónoma en la que ejercen su labor.

Algunos autores se han adentrado, de una forma que podemos calificar como tímida, en el estudio y en la determinación de las competencias profesionales de las que deben disponer los inspectores de educación. Así hay quien supedita las funciones clásicas de la inspección: control, evaluación y asesoramiento, a las actuaciones concretas relativas a su intervención en los centros (Galván, 2007). Soler (2015) entendiéndolas con *el conjunto de capacidades y aptitudes basadas en una serie de recursos cognitivos adquiridos durante el periodo de preparación para afrontar con éxito las actividades propias (...)* y *que se van consolidando con el ejercicio y perfeccionando con una actualización continuada*, las clasifica entre generales: conocimientos, habilidades y actitudes; y específicas, que son las que marcan las diferencias con otros perfiles profesionales y se constituyen como privativas de la inspección. Blanco (2018) realiza una propuesta de un complejo mapa competencial desglosando las funciones clásicamente asumidas, las tareas que ha de realizar en el ejercicio de esas funciones y la multitud de actuaciones a desarrollar. Y Rodríguez et al., en el *Marco para el buen desempeño de la inspección educativa (MBDIE)* (2021) realiza un estudio sobre las competencias profesionales de la inspección de educación en su relación con la administración educativa, con los centros docentes y con las comunidades educativas, desde el motor normativo, y realiza una propuesta

interesante de nuevas competencias para los inspectores de educación: tolerancia al estrés y resiliencia; competencia digital; empatía; trabajo en equipo; y capacidad de comunicación.

También encontramos autores: inspectores de educación con una larga trayectoria y una densa y fructífera labor educativa a sus espaldas, que llegan a poner en duda la propia existencia de la inspección de educación. Así Sarasúa (2019) lamenta que la incidencia y la relevancia de la inspección sea cada vez menor, tanto para la administración educativa como para los propios centros, que denomina como una grave crisis de identidad. Navarro (2017) habla de la levedad de la inspección educativa, que entiende como *la escasa relevancia, o poco peso real de la Inspección para influir en la marcha de la Educación* y se atreve a calificar de *mezquina* a la consideración que concede la administración educativa a los inspectores. Y Torres (2019) titula el primer capítulo de su libro con un polémico y provocador *¿Por qué la inspección educativa y no más bien nada?* y hace un planteamiento de una *Filosofía de la Inspección Educativa para procurar una visión holística, sistemática y teleológica respecto de los fundamentos y tareas de la inspección educativa y de la educación misma* de la que afirma que ha carecido y sin la cual resulta escasamente útil al Sistema Educativo, con mayúsculas. Es este mismo autor (Torres, 2019, 128) quien, tras afirmar que nadie pone en duda a las inspecciones de asuntos de hacienda o laborales, asevera que a la inspección de educación se le echa un auténtico, y añadimos que permanente, órdago a lo grande, debatiendo con intensidad e impugnando su misma existencia, necesidad y sentido.

Junto con estas aportaciones, debemos mencionar que nos ha sorprendido gratamente la gran producción, relativa a la inspección, de los últimos años y que han generado un vértigo dinámico en el desarrollo de esta tesis. De esta forma Montero Alcaide ha expuesto una interesante investigación sobre los antecedentes de los inspectores de educación, profusamente desarrollada con *Veedores de ciencia y conciencia. Orígenes y constitución de la Inspección de Educación* (2021) y este mismo autor ha sido publicado por el propio Ministerio de Educación con dos interesantes libros: *La Inspección de Educación en España. Hasta aquí hemos llegado (I)* (2021a) y *La Inspección de Educación en España. Negro sobre blanco (II)* (2021b) que recoge de forma pormenorizada las disposiciones relevantes en la evolución histórica de la inspección de educación. En esa misma línea productiva, Ramírez Aísa (2021) ha visto publicado por el mismo Ministerio de Educación y Formación Profesional un interesante estudio: *La Inspección de Educación y el artículo 27.8 de la Constitución Española*, que de forma previa ha servido de impulso de su publicación: *La Inspección de Educación desde el Estado* (2022); y Castán ha publicado las que posiblemente se convertirán en referentes historiográficos de la inspección de educación: *Fuentes bibliográficas y documentales para la investigación histórica sobre la Inspección de Educación* (2019), y *La investigación sobre la historia de la inspección de educación en España. Balance y perspectivas* (2021b).

Junto con estas publicaciones, es necesario mencionar la obra colectiva, ya citada y coordinada por Rodríguez Bravo, *Marco para el buen desempeño de la inspección educativa (MBDIE)* (2021) o el libro de Torres Vizcaya (2021) *Deontología de la inspección educativa. Vademécum de normas de proximidad*. Todas estas iniciativas, junto con otras recientemente generadas, como una específica sobre la visita de inspección de Tébar Cuesta (2022), que consideramos que reformula temporalmente la obra de Soler (1991, 2002, 2013), aunque sin aportaciones genuinas, bajo nuestro criterio, o la de Pérez & García (2022), creemos que ponen en valor e implementan el necesario corpus, severamente reflexivo de la inspección de educación, para que desde los fundamentos históricos, procedimentales, experienciales y normativos, se proyecte y se renueve como herramienta esencial para el sistema educativo.

Es indudable que el devenir de la historia ha proporcionado a la inspección de educación de elementos de configuración íntimamente vinculados con el desarrollo de nuestro sistema

educativo. De esta forma la inspección de educación ha visto evolucionar sus funciones desde una concepción centralista y replicadora, en la que primaban el control o la auditoría, hacia concepciones descentralizadas en las que predomina, no sin cierta timidez, planteamientos de autonomía y autogestión, y en las que la inspección va asumiendo funciones dicotómicas o tensionales entre el control mencionado y la orientación y asesoramiento (art. 151. a-f de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación). Es una tensión muy enriquecedora que posibilita que los profesionales de la inspección de educación, como grupo profesional de un cuerpo técnico muy específico y singular, con ciertas diferencias a otros grupos profesionales de igual denominación, pero de otros ámbitos –sanitario, económico, laboral, ...- conjuguen las propuestas estrictamente normativas, con las propuestas perfectivas: a la vez que controlan son capaces de orientar y asesorar, para mejorar la organización.

Además, en el momento actual, y por la propia evolución y estructura del sistema educativo, la inspección de educación es el único grupo profesional capaz de realizar una visión diferenciada, es decir una *supervisión desde la realidad del aula, del centro y de la estructura organizativa* (Moya, 2018), aportando en su caso una visión holográfica, global y distanciada de cada una de esas realidades, pero favoreciendo la mejora y adecuación continua del sistema en esos planos.

Es en esta coyuntura estructural, temporal y normativa en la que consideramos que tiene plena vigencia esta investigación doctoral, en una doble vertiente. En primer lugar, porque tiene como objetivo delimitar el perfil técnico de los inspectores de educación, entendida por la percepción del ejercicio de sus competencias específicas por parte de los principales actores del sistema educativo. Y, exactamente esa es la segunda dimensión potenciadora; que realiza la investigación doctoral desde la traslación de las clásicas funciones, tareas, atribuciones, destinatarios y producciones hacia las nuevas dimensiones curriculares: hacia las competencias específicas profesionales, como desempeños reales. Consideramos que este paso colocará a la inspección, también profesionalmente, en el hueco que por derecho, vocación y necesidad cuenta en nuestro sistema educativo.

Es necesario mencionar, por último, que todo este planteamiento no es finalista, sino que puede poner las bases para nuevas propuestas que aporten las bases para poder definir, reconocer y valorar las capacidades desarrolladas por la inspección de educación en nuestro sistema educativo desde una perspectiva sistémica, a fin de aportar una justificación para mejorarlas. Consideramos que el estudio realizado sobre el ejercicio de las competencias profesionales específicas por parte de los inspectores de educación, es el camino lógico y necesario para definir las capacidades profesionales de la inspección de educación, entendiendo esa capacidad profesional de la inspección de educación como una relación integral creada a partir del nivel de desarrollo alcanzado de sus competencias específicas (Hargreaves y Fullan, 2014).

Pero esa es una pretensión que, hilvanada en esta investigación, ya se presenta como futura e interesante línea pendiente de trabajo y que será expuesta en el apartado específico.

Estructura de la tesis

La decisión tomada de estructurar los capítulos y epígrafes de la tesis, responde a un criterio asumido previamente: expresar lógicamente el camino seguido y las conclusiones generadas de la forma más comprensible para todos aquellos interesados en el objeto de la investigación doctoral. Por eso, desde el primer momento en el que se presentó el plan de investigación se estructuró la tesis en base a un camino lógico, que fuera sumando y perfilando el propio objeto y que tuviera como cima el estudio de encuestas del que poder extraer datos y propuestas enriquecedoras y válidas. Esos criterios primigenios han querido ser reflejados en el índice, con la idea de que ese sea la mejor tarjeta de presentación y elemento motivador del estudio, a modo es escaparate, a fin de provocar una primera reacción de aproximación de los futuros lectores.

Se ha pretendido, de una forma denominada multifocal, recogida en los capítulos segundo, tercero y cuarto, y que desarrollan tres estudios previos, conformar un estudio amplio dentro de la tesis. Consideramos que el objeto propio del estudio, requiere de un trabajo riguroso de investigación tanto histórico, como internacional y disciplinar. Y efectivamente ese es el punto de partida para realizar un denso y enriquecedor estudio comparado. Esos estudios, que percibimos como tremendamente significativos y que, en su conjunto, suponen una singularidad académica, cuentan con un apartado final denominado *síntesis reflexiva* que fue utilizado por Manso en su tesis (2012) que delimitan y sintetizan las conclusiones del método comparado. Este epígrafe final, de carácter nuclear para el diseño estructural, es susceptible de favorecer la percepción sintética de cada capítulo y es umbral para que los lectores continúen con el estudio, al contar con esos elementos esenciales, para continuar la comprensión de este. Con estos parámetros, la tesis ha quedado estructurada en los capítulos que a continuación se presentan:

En el capítulo 1º se desarrolla y describe la metodología del estudio. Es en este capítulo en el que se incluye la finalidad, el objetivo general, los objetivos específicos, el enfoque metodológico y su justificación, así como el diseño y descripción de los dos estudios generales que componen el cuerpo de la tesis. Se ha hecho un esfuerzo por describir, en relación al segundo de los estudios, las poblaciones a los que ha ido dirigida, los participantes reales, los instrumentos y técnicas de recogida de datos, los procedimientos de aplicación y de análisis de datos. En dicho capítulo también se presentan de una forma profusa, la propia aplicación y los resultados obtenidos, así como las decisiones tomadas en base a las incidencias y coyunturas acaecidas.

En los siguientes capítulos (2º, 3º y 4º) se desarrolla el estudio multifocal, optando por presentarlo de un modo histórico, comparado internacional y comparado disciplinar, que permita un análisis profundo y amplio y una valoración completa del estudio de la propia tesis. Por ello se ha optado por aglutinarlo en una investigación con tres estudios pues presentan claves multifocales para la comprensión del estudio y de las conclusiones y propuestas. La decisión inicial de realizar un estudio histórico, con elementos comparados, comparado-internacional y comparado-disciplinar favorece los pasos previos para la asunción de las conclusiones finales en relación a cómo se debería organizar la inspección de educación y cuál debería ser el desarrollo de sus competencias específicas.

El estudio multifocal se estructura en los tres capítulos mencionados. El primero de ellos (capítulo segundo del índice), de carácter investigador, expone desde el estudio de fuentes documentales, la evolución de las funciones, tareas, encomiendas, responsabilidades, etc. asignadas a la inspección de educación a lo largo de su historia. El capítulo se organiza en dos epígrafes principales: la que se denomina como etapa prenormativa, de carácter previo a la creación del cuerpo de inspectores de educación en 1849, y el segundo denominado como etapa

normativa, en el que se extrae esa misma información, desde mediados del siglo XIX, del marco normativo delimitado: cuerpos constitucionales, leyes educativas y normativa específica que haya regulado a la inspección de educación. El capítulo finaliza con el epígrafe de síntesis reflexiva que consideramos aporta un valor añadido y una simplificación diacrónica del camino recorrido.

En el capítulo tercero (segundo del estudio multifocal) se realiza un estudio comparado-internacional de las inspecciones de educación, con modelos muy distintos y en esa misma línea enriquecedores, de la República Francesa, de la República Italiana, de Inglaterra, como ejemplo de los países del Reino Unido y de Finlandia, por sus características tan singulares. Este estudio, basado en fuentes documentales y en investigaciones y solicitudes específicas, se inicia en cada uno de ellos con un acercamiento a la historia de la inspección de educación en cada uno de los estados/países escogidos y a una descripción de las funciones atribuidas normativamente, por lo que aporta una información relevante a la previamente realizada de las funciones asignadas históricamente a la Inspección de Educación en nuestro Estado y, por ello, susceptible de provocar reflexiones interesantes y propuestas en distintas direcciones. Este capítulo finaliza igualmente con un epígrafe denominado como síntesis reflexiva, que sintetiza el estudio comparado.

En el capítulo cuarto (tercero del estudio multifocal) se realiza igualmente un estudio comparado y disciplinar, pues realiza una aproximación de la historia y estructura de inspecciones de otros ámbitos administrativos: la inspección de trabajo, la inspección de sanidad y la inspección de hacienda. Es necesario mencionar que el estudio se realiza desde las muy escasas fuentes documentales; desde luego mucho más parcas de las que cuenta la inspección de educación. El capítulo muestra en cada una de estas inspecciones las funciones asignadas normativamente a cada una de ellas e igualmente finaliza con una síntesis reflexiva en la que se sintetiza el estudio y se yuxtapone con las funciones actualmente asignadas a la inspección de educación.

Consideramos que es, en ese momento en el que se ha descrito la metodología y la amplia contextualización específica, cuando se presentan, en el capítulo quinto, los resultados propios de la investigación evaluativa, realizada sobre el objeto del estudio, así como su interpretación. De esta forma se realiza una síntesis-presentación de la percepción del ejercicio de las competencias específicas inspectoras por parte de los agentes seleccionados, con un análisis diferenciador.

El sexto y último capítulo materializa las conclusiones finales y propuestas concretas de la investigación doctoral, al que se ha incorporado el diálogo interpretativo de los capítulos segundo, tercero y cuarto, dirigidas de forma general a los entornos normativos, organizativos y funcionales, y que se muestra desde epígrafes concretos: justificación, propuestas y procedimiento de desarrollo, y que consideramos susceptibles de gran influencia para la selección de los inspectores de educación, para la formación de los inspectores de educación en ejercicio y para la concreta organización de las unidades organizativas de la inspección.

Se incluye en este capítulo una propuesta de líneas generales para el establecimiento de un código deontológico para la inspección de educación de la Comunidad de Madrid, que igualmente muestra vertientes hacia el sistema, los centros, las aulas, los sectores, así como para la propia profesión.

El capítulo termina con un epígrafe específico que recoge las limitaciones encontradas y las posibles futuras líneas de investigación.

Las únicas ciencias auténticas son las que logran establecer relaciones explicativas entre los fenómenos.

Bloch, M. (1952).

Capítulo 1

Metodología

Los primeros pasos que debemos dar para encauzar adecuadamente nuestro estudio es dedicar el primer capítulo a la formulación del diseño metodológico completo, que se ha establecido durante el proceso de investigación. Este capítulo nos introduce adecuadamente la lectura de los posteriores, marcando con precisión el objeto del estudio y los diferentes procedimientos que intenta responder al objeto de este trabajo.

Por ello, en primer lugar, se establece la finalidad y los objetivos, tanto el general, como los específicos, que nos proponemos para el estudio. Estos serán el horizonte hacia donde encaminar el diseño metodológico, es decir, el conjunto de procesos, técnicas, instrumentos etc. que se ponen a disposición del objeto de estudio y de los propósitos que de él se esperan. Seguidamente exponemos el que podemos denominar como el necesario sistema metodológico, para conseguir la finalidad de esta investigación doctoral. En él pretendemos presentar los enfoques metodológicos que conformarán los dos estudios de la tesis y que organizamos en dos categorías metodológicas.

El primer estudio multifocal que se compone de tres estudios: histórico, con ciertos elementos comparados, comparado internacional y comparado disciplinar, conforma la primera categoría metodológica y se desarrolla a lo largo del apartado tercero de este capítulo y en él se describen detalladamente las características y los procedimientos propios, por un lado, del método comparado y, por otra parte, del histórico, del internacional y del disciplinar.

La presentación de la segunda categoría metodológica se desarrolla en el quinto capítulo, denominado también evaluativo o empírico y que se presenta como el principal en el conjunto de la tesis y configura el apartado cuarto de este capítulo. Incluidos en él nos encontramos una multitud de apartados debido a la complejidad de elementos que hemos tenido que considerar

para el desarrollo de la investigación doctoral; entre ellos encontramos la justificación del estudio de encuestas que hemos asumido como método para desarrollar la investigación sobre el ejercicio de las competencias inspectoras, a fin de delimitar el perfil profesional de los inspectores de educación; la presentación de la investigación a los actores nucleares del sistema educativo de la Comunidad de Madrid; la población y la muestra participante; las fuentes de información e instrumentos; el procedimiento de investigación, así como la descripción de los análisis de los datos cuantitativos. En el mismo apartado se encuentra también la aplicación concreta.

Dentro del sexto capítulo dedicado a las conclusiones, se ha establecido un apartado específico para exponer propuestas futuras de investigación.

Dentro del sexto capítulo dedicado a las conclusiones se ha establecido también un apartado específico para la exposición de unas líneas generales para el establecimiento de un código deontológico y de comportamiento para la inspección de educación, que se realiza desde el estudio de fuentes documentales y de la experiencia desarrollada y asumida en la práctica de las funciones inspectoras durante casi veinte años.

1.1. Finalidad y objetivos de la investigación doctoral

Como se ha señalado en la introducción, en los últimos decenios nos encontramos en un singular momento coyuntural sobre el desarrollo, la fundamentación, la justificación y el futuro de la inspección de educación en España, que nos ha hecho considerar la pertinencia de un trabajo de investigación que aprovechara esta circunstancia histórica para realizar un estudio sobre las competencias inspectoras. De esta manera se consideró el interés de una investigación que tuviera como finalidad *delimitar el perfil profesional de los inspectores de educación de la Comunidad de Madrid, desde el análisis de la percepción que tienen los principales agentes del sistema educativo acerca del desarrollo de las competencias específicas inspectoras*: los propios inspectores de educación, los directivos de los centros, los docentes de los centros educativos de las etapas que componen la enseñanza básica, las familias de los alumnos que cursan esas mismas enseñanzas y los responsables educativos, circunscritos en niveles administrativos superiores al de subdirector general, así como los altos cargos de la Consejería con competencias en materia de educación y de los miembros de la comisión de educación de la Asamblea de Madrid, en la actual legislativa, como representantes objetivos y precursores de iniciativas legislativas, que conforman y concretan nuestro sistema educativo.

La finalidad que se ha descrito, delimita el objeto de la tesis singularmente, que concretamos en las competencias profesionales de los inspectores de educación en la Comunidad de Madrid, y es del que deriva el objetivo general para la tesis: *Estudiar y delimitar el perfil profesional de la Inspección de Educación en la Comunidad de Madrid, definido por el ejercicio de sus competencias*. Este objetivo general incluye otros cuatro específicos que, a su vez, pretende responder a las preguntas que determinan esta investigación doctoral -y su diseño metodológico- y que también se recogen a continuación.

1.1. Analizar la evolución histórica de la inspección de educación en España y de las sinergias organizativas y estructurales vinculadas con el impulso normativo. Estudio número 1.

- ¿Por qué fases ha pasado la historia de la inspección dedicada al ámbito instructivo en nuestro país? ¿A qué se ha dedicado? ¿Cuáles han sido sus iniciativas funcionales, gremiales, corporativas, normativas?
- ¿Cuáles han sido las tareas, funciones y encomiendas atribuidas a lo largo de la historia? Evolución histórica.

- ¿Qué conclusiones y reflexiones podemos sacar de la comparación de la evolución histórica de su funcionamiento, estructura y funciones asignadas?

1.2. Comparar los modelos de inspección de educación establecido en España con los principales modelos de inspección instituidos en los países de nuestro entorno. Estudio número 2.

- ¿Existen organismos dedicados a la inspección de los ámbitos instructivos en los países de nuestro entorno? ¿Cuáles son los modelos?
- ¿Cuál ha sido la línea histórica y estructural de la inspección educativa en Francia, Italia, Inglaterra y Finlandia? ¿Cuáles han sido las funciones asignadas a dichos organismos?
- ¿Qué conclusiones y reflexiones podemos sacar de la comparación de las funciones asignadas en cada uno de esos organismos, con los asignados a la inspección de educación en nuestro Estado?

A este respecto y de forma sintética, centraremos nuestra síntesis reflexiva en los siguientes parámetros: modelos, historia, organización y estructura, y funciones asignadas.

1.3. Comparar el modelo de inspección de educación de nuestro Estado con otros modelos de inspección de otras disciplinas, establecidos por las administraciones públicas. Estudio número 3.

- ¿Existen servicios públicos de inspección dedicados a otras disciplinas? ¿Cuáles son los ejes comunes sobre los que dedican su labor?
- ¿Cuál ha sido la línea histórica y estructural de las inspecciones de trabajo, de sanidad y de hacienda en nuestro Estado?
- ¿Qué conclusiones y reflexiones podemos sacar de la comparación de las funciones atribuidas a organismos de inspección de distintas disciplinas, con las asignadas a la inspección de educación en nuestro Estado?

De la misma forma que en el epígrafe anterior, centraremos nuestra síntesis reflexiva en los siguientes parámetros: historia, organización y estructura, y funciones asignadas.

1.4. Analizar el ejercicio de las competencias inspectoras en nuestro sistema educativo. Investigación evaluativa: estudio de encuestas. Estudio número 4.

- ¿Cuál es la percepción que tienen los propios inspectores de educación del ejercicio de sus competencias?
- ¿Cuál es la percepción que tienen los principales agentes de las comunidades educativas: los directores de los centros, del ejercicio de las competencias inspectoras?
- ¿Cuál es la percepción que tienen los principales agentes de las comunidades educativas: docentes de la enseñanza básica, del ejercicio de las competencias inspectoras?
- ¿Cuál es la percepción que tienen los principales agentes de las comunidades educativas: familias de los alumnos de la enseñanza básica, del ejercicio de las competencias inspectoras?
- ¿Cuál es la percepción que tienen los responsables educativos del ejercicio de las competencias inspectoras por parte de los inspectores de educación?

- ¿Cuáles son las conclusiones relevantes que podemos extraer de cada uno de los sectores investigados y de la comparación de las distintas percepciones? ¿Qué carencias podemos determinar?
- Propuestas para la optimización del ejercicio de las competencias inspectora para la inspección de educación en la Comunidad de Madrid en lo relativo a normativa de ordenación, la organización y el desarrollo funcional.

Consideramos que el objetivo general se muestra, dado su amplio espectro, como adecuado, pertinente e interesante como estudio de tesis doctoral: «Estudiar y delimitar el perfil profesional de la Inspección de Educación en la Comunidad de Madrid, definido por el ejercicio de sus competencias» pues da pie para analizar y valorar el ejercicio de las competencias inspectoras como un elemento implementativo, para la delimitación y justificación de la existencia y justificación de la labor realizada por los inspectores de educación, nuclearmente integrados en el sistema educativo, desde el análisis de su evolución histórica, desde el análisis comparado internacional con otros organismos análogos de países de nuestro entorno, y desde la comparación de organismos, también análogos, pero orientados a otras disciplinas.

Con lo explicado hasta este punto, se ha hecho evidente la idea de que, a pesar de que existe un único objetivo general del que se derivan cuatro objetivos específicos, los tres primeros son complementarios al cuarto, y en su conjunto nutren las propuestas finales. Esto justifica que la parte de la investigación correspondiente a los tres primeros objetivos específicos no se vean reflejados específicamente en los capítulos de conclusiones y resultados, sino que conformen, casi totalmente, el estudio multifocal inicial.

Y como consecuencia, el cuarto de los objetivos específicos conforma el producto y el capítulo de conclusiones de la tesis. Así, en la estructura de la tesis (véase la figura 1.B), primero nos encontraremos con el trabajo en torno a los tres primeros objetivos específicos, como estudio multifocal, y posteriormente, con la investigación evaluativa, con el estudio sobre la percepción de las competencias inspectoras por parte de los principales agentes de nuestro sistema educativo, como propuesta para delimitar el perfil profesional de los inspectores de educación (que es realmente el que delimita el objeto fundamental de estudio de la tesis).

Enfoque metodológico	Finalidad y objetivo general	Objetivos específicos	Estructura	
			Capítulo 1	Metodología
Estudio 1	Objetivo general	Objetivo específico 1	Capítulo 2	Histórica
Investigación Multifocal		Objetivo específico 2	Capítulo 3	Comparada
Estudio histórico-comparado:		Objetivo específico 3	Capítulo 4	
Histórico				
Comparado internacional				
Comparado disciplinar				
Estudio 2		Objetivo específico 4	Capítulo 5	Cuantitativa Resultados
Investigación evaluativa				
Estudio de encuesta				
	Finalidad de la investigación		Capítulo 6	Conclusiones Propuestas Código Deontológico Futuras líneas de investigación

Figura 1.B. Síntesis de la finalidad y objetivos de la investigación y estructura de la tesis.

Teniendo presente todas estas consideraciones, a partir de este punto se expondrán los siguientes apartados de este capítulo de metodología, en coherencia con la estructura de la tesis, es decir, primeramente, lo referido a la evolución histórica, con ciertos elementos de comparación, el estudio comparado internacional y el estudio comparado disciplinar, para posteriormente centrarnos en el estudio de carácter evaluativo.

1.2. Sistema metodológico

El amplio espectro del objeto de estudio de esta tesis y la necesidad de abordarlo de manera holística, nos ha encaminado a la utilización de un determinado sistema metodológico. Dadas las características de sus distintos objetos, no es un diseño clásico en torno a un método único complementado por otros métodos. En nuestro caso, tal y como se muestra en la figura 1.2 planteamos un total de dos métodos que se estructuran a su vez en dos enfoques metodológicos (perfectamente vinculados con el objetivo general) y que definen los estudios realizados en la tesis:

- Histórico / comparado-internacional / comparado-disciplinar. En lo referido a la realización del marco de valoración de las tareas, funciones, encomiendas y competencias específicas asignadas a la Inspección de Educación se hace necesaria la realización de un acercamiento al método comparado, para conocer la evolución del modelo de Inspección en nuestro sistema educativo; para conocer los modelos de Inspección de educación en países de nuestro ámbito de desarrollo e influencia; y para conocer otros modelos de inspección relativo a otras disciplinas.
- Investigación evaluativa / Evaluación del ejercicio de las competencias específicas por parte de los inspectores de educación en la Comunidad de Madrid desde el

conocimiento (descriptivo / formativo / perceptivo / funcional) por parte de los principales actores del sistema educativo.

Se utiliza el método de encuestas con la utilización de una herramienta específica, cuya gestación se describe en este mismo capítulo, desde la materialización, en matriz, de las funciones asignadas a la inspección de educación por el artículo 151 de la Ley Orgánica de Educación 2/2006, las tareas asignadas en los planes de actuación de la Inspección educativa de la Comunidad de Madrid y los destinatarios y agentes que intervienen, interactúan y/o se benefician en la labor de los inspectores de educación. En este sentido definimos el estudio de encuestas como método elegido para la segunda y principal parte de la tesis, que consideramos que responde al amplio calado establecido en el objetivo específico y sobre agentes distintos en su formación, en sus pretensiones y en sus atribuciones y funciones dentro de nuestro sistema educativo. Hemos considerado oportuno realizar el planteamiento y esfuerzo necesario para la recogida de datos para estudiar y triangular las distintas percepciones, sobre las competencias específicas definidas, con la seguridad de que su estudio proporcionará información relevante y datos susceptibles de enriquecer el día a día de la organización y funcionamiento de los inspectores de educación.

Objetivo general	Objetivos específicos	Método	Enfoque metodológico
Objetivo general	Objetivo específico 1	Histórico	Investigación 1ª Investigación multifocal
	Objetivo específico 2	Comparado	Histórico
	Objetivo específico 3	Comparado	Comparado internacional
	Objetivo específico 4	Estudio de encuesta	Comparado disciplinar
Investigación 2ª			
	Objetivo específico 4	Estudio de encuesta	Investigación evaluativa

Figura 1.2. Síntesis de los objetivos de investigación y del sistema metodológico.

Dado que en la estructura de la investigación aparece primeramente lo correspondiente al marco histórico, comparado-internacional y comparado-disciplinar (marco teórico - capítulos 2, 3 y 4) y posteriormente el estudio evaluativo (resultados - capítulos 5 y 6), a continuación, desarrollamos cada uno de los estudios, acorde a la organización planteada.

1.3. Investigación multifocal. Estudio histórico-comparado

Se ha considerado oportuno comenzar la investigación doctoral desde una visión poliédrica y calificada como multifocal, teniendo en cuenta el objeto de estudio y la evolución de la actual sociedad. En primer lugar, incluimos un acercamiento al método comparado desde tres vertientes convenientemente diferenciadas; consideramos que la comprensión de la evolución de las funciones, tareas y encomiendas asignadas históricamente a la inspección de educación permite la correcta interpretación de la percepción que en la actualidad tiene, de dichas funciones, los principales actores del sistema educativo. En segundo lugar, consideramos que

una mirada internacional aporta comprensión a las tendencias existentes en nuestro entorno más cercano (en este caso los países de la Unión Europea). En tercer lugar, hemos considerado de gran riqueza para la investigación realizar un estudio de las funciones asignadas a la inspección de distintas disciplinas, en principio bien distintas, aunque también circunscritas a servicios públicos. Esta visión consideramos que pueda aportar un marco interpretativo más amplio y diversificado de gran riqueza.

Esta visión poliédrica y multifocal nos permite orientar y enriquecer el análisis que de la percepción de las competencias específicas tienen los distintos actores del sistema educativo y nos orienta a enriquecer el análisis oportuno en las conclusiones finales (capítulo sexto).

1.3.1. Método histórico

Para el estudio se utilizará el método histórico para la investigación de las funciones, tareas, responsabilidades o encomiendas asignadas a la inspección de educación a lo largo de su historia; incluyendo como valor relevante los antecedentes que fueron precursores de la creación gubernativa del Cuerpo de Inspectores de Educación en el Decreto de 1849 y toda la normativa (como fuente primaria) que lo ha regulado desde ese momento.

Consideramos como método histórico, la aproximación metodológica que nos permite el acercamiento a las decisiones y hechos del presente, tanto con el enfoque de los hechos, fenómenos y actuaciones del pasado, como desde la perspectiva diacrónica y evolutiva. De esta forma, este acercamiento nos posibilita realizar una relación causal entre los hechos y decisiones pasadas y las presentes, para una más acertada comprensión del estudio.

Pensamos que este método tiene grandes aportaciones para el estudio: por una parte, nos proporciona conocimiento real de la evolución de las funciones asignadas a la inspección de educación; y por otra, facilita el encuentro del carácter condicional, de los hechos pasados sobre el presente, lo que nos facilita la realización de propuestas relativas a esas tendencias, corrientes y prácticas que se incluirán necesariamente en las conclusiones finales de esta tesis. En este proceso nos acercaremos a autores consagrados en esta metodología, como Carr (2017) que apunta:

El proceso recíproco de interacción entre el historiador y sus hechos, lo que he llamado el diálogo entre el pasado y el presente, no es diálogo entre individuos abstractos y aislados, sino entre la sociedad de hoy y la sociedad de ayer... Hacer que el hombre pueda comprender la sociedad del pasado, e incrementar su dominio de la sociedad del presente, tal es la doble función de la historia.

Pues la historia no es algo estético, como se ha apuntado en investigaciones en las que se han aplicado este método, sino que sirve a la sociedad en el proceso de renovación y de toma de decisiones y de propuestas, como apunta Diestro (2011, en Manso, 2012). Esta dimensión social y fundamentalmente proactiva y prospectiva del análisis histórico, es la que ha impulsado nuestro esfuerzo en esta parte de la tesis.

Es el análisis histórico, de las funciones asignadas a la inspección de educación, la que nos hace comprender los elementos del pasado que han marcado los *mimbres* con los que se ha forjado el actual modelo, o como ha apuntado Lozano (2019) el que conforma *El ADN de la inspección de educación* (véase la imagen 1.3). Lozano ha utilizado una imagen de carácter bioquímico para describir cómo los elementos de carácter histórico, de los cuales unos son gremiales, otros no gubernativos, más tarde gubernativos y en la etapa normativa, de carácter disposicional, son los

que confortan, nutren, alimentan y han constituido a la actual inspección de educación y a las funciones asignadas, como si fueran las instrucciones genéticas usadas para el desarrollo y funcionamiento de la institución, constituyendo de esta forma, el elemento fundamental de la transmisión hereditaria.

En este estudio nos hemos basado en numerosas fuentes documentales y de información, que deben ser descritas a fin de dar solidez al propio estudio. De esta forma unas son fuentes primarias, de carácter original, y otras secundarias, o de carácter derivado. Nosotros nos hemos basado en la documentación pertinente realizada en los último ciento veinte años, y que articula una densa investigación histórica y en las fuentes normativas originales basadas en el Gaceta de Madrid, en el Boletín Oficial del Estado (B.O.E) y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M.).

Bloch (2001, en Manso, 2012) apunta que el acercamiento a la historia es indirecto desde la perspectiva del observador; lo que significa que se llega a él por medio de otros. Ello supone que una investigación puede perder buena parte de su valor si solo se fundamenta en interpretaciones que otros expertos han realizado de las fuentes primarias. Pero ello no supone que estos trabajos no sean pertinentes, sino que deben formar y componer el amplio bagaje de fuentes bibliográficas y de documentos secundarios, y deben ser considerados en una prudente medida, por ser análisis procedentes de otros historiadores.

Las fuentes secundarias consultadas se circunscriben a documentos, recopilaciones, estudios e informaciones derivadas de las fuentes primarias. A este respecto, nos hemos acercado a Maíllo, López del Castillo y Montero Alcaide, que han demostrado una sobrada solvencia histórica. Entendemos que son documentos que han interpretado y analizado documentos originales, que son los que constituyen las fuentes primarias, así como otras fuentes secundarias como Luzuriaga, Bohigas, etc. Es frecuente utilizar estos documentos en las primeras etapas de la investigación, como forma para acercarse al objeto de estudio de este estudio. Si bien es verdad que a estas fuentes secundarias se accede en las bibliotecas universitarias, cada vez es más habitual el acceso a fuentes y recursos electrónicos, que facilitan la búsqueda global de materiales de referencia.

En el presente estudio, como se ha apuntado, utilizaremos las fuentes secundarias para la delimitación de los antecedentes de la inspección de educación, en la búsqueda de las encomiendas y tareas asignadas, y articularemos el estudio histórico, posterior a su creación, a mediados del siglo XIX, en fuentes primarias de carácter normativo.

Hemos jerarquizado las fuentes primarias a fin de buscar los *porqué* y *paraqué* de las funciones asignadas. De esta forma comenzaremos por los cuerpos constitucionales, continuaremos con las leyes, o proyectos de Ley que han regulado a la educación en nuestro Estado, continuaremos con la normativa específica, en forma de reales decretos, que han concretado la asignación de funciones y atribuciones a la inspección de educación y completaremos con normas de menor rango.

Hay que señalar que son efectivamente los reales decretos, las fuentes más directas de esta investigación, pues modulan la voluntad política en la asignación de los trabajos concretos asignados a la inspección de educación y muestran las prioridades en cada una de las etapas históricas.

Este criterio, y en concreto al objeto de la búsqueda de las funciones asignadas, lo utilizaremos tanto en el acercamiento a las inspecciones de educación de los países de nuestro entorno, desarrollado en el capítulo tercero, como en el primer epígrafe, de acercamiento histórico y funcional, del capítulo dedicado a lo que hemos denominado como estudio comparado disciplinar y que comprende la investigación realizada sobre la inspección de trabajo, de sanidad

y de hacienda, que se desarrolla en el capítulo cuatro y que será expuesto a continuación. La investigación sobre las funciones asignadas a estas inspecciones también se fundamentará en fuentes primarias de carácter normativo.

1.3.2. Método comparado

Las fases de aplicación del método comparado, que en sus orígenes fueron descritas por Hilker (1964) y Bereday (1968), se centraban en cuatro: descripción, interpretación, yuxtaposición y comparación. Años más tarde Lê Thành Khôi (1981), junto a otros autores, propuso una nueva fase a fin de adaptarse a las nuevas situaciones que afrontaba la Educación Comparada: identificación del problema; formulación de hipótesis; reunión, tratamiento y análisis de los datos; observación de los hechos; verificación de las hipótesis; y generalización. Citados por Manso (2012).

En la propia evolución de la Educación Comparada para la adecuación a las nuevas necesidades y desafíos, se ha mantenido una permanente revisión de su método específico, lo que ha provocado en nuestro entorno, nuevas fases; siendo las más señaladas las propuestas por el que fue profesor en la UCM, García Garrido (1982; 1991), que más tarde fueron consolidadas por otros investigadores: Ferrer (1990) y Llorent (2002); citados también por Manso (2012). Este nuevo enfoque plantea las siguientes etapas del método comparado (García Garrido, 1991): identificación del problema –fase predescriptiva- y prehipótesis; planteamiento de la investigación –delimitación del objeto de estudio y del método-; estudio descriptivo, explicativo e interpretativo; yuxtaposición y confrontación de datos –replanteamiento de las hipótesis-; comparación –estudio-; conclusiones comparadas y convergencia.

Para la realización de la investigación y con la finalidad de simplificar la comprensión del modelo asumido, se ha decidido por el seguimiento de las siguientes fases simplificadas del bagaje de fases propuestas por los autores descritos. De esta forma se desarrollarán las siguientes fases: 1. planteamiento del estudio; 2. descripción e interpretación; 3. yuxtaposición; y 4. comparación.

Es necesario apuntar, que en los capítulos en los que se utiliza el método comparado -2º, 3º y 4º-, tan sólo se exponen los resultados de las fases de 3º y 4º -yuxtaposición y comparación-. Se ha tomado esta decisión por cuestión de economía del objeto principal del conjunto de la tesis y dado el carácter poliédrico seleccionado, pues no es el estudio comparado el objeto último de la investigación, sino una herramienta para el correcto análisis del objeto principal de la investigación doctoral, que hemos definido como el ejercicio de las competencias profesionales de la inspección de educación en la Comunidad de Madrid. Seguidamente se incluyen los pasos dados en cada una de las fases del método comparado, para la realización del estudio, pues ha sido necesaria la realización de todas ellas.

1.3.2.1. Planteamiento del estudio

En primer lugar, y al ejemplo de Manso (2012) se ha realizado tanto la selección, como la identificación y justificación de la problemática concreta que se convertirá en el objeto nuclear del estudio. Esta problemática comprende la delimitación del objetivo general, de los estudios que incluye, de los objetivos específicos y de los ámbitos de comparación en el escenario poliédrico que se ha comentado y que aborda contextos históricos, internacionales y disciplinares.

En cuanto al objetivo general y a los proyectos de partida, ya se han descrito en el epígrafe anterior de este capítulo. Es necesario evidenciar que estos primeros componentes orientan de manera muy significativa el proceso de comparación posterior (Ferrer, 2002) como señala Manso (2012). Si los diseños iniciales orientan el proceso comparado, del correcto diseño y delimitación de la investigación doctoral depende el éxito de esta aproximación. De esta forma demarcaremos los periodos históricos, así como sus fuentes; los países seleccionados en la comparación, a fin de aportar modelos diferenciados y enriquecedores para la investigación, así como las disciplinas de comparación, delimitando en todos los casos los parámetros e indicadores.

En lo relativo a los periodos históricos, se ha considerado realizar un recorrido diacrónico por los grandes periodos por los que ha pasado la existencia de la inspección de educación, renombrando las fases establecidas por Maíllo (1969): de fase atécnica y fase técnica, a fase prenormativa y fase normativa, pues se utiliza la creación gubernativa del Cuerpo de Inspectores de Educación en 1849, como frontera y quicio concreto de delimitación.

Por otro lado y en cuanto a los países seleccionados, se han seleccionado, como ya se ha apuntado, modelos diferenciados de inspección, eligiendo con estos criterios la inspección de educación de la República Francesa, la inspección de educación de la República Italiana, la inspección de educación de Inglaterra, como modelo de la inspección de los países del Reino Unido, para realizar una comparación con un modelo descentralizado, parecido al de nuestro estado y finalmente se eligió el caso concreto de Finlandia, también como país de ámbito nórdico, donde se ha suprimido el organismo específico dedicado a la inspección.

Finalmente, y en lo relativo a lo que se ha denominado como ámbito comparado disciplinar, se han elegido disciplinas atribuidas gubernativamente a servicios de inspección de gran calado y conocidos en su denominación, aunque desconocidos en sus funciones. Estas han sido la inspección de trabajo, la inspección de sanidad y la inspección de hacienda.

Entendemos lo aventurado del planteamiento, pues se están realizando comparaciones con parámetros no homogéneos, pero se ha considerado que existían criterios y parámetros de comparación suficientes y el esfuerzo podía aportar elementos enriquecedores para la conclusiones y propuestas finales, como fruto y justificación de lo aventurado de la propuesta.

Entendemos que en el tercero de los estudios –del ámbito disciplinar- hemos podido bordear lo que García Garrido (1991) denominaba como *criterios de compatibilidad* pero, como se ha apuntado, se consideraba que los criterios de comparabilidad y las aparentes divergencias podían aportar unas riquezas añadidas a los estudios anteriores.

1.3.2.2. La descripción e interpretación: parámetros e indicadores

Iniciado el estudio definiendo el objetivo general, las investigaciones y los objetivos específicos que se desarrollaban en cada estudio, se dio pie a la siguiente etapa del estudio comparado, caracterizado por estudiar, de manera lo más profunda posible, cada uno de los parámetros e indicadores que ha conformado la denominación y las funciones atribuidas a la inspección, primeramente, desde parámetros históricos, después, desde parámetros internacionales y finalmente, desde parámetros disciplinares. Esta etapa se ha sustentado en la investigación de las fuentes documentales primarias y secundarias pertinentes (Caballero et al., 2016). Como apunta Manso (2012), esta fase posibilita la delimitación de las categorías de comparación, los parámetros comparativos y los indicadores desde la necesaria homogeneización de los datos para poder realizar la comparación final.

1.3.2.3. La yuxtaposición

La tercera fase del estudio se delimita por la necesaria confrontación sistemática de los datos y de la información en relación con los parámetros e indicadores de comparación seleccionados en la descripción e interpretación.

Se utiliza para la presentación de esta fase la utilización de sencillas tablas de doble entrada en los que se enfrentan las funciones actualmente asignadas a la inspección de educación de la Comunidad de Madrid⁶ que se presentarán a lo largo del epígrafe final de los capítulos segundo, tercero y cuarto con la intención de explicar de manera concisa, la yuxtaposición relevante de la información histórica, internacional y disciplinar en relación con las dos categorías de comparación elegidas (la denominación del objeto y las funciones atribuidas).

A este respecto la síntesis de dicha yuxtaposición se puede encontrar, en lo relativo al estudio histórico, en las tablas 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.12, 2.1.13, 2.1.14, 2.1.15, 2.1.16, 2.1.17, 2.1.18, 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.3, 2.2.2.4, 2.2.2.5.A, 2.2.2.5.B, 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.3, 2.2.3.4, 2.2.3.5, 2.2.3.6, 2.2.3.7, 2.2.3.8, 2.2.3.9, 2.2.4.1 y 2.2.4.2; en lo relativo al estudio comparado internacional en las tablas 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.3.1 y 3.4.1; y en lo relativo al estudio comparado disciplinar en las tablas 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.1 y 4.3.2.

1.3.2.4. La comparación

Una vez realizada la fase descriptiva, la siguiente fase queda reservada para realizar, la que García Garrido denomina como síntesis definitiva de toda la información y que comprende la tarea componedora de las partes en un todo comparativo armónico (1991). De esta forma, el principal propósito de esta fase es la de proporcionar conclusiones de las semejanzas y diferencias comparativas entre el recorrido histórico, la comparación internacional y la comparación disciplinar. Nuestra pretensión es obtener conclusiones comparadas relevantes y significativas que nos faciliten un mejor conocimiento del espectro técnico de la inspección de educación y sobre todo, de las conclusiones y propuestas que podamos realizar. Esta finalidad, producto esencial de la investigación doctoral, pretende, siguiendo a Ferrer (2002), la emisión de conclusiones generales, sugerencias prospectivas y de convergencia para establecer las tendencias educativas que posiblemente seguirán los ámbitos de comparación.

Estas conclusiones se irán presentando a lo largo de los epígrafes denominados *síntesis reflexiva* de cada uno de los capítulos segundo, tercero y cuarto, y de manera sintética y significativa, en el capítulo sexto de la tesis en el que concretaremos las conclusiones y las propuestas relevantes, a fin de aportar elementos susceptibles de orientar la política educativa y la toma de decisiones de las administraciones en lo relativo a las competencias profesionales de la inspección de educación

⁶ Se ha optado, siguiendo a Montero Alcaide (2021d) por realizar la comparación con las funciones asignadas a la inspección de educación en el art. 151 de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, dejando de lado las variaciones realizadas por la Ley Orgánica 3/2020 de Modificación de la Ley Orgánica de Educación [LOMLOE]. Esta decisión (que se justificará en el apartado concreto) se ha tomado, dado que la herramienta de encuesta estaba realizada con las funciones de 2006 y porque, como señala el autor:

Las modificaciones referidas a la Inspección, salvo algún aspecto notorio o controvertido (como es el acceso), no conllevan transformaciones relevantes, aunque sí aparentes, de sus aspectos característicos.

1.3.2.5. Propuesta disciplinar

Como una propuesta que pretende realizar una aportación singular, con cierta originalidad de esta investigación doctoral, planteamos el capítulo cuatro, ya introducido, en el que aspiramos a realizar un estudio que hemos denominado de carácter comparado disciplinar.

Nuestra intención es investigar sobre el recorrido histórico y estructural de inspecciones, como unidades y servicios públicos de control, enfocadas a realidades constituidas finalmente como servicios o actividades regladas, tal y como se recoge en la Constitución Española de 1978⁷. De esta forma se corresponden con las inspecciones y el control de los servicios sanitario, laboral y económico en los relativo al mantenimiento de los servicios públicos, es decir, a la de hacienda.

Tal y como el servicio educativo, entendido como derecho y deber, se encuentra recogido en el art. 27 de la Constitución Española, estas otras actividades y servicios tienen también su reflejo en el marco normativo, al más alto nivel.

De esta forma, el art. 43 de la Constitución Española apunta:

1. *Se reconoce el derecho a la protección de la salud.*
2. *Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.*
3. *Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.*

Marcando de esta forma las bases, ya preexistentes, del control de los servicios sanitarios.

Por otra parte, el art. 35 de la Constitución Española señala:

1. *Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.*
2. *La ley regulará un estatuto de los trabajadores*

Marcando el entorno laboral como deber y como derecho y estableciendo el sustrato que justifica la existencia de una inspección de trabajo. Este entorno se ve ampliado, en su designación funcional, por lo establecido por el art. 41, que establece:

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.

Y por último, el art. 31 de la Constitución Española estipula:

1. *Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.*

Estableciendo así la justificación de la existencia de unidades de control e inspección de hacienda.

⁷ Texto consolidado de la Constitución Española al que se ha accedido el 2 de agosto de 2019 en la url: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229>

Se hace necesario mencionar que todos estos artículos se encuentran dentro de la sección segunda: *de los derechos y deberes de los ciudadanos* del capítulo I: *Derechos y Libertades*, mientras que el art. 27 que establece el derecho a la educación se encuentra en la sección primera: *De los derechos fundamentales y de las libertades públicas*. Esta es una diferenciación significativa, pues mientras el derecho a la educación⁸ se establece como derecho fundamental que debe ser regulado por Leyes Orgánicas, como la igualdad, el derecho a la vida, a la libertad ideológica, a la libertad y a la seguridad, o a la participación o a la tutela judicial, entre otros, el resto de los derechos mencionados tienen un rango inferior y sin la denominación de fundamentales

Nuestra intención es poner en dialogo estas tres inspecciones, al compartir la misma denominación funcional: *inspección*, con la inspección de educación, para descubrir semejanzas, diferencias, acercamientos históricos y de desarrollo, o claramente oposiciones y contrastes notables.

Consideramos que este esfuerzo, esta confrontación en espejo, puede aportar elementos singulares para la correcta prospectiva del estudio. Nuestra intención es aportar elementos singulares y cualitativos para el enriquecimiento del trabajo, realizado desde un carácter competencial, de la inspección de educación, pero consideramos igualmente que este trabajo puede enriquecerse y enriquecer el desarrollo, la labor y el futuro del resto de las inspecciones.

La búsqueda de elementos comunes, dispares, paradojas o contrastes puede ser también un elemento de reflexión de amplio calado y alcance. Es, en suma, un trabajo de comparación desde una realidad que podríamos denominar asimétrica, pero que muestra también semejanzas notables.

En este apartado debemos justificar la denominación elegida para esta singular aportación.

Una de las acepciones de la entrada *disciplina* del diccionario de la lengua de la Real Academia Española es:

2. f. *Arte, facultad o ciencia.*

El Diccionario Panhispánico del Español Jurídico define *disciplina*, en su entrada de *disciplina de mercado*, como:

Adm. y Merc. *Conjunto de normas y actuaciones de la Administración pública que ordenan la actividad comercial mayorista y minorista y la prestación de servicios.*

Por último, el *Diccionario de la lengua castellana compuesto por la Real Academia Española, reducido a un tomo para su más fácil uso*, de D. Joaquín Ibarra (1783) muestra varias acepciones interesantes al término «disciplina»:

- s.f. Doctrina, enseñanza, gobierno, é instrucción de alguna persona, especialmente en lo moral, artes liberales y ciencias. *Disciplina.*

⁸ Es el art. 27.8, el marco legal, al más alto nivel, que justifica la existencia de la inspección de educación de forma directa y explícita. De esta forma reza en su literalidad:

Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.

Acceso el 2 de agosto de 2019 de la url:

<https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf>

- El arte y la ciencia misma. *Art, doctrina, disciplina.*
- Vida reglada según las leyes de cada profesión, é instituto, y observancia. *Disciplina belli, aut militaris, regularis, aut ecclesiastica*

En este escenario, realizamos e incluimos la propuesta presentando la definición, que asumimos de la siguiente forma:

Definimos el estudio comparado disciplinar como *el estudio que utiliza el método comparado sobre ámbitos de servicios y actividades regladas, que con la misma denominación, interviene en ámbitos distintos*; en concreto utilizamos el método comparado sobre las funciones asignadas a las unidades de inspección y control de servicios y actividades regladas, distintas de la educativa.

Entendemos que la utilización del término disciplinar aporta y resume la intención de la propuesta, pues evidencia elementos comunes de los servicios, actividades o profesionales: la sanidad, la organización laboral y la corresponsabilidad tributaria, susceptibles de sistemas de control, que son claramente asemejables a la actuación, en su ámbito estricto y determinado, de la inspección de educación; de ahí la utilización y unión del método comparado en estas disciplinas, que ha dado pie a la propuesta de *estudio comparado disciplinar*.

1.4. Investigación evaluativa. Estudio de encuesta

1.4.1. La investigación evaluativa y el ejercicio de las competencias inspectora

Debemos partir, tal y como apunta Bisquerra (2004), que *una simple definición siempre deja muy pobre un concepto tan amplio* como el relativo al de la investigación en educación, por lo que se hace necesario acercarnos y nutrirnos con fuentes documentales solventes y que han demostrado su pertinencia diacrónica. En este sentido, asumimos la definición y la clasificación de Bisquerra (2004) que define la investigación educativa, como:

Un conjunto sistemático de conocimiento acerca de la metodología científica aplicada a la investigación de carácter empírico sobre los diferentes aspectos relativos a la educación; y prosigue, podemos resumir la idea de investigar en educación como un proceso o una actividad con tres características esenciales:

- a) Se desarrolla a través de los métodos de investigación.*
- b) Tiene el objeto básico de desarrollar conocimiento científico sobre educación, así como resolver los problemas y mejorar las instituciones educativas.*
- c) Está organizada y es sistemática para garantizar la calidad del conocimiento obtenido.*

Con estos fundamentos de partida, se hace necesario establecer y definir los procedimientos y formas de trabajo utilizados para presentar con sistematicidad y rigor esta investigación doctoral, en aras de alcanzar el necesario rigor científico en la búsqueda de las características mencionadas.

Dado que los objetivos, tanto general como específicos, han quedado delimitados en el apartado 1.1. de este capítulo, con objeto de alcanzar la finalidad expuesta: estudiar *el perfil profesional de los inspectores de educación de la Comunidad de Madrid, definido por el ejercicio de sus competencias* es necesario centrarnos en este momento en la selección de la metodología de la investigación evaluativa (Arnal, Rincón y Latorre, 1994; Bisquerra, 2004) que hemos considerado adecuado y pertinente para la consecución del objetivo general, desde el ámbito concreto del

objetivo específico cuarto: *Analizar el ejercicio de las competencias inspectoras en nuestro sistema educativo.*

Con la finalidad de responder adecuadamente a este objetivo y en el contexto de gobernanza europea y de rendición de cuentas, hemos considerado, como Cornejo (2015), utilizar el enfoque de creación de valor público que propone tanto el conocimiento de los servicios públicos disponibles, en primer lugar, como la evaluación de políticas y el análisis de la efectividad, como definidores del valor público en relación con los objetivos emanados del proceso de toma de decisiones pública (Moore, 1998; Coats and Passmoore, 2008).

Estos criterios se encuentran acompañados con las referencias a los elementos del denominado como *Gobierno abierto* (OCDE, 2010; Conejero, 2012a) como la transparencia, que exige que la acción y los cargos públicos estén sometidos al escrutinio público, donde la sociedad civil pueda refutar la acción y los resultados del sector público, y la receptividad entendida como capacidad de adaptación y respuesta a las nuevas necesidades, demanda e ideas, poniendo en el centro de la acción pública al ciudadano y diseñando mecanismos para la toma de decisiones compartida.

De esta manera la gestión del riesgo, la mejor asignación de los recursos públicos y la generación de bienestar sostenible, se convierten también en vectores indispensables de la acción política (Conejero, 2012b).

En este sentido aceptamos las propuestas del mismo autor (2015) en lo relativo al término *gobernanza*⁹ que lo presenta, citando a Mayntz (1993) como paradigma emergente: *una forma de gobierno más cooperativa, donde las instituciones estatales y no estatales, los actores públicos y privados, participan y a menudo cooperan en la formulación y aplicación de políticas pública.*

Es por todo esto y por la herramienta considerada más adecuada para la investigación, por lo que asumimos un enfoque metodológico de carácter cuantitativo, que permita la exploración más extensa posible, utilizando como instrumento de recogida de información el cuestionario y, en concreto, un cuestionario específico tipo Likert¹⁰ ya testeado previamente (y que será presentado a continuación), para recabar información sobre el ejercicio de las competencias inspectoras, desde la realidad y desde la percepción de los principales agentes del sistema educativo: los propios inspectores de educación, los directores de los centros educativos, los docentes en ejercicio, las familias de los alumnos y los responsables educativos, circunscribiendo la población a la que se extiende en la enseñanza básica, en los términos concretos que establece el art. 3.3 de la Ley Orgánica de Educación 2/2006, *la educación primaria y la educación secundaria obligatoria* y sin incluir, por el momento exacto en que se realizó el estudio, a los ciclos formativos de grado básico, tal y como fue incluido en dicho artículo por las modificaciones de la Ley Orgánica 3/2020 de modificación de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación [LOMLOE].

Por otra parte, la utilización de escalas tipo Likert puede ubicarse como modalidad del método de interrogatorio, tal y como establece Namakforoosh (2000), citado por Fabila (2012). Este método de recogida de datos es especialmente conocido en ciencias sociales y humanas, donde

⁹ Tal y como señala Conejero (2015) a palabra *governance* es un neologismo y un concepto que proviene de la economía, y más concretamente de la teoría de los costes de transacción; en 1979 Williamson publicó un artículo titulado *Transaction-cost economics: the governance of contractual relations*, sin embargo, hasta principios de este siglo no había unanimidad a la hora de traducir *governance*, las más utilizadas eran *gobernanza* y *gobernación*.

¹⁰ Estas escalas reciben su nombre de Rensis Likert y fueron desarrolladas en los años treinta del siglo pasado y consisten en un grupo de ítems presentados en forma de afirmaciones, ante los cuales se solicita las reacciones de los sujetos a los que se les aplica la escala (Barrantes, 2014).

frecuentemente el centro del estudio lo constituyen seres humanos, que cuentan con la información necesitada o pueden ofrecer testimonios sobre el estudio investigado.

Pasemos en este momento a la presentación de la herramienta.

Para la realización de la investigación evaluativa se ha asumido la herramienta elaborada en el seno de un estudio realizado de forma conjunta entre el Proyecto Atlántida, la Fundación COTEC, el Grupo de Investigación sobre Políticas Educativas Supranacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (GIPES) y, con una asistencia desigual, pero totalmente necesaria, representantes de las organizaciones sindicales y de las asociaciones de inspectores de educación a nivel estatal: la Asociación de Inspectores de Educación [ADIDE], la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE), la Asociación Nacional de Inspectores de Educación (ANIE), la Asociación de Inspectoras e Inspectores para una Nueva Educación (INSNOVAE) y las secciones sindicales de Comisiones Obreras (CCOO), de la Unión General de Trabajadores (UGT) y de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE). La asistencia de los representantes de USIE, entre lo que se encontraba uno de los miembros del equipo de investigación, y de ADIDE, fue permanente, comprometida y constante.

El trabajo, en el que participamos activamente, se prolongó durante más de un año y elaboró una herramienta que hemos asumido en el presente estudio, dando los pasos necesarios para la validación estadística. La herramienta ha sido cedida por sus promotores para la realización de la citada validación estadística y para su posterior utilización en la presente tesis doctoral. Este proceso previo y necesario la convierte en una herramienta válida para su posterior utilización a nivel estatal en nuevos estudios e investigaciones.

Mostramos a continuación el proceso de elaboración, justificación y fundamentación de la herramienta:

El proyecto inicial tenía como finalidad la investigación sobre la capacidad profesional de la inspección de educación, y contaba como antecedente con un estudio anterior realizado sobre la Capacidad Profesional Docente (CPD) que, desde una base teórica y una determinada fundamentación epistemológica, se llevó a cabo en centros de distintas comunidades autónomas y generó diferentes publicaciones, entre las que cabe mencionar: *Capacidad Profesional Docentes, Buscando la Escuela de nuestro tiempo* de Moya y Luengo (2019); *Capacidad Profesional Docente (CPD): un modelo de auto-evaluación para centros escolares* de Moya et al. (2020); y de forma más concreta *Proyecto «Capacidad Profesional Docente en Extremadura» (CPDEx), una nueva visión de los Centros educativos extremeños* de Díaz (2018).

Utilizando la fundamentación teórica y el trabajo realizado se trasladó su propuesta a fin de realizar una investigación sobre la capacidad profesional de la inspección de educación, al conformar un cuerpo docente, pero amoldando y acomodando en lo necesario sus pretensiones y herramientas.

La inspección educativa constituye uno de los elementos fundamentales en el ordenamiento del sistema educativo, a tenor de las funciones que tiene asignadas y de las atribuciones que se le reconocen en el ordenamiento actual y en concreto en el capítulo II, *Inspección Educativa* del Título VII, *Inspección del sistema educativo* de la Ley orgánica 2/2006, en su versión consolidada¹¹.

¹¹ Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE, núm. 106, de 4 de mayo, pp. 17158-17207). Texto original: <https://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf>

Texto consolidado, consultado el 2 de enero de 2021, en la url:

<https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf>

Se considera que esta posición relevante dentro del sistema educativo requiere una visión propia y diferenciada del resto de los agentes educativos que pueda fundamentar sólidamente las prácticas profesionales propias del Cuerpo de Inspección. En este sentido, conviene recordar que, aunque la organización de este servicio depende de cada una de las comunidades autónomas, son las leyes orgánicas que regulan el sistema educativo, las que garantizan la uniformidad y la unidad del servicio.

El principal conocimiento que debe fundamentar el ejercicio responsable y eficaz de la inspección educativa no es diferente del que deben poseer el profesorado, los equipos directivos, o el resto de servicios educativos, pero si es el enfoque, es decir la perspectiva, desde la que se afronta ese conocimiento. Podemos enmarcar y definir dicho enfoque, que debe orientar la búsqueda del conocimiento relevante para el ejercicio de las funciones propias de la inspección educativa, de la siguiente forma:

La inspección educativa requiere una visión diferenciada de la realidad educativa que le permita enjuiciar las situaciones educativas, tal y como ha llegado a configurarse tras la intervención de diferentes agentes, para valorar en qué medida el funcionamiento de los centros educativos y las prácticas que en ellos se desarrollan, se ajustan a las normas definidas por las administraciones públicas (es decir, son correctas) y, a la vez, contribuyen al ejercicio efectivo del derecho a la educación, aprovechando todas las oportunidades disponibles para que todos y cada uno de los alumnos alcance el mayor nivel de desarrollo (es decir, son eficaces).

Así pues, el enfoque de la realidad educativa propio de la inspección educativa debe ser, a la vez, *normativo y perfecto*; pues debe reconocer en cada situación educativa no sólo lo que es necesario, sino lo que es posible y deseable hacer.

A diferencia de las personas que desarrollan las funciones propias de la docencia, que deben centrar su atención en la transformación del conocimiento disponible en capacidades y/o competencias, quienes ejercen la inspección educativa debe centrar su atención en el ajuste situacional entre las características de los sujetos (su educabilidad) y las condiciones de aprendizaje (su educatividad), determinando en cada momento el potencial que ese ajuste tiene para lograr el ejercicio efectivo del derecho a la educación.

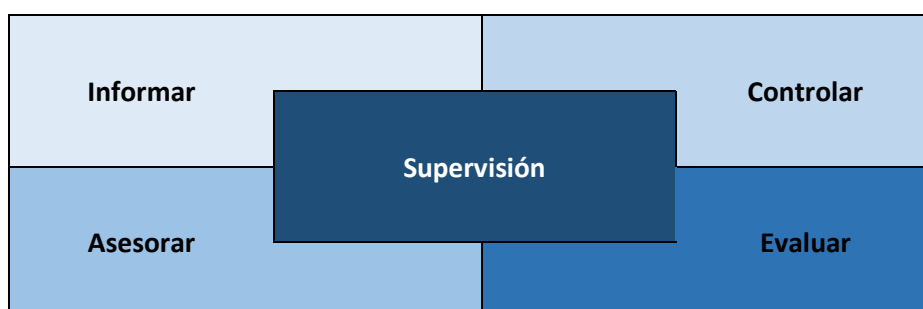


Figura 1.3. Un modelo integrado de las funciones propias de la inspección educativa.

El enfoque diferenciado de la realidad educativa requiere tanto de una información actualizada (un conjunto de hechos probados que describan los distintos momentos y estadios del sistema educativo), como también de un conocimiento probado que permita dar significado y sentido a

los hechos (es decir, conceptos, modelos y teorías) y que contribuya a la interpretación más adecuadas de las normas que regulan la organización y el funcionamiento de las instituciones educativas.

El estudio ha adoptado un enfoque integrado de las diferentes funciones que tiene atribuidas el Servicio de inspección educativa. Este enfoque se articula alrededor de la *supervisión* como fundamento último del resto de las funciones.

La supervisión, entendida como una visión diferenciada y específica de cada uno de los niveles de estructuración del sistema educativo, es una construcción del servicio en su conjunto y no de cada inspector de forma individual; o dicho con otras palabras, el servicio de inspección, en el ejercicio de su autonomía profesional, es el responsable de lograr el mayor nivel de desarrollo de su capacidad profesional de modo que pueda garantizar el desempeño de las funciones y tareas que tiene atribuidas.

El modelo integrado asumido entiende que la función de supervisión adquiere un papel fundamental, es decir, que el modo en que se diseña y desarrolla sirve de fundamento para el resto de las funciones.

Definida la supervisión de este modo, proporciona una capacidad reflexiva a cada uno de los niveles del sistema educativo que resulta absolutamente necesaria para orientar permanentemente su evolución y su mejora. De esta forma la función supervisora actúa como fundamento del resto de funciones.

Esta supervisión presenta dos características:

- a) Es una visión, a la vez, perfectiva (orientada a la mejora) y una visión normativa (orientada al cumplimiento de las normas reguladoras de la acción educativa).
- b) Es una visión holográfica, es decir, una visión que logra relacionar, las características y elementos que estructuran el sistema educativo, con sus consecuencias para la práctica educativa y para la organización y el funcionamiento de los centros educativos.

Desde este planteamiento de las funciones propias del servicio de inspección y definidas sus relaciones, se posibilita avanzar en dos direcciones:

- La formulación de un marco analítico que permita reconocer las tareas propias de cada una de las funciones que realiza la inspección de educación.
- Y la formulación de un conjunto de competencias específicas que permiten al servicio de inspección, desempeñar sus funciones.

MARCO ANALÍTICO					
Funciones	Objetos	Sujetos	Logros	Conocimientos	Valores
Supervisar	Centros	Centros	Informes	Normas. Principios y derechos	Justicia
Informar	Programas	Familias	Dictámenes	Conceptos y teorías	Equidad
Controlar	Proyectos	Profesorado	Orientaciones	Técnicas y procedimientos	Responsabilidad
Asesorar	Prácticas	Administraciones	Propuestas	Datos y hechos relevantes	Libertad
Evaluar	Resultados	Centros	Informes	Criterios	Prudencia

Figura 1.4. Matriz de funciones y tareas de la inspección de educación.

En relación con la formulación de las competencias específicas, el estudio adoptó un modelo para identificarlas y definirlas, basado en el concepto de capacidad profesional, ya utilizado en el proyecto CPD (Moya y Luengo, 2019).

De esta forma y siguiendo al mismo autor, se entiende que *la capacidad profesional de la inspección educativa es una relación sistémica creada a partir del nivel de desarrollo alcanzado en las competencias propias de cuatro dimensiones: dimensión personal, dimensión institucional, dimensión de gestión del conocimiento y dimensión de cultura institucional*. Ello significa que, en gran medida, la capacidad profesional del servicio de inspección, para realizar con éxito las funciones y tareas que tiene encomendadas, depende del modo en que se distribuyen las competencias entre el servicio, como tal, y cada uno de sus miembros.

Moya y Luengo (2019) realiza una densa y amplia descripción de las distintas dimensiones en las que se estructuran las competencias, que podemos resumir de la siguiente forma: la dimensión personal, es aquella que incluye las competencias específicas que de manera individual despliega cada inspector en su ejercicio concreto como profesional; la dimensión institucional incluye las competencias específicas que las unidades, en que se organizan los inspectores de educación, despliegan para el logro de los objetivos propios y para el desarrollo de las funciones y tareas asignadas; la dimensión de gestión del conocimiento comprende las competencias específicas que expresan el nivel de desarrollo alcanzado en la gestión del conocimiento profesional y que incluye tanto el conocimiento transmisible, como el conocimiento necesario para que la transformación y transmisión tenga éxito; y la dimensión de cultura institucional engloba a las competencias específicas que aglutinan los modos propios de hacer de la inspección educativa y que da lugar a determinados tipos de relaciones profesionales.

La figura adjunta (véase la figura 1.5) representa gráficamente el concepto de capacidad profesional, así como las cuatro dimensiones que lo conforman.

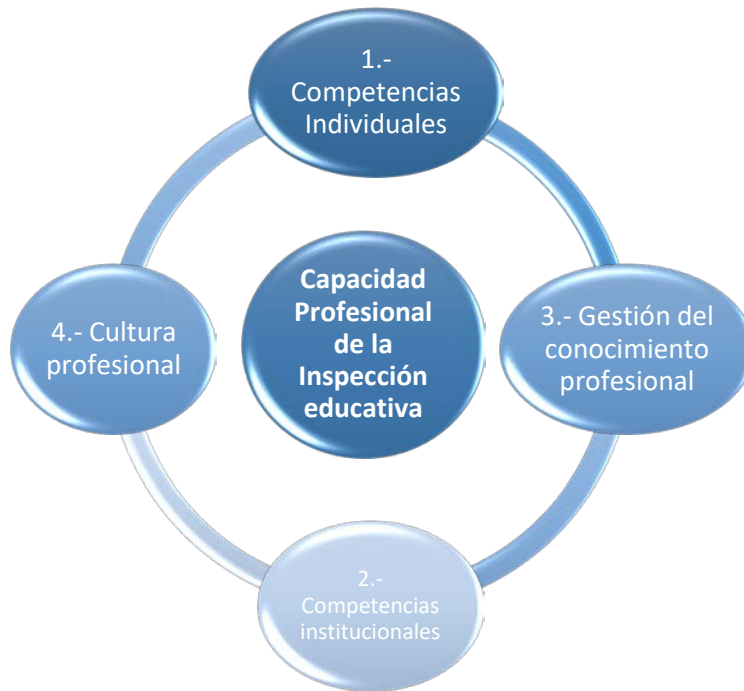


Figura 1.5. Representación gráfica de la capacidad profesional de la inspección educativa.

Las competencias específicas, que son propias de cada una de las dimensiones, son las herramientas asumidas por el presente estudio para evaluar el ejercicio efectivo de la función inspectora y, como consecuencia, poder definir el perfil profesional de los inspectores de educación. El estudio global de la capacidad profesional de la inspección educativa podrá ser abordado en investigaciones posteriores, pero podrá utilizar, de forma muy significativa, la presente investigación doctoral.

En la caracterización de estas competencias específicas se ha seguido el concepto, generalmente aceptado y de máxima actualidad, según el cual cada competencia es el resultado de movilizar (tanto personal, como institucionalmente) los procesos, los conocimientos y los recursos apropiados para realizar eficazmente las tareas implicadas en una determinada función.

El enunciado utilizado en la herramienta para la descripción de las competencias específicas de los inspectores de educación, se encuentra formulado según las nuevas especificaciones utilizadas en el desarrollo curricular de la Ley Orgánica 3/2020 de modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), incorporando el qué: la función o tarea que ejerce; el cómo: los sujetos, objetos y conocimientos que moviliza; el para qué: el logro o producto que pretende; y los valores que persigue. Estos elementos han dado como resultado una herramienta que consideramos densa, profunda y completa, aunque quizá complicada y compleja para el común general; el propio proceso de investigación nos aportará información relevante al respecto en lo relativo a la pertinencia de utilización con las distintas poblaciones.

Para la identificación y la definición de las competencias específicas se utilizó el marco analítico, ya descrito, que fusiona en una matriz las funciones asignadas legalmente, las tareas encomendadas en los planes generales de actuación de la inspección educativa de las diferentes comunidades autónomas y que se integran perfectamente en las asignadas en el plan general de actuación de la inspección educativa de la comunidad de Madrid, junto a los objetos sobre los que se interviene, los sujetos beneficiados de esas actuaciones, los productos o logros

conseguidos, los conocimientos necesarios para llevarlas a cabo y los valores últimos que persiguen, como se ha expuesto en la figura 1.4.

1.4.2. Diseño inicial de la investigación evaluativa

Una vez descrita la metodología de investigación elegida para nuestro estudio, procede describir las fases en las que se estructura la investigación.

1.4.2.1. Estructura de la Investigación

- Formulación de los objetivos y de las hipótesis.

Una vez que se ha realizado la revisión bibliográfica pertinente de la literatura general y de aquella relativa a nuestro tema de estudio, se formulan los objetivos del estudio, se determinan las hipótesis a contrastar, una vez finalizada la investigación y se describe el contexto en el que se enmarca la investigación. Se formulan objetivos generales y específicos, así como los presupuestos o hipótesis que estaban asociadas a esos objetivos.

- Metodología de investigación.

Después de haber descrito los parámetros de la investigación, se selecciona el método de investigación que corresponde a un método cuantitativo, descriptivo, de encuesta, con herramienta tipo Likert.

- Selección del instrumento de recogida de datos.

La siguiente fase del estudio se centró en la búsqueda del instrumento adecuado para la recogida de datos, seleccionando una adaptación del cuestionario CPD¹² realizado para inspectores de educación, en el que se recoge información sobre el ejercicio de las competencias inspectoras con la finalidad de poder delimitar el perfil profesional de los inspectores de educación de la Comunidad de Madrid. El cuestionario adaptado, a modo de escala Likert, contiene un conjunto de ítems, organizados en cuatro dimensiones y presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se solicita la reacción de los participantes por medio de la elección de uno de los seis grados o categorías de la escala; se eligió parámetros pares para evitar decisiones equidistantes.

En las tablas I – IV se puede encontrar la encuesta inicial y la encuesta definitiva, tras el reajuste realizado para la validación estadística.

1.4.2.2. Validación del instrumento de recogida de datos

A continuación, se realizan los procedimientos oportunos para la validación de las características psicométricas de fiabilidad y validez del instrumento.

Para la labor de validación de un cuestionario se recomienda la puesta en marcha de procedimientos que garanticen la validez de contenido y la validez de constructo (Messick, 1989a, 1989b) y las sugerencias de trabajos anteriores (Lacave et al., 2015; Cuevas et al., 2016).

En cuanto a la validez de contenido del cuestionario, con el fin de determinar el grado de comprensión de las preguntas de las que consta la herramienta, se ha utilizado, como se puede inferir de las líneas precedentes, el procedimiento denominado con el nombre de juicios de

¹² Capacidad Profesional Docente (Moya y Luengo, 2019).

expertos, mediante el que se realiza una valoración por personas cualificadas en el tema. La herramienta había sido elaborada, como ya se ha apuntado, con la participación de expertos (inspectores de educación en ejercicio o jubilados con amplia experiencia, pertenecientes a las asociaciones y sindicatos de inspectores y liderados y coordinados por el profesor José Moya Otero del grupo Atlántida –profesor titular de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación del Departamento de Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias y especialista en diseño competencial- y el Grupo de Investigación sobre Políticas Educativas Supranacional -GIPES- de la UAM). Es significativo que entre los inspectores de educación que participaron, contaban con un amplio espectro de procedencia y origen –distintas comunidades autónomas-; vinculación: relacionadas con distintas asociaciones y sindicatos; y experiencia: desde cuatro a más de veinticinco años de experiencia en el desarrollo de las funciones inspectoras, o ya jubilados.

La herramienta se elaboró utilizando como guía el trabajo previo denominado Capacidad Profesional Docente –CPD- (Moya y Luengo, 2019). La nueva herramienta se acomodó a las competencias profesionales de los inspectores de educación, que se generaban desde la matriz constituida por las funciones, tareas, productos, herramientas y valores que los inspectores de educación movilizan en su trabajo. Esa herramienta, en cuya elaboración participó parte del equipo investigador, fue la inicialmente utilizada en esta investigación doctoral, aunque posteriormente debió ser adaptada y actualizada por requerimiento de la validez estadística.

En esta tarea de validez de contenido se incluyeron aspectos significativos, como la validez y representatividad de la definición del constructo, la claridad y sencillez de las instrucciones, los aspectos lingüísticos de los ítems (el contenido, la redacción, la gramática, etc.), la representatividad y equilibrio del conjunto de ítems y la adecuación del formato de recogida de datos, entre otros. Por lo tanto, consideramos que el instrumento disponía inicialmente de validez de contenido.

Por su parte y en lo relativo al análisis y validez de constructo, tal y como señala Delgado y Prieto (2010) esta tarea tiene como objetivo, explorar el cuestionario y averiguar si las relaciones entre las variables definen una estructura dimensional en el cuestionario que se mantenga invariante y pueda servir de base para la interpretación de los resultados en distintas poblaciones.

Para comprobar la validez de constructo de la herramienta, se analizaron las propiedades psicométricas de la herramienta creada para reflejar las cuatro dimensiones en la que se encontraba estructurada, en base al estudio CPD (Moya y Luengo, 2019) y que había sido asumida por los expertos como agrupación de las competencias de la inspección educativa.

Esta tarea se realizó en dos fases:

- Primera fase:

En primer lugar, y para valorar, de forma preliminar, si el modelo factorial (o la extracción de los factores) en su conjunto era significativo, se realizó el test Kaiser, Meyer y Olkin (KMO). El estadístico KMO concede valores entre 0 y 1: un valor menor que 0.5 se interpreta como que la correlación entre dichas variables no es suficientemente significativa, por lo que no tiene sentido realizar un análisis de las relaciones entre las variables con los datos muestrales que se están utilizando (Barbero, Vila & Suárez, 2006).

En análisis realizado, el KMO fue de .722 indicando la pertinencia de realizar un análisis factorial, dado un nivel de correlación de dimensiones moderado.

En esa misma línea, se confirmó el resultado anterior mediante la realización de la prueba de esfericidad de Barlett, que pone a prueba la hipótesis nula de que las variables analizadas no están correlacionadas en la muestra o, dicho de otra forma, que la matriz de correlación es la

identidad (las intercorrelaciones entre las variables son cero). Por tanto, si el nivel de significación del estadístico de Bartlett es mayor que 0.05 no se puede rechazar la hipótesis nula y, por tanto, no tendría sentido realizar el análisis de la estructura dimensional o análisis factorial del cuestionario.

En el estudio realizado, el test de esfericidad de Bartlett resultó significativo:

$$\chi^2 (1378) = 3673,30, p < .001$$

Por lo que se pudo afirmar que la relación entre las dimensiones en las que estaba organizada la herramienta era suficiente para llevar a cabo un análisis factorial.

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo		,722
Prueba de esfericidad de Bartlett	Aprox. Chi-cuadrado	3673,301
	gl	1378
	Sig.	,000

Cuadro 1.6. Resultados de las pruebas KMO y Bartlett

Dado que el cuestionario utilizado estaba basado en el instrumento precedente denominado *CPD* para valorar la propia competencia docente (Moya y Luengo, 2019), se realizó un análisis factorial confirmatorio para testar si la estructura de las cuatro dimensiones o factores (dimensión personal, dimensión institucional, dimensión de gestión del conocimiento, y dimensión de cultura institucional) podría resultar adecuada en este nuevo instrumento.

Se consideraron diferentes índices de bondad de ajuste: ratio entre chi-cuadrado y grados de libertad ($\chi^2/g.l.$); RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation); SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) y los índices incrementales CFI (Comparative Fit Index) y TLI (Tucker-Lewis Index).

Estos índices de bondad de ajuste fueron considerados aceptables según distintos parámetros. De esta forma la ratio entre chi-cuadrado y grados de libertad son considerados aceptables cuando $\chi^2/g.l.$ presenta valores inferiores a 5 (Bentler, 1989); el RMSEA cuando muestra valores por debajo de 0.8 (Browne y Cudeck, 1993), al igual que el SRMR (Hu y Bentler, 1999); y los índices incrementales (CFI y TLI) cuando están por encima de .09 (Hu y Bentler, 1995; Marsh, Hau, y Wen, 2004).

En una primera aproximación, se administró el cuestionario a una muestra piloto de 60 participantes (todos inspectores de educación en ejercicio y con variabilidad de años de experiencia). En esta aplicación los índices de ajuste no alcanzaron los niveles recomendados ($\chi^2(938) = 1868$; $p < .001$; $\chi^2/df = 1,99$; CFI = ,71 ; IFI = ,71; RMSEA = ,13; SRMR = ,11). En ese momento también se analizaron los pesos de regresión estandarizados de cada ítem en su factor.

Al explorar los pesos de regresión estandarizados de cada ítem en su factor, la regla más generalmente aceptada es considerar el umbral mínimo de 0.707 (Carmines y Zeller, 1979) para que un indicador sea aceptado como integrante de un constructo, aunque Barclay, Higgins, y Thompson (1995) y Chin (1998) consideran que, en determinadas situaciones, cargas factoriales de 0.50 ó 0.60 podrían ser aceptadas. En esas premisas, junto al riesgo de que la eliminación de unos cuantos indicadores débiles podría hacernos perder información válida para el modelo

(Chin, 1998), se tomó la decisión de usar el criterio de aceptación de carga factorial de 0.60, y revisar los ítems que no alcanzaban esta carga factorial.

Al observar los pesos de regresión estandarizados de cada ítem en su factor encontramos las siguientes incidencias:

- En la dimensión personal, los ítems 2,3,4 y 5 de la versión inicial, cargaban por debajo de 0.60.
- En la dimensión institucional, todos los ítems de la versión inicial cargaban muy bien.
- En la dimensión de gestión del conocimiento, el ítem 12 de la versión inicial cargaba por debajo de 0.60,
- Y en la dimensión de cultura institucional, los ítems 2, 4 y 6 de la versión inicial no cargaban lo suficiente.

A continuación, y para valorar la fiabilidad de la escala, se calcularon los coeficientes de alfa de Cronbach, que en principio, se mostraron buenos para las cuatro dimensiones:

Dimensiones	(α)
Dimensión personal:	.898
Dimensión institucional:	.974
Dimensión de gestión del conocimiento:	.947
Dimensión de cultura institucional:	.930

Cuadro 1.7. Coeficientes de alfa de Cronbach por dimensiones

En último lugar, se comprobaron las correlaciones de los ítems con su escala, con el resultado de que todas mostraban un resultado por encima de 0.30. Igualmente se comprobó si la eliminación de algún ítem mejoraba la fiabilidad de la escala, con el siguiente resultado:

- En la dimensión personal, no se incrementa la fiabilidad de la escala al eliminar ningún ítem.
- En la dimensión institucional, eliminando el ítem 1 la fiabilidad de la escala se quedaba igual y subía al eliminar el ítem 3.
- En la dimensión de gestión del conocimiento, eliminado el ítem 6 la fiabilidad de la escala se quedaba igual y subía al eliminar el ítem 12.
- Y en la dimensión de cultura institucional, la fiabilidad de la escala no subía al eliminar ningún ítem.

De esa primera aproximación y aplicación experimental a la muestra piloto citada se dedujeron sencillas modificaciones enunciativas. Por todo ello los ítems problemáticos fueron revisados y el cuestionario fue modificado en base a la información obtenida en estos análisis.

Las modificaciones consistieron en el re-enunciado de algunos de los ítems con incidencia en el peso de regresión con su factor y, en su caso, con el desglose de algunos de los ítems para simplificar la percepción.

De esta forma y como ejemplo, el ítem A.2 correspondiente a la dimensión personal, que inicialmente se formulaba con el siguiente literal:

A.2. Valora la adaptación de las prácticas docentes y organizativas a las normas reguladoras del sistema educativo y su contribución al ejercicio efectivo del derecho a la educación

Quedó finalmente desglosado en dos ítems:

A.2.A.- Valora la adaptación de las prácticas docentes y organizativas de los centros a la normativa del sistema educativo.

A.2.B.- Reconoce la contribución del trabajo de los centros al ejercicio efectivo del derecho a la educación.

O el ítem C.13, correspondiente a la dimensión de gestión del conocimiento, que en su formulación inicial aparecía como:

C.13.- La IE aporta al conjunto del sistema educativo una capacidad de reflexión que le permite a los diferentes agentes comprender tanto los fundamentos de sus acciones como la necesidad de cooperar en el logro de la finalidad general de la educación.

Se reformuló con el siguiente enunciado:

C.13.- Aporta a los diferentes actores del sistema educativo una reflexión que permite interpretar sus acciones para alinearlas con las finalidades generales de la educación.

Se pueden ver la formulaciones iniciales y finales, así como los cambios realizados (marcados en color diferente) en las tablas I - IV.

De esta forma la herramienta, pasó de 53 a 57 ítems con la siguiente organización:

Dimensiones	Nº de ítems	Nº de ítems
Dimensión personal:	12	14
Dimensión institucional:	16	16
Dimensión de gestión del conocimiento:	13	13
Dimensión de cultura institucional:	12	14
Total de ítems:	53	57

Cuadro 1.8. Evolución del número de ítems tras la aplicación piloto.

- Segunda fase:

La segunda fase programada consistió en aplicar la herramienta directamente, realizando la validación de forma posterior a su aplicación a la población.

Dicha decisión se tomó en base al contexto concreto y por varios motivos que se consideran relevantes y justificativos: en primer lugar porque la herramienta ya contaba con un nivel de aceptabilidad admisible, que estábamos seguros que se incrementaría con las modificaciones pertinentes desde el estudio preliminar; en segundo lugar porque la herramienta ya contaba con un alfa de Cronbach, como índice de fiabilidad de la escala, en sus distintas dimensiones, realmente bueno; en tercer lugar por la solvencia académica e investigadora de los dos

codirectores de tesis comprometidos con la investigación doctoral y que fueron los que lideraron el proceso de reajuste de la herramienta (a fin de no comprometer la validez de contenido, se siguió contando con inspectores de educación en ejercicio para el ajuste terminológico); y en cuarto lugar y de forma muy significativa y estructural, porque la situación de pandemia mundial había violentado la programación inicialmente plasmada en el plan de investigación. Ese contexto concreto de confinamientos parciales, zonales o regionales, junto con la situación delicada de los centros educativos o el apoyo a la generalización parcial y situacional de la utilización del teletrabajo, orientó los pasos hacia la utilización casi-definitiva de la herramienta tras la primera fase, con un resultado, como se verá más adelante, positivo.

De esta forma, tras la modificación y la aplicación a las distintas poblaciones, los índices de ajuste alcanzaron sobradamente los niveles recomendados ($\chi^2(1498) = 4537$; $p < .001$; $\chi^2/df = 3.03$; CFI = .90 ; IFI = .90; RMSEA = .07; SRMR = .06). En la imagen 2 se presenta la estructura dimensional testada en el análisis factorial confirmatorio.

En la Tabla 1.3 se presentan las cargas factoriales de cada ítem en su factor. Como puede observarse, estas oscilaron entre .70 y .93, estando todas por encima de los umbrales recomendados por Carmines y Zeller (1979).

Además, los coeficientes de alfa de Cronbach se situaron todos entre .97 y .98, superando los valores que se había alcanzado en los análisis realizados en la primera aproximación.

Dimensiones	(α). 1ªv.	(α). V.def.
Dimensión personal:	.898	.97
Dimensión institucional:	.974	.98
Dimensión de gestión del conocimiento:	.947	.97
Dimensión de cultura institucional:.	.930	.97

Cuadro 1.9. Evolución de coeficientes de alfa de Cronbach por dimensiones en las dos versiones

La correlación entre todos los ítems y sus escalas presentó valores adecuados ($>.30$).

Por último y de la misma forma que se realizó con la versión inicial, se analizó si la supresión de algún ítem mejoraba el alfa de Cronbach y, por tanto, la fiabilidad de alguna de las dimensiones, con el resultado de que en ninguno de los casos el alfa de Cronbach de una escala mejoró con la eliminación de alguno de sus ítems.

Con toda esta reflexión, junto a la posible contingencia mencionada de que la supresión de algún indicador débil podría hacernos perder información válida para el modelo (Chin, 1998), no considerada necesaria, el equipo investigador asumió el criterio, en el estudio de encuestas, de aceptación de la carga factorial de los ítems (véanse las tablas 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 y 1.1.4).

1.4.2.3. Selección de la población y variables utilizadas

Dados los ambiciosos objetivos de la investigación doctoral y sus grupos diana, se seleccionó la población destinataria del estudio y el procedimiento de divulgación y recogida de datos.

En relación a la población se utilizó mayoritariamente el *Informe 2020 sobre el sistema educativo de la Comunidad de Madrid. Curso 2018-2019* elaborado por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, adecuando y *aggiornando* algunos datos. De esta forma la información concreta sobre los inspectores de educación se extrajo del entorno web denominado

Personal+Educación; el de los directores de los centros que imparten educación básica, en sus distintas estructuras (CEIP, CRA, CEIPS, CEE, IES, CC, CCEE, CPRIV, etc.) y el relativo a los docentes, fueron extraídos directamente del informe citado y contrastado con los datos del *Anuario estadístico: Las cifras de la educación en España (Edición 2021). Curso 2018-2019* del Ministerio de Educación y Formación Profesional; los datos relativos a las familias/madres y padres fueron elaborados desde datos concretos, como se explicará en el apartado correspondiente y el dato de los responsables fue elaborado *ad-hoc*.

Veamos ahora la generación y cuantificación de cada uno de los sectores:

- Datos de inspectores de educación.

Los datos relativos a la población de inspectores de educación fueron actualizados a los datos reales del curso 2021/2022, tras los aumentos en las plantillas realizados en los ejercicios 2019/2020, 2020/2021 y 2021/2022.

	DN	DS	DE	DW	DC	TT
Curso 2018/2019	14	38	21	17	78	168
Curso 2019/2020	15	42	23	18	78	176
Curso 2020/2021	15	43	24	18	79	179
Curso 2021/2022	17	45	25	20	81	188

Cuadro 1.10. Evolución de la población de inspectores de educación en la Comunidad de Madrid¹³.

- Datos de directores de centros educativos.

	DN	DS	DE	DW	DC	TT
Centros públicos. EP	81	246	144	82	245	798
Centros Públicos. ES	29	105	57	41	92	324
Centros concertados	17	70	31	39	276	433
Centros privados	24	15	5	43	63	150
TT	151	436	237	205	676	1.705

Cuadro 1.11. Datos de centros educativos por titularidad y Dirección de Área Territorial. Curso 2018/2019¹⁴. Datos utilizados para la población de directores.

¹³ Fuente: Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía. <https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/personal-docente-centros-publicos-no-universitarios-comunidad-madrid>. Acceso el 17 de noviembre de 2021.

¹⁴ Fuente: Informe 2020 sobre el sistema educativo de la Comunidad de Madrid. Curso 2018-2019 del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Aptdo. B3.1.1.

- Datos de docentes de enseñanza básica.

	DN	DS	DE	DW	DC	TT
Docentes. EP Centros financiados con fondos públicos	1.225	4.253	2.540	1.473	4.031	13.522
Docentes. EP Centros privados	647	1.615	735	1.692	6.276	10.965
Docentes. ES Centros financiados con fondos públicos	683	2.517	1.186	807	1.629	6.822
Docentes. ES Centros privados	377	1.000	389	806	3.586	6.158
TT	2.932	9.385	4.850	4.778	15.522	37.467

Cuadro 1.12. Datos de docentes por etapa educativa, tipo de centro por financiación y Dirección de Área Territorial. Curso 2018/2019¹⁵.

- Datos de madres y padres de alumnos.

Los datos relativos a los padres de alumnos tuvieron que ser elaborados directamente para la tesis, al no existir ninguna estadística al respecto, ni autonómica, ni estatal. Para ello, se utilizaron los datos de los censos de madres y padres, comunicados por los centros públicos y concertados que imparten enseñanzas de la población diana, en la Dirección del Área Territorial de Madrid Norte¹⁶, afectados en el proceso de renovación de los representantes de madres y padres en los consejos escolares de los centros financiados con fondos públicos, realizado entre los meses de octubre y noviembre de 2021; extrapolando la ratio obtenida (alumno/padres - 1/1'49993) a la población de alumnos de la Comunidad de Madrid escolarizados en la enseñanza básica de los informes citados.

¹⁵ Fuente: Informe 2020 sobre el sistema educativo de la Comunidad de Madrid. Curso 2018-2019 del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid.

¹⁶ Datos facilitados por el Servicio de Planificación, Centros y Alumnos de la Secretaría General de la Dirección de Área Territorial de Madrid Norte.

Datos de censo de alumnos y padres de los centros afectados por el proceso de renovación de su consejo escolar en la DAT Norte (Curso 2021/2022). Ratio resultante.

	Centros	Docentes	Alumnos	Padres	Ratio
CEIP / CRA	60	592	23.092	34.617	1'4991
CEIPS	3	143	2.128	2.864	1'3459
CEE	1	38	132	139	1'0530
IES	12	969	10.261	16.305	1'5890
Concertados	10	357	5.181	7.236	1'3966
TT	86	2.099	40.794	61.161	1'4993

Cuadro 1.13. Datos de censos de padres comunicados por parte de los centros de la DAT Norte afectados por el proceso de renovación de representantes de los consejos escolares en el curso 2021/2022¹⁷.

Datos de alumnado de enseñanza básica por dirección de área territorial. Curso 2018/2019

	DN	DS	DE	DW	DC	TT
Alumnado EP/EBO-EP	33.447	108.819	58.096	51.304	181.223	432.889
Alumnado ES/EBO-ES	21.715	68.592	36.835	36.740	116.449	280.331
TT Alumnos	55.162	177.411	94.931	88.044	297.672	713.220

Cuadro 1.14. Distribución de alumnado por Direcciones de Área Territorial. Curso 2018/2019.

Proyección de madres/padres de alumnado de enseñanza básica por dirección de área territorial. Ratio 1 alumnos/1'4993 tutores.

	DN	DS	DE	DW	DC	TT
Padres EP/EBO-EP	50.147	163.152	87.103	769.20	271.708	649.030
Padres ES/EBO-ES	32.557	102.840	55.227	55.084	174.592	420.300
TT Padres	82.704	265.992	142.330	132.004	446.300	1.069.331

Cuadro 1.15. Proyección de la población de madres y padres de alumnos por direcciones de área territorial. Curso 2018/2019. Ratio 1/1'4993.

¹⁷ Tal y como establece el art. 9.2 del Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria (BOE de 20 de febrero) -acceso el 17 de febrero en <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1996-3689> -: *El consejo escolar se renovará por mitades cada dos años de forma alternativa*. Por este motivo, los datos disponibles no representan la población total de los centros de la DAT Norte.

Los centros de la DAT Norte representan el 10'6 % de total de centros de la Comunidad de Madrid según el Informe 2020 sobre el sistema educativo de la Comunidad de Madrid. Curso 2018-2019 del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid.

En esta aproximación se excluyen necesariamente a los centros privados, asumiendo el dato como estadísticamente válido.

- Datos de responsables educativos.

Los datos relativos a los responsables educativos fueron igualmente de elaboración específica para la investigación doctoral y extraídos del portal de transparencia de la Comunidad de Madrid¹⁸, catalogando la población diana elegida: nivel de subdirector general o superior (subdirectores generales, directores generales, viceconsejeros, secretarios generales técnicos de la consejería, presidentes del consejo escolar autonómico y consejeros de educación) de las estructuras de la consejería con competencias en materia de educación generada en la décima, undécima y decimosegunda legislaturas (procesos electorales celebrados en los años 2015 - 2019 - 2021). A este grupo se consideró adecuado incorporar a los diputados autonómicos miembros de la correspondiente Comisión de Educación, Universidades y Ciencia de la Asamblea de Madrid, o equivalentes, durante las mismas legislaturas décima, undécima y decimosegunda extraídos de la página correspondiente del portal de la Asamblea de Madrid¹⁹ y siempre que siguieran ejerciendo como diputados.

	XII Legislatura	Legislaturas anteriores ²⁰	TT
Consejeros	1	1	2
Viceconsejeros	3	2	5
Secretario General Técnico	1	1	2
Pte. Consejo Escolar CM	1	1	2
Directores Generales	13	4	17
Subdirectores Generales	26	10	36
Diputados. [Com. Ed.] Asamblea de Madrid	17	4	21
TT	62	23	85

Cuadro 1.16. Población de responsables educativos por nivel -cargo- y legislatura.

Todos estos estudios generaron la siguiente población diana organizada, en su caso, por Direcciones de Área Territorial (estructura organizativa para la gestión de los servicios educativos en la Comunidad de Madrid desde que esta asumió competencias en materia de enseñanza no universitaria por *Real Decreto 926/1999, de 28 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de enseñanza no universitaria* (BOE de 23 de junio de 1999))²¹.

¹⁸ <https://www.comunidad.madrid/transparencia/>. Con acceso el 2 de mayo de 2019, el 23 de enero de 2020 y el 2 de junio de 2021

¹⁹ <https://edunci-xii.asambleamadrid.es/>. Recuperado el 23 de enero de 2020, el 2 de junio de 2021 y el 8 de diciembre de 2021.

²⁰ Se excluyen a quienes permanecen en el cargo.

²¹ <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-13820> . Acceso el 2 de agosto de 2020.

	DN	DS	DE	DW	DC	Otros	TT
Inspectores	17	43	26	19	83		188
Directores	151	436	237	205	676		1.705
Familias	82.704	265.992	142.330	132.004	446.300		1.069.331
Docentes	2.932	9.385	4.850	4.778	15.522		37.467
Responsables						85 ²²	85

Cuadro 1.17. Resumen global. Población diana de la investigación por sectores y Direcciones de Área Territorial.

Se decidió no circunscribir la población a muestras pre-establecidas sino realizar una divulgación generalizada a fin de abarcar el mayor porcentaje posible de cada uno de los segmentos, con el propósito de abarcar el mayor nivel de confianza y el menor margen de error.

En el siguiente epígrafe de este capítulo se aportará información sobre los resultados obtenidos, así como del nivel de confianza obtenido.

En cuanto a las variables utilizadas, aunque en un principio se consideró que no aportaban un valor añadido a la investigación, con el criterio añadido de evitar la complejidad y recogida de datos de carácter personal, finalmente se decidió añadir distintas variables, de carácter sociodemográfico, que pudieran aportar información relevante para el estudio y sobre todo para las conclusiones.

Las variables incluidas podían aportar singularidad al perfil de los inspectores de educación en cada una de las Direcciones de Área Territorial (es decir en cada uno de los servicios, como unidades organizativas) y podían aportar información acerca de si los tipos de centros o la experiencia y antigüedad podían singularizar esa percepción.

De esta forma se añadieron a las herramientas las siguientes variables independientes por segmentos de cada población:

²² Sector no organizado en Direcciones de Área Territorial.

Inspectores	Directores	Docentes	Familias	Responsables
DAT	DAT	DAT	DAT	DAT
- DAT Norte - DAT Sur - DAT Este - DAT Oeste - DAT Capital	- DAT Norte - DAT Sur - DAT Este - DAT Oeste - DAT Capital	- DAT Norte - DAT Sur - DAT Este - DAT Oeste - DAT Capital	- DAT Norte - DAT Sur - DAT Este - DAT Oeste - DAT Capital	
Años experiencia	Años experiencia	Años experiencia	Años experiencia	Años experiencia
- De 0 – 4 años - De 5 – 8 años - Más de 9 años	- De 0 – 4 años - De 5 – 8 años - Más de 9 años	- De 0 – 8 años - De 8 – 18 años - Más de 19 años		- De 0 – 4 años - De 5 – 8 años - Más de 9 años
Tipo de centro	Tipo de centro	Tipo de centro	Tipo de centro	Tipo de centro
	- Centro público - Centro concertado - Centro privado	- Centro público - Centro concertado - Centro privado	- Centro público - Centro concertado - Centro privado	

Cuadro 1.18. Variables incorporadas a la herramienta.

1.4.2.4. Instrumento de recogida de datos

Para la recogida de los datos y a fin facilitar su proceso, procesamiento y garantizar la integridad, confidencialidad, protección y anonimato de los datos, se utilizó el servicio disponible EUSurvey²³.

EUSurvey es un sistema de gestión de encuestas en línea disponible desde el año 2013 y en continuo proceso de optimización y mejora. EUSurvey es la herramienta oficial de gestión de encuestas de la Comisión Europea y se encuentra financiado por el programa ISA²⁴. Su objetivo principal es crear encuestas oficiales de opinión pública y formularios para la comunicación interna y gestión del personal para la recogida de datos de opinión del personal, evaluación, registro, etc. y también está disponible de forma gratuita para investigadores y para todos los ciudadanos de la UE.

La herramienta proporciona una amplia variedad de elementos utilizados en formularios y encuestas y se encuentra alojada en el Departamento de Servicios Digitales de la Comisión Europea (DG DIGIT). Su acceso se realiza desde la url: <https://ec.europa.eu/eusurvey>. Se encuentra elaborado completamente con código abierto y se publica bajo la licencia EUPL (European Union Public Licence).

Las características principales de EUSurvey son las siguientes:

En relación a la elaboración de formularios, permite formularios personalizables; preguntas dependientes y campos condicionados; publicación programada; distintos idiomas, desde los 23 idiomas oficiales de la UE a la traducción a cualquiera de los 136 idiomas cubiertos por la norma ISO 639-1 (desde abjasio, hasta zulú); seguridad, pues dispone de la infraestructura necesaria para proteger los formularios en línea, debiendo acceder mediante el sistema de doble paso;

²³ <https://ec.europa.eu/eusurvey/home/about>. Acceso el 2 de febrero de 2021.

²⁴ *Interoperability solutions for public administrations, businesses and citizens* accesible desde la url: https://ec.europa.eu/isa2/home_en. Acceso el 2 de febrero de 2021.

permite el envío de invitaciones directamente desde la aplicación; la privacidad avanzada, con formularios totalmente anónimos en los que no estarán disponible ni los detalles de la conexión; la personalización de la apariencia: con un editor de estilo CSS incorporado y los editores de texto enriquecido; la posibilidad de respuesta fuera de línea, que permite responder formularios sin conexión de forma previa a enviar una contribución al servidor en un momento posterior; la numeración automática; el contraste mejorado para participantes con discapacidad visual; y la posibilidad de la incorporación de archivos de apoyo.

También permite la gestión cooperativa, con la definición de permisos avanzados para que distintos usuarios prueben encuestas o analicen los resultados y una potente gestión de resultados: con capacidades básicas de análisis de resultados y visualización de datos en histogramas, vistas de gráficos, o la exportación de resultados a formatos de hoja de cálculo estándar para importarlos a aplicaciones estadísticas.

La herramienta permite la publicando de resultados o sistemas de cálculo y creación automática de estadísticas y gráficos y la edición posterior de contribuciones enviadas.

Dada las capacidades y potencias de la herramienta fue arduo el proceso de formación, elaboración, optimización y extracción de los datos.

Con el propósito de ampliar la divulgación de las encuestas y aumentar la muestra se diseñaron sistema de acceso mediante código -tipo bidi- para que se pudiera acceder fácilmente y cumplimentar los formularios mediante smartphone o tabletas, tal y como puede apreciarse en el cuadro 1.19.

Sector	URL	Cód. Bidi
Inspectores	https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/INSED_EncuestaUAM	
Directores	https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DIRCD_EncuestaUAM	
Docentes	https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PROCD_EncuestaUAM	
Familias	https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FAMCD_EncuestaUAM	
Responsables	https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RESSE_EncuestaUAM	

Cuadro 1.19. Enlaces y código bidi de acceso a las encuestas por sectores²⁵.

²⁵ A la fecha de depósito de la presente tesis, las urls se encuentran deshabilitadas.

1.4.2.5. Gestiones para la adecuación ética de la investigación

Con el propósito de realizar la investigación doctoral con los máximos estándares de rigor, honestidad y responsabilidad; fomentar la adquisición de buenas prácticas científicas; fomentar la reflexión sobre las cuestiones éticas, vinculadas tanto a la investigación, como a sus beneficios y sus riesgos y diseñarla para la adecuada acomodación a las exigencias de los documentos del Comité de Ética de la Investigación (CEI) de la Universidad Autónoma de Madrid, *Código de buenas prácticas en investigación [UMA]*, *Aspectos éticos de la intervención de estudiantes de la UAM como sujetos de investigación*, se diseñó la aplicación de la investigación siguiendo los criterios para la investigación educativa recogidos por Howe & Eisenhart (1993).

De esta forma y en la consideración de que la herramienta ya estaba diseñada previamente, se aplicó el criterio de evitar cualquier dato de carácter personal innecesario que extralimitara el alcance de la investigación: las variables seleccionadas tenían carácter genérico (zona educativa, antigüedad y tipo de centro) y podría aportar información cualitativa relevante a la hora de extraer las conclusiones y propuestas.

De forma muy explícita se diseñó y aplicó el criterio ético para el momento de la recolección de la información y en concreto del consentimiento informado y la confidencialidad, que también menciona Noreña et al. (2012). En esta línea, los miembros de los sectores diana aceptaron participar en la investigación mediante un consentimiento informado explícito. La no aceptación suponía la salida de la herramienta con el agradecimiento por su interés en él.

En el documento con el consentimiento informado se ofrecía información sobre los objetivos de la investigación, su finalidad, la pertinencia de la participación en base a su grupo de pertenencia, la herramienta utilizada para la recogida de datos, el derecho de desistimiento e incluso la posibilidad de modificación de las respuestas, así como de la ubicación, plazo y sistema de custodia de los datos.

Es cierto que no es posible el anonimato absoluto de las identidades, pues estas pueden ser reconocida por personas cercanas al contexto de la investigación o interesadas en la cuestión. En este sentido, el estudio asume la referencia a Walford (2005), recogida en Simons (2011), sobre lo relativo al anonimato, en el sentido de que en algunos estudios es útil saber de qué escenario se habla, tanto para que se pueda verificar la veracidad de lo que se recoge, como para valorar el trabajo desarrollado en estos contextos.

Los distintos sectores seleccionados para la investigación y sobre todo la parcelación de segmentos muy reducidos podría provocar el descubrimiento de algún autor, realizándose el compromiso de anonimizar los datos separando, en el momento del análisis, las respuestas emitidas de las variables prediseñadas.

Los criterios éticos fueron aplicados, como se ha adelantado, en la selección de los equipamientos necesarios, en la obtención, registro, almacenamiento, custodia y conservación de los materiales y resultados, y serán aplicados en la difusión de los resultados, la autoría y propiedad intelectual, como un imperativo ético, especialmente recogido por la Universidad Autónoma de Madrid.

De la misma forma y como imperativo ético del equipo de investigación, existe un compromiso del registro y de la publicación de los resultados, aunque estos fueran negativos, distintos a los inicialmente esperados o previstos en el proyecto de la investigación, o polémicos.

Además, otros de los aspectos considerados en esta investigación han sido:

- La garantía a todos los participantes en el estudio, de que el manejo de los datos proporcionados respondería exclusivamente a los fines planteados.
- El exquisito cuidado con relación al tratamiento de los datos, de la selección de la herramienta de recogida de datos, ya mencionado, suponiendo además la experiencia previa, la formación técnica y las creencias personales como aspectos de especial consideración en esta investigación. El equipo investigador ha implementado una herramienta reflexiva añadida y para evitar que su influencia pudiera afectar a la validez del estudio se consideraron como procesos, la reflexión continua de su rol y la discusión permanente.

Todos estos criterios provocaron la solicitud de informe favorable del Comité de Ética para la Investigación (CEI) de la UAM (véase el anexo I.A.), que finalmente fue concedido (véase el anexo I.B.).

1.4.2.6. Diseño de la administración del instrumento de recogida de datos

En el proceso de divulgación y comunicación de la investigación a los distintos segmentos se diseñó la utilización de diversas herramientas, así como una búsqueda y comunicación personal de contactos relevantes que pudieran facilitar el acceso a los grupos con un valor añadido de representatividad y autoridad indirecta.

Los principios éticos de la investigación nos orientaron hacia procesos fiables y honestos de acceso, sin alterar la intimidad o protección de los datos de acceso. La utilización de la herramienta de cumplimentación por medio de los servidores de EuSurvey –ya comentada- y el trabajo realizado para el acceso y cumplimentación telemática con posibilidad de acceso mediante código bidi y posibilidad de entrada mediante Smartphone o tableta se entienden como herramientas de versatilidad que consideramos que facilitan la participación.

Igualmente se habilitó una cuenta en la red social Twitter con el usuario @DoctoEdu_UAM para divulgar la encuesta y abrir el horizonte de los participantes. Esta posibilidad creó alguna reflexión al respecto entre el equipo investigador, pues la utilización de estas herramientas podía desbordar los límites geográficos y funcionales de la investigación.

Aunque el proceso viene detallado en la solicitud realizada al Comité de Ética para la Investigación de la UAM (CEI-UAM), ya incluido como anexo I.A., plasmamos por sectores el diseño del proceso resumido de divulgación correspondiente.

- Sector de los inspectores de educación.

Se iniciaría con la remisión de un escrito específico al Subdirector General de Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid (véase en la p. 9 del anexo I.A de la solicitud; p. 681), tras una aproximación verbal de carácter personal, solicitando autorización para ponernos en comunicación por correo electrónico con los inspectores de educación en ejercicio en la Comunidad de Madrid a fin de solicitarles su participación en la encuesta. El Subdirector General autorizó el acceso y se brindó a remitir un escrito a los inspectores jefes adelantándoles el contacto que se iba a realizar por medio del equipo investigador (véase el anexo 1.2). Una vez recibida la autorización se remitiría un escrito específico y personalizado a todos los inspectores en ejercicio, a la cuenta de correo electrónico institucional de la Comunidad de Madrid, con información sobre la investigación y con el enlace y el código bidi para el acceso (véase el anexo 1.4). La remisión personalizada se realizaría con un correo electrónico combinado con los datos de contacto extraídos a una hoja de cálculo Excel utilizando como herramienta de difusión la herramienta Outlook, versión de 2016, desde la cuenta de email de la UAM (esta cuenta fue la única utilizada para la divulgación y comunicación con los distintos sectores).

Si bien el diseño temporal se circunscribía a periodos concretos, el equipo de investigación dejó abierta la posibilidad de realizar distintas oleadas.

- Sector de los directores de centros educativos.

La divulgación entre los directores de centros educativos de las distintas redes de centros (públicos, concertados y privados) que imparten la enseñanza básica se realizaría mediante el acceso a distintas entidades profesionales y representativas de los directores de los centros educativos.

De esta forma se realizaría de forma previa una búsqueda de contactos personales, con el diseño igualmente de realizar una primera aproximación de forma personal (presencial o telefónicamente) con el propósito de remitir un escrito específico posterior con información sobre la investigación y la solicitud de divulgación entre sus representados o afiliados.

Las entidades profesionales o representativas inicialmente seleccionadas fueron: el Consejo de directores de centros públicos de educación primaria; la Asociación de Directores de Institutos de la Comunidad de Madrid [ADIMAD]; DEACAM; Escuelas Católicas; CECE; CICAIE; ACADE; y Tertio Millenio.

Igualmente, y aunque el proceso diseñado se circunscribía a una temporada concreta, se abrió la posibilidad de impulsarlo en distintos momentos y mediante distintas oleadas.

- Sector de las familias de alumnos.

La divulgación entre las familias (madres y padres de alumnos) de los alumnos escolarizados en la enseñanza básica en los distintos centros educativos de la Comunidad de Madrid se diseñó mediante el acercamiento a las asociaciones más representativas.

De esta forma, e igualmente, se realizaría de forma previa un contacto personal con aquellos presidentes y representantes, remitiendo un escrito específico posterior con información sobre la investigación y la solicitud de divulgación de un documento entre sus representados o asociados.

Así las entidades inicialmente seleccionadas fueron: la FAPA Giner de los Ríos; la CEAPA; la CONCAPA; y la COFAPA solicitando la divulgación de la encuesta entre las familias asociadas.

Dada la gran amplitud de este sector también se diseñó específicamente la divulgación del acceso a la herramienta mediante la cuenta de twitter creada @DoctoEdu_UAM a las cuentas de twitter de AMPAS, APAS, o AFAS tras un proceso de indagación y búsqueda. En este sentido se puede tener acceso al montante total de cuentas de twitter conseguidas en el anexo 3.2.

- Sector de los docentes en la enseñanza básica.

La divulgación entre los docentes (maestros y profesores) de enseñanzas de educación primaria y secundaria de los distintos centros educativos de la Comunidad de Madrid se realizaría, de la misma forma, mediante el acceso a las principales organizaciones sindicales y al Colegio Profesional de docentes.

De esta forma se realizaría de forma previa un contacto personal con aquellos presidentes y representantes de las entidades, remitiendo un escrito específico posterior con información sobre la investigación con la solicitud de divulgación de un documento entre sus representados o afiliados.

Así se seleccionó como entidades y sindicatos representativos: los sindicatos ANPE, CSIF, CSIT, UGT, CCOO, CGT, FSIE, USO, y al presidente del Colegio Oficial de Docentes, solicitando la divulgación de la encuesta entre los docentes afiliados o asociados.

En este sector también se consideró (de forma asíncrona para no simultanearse con el sector de familias) la utilización de la red social twitter. De esta forma también se inició la divulgación mediante la publicación de post en la red social twitter, dirigidos a docentes, con información sobre la investigación a cuentas representativas.

- Sector de responsables educativos.

La divulgación entre los responsables educativos: personal de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía²⁶ con nivel de Subdirector General o superior, y Diputados de la Asamblea de Madrid miembros de la Comisión de Educación o equivalente se diseñó mediante la remisión de documentos específicos y personalizados a cada uno de ellos.

De esta forma se diseñó un proceso de investigación e indagación diacrónica, iniciado en el año 2019, en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid y en el portal de la Asamblea de Madrid, para elaborar el listado del personal del sector, considerando adecuado mantener en los listados a quienes había cesado en el cargo, por la aportación experiencial que podían aportar. También se realizó el proceso de investigación en entidades universitarias para recabar la información de contacto del personal que había cesado en el cargo y se habían incorporado a sus puestos docentes universitarios.

Así y posteriormente se remitiría un escrito específico y personalizado a cada miembro del sector, a su cuenta de correo electrónico institucional de la Comunidad de Madrid, a la cuenta de la Asamblea de Madrid (pública en la correspondiente web) o a su cuenta como docentes universitarios, con información sobre la investigación y con el enlace y el código bidi para el acceso.

²⁶ El proceso investigador se vio alterado, en este sector, de forma significativa.

Durante la investigación doctoral, la organización de la Consejería con competencias en materia de Educación fue modificada según el siguiente tejido normativo:

Decreto 288/2019, de 12 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Juventud (BOCM de 14 de noviembre), con acceso el 2 de agosto de 2019, en la url:

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/11/14/BOCM-20191114-2.PDF.

Tras el proceso electoral de mayo de 2021, se promulgó el Decreto 88/2021, de 30 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la estructura orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid (BOCM de 1 de julio), con acceso el 1 de julio en la url:

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/01/BOCM-20210701-1.PDF.

Posteriormente se publicó el Decreto 236/2021, de 17 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía (BOCM de 18 de noviembre), con acceso el 18 de noviembre en la url:

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/11/18/BOCM-20211118-1.PDF.

Y posteriormente, y una vez finalizado el proceso de divulgación y recogida de datos de la encuesta, la estructura fue nuevamente modificada por el Decreto 38/2022, de 15 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se crea la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades (BOCM de 16 de junio), con acceso el 16 de junio en la url:

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/06/16/BOCM-20220616-1.PDF.

Aunque el proceso se circunscribía a una temporada concreta se abrió igualmente la posibilidad de nuevas divulgaciones u oleadas.

En cuanto al cronograma de la investigación para la divulgación y recogida de los datos, esta se vio fuertemente condicionado por la situación de crisis sanitaria producida por la propagación del virus SARS-COVID 19 y la correspondiente declaración de pandemia.

De esta forma se fue posponiendo hasta que se consideró que no se vería afectada categóricamente por la situación descrita.

De esta forma la propuesta de cronograma inicial fue la siguiente:

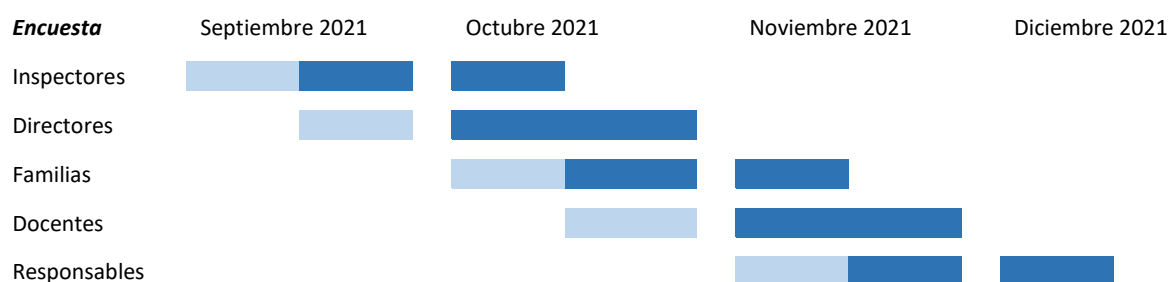


Figura 1.20. Cronograma²⁷ de divulgación y recogida de datos. Figura organizada por quincenas.

1.4.2.7. Propuesta de muestras necesarias por sectores

Dado el carácter ambicioso de la investigación y los grandes sectores sobre los que se aplicaba se diseñaron dos distintos escenarios a fin de conocer cuáles serían las muestras necesarias.

Se utilizó la calculadora de muestras de QuestionPro²⁸ con una pretensión preliminar de un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 5 %.

La fórmula utilizada para el establecimiento de la muestra necesaria fue la propuesta por Murray y Larry (2009):

$$n = \frac{Z^2 \sigma^2 N}{e^2 (N - 1) + Z^2 \sigma^2}$$

²⁷ En color claro el proceso de gestión previa; en color oscuro el proceso de divulgación propiamente dicha y de apertura de la herramienta de recogida de datos.

²⁸ Entidad especializada en elaboración de encuestas on-line en la url: <https://www.questionpro.com/es/> con acceso el 30 de agosto de 2021.

En donde:

- n = Es el tamaño de la muestra poblacional a obtener
- N = Es el tamaño de la población total.
- σ = Representa la desviación estándar de la población, utilizando comúnmente el valor constate que equivale a 0.5 en caso de desconocer este dato.
- Z = Es el valor obtenido mediante niveles de confianza. Su valor es una constante, por lo general se tienen dos valores dependiendo el grado de confianza que se desee, siendo 99 % el valor más alto (este valor equivale a 2,58) y 95 % (1,96) el valor mínimo aceptado para considerar la investigación como confiable.
- e = Representa el límite aceptable de error muestral, generalmente establecido en la horquilla entre el 1 % (0.01) y el 9 % (0.09), siendo 5 % (0.05) el valor estándar usado en las investigaciones.

El primer escenario diseñado, dadas sus características específicas, entendía cada sector de forma independiente, buscando la muestra específicamente necesaria para él.

De esta forma y en base a las poblaciones ya descritas la muestra total ascendían a la necesidad de 1268 participantes.

Su distribución era la siguiente:

	DN	DS	DE	DW	DC	TT	Muestra
Inspectores	17	43	26	19	83	188	129
Directores	151	436	237	205	676	1.705	315
Familias	82.704	265.992	142.330	132.004	446.300	1.069.331	385
Docentes	2.932	9.385	4.850	4.778	15.522	37.467	381
Responsables					67	67	58
TT						1.108.758	1.268

Cuadro 1.21. Muestra necesaria, en escenario por sectores, para un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 5 %.

El segundo escenario entendía a los distintos sectores como un todo global, sobre el que se buscaba la muestra necesaria. En este caso se proyectó la necesidad de una muestra de 385 participantes.

	TT	Muestra
Población global del estudio	1.108.779	385

Cuadro 1.22. Muestra necesaria, en escenario global de la población, para un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 5 %.

Aunque el deseo del grupo de investigación era poder acceder a la población necesaria en el primer escenario diseñado, ello dependía de muchas otras variables y circunstancias sobre las que no se podía actuar: la penetración de la herramienta en los distintos sectores, la simpatía o antipatía de la encuesta para cada perfil de sector y la disponibilidad de los sectores de acceso, serían aspectos, entre otros, que favorecerían más o menos la participación real.

1.4.3. Aplicación final de la investigación evaluativa

1.4.3.1. Versión final del instrumento y su validación estadística

Presentamos a continuación el proceso seguido para la realización del estudio de encuesta y la extracción de los resultados.

En el proceso de divulgación y comunicación de la investigación a los distintos segmentos se diseñó la utilización de diversas herramientas, así como una búsqueda y comunicación personal de contactos relevantes que pudieran facilitar el acceso a los grupos, con un valor añadido de representatividad y autoridad indirecta.

Como se ha apuntado, los principios éticos de la investigación nos orientaron hacia procesos fiables y honestos de acceso, sin alterar la intimidad o protección de los datos de acceso. Reiteramos que la utilización de la herramienta de cumplimentación por medio de los servidores de EuSurvey –ya comentada- y el trabajo realizado para el acceso y cumplimentación telemática con posibilidad de acceso mediante código bidi y posibilidad de entrada mediante Smartphone o tableta se entienden como herramientas que aportan una versatilidad que consideramos que facilitan la participación.

Igualmente se habilitó una cuenta en la red social Twitter con el usuario @DoctoEdu_UAM para divulgar la encuesta y abrir el horizonte de los participantes. Esta posibilidad creó alguna reflexión al respecto entre el equipo investigador, pues la utilización de estas herramientas podía desbordar los límites geográficos y funcionales de la investigación.

Aunque el proceso viene detallado en la solicitud realizada al Comité de Ética para la Investigación de la UAM (CEI-UAM), ya incluido como anexo I.A, plasmamos por sectores el diseño del proceso resumido de divulgación correspondiente.

Dado que la encuesta ya fue presentada en el epígrafe 1.4.2. y siguientes, así como descrita su validación estadística, pasemos en este momento a describir el proceso seguido para la aplicación de la encuesta en cada uno de los sectores:

1.4.3.2. Administración del instrumento de recogida de datos

Administración al sector de inspectores de educación

El proceso seguido para la divulgación de la encuesta entre todos los inspectores de educación de la Comunidad de Madrid, siguió el siguiente proceso:

Se inició con una llamada telefónica de cortesía y con la correspondiente remisión de un escrito específico al Subdirector General de Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid (véase el anexo 1.1), solicitando autorización para ponernos en comunicación por correo electrónico con los inspectores de educación en ejercicio en la Comunidad de Madrid a fin de pedirles su participación en la encuesta. El Subdirector General autorizó el acceso y se brindó a remitir un

escrito a los Inspectores Jefes adelantándoles el contacto que se iba a realizar por medio del equipo investigador (véase el anexo 1.2). Una vez recibida esa autorización y sin propuesta alguna de modificación, se remitió un escrito específico y personalizado a todos los inspectores en ejercicio (véase el anexo 1.4), -cuyo modelo ya había sido presentado en la solicitud formulada al Comité de Ética para la Investigación de la UAM (CEI-UAM)- a la cuenta de correo electrónico institucional de la Comunidad de Madrid, con información sobre la investigación y con el enlace y el código bidi para el acceso. La remisión personalizada se realizó, como ya se ha apuntado, con un correo electrónico combinado con los datos extraídos a una hoja de cálculo Excel utilizando como herramienta de difusión la herramienta Outlook, versión de 2016, desde la cuenta de email de la UAM. Igualmente se recibió información de la propia Subdirección General relativa a inspectores que no querían participar en la investigación (véase el anexo 1.3), que de forma inmediata fueron eliminados de la base de datos para no importunarlos.

Se detectó la incidencia de que los equipos institucionales de la Comunidad de Madrid, utilizan como navegador predeterminado la herramienta Internet Explorer, versión 11 del año 2013, que no soporta las potencialidades de EUSurvey, por lo que se remitió un nuevo correo electrónico, personalizado, comunicando dicha incidencia y la forma de solventarla (véase el anexo 1.5).

Si bien el diseño temporal se circunscribió a periodos concretos, el equipo de investigación realizó distintas oleadas (véase el anexo 1.6); la última, el 2 de marzo de 2022.

Finalmente, el número de muestra conseguida en el sector de inspectores de educación ascendió a 95 individuos, lo que supone el 50,53 % de la población total del sector, con una amplitud temporal que abarcó desde el 2 de septiembre de 2021, al 16 de abril de 2022.

Administración al sector de directores de centros docentes

La divulgación entre los directores de centros educativos de las distintas redes de centros (públicos, concertados y privados) que imparten la enseñanza básica se realizó mediante la comunicación personal con distintas entidades profesionales y representativas de los directores de los centros educativos.

De esta forma se realizó de forma previa una búsqueda de contactos personales; y tal y como se diseñó, se realizó una primera aproximación de forma personal (presencial o telefónicamente) con el propósito de remitir un escrito específico posterior con información sobre la investigación y la solicitud de divulgación entre sus representados o afiliados (véase el anexo 2.1).

Se intentó solventar previamente el problema del navegador al adelantarlo en la propuesta de escrito de divulgación. De la misma forma hubo que realizar propuestas de modificación de la propuesta temporal, en la consideración de todas las tareas y responsabilidades de los directores en los comienzos de curso escolar: organización general del centro; elaboración de horarios; elaboración del Documento de organización del centro [D.O.C.]; elaboración de la Programación General Anual [P.G.A.]; gestión de la selección de empresas de comedor escolar; procesos de renovación de Consejo Escolar; etc.

Plasmamos a continuación la relación de entidades contactadas:

<i>Puesto</i>	<i>Entidad</i>
Secretario General de la Junta de Portavoces	Consejo de Directores.
Presidente	ADIMAD
Presidente	APRODIR
Vicepresidente	APRODIR
Vocal	APRODIR
PRESIDENTE	ESCUELAS CATÓLICAS MADRID
VICEPRESIDENTA	ESCUELAS CATÓLICAS MADRID
SECRETARIO REGIONAL	ESCUELAS CATÓLICAS MADRID
PRESIDENTE	EDUCATIO SERVANDA MADRID
Presidente	Fundación Tertio Millennio
Secretario General	CECE - Madrid
FACE PM	CONFEDERACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS
PRESIDENTE	ACADE
Secretaria	MEJORA TU ESCUELA PÚBLICA
PRESIDENTE	CICAE
DIRECTORA GENERAL	ASOCIACIÓN DE COLEGIOS PRIVADOS E INDEPENDIENTES
VICEPRESIDENTE	ASOCIACIÓN DE COLEGIOS PRIVADOS E INDEPENDIENTES

Cuadro 1.23. Entidades representativas de directores de centros docentes con los que se contactó personalmente. Se omite el nombre, teléfono y email por principio ético y protección de datos.

Si bien el diseño temporal se circunscribió a periodos concretos, el equipo de investigación realizó distintas oleadas (véase el anexo 2.2.); la última el 11 de enero de 2022.

Finalmente, el número de muestra conseguido en el sector de directores de centros educativos de enseñanza básica ascendió a 214 individuos, lo que supone el 12,55 % de la población total del sector, en una amplitud temporal que abarcó desde el 11 de octubre de 2021, al 16 de abril de 2022.

Administración al sector de familias de alumnos de enseñanza básica

La divulgación entre las familias (madres y padres de alumnos) de los alumnos escolarizados en la enseñanza básica en los distintos centros educativos de la Comunidad de Madrid se realizó mediante el acercamiento a las asociaciones más representativas.

De esta forma se realizó una búsqueda de entidades (asociaciones, federaciones de familias, federaciones de madres y padres, etc.) con los que se contactó, de forma previa y personalmente para trasladarles el objeto de la investigación y la petición que formulábamos. Posteriormente se les hizo llegar un escrito explicativo con otro documento solicitando su divulgación entre sus asociados (véase el anexo 3.1)

De la misma forma y a fin de implementar la divulgación de la petición se diseñó un tweet que fue publicado de forma general (citando a usuario de distintas asociaciones de padres de alumnos –APA-, asociaciones de madres y padres de alumnos –AMPA-, Asociación de familias –AFA-, federaciones de asociación de padres de alumnos –FAPA-, Asociación de madres, padres

y tutores de alumnos –AMPTA-, etc.) y enviados, por mensaje privado a las cuentas de twitter previamente buscadas (véase el anexo 3.2).

En este sentido se tuvieron interacciones algo desafortunadas, pues el tweet tuvo respuestas algo provocadoras (véase el anexo 3.4), pero ciertamente enriquecedoras para la investigación. El equipo investigador debe reconocer que el esfuerzo realizado no tuvo la respuesta y el fruto que se esperaba. Se detectó que la mayoría de las cuentas, algunas duplicadas del mismo centro, contaban, en su mayoría, con muy pocos seguidores, poca interacción y muy escasa actualización.

De la misma forma se intentó solventar previamente el problema de navegadores obsoletos al adelantarlo en el contenido de la propuesta de escrito de divulgación.

Plasmamos a continuación la relación de entidades contactadas:

<i>Puesto</i>	<i>Entidad</i>
Presidenta	FAPA GINER DE LOS RIOS
Contacto general.	Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado [CEAPA]
Presidenta	CEAPA
Vicepresidente	CEAPA
Secretaría General	CEAPA
Vocal de Madrid	CEAPA
Contacto general	Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos [CONCAPA]
Presidenta	COFAPA

Cuadro 1.24. Entidades representativas de asociaciones y federaciones de madres y padres con los que se contactó personalmente. Se omite el nombre, teléfono y email por principio ético y protección de datos.

En este sector, dada los escasos, aunque significativos, contacto con los que se contaba y la labor realizada de divulgación mediante la red social de twitter no se realizó una segunda oleada específica.

En el sector de familias, madres y padres de alumnos de enseñanza básica (primaria y secundaria obligatoria) sumó a 13 individuos, lo que supone el 0,0012 % de la población total del sector, con una amplitud temporal que abarcó desde el 19 de octubre de 2021, al 16 de abril de 2022.

Administración al sector de docentes de la enseñanza básica

La divulgación entre los docentes (maestros y profesores) de enseñanzas de educación primaria y secundaria de los distintos centros educativos de la Comunidad de Madrid se realizó, de la misma forma, mediante el acceso a las principales organizaciones sindicales y al Colegio Profesional de docentes.

De esta forma se realizó de forma previa un contacto personal (telefónico o presencial) con aquellos presidentes y representantes de las entidades y sindicatos, tras una búsqueda en línea y personal de representantes, remitiendo un escrito específico posterior con información sobre la investigación con la solicitud de divulgación de un documento entre sus representados o afiliados (véase el anexo 4.1). De la misma forma se intentó solventar previamente el problema de navegadores obsoletos al adelantarlo en el contenido de la propuesta de escrito de divulgación.

Para no entorpecer la investigación se intentó separar esta encuesta de la de los directores y familias para no simultanearla en esos sectores y separarla temporalmente de la promoción en twitter.

Exponemos a continuación la relación de entidades contactadas:

Puesto	Entidad
Representante sindical nacional	Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras CCOO
Representante sindical	CCOO
Responsable	Sección de educación del sindicato USO en Madrid
Representante sindical	UGT
Representante sindical	ANPE
Representante sindical	ANPE
Representante sindical	CSIF
Representante sindical	CSIT
Representante sindical	CGT
Representante sindical	FSIE
Presidente	Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y letras y en Ciencias de la Comunidad de Madrid

Cuadro 1.25. Entidades y sindicatos docentes con los que se contactó personalmente. Se omite el nombre, teléfono y email por principio ético y protección de datos.

La interacción con estas entidades y sindicatos –tanto de la enseñanza pública, como concertada o privado- fue desigual: muchos mostraron su disposición a divulgarla; algunos me remitieron a instancias superiores u órganos de decisiones más generales; y en alguna ocasión se me propuso que formalizara mi afiliación con una entidad concreta para realizar la divulgación entre sus afiliados.

En este sector no se realizó una divulgación en twitter específica, por la experiencia previa provocada en el sector de las familias; y tampoco se realizaron nuevas oleadas por la respuesta recogida de los representantes sindicales.

En el sector de docentes de la enseñanza básica –primaria y secundaria- se consiguieron recoger 38 encuestas, lo que supone el 0,1014 % de la población total del sector, con una amplitud temporal que abarcó desde el 14 de noviembre de 2021, al 16 de abril de 2022.

Administración al sector de responsables educativos

La divulgación entre los responsables educativos: personal de, en su momento, Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía²⁹ con nivel de Subdirector General o superior, y

²⁹ Como ya se ha comentado, el proceso investigador se vio alterado en este sector de forma significativa. La organización de la Consejería con competencias en materia de Educación establecida en el Decreto 288/2019, de 12 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Juventud (BOCM de 14 de noviembre), con acceso el 2 de agosto de 2019 en la url: https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/11/14/BOCM-20191114-2.PDF fue modificada tras el proceso electoral de mayo de 2021 por el Decreto 88/2021, de 30 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la estructura orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid (BOCM de 1 de julio), con acceso el 1 de julio en la url: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/01/BOCM-20210701-1.PDF.

Diputados de la Asamblea de Madrid, miembros de la Comisión de Educación o equivalente, en las legislaturas X, XI y XII (iniciadas en los años 2015, 2019 y 2021) se diseñó mediante la remisión de documentos específicos y personalizados a cada uno de ellos (véase el anexo 5.1).

De esta forma se diseñó un proceso de investigación e indagación diacrónica, iniciado en el año 2015, en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid y en el portal de la Asamblea de Madrid, para elaborar el listado del personal del sector, considerando adecuado mantener a los listados a quienes había cesado en el cargo, por la aportación experiencial que podían aportar. También se realizó el proceso de investigación en entidades universitarias para recabar la información de contacto del personal que había cesado en el cargo y se habían incorporado, en su caso, a sus puestos docentes universitarios. De la misma forma se intentó solventar previamente el problema de navegadores obsoletos al adelantarlo en el contenido de la propuesta de escrito de divulgación.

De esta forma y como se ha apuntado se remitió un escrito específico y personalizado a cada miembro del sector, y a su cuenta de correo electrónico institucional de la Comunidad de Madrid, a la cuenta de la asamblea de Madrid o a su cuenta como docentes universitarios, con información sobre la investigación y con el enlace y el código bidi para el acceso.

Si bien el diseño temporal se circunscribió a periodos concretos, el equipo de investigación realizó distintas oleadas, la última de ellas, el 23 de marzo (véase el anexo 5.2.).

En este proceso investigador se percibieron dos disfunciones de carácter nuclear y muy significativas para el equipo investigador.

La primera de ella fue la instrucción en el Consejo de Dirección de la Consejería de que los altos cargos en activo no cumplimentaran la encuesta³⁰. Este hecho provocó que se tuviera que disminuir significativamente la población del sector (de 85 individuos a 67).

Y la segunda fueron unos correos electrónicos de miembros del sector, en el que se expresaban incompetentes o/y sin conocimientos para participar en la investigación. Estos mensajes llamaron poderosamente la atención al equipo por provenir de responsables de la Consejería de Educación y se han convertido en elementos de reflexión relevantes (véase el anexo 5.3, de forma anonimizada por principio ético y protección de datos). Los correos electrónicos citados fueron contestados personalmente con un escrito personalizado (véase el anexo 5.4).

Finalmente, el número de muestra conseguido en el sector de responsables educativos ascendió a 19 individuos, lo que supone el 28,36 % de la población truncada del total del sector, en una amplitud temporal que abarcó desde el 11 de enero de 2022, al 16 de abril de 2022.

Posteriormente y escasamente cuatro meses más tarde volvió a ser modificada tal y como establece de forma detallada el Decreto 236/2021, de 17 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía (BOCM de 18 de noviembre), con acceso el 18 de noviembre en la url: https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/11/18/BOCM-20211118-1.PDF.

Más tarde, y una vez finalizado el proceso de divulgación y recogida de datos de la encuesta, la estructura fue nuevamente modificada por el Decreto 38/2022, de 15 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se crea la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades (BOCM de 16 de junio), con acceso el 16 de junio en la url:

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/06/16/BOCM-20220616-1.PDF.

³⁰ Esta información llegó al equipo investigador por parte de un alto funcionario de la Consejería, presente en el Consejo, de forma oral.

1.4.3.3. Cronograma final del proceso de divulgación y de recogida de datos

El cronograma de la investigación para la divulgación y recogida de los datos se vio fuertemente condicionado por la situación de crisis sanitario producida por la propagación del virus SARS-COVID 19 y la correspondiente declaración de pandemia.

Esta circunstancia, que ya se ha citado, y las propias incidencias y coyunturas detectadas en el proceso, en especial con los directores de los centros educativos y con los responsables, provocó que el cronograma quedara de la siguiente forma:

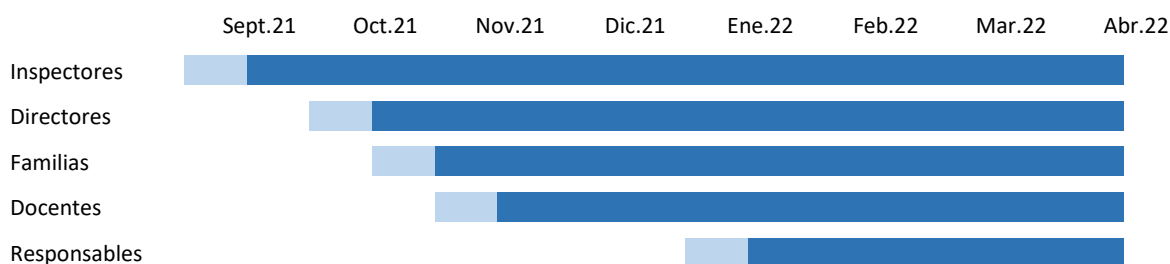


Figura 1.26. Cronograma³¹ finalmente realizada para la divulgación y recogida de datos de los distintos sectores. Figura organizada por quincenas.

1.4.3.4. Respuestas finales obtenidas y tratamiento de datos

Tras el proceso de divulgación y recogida de datos, las encuestas finalmente obtenidas, que han sido adelantados en cada uno de los epígrafes del apartado anterior, de forma más detallada fueron:

Sector	Frecuencia obtenida	Frecuencia válida	Porcentaje	% válido	% acumulado
Directores	217	214	56,9	56,9	56,9
Inspectores	95	95	25,3	25,3	82,2
Familias	13	12	3,2	3,2	85,4
Docentes	38	36	9,6	9,6	94,9
Responsables	19	19	5,1	5,1	100,0
TT	382	376	100,0	100,0	

Cuadro 1.27. Resultados obtenidos y porcentaje válido.

Se puede acceder a los archivos de datos con los resultados de cada uno de los sectores mediante la navegación de los enlaces expuestos en la imagen 10.

En lo relativo a cada uno de los sectores y las variables utilizadas los resultados fueron los siguientes:

³¹ En color claro el proceso de gestión previa; en color oscuro el proceso de divulgación propiamente dicha, que en su caso, incluía distintas oleadas, y de apertura de la herramienta de recogida de datos.

- Sector de directores de centros docentes de enseñanza básica

Respuestas totales obtenidas:

Sector de directores de centros docentes :	214
--	-----

Respuestas obtenidas organizadas por la variable de Dirección del Área Territorial.

DAT	Frecuencia
DAT Norte	46
DAT Sur	42
DAT Este	27
DAT Oeste	36
DAT Capital	63
Total del sector	214

Cuadro 1.28.1. Directores. Resultados obtenidos organizados en la variable DAT.

Respuestas obtenidas por variable de antigüedad en el ejercicio de las funciones directivas.

Antigüedad en la dirección	Frecuencia
De 0 a 4 años	62
De 5 a 8 años	80
Más de 9 años	72
Total del sector	214

Cuadro 1.28.2. Directores. Resultados obtenidos organizados en la variable antigüedad en la función directiva.

Respuestas obtenidas por variable de tipo centro docente donde ejerce la función directiva.

Tipo de centro	Frecuencia
Centro público	201
Centro concertado	13
Centro privado	0
Total del sector	214

Cuadro 1.28.3. Directores. Resultados obtenidos organizados en la variable tipo de centro.

- Sector de inspectores de educación

Respuestas totales obtenidas:

Sector de inspectores de educación :	95
--------------------------------------	----

Respuestas obtenidas organizadas por la variable de Dirección del Área Territorial.

DAT	Frecuencia
DAT Norte	16
DAT Sur	20
DAT Este	12
DAT Oeste	8
DAT Capital	39
Total del sector	95

Cuadro 1.29.1. Inspectores. Resultados obtenidos organizados en la variable DAT.

Respuestas obtenidas por variable de antigüedad en el ejercicio de las funciones inspectores.

Antigüedad en la dirección	Frecuencia
De 0 a 4 años	35
De 5 a 8 años	18
Más de 9 años	42
Total del sector	95

Cuadro 1.29.2. Inspectores. Resultados obtenidos organizados en la variable antigüedad en la función inspectora.

- Sector de las familias (madres, padres y/o tutores) de alumnos de la enseñanza básica

Respuestas totales obtenidas:

Sector de familias de alumnos :	12
---------------------------------	----

Respuestas obtenidas organizadas por la variable de Dirección del Área Territorial.

DAT	Frecuencia
DAT Norte	1
DAT Sur	3
DAT Este	2
DAT Oeste	1
DAT Capital	5
Total del sector	12

Cuadro 1.30.1. Familias. Resultados obtenidos organizados en la variable DAT.

Respuestas obtenidas por variable de centro docente donde tiene escolarizados a su/s hijo/s:

Tipo de centro	Frecuencia
Centro público	11
Centro concertado	0
Centro privado	1
Total del sector	12

Cuadro 1.30.2. Familias. Resultados obtenidos organizados en la variable tipo de centro.

- Sector de docentes (maestros/profesores) de enseñanza básica

Respuestas totales obtenidas:

Sector de docente en ejercicio :	36
----------------------------------	----

Respuestas obtenidas organizadas por la variable de Dirección del Área Territorial:

DAT	Frecuencia
DAT Norte	2
DAT Sur	4
DAT Este	7
DAT Oeste	5
DAT Capital	18
Total del sector	36

Cuadro 1.31.1. Docentes. Resultados obtenidos organizados en la variable DAT.

Respuestas obtenidas por variable de antigüedad en el ejercicio de la función docente:

Antigüedad en la dirección	Frecuencia
De 0 a 8 años	5
De 9 a 18 años	9
Más de 19 años	22
Total del sector	36

Cuadro 1.31.2. Docentes. Resultados obtenidos organizados en la variable antigüedad en la función docente.

Respuestas obtenidas por variable de centro educativo donde ejerce la función docente:

Tipo de centro	Frecuencia
Centro público	22
Centro concertado	13
Centro privado	1
Total del sector	36

Cuadro 1.31.3. Docentes. Resultados obtenidos organizados en la variable tipo de centro.

- Sector de responsables educativos: funcionarios con nivel de Subdirector General o superior y diputados de la Asamblea de Madrid, miembros de la Comisión de Educación

Temporalidad: desde la X legislatura, iniciada en mayo de 2015.

Respuestas obtenidas:

Sector de responsables educativos :	19
-------------------------------------	----

Respuestas obtenidas por variable de antigüedad en el ejercicio de la responsabilidad:

Antigüedad en la dirección	Frecuencia
De 0 a 4 años	12
De 5 a 8 años	4
Más de 9 años	3
Total del sector	19

Cuadro 1.32.1. Responsables. Resultados obtenidos organizados en la variable antigüedad en la responsabilidad.

Para el procesamiento de datos y análisis de la información se han transferido las hojas Excel generadas por la herramienta EUSurvey a distintas bases de datos en la que se han incluido todas las variables e ítems y se han codificado oportunamente con el objeto de realizar el análisis estadístico. Como soporte informático para el análisis estadístico se ha utilizado el software SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences* o Soporte Estadístico para las Ciencias Sociales), versión 22.

Se ha realizado un análisis descriptivo y de frecuencias con el soporte estadístico. Este se corresponde con un procedimiento que nos permite analizar de forma descriptiva las variables categóricas o de escala que estructuraban el instrumento de recogida de datos. Para ello se han construido tablas de frecuencia y sencillos gráficos sobre los que se han representado los datos analizados.

Después de generar los gráficos y las tablas, se han añadido comentarios describiendo y clarificando los principales hallazgos que nos han permitido extraer las correspondientes conclusiones más significativas del estudio. El análisis de los datos y los resultados se presentarán en el capítulo quinto.

1.4.3.5. Decisiones finales con base en las respuestas obtenidas

Con las respuestas encuestas obtenidas y las distintas variables afectadas, el equipo investigador realizó una profusa reflexión para determinar el escenario más adecuado para el estudio de los datos.

Tal y como se ha expuesto en el epígrafe 1.4.2.7, el equipo investigador se había planteado dos posibles escenarios: el primer escenario planteado desde la obtención de muestras específicas para cada uno de los sectores (véase el cuadro 1.21); y un segundo escenario desde la obtención de una muestra global para toda la población total de los distintos sectores (véase el cuadro 1.22).

Los datos obtenidos, la parquedad en algunos de los sectores y la consiguiente escasez en las variables estudiadas determinó al equipo investigador a decantarse por el escenario segundo en el que los distintos sectores se entendían como un todo global sobre el que se buscaba obtener la muestra necesaria.

Pero además y dado que los datos obtenidos en algunos de los sectores eran excesivamente mínimos, se tomó la decisión de centrarse en dos sectores: en el de inspectores de educación y en el de directores de centros educativos de enseñanza básica; sectores a los que denominamos *grupos prioritarios* en la seguridad de que esos grupos eran los que tenían mayor interacción y conocimiento para la consecución del objetivo planteado y que no era otro, como ya se ha establecido, que *estudiar y delimitar el perfil profesional de la Inspección Educativa en la Comunidad de Madrid, definido por el ejercicio de sus competencias*.

El equipo investigador concluyó que los datos de esos dos sectores eran los fundamentales para poder cumplir el objetivo planteado de delimitar el perfil profesional de la inspección educativa en la Comunidad de Madrid, definida por el ejercicio de sus competencias, pues eran los dos sectores que tenían un conocimiento más profundo y práctico de dicho ejercicio: los inspectores por el desarrollo de su propia labor y los directores de los centros educativos, porque son los interlocutores constantes, permanente y mayoritarios de la intervención de los inspectores.

Desde esas decisiones se volvió a calcular el margen de error, aceptando como asumible un margen de error de 5,10 %, para un nivel de confianza del 95 % dentro de la muestra global de los dos sectores o grupos prioritarios.

	TT	Muestra	% de población	% muestra requerida ³²
Inspectores	188	95	50,53 %	29,69 %
Directores	1.705	214	12,55 %	66,88 %
TT	1.893	309	16,32 %	96,56 %

Margen de Error actual para un nivel de confianza del 95 % con la muestra conseguida (309) para los grupos prioritarios.	5,10 %
--	---------------

Cuadro 1.33. Margen de error para un nivel de confianza del 95 % en la muestra conseguida de los grupos prioritarios.

³² La muestra requerida para esta población ascendía a 320 sujetos, calculada para un margen de error del 5 %.

INVESTIGACIÓN MULTIFOCAL

Sin ellos la administración nada ve, nada sabe, nada puede remediar...

[con ellos] Desaparece la inercia, nace la actividad, la emulación, y se entra en una senda de progresivas mejoras, que al cabo paran en la perfección apetecida, o se acercan a ella por lo menos³³.

(Parte expositiva de su Majestad del Decreto de 30 de marzo de 1849).

Capítulo 2

Investigación histórica

El objeto del estudio comparado histórico se centra en las tareas, responsabilidades, encomiendas y funciones asignadas a la Inspección de Educación a lo largo de su historia.

El devenir histórico del Cuerpo de Inspectores de Educación, o del centenario Cuerpo de Inspectores de Educación, como en ocasiones se menciona en núcleos cerrados, ha contado con numerosos estudiosos e investigaciones. Ello proporciona un material de gran riqueza en comparación con otros cuerpos de unidades de control y evaluación, que facilita el estudio histórico, con ciertos elementos comparados. Dichos estudios, como fuentes secundarias, muestran en su interacción una gran importancia en lo relativo al diálogo entre ellas, proporcionando de esta forma un corpus de carácter epistemológico de gran valor y riqueza para aquellos que se acercan a su historia, como elemento nuclear de la propia historia de nuestro sistema educativo y para aquellos que, desde los estamentos docentes, pretenden acercarse técnicamente con la posible inquietud de acceder a dicha unidad técnica administrativa.

³³ El 2 de abril de 1849 se publicó en la Gaceta de Madrid el Real Decreto de 30 de marzo de 1849 “reformando la organización á las escuelas normales de instrucción primaria, y la necesidad de crear Inspectores para este ramo de enseñanza” [sic] (Gaceta de Madrid: núm. 5315, de 02/04/1849, páginas 1 a 2 del Departamento: Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas; con acceso el 2 de agosto de 2019. Url: <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1849/5315/A00001-00002.pdf>).

La norma fue publicada, siendo Juan Bravo Murillo ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, pero la doctrina considera que la redacción literal pudo corresponder a Antonio Gil de Zárate, Director General de Instrucción Pública.

En necesario mencionar que en este estudio ha sido esencial la revisión y disfrute documental de una forma directa, cuando se ha podido acceder, o de una forma indirecta, si no ha sido posible, de multitud de fuentes, entre las que destaco, los *Documentos para la historia escolar de España* de Lorenzo Luzuriaga (1916, 1917); *la Inspección de primera enseñanza y la educación de la generación nueva* de Francisca Bohigas (1941); *la inspección de enseñanza primaria: Historia y funciones* de Adolfo Maíllo (1967); *la Historia crítica de la Inspección escolar en España* del mismo autor (1989); La tesis doctoral de Eduardo Soler Fierrez, que bajo el título *La inspección en las distintas concepciones y sistemas pedagógicos* defendió en la Universidad Complutense (1993); las perlas descubiertas en la *Hª de la Educación, una visión hasta lo local* de Manuel Garrido Palacios (2005); *La Historia de la Inspección de primera enseñanza en España* de nuestra querida Mª Teresa López del Castillo (2013) que editó y publicó el propio Ministerio de Educación, poniendo en valor la riqueza aportada por sus miembros en los entonces, más de ciento sesenta años de existencia; *los antecedentes remotos de la inspección educativa española durante el antiguo régimen* de Alexandre Camacho (2015); La pareja de estudios de Montero Alcaide (2021a y 2021b): *La Inspección de Educación en España. Hasta aquí hemos llegado (I)* y *La Inspección de Educación en España. Negro sobre blanco (II)*; y por último, pero no sólo, el relevante aporte documental que ha supuesto *la investigación sobre la historia de la inspección de educación en España. Balance y perspectivas* de Castán (2021b).

Todo lo aportado por estos autores ha querido quedar sintetizado en el panel *El ADN de la Inspección de Educación* de Lozano (2019) (véase la imagen 1.) que fue presentado en el XX Encuentro Nacional de Inspectores de Educación, celebrado en Sevilla.

Veamos ahora y organizado en las dos grandes etapas: etapa prenormativa y etapa normativa los pulsos que ha vivido la inspección de educación a fin de poder escudriñar la funciones, tareas, encomiendas y ocupaciones designadas, así como la denominación concreta que se les asignaba a fin de poder realizar el estudio histórico, con ciertos elementos comparados al yuxtaponer las tareas y responsabilidades asumidas con las funciones actuales, que se había propuesto como objetivo específico.

El cronograma de esta evolución se puede ver, de forma sintética y en lo relativo a la etapa prenormativa, en las imágenes 3 y 4; y en lo relativo a la etapa normativa, en las imágenes 5, 6, 7, 8 y 9. Esos elementos visuales, junto a la necesaria yuxtaposición de funciones, que se ha realizado en las tablas 2.1.1 - 2.2.4.2, muestran un elemento comparado de gran riqueza, que será igualmente citado, de forma concreta, en su epígrafe correspondiente.

2.1. Etapa prenORMATIVA

2.1.1. Las Cédulas reales

Aunque existen escritos que sostienen que el origen de la inspección viene a coincidir con el origen de las sociedades y se encuentran antecedentes de las inspecciones en la Antigüedad, señalando que en el antiguo Egipto, Grecia, Roma e India existían funcionarios estatales encargados de controlar el rendimiento de las escuelas (Ramírez Aísa, 2006b) citando a Ballesteros y Usano, la doctrina asumida por los inspectores de educación remontan sus orígenes a distintas cédulas reales promulgadas a partir del siglo XIV. Podemos afirmar que dicha aseveración dista de corresponderse a la realidad histórica, como han concluido distintos autores. No obstante, debemos considerar, en su estricto desarrollo diacrónico, los deseos o desvelos por fundamental la labor realizada en las más altas iniciativas y en las más antiguas tradiciones; es, al respecto, muy significativo lo reseñado por Ramírez Aísa (2006a, 2006b).

Montero Alcaide (2021) afirma que *adentrarse en el proceloso mundo de investigar, descubrir y perfilar los antecedentes e inicios de cualquier iniciativa humana es una ardua tarea sugerente sin duda, pero arriesgada, pues las distancias, el afecto, la falta de fuentes fiables y el deseo que anclarlas en las más profundas y altas justificaciones pueden desdibujar y alambicar el trabajo, convirtiéndolo más en una iniciativa novelada que en un riguroso trabajo de investigación, aunque, como finaliza, puede orientar hacia sugestivas invenciones poco ajustadas a la realidad.*

Como ya se ha apuntado, se puede ver el cronograma de los hitos de las cédulas y de las entidades creada y que han configurado los antecedentes de los inspectores de educación de una forma sintética en las imágenes 3 y 4.

Consideramos adecuado iniciar este epígrafe señalando el significado que la Real Academia de la Lengua otorga a la entrada cédula real³⁴.

Cédula real: En el Antiguo Régimen, disposición de gobierno dictada por el rey con intervención de su consejo. Podía darse de oficio o a instancia de parte y fue la forma habitual con la que el rey se dirigía a los órganos colegiados y por la que se resolvían habitualmente los despachos de la cámara. No siempre contenían mandatos, sino que también las había de ruego o de creencia.

Por su parte la definición del *Diccionario de la lengua castellana compuesto por la Real Academia Española, reducido a un tomo para su más fácil uso* de D. Joachin Ibarra (1783), reza:

Cédula Real: Despacho del Rey Expedido por algún tribunal superior, en que se concede una merced, ó se toma alguna providencia. Su cabeza es_ El REY, sin expresión de más dictados: la firma su Magestad. El secretario del tribunal á que pertenece pone la refrendara menor: se rubrica por algunos ministros, y por lo regular se entrega a la parte. Regium diploma.

Dicha entrada se equipara con el término *pragmática*³⁵ y son por tanto iniciativas al más alto nivel que evidencian el deseo de las más profundas y altas justificaciones y que, en las mismas

³⁴ Tomado del Diccionario panhispánico del español jurídico. Acceso el 2 de agosto de 2019 de la url: <https://dpej.rae.es/lema/c%C3%A9dula-real>.

³⁵ El propio *Diccionario de la lengua castellana compuesto por la Real Academia Española, reducido a un tomo para su más fácil uso* de D. Joachin Ibarra, define la entrada *pragmática* como:

PRAGMÁTICA. S. F. La ley, o estatuto, que se promulga, ó publica para remediar algún exceso, abuso, o daño, que se experimenta en la república. Pragmática. [sic]

proporciones, evidencian un afecto quizá desmesurado, pero también fundamentado en mimbres históricos y en intangibles más o menos sólidos.

No podemos obviar que la existencia de una unidad de control y supervisión educativa debe estar vinculada a la existencia, per se, de un sistema educativo con la legitimidad y desarrollos que lo configuran: sus instituciones, grados o niveles, incluso su programa de estudios, como guiño de un incipiente currículo; la necesaria capacitación de los docentes y muchos otros elementos que el devenir histórico y la evolución social configurarían en lo que denominamos como enseñanza reglada y sistemática. No es aceptable en este contexto la configuración de una inspección de educación en el último tercio del siglo XIV cuando ni existía un sistema educativo en España y las iniciativas puntuales educativas se encontraban circunscritas a escuelas externas o internas de los monasterios o a las creadas por algunos municipios.

De esta forma Montero Alcaide (2021) cita a Lorenzo Luzuriaga, que en dos volúmenes publicados en 1916 y 1917 por la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Centro de Estudios Históricos, compila *Documentos para la historia escolar de España*, y entre dichos documentos aparece la cédula de Enrique II, dada en fecha cercana a 1370 (véase la tabla 2.1.1), junto a otras dos. En ellas se descubre una petición de maestros de Granada, a fin de solicitar la ampliación de sus privilegios, según documenta Luzuriaga (1916, p. 1), en un expediente de la Sala de Gobierno del Consejo de Castilla, custodiado en el Archivo Histórico Nacional.

En dicho expediente, que desglosa ampliamente Luzuriaga se constata, «por tener relación con la petición de los maestros», la cédula real citada de Enrique II junto a otras dos, de Felipe II y de Enrique III, recogidas las tres en una copia de 1717, realizada en un cuaderno, en cuya portada se indica:

Este es un traslado, bien, y fielmente sacado de una Real Provisión de los Señores Presidente, y Oidores de la Real Cancillería de esta ciudad de Granada, en que están insertos los privilegios concedidos a los Maestros del Insigne Arte de enseñar a leer, y escribir, por los Señores Reyes Don Enrique II, Don Fernando, y Doña Isabel, Señor Emperador Carlos V, Don Felipe II y Don Felipe III mandados guardar ahora nuevamente por su Majestad, y dichos Señores su Presidente, y Oidores en el año de 1707, y sobre carta de la dada, para que esta dicha ciudad los guardase, y testimonio de su cumplimiento...

Es por ello que, en palabra de Montero Alcaide, hay que considerar los distintos periodos históricos de los reinados a los que hace referencia: –Enrique II (1369-1379), Fernando e Isabel (1474-1504), Carlos V (1516-1566), Felipe II (1556–1598) y Felipe III (1598–1621)–; es decir un recorrido histórico de dos siglos y medio, con numerosas supuestas copias y lógicas alteraciones que pudieran variar el contenido y sentido original a partir de la primera de Enrique II.

Por su parte el citado Diccionario panhispánico del español jurídico lo define como (con acceso el 2 de agosto de 2019 desde la url: <https://dpej.rae.es/lema/pragm%C3%A1tica-o-pragm%C3%A1tica-real>).

Hist. Disposición dada por el rey en virtud de su poder legislativo.

En Castilla se promulgaron pragmáticas sobre temas muy diversos con la fórmula «como si hubieran sido dadas en Cortes», en el sentido de ser consideradas con rango superior. Fue la forma habitual de legislar, desprendiéndose de las Cortes, a partir del siglo XIV o principios del siglo XV. En la Corona de Aragón las podía promulgar tanto el rey como su lugarteniente o gobernador y versaban sobre las materias no reservadas a las Cortes. Se denominan a veces reales provisiones o cartas de provisión.

En la cabecera del expediente citado se especifica:

Premiencias del Nobilísimo Arte, y leyes hechas a los Maestros examinados del Arte de enseñar a leer, y escribir, por las Majestades de los Señores Reyes Don Enrique II en Toro, año de mil y trescientos y diez y nueve. Y el Rey Don Fernando en Toledo, año de mil y cuatrocientos y nueve. Y el Emperador Carlos V las mandó guardar, y publicar en Madrid año de mil quinientos y treinta y cuatro. Y Rey Don Felipe II que también las mandó guardar y publicar con una cédula, que añadió por el año de mil y quinientos y setenta y seis; y el Rey nuestro Señor Don Felipe III (que Dios guarde) las hizo publicar con una cédula, que añadió en veinte de Noviembre del año de mil seiscientos y nueve, que son como se sigue...

Un sencillo estudio histórico de este compendio concluye que la fecha asignada a la cédula de Enrique II (1319) era claramente errónea, pues dicho soberano nació en 1334; de la misma forma que la asignación realizada al rey Fernando (1409) también resulta desacertada o errónea, pues este nació en 1452.

Aunque se hacen atribuciones para situar la fecha de la real cédula de Enrique II en 1370, no dejan de ser suposiciones, de carácter apócrifo, a la cédula; aunque es reseñable que en la cédula de Felipe III –mejor fechada históricamente en 1609- se menciona como antecedentes a la cédula citada de Enrique II.

No podemos dejar de reproducir el contenido de la cédula tal y como figura en la obra de Luzuriaga (1916, pp. 5-6) citada por Montero Alcaide (2020) con algunos ajustes del lenguaje para hacerla más comprensible:

Cédula de Enrique II, Rey de Castilla (1369-1379)

[1] Por cuanto en los nuestros Reinos y Señoríos no se puede pasar sin Maestros, que enseñen las primeras letras, por ende ordenamos, y mandamos, que los Maestros de Escuela sean examinados en el nuestro Consejo, y Corte, y de esta manera hayan, y gocen las leyes, y preeminencias, que deben hacer, y tener la enseñanza de muchachos; y siendo suficiente, el nuestro Consejo les dé las cartas, y leyes, y letras de examen, para que tengan Escuela, y enseñanza en cualquiera parte, y Lugar de los nuestros Reinos, y Señoríos, como son Ciudades, Villas, y Lugares, y Pueblos de todos nuestros Reinos, donde tuvieren Escuela, y enseñanza para que libremente puedan usar sus Artes, y ciencia. Y mando a todas mis Justicias de todos mis Reinos, y Señoríos, que de las letras que se les dieren, han de incundir en lo siguiente. Que habéis de saber si es fidalgo, Cristiano viejo, que no ha de tener mezcla de otra mala sangre, como es de Moro, Turco, o Judío, que ha de ser de buena vida, y costumbres; y fallando todo esto, vos mando les deis las cartas, porque no siendo así, no podrá gozar de ninguna de ellas, si no antes vos mando le castigáis, y no consistáis tener enseñanza ninguna, pena de la nuestra merced, y de graves penas pecuniarias, que os impongo desde luego. Y porque es nuestra voluntad, que los Maestros en todos los lugares de nuestros Reinos, y Señoríos, las Justicias, ni otras personas en su lugar, no les impidan la dicha enseñanza, vos ordenamos, y mandamos, que la casa que el Maestro eligiere para su menester, y enseñanza, no se la quitéis, ni hagáis quitar, antes la habéis de dar, y quitar para él, dando, y pagando lo que vale la renta de ella, y que sea en parte pública.

[2] Ítem, vos ordenamos, y mandamos, que los Maestros examinados no sean presos, ni molestados por ninguna causa, ni razón, ni le llevéis a la cárcel pública, sin dar primero cuenta a nuestro Consejo, y tan solamente, si fuere causa de muerte le prended, y dad su casa por cárcel, y poned pena, no que quebrante, y le remití a nuestra Casa, y Corte, y no habéis de conocer de esta causa, ni de las demás, pena de mil doblas de oro, el que lo contrario hiciere, y desde luego para entonces vos damos por condenados, aplicándolo

para nuestra Casa, y Corte, si no que hayan, y gocen todas, y cualesquiera preeminencias, y franquezas de que gozan los fijosdalgos, por cuanto están enseñando nuestros hijos; y en ser presos, y molestados por ejecuciones, y otras usas, o plata, u oro, que deben, non paran, ni harán Cristianamente sus oficios, por ende vos lo mando so la dicha pena contenida en esta ley.

[3] Ítem, ordenamos, y mandamos a las nuestras Justicias, que si los Maestros tuvieran algún pleito, lo hagáis ver el primero, y le repartáis sin detenerle, ni molestarle, como vos lo tengo mandado, y a las Justicias, y Escribanos vos mando salgáis a recibir a los Maestros tres pasos de vuestras Audiencias, y deis asiento, y le oigáis, y guardéis justicia, so la dicha pena impuesta de las mil doblas de oro a los rebeldes, que lo contrario hicieren contra las nuestras leyes, y pragmáticas, ni les llevéis derechos en causa ninguna, sino antes les haced pagar.

[4] Ítem, vos ordenamos, y mandamos, que los tales nuestros Maestros puedan tener armas defensivas, y ofensivas, públicas y secretas, para en guarda de sus personas, y puedan traer cuatro Lacayos, o esclavos con espadas, y tangan Caballos de armas, como las han, y tienen, los Fijosdalgos, so la pena de las mil doblas de oro a las personas, y Justicias, que contra estas leyes fueren.

[5] Ítem ordenamos, y mandamos, que las nuestras Justicias tengan nuestros Veedores de Ciencia, y conciencia, para que juntos con las Justicias examinen, y den cartas, y para que vayan con los Justicias cada cuatro meses, y vean la enseñanza de los muchachos, y las letras de las Escuelas, y vean lo que enseñan; y no siendo suficiente, le quitad, y le poned pena de seis mil ducados no usen más la tal enseñanza.

[6] Ítem, vos ordenamos, y mandamos, que al que hubiere de gozar estas leyes, y pragmáticas, han de ser examinados en el nuestro Concejo, y el que no lo fuere no podrá gozarlas, si no antes le castigad, y poned penas de mil ducados, no tengan enseñanza, por cuanto no es examinado, si no que los Maestros examinados den aviso a las Justicias para que lo remedien; y vos mando, sobre todas la penas, no consientan tal enseñanza, sino que los prendáis, y castiguéis conforme a la ley impuesta.

[7] Ítem, vos ordenamos, y mandamos, que los Maestros examinados hayan de saber rezar la Doctrina Cristiana, conforme al Santo Concilio, que lo dispone, porque de no saberla se colegirá muy grande malicia; y por esta razón tenemos dispuesto, hayan de ser los Maestros Cristianos viejos, y de buena vida, y costumbres.

[8] Ítem, vos ordenamos, y mandamos, que los Maestros ante todas cosas no sean quintados: y si cayere el quinto en su casa, es nuestra voluntad que pase adelante, sin que sean molestados, sino que se pase dejando libre al Maestro en su casa quieto, y pacífico; y concedo, que no le hagáis salir por fuerza en actos públicos, y alardes, si él de su voluntad no fuere.

[9] Y vos ordenamos, y mandamos, que de ninguna manera non consintáis, que en las casas de los tales Maestros no se hayan de alojar Compañías, ni Soldados de repartimiento.

[10] Y es nuestra voluntad gocen de estas preeminencias, y libertades, concedidas al Arte de enseñar a leer, y escribir, y que gocen de todos los privilegios dichos; y en esto, como en todo lo demás, no vais ni consistáis le vayan, ni pasen, porque vos castigarán, como dicho es.

[11] Ítem, por hallarnos bien servidos, y pagados de nuestros Maestros, que nos enseñaron, así en estos, como en los que fueren en adelante, les concedemos, que estando en acto de no poder enseñar, y hayan enseñado cuarenta años la Doctrina Cristiana, es nuestra

voluntad, que gocen de todas cuantas gracias, y privilegios gozan los Duques, Marqueses, y Condes de nuestra Casa, y se les dé para su sustento, lo que hubieren menester cada año, y de ser su voluntad el pedir la cantidad que quisiere en la nuestra Casa y Corte, haciendo información, de como ya no usa su Arte, y enseñanza, que no está en acto para ello; y ha de durar todos los días de su vida, y que viva, y no habéis de hacer más prueba, ni averiguación de los que vos mando, sin exceder en cosa alguna, pena de las mil doblas de oro, que vos tengo impuestas; y no vos haremos ninguna merced, sino que seréis castigados de Nos, y de nuestros sucesores, que fueren, y vinieren, según va referido, e instituido, y mandado.

De la misma forma y a fin de aportar las restantes fuentes primaria, reproducimos el resto de cédulas.

La cédula de Felipe II (véase la tabla 2.1.2), incluida junto a la anterior de Enrique II en el cuaderno de 1717 y citada por Montero Alcaide (2020), se encuentra fechada el 15 de enero de 1573 y reconoce que *no se guardan las supuestas leyes y preeminencias concedidas a los maestros examinados*, por lo que el Rey ordena a sus justicias que las hagan cumplir. Los veedores, dispone la misma cédula, deben ser elegidos por los justicias en las Salas de Cabildo, a fin de cumplir sus funciones, entre las que se les asigna la de revisar los libros de lectura en las escuelas.

El texto literal, recogido por Luzuriaga (1916, pp. 12-13) y citado por Montero Alcaide (2020) es el siguiente:

Real Cédula de Felipe II (1573).

El Rey. Por quanto nos fue hecha relación, que aunque estaban dadas, y establecidas leyes, y preeminencias que no se guardaban, y que los Maestros eran molestados, y para que no lo sean, ordenamos a todas, y cualesquier Justicias las hagan guardar, y cumplir en todos nuestros Reinos, y Señoríos, y que hayan, y gocen, [las que] sus antecesores las han gozado, guardando las honras, y preeminencias, y franquezas que gozan las Escuelas, Universidades de nuestros Reinos, sin exceptuar cosa alguna; mando a mis Justicias las hagan guardar, pena de dos mil ducados de Castilla, aplicados para nuestra Cámara: y asimismo mandamos a todas las Justicias de nuestros Reinos, guardándolas so graves penas; y que elijan en las Salas de Cabildo nuestros Veedores, para que las Justicias visiten las Escuelas, para ver si los tales Maestros hacen bien su oficio, si se reza la Doctrina Cristiana, y en qué libros leen, y si son verdaderos, o no, y si son los tales aptos para dicho Arte, y si son examinados; y mandamos, que ante todas las cosas, el que se examine, además de no tener mezcla de mala sangre os ha de constar ser Cristiano viejo, y no ha de ser penitenciado por el Santo Oficio de la Inquisición, ni de los que nuevamente convertidos, y constando lo dicho, hayan, y gocen todas, y cualesquier gracias, y privilegios, y mercedes, que los hubieren hecho mis antepasados presentes y venideros. Todo lo cual cumpláis, y guardéis según dicho es, pena a los unos, y otros de seis mil ducados de Castilla. Y mando se publique en todos mis Reinos, por quanto es así mi voluntad. Dada, y publicada en Madrid a quince de Enero del año de mil quinientos y setenta y tres. Yo el Rey. Por mandado de su Majestad. Antonio de Eraso, Secretario [sic].

Galicia (2016, 27) cita otra real cédula de Felipe II fechada en 1588 (véase la tabla 2.1.3), desde el estudio de la obra de García Barbarín (1915), para documentar las visitas de *los justicias* a las escuelas y a los maestros examinados y aprobados:

Y porque los unos y los otros hagan lo que deben y son obligados mando que las Justicias de estos Reinos, cada una en su jurisdicción, visiten cada año una vez las escuelas y los

maestros examinados y aprobados, para ver si enseñan bien y en el cuidado que deben, conforme a lo por esta mi carta mandado la cual quiero que tenga fuerza de ley.

En último lugar completa el cuaderno citado de 1717 la cédula de Felipe III, fechada el 14 de noviembre de 1609. En sus inicios aparece el nombre del maestro examinado, Baltasar Pacheco, que también recuerda las preeminencias y privilegios no guardados ni cumplidos. Aparece expresa la referencia a la cédula de Enrique II, así como la petición y requerimiento oportuno.

Su contenido a partir de Luzuriaga (1916, pp. 17-18), es el siguiente:

Real Cédula de Felipe III (1609).

El Rey. Por cuanto por parte de vos Baltasar Pacheco, Maestro examinado del Arte de enseñar a leer y escribir, Nos fue fecha relación diciendo, que desde el Rey Don Enrique II mi antecesor, hasta hoy, todos mis antecesores habían establecido, y dado preeminencias, y privilegios, y leyes, Cédulas Reales para que las Justicias de mis Reinos las guardasen; y aunque vos tenéis dichas Ordenanzas, no os las guardan, ni cumplen con lo que les está mandado por mis antecesores, y me pedisteis, y suplicasteis os diese una Cédula Real, inserta en ellos, para que se os guardasen las honras, y privilegios, que en ella se contienen. Y por Nos visto, os la mandamos, y que se os guarden dichas Ordenanzas, y leyes impuestas a vuestro Arte, guardando de ellas, como lo está mandado por mis antecesores, sin exceptuar ninguna de ellas, sino que antes os las damos más plenas, y que se os guarden todas las que se les guardan a las Escuelas, Universidades de nuestros Reinos, y si adelante se le concedieren otras algunas, se conceda también a los Maestros examinados de todos mis Reinos, y demás os concedemos todas aquellas que mis sucesores pueden dar a los tales Maestros, desde ahora para entonces; y mando, que se publiquen en todos mis: Reinos, y Señoríos, para que con esto cumplimos, y pagamos vuestra Doctrina, y enseñanza: y mandamos a los de nuestro Consejo, Presidente y Oidores de las nuestras Audiencias, Alcaldes, y Alguaciles de nuestra Casa, y Corte, de nuestras Cancillerías, y otras cualesquier Justicias de todas las Ciudades, Villas, y Lugares, y Pueblos de nuestros Reinos, y Señoríos, y a cada uno en su jurisdicción, así los que ahora son, como los que serán de aquí adelante, les guarden, y cumplan esta nuestra carta, y merced, que así hacemos; y contra ella no vayan, ni pasen, ni consientan ir, ni pasar en manera alguna, so pena de nuestra merced, y de diez mil ducados de Castilla más de los impuestos por mis antecesores, aplicados para nuestra Cámara. Fecha en Madrid a catorce de Noviembre de mil seiscientos y nueve años. Yo el Rey.

Por mandado del Rey nuestro Señor. Don Luis de Salazar, Secretario.

A estas cédulas, aparecidas en el cuaderno citado, es necesario añadir la de Felipe V. Una vez que se constituyó la Hermandad de San Casiano en 1642, como congregación gremial de los maestros de la Corte, fue esta Hermandad de maestros, un siglo después y representados por los hermanos mayores de la propia Hermandad, quienes pidieron en 1740 al Consejo los privilegios que aparecían en la cédula de Enrique II, no aplicados durante siglos al parecer porque no se había pedido su cumplimiento.

A esta petición accedió Felipe V en 1743 mediante la Real Cédula que reproducimos, transcribiendo a Cotarelo (1916). Este autor entiende las razones del Consejo para atender la petición, *que viendo que los pobres maestros sólo querían consideración y honra para su clase y aunque, ni con mucho, se les concediese lo que rezaban los privilegios, fingiesen creer en tales documentos (rehuyendo cuestiones y pruebas) para fundar una resolución que a nadie perjudicaba* (p. 181).

Es importante reseñar que en el punto V, se asienta que haya *Veedores*, en la Congregación de San Casiano, *para cuidar y celar el cumplimiento de las obligaciones de los maestros*. A tal fin, el

Consejo los elige entre los profesores más antiguos y beneméritos de la corte, a los que se da el título de Visitadores.

Real Cédula de Felipe V (1743).

EL REY. Por cuanto por parte de los Hermanos mayores, Examinadores y demás individuos maestros de primeras letras de la villa y corte de Madrid, se me ha representado que en todos tiempos y entre todas las naciones se ha considerado el arte que profesan por utilísimo a las repúblicas, por ser el origen de todas las ciencias y dirigirse a los primeros rudimentos de la juventud, y por cuyo motivo le han practicado y enseñado los sujetos más condecorados en santidad, dignidad y letras: como asimismo teniendo presente el beneficio que se les seguía de que hubiese maestros que con todo primor y celo instruyesen a la puerilidad, se dignaron los señores reyes D. Enrique II, D. Fernando y D.^a Isabel, el Emperador Carlos V, Don Felipe II y III, mis predecesores, concederles especiales preeminencias y exenciones que mandaron se les guardasen en todos sus reinos, las que al presente estaban sin observancia. Y respecto de que para que los maestros que hoy ejercen el expresado arte sean los más idóneos y distinguidos se habían dado por el mi Consejo varias providencias, así en orden a las informaciones que debían hacer, nombrar los Examinadores y declarar las circunstancias que han de concurrir en los que se habilitaren de tales maestros, cuyos expedientes paraban en la Escribanía de Cámara de gobierno del mismo Consejo: mediante lo cual y haberme dignado en mi feliz reinado proteger y amparar a los profesores de facultades, artes y ciencias, las que, por esta razón, se hallaban en los mayores adelantamientos, me suplicaron fuese servido mandar que todos los que se aprobasen de maestros de primeras letras por los Examinadores de mi corte para dentro y fuera de ella y obtuvieren título de tales del mi Consejo gozasen las preeminencias y exenciones que previenen las leyes de estos mis reinos y que están concedidas a los que ejercen artes liberales; con cuyo impulso se aplicarán sus profesores al mayor adelantamiento y perfección de este arte tan preciso y de cuyas resultas sería sumamente interesada la causa pública.

Y habiéndome servido remitir esta instancia al mi Consejo para que consultase su parecer, estando en él se acudió por parte de los Hermanos mayores y demás individuos de la Congregación de San Casiano, maestros de primeras letras, haciendo relación de lo referido y con presentación, para mayor justificación de lo representado, de diferentes instrumentos y documentos que las comprobaban y un papel arreglado a derecho, en que se expresan los motivos para deber gozar de dichas exenciones.

Lo que visto por los del mi Consejo, con lo expresado por el mi Fiscal y que me hizo presente en consulta de 17 de Diciembre del año próximo pasado, registrándose de uno y otro la más benigna liberalidad con que mis predecesores honraron el referido arte y sus profesores, dándoles el goce de todas las preeminencias concedidas a las universidades mayores y los especiales distintivos de que gozaban los hijosdalgo notorios, aumentando a los de este arte el particular privilegio de no poder ser presos por causa que no fuere de muerte, distinguiéndolos, en este caso, con que la prisión fuese su casa propia; inhibiendo a las justicias de fuera de la corte el conocimiento aun de tales causas que con el reo debían remitirse a ella, hallándose estas exenciones publicadas en la corte, por mandado de los señores Reyes Católicos, Emperador Carlos V, Don Felipe II y III, pudiendo creerse impelieron aquellos reales ánimos los repetidos ejemplares que de iguales privilegios manifiestan los documentos presentados, siendo notorios en las disposiciones del derecho común, historias y autores políticos que, agradecidos a los maestros que doctrinaron su pericia, emplearon el trabajo de sus plumas en describir las utilidades y excelencia de este arte y las justas remuneraciones que en todos imperios han debido a los príncipes.

Por estos motivos he venido a condescender a la instancia de los Hermanos mayores, Examinadores y demás individuos del arte de primeras letras, arreglado a los capítulos siguientes:

I. Siendo el primero que los que fueren aprobados para maestros de primeras letras por los Examinadores de la mi corte para dentro o fuera de ella, precediendo los requisitos prevenidos por Ordenanzas y Ordenes del mi Consejo, gocen de las preeminencias, prerrogativas y exenciones que previenen las leyes de estos mis reinos y que están concedidas y comunicadas a los que ejercen artes liberales, con tal que se ciñan, en el goce de estos privilegios, a los que corresponden al suyo, conforme a derecho, y a lo establecido por las mismas Ordenanzas y acuerdos de la Hermandad de San Casiano, aprobados por el mi Consejo; lo que sólo se observe y entienda con los que hubieren obtenido título expedido por él para el ejercicio de tal maestro, así en la corte como en cualesquier ciudades, villas y lugares de estos mis reinos.

II. Que para ser examinados y aprobados para maestros de primeras letras deben preceder las diligencias dispuestas por las Ordenanzas y acuerdos de la Hermandad, aprobados por el mi Consejo, especialmente el que se halla inserto en Provisión de los veinte y ocho de Enero de mil setecientos cuarenta, que quiero se guarde y cumpla en todo lo que no se oponga a esta mi Cédula; debiendo la Hermandad celar que todos los que entraren en ella sean habidos y tenidos por honrados, de buena vida y costumbres, cristianos viejos, sin mezcla de mala sangre u otra secta; con apercibimiento que a los maestros que faltaren y contravinieren a esto se les castigará severamente.

III. En consecuencia de las preeminencias y prerrogativas referidas concedo a los maestros examinados y que obtuvieren título de mi Consejo (como queda expresado) para esta corte o fuera de ella, en sus personas y bienes y en ellas a quien por derecho se comunican semejantes privilegios, todas las exenciones, preeminencias y prerrogativas que personalmente logran y participan, según leyes de estos mis reinos, los que ejercen artes liberales de la carrera literaria, así en quintas, levas y sorteos, como en las demás cargas concejiles y oficios públicos, de que se eximen los que profesan facultad mayor y que no estén derogadas por pragmáticas.

IV. Que los maestros aprobados y con título del mi Consejo no puedan ser presos en sus personas por causa alguna civil, si sólo en lo criminal, conforme a las prerrogativas que personalmente gozan los que ejercen artes liberales.

V. Que haya Veedores en dicha Congregación que cuiden y celen el cumplimiento de la obligación de los maestros; y a este fin se elijan por el mi Consejo personas en la mi corte de los profesores más antiguos y beneméritos, dándoseles por él el título de Visitadores.

VI. Que todos los maestros que hayan de ser examinados en este arte sepan la Doctrina cristiana, conforme lo dispone el Santo Concilio.

En cuya conformidad mando (etc.). Fecha en San Ildefonso a 1º. de Septiembre 1743 años.

— Yo el Rey.

La vigencia de esta real cédula se encuentra documentada por Cotarelo (1913, p. 183), toda vez que fue confirmada por otra cédula de Fernando VI, fechada el 13 de julio de 1758, por Carlos III, el 18 de mayo de 1762, y por Carlos IV, el 30 de enero de 1790; ya a petición de los hermanos mayores de la Hermandad de San Casiano o del Real Colegio Académico que la substituyó.

Confirmada la cédula de Felipe V (1743) por la de Carlos IV (1790), se imprimió un folleto con el título de:

Reales privilegios concedidos por los señores reyes católicos de España a los maestros de primeras letras, con los requisitos que han de concurrir en los que hayan de obtener Título de Maestro por el Real y Supremo Consejo de Castilla. Confirmados por la Majestad de nuestro Monarca Don Carlos Quarto, a solicitud del Real Colegio Académico de Maestros de esta Corte. Año (Escudo real.) 1790. Madrid: En la imprenta de Don Antonio Espinosa, calle del Espejo.

Es el mismo Carlos IV en 1791, con los antecedentes del reinado de su padre Carlos III, quien crea ocho Escuelas Reales en Madrid y establece que tendrán como *visitador e inspector*, al director de una de ellas, D. Juan Rubio. En esta disposición real aparece una de las primeras referencias a la denominación del título de *Inspector*.

Si bien Luzuriaga (1916) citado por Montero Alcaide (2020), analiza los pormenores significativos de la cédula de Enrique II, poniendo en duda su autenticidad y la veracidad de las confirmaciones en las cédulas posteriores, estas mismas conclusiones son corroboradas, por una parte, por Adolfo Maíllo (1989), quien presenta la opinión de que *esa Cédula es una invención de algún foliculario o falsario del siglo XVIII, que respondía, quizás, a noticias vagas procedentes del siglo XIV, pero sin saber a quién correspondía atribuirles* (p. 24), señalando como evidencia clara para negar la autenticidad de la cédula, la inexistencia del término *veedores* en el siglo XIV; por otra parte, López del Castillo (2013) asevera que la historiografía moderna ha establecido el carácter apócrifo de tales documentos, empeñados en confirmar supuestos privilegios establecidos por Enrique II para los maestros.

En la misma línea se pronuncian Camacho (2015) o Paredes (2019), considerando las dudas sobre estos antecedentes históricos y el carácter fidedigno de algunas de las disposiciones reales.

Consideramos como conclusivo el análisis de Cotarelo (1916), en fecha coetáneas a las de Luzuriaga y citado igualmente por Montero Alcaide (2020) que con rotundidad señala como falsas las cédulas por los siguientes argumentos:

Inicia Cotarelo y Mori (1916) su análisis afirmando que la concesión de privilegios y concesiones a los maestros no tuvo sentido hasta que en 1641 se constituyera la Congregación de San Casiano, dando entidad jurídica a la agrupación legalmente establecida de maestros, como ocurría en los entornos gremiales de otros oficios y desempeños.

Señala igualmente la inexistencia de exámenes en las fechas de la cédula de Enrique II, para el ejercicio de la docencia, hasta una disposición muy posterior del año 1600 y sobre todo desde la regulación derivada del funcionamiento de la Congregación de San Casiano en el que se atribuye a los maestros el carácter de las conocidas como artes liberales y consecuentemente los privilegios, beneficios y favores que les correspondían o disfrutaban. La referencia a los *maestros examinados* igualmente era errónea, pues las primeras evidencias de tal examen se corresponden a finales de siglo XVI y principios del XVII.

Cotarelo hace incluso chanza de la afirmación de la cédula en lo relativo a figurar los primeros en los repartos judiciales sobre los pleitos que sufrieran, y también en lo referente a que los escribanos y justicias salieran a recibir a los maestros a tres pasos de las audiencias (Cotarelo, 1916, p. 178).

En esa misma línea muestra también que se consideraba imposible que los maestros pudieran tener armas, lacayos, esclavos y caballos con los tres reales escasos, que incluso siglos después

(se encuentra documentado para el siglo XVI), entregaba cada alumno al maestro; y asevera la incoherencia en atribuir la facultad de examinar a los maestros, primero a los justicias y a los veedores de ciencia y conciencia, y a la vez, al Consejo. En esta misma cuestión señala que justicias y veedores no podían otorgar cartas, tras el examen, pues tal certificación no era propia del siglo XIV y fue implantada, según constan los antecedentes, a finales del siglo XVI.

Otra muestra de la invención de la cédula se concluye del uso de ciertos términos con significados distintos a los del siglo XIV: así muestra la falsedad en la referencia al Concilio de Trento que no comenzó hasta el reinado de Carlos V y concluyó en el reinado de Felipe II, por lo que afirma que la fórmula utilizada, *según o conforme el Concilio* era de uso común en el siglo XVII y comienzos del XVIII, fecha en la que el autor debió generar esas que denomina *leyes falsas*, pero no en la fecha atribuida a la cédula inicial.

Una nueva muestra de la no autenticidad de la cédula se refiere a *la exención de ser quintados*, como privilegio, que también se concedía a los maestros, pues poco se correspondía con los ejércitos del siglo XIV, aunque sí con los del XVIII y de ahí el interés del autor o autores -posibles maestros-, como beneficiarios en falsear la cédula.

Concluye Cotarelo afirmando que en el siglo XIV no existían tampoco duques o marqueses, sino a partir del siglo XV, por lo que no resulta creíble que en la cédula se reconozca a los maestros las *gracias y privilegios que gozan los marqueses y duques*; y que resulta discutible la posibilidad de que los maestros, tras cuarenta años de ejercicio, pidan la cantidad que quisieren, cuando los maestros no recibieron emolumentos del Estado hasta 1791.

Cotarelo es rotundo en su análisis buscando el origen y la justificación de dicha cadena de cédulas. Sus afirmaciones se asumen como conclusivas:

En los primeros años del siglo XVIII y durante la guerra de Sucesión española (1701- 1713), los ejércitos y partidas, derrotados o vencedores, se afincaban en las villas y lugares. Por este motivo se constituyeron milicias concejiles para atenderlos y los vecinos tenían que recibir y hospedar a los soldados de los bandos. En ese contexto y para evitar las molestias de estas obligaciones, Cotalero señala que un grupo de maestros de Granada reclamaron antiguas y supuestos privilegios y preeminencias inexistentes: *esto molestó a algunos maestros de Granada, ciudad entonces, después y antes muy propensa a nutrir falsificadores de toda clase de documentos* (p. 176). Por ello, afirma con seguridad, que de allí partió la falsificación de la cédula de Enrique II, con supuestos y notorios privilegios a los maestros, así como las confirmaciones de las cédulas de Felipe II, de Felipe III y de Felipe V. Una vez que fracasó en 1706, el empeño de los maestros en conseguir del Ayuntamiento de Granada la exención de las molestas obligaciones de la situación bélica, los documentos fueron enviados, con copia de 1730, al hermano mayor de la Congregación de San Casiano.

Fue en ese momento en el que considerando apropiadas las peticiones y a fin de otorgar de dignidad al oficio de la enseñanza de las primeras letras, dando veracidad a lo aparecido en dichos documentos, se emitieron nuevas cédulas que otorgaban esa autenticidad a los documentos iniciales por parte de Felipe V, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV.

Nos parecen especialmente significativos varios datos: en primer lugar, la relevancia de la enseñanza de las primeras letras y por consiguiente de los maestros en la conciencia popular, que independientemente de la autoría de la cédula de Enrique II, no es cuestionada como principio básico de desarrollo personal y colectivo; por otra parte la posible existencia de documentos –cédulas– en ese sentido, que perdidos en el tiempo, alentaron la creatividad desafortunada de los autores para evitar el intrusismo profesional y reclamar privilegios: no es descartable que hubiera una especie de sentimiento y jurisprudencia consuetudinaria, basada en la memoria colectiva y en la tradición oral que refrendaran esos privilegios, aunque los

autores los completaran y adornaran de forma un tanto alambicada, con la posible esperanza de hacerlo más creíble. El propio Maíllo (1967) habla de *noticias vagas procedentes del siglo XIV*.

Y por último que, sin que forme parte del supuesto objetivo de sus creadores, que no era otro que el de reclamar unas prebendas y privilegios y evitar el intrusismo, se mencionara la figura de un controlador, veedor o visitador que contraponía esos privilegios, en primer lugar, a una acreditación (en términos modernos) y de forma más permanente al desarrollo efectivo, real y conforme de las tareas educativas asignadas.

2.1.2. Los aprobadores y examinadores de maestros

Uno de los hitos importantes en la búsqueda de los antecedentes y precursores de los actuales inspectores de educación debemos buscarlos, con un análisis cronológico, en los denominados como aprobadores y examinadores de maestros.

Cotarelo (1913, 19), citado por Montero Alcaide (2021), afirma que hasta el año 1600 no se obligó a los maestros a realizar un examen para poder ejercer la docencia. De esta forma en el primer volumen de su *Diccionario biográfico de calígrafos españoles* aparece la disposición del Consejo de Castilla reclamando esta exigencia (véase la tabla 2.1.4):

En la Villa de Madrid, a tres días del mes de junio de 1600 años, los señores del Consejo de S.M. mandaron por consulta que el Corregidor de esta Villa examine os maestros que en ella enseñan a leer, escribir y contar, por personas que sepan del arte y se informen de sus vidas y costumbres y habilidades, y sin esto ninguno pueda enseñar.

La respuesta del presidente del municipio fue rápida (Cotarelo, 1913, 19) mandando notificar a todos los maestros de la Villa que en seis días debían comparecer para ser examinados, nombrando a Ignacio Pérez, para que *haga y cumpla lo que le es cometido*.

Todas estas funciones también se encontraron en el libro de Ceballos (1692), citado por Montero Alcaide (2021) que en su capítulo VIII, lo dedica al *Cuidado que los Reyes Católicos tuvieron en que los que han de adoctrinar a la juventud fuesen tales como conviene, y privilegios con que les favorecieron*, citando de esta forma la cédula de los Reyes Católicos. Caballos también apunta que la necesidad de contar con la aprobación eclesiástica para la enseñanza de la doctrina cristiana (la labor docente instrumental se realizaba junto a la labor catequética) fue recalcada en los concilios provinciales de Maguncia (1549), Toledo (1565) o Salamanca (1566).

Ceballos (1692, 167-168) adelanta algunos años la existencia de examinadores en la Villa de Madrid. De esta forma, citado por Montero Alcaide (2021, 32) en el capítulo IX, *Desde cuando se practica haber, en el Arte de Escribir, Examinadores, por comisión de los Señores del Consejo Real y cuantos ha habido en la Imperial Villa de Madrid*, identifica al primer *aprobador* de la Villa de Madrid una vez que se realizó el traslado de la Corte de Toledo en 1563, durante el reinado de Felipe II. Sus palabras son claras.

Habiendo los Católicos Reyes favorecido tan magníficamente a los Profesores del Nobilísimo Arte de Escribir, y Contar, mirando con gran celo por la nueva educación de la juventud, para que a vista del honorífico premio hubiese hombres capaces, de porte, y ciencia, que se encarguen de su eficaz enseñanza. Después Reinando la Católica Majestad de Felipe Segundo, y traslado la Corte de Toledo a Madrid año de mil quinientos y sesenta y tres, los Señores del consejo Real de Castilla remitieron al Maestro más Decano, u ejemplar, que existía en Madrid, que a la sazón era Antonio López Arias, las aprobaciones

de los Maestros del Artes de Escribir, y ejerció la ocupación por si solo seis años, y fue el primer aprobador que ha habido en Madrid, siendo Corte.

Como se ha comentado, una vez que se trasladó la Corte a la Villa de Madrid, el municipio multiplicó su población de unos catorce o quince mil vecinos a cerca de los doscientos mil, por lo que el aprobador solicitó apoyo para su trabajo, motivo por el que fueron nombrados otros dos aprobadores: Francisco Gómez en 1561 y Rafael de Cárdenas en 1573, con nombramiento perpetuo, como describe Ceballos (1692, 169): *mientras les dure la vida, y con la muerte, que todo lo acaba, eligen entre los maestros otro el más benemérito, para que ocupe el puesto del difunto* (Montero Alcaide, 2021, 33). Fue en esos últimos años del siglo XVI en los que se cambió el título de *aprobador* por el de *examinador*, del mismo modo que las denominadas *aprobaciones* fueron a denominarse *exámenes* (véase la tabla 2.1.5).

Debe entenderse esta descripción con la visión ya relatada de las Cédulas Reales del epígrafe anterior, con la que se entremezclan, pues conformaban y justificaban un sentir general y necesario, que tuvo su reflejo en las disposiciones de la época.

Existe también, por tanto, cierta polémica al respecto sobre la fecha concreta en la que se exigió la «carta» con garante de ser examinado para el ejercicio de la docencia, así como sobre la figura concreta al que correspondió ese puesto. Ceballos (1692), Cotarelo (1913), De las Heras (1991) y Ruiz Berrio (2004) muestran en Montero Alcaide (2021) estas disquisiciones, que por parte de López del castillo (2013, 22) no recibe mucha atención. Por nuestra parte asumimos que, junto a lo mencionado en la Cédulas Reales citadas, debió producirse durante el siglo XVI, primero de una forma voluntaria y de prestigio y más adelante como exigencia ineludible, impulsada para evitar el intrusismo profesional de aquellos que contaban con dicho requerimiento.

2.1.3. La Hermandad de San Casiano

De la misma forma que para otras profesiones, trabajos y oficios, la Congregación o Hermandad de San Casiano se fundó con un carácter gremial como órgano de apoyo mutuo y defensa de los intereses profesionales; o como se menciona en la ordenanza primigenia *...una Congregación o Cofradía para su mutuo auxilio y de sus viudas y huérfanos, bajo la advocación de San Casiano*³⁶. La Hermandad contó con normas como sociedad religiosa y de auxilio mutuo, cuyas primeras ordenanzas, por ese carácter de congregación piadosa y con fines religiosos, apostólicos y caritativos (Montero Alcaide, 2013, 62) fueron aprobadas por el Arzobispo de Toledo, el 15 de enero de 1647 (López del Castillo, 2013, 23) (véase la tabla 2.1.6), como respuesta a la petición que presentaron veinte maestros de la ciudad de Madrid, iniciada cinco años antes y las siguientes aprobadas, de este mismo carácter, fueron fechadas en 1703 y 1719 (Montero Alcaide, 2021), contemplando aspectos singulares relacionados con la enseñanza. La Hermandad también contaban con ordenanzas de carácter organizativo que fueron fechadas en 1668, 1695 y 1705.

³⁶ Así consta en la ficha del Portal de Archivos Españoles – Pares del Ministerio de Cultura y Deporte, en <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autoridad/148478>, con acceso el 13 de marzo de 2022.

Como aspecto anecdótico, Montero Alcaide (2021) cita a Ceballos (1692) y señala que la reliquia de San Casiano se encontraba en una pequeña capilla del convento de los Padres Calzados de la Santísima Trinidad de Madrid³⁷ donde aparecía:

A devoción de este invicto mártir fundaron año mil seiscientos y cuarenta y dos, los maestros del nobilísimo Arte de escribir, y contar, que asisten en la Imperial, y coronada villa de madrid, una congregación muy ilustre, y ejemplar, en la cual observan los Hermanos entre sí particular amor, atención y conformidad, amparándose en las cosas lícitas y deseándose bien unos a otros.

Las citadas ordenanzas trataban de distintos aspectos del funcionamiento de la hermandad: las celebraciones religiosas, la organización y funcionamiento de la propia hermandad, el procedimiento para recoger fondos y prestaciones para los necesitados, etc. pero fundamentalmente trata de la asociación de los maestros, como gremio, para controlar la competencia entre escuelas y establecía requisitos para el ejercicio de la docencia. Es significativo mencionar la obligación de inscribirse en la hermandad para todos los maestros domiciliados en Madrid.

Como señala López del castillo (2013) con las ordenanzas aprobadas por la máxima autoridad religiosa, la Hermandad empezó a desempeñar sus funciones durante veinte años, interviniendo en diversos conflictos planteados por el nombramiento de los examinadores, que representaban el puesto de más alta categoría al que podía aspirar los maestros y que no estaba sometido a ningún control (López del Castillo, 2013, 23).

Fue el pleito planteado con el Consejo de Castilla a causa del nombramiento de un examinador, el que provocó la redacción de unas nuevas ordenanzas de carácter organizativo, cuyos primeros capítulos tratan de resolver el problema planteado del derecho de propuesta para cubrir las vacantes de los examinadores. Finalmente, estas ordenanzas fueron aprobadas por la autoridad civil, mediante Real Provisión de 11 de febrero de 1668, tal y como reseña Luzuriaga (1916), citado por Montero Alcaide (2021).

Son en estas ordenanzas en las que aparece por primera vez la figura del celador.

Cuiden con todo cuidado, vigilancia y atención, que se espera, del cumplimiento de todas las ordenanzas de la dicha hermandad, y puedan como tales celadores denunciar y acusar a todos y cualesquiera personas que no las guarden, cumplieren y ejecutasen, ante la justicia Ordinaria de esta Villa, y pedir sean castigados en las penas en que incurrieren, conforme hallaren por derecho, y especialmente denuncien de os Leccionistas que usa del oficio sin estar examinados.

Estos celadores eran elegidos cada año, el mismo día de las elecciones del resto de cargos: dos hermanos mayores, dos diputados y un tesorero, tal y como apunta Martínez Navarro (1982).

La superioridad del cargo de examinador sobre el de celador queda recogida, tal y como apunta López del Castillo (2013) en el capítulo XV de las ordenanzas, al establecer claramente:

³⁷ No se ha encontrado referencias en la actualidad a dicho convento, ni de su ubicación en la antigüedad. Las referencias a las supuestas reliquias de San Casiano se han encontrado en la catedral de la ciudad italiana de Ímola a partir de <https://www.es.catholic.net/op/articulos/37360/casiano-de-imola-santo.html#modal> con acceso el 12 de marzo de 2021 y al Monasterio de El Escorial, con acceso en la misma fecha a partir de <https://blocdepepe.wordpress.com/2017/10/13/cuadernos-escuela-y-la-relequia-de-san-casiano-en-el-escorial/>.

Obligación de los cuatro celadores... solicitar que se ejecuten las dichas ordenanzas, siendo los fiscales y denunciadores que averigüen si se falta o no a su cumplimiento, dando cuenta a los examinadores para que pongan el remedio consiguiente.

Por tanto, se perciben claras diferencias entre la figura de los examinadores, con puesto perpetuo hasta la ordenanza de 1705, en el que se empieza a renovar cada dos años mediante la propuesta de terna al Corregidor, previo examen de los pretendientes ante los Hermanos Mayores y el de los celadores, elegidos cada año.

A mediados del siglo XVIII, en 1743, como apunta Montero Alcaide (2021, 118) Felipe V determina que la Hermandad de San Casiano cuente también con visitadores a los que otorga en título de *veedores* con el encargo de que vigilen el desempeño de los maestros (véase la tabla 2.1.7). La Hermandad propone al rey que los examinadores sean también los visitadores, siendo aceptada la propuesta.

Este agrupamiento se dio también con la constitución de otras Hermandades en distintas ciudades como Toledo, Valencia, Zaragoza, Jerez de la Frontera, Granada, etc. Cada Hermandad de Maestros se regía por unas ordenanzas a modo de estatutos aprobados por el Consejo de Castilla o por el Obispo de la diócesis, como también ocurrió en la de Barcelona.

El portal de Archivos Españoles - Pares del Ministerio de Cultura y Deporte³⁸ señala que las Congregaciones y Hermandades de San Casiano, con un fuerte espíritu gremial, fueron las primeras entidades de asistencia social del magisterio en España y estuvieron encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los maestros, proporcionándoles cierta protección y seguridad. En su seno confluían una serie de motivaciones e intereses de tipo profesional, económico, asistencial y espiritual o religioso, que ponían de relieve la doble vertiente de estas asociaciones: como corporaciones de maestro y como hermandades religiosas. Uno de sus objetivos prioritarios era proteger los intereses y privilegios de la propia Hermandad y de sus integrantes ante las autoridades civiles y eclesiásticas o frente a la competencia ilícita. Una primera actuación para lograr ese fin fue controlar y regular el acceso a la función docente, a través del derecho exclusivo de examinar a los aspirantes, que quedaba esencialmente en manos de los examinadores de la congregación

El mismo portal sintetiza este periodo de la formación de los maestros en esta época con los siguientes puntos:

- 1) La escasa consideración social derivada de la más escasa aun importancia que socialmente tiene la enseñanza primaria
- 2) La organización gremial en torno a la Hermandad de San Casiano como instrumento de control y, en menor medida de mejora de la calidad profesional, así como de medio de defensa de los intereses de los cofrades y evitar el intrusismo
- 3) La exigencia de una serie de requisitos como el certificado de limpieza de sangre y de buena vida y costumbres
- 4) La consolidación de un sistema de exámenes requisito obligado para obtener el título y ejercer la profesión sobre doctrina cristiana y el arte de escribir, leer y contar
- 5) La adquisición previa de una práctica al lado de otro maestro.

³⁸ <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autoridad/148478> con acceso el 13 de marzo de 2022.

La Hermandad de San Casiano prolonga sus actividades hasta 1780 siendo sustituida con clara muestra de continuidad, no ajeno al impulso del movimiento ilustrado, por el Colegio Académico de Primera Letras.

2.1.4. Colegio Académico del noble arte de las primeras letras

La Real Provisión de Carlos III de 22 de diciembre de 1780 (véase la tabla 2.1.9) sustituye Congregación de San Casiano por el Colegio Académico del Noble Arte de las Primeras Letras, sancionando sus estatutos y priorizando, como apunta Montero Alcaide, aspectos académicos sobre gremiales y representativos. Una de las importantes encomiendas que se le atribuye es la de examinar a los maestros y vigilar centros educativos; es por ello que nombra a los visitadores generales por periodos de dos años (Montero Alcaide, 2021, 83).

El mismo autor afirma que dicha iniciativa no supuso una sustitución de una entidad por otra, muy al contrario, Montero Alcaide (2021) afirma que la creación del Colegio Académico de Primeras Letras es una decisión tomada por la propia Congregación de San Casiano en 1774, pues acordaron reformar la corporación e incluso cambiar el nombre.

Con este fin fueron elaborados unos estatutos específicos que se presentaron al Consejo de Castilla, que resolvió en 1775 elevar el documento a la Sala de Alcaldes. El trámite se fue alargando hasta que, como se ha apuntado, por Real Provisión de Carlos III se disuelve la Congregación de San Casiano y en el mismo acto se crea el Colegio Académico de Primeras Letras.

El fin y objetivo principal de denominado como *Colegio Académico de Profesores Maestros del Noble Arte de las primeras Letras de esta Corte de Madrid*, fue mencionado en el capítulo I de sus estatutos en estos términos:

Fomentar con transcendencia a todo el Reino la perfecta educación de la juventud [...] donde sin perjuicio de la enseñanza de las Escuelas de esta Corte, tengan continuos ejercicios abiertos los Maestros Profesores que las regenta, en que por Individuos de ella se ejecuten los exámenes de los Maestros Profesores, y Lectores de letra antigua, examinando con rigor, no puramente la habilidad, y suficiencia, sino principalmente la limpieza de sangre, buena vida, y costumbres; y finalmente en que dirijan con el mayor celo las Escuelas de Madrid, cabeza y miembro principal de la Monarquía, cuidando que en ella se dé perfecta instrucción a la niñez, para que sus buenos influjos se deriven, y extiendan a los demás miembros menos principales de ella.

El Colegio se constituye con unas normas específicas: la colegiación era obligatoria; se organizaba en académicos propietarios, académicos honorarios y como *ramo inferior dependiente* del colegio, veinticuatro discípulos de número, que eran los leccionistas. Entre sus funciones se encontraba las *aprobaciones de maestros y cuidado de la buena enseñanza* para lo cual había tres examinadores, que realizan las tareas de visitadores generales de las Escuelas, por un periodo de dos años, contando con el apoyo del propio secretario del Colegio y del Escribano real para los asuntos judiciales que surgiesen.

Los estatutos establecían que el Colegio celebraba ejercicios académicos que realiza un académico profesor, en calidad de catedrático con asistencia de un leccionista, por antigüedad y turno. Los temas tratados eran *la gramática española, de los escritos y caracteres de letras que se han usado; de aquellos para la instrucción de leerlos, y usan en el Reino; de aquellos para la instrucción de leerlos y de estos para adelantar su perfecta formación; de la aritmética universal,*

y de la comprobación, y cotejo de manuscritos, y de todo lo demás que parezca útil para a perfecta educacion publica. Dicho planteamiento de carácter formativo se percibe como una propuesta específica novedosa y de gran valía que posiblemente fuera la precursora de la creación de la Escuela Normal Central como se puede desprender de lo expuesto por Escolano Benito (1982).

Como singularidad, inexistente hasta ese momento y que había provocado supuestas irregularidades, los estados del Colegio incluyen un apartado específico dedicado al examen de las maestras, pues hasta entonces dicha circunstancia no se consideraba y quien se dedicaba a la instrucción de las niñas se encontraban en una ilegalidad pues no habían sido examinadas y no se había informado sobre *su limpieza de sangre, buena vida y costumbre*, con referencia de sus maridos *si fuesen casadas*.

Los estatutos también establecían específicamente la norma del *examen de los maestros de las escuelas públicas de la Corte* -capítulo VIII-, citado por Montero Alcaide (2021, 86) y las normas y consideraciones de los tres examinadores y visitantes generales –capítulo XXI- en el que se establecía que estos debían tener escuela abiertas, pudiendo publicitar su condición, así como que debían actuar de forma conjunta. Los examinadores señalaban los *parajes* donde poner escuela a los aprobados a fin de *no causar perjuicio a los demás Maestros* y ...

Visitarán las escuelas de esta Corte en los tiempos que les pareciera más a propósito, sin interés alguno, celando el cumplimiento de la obligación de los Maestros, Pasantes y Leccionistas; y procederán contra los delincuentes, dando cuenta de cualquier transgresión al Alcalde del cuartel en que habitase el delincuente.

Se podían igualmente nombrar visitantes particulares a otras capitales del Reino, con la misma facultad, de entre *los profesores más antiguos, idóneos, y beneméritos*.

Cotarelo (1913) afirma que, poco después de constituido el Colegio Académico, se produjo una escisión del mismo, a partir de la aparición de la obra: *Arte de escribir por reglas y sin muestras*, de José de Anduaga (1781) fundando la Academia de Maestros, de la que fue director y de la que dependieron ocho escuelas reales creadas por Real Decreto de 25 de diciembre de 1791 – durante el reinado de Carlos IV-. dichas escuelas contaron también con un *visitador e inspector*, tal y como consta en el Real Decreto citado de 25 de diciembre de 1791.

En relación al colegio Académico fueron numerosas las disposiciones que fueron completando su funcionamiento. De esta forma, tal y como apunta Montero Alcaide (2021) en la Real Cédula de 12 de julio de 1781 se procuró una incipiente educación obligatoria, aunque inicialmente pensada para los *pobres ineptos para el servicio militar*. La Real Cédula de 11 de mayo de 1783 (véase la tabla 2.1.10) que promulga el *Reglamento para el restablecimiento de Escuelas gratuitas en los barrios de Madrid, en que se dé la buena educación a las niñas tan necesaria y útil al Estado, al bien público y a la patria* provocó la fundación de 32 escuelas cuyas maestras debían ser examinadas sobre la doctrina cristiana y las *labores de manos*. Estas escuelas eran visitadas por *comisionados*³⁹. Es significativo lo que señala el apartado IV.1 de dicha Real Cédula:

Los Individuos de las Diputaciones a quienes se encargase por turno el cuidado de las Escuelas, deberán visitar y auxiliar a las Maestras, recomendando la observancia de este Reglamento y dar puntual cuenta a la Diputación de cuanto considerasen digno de remedio

³⁹ Al respecto y para introducirse en la implantación de las inspectoras, es significativa la lectura atenta de libro de M^a Teresa López del Castillo (2003). *Defensoras de la educación de la mujer: las primeras inspectoras escolares de Madrid (1861-1926)* publicado por la Dirección General de Ordenación Académica de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Con acceso el 2 de abril de 2019 desde <http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001385.pdf>

para que se ponga con la mayor suavidad y prudencia, con especial encargo de que a la Maestra nunca se la reprenda delante de sus Discípulas, y de que estas advertencias se la hagan en términos suaves y discretos.

Montero Alcaide (2021) apunta finalmente que la invasión napoleónica y la restauración de Fernando VII provocó decadencia en el Colegio Académico en los primeros años del siglo XIX, aunque, como apunta Cotarelo (1913), en 1820 algunos de sus antiguos miembros intentaron restablecerlo mediante los *Estatutos del Colegio Académico de Primera Educación de esta M.H.V. de Madrid*.

Montero Alcaide señala que, dado que los estatutos establecían como requisito, manifestar adhesión decidida a la Constitución de 1812, la restauración borbónica de 1823 hizo desaparecer el Colegio e incluso algunos de sus miembros fueron perseguidos.

Años más tarde, en 1836, durante la regencia de María Cristina de Borbón, los miembros volvieron a reunirse para constituir una nueva sociedad denominada *Academia Literaria de Educación*. Sus estatutos se publicaron en 1840 como *Reglamento para la Academia literaria y científica de instrucción primaria de Madrid*, que como apunta Cotarelo (1913), no tardó en entrar en decadencia por las disputas de sus miembros.

2.1.5. Los Celadores de la Junta General de Caridad

Otro de los hitos significativos en la búsqueda de los antecedentes de los inspectores de educación y de las funciones y tareas que tienen encomendados son los denominados *celadores* de la Junta General de Caridad. Esta figura se encuentra también, como muchas otras, insertada en el discurrir cronológico desarrollado entre los siglos XVI y XIX, se solapa con la figura establecida en otras instituciones e iniciativas y llega a coincidir cronológicamente con el inicio de la fase de transición, en términos de Maíllo, fase gubernativa, en términos de Montero Alcaide (2021) o fase normativa, como señala Lozano Salinas (2019).

Dos años antes de la constitución del Colegio Académico se creó, tal y como apunta Montero Alcaide (2021, 93), la Junta General de Caridad por medio de Real Cédula de 30 de marzo de 1778 (véase la tabla 2.1.8), que entre otras tareas, tenía la de designar y trasladar a los maestros de las escuelas gratuitas de niños pobres. De esta Junta forma parte un Celador que cuidaba de la enseñanza dada en las escuelas gratuitas y de la aplicación de los maestros. Ese mismo año y en instrucciones concretas para los Corregidores y los Justicias, Carlos III les encomienda *vigilar el cumplimiento de los maestros con sus ministerios y que tengan calidades que, para ello, se requieren*.

Preocupaba a Carlos III asegurar la educación de los menos favorecidos, por ello fue el primer monarca que dictó las primeras disposiciones que adelantaban la obligatoriedad de la educación y señalaban el compromiso de los padres o, en su caso, de las instituciones para propiciarla. En este sentido Carlos III, como ya se ha apuntado, creó treinta y dos escuelas gratuitas de niñas, en Madrid, cuyas maestras eran examinadas por comisarios de las Diputaciones de caridad y visitadas por comisionados.

La Junta General de Caridad estaba compuesta por miembros de la alta aristocracia, presidida por un Consejero de Castilla y se encontraba auxiliada por las sesenta y cuatro Juntas de Caridad de los Barrios. La Junta auxiliaba a los niños pobres y poco a poco tomó una relevancia mayor. De esta forma, años más tarde, Fernando VII creó en 1816 sesenta y dos escuelas gratuitas y las puso bajo la dependencia de la Junta.

López del Castillo (2013, 30) señala que la vigilancia y protección de estas escuelas son funciones, reconocidas en las disposiciones específicas que, de alguna manera, siempre han estado presentes a lo largo de la inspección.

Por Real Orden de 26 de marzo de 1791 se crea el cargo de *Zelador General* de las escuelas de caridad (véase la tabla 2.1.12). Nombrado Ramón Carlos Rodríguez, director de la escuela del barrio de la Comadre, en atención a *la actividad, inteligencia y esmero*, se le encarga de ...

... Velar sobre la enseñanza que se da en las escuelas gratuitas, la aplicación de sus maestros y maestras, y de sus discípulos y discípulas padres; sobre el cuidado o descuido de los padres, madres y parientes en enviar los niños y niñas a las escuelas, y demás correspondiente para uniformar en lo posible este importante punto de educación

Con la invasión napoleónica, la Junta General de Caridad fue disuelta en 1809, y posteriormente restaurada en 1814 con el regreso de Fernando VII, para afianzar su importancia y labor en los años siguientes. El levantamiento liberal de 1820 y el Trienio Liberal provocó cierto caos en su labor por lo que en 1821 tuvo que entregar sus fondos y documentos al ayuntamiento, junto a las 124 escuelas gratuitas de ambos sexos que había en Madrid: la disolución de la Junta tuvo lugar en diciembre de 1821. En ese momento el Ayuntamiento estableció una comisión para la gestión de estas escuelas, nombrando los denominados como *inspectores de los cuarteles*. Así lo refiere Cotarelo (1913, 409) citado por Montero alcaide (2021, 93): *Eran cinco y ejercieron despóticamente este mando, nombrando maestros, sustitutos, pasantes y separando a los que bien les parecía. Esto provocó una gran decadencia en la enseñanza, porque privaron del ejercicio a ilustres y acreditados profesores, a pretexto de que no se habían singularizado por su amor a la Constitución, pero en realidad para colocar cada uno a sus favorecidos; casi todos ellos tan ignorantes, que apenas sabían poner sus nombres.*

La junta General de Caridad fue restablecida en 1823, durante el absolutismo de Fernando VII, aunque su importancia e intervención disminuyó pues se consideraba que la inspección de la primera enseñanza debía llevarse a cabo desde el Ayuntamiento.

Finalmente, la Junta General de Caridad fue suprimida por Real Orden de 31 de marzo de 1837, durante el periodo liberal con la regencia de María Cristina de Borbón, aunque posteriormente se constituyeron Juntas de beneficencia municipales y provinciales, así como la Junta General de Beneficencia.

2.1.6. El Inspector de las Escuelas Reales

Carlos IV, siguiendo una iniciativa de su padres, Felipe V e Isabel de Farnesio, fundó en 1791 ocho Escuelas Reales en Madrid, con la intención de que fueran *normales y ejemplares* para las que nombró *un visitador e inspector* (véase la tabla 2.1.11). Interesa destacar que esta fue la primera vez que se utilizó el término *inspector* para precisar el oficio de los visitadores y anticipar la que consideramos como futura configuración profesional de la inspección. Los maestros de estas escuelas, por otra parte, fueron de los primeros en tener retribuciones o sueldo público.

Ya en 1802, tales escuelas reales, así como las de niñas, contaron además con un censor, que pertenecía a la Junta General de Caridad y procuraba, así se decía, que la *instrucción que se dé a los jóvenes de ambos sexos sea sana y útil a los mismos y a la causa pública*.

Con la creación de estas escuelas reales también se da carácter formal, por disposición del Rey, a la Real Academia de Primera Educación, cuyo origen resultó, como se ha apuntado, de una nueva escisión del Colegio Académico de Primeras Letras. En el reglamento de escuelas de

primeras letras, en 1797, que figura junto a los estatutos de la academia, parecen como superiores inmediatos de los maestros, el celador y el visitador, como oficios diferenciados en la corte; si bien en las provincias podían reunirse en una misma persona ambos empleos. Quedaba pendiente de disponer, sin embargo, el modo en que había de visitarse las escuelas, según lo permitieran las ocupaciones de estos empleos de celador y visitador y los fondos destinados a los gastos de viaje. Para los exámenes de los maestros, la académica nombró una junta compuesta por el presidente de los ejercicios académicos que se organizaban, como cometido propio de la misma, el celador, el visitador, otros tres miembros en calidad de profesores y el secretario de la academia.

Se consideraba además en el citado reglamento *cuerpos subalternos que deben cuidar en las provincias de la dirección de la primera enseñanza, y de los maestros en orden a ella*, para lo que las sociedades económicas y las juntas de estudios podían nombrar y comisionar personas que, entre otras funciones, visitaran las escuelas.

Una modificación sustantiva que afectó a la iniciativa gremial, presente desde mediados del XVII con la citada hermandad de San Casiano, tiene lugar en 1804, cuando Carlos IV, regula la posibilidad de abrir escuelas sin que sus maestros tuvieran la obligación de formar parte del Colegio Académico, por lo que se suprimió la función de examinar a los maestros para estas escuelas tanto al Colegio Académico, como a la Junta General de Caridad y, para ello, se crea la Junta de Exámenes, dependiente del Consejo de Castilla, no solo con atribuciones para los exámenes, sino de manera amplia, para las distintas cuestiones generales relativas a las escuelas y a los maestros de Madrid. Asimismo, los Capitanes Generales constituyen las Juntas Provinciales de Exámenes, con idénticos cometidos y dependencia del Consejo.

2.1.7. La Real Academia de Primera Educación

Una nueva entidad creada a finales del siglo XVII y que utiliza la función inspectora de forma incipiente es la Real Academia de Primeras letras.

Como ya se ha apuntado, en el relato de Montero alcaide (2021), el Real Decreto de 25 de diciembre de 1791 de Carlos IV, establecía el cese de las actividades del Colegio Académico del Noble Arte de Primeras Letras e instituye con carácter formal la Real Academia de Primera Educación, cuyos estatutos se aprobaron el 13 de junio de 1797 (véase la tabla 2.1.13).

Esta Real Academia estaba constituida por un número indeterminado de individuos, de los cuales no había obligatoriedad de que fueran maestros. En sus estatutos se establecía que la Real Academia *hará todas las variaciones que juzgue conveniente para la mayor perfección de la referida enseñanza* (Luzuriaga 1916, 252-271) citado por Montero Alcaide (2021). Además, realizaba la censura de los libros o documentos referidos a la primera educación, así como elección de las obras en que debía leer la niñez para el uso de todas las escuelas del reino y *en ninguna podrá enseñarse por otros tratados*.

La Real Academia también realiza una función formativa, muy en línea con los pensamientos ilustrados de la época, por ello, como señala Montero Alcaide (2021, 102) en sus reuniones semanales se trataban asuntos importantes, que previamente había sido distribuidos por el Director entre académicos para su exposición y disertación.

Junto al estatuto de la Real academia se publicó el reglamento de escuelas de primeras letras (1797), que estableció las tres clases de escuelas del Reino según lo que se enseñaban en ellas,

la donación de la que disponían; así como los conocimientos necesarios de los que debían disponer los maestros de cada una de ellas (Luzuriaga, 1926, 271-308).

Las escuelas contaban junto a los maestros, de pasantes y leccionistas. Los curas párrocos nombraban sacerdotes *notoriamente piadosos e instruidos, para el digno ministerio de catequistas*, que también asistían a los exámenes y oposiciones.

El apartado 12 del Reglamento, como señala Montero Alcaide (2021, 104), establecida que los maestros se juntaban tres veces al mes para conferencias *sobre los ramos que comprendía la primera enseñanza y sobre los efectos que produce en sus escuelas el método que fuese establecido en ellas* marcando nuevamente el carácter formativo en el ejercicio profesional. Estas escuelas en las que se establecía un mismo método se denominaban *escuelas normales* junto a las que se establecieron en las capitales del resto del reino.

Montero Alcaide (2021, 105) señala que, para los exámenes de maestros, la academia estableció una junta de exámenes compuesta por un presidente, un celador, un visitador y tres miembros elegidos cada dos años junto al secretario de la academia. Los títulos que otorgaban eran de dos tipos distintos: para la enseñanza en villas y lugares y para las ciudades. A la docencia en escuelas de la corte se accedía por oposición con las formalidades propias que adoptaba la Junta de exámenes.

Como situación puntual y singular de la Real Academia de Primera Educación, esta establecía las obras en que debían estudiar los maestros de primera letras, a modo de curso preparatorio de los maestros de primeras letras, que orientaba a la forma en que se desarrollarían los exámenes y oposiciones.

El apartado 19 del reglamento denominado *Cuerpos subalternos*, establecía los perfiles que debía desempeñar la dirección y los maestros de la primera enseñanza en las provincias. En este apartado se determinaba que las Sociedades Económicas y las juntas de Estudios nombrarían y comisionarían personas para dar luces y conocimiento para el *completo desempeño del importante cargo que se les confía* y para que visiten escuelas, intervengan en los exámenes de maestros y *exhorten a sus padres para que los envíen a las escuelas y contribuyan en fin al desempeño feliz de esta empresa importante*.

En esa misma línea los maestros debían obedecer las órdenes de la academia y las que comunicaran el celador y el visitador, como *superiores inmediatos de los maestros* dado que *erigidas las escuelas y precisados los maestros no hay cosa más natural y necesaria que el nombramiento de las personas que deba intervenir en el cumplimiento de las obligaciones de los profesores en su más completa instrucción y en hacer observar a los padres de familia la debida conducta para con los maestros y el correspondiente decoro cuando se presenten al aula*.

Transcribimos ahora (Montero Alcaide, 2021, 106-107) las obligaciones de los celadores y visitadores, tal y como se encuentra recogido en el reglamento.

- *Obligaciones del celador. Art. 22 del reglamento del Reglamento de escuelas de primeras letras, 1797. Real Academia de Primera Educación.*

El celador cuidará precisamente de que los edificios de las escuelas se conserven con la solidez, luces y distribución material con que se construyan.

Celará la puntual asistencia de los maestros y de los niños a las escuelas, según las horas que se destinen en las varias estaciones del año y reconvendrá a los padres que se descuiden esta obligación.

Presenciará la entrada de los niños en las escuelas la primera vez que se presente en ellas; recordará cualquier olvido o descuido que pueda haber en las formalidades con que deben

ser admitidos, leerá a los padres el decreto que deberá haber en las aulas, y cuidará de su cumplimiento.

Será uno de los que intervengan en que se pague puntualmente a los maestros las donaciones que se les hayan señalado sin permitir que se les retarde la paga, ni que se les descuenta nada de ella por gastos de recaudación, u otro motivo.

Y en caso que halle dificultades para el cumplimiento de estos encargos recurrirá a la Academia y a los jueces y tribunales competentes por el orden debido y regular.

- Obligaciones del visitador. Art. 23 del Reglamento de escuelas de primeras letras, 1797. Real Academia de primera educación

El visitador cuidará de la distribución interior de las escuelas con respecto a sus clasificaciones, y de que tengan mesas, asientos, pautas, inscripciones y demás enseres correspondientes a la enseñanza.

Tendrá cuidado de la puntual observancia del método establecido para la educación, y de que esta se dé por los tratados y libros determinados por la academia, así para los maestros como para los discípulos.

Estará a su cargo la convocatoria para los exámenes anuales de niños, y el decoro, formalidad y rectitud con que deben celebrarse

Tendrá obligación de visitar las escuelas con toda la frecuencia posible. Oirá las quejas que le den los padres de familia sobre la educación de sus hijos, y será puntual en satisfacer cuando fuesen fundadas.

Le corresponderá el nombramiento de las personas que hayan de dirigir las escuelas por enfermedad, ausencia, o fallecimiento de los maestros, y el examen de los niños cuando entren por primera vez en las escuelas.

Aunque el celador y el visitador tendrán facultad para amonestar y reprender a los profesores sobre las faltas que puedan cometer en el cumplimiento de sus deberes, se les prohíbe rigurosamente el que puedan hacerlo en las mismas aulas, o delante de gentes, sino a solas, o por escrito; y se les encarará sean los primeros en mantener el aprecio debido a los maestros, y el decoro y consideración correspondiente a las aulas.

En los demás pueblos del reino podrán estar unidos en una misma persona los empleos de celador y Visitador, y en adelante se dispondrá el modo de que visiten estos empleos las escuelas de los pueblos pertenecientes a sus correspondientes provincias, según lo permitan sus ocupaciones, y el estado de los fondos que deban subvenir a los gastos de viajes.

El visitador general, que actuaba también como presidente en defecto del nombrado para los ejercicios, y el celador informaban también a la Academia acerca de asuntos tan delicados como el *talento, aplicación y asistencia de los profesores a los ejercicios*.

EL celador y el visitador asistían a la admisión de los niños; el visitador examinaba a los alumnos y recogían en filiaciones⁴⁰ específicas el nombre, la edad, las personas que lo habían presentado y sus conocimientos.

⁴⁰ El diccionario de la Real Academia de la Lengua define la entrada *filiación* como; f. Datos personales de alguien. Con acceso el 20 de marzo de 2022 desde <https://dle.rae.es/filiaci%C3%B3n>

El reglamento también establecía normas de las escuelas de niñas y marcaba que *al cuidado de las personas y juntas que dirigían las escuelas de niñas quedaba la inspección del ramo de las labores femeninas, hasta que la Academia haya juntado los fondos necesarios para la dotación de Visitadoras de labores*. Las maestras debían ser también previamente examinadas.

El reglamento estableció el procedimiento de denuncia o reclamación ante la Academia, que gestionaba el asunto por medio del juez conservador –que era un ministro del Consejo de Castilla– que *conocía en primera instancia todas las causas, pleitos y negocios que concernían a los derechos, privilegios, fondos y rentas de la Academia con voz y voto*.

Finalmente, la liberalización de la enseñanza primaria provocó la decadencia de la Academia a principios del siglo XIX sobre todo en lo relativo a los exámenes de maestros y a la regulación de la enseñanza.

2.1.8. Las Juntas de Exámenes

Tras la publicación de la Real Orden de 11 de febrero de 1804 (Luzuriaga, 1917, 5-7), citado por Montero Alcaide (2021, 111) promulgada por Manuel Godoy (véase la tabla 2.1.14) se permite que pueda abrir escuela cualquier maestro examinado, sin la obligación de incorporarse a ninguna asociación o corporación.

El Colegio Académico y la Junta General de Caridad dejan de examinar a los maestros y para esta función se crea la Junta de Exámenes por dicha Real Orden. En ese contexto se modifica la gestión de los exámenes que serán realizados por *personas inteligentes y prácticas, y en quien no pueda recaer la menor nota de que proceden en sus censuras por parcialidad ni por las pasiones o intereses que suelen inspirar el espíritu de cuerpo*.

Por ello cesa en sus actividades la Junta General de Caridad, así como el Colegio Académico de hacer exámenes y estos son realizados de forma gratuita por una denominada como Junta de Exámenes, presidida por el presidente de la Junta General de Caridad y de la que formaba parte el Visitador General de Escuelas Reales, un padre de las Escuelas Pías, nombrado por su provincial⁴¹, dos miembros del Colegio Académico y un secretario, que era el de la Junta General de Caridad.

Los maestros de las Escuelas Reales accedían por medio de oposición tal y como establecía la Real Orden de 19 de febrero de 1804, proponiéndose los más sobresalientes al Rey para que eligiera entre ellos.

El reglamento de la Junta de Exámenes fue establecido por la Real Orden de 27 de marzo de 1804, determinando también la organización de las oposiciones y la forma provisionar las plazas vacantes en las Escuelas Reales.

En este proceso liberalizador, tal y como apunta Montero Alcaide (2021, 112) la Real Orden de 19 de marzo de 1804 estableció la libertad de abrir escuela de primera educación a cualquier

⁴¹ Es significativo señalar que existen congregaciones religiosas, creadas o con actuaciones en el siglo XIX que utilizan el término “inspector” para denominar al provincial o responsable de una determinada zona organizativa o circunscripción jurídica.

Al respecto se puede comprobar en el punto 156 de las Constituciones Salesianas (de la Sociedad de San Francisco de Sales) la organización en inspectorías y visitadurías; con acceso en la url: http://archivo.sdb.org/images/documenti/Salesiani_DB/Costituzioni/pdf/Costituzioni_es.pdf el 21 de marzo de 2021.

maestro aprobado por la creada Junta de Exámenes o con título anterior que debía ser revalidado. En esta línea reformista (Luzuriaga 1917; 13-16) el Consejo Real propuso al Rey, en agosto de 1805, un Plan de reforma general de las escuelas y un Plan de enseñanzas de primeras letras para todo el reino que finalmente no vio la luz; no obstante, se crea una junta de vigilancia, en lugar de la junta general prevista en el plan, para la vigilancia de la primera enseñanza de Madrid y de las escuelas normales, con dependiente de Consejo.

Para el resto de las escuelas del reino se asigna la vigilancia a los Capitanes Generales de cada provincia, quienes debían consultar al Consejo *quien prescribiría en cuanto sea posible la mayor uniformidad*.

Como no se esperaba la elaboración del Plan de forma urgente (Luzuriaga, 1917; 16-19), la Real Orden de 3 de abril de 1806 estableció la formación de Juntas de Exámenes en todas las capitales, formadas por gobernadores o corregidores como presidentes, junto a dos o tres maestros de primeras letras, meritorios y de un secretario, que podía ser el escribano del ayuntamiento. Se examinaban a los maestros para enseñar las primeas letras en todos los ramos que comprendía la primera enseñanza: doctrina cristiana, aritmética, gramática, ortografía, arte de leer, de escribir y comunicar *por el orden y método más breve y provechoso*. Los requisitos eran aquellos establecidos en la Real Provisión de 11 de julio de 1771, que Ávila (1986) señala de forma detallada como *una certificación de buenas costumbres y limpieza de sangre, expedida por la Justicia del pueblo, y además otra certificación del Ordinario, de haber sido aprobado en doctrina cristiana*.

Esta creación de la Junta de Exámenes suprime la intervención de la Junta General de Caridad en asuntos referidos a las escuelas de primera enseñanza con afirmaciones muy claras:

Resultando las más perniciosas consecuencias de que entiendan en el gobierno de un mismo ramo muchas manos diferentes, es la voluntad del Rey que ni la Junta General de Caridad, ni su Celador General, ni ningún de sus individuos, ni otro cuerpo cualquiera que sea, bajo ningún título, pretexto, ni motivo se entrometa directamente, ni indirectamente en punto ninguna que tenga concernencia con las Escuelas de primeras letras, con sus maestros ni con ninguno de los asuntos que son de la peculiar incumbencia de la Junta de Exámenes de Madrid, la cual debe conocer exclusivamente en ellos.

De igual modo ocurre con las juntas provinciales, cuya dependencia exclusiva es el Consejo Real. Estos criterios se comunican por Real Orden de 3 de abril de 1806 (Luzuriaga, 1917, 19-20) a la Junta General de Caridad.

Es importante mencionar que, tal y como fue creada la Junta de Exámenes de maestros de primeras letras de Madrid, esta se ocupaba de examinar a los aspirantes a maestros y *a todo cuanto diga en relación con la primera enseñanza, celando la conducta de los maestros de todas las escuelas de Madrid, sean o no reales y meditando y proponiendo a S.M las mejoras y planes de reforma que crea útiles en la materia*, por lo que llega a afirmar que *es ocioso y perjudicial empleo de Celador General de escuelas, creado por Real Orden de 28 de marzo de 1791*.

Por consiguiente, se suprime, por la citada Real Orden de 23 de abril de 1806, el empleo de celador y sus funciones son asumida en las escuelas de niños, por la Junta de Exámenes y en la de las niñas, por las diputaciones de barrio y sus presidentes (Montero Alcaide, 2021, 115).

La Real Orden de 19 de marzo de 1806 (Luzuriaga, 1917, 22-23) suprime los puestos de dirección de las escuelas de la Comitiva de S.M., así como la visita general de las Escuelas Reales de Madrid. Sus funciones son asumidas por la Junta de Exámenes de maestros de primeras letras de Madrid.

Al asumir la vicepresidencia de la Junta de Exámenes el Visitador General de escuela, este puesto lo asume el más antiguo en ellas.

2.1.9. Los Censores de las Escuelas

En este apartado se aúna la fase atécnica con la fase técnica y normativa iniciada con la promulgación de la Constitución del 19 de marzo de 1812.

Aunque esa posterior fase será ampliamente desarrollada en el siguiente capítulo, queremos finalizar este apartado con aquellos elementos que durante las primeras décadas del siglo XIX siguieron configurando y dando cuerpo a lo que será el cuerpo de inspectores de educación.

Tras la Constitución de 1812, la abdicación de Carlos IV en primer lugar y de Fernando VII más tarde, se instaura una nueva monarquía en la figura de José Bonaparte y se inicia la guerra de la independencia.

Con la vuelta de Fernando VII, concluida la guerra de la independencia, en el periodo denominado como sexenio absolutista, una de las primeras disposiciones en 1814 (Montero Alcaide, 2021, 125), rehabilita la Junta de Exámenes que estaba suspendida y sin funcionar desde 1808. La Real Orden de 27 de junio de 1814 (Luzuriaga, 1917, 115) reinstaura la Real Junta de Exámenes de Maestros de Primeras Letras de Madrid.

Enterado S.M. se ha servido acceder a esta solicitud, confirmando el establecimiento de la Junta de Exámenes y facultades que le señalaron en su fundación.

Sin embargo, a lo largo del reinado de Fernando VII, los exámenes de los maestros, hasta su regulación en el específico Plan y Reglamento de Escuelas de Primera Letras de 16 de febrero de 1825, con la creación de Juntas de Capital o de Provincia, fue objeto de distintos cambios, pues durante el denominado Trienio Liberal (1820-1823), la Orden de 21 de Marzo de 1821 de las Cortes estableció que los exámenes y aprobación de los maestros de primeras letras correspondía a las Diputaciones provinciales creadas en la Constitución de 1812.

Tras el Trienio Liberal, con la restauración absolutista de Fernando VII, la Real orden de 23 de junio de 1824 determina que, recibida la propuesta de la Junta Suprema de Caridad, el Rey la autoriza para que examine a los maestros de primeras enseñanzas que lo soliciten, *sin exigir por ello derechos* (Montero Alcaide, 2021). De este modo, presentado al Consejo de certificación que acredita la aprobación de la junta, se expedían los títulos correspondientes.

En lo relativo a la creación de los censores de las escuelas, Fernando VII dispone el nombramiento de una Junta de Ministros, cuyos miembros, además de merecer su confianza, *posean los conocimientos más necesarios para formar el más acertado plan general de estudios* (Montero Alcaide, 2021) tal y como consta en la Real Orden de 1 de febrero de 1815, por la que se crea una Junta de Ministros, para establecer un Plan General de Estudios.

Más tarde, por Real Orden de 21 de enero de 1816, el Rey, ante el abandono en que se encontraba la educación de los niños pobres, accede a la creación, solicitada por las Diputaciones de los barrios de Madrid, de escuelas para niños pobres, como ya las había para niñas y establece que los maestros de estas escuelas *deberán proveerse por rigurosa oposición, a la que solo serán admitidos los aprobados de maestros por la autoridad competente, y cuya provisión, previo el informe y calificación de los examinadores facultativos nombrados por las Diputaciones, deberá hacerse por estas mismas exclusivamente, debiendo estar también a su cuidado las escuelas en un todo como lo practican en las de las niñas* (Montero Alcaide, 2021, 131).

Para ello se solicita el establecimiento de los censores elegidos entre los vocales de la Junta General de Caridad, a semejanza de cómo lo había hecho Carlos IV mediante la Real Orden de 1 de abril de 1802 al crear censores para las Escuelas Reales y para las de las niñas. Fernando VII determina, por ello, que se restablezcan los censores establecidos en la disposición de su padre. Además, se dictan las instrucciones de 21 de febrero de 1816, aprobada posteriormente por Real Orden de 4 de abril del mismo año (véase la tabla 2.1.15), algunos de cuyos contenidos son de especial interés y que reproducimos siguiendo a Montero Alcaide (2021, 132).

Instrucción de 21 de febrero de 1816. Censores en las escuelas de niños y niñas pobres de Madrid

Teniendo presentes las Reales Ordenes, particularmente la de 25 de diciembre de 1791, y según su tenor, velarán sobre que en todas las escuelas Reales de niños se enseñe a leer y a escribir, por el método y reglas que tuvo adoptadas la de la Real comitiva, que es el del Excelentísimo Señor Don José de Anduaga⁴², y lo mismo en lo concerniente a la gramática castellana, ortografía aritmética, procediendo con ello con toda uniformidad. Y que en las escuelas de niñas se verifique la enseñanza de las labores de manos, según las sabias reglas dadas en al Real Cédula de 11 de mayo de 1783, que tendrán siempre a la vista, tanto los señores Censores como las Diputaciones, siendo obligación de las maestras enseñar a leer, y aun a escribir, a las niñas, si alguna quisiera dedicarse a ello, como expresamente está mandado en el art. 11 de la citada Real Cédula (5).

Otro de los puntos de la mayor importancia, sobre el cual han de vigilar mucho los Señores Censores, sin admitir el menor disimulo, es la policía interior y situación de las escuelas de ambos sexos; siendo su localidad precisamente en su respectivo barrio y aun en el centro mismo de él a ser posible; los edificios, de reconocida y total seguridad; las salas o aulas de la enseñanza y su cabida correspondiente, con proporción al número de niños y niñas que concurran; evitando cuidadosamente que la multitud pueda causar infección, respirando un aire mal sano, y de consiguiente perjudicial a la salud de maestros y maestras y sus respectivos discípulos. La disposición de las escuelas de uno y otro sexo, los muebles y demás que contengan, su figura, orden y colocación, todo deberá ser correspondiente al decoro de una Corte, aunque sin lujo (6).

Cada uno de dichos Señores Censores cuidarán de la puntual asistencia a sus respectivos escuelas de los maestros, maestras, pasantes, pasantas, discípulos y discípulas y de todo lo demás que sea concerniente a la debida y mejor enseñanza, observando las horas que están establecidas para la entrada y salida en las escuelas, y en el caso de notar alguna falta en los maestros de ambos sexos, o sus discípulos, lo harán presente a la Diputación que corresponda, para que se ponga el conveniente remedio, y si, lo que no debe esperarse, omitiese el hacerlo, lo manifestará el Señor Censor a la Junta General, para que en su vista tome la providencia que estime (7).

⁴² Recuérdese, como se ha apuntado en el apartado 2.1.4, que D. José de Anduaga fue el autor de la obra *Arte de escribir por reglas y sin muestras* (1781) y creo la Academia de Maestros como escisión del Colegio Académico. De dicha Academia de Maestros dependieron ocho escuelas reales que disponían de *Visitador e Inspector*.

Con acceso el 22 de marzo de 2022 en su versión de 1795 desde la url:

<https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=GYBHSO3K9KwC&oi=fnd&pg=PP5&dq=jose+de+anduaga&ots=bi4PJZH09C&sig=B8ldh4SCR0QsEy5QYwvQUMr6AvQ#v=onepage&q=jose%20de%20anduaga&f=false>

Una vez rehabilitada la Junta de Exámenes y vueltos a nombrar los censores, Fernando VII recupera las disposiciones de su padre, en tanto que se va conformando el plan de estudios encomendado a una junta de ministros en 1815.

2.1.10. Las Juntas Inspectoras de las Escuelas de Primeras Letras

En los comienzos del Trienio Liberal, como señala Montero Alcaide (2021, 135), un Decreto de las Cortes publica el Reglamento General de Instrucción Pública, de 29 de junio de 1821 (véase la tabla 2.1.16), que es considerado como la primera ordenación moderna de la educación en España. Fue un año antes de su aprobación, cuando se constituyó en las Cortes una Comisión de Instrucción Pública que aceptó el proyecto de Ley de 1814, elaborado a partir del denominado informe Quintana.

Es importante señalar las bases sobre las que se fundamenta dicho Reglamento pues muestra ciertos criterios que requieren control gubernativo. Lo reproducimos siguiendo a Montero Alcaide (2021)

Bases generales de la enseñanza pública. Reglamento General de Instrucción Pública, (1821)⁴³.

Toda enseñanza costeada por el Estado, o dada por cualquier corporación con autorización del Gobierno, será pública y uniforme (1).

En consecuencia de lo prevenido en el artículo anterior será uno mismo el método de enseñanza, como también los libros elementales que se destinen a ella (2).

La enseñanza pública será gratuita (3).

Los artículos anteriores no se entenderán en manera alguna con la enseñanza privada, la cual quedará absolutamente libre, sin ejercer sobre ella el Gobierno otra autoridad que la necesaria, para hacer observar las reglas de buena policía establecidas en otras profesiones igualmente libres, y para impedir que se enseñen máximas o doctrinas contrarias a la religión divina que profesa la Nación, o subversivas de los principios sancionados en la Constitución política de la Monarquía (4).

La enseñanza privada será extensiva a toda clase de estudios y profesiones (5).

Pero el que pretendiere dar a su enseñanza privada la autorización conveniente para la recepción de grados y ejercicio de profesiones, con la sola condición de examen y aprobación, lo expondrá previamente a la Dirección General de Estudios, la cual accederá a su solicitud, asegurándose de la idoneidad del aspirante a esta gracia por medio de un examen que harán los sujetos de su confianza designados al intento por la mismo (6).

Exceptúanse de esta disposición los Catedráticos y Profesores de los establecimientos públicos (7).

Los discípulos de estos maestros particulares serán admitidos a la recepción de grados y habilitación para el ejercicio de sus profesiones, siendo antes examinados por los respectivos maestros de las universidades de tercera enseñanza, o escuelas especiales, en

⁴³ Este reglamento figura en la *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes ordinarias de los años 1820 y 1821, en el segundo periodo de su diputación, que comprende del 25 de febrero al 30 de junio del mismo año*. Tomo VII, pp. 362-381. Citado por Montero Alcaide (2021,135).

cada una de las materias en que deben estar instruidos para aspirar a dichos objetos, y sujetándose después a las reglas establecidas en la materia (8).

Seguendo con lo preceptuado por el mismo Reglamento, la elección, vigilancia y remoción de los maestros correspondía a los Ayuntamientos. Así lo reproduce Montero Alcaide (2021, 136):

La elección de maestros para las escuelas públicas, la vigilancia sobre la conducta y la facultad de removerlos habiendo justa causa, corresponde a los ayuntamientos, conforme a la facultad 5ª que le concede la Constitución, y bajo las reglas que prescriban los reglamentos, salvo a los maestros su derecho para reclamarle ante las Diputaciones provinciales, las cuales, sin hacer novedad entretanto en la posesión, les oirán breve e instructivamente, como también a los Ayuntamientos sobre la causa de la remoción, y aprobarán o desaprobarán (17).

A la Dirección General de Estudios, bajo la autoridad el Gobierno, le corresponde la inspección y arreglo de toda la enseñanza pública (92).

La restauración absolutista de 1823 deroga este Reglamento y promulga el Plan y Reglamento de Primeras Letras de 6 de febrero de 1825 (véase la tabla 2.1.17), siendo Francisco Tadeo Calomarde Ministro de Gracias y Justicia, dando fin de esta forma a la legislación desarrollada desde la Constitución de 1812 y por tanto al Reglamento General de Instrucción Pública.

Deja de estar vigente, por tanto, la Dirección General de Estudios⁴⁴ con la promulgación del Plan y Reglamento de Escuelas de Primeras Letras. De esta forma la Inspección General de Instrucción Pública, que veremos en el siguiente epígrafe, reemplaza con el Plan y Reglamento de Escuelas de Primeras Letras, a la Dirección General de Estudios.

Merece la pena señalar la creación, en el art. 125 del Plan y Reglamento de Escuelas de Primeras Letras, de Juntas Inspectoras: superior, de capital de provincia y de pueblo, a fin de desarrollar la parte que le corresponda del gobierno, inspección y dirección de las escuelas. Su literalidad, que utiliza Montero Alcaide (2021, 138) reza:

El gobierno, inspección y dirección de las Escuelas pertenecen al Consejo Real, y respectivamente en la parte que se dirá, a la Junta Superior, a las de Capital de Provincia y a las de Pueblo, inspectoras de las Escuelas de primeras letras.

La Junta Superior de Inspección se establece con la superior autoridad, inspección y vigilancia sobre todas las escuelas.

El art. 127 establece su composición:

Se establecerá una Junta Superior de Inspección de todas las Escuelas del Reino, la que compondrán un Ministro del Consejo Real, Presidente, y un Eclesiástico condecorado, nombrado por S.M., el Provincial de las Escuelas Pías de Castilla y dos Maestros de primera clase, que también nombrará el Rey nuestro señor, con un secretario sin voto (126)

La Junta Superior es la encargada de la ejecución y puntual cumplimiento de este Plan y Reglamento en todas las Escuelas del Reino, sobre las cuales se ejercerá una superior autoridad, inspección y vigilancia (127).

⁴⁴ La Dirección General de Estudios fue establecida en el art. 369 de la Constitución de 1812. Estos extremos se desarrollarán más adelante. El literal del artículo es:

Habrà una Dirección General de Estudios, compuesta de personas de reconocida instrucción, a cuyo cargo estará, bajo la autoridad del Gobierno, la inspección de la enseñanza pública.

La Junta Superior Inspectora tenía también el cometido de resolver las dudas leves, consultar las de más alcance al Rey o al Consejo; promover la dotación de las escuelas y *el celo en esa misma materia de las Juntas de capital de provincia y de pueblo para lograr que ningún pueblo, si fuere posible, carezca de la primera enseñanza, y que los maestros y pasantes no yazcan en la pobreza y el envilecimiento*; vigilar la impresión, distribución y, en caso de niños pobres, gratuidad de los libros que han de enseñarse en las escuelas; admitir y examinar, proyectos o métodos; reconocer méritos, o registrar los títulos expedidos por el Consejo. Asimismo, las Juntas de Capital han de dar cuenta a la Junta Superior de las oposiciones, exámenes y otras provisiones que se verifiquen, con especificación de las clases y dotaciones de las escuelas y de los arbitrios que haya o puedan proporcionarse, además de los certificados de aprobación que expidiesen (Montero Alcaide, 2021, 139).

Las Juntas Inspectora de capital de Provincia ejercían la inspección y vigilancia de las escuelas de la provincia, con posibilidad extraordinaria de nombrar visitadores para la inspección de escuelas. Durante estas visitas, cesaba la autoridad de las Juntas de Pueblo.

Importante es señalar que las Juntas de Capital tenían atribuidas la vigilancia e inspección de las escuelas de la provincia, pero *sin perjuicio de la que las leyes encargan a los Corregidores y Alcaldes mayores en las escuelas de sus respectivos partidos* (139). Estos informaban a las Juntas de Capital de lo que estimara conveniente sobre el estado, dotación, mejora o defectos de la enseñanza.

Cada dos años las Juntas de Pueblo debían informar a las de Capital sobre el estado de las escuelas, con propuestas para la perfección de la enseñanza o para resolver las cuestiones que lo dificultan.

Por otra parte, en cada pueblo las Juntas Inspectoras habían de visitar regularmente las escuelas cada dos meses, para inspeccionar la instrucción, los métodos de enseñanza, corregir a los *niños desaplicados y díscolos* y amonestar, si era necesario, privadamente a los maestros, (147-149).

Las Juntas de Pueblo cuidaban también de pago puntual a los maestros y pasantes *así como celarán la conducta de estos, y aun la de los niños dentro de las escuelas* (152), como, además, de que la enseñanza sea *muy cristiana y metódica, con puntual observancia de los deberes y prácticas religiosas que se prescriben*. En su caso, reclamaban al ayuntamiento los auxilios necesarios para las escuelas; sobre todo, el menaje y libros para los pobres.

La inspección y vigilancia sobre la educación moral correspondía a los obispos y párrocos, por lo que el propio reglamento establecía dicha encomienda a los *M.RR. Arzobispos y Obispos (...)* *promoviendo el establecimiento, dotación y buena enseñanza en las Escuelas de primeras letras; visitándolas, aun cuando alguna estuvieren bajo la inmediata protección Regia, al mismo tiempo que se hagan las visitas de sus parroquias; suspendiendo a cualquiera Maestros que enseñaren errores en materia de doctrina o de moral cristiana, y dando cuenta de esta providencia para que se provea de otros, sin perjuicio de las canónicas que por autoridad divina y con arreglo a los Cánones acordaren* (156). Los prelados debían nombrar para ello, maestros instruidos y piadosos.

El Plan y Reglamento regulaba además otros aspectos con respecto a la enseñanza primaria: la realización de los exámenes particulares y públicos, que realizaban los maestros para el paso de una clase a otra. Las Juntas de capital o las de pueblo, cuando visitaban las escuelas, podían celebrar también exámenes particulares.

Los maestros debían pasar una oposición que llevaba a cabo las Juntas Capital o Provincia, con el método fijado por la Junta Superior Inspectora de todas las escuelas del Reino. La Junta emitía un certificado de aprobación correspondiente al examen o a la oposición; en este último caso, ese certificado bastaba para obtener el título del Consejo.

2.1.11. La Inspección General de instrucción pública

En este momento del desarrollo histórico que relata los antecedentes de los inspectores de educación y ya próxima a su creación normativa como unidad y cuerpo de funcionarios, es necesario mencionar, siguiendo a López de Castillo (2012, 79), la creación de la Inspección General de instrucción pública en el primer cuarto del siglo XIX, mostrando la sorpresa porque dicho importante hito no haya sido desarrollado en los escritos de Montero Alcaide (2021), sino de forma muy liviana.

López del Castillo (2013) realiza una amplia exposición de los antecedentes, justificaciones y estructura normativa de dicha Inspección General, que tiene como específica diferencia, que creemos que podría haber orientado a Montero Alcaide, el que estaba dirigida a la Escuelas de Latinidad y Colegios de Humanidades, equivalente a lo que hoy conocemos como segunda enseñanza y algo separada, por tanto, de la enseñanza inicial, básica, o de primeras letras.

López del Castillo (2013) tras investigar en las actas del Consejo de Ministros del periodo 1824-1825, relata que en el celebrado a principios de noviembre de 1825, Calomarde presentó el proyecto de Reglamento para las Escuelas de Latinidad y Colegios de Humanidades con la inclusión de *crear una junta de inspectores de todos los ramos de estudios, en que se reúnan sabios y literatos dedicados exclusivamente a tan ingresante servicio*⁴⁵. En el preámbulo de dicho Reglamento se explicita y concreta la idea:

Las mejores leyes en materia de instrucción son inútiles y quedan ilusorias, si no hay una Magistratura o corporación encargada única y exclusivamente de hacer que se ejecuten, de la cual emanen todas las providencias, y en donde se reúnan como en un centro, las noticias necesarias para reformar los planes cuando convenga, conocer los progresos que hace la enseñanza pública, corregir los abusos que en ella se introducen, y observar la conducta de los maestros y la de los jóvenes que siguen la carrera de las letras.

De esta forma y citando a López del Castillo (2013, 80) el art. 104 del propio Reglamento confía la ejecución de sus disposiciones ...

... al celo de la inspección general de instrucción pública que inmediatamente se formará e instalará en Madrid, y conocerá de todos los asuntos relativos a la enseñanza pública en que hasta aquí entendía el Consejo Real, al cual sin embargo consultará el Rey los negocios que lo exigieren por su gravedad e importancia. Instalada la inspección, cesará la Junta Superior de Escuelas de primeras letras y la de Directores de las Universidades.

La inspección general estaba compuesta por altos funcionarios y personas de prestigio intelectual y como menciona López del castillo, con un denominador común, que era la fidelidad al Rey y a la Iglesia. La misma autora señala que la confianza de la secretaría recayó en José Mamerto Gómez Hermosilla, a quien otorga la autoría del propio proyecto de Reglamento de las Escuelas de Latinidad y Colegio de Humanidades.

Finalmente se publicó el Reglamento de la Inspección General de Instrucción Pública, una vez aprobado por el Rey, el 13 de marzo de 1826 (véase la tabla 2.1.18). Dicho Reglamento que ha sido ampliamente estudiado y desglosado por López del Castillo (2013, 82) se dividía en dos títulos: facultades y obligaciones; en ellos se desglosaban detalladamente las atribuciones y las atribuciones.

⁴⁵ Actas del Consejo de Ministros. Fernando VII. Tomo I (1824-1825). Madrid: Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, 1898; pp. 389-399.

Dada su singularidad reproducimos a continuación su articulado más significativo y resumido.

Atribuciones.

En cuanto a las escuelas de primera enseñanza le corresponde:

- *Mandar cerrar las escuelas, pensiones y casas de enseñanza regidas por empresa particular que no deban subsistir según los reglamentos.*
- *Expedir los títulos a los Maestros y Maestras, registrar los ya expedidos por el Consejo y concederles la carta de jubilación.*
- *Decidir sobre las reclamaciones de los maestros que se consideren agraviados en las elecciones para escuelas de oposición.*
- *Consultar al Rey lo que estimen sobre las solicitudes que decidan para establecer escuelas, colegios o casas de pensión.*
- *Hacer y mandar todo lo que la suprimida Junta Superior de Inspección de Escuelas del Reino podía hacer y mandar.*

Sobre las enseñanzas no reguladas en los reglamentos:

- *Conceder y negar permisos para tener academias, y dar por estipendio lecciones de matemáticas, lenguas vivas y otras materias literarias.*

López del Castillo (2013) sigue relatando las atribuciones que con carácter general tenía la Inspección General para todos los niveles de enseñanza.

a) En relación con los libros de texto:

- *Determinar las obras que en todos los ramos de la enseñanza pública deban escribirse de nuevo, adicionarse, corregirse o traducirse.*
- *Imprimirlas con solo su censura, previa, en su caso, la del ordinario; y venderlas por su cuenta o ceder su privilegio por el tiempo y bajo las condiciones que crea más ventajosas.*
- *Reimprimir en las mismas condiciones, las ya publicadas, que siendo libros de asignatura en universidades y escuelas públicas no tengan dueño, o cuyo privilegio hubiera expirado.*

b) Respecto a la Inspección y la vigilancia

- *Inspeccionar todas las Universidades, Escuelas de Latinidad y de Primeras Letras, los Colegios de Humanidades, los seminarios no Conciliares y los demás establecimientos literarios no exceptuados; pero aun estos, velará para que se observen los Reglamentos en orden al método científico y literario.*
- *Inspeccionar las Academias de Primeras Letras, de Latinidad y Humanidades ya establecidas o que se establezcan, y proponer al Rey las leyes que sean necesarias para su gobierno.*
- *Proponer al Rey, cuando convenga, Visitadores para las Universidades; y nombrarlos por sí para los Colegios sometidos a su vigilancia, las escuelas de Latinidad y las de Primeras Letras.*

c) Continúa López del Castillo con lo que denomina atribuciones ejecutivas:

- *Pedir informes y dar órdenes, en las materias de su competencia, a las personas y corporaciones a quienes corresponda, compelerlas a su cumplimiento por los medios legales, y dar cuenta al Rey en caso necesario.*

d) Atribuciones relativas a la Reforma del sistema.

- *Consultar al Rey las providencias, reformas y variaciones que crea convenientes en el sistema de instrucción pública ya establecido.*

Esta relación muestra un amplio y desarrollado elenco de atribuciones que otorgaban un gran poder en relación a la enseñanza, centrados no sólo en el cumplimiento de lo reglamentado, sino también por la posibilidad de proponer cambios en las mismas.

En el capítulo dedicado a las obligaciones se reiteran algunas de las atribuciones y se añaden otras. Es de señalar la importancia que se otorga a la vigilancia de las doctrinas, profesores y alumnado. López del Castillo se permite reagruparlas y clasificarlas prescindiendo del orden del texto.

a) Vigilancia de profesores, alumnos y doctrinas.

- *Ejercer la policía más activa y vigilante sobre catedráticos, profesores y maestros de todas clases sobre los jóvenes que se dediquen a la carrera literaria, observando a estos desde la escuela de primeras letras hasta la conclusión de sus estudios.*
- *Formar con este objeto libros y registros reservados en que se anoten el nombre y naturales de todos los estudiantes del reino y «cuando pueda convenir para conocer su conducta cristiana, moral y política, su capacidad y aplicación, sus progresos en el estudio y su diferente aptitud para los cargos y destinos a que en lo sucesivo podrán ampliar en sus respectivas carreras».*
- *Dar, con arreglo a estos registros las noticas reservadas que le fueren pedidas por el gobierno, los prelados eclesiásticos y los jefes civiles y militares.*
- *Exigir a los rectores noticias de los estudiantes que se expulsen y anotarlas en la hoja de estudios que deberá formarse a todos los que siguen la carrera literaria.*
- *Tener noticas de aquellos que obtengan los premios establecidos y anotarlo igualmente en sus hojas.*
- *Promover, por todos los medios que el Rey ha puesto a su disposición, la propagación de sanas doctrinas en todos los ramos del saber, e impedir que ni pública, ni privadamente se difundan errores perniciosos, señaladamente en materias de Religión y de Gobierno.*
- *Hacer que se ejecuten en todas sus partes y según su tenor literal los Reglamentos de Universidades, Colegios de Humanidades y Escuelas de Latinidad y Primeras letras, y las leyes anteriores no derogadas por ellos.*

b) Gobierno y promoción de la enseñanza.

- *Promover y facilitar la erección de Colegios de Humanidades en las ciudades y villas en que deba hacerlo, proponiendo al Rey los medios de dotar los que lo necesiten, y las providencias que convengan para remover los obstáculos que el interés privado u otras causas opongan a la fundación de tan útiles establecimientos.*

- *Disponer que se escriban, adicionen, corrijan o traduzcan las obras que se estimen necesarias para las escuelas públicas de todas clases, ofreciendo premios a los profesores y literarios, y recomendando para su colocación o ascenso a los que hubiesen hecho señalados servicios.*
- *Elaborar el reglamento revisto en el artículo ocho del Plan de Estudios (en lo relativo a los Colegios incorporados a las Universidades).*
- *Recoger las tablas de las asignaturas, de que trata el art. 99 del mismo Plan, y formar una que sirva para todas las universidades.*
- c) *López del Catillo organiza otras obligaciones bajo el epígrafe de Gestión e información.*
 - *Reconocer, coordinar y custodiar en su archivo cuantos expedientes y papeles relativos a la enseñanza pública existan en las secretarías de los Consejos, en poder de los Directores de las Universidades o en cualquier oficina.*
 - *Evacuar los informes que se le pidan por la superioridad y despachar sin demora los expedientes que por sí misma pueda resolver.*
 - *Pasar a S.M. a fin de curso un estado de los estudiantes que ha habido en las Universidades, Colegios y Seminarios incorporados a ellas, y Colegios de Humanidades, exigiéndolos de los rectores conforme a la Circular de 19 de junio d 1825.*
 - *Dar cuenta fin de curso del estado en que se hallen todos los establecimientos literarios, de los progresos que se noten en las enseñanzas y de cuanto la inspección haya hecho para mejorarla añadiendo las observaciones que considere dignas de la Soberana atención.*
 - *Dar cuenta anual de los caudales que ingresen en su tesorería, y de su inversión.*
- d) *Por último, López del Castillo finaliza con una obligación centrada en lo que denomina como derecho de propuesta:*
 - *Proponer al Rey cuantas disposiciones, leyes y providencias crea útiles para fomentar la ilustración general.*

El Reglamento terminaba con un artículo que declaraba derogar todas las leyes, órdenes y providencias que se opusieran a dicho reglamento, disponiendo igualmente la comunicación para su puntual cumplimiento a *todos los establecimientos de enseñanza pública sujetos a su autoridad.*

Es por tanto, una propuesta de organismo sólido, que López del Castillo asemeja a la propia Dirección General de Instrucción Pública mencionada en el art. 369 de la Constitución de 1812.

López del castillo (2013), consideramos que con el criterio de Ramírez Aísa (2003), analiza la rapidez con que se publicó el citado Reglamento, así como las incidencias políticas de la época con la creación de un reducido Consejo de Estado, que en su sesión de 28 de septiembre de 1826 formuló diversas críticas a la propuesta, a la actuación de la inspección y mostró su rechazo al nuevo organismo al considerarlo, tal y como cita a Ramírez Aísa (2003), gravoso e innecesario.

2.1.12. Las Juntas de Inspección

En el final de reinado del Carlos IV, la constitución de las juntas de exámenes, dependientes del Consejo de Castilla, reduce el control gremial de la enseñanza y desdibuja las corporaciones que lo ejercían. Durante la Guerra de la Independencia, con el rey Carlos IV y su hijo Fernando VII en Bayona, la resistencia que organiza las Cortes de Cádiz procura la configuración de un Plan General de la Enseñanza, con distintas bases, informes y proyectos (Jovellanos en 1809 y Quintana en 1813 y en 1814). Si bien el regreso de Fernando VII en 1814, recupera la junta de exámenes y los censores de las escuelas gratuitas, con cometidos en ambos casos de inspección de las escuelas y sus maestros, mientras se elabora un Plan General de Estudios, encomendado en 1815, a una junta de ministros.

Le antecedió, en el trienio liberal que interrumpe el absolutismo, un Reglamento de Instrucción Pública de 1821, entre cuyas disposiciones figura la atribución a los ayuntamientos de facultades tanto para la elección de los maestros como para la vigilancia de su conducta y su remoción. Hasta que, en 1825, se publica el Plan y Reglamento de Escuelas de Primera letras, que ya se ha citado, diez años después de su encargo por Fernando VII, y se crean las Juntas Inspectoras, tanto superior, del reino, como de capitales y provincias y de pueblo.

Tales juntas tenían claros cometidos de inspección, pero como señala Montero Alcaide (2021) de parecido modo al de las juntas de exámenes, esas funciones quedaban en segundo plano y eran menos factibles que otras competencias principales.

En definitiva, la inspección más cercana y continua de las escuelas correspondía a la Juntas de Pueblo, cuyos miembros no parecían, ni debían tener específica cualificación, dado que, por razones de carácter local, generalmente con una o pocas escuelas, los maestros no formaban parte de ellas.

De esta forma puede concluirse que la inspección educativa era atribuida a un órgano municipal, escasamente cualificado a tal efecto, y que la propia inspección reglamentada de las escuelas de primeras letras la ejercía, en sus distintos ámbitos, como una delegación gubernativa, mediante juntas presididas por ministros, corregidores o alcaldes, sin que tal ejercicio de la inspección se llevara a cabo, sobre todo en las juntas de pueblo, que tenían encomendadas visitas periódicas, por personas especialmente facultadas o con alguna profesionalidad. Aunque en el caso de la Junta Superior o Juntas de Capital, entre sus miembros figuraban maestros: dos – de los cuatro miembros con voto- en el caso de la Superior y tres – de los cinco miembros con voto- en el caso de las de capital. El ejercicio reconocido de la docencia fue asimismo considerado para el nombramiento de los examinadores, cuando se constituyen las corporaciones gremiales, así como en la composición de la junta de exámenes que, finalmente, además de ese cometido, tuvieron el de la inspección de las escuelas y maestros.

Como apunte particular, tal y como menciona Montero alcaide (2021), el Plan y Reglamento de Primeras Letras, de 1825, utiliza el término *inspectoras* como título otorgado a *señoras instruidas, timoratas y celosas* que, en las ciudades y villas populosas, podían auxiliar a las maestras y cooperar a la mejor educación de las de su sexo.

Tanto el Reglamento de Instrucción Pública de 1821, como el Plan y Reglamento de 1825, otorga un destacado papel a los ayuntamientos –sobre todo, el reglamento de 1821- y órganos provinciales en los cometidos de inspección, relacionados asimismo con otros aspectos importantes, como es el de la selección de los maestros.

Y de la misma forma las juntas, en su reglamentación de 1825, tienen atribuidas el carácter de *inspectoras*, sin que tal atribución se acompañe de la constitución, como ocurrirá a mediados de

siglo con la creación de un específico cuerpo de inspectores de educación. Como diría Montero Alcaide (2021): *Juntas Inspectoras, que no inspectores*.

2.2. Etapa normativa

En este momento vamos a iniciar el estudio de las funciones, tareas, responsabilidades, incumbencias, etc. que el marco normativo ha asignado a la inspección de educación, mediante el análisis de fuentes primarias (en la normativa promulgada). Lo desarrollaremos, de una forma jerarquizada, comenzando por las referencias a la inspección de educación en los marcos constitucionales, y con un extenso estudio en lo relativo a la Constitución de 1812; seguiremos por las referencias en la normativa general que ha regulado el sistema educativo; a continuación, realizaremos un estudio de las referencias a las funciones, asignadas a la inspección de educación, de la normativa específica que la ha regulado: reales decretos, decretos, órdenes y resoluciones; y finalizaremos con el estudio específico del tejido normativo que ha regulado a la inspección de educación en la Comunidad de Madrid.

Se puede ver el cronograma de los cuerpos constitucionales, de la normativa educativa general y de la normativa de desarrollo ha regulado específicamente a la inspección de educación durante su historia, de una forma sintética, en las imágenes 5, 6, 7 y 8. Pretendemos realizar un relato histórico y funcional, breve y comprensible de cada documento normativo, señalando el contexto histórico y la diferenciación o hito que ha establecido para la inspección de educación.

Entendemos que en este momento es necesario realizar una sencilla introducción para poder perfilar el trazo o transición entre la fase atécnica y técnica según términos de Maíllo (1967), o como hemos preferido denominar: etapa prenortativa y etapa normativa, para describir de una forma más extensa, ese contexto; se hace necesario, que esta concreta descripción contextual, sea algo más amplia.

A este respecto es interesante y amplio el estudio de Montero Alcaide (2021) que de una forma profusa y muy desarrollada realiza un denso estudio sobre este periodo.

La regulación gremial del magisterio y las escuelas primarias sufre un deterioro a comienzos del siglo XIX. La Revolución francesa contribuyó a la abolición histórica del antiguo Régimen. En España, la situación en los últimos años del reinado de Carlos IV, provocó gran desconcierto, con decisiones polémicas y en algún sentido controvertidas de su primer ministro Manuel Godoy, así como tensiones entre el rey y su hijo, que finalmente se convertiría en Fernando VII.

Por consejo de Godoy, Carlos IV firma el acuerdo de colaboración con Napoleón para la ocupación del Portugal en lo que se conoció como el Pacto de Fontaineblau, de 1807. La clara intención francesa era apropiarse también de nuestro país, pues las tropas francesas de paso por España fueron asentándose en las principales ciudades españolas. La población entendiendo que se trataba de una invasión comenzó a rebelarse y Fernando, hijo del rey, se levantó contra su padre y contra Godoy en el motín de Aranjuez de 1808.

Carlos IV abdica y se recluye en Bayona. Aunque Fernando VII es nombrado rey, Napoleón lo traslada con sus padres y tras conseguir su abdicación entrona a su hermano José Bonaparte, como rey de España. Es el inicio de la guerra de la independencia con un señalamiento de los sectores más opuestos al liberalismo que traía la invasión francesa.

Desde 1808 hasta 1813 se desarrolla esa guerra con la ayuda final de Inglaterra para expulsar las tropas napoleónicas. Como consecuencia de la guerra, se produce una división interna en España, entre nobles e intelectuales que colaboraron con el antiguo régimen, a los que se les nombraba como afrancesados, y una parte de la población y de la milicia que luchó contra los invasores. No podemos olvidar que entre los partidarios del régimen liberal también hubo diferencias: unos eran tradicionalistas y otros defendían las ideas ilustradas y liberales de la Revolución francesa.

Montero Alcaide (2021) continúa desarrollando que, durante la guerra, que principalmente fue una guerra de guerrillas, se organizan Juntas de defensa; y es en Cádiz donde se constituye la Junta Central de Defensa, con la creación de un gobierno alternativo al de José Bonaparte, que promueve la redacción de la Constitución de 1812 inspirada en los principios de igualdad y separación de poderes, muy asimilable a las constituciones democráticas, aunque su vigencia fuera prácticamente escasa o nula.

Con el regreso de Fernando VII el entusiasmo constitucional se desvanece, pues el rey no ratifica la Constitución recuperando el régimen absolutista. Es la etapa de un gobierno de mano dura, represión, censura y persecución de los liberales afrancesados, que condujo a distintos levantamientos militares: este es el periodo denominado como *sexenio absolutista*, de 1814 a 1820, periodo en el que se independizaron la mayor parte de las colonias españolas en América.

Entre 1820 y 1823 se desarrolla el *trienio liberal* tras el levantamiento del general Riego, como consecuencia del aumento del malestar de los militares y liberales con el rey. El motín de la Granja de 1820, obliga a Fernando VII a firmar la Constitución de 1812 y a establecer la monarquía parlamentaria, con división de poderes. Fernando VII se enfrentó al nuevo Gobierno, reclamó ayuda a las monarquías europeas y el ejército francés de los *cien mil hijos de san Luis* invadió el país en 1823 para ayudar a la restauración del régimen absolutista.

Después de ese *trienio liberal* se pasa a la época denominada como *década ominosa*, de 1823 a 1833. En dicha época se produjeron pequeñas concesiones liberales, como la creación del Consejo de Ministros, aunque se le denomina como el peor periodo de Fernando VII. La oligarquía de carácter más conservador y radical expresó su apoyo al hermano del rey, Carlos María Isidro, como supuesto sucesor legítimo ante la ausencia de hijos varones, que representa el preámbulo de las guerras carlista. Fernando VII, aunque disfrutaba de alguna popularidad entre el pueblo, deja el país sumido en una gran crisis económica y social.

2.2.1. En las Constituciones

Tras esta reseña histórica, iniciamos el análisis normativo por los cuerpos constitucionales. Dado el objeto del estudio, no se considera necesario realizar tablas de yuxtaposición entre las funciones asignadas a la inspección de educación en la Ley Orgánica 2/2006 y los preceptos constitucionales, más generales y amplios.

Es importante señalar, en cuanto al primer documento, que la Constitución Española de 1812, aprobada el 19 de marzo, y con tal motivo apodada como *la Pepa*⁴⁶, por celebrarse ese día la festividad de San José, dedica el título IX a la Instrucción Pública, con cinco artículos de importante calado, siendo el primer hito constitucional en mencionar la competencia inspectora.

El antecedente educativo de este importante y primigenio marco regulador, se encuadra, pocos años antes, cuando Gaspar Melchor de Jovellanos, presentó *las Bases para la formación de un Plan de General de Instrucción Pública* (16 de noviembre de 1809)⁴⁷.

⁴⁶ «la Pepa se escribe con el artículo en minúscula y sin comillas» según la apreciación de Fundéu RAE. Consultado el 9 de octubre de 2022 en la url: <https://www.fundeu.es/recomendacion/la-pepa-se-escribecon-el-articulo-en-minusculay-sin-comillas-1286/>.

⁴⁷ Tomo I de la Historia de la Educación en España: “Del despotismo ilustrado a las Cortes de Cadiz”, en edición de 1985, pp. 351 a 373, publicado por el Ministerio de Educación.

El literal original del título IX, dedicado a la Instrucción pública, de la Constitución de 1812⁴⁸ es el siguiente:

- Constitución de 1812

Título IX: De la Instrucción pública.

Capítulo único.

Art. 366.- En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles...

Art. 367.- Asimismo se arreglará y creará el número de competente de universidades y de otros establecimientos de instrucción, que se juzguen convenientes para la enseñanza de todas las ciencias, literatura y bellas artes.

Art. 368.- El plan general de enseñanza será uniforme en todo el reyno, debiendo explicarse la Constitución política de la Monarquía en todas las universidades y establecimientos literarios, donde se enseñen las ciencias eclesiásticas y políticas.

Art. 369.- Habrá una dirección general de estudios, compuesta e personas de conocida instrucción, á cuyo cargo estará, baxo la autoridad del Gobierno, la inspección de la enseñanza pública.

Art. 370.- Las Cortes, por medio de planes de estudio especiales, arreglarán quanto pertenezca al importante objeto de la instrucción pública.

Art. 371.- Todos los españoles tienen la libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión ó aprobación alguna anterior á la publicación, baxo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes.

En el discurso preliminar a la Constitución, a la Dirección General de Estudio, creada en la propia constitución, se le atribuye la *inspección suprema de la Inspección Pública*. Debe tenerse también en cuenta que la Constitución, en su art. 23, establecía que *solo los que sean ciudadanos podrán obtener empleos municipales, así como elegir para ellos en los casos señalados por la ley*.

Meses después de proclamada la Constitución, una junta creada para proponer los medios de proceder al arreglo de la instrucción pública, presenta el 9 de septiembre de 1813, el conocido como *Informe Quintana*: Informe de la Junta creada por la Regencia para *proponer los medios de proceder al arreglo de los diversos ramos de instrucción pública*.

Dicho informe defendía que la instrucción debía ser universal, uniforme, publica, gratuita y libre:

No pudiendo el Estado poner a cada ciudadano un maestro de su confianza, debe dejar a cada ciudadano su justa y necesaria libertad para elegirlo por si mismo. Así las escuelas particulares suplirán en muchos parajes la falta de las escuelas públicas, y la instrucción ganará en extensión y perfección lo que se gane en liberta y desahogo.

Con respecto a la Dirección General de Estudios, el informe incluía entre sus funciones la de visitar los establecimientos de enseñanza y dar cuenta a la Corte y a la Nación del estado de la

⁴⁸ Constitución española de 1812. Documento original de la web del congreso de los Diputados, con acceso el 2 de agosto de 2019, en la url:

https://www.congreso.es/docu/constituciones/1812/ce1812_cd.pdf

instrucción pública, además de insistir en la independencia que la Dirección General debe tener en el ejercicio de sus atribuciones. El informe, que generó un proyecto de decreto, no se llegó a discutir ante el regreso de Fernando VII, concluida la guerra de la independencia.

Es en el texto articulado del proyecto de decreto en el que aparecen algunas facultades de la Dirección General.

Velar sobre toda la enseñanza pública, y cuidar de que se observen los reglamentos establecidos (97.1); Visitar por medio de algunos de sus individuos o comisionados de su confianza los establecimientos de instrucción pública, de modo que cada tres años se verifique haberse inspeccionado todos (97.7).

Con la vuelta de Fernando VII, como se ha apuntado, se rehabilita la Junta de Exámenes mediante la Real Orden de 27 de junio de 1814 (Luzuriaga, 1917, 115) accediendo de esta forma a la petición formulada por la *Real Junta de Exámenes de Maestros de Primeras Letras*, de Madrid.

Sin embargo, a lo largo del reinado de Fernando VII, los exámenes de los maestros, hasta su regulación en el Plan y Reglamento de Escuelas de Primeras Letras, de 16 de febrero de 1825, con la creación de Juntas de Capital o de Provincia, sufrió distintos cambios en lo que respecta a las instrucciones que los llevaba a cabo (en el *trienio liberal* se le atribuye a las Diputaciones provinciales, por ejemplo), como ha quedado reflejado en el epígrafe 12 del apartado anterior. Finalmente, tal y como ha quedado también recogido, en 1816 se restablecen también los censores en las escuelas de niños pobres.

En suma, el art. 369 establece: *La inspección de la enseñanza pública* a cargo de una Dirección General de Estudios que, debido a la compleja situación sociopolítica, no pudo terminar de regularse hasta una década después. Así el 29 de junio de 1821, durante el trienio liberal, se promulgó el Reglamento General de Instrucción Pública.

- Estatuto Real para la convocatoria de las Cortes Generales del Reino. Madrid 1834

En la web de «Historia del Congreso» del Congreso de los Diputados del Estado Español⁴⁹ se introduce el Estatuto Real, así como el resto de cuerpos constitucionales, con textos de los que se han elaborado los correspondientes contextos e introducciones, con la intención de facilitar su comprensión histórica. Utilizamos su contenido como base para la elaboración de cada entrada.

Tras la muerte del rey el 29 de septiembre de 1833, el 3 de octubre se hizo público su testamento, en el que nombraba a su viuda, María Cristina de Borbón, Gobernadora del Reino durante la minoría de edad de su hija Isabel II, instituyéndose un Consejo de Gobierno que habría de asesorarla y que se encargaría de realizar una posible transición liberal. La reforma, dirigida en primer término por Cea Bermúdez y más tarde por Martínez de la Rosa, no restablecería la Constitución de 1812, pero sí abriría el paso a un nuevo texto: El Estatuto Real de 1834.

El Estatuto Real fue una carta otorgada flexible, breve e incompleta. De tan sólo 50 artículos, que regulaban la organización de las Cortes, sus funciones y sus relaciones con el Rey, no recogía ningún título dedicado a la Monarquía ni a sus Ministros y, sobre todo, no contenía una declaración de derechos fundamentales del ciudadano. Se trató de una Carta Otorgada, similar

⁴⁹ Información extraída de la web del Congreso de los Diputados con acceso el 2 de agosto de 2019, en la url: <https://www.congreso.es/cem/estreal1834>.

a la concedida por Luis XVIII a los franceses en 1814. Es decir, una dejación voluntaria de poderes por parte de la Corona, que se vio obligada por las circunstancias a transferirlos a otros órganos.

En cuanto al objeto de estudio, no existe mención alguna a la inspección de educación.

- Constitución de la Monarquía Española. 18 de junio de 1837⁵⁰

Tal y como consta en el preámbulo de este marco constitucional:

Siendo la voluntad de la Nación revisar, en uso de su soberanía, la Constitución política promulgada en Cádiz, en diez y nueve de marzo de mil ochocientos doce, las Cortes generales congregadas a este fin decretan y sancionan la siguiente Constitución de la Monarquía Española.

La Constitución incorporó, por vez primera en nuestra historia constitucional, una declaración sistemática y homogénea de derechos. Entre los derechos que entonces se recogieron figuran la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de expresión, las garantías penales y procesales, el derecho de petición, la igualdad, el acceso a los cargos públicos y las garantías del derecho de propiedad.

En esta misma línea y en cuanto al objeto de estudio, no existe mención alguna a la inspección de educación.

- Constitución de 1845. Reforma de la Constitución de 1837. 23 de mayo de 1845⁵¹

La andadura del régimen constitucional de 1845, se inició tras una época difícil de la historia de España: desde la Guerra de la Independencia, el impulso que dejó el régimen gaditano había provocado reacciones de todo tipo, tanto absolutistas como liberales, que contribuyeron a crear un clima de anormalidad y desasosiego, que se arrastraría hasta 1840.

La Guerra Carlista, el cambio que se produjo en el régimen de la propiedad, con la desamortización de Mendizábal, la inestabilidad de la regencia de María Cristina, marcaron el período transcurrido entre 1837 y 1840, año en que se inicia la turbulenta gestión de Espartero, violentamente interrumpida en 1843. En ese momento comienza la llamada «Década moderada», que abre la subida al poder de Narváez en mayo de 1844, que cerrará la sublevación de julio de 1854, denominada *La Vicalvarada*.

En una sociedad en la que las nuevas realidades económicas se abrían paso con serias dificultades por existir todavía residuos bastante profundos del Antiguo Régimen, el mérito de los moderados consistió en saber escoger una vía intermedia entre las diversas opciones políticas existentes: la moderada de Narváez, Pidal y Sartorius; la conservadora autoritaria de Viluma, Egaña y Bravo Murillo; y la puritana de Pacheco y Ríos Rosas. Se trataba de la misma generación exaltada y revolucionaria de 1820 o de 1834, pero que ahora se había vuelto conservadora del nuevo orden recién conquistado. La reforma tributaria de Mon, la reforma educativa de Moyano, la creación de la Inspección de Educación por impulso de Antonio Gil de Zárate, el programa de obras públicas de Bravo de Murillo, la labor administrativa de Alejandro

⁵⁰ Información extraída de la web <https://www.congreso.es/cem/const1837> con acceso el 2 de agosto de 2019.

⁵¹ Información extraída de la web <https://www.congreso.es/cem/const1845> con acceso el 2 de agosto de 2019.

Oliván y Pedro José Pidal, la creación de la Guardia Civil por el duque de Ahumada, fueron sus principales logros. Gracias al afán constructivo de sus protagonistas, este periodo supuso el finiquito del Antiguo Régimen, el impulso de la revolución burguesa y el triunfo definitivo del Estado liberal: herencia clara del período isabelino.

Sorprendentemente, tampoco existe en su articulado, mención alguna a la inspección de educación.

- Reforma Constitucional de 15 de julio de 1857⁵². Sancionada el 17 de julio de 1857

Esta sencilla reforma, impulsada por el gobierno de Narváez, modifica los artículos constitucionales vigentes 14, 15, 16, 17, 18 y 28, cuyo objeto es la organización del Senado.

No menciona en su texto a la inspección de educación.

- Reforma Constitucional de 18 de abril de 1864⁵³

Este sencillo texto, deroga la Reforma constitucional de 17 de julio de 1857 y restablece en su integridad la Constitución del Estado de 1845.

No hay mención a la inspección de educación.

- Constitución de la Nación Española promulgada el día 6 de junio de 1869⁵⁴

Los movimientos revolucionarios que vivió Europa en 1848 tuvieron también su reflejo en España. El descontento hacia el régimen de Isabel II y la adulteración electoral desembocó en una espiral de insurrección represión. Al fracaso del levantamiento de San Gil en 1866, le sucede el pronunciamiento del almirante Topete en Cádiz. El clima producido por este golpe de Estado, que desencadenó el destronamiento de Isabel II y la desaparición del régimen encarnado en su persona, creó un escenario abonado para los proyectos políticos de diversa índole: desde la Monarquía constitucional, a las fórmulas demócratas y republicanas; desde los modelos unitarios a los federales. Lo característico de esta etapa es su dinamismo político: el cambio a la monarquía de Amadeo I de Saboya en 1870, dos formas distintas de República, las constituciones de 1869 y de 1873, esta última nonata; una guerra colonial en Cuba; dos guerras civiles; y un incesante cambio de juntas.

La mención a la inspección se circunscribe al control de los establecimientos educativos, en lo relativo a la *higiene y moralidad*.

⁵² Texto en la web del Senado, con acceso el 2 de agosto de 2019 en la url:

https://www.senado.es/web/conocersenado/senadohistoria/senado18341923/Constitucion1845/detalle/index.html?id=18570717_ley

⁵³ Texto en la web del Senado, con acceso el 2 de agosto de 2019 en la url:

https://www.senado.es/web/conocersenado/senadohistoria/senado18341923/Constitucion1845/detalle/index.html?id=18640420_LEY.

⁵⁴ Información extraída de la web <https://www.congreso.es/cem/const1869> con acceso el 2 de agosto de 2019.

Título I. De los españoles y sus derechos.

Art. 24. Todo español podrá fundar y mantener establecimientos de instrucción ó de educación, sin prévia licencia, salva la inspección de la autoridad competente por razones de higiene y moralidad.

- Proyecto de Constitución federal de la República española de 1873

La Constitución Federal de 1873 fue un proyecto de constitución para la Primera República Española, redactado principalmente por Emilio Castelar, que no llegó a ser aprobado por las Cortes. Pretendía, en sus propios términos, la transformación de España en una federación,

Más allá de la nula relevancia jurídica de un documento que jamás entró en vigor, tendrá políticamente una importancia indiscutible, al ser la primera propuesta constitucional de la historia política española que trataría de buscar una solución a una cuestión que no haría otra cosa que agudizarse con el tiempo: la de la organización territorial de nuestro Estado.

La inspección de educación se menciona en su art. 26, en la misma línea de la Constitución de 1869.

Art. 26. Todo español podrá fundar y mantener establecimientos de instrucción ó de educación, sin prévia licencia, salva la inspección de la autoridad competente por razones de higiene y moralidad.

- Constitución democrática de la nación española promulgada el 30 de junio de 1876⁵⁵

Cuando el 29 de diciembre de 1874, el General Martínez Campos proclamó a Alfonso de Borbón, hijo de la Reina exiliada Isabel II, como Rey de España, se abrió un período histórico conocido como la *Restauración*, que se considera como la etapa política más estable del liberalismo español del siglo XIX, y cuyo principal artífice fue Antonio Cánovas del Castillo.

Cánovas, ministro en los últimos tiempos de la etapa isabelina, tomó las riendas del Partido Alfonsino y redactó en 1874 para don Alfonso, el *Manifiesto de Sandhurst*, verdadera declaración de intenciones del futuro Rey. Proclamado como Alfonso XII, y nombrado Cánovas presidente del Consejo de Ministros, redactó la Constitución que permitiría la instauración de una paz flexible y duradera que habría de subsistir hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923.

La Constitución de 1876 es un texto breve y abierto de 89 artículos, que permite mantener la alternancia de partidos.

Las posibles menciones tácitas e indirectas a la inspección de educación, se circunscriben a dos párrafos del art. 12, dentro del título dedicado a los españoles y sus derechos.

Título primero. De los españoles y sus derechos.

Art. 12.

(segundo párrafo). Todo español podrá fundar y sostener establecimientos de instrucción ó de educación, con arreglo á las leyes.

⁵⁵ Texto extraído de la web <https://www.congreso.es/cem/const1876> con acceso el 31 de marzo de 2022.

(cuarto párrafo). Una ley especial determinará los deberes de los Profesores y las reglas á que ha de someterse la enseñanza de los establecimientos de instrucción pública costeados por el Estado, las provincias ó los pueblos.

- Constitución de República Española. 9 de diciembre de 1931⁵⁶

El 9 de diciembre de 1931, el Presidente de las Cortes, Julián Besteiro, promulgó la Constitución de la Segunda República española. Ese texto recogió las ilusiones colectivas que suscitó el cambio de régimen político en España y materializó la consecuencia inevitable de la dictadura agotada de Primo de Rivera.

La Constitución de 1931 se enmarca en el constitucionalismo europeo del período de entreguerras. Es evidente la influencia de la Constitución alemana de Weimar, en el diseño del sistema parlamentario y la de la Constitución de Austria de la época, en lo que atañe a la formación de la justicia constitucional. Se considera que refleja también otras influencias más desdibujadas, como la de la constitución mexicana, ya que establece y *constitucionaliza* los llamados derechos fundamentales de la tercera generación o derechos sociales y económicos.

Las menciones a la inspección de educación se realizan en el título dedicado a los *derechos y deberes de los españoles* y al capítulo denominado *familia, economía y cultura*. Su calado es importante (similar al que aparece en el art. 27.8 de la Constitución de 1978) pues asigna al Estado la máxima y suprema potestad de inspección.

Título III Derechos y deberes de los españoles.

Capítulo II Familia, economía y cultura.

Art. 48. El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada.

La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria.

Los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial son funcionarios públicos. La libertad de cátedra queda reconocida y garantizada.

La República legislará en el sentido de facilitar a los españoles económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, a fin de que no se halle condicionado más que por la aptitud y la votación.

La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana.

Se reconoce a las Iglesias el derecho, sujeto a inspección del Estado, de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos.

Art. 49. La expedición de títulos académicos y profesionales corresponde exclusivamente al Estado, que establecerá las pruebas y requisitos necesarios para obtenerlos aun en los casos en que los certificados de estudios procedan de centros de enseñanza de las regiones autónomas. Una ley de Instrucción pública determinará la edad escolar para cada grado, la duración de los períodos de escolaridad, el contenido de los planes pedagógicos y las condiciones en que se podrá autorizar la enseñanza en los establecimientos privados.

⁵⁶ Texto extraído de la web <https://www.congreso.es/cem/const1931> con acceso el 31 de marzo de 2022.

Art. 50. Las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza en sus lenguas respectivas, de acuerdo con las facultades que se concedan en los Estatutos. Es obligatorio el estudio de la lengua castellana, y esta se usará también como instrumento de enseñanza en todos los Centros de instrucción primaria y secundaria de las regiones autónomas. El Estado podrá mantener o crear en ellas instituciones docentes de todos los grados en el idioma oficial de la República.

El Estado ejercerá la suprema inspección en todo el territorio nacional para asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este artículo y en los dos anteriores.

El Estado atenderá a la expansión cultural de España estableciendo delegaciones y centros de estudio y enseñanza en el Extranjero y preferentemente en los países hispanoamericanos.

- Constitución Española. 6 de diciembre de 1978⁵⁷

En 1975 Don Juan Carlos de Borbón inició su reinado dentro del sistema político integrado por el conjunto de las llamadas Leyes Fundamentales del anterior régimen, que incluían la posibilidad de su modificación. Esto permitió que partiendo de la legalidad anterior, y de los instrumentos de dicha legalidad, como eran las Cortes Españolas, se aprobara en 1976 la *Ley para la Reforma Política*, inicio del proceso que culminaría con la promulgación de la Constitución de 1978.

Aprobada la Ley, se celebraron el 15 de junio de 1977 las elecciones para constituir las Cortes que habrían de elaborar y aprobar la Constitución hoy vigente.

Una vez se formaron las nuevas Cortes, previstas en la *Ley para la Reforma Política*, se eligió la Comisión Constituyente del Congreso, que, a su vez, designó la Ponencia integrada por los diputados: Gabriel Cisneros (UCD), Manuel Fraga (AP), Miguel Herrero Rodríguez de Miñón (UCD), Gregorio Peces-Barba (Socialistas del Congreso), José Pedro Pérez Llorca (VCD), Miguel Roca Junyent (Minoría Catalana) y Jordi Solé Tura (Grupo Comunista). La Ponencia redactó dos proyectos, el segundo después de recibir 3100 enmiendas. Discutido el texto correspondiente por la Comisión mencionada y el Pleno del Congreso, por los mismos organismos del Senado y por la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias entre ambas Cámaras, fue definitivamente aprobado por estas y por gran mayoría, en el referéndum celebrado el 6 de diciembre de 1978.

La mención a la inspección de educación se realiza en el art. 27.8, dentro del título I, dedicado a los derechos y deberes fundamentales, y a la sección primera «de los derechos fundamentales y de las libertades públicas» del capítulo segundo, dedicado a los *derechos y libertades*. Reproducimos en su integridad el art. 27 señalando que el art. 27.8 reproduce la intención, señalada en el art. 50 de la Constitución de 1931, de otorgar al Estado la máxima potestad de control e inspección sobre el ámbito educativo.

Título I. De los derechos y deberes fundamentales.

Capítulo Segundo. Derechos y libertades.

Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas.

⁵⁷ Texto extraído de la web del Congreso de los Diputados, el 31 de marzo de 2022 en la url: <https://www.congreso.es/cem/const1978> con acceso el 31 de marzo de 2022.

Art. 27.

1. *Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.*
2. *La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.*
3. *Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.*
4. *La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.*
5. *Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.*
6. *Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.*
7. *Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.*
8. *Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.*
9. *Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.*
10. *Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.*

Ramírez Aísa (2021), con la intención de intervenir en la cuestión de si la inspección de educación debe depender del poder legislativo o del poder ejecutivo, desglosa con gran detalle el proceso de elaboración de este artículo constitucional; la pertinencia de la inserción de la inspección de educación en el poder legislativo; la descripción de modelos paradigmáticos de nuestro entorno europeo; y el análisis de su naturaleza, finalizando, en una conclusión definitiva, que la inspección de educación es *un servicio administrativo de intervención cualificado e imparcial, siempre auxiliar, con funciones preventivas, informativas y correctoras, que bajo el amparo legal, vela con proporcionalidad y rigor técnico por controlar los requisitos subjetivos, materiales y formales que afectan a los actores educativos.*

Damos aquí por finalizado el análisis de los cuerpos constitucionales e iniciamos el análisis de las leyes que ha regulado el sistema educativo. Las conclusiones extraídas será expuestas en el epígrafe dedicado a la síntesis reflexiva.

2.2.2. En las leyes educativas

Desarrollamos en este epígrafe las referencias a la inspección de educación en los proyectos y leyes que han regulado la educación en nuestro sistema educativo. Utilizamos el mismo esquema del anterior epígrafe, puntualizando el contexto histórico de la norma y aquella singularidad o hito que supuso, sin entrar, pues no es el objeto, en la interesante y detallada reflexión de Tiana (2018) sobre los sujetos *denominadores*, los actores centrales, los actores distantes y los actores implicados.

- Bases para la formación de un Plan General de Instrucción Pública⁵⁸. Plan Jovellanos de 16 de noviembre de 1809

Tal y como expone Montero Alcaide (2020, 128) citando al Ministerio de Educación y Ciencia (1985, 351-373), y ya ha sido señalado, pocos años antes de aprobada la Constitución, Gaspar Melchor de Jovellanos firmó en Sevilla, el 16 de noviembre de 1809, las Bases para la formación de un Plan General de Instrucción Pública. En la conclusión de dicho documento aparece el antecedente de la *Dirección General de Estudios*, que años más tarde se plasmaría en la Constitución de 1812.

Consideramos importante su mención pues se introducen las funciones de la Dirección General de Estudios, que asumiría más tarde la dependencia de la inspección sobre el ámbito educativo. Es significativo también el planteamiento de *cuerpo permanente y regido por máximas constates de protección y vigilancia*.

Por último examinará la junta si convendrá erigir un tribunal o consejo de Instrucción Pública, o bien confiar el cuidado particular de ella a alguna sección o sala del consejo de Estado o del Supremo de España e Indias, para que velando sobre la enseñanza general del reino, promueva sus mejoras y dirija como fuere necesario alterar o establecer, así en los métodos y la doctrina de la enseñanza elemental, como en los estudios trascendentales de las ciencias, y cuanto sea relativo a la protección y gobierno de los institutos y cuerpos encargados de promover unos y otros, a fin de que un cuerpo tan recomendable sea dirigido por un cuerpo permanente y regido por máximas constates de protección y vigilancia.

⁵⁸ Texto íntegro, con acceso el 2 de abril de 2021, en la url:

<https://www.unioviado.es/jovellanos/index.php/publicaciones/bases-para-la-formacion-de-un-plan-general-de-instruccion-publica/>.

Gaspar Melchor de Jovellanos (Gijón, 5 de enero de 1744-Puerto de Vega, 27 de noviembre de 1811) fue un escritor, jurista y político ilustrado español. Especialmente comprometido con el desarrollo económico y cultural de su país, fueron relevantes su Informe sobre la Ley Agraria o su Memoria sobre la educación pública.

Ocupó el Ministerio de Gracia y Justicia con Carlos IV, sufriendo rechazo de quienes criticaban sus ideas ilustradas de influencia francesa. Durante la guerra de la Independencia formó parte de la Junta de Asturias, sin que ello haga disminuir sus ideas moderadas. Presidió la junta a la que se encargó el arreglo de la instrucción pública en la Comisión de Constitución de las Cortes (Montero alcaide, 2021, 128).

- Dictamen y Proyecto de Decreto sobre el arreglo general de la Enseñanza Pública. Informe Quintana⁵⁹ de 7 de marzo de 1814

Como ya se ha comentado, tras la proclamación de la Constitución de 1812, se instituyó una Junta de Instrucción Pública con el objeto de elaborar un informe sobre la reforma general de la educación nacional. La junta elaboró el denominado como *Informe Quintana*: una exposición de intenciones sustentado sobre principios básicos (la instrucción debía ser universal, uniforme, publica, gratuita y libre) que consideraba a la educación como herramienta de reforma social y como instrumento de progreso humano y social. El informe fue transformado posteriormente, durante el *trienio liberal*, en ley.

El *Informe Quintana* desarrolla las facultades de la Dirección General de Estudios, reproduciendo el art. 369 de la constitución de 1812, y explicita en su art. 97.7-8 la funciones visitadoras, controladoras e informante que más tardes aparecería en el Decreto de 1849.

Título X. De la dirección general de estudios

Art. 90. Se establecerá con arreglo al artículo 369 de la Constitución una Dirección General de Estudios, a cuyo cargo esté, bajo la autoridad del Gobierno, la inspección y arreglo de toda la enseñanza pública.

Art. 97. Las facultades de la Dirección General de Estudios son:

1ª Velar sobre toda la enseñanza pública, y cuidar de que se observen los reglamentos establecidos.

2ª Recibir las solicitudes, propuestas y reclamaciones de todos los cuerpos literarios y escuelas de la Monarquía, para pasarlas al Gobierno con su informe.

3ª Cuidar de la formación de los diferentes planes y reglamentos necesarios para el arreglo de la instrucción pública, valiéndose para ello de las personas y medios que crea conducentes, y oyendo en todo lo perteneciente a la parte científica a la Academia nacional, antes de presentar los reglamentos al Gobierno para que los pase a la aprobación de las Cortes.

4ª Promover la mejora de los métodos de enseñanza, y la formación y publicación de tratados elementales en castellano por medio de premios a sus autores.

5ª Presentar las alteraciones que puedan convenir en la parte científica de los estudios, siempre a propuesta o con informe de la Academia nacional.

6ª Cuidar de la conservación y aumento de todas las bibliotecas públicas del Reino.

7ª Visitar por medio de algunos de sus individuos o por comisionados de su confianza los establecimientos de instrucción pública, de modo que cada tres años se verifique haberse inspeccionado todos.

8ª Dar cuenta anualmente a las Cortes, por medio del Gobierno, del estado de la enseñanza pública en una memoria que deberá imprimirse y circularse.

9ª Ejercer todas las demás facultades que se le señalen en su respectivo reglamento.

⁵⁹ Manuel José Quintana y Lorenzo (Madrid, 11 de abril de 1772-Madrid, 11 de marzo de 1857) fue un poeta español de la Ilustración en la transición al Romanticismo. Se puede ampliar información en el interesante estudio de Araque (2013).

- Reglamento General de Instrucción Pública⁶⁰, decretado por las Cortes el 29 de junio de 1821

El Reglamento General de Instrucción Pública tiene su origen en 1820 con la creación de una Comisión de Instrucción Pública constituida en las Cortes. La Comisión decidió aceptar en su totalidad el proyecto de ley de 1814, elaborado a partir del *Informe Quintana*. El texto se compone de doce títulos y ciento treinta artículos, que pretendía proporcionar al país la primera estructuración moderna de la educación.

Su mimetismo con el Informe Quintana es evidente, así como, específicamente, en la presentación de facultades de la Dirección General de Estudios, que más tarde se perfilarían como funciones esenciales de la inspección de educación (véase la tabla 2.1.16).

Título VIII. De la dirección general de estudios

Art. 92. Se establecerá, con arreglo al artículo 369 de la Constitución, una Dirección General de Estudios, á cuyo cargo esté bajo la autoridad del Gobierno la inspección y arreglo de toda la enseñanza pública.

Art. 101. Las facultades de la Dirección General de Estudios son:

Primera, velar sobre toda la enseñanza pública, y cuidar de que se observen los reglamentos establecidos.

Segunda, recibir las solicitudes, propuestas y reclamaciones de todos los cuerpos literarios y escuelas de la Monarquía, para pasarlas al Gobierno con su informe.

Tercera, cuidar de la formación de los diferentes planes y reglamentos necesarios para el arreglo de la instrucción pública, valiéndose para ello de las personas y medios que crea conducentes, y oyendo en todo lo perteneciente a la parte científica a la Academia nacional, antes de presentar los reglamentos al Gobierno para que los pase a la aprobación de las Cortes.

Cuarta, promover la mejora de los métodos de enseñanza, y la formación y publicación de tratados elementales por medio de premios a sus autores.

Quinta, presentar las alteraciones que puedan convenir en la parte científica de los estudios, siempre a propuesta o con informe de la Academia nacional.

Sexta, cuidar de la conservación y aumento de todas las bibliotecas públicas del Reino.

Séptima, dar cuenta anualmente a las Cortes del estado de la enseñanza pública en una memoria que deberá pasarles por medio del Gobierno.

Octava, ejercer todas las demás facultades que se le señalen en su respectivo reglamento.

⁶⁰ Acceso al original del *Reglamento General de Instrucción Pública de 1821*, en la web *Universitas Miguel Hernández*, con derivación a drive público en la url:

<https://drive.google.com/file/d/0B27DzfbcyPNBRnRObWozanNLZE0/view?resourcekey=0-FIqDRbBrIIPgvuyoKOmi6g>

- Plan General de Instrucción Pública. Plan Duque de Rivas⁶¹ de 1836

El *Plan Rivas*, denominado así por el titular del Ministerio de Gobernación, quiso reflejar el carácter moderado de la política española durante los primeros años de la regencia de María Cristina. El texto abandonaba el principio de la educación universal y gratuita, en que se basaba el *Reglamento de 1821* y plasmaba el criterio de la desigualdad proveniente también de la distinta educación recibida.

La enseñanza secundaria abandonaba la pretensión de extender la cultura y la formación al mayor número posible, y se orientaba hacia un carácter propedéutico y orientado a la preparación para la educación superior, desde un punto de vista elitista.

El Plan fue publicado por Real Decreto de 4 de agosto de 1836 (Gaceta de Madrid de 9 de agosto de 1836)⁶².

La referencia a las funciones inspectoras aparece en el art. 23 cuando mantiene la inspección de las reales escuelas gratuitas de Madrid en la Junta Superior de Caridad; y en el art. 133 en lo relativo a la propuesta de *los inspectores o visitadores extraordinarios* que fuera necesario.

Título primero. De la instrucción primaria

Sección primera. De la instrucción primaria pública

Capítulo IV. Administración y gobierno de las escuelas primarias.

Art. 23. Las escuelas públicas conocidas con el nombre de reales escuelas gratuitas de Madrid, continuarán bajo la inmediata inspección de la Junta Superior de Caridad, como se hallan en el día, y sin perjuicio de las atribuciones de la comisión de provincia, hasta tanto que el Gobierno de S. M. pueda darles la organización conveniente.

Título V. Disposiciones generales

Sección segunda. Del Consejo de Instrucción Pública.

Art. 133. El Consejo propondrá al Ministerio de la Gobernación los inspectores o visitadores extraordinarios que en cada caso juzgue necesarios para inspeccionar los establecimientos de Instrucción Pública costeados por el Estado o por particulares.

- Ley de 21 de Julio de 1838 que autoriza al Gobierno para plantear provisionalmente el plan de Instrucción Primaria (Gaceta de Madrid de 28 de agosto de 1838)⁶³

Tras el fallecimiento del rey Fernando VII, se encarga a una comisión la elaboración de un plan general de instrucción primaria. El trabajo de la comisión fue la promulgación de la denominada como primera ley de educación que existió en España, aunque de efímera vida: la *Ley de instrucción Primaria de 21 de julio de 1838*, que se conoce con el sobrenombre de *Someruelos*,

⁶¹ Ángel de Saavedra y Ramírez de Baquedano (Córdoba, 10 de marzo de 1791-Madrid, 22 de junio de 1865), III duque de Rivas y grande de España, fue un dramaturgo, poeta, historiador, pintor y estadista español. Fue embajador en Nápoles y en París, vicepresidente del Senado y del Estamento de Próceres, ministro de la Gobernación y de Marina, presidente del Consejo de Ministros en 1854), presidente del Consejo de Estado y director de la Real Academia Española.

⁶² <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1836/600/C00001-00007.pdf> con acceso el 2 de agosto de 2019.

⁶³ <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1838/1381/A00001-00001.pdf> con acceso el 2 de agosto de 2019.

por el político que la firmó, el marqués de Someruelos⁶⁴. Unos meses más tarde de su promulgación, se publicó el Reglamento para las escuelas públicas en el que se establecía la creación, en cada provincia, de una *Escuela Normal* para la formación de los maestros. Se considera que a partir de ese reglamento se construiría la educación pública en España.

Este cuerpo normativo reproduce elementos de propuestas anteriores y ciertas novedades que constituirían las funciones asignadas a los inspectores de educación. De esta forma aparece, entre otras, la vigilancia de los establecimientos de instrucción; vigilar y reprender a los maestros; informar al gobierno; etc.

Título VII. De las autoridades encargadas de la inspección y gobierno de las escuelas primarias.

Art. 28. A este efecto se establecerá en cada capital de provincia una Comisión de Instrucción primaria compuesta del Jefe político, presidente; de un individuo de la Diputación provincial nombrado por ella; de un eclesiástico condecorado elegido por el diocesano, y de otras dos personas ilustradas nombradas por el Jefe político, a propuesta de la Diputación. Este cargo será gratuito, honorífico y renunciable.

Art. 29. Estará a cargo de estas Comisiones:

1.º Cuidar de que se establezcan escuelas en todos los pueblos que por esta ley deba haberlas.

2.º Formar los distritos de que habla el art. 8.º, y adoptar o proponer al Gobierno todas las medidas que creyeren oportunas para el fomento de la Instrucción primaria en su respectiva provincia.

3.º Vigilar por lo menos anualmente por persona de dentro o fuera de su seno todos los establecimientos de Instrucción primaria de la provincia.

4.º Reunir, si lo creyesen conveniente, las escuelas de varios pueblos o de uno o más partidos bajo la inspección de una Comisión local, dando conocimiento de esta disposición al Gobierno para la aprobación por S.M.

5.º Reconvenir a los Maestros que no cumplan con su deber, suspendiéndolos por un mes con sueldo o sin él; y aun proponer al Gobierno la privación de empleo, en cuyo caso la suspensión será hasta la determinación de S.M.

6.º Proponer al Gobierno los medios de atender y mejorar la educación en la provincia, y las reformas que convenga hacer en los reglamentos de Instrucción primaria.

7.º Nombrar los individuos que vayan a componer la Comisión de examen.

8.º Cuidar de que los fondos destinados a la enseñanza no se distraigan de su objeto, y proponer al Gobierno la misma aplicación respecto de las obras pías cuyo objeto primitivo haya caducado o no sea de una utilidad conocida.

9.º Proporcionar al Gobierno todos los datos que les pida sobre la enseñanza, y formar la estadística anual de las escuelas de la provincia.

Art. 31. En todo pueblo donde por esta ley deba haber escuela, habrá una Comisión local de Instrucción primaria subordinada a la provincial. Esta Comisión se compondrá del Alcalde, presidente; de un Regidor; de un Párroco elegido por el Ayuntamiento donde

⁶⁴ D. Joaquín José de Muro, III marqués de Someruelos.

hubiere más de uno, y de otras dos personas celosas e instruidas nombradas por el Ayuntamiento. Estos destinos serán honoríficos y voluntarios.

Art. 32. Estará a cargo de estas Comisiones locales:

1.º Vigilar la conducta de los Maestros de las escuelas públicas y privadas.

2.º Proponer a la Comisión de provincia los puntos donde convenga establecer nuevas escuelas, y medios de dotarlas.

3.º Proporcionar a la misma Comisión todas las noticias que les pida sobre la Instrucción primaria.

4.º Cuidar de que no se distraigan los fondos asignados a las escuelas, y excitar al Alcalde a que exija las cuentas a los Administradores de las obras pías destinadas a sostenerlas.

Art. 34. Así las Comisiones provinciales como las locales se regirán por los reglamentos particulares que expedirá el Gobierno.

- Plan General de Estudios de 1845. Plan Pidal⁶⁵

El triunfo de los moderados, poco después de la proclamación anticipada de la mayoría de edad de Isabel II, provocó en el ámbito educativo la publicación del denominado como *Plan Pidal*, por corresponder a D. Pedro José Pidal, la titularidad del ministerio de Gobernación, con una inclinación por la enseñanza, como derecho nacional. El texto tiene fecha de 17 de septiembre de 1845.

Se considera que el Plan Pidal es el antecedente más importante de la reforma educativa que supuso la posterior Ley Moyano de 1857.

En su articulado se recalca la potestad inspectora sobre los centros educativos (arts. 93 y 137) y acentúa la función visitadora y controladora de la inspección (art. 136) con una redacción que hacía prever, cuatro años más tarde, la posterior creación del Cuerpo de Inspectores de Educación.

Sección segunda: De los establecimientos de enseñanza.

Título II. De los establecimientos privados.

Art. 93. Los establecimientos privados están sujetos a la más rigurosa inspección de parte del Gobierno; y en su consecuencia serán visitados ya por el director del Instituto a que estén incorporados, ya por los inspectores nombrados al efecto, ya por la autoridad superior de la provincia.

Sección cuarta: Del gobierno de la instrucción pública.

Título primero. Administración general.

Art. 136. Para la visita de los establecimientos de enseñanza, así públicos como privados, se creará el número suficiente de inspectores con las dotaciones que señale el reglamento.

Art. 137. Los jefes políticos, en virtud de la facultad que les concede el párrafo 7º del artículo 4º de la ley de 2 de abril del presente año, tendrán también el derecho de inspección sobre todos los establecimientos de Instrucción Pública de sus respectivas provincias; avisarán al

⁶⁵ https://personal.us.es/alporu/historia/plan_pidal.htm con acceso el 2 de agosto de 2019.

Gobierno o a los rectores y directores de cuanto observen digno de enmienda, y prestarán a éstos la fuerza de su autoridad cuando la reclamen para el mejor desempeño de sus obligaciones.

- **Ley de bases autorizando para formar y promulgar una Ley de Instrucción pública:** 14 de julio de 1857 (sancionada por S.M. el 16 de julio)⁶⁶

Esta ley autorizaba al gobierno para formular la que sería la posterior Ley de Instrucción Pública. Tal y como apunta Sevilla (2007), «su contenido se desarrollaba en tres artículos: el primero de ellos contenía las 14 bases mientras que el segundo y tercero eran los habituales preceptos destinados a posibilitar la aplicación de lo dispuesto en el primero». Casi dos meses más tarde se promulgo la Ley de Instrucción Pública del mismo año.

En lo relativo a la inspección de educación, su articulado establecía la potestad inspectora del gobierno sobre todos los centros, así como la pretensión de la organización, con el marco normativo adecuado, de la inspección de instrucción pública.

Artículo Primero.

Apartado primero: La enseñanza puede ser pública ó privada. El Gobierno dirigirá la enseñanza pública y tendrá en la privada la intervención que determine la ley.

Apartado duodécimo: Se organizará la Inspección de la instrucción pública en todos sus grados.

- **Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857**⁶⁷

La Ley de Instrucción Pública, también conocida como *Ley Moyano* y promulgada en 1857 por el partido moderado, fue una ley que estableció el ordenamiento del sistema educativo español durante más de cien años. Este importante marco legal organizó el sistema educativo en los tres niveles básicos: enseñanza primaria, enseñanza media y enseñanza superior o universitaria.

En lo relativo a la importancia para la inspección de educación, posee un título concreto, el título IV, que expone importantes principios. Por una parte, el art. 294, expone por primera vez de una forma diáfana, la competencia del gobierno para la inspección de los centros de instrucción, que finalmente fue incorporado a los cuerpos constitucionales en 1931; establece la visita a los centros educativos, no así a las escuelas normales, como herramienta básica de intervención; y perfila la publicación de una norma específica que establezca las obligaciones y facultades de los inspectores generales.

Sección Cuarta: Del gobierno y administración de la instrucción pública

Título IV. De la Inspección (Arts. del 294 al 307)

Art. 294. El Gobierno ejercerá su inspección y vigilancia sobre los Establecimientos de instrucción, así públicos como privados.

⁶⁶ <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1857/1660/A00001-00001.pdf> con acceso el 2 de agosto de 2019.

⁶⁷ <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1857/1710/A00001-00003.pdf> con acceso el 2 de agosto de 2019.

Art. 303. Los Inspectores provinciales visitarán las Escuelas de primera enseñanza de todas clases establecidas en su provincia, a excepción de las Normales de Maestros y Maestras; y se ocuparán en los demás servicios del ramo que determinen los reglamentos.

Art. 307. El Gobierno publicará, oyendo al Real Consejo de Instrucción pública, un reglamento que determine las obligaciones y facultades de los inspectores generales, y señale las cantidades que han de percibir por vía de indemnización cuando salgan del lugar de su residencia en desempeño de su destino.

- Ley de instrucción primaria de 1868⁶⁸

La Ley de Instrucción Pública de 1868 procedió a regular la enseñanza primaria establecida por la Ley Moyano. De esta forma Mayorga (1999) apunta que «La Ley Moyano había regulado todo lo referente a la instrucción pública en sus diferentes niveles», y con esta ley «se procede a regular el nivel primario». La ley se promulga siendo el titular del Ministerio de Fomento Severo Catalina, durante los últimos años del reinado de Isabel II y dedica a la inspección el capítulo IV, del título II, y en concreto los arts. 78, 79 y 80. El art. 78 establece la visita de la inspección religiosa y las visitas extraordinarias de los Inspectores Generales; el art. 79 establece el Cuerpo de Inspectores Generales, que *no excederá de 10 individuos*; y el art. 80, que reproducimos, reitera la visita, con una determinada temporalidad, como herramienta específica de intervención.

Título II. Del régimen y administración de la instrucción primaria.

Capítulo IV. De la Inspección.

Art. 80. Los Gobernadores de provincia, con acuerdo de la Junta provincial, dispondrán, á lo ménos una vez al año, visita de inspección á las Escuelas que de ella necesiten, á juzgar por los partes mensuales de las Juntas locales ó por informes fidedignos, delegando para ello al Secretario de la Junta provincial, á un Oficial de la Sección de Fomento, ó un Profesor caracterizado de la capital ó de la provincia. En ningún caso deberán trascurrir dos años sin que sean visitadas todas le Escuelas de la provincia. La conducta del maestro, su situación y concepto en el pueblo, el orden de la Escuela y la asistencia de los niños deben ser objeto de estas visitas, dejando para la facultativa de los inspectores el aprovechamiento de los alumnos, métodos de enseñanza y necesidades de la Escuela.

- Real Decreto de segunda enseñanza de 16 de agosto de 1901⁶⁹

El Real Decreto de segunda enseñanza de 1901, publicado en la Gaceta de Madrid el 19 de agosto, organizaba los Institutos Generales y Técnicos. Este texto, fruto del consenso de progresistas y liberales durante el reinado de Alfonso XIII, fue publicado al año siguiente de que se constituyera específicamente el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, e intentaba recoger el impulso regeneracionista que entendía a la escuela como motor de cambios (Díaz y Moratalla, 2008).

⁶⁸ <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1868/156/A00001-00004.pdf> con acceso el 9 de abril de 2022.

⁶⁹ <https://www.boe.es/gazeta/dias/1901/08/19/pdfs/GMD-1901-231.pdf> con acceso el 9 de abril de 2021.

La referencia a la inspección de educación se produce, al establecer la vigilancia de los centros en que se impartía el bachiller, y al posibilitar el nombramiento eventual de inspectores, con ciertos requisitos.

Capítulo II. De los estudios generales del grado de Bachiller.

Art. 8º. El Gobierno, por medio de los Inspectores de enseñanza, ejercerá la mayor vigilancia sobre los establecimientos oficiales y particulares, comprobando sus condiciones higiénicas, material, idoneidad de su profesorado, etc., y ordenará al Director del Instituto la clausura del establecimiento que no reúna las condiciones debidas.

Art. 9º. Hasta que sea posible organizar definitivamente las Inspecciones de segunda enseñanza, el Ministro de Instrucción pública, cuando así lo exijan las necesidades del servicio, podrá nombrar temporalmente un Inspector en cada distrito universitario, para que éste gire las visitas y haga las informaciones precisas en los Institutos correspondientes á aquel distrito. Para ejercer este cargo se necesita haber desempeñado el profesorado más de cinco años, ó ser ó haber sido Consejero de Instrucción pública ó Catedrático de Universidad, aunque no haya sevido cinco años.

Se consignará en el presupuesto la cantidad que se calcule suficiente al pago de dietas de los Inspectores.

Capítulo III

De las Escuelas de Maestros y de Maestras

Art. 24. Una vez aprobadas todas las asignaturas, deberá el alumno verificar los ejercicios de reválida para obtener el título de Maestro superior, el cual le dará derecho á tomar parte en oposiciones á cátedras de Escuelas elementales y superiores de Maestros, en oposiciones y concursos á Inspecciones de primera enseñanza, en concursos á plazas de Auxiliares de las Escuelas de Maestros y en oposiciones y concursos, á Escuelas de primera enseñanza. Los Maestros superiores que obtuvieren el título por oposición, conforme á las disposiciones vigentes, serán siempre preferidos en los concursos mencionados.

- Real decreto de primera enseñanza de 26 de octubre de 1901⁷⁰

El Real decreto de primera enseñanza de 1901, publicado en la Gaceta de Madrid de 30 de octubre, recogía las mismas intenciones del Decreto anterior. Esta norma ampliaba la escolarización obligatoria hasta los doce años y estableció el conjunto de asignatura que se debían cursar en la primera enseñanza. Una de sus virtualidades fue la de establecer el pago de los maestros por parte del Estado.

En relación a la inspección, circunscribe la potestad inspectora al recientemente creado Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, le asigna una función al informe de inspección para posibilitar un segundo empleo público⁷¹ y determina la función de control y estadística de datos.

⁷⁰ <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1901/303/A00497-00499.pdf> con acceso el 9 de abril de 2021.

⁷¹ Se hace notar que es la primera vez que aparece el informe de inspección, como herramienta técnica de traslado y este se establece, para lo que en la actualidad se denominaría como una *solicitud de compatibilidad*.

Real decreto autorizando al Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes para que en los presupuestos generales de su departamento, á partir del que se forme para el año 1902, incluya las partidas necesarias, conforme á las disposiciones de este decreto, para el pago de las atenciones de personal y material de las Escuelas públicas de primera enseñanza

Artículo 1. Al Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes corresponde la inspección de los establecimientos de enseñanza no oficial.

Art. 21. El cargo de Maestro de primera enseñanza pública es compatible con el de cualquier profesión honrosa que no perjudique al cumplido desempeño de la misma, é incompatible con todo otro empleo ó destino público, excepción hecha de los de Secretario de Ayuntamiento y Juzgado municipal, que serán compatibles en poblaciones de menos de 500 habitantes, previa autorización concedida por la Junta provincial, de acuerdo con el informe del Inspector.

De la Inspección y Estadística.

Art. 22. Corresponde la inspección ordinaria de estos establecimientos:

al Inspector provincial, los de primera enseñanza; al Director del Instituto general y técnico, los de enseñanza secundaria que se hallen situados en el territorio de su demarcación, y al Rector, los de estudios superiores de su distrito.

Tanto los Rectores como los Directores de Instituto, podrán girar la visita de inspección por sí, ó delegar en un Catedrático de la enseñanza oficial del Centro de su dirección.

Art. 23. El Ministro de Instrucción pública y los Rectores ordenarán las visitas de inspección extraordinarias que consideren precisas.

Tanto las ordinarias como las extraordinarias, se harán constar en el libro de visitas de inspección, que deberán tener todos los establecimientos de enseñanza no oficial.

Art. 24. En la segunda quincena de Septiembre cuidarán los Rectores de dar cuenta al Ministerio de Instrucción pública de las peticiones presentadas y de los acuerdos recaídos en las mismas, así como de las que se hubieren presentado para establecimientos de nueva creación.

Art. 25. En la Sección de Estadística del Ministerio de Instrucción pública se llevará un registro especial donde conste el número, categoría de los establecimientos, nombre y condiciones del empresario, Director, Profesores y Auxiliares, número de alumnos internos y externos que se matriculen en cada curso y todas cuantas circunstancias se consideren necesarias para formar una estadística complete.

- Ley Enseñanza Primaria de 17 de julio de 1945⁷²

La Ley de 17 de julio de 1945 sobre Educación Primaria, publicada en el BOE un significativo 18 de julio de 1945 orienta a los escolares, tal y como establece en el preámbulo, *según sus aptitudes, para la superior formación intelectual o para la vida profesional del trabajo en la industria y el comercio o en las actividades agrícolas.*

⁷² <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1945/199/A00385-00416.pdf> con acceso el 2 de abril de 2021.

Esta norma introduce la función orientadora a los inspectores de educación; ordena los grados jerárquicos de la inspección, establece por primera vez (art. 82) los deberes y derechos de los inspectores de educación y determina los requisitos para acceder a la inspección de educación.

Exposición de motivos. La Inspección se concibe igualmente como órgano de orientación y dirección del Maestro en el ejercicio de su vida profesional, y se prescribe para ella formación adecuada de carácter universitario y experiencia acrisolada en la práctica de la Escuela y de la organización escolar.

Art. 4 La superior inspección de la enseñanza primaria, pública y privada, será ejercida por el Estado a través de sus órganos propios.

Entidades Privadas.

Art. 27.5. Someterse, a la inspección oficial en cuanto se determina en la presente Ley y al régimen y remuneración de los Maestros, conforme a lo dispuesto en los artículos setenta y siete y noventa y nueve.

Las Escuelas reconocidas se considerarán, a los efectos legales no económicos, equiparadas a las Escuelas públicas. Su reconocimiento, será otorgado por el Ministerio, previo informe favorable de la Inspección y del Consejo Nacional de Educación.

Artículo 40.— Todas las actividades de la Escuela estarán sometidas a comprobación, que verificarán las Juntas Municipales de Educación y la Inspección profesional, mediante pruebas objetivas, exposiciones de trabajos, certámenes, concursos y otros procedimientos análogos; pero en tal medida que sirvan de estímulo al profesorado, sin menoscabo de la labor fundamental de la Escuela.

Capítulo IV. Orientación y dirección del Maestro en la vida profesional.

Inspección.

Artículo 79.— La Inspección es el órgano encargado de orientar y dirigir al Maestro en el ejercicio de su función docente.

Grados jerárquicos.

Artículo 80.— La Inspección profesional estará constituida por los siguientes grados jerárquicos:

a) Inspección general, que se compondrá de un Inspector central por cada una de las zonas en que se divida el mapa escolar de España; de dos Inspectores y de dos Inspectoras del profesorado de Escuelas del Magisterio, para la Inspección respectiva de estos Centros, y de un Inspector general que será Jefe del organismo.

La Inspección general radicará en el Ministerio, y todos los Inspectores que la componen serán de libre designación ministerial. Su misión será de carácter informativo y asesor, o ejecutivo en los casos de delegación especial, y se referirá siempre a asuntos de índole técnica y pedagógica, en los que tendrán la jerarquía máxima.

b) Inspección provincial, que se compondrá de un Inspector Jefe designado por el Ministerio entre los que componen la plantilla provincial, y un número de Inspectores para las Escuelas masculinas y de Inspectoras para las femeninas, con residencia en la capital de la provincia respectiva, de acuerdo con el coeficiente que se determine en el Reglamento.

c) Inspección comarcal.— Los Inspectores e Inspectoras del apartado anterior tendrán asignada una comarca o zona de inspección, previamente delimitada en el mapa escolar,

según la topografía, vías de comunicación y población docente, y a la que habrán de actuar por un período de cinco años, al cabo de los cuales podrán ser destinados a otra comarca de la provincia por el Ministerio o confirmados en la misma. Al Inspector Jefe provincial corresponde Inspeccionar las Escuelas de la capital y en función extraordinaria o reglamentaria cualesquiera otras de la provincia.

d) Inspección Auxiliar. — En casos excepcionales los Inspectores están autorizados, previa aprobación del Ministerio para designar un Maestro, qué circunstancialmente y en calidad de Inspector Maestro, pueda desempeñar las funciones que se le encomienden. Los Inspectores que integran la plantilla provincial forman el Consejo de Inspección, el cual se reunirá por lo menos una vez al mes para estudiar y proponer los asuntos que reglamentariamente se determinen, entre los que se comprenderá el itinerario anual de inspección que habrá de ser aprobado por el Inspector Central correspondiente y el plan de trabajo general de orientación de la Escuela. Todos los Inspectores habrán de redactar anualmente una Memoria de carácter informativo y técnico.

Número de Inspectores.

Artículo 81. — El número de Inspectores y la extensión comarcal de cada uno de ellos se determinará en función de las visitas que a las Escuelas de su jurisdicción pueda realizar en el curso escolar, de suerte que no quede Escuela en la comarca que no haya sido visitada a lo menos una vez en el año. A los efectos de dietas, el número de días hábiles no será inferior al tercio del determinado en el artículo cuarenta y uno, ni superior al de ciento veinte por Inspector y año. En este cómputo habrán de incluirse los Inspectores auxiliares. En el mapa, escolar figurará la distribución de las Escuelas por comarcas de Inspección, según las normas anteriores.

Deberes y derechos.

Artículo 82. — Serán deberes y derechos de los Inspectores profesionales de Enseñanza primaria:

Primero. Mantener ejemplar conducta moral desempeñando su función en servicio de Dios y de la Patria.

Segundo. Excitar la cooperación de la familia, las Instituciones del Estado y los Organismos y Empresas de Trabajo en la obra común del desenvolvimiento de la labor escolar.

Tercero. Cumplir y hacer cumplir, como Delegado de la Autoridad superior, las disposiciones legales relativas a la enseñanza.

Cuarto. Prestar juramento de fiel servicio en el acto de la incorporación a su cargo; usar la Medalla de Inspector en todos los actos solemnes; asistir a las Juntas y Consejos reglamentarios y desempeñar los cargos de gobierno o directivos que le encomiende la Superioridad.

Quinto. Residir en la capital de su provincia; visitar detenidamente las Escuelas, Centros o Instituciones de educación y enseñanza primaria de su comarca, tanto públicas como de Patronato, privadas y especiales, dejando de ello constancia en el libro correspondiente, después de haber examinado y comprobado los trabajos, métodos, material y cuantos requisitos, determinan los distintos artículos de esta Ley o sean completados en la reglamentación; orientar de manera constante por medio de circulares, reuniones, cursos y certámenes la actuación pedagógica del Maestro.

Sexto. Participar en las oposiciones o concursos que para su ingreso y traslado sean reglamentados por el Ministerio; disfrutar de la inamovilidad de su cargo y destino y de los

permisos y licencias reglamentarios; obtener la excedencia, las permutas y la jubilación, según las normas legales; percibir el sueldo anual que por su categoría en el Escalafón le corresponda, los gastos de locomoción y dietas y los ascensos, quinquenios y derechos pasivos legales, así como las remuneraciones que puedan establecerse para premiar su labor profesional.

Séptimo. Ser protegido en caso de enfermedad y de imposibilidad física por enfermedades contraídas en el ejercicio profesional; disfrutar de la gratuidad escolar para sus hijos en todas las enseñanzas del Ministerio de Educación; pertenecer a la Mutualidad Nacional de Enseñanza Primaria y percibir sus beneficios sociales y económicos;

Octavo. Ejercitar por escrito ante las Autoridades Inmediatas o superiores, en su caso, el derecho de petición o queja en asuntos relacionados con enseñanza.

Formación Artículo 83.— La formación del Inspector de Enseñanza Primaria comprende necesariamente un conocimiento experimental de la Escuela, preparación académica de carácter pedagógico y técnica y experiencia de la propia función profesional. Abarcará:

Primero. Conocimiento de la Escuela española, que habrá experimentado viviéndola por el tiempo mínimo de dos años.

Segundo. Ser Licenciado en la Sección de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras.

Tercero. Oposición que seleccione los mejor preparados y más aptos por sus dotes vocacionales, capacidad de mando y consejo.

Cuarto. Actuación como Inspector auxiliar, durante el período de un año, como mínimo, en el que se adiestre en la técnica, consejo, dirección y gobierno de las Escuelas de una comarca. Reglamentariamente se determinarán las circunstancias y condiciones en que los candidatos a Inspectores podrán cumplir los períodos de su formación.

Inspectores extraordinarios y especiales.

Artículo 84.— El Ministerio, para asuntos concretos de carácter científico, técnico o administrativo, podrá, temporal o permanentemente, considerar como Inspectores extraordinarios y encomendarles una misión especial, a personas de relevantes méritos en el orden pedagógico y docente o jurídico-administrativo aun cuando no pertenezcan al Cuerpo oficial de la Inspección en las condiciones que se establezcan reglamentariamente. Asimismo, cuando por las peculiares características de una comarca se requiera en el personal dotes y preparación especiales, que aconsejen la intensificación de determinadas actuaciones y el empleo de medios distintos de los generales de la Inspección, el Ministerio podrá crear, mediante la reglamentación previa que justifique la medida, la zona o zonas de Inspección especiales que regentarán, los Inspectores seleccionados del Cuerpo, en quienes concurren las condiciones exigidas.

El personal inspector nombrado por las Instituciones del Movimiento, en lo que se refiere a la formación del Espíritu nacional, disfrutará esta misma consideración independientemente de la Inspección de las Escuelas de la Iglesia, realizada por Inspectores designados por la Jerarquía eclesiástica, los Inspectores a que este capítulo se refiere podrán visitar dichas Escuelas al efecto de comprobar la observancia de las disposiciones legales aplicables a ellas.

- Ley de 26 de febrero de 1953 sobre Ordenación de la Enseñanza Media⁷³

La Ley de 26 de febrero de 1953 sobre Ordenación de la Enseñanza Media, publicada en el BOE el 27 de febrero, reproduce en la enseñanza secundaria los principios instituidos en 1945 y supone un primer paso hacia la generalización de la escolaridad hasta los 14 años, estableciendo que la enseñanza media no se pueda comenzar antes de los diez años y que el bachillerato superior tampoco deba iniciarse antes de los catorce años.

Establece un bachillerato elemental de cuatro años y un superior de dos cursos, seguido de un curso preuniversitario necesario para el acceso a la Universidad; recupera los exámenes de ingreso, de curso o de asignatura y de grado o reválida elemental y superior de tal forma que para obtener los dos títulos de bachillerato se debía que superar una reválida y la prueba de madurez (Berengueras & Vera, 2015).

Dedica el capítulo IV a la inspección oficial, estableciendo su organización y dependencia en cuanto a la intervención en las enseñanzas medias y, como novedad, introduce la función de impulsar la renovación y perfeccionamiento de los métodos educativos en dichos centros.

Art. 20.— Serán Centros privados de Enseñanza Media los que, creados por iniciativa particular y no hallándose comprendidos en los artículos anteriores, se ajusten a la legislación docente en planes de estudio, garantías pedagógicas, pruebas e inspecciones y se dediquen a dicho tipo de enseñanza en el Grado Elemental o en el Superior,

Art. 40. — Todos los Colegios extranjeros de Enseñanza Media quedarán sujetos a la Inspección en las mismas condiciones que los españoles.

Capítulo IV. La inspección oficial.

Art. 58.— Por razón de la Materia, inspeccionarán en todos los Centros docentes de Enseñanza Media:

El Estado, todo lo relativo a la formación del espíritu nacional, educación física, orden público, sanidad e higiene y el cumplimiento de las condiciones legales establecidas para el reconocimiento o autorización de cada Centro;

La Iglesia, todo lo concerniente a la enseñanza de la Religión, a la ortodoxia de las doctrinas y a la moralidad de las costumbres.

Art. 59.— En los Centros oficiales y en los de Patronato y privados, la Inspección del Estado comprenderá también todos los demás aspectos del funcionamiento académico y pedagógico. En los Centros docentes de la Iglesia, la inspección sobre estos aspectos será ejercida por Inspectores designados por la Jerarquía eclesiástica, de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional quienes aplicarán las normas dadas por el Estado con carácter general e informarán del resultado de aquella a la Jerarquía eclesiástica y al Ministerio de Educación Nacional.

Art. 60.— Los Inspectores del Estado ejercerán su función sobre todos los Centros de Enseñanza Media del Distrito Universitario, y dependerán del Ministerio de Educación Nacional, a través de la autoridad académica del Rector de la Universidad correspondiente, quien podrá resolver en primera instancia las incidencias que sobre este servicio se produzcan.

⁷³ <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1953/058/A01119-01130.pdf> con acceso el 2 de abril de 2022.

Art. 61.— Los Inspectores del Estado serán designados en la forma que reglamentariamente se determine, entre funcionarios de Cuerpos docentes del Ministerio de Educación Nacional, sin perjuicio de lo establecido en el artículo sesenta y cinco.

Art. 62.— El Ministerio de Educación Nacional dictará las normas y nombrará a los Inspectores que hayan de ejercer la inspección en lo relativo a la educación física, formación del espíritu nacional y enseñanzas del hogar en todos los Centros de Enseñanza Media de acuerdo con las Autoridades del Movimiento Nacional y con la Autoridad eclesiástica si se trata de Colegios de la Iglesia; e igualmente dictará las normas oportunas sobre la materia, y nombrará, de acuerdo con las autoridades técnicas competentes del Estado, los Inspectores que se ocupen en todos los Centros de los aspectos relacionados con la sanidad e higiene.

Art. 63.— Los Inspectores impulsarán la renovación y perfeccionamiento de los métodos educativos, tanto en el orden intelectual como en el moral, en el social y en el físico-deportivo, y la adecuada asistencia psicotécnica de los escolares. Para ello:

a) Harán que en la educación intelectual se anteponga la intensa asimilación a la extensa erudición, el cultivo de la inteligencia al de la memoria, y los métodos activos a los pasivos, mediante una creciente compenetración de profesores y alumnos en las clases.

b) Fomentarán la práctica del deporte por todos los alumnos aptos, bajo una cuidadosa dirección, procurando que el comportamiento deportivo sea considerado por los educadores como un índice importante de perfeccionamiento humano.

c) Vigilarán el funcionamiento de los servicios psicotécnicos y de orientación profesional, y la asistencia que en este orden deben prestar los educadores a los padres de los escolares.

Art. 64.— El cargo de Inspector es incompatible con el ejercicio de la función docente en la Enseñanza Media.

Art. 65.— La Inspección Central de Enseñanza Media coordinará la labor de los Inspectores. Estará constituida por el Inspector general, el Jefe de las Inspecciones del Distrito, el Jefe del Gabinete Técnico de la Dirección General de Enseñanza Media, un Asesor religioso nombrado a propuesta de la Jerarquía eclesiástica competente, un Asesor de formación del espíritu nacional, un Asesor de educación física y una Asesora para enseñanzas del hogar, nombrados a propuesta de las respectivas Delegaciones Nacionales del Movimiento, y el número de Inspectores centrales que sea conveniente.

El Inspector general y los Inspectores centrales serán nombrados por el Ministerio entre los Inspectores de Enseñanza Media.

Art. 66.— Cada centro docente de Enseñanza Media tendrá abierto un expediente en la Inspección Central, donde serán anotados y compulsados los informes del respectivo Inspector de Distrito.

Art. 67.— Disposiciones especiales: reglamentarán la organización, funciones y procedimiento de la Inspección, así como los efectos jurídicos de sus actuaciones. Las mismas disposiciones establecerán las sanciones aplicables y los recursos que, en su caso, procedan.

Art. 68.— En atención a sus circunstancias especiales, se considerarán exentos de la inspección de Estado los Seminarios Pontificios, los Seminarios Menores y los Noviciados o Casas religiosas de Formación eclesiástica, cuyos estudios se hallen acomodados a algún plan de Bachillerato oficial. Los alumnos de todos estos Centros quedarán sometidos, en su

caso, a las pruebas de grado que determina esta Ley, de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio de ocho de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis entre el Gobierno español y la Santa Sede.

- Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa⁷⁴

La Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa (14/1970), de 4 de agosto, publicada en el BOE el 6 de agosto, supone el establecimiento de una nueva estructura para el sistema educativo general establecido en la Ley Moyano: preescolar, educación general básica (EGB), enseñanzas medias (BUP o FP) y, enseñanza universitaria. Supone la generalización de la educación de los seis a los catorce años, en un sistema único no discriminatorio de toda la población de estas edades y de escolarización plena y gratuita.

Como novedad incorpora el procedimiento de acceso a las enseñanzas universitarias a los mayores de veinticinco años, regula la educación permanente de adultos y regula las consideraciones generales de la educación especial, para aquellos alumnos con discapacidades (Berengueras & Vera, 2015).

En cuanto a la relación con la inspección, esta ley determina la competencia inspectora del Ministerio de Educación (art. 135) y es la primera ley que establece las funciones de la inspección (art. 142) (véase la tabla 2.2.2.1.). Determina la estructura del organismo y crea la Inspección General de Servicios (art. 144)

Título Segundo. Centros docentes.

Capítulo Primero. Disposiciones generales.

Art. 54. Todos los Centros docentes establecidos en España y los Centros docentes españoles en el extranjero estarán sometidos a las normas de esta Ley y de las disposiciones que la desarrollen, debiéndose inscribir en el Registro especial del Ministerio de Educación y Ciencia, a cuya inspección quedarán sujetos. Dicho Registro tendrá carácter público.

Tres. El Ministerio de Educación y Ciencia, a través de la Inspección y con el asesoramiento de los Organismos competentes, vigilará el rendimiento educativo de los Centros de enseñanza, atendiendo de manera fundamental a lo dispuesto en el artículo once, apartado quinto, de la presente Ley.

Capítulo III. Centros no estatales

Art. 99. Dos. Estos Centros estarán sometidos a la inspección estatal en lo que respecta a la idoneidad de sus instalaciones pedagógicas y al cumplimiento de lo dispuesto en el Art. cincuenta y cuatro de esta Ley.

Título III. El Profesorado

Capítulo II. Órganos de la administración educativa

Art. 135. Corresponde al Ministerio de Educación y Ciencia, como órgano del Estado, inmediatamente responsable de la educación, sin perjuicio de las demás atribuciones que las Leyes le reconocen, el ejercicio de las competencias señaladas en esta Ley, y, en especial, las siguientes:

⁷⁴ <https://www.boe.es/boe/dias/1970/08/06/pdfs/A12525-12546.pdf> con acceso el 2 de agosto de 2019.

a) Proponer al Gobierno las líneas generales de la política educativa y planes de educación y ejecutar sus acuerdos en este campo.

b) Proponer al Gobierno la creación y supresión de Centros estatales de enseñanza y los anteproyectos de la Ley de creación, autorización para crear y suprimir Universidades, Facultades universitarias y Escuelas Técnicas Superiores, de acuerdo con el apartado c) del artículo cuarto de esta Ley.

c) Ejercer la superior dirección de todas las Instituciones educativas dependientes del Departamento.

d) Inspeccionar y coordinar todas las Instituciones docentes, tanto estatales como no estatales.

e) Estimular, orientar y coordinar la cooperación social y económica a las actividades educativas.

f) Expedir o autorizar la expedición de los títulos y nombramientos que acrediten conocimientos académicos correspondientes a cualquier nivel o ciclo de enseñanza objeto de esta Ley. Los documentos acreditativos de conocimientos sólo podrán denominarse títulos cuando con tal finalidad hayan sido expedidos o autorizados por el Ministerio de Educación y Ciencia.

Art. 142. Uno. En el Ministerio de Educación y Ciencia existirá un Servicio de Inspección Técnica de Educación, cuyos funcionarios constituirán un Cuerpo especial de la Administración Civil del Estado y cuyas funciones serán las siguientes:

a) Velar por el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones en todos los Centros docentes estatales y no estatales, en el ámbito de la función educativa.

b) Colaborar con los Servicios de Planeamiento en el estudio de las necesidades educativas y en la elaboración y actualización del mapa escolar de las zonas donde ejerza su función, así como ejecutar investigaciones concernientes a los problemas educativos de éstas.

c) Asesorar a los Profesores de Centros estatales y no estatales sobre los métodos más idóneos para la eficacia de las enseñanzas que impartan.

d) Evaluar el rendimiento educativo de los Centros docentes y Profesores de su zona respectiva o de la especialidad a su cargo en colaboración con los Institutos de Ciencias de la Educación. A tal efecto tendrá en cuenta la actividad orientadora y de inspección interna que, en su caso, puedan establecer para sus Centros las Entidades promotoras.

e) Colaborar con los Institutos de Ciencias de la Educación en la organización de cursos y actividades para el perfeccionamiento y actividad del personal docente.

Dos. Reglamentariamente se establecerán normas complementarias para la Inspección en los Centros de Educación universitaria, de acuerdo con sus características peculiares. Esta inspección será ejercida en todo caso por quienes procedan de los Cuerpos de Catedráticos de Educación Universitaria.

Art. 143. Uno. El Servicio de Inspección Técnica de Educación estará constituido por especialistas de los distintos niveles de enseñanza establecidos en el artículo doce. Los Inspectores de las distintas especialidades serán seleccionados, mediante concurso, entre los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos docentes del Departamento, según el nivel de la especialidad correspondiente. Habrán de tener como mínimo tres años de práctica docente en Centros de nivel a que concursan, poseer el título de Licenciado universitario,

Ingeniero o Arquitecto y haber seguido los cursos especiales correspondientes en los Institutos de Ciencias de la Educación.

Dos. Excepcionalmente, el Ministro de Educación y Ciencia podrá nombrar Inspectores extraordinarios a Profesores de relevantes méritos docentes

Tres. Los Inspectores deberán participar obligatoriamente en los cursos especiales de perfeccionamiento profesional de los Institutos de Ciencias de la Educación cada tres años como mínimo.

Cuatro. El Jefe del Servicio será de libre designación del Ministro de Educación y Ciencia.

Cinco. Mediante Decreto, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia, se regulará lo concerniente a la nueva estructura y funciones del Servicio de Inspección Técnica, así como el sistema de pruebas a que habrá de ajustarse la selección de los funcionarios de dicho Servicio.

Art. 144. Dependiente igualmente del Ministro de Educación y Ciencia existirá una Inspección General de Servicios, que ejercerá su misión inspectora sobre la organización y funcionamiento administrativo de todos los Servicios, Organismos y Centros dependientes del Departamento, especialmente en lo que se refiere a personal, procedimiento, régimen económico, instalaciones y dotaciones.

Disposiciones Transitorias

Sexta. Cuatro. Los actuales funcionarios de los Cuerpos de Inspección del Ministerio de Educación y Ciencia pasarán a formar parte del Cuerpo especial de Inspección Técnica que se establece en el artículo ciento cuarenta y dos. Los actuales funcionarios de los Cuerpos de Directores Escolares podrán integrarse en el Cuerpo de Profesores de Educación General Básica, teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado tercero del artículo ciento diez, respecto del ejercicio de las funciones directivas.

- Ley Orgánica 5/1980, de 19 de junio, por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares⁷⁵

La Ley Orgánica 5/1980, por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares, conocida como la LOECE y publicada en el BOE el 27 de junio, fue el primer marco legal que desarrolló el art. 27 de la Constitución de 1978, por parte del gobierno perteneciente a la UCD (Unión de Centro Democrático), tras la apertura democrática de España. A pesar de su publicación, nunca entró en vigor (Berengueras & Vera, 2015) (De Vicente, 2022): fue recurrida y posteriormente, por Sentencia del Tribunal Constitucional (STC 5/1981⁷⁶), se declararon inconstitucionales y nulos los arts. 18.1, 34.2., 34.3.b. y 34.3.d., lo que suponía, en la práctica, una reformulación de calado o la elaboración de una nueva ley.

Por lo que se refiere a la inspección de educación, esta ley reitera la potestad inspectora de la administración.

⁷⁵ <https://www.boe.es/boe/dias/1980/06/27/pdfs/A14633-14636.pdf> con acceso el 2 de agosto de 2021.

⁷⁶ Página web del Tribunal Constitucional en el que se pueden encontrar los fundamentos de la sentencia, el fallo y los votos particulares. Acceso el 3 de septiembre de 2022 en la url:

<https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show?tipoResolucion=SENTENCIA&year=1981&number=5>.

Art. 19. La Administración tendrá las siguientes competencias en relación con los centros docentes:

- a) La programación general con participación efectiva de todos los sectores afectados, conforme legalmente se establezca.*
- b) La ordenación general de las enseñanzas.*
- c) La determinación de los niveles mínimos de rendimiento.*
- d) La inspección, la evaluación, el control y el asesoramiento de los centros.*
- e) La expedición o reconocimiento de los títulos académicos y profesionales.*
- f) La creación y supresión de los centros de su titularidad mediante Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Educación.*
- g) La autorización de funcionamiento, la clasificación académica y la revocación de autorización de los centros que no sean de su titularidad, mediante orden del Ministerio de Educación, y con audiencia, en todo caso, de las personas o entidades titulares de los centros.*
- h) La determinación con carácter general de los límites máximos y mínimo de alumnos por unidad, así como la fijación de la plantilla del profesorado y demás personal de los centros públicos.*
- i) Establecer los requisitos a que se refiere el artículo doce y velar por su cumplimiento.*

- Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación⁷⁷

La Ley Orgánica 8/1985 reguladora del Derecho a la Educación, conocida como la *LODE*, fue publicada en el BOE el 4 de julio. Esta norma, que también desarrolla el art. 27 de la Constitución de 1978, fue la primera en referencia al sistema educativo, promulgada por el Partido Socialista (PSOE) tras la victoria de octubre de 1982. Esta ley garantizó y desarrolló el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza y reguló la participación en la programación general de la enseñanza de todos los sectores implicados en el proceso educativo, desde el centro hasta los niveles de máxima decisión del Estado (establece el Consejo Escolar del Estado) (Berengueras & Vera, 2015).

En cuanto a las referencias a la inspección educativa, su figura aparece para constatar, por medio de informes, incumplimientos de las condiciones de conciertos.

Art. 62.

3. La reiteración de incumplimientos a los que se refieren los apartados anteriores se constatará por la Administración educativa competente con arreglo a los siguientes criterios:

- a) Cuando se trate de la reiteración de los incumplimientos cometidos con anterioridad, bastará con que esta situación se ponga de manifiesto mediante informe de la inspección educativa correspondiente.*

⁷⁷ <https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-12978-consolidado.pdf> con acceso el 2 de agosto de 2019.

b) Cuando se trate de un nuevo incumplimiento de tipificación distinta al cometido con anterioridad, será necesaria la instrucción del correspondiente expediente administrativo.

- Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo⁷⁸

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, conocida como la *LOGSE*, fue publicada en el BOE el 4 de octubre de ese mismo año. Fue una ley promulgada por el Partido Socialista, para realizar la reestructuración del sistema educativo, sustituyendo a la LGE 14/1970. La *LOGSE* regula la estructura y organización del sistema educativo en sus niveles no universitarios; establece una nueva escolarización obligatoria hasta los dieciséis años; estructura las enseñanzas en dos grandes grupos: las de régimen general (etapas de educación infantil, primaria, secundaria, formación profesional y educación universitaria) y las de régimen especial, en las que incluye, como novedad, las enseñanzas artísticas y de idiomas; introduciendo por primera vez el concepto de necesidades educativas especiales.

En lo relativo a la inspección de educación, hay que recordar que esta ley se promulgó tras la supresión del Cuerpo de Inspectores de Educación por la Ley 30/1984, aunque se mantuvo la función inspectora, asignándola a docentes seleccionados. La inspección aparece como factor de calidad y mejora (art. 55); y su art. 61 lo enfoca *para garantizar el cumplimiento de las leyes y la mejora de la calidad del sistema educativo*, enumerando sus funciones y conformando la columna vertebral de funciones que ha llegado hasta la actualidad (véase la tabla 2.2.2.2.) (Berengueras & Vera, 2015).

Título IV. De la Calidad de la Enseñanza

Art. 55. Los Poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad y mejora de la enseñanza, en especial a:

- a) La cualificación y formación del profesorado.*
- b) La programación docente.*
- c) Los recursos educativos y la función directiva.*
- d) La innovación y la investigación educativa.*
- e) La orientación educativa y profesional.*
- f) La inspección educativa.*
- g) La evaluación del sistema educativo.*

Art. 61. 1. Las Administraciones educativas ejercerán la función inspectora para garantizar el cumplimiento de las leyes y la mejora de la calidad del sistema educativo.

La inspección Educativa tendrá encomendadas en cualquier caso las siguientes funciones:

- a) Colaborar en la mejora de la práctica docente y del funcionamiento de los centros y en los procesos de renovación educativa.*
- b) Participar en la evaluación del sistema educativo.*

⁷⁸ <https://www.boe.es/boe/dias/1990/10/04/pdfs/A28927-28942.pdf> con acceso el 2 de abril de 2022.

c) Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones generales en el ámbito del sistema educativo.

d) Asesorar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.

3. Para el ejercicio de estas funciones la inspección educativa tendrá acceso a los centros docentes, públicos y privados, así como a los servicios e instalaciones en los que se desarrollan actividades promovidas o autorizadas por las Administraciones educativas.

4. El Estado ejercerá la alta inspección que le corresponde a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los Poderes públicos en materia de educación.

- Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes⁷⁹

La Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes, conocida como la LOPEGCE, fue publicada en el BOE el 21 de noviembre. Fue la cuarta ley socialista, tras la Ley de Reforma Universitaria -LRU⁸⁰-, la LODE y la LOGSE. Adecua a la nueva realidad educativa aprobada y regulada por la LOGSE, el planteamiento participativo y los aspectos referentes a organización y funcionamiento de los centros con financiación pública; reguló los órganos colegiados de gobierno de los centros docentes públicos y definió la función directiva de los centros públicos, especificando los procedimientos de elección, nombramiento y acreditación de directores; y, entre otros aspectos, desarrolló la evaluación de los centros y del profesorado.

Fue una ley con gran influencia en la inspección educativa, pues volvió a crear el Cuerpo de Inspectores de Educación (art. 37.1). La figura aparece a lo largo de todo el texto y dedica específicamente el título IV; regula sus funciones (véase la tabla 2.2.2.3.), sus atribuciones, condiciones de acceso y el ejercicio de la supervisión educativa.

Título IV. De la inspección educativa.

Capítulo Único.

Artículo 35. Supervisión e inspección.

Las Administraciones educativas, en el ejercicio de sus competencias de supervisión del sistema educativo, ejercerán la inspección sobre todos los centros, servicios, programas y actividades que lo integran, tanto públicos como privados, a fin de asegurar el cumplimiento de las leyes, la garantía de los derechos y la observancia de los deberes de cuantos participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la mejora del sistema educativo y la calidad de la enseñanza.

Artículo 36. Funciones de la inspección educativa.

Las funciones de la inspección educativa serán las siguientes:

⁷⁹ <https://www.boe.es/boe/dias/1995/11/21/pdfs/A33651-33665.pdf> con acceso el 2 de agosto de 2019.

⁸⁰ <https://www.boe.es/boe/dias/1983/09/01/pdfs/A24034-24042.pdf> con acceso el 3 de septiembre de 2022.

- a) Controlar y supervisar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos, tanto de titularidad pública como privada.*
- b) Colaborar en la mejora de la práctica docente y del funcionamiento de los centros, así como en los procesos de reforma educativa y de renovación pedagógica.*
- c) Participar en la evaluación del sistema educativo, especialmente en la que corresponde a los centros escolares, a la función directiva y a la función docente, a través del análisis de la organización, funcionamiento y resultados de los mismos.*
- d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.*
- e) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.*
- f) Informar sobre los programas y actividades de carácter educativo promovidos o autorizados por las Administraciones educativas competentes, así como sobre cualquier aspecto relacionado con la enseñanza que le sea requerido por la autoridad competente o que conozca en el ejercicio de sus funciones, a través de los cauces reglamentarios.*

- Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación⁸¹

La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, conocida como la LOCE fue publicada en el BOE el 24 de diciembre. Fue una ley promulgada por el Partido Popular (PP), tras las victorias electorales de 1996 y de abril del 2000. Esta ley, que modificó tanto la *LODE*, la *LOGSE*, como la *LOPEG*, no entró nunca en vigor por la modificación del Real Decreto de calendario, tras la victoria del Partido Socialista en las elecciones generales celebradas en marzo de 2004⁸². Las pretensiones de este marco legal se definían en lograr una educación de calidad para todos, desde un punto de vista de inspiración conservadora (Berengueras & Vera, 2015).

En lo relativo a la inspección de educación, le dedica el título VII, con una estructura normativa en la que expone aspectos generales, funciones asignadas y atribuciones, ya clásica para regularla (véase la tabla 2.2.2.4.).

Título VII. De la inspección del sistema educativo

Artículo 102. Inspección del sistema educativo.

- 1. Es competencia y responsabilidad de los poderes públicos la inspección del sistema educativo.*
- 2. Las Administraciones públicas competentes ejercerán la inspección educativa dentro del respectivo ámbito territorial y de conformidad con las normas básicas que regulan esta materia. El ejercicio de la función inspectora se realizará sobre todos los elementos y*

⁸¹ <https://www.boe.es/boe/dias/2002/12/24/pdfs/A45188-45220.pdf> con acceso el 2 de agosto de 2019.

⁸² La publicación por el gobierno del partido socialista del Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo, por el que se modificaba el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, que implantaba el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, dejó sin efecto la entrada en vigor de la Ley 10/2002, pues estableció un dilatado calendario que fue utilizado para la redacción y aprobación de la posterior Ley Orgánica 2/2006 de Educación (BOE de 3 de mayo). Esta estrategia, descrita profusamente por Tiana (2016), tenía por objeto *frenar el inmediato proceso de aplicación de la LOCE*.

aspectos del sistema educativo, a fin de asegurar el cumplimiento de las leyes, la garantía de los derechos y la observancia de los deberes de cuantos participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la mejora del sistema educativo y la calidad de la enseñanza.

Capítulo II. De la inspección educativa

Artículo 105. Funciones.

1. Son funciones de la inspección educativa:

- a) Controlar y supervisar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos, tanto de titularidad pública como privada.*
- b) Supervisar la práctica docente y colaborar en su mejora continua y en la del funcionamiento de los centros, así como en los procesos de reforma educativa y de renovación pedagógica.*
- c) Participar en la evaluación del sistema educativo, especialmente en la que corresponde a los centros escolares, a la función directiva y a la función docente, a través del análisis de la organización, funcionamiento y resultados de los mismos.*
- d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.*
- e) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.*
- f) Informar sobre los programas y actividades de carácter educativo promovidos o autorizados por las Administraciones educativas competentes, así como sobre cualquier aspecto relacionado con la enseñanza que le sea requerido por la autoridad competente o que conozca en el ejercicio de sus funciones, a través de los cauces reglamentarios.*

2. Para el correcto ejercicio de las funciones anteriores, los Inspectores de Educación tendrán las siguientes atribuciones:

- a) Conocer directamente todas las actividades que se realicen en los centros, a los cuales tendrán libre acceso.*
- b) Examinar y comprobar la documentación pedagógica y administrativa de los centros.*
- c) Recibir de los restantes funcionarios la necesaria colaboración para el desarrollo de sus actividades, para las cuales el Inspector tendrá la consideración de autoridad pública.*

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación⁸³

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, conocida como la *LOE*, fue publicada en el BOE el 4 de mayo. Fue la ley promulgada por el Partido Socialista, tras la victoria electoral de marzo de 2004, que derogó la *LOCE* del Partido Popular. La Ley tiene como finalidades, tal y como enumera la exposición de motivos: proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos; garantizar una igualdad de oportunidades prestando apoyo tanto a los alumnos que lo necesitan, como a los centros donde están escolarizados; buscar la colaboración de todos los componentes de la comunidad educativa para conseguir el éxito del alumnado; y facilitar la

⁸³ <https://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf> con acceso el 2 de agosto de 2019.
Texto consolidado en <https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf>

convergencia en el ámbito europeo mediante un compromiso decidido con los objetivos educativos planteados por la Unión Europea. La ley se sustenta sobre tres principios fundamentales: la exigencia de proporcionar una educación de calidad; la necesidad de que todos los componentes de la comunidad educativa colaboren para conseguir ese objetivo; y un compromiso decidido con los objetivos educativos planteados por la Unión Europea.

La *LOE* presenta un planteamiento similar a la *LOGSE* de 1990, en cuanto a estructura, metodología, organización y funcionamiento de los centros y atención a la diversidad (Berengueras & Vera, 2015).

En lo relativo a la inspección de educación, la ley le dedica el título VII, con una estructura muy parecida a la establecida por la *LOCE*: aspectos generales, funciones y atribuciones (véase la tabla 2.2.2.4.).

Título VII. Inspección del sistema educativo.

Artículo 148. Inspección del sistema educativo.

- 1. Es competencia y responsabilidad de los poderes públicos la inspección del sistema educativo.*
- 2. Corresponde a las Administraciones públicas competentes ordenar, regular y ejercer la inspección educativa dentro del respectivo ámbito territorial.*
- 3. La inspección educativa se realizará sobre todos los elementos y aspectos del sistema educativo, a fin de asegurar el cumplimiento de las leyes, la garantía de los derechos y la observancia de los deberes de cuantos participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la mejora del sistema educativo y la calidad y equidad de la enseñanza.*

Capítulo II. Inspección educativa.

Artículo 151. Funciones de la inspección educativa.

Las funciones de la inspección educativa son las siguientes:

- a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos, así como los programas que en ellos inciden.*
- b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.*
- c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.*
- d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.*
- e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres.*
- f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.*
- g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.*
- h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.*

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa⁸⁴

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, conocida como la *LOMCE*, fue publicada en el BOE el 10 de diciembre. Fue una ley promulgada por el Partido Popular tras la victoria electoral de noviembre de 2011. Este marco legal modifica la *LOE* y la *LODE*, introduciendo aspectos de la *LOCE*. La *LOMCE*, entre otros aspectos, modifica levemente los requisitos para la participación en los concursos de méritos para la selección de los directores de los centros públicos y les dota de importantes atribuciones, en detrimento de los consejos escolares; cambia el diseño curricular en una estructura formada por asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica; y hace desaparecer la asignatura, creada en la *LOE* de *Educación para la ciudadanía* (Berengueras & Vera, 2015).

En lo relativo a la inspección de educación, no modifica ninguno de los artículos, principios y preceptos establecidos en la *LOE*.

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006⁸⁵

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, conocida como la *LOMLOE* y actualmente en vigor, fue publicada en el BOE el 30 de diciembre de ese año. Esta ley, promulgada por el gobierno de Partido Socialista tras la moción de censura celebrada entre mayo y junio de 2018, que desbancó de la presidencia del gobierno al Partido Popular, y las victorias electorales de abril y de noviembre de 2019, revierte las modificaciones establecida por la *LOMCE*. Este marco legal basa su desarrollo en las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo (2018), relativas a las competencias clave para el aprendizaje permanente; en la visión aportada por el IBE (International Bureau of Education) de la UNESCO (Marope, 2017) en relación a los principales retos y desafíos globales a los que debe verse confrontado el alumnado; y en los objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030: «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible» de la ONU (2015), especialmente en lo referido al ODS 4: «garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos».

La ley, planteada como una modificación de la *LOE* y actualmente en proceso de implantación, reestructura la enseñanza básica e implanta una novedosa estructura curricular, enfocada a un desarrollo competencial por parte del alumnado.

Ya se ha expuesto, siguiendo a Montero Alcaide (2021c), que las modificaciones que esta norma plantea sobre las funciones de la inspección educativa, se consideran estéticas y de poco calado (véase la tabla 2.2.2.5.A.); no obstante, existen singularidades, en lo relativo a las atribuciones y a los principios de actuación, que han quedado recogidas en las tablas de yuxtaposición correspondientes (véase la tabla 2.2.2.5.B.).

⁸⁴ <https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf> con acceso el 2 de agosto de 2019.

⁸⁵ <https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf> con acceso el 2 de abril de 2021. Texto consolidado en <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-17264>

Título VII. Inspección del sistema educativo.

Artículo 148. Inspección del sistema educativo.

- 1. Es competencia y responsabilidad de los poderes públicos la inspección, supervisión y evaluación del sistema educativo.*
- 2. Corresponde a las Administraciones públicas competentes ordenar, regular y ejercer la inspección educativa dentro del respectivo ámbito territorial.*
- 3. La inspección educativa se realizará sobre todos los elementos y aspectos del sistema educativo, a fin de asegurar el cumplimiento de las leyes, la garantía de los derechos y la observancia de los deberes de cuantos participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la mejora del sistema educativo y la calidad y equidad de la enseñanza.*

Capítulo II. Inspección educativa.

Artículo 151. Funciones de la inspección educativa.

Las funciones de la inspección educativa son las siguientes:

- a) Supervisar, evaluar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos, así como los proyectos y programas que desarrollen, con respeto al marco de autonomía que esta Ley ampara.*
- b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.*
- c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.*
- d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.*
- e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres.*
- f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.*
- g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.*
- h) Orientar a los equipos directivos en la adopción y seguimiento de medidas que favorezcan la convivencia, la participación de la comunidad educativa y la resolución de conflictos, impulsando y participando, cuando fuese necesario, en los procesos de mediación.*

Artículo 153 bis. Principios de actuación de la inspección educativa.

- a) Respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas, defensa del interés común y los valores democráticos y evitación de cualquier conducta que pueda generar discriminación por razón de origen, género, orientación sexual, religión opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.*
- b) Profesionalidad e independencia de criterio técnico.*
- c) Imparcialidad y eficiencia en la consecución de los objetivos fijados.*
- d) Transparencia en cuanto a los fines de sus actuaciones, los instrumentos y las técnicas utilizados.*

Disposición adicional cuarta. Libros de texto y demás materiales curriculares.

1. En el ejercicio de la autonomía pedagógica, corresponde a los órganos de coordinación didáctica de los centros públicos adoptar los libros de texto y demás materiales que hayan de utilizarse en el desarrollo de las diversas enseñanzas.

2. La edición y adopción de los libros de texto y demás materiales no requerirán la previa autorización de la Administración educativa. En todo caso, éstos deberán adaptarse al rigor científico adecuado a las edades de los alumnos y al currículo aprobado por cada Administración educativa. Asimismo, deberán reflejar y fomentar el respeto a los principios, valores, libertades, derechos y deberes constitucionales, así como a los principios y valores recogidos en la presente Ley y en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, a los que ha de ajustarse toda la actividad educativa.

3. La supervisión de los libros de texto y otros materiales curriculares es competencia de las administraciones educativas y constituirá parte del proceso ordinario de inspección que ejerce la Administración educativa sobre la totalidad de elementos que integran el proceso de enseñanza y aprendizaje, que debe velar por el respeto a los principios y valores contenidos en la Constitución y a lo dispuesto en la presente ley.

Disposición adicional cuadragésima octava. Cambio de las funciones del personal docente.

Los funcionarios docentes que muestren una manifiesta falta de condiciones para ocupar un puesto docente o una notoria falta de rendimiento que no comporte inhibición, podrán ser removidos de su puesto de trabajo y realizar otras tareas que no requieran atención directa con el alumnado. La remoción ha de ser consecuencia de un expediente contradictorio que finalice con una evaluación negativa realizada por la inspección educativa.

2.2.3. En la normativa de desarrollo

Una vez que hemos analizado las referencias a la inspección de educación en los cuerpos constitucionales y en las leyes generales que han regulado nuestro sistema educativo procedemos a analizar las funciones asignadas a los inspectores de educación en toda la normativa de desarrollo. Utilizamos el mismo esquema del anterior epígrafe, puntualizando un breve contexto histórico de la norma y aquella singularidad o hito que supuso. Se hace notar que se reproducen literalmente aquellos artículos de la norma, que se consideran representativos e importantes para la investigación doctoral, dejando exactamente el uso del lenguaje de la época.

- Real Decreto de 30 de marzo 1849 de Creación del cuerpo de Inspectores de Educación⁸⁶

- El Real Decreto de 30 de marzo 1849 de Creación del cuerpo de Inspectores de Educación fue publicado en la Gaceta de Madrid el 2 de abril de 1849⁸⁷. Como ya se ha apuntado la norma fue publicada, siendo Juan Bravo Murillo ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, pero la doctrina considera que la redacción literal pudo corresponder a Antonio Gil de Zárate, Director General de Instrucción Pública. El Real decreto siempre se ha considerado como la norma primigenia y fundacional del Cuerpo de Inspectores de Educación.

La norma llevaba como título completo: «sobre la conveniencia de dar una nueva organización á las escuelas normales de instrucción primaria, y la necesidad de crear Inspectores para este ramo de enseñanza», por lo que su iniciativa siempre se ha considerada vinculada con la formación de los maestros: como si la inspección y la formación estuvieran íntimamente vinculados; tanto la inicial como la permanente.

En cuanto al establecimiento de funciones, este real Decreto sólo menciona la visita como herramienta de intervención, sin detallar ninguna otra mención (véase la tabla 2.2.3.1.)

Si en todos los ramos del servicio público es conveniente esta clase de funcionarios, en la instrucción primaria es indispensable. Sin ellos la administración nada venada sabe, nada puede remediar. Las Autoridades no tienen tiempo para vigilar por sí solas tan gran número de establecimientos, ni menos para entrar en la infinidad de pormenores que esta vigilancia exige. Carecen además de los conocimientos especiales que se necesitan para observar muchas cosas que solo se descubren á los ojos de personas facultativas y amaestradas en esta clase de indagaciones

Por el contrario, si el Gobierno vigila, si tiene los medios de saber las faltas para aplicar la enmienda ó el castigo, si mantiene en continua alarma á cuantos deben servirle y ayudarle, desaparece la inercia, nace la actividad, la emulación, y se entra en una senda de progresivas mejoras que al cabo paran en la perfección apetecida, ó se acercan á ella por lo menos.

Art. 20. Los mismos Inspectores en las provincias donde exista escuela normal elemental tendrán obligación de enseñaren ella en ciertas épocas del año las materias que se les señale: igualmente reemplazarán a los Directores en ausencias y enfermedades.

Art. 22. Los Inspectores generales tendrán por principal objeto visitar las escuelas normales y las ordinarias de las capitales de provincia, desempeñando además todas las comisiones que les encargue el Gobierno para los adelantamientos de la instrucción primaria

- Reglamento para los Inspectores de Instrucción Primaria del reino de 20 de mayo de 1849⁸⁸

El Reglamento para los Inspectores de Instrucción Primaria del reino de 20 de mayo de 1849, fue publicado en la Gaceta de Madrid el 25 de mayo mientras todavía Bravo Murillo se mantenía en la cartera de Comercio, Instrucción y Obras Públicas (Bravo Murillo cambió al ministerio de Hacienda en agosto de 1849). Este Reglamento, desarrollo del Real Decreto de 30 de marzo, sí

⁸⁶ <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1849/5315/A00001-00002.pdf> con acceso el 2 de agosto de 2019.

⁸⁷ Por este motivo es tradición asumida entre los inspectores de educación considerar al 2 de abril como el día de la inspección educativa.

⁸⁸ <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1849/5368/A00001-00002.pdf> con acceso el 2 de agosto de 2019.

desarrolla las funciones o, como califica, aquello que les correspondía a los inspectores; la forma de desarrollar las visitas, de manera muy sencilla; y el establecimiento del libro de visitas (véase la tabla 2.2.3.2.).

Artículo 18. Corresponde a los Inspectores de provincia:

- 1. Indagar las necesidades de la instrucción primaria en sus respectivas provincias, a fin de proponer a las autoridades, a las comisiones provinciales y al Gobierno cuantas mejoras crean convenientes para el aumento y prosperidad de las escuelas.*
- 2. Vigilar sobre el cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones vigentes relativas a instrucción primaria, excitando el celo de las autoridades, denunciándolas faltas y abusos, y haciendo a quien corresponda las oportunas reclamaciones.*
- 3. Gestionar para que los maestros estén puntualmente pagados y se les trate con el decoro debido.*
- 4. Investigar los recursos con que se sostienen las escuelas y vigilar sobre la recta administración de los bienes que les estén aplicados, sobre el cumplimiento de las cláusulas de las fundaciones, y sobre la puntual rendición de cuentas por los que estén obligados a darlas, dirigiendo para todo ello sus reclamaciones a quien corresponda.*
- 5. Desempeñar en las comisiones de examen, tribunales de censura y demás corporaciones o actos a que deban asistir, la parte que les señalen los reglamentos, reclamar en su caso a fin de que estos actos se verifiquen como es debido, e informar a la Dirección general de Instrucción pública sobre su resultado.*
- 6. Extender y elevar al Gobierno en el mes de Enero de cada año un informe sobre el estado de la instrucción primaria en sus respectivas provincias, y sobre los adelantos que se hubieren conseguido en el año anterior.*
- 7. Formar la estadística de los establecimientos de Instrucción primaria, con sujeción a los interrogatorios y modelos que les comunique la Dirección general.*

Art. 20. Para desempeñar con toda exactitud la visita de las escuelas, los Inspectores de provincia deberán:

- 1. Enterarse de cuanto tenga relación con el personal de los maestros, a fin de conocer el grado de instrucción que alcanzan, su aptitud, su moralidad, su celo por la enseñanza, el concepto de que goza, que merezca saberse.*
- 2. Enterarse igualmente del estado material de las escuelas, investigando si tienen todas las circunstancias requeridas, y si les falta algo en punto a menaje y medios de instrucción.*
- 3. Observar el régimen interior de los establecimientos y el orden y disciplina que se guarda en ellos.*
- 4. Examinar los métodos que siguen los profesores en la enseñanza, la extensión que le dan, los libros que tienen adoptados y las doctrinas que vierten en sus explicaciones.*
- 5. Preguntar a los alumnos y enterarse de los adelantos que hacen comparativamente con el tiempo que lleven de asistencia a la escuela.*
- 6. Aconsejar a los maestros, indicarles los métodos y sistemas que deben seguir para la más perfecta enseñanza, los libros de que han de servirse, e instruirlos en todo aquello que ignoren, o indicarles los medios de perfeccionar sus conocimientos.*

Art. 31. Al terminar cada viaje de visita presentara el Inspector a la comisión provincial una memoria manifestando el resultado de sus observaciones, y proponiendo las medidas que en su concepto deban adoptarse, para que aquella dicte las providencias que sean del caso. Una copia de dicha memoria y nota de estas providencias se remitirán a la Dirección general de Instrucción pública.

Art. 32. Los Inspectores llevarán un libro en que anoten el resultado de la visita de cada escuela y las prevenciones que hubieren dejado hechas a los maestros, comisiones y Ayuntamientos, para que en la nueva visita que giren puedan cerciorarse de que se han cumplido dichas prevenciones, y en caso contrario ponerlo en conocimiento de quien corresponda.

- Real Decreto de Organización de la Inspección de Primera Enseñanza de 5 de mayo de 1913⁸⁹

El Real Decreto de Organización de la Inspección de Primera Enseñanza de 5 de mayo de 1913, fue publicado en la Gaceta de Madrid el 13 de mayo, durante el reinado de Alfonso XIII, siendo presidente del gobierno Álvaro de Figueroa y Torres (Conde de Romanones) y ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Antonio López Muñoz.

Este Real Decreto, de gran importancia establece y determina los inspectores natos, los inspectores especiales y los inspectores profesionales, y también establece las atribuciones y los deberes del inspector general y de los inspectores provinciales. Desarrolla la visita de inspección y, a partir del art. 37, establece las disposiciones penales por faltas cometidas por los inspectores en el desempeño de su cargo.

Atribuciones y deberes del inspector general

Art. 12. El Inspector General de primera enseñanza ejercerá sus funciones de tal sobre todo el organismo docente y administrativo de la primera enseñanza pública; sobre las escuelas privadas, dentro de las atribuciones que para este fin determinan las disposiciones vigentes; sobre las instituciones circum y post escolares, en especial cuando reciban subvención del estado, y singularmente por ser cometido propio de su categoría, sobre todos los inspectores profesionales, las Escuelas Normales, y la de Estudios Superiores del Magisterio.

Art. 13. Son obligaciones del Inspector General de primera enseñanza:

- 1. Ejecutar directamente, o por medio de inspectores de las diferentes categorías, las órdenes de la Dirección General de Primera Enseñanza.*
- 2. Dar el debido, despacho a cada documento que requiera su intervención.*
- 3. Tramitar las nóminas de haberes y visitas de Inspección, llevando de éstas el oportuno registro.*
- 4. Hacer por sí mismo las visitas de Inspección cuando así lo entienda necesario, o cuando le sean ordenadas por la superioridad.*
- 5. Evacuar las consultas que le sometan los inspectores.*

⁸⁹ <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1913/133/A00446-00451.pdf> con acceso el 2 de agosto de 2019.

6. *Coleccionar las memorias y trabajos técnicos de los inspectores y las actas de las sesiones celebradas por las juntas provinciales y locales, velando por el buen funcionamiento de unas y otras.*

7. *Llevar los expedientes personales de los inspectores y formar y tramitar en la parte que le corresponda, todos los que se inicien para la depuración de responsabilidades.*

8. *Redactar anualmente y remitir a la Dirección General una memoria resumen de las visitas de Inspección que haya girado, de los trabajos del negociado a sus órdenes, de las memorias y labor de los demás inspectores durante el año, de los resultados obtenidos en el servicio de Inspección y de las reformas que a su juicio, deben producirse en él.*

Atribuciones y deberes de los inspectores provinciales

Art. 19. Son atribuciones de los Inspectores Jefes Provinciales:

1. *Inspeccionar por sí, o por los inspectores a sus órdenes, las escuelas públicas, incluso las graduadas, anejas a las Normales, en lo concerniente a los métodos y el material pedagógico, al estado y condiciones de los edificios, sus anejos y dependencias, a las salas destinadas a clases, a las habitaciones de los maestros cuando estos lo reclamen, a la asistencia escolar y a todo cuanto directa o indirectamente pueda contribuir al buen régimen y adelanto de la educación popular.*

2. *Inspeccionar igualmente las instituciones circum y post escolares organizadas por el estado o subvencionadas por él, cuando así lo disponga la superioridad.*

3. *Proponer a la Dirección General la suspensión o reforma de las juntas locales que no cumplan con los deberes que se les confían, y el nombramiento, cuando el caso lo exija, de un delegado local de la Inspección cerca de ellas.*

4. *Remitir anualmente a la Dirección General una memoria sobre el estado de la enseñanza en la zona de visita, y sobre sus trabajos para mejorar la función docente.*

5. *Formar y tramitar todos los expedientes que afecten a derechos de los maestros, condiciones de las escuelas y creación de éstas, y acordar los traslados voluntarios de los maestros dentro de la localidad. A este efecto, ocurrida una vacante, el Inspector Jefe de la provincia anunciará en el Boletín Oficial un concursillo, por término de diez días, al cual podrán presentarse todos los maestros de la localidad que se hallen en condiciones legales de poder ocupar la vacante anunciada, concediéndose ésta al aspirante que acredite mayor antigüedad en la escuela desde la cual solicita, y en igualdad de condiciones, al que ocupa lugar anterior fin el escalafón general del magisterio.*

6. *Informar los escalafones de los maestros para el percibo del aumento gradual de sueldo; incoar los expedientes de incompatibilidad de los mismos con los pueblos, en virtud de quejas recibidas, y elevarlos a la superioridad para la resolución que proceda.*

7. *Visitar muy especialmente los edificios en construcción para nuevas escuelas. Al efecto se pasará a los inspectores copia del plano y de las condiciones facultativas de las obras. De toda alteración que en cualquiera de ambas cosas observen, dará cuenta inmediata a la Dirección General para la resolución que proceda.*

8. *Llevar los libros y registros siguientes:*

a) De entrada y salida de documentos.

b) De escuelas y calificación de maestros propietarios.

c) De licencias.

d) De interinidades.

e) De escuelas privadas.

f) De edificios.

g) De lo relativo a las bibliotecas circulantes.

h) De reclamaciones, para que en él puedan consignar las suyas los maestros y personas interesadas en la enseñanza, sin más condición que la que razonarlas y justificarlas. Mensualmente darán los inspectores cuenta a la superioridad de las reclamaciones que se hayan hecho.

9. Tramitar los expedientes de permuta, licencia, recompensas, sustituciones y cualquiera otra petición que formulen los maestros, remitiendo dichos expedientes a la superioridad.

10. Oír las quejas de los maestros, de las Autoridades locales y de los pueblos, inquiriendo imparcialmente el fundamento de ellas, y dando cuenta a la Superioridad de todo.

11. Imponer a los maestros, por causas que no se consideren graves, las correcciones disciplinarias siguientes:

a) Amonestación privada.

b) Amonestación pública.

En las faltas graves, previa formación de expediente en que se oiga al interesado y demostradas que sean cumplidamente aquéllas, podrán proponer al ministerio las penas siguientes:

a) Nota desfavorable en el expediente, cuyos efectos durarán más de dos años, determinándose el tiempo de duración al ser impuesta la indicada pena.

b) Suspensión de sueldo de uno a quince días.

c) Suspensión de sueldo por más de quince días y menos de tres meses.

d) Suspensión temporal del servicio, con pérdida del sueldo y del tiempo por el que se imponga. No podrá durar esta suspensión menos de seis meses ni más de dos años, y la plaza del maestro suspenso se proveerá en propiedad si la suspensión excede de un año.

e) Separación definitiva del servicio, con pérdida de todos los derechos y beneficios adquiridos por el título.

En él expediente personal de cada maestro se hará constar la pena o penas que le hayan sido aplicadas; pero si en su conducta posterior hubiera pruebas relevantes de su amor al servicio que, en opinión de su jefe inmediato, lo hicieran acreedor a libertarlo de aquel testimonio adverso, el ministro, con formación de nuevo expediente, podrá acordar la cancelación de dicho testimonio, siempre que hayan transcurrido tres años cuando menos desde la imposición de la pena. Los inspectores podrán sobreseer los expedientes instruidos a los maestros cuando los hayan instruido por su iniciativa, siempre que no resulte contra los acusados culpabilidad alguna, o ultimarlos imponiendo cualquiera de las penas leves señaladas con las letras a) y b) de este mismo número. No podrán nunca los inspectores sobreseer ni resolver por sí los expedientes mandados instruir por las autoridades superiores, cualquiera que sea la sanción que consideren justo proponer; debiendo elevarlos, para su fallo o tramitación subsiguiente, a las autoridades que hubieren

ordenado su instrucción. Dentro del término de diez días, a contar de aquél en que los maestros hayan recibido oficialmente la comunicación de la pena que les fuere aplicada, podrán alzarse ante la Inspección General de las correcciones disciplinarias impuestas por el inspector respectivo, y ante el ministro de las penas restantes.

12. Conceder diez días de licencia a los maestros de su jurisdicción, mediando causa urgente y justificándola. Las licencias de mayor duración serán concedidas por los rectores o por el ministerio, conforme a la legislación vigente. Ni los inspectores ni los rectores podrán conceder licencias a los maestros, sin proveer a lo necesario para que las atenciones de la enseñanza queden cubiertas. Con informe de las inspecciones de zona y provincia, podrá conceder el ministro licencia ilimitadas para asuntos propios, con pérdida de la propiedad de la escuela que desempañen, a los maestros que cuenten más de diez años de servicio; pero sin que les sea de abono, durante el disfrute de aquéllas, los haberes ni el tiempo. De estas licencias solo podrá hacerse uso una sola vez, y si excedieran de cinco años será condición precisa, para que el interesado pueda reingresar activamente en el magisterio, que practique ejercicios de aptitud en una Escuela Normal, la cual habrá de certificar que el examinado ha merecido calificación aprobatoria del tribunal correspondiente, y que se le considera apto para continuar en el ejercicio de la enseñanza.

Artículo 20. Ningún maestro podrá disfrutar durante un mismo año escolar de más de treinta días de licencia, de los que pueden conceder los inspectores o los rectores. A este fin será preciso que al empezar a usarla lo ponga en conocimiento del inspector de su zona, para que este funcionario toma la nota correspondiente en su registro.

De las visitas de inspección

Art 21. Las visitas pueden ser ordinarias y extraordinarias. Las primeras son las que gira el inspector de cada zona, según el itinerario acordado, del cual elevará copia a la Inspección General dentro de la segunda quincena de diciembre; y las segundas, las que haga el inspector mediante salidas aisladas, autorizado o por orden de la Dirección General.

Art 22. El inspector visitará cada año las escuelas comprendidas dentro del itinerario, el cual, así como las fechas de salida, no se hará público, limitándose el inspector, una vez en el pueblo, a comunicar su llegada, verbalmente o por escrito, a la autoridad local.

Art 23. Las visitas se extenderán anualmente al mayor número posible de escuelas, nunca menos de 100, con prohibición de incluir en la visita ordinaria ninguna escuela inspeccionada en el año anterior, mientras no se hayan recorrido todas las de la zona

Art. 24. Terminada la visita a una escuela, el inspector extenderá un boletín con los datos pedagógicos y estadísticos que en su día se detallarán, y con las indicaciones y advertencias que juzgue oportunas, del cual hará el maestro dos copias: una en el libro de visitas de inspección, que será personal del maestro, y llevará consigo en sus cambios de escuela, y otra en papel simple, que entregará al inspector.

- Real Orden de Organización de la Inspección de Enseñanza Primaria de 23 de junio de 1913⁹⁰

La Real Orden de Organización de la Inspección de Enseñanza Primaria de 23 de junio de 1913, fue publicada en la Gaceta de Madrid de 27 de junio de 1913, como desarrollo del Real Decreto de organización de la Inspección de Primera Enseñanza de 5 de mayo de 1913. Aunque el contexto histórico es el mismo que la norma matriz, el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, en el momento de la publicación correspondía a Joaquín Ruiz Jiménez.

La norma, de diecinueve puntos, circunscribe las atribuciones de los inspectores jefes provinciales y de los inspectores profesionales. Esta Real orden establece la forma de permuta de funciones entre los inspectores y los profesores de las escuelas normales (véase la tabla 2.2.3.3.)

5. Todos los inspectores profesionales de cada provincia ejercerán dentro de su zona las atribuciones que el artículo 19 confiere a los inspectores jefes provinciales, excepto las siguientes, que serán exclusivas de estos últimos:

a) Cumplir y hacer que se cumplan por los demás inspectores de la provincia las órdenes e instrucciones que reciban de la superioridad.

b) Convocar y presidir las sesiones que los inspectores de cada provincia celebren para tratar los asuntos que a la Inspección interesen. Estas sesiones se celebrarán por lo menos cada mes, levantándose acta en un libro que al efecto llevará el Inspector Jefe.

c) Anunciar en el Boletín Oficial, autorizado por el gobernador, los concursos de traslado a que se refiere el número 5 del artículo 19 del Real decreto. Los solicitantes elevarán sus instancias al Inspector Jefe Provincial, el cual terminado el plazo enviará el expediente con su informe a la Sección Administrativa para su resolución definitiva, dentro de las siguientes condiciones de preferencia:

a) Mayor tiempo de servicios en la escuela desde la cual se solicite el traslado.

b) Mayor tiempo de servidos en la localidad.

c) Mayor categoría del solicitante, y dentro de ésta, número más bajo en el escalafón general. Cuando en estos con concursillos se provean direcciones de escuelas graduadas, será condición precisa que los designados sean también en la localidad directores de graduadas con igual o mayor número de Secciones que las plazas a proveer, declarándose en otro caso desierto el concurso.

d) Dirigir el servicio de la biblioteca circulante, auxiliado por los demás inspectores, y llevar los libros necesarios, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a las inspectoras por igual concepto, en las capitales de distrito universitario.

e) Informar los escalafones de los maestros para el percibo del aumento gradual de sueldo.

f) Aprobar los traslados de las escuelas a otros locales y las reformas de los mismos, previo informe del inspector correspondiente o de los delegados de la Inspección.

⁹⁰ Real Orden dictando reglas complementarias y explicativas del Real decreto de 5 de Mayo último, reorganizando la Inspección de Primera enseñanza. (Gaceta de Madrid, núm. 178, de 27 de junio de 1913, páginas 892 a 893). Texto original en la url:

<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1913/178/A00892-00893.pdf> con acceso el 2 de agosto de 2019.

g) Determinar los trabajos a que han de quedar afectos los inspectores comprendidos en el artículo 45 del Real Decreto.

h) Informar en los expedientes de dispensa defecto físico para ejercer el magisterio, y con los inspectores de zona, los expedientes de licencias ilimitadas para asuntos propios que soliciten los maestros.

i) Despachar directamente con el gobernador en aquellos asuntos de inspección que a esta autoridad incumben, y con el rector en las capitales del distrito, formando parte del consejo universitario para los asuntos relacionados con la Primera Enseñanza.

- Decreto de organización de la Inspección de Educación de 2 de diciembre de 1932⁹¹

El Decreto de organización de la Inspección de Educación de 2 de diciembre de 1932, fue publicado en la Gaceta de Madrid el 7 diciembre de 1932. Su promulgación corresponde al gobierno de la Segunda República, siendo presidente del gobierno Niceto Alcalá-Zamora y Torres y ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Fernando de los Ríos Urruti.

Este Decreto reglamenta la Inspección Central y la Inspección Provincial; y establece la forma de acceso y los derechos administrativos de los inspectores (véase la tabla 2.2.3.4.)

Art. 1º. La Inspección profesional de Primera enseñanza es el organismo encargado de orientar, impulsar y dirigir el funcionamiento de las Escuelas nacionales y de las Instituciones educativas auxiliares de las mismas. Velará igualmente por el cumplimiento de las leyes en los demás Establecimientos de Primera enseñanza de carácter público o particular.

Inspectores profesionales.

Art. 11. Son funciones propias y exclusivas de cada Inspector en su zona:

1º. Orientar, impulsar y dirigir las Escuelas nacionales y las Instituciones auxiliares de las mismas. Contribuir al mejoramiento profesional de los Maestros. Perfeccionar la vida pedagógica de las Escuelas e intensificar su acción social. Para ello, en la primera quincena de cada curso reunirá a los maestros de su zona a fin de trazar el plan y estudiar las principales cuestiones del hacer escolar. Más tarde, visitará las Escuelas para lograr que cumplan íntegramente su misión. En ocasión de visita trabajará en las Escuelas ofreciendo a los Maestros el ejemplo de sus lecciones modelo. Después, redactará su informe, que transcribirá en el libro oficial, haciendo constar el juicio que le merece la labor del Maestro y las soluciones pertinentes para resolver los problemas particulares de aquella Escuela. Al terminar la visita a las Escuelas de un Municipio reunirá a los Maestros para tratar en común de las cuestiones pedagógicas suscitadas. Y reunirá igualmente al Consejo municipal de Protección escolar y a los Consejos escolares para colaborar con estos organismos en el estudio de las necesidades de la localidad en orden a la enseñanza.

2º. Cuidar especialmente de que sea respetada en todo momento la conciencia del niño, garantizando el más escrupuloso cumplimiento del laicismo y de las Leyes que amparan los derechos e intereses de la infancia.

⁹¹ <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1932/342/A01684-01689.pdf> con acceso el 2 de agosto de 2019.

3º. Visitar las demás Escuelas públicas y privadas para comprobar si en su labor se someten a los preceptos legales y a las condiciones en que fue autorizado su funcionamiento.

4º. Conceder a los Maestros de su zona votos de gracias y proponerles para otras recompensas, como asimismo imponerles la sanción de apercibimiento o proponer la aplicación de otras penas, previa formación de expedientes gubernativos.

5º. Intervenir en la instalación material de la Escuela, visitando los edificios en construcción y proponiendo las reformas necesarias en los locales. Los Secretarios de los Consejos municipales de enseñanza y los Maestros serán directamente responsables de las reformas que se hagan en los edificios escolares sin previo conocimiento del Inspector de la zona.

6º. Informar los expedientes de construcción y creación de Escuelas y los de substitución, licencias y permutas de los Maestros racionales.

- Decreto 2915/1967, de 23 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento del Cuerpo de Inspección Profesional de Enseñanza Primaria del Estado⁹²

El Decreto 2915/1967, de 23 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento del Cuerpo de Inspección Profesional de Enseñanza Primaria del Estado fue publicado en el BOE de 11 de diciembre. Su gestación corresponde a la época de la dictadura del General Francisco Franco, en su séptimo gobierno, y al ministro de Educación y Ciencia, Manuel Lora-Tamayo Martín.

Este Decreto establece, entre otras, las funciones, *en armonía con lo establecido en el art. 79 de la vigente Ley de Enseñanza Primaria*; establece su estructura y organización; la forma de ingreso en el Cuerpo de Inspección, estableciendo específicamente los ejercicios de la oposición; y determina los derechos, deberes e incompatibilidades de los inspectores (véase la tabla 2.2.3.5.).

Art. 2. Funciones. En armonía con lo establecido por el artículo 79 de la vigente Ley de Enseñanza Primaria, se atribuyen a la Inspección las funciones siguientes:

1. Velar por la observancia en todos los Centros de Enseñanza Primaria, estatales y no estatales de la Nación, de las Leyes y Reglamentos vigentes para este grado de enseñanza.

2. Ejercer las tareas de supervisión, dirección técnica y orientación pedagógica de la enseñanza y de los servicios escolares en el ámbito de la jurisdicción correspondiente a sus distintos grados jerárquicos, respetando y fomentando el espíritu de iniciativa de Directores y Maestros en su actividad docente.

3. Realizar y mantener actualizado un estudio detallado de la población escolar, su tendencia y distribución geográfica, de las zonas de inspección con especial referencia a los aspectos económico y social.

4. Inspeccionar los Centros, Instituciones y servicios docentes de nivel primario, estatales y no estatales. Esta función se extenderá a aquellos Centros no sometidos a otra Inspección del Ministerio de Educación y Ciencia, cuyos alumnos estén comprendidos dentro del periodo de escolaridad primaria, aun cuando las enseñanzas impartidas en los mismos difieran de las establecidas en los cuestionarios propios de dicho nivel.

5. Velar por el cumplimiento de las normas promulgadas a propuesta de los Organismos correspondientes, en orden a la formación religiosa, formación del espíritu nacional,

⁹² <https://www.boe.es/boe/dias/1967/12/11/pdfs/A17110-17116.pdf> con acceso 2 de agosto de 2019.

educación física, enseñanzas del hogar y de las actividades complementarias especificadas en los apartados b) y e) del artículo 45 de la Ley de Enseñanza Primaria, sin perjuicio de la función inspectora de la Iglesia y Organismos del Movimiento en el ámbito de sus respectivas competencias.

6. Intervenir en la elaboración de los planes de estudio y actividades educativas de nivel primario, cuestionarios, normas metodológicas y pruebas para la promoción escolar y expedición del certificado de estudios primarios.

7. Asesorar a los Centros de Enseñanza Primaria sobre aplicación de los cuestionarios, confección de programas y utilización de textos, de acuerdo con las características de la zona.

8. Promover, o en su caso informar, la implantación y orientar el funcionamiento de las Instituciones, servicios y actividades complementarias en los Centros de Enseñanza Primaria.

9. Comprobar el rendimiento del sistema escolar primario, en su doble aspecto educativo e instructivo.

10. Promover la proyección de la Escuela sobre el medio circundante.

11. Autorizar el uso oficial del Libro de Escolaridad Primaria.

12. Presidir las Comisiones Examinadoras para otorgar el certificado de estudios primarios.

13. Organizar los Centros de Colaboración Pedagógica y otras reuniones orientadas al perfeccionamiento del Magisterio en ejercicio.

14. Participar en los dictámenes y concursos para la selección de textos, mobiliario y material didáctico utilizable en los Centros de Enseñanza Primaria.

15. Emitir cuantos informes o dictámenes en materias propias de su competencia sean solicitados por la superioridad.

16. Recoger, depurar y elaborar los datos estadísticos relativos a la Enseñanza Primaria y promoción cultural de adultos en el ámbito de la Enseñanza Primaria.

17. Asumir las funciones rectoras, asesoras y ejecutivas que se le encomienden en la elaboración y realización de los planes de construcciones escolares, sin perjuicio de la competencia atribuida a las Juntas Provinciales de Construcciones Escolares y sus servicios. Deberán informar sobre la procedencia de aceptación de los solares en función de su superficie y localización y formar parte de la Comisión receptora de edificios escolares de nueva construcción o en los que se haya efectuado reparación.

18. Informar y promover los expedientes de creación, transformación clausura temporal o supresión de Centros estatales de Enseñanza Primaria en sus distintas modalidades. En caso de urgencia, la Inspección podrá clausurar temporalmente cualquier Centro estatal de nivel primario, dando cuenta inmediata a la Dirección General de las razones que la motivaron y medidas adoptadas en orden al destino de sus Maestros.

19. Informar las solicitudes de autorización de Centros no estatales, especialmente en cuanto se relaciona con las condiciones higiénico-pedagógicas de su instalación, titulación del profesorado, cuestionarios, material didáctico, horario de clases y régimen de vacaciones. La Inspección podrá proponer igualmente la aplicación de las sanciones que procedan, e incluso la clausura de los Centros no estatales cuando incumplan lo legislado.

20. Formar parte de los tribunales y Comisiones que se designen por el Ministerio de Educación y Ciencia para la selección, promoción y cambio de destino de Directores escolares y Maestros en las condiciones que fijan los respectivos Reglamentos.

21. Formar parte de los Tribunales y Comisiones que se designen por el Ministerio de Educación y Ciencia para la selección, promoción y cambio de destino de los Inspectores de Enseñanza Primaria.

22. Conceder por delegación, hasta diez días de permiso durante el curso escolar a los Directores escolares, Directores con curso de Escuelas graduadas o Maestros de unitarias y mixtas, dando cuenta a la respectiva Junta Municipal de Enseñanza y, en su caso, al Director del Centro.

23. Proponer a la superioridad las distinciones o recompensas a las Juntas Municipales de Enseñanza Primaria que se hagan acreedoras a ellas o el apercibimiento, la sanción o modificación de aquellas en cuyo funcionamiento se observen negligencias o irregularidades que redundan en perjuicio de los intereses de la enseñanza.

24. Informar y promover los expedientes de recompensas a Directores escolares y Maestros.

25. Las demás atribuidas por Leyes y Reglamentos.

- Decreto 2832/1972, de 15 de septiembre, sobre organización y funciones de la Inspección General de Servicios del Ministerio de Educación y Ciencia⁹³

El Decreto 2832/1972, de 15 de septiembre, sobre organización y funciones de la Inspección General de Servicios del Ministerio de Educación y Ciencia, fue publicado en el BOE el 18 de octubre. Su iniciativa se produce tras la publicación de la LGE 14/1970, en lo que se denomina como último gobierno franquista, siendo ministro de Educación y Ciencia José Luis Villar Palasí, el mismo precursor de la LGE.

Este Decreto establece y desarrolla la Inspección General de Servicios sobre la organización y funcionamiento administrativo de todos los servicios, organismos y centros dependientes del Departamento especialmente en lo que se refiere a personal, procedimiento, régimen económico, instalaciones y dotaciones>; y específicamente establece sus atribuciones, organización y funciones.

El documento no afecta específicamente a la inspección educativa.

- Decreto 664/1973, de 22 de marzo, sobre funciones del Servicio de Inspección Técnica de Educación⁹⁴

El Decreto 664/1973, de 22 de marzo, sobre funciones del Servicio de Inspección Técnica de Educación fue publicado en el BOE el 10 de abril y tiene a los mismos actores que el Decreto 2832/1972, pero específicamente orientado a la Inspección Técnica de Educación.

Este Decreto establece la dependencia, las funciones y las atribuciones (véase la tabla 2.2.3.6.)

⁹³ <https://www.boe.es/boe/dias/1972/10/18/pdfs/A18503-18504.pdf> con acceso el 13 de abril de 2022.

⁹⁴ <https://www.boe.es/boe/dias/1973/04/10/pdfs/A07130-07132.pdf> con acceso el 13 de abril de 2022.

Art. segundo.- Las funciones del Servicio de Inspección Técnica de Educación del Ministerio de Educación y Ciencia serán las siguientes:

- a) Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones en todos los Centros docentes estatales y no estatales, en el ámbito de la función educativa.*
- b) Colaborar con los Servicios de planeamiento en el estudio de las necesidades educativas y en la elaboración y actuación del mapa escolar de las zonas donde ejerza su función, así como ejecutar investigaciones concernientes a los problemas educativos de éstas.*
- c) Asesorar a los Profesores de Centros estatales y no estatales sobre los métodos más idóneos para la eficacia de las enseñanzas que impartan.*
- d) Evaluar el rendimiento educativo de los Centros docentes y Profesores de su zona respectiva o de la especialidad a su cargo en colaboración con los Institutos de Ciencias de la Educación.*

A tal efecto tendrá en cuenta la actividad orientadora y de inspección interna que, en su caso, puedan establecer para sus Centros las Entidades promotoras.

- e) Colaborar con los Institutos de Ciencias de la Educación en la organización de cursos y actividades para el perfeccionamiento y actividad del personal docente.*

Art. tercero.- En el ejercicio de la función de velar por el cumplimiento de leyes, reglamentos y demás disposiciones a que se refiere el apartado a) del artículo anterior, el Servicio de Inspección Técnica de Educación tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Asesorar, orientar e inspeccionar los Centros docentes estatales y no estatales para vigilar el cumplimiento de cuanto disponga la Ley General de Educación y sus normas reglamentarias en el ámbito de la función educativa actuando, en su caso, en la forma prevenida en el párrafo tercero del artículo noveno del Decreto dos mil ochocientos treinta y dos/mil novecientos. setenta y dos, de quince de septiembre.*
- b) Proponer al Subsecretario las medidas oportunas para corregir las deficiencias, e irregularidades de orden educativo que haya podido advertir en el ejercicio de las funciones inspectoras.*
- c) Proponer al órgano competente en cada caso la apertura de expedientes por infracción de la legislación de cuyo cumplimiento está encargada de velar, dando cuenta de la propuesta al correspondiente Delegado provincial de Educación, cuando no sea el destinatario de dicha propuesta.*

- d) Informar respecto a las condiciones pedagógicas en las actuaciones siguientes:*

Uno. Creación, apertura, modificación. traslado, clausura y supresión de Centros docentes estatales y no estatales, así como en los expedientes de conciertos y subvenciones con estos últimos.

Dos. Construcción de edificios destinados a actividades educativa.

Tres. Clasificación de Centros experimentales; así como sobre los cursos y programas de experimentación en los Centros ordinarios.

Cuatro. Selección y distribución de mobiliario y material de enseñanza.

Cinco. En cuantos asuntos y expedientes requiera un informe la superioridad en materias propias de su competencia.

e) Sin perjuicio de las competencias que según el artículo ciento treinta y seis coma tres y cuatro de la Ley General de Educación corresponden en cuanto a la educación religiosa, a las enseñanzas de formación política, Cívico-social, educación física y deportiva- y enseñanzas de actividades domésticas a la Iglesia y a los Organismos del Movimiento cuyas funciones y actividades supervisoras especiales se regularán coordinadamente con las que se establecen en el presente Decreto, el Servicio de Inspección Técnica de Educación velará por el cumplimiento de las normas que al efecto se promulguen por el Gobierno para la regulación y el ordenamiento de estas enseñanzas.

- Real Decreto 1524/1989, de 15 de diciembre por el que se regulan las funciones y la organización del Servicio de Inspección Técnica de Educación⁹⁵

El Real Decreto 1524/1989, de 15 de diciembre por el que se regulan las funciones y la organización del Servicio de Inspección Técnica de Educación fue publicado en el BOE el 18 de diciembre. Su impulso corresponde al ministro de Educación y Ciencia, Javier Solana Madariaga, en el inicio del tercer gobierno socialista de Felipe González. Es preciso apuntar que este Real Decreto se promulgó tras la supresión del Cuerpo de Inspectores de Educación y cuando se estaba terminando de perfilar el desarrollo de la función inspectora por parte de docentes seleccionados para ejercerla.

Este Real Decreto regula el servicio de Inspección Técnica de Educación, estableciendo sus funciones (véase la tabla 2.2.3.7.) y atribuciones; reglamenta su organización y funcionamiento; y determina la forma de acceso y provisión de los puestos de función inspectora educativa.

Art. 2. Las funciones del Servicio de Inspección Técnica de Educación, que serán ejercidas por los Inspectores de Educación, serán las siguientes:

Uno. Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes de la administración educativa en los Centros docentes y servicios a que hace referencia el artículo primero, así como en la ejecución y desarrollo de los programas y actividades de carácter educativo que apruebe o autorice el Ministerio de Educación y Ciencia.

Dos. Colaborar en las reformas educativas, actividades de perfeccionamiento del Profesorado, procesos de renovación pedagógica y programas experimentales, así como participaren su difusión, seguimiento y evaluación.

Tres. Evaluar el rendimiento educativo del sistema, a través del análisis de la organización, funcionamiento y resultados de los Centros docentes y servicios, así como de la ejecución y desarrollo de los programas y actividades de carácter educativo promovidos o autorizados por el Ministerio de Educación y Ciencia.

Cuatro. Asesorar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa y a los órganos unipersonales y colegiados de los Centros docentes en el ejercicio de las competencias y atribuciones que la normativa vigente encomienda a cada uno de ellos.

Cinco. Colaborar con las unidades de planificación en el estudio de las necesidades educativas de cada provincia.

Seis. Informar sobre todo aquello que le haya sido requerido por la autoridad competente o haya conocido en el ejercicio de su actividad.

⁹⁵ <https://www.boe.es/boe/dias/1989/12/18/pdfs/A39167-39169.pdf> con acceso el 2 de agosto de 2019.

En ambos casos las propuestas pertinentes, si las hubiere, se realizarán a través de los cauces reglamentarios.

Art. 3. Uno. En el ejercicio de sus funciones, que realizará por orden superior, de oficio, o bien; en su caso, a instancia razonada de los componentes de la comunidad escolar, el Servicio de Inspección Técnica de Educación tendrá las siguientes atribuciones:

a) Visitar los Centros docentes públicos y privados, así como los servicios e instalaciones en los que se desarrollen actividades educativas promovidas o autorizadas por el Ministerio de Educación y Ciencia. Las visitas a los Centros y el correspondiente informe serán el sistema habitual de trabajo en el desempeño de la función inspectora.

b) Acceder a la documentación académica y administrativa que precise, pudiendo a tal fin recabar de todos los Centros docentes y de los distintos servicios del Ministerio de Educación y Ciencia los informes, documentos y antecedentes que considere necesarios.

Dos. Los Inspectores, en el ejercicio de su función, tendrán la consideración de autoridad pública y como tal, recibirán de los distintos miembros de la comunidad educativa, así como de las demás autoridades y funcionarios, la ayuda y colaboración precisas para el desarrollo de su actividad.

- Orden de 27 de septiembre de 1990 por la que se dictan normas de desarrollo del Real Decreto 1524/1989⁹⁶

La Orden de 27 de septiembre de 1990, publicada en el BOE el 1 de octubre, establece normas de desarrollo del Real Decreto 1524/1989. Los actores que impulsaron esta norma son los mismos que el citado Real Decreto 1524/1989.

La orden reglamenta el servicio central de inspección; los servicios provinciales; y los grupos de trabajo (véase la tabla 2.2.3.8.).

Séptimo. El coordinador del Equipo de Inspección.

1. Cada equipo de inspectores contará con un Inspector Coordinador, designado de entre sus componentes por el director provincial, a propuesta del Inspector-Jefe, oído el equipo de Inspectores de la demarcación.

2. Sin perjuicio del desempeño de las tareas propias de su función inspectora y con la colaboración de todos los miembros del equipo, el inspector coordinador desempeñará las siguientes funciones:

A) Organizar el trabajo del equipo, coordinando las actuaciones que, con criterios homogéneos, deban desarrollarse en la demarcación.

B) Colaborar con el Inspector-Jefe en la elaboración del plan provincial de actividades y de la memoria anual del servicio.

C) Informar al Inspector-Jefe del desarrollo de la acción inspectora en su demarcación.

D) transmitir a los miembros del equipo las instrucciones recibidas y realizar cualesquiera otras funciones que le asigne el Inspector-Jefe

⁹⁶ <https://www.boe.es/boe/dias/1990/10/01/pdfs/A28429-28431.pdf> con acceso el 2 de agosto de 2019.

- Real Decreto 2193/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas básicas para el acceso y la provisión de puestos de trabajo en el Cuerpo de Inspectores de Educación y la integración en el mismo de los actuales Inspectores⁹⁷

El Real Decreto 2193/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas básicas para el acceso y la provisión de puestos de trabajo en el Cuerpo de Inspectores de Educación y la integración en el mismo de los actuales Inspectores, fue publicado en el BOE el 30 de diciembre. Sus actores principales fueron el ministro de Educación y Ciencia, Jerónimo Saavedra Acevedo, perteneciente al cuarto y último gobierno socialista de Felipe González. Es importante mencionar que este Real Decreto se publicó como consecuencia de la creación de Cuerpo de Inspectores de Educación por la art. 37 de la *LOPEGCE* 9/1995 y para dar cobertura al procedimiento selección *ex novo* de los inspectores de educación y, sobre todo, de integración en el Cuerpo recién creado, de quienes estaban desempeñando la función inspectora y de los miembros del Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa (*CISAE*).

La norma no desarrolla, siquiera de una forma muy genérica y estructural, las funciones inspectoras.

- Orden de 29 de febrero de 1996 por la que se regula la organización y funcionamiento de la Inspección de Educación⁹⁸

La Orden de 29 de febrero de 1996 por la que se regula la organización y funcionamiento de la Inspección de Educación, fue publicado en el BOE el 2 de marzo. Su gestación debe asignarse igualmente al ministro de Educación y Ciencia, Jerónimo Saavedra Acevedo, perteneciente al último gobierno socialista de Felipe González. Esta Orden se publicó como desarrollo del citado Real Decreto 2193/1995.

Esta orden establece la estructura territorial, las funciones y atribuciones (véase la tabla 2.2.3.9.); desarrolla el procedimiento de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación; la organización de las inspecciones; el procedimiento general de evaluación de la inspección educativa; y las formas de selección de los denominados como inspectores accidentales, para cubrir de forma temporal vacantes en los servicios.

I. Ámbito territorial, funciones y atribuciones

Primero. Fines y funciones.

1. El Ministerio de Educación y Ciencia ejercerá la supervisión e inspección de todos los centros, servicios, programas y actividades que integran el sistema educativo, tanto públicos como privados, dependientes de su ámbito de gestión directa.

2. La supervisión e inspección tendrá como fines:

a) Asegurar el cumplimiento de las leyes.

b) Garantizar los derechos y la observancia de los deberes de cuantos participan en los procesos educativos.

⁹⁷ <https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-27975-consolidado.pdf> con acceso el 2 de agosto de 2019.

⁹⁸ <https://www.boe.es/boe/dias/1996/03/02/pdfs/A08421-08427.pdf> con acceso el 2 de agosto de 2019.

c) Contribuir a la mejora del sistema educativo y a la calidad de la enseñanza.

3. Las funciones de la Inspección de Educación serán las siguientes:

a) Controlar y supervisar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos, tanto de titularidad pública como privada.

b) Colaborar en la mejora de la práctica docente y del funcionamiento de los centros, así como en los procesos de reforma educativa, de renovación pedagógica y de perfeccionamiento del profesorado.

c) Participar en la evaluación del sistema educativo, especialmente en la que corresponde a los centros escolares, la función directiva y la función docente.

d) Velar por el cumplimiento, en los centros docentes, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.

e) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.

f) Inspeccionar e informar, a través de los cauces reglamentarios, sobre los servicios, programas y actividades de carácter educativo promovidos o autorizados por la Administración educativa, así como sobre cualquier aspecto relacionado con las tareas educativas que le sea requerido por la autoridad educativa competente o que conozca en el ejercicio de sus funciones.

A partir de ese momento histórico se abre un escenario tremendamente complejo, en el que el único cuerpo de inspectores de educación, disgregado en las distintas comunidades autónomas, y con intervención también en las ciudades de Ceuta y Melilla y en los centros y programas españoles en el extranjero, pasan a tener su específica normativa autonómica.

Ello provoca que, desde los planteamientos básicos y uniformes establecidos en las Leyes Orgánicas, las distintas comunidades autónomas, delimitan, amplían, desarrollan, establecen y concretan en su delimitado territorio estas funciones.

Se hace necesario realizar un estudio comparado de cómo se desarrollan esas funciones y de cómo el paso del tiempo ha realizado un desarrollo centrífugo, pues en este desarrollo temporal el Ministerio, como órgano básico de desarrollo normativo, ha sustraído sus funciones básicas de coordinación, siendo asumido modestamente por las distintas organizaciones con implantación estatal y en especial por la Unión Sindical de Inspectores de Educación [USIE], ante la imposibilidad de que fuera realizada esta importante función de coordinación, por otras entidades, autonómicas educativas, sindicales, o acaso, culturales.

2.2.4. En la normativa de la Comunidad de Madrid

Nos corresponde en este momento analizar las funciones asignadas a los inspectores de educación en la normativa específica de la Comunidad de Madrid, de una forma diacrónica y secuenciada. Pretendiendo utilizar el mismo esquema del anterior epígrafe, puntualizando un breve contexto histórico de la norma y aquella singularidad o hito que supuso, nos centraremos en sencillos detalles por la experiencia de vida aportada.

Se puede ver la evolución histórica de la normativa que ha regulado y regula en la actualidad a la inspección educativa en la Comunidad de Madrid, de una forma sintética, en la imagen 8.

- Resolución de 20 de abril de 2007, de la Viceconsejería de Educación, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento de la Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid⁹⁹

La Resolución de 20 de abril de 2007, de la Viceconsejería de Educación, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento de la Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid fue publicada en el BOCM el 17 de mayo. Los actores que impulsaron dicha norma fueron, de una forma jerárquica, la Consejera de Educación, Lucía Figar de Lacalle, perteneciente a la octava legislatura; la Viceconsejera de Educación, que firmó la norma, Carmen González Fernández; y la Subdirectora General de Inspección Educativa, en aquella etapa, M^a Cruz Gómez-Elegido Ruizolalla.

La norma se publicó, pues era un clamor que la Comunidad de Madrid no tuviera su propia normativa que regulara a sus servicios de Inspección educativa, tras asumir ocho años antes las competencias en materia de enseñanza no universitaria y haberse transferido, bajo su gestión, a todo el personal necesario, incluidos a los inspectores de educación¹⁰⁰. El rango de la norma no satisfizo a los servicios de inspección. No obstante, la Resolución sirvió como referente normativo, durante más de una década, para la organización de los servicios de inspección educativa de la Comunidad de Madrid.

En la Resolución constan específicamente las funciones de la Subdirección General de Inspección Educativa (aptdo. primero del anexo), las funciones de los Inspectores-Jefes (aptdo. tercero.2 del anexo), las funciones del Inspector-Jefe adjunto (aptdo. tercero.3 del anexo), las funciones de los Inspectores Coordinadores (aptdo. tercero.5 el anexo) y las funciones de los Jefes de Distrito (aptdo. cuarto.5 del anexo).

No hay una descripción detallada de las funciones de los inspectores de educación, por lo que se considera que el legislador asume como referente el art. 151 de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación.

- Resolución de 31 de julio de 2012, de la Viceconsejería de Organización Educativa, por la que se modifica la Resolución de 20 de abril de 2007, de la Viceconsejería de Educación, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento de la Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid¹⁰¹

La Resolución de 31 de julio de 2012, de la Viceconsejería de Organización Educativa, por la que se modifica la Resolución de 20 de abril de 2007, de la Viceconsejería de Educación, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento de la Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid, fue publicada en el BOCM el 31 de agosto de 2012. Sus actores principales fueron la misma Consejera de Educación que firmó la Resolución de 2007, pero bajo

⁹⁹ https://www.bocm.es/boletin/CM_Boletin_BOCM/2007/05/17/11600.pdf con acceso el 7 de abril de 2022.

¹⁰⁰ Esta aseveración se puede comprobar en las páginas 23, 69, 70, 281, 388, 441, 442, 698, 706, 712 y 779 del suplemento del Real Decreto 926/1999, de 28 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de enseñanza no universitaria (BOE de 23 de junio), que ya ha sido citado.

<https://www.boe.es/boe/dias/1999/06/23/pdfs/C00001-00989.pdf> con acceso el 7 de abril de 2022.

¹⁰¹ https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/08/21/BOCM-20120821-6.PDF con acceso el 7 de abril de 2022

la competencia de la Consejería de Educación y Empleo, la Viceconsejera de Organización Educativa, Carmen Pérez-Llorca Zamora; y el Subdirector General de Inspección Educativa en aquella época y que había asumido al cargo pocos meses antes, Luis Íñigo Fernández.

La breve norma añade un punto a la instrucción primera del anexo de la Resolución de 20 de abril de 2007, en lo relativo a las funciones de la Subdirección General de Inspección Educativa. No hay referencias a las funciones específicas de los inspectores de educación.

- Decreto 133/2014, de 27 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el procedimiento de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación en el ámbito de la Comunidad de Madrid¹⁰²

El Decreto 133/2014, de 27 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el procedimiento de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación en el ámbito de la Comunidad de Madrid, fue publicado en el BOCM el 28 de noviembre. Sus actores principales fueron nuevamente Lucía Figar de Lacalle, esta vez como Consejera de Educación, Juventud y Deporte, el entonces viceconsejero de Organización Educativa, Manuel Pérez Gómez y Luis Íñigo Fernández como Subdirector General de Inspección Educativa.

Este decreto se promulgó como consecuencia de la polémica creada en la composición del tribunal del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Inspectores de Educación para cubrir plazas vacantes en el ámbito de gestión de la Comunidad de Madrid, convocado en el año 2010 y desarrollado entre los años 2010 y 2011. El proceso selectivo fue recurrido por el Sindicato Comisiones Obreras (CCOO) y dejó en una situación muy delicada a los treinta inspectores que habían superado dicho procedimiento selectivo. Finalmente, la organización sindical retiró la demanda, pero la administración consideró que debía fundamentar normativamente la composición de los tribunales, pues hasta ese momento, no había publicado normativa específica.

En dicho decreto no hay referencias a las funciones de los inspectores de educación.

- Decreto 61/2019, de 9 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la organización, estructura y funcionamiento de la Inspección Educativa en la Comunidad de Madrid¹⁰³

El Decreto 61/2019, de 9 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la organización, estructura y funcionamiento de la Inspección Educativa en la Comunidad de Madrid, fue publicado en el BOCM el 15 de julio. Los actores principales para la gestación de este Decreto fueron el Consejero de Educación, Rafael Van Grieken Salvador, del gobierno de Pedro Rollán Ojeda, al final de la X legislatura; el Viceconsejero de Organización Educativa, Amador Sánchez Sánchez; y el Subdirector General de Inspección Educativa, Avelino Sarasúa Ortega.

Como se ha apuntado, era una petición generalizada entre los inspectores de educación de la Comunidad de Madrid, que el rango normativo que regulara su organización y sus funciones fuera jerárquicamente más alta que una sencilla resolución. No cabe duda de que en esa tarea se comprometieron los distintos subdirectores generales de inspección educativa: Belén Aldea

¹⁰² https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/11/28/BOCM-20141128-4.PDF con acceso el 7 de abril de 2022.

¹⁰³ https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/07/15/BOCM-20190715-1.PDF con acceso el 7 de abril de 2022.

Llorente, Luis Íñigo Fernández, y sobre todo Maximino García González y Avelino Sarasúa Ortega quien finalmente vio publicado el texto.

El decreto, que consolida los planes plurianuales es la columna vertebral que actualmente organiza la inspección educativa en la Comunidad de Madrid y articula los planes generales anuales y los planes territoriales. Su marco de referencia era, en ese momento, las funciones asignadas en el art. 151 de la LOE, que no habían sido modificadas por la LOMCE (véase la tabla 2.2.4.1.).

Artículo 3. Funciones de la Inspección Educativa

Corresponden a la Inspección Educativa las siguientes funciones:

- a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos, así como los programas que en ellos inciden.*
- b) Supervisar y evaluar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.*
- c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.*
- d) Asesorar y potenciar la evaluación interna de los centros.*
- e) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.*
- f) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en particular los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres, así como velar por la igualdad y no discriminación de otros colectivos que por razón no sólo de género sino de orientación o identidad sexual o por cualquier otra circunstancia, puedan ser objeto de discriminación.*
- g) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.*
- h) Emitir los informes solicitados por la Administración educativa de la Comunidad de Madrid o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.*
- i) Colaborar y participar en los órganos consultivos y de evaluación del sistema educativo no universitario de la Comunidad de Madrid.*
- j) Cualesquiera otras que se le encomiende de acuerdo con la normativa vigente.*

- Orden 732/2021, de 24 de marzo, de la Consejería de Educación y Juventud, por la que se desarrolla el Decreto 61/2019, de 9 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la organización, estructura y funcionamiento de la Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid¹⁰⁴

La Orden 732/2021, de 24 de marzo, de la Consejería de Educación y Juventud, por la que se desarrolla el Decreto 61/2019, de 9 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la organización, estructura y funcionamiento de la Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid, fue publicada en el BOCM el 7 de abril. Los principales actores que intervinieron en su

¹⁰⁴ https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/07/BOCM-20210407-20.PDF con acceso el 7 de abril de 2022.

promulgación, como desarrollo del Decreto 61/2019, fueron el Consejero de Educación y Juventud, Enrique Matías Ossorio Crespo; la Viceconsejera de Organización Educativa, en ese momento Nadia Álvarez Padilla; y al Subdirector General de Inspección Educativa que ostentaba el cargo, Luis Abad Merino.

La orden, como aparece en la denominación, es desarrollo del Decreto 61/2019. En su articulado establece los principios de actuación (art. 2.4), las funciones (art. 3.1) (véase la tabla 2.2.4.2.), las atribuciones (art. 3.2), la ética profesional (art. 58), los principios éticos (art. 59) y los principios de conducta (art. 60). Estos último tres artículos serán desarrollados en el epígrafe 6.2 del presente documento.

Art. 2. Ejercicio de la función inspectora.

4. Los inspectores de educación, en el ejercicio de sus competencias, actuarán de acuerdo con los siguientes principios:

a) Respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas, defensa del interés común y los valores democráticos y evitación de cualquier conducta que pueda generar discriminación por razón de origen, género, orientación sexual, religión opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.

b) Profesionalidad e independencia de criterio técnico.

c) Imparcialidad y eficiencia en la consecución de los objetivos fijados.

d) Transparencia en cuanto a los fines de sus actuaciones, los instrumentos y las técnicas utilizados.

e) Jerarquía, coordinación y planificación.

Artículo 3. Funciones, atribuciones y actuaciones de la Inspección Educativa

1. Las funciones de la Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid son las siguientes:

a) Supervisar, evaluar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos, así como los proyectos y programas que desarrollen, con respeto a su marco de autonomía.

b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.

c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.

d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.

e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en las leyes, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres.

f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.

g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.

h) Orientar a los equipos directivos en la adopción y seguimiento de medidas que favorezcan la convivencia, la participación de la comunidad educativa y la resolución de

conflictos, impulsando y participando, cuando fuese necesario, en los procesos de mediación.

2. Para cumplir con estas funciones, la Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid tendrá las siguientes atribuciones:

a) Conocer, supervisar y observar todas las actividades que se realicen en los centros, tanto públicos como privados, a los cuales tendrán libre acceso.

b) Examinar y comprobar la documentación académica, pedagógica y administrativa de los centros.

c) Recibir de los restantes funcionarios y responsables de los centros y servicios educativos, públicos y privados, la necesaria colaboración para el desarrollo de sus actividades, para cuyo ejercicio los inspectores tendrán la consideración de autoridad pública.

d) Participar en las reuniones de los órganos colegiados o de coordinación docente de los centros, respetando el ejercicio de la autonomía que la ley les reconoce, así como formar parte de comisiones, juntas y tribunales, cuando así se determine.

e) Elevar informes y hacer requerimientos cuando se detecten incumplimientos en la aplicación de la normativa, y levantar actas, ya sea por iniciativa propia o a instancias de la autoridad administrativa correspondiente.

f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.

Artículo 58. Ética profesional¹⁰⁵.

1. Como empleados públicos, los inspectores de educación están sometidos a la regulación de la función pública que se establece en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. El Estatuto recoge los deberes básicos de los empleados públicos y los principios éticos y de conducta que inspiran el Código de Conducta para la Inspección Educativa.

2. La Inspección Educativa, de acuerdo con el artículo 3 del Decreto 61/2019, de 9 de julio, ejerce las funciones de supervisar, evaluar, participar en el desarrollo de acciones para la mejora, velar por el respeto y el cumplimiento de las normas, asesorar, orientar e informar a los diferentes sectores de la comunidad educativa y emitir informes.

3. Los inspectores deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por el interés general con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres.

Artículo 59. Principios éticos.

1. Los inspectores de educación en el desarrollo de su labor actuarán de acuerdo con la Constitución y con el ordenamiento jurídico.

¹⁰⁵ Este artículo y los siguientes serán desarrollados, como ya se ha señalado, en el epígrafe 6.2 de la presente investigación. La yuxtaposición con la normativa análoga y precedente se encuentra en las tablas 6.1 - 6.3.

2. La labor de la Inspección Educativa garantizará los derechos y los deberes de cuantos participan en los procesos educativos y se fundamentará en consideraciones y actuaciones objetivas e imparciales y orientadas a los fines objetivos de todos, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales y corporativas.

3. Los inspectores de educación ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos.

4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

5. Los inspectores de educación se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con supuesto público.

6. No aceptarán ningún trato de favor o situación por parte de personas físicas o entidades privadas que implique privilegio o ventaja injustificada.

7. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia y eficiencia.

8. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros.

9. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia.

10. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público absteniéndose de conductas contrarias al mismo y cualesquiera otras que comprometan la neutralidad e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

11. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio.

Artículo 60. Principios de conducta

1. Los inspectores de educación tratarán con atención y respeto a sus superiores, compañeros, subordinados y a todos los miembros de la Comunidad educativa.

2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.

3. Cumplirán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos procedentes.

4. Asesorarán, orientarán e informarán a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.

5. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables.

6. Mantendrán actualizada su formación y cualificación.

7. Informarán y harán propuestas a los órganos competentes de la Administración educativa sobre aquellas cuestiones que contribuyan a la mejora de la calidad de la educación.

2.3. Síntesis reflexiva

Comenzamos este apartado de análisis crítico del capítulo realizando un análisis de las funciones, encomiendas y tareas atribuidas, realizando un análisis de cierto sesgo comparado y diacrónicamente evolutivo de su evolución en relación a las funciones asignadas en el art. 151 de la Ley Orgánica de Educación 2/2006. Como ya se ha comentado no realizamos la comparación con las funciones asignadas en la LOMLOE 3/2020 pues su promulgación se realizó después de la puesta en marcha de esta investigación doctoral y como apunta Montero Alcaide (2021d) las modificaciones son *innecesarias e irrelevantes*. No obstante, se han utilizado las modificaciones cuando se ha considerado que aportaban un valor diferenciador relevante.

Iniciamos el estudio histórico, con elementos del método comparado, con lo consignado en las cédulas reales, específicamente centrados en las cinco que hemos mencionado y que aparecen sintéticamente en las tablas 2.1.1., 2.1.2. y 2.1.3.

Independientemente de las calificaciones de los sujetos que realizan dicha función y sin entrar, como ya se ha hecho, en el carácter apócrifo de alguna de ellas, se percibe que las funciones asignadas basculaban entre la visita y la comprobación de las habilidades necesarias para el desarrollo de las funciones docentes: o explícitamente en la visita, o implícitamente por la posesión de la carta, certificado, diligencia, aprobado, «leyes o letras de examen» correspondientes.

Es significativo relacionar la tarea de participar en las pruebas de aprobación o acreditación (en términos actuales) con la visita para realizar esa misma tarea de comprobación en el propio ejercicio de la práctica profesional (muy propio también de los caracteres gremiales). El único añadido, recogido en la cédula de Felipe II, se considera que es un apéndice a la tarea de visita a las aulas para comprobar si se «reza la doctrina», añadiendo un componente de carácter moral.

En relación a las Hermandad gremial de San Casiano, en las ordenanzas no aparecen las funciones específicas, sino las que se desprenden de la denominación de cada uno de los puestos, siendo importante apreciar que las figuras de los actuales inspectores puede beber de tres figuras distintas: los examinadores, los visitantes y los celadores.

De las fuentes secundarias a las que se ha tenido acceso para el estudio de la evolución de las ordenanzas en lo relativo a las funciones de examinadores, visitantes y celadores podemos entresacar las siguientes consideraciones:

Se siguen manteniendo como tareas asignadas, a modo de funciones, las de examinar a los maestros y visitar las aulas, con la misma vinculación que ya se ha expresado, aunque desarrollando algo su cometido: «...cuidado de la buena enseñanza», «velar porque la instrucción sea sana y útil», etc. e incluso la de reprender o «celar la conducta» de los maestros y maestras. No olvidemos que la función de examinar terminará desapareciendo al crearse las escuelas normales, a principios del siglo XIX.

Junta a ellas y en su desarrollo histórico van apareciendo otras muy significativas: participar en los exámenes de los alumnos, seleccionar o «censurar» los libros de texto, comprobar la adecuación estructural de los centros, comprobar el horario de entrada y salida y la puntualidad en las escuelas; y se añade, en esa progresión diacrónica, la vigilancia de que los padres realicen las tareas que se le encomiendan en relación a la educación de sus hijos: facilitar o no demorarse en esa tarea. Es esta una pincelada que tiene singulares réplicas en la normativa actual.

De la misma forma se van introduciendo otras más difusas: resolver dudas, reconocer méritos y evacuar los informes que se le soliciten sobre aspectos, por el propio enunciado, de lo más

diverso; y otras más tangibles: cuidar del pago puntual, etc. Se desprende por tanto que existe un sentir emanado del propio enunciado de tener a los inspectores disponibles para todo aquello que se pueda necesitar, replicando, de la misma forma, una situación que se ha prolongado hasta la actualidad.

La utilización de términos como «policía» de las escuelas es bastante significativo, cuando se estaba constituyendo España como nación estado y se habían tomado la iniciativa de la creación de otras unidades parecidas¹⁰⁶. Más adelante veremos, en el estudio comparado disciplinar, que el impulso normativo que ha puesto en marcha unidades parecidas en otros servicios o actividades regladas, tienen su origen cronológico en la misma época.

Se puede comprobar la evolución diacrónica, el aumento de tareas y encomiendas y la profundidad de estas, en las tablas 2.1.1 - 2.1.18.

Esa misma dimensión de profundización y acumulación de tareas y funciones se desprende también del estudio yuxtapuesto de las funciones asignadas en los decretos y órdenes concretas que han regulado a los inspectores de educación desde su creación. De esta forma se comprueba que las tareas asignadas en el primer decreto, de mayo de 1849, son muy difusas e inespecíficas: *indagar necesidades de instrucción, proponer mejoras, investigar recursos y vigilar la administración de estos*.

Llama también la atención la escasez de estructuras normativas que ha desarrollado las funciones de los inspectores de educación tras su creación: el decreto, tras la propia creación y más tarde, cuerpos normativos muy diseminados en el tiempo: en 1913, 1932, 1967 y 1973. Incluimos a propósito las siguientes normas funcionales por el contexto normativo en el que se promulgaron: el RD 1524/1989 se promulgó tras la supresión del cuerpo de inspectores de educación por la Ley 30/1984, atribuyendo las funciones específicas a docentes de forma temporal, y la Orden de 1996 se publica tras la creación nuevamente del cuerpo funcional por la Ley Orgánica 9/1995, como una necesidad de desarrollo normativo. No podemos olvidar que la propia Ley 9/1995 de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros docentes (BOE de 21 de noviembre) establece en su artículo 36 las funciones asignadas al *nuevo* cuerpo de funcionarios.

Como ya se ha comentado, se percibe una cierta evolución en el proceso de asignación de las funciones a los miembros del cuerpo de inspectores de educación. Así, en 1849, como ya se ha descrito, estas son excesivamente inespecíficas, pero siempre y desde el principio aparece la exigencia de «vigilar el cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones vigentes». Esta seña de identidad se reproduce en todo el cuerpo normativo hasta llegar a reiterarse en las más recientes, de forma innecesaria, como también apunta Montero Alcaide (2021d).

¹⁰⁶ La *Guardia Civil*, como gendarmería, con naturaleza militar y funciones de policía, fue creada el 28 de marzo de 1844, mediante Real Decreto [Real decreto creando un cuerpo especial de fuerza armada de infantería y caballería bajo la dependencia del ministerio de la Gobernación de la Península, y con la denominación de Guardias civiles - <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1844/3486/A00001-00002.pdf> con acceso el 3 de abril de 2022], por Francisco Javier Girón y Ezpeleta, II duque de Ahumada, que fue el primer director general de la Guardia Civil.

Nace debido a la necesidad de disponer de un cuerpo de seguridad pública de ámbito nacional, fuerte, profesional y de amplio despliegue territorial, que respondiera de manera eficiente a las necesidades de seguridad de la España de la primera mitad del siglo XIX.

Fuente https://www.guardiacivil.es/es/institucional/Conocenos/historiaguacivil/La_Fundacion.html con acceso el 3 de abril de 2022.

El Decreto de 1913 se muestra como un desarrollo más explícito: se centra en cuestiones académicas, organizativas y pedagógicas, y también en aspectos estructurales: «visitar muy especialmente los edificios en construcción». Llama la atención esta función, ante la posible falta de conocimiento específicos por parte de los inspectores de educación, pero denotando una intención de delegación, en un representante de la administración, ante los propios constructores.

Se les asigna también otras tareas vinculadas con la gestión de personal: *permisos, destinos, asignaciones, incompatibilidades, traslados*, etc... asumiendo funciones más propias de las actuales unidades de gestión de personal. No se nos escapa que durante muchos años el inspector de educación era el denominado como «habilitado» para el reparto de los emolumentos a los docentes.

Asume también otras funciones de carácter estadístico: «memoria sobre el estado de la enseñanza»: centros, docentes, alumnos, etc.; y otras de delegación gubernativa: *escalafones de aumento de sueldo, días de gracia o licencia*, etc.

El Decreto de 1932, ya en época republicana, reproduce las enunciadas y añade otras significativas, como son las de participar en la mejora y perfeccionamiento de los docentes: «contribuir al mejoramiento profesional de los maestros; perfeccionar la vida pedagógica de las escuelas e intensificar su acción social». Se hace patente la vinculación de los inspectores de educación con la formación inicial y permanente de los docentes y la vinculación social de los centros escolares.

El Decreto de 1967 se descubre como un marco normativo no excesivamente innovador en las funciones asignadas, con la clara influencia de la evolución pedagógica de la época: «asesorar a los Centros de Enseñanza Primaria sobre aplicación de los cuestionarios, confección de programas y utilización de textos», reapareciendo las funciones asignadas a la supervisión de los libros de texto, que ya se habían descubierto, desde alguna de las cédulas. También se percibe gran fuerza de las tareas estadísticas y la general disposición para aquellas tareas que fueran necesarias: «emitir cuantos informes o dictámenes en materias propias de su competencia sean solicitados por la superioridad».

Junta a ella y de forma, bajo nuestro criterio, muy significativo, aparecen otras funciones, de gran calado, aunque no podemos asemejarlas a las que aparecen en la LOE. Estas son: intervenir en los planes de estudio; intervenir en servicios y actividades complementarias, presidir comisiones de selección (tarea siempre contemplada, aunque en ocasiones, no específicamente establecida); junto a otras vinculadas con la dimensión estructural de la vida escolar y con la asignación de *gracias, licencias, recompensas*, etc.

En el Decreto 1973, se renuevan unas visiones que se han ido configurando a lo largo de la historia del propio cuerpo funcional: la responsabilidad en el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias, la intervención de la mejora en la intervención docente; la responsabilidad en la formación continua de los docentes y en las iniciativas innovadoras, y otras de carácter material: control de edificios, materiales, clausura de escuelas (públicas o privadas), etc... La vinculación con la mejora del sistema educativo, se desprende de cuestiones terminales y no previas y de diseño, siendo este un aspecto a destacar al compararla con inspecciones de nuestro entorno.

A partir del Real Decreto de 1989 se añade una relación funcional con los distintos sectores de la comunidad educativa: «asesorar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa y a los órganos unipersonales y colegiados de los Centros docentes», que perdurará hasta el día

de hoy, añadiendo alguna ya aparecida en la norma de 1932, en relación a la colaboración en los procesos de reforma educativa o renovación pedagógica.

Podemos concluir que las normas promulgadas desde 1995 tienen un perfil muy parecido: prácticamente reiteran cada cuerpo normativo anterior, reproduciendo las disposiciones con sencillas diferencias, más de concepto contextual –y quizá coyuntural–: La norma del 2006 añade el apartado e) que vincula el trabajo de los inspectores de educación con el «fomento y aplicación de los principios y valores destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres». Esta función no es más que la reproducción, en una norma educativa, de lo ya establecido en el art. 9 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (BOE de 29 de diciembre)¹⁰⁷ que rezaba:

Los servicios de inspección educativa velarán por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en este capítulo en el sistema educativo destinados a fomentar la igualdad real entre mujeres y hombres.

Se podría decir que dicha función tiene carácter de pleonismo, pues resulta reiterativo e innecesario con los principios ya recogidos en el art. 14 de la Constitución Española; pero es utilizada por el legislador para poner el énfasis y el foco en un determinado aspecto.

Es significativo concluir que, aunque las funciones, con cierta evolución, se han mantenido durante los más de 170 años de vida de los inspectores de educación, existen, por una parte, aspectos de carácter coyuntural, claramente asignados a épocas concretas; y por otra, pérdida de funciones específicas, pues se terminan diluyendo en otras unidades administrativas, dando quizá la percepción de pérdida de identidad.

La aparente singularidad que aparece en la disposición adicional cuadragésima octava de la Ley Orgánica de Educación 2/2006, en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/2020 de modificación de la Ley Orgánica de Educación –esta sí es una novedad–, en lo relativo al cambio de funciones del personal docente por falta de rendimiento notorio, tiene su reflejo en distintas etapas históricas y expresa una función específica, no delegada a otras unidades administrativas, que muestra una clara y concreta señal de identidad. Sin desmerecer esta tarea específica y de profundo calado, se hace manifiesto que, en la línea mostrada de aglutinar en la «supervisión educativa» distintas y muy diferentes funciones realizadas por los inspectores de educación, sería deseable que la singularidad del cuerpo de inspección basculara sobre aspectos de evaluación, control, asesoramiento e información «ad intra» y «ad extra» como aspecto identitario genuino.

Aunque resulta algo escasa y quizá algo tardía la normativa promulgada por la Comunidad de Madrid en relación a la inspección de educación, se considera muy oportuno el desarrollo normativo realizado con la inclusión de los principios de actuación (art. 2.4), las funciones (art. 3.1), -aunque se da la paradoja de que en el Decreto 61/2019 se circunscriben a las señaladas por la original LOE 2/2006 y en la Orden 732/2021, se actualizan a la establecidas en la redacción de la LOMLOE 3/2020, sin que se haya modificado el Decreto matriz–, las atribuciones (art. 3.2), la ética profesional (art. 58), los principios éticos (art. 59) y los principios de conducta (art. 60). Es indudable que un cuerpo de funcionarios de las características del cuerpo de inspectores de educación, debe contar con un acervo de normas de conducta y de carácter ético que definan sus actuaciones, más allá de las estrictamente funcionales y sirvan también de ejemplo y modelo para el resto de los docentes. Y sin desmerecerlas por su contexto, más actualizadas y de más calado, que las descubiertas en la Ley de julio de 1945.

¹⁰⁷ <https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf> con acceso el 4 de abril de 2022.

Las pequeñas diferencias en las funciones (véase la tabla 2.2.4.2.) sin ser significativas, sí definen un perfil profesional determinado a nivel de impulso político, que debe ser considerado en un entorno más global de evolución de la sociedad. La tarea realizada de plasmar los objetos, las modificaciones y los agentes protagonistas en la gestación de las normas específicas de la Comunidad de Madrid, en lo relativo a la inspección de educación, se considera como de gran valía histórica pues deja constancia, de forma concreta, de aquellos elementos personales y sociales, unos de carácter político y otros de carácter técnico, que han ido moldeando a la unidad de inspección de educación en la Comunidad de Madrid. Es indudable que su contenido deberá tenerse en cuenta en posteriores y diacrónicas investigaciones.

Por último y volviendo al análisis de las funciones reiteradas, la especificidad de una función genérica y abierta, a *estar en permanente disponibilidad* para aquello que se le solicite, que ha sido modificada por la nueva redacción del epígrafe h) del art. 151 de la LOE 2/2006, pero que puede considerarse integrada en el art. 151.g y que se sigue manteniendo en la conciencia colectiva, se puede llegar a percibir como una debilidad y amenaza de la utilización parcial y política o como una fortaleza como unidad imprescindible y merecedora de cualquier tipo de confianza en las tareas de máxima complejidad. Esta percepción se muestra incoherente con la pérdida de funciones específicas, al ser asignadas a otras unidades administrativas, como ya se ha descrito.

Todos los sistemas educativos han encontrado en la inspección -mientras ha reunido ciertas características y ha contado con ciertas garantías de independencia profesional- un mecanismo interno de crítica, de cambio y dinamización necesario en una actividad como la de la educación de un país que tiene que estar permanentemente adaptándose a la sociedad que la impulsa.

Soler Fierrez, E. (1993).

Capítulo 3

Investigación comparada internacional

El objeto del estudio comparado internacional se centra en la Inspección de Educación en una selección de modelos de los países de nuestro entorno.

Procedemos en este momento a iniciar el segundo estudio de la investigación multifocal, relativo a un estudio comparado internacional en el que pondremos en diálogo los sistemas de inspección educativa de la República Francesa, de la República Italiana, de Inglaterra, dentro del Reino Unido y del caso particular de Finlandia.

Tal y como ha quedado delimitado en el resumen de la investigación, el objetivo específico que perseguimos en el presente capítulo es comparar los modelos de inspección de educación establecido en España con los principales modelos de inspección establecidos en los países de nuestro entorno y propuestos desde los Organismos Internacionales. Abordaremos este estudio con una metodología comparada internacional.

El estudio se ha generado desde diversas fuentes bien delimitadas: por una parte, de la búsqueda, estudio e investigación de fuentes secundarias de diversa índole. Estas fuentes pertinentes han aportado una información relevante y esencial para su elaboración.

De esta forma nos hemos basado en *La inspección de educación. Régimen jurídico* (Galicia Mangas, 2016) y *La Inspección de Educación en la Unión Europea* (Galicia Mangas, 2019); hemos buscado también información en las páginas específicas de la Unión Europea, y en concreto en

el portal de Eurydice¹⁰⁸ realizando una profunda búsqueda de información. También hemos buscado y comparado la información obtenida del portal web de la Conferencia Internacional permanente de inspectores,¹⁰⁹ aunque es necesario señalar que no se encuentran adheridas todas las inspecciones de educación, su acceso nos ha facilitado unos contactos imprescindibles para su correcto y denso desarrollo. También hemos contado con documentación extraída de los entornos web de la UNESCO¹¹⁰ y con múltiples e interesantes artículos, buscados en el portal de Google Académico [Google Scholar]¹¹¹ entre los que señalamos: *La inspección general de la educación nacional y la inspección pedagógica regional en el sistema educativo francés* (Mollo, 1999); *La inspección educativa en España y la Unión Europea* (Oraá, 2000); *Los sistemas educativos Europeos y la formación de profesores: Los casos de Francia, Reino Unido, España y Finlandia* (Vega Gil, 2005); el *Estudio comparado de los modelos de inspección de España, Francia y Reino Unido*, de la revista digital para profesionales de la enseñanza (Federación de Enseñanzas de CC.OO. de Andalucía, 2009); *Inspectorates of Education in Europe; some comparative remarks about their tasks and work* (Bruggen, 2010); *La supervisión educativa en Europa: Sistemas educativos y modelos de inspección educativa* (Miguel Pérez et al., 2018) y los interesantes artículos de Reijo Laukkanen en forma de artículos propios o recensiones o citas de sus publicaciones, y en concreto *El modelo finlandés para la formación continua del profesorado* (Laukkanen, 2014), entre otros.

Una vez realizado este estudio detallado, que nos ha facilitado el acercamiento a la historia y a las estructuras de las inspecciones educativas señaladas, nos hemos centrado en la búsqueda de las fuentes primarias que delimitan las funciones asignadas a dichas inspecciones, sondeando y escudriñando las disposiciones y normas que las delimitan jurídicamente. Al respecto hemos realizado un denso estudio sobre las estructuras normativas de los países en cuyas inspecciones educativas nos hemos centrado, recabando valiosa información sobre su sistema educativo y su normativa específica.

Es significativo señalar que estos estudios de fuentes primarias conforman unas fotografías de un momento histórico concreto y claramente delimitado. Hemos concluido que el estudio comparado internacional que se sirve del tejido normativo y de las fuentes legislativas, es un objetivo muy arduo y complicado, con muchas y permanente modificaciones, en unos u otros países, lo que supone un gran esfuerzo de permanente actualización, pero que en absoluto debe desilusionar al investigador, pues el propio desarrollo diacrónico es un elemento cualitativo de reflexión y riqueza en el camino hacia la convergencia o a la divergencia estructural o funcional, enriquecedora en cualquiera de los modos. La obsolescencia del trabajo de Galicia Mangas (2016), en algunos significativos apartados, es muestra de esa realidad, poniendo en valor también su camino marcado y cómo, sus propias apreciaciones, válidas en aquel momento, han definido, no ya los elementos de nuestro estudio, pero sí la senda y la ruta por la que investigar.

A pesar de la opción señalada por Terigi (2010) en cuanto a cuatro modelos de supervisión educativa: Modelo clásico; Modelo de control central; Modelo de apoyo cercano a la escuela

¹⁰⁸ Desde la url: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/index_en.php_en con acceso el 14 de septiembre de 2021.

¹⁰⁹ Desde la url: <https://www.sici-inspectorates.eu/Members/Comparative-Analyses/Inspectorates-of-Education-in-Europe> con acceso el 14 de septiembre de 2021.

¹¹⁰ Desde la url: <https://es.unesco.org/> con acceso el 18 de abril de 2022.

¹¹¹ Acceso a la web de Google Académico en la url: <https://scholar.google.es/>.

(close to school support model); y Modelo de supervisión con asiento en la escuela, hemos optado por la clasificación de Galicia Mangas (2016) que sintetiza dichos modelos entre dos polos o modelos organizativos de inspección bien diferenciados: un modelo centralizado, con una fuerte y permanente presencia estatal, aunque pueda contar con una estructura territorial determinada, como es el modelo francés o italiano, y un modelo descentralizado, como señala en el caso del modelo alemán, el británico, o el español, en el que se confiere una amplia autonomía a entes territoriales con potestad en el ámbito educativo, sin perjuicio de la existencia de otros órganos o mecanismos de coordinación que permitan avalar un elemento de unidad del sistema educativo. Por este motivo, hemos optado por dos ejemplos del modelo centralizado: el de la República Francesa y el de la República Italiana, y de un ejemplo del modelo descentralizado, el de Inglaterra, muy parecido por otra parte a los modelos del País de Gales, de Escocia y de Irlanda del Norte -que tienen gran similitud al modelo descentralizado español- dejando para un apartado específico el estudio y las reflexiones del modelo finlandés, por la singularidad y las repercusiones que ha tenido durante la última década en los medios de comunicación educativa.

Como señala Galicia Mangas (2019) el estudio y conocimiento de otros modelos diferentes de Inspección resulta de gran interés, pues nos permite tanto conocer, como aprender y comprender las fortalezas y debilidades de cualquier modelo o sistema, con el objetivo, siempre evidente, de mejorar el trabajo y la organización del nuestro propio. Por ello es necesario reflexionar seriamente sobre los retos que los diferentes sistemas educativos tienen que afrontar en este sentido, y mucho más en este contexto de gran influencia global, desde la certeza de que la Inspección está llamada a ocupar un papel nuclear, estratégico, fundamental y de gran relevancia en este sentido.

Si Galicia Mangas (2019) no pretendía realizar ninguna lista de inspecciones, ordenadas según su méritos y características, sino reflexionar sobre aquellos aspectos de unos u otros sistemas que puedan ser interesantes o provechosos para una mejora de los modelos propios, nuestro caminar por este proceso se realiza con los mismos parámetros técnicos y asépticos, realizando un estudio descriptivo, de yuxtaposición de las funciones y organizaciones descubiertas, sin entrar en la realización de ningún juicio de valor o valoración sobre éxitos o desaciertos, pero recopilando una valiosa información que nos sea fundamental para el trabajo prospectivo.

En este sentido y a fin de enmarcar el capítulo, a modo de preámbulo inicial y siguiendo las pretensiones de mismo Galicia Mangas (2019), hemos de señalar que buena parte de los modelos europeos presentan un origen histórico similar, por cuanto la Inspección de educación, como institución, tuvo sus inicios durante el siglo XIX, y surgió como un instrumento de control del sistema educativo, así como de los fondos asignados por parte del Estado. Esta conclusión pone de manifiesto la existencia de distintos nexos comunes, que una vez identificados y considerados, constituyen sin duda elementos estratégicos para la mejora de la calidad de la educación.

Como hemos indicado en el capítulo de metodología, antes de iniciar el estudio comparado, recordamos que los parámetros que vamos a utilizar serán, por una parte, la historia, organización y estructura, y por otra, las funciones asignadas.

3.1. La Inspección de Educación en la República Francesa

3.1.1. Acercamiento a la historia y estructura de la inspección de educación en la República Francesa

- Estructura del sistema educativo francés.

Iniciamos este epígrafe realizando un acercamiento al sistema educativo francés, utilizando como fuente fundamental la web de Eurydice¹¹².

La educación es obligatoria entre los seis (inicio de la educación primaria) y los dieciséis años y comprende las siguientes etapas:

- Educación infantil (CINE 02), que se imparte en «escuelas infantiles» y acoge a niños desde los 2 hasta los 6 años. La asistencia a las escuelas infantiles es prácticamente generalizada a partir de los tres años, aunque es opcional.
- Educación primaria (CINE 1), que se imparte en «escuelas elementales» y admite a niños de entre los 6 a 11 años. Marca el inicio de la escolaridad obligatoria; es laica y gratuita cuando se imparte en las escuelas públicas. Al finalizar los 5 años de escolaridad en esta etapa, los alumnos acceden automáticamente a la secundaria.
- Educación secundaria inferior (CINE 2), que se imparte en los *sollèges* durante 4 años (entre los 11 y los 15 años). La educación en los *colleges* es obligatoria y común a todos los alumnos. El final de la educación secundaria inferior se recibe el *Diplôme National du brevet* (DNB); sin embargo, la admisión al nivel secundario superior no está condicionada al éxito en el DNB. Al final del *collège*, la escuela recomienda la ruta escolar adecuada a las familias, basándose en los informes escolares y los intereses particulares del alumno.
- Educación secundaria superior (CINE 3), que se imparte en liceos generales y tecnológicos o en los liceos profesionales, y que se extiende a lo largo de 3 años (entre los 15 y los 18 años). La educación secundaria superior ofrece tres itinerarios educativos:
 - El itinerario general (que prepara a los alumnos para estudios superiores de larga duración),
 - El itinerario tecnológico (que prepara principalmente a los alumnos para estudios tecnológicos superiores)
 - Y el itinerario profesional (que lleva principalmente a la vida laboral activa, pero también permite a los estudiantes para continuar sus estudios en la educación superior).

El título de bachiller, al final de la educación secundaria superior, condiciona el acceso a los estudios superiores. Los alumnos de los liceos profesionales pueden preparar el denominado *Certificat d'aptitude professionnelle* (CAP - Certificado de aptitud profesional), con un curso de estudio que se extiende durante 2 años, después del cual pueden integrarse en la vida laboral activa o preparar el bachillerato profesional en un año.

- Educación superior (CINE 5 a CINE 8), que se imparte en instituciones de educación superior. Estas instituciones tienen una amplia variedad de estatus legales. Hay dos tipos de estudios de ciclos cortos (*Sections de Techniciens Supérieurs* y *Diplôme Universitaire Technologique*). Los cursos impartidos en las instituciones de educación superior francesas

¹¹² Acceso el 21 de septiembre de 2021 en la url: <https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/france/france>

tienen diferentes objetivos y condiciones de admisión, pero la mayoría de ellos están estructurados en tres ciclos de estudio (Licenciatura, Master y Doctorado) y en créditos ECTS, de conformidad con los principios del Proceso de Bolonia¹¹³.

Estructura del Sistema Educativo en la República Francesa (Eurydice)¹¹⁴

France – 2022/2023

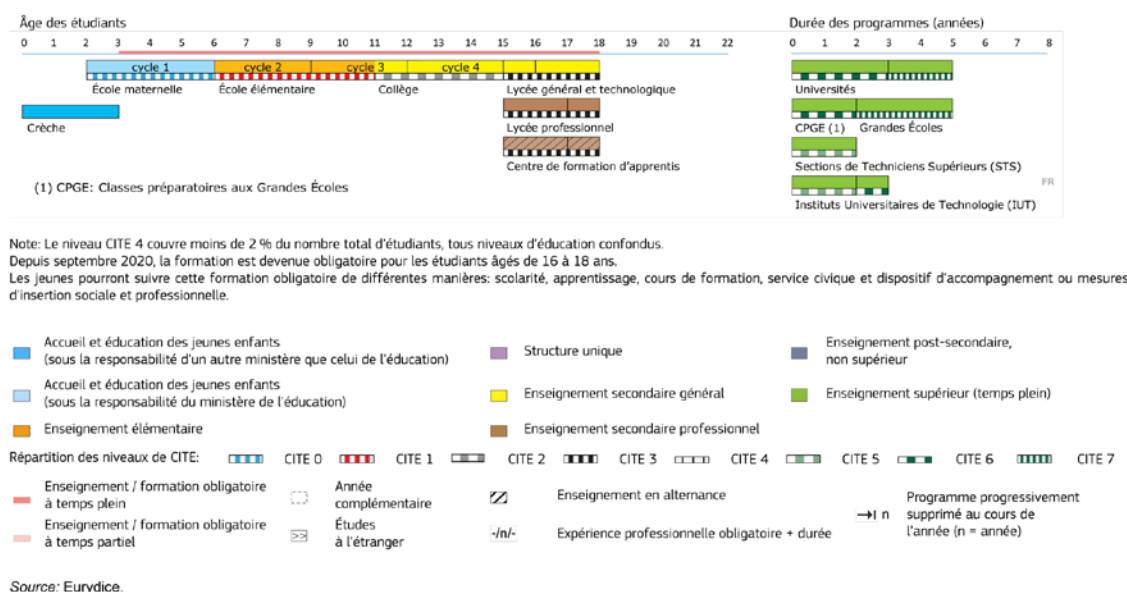


Figura 3.1. Estructura del sistema educativo en la República Francesa.

Se puede ampliar información sobre el sistema educativo francés en la página web del Departamento de Educación Nacional (Eduscol)¹¹⁵ del *Ministère de l'Éducation Nationales et de la Jeunesse*. E igualmente se puede obtener interesante información estadística de su sistema educativo en un apartado de la web <https://www.education.gouv.fr/>¹¹⁶.

- La historia de la Inspección en la República Francesa.

Centrándonos ahora en el apartado específico, como ya hemos señalado, la Inspección de Educación en España, sin perjuicio de la existencia de antecedentes más o menos discutidos, nace con la promulgación del Real Decreto de 30 de marzo de 1849 (Gaceta de Madrid de 2 de abril), en cuyo preámbulo se reza:

¹¹³ Para ampliar información se puede visitar la url: <https://education.ec.europa.eu/es/proceso-de-bolonia-y-espacio-europeo-de-educacion-superior>.

¹¹⁴ Fuente de la url: <https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/france/france> con acceso el 1 de octubre de 2022.

¹¹⁵ Página web en la url: <https://eduscol.education.fr/> con acceso el 29 de mayo de 2022.

¹¹⁶ Página web en la url: <https://www.education.gouv.fr/reperes-et-references-statistiques-sur-les-enseignements-la-formation-et-la-recherche-2019-3806> con acceso el 29 de mayo de 2022.

Sin ellos la administración nada ve, nada sabe, nada puede remediar... [con ellos] desaparece la inercia, nace la actividad, la emulación, y se entra en una senda de progresivas mejoras, que al cabo paran en la perfección apetecida, o se acercan a ella por lo menos.

Dicha sentencia hace referencia a esa labor esencial de mejora educativa intrínsecamente unida a sus funciones.

Parece que el orgullo de ser una de las instituciones de mayor antigüedad en Europa, remontándonos a sus propias fuentes, puede tenerla la Inspección en Portugal, que no será objeto de desarrollo en esta investigación doctoral y cuyos antecedentes más remotos se encontrarían en la reforma educativa del marqués de Pombal y la creación en 1771 de la denominada Real Mesa Censória, que trasladó la responsabilidad supervisora de la Iglesia al Estado.

No obstante, es preciso destacar, como señala Galicia Mangas (2016) que sus acontecimientos históricos hicieron evolucionar esta labor tras la Revolución de 1910 y la proclamación de la Primera República portuguesa, y posteriormente con el establecimiento del Ministerio de Instrucción Pública en 1913¹¹⁷, hasta llegar, más recientemente, a la adquisición por parte de la Inspección de su modelo básico vigente mediante el Decreto Ley 540/1979, de 31 de diciembre. La denominación actual como Inspección de Educación y Ciencia en Portugal, surge a raíz del Decreto 15/2012, de 27 de enero.

En Francia, por su parte, la Inspección de Educación nació por virtud de lo que se estableció en la *Loi Générale sur l'Instruction Publique* de 1 de mayo de 1802, por la que se creó la Inspección General. Ese marco es algo posterior a la Constitución de 1791¹¹⁸ que dentro de uno de los epígrafes, del punto tercero, del Título Primero, denominado «disposiciones fundamentales garantizadas por la Constitución», establecía¹¹⁹:

Il sera créé et organisé une Instruction publique commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties d'enseignement indispensables pour tous les hommes et dont les

¹¹⁷ En lo relativo al Ministerio de Educación en España, tal y como señala el propio organismo en su web: "La Ley de Presupuestos de 31 de marzo de 1900 había autorizado al Gobierno para reorganizar en dos Departamentos Ministeriales el Ministerio de Fomento, y el R. D. de 18 de abril de 1900 (Gaceta del 19) suprime dicho Ministerio de Fomento, y en su lugar crea dos nuevos Departamentos Ministeriales, que se denominan, respectivamente, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, y Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas. Este último volvería a denominarse Ministerio de Fomento a partir de 1905".

Al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes se le encomendó "las enseñanzas pública y privada sus diferentes clases y grados, el fomento de las ciencias y letras, Bellas Artes, Archivos, Bibliotecas y Museos, así como la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico".

Fuente <https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/archivo-central/materiales-historia-educacion/siglo-xx.html> con acceso el 19 de abril de 2022.

¹¹⁸ La Constitución de 1791, es la primera constitución de la historia francesa. Fue promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente el 3 de septiembre de 1791 y aceptada por Luis XVI. Contenía la reforma del Estado francés, quedando Francia configurada, en ese momento, como una monarquía constitucional.

¹¹⁹ Fuente de la web de la Universitat de Barcelona en la url:

<http://www.ub.edu/ciudadania/hipertexto/evolucio/textos/cf1791.htm#DP> con acceso el 1 de mayo de 2022.

établissements seront distribués graduellement, dans un rapport combiné avec la division du royaume.

Se creará y organizará una instrucción pública, común para todos los ciudadanos, gratuita en la parte de la enseñanza indispensable para todos los hombres, y cuyos establecimientos serán gradualmente distribuidos por todo el reino.

Es significativo que en la actual Constitución Francesa, correspondiente a la V República de 1958 (con el texto modificado por la Ley Constitucional de 23 de julio de 2008), la única referencia al derecho a la Educación se encuentra en el art. 8 de la Carta del Medio Ambiente (Charte de L'Environnement)¹²⁰, que reza:

Article 8. L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.

Artículo 8. La educación y la formación en el medio ambiente deben contribuir al ejercicio de los derechos y deberes definidos en la presente Carta.

Continuando con su evolución la inspección de educación en la República Francesa se consolidó, a su vez, a partir de la Ley sobre la Instrucción Primaria de 28 de junio de 1833 (*Loi Guizot*), completada o desarrollada por la Ordenanza Real de fecha de 26 de febrero de 1835 y por el Decreto del Consejo Real de Instrucción Pública de 27 de febrero de 1835, que asentaron definitivamente la Inspección de instrucción primaria. Se afianzó asimismo por Decreto de 9 de marzo de 1852, que instituyó la Inspección General de Instrucción Pública, antecedente primero de la Inspección General de Educación Nacional (IGEN) y más tarde de la actual Inspección General de Educación Nacional, el Deporte e Investigación (IGÉSR). A partir de estos antecedentes comunes, los cuerpos de inspección, tal y como los conocemos actualmente, fueron viviendo procesos paulatinos de especialización, fusión y adaptación a la realidad y necesidades de su sistema educativo.

Tal y como señala y desarrolla Galicia Mangas (2016) el sistema educativo francés presenta como características fundamentales una importante y destacada participación del Estado en la organización y financiación de la enseñanza¹²¹. La normativa estatal tiende a definir de forma detallada aspectos como la programación de la enseñanza de todos los niveles educativos o el sistema de selección y formación de docentes e inspectores, aunque a partir de los años ochenta se ha observado una cierta descentralización en favor de las colectividades locales para la administración de aspectos concretos del sistema educativo, como son la construcción y mantenimiento de edificios escolares, el transporte escolar o los suministros de materiales docentes. Las competencias en materia de educación se reparten entre dos ministerios: El Ministerio de Educación Nacional (*Ministère de l'Education Nationale*) que asumen las competencias sobre el sistema escolar, y el ministerio de Enseñanza Superior e Investigación (*Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche*) que asume las competencias en materia de enseñanza superior de nivel universitario e investigación.

¹²⁰ Fuente de la web del Senado francés en la url:

https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/lng/constitution-espagnol_juillet2008.pdf con acceso el 2 de mayo de 2022.

¹²¹ Galicia Mangas realiza un detallado y denso repaso normativo de las principales leyes de educación a partir de la Revolución Francesa: Loi Daunou (1795), Loi Sur l'Université Impériale (1806), Loi Goizot (1833), Loi Falloux (1850), Loi Duruy (1857), Loi Ferry (1881 182), Loi Goblet (1886), Loi Debré (1959), Loi Faure (1968), Loi Haby (1975), Loi Savary (1984), Loi Jospin (1989), Loi Fillon (2005) y Loi Pécresse (2007).

De entre todos los modelos de Derecho comparado, Galicia Mangas (2016) señala que aquel cuyos antecedentes históricos han podido ejercer una influencia más destacada en los países de su entorno, e incluso más allá del mismo, ha sido el francés. Así la Ley Guizot, de 1833, pudo servir de clara referencia, según Pujol (1971), al Real Decreto de 30 de marzo de 1849, por virtud del cual se creó la Inspección de Educación en España, y también a la Ley Casati, de 1859, en Italia, así como en Suiza y Sudamérica.

La estructura y organización del modelo de inspección en Francia se basa en la existencia de las siguientes categorías, recientemente modificadas:

a) La denominada Inspección General.

- L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR)

b) Las inspecciones territoriales, que a su vez se componen de:

- L'inspection d'académie – Inspection Pédagogique régionale (IA-IPR)

- La Inspection de l'Éducation Nationale (IEN)

A fin de realizar una exposición sencilla no podemos dejar de trasladar, por su cercanía conceptual, una sencilla tabla resumen, cogiendo la idea plasmada por Prats, J., Raventós, F., Gasòliba, E., Cowen, R., Creemers, B. P., Gauthier, P. L., ... & Standaert, R. (2005, 42), para que el lector pueda hacerse una idea de los datos.

DENOMINACIÓN	Nº	TERRITORIO	NIVEL ESCOLAR	PAPEL
Rectores	30	Academia y región	Primer y segundo grado, enseñanza superior.	Política educativa general, gestión, tutela de las universidades
Inspectores Generales (IGÉSR)	252	Territorio nacional	Misiones varias.	Competencias varias, innovación, evaluación, control de la administración
Inspectores de Academia (IA-IPR)	1.149	Departamento	Primer y segundo grado.	Gestión, fomento, evaluación, formación, inspección
Inspectores de Educación Nacional (IEN)	1.880	Municipios	Primer grado.	Fomento, evaluación, inspección, anotación, formación

Cuadro 3.2. Datos estadísticos del sistema de inspección en la República Francesa, adaptados a la nueva organización, a partir de la propuesta realizada por Prats, J., Raventós, F., Gasòliba, E., Cowen, R., Creemers, B. P., Gauthier, P. L., ... & Standaert, R. (2005, 42).

Para abordar con mayor claridad sistemática el modelo de inspección en Francia, y en las delimitaciones realizadas por Galicia Mangas (2016), pero con las últimas y relevantes adaptaciones normativas de 2019 y 2020 (es significativo que un trabajo tan denso y cercano ha quedado ya obsoleto en una de sus dimensiones), y el cercano y divulgativo artículo de Jardón (2022), apuntaremos a cada una de las instituciones que lo componen como una unidad, y detallaremos aquellos aspectos más importantes en relación a su organización y estructura, funciones y ámbito de actuación.

Además, también mencionaremos la figura del Inspector de Juventud y Deporte (*Inspecteur de la jeunesse et des sports –IJS-*), que aunque no afecta al sistema educativo, puede proporcionar una idea de las múltiples unidades de control e inspección existentes en la República Francesa.

- L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR)¹²²

. Organización y estructura.

En 2019 (por Decreto n° 2019-1001 de 27 de septiembre de 2019¹²³ relativo al estatuto especial del cuerpo de inspección general de educación, deporte e investigación, JORF n°0227 de 29 de septiembre de 2019) se fusionan la Inspección General de Educación Nacional (IGEN) - *l'inspection générale de l'éducation nationale*-, la Inspección General de Administración de la Educación Nacional y la Investigación (IGAENR) -*l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche*-¹²⁴, la Inspección General de Juventud y Deportes (IGJS) -*l'inspection générale de la jeunesse et des sports*- y la Inspección General de Bibliotecas (IGB), - *l'inspection générale des bibliothèques*-. en la Inspección General de Educación, Deporte y la Investigación (IGÉSR) - *l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche*-, asumiendo las funciones asignadas a las distintas inspecciones.

La Inspección General de Educación, Deporte y la Investigación (IGÉSR) es un cuerpo situado bajo la autoridad directa y conjunta de los ministros competentes en materia de Educación, Juventud y Deporte, Educación Superior, Investigación e Innovación y proporciona misiones de evaluación, peritaje, control y apoyo. Su organización se regula por los Decreto 2019-1001 y 2019-1008.

Además de las competencias que le confieren la ley y los reglamentos, el IGÉSR realiza tareas de inspección, control, auditoría, evaluación, peritaje, apoyo y asesoramiento en los ámbitos de la educación, la enseñanza superior, la investigación, la juventud y el deporte. También interviene en el ámbito de la lectura pública, la documentación y las bibliotecas.

Estas misiones se llevan a cabo a petición de los ministros encargados de la educación, la enseñanza superior, la investigación y la innovación, la juventud y el deporte, o de acuerdo con el programa de trabajo de la Inspección General. La parte del programa de trabajo y las tareas relacionadas con la lectura pública, la documentación y las bibliotecas también pueden decidirse a petición del ministro responsable de la cultura.

La intervención de la IGÉSR también puede ser solicitado directamente por el Primer Ministro; puede ser autorizada por uno de los ministros bajo cuya autoridad se encuentra para realizar misiones a petición de otros ministros, organismos públicos, autoridades locales o sus

¹²² Acceso al entorno web oficial de la IGÉSR https://annuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_169459 el 19 de abril de 2022.

¹²³ Fuente <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039146771/> con acceso el 21 de abril de 2022.

¹²⁴ En julio de 2012, la IGAENR estableció unos criterios o principios de actuación formalizados en una interesante carta deontológica, de aplicación en el desarrollo de sus misiones y tareas, y cuyo cumplimiento y respeto era vigilado por el jefe de servicio de la IGAENR junto con un comité deontológico compuesto por una personalidad exterior y ajena a la IGAENR, elegido por el jefe de servicio, y dos inspectores generales elegidos por los propios miembros de la IGAENR; url: http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013/85/4/Charte_de_deontologie_de_l_IGAENR_254854.pdf el 19 de abril de 2022

Ese documento se consideró como el antecedente de la carta ética de la Inspección General de Educación, Deporte e Investigación aprobado por Decisión de 29 de octubre de 2021 por la que se aprueba la (JORF n°0271 del 21 de noviembre de 2021). Acceso desde la url: <https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=s8Q4r0nDPeSNpynq3hZEDmgPIRv7gOmlegJaPV6kUU0> el 19 de abril de 2022.

agrupaciones, fundaciones o asociaciones, estados extranjeros, organizaciones internacionales e incluso la Unión Europea.

La responsable de la Inspección General de Educación, Deporte e Investigación dirige la actividad del servicio. Como tal, distribuye las misiones entre los miembros de la Inspección General e informa a los ministros de las conclusiones de su trabajo. Es responsable de la gestión del organismo y puede proponer a los ministros, en caso necesario, medidas relativas a la organización y el funcionamiento de la unidad.

La responsable de la Inspección General (desde octubre de 2019, Caroline Pascal –de soltera, Carolina Latrobe¹²⁵), se encuentra asistida por Inspectores Generales con responsabilidades específicas de jefes de collège, jefes de misión y jefes de división. Este equipo constituye el comité de dirección del IGÉSR, compuesto en la actualidad por once inspectores.

. Funciones de la Inspección General de Educación, Deporte e Investigación (IGÉSR).

Ejerce las misiones especificadas en los artículos R. 241-3 a R. 241-19 del Código de Educación¹²⁶ en las condiciones definidas por el Decreto 2019-1001 de 27 de septiembre de 2019 relativo al estatuto especial del organismo de la Inspección General de Educación, Deporte e Investigación - JORF n°0227 de 29 de septiembre de 2019-.

El cuerpo de la Inspección General de Educación, Deporte e Investigación comprende dos grados:

- 1° El grado de inspector general de primera clase, que comprende cinco niveles y dos niveles especiales;
- 2° El grado de Inspector General de 2ª clase que comprende quince escalones.

El Jefe de la Inspección General de Educación, Deporte e Investigación y los miembros de este organismo son designados por decreto del Presidente de la República, a propuesta del Primer Ministro y de los ministros competentes en materia de educación, enseñanza superior, investigación, juventud y deportes.

Los nombramientos de los inspectores generales de conformidad con la normativa específica se realizan por decreto en Consejo de Ministros.

El jefe de la inspección General de Educación, Deporte e Investigación es elegido entre los inspectores generales que hayan alcanzado al menos el grado de primera clase que justifique un

¹²⁵ Fuentes, <https://www.education.gouv.fr/mission-et-organisation-de-l-inspection-generale-de-l-education-du-sport-et-de-la-recherche-41687#:~:text=L'IG%C3%89SR%20est%20un%20corps,de%20contr%C3%B4le%20et%20d'appui> con acceso el 21 de abril de 2022.

¹²⁶ En la legislación francesa, el *Code de l'éducation* o Código de Educación, es un compendio que reúne las disposiciones legislativas y reglamentarias (adoptadas normativamente) relativas a la educación.

Code de l'éducation dedica el Titre IV del Livre II, L'administration de l'éducation, a L'inspection et l'évaluation de l'éducation.

Se puede consultar en el sitio web de Légifrance [<https://www.legifrance.gouv.fr/>].

Texto consolidado en <https://codes.droit.org/PDF/Code%20de%20l'%C3%A9ducation.pdf> con acceso el 18 de abril de 2022. El documento consultado se compone de 1397 págs. con 4939 artículos y se organiza en dos partes: Legislativa y Reglamentaria con sus correspondientes apartados, libros, títulos y capítulos.

Cada artículo cita la fuente legislativa específica de la que emana, constituyéndose de esta forma el *Code de l'éducation* en el compendio consolidado de normas educativas en vigor.

período de dos años de servicio efectivo en el cuerpo. Es nombrado por un período de cinco años, renovable una sola vez, y desempeña las siguientes funciones:

1º Dirige la actividad del servicio de Inspección General para la Educación, el Deporte y la Investigación. En calidad de tal, distribuye las misiones entre los miembros de la inspección general e informa a los ministros interesados de las conclusiones de su trabajo. Puede decidir no transmitir estas conclusiones, previa consulta a una comisión integrada por miembros del órgano de inspección general de educación, deporte e investigación que él designe;

2º Asegura la gestión del cuerpo;

3º Puede proponer a los ministros medidas relativas a la organización y funcionamiento del servicio.

A nivel disciplinario son los ministros encargados de la Educación, la Enseñanza Superior, la Investigación, la Juventud y el Deporte quienes pronuncian contra los inspectores generales de Educación, el Deporte y la Investigación las sanciones del primer y segundo grupo en las condiciones previstas en el artículo 67 de la ley de 11 de enero de 1984 ¹²⁷.

Los miembros del cuerpo no pueden recibir ningún destino administrativo permanente al margen de las misiones realizadas, ni ser colocados en un puesto de adscripción o disponibilidad salvo que hayan cumplido, desde la fecha de su nombramiento, dos años de servicios efectivos en el cuerpo. El número total de miembros del órgano separados o puestos a disposición, no debe ser superior al de los miembros efectivamente presentes en los ejecutivos.

Cuando se prevea la participación de un miembro del órgano de Inspección General para la Educación, el Deporte y la Investigación, en su caso de un grado determinado, en una comisión, un consejo o un jurado, el titular de la inspección general propondrá a la autoridad responsable de la designación de un miembro del cuerpo de Inspección General para la Educación, el Deporte y la Investigación o un miembro de honor de este cuerpo, de uno de los cuerpos de origen.

Con carácter general, y bajo la autoridad directa de los ministros afectados y competentes, la IGÉSR ejerce funciones de control, estudio, asesoramiento, información y evaluación del funcionamiento, eficacia del sistema educativo, así como control administrativo, financiero, contable y económico, control e inspección de personal de los servicios centrales y periféricos o descentralizados, y de los establecimientos públicos u organismos dependientes o beneficiarios de un concurso directo o indirecto, considerado en su conjunto, dotando de esta forma a los ministros de una misión permanente de control, estudio, información, asesoramiento y evaluación, tal y como establece los art. R 241- 3 y R 241 – 4 del *Code de l'éducation*. Para ello

¹²⁷ La legislación francesa es muy densa y prolija. Se ha comprobado que, tras la reestructuración del cuerpo de Inspectores Generales de Educación, el Deporte y la Investigación, se ha promulgado nueva normativa entre la que cabe citar:

Decreto N° 2021-1392 de 26 de octubre de 2021 por el que se adecuan diversos estatutos especiales de los organismos del servicio civil del Estado a las novedades legislativas y reglamentarias relativas a las facultades de las comisiones administrativas mixtas.

Decreto n° 2021-7 de 6 de enero de 2021 relativo a la inspección general de educación, deporte e investigación.

Decreto N° 2022-335 de 9 de marzo de 2022 relativo a los servicios generales de inspección o control y trabajos dentro de estos servicios.

Decreto N° 2021-334 del 26 de marzo de 2021 que suprime los límites en el número de presentaciones a concursos y exámenes para el servicio público civil y el poder judicial.

se sirve de informes en los que expresa, de forma colegiada, su parecer, o en los que realiza propuestas relativas al sistema educativo.

La Inspección General formula todos los dictámenes y propuestas útiles a los ministros para la ejecución de las políticas públicas de su competencia.

Su programa anual de trabajo¹²⁸ es definido mediante instrucciones remitidas por los ministros afectados, y comprende fundamentalmente las siguientes actuaciones:

- El seguimiento permanente de las enseñanzas, de la política y servicios educativos, y de los centros docentes.
- La realización de estudios temáticos relativos a la enseñanza escolar, los tipos de formación, contenidos didácticos, programas, métodos didácticos, procedimientos y medios implementados. Los informes emitidos pueden ser también publicados en el Diario Oficial de la República Francesa.

Complementa las misiones permanentes y estatutarias de peritaje, asesoramiento, evaluación y control que se encomiendan a la Inspección General a lo largo del año.

Además, y con carácter puntual, la IGÉSR puede ser igualmente requerida para actuar en tareas o misiones y en el marco del ejercicio de sus competencias elaborar o redactar escritos sobre un tema de actualidad o un campo temático concreto de la enseñanza.

Retomando las funciones básicas de la IGÉSR, podemos clasificar sus misiones y tareas en los siguientes ámbitos: evaluación, propuestas y nombramiento, inspección y control, información, coordinación, formación y asesoramiento.

- Evaluación: la IGÉSR examina, estudia y evalúa la organización y el funcionamiento del sistema educativo en todos sus niveles, desde la enseñanza primaria, a la enseñanza superior, pasando por la secundaria, y desarrolla también sus competencias al ámbito de la investigación, juventud y deporte. Evalúa igualmente la eficacia en los resultados del sistema, plantea medidas de mejora y garantiza el seguimiento de sus propuestas.

Tiene por misión evaluar los tipos de formación, los contenidos de la enseñanza, los programas educativos, los métodos pedagógicos, los procedimientos y medios aplicados en la enseñanza. Igualmente evalúa el trabajo del personal de dirección de la educación nacional, que agrupa a los funcionarios que dirigen centros docentes de segundo grado; a los profesores de clases preparatorias para las grandes escuelas, e incluso excepcionalmente, a otros docentes y personal asimilado, aunque en este último caso las tareas de inspección son delegadas a favor de los Inspectores Pedagógicos Regionales (IA-IPR) y de los Inspectores de la Educación Nacional (IEN) tal y como establece los arts. L241-1 Y L241-4 párrafo del denominado como Código de Educación, *divulga las innovaciones con resultados positivos, e informa sobre las disfunciones detectadas en el sistema educativo* (véanse las tablas 3.1.1, 3.1.2 y 3.1.3).

- Propuesta y nombramiento: la IGÉSR examina y evalúa también las candidaturas para ocupar puestos específicos de la educación nacional y, en particular, los relativos a las clases preparatorias para las grandes escuelas y las cátedras superiores de categoría profesional. Tras incluir aceptar a los candidatos fórmula propuesta a los ministros para el nombramiento de los más idóneos. El nombramiento como funcionarios titulares de los catedráticos de la enseñanza de segundo grado depende de la IGÉSR.

¹²⁸ Acceso al Programa de trabajo del curso escolar 2020/2021, el 19 de abril de 2022, en la url: <https://www.education.gouv.fr/programme-et-thematiques-de-travail-de-l-igesr-12473>.

- Inspección y control: la IGÉSR participa en el control del propio personal de inspección, dirección, enseñanza, educación y orientación, y toma parte en los procesos de selección y evaluación de su actividad profesional. Puede también ejercer labores de auditoría en otros servicios ministeriales o en colaboración con las administraciones territoriales. Puede también inspeccionar los establecimientos de enseñanza de primer o segundo grado, tanto públicos como privados, aunque en el caso de estos últimos la inspección solo se refiere a aspectos relacionados con la moralidad, higiene, salubridad y cumplimiento de las obligaciones impuestas a dichos centros por el *Code de l'Éducation* (arts. L241 a R241-7, R241-4 pfo. 2º y 4º y R241-5). Su campo de acción llega a establecimiento que se benefician de ayudas de la Unión Europea (L241-2)
- Información: la IGÉSR desarrolla también labores de peritaje o valoración, y de transferencia a otros países de habilidades, destrezas y conocimientos pedagógicos, o de información comparada, a petición del Ministerio de Asuntos Exteriores (*Ministère des Affaires Étrangères*), de la agencia para la enseñanza francesa en el extranjero u organismos internacionales.
- Coordinación: corresponde a la IGÉSR coordinar la actuación de todos los cuerpos de inspección con competencia pedagógica, en colaboración con las autoridades académicas. Esta coordinación debe hacerse efectiva en el marco de los llamados colegios académicos, que agrupan a los inspectores de cada materia o disciplina académica.
- Formación y asesoramiento: la IGÉSR también interviene en los procesos de selección y formación inicial del profesorado de primer y segundo grado, e interviene igualmente en acciones de formación profesional de los docentes en los centros educativos o de cualquier otro organismo sometido al control pedagógico del Ministerio de la Educación Nacional. Igualmente desempeña un papel muy destacado en la elaboración de propuesta en práctica de los programas escolares y en el examen y divulgación de las técnicas pedagógicas. Puede, en este sentido, elevar a los servicios de distintos ministerios, autoridades locales, gobiernos extranjeros u organismos internacionales informes y propuestas relativos a su esfera de actuación (art. R241-4 del *Code de l'Éducation*).

- Inspection d'académie-Inspection pédagogique régionale (IA-IPR)

. Organización y estructura.

La administración de la educación nacional está presente en cada región y en cada uno de los departamentos en los que se divide administrativamente su sistema. Existen de esta forma servicios descentralizados o periféricos del Ministerio de la Educación Nacional en cada uno de estos ámbitos, que forman las treinta academias o circunscripciones administrativas y las noventa y siete direcciones de servicios departamentales de la educación nacional.

Los servicios periféricos del Ministerio de la Educación Nacional quedan bajo la autoridad de los Rectores de Academia y por delegación de los mismos, bajo la autoridad de sus adjuntos.

Estos servicios periféricos presentan la siguiente organización y estructura:

- En cada región, el Rectorado, que constituye la sede central de la organización administrativa de la Academia. El Rector es el cargo de mayor responsabilidad.
- En cada departamento, direcciones de los servicios departamentales de la educación nacional que son a su vez dirigidos por directores académicos de los servicios de la educación nacional. En este sentido es preciso destacar que desde el 1 de febrero de 2012, fecha de la

entrada en vigor del decreto 2012/16 de 5 de enero de 2012, los servicios departamentales de la educación nacional han reemplazado a la inspección académica y de esta forma los inspectores de Academia (IA-IPR) con categoría de directores de servicios departamentales de la educación, han pasado a integrarse en la categoría de directores académicos de los servicios de la educación nacional.

- En cada una de las localidades se ubican en los establecimientos escolares o centros docentes correspondientes, como colegios, institutos, liceos, escuelas regionales de primer grado o establecimientos regionales de enseñanza adaptada.

Los inspectores de Academia-inspectores pedagógicos regionales (IA-IPR) son altos ejecutivos de la educación nacional que ejercen sus funciones en este ámbito periférico o descentralizado y en el marco del programa de trabajo académico. Pueden desarrollar su trabajo bien de forma individual o en grupo.

A fin de comprender mejor la organización, estructura y funciones del cuerpo de inspectores de academia-inspectores pedagógicos regionales (IA-IPR), puede resultar interesante hacer una breve referencia a las funciones del Rector de la Academia, ya que él es el máximo responsable del servicio público de la educación nacional en cada academia y en todo el espectro que abarca desde la educación maternal, hasta en la universitaria.

Así pues, las misiones y competencias fundamentalmente del rector son las siguientes:

- vigilar y supervisar la aplicación de todas las disposiciones legislativas y reglamentarias relativas a la educación nacional.
- Definir la estrategia académica necesaria para hacer posible la aplicación de la política educativa nacional.
- Garantizar la gestión del personal y de los establecimientos.
- Fomentar las relaciones con otros servicios del Estado que intervengan en las academias, particularmente con las colectividades territoriales, así como con los sectores tanto políticos como económicos y socioprofesionales.
- Intervenir en el programa regional de formación conducido por el Consejo Regional.
- Dar cuenta al ministro del funcionamiento de los servicios públicos de la educación nacional en la academia que dirige.

Y afirmábamos que podía ser relevante conocer las funciones del Rector en cuanto que, para el ejercicio de las mismas, es asistido por el personal adscrito al rectorado, y entre dicho personal figuran los inspectores de academia-inspectores pedagógicos regionales (IA-IPR), a los cuales se añade como colaboradores destacados del Rector, sus adjuntos, con los que forman el denominado Comité de Dirección de la Academia, los servicios del rectorado, el director de gabinete y los consejeros técnicos.

Por último, para conocer con más detalle la estructura y organización de la IA-IPR debemos tomar en consideración el Decreto 90/675 de 18 de julio de 1990 que regulan los estatutos particulares de los inspectores de Academia-inspectores Pedagógicos Regionales (IA-IPR) y de los inspectores de la Educación Nacional, de conformidad con su redacción vigente.

De acuerdo con dicha norma los inspectores de Academia-inspectores Pedagógico Regionales (IA-IPR) y los inspectores de la Educación Nacional (IEN) forman dos cuerpos funcionariales clasificados en la categoría previstos en el artículo 29 de la ley de 11 de enero de 1984 (Art. 1 del Decreto 90/675).

A su vez, el cuerpo de inspectores de Academia-inspectores Pedagógico Regionales (IA-IPR) comprende dos categorías: la clase normal, con siete grados diferentes en el escalafón, y la categoría fuera de clase, con dos grados distintos en el escalafón.

. Funciones.

Las funciones de los inspectores de Academia-inspectores Pedagógicos Regionales (IA-IPR) se regulan también en el *Code de l'Éducation* y concretamente en su parte reglamentaria (arts. R241-18 a R242-21).

Sus misiones, tareas y cometidos, están mucho más próximos a los centros y al personal docente que trabaja en los mismos. Pueden clasificarse en los siguientes ámbitos competenciales o materiales: vigilancia, control e Inspección; evaluación; asesoramiento, reclutamiento y formación.

- Vigilancia, control e inspección: los inspectores de Academia- inspectores Pedagógicos Regionales (IA-IPR) supervisan la puesta en práctica de la política educativa en las clases y establecimientos escolares; inspeccionan al profesorado, al personal de educación y orientación de los centros docentes de segundo grado, al personal de dirección de los establecimientos de enseñanza o formación, al personal de dirección de los centros de información y orientación, catedráticos de Instituto y profesores de las clases posteriores al baccalauréat¹²⁹, y garantizan el respeto a los objetivos y programas nacionales de formación en el marco de los diferentes ciclos de enseñanza. Caracteriza también las tareas de peritaje y valoración en los asuntos de su competencia, así como en lo relacionado con la orientación de los alumnos, exámenes, gestión del personal de educación y en la elección de los equipamientos pedagógicos, principalmente participando en los trabajos de grupos de expertos dirigidos por la inspección general o la administración central del Ministerio de la Educación Nacional (arts. R241-19, letra b y c y R241-21)

- Evaluación: los inspectores de la Academia (IA-IPR) evalúan el trabajo del profesorado, del personal de educación y orientación de los centros docentes de segundo grado y contribuyen también a la evaluación de la enseñanza de las diferentes disciplinas académicas, de las unidades de enseñanza, de los procedimientos y los resultados de las políticas educativas (art. R241-19. letra a).

- Asesoramiento: los inspectores desarrollan también una importante labor de asesoramiento del personal docente y de la educación y la orientación en los establecimientos docentes de segundo grado. Dentro de sus funciones se encuentra igualmente la tarea de asesorar a los directores de los centros docentes, a petición del rector.

- Reclutamiento y formación: los inspectores participan en el reclutamiento y en las acciones de formación inicial y continua del personal docente, así como en las labores de animación pedagógica. Estas tareas se realizan en colaboración con la universidad (art. R241-19, letras c y d).

¹²⁹ En la República Francesa, el baccalauréat, bachillerato, o denominado también BAC, es un diploma nacional que sanciona el final de los estudios secundarios generales, tecnológicos o profesionales. Corresponde al nivel internacional CITE/ISCED 3 y al nivel 4 de la nomenclatura de niveles de formación en Francia.

- Igualmente les puede ser encomendadas por el Rector de Academia, y dentro siempre del ámbito competencial departamental o de Academia, misiones específicas y concretas con una duración determinada (art. R241-20).

Todas estas tareas se desempeñan en el marco del programa de trabajo académico, asumiendo sus responsabilidades individualmente o en grupo según las diferentes disciplinas o especialidades. Los inspectores ejercen dichas funciones bajo la autoridad del Rector de Academia y en colaboración con las Inspecciones Generales de la Educación Nacional.

- Inspection de l'Éducation Nationale (IEN).

. Organización y estructura.

Tal y como señala Galicia Mangas (2016) el IEN es el Cuerpo de Inspectores de la Educación Nacional que forma parte de los servicios descentralizados o periféricos del Ministerio de la Educación Nacional.

Los inspectores de la educación nacional son altos ejecutivos de la educación nacional que ejercen sus funciones en el ámbito periférico descentralizado y en el marco de un programa de trabajo académico.

De acuerdo con el citado Decreto 90/675 de 18 de julio de 1990 que regula los estatutos particulares de los inspectores de Academia-inspectores Pedagógico Regionales (IA-IPR) y de los inspectores de la Educación Nacional (IEN), los inspectores de la Educación Nacional forman un cuerpo funcional clasificado en la categoría A, previsto en el artículo 29 de la Ley de 11 de enero de 1984 citada.

El cuerpo de inspectores de Educación Nacional y comprende dos categorías: la clase normal, con diez grados diferentes en el escalafón, y la categoría denominada también, fuera de clase, con ocho grados distintos.

. Funciones.

Tal y como se ha señalado al hablar de los inspectores de Academia-inspectores Pedagógicos Regionales (IA-IPR), las funciones de los inspectores de la Educación Nacional (IEN) se regulan en la parte reglamentaria del reiterado *Code de l'Éducation* y en concreto en los artículos R241-18 a R241-21, y son coincidentes con las de los IA-IPR, por lo que no consideramos reiterar su contenido.

Sin embargo, es preciso hacer algunas concreciones con respecto a los inspectores de la Educación Nacional (IEN). De esta forma:

- Los IEN ejercen sus funciones en el marco de un programa de trabajo académico.
- Los IEN de primer grado tienen responsabilidad sobre una circunscripción bajo la autoridad del director académico de los servicios de la educación nacional; y pueden ejercer también su función junto al Rector de Academia.
- Los IEN encargados de la información y de la orientación ejercen principalmente su función bajo la autoridad del director académico del servicio de la educación nacional.
- Los IEN de la enseñanza general y de la enseñanza técnica, ejerce sus funciones en el marco y en el ámbito competencial de una academia y bajo la autoridad del rector.

- Inspecteur de la jeunesse et des sports (IJS)

A fin de completar este apartado nos permitimos añadir a los Inspectores de Juventud y Deporte (*Inspecteur de la jeunesse et des sports* –IJS–), aunque no afectan directamente al sistema educativo.

Sus funciones se encuentran delimitadas anualmente por el programa regional de inspección, control y evaluación que establecen las direcciones regionales del Ministerio de Juventud y Deportes.

Los Inspectores de Juventud y Deporte (IJS) trabajan en numerosas acciones de prevención, capacitación e información: velan por el cumplimiento de las distintas entidades y organizaciones vinculadas con su ámbito de actuación: establecimientos deportivos, federaciones, centros de vacaciones, etc.; tanto en los aspectos administrativos, técnicos y educativos.

En caso de inspección, se actúa de forma conjunta por varios inspectores: no sólo el IJS, y también un inspector de salud y asuntos sociales e incluso un inspector de los servicios veterinarios de inspección e higiene. Este aspecto dota de globalidad y neutralidad a la actuación.

El cuerpo de Inspectores de Juventud y Deporte (IJS) se organiza en 17 grados: desde IJS de segunda clase hasta Inspector Jefe. Las funciones y misiones evolucionan según el nivel alcanzado¹³⁰.

. Funciones:

El inspector de juventud y deporte (IJS) participa en la implementación y evaluación de las políticas públicas adoptadas por los ministros responsables de salud y juventud y deporte. Se encarga de la inspección y el control administrativo, técnico y pedagógico de las organizaciones que contribuyen a su ámbito. También se encarga de la asignación y distribución de las subvenciones.

El inspector de juventud y el deporte es también responsable de controlar y evaluar los procesos y resultados de las estudios y pruebas conducentes a la expedición de diplomas de estado en el campo de la juventud y el deporte. Su función se encuentra, por tanto, a medio camino entre el campo, la animación y la administración.

- Recapitulación.

Siguiendo a Mollo (1999), a Terigi (2010) y a Galicia Mangas (2016) y a modo de recapitulación, para concluir este apartado, pero considerando la nueva organización de los sistemas de inspección en la República Francesa establecidos desde octubre de 2019, podemos decir que en Francia, la inspección de educación nació en virtud de lo establecido en la Ley General de instrucción pública de 1 de mayo de 1802 por la que se creó la Inspección General.

Se consolidó a partir de la ley sobre la Instrucción Primaria de 28 de junio de 1833 (*Loi Guizot*) que fue desarrollada por la Ordenanza Real de 26 de febrero de 1835 y por el Decreto del

¹³⁰ Para ampliar información sobre estos inspectores se pueden visitar las url: <https://www.objectif-emploi-orientation.fr/fiches-metiers/i-comme-inspecteur-de-la-jeunesse-et-des-sports/> y <https://www.sports.gouv.fr/>, ambas con acceso el 29 de mayo de 2022.

Consejo Real de Instrucción Pública de 27 de febrero de 1835, que acabaron sentando definitivamente la inspección de instrucción primaria.

Su consolidación se produjo por Decreto del 9 de marzo de 1852, que instituyó la Inspección General de la Instrucción Pública, antecedente evidente de la actual Inspección General de Educación, Deporte e Investigación. A partir de estos antecedentes comunes, los cuerpos de inspección, tal y como los conocemos actualmente, fueron viviendo en procesos paulatinos de especialización (parecidos a los que se pretendieron poner en marcha en España en la Ley 10/2002 de Calidad de la Educación –BOE de 24 de diciembre-¹³¹), así como de fusión y adaptación a la realidad y necesidades del sistema educativo.

En cuanto a lo relativo a la estructura y organización de la inspección podemos afirmar que es un modelo de carácter más centralizado, si bien existen órganos periféricos, sustentado en la existencia de dos claras categorías, como son la denominada *Inspection Générale de l'Éducation, du Sport et de la Recherche*, que integró desde el año 2019 a la *Inspection Générale de l'Éducation Nationale* (IGEN) y la *Inspection Générale de l'Administration de l'Éducation Nationale et de la Recherche* (IGAENR); y las Inspecciones territoriales, que comprenden la *Inspection d'Académie-Inspection Pédagogique Régionale* (IA-IPR) y la *Inspection de l'Éducation Nationale* (IEN).

Con respecto a sus funciones, podemos concluir, señalando lo que desarrollaremos en el apartado específico de síntesis reflexiva, que la Inspección General de Educación, Deporte e Investigación (IGÉSR) asume la inspección técnica realizando la supervisión de la enseñanza en sus aspectos pedagógicos y de contenido, de control, estudio, asesoramiento, información y evaluación del funcionamiento y eficacia del sistema educativo, considerado en su conjunto, si bien es realizada de forma más inmediata por los inspectores pedagógicos regionales (IA-IPR) y por los inspectores de la educación nacional (IEN).

Además, desarrolla la inspección jurídica interna, la supervisión y control sobre la propia organización, centrada básicamente en el ámbito del control administrativo, financiero, contable y económico, y en el control e inspección del personal de los servicios centrales y periféricos. Tiene con función conocer todos los asuntos relacionados con los aspectos administrativos del sistema educativo de la enseñanza superior y la investigación, así como para supervisar la puesta en práctica de las políticas educativas y su impacto general.

¹³¹ El art. 106, “Organización de la inspección educativa” de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, establecía:

1. *El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las especialidades básicas de inspección educativa, teniendo en cuenta, en todo caso, los diferentes niveles educativos y especialidades docentes.*
2. *Las Administraciones educativas, de acuerdo con sus competencias, podrán desarrollar las especialidades a que se refiere el apartado anterior y regularán la estructura y el funcionamiento de los órganos que establezcan para el desempeño de la inspección educativa en sus respectivos territorios.*

Finalmente estos principios nunca se desarrollaron pues, como ya se ha apuntado, el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, que implantaba el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación fue modificado por el Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo, posponiendo su aplicación hasta el curso 2006/2007 y dando el espacio de tiempo suficiente para que fuera promulgada la Ley Orgánica 2/2006, de 2 de mayo, de Educación que deroga la citada Ley Orgánica 10/2002 sin que entrara en vigor.

Este doble prisma muestra algunas dificultades pues no siempre es fácil distinguir los límites de la inspección técnica y jurídica, ya que ambas tareas tienen como objetivo principal supervisar y controlar el buen funcionamiento de la actividad educativa y para conocer la implicación teórica, se deberá conocer el alcance práctico.

3.1.2. Las funciones asignadas en la legislación, a la Inspección de Educación de la República Francesa

En este momento exponemos la normativa de la República Francesa relacionada con las funciones, *misiones*, asignadas en la inspección de educación en nuestro sistema educativo. Véanse las tablas de la 3.1.1. a la 3.1.3.

Siguiendo la dinámica desarrollada en el capítulo anterior, las referencias a la inspección de educación en la normativa de la República Francesa, se expondrá literalmente, pero puntualizando el contexto de la norma y su objeto, de la forma más detallada posible; no obstante, en las tablas correspondientes de yuxtaposición se verá la relación traducida.

- Code de l'éducation¹³²

La técnica legislativa francesa consiste en la permanente consolidación y actualización de un marco legislativo sobre objetos determinados. Es una técnica muy interesante, pues evita que el interesado o usuario deba buscar las últimas actualizaciones o las fuentes consolidadas, como en el caso de la normativa española. El resultado es tremendamente eficaz y certero, pues al acceder a la web oficial legislativa, se encuentra el denominado código concreto, y en él se encuentran consolidados y actualizados todos los artículos, con referencias a la normativa concreta que ha provocado esa temática, artículo o actualización.

Es el caso de la normativa que regula al sistema educativo en la República Francesa, consolidado en lo que se denomina como *Code de l'éducation*, cuya primera publicación se realizó en el año 2000, y al que se puede acceder en la web de la legislación francesa, denominada *Légifrance*, mediante la entrada en la url: <https://www.legifrance.gouv.fr/>.

En este compendio normativo se encuentra toda la normativa relativa a la organización y a las funciones de la inspección de educación en sus distintos perfiles.

El *Code de l'éducation* se compone de dos grandes partes: la *parte legislativa* y la *parte reglamentaria*. Veamos con cierta organización y con el texto original¹³³ los elementos fundamentales de su contenido. La parte legislativa, se compone de cuatro epígrafes: *disposiciones generales*; la *educación escolar*; la *educación superior*; y la *parte relativa al personal*. Cada una de estos epígrafes, se organiza en libros; cada libro se organiza en títulos y estos en capítulos, que finalmente se desglosan en artículos.

De esta forma, dentro de la parte *legislativa*, se encuentra el *epígrafe primero*, dedicado a las disposiciones generales y comunes; y dentro de este, el *libro II*, que corresponde a la administración de la educación, dedica su *título IV* a la inspección y a la evaluación de la

¹³² Fuente <https://codes.droit.org/PDF/Code%20de%20l%C3%A9ducation.pdf> con acceso el 18 de abril de 2022.

¹³³ Hay que tener en consideración, que el texto reflejado reproduce la versión consolidada a fecha 22 de abril; posteriormente y a fecha de revisión del texto, se han producido numerosos cambios que pueden ser consultados en la url: <https://www.legifrance.gouv.fr/>.

educación, que centra el *capítulo primero* a las funciones de la inspección y a la evaluación. Este capítulo se compone de once artículos (del L241-1 al L241-11), pero consideramos que el contenido concreto, de más interés, llega hasta el art. L241-9.

Partie législative - Première partie: Dispositions générales et communes

Livre II : L'administration de l'éducation

Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation

Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation.

L. 241-1 (Décret n°2019-1008 du 30 septembre 2019 - art. 1).

L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche procède, en liaison avec les services administratifs compétents, à des évaluations départementales, académiques, régionales et nationales qui sont transmises aux présidents et aux rapporteurs des commissions chargées des affaires culturelles du Parlement.

Les évaluations prennent en compte les expériences pédagogiques afin de faire connaître les pratiques innovantes. L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche établit un rapport annuel qui est rendu public.

L. 241-2 (LOI n°2021-875 du 1er juillet 2021 - art. 9)

I.-Les services, établissements, institutions ou organismes qui participent ou qui concourent à l'application des législations relatives à l'éducation, à l'enseignement supérieur, à la recherche et à la technologie sont soumis, quelle que soit leur nature juridique, aux vérifications de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, lorsqu'ils bénéficient ou ont bénéficié, sous quelque forme que ce soit, de concours de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, ainsi que de concours financiers provenant de la Communauté européenne, ou lorsqu'ils sont financés par des cotisations obligatoires.

Quand les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés à l'alinéa précédent attribuent des concours, sous quelque forme que ce soit, à d'autres organismes, ces derniers peuvent également faire l'objet des vérifications de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.

Les vérifications de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche portent sur le respect de ces législations et sur l'utilisation de ces concours ou cotisations, dont la destination doit demeurer conforme au but pour lequel ils ont été consentis. Les vérifications de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche portent également sur la gestion des ressources humaines des établissements.

II.-Dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la technologie, l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche exerce également, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité du public.

Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d'autres organismes qui reçoivent des organismes mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, sous quelque forme que ce soit, des ressources collectées auprès du public.

Les rapports établis par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, en application du présent paragraphe, sont adressés aux organismes concernés qui disposent d'un délai de deux mois pour faire valoir leurs observations. Les rapports définitifs, auxquels sont jointes, le cas échéant, les réponses des organismes concernés, sont ensuite adressés aux présidents de ces organismes qui sont tenus de les communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la publicité de ces rapports.

III.-Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ont libre accès à toutes les administrations de l'Etat et des collectivités publiques, ainsi qu'à tous les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés au I et au II.

Les administrations de l'Etat, les collectivités publiques, les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et leur communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Pour les besoins du contrôle de l'emploi des concours mentionnés au I et des ressources collectées auprès du public mentionnées au II, les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.

L. 241-3 (Décret n°2019-1008 du 30 septembre 2019 - art. 1)

Le fait de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, au contrôle de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche défini à l'article L. 241-2 est passible d'une amende de 15000 euros et entraîne la répétition des concours financiers dont l'utilisation n'aura pas été justifiée. Le ministre chargé de l'éducation peut saisir le procureur de la République près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.

L. 241-4 (Décret n°2019-1008 du 30 septembre 2019 - art. 1)

I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;

2° Par les recteurs d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation de ces derniers ;

3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

4° Par les membres du conseil départemental de l'éducation nationale désignés à cet effet. Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés par les personnels enseignants de l'enseignement public qui font partie du conseil départemental ;

5° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale. Toutefois, lorsqu'ils exercent un mandat municipal, les délégués départementaux de l'éducation nationale ne peuvent intervenir dans les écoles situées sur le territoire de la commune dans laquelle ils sont élus, ni dans les écoles au fonctionnement desquelles cette commune participe.

II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l'instruction obligatoire.

L. 241-5 (LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 53 (V))

Le fait, pour tout chef d'établissement d'enseignement du premier et du second degré privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires, dans les conditions établies à l'article L. 241-4, est puni de 15 000 euros d'amende.

L. 241-6 (Ordonnance 2000-549 2000-06-15).

L'inspection des établissements d'enseignement technique publics ou privés est assurée par des inspecteurs nommés par le ministre chargé de l'éducation. Les cadres et l'organisation de l'inspection, les conditions exigées des candidats à ces fonctions sont déterminés par décrets.

L. 241-7 (LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 53 (V))

I.-L'inspection des établissements d'enseignement technique privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations légales imposées à ces établissements. Elle peut porter sur l'enseignement pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois et s'il est conforme aux programmes présentés par le directeur lors de la déclaration d'ouverture de l'établissement.

Toutefois, dans les établissements d'enseignement technique privés reconnus par l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 443-2, l'inspection de l'enseignement s'exerce dans les mêmes conditions que pour les établissements d'enseignement technique publics.

II.-Le fait, pour un directeur d'établissement d'enseignement technique privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection, dans les conditions établies par le I, est puni de 15000 euros d'amende.

L. 241-8 (Ordonnance 2000-549 2000-06-15).

Une inspection de l'orientation professionnelle dont le fonctionnement est entièrement à la charge de l'Etat est organisée dans chaque académie.

L. 241-9 (LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)).

Le contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme est organisé dans les conditions fixées à l'article L. 6211-2 du code du travail.

A este título IV, se añadió en el año 2019, mediante el art. 40 de la Ley 791 de 26 de julio, el capítulo primero bis, dedicado a la junta de evaluación escolar, con cuatro artículos: del L241-12, al L241-15. Consideramos de interés los tres primeros artículos.

Chapitre 1er bis : Le conseil d'évaluation de l'école

L. 241-12 (LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 40).

Le conseil d'évaluation de l'école, placé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, est chargé d'évaluer en toute indépendance l'organisation et les résultats de l'enseignement scolaire. A ce titre :

1° Il veille à la cohérence des évaluations conduites par le ministre chargé de l'éducation nationale portant sur les acquis des élèves, les dispositifs éducatifs, dont ceux en faveur de l'école inclusive, et les établissements d'enseignement scolaire. A ce titre, il établit une synthèse des différents travaux d'évaluation sur le système éducatif et a pour mission d'enrichir le débat public sur l'éducation en faisant réaliser des évaluations ;

2° Il définit le cadre méthodologique et les outils des autoévaluations et des évaluations des établissements conduites par le ministre chargé de l'éducation nationale et analyse les résultats de ces évaluations ; pour ce faire, il s'appuie sur toutes les expertises scientifiques, françaises et internationales, qu'il estime nécessaires. Il s'assure de la fréquence régulière de ces évaluations d'établissements et définit les modalités de leur publicité.

L'accès aux données utilisées pour ces évaluations à des fins de statistiques et de recherche est garanti, sous réserve du respect de la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et du livre III du code des relations entre le public et l'administration ;

3° Il donne un avis sur les méthodologies, sur les outils et sur les résultats des évaluations du système éducatif organisées au niveau national par les services du ministre chargé de l'éducation nationale ou dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ;

4° Il propose des méthodologies de mesure des inégalités territoriales scolaires et formule toute recommandation utile pour les réduire.

Il formule toute recommandation utile au regard des résultats des évaluations mentionnées au présent article.

Il établit un programme de travail annuel, qu'il transmet au ministre chargé de l'éducation nationale. Ce programme est rendu public. En accord avec le ministre chargé de l'agriculture, ses travaux peuvent prendre en compte l'enseignement agricole.

L. 241-13 (LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 40).

Le conseil d'évaluation de l'école comprend, outre son président nommé par le Président de la République, treize membres de nationalité française ou étrangère, à parité de femmes et d'hommes pour chacun des collèges mentionnés aux 1° et 2° :

1° Six personnalités choisies pour leur compétence en matière d'évaluation ou dans le domaine éducatif :

a) Deux personnalités désignées par le président de l'Assemblée nationale en dehors des membres de cette assemblée, après avis de la commission permanente compétente en matière d'éducation ;

b) Deux personnalités désignées par le président du Sénat en dehors des membres de cette assemblée, après avis de la commission permanente compétente en matière d'éducation ;

c) Deux personnalités désignées par le chancelier de l'Institut de France ;

2° Deux députés et deux sénateurs désignés, respectivement, par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d'éducation;

3° Trois représentants du ministre chargé de l'éducation nationale.

La durée du mandat du président et des membres mentionnés au 1° est de six ans. Les modalités de renouvellement du mandat des membres mentionnés au même 1° sont fixées par décret. Les membres mentionnés au 2° sont désignés pour la durée de leur mandat parlementaire.

L. 241-14 (LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 40).

Les rapports, les avis et les recommandations du conseil d'évaluation de l'école sont rendus publics.

El capítulo segundo, de este título IV está dedicado a la evaluación de los centros públicos, con un solo artículo: el L-2020-1 –integrado en el año 2020-.

Chapitre II : L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

L. 242-1 (LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 16 (V)).

L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est assurée en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la recherche.

Por su parte, el epígrafe reglamentario, dedica *el libro II* a la administración de la educación. Este libro se compone de siete títulos, de los cuales, el *título IV* se dedica a la inspección y a la evaluación de la educación. Este *título IV*, dedica su *capítulo primero* al ejercicio de las misiones de la inspección y de evaluación. El capítulo se compone de *cinco secciones*, la primera de las cuales se centra en la evaluación de la misión de la educación de adultos (con los artículos del D241-1 y D241-3), la segunda a la inspección general de la educación, el deporte y la investigación (con los artículos comprendidos entre el R241-3 y el R241-17). La *tercera sección* se dedica a las misiones de los inspectores académicos-inspectores pedagógicos regionales, con cuatro artículos (del R241-18 al R241-21); la cuarta sección se encuentra centrada en la misión de control pedagógico de la formación profesional, con dos artículos; y por último, la sección quinta se centra en los delegados de los departamentos de la educación nacional, con los artículos comprendidos entre el D241-24 y el D241-35.

Trasladamos a continuación todos los artículos de este capítulo primero.

Partie réglementaire.

Livre II : L'administration de l'éducation.

Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation.

Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation

Section 1 : Section 1 : L'évaluation de la mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation

D. 241-1 (Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 2).

L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche et l'inspection de l'enseignement agricole procèdent à des évaluations du fonctionnement et des résultats de l'activité de formation continue des adultes p.470 Code de l'éducation Partie réglementaire - Livre II : L'administration de l'éducation. - Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation. relevant de leur champ de compétences respectif. A cet effet, elles établissent les relations nécessaires avec les services administratifs compétents et les partenaires extérieurs.

Le rapport annuel de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche comporte l'évaluation de l'activité de formation continue des adultes.

Ces évaluations s'effectuent sans préjudice des contrôles exercés dans les conditions prévues aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 du code du travail.

D. 241-2 (Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 2).

Les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les inspecteurs de l'enseignement agricole, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale procèdent, selon les modalités appropriées, à l'évaluation des personnels relevant de leur champ de compétences respectif en vue de promouvoir la qualité de la formation continue des adultes et la cohérence globale entre formation initiale et formation continue.

Section 2 : L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche

R. 241-3 (Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 2).

L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche est compétente dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse, du sport, de l'éducation populaire, de la vie associative, de la lecture, de la documentation et des bibliothèques publiques.

R. 241-4 (Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 2).

L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche est placée sous l'autorité directe des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports. Elle assure auprès de ces ministres une mission permanente de contrôle, d'étude, d'information, de conseil et d'évaluation. L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche peut recevoir des lettres de mission du Premier ministre.

L'inspection générale est mise à la disposition du ministre chargé de la culture pour l'exercice des missions fixées par l'article L. 310-2 du code du patrimoine, ainsi que pour

la réalisation de missions thématiques portant sur la lecture, la documentation et les bibliothèques publiques.

Les ministres mentionnés au premier alinéa peuvent autoriser l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche à intervenir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, pour toutes missions entrant dans le champ de sa compétence. L'inspection générale formule tous avis et propositions utiles à l'intention des ministres pour la mise en œuvre des politiques publiques relevant de leurs compétences.

R. 241-5 (Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 2).

L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche est chargée du contrôle et de l'inspection des personnels, des services centraux et déconcentrés, des établissements publics et de tous organismes relevant ou bénéficiant d'un concours direct ou indirect des ministères de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports, en particulier dans les domaines administratif, financier, comptable et économique.

R. 241-6 (Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 2).

Les missions confiées à l'inspection générale par l'article L. 241-1 au titre des enseignements dispensés dans les établissements scolaires publics et, sous réserve des dispositions des articles L. 442-5 et L. 442-12, dans les établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat, portent sur les types de formation, les contenus d'enseignement, les programmes, les méthodes pédagogiques, les procédures et les moyens mis en œuvre.

R. 241-7 (Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 2).

L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche participe au recrutement, à la formation et à l'évaluation des personnels.

Elle contribue au contrôle des personnels d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation et d'orientation. Elle coordonne, en liaison avec les autorités académiques, l'action des corps d'inspection à compétence pédagogique.

Les missions de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche peuvent s'exercer sur tous les organismes et personnels soumis au contrôle pédagogique du ministre chargé de l'éducation, à l'exception de ceux qui sont régis par les dispositions du livre VII et des titres V et VI du livre IX du présent code. Elles s'étendent aux établissements de formation professionnelle des personnels.

R. 241-8 (Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 2).

Le contrôle par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, en application des dispositions du II de l'article L. 241-2, du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par un organisme faisant appel public à la générosité est décidé, après avis du chef du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, par le ou les ministres compétents.

R. 241-9 (Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 2).

Le chef du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche notifie au représentant légal de l'organisme concerné ou, si ce dernier a son siège à l'étranger, au représentant mentionné au troisième alinéa du I de l'article 1er du décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des organismes faisant appel à la

générosité publique les noms des membres de la mission qu'il a chargés du contrôle et la période sur laquelle portera celui-ci.

R. 241-10 (Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 2).

Orsque les constatations de la mission d'inspection rendent nécessaires auprès d'autres organismes les vérifications prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 241-2, ces vérifications sont décidées par le chef du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Cette décision est notifiée aux représentants des organismes concernés dans les conditions prévues à l'article R. 241-9.

R. 241-11 (Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004).

Afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par les organismes mentionnés au premier et au deuxième alinéa du II de l'article L. 241-2 aux objectifs poursuivis par l'appel public à la générosité, les inspecteurs procèdent à toutes investigations utiles sur pièces et sur place, dans les conditions prévues au III du même article.

Les inspecteurs peuvent se rendre dans tous les locaux dépendant des organismes faisant l'objet d'un contrôle ou de vérifications. Les responsables de ces organismes prennent toutes dispositions pour que les inspecteurs aient connaissance des écritures et des documents utiles au contrôle des pièces justifiant les opérations de recettes et de dépenses. Les inspecteurs se font délivrer copie des pièces qu'ils estiment nécessaires à leur contrôle.

Les inspecteurs peuvent procéder à toute vérification portant sur les fournitures, les matériels, les travaux, les constructions et les personnels inscrits dans les comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public.

R. 241-12 (Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004).

Lorsque l'organisme a son siège à l'étranger, les obligations pesant sur les dirigeants ou responsables de l'organisme en vertu des II et III de l'article L. 241-2 s'appliquent au représentant mentionné au troisième alinéa du I de l'article 1er du décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique.

R. 241-13 (Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004).

Dans l'hypothèse où les organismes faisant l'objet du contrôle ou de vérifications ne défèrent pas aux demandes des inspecteurs, mention en est faite dans le rapport, indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 241-3.

R. 241-14 (Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 2).

Dans le cadre de leur mission de contrôle, les inspecteurs sont tenus de respecter l'obligation de secret professionnel. L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.

R. 241-15 (Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004).

Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article L. 241-2, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de cet organisme communique les rapports définitifs dont il a été destinataire aux organes en tenant lieu lors de la première réunion qui suit leur réception.

R. 241-16 (Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004).

Les rapports définitifs, auxquels sont jointes, le cas échéant, les réponses des organismes ayant fait l'objet du contrôle, peuvent, sur décision du ou des ministres compétents, faire l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française et être insérés dans le rapport prévu à l'article L. 241-1.

Section 3 : Missions des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale.

R. 241-18 (Décret 2006-583 2006-05-23 art. 4 12° JORF 24 mai 2006).

Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale, régis par les dispositions du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale, exercent les missions énumérées aux articles ci-après.

R. 241-19 (Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 2).

Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale veillent à la mise en oeuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. A cet effet, dans le cadre du programme de travail académique arrêté par le recteur de l'académie, ils ont vocation à exercer sous l'autorité de ce dernier les missions ci-après :

a) Ils évaluent dans l'exercice de leur compétence pédagogique le travail individuel et le travail en équipe des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et concourent à l'évaluation de l'enseignement des disciplines, des unités d'enseignement, des procédures et des résultats de la politique éducative. Ils procèdent, notamment, à l'observation directe des actes pédagogiques ;

b) Ils inspectent, selon les spécialités qui sont les leurs, les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et s'assurent du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, dans le cadre des cycles d'enseignement ; ils sont chargés des missions de contrôle pédagogique prévues par les articles L. 6211-2 et R. 6251-1 à R. 6251-4 du code du travail ;

c) Ils participent à l'animation pédagogique dans les formations initiales, continues et par alternance, prêtent leur concours à l'élaboration des projets d'établissement et collaborent avec l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche pour l'évaluation des expériences pédagogiques et leur généralisation ;

d) Ils ont vocation à participer au recrutement et à la formation des personnels de l'éducation nationale et à l'organisation des examens ;

e) Ils assurent des missions d'expertise dans ces différents domaines ainsi que pour l'orientation des élèves, les examens, la gestion des personnels éducatifs et dans le choix des équipements pédagogiques.

R. 241-20 (Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1).

Le recteur de l'académie peut également confier à des inspecteurs de l'éducation nationale et à des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, pour une durée déterminée, dans le cadre départemental ou académique, des missions particulières. Il en est de même pour le recteur de région académique dans le cadre régional académique.

R. 241-21 (Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004).

Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux inspectent les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation, les directeurs de centre d'information et d'orientation, les professeurs agrégés, ainsi que les enseignants en fonctions dans les classes postbaccalauréat.

Section 4 : La mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage.

R. 241-22 (Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 2).

La mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme, placée sous l'autorité du recteur d'académie, exerce ses attributions conformément aux dispositions des articles R. 6251-1 à R. 6251-4 du code du travail.

Section 5 : Les délégués départementaux de l'éducation nationale.

D. 241-24 (Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004).

Les délégués départementaux de l'éducation nationale sont désignés par circonscription d'inspection départementale pour visiter les écoles publiques et privées qui y sont installées.

Nul ne peut être désigné comme délégué départemental de l'éducation nationale s'il n'est âgé de vingt-cinq ans au moins et s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes moeurs, ou s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés aux articles 131-26 et 131-29 du code pénal.

D. 241-25 (Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004).

Ne peuvent être désignés comme délégués départementaux de l'éducation nationale les instituteurs et les professeurs des écoles, en position d'activité, qui exercent leurs fonctions dans les écoles maternelles et élémentaires publiques et privées.

D. 241-26 (Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)).

Les délégués départementaux de l'éducation nationale sont désignés pour une durée de quatre ans par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.

D. 241-27 (Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004).

Le mandat des délégués départementaux de l'éducation nationale est renouvelable. Toutefois, il peut à tout moment être mis un terme au mandat d'un délégué pour des raisons tirées de l'intérêt du service après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

Il peut être procédé, selon les besoins, à des désignations complémentaires pour la période du mandat restant à courir.

D. 241-28 (Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004).

Les délégués de chaque circonscription forment une délégation.

Les délégués départementaux de l'éducation nationale peuvent être désignés pour former une délégation d'une étendue inférieure à la circonscription ou comprenant plusieurs circonscriptions.

D. 241-29 (Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004).

Chaque délégation élit un président et un vice-président. Elle détermine les écoles que chaque délégué doit visiter. Les parents d'élèves, délégués départementaux, ne peuvent être chargés de l'école où sont scolarisés leurs enfants. Les maires et conseillers municipaux chargés des questions scolaires ne peuvent être chargés des écoles de leur commune, ni des communes limitrophes.

La délégation se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président, et convient des avis à transmettre aux autorités compétentes.

D. 241-30 (Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004).

Les présidents des délégations du département ou leurs représentants élisent un président et un vice-président départementaux.

Ceux-ci représentent l'ensemble des délégations auprès des autorités et instances départementales.

D. 241-31 (Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004).

Les délégués départementaux de l'éducation nationale communiquent aux inspecteurs de l'éducation nationale et à la municipalité tous les renseignements utiles qu'ils ont pu obtenir lors de leurs visites dans les écoles.

Chaque délégué correspond avec les autorités locales auxquelles il doit adresser ses rapports pour tout ce qui regarde l'état et les besoins de l'enseignement préélémentaire et élémentaire dans sa délégation.

D. 241-32 (Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004).

Les délégués départementaux de l'éducation nationale peuvent être notamment consultés:

1° Sur la convenance des projets de construction, d'aménagement et d'équipement des locaux que les communes doivent fournir pour la tenue de leurs écoles publiques ;

2° Sur toutes les questions relatives à l'environnement scolaire, en particulier dans le domaine des actions périscolaires locales.

D. 241-33 (Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004).

La commune peut en outre consulter les délégués sur les problèmes pour lesquels elle estime utile d'avoir leur avis, en particulier sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures scolaires.

D. 241-34 (Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004).

Dans les écoles publiques, la visite des délégués départementaux de l'éducation nationale porte notamment sur l'état des locaux, la sécurité, le chauffage et l'éclairage, le mobilier scolaire et le matériel d'enseignement, sur l'hygiène, la fréquentation scolaire.

La fonction des délégués s'étend à tout ce qui touche à la vie scolaire, notamment aux centres de loisirs, aux transports, aux restaurants, aux bibliothèques et aux caisses des écoles.

Le délégué exerce une mission d'incitation et de coordination.

Il veille à faciliter les relations entre l'école et la municipalité.

Le délégué départemental de l'éducation nationale ne formule pas d'appréciation sur les méthodes ni sur l'organisation pédagogique de l'école. Les exercices de la classe peuvent continuer en sa présence. Les travaux des élèves peuvent lui être présentés.

D. 241-35 (Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004).

Dans les écoles privées, la visite du délégué départemental de l'éducation nationale porte sur les conditions de sécurité, d'hygiène et de salubrité de l'établissement. Il s'informe de la fréquentation scolaire. Chapitre 1er bis : Le conseil d'évaluation de l'école

El citado título IV del libro II, perteneciente al epígrafe reglamentario, tiene un segundo capítulo, denominado capítulo I bis, dedicado a la junta de evaluación escolar, que se compone de tres artículos: del D241-36, al D241-38. Veamos su contenido literal.

Chapitre 1er bis : Le conseil d'évaluation de l'école.

D. 241-36 (Décret n°2019-1058 du 17 octobre 2019 - art. 1).

Le président et les membres du conseil d'évaluation de l'école sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 241-13. Le ministre publie la liste de ces membres.

Le mandat des six personnalités mentionnées au 1° de cet article est renouvelable pour une durée maximale de trois ans.

Les trois représentants du ministre chargé de l'éducation nationale composant le collège mentionné au 3° du même article sont le directeur général de l'enseignement scolaire, le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche et le directeur de l'évaluation, de la performance et de la prospective. Ils peuvent se faire représenter par leur adjoint.

Lorsqu'un membre mentionné au 1° ou au 2° décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions et du même sexe.

D. 241-37 (Décret n°2019-1058 du 17 octobre 2019 - art. 1).

Le conseil d'évaluation de l'école se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité de ses membres.

Il établit son règlement intérieur.

Ses séances ne sont pas publiques.

Il délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents à la séance, parmi lesquels une moitié au moins des personnalités qualifiées mentionnées au 1° de l'article L. 241-13. Lorsque le quorum n'est pas atteint, il délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et mentionnant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Le conseil élabore un rapport annuel. Les rapports, avis et recommandations du conseil sont approuvés à la majorité des membres présents. Ils sont rendus publics, dans un délai d'un mois.

Le conseil d'évaluation de l'école peut entendre toute personne sur les questions qui relèvent de sa compétence.

Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

D. 241-38 (Décret n°2019-1058 du 17 octobre 2019 - art. 1).

Le conseil d'évaluation de l'école élabore son programme de travail annuel qui est approuvé par une délibération de ses membres. Ce programme de travail annuel est transmis au ministre chargé de l'éducation nationale avant d'être rendu public, dans un délai d'un mois.

Au titre de la mission relative aux évaluations des établissements mentionnée au 2° de l'article L. 241-12, le conseil d'évaluation de l'école analyse la proposition de programmation des évaluations des établissements pour l'année scolaire à venir et les résultats des évaluations des établissements réalisées au cours de l'année scolaire écoulée que lui transmet, chaque année en fin d'année scolaire, le recteur d'académie.

Sous l'autorité du président, un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale, assure l'organisation des travaux du conseil.

Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du conseil et des personnes qu'il appelle en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

3.2. La Inspección de Educación en la República Italiana

3.2.1. Acercamiento a la historia y estructura de la Inspección de Educación en la República Italiana

Para el acercamiento a la inspección de educación en la República Italiana es necesario referirnos igualmente a los trabajos de Farina (2009), que utiliza como fuente para sus trabajos Galicia Mangas (2016, 2019) y de Esteban Frades (2019) que realizan una amplia descripción de su historia, su funcionamiento y organización, así como de sus funciones y atribuciones.

La doctrina mayoritariamente aceptada admite el nacimiento de la institución de la Inspección de Educación en Italia mediante la conocida como *Legge Casati* en 1859, norma de limitada aplicación a Cerdeña y Piamonte, pero que fue extendiéndose a todo su territorio de forma paulatina¹³⁴. Los siguientes pasos significativos para la institución de la Inspección, siguiendo a Galicia Mangas (2016) podemos centrarlos en la Ley de 4 de junio de 1911, conocida como *Legge Daneo-Credaro*; por la conocida como reforma Gentile, y en especial por el *Regio Decreto Legislativo* de 31 de diciembre de 1922. La Ley de 30 de julio de 1973 permitió delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas relativas al estatuto jurídico del personal de inspección, y en su virtud se elaboró el Decreto de 31 de mayo de 1974.

Más tarde es necesario mencionar el Decreto Ley de 6 de noviembre de 1989, que fue antecedente de la Ley de 27 de diciembre de 1989; y el Decreto Legislativo de 16 de abril de 1994, que ha sufrido numerosas modificaciones hasta la fecha.

- Estructura y organización del sistema educativo italiano.

El sistema educativo italiano se inspira, en cuanto a sus criterios organizativos se refiere, como apunta Galicia Mangas (2016) en los principios de subsidiariedad y autonomía de las instituciones escolares. Ello significa que de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la actual Constitución italiana de 1947¹³⁵, el Estado tiene competencia legislativa exclusiva para

¹³⁴ No podemos olvidar que en ese momento no había culminado el proceso de unificación italiana, que tendría como hito importante la proclamación del Reino de Italia, en 1861 como apunta Méndes (1985).

¹³⁵ El artículo 33 de la Constitución de la República Italiana en su texto original, promulgado el 27 de diciembre de 1947 y en vigor desde el 1 de enero de 1948, (actualizado con las modificaciones introducidas por las leyes de revisión constitucional), establece:

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

dictar las normas generales o básicas en materia de educación, así como también para determinar el nivel esencial de las prestaciones que debe ser garantizadas en todo el territorio nacional y los principios fundamentales que las regiones tienen que respetar en el ejercicio de sus competencias.

Estas normas básicas comprenden, muy en la línea de la posterior Constitución Española de 1978, la libertad de enseñanza, la obligación del Estado de proporcionar una red de establecimientos educativos de todo tipo y nivel, el libre acceso a la educación sin discriminación de ningún tipo, el derecho a la libre creación de centros docentes, así como el derecho de las universidades, academias e instituciones culturales superiores a regirse por sus propios estatutos, dentro del respeto a las leyes, y el derecho de las personas con mérito y capacidad suficientes a realizar estudios superiores.

Por tanto, la potestad legislativa de las regiones en materia de educación es concurrente con la del Estado, si bien esta misma competencia tiene carácter exclusivo para las regiones en materia de instrucción y formación profesional.

Continuando con el escalafón legislativo de la educación en Italia, los centros educativos poseen autonomía didáctica, organizativa, de investigación, experimentación y desarrollo formativo. La autonomía de los centros docentes ha quedado garantizada por lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 59/1997 de 15 de marzo, de delegación al Gobierno para la asignación de funciones y tareas a las Regiones y a los entes locales, para la reforma de la administración pública y para la simplificación administrativa, Ley que a su vez ha sido desarrollada posteriormente, por el reglamento dictado por Decreto del Presidente de la República 275 de 8 de marzo de 1999, por el que se establecen normas relativas a la autonomía de las instituciones educativas, de conformidad con el art. 21 de la Ley 59 de 15 de marzo de 1997, y por el Decreto del Presidente de la República nº 234 de 26 de junio de 2000, por el que se establecen normas en materia de

Información extraída de la web de Senado italiano en la url:

<https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf> con acceso el 25 de abril de 2022.

Traducción proporcionada por la web del Consejo Económico y Social (<http://www.ces.es/>) en la url: <http://www.ces.es/TRESMED/docum/ita-cttn-esp.pdf> con acceso el 25 de abril de 2022.

Son libres el arte y la ciencia y será libre su enseñanza.

La República dictará normas generales sobre la instrucción y establecerá escuelas estatales para todas las ramas y grados.

Tanto las entidades como los individuos tendrán derecho a fundar escuelas e institutos de educación, sin gravamen alguno a cargo del Estado.

Al determinar los derechos y las obligaciones de las escuelas no estatales que soliciten la paridad, la ley deberá garantizar a éstas plena libertad y a sus alumnos un trato académico equivalente al de los alumnos de escuelas estatales.

Se instituye un examen de Estado para la admisión en las diversas ramas y grados de escuelas o para la terminación de las mismas, así como para la habilitación en orden al ejercicio profesional.

Los establecimientos de cultura superior, universidades y academias tendrán derecho a regirse por estatutos autónomos dentro de los límites fijados por las leyes del Estado.

currículo en virtud de la autonomía de las instituciones escolares, en el sentido del artículo 8 del citado Decreto del Presidente de la República 275 de 8 de marzo.¹³⁶

Las competencias en materia educativa corresponden al Ministerio de Educación y al Ministerio de Universidades e Investigación (*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*)¹³⁷ divididos en la actualidad. La estructura del Ministerio de Educación¹³⁸ se encuentra fragmentado en dos departamentos: Departamento para el sistema educativo de instrucción y formación; y el Departamento de planificación y gestión de los recursos humanos, financieros e instrumentales, que a su vez se subdividen en cuatro direcciones generales, el primero y en tres direcciones generales, el segundo. El Ministerio de Universidades e Investigación¹³⁹ tiene una estructura compuesta por cinco direcciones generales y una unidad de misión. Por otra parte, su estructura territorial se completa con órganos descentralizados o periféricos tanto de ámbito regional como provincial. En el ámbito regional se encuentran los llamados *Uffici Scolastici Regionali* (USR) que se constituyen como centros con autonomía en el ámbito de la responsabilidad y gestión administrativa y que tienen como misiones fundamentales llevar a la práctica las instrucciones de los departamentos del Ministerio; desempeñar la función de ayuda, soporte y asesoramiento de los centros docentes; y la articulación de las políticas educativas en el propio territorio. Por su parte y en lo relativo al ámbito provincial se encuentra los denominados *Uffici Scolastici Provinciali* (USP). Los USP dependen administrativamente de los USR y aplican sus disposiciones y las del Ministerio.

El sistema educativo italiano de educación y formación comprende los niveles de preescolar (0-3 y 3-6), primaria, secundaria inferior y superior, postsecundaria y superior¹⁴⁰.

La educación de la primera infancia y el cuidado de los niños menores de 3 años forman parte de los servicios educativos y se organizan en los jardines de infancia. Los centros preescolares ofrecen educación y cuidado de la primera infancia para niños de 3 a 6 años.

Ambos constituyen el «sistema integrado 0-6» de educación que forma parte del sistema de educación y formación y no es obligatorio. Aunque forman parte del mismo sistema, los servicios educativos para el grupo de edad de 0 a 3 años están organizados por las regiones sobre la base de leyes regionales individuales. En cambio, la educación preescolar para el grupo de edad de 3 a 6 años es responsabilidad del Ministerio de Educación.

La educación obligatoria comprende 10 años, de los 6 a los 16 años. La educación obligatoria incluye todo el primer ciclo educativo: la educación primaria de cinco años y la educación secundaria de tres años, y los dos primeros años del segundo ciclo, que es posible cursarlo mediante dos itinerarios distintos en un centro de enseñanza secundaria o en el sistema regional de formación profesional.

¹³⁶ Esta obligada redacción, evidencia el alambicado y retórico desarrollo de la legislación italiana, que volveremos a comprobar más adelante.

¹³⁷ Se puede ampliar información en las páginas web de los distintos ministerios:

- *Ministero dell'Istruzione* en la url: <https://www.miur.gov.it/>
- *Ministerio dell'Università e della Ricerca* en la url: <https://www.mur.gov.it/it>

¹³⁸ Fuente de la url: <https://www.miur.gov.it/web/guest/organigramma> con acceso el 25 de abril de 2022.

¹³⁹ Fuente de la url: https://trasparenza.mur.gov.it/sites/trasparenza/files/2022-03/Organigramma_16_03_2022.pdf con acceso el 25 de abril de 2022.

¹⁴⁰ Fuente web de Eurídice en la url: <https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/italy/italy> con acceso el 25 de abril de 2022.

Al final de la secundaria superior, los estudiantes que superan el examen final del Estado reciben un diploma que da acceso a la educación superior.

Estructura del Sistema Educativo en la República Italiana (Eurydice)¹⁴¹

Italy – 2022/2023

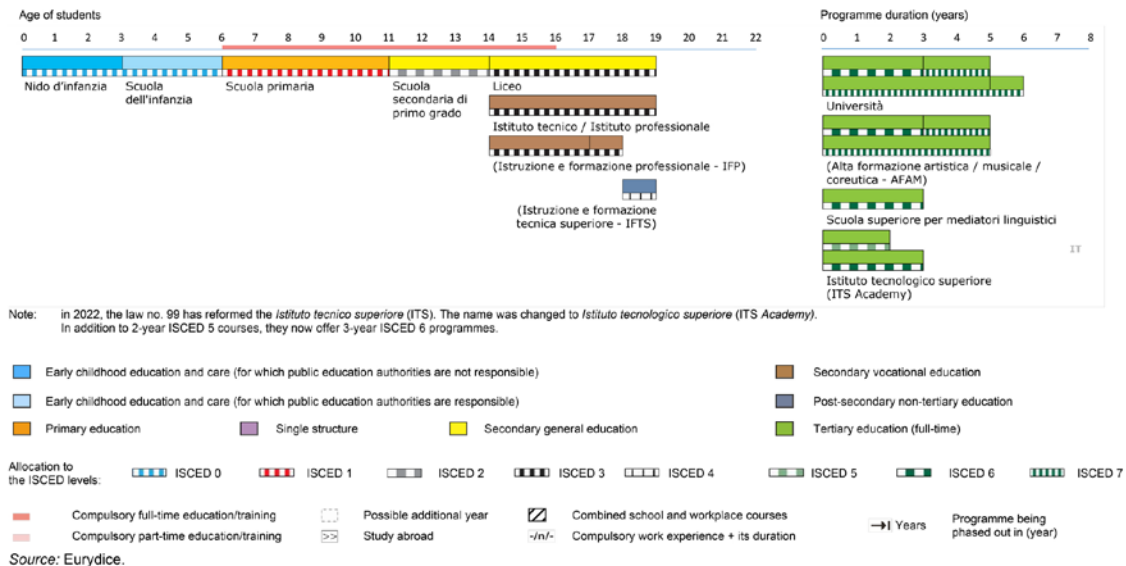


Figura 3.3. Estructura del sistema educativo en la República Italiana.

- Antecedentes históricos, origen y evolución de la inspección de educación italiana.

Aunque como hemos señalado, y siguiendo las orientaciones de Galicia Mangas (2016) se admite la constitución de la institución de la inspección de educación en Italia con la *Legge Casati* en 1859, también debemos acercarnos a algunos antecedentes previos.

Las primeras referencias que menciona Galicia Mangas (2016, 151) citando a Vicino Paganoni (1929), parecen encontrarse en el *Statuta Saone* de 1404 a 1405, en el que el Consejo de Ancianos de la ciudad de Savona designaba anualmente a dos ciudadanos notables con la condición de que tuvieran hijos varones, para vigilar que los niños y los jóvenes fueran suficientemente instruidos en la gramática y en distintos autores. En Pistoia, de la región de la Toscana, se procedía de igual forma en 1514, como refleja Galicia Mangas (2016) citando a Saraz (1922). Galicia Mangas (2016) afirma que hay muchas semejanzas entre en la evolución de la institución en Italia y la desarrollada tanto en Francia, como en España.

Así, antes de la unificación italiana, algunos de sus reinos dictaron normas en las que se instauraba cierta regulación sobre la inspección de las escuelas situadas en su territorio. De este periodo es el primer Reglamento normal de las Escuelas Elementales del Reino Lombardo-Veneto (*Regolamento normale per le Scuole Elementari dal Regno Lombardo-Veneto*) de 7 de diciembre de 1818, finalizado en 1821. En dicho reglamento se disponía que la inspección superior de todas las escuelas elementales correspondía al Gobierno, si bien se atribuía al obispo la competencia para vigilar los aspectos relacionados con la religión (art. 30).

La organización de los inspectores estaba conformada por un inspector jefe de las escuelas, los inspectores provinciales, inspectores de distrito e inspectores locales, cada uno con competencias dentro de su propio ámbito territorial, si bien el inspector jefe extendía, de forma lógica y jerárquica, su competencia a todas las escuelas elementales. En el caso de los

¹⁴¹ Fuente de la url: <https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/italy/italy> con acceso el 1 de octubre de 2022.

inspectores de distrito, esta tenía una organización con una doble dependencia funcional, dado que, para los aspectos económicos y administrativos, relacionados con la vigilancia y supervisión de las escuelas, dependía del delegado regio de la provincia, y en lo que se refería a la parte científica de la enseñanza y moral, dependía del inspector jefe (art. 34). La función del director local era asignada al párroco, allí donde existían escuelas elementales menores.

Es significativo señalar que se proponía que el inspector jefe fuera seleccionado preferiblemente entre eclesiásticos, y se determinaba un estipendio en concepto de salario.

Muy parecida es la denominada *Regie Patenti* correspondiente a la región noroccidental del Piamonte de 1821.

También es significativo señalar que, en 1824, el Papá León XII promulgó la denominada *Costituzioni Quod Divina Sapientia*, por la cual se reformaba el sistema educativo del Estado Pontificio, dándole mayor extensión, pero sometiéndolo al mismo tiempo al control de la *Congregazione degli Studi*. De esta forma y para el desarrollo de la citada *Costituzione*, se estableció un Reglamento de Estudios que debía observarse en Roma y en todo el Estado Eclesiástico, y en cuyo contenido se encomendaba a la persona situada al frente de cada academia la misión de vigilar que ninguna enseñanza literaria, ni artística ofendiera, directa o indirectamente a la religión, las buenas costumbres y el orden público.

No obstante, el momento cumbre de la evolución histórica de la inspección de educación en Italia se produjo con la promulgación de la conocida como *Legge Casati*, o más concretamente con el Regio Decreto Legislativo nº 3725, de 13 de noviembre de 1859, del Reino de Cerdeña, sobre la Reordenación de la Instrucción Pública (*Legge sul Riordinamento dell'Istruzione pubblica*) ampliada a toda Italia con la unificación. El Reglamento de aplicación de la Ley Casati fue promulgado mediante *Regio Decreto nº 4336*, de 15 de septiembre de 1860¹⁴² (*Regolamento per l'Istruzione elementare*).

Veamos algunos aspectos singulares de este marco legal. La ley debe su nombre al Conde Gabrio Casati, ministro de instrucción pública del Reino de Cerdeña, y tuvo su inspiración en el modelo prusiano de educación, de carácter jerarquizado y centralizado. Su aplicación inicial limitada a las zonas de Cerdeña y Piamonte, por el proceso citado de unificación no finalizado hasta 1861, se fue extendiendo a todo el territorio de forma paulatina.

La Ley Casati se compone de 5 títulos y es en el título primero, dedicado a la administración de la instrucción pública, en el que se regulan los órganos de la administración central y periférica y sus competencias, donde se dedicó especial atención a la regulación de la inspección. Así en su art. 2, al referirse a los órganos de la administración central de la instrucción pública, se refería al ministro, al Consejo Superior de la Instrucción Pública, y a los tres inspectores generales de los estudios superiores, de los estudios secundarios clásicos y de los estudios técnicos, primarios y de las escuelas normales de maestros. La regulación de los inspectores generales se desarrollaba en los arts. 17 – 22, y en ellos se fijaba fundamentalmente su nombramiento y sus competencias. Dentro del mismo apartado de la administración central se dedicaban los arts. 28 y 29 a la figura de los inspectores de las escuelas secundarias clásicas y del inspector de las escuelas normales, de maestros y técnicas, bajo el mando del Ministerio de Instrucción Pública y bajo la autoridad de los respectivos inspectores generales.

¹⁴² Nótese el paralelismo temporal con la constitución de la inspección educativa en España.

En el mismo desarrollo, la Ley Casati, en sus arts. 30 - 46 reglamentó las figuras de los denominados inspectores regios o reales, los inspectores provinciales y los inspectores de distrito.

Los inspectores regios desarrollaban sus competencias sobre los estudios primarios en el territorio de cada cabeza de partido provincial, correspondiendo al delegado regio provincial (*regio provveditore*) la autoridad sobre las escuelas secundarias clásicas y técnicas, y al rector, la competencia sobre la Universidad. Los inspectores regios eran nombrados por Real Decreto entre personas consideradas idóneas por su doctrina y por el ejercicio de la enseñanza.

Los inspectores provinciales, como los rectores y delegados provinciales, actuaban en representación del ministro de Instrucción Pública y hacían cumplir sus órdenes, con la precaución de que sus funciones concretas debían reglamentarse. Organizativamente y en cada cabeza de partido provincial se constituía un Consejo Provincial formado por el denominado delegado regio provincial, que actuaba como presidente, el inspector regio, como vicepresidente, el director o directores de las escuelas secundarias de segundo grado, el director los directores de las escuelas secundarias de primer grado, en su caso, el director del Instituto técnico y el director de la Escuela Técnica, dos miembros elegidos por sufragio por la Diputación Provincial, y dos miembros del municipio, cabeza de partido provincial, elegido también por sufragio.

Los inspectores de distrito se encontraban regulados en los arts. 45 y 46; en dichos artículos se establecía el sistema de provisión por nombramiento del ministro, con un ámbito de actuación comprendido en la cabeza de distrito, con unos emolumentos y una compensación por los gastos de desplazamiento derivados de su oficio. Los inspectores de distrito actuaban en su territorio en representación del delegado regio provincial y del inspector regio, y colaboraban con ellos en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, y en la recogida de los datos y la estadística de las escuelas y de los institutos.

El Regio Decreto nº 3382 de 6 de diciembre de 1866, sobre la Reforma del Ordenamiento Interno del Ministerio de la Instrucción Pública y de las Oficinas Inmediatamente Dependientes, constituyó en la administración central un Consejo Superior de la Instrucción Pública organizado en 3 secciones: el Comité para la Instrucción Universitaria y de los Institutos de Perfeccionamiento, el Comité para la Instrucción Secundaria, y el Comité para la Instrucción Primaria y Popular. Al servicio de este último comité para la Instrucción Primaria y Popular se nombraron a veinte inspectores centrales repartidos en cuatro secciones por criterios geográficos (Italia septentrional, central, meridional e insular), tal y como establecía el art. 11 del citado Regio Decreto nº 3382. Además, los inspectores centrales podían actuar por delegación del Comité para la Instrucción Secundaria para visitar las escuelas secundarias de primer y segundo grado, internados e institutos dependientes.

Junto a la normativa citada y siguiendo a Galicia Mangas (2016), también hay que citar otro marco disposicional relativo al desarrollo legislativo de la inspección de educación en Italia: la Ley nº 3968 de 1877 (*Legge Coppino*); la Ley nº 487 de 1911; la Reforma Gentile de 1923, en la época del primer gobierno de coalición de Mussolini, que incluyó el Regio Decreto Legislativo nº 1679 de 1922; y la Ley nº 1859 de 31 de diciembre de 1962, entre otras, pero sin olvidar el Regio Decreto nº 577 de 5 de febrero de 1928, que en palabras de Galicia Mangas (2016) integró y refundió las normas hasta entonces vigentes en materia de educación, incluidas las correspondientes a la Inspección de Educación.

Es también significativa la Ley nº 477 de 30 de julio de 1973 (GURI¹⁴³ nº 211, de 16 de agosto de 1973) y sus desarrollo, y en concreto el segundo Decreto Delegado, el Decreto del Presidente de la República nº 417 de 31 de mayo de 1974, relativo a las Normas sobre la Situación Jurídica del Personal Docente, Directivo y de Inspección de la Escuela Maternal, Elemental, Secundaria y Artística del Estado, que en su art. 3 abre la vía para que el Decreto Delegado nº 417 de 1974 regule la inspección en los siguientes términos:

Art. 3: La situación jurídica del personal que se refiere la letra a) del art. 1 de la presente ley deberá establecer:

2) ...la de ordenación de las funciones de inspección en el marco de un concepto unitario de la misma a nivel central, regional y provincial, y las atribuciones, los deberes y los derechos de la misma entendida como actividad de expertos profesionales utilizada por la administración escolar para la inspección y comprobación técnico-didáctica, la actualización y la experimentación.

Este Decreto del Presidente de la República nº 417, de 31 de mayo de 1974, es de gran importancia pues estableció las bases fundamentales de la normativa actualmente en vigor en materia de inspección de educación en Italia, y reorganizó y unificó la función inspectora, que se encontraba desarrollada tanto por los inspectores centrales, como por los inspectores escolares; categoría suprimida por su art. 125. Fue su art. 4 el que estableció la estructura del modelo de inspección desde ese momento, al determinar que la función inspectora sería ejercida por inspectores técnicos centrales y periféricos, actuando los primeros en todo el territorio nacional y los segundos en el ámbito regional y provincial.

Más adelante y con fecha de 22 de diciembre de 1980, se dictó la Ley nº 928 que, en relación con lo dispuesto en el Decreto nº 417 de 1974, establecía la normativa sobre el acceso a los puestos directivos en las escuelas y a puestos de inspectores técnicos, tanto centrales como periféricos.

A ese respecto y sobre los sistemas de provisión también hay que mencionar, tal y como hace Galicia Mangas (2016) el Decreto nº 357 de 6 de noviembre de 1989, que se convirtió, con algunas modificaciones, en la Ley 417 de 27 de diciembre de 1989, que regulaba las normas en materia de reclutamiento del personal de la escuela. En dicha norma, se suprimieron los cuerpos de inspectores técnicos centrales y periféricos y se unificaron los cargos de inspección en una única plantilla o escalafón de inspectores técnicos con una dotación de plantilla de 696 inspectores.

Más tarde, el Decreto del Ministro de Instrucción Pública nº 274, de 12 de septiembre de 1991, más tarde modificado por el Decreto ministerial de 5 de febrero de 1992, reguló con detalle la estructura y función del servicio técnico de inspección.

Este tortuoso escenario normativo histórico nos encamina hasta la regulación actual en materia educativa y de inspección, que se encuentra constituido por el texto refundido del Decreto Legislativo nº 297, de 16 de abril de 1994¹⁴⁴, por el que se aprueba el Texto Único de las

¹⁴³ El Boletín Oficial de la República Italiana, o para simplificar el Boletín Oficial (GU o GURI como *Gazzetta Ufficiale*), a semejanza en nuestro Estado del Boletín Oficial del Estado (BOE) es la fuente oficial de conocimiento de las normas vigentes en Italia. Es una herramienta para difundir, informar y formalizar textos legislativos, actos públicos y privados que deben llegar al conocimiento de toda la comunidad con certeza.

Acceso en la url: <https://www.gazzettaufficiale.it>.

¹⁴⁴ Texto original de la web de “Il portale della Legge vigente” en la url:

Disposiciones Legislativas Vigentes en Materia de Educación, Relativa a las Escuelas de Cualquier Orden y Grado. Este texto con numerosas modificaciones, debe ser revisado e interpretado, a la luz del Decreto Legislativo nº 165 de 9 de mayo de 2001 por el que se establecen las normas generales sobre el Ordenamiento del Trabajo bajo la Dependencia de las Administraciones Públicas, pero lo consideramos básico para nuestro estudio.

También es importante señalar, como epílogo de este apartado histórico, que la función de inspección fue parcialmente redefinida al amparo de una serie de normas de reorganización del Ministerio de Instrucción Pública, y que delimitaron tanto a sus aspectos organizativos como funcionales. La primera de dichas normas fue el Decreto del Presidente de la República número nº 347 de 6 de noviembre de 2000¹⁴⁵ por el que se establecía el Reglamento que incluía las Normas de Organización del Ministerio de Instrucción Pública, disposición que más tarde fue derogada por el Decreto del Presidente de la República nº 319 del 11 de agosto de 2003¹⁴⁶, -en vigor-, y que contiene el Reglamento de Organización del Ministerio de Educación, de Universidad e Investigación.

Aunque Galicia Mangas (2016) hace referencia definitiva al Decreto del Presidente de la República número nº 17 de 20 de enero del 2009, que establece el vigente reglamento que incluye las disposiciones de reorganización del Ministerio de educación, de Universidad e investigación, en la actualidad, y dada la división del Ministerio de Instrucción y del Ministerio de Universidad e Investigación hay que citar el Decreto del Presidente de la República nº 132 de 3 de junio de 2011¹⁴⁷, que contiene las modificaciones al citado Decreto del Presidente de la República nº 17 de 20 de enero de 2009, relativo a la reorganización del Ministerio de Educación, Universidad e Investigación, de conformidad con el artículo 2, párrafo 8-bis, del Decreto-Ley nº 194, de 30 de diciembre de 2009, modificado por la Ley nº 25, de 26 de febrero de 2010.

- La inspección de educación italiana en la actualidad.

. Organización y estructura.

Galicia Mangas (2016) realiza una amplia exposición también de este punto, que vamos a utilizar para realizar el acercamiento organizativo que pretendíamos. De esta forma y en coherencia con las normas de reparto competencial entre el Estado, las regiones y los municipios, establecidas en el arts. 117 y 118 de la Constitución italiana de 1947, el sistema de inspección italiano responde un modelo centralizado y jerarquizado con dependencia directa del Ministerio de Educación, aunque también muestra una distribución periférica de sus efectivos que se reparten en las distintas regiones y provincias, aspecto significativo pues las competencias esenciales en materia de educación corresponden finalmente a las regiones.

No obstante Galicia Mangas (2016, 159) también apunta que no resulta fácil abordar la cuestión relativa a la organización y estructura de inspección en Italia, ya que se han producido sucesivos cambios y modificaciones normativas que mantienen en vigor disposiciones con ámbitos de interpretación distinta, si no contradictoria.

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1994/05/19/115/so/79/sg/pdf>

¹⁴⁵ Acceso en la url: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2000/11/27/277/sg/pdf> el 3 de mayo de 2022.

¹⁴⁶ Acceso en la url: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2003/11/20/270/so/177/sg/pdf> el 3 de mayo de 2022.

¹⁴⁷ Acceso en la url: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2011/08/08/183/sg/pdf> el 3 de mayo de 2022.

Una vez unificados los cargos de inscripción en 1989 en una única plantilla de inspectores técnicos, el art. 397 del Decreto Legislativo nº 297, de 16 de abril de 1994, vigente todavía, vino a confirmar el hecho de que las funciones inspectoras serían ejercidas por inspectores técnicos, cuyo ámbito de actuación sería nacional, regional y provincial.

En base a ese mismo artículo parece claro que la función de inspección es ejercida de forma exclusiva por el cuerpo unificado de inspectores técnicos de educación, y eso cualquiera que sea su ámbito territorial de actuación.

Consideramos que el objetivo fundamental de esta normativa ha sido encuadrar a los inspectores técnicos en el ámbito de los dirigentes administrativos de segunda clase del Ministerio de Educación, así como el reconocimiento de su labor y de su estatus. Sin embargo, y a pesar de no haberse suprimido legalmente la figura del inspector técnico, su presencia ha disminuido notablemente debido a la reducción considerable de la plantilla y a una considerable burocratización de sus tareas.

El nuevo enfoque de la función inspectora, que infiere Galicia Mangas (2016) ha venido precedido de un cambio en la terminología utilizada, terminología que ha abandonado en buena medida la denominación de inspector técnico y la ha sustituido por la de dirigente con funciones técnicas o, simplemente, dirigente técnico. Debemos reconocer que esta categoría no se corresponde con la de inspector técnico, pero se llega a confundir con ella a pesar de no desempeñar estrictamente la misma función, ni tener la misma formación o procedencia. Es necesario por tanto, plantearse si este cambio en la terminología implica también un cambio de mayor envergadura, dirigido a modificar las condiciones de acceso a la función inspectora, función que quedaría abierta no solo a los funcionarios del cuerpo de inspectores técnicos, sino también a otros dirigentes.

podemos por tanto concluir que, con respecto a la organización y estructura de inspección de educación en Italia, existe un único cuerpo de inspectores de educación, de carácter centralizado, jerarquizado y dependiente del Ministerio de Instrucción. Este cuerpo ejerce su función a través de la estructura periférica de sus efectivos, aunque además se atribuyen asimismo funciones inspectoras a otros órganos administrativos con competencia en materia educativa.

. Funciones.

De la misma forma que hemos ido desarrollando en los epígrafes anteriores, emprender el estudio de las funciones de la inspección en Italia supone establecer una relación alambicada entre normas dispersas que se van sobreponiendo en el tiempo desde 1974, con la complejidad añadida de la atribución de funciones de inspección, al personal directivo que como ya hemos señalado no pertenece al cuerpo de inspectores de educación.

La normativa de referencia, que igualmente señala Galicia Mangas (2016) se encuentra en diversas fuentes:

- El Decreto del Presidente de la República nº 417 de 31 de mayo de 1974.
- El Decreto Ministerial nº 274, de 12 de septiembre de 1991 del ministro de instrucción pública.
- El Decreto Legislativo nº 297, de 16 de abril de 1994, por el que se aprueba el texto único de las disposiciones legislativas vigentes en materia de educación.
- El Decreto del Presidente de la República nº 319, de 11 de agosto de 2003.

- El Decreto Ministerial de 27 de febrero del 2008.
- El decreto nº 60 de 23 de julio de 2010 del Ministerio de educación, Universidad de investigación.
- Y por último en el Decreto del Presidente de la República nº 80, de 28 de marzo de 2013.

Galicia Mangas (2016, 170) considera que el art. 4 del Decreto del Presidente de la República nº 417, de 31 de mayo de 1974 es el que ha establecido la pauta de las funciones básicas de la inspección: funciones que han sido asumidas esencialmente por la normativa posterior y complementadas y desarrolladas por la misma.

Con carácter general ya se apunta en su primer párrafo que la inspección siempre sigue las directrices del Ministerio de Instrucción Pública, y en el marco de las normas generales sobre educación, contribuye en el desarrollo de sus funciones a la realización de los objetivos de educación y formación confiados a los establecimientos escolares y educativos.

Los inspectores técnicos favorecen la promoción y coordinación de las actividades de formación y actualización del personal directivo y docente de las escuelas de cualquier orden y grado, pudiendo hacer propuestas y dictámenes respecto a los programas de enseñanza para su adecuación; promueven el uso de los apoyos didácticos y de las tecnologías para el aprendizaje, así como propuestas innovadoras, encargándose de su coordinación; son escuchados por los Consejos Provinciales de Educación en relación con su competencia; desarrollan labores de asistencia técnica y didáctica en las instituciones educativas y llevan a cabo las inspecciones establecidas por el Ministro de Educación y por el Delegado de Educación.

Por otra parte, el Decreto Ministerial de 27 de febrero de 2008 del Ministerio de Instrucción Pública hace referencia también a las funciones de inspección técnica. Dichas funciones se centran en la colaboración y apoyo de todo proceso educativo; colaboración en los procesos de evaluación y autoevaluación de la actividad docente; apoyo y soporte técnico, didáctico y pedagógico; realización de funciones específicas de inspección con especial atención a los actuales fenómenos de *bullying* escolar y a los problemas y dificultades juveniles, así como también a la asiduidad, frecuencia y continuidad de las actuaciones de los docentes y dirigentes escolares en este tipo de situaciones.

Podemos, por tanto, y en la línea que marca Galicia Mangas (2016) establecer una clasificación inicial de las funciones, en base a dos criterios diferentes: según el ámbito de actuación, y según la naturaleza jurídica de los actos realizados.

Según el ámbito, la actividad de los inspectores técnicos puede desarrollarse en torno a tres núcleos o campos de actuación diferentes, aunque, como no puede ser de otra forma, igualmente interrelacionados:

- En el campo relativo al proceso formativo educativo, los inspectores desarrollan las siguientes tareas:
 - . Elaboran planes o proyectos para cumplir los objetivos propuestos por el Ministerio de Educación en materia de política educativa.
 - . Asesoran respecto a los programas escolares, material didáctico y tecnologías educativas.
 - . Prestan apoyo y asistencia en materia técnico-didáctica, de estudio, investigación y asesoramiento sobre los proyectos de experimentación e innovación didáctica.
- En el campo relativo a la formación, promocionan e impulsan las actividades de actualización del personal directivo y docente de las escuelas de cualquier orden y grado.

- En el campo relativo a la inspección y control, desarrollan las actividades de verificación e inspección encomendadas por el Ministerio o por las Delegaciones Regionales o Provinciales del mismo.

Según la naturaleza jurídica de los actos realizados por los inspectores técnicos y siguiendo las propuestas de Farina (2009) su actividad puede ser propulsiva, consultiva, de control, y de juicio o valoración.

- Actividad propulsiva o de impulso: vinculada normalmente a los actos o actuaciones de apoyo a los proyectos y procesos formativos, tiene como objetivo procurar una actuación de los órganos estatales y de los sujetos privados. Estos actos de impulso no se limitan a ser simples manifestaciones de deseo, sino que pueden hacer surgir a cargo de un órgano estatal o público la obligación de dictar una disposición o adoptar alguna medida. Dichos actos pueden llegar a tener a veces un carácter mixto al incorporar, a un mismo tiempo, una manifestación de voluntad y una manifestación de juicio o valoración.

A su vez, los actos propulsivos o de impulso, pueden clasificarse en dos categorías generales:

- . Actos dirigidos a promover el ejercicio de los poderes de los órganos de la Administración (*richieste, proposte, direttive*)¹⁴⁸.
- . Actos dirigidos a procurar el cumplimiento o ejecución de las obligaciones o deberes a cargo de sujetos privados (*diffide, contestazioni*)¹⁴⁹.

Es cierto que los inspectores deben actuar, como también en nuestro entorno, por medio de otros órganos administrativos con competencias específicas, orientando hacia los mismos las peticiones y/o propuestas para que vehiculen y requieran, en su caso, las actuaciones correspondientes.

- Actividad consultiva: que se asocia habitualmente a los procesos de evaluación, autoevaluación, de apoyo técnico, didáctico y pedagógico. Se configura como una manifestación de juicio, y es de gran provecho para los órganos de la administración de

¹⁴⁸ Farina (2009), citado por Galicia Mangas (2016), realiza un detallado desglose de estos actos. Así:

Richiesta (petición o demanda): acto de impulso dirigido a un organismo estatal o público con objeto de promover la promulgación de una disposición, pero que persigue únicamente una finalidad de estímulo sin pretender influir en el contenido de la disposición.

Proposta (propuesta): acto de impulso a través del cual se solicita la actuación de otro órgano administrativo y en el que se expresa un juicio o valoración sobre el contenido que ha de darse a una disposición. Con carácter general la propuesta no es vinculante.

Direttiva (instrucción o directiva): acto de impulso mediante el cual un órgano estatal o una autoridad superior intima, invita o conmina a otro órgano administrativo que está bajo su dependencia a realizar un determinado programa, una tarea, iniciativa o cometido.

¹⁴⁹ *Diffida* (intimación o requerimiento): acto de impulso a través del cual se requiere a un sujeto, de acuerdo con un título previo (ley, sentencia, contrato o acto administrativo) para que ejerza una actividad o se abstenga de un comportamiento, planteando una sanción en caso de desobediencia dentro del término prefijado.

Contestazione (requerimiento de alegación): acto de impulso mediante el cual la Administración requiere al destinatario para que formule alegaciones relativas a los hechos o comportamientos que, en este caso un inspector, pone de relieve, todo ello en vista de la posible adopción de una resolución sancionadora.

forma previa a la adopción de decisiones de carácter de orden didáctico, organizativo o de planificación y programación (informes administrativos o *pareri*¹⁵⁰)

A su vez dicha actividad consultiva puede tener un doble carácter:

- . Facultativo: a solicitud o petición discrecional o voluntaria del órgano administrativo.
- . Efectivo: exigido legalmente, suponiendo la invalidez del acto resolutivo o conclusivo del procedimiento, si no se ha solicitado.

Los informes o dictámenes preceptivos pueden ser también de distinto tipo: no vinculante, vinculante, parcialmente vinculantes.

Estas dos últimas categorías de informes o dictámenes preceptivos (los vinculantes y parcialmente vinculantes) no son más que formulaciones teóricas en el ámbito de la inspección de educación, dado que no están previstos, hasta el momento, en ninguna norma concreta del ámbito educativo.

- Actividad de control: aunque la doctrina italiana la encuadra dentro del ámbito de las manifestaciones de juicio o valoración, podemos decir que la actividad de control supone un nuevo examen de un acto administrativo para verificar su conformidad con la normativa vigente (control de legitimidad o legalidad) o bien la relación de correspondencia del acto con el resultado o los objetivos perseguidos por el mismo (control de mérito).

Con carácter general, los actos de control pueden ser de tres categorías, como señala Galicia Mangas (2016):

- . Actos de control preventivo: que alcanzan ejercer un control previo al momento en el que el acto administrativo sujeto a control pueda producir efectos jurídicos.
- . Actos de control sucesivo: que se ejercen sobre actos ya eficaces con el objeto de impedir o evitar que dichos actos, si son ilegales o arbitrarios, produzcan más efectos.
- . Actos de control sustitutivo: que se producen cuando el órgano de control constata una inactividad del órgano controlado y por ello, en sustitución del mismo emite una disposición o acto que es, en origen, competencia del órgano incumplidor.

Dentro de esta categoría de los actos de control, Galicia Mangas (2016) puntualiza que la inspección italiana desarrolla dos tipos de actuaciones fundamentales:

- Controles de legalidad o de mérito con petición o solicitud de un nuevo examen del acto administrativo: en el desarrollo de sus funciones de apoyo, soporte, y verificación o control, los inspectores pueden requerir a los funcionarios responsables de una actuación, gestión, proyecto o programa (como por ejemplo a los miembros de los equipos directivos de los centros educativos)s para que vuelvan a examinar su actuación o disposición, de acuerdo con los criterios expresados, generalmente de forma escrita, en su requerimiento. Dicho requerimiento, no obstante, no es vinculante para el destinatario del mismo, dada la autonomía de los

¹⁵⁰ Galicia Mangas (2016) define los “*parere*” como “informe administrativo”: acto auxiliar o de colaboración consistente en una manifestación de juicio del sujeto emisor –inspector-, mediante la cual pretende aclarar, aconsejar o instruir al órgano administrativo solicitante sobre las cuestiones objeto de la petición. Dada su naturaleza, orientan la decisión del órgano superior y son de distinto tipo.

- centros docentes, pero sin desestimar la responsabilidad del funcionario competente para emitir el acto, realizar la gestión o desarrollar el proyecto.
- Control de gestión: verificar o comprobar el estado de cumplimiento de los objetivos programados, la funcionalidad de los mismos, así como la eficacia y eficiencia de la actuación o proyecto.
 - Actividad de juicio o valoración: consistente en una manifestación de opinión referida a hechos, comportamiento, actos, proyectos o actividades. Dicho acto de juicio o valoración puede estar basado en un referente normativo (juicio o valoración de legalidad) o bien en un referente técnico-didáctico (juicio o valoración de méritos).

En esta actividad de juicio o valoración se puede distinguir entre los actos que adoptan la forma de decisiones, y los que adoptan la forma de valoraciones o evaluaciones:

- . Decisiones: actos de juicio expresados normalmente por órganos colegiados, con el fin de dirimir o decidir, basándose en la normativa, controversias que surjan entre la administración pública y un sujeto privado. Este tipo no se incluyen dentro del campo competencial de los inspectores.
- . Valoraciones o evaluaciones: manifestaciones de juicio referidas a las actividades, gestiones y proyectos susceptibles de evaluación dentro del marco didáctico y organizativo de los centros docentes. Forman parte de las competencias específicas de los inspectores y deben ser suficientemente motivadas de acuerdo con criterios objetivos y predeterminados.

Desarrollando con detalle, siguiendo a Galicia Mangas (2016), lo que son las funciones de la inspección de educación e Italia, propiamente dichas, hemos de partir de la base de que, con respecto y sujeción a las normas jurídicas del ámbito educativo y a las políticas marcadas por el Ministerio de Educación, la finalidad de su función, se centra principalmente en la orientación de las estrategias y en la definición de los objetivos que han de encaminar la labor docente al cumplimiento de la finalidad básica educativa confiada a las instituciones educativas, evaluando para ello la eficacia de dichas estrategias y objetivos, así como también los procesos de innovación.

En relación directa con esta finalidad básica están las funciones desarrolladas por la inspección técnica de educación italiana, que se pueden concretar en las siguientes tareas¹⁵¹:

- Elaborar proyectos para llevar a cabo los objetivos de política educativa marcados o propuestos por el Ministerio.
- Formular dictámenes en relación con los programas de enseñanza y su adecuación, con el uso de los apoyos didácticos y de las tecnologías educativas.
- Contribuir a promover y coordinar la actividad de actualización del personal directivo y docente de los centros escolares de cualquier orden y grado, incluidas las instituciones escolares italianas radicadas fuera de Italia.
- Desarrollar actividades de estudio, investigación y asesoramiento técnico para el Ministro de Educación y demás altos cargos de la administración de educación.

¹⁵¹ Referencia recogida del art. 1.2 del Decreto Ministerial nº 274, de 12 de septiembre de 1991.

- Examinar documentos de estudio y elaborar informes y resúmenes o síntesis para preparar o concluir encuentros o reuniones de trabajo a las que sean llamados para participar por invitación o con autorización de la administración educativa.
- Aconsejar y asistir desde el punto de vista técnico-didáctico a las instituciones escolares.
- Controlar o inspeccionar el ámbito educativo, tanto de manera general, como de forma especial o concreta, en aquellos casos o situaciones determinadas por el Ministro o por las delegaciones de la administración educativa.
- Asesorar en materia de proyectos educativos experimentales.
- Ser oídos, en relación con sus funciones, por el Consejo Nacional de Instrucción Pública y por los Consejos Escolares Provinciales.
- Colaborar en materia de investigación, experimentación y actualización de los institutos regionales de investigación, experimentación y actualización educativa, con la biblioteca de documentación pedagógica (*Biblioteca di documentazione pedagogica*¹⁵²), y con el Centro Europeo de Educación (*Centro europeo dell'educazione*¹⁵³).
- Colaborar con la Universidad, con los estudios científicos y otros organismos externos que actúan en el sector educativo.

Los ejes vertebradores de este sistema vienen constituidos por cinco funciones fundamentales de la inspección técnica de educación:

- La función de actualización y formación del personal directivo y docente.
- Las funciones en materia de experimentación.
- La función de asistencia y asesoramiento técnico didáctico.
- La función de supervisión o inspección en sentido estricto.
- Y la función de colaboración en materia de programas de enseñanza, examen y concurso para el reclutamiento del personal directivo y docente.

Siguiente a Galicia Mangas (2016), desarrollaremos con mayor profundidad estas funciones básicas:

- función de actualización y formación. La labor fundamental de los inspectores técnicos consiste en colaborar en la definición de las propuestas de actualización y formación, tanto en el ámbito de los propios centros docentes, individualmente considerados, como en el ámbito provincial, regional o nacional. De esta forma prestan asistencia y consejo técnico a las delegaciones del Ministerio o a los entes encargados de diseñar planes de formación y actualización y de formular propuestas en esta materia. Así, las delegaciones centrales o

¹⁵² Acceso en la url: <https://www.nuovadidattica.net/archivio/attivita/creazioni/ldivenire/bdp2.htm> el 9 de mayo de 2022. Página con acceso truncado.

¹⁵³ Establecido con Decreto Presidencial nº 419 del 31 de mayo de 1974, tiene su sede en la histórica Villa Falconieri en Frascati (Roma) y dispone de personalidad jurídica y autonomía administrativa.

Fuente en la url:

<http://www.funzionibiobiettivo.it/glossadid/CEDE.htm#:~:text=Istituto%20con%20DPR%20n.,persona%20giuridica%20ed%20autonomia%20amministrativa>. Acceso el 9 de mayo de 2022.

regionales del Ministerio de Educación pueden planificar actividades de formación, propuestas por los inspectores.

- Función en materia de experimentación: los inspectores técnicos colaboran en la definición de las iniciativas de experimentación en materia educativa, garantiza la asistencia técnica a las instituciones escolares que se encuentren en fase de elaboración de los proyectos de experimentación, de comparación de sus experiencias, de análisis de los datos o de verificación de los resultados.

- Función de asistencia y asesoramiento técnico didáctico. Esta función, junto con la función de inspección, en sentido estricto y de evaluación, es una de las claves de la inspección de todos los sistemas educativos de nuestro entorno, y una de las funciones más arraigadas en el desarrollo histórico de la institución. Su misión es lograr la realización más efectiva posible de los objetivos de la educación en los centros docentes. Para ello y dentro siempre del respeto a la libertad de enseñanza y a la autonomía organizativa de los centros, las funciones de asistencia y asesoramiento se ejercen en el ámbito de la citada organización escolar, de la programación y de evaluación de la actividad docente; en el ámbito también de la investigación pedagógica, de la didáctica de las distintas disciplinas, y de la tecnología educativa; Y el ámbito de la experimentación y de la documentación propia de la actividad educativa.

- Función de inspección técnica. Función específica para garantizar el acuerdo efectivo entre las actividades didácticas y la normativa académica, así como también su adecuación a los objetivos marcados en los programas de enseñanza; para verificar la ejecución o cumplimiento de las disposiciones e instrucciones del Ministro de Educación; para controlar la organización de los servicios escolares, y la adecuada utilización del personal; para proporcionar a la administración educativa central, regional o provincial propuestas y observaciones con el fin de eliminar problemas y deficiencias del sistema escolar.

- Funciones en materia de programas de enseñanza, examen y concurso para el reclutamiento del personal directivo y docente. Este se centra en la colaboración de los inspectores para definir propuestas relativas a la adecuación de dichos programas, de forma que contribuya a garantizar el control y la revisión sistemática de los mismos.

- Recapitulación.

Galicia Mangas (2016) termina afirmando que Italia muestra, en cuanto a la inspección de educación, una evolución semejante a la observada en Francia y en España.

La doctrina mayoritaria admite que el nacimiento de la institución de la inspección de educación en Italia pudo producirse mediante la conocida como *Legge Casati* en 1859, norma que, si bien inicialmente, tuvo un ámbito de aplicación limitado a la zona de Cerdeña y Piamonte, dado que no había culminado el proceso de unificación italiana, tras la proclamación del Reino de Italia, en 1861, se fue extendiendo a todos los territorios de forma paulatina. Los siguientes pasos de relevancia para la institución de la inspección se produjeron por la Ley de 4 de junio de 1911, conocida como *Legge Daneo-Credaro*; por la conocida como reforma Gentile, y en especial por el Regio Decreto Legislativo de 31 de diciembre de 1922; mediante la Ley de 30 de julio de 1973, que permitió delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas relativas al estatuto jurídico del personal de inspección, en cuya virtud se elaboró el Decreto de 31 de mayo de 1974; por el Decreto Ley de 6 de noviembre de 1989, que pasó a convertirse posteriormente, con algunas modificaciones, en la ley de 27 de diciembre de 1989; Y por último, por la regulación actual

establecida por el texto refundido del Decreto Legislativo de 16 de abril de 1994, que es el que utilizaremos en la tabla 3.2.1. correspondiente a la yuxtaposición comparada.

En cuanto a la estructura y organización de la inspección, podemos afirmar, como hace Galicia Mangas (2016) que existe un único cuerpo de inspectores de educación, de carácter centralizado, jerarquizado y dependiente del Ministerio de Instrucción Pública, que ejerce su función a través de una distribución periférica de sus efectivos, si bien se atribuyen asimismo funciones inspectoras a otros órganos administrativos con competencia en materia educativa, lo que ha suscitado cierta polémica.

En relación a las funciones básicas de la inspección técnica o cuerpo de inspectores, han sido incluidas en el art. 4 del Decreto del Presidente de la República de 31 de mayo de 1974, siendo asumidas esencialmente por la normativa posterior y desarrolladas o complementadas por la misma. Recapitulando dichas funciones podemos decir que la inspección hace suyas fundamentalmente las tareas de supervisión y control de la educación encomendadas por el Ministerio o por las delegaciones regionales o provinciales del mismo; la colaboración en los procesos de evaluación y autoevaluación de la actividad educativa; la promoción e impulso de las actividades de formación y actualización del personal directivo y docente de las escuelas de cualquier orden y grado; y en el plano educativo, las de asesoramiento técnico y didáctico a las instituciones escolares, y al Ministro de Educación y altos cargos de la Administración Educativa; la elaboración de planes o proyectos para cumplir los objetivos propuestos por el Ministerio de Educación en materia de política educativa; y las de apoyo y asistencia en materia técnico didáctica, de estudio, investigación y asesoramiento sobre los proyectos o experimentación o innovación educativa.

Para los denominados dirigentes con funciones técnicas o dirigentes técnicos, que no forman parte del cuerpo de inspectores técnicos de educación, se regulan las funciones en el art. 6.9 del Decreto del Presidente de la República de 11 de agosto de 2003, en el art. 3 del Decreto Ministerial de 27 de febrero de 2008, en el Decreto de 23 de julio de 2010, y el Decreto del Presidente de la República de 28 de marzo de 2013. De modo muy sintético sus funciones incluyen prestar apoyo a los proyectos y procesos formativos, al proceso de evaluación y autoevaluación; dar apoyo técnico, didáctico y pedagógico; y desarrollar labores de inspección en sentido estricto.

De modo algo más extenso estas funciones incluyen también las de formular propuestas y dictámenes relativos a ciertas cuestiones relacionadas con el ámbito educativo. Asistencia técnica y didáctica en favor de las instituciones educativas en las áreas de evaluación de los alumnos y autoevaluación de los centros docentes; realización de las inspecciones ordenadas por los órganos competentes de la administración; comprobación de la asiduidad, frecuencia y continuidad del desempeño de la labor de los docentes, no docentes y del personal directivo; labores de estudio, investigación y asesoramiento técnico para el Ministro de Educación y altos cargos de la administración de educación; elaboración de un informe anual que contiene los resultados de la actividad de inspección y una relación de los problemas emergentes detectados. De manera destacado se le encomienda la evaluación del sistema educativo y de las instituciones docentes, a través de cuatro pilares básicos: la autoevaluación o evaluación interna, la evaluación externa en las que interviene activamente los miembros del denominado *contingente inspectivo*, las acciones y planes de mejora derivados de las mismas, y la rendición social de cuentas de las instituciones escolares, integrándose todas ellas en los que se ha venido a denominar Sistema Nacional de Evaluación del Sistema Educativo de Instrucción y Formación.

3.2.2. Las funciones asignadas en la legislación, a la Inspección de Educación de la República Italiana

En la misma línea realizada con los epígrafes anteriores, para acceder a las funciones de la inspección educativa en la República italiana, debemos dirigirnos al Decreto de 16 de abril de 1994. Este es el marco normativo que el equipo de investigación ha considerado como básico. El decreto fue promulgado, en la IX legislatura, por el gobierno de Oscar Luigi Scalfaro, del partido de la Democracia Cristiana. El Decreto lo firma la ministra de Instrucción Pública, Rosa Russo Iervolino. Véase la yuxtaposición con las funciones asignadas a la inspección educativa en España, en la tabla 3.2.1.

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (s.o. G.U. n.º. 115 del 19/5/1994).

Art. 397 - Funzione ispettiva

- 1. La funzione ispettiva concorre, secondo le direttive del Ministro della pubblica istruzione e nel quadro delle norme generali sull'istruzione, alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative.*
- 2. Essa è esercitata da ispettori tecnici che operano in campo nazionale, in campo regionale e provinciale.*
- 3. Gli ispettori tecnici contribuiscono a promuovere e coordinare le attività di aggiornamento del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado; formulano proposte e pareri in merito ai programmi di insegnamento e di esame e al loro adeguamento, all'impiego dei sussidi didattici e delle tecnologie di apprendimento, nonché alle iniziative di sperimentazione di cui curano il coordinamento; possono essere sentiti dai consigli scolastici provinciali in relazione alla loro funzione; svolgono attività di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche ed attendono alle ispezioni disposte dal Ministero della pubblica istruzione, dal sovrintendente scolastico regionale o dal provveditore agli studi; prestano la propria assistenza e collaborazione nelle attività di aggiornamento del personale direttivo e docente nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto, regionale e nazionale.*
- 4. Gli ispettori tecnici svolgono altresì attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro, i direttori generali, i capi dei servizi centrali, i sovrintendenti scolastici e i provveditori agli studi.*
- 5. Al termine di ogni anno scolastico, il corpo ispettivo redige una relazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi.*

3.3. La Inspección de Educación en Inglaterra

3.3.1. Acercamiento a la historia y estructura de la Inspección de Educación en Inglaterra

Para el desarrollo completo de este epígrafe del tema debemos referirnos a Taylor (1977), a Gutiérrez Maestre (1994), a Llorent (2013), a Galicia Mangas (2016) y a los datos de la página web de Eurydice¹⁵⁴ en la consideración de que la elección sobre la educación en Inglaterra y en concreto el acercamiento a la historia y estructura de la inspección de educación en Inglaterra, tiene muchos y claros paralelismo con la correspondiente a la inspección de educación en los otros países del Reino Unido: Escocia, País de Gales e Irlanda del Norte con pequeñas y no significativas diferencias.

A este respecto, tal y como señala Galicia Mangas (2016), el modelo de inspección existente en el Reino Unido está sirviendo como referencia o modelo a otros países de nuestro entorno, señalando muy concretamente el paralelismo con el modelo de Alemania. A este respecto hay que señalar también que la propia institución de la inspección de educación en el Reino Unido cuenta ya con una vasta experiencia y trayectoria muy satisfactorios.

La estructura y organización del sistema educativo, se expresaran desde los datos de la web de Eurydice con una visión comparada tremendamente interesante¹⁵⁵. Con respecto a la inspección, nos centraremos, siguiendo a los autores citados, en las dos instituciones más conocidas y reconocidas: el Departamento para la Calidad de la Educación, Servicios de Atención a la Infancia y Aptitudes, reconocido por las siglas de su acrónimo en inglés OFSTED¹⁵⁶ (*Office for Standards in Education, Children's Services and Skills*), así como los conocidos Inspectores de Su Majestad (*Her Majesty's Inspectorate - HMI*).

Para que podamos realizar eses acercamiento al sistema educativo en Inglaterra y a su organización es necesario acercarnos a cuestiones relativas al reparto competencial en materia de educación en el Reino Unido. En ese sentido es necesario recordar, como apunta Galicia Mangas (2016) que Inglaterra no tiene gobierno propio, ni parlamento autonómico, a semejanza del correspondiente a las asambleas o parlamentos de las comunidades autónomas en España: los ministerios son los propios de Reino Unido, y el Parlamento es el de Westminster¹⁵⁷. Por el contrario, y con el propósito de ampliar la visión de contexto político, Gales dispone de Asamblea propia con competencias legislativas en ciertas materias, si bien inicialmente fueron exclusivamente reglamentarias y un Ejecutivo con poderes muy limitados; Escocia e Irlanda del Norte, por su parte, disponen de ejecutivos con poderes más amplios, además de parlamentos propios con potestad legislativa, por lo que, en su ámbito competencial, pueden desarrollar

¹⁵⁴ Puede ampliarse la información relativa al sistema educativo en Inglaterra en la web de Eurydice, en la url: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/united-kingdom-england_en con acceso el 14 de mayo de 2022.

¹⁵⁵ Contenido de la url: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/national-description_en con acceso el 14 de mayo de 2022.

¹⁵⁶ La Office for Standards in Education, Children's Services and Skills (OFSTED) es un departamento no ministerial del gobierno del Reino Unido que depende directamente del Parlamento. la OFSTED es responsable de inspeccionar gran parte de las instituciones educativas en Inglaterra. También dispone de competencias sobre las agencias de cuidado infantil, adopción y acogimiento y la formación inicial del profesorado, y regula una serie de servicios de atención social para la primera infancia y la infancia.

Puede ampliarse la información en la url:

<https://www.gov.uk/government/organisations/ofsted/about> con acceso el 14 de mayo de 2022.

¹⁵⁷ Puede ampliarse la información sobre el Parlamento en la url: <http://www.parliament.uk/> con acceso el 14 de mayo de 2022.

modelos educativos propios. Sin embargo, cualquier norma aprobada por el Parlamento Británico se impone automáticamente a las leyes norirlandesas o escocesas, salvo que la propia ley limite su ámbito de aplicación.

Desde estos criterios debemos entender que la educación en el Reino Unido es un objeto gestionado por cada uno de los territorios que lo componen (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte) según sus competencias.

Es importante también mencionar que no existe una Constitución del Reino Unido en el sentido general y como documento único, en el sentido general de países de nuestro entorno, o de algunos de los mencionados en este estudio internacional; en ese sentido se entiende como constitución del Reino Unido al conjunto de leyes y principios bajo los cuales se gobierna el Reino Unido, por lo que no podemos buscar un cuerpo estricto constitucional y único donde se recoja el derecho a la educación y cómo se desarrolla (al estilo español), pero debemos referirnos a la normativa estrictamente educativa que forma parte de todo ese tejido normativo de carácter constitucional o básico. A este respecto debemos referirnos, tal y como menciona Taylor (1977) a la *Educación Act*, aunque Taylor menciona como referente, por la cronología del propio artículo, la correspondiente a 1944¹⁵⁸, y en la actualidad es necesario referirse a la denominada *Education Act* de 2005^{159 160}.

Puntualmente también hay que mencionar que para la educación superior, el desarrollo de la Calidad Educativa corresponde a la Agencia para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (*Quality Assurance Agency for Higher Education -QAA-*)¹⁶¹, entidad que supervisa y controla la calidad universitaria y de la educación superior en todo el Reino Unido, como organismo independiente de los distintos gobiernos.

Comencemos en este momento el contenido del epígrafe. Tal y como apunta Galicia Mangas (2016), en Inglaterra la responsabilidad en el ámbito educativo recae desde el año 2010 sobre el dominado Ministerio de Educación (*Department for Education -DFE-*)¹⁶². El Ministerio de educación asume competencias en materia de educación preescolar o infantil, educación primaria y secundaria, especialmente en lo relativo a la planificación y supervisión de dichas enseñanzas; apoyo a los profesionales de la enseñanza; ayuda a los menores y jóvenes desfavorecidos; y supervisión de los servicios locales encargados de la protección y apoyo a la infancia.

También desarrolla su actividad en Inglaterra la Agencia para la Financiación de la Educación y las Aptitudes (*Education & Skills Funding Agency -ESFA-*)¹⁶³, entidad que gestiona el presupuesto

¹⁵⁸ Acceso al texto consolidado de la “Education act” de 1944 en la url:

<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/7-8/31/contents/enacted> el 14 de mayo de 2022.

¹⁵⁹ Acceso en la url: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/18/contents> el 14 de mayo de 2022

¹⁶⁰ Se puede acceder a toda la normativa británica en la url: <https://www.legislation.gov.uk/> con acceso el 14 de mayo de 2022.

¹⁶¹ Se puede ampliar información en la url: <https://www.qaa.ac.uk/> con acceso el 14 de mayo de 2022.

¹⁶² Puede ampliarse información en la web del Department for Education -DFE- en la url: <https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-education> con acceso el 14 de mayo de 2022.

¹⁶³ Puede ampliarse información en la web *Education & Skills Funding Agency*, en la url: <https://www.gov.uk/government/organisations/education-and-skills-funding-agency> con acceso el 14 de mayo de 2022.

anual destinado a la financiación de la enseñanza proporcionada por el Estado a los niños entre 3 y 16 años, así como a los jóvenes entre los 16 y 19 años. La institución también gestiona el presupuesto destinado a los estudiantes con dificultades de aprendizaje y discapacitados entre los 3 y los 25 años. Con estos fondos se cubre igualmente el mantenimiento de los edificios de los centros docentes y se asignan, a través de las autoridades locales, cantidades para los centros subvencionados o con conciertos y a las denominadas *Voluntary aided schools* o escuelas parcialmente financiadas por el Estado en las que, una entidad como Fundación contribuye a los costes de construcción y ejercita, con un importante grado de autonomía, una autoridad en el funcionamiento del centro docente. La ESFA también interviene en el ámbito de la educación superior y formación permanente de jóvenes y personas adultas, con la población no integradas en el sistema educativo o formativo y carente de empleo.

Es necesario mencionar también a la Agencia para el Control de los Estándares Educativos y Exámenes (*Standards and Testing Agency* -STA-)¹⁶⁴ como a agencia que contribuye al desarrollo de la labor del Ministerio de Educación y se encarga de desarrollar las pruebas curriculares nacionales y de prestar el apoyo a los centros docentes durante su realización, para comprobar si se han alcanzado los criterios establecidos por el Departamento de las Cualificaciones o Reglamentación de Reconocimiento (*The Office of Qualifications and Examinations Regulation* -Ofqual-)¹⁶⁵. Esta agencia también se encarga de la propuesta de revisión o control de la evaluación del profesorado y de las pruebas para evaluar el desarrollo profesional de los profesores en su fase de prácticas.

Las competencias que tenía asignadas la Agencia Nacional para la Enseñanza y el Liderazgo (*National College for Teaching and Leadership* -NCTL-) hasta marzo de 2018, en aspectos tan nucleares para el contexto educativo, como el ingreso en la profesión docente, la formación del profesorado para la dirección de los centros docentes, la formación continua del profesorado experimentado, la gestión y audiencias de malas conductas y el desarrollo del liderazgo en el ámbito educativo, fueron asumidas, a partir de esa fecha por el propio Ministerio de Educación y por la Agencia de Regulación Docente (*Teaching Regulation Agency* -TRA-)¹⁶⁶

Tal y como menciona Galicia Mangas (2016), consideramos que es de gran importancia para este estudio el que ya hemos citado como Departamento para la Calidad de la Educación, Servicios de Atención a la Infancia y Aptitudes (*Office for Standards in Education, Children's Services and Skills* -OFSTED-), y cuyas atribuciones fundamentales giran en torno a la inspección de la enseñanza, la formación inicial del profesorado, el aprendizaje basado en la formación laboral, la educación de adultos, el trabajo juvenil, la atención a la infancia e inspección de servicios menores, etc. Esta percepción ha sido recientemente señalada de forma divulgativa por Sims (2022).

En este contexto de descentralización encontramos organismos encargados de coordinar y regular el traslado y el reconocimiento de las competencias académicas y profesionales

¹⁶⁴ Se puede ampliar información en la web de la *Standards and Testing Agency* en la url:

<https://www.gov.uk/government/organisations/standards-and-testing-agency> con acceso el 14 de mayo de 2022.

¹⁶⁵ Se puede ampliar información en la web de la *Office of Qualifications and Examinations Regulation* en la url: <https://www.gov.uk/government/organisations/ofqual> con acceso el 14 de mayo de 2022.

¹⁶⁶ Se puede ampliar información en la web *Teaching Regulation Agency*, en la url:

<https://www.gov.uk/government/organisations/teaching-regulation-agency> con acceso el 14 de mayo de 2022.

adquiridas en cualquiera de los países que lo componen, así como también dentro del ámbito de la Unión Europea¹⁶⁷; todos estos organismos actúan de forma coordinada.

Así como en Gales, podemos citar el Departamento de Infancia, Educación, Aprendizaje Permanente y Aptitudes (*Department for Children Education, Lifelong Learning and Skills - DCELLS-*)¹⁶⁸ que actúa como organizador de las competencias generales y profesionales adquiridas y su acreditación de acuerdo con los estándares establecidos, así también como supervisor encargado de la evaluación y reconocimiento de las instituciones, organizaciones o entidades autorizadas para reconocer dichas cualificaciones, no obstante, no es competente para la regulación de los títulos universitarios.

En Inglaterra dichas funciones son desarrolladas por el Departamento de las Cualificaciones y Reglamentación de Reconocimientos (*The Office of Qualifications and Examinations Regulation -Ofqual-*) que ya hemos citado, que integra entre sus competencias las relativas a las cualificaciones académicas y profesionales, reconocimiento de las mismas y evaluaciones.

En Irlanda del Norte las competencias son ejercidas por el Consejo para el Currículo, los Reconocimientos y las Evaluaciones (*Council for the Curriculum, Examinations and Assessment - CCEA-*), aunque la parte correspondiente a la regulación de las cualificaciones profesionales la realiza el citado *Ofqual*.

En Escocia la competencia corresponde a la Autoridad Escocesa para las Cualificaciones (*Scottish Qualifications Authority -SQA-*), no incluyendo tampoco entre sus funciones las relativas a los títulos universitarios de grado.

Pasemos ahora a realizar una descripción sencilla de la organización de las etapas educativas en el Reino Unido.

La escolarización obligatoria comienza a los 5 años, excepto en el caso de Irlanda del norte, donde se comienza a los 4, y se extiende hasta los 16, tal y como encontramos en la web de Eurydice. No obstante, una parte importante de los alumnos siguen estudiando posteriormente en la educación postobligatoria. Es preciso apuntar, no obstante, que, en el caso de Inglaterra, el Gobierno recibió el encargo de prorrogar la edad de escolarización obligatoria hasta los 17 años de edad, a partir del año 2013, y hasta los 18 años, a partir del año 2015. Por ello, actualmente los ingleses continúan su educación obligatoria, con fórmulas a tiempo parcial, al superar los 16 años de edad. Igualmente es habitual que los niños inicien su escolarización con anterioridad a la etapa de educación obligatoria, pudiendo hacerlo a partir de los 2 años de edad en los casos de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte y de los 3 años en el caso de Escocia.

En Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte la etapa de educación infantil, de carácter no obligatoria, puede cursarse tanto en escuelas primarias (*primary schools*), como en guarderías infantiles (*nursery schools*), sostenidas con fondos públicos, o bien a través de centros privados (constituidos de forma comunitaria o con aportaciones o contribuciones voluntarias y

¹⁶⁷ Como apunta Galicia Mangas (2016, 227) se sigue de esta forma el modelo del Marco Europeo de las Cualificaciones, más conocido por sus siglas EQF (European Qualifications Framework).

Se puede ampliar información en la web *European qualifications framework (EQF)* en la url: <https://www.cedefop.europa.eu/es/projects/european-qualifications-framework-eqf> con acceso el 15 de mayo de 2022.

¹⁶⁸ Se puede ampliar información en la web *Department for Children Education, Lifelong Learning and Skills* en la url: <https://data.gov.uk/dataset/c70b4db8-88b6-43d2-85e7-cf509fa0c794/departments-for-children-education-lifelong-learning-and-skills-december-2015-generalised-clipped-boundaries-in-wales> con acceso el 15 de mayo de 2022.

donaciones *-voluntary settings-*), o totalmente privados y financiados con las cuotas de los padres (*private settings*). En el caso de Escocia, la educación infantil no obligatoria se puede cursar en centros de educación infantil preescolar (*pre-school education centres*) de carácter público, como privado.

La educación primaria se imparte en las escuelas de educación primaria (*primary schools*) desde los 5 hasta los 11 años de edad, tanto en Inglaterra, como en Gales, desde los cuatro hasta los 11 años en Irlanda del Norte, y desde los 5 hasta los 12 años en Escocia.

La educación secundaria se puede impartir en centros de educación secundaria (*secondary schools*), a partir de los 16 años, tanto en los mismos centros de educación secundaria, ya citados, como en las instituciones de educación superior o posobligatoria (*further education institutions*). Esta educación puede desarrollarse desde los 11 a los 18 años, en los casos de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. En el caso de Escocia, se desarrolla desde los 12 a los 18 años en los centros de educación secundaria ordinarios, y de los 16 a los 19 años en las instituciones de educación superior o post obligatoria.

Dentro de la educación obligatoria, los niveles educativos en el Reino Unido están a su vez estructurados en etapas o ciclos: la educación preescolar o preparatoria, que recibe diferentes denominaciones: en Inglaterra recibe la denominación de *Early Years Foundation Stage* y abarca desde los dos a los cinco años y se organiza en el primer ciclo (*key stage 1*); el segundo ciclo (*key stage 2*), el tercer ciclo (*key stage 3*), y por último el cuarto ciclo (*key stage 4*).

Estructura del Sistema Educativo en Inglaterra (Eurydice)¹⁶⁹

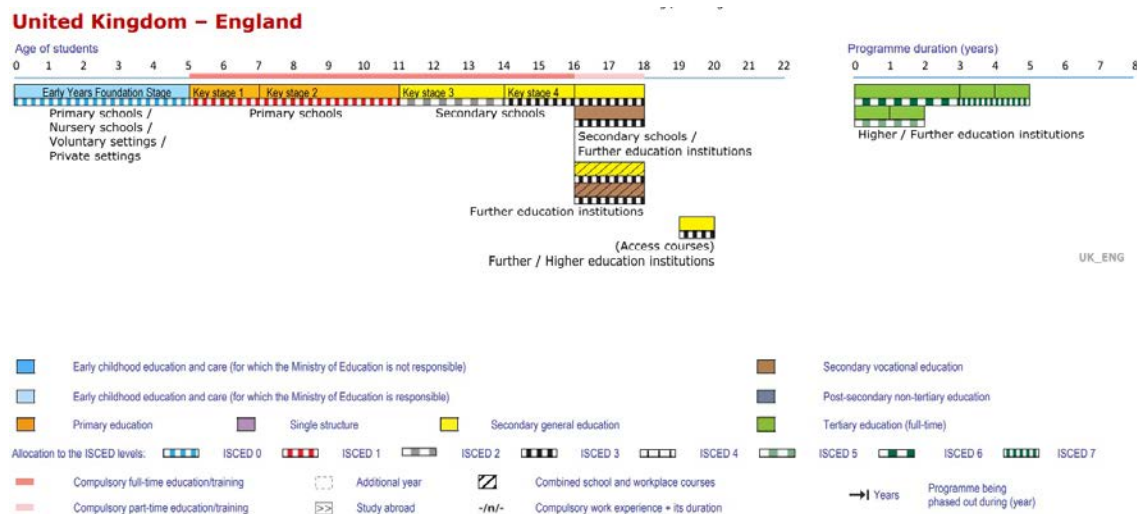


Figura 3.4. Estructura del sistema educativo en Inglaterra.

Galicia Mangas (2016) apunta que existen aspectos importantes a tomar en consideración en cuanto a las diferencias de modelo educativo del Reino Unido, con otros sistemas, en concreto con el español, como son la aplicación de criterios cronológicos o de edad diferentes para asignar a los alumnos a un curso concreto; la pluralidad de tipos o categorías de centros docentes existentes; o la posibilidad reconocida de educar a los hijos dentro del ámbito familiar, sin acudir a los establecimientos educativos, instituciones o centros docentes.

¹⁶⁹ Imagen estraida de Baïdak & Sicurella (2019).

Sin embargo, existen aspectos comunes con el modelo educativo español, como la existencia de un currículo nacional (*National Curriculum*) que establece el marco común de la enseñanza mínima para todo el Reino Unido, aunque no todos los tipos de centros docentes se ven obligados por igual a seguir este currículo nacional.

- Antecedentes históricos de la inspección de educación en el Reino Unido.

El antecedente fundamental del denominado actualmente como Departamento para la Calidad de la Educación, Servicios de Atención a la Infancia y Aptitudes (*Office for Standards in Education, Children's Services and Skills* -OFSTED-) se encuentra, claramente, en la institución de los inspectores de Su Majestad (*Her Majesty's Inspectorate* -HMI-).

La doctrina mayoritaria señala que pocos cuerpos se han mantenido históricamente tan fieles a sus principios fundacionales como los Inspectores de Su Majestad, al menos, durante sus primeros 150 años de vida.

A principios del siglo XIX las escuelas primarias o elementales eran sostenidas mediante financiación privada o de entidades o sociedades de carácter religioso, al no existir un sistema público de educación. Los primeros pasos de un sistema elemental no estatal de inspección se encuentran en esta época. La *British and Foreign School Society* (BFSS), de carácter no confesional, y la *National Society*, de carácter religioso, formada por la Iglesia de Inglaterra, designaron sus propios inspectores para controlar los fondos destinados a la financiación de las escuelas por ellas creadas¹⁷⁰. Este es el origen de la Inspección de Educación en Inglaterra, y en concreto del Cuerpo de los Inspectores de su Majestad (HMI), muy estrechamente vinculados al control de fondos públicos destinados a la financiación de la educación.

En 1823, la *British and Foreign School Society* pidió al Gobierno una subvención para contribuir a sufragar los gastos derivados del mantenimiento de sus escuelas, solicitud que fue rechazada por el Gobierno al temer que se pudiera crear un precedente de modelo de financiación. Más tarde, en 1833, la Cámara de los Comunes rechazó una propuesta de creación de un sistema nacional de educación, aunque finalmente el Gobierno acabó concediendo una ayuda, para colaborar, junto con las aportaciones de fondos de origen privado, a la construcción de casas escuela para educación de niños desfavorecidos.

La expectación por la forma en que las sociedades promotoras podían gastar los fondos o ayudas, impulsó definitivamente la creación de la Inspección (*Her Majesty's Inspectorate*) en 1839, diez años antes que, en España, tras solicitar en 1938 el Gobierno a la *National Society* la inspección de sus escuelas, inspección que no fue fácilmente aceptada, pero que se llevó a cabo por la necesidad de fondos del Gobierno, por parte de las entidades religiosas. En ese mismo año de 1838, en el debate parlamentario sobre educación, se conminó al Gobierno a establecer su propio modelo y sistema de inspección sobre las escuelas que recibían ayudas o fondos públicos.

A diferencia del ámbito laboral, en el que ya existía una legislación incipiente aplicable por los inspectores de trabajo (*Factory Inspectors*), muy parecido al modelo español, como veremos en el próximo estudio, la inexistencia de un sistema público educativo, y por tanto de una normativa reguladora del mismo, impedía en esta primera fase la ejecución o cumplimiento de normas de garantía dictadas específicamente y con ello, de un sistema reglado de inspección.

¹⁷⁰ Galicia Mangas (2016) cita una interesante tesis doctoral de Bagworth (1998). *The role of agents, visitors and inspectors in the development of elementary education c. 1826-c. 1870*.

En esta primera fase de creación de la Inspección, si bien la Iglesia anglicana no pudo evitar el establecimiento del sistema, sí pudo al menos influir en la designación de los inspectores, que habían de ser aprobados por los arzobispados. Además, una vez finalizada la inspección de las escuelas nacionales (*National Schools*), debía remitirse el correspondiente informe, tanto al arzobispado, como al Obispado de la diócesis. De la misma forma, la enseñanza religiosa se inspeccionaba con las directrices derivadas de los acuerdos alcanzados entre el arzobispado y el Gobierno.

De esta forma, el nombramiento de los dos primeros Inspectores de Su Majestad se produjo en diciembre de 1839 y se les encomendó una tarea más centrada en el asesoramiento y apoyo a los centros que a la labor estricta de control¹⁷¹.

Además, tras la creación de la Escuela Central de Diseño en Londres en 1837, y de otras escuelas provinciales del mismo tipo hacia 1841, el director fue propuesto para desempeñar el cargo de inspector de las restantes escuelas. El primer inspector a tiempo completo *de ciencia y arte* fue nombrado en 1850, aunque no quedó incorporado en el Cuerpo de Inspectores de Su Majestad (HMI) pues, aunque el Departamento de Ciencia y Arte del *South Kensington* fue transferido desde el Departamento de Comercio e incorporado al Departamento de Educación en 1856, ambas inspecciones permanecieron separadas e independientes. La integración definitiva de los inspectores de Ciencia y Arte en el Cuerpo de Inspectores de Su Majestad se produjo posteriormente, tras la promulgación de la Ley de Creación del Consejo de Educación de Inglaterra y Gales de 1899 (*Board of Education Act*), sustituyendo dicho Consejo a los citados Departamentos de Educación y de Ciencia y Arte.

Galicia Mangas (2016) apunta que el primer aumento de plantilla de los Inspectores de Su Majestad se produjo en el año 1844, con la intención de que cada escuela fuera inspeccionada dos veces al año, aunque este objetivo no llegó a cumplirse debido al aumento de los números de escuelas y en las tareas de los inspectores. El mismo autor apunta que probablemente las primeras facultades administrativas de los inspectores sean las recogidas en las Actas del Comité del Consejo de Educación (*Committee of Council on Education*), publicadas en 1847, en relación con los procedimientos administrativos de evaluación del profesorado en prácticas (*Pupil Teachers*).

Desde 1848, los inspectores se encargaron también de la tarea de organizar las pruebas de evaluación de los profesores veteranos para la obtención de las denominadas certificaciones de mérito (*certificate of merit*).

La suma de tareas de carácter administrativo disminuyó la capacidad de los inspectores para realizar su función básica de inspección de las escuelas, obligándoles a centrarse fundamentalmente en aquellas que se nutrían de fondos públicos.

A partir de 1850 la carga de trabajo de los Inspectores de Su Majestad fue aumentando constantemente, lo que obligó al nombramiento de nuevos inspectores que recibieron la denominación de inspectores adjuntos (*assistant inspectors*). En esta misma década, el número de inspectores fue también aumentando, pasando de 17 al 48, creándose una importante polémica sobre la preparación y el conocimiento profesional de los nuevos inspectores. La dificultad para incorporar personal cualificado se unió a una evidente falta de estructura adecuada en la institución de la inspección.

En el mismo período la inspección fue dividida en siete apartados de conformidad con su confesionalidad religiosa, y así desde 1846 se desarrollaron distintos encuentros para concretar

¹⁷¹ Esa es la percepción de Galicia Mangas (2016, 231) tras el acceso y estudio de las actas de la Comisión del Consejo de Educación de 1841, 1847 y 1854).

los modelos de inspección llevados a cabo. No obstante, dichos encuentros fueron suspendidos en 1859 y no se reanudaron hasta veinte años más tarde.

Las decisiones de asignación de ayudas a las escuelas se vieron modificadas al pasar a concederse, con carácter individualizado, es decir, para alumnos concretos y no para el centro docente y conforme con los condicionantes establecidos por los inspectores mediante un examen de los alumnos y de sus circunstancias. Esta fórmula generó un precedente que fue tenido en cuenta en la elaboración del llamado Código Revisado de la Educación (*Revised Code for Education*) de 1862 relativo al modelo de financiación de la enseñanza.

Galicia Mangas (2016) continúa describiendo que en 1858 se constituyó la denominada Comisión Real para el Estudio del Estado de la Educación Popular en Inglaterra –llamada también como *Comisión Newcastle* por el nombre de su presidente, el duque de Newcastle-, con la finalidad de estudiar e informar sobre el estado de la educación pública, y para examinar e informar sobre las medidas necesarias para la extensión de la instrucción elemental a todas las clases sociales. Finalmente se publicó su informe en 1861, haciendo referencia a los beneficios de la labor de inspección para la enseñanza, aunque también recogían críticas sobre las diferentes pautas o sistemas de inspección llevados a cabo y su falta de homogeneidad, afirmando en algún caso que había tantos modelos de inspección como inspectores. En el desarrollo del trabajo de la Comisión no se tuvo muy en cuenta a los inspectores, cuya función se había debilitado sensiblemente, si bien dicho cuerpo contaba con un importante apoyo entre sectores tan relevantes en el ámbito educativo, como los directores o los profesores.

De esta forma se inició una nueva etapa en las relaciones entre el Departamento de Educación y la Inspección, que no resultó excesivamente favorable al Cuerpo de Inspectores de Su Majestad, aunque mantuviera, a duras penas, su independencia.

Dejando al lado la tortuosa y pormenorizada descripción que realiza Galicia Mangas (2016) de la historia de la Inspección en el Reino Unido, y específicamente en Inglaterra, debemos situarnos en el momento actual y con ello al nacimiento del denominado Departamento para la Calidad de la Educación, Servicios de Atención a la Infancia y Aptitudes (OFSTED). Este Departamento no ministerial del Gobierno británico, que tuvo su origen en el Cuerpo de Inspectores de Su Majestad (HMI), surgió a raíz de un amplio debate social y político sobre el modelo educativo británico, desarrollado desde finales de los años 70. El Gobierno de Margaret Thatcher, en su última etapa asumió el tema educativo como una de sus prioridades y suscitó la creación de un currículo nacional en 1988.

Por otra parte, el Gobierno de John Major decidió en 1990 la reforma de la Inspección de Educación. Hasta ese momento, la inspección de los centros educativos había sido asumida por los Inspectores de Su Majestad a escala nacional (HMI), y por las Autoridades Locales de Educación (LEAs), cada una en su respectiva área territorial, mediante equipos de inspectores que desarrollaban labores de inspección y de asesoramiento. Esta variedad de regímenes hizo que el Gobierno se planteara la necesidad de establecer un sistema unido de inspección, que finalmente vio la luz mediante la Ley de Educación de 1992 (*Education -Schools- Act 1992*), norma a partir de la cual nació lo que inicialmente se denominó Departamento para la Calidad de la Educación (*Office for Standards in Education -OFSTED-*).

A partir de la entrada en vigor de la citada Ley de Educación de 1992, la Inspección de Educación (*Her Majesty's Inspectorate -HMI-*) podía supervisar la inspección de cada centro docente

sostenido con fondos públicos, y hacer públicos sus informes, en lugar de remitirlos exclusivamente a la Secretaría de Estado de Educación¹⁷².

De esta forma y desde septiembre del 2001, el Departamento para la Calidad de la Educación asumió la competencia en materia de registro e inspección de las guarderías y centros de día para la atención y cuidado de niños de primera edad en Inglaterra.

Seis años más tarde, y en abril de 2007, el mismo Departamento para la Calidad de la Educación (OFSTED) se agrupó con la denominada Inspección de Educación de Adultos (*Adult Learning Inspectorate -ALI-*), para incorporar también el control de la educación de los mayores de 16 años en centros docentes sostenidos con fondos públicos; con el área de Servicios Sociales para la infancia (*Commission for Social Care Inspection -CSCI-*); y con el área inspectora del Servicio de Atención jurídica a la Infancia y a la Familia (*inspection remit of Children and Family Court Advisory and Support Service -CAFCASS-*), del Cuerpo de Inspectores de Su Majestad de la Administración de Justicia (*Her Majesty's Inspectorate of Court Administration -HMICA-*). Esta agrupación de instituciones inspectoras conforma lo que actualmente conocemos como Departamento para la Calidad de la Educación, Servicios de Atención a la Infancia y Aptitudes (*Office for Standards in Education, Children's Services and Skills*), aunque se siguen identificando de forma abreviada con el acrónimo inicial OFSTED. Debemos recalcar que este departamento no es competente para inspeccionar los institutos de educación superior, ni las universidades, ya que dicha tarea es asumida por la conocida Agencia para el Aseguramiento de la Calidad (*Quality Assurance Agency -QAA-*).

- La Inspección de Educación de Inglaterra en la actualidad.

. Organización y estructura.

Continuando con el estudio pormenorizado de Galicia Mangas (2016), como elemento básico de la estructura organizativa del Departamento para la Calidad de la Educación, Servicios de Atención a la Infancia y Aptitudes (*Office for Standards in Education, Children's Services and Skills -OFSTED-*) hay que recordar que es un departamento gubernamental no adscrito a ningún ministerio, y dotado de independencia para el desarrollo de su labor. Esta independencia se manifiesta en el hecho de que el Departamento para la Calidad de la Educación, Servicios de Atención a la Infancia y Aptitudes, solo es responsable y rinde cuentas ante la comisión parlamentaria (*Select Committee*)¹⁷³ encargada de temas relacionados con la educación de la Cámara de los Comunes. Su ocupación básica abarca tareas vinculadas a la inspección y la regulación de la educación, la protección de la infancia y la juventud.

Igualmente, en el aspecto económico se garantiza la independencia del Departamento, que debe rendir cuentas únicamente ante el Parlamento para garantizar que todos los fondos puestos a su disposición han sido utilizados adecuadamente, y conforme a una correcta relación calidad-precio ajustada o apropiada.

¹⁷² Se pueden acceder a los distintos informes, organizados cronológicamente y por distintas categorías en la url: <https://reports.ofsted.gov.uk/> con acceso el 16 de mayo de 2022.

¹⁷³ Como apunta Galicia Mangas (2016, 244) la Cámara de los Comunes tiene comisiones parlamentarias que examinan el trabajo de los distintos departamentos ministeriales o no ministeriales, como es el caso del OFSTED, y en especial aspectos como el gasto, las políticas y la administración de dichos departamentos. Estas comisiones están compuestas por, al menos, once miembros.

Como responsable máximo de la OFSTED, en Inglaterra se sitúa el Inspector Jefe de Su Majestad (*Her Majesty's Chief Inspector*) que realiza funciones relativas a la organización, dirección y gestión económica y de recursos humanos de la institución¹⁷⁴.

La Inspectora jefe es resguardada en su labor por un Consejo Ejecutivo o la Junta ejecutiva de directores (*Executive Board of Directors*), compuesto por la propio Inspectora Jefe de Su Majestad y siete responsables de áreas estratégicas y organizativas.

Además, la Inspectora Jefe de Su Majestad (HMCI) es auxiliada en sus funciones por otro Consejo (*OFSTED Board*) compuesto por ella misma, un presidente y otros miembros. Este Consejo determina las prioridades estratégicas de la Inspectora Jefe de Su Majestad, en relación con las competencias y funciones de su cargo y de la propia institución; marca los objetivos y metas relacionados con sus prioridades y garantiza que las funciones del Inspector Jefe son desarrolladas de manera eficaz y eficiente.

A lo relativo a la estructura jerárquica, funcional y geográfica, la Inspección de Educación se estructura conforme a los siguientes criterios:

- A la cabeza se sitúa la Inspector Jefe de Su Majestad (*Her Majesty's Chief Inspector*).
- El asesoramiento directo de la Inspectora Jefe en esta estructura jerárquica es asumida por un Director General Ejecutivo (*Chief Operating Officer*) del que, a su vez, depende un director corporativo de servicios (*Director, Corporate Services*). Estos cargos mantienen una relación funcional con el resto de los miembros del equipo directivo de la institución, salvo con el director de centros docentes.
- En relación de dependencia jerárquica directa con la Inspectora Jefe localizamos a una serie de responsables o directores, la mayoría de los cuales asumen una doble función o competencia, tanto de orden geográfico como material. Entre estos directores encontramos al ya citado director de centros docentes (*Director Schools*); a los directores de zonas (*Regional Director, South; Regional Director, North East; Regional Director, North West; Regional Director, South West Regional; Director, London; Regional Director, East Midlands; Regional Director, West Midlands*); que acompañan esa competencia geográfica, como se ha mencionado, con otras materias como, la dirección para asuntos relacionados con la calidad de la inspección y la formación (*Director, Inspection Quality and Training*); la dirección para asuntos relacionados con la educación infantil o temprana (*Director, Early Education*); la dirección para asuntos relacionados con la formación inicial del profesorado (*Director, Initial Teacher Formation*); la dirección para asuntos relacionados con las escuelas independientes (*Director, Independent Schools*); la dirección para asuntos relacionados con los servicios sociales (*Director, Social Care*); la dirección para asuntos relacionados con las Autoridades Locales de Educación (*Director, Local Authorities*); y la dirección para asuntos relacionados con la educación permanente de adultos y habilidades o destrezas (*Director, Further Education and Skills*).
- El pilar del sistema se sitúan en los Inspectores de Su Majestad (*Her Majesty's Inspectors*) directamente contratados y al servicio del Departamento para la Calidad de la Educación, Servicios de Atención a la Infancia y Aptitudes (OFSTED), y que tiene como misión fundamental la inspección y el asesoramiento de los centros docentes y de los prestadores o suministradores de servicios sociales.

¹⁷⁴ En la actualidad, y desde 2017, la Inspectora jefe de Su Majestad (HMCI) es Amanda Spielman. Se puede ampliar información en la url: <https://www.gov.uk/government/people/amanda-spiel-man> con acceso el 16 de mayo de 2022.

- Junto con los Inspectores de Su Majestad, y en colaboración con los mismos, encontramos la figura de los denominados Inspectores Adicionales (*Additional Inspectors*), con competencia en el ámbito educativo ordinario, de la educación de adultos y de las aptitudes. Estos inspectores adicionales han sido contratados y formados hasta septiembre de 2015 por entidades externas ajenas al OFSTED, suministradoras de servicios de inspección (*Inspection Service Providers -ISPs-*). Como apunta Galicia Mangas (2016) desde septiembre de 2015 es el propio OFSTED el que se encarga de la contratación de estos inspectores adicionales¹⁷⁵.

- Finalmente y también en colaboración con los Inspectores de Su Majestad, con competencia en el ámbito de los servicios sociales e infancia, nos encontramos con los inspectores de servicios sociales (*Regulatory Inspectors*) y con los inspectores para la infancia (*Early Years Inspectors*), que son contratados a través de las citadas empresas suministradoras de servicios de inspección.

- Funciones de los inspectores en Inglaterra.

A fin de delimitar las funciones asignadas a los Inspectores de Educación en Inglaterra y utilizando como base los estudios realizados por Galicia Mangas (2016, 2019), debemos comenzar recordando que el Departamento para la Calidad del de la Educación, Servicios de Atención a la Infancia y Aptitudes de Inglaterra (OFSTED) es un departamento no ministerial del Gobierno que tiene como misión fundamental la inspección de la educación y de los servicios relacionados con la infancia y el aprendizaje.

Las funciones básicas que desempeña el OFSTED para cumplir las misiones asignadas son¹⁷⁶:

- La inscripción, registro e inspección de los servicios de cuidado de la infancia y educación infantil.
- La inscripción, registro e inspección de los planes o acuerdos que tengan como finalidad la atención, cuidado y apoyo a la infancia y la juventud.
- La inspección de todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos y de algunas escuelas independientes.
- La inspección y evaluación de los servicios de atención a la infancia suministrados o provistos por las autoridades locales en sus áreas de competencia, incluida en las inspecciones para la protección, amparo, defensa y cuidado de los niños.
- La inspección de la educación superior.

¹⁷⁵ Es interesante la información sobre las ofertas laborales que realiza la OFSTED: desde inspectores hasta editores, especialistas en TI, asesores de políticas, analistas de datos, contadores y administradores. Se puede ampliar información en la url:

<https://www.gov.uk/government/organisations/ofsted/about/recruitment> con acceso el 16 de mayo de 2022

¹⁷⁶ Galicia Mangas (2016) puntualiza que estas funciones básicas genéricas del OFSTED, pero deben completarse con las asignadas a los órganos concretos que lo integran, o a la propia oficina o departamento globalmente considerado. A este respecto cita los arts.116 a 119 de la Ley de Educación e Inspecciones de 2006 (*Education and Inspections Act 2006*), dedicados a las funciones del OFSTED y del inspector jefe y su cumplimiento; al art. 54 de la Ley de Aprendizaje y Aptitudes de 2000 (*Learning and Skills Act 2000*), que regula las funciones de la Inspección y del inspector jefe; y la Ley de Inspecciones de Escuelas de 1996 (*School Inspections Act 1996*) en cuyos arts. 2 y 5 contemplan las funciones del inspector jefe para Inglaterra, y del inspector jefe para Gales.

- La inspección de todos los centros de educación y formación de adultos sostenidos con fondos públicos, y de algunos sostenidos con fondos privados.
- La inspección de la formación del profesorado.
- La inspección del servicio de atención jurídica a la infancia y a la familia.
- la protección y promoción de los derechos y del bienestar de los niños que viven fuera de sus hogares o reciben atención social, mediante la actuación del comisionado para los derechos de la infancia (*The Children's Commissioner for England*).

Es importante no perder de vista que el OFSTED, en su condición de organismo independiente, proporciona a las distintas instituciones importante información, recomendaciones prácticas y asesoramiento en materia de calidad de los servicios que atiende. Igualmente asegura que se realice una correcta gestión económica de dichos servicios y que los fondos públicos hayan sido invertidos adecuadamente.

De esta forma, la Ley de Aprendizaje y Aptitudes de 2000 (*Learning and Skills 2000*), de aplicación en Inglaterra y en Gales, al regular las funciones de la Inspección y del Inspector Jefe en su artículo 54, incluye las obligaciones de mantener informados a los órganos competentes del Departamento de Educación sobre la calidad de la educación y formación; sobre los estándares educativos alcanzados; y sobre el uso adecuado de los fondos públicos destinados a la educación y formación.

De esta forma, al igual que sucedía con los otros modelos estudiados, las funciones básicas del Departamento para la Calidad de la Educación, Servicios de Atención a la Infancia y Aptitudes de Inglaterra giran en torno a la inspección y en el asesoramiento.

Ciñéndonos en las funciones de inspección del ámbito educativo, por ser el objeto primordial de esta tesis, debemos hacer el necesario recorrido por las principales fases del sistema vigente de inspección de los centros educativos.

Su regulación esencial, tal y como señala Galicia Mangas (2016, 261) está contenida en la Ley de Educación de 2005 (*Education Act 2005*), y en concreto en su artículo 5 con las modificaciones incorporadas por la Ley de Educación de 2011 (*Education Act 2011*).

La inspección de los centros docentes¹⁷⁷ incluye una fase previa o preparatoria. En esta fase inicial el inspector que va a dirigir o coordinar el equipo de inspección debe preparar y hacer llegar a los demás inspectores de dicho equipo la información relevante sobre el desempeño actualizado de sus objetivos y misiones por parte del centro docente, y en especial, de su cumplimiento desde la última inspección realizada. De esta forma los inspectores del equipo han

¹⁷⁷ Puede ampliarse información sobre el modo de realizar las inspecciones consultando el manual de inspección del OFSTED de abril de 2022 (School inspection handbook updated 14 April 2022) en la url: <https://www.gov.uk/government/publications/school-inspection-handbook-eif/school-inspection-handbook> con acceso el 18 de mayo de 2022.

El manual se presenta como una guía para los inspectores sobre cómo realizar inspecciones escolares, pero también se pone a disposición de las escuelas y otras organizaciones para garantizar la transparencia, así como que estén informados sobre los procesos y procedimientos de inspección. El manual busca equilibrar la necesidad de consistencia en las inspecciones con la flexibilidad requerida para responder a las circunstancias individuales de cada escuela. El manual no debe considerarse como un conjunto de reglas inflexibles, sino como una descripción de los procedimientos de inspección. El manual puntualiza que los inspectores usarán su juicio profesional cuando lo usen.

de poder hacerse una idea inicial y global de la labor académica del centro inspeccionado, para poder planificar adecuadamente la inspección posterior.

En esta fase de preparación inicial se reúne cualquier otra documentación relevante sobre el centro que sea de dominio público, y que haya podido ser publicada. En su caso, los inspectores realizan búsquedas en internet como parte de ese proceso de inspección previa, para observar si existen temas a los que deba prestarse atención en la inspección propiamente dicha, como cuestiones de dirección o gestión, protección y seguridad, etc.

Una vez compilada la información inicial, el inspector que coordina el equipo debe preparar y entregar un breve manual de instrucciones a los demás miembros del equipo, que incorpora la información esencial sobre el centro inspeccionado y el cronograma de la inspección, un breve análisis de la información obtenida en la fase previa a la inspección, así como un guion de la labor de inspección durante el primer día de trabajo en el centro docente.

Seguidamente el inspector coordinador distribuye al equipo de inspección las labores concretas, si bien todos los miembros deben contribuir a la evaluación final de los elementos clave de la inspección y también a la evaluación sobre la calidad de la educación ofrecida.

Además de la legislación vigente, el equipo de inspectores debe conocer y aplicar en la inspección una serie de medidas dispuestas en diversos documentos y normas de rango reglamentario.

En esta fase previa los inspectores toman en consideración la opinión de las familias de los alumnos del centro objeto de inspección. La encuesta para conocer dicho parecer se notifica a los padres a la par que la inspección, mediante una carta remitida al centro, siendo este el responsable de hacérsela llegar y animarles a cumplimentarla. Los padres pueden rellenar la encuesta por internet¹⁷⁸. En aquellos casos en los que la respuesta de los padres a la encuesta sea escasa, los inspectores pueden articular las medidas necesarias para conocer su parecer durante el proceso de directo de inspección.

De esta forma, antes de comenzar el proceso de inspección en sentido estricto, el inspector responsable y coordinador del equipo de inspección notificar al centro la inspección, si bien pueden realizarse también inspecciones sin previo aviso¹⁷⁹.

El contacto inicial con el centro permite a los inspectores conseguir diversas informaciones como las relativas al número de alumnos; lenguajes o sistemas de comunicación utilizados (por ej., lengua de signos para alumnos con discapacidad auditiva), y solicitar la puesta a disposición del equipo de inspección de documentos con la propia autoevaluación del centro docente; el plan de mejora; el cuadrante horario; los registros de incidencias relativas a faltas de comportamiento, actos racistas, acoso escolar, etc.; el listados actualizados de asistencia; los documentos de dirección; los documentos de evaluación de los alumnos y del profesorado; así como los informes de evaluaciones externas realizadas, entre otros.

La inspección en su sentido estricto se inicia con la llegada y presentación por parte del inspector coordinador del equipo de inspectores. En esa misma presentación inicial se planean las reuniones posteriores necesarias y se organizan y distribuyen las actuaciones de inspección.

Comenzada la inspección, los inspectores deben intentar reunir y registrar la mayor cantidad posible de información, en especial sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para ello

¹⁷⁸ Puede accederse a la página principal de esta encuesta en la url: <https://parentview.ofsted.gov.uk/> con acceso el 18 de mayo de 2022

¹⁷⁹ Galicia Mangas (2016, 262) puntualiza que, en esos casos, la visita de inspección se suele notificar con quince minutos de antelación a la llegada del equipo de inspectores, vía telefónica.

entran en las aulas y observan las clases impartidas por los profesores, el trabajo de los alumnos y sus materiales, como libros de texto, cuadernos, carpetas, etc. y también pueden entrevistar a los alumnos para conocer su punto de vista sobre dichos procesos. Pueden realizarse también inspecciones integrales que incluyan otros aspectos diferentes al docente, como los servicios complementarios de internados o de residencias escolares.

La observación de las clases puede planificarse de formas distintas: mediante visitas de corta duración a distintas aulas en las que se imparten diferentes materias; visitas de mayor duración (superiores a 25 minutos) en las que se observa también el trabajo de los alumnos y se habla con ellos; visitas de corta duración a grupos reducidos de alumnos; seguimientos durante el periodo de inspección de clases o grupos concretos de alumnos identificados y determinados en el período previo a la inspección; etc. En estas visitas de observación puede participar también junto con los inspectores, el director del centro o algún miembro del equipo directivo. La selección de las clases visitadas no es aleatoria, sino que debe comprender un amplio abanico de materias, grupos y niveles de aprendizaje.

Esta observación de las clases impartidas tiene como objetivo fundamental evaluar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje y muy especialmente la influencia de la labor docente en las capacidades básicas de lectura, escritura, comunicación oral y destrezas matemáticas, pero en ningún caso ha de calificar o evaluar la calidad de cada sesión individualizada inspeccionada. Los inspectores no deben proponer o abogar por ninguna metodología en concreto sino recoger aquellos aspectos de los procesos que consideran efectivos y también los métodos a través de los cuales se podrían mejorar. Tras estas observaciones de las clases, se realiza una reunión de debate de los inspectores con miembros del equipo directivo y profesores del centro, para comentar los aspectos que se consideren procedentes. Estas reuniones pueden ser tanto individualizadas, con profesores concretos, como colectivas, según consideren oportuno los inspectores.

La observación de los inspectores no sólo se limita a los períodos lectivos en sentido estricto, sino que se extiende también los de inicio y finalización de las clases, las sesiones de tutoría, recreo, cambio de clases y comedor escolar.

Como parte de la inspección, el equipo de inspectores se reúne también con alumnos (incluidos alumnos discapacitados, desfavorecidos, con necesidades educativas especiales), padres y madres de alumnos, personal no docente del centro y otros interesados; todos ellos sin la presencia de miembros del equipo directivo. E igualmente, debe reunirse también con los miembros del equipo directivo para comentar las fortalezas y debilidades observadas.

Los inspectores recogen toda esta información en sus formularios o impresos preparados al efecto (*evidence forms -EFs-*), procurando dejar constancia en los mismos de los datos esenciales que luego han de apoyar su evaluación. Estos mismos datos registrados sirven a los inspectores como elementos de apoyo en las reuniones que se mantienen con los responsables del centro, así como para lograr la necesaria retroalimentación.

Finalmente, y para realizar su informe, los inspectores deben tomar en consideración todas las series de datos obtenidos en las diferentes fases de la inspección, incluidos los conseguidos a través de internet, las encuestas a los padres y madres de alumnos, las evaluaciones previas y autoevaluaciones. La interpretación de los datos debe hacerse de forma contextualizada y tomando en consideración que pueden implicar a grupos de alumnos que ya han abandonado el centro educativo, sobre todo en relación con los datos de carácter históricos.

Estos mismos datos deben servir para comprobar la veracidad y exactitud de las evaluaciones y autoevaluaciones precedentes, y de los progresos realizados a partir de las mismas.

El borrador del informe final del equipo de inspectores, al igual que posteriormente el informe final, debe incluir la evaluación de las evidencias observadas; de aspectos como el comportamiento y la seguridad de los alumnos; de la calidad de la enseñanza; de los logros del alumnado; de la influencia que el modelo de dirección y gestión ejerce en el desempeño del centro; la valoración de los planes derivados de los procesos de autoevaluación, en aquellos casos en los que se hubieran realizado; la eficacia del centro en el cumplimiento de su labor; y el valor añadido que los planes de desarrollo profesional del personal tienen en el correcto desempeño de la función del centro. Una vez evaluados estos parámetros iniciales se valoran también aspectos como la eficacia y el impacto que tiene el proceso educativo en el desarrollo espiritual, moral, social y cultural de los alumnos; el alcance de la labor educativa y formativa sobre los alumnos discapacitados o con necesidades educativas especiales; y la respuesta de cada centro docente a las necesidades individualizadas de los alumnos.

Ese borrador de informe final puede calificar el grado de cumplimiento del centro docente como sobresaliente o excepcional (*outstanding*), bueno (*good*), necesitado de mejora (*requires improvement*), o inadecuado (*inadequate*).

En aquellos casos en los que el borrador evalúa el desempeño del centro como inadecuado, se remite una copia del mismo a los responsables del centro, con carácter confidencial, para que en el plazo de cinco días realicen las aportaciones y observaciones oportunas, basadas en elementos efectivos que las acrediten. Este informe del centro dirigido al inspector coordinador del equipo de inspección, puede ser a su vez respondido por dicho inspector. El informe final es enviado a los centros, en el plazo de veintiocho días laborables desde la finalización de la inspección.

En los casos en los que el borrador evalúa el desempeño del centro como sobresaliente, bueno, o necesitado de mejora, se hace llegar una copia del mismo a los responsables del centro, también con carácter confidencial, para que en el plazo de un día laborable realicen las aportaciones y observaciones oportunas. Como en el caso anterior el informe del centro, remitido al inspector coordinador del equipo de inspección, puede ser respondido por este. El informe final es enviado a los centros en el plazo de quince días laborables desde la finalización de la inspección.

Y una vez recibido el informe final por parte del centro docente, desde el mismo se deben realizar las actuaciones necesarias para que, tanto los padres y madres de alumnos, como los propios alumnos (si fuera el caso y atendidas sus circunstancias), reciban una copia de dicho informe en el plazo de cinco días laborables.

finalmente, los informes son publicados a través de la página web del OFSTED y sometidos a información pública¹⁸⁰.

- Recapitulación

El origen en Inglaterra del denominado actualmente como Departamento para la Calidad de la Educación, Servicios de Atención a la Infancia y Aptitudes (*Office for Standards in Education, Children's Services and Skills –OFSTED-*) se encuentra en la institución de los Inspectores de Su Majestad (*Her Majesty's Inspectorate –HMI-*) surgida en 1838 como medio o sistema de control sobre las escuelas que recibían ayudas o fondos públicos, si bien el nombramiento de los dos

¹⁸⁰ Se puede acceder a todos los informes de inspección de la OFSTED en la url:

<https://reports.ofsted.gov.uk/> con acceso el 18 de mayo de 2022.

primeros inspectores se produjo en diciembre de 1839 y se les encomendó una tarea más centrada en el asesoramiento y apoyo a los centros que en la labor estricta de control.

Tal y como se ha señalado, actualmente las labores de inspección en Inglaterra son desarrolladas por el Departamento para la Calidad de la Educación, Servicio de Atención a la Infancia y Aptitudes (*Office for Standards in Education, Children's Services and Skills*) coloquialmente conocido por el acrónimo OFSTED. Esta denominación es distinta en los otros países del Reino Unido. así en Gales la realiza la Inspección de Educación y Formación de Gales (*Her Majesty's Inspectorate for Education and Training in Wales -ESTYN-*), en Escocia por la agencia ejecutiva Educación Escocia (*Education Scotland*), y finalmente, en Irlanda del Norte, por la Inspección de Educación e Instrucción de Irlanda del Norte (*Education and Training Inspectorate, Northern Ireland -ETINI-*).

En cuanto a su organización y estructura el OFSTED es un departamento gubernamental no adscrito a ningún Ministerio, y dotado de independencia para el desarrollo de su labor. Esta independencia se pone de manifiesto en el hecho de que solo es responsable y rinde cuentas ante la comisión parlamentaria encargada de temas relacionados con la educación de la Cámara de los Comunes. Su cometido básico abarca tareas relativas a la inspección y regulación de la educación, protección de la infancia y la juventud. A la cabeza del OFSTED, y como máximo responsable del mismo, se sitúa el Inspector Jefe de Su Majestad (*Her Majesty's Chief Inspector*) que desempeña funciones relativas a la organización, dirección, gestión económica y de recursos humanos de la institución.

En lo que se refiere a las funciones el OFSTED asume como tareas básicas las de inscripción, registro e inspección de los servicios de cuidado de la infancia y educación infantil y de los planes o acuerdos que tengan como finalidad la atención, cuidado y apoyo a la infancia y a la juventud; la inspección y evaluación de todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos y de algunas escuelas independientes, así como de los servicios de atención a la infancia suministrados o provistos por las autoridades locales; la inspección de la educación superior, de la formación del profesorado, del servicio de atención jurídico a la infancia y a la familia; y la protección y promoción de los derechos y del bienestar de los niños que viven fuera de sus hogares o reciben atención social, así como la información y el asesoramiento a las instituciones.

3.3.2. Las funciones asignadas en la legislación, a la Inspección de Educación de Inglaterra

Todas las inspecciones realizadas en Inglaterra se desarrollan bajo el marco del siguiente tejido normativo (véase la tabla 3.3.1):

- La Ley de Educación de 2005 (modificada).
- La Ley de Educación e Inspecciones de 2006.
- La sección 109 de la Ley de Educación y Habilidades de 2008.
- Las Regulaciones de Educación (Estándares Escolares Independientes) de 2014.
- Y la Ley de Atención a la Infancia de 2006.

Iniciaremos cada apartado con una breve introducción sobre el marco normativo y trasladaremos literalmente, y extraído de la fuente original, una muestra de los artículos que consideramos más importantes en dichas disposiciones, en lo relativo a las funciones que

realizan los inspectores de educación, a fin de mostrar aquellos aspectos que consideramos más relevantes.

- Education Act 2005¹⁸¹

Education Act 2005, o Ley de Educación de 2005, es una disposición de alto nivel del Parlamento del Reino Unido, que fue promulgada para simplificar los procesos iniciados de mejora escolar, fortaleciendo y afianzando el marco de rendición de cuentas por parte de los centros educativos, y en concreto, mediante la modificación del enfoque utilizado por la *OFSTED* al supervisar los centros en Inglaterra. Este marco legal introdujo igualmente cambios en el papel de la TTA, Techer Training Agency -Agencia de Formación de Profesores--, amplió la necesidad de que las autoridades educativas locales realicen propuestas de creación de nuevos centros educativos, e introdujo los parámetros presupuestarios a tres 3 años, para los centros financiados por el estado. La Ley derogó las disposiciones de *Education Act 1996*.

La Ley de Educación se divide en cinco partes: las inspecciones escolares y otras inspecciones, la organización escolar; la formación de los docentes; un cuarto apartado dedicado a distintos asuntos; y un quinto y último, dedicado a aspectos generales.

2005 Chapter 18

An Act to make provision about the inspection of schools, child minding, day care, nursery education and careers services; to make other provision about school education; to make provision about the training of persons who work in schools and other persons who teach, about the supply of personal information for purposes related to education and about the attendance of children at educational provision outside schools; and for connected purposes. [7th April 2005]

Be it enacted by the Queen's most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows:—

Part 1. School inspections and other inspections by school inspectors

Art. 5. Duty to inspect certain schools at prescribed intervals

(1) It is the duty of the Chief Inspector—

(a) to inspect under this section every school in England to which this section applies, at such intervals as may be prescribed, and

(b) when the inspection has been completed, to make a report of the inspection in writing.

(2) Subject to [F5subsections (3) and (4A)], the schools to which this section applies are—

(a) community, foundation and voluntary schools,

(b) community and foundation special schools,

(c) maintained nursery schools,

[F6(d) Academy schools,

¹⁸¹ Fuente en la web de <https://www.legislation.gov.uk/> en la url:

<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/18/contents> con acceso el 14 de mayo de 2022.

(da) alternative provision Academies,]

(e) city technology colleges,

(f) city colleges for the technology of the arts, and

(g) special schools which are not community or foundation special schools but are for the time being approved by the Secretary of State under section 342 of the Education Act 1996 (c. 56) (approval of special schools).

(3) This section does not apply to any school—

(a) which is a closing school (as defined by subsection (4)), and

(b) in respect of which the Chief Inspector has decided, having regard to the date on which the closure is to take effect, that no useful purpose would be served by the school being inspected under this section.

(4) In subsection (3)(a) a “closing school” means—

(a) any community, foundation or voluntary school, community or foundation special school or maintained nursery school in respect of which proposals to discontinue the school have been approved, adopted or determined under any enactment,

(b) a foundation or voluntary school in respect of which the governing body have given notice of discontinuance under section 30 of the School Standards and Framework Act 1998 (c. 31),

(c) a community, foundation or voluntary or community or foundation special school in respect of which the Secretary of State has given a direction to discontinue the school under [F7]section 17 or 68 of the Education and Inspections Act 2006],

[F8(d) an Academy in respect of which notice of termination of Academy arrangements has been given, or]

(e) a special school which is not a community or foundation special school but is for the time being approved by the Secretary of State under section 342 of the Education Act 1996 and which the proprietor has decided to close.

[F9(4A) Regulations may provide that this section does not apply to prescribed categories of school in prescribed circumstances.

(4B) A school to which this section does not apply by virtue of regulations under subsection (4A) is an “exempt school”.]

[F10(5) It is the general duty of the Chief Inspector, when conducting an inspection under this section, to report on the quality of education provided in the school.

(5A) The Chief Inspector's report under subsection (5) must in particular cover—

(a) the achievement of pupils at the school;

(b) the quality of teaching in the school;

(c) the quality of the leadership in and management of the school;

(d) the behaviour and safety of pupils at the school.

(5B) In reporting under subsection (5), the Chief Inspector must consider—

(a) the spiritual, moral, social and cultural development of pupils at the school;

(b) the extent to which the education provided at the school meets the needs of the range of pupils at the school, and in particular the needs of—

(i) pupils who have a disability for the purposes of the Equality Act 2010, and

(ii) pupils who have special educational needs.]

(6) Subsection (1) has effect subject to section 9.

(7) An inspection which is required under this section must not extend to—

(a) denominational education, or

(b) the content of collective worship which falls to be inspected under section 48.

- Education and Inspections Act 2006¹⁸²

Education and Inspections Act 2006, o la Ley de Educación e Inspecciones de 2006 es una norma de alto nivel del Parlamento del Reino Unido, que tiene como objetivo garantizar que todos los alumnos, de todos los centros educativos, reciban la mejor educación a fin de que puedan desarrollar plenamente todo su potencial.

El impulso de esta ley se encuentra en la publicación, en el año anterior, de *Higher Standards, Better Schools for All — More Choice for Parents and Pupils* (Department for Education, 2005).

Obviamos las modificaciones o enmiendas al texto, *textual Amendments or Commencement Information*, para simplificar su lectura; no obstante, se pueden acceder a estas en la versión original.

2006 Chapter 40

An Act to make provision about primary, secondary and further education and about training; to make provision about food or drink provided on school premises or in connection with the provision of education or childcare; to provide for the establishment of an Office for Standards in Education, Children's Services and Skills and the appointment of Her Majesty's Chief Inspector of Education, Children's Services and Skills and make provision about the functions of that Office and that Chief Inspector; to provide for the amendment of references to local education authorities and children's services authorities; to amend section 29 of the Leasehold Reform Act 1967 in relation to university bodies; and for connected purposes.

[8th November 2006]

Be it enacted by the Queen's most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows:—

Part 8. Inspections

Chapter 1. The Office and the Chief Inspector

¹⁸² Fuente en la web de <https://www.legislation.gov.uk/> en la url:

<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/40/contents> con accesos el 22 de mayo de 2022.

Art. 116. Functions: the Office

Functions of the Office

(1)The Office has the following functions—

(a)to determine strategic priorities for the Chief Inspector in connection with the performance of his functions;

(b)to determine strategic objectives and targets relating to such priorities; and

(c)to secure that the Chief Inspector's functions are performed efficiently and effectively.

(2)The Office is to have such other functions in connection with the performance of the Chief Inspector's functions as may be assigned to it by the Secretary of State.

Art. 117. Performance of Office's functions

(1)The Office is to perform its functions for the general purpose of encouraging—

(a)the improvement of activities within the Chief Inspector's remit,

(b)the carrying on of such activities as user-focused activities, and

(c)the efficient and effective use of resources in the carrying on of such activities.

(2)In performing its functions the Office is to have regard to—

(a)the need to safeguard and promote the rights and welfare of children;

[F1(aa)any matters raised by the Children's Commissioner with the Office or the Chief Inspector;]

(b)views expressed by relevant persons about activities within the Chief Inspector's remit;

(c)levels of satisfaction with such activities on the part of relevant persons;

(d)the need to promote the efficient and effective use of resources in the carrying on of such activities;

(e)the need to ensure that action by the Chief Inspector in relation to such activities is proportionate to the risks against which it would afford safeguards;

(f)any developments in approaches to inspection or regulatory action; and

(g)best practice amongst persons performing functions comparable to those of the Chief Inspector.

(3)In performing its functions the Office must also have regard to such aspects of government policy as the Secretary of State may direct.

(4)In this section—

(a)“children” means persons under the age of 18;

(b)“relevant persons”, in relation to activities within the Chief Inspector's remit, means persons who have an interest in such activities, whether—

(i)as persons for whose benefit they are carried on, or

(ii)as parents (if they are carried on for the benefit of children), or

(iii) as employers;

(c) “parents” includes persons—

(i) who are not parents of children but have parental responsibility for them (within the meaning of the Children Act 1989 (c. 41))¹⁸³, or

(ii) who have care of children.

(5) Subsection (6) provides for the interpretation, for the purposes of this Part, of references to activities within the Chief Inspector's remit and related expressions.

(6) For those purposes—

(a) “activities” includes—

(i) the provision of any form of education, training or care,

(ii) the provision of any form of services or facilities, and

(iii) the performance of any function;

(b) activities are within the Chief Inspector's remit—

(i) if he exercises any inspection function in relation to them, or

(ii) if they are services of the kind provided by persons in respect of whom he is the registration authority by virtue of any enactment; and

(c) references to persons for whose benefit activities are carried on are, in relation to activities within paragraph (a)(i) or (ii), references to persons for whom the education, training or care is provided, or (as the case may be) for whom the services or facilities are provided.

Art. 118. Functions of the Chief Inspector

(1) The Chief Inspector has the general duty of keeping the Secretary of State informed about—

(a) the quality of activities within the Chief Inspector's remit and (where appropriate) the standards achieved by those for whose benefit such activities are carried on,

(b) improvements in the quality of such activities and in any such standards,

(c) the extent to which such activities are being carried on as user-focused activities, and

(d) the efficient and effective use of resources in the carrying on of such activities and services.

(2) If requested to do so by the Secretary of State, the Chief Inspector must provide the Secretary of State with information or advice on such matters relating to activities within the Chief Inspector's remit as are specified in the request.

¹⁸³ Esa referencia se corresponde a la *Children Act 1989*. Documento en la url:

<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/41/contents> con acceso el 26 de mayo de 2022.

Significativa en la Parte V: *Protection of Children* y el apartado específico de *Inspection: England* en la Parte XA: *Child Minding and Day Care for Children in England and Wales*.

(3)The Chief Inspector may at any time give advice to the Secretary of State on any matter connected with any activities within his remit, including advice relating to a particular establishment, institution or agency.

(4)The Chief Inspector is to have such other functions in connection with activities within his remit as may be assigned to him by the Secretary of State.

(5)Subsection (6) applies where the Chief Inspector is requested under subsection (2) to provide the Secretary of State with information or advice on matters relating to activities within the Chief Inspector's remit.

(6)Any enactment by virtue of which—

(a)an inspection may be conducted by the Chief Inspector in relation to the activities in question (whether or not in pursuance of any duty), or

(b)any power of entry is exercisable by him in relation to those activities,

Is to have effect, with any necessary modifications, so as to enable him to conduct an inspection, or exercise any such power, for the purpose of complying with the request.

(7)In subsection (6) any reference to a power of entry includes a reference to a power to inspect documents or a power conferred in connection with the inspection of documents.

(8)Nothing in this section prejudices the operation of any other enactment relating to functions of the Chief Inspector.

Art. 119. Performance of Chief Inspector's functions

(1)The Chief Inspector is to perform his functions for the general purpose of encouraging—

(a)the improvement of activities within the Chief Inspector's remit,

(b)the carrying on of such activities as user-focused activities, and

(c)the efficient and effective use of resources in the carrying on of such activities.

(2)The Chief Inspector must ensure—

(a)that his functions are performed efficiently and effectively, and

(b)that, so far as practicable, those functions are performed in a way that responds to—

(i)the needs of persons for whose benefit activities within the Chief Inspector's remit are carried on, and

(ii)the views expressed by other relevant persons about such activities.

(3)In performing his functions the Chief Inspector must have regard to—

(a)the matters mentioned in section 117(2);

[F2(aa)any matters raised by the Children's Commissioner with the Chief Inspector;] and

(b)such aspects of government policy as the Secretary of State may direct.

(4)In this section “relevant persons” has the same meaning as in section 117.

Chapter 3. Inspection of Further Education and Training etc.

Education and training to which this Chapter applies

Art. 123. Education and training to which this Chapter applies

(1) This Chapter applies to the following kinds of education and training—

(a) secondary education provided in institutions which are in England and are within the further education sector;

(b) further education for persons aged 16 or over but under 19 which is provided in such institutions and wholly or partly funded by the [F4Secretary of State] F5...;

[F6(ba) education provided in 16 to 19 Academies;]

(c) further education for persons aged 19 or over which is wholly or partly funded by the [F7Secretary of State] F8...;

(d) further education for persons aged under 19 which is provided by [F9local authorities] in England;

(e) further education for persons aged 19 or over which is funded by such authorities;

[F10(ea) further education for persons aged 19 or over which is wholly or partly funded by a combined authority;]

(f) training for persons aged 16 or over which is funded by the Secretary of State under section 2 of the Employment and Training Act 1973 (c. 50);

(g) training for persons aged 16 or over if it is training the whole or part of which takes place at the premises of an employer and which is wholly or partly funded by the [F11Secretary of State] F12...;

(h) such other education or training as may be prescribed by regulations made by the Secretary of State.

(2) The training which may be prescribed by regulations under subsection (1)(h) includes training of or for teachers, lecturers, trainers or other persons engaged in the provision of education or training falling within subsection (1)(a) to (g).

(3) If regulations made by the Secretary of State so provide—

(a) the provision of information, advice or guidance falling within [F13section F14... 100(1)(j) of the Apprenticeships, Skills, Children and Learning Act 2009], or

(b) the provision of any description of such information, advice or guidance specified in the regulations, is to be treated for the purposes of this Chapter as training to which it applies.

(4) In this Chapter—

(a) “further education” and “secondary education” have the same meanings as in EA 1996, and

(b) any reference to institutions which are within the further education sector is to be read in accordance with section 91(3) of the Further and Higher Education Act 1992 (c. 13).

[F15(5) In this section “combined authority” means a combined authority established under section 103 of the Local Democracy, Economic Development and Construction Act 2009.]

Inspection

Art. 124. Inspection of education and training to which this Chapter applies

(1) The Chief Inspector must conduct—

(a) inspections of such education or training to which this Chapter applies as may be specified by the Secretary of State, and

(b) inspections of such class of education or training to which this Chapter applies as may be so specified.

(2) The inspections are to be conducted at such intervals as may be specified by the Secretary of State.

(3) On completing an inspection under this section, the Chief Inspector must make a written report on it.

(4) The report—

(a) must state whether the Chief Inspector considers the education or training inspected to be of a quality adequate to meet the reasonable needs of those receiving it, and

(b) may deal with such other matters as he considers relevant.

(5) The Chief Inspector must send copies of the report to—

(a) the Secretary of State,

F16[F17(b)].

F18(ba).

(c) any [F19local authority in England] providing funds for the education or training inspected, and

(d) the provider of the education or training inspected.

(6) Copies may also be sent to such other persons as the Chief Inspector considers appropriate.

(7) The Chief Inspector must arrange for the report to be published in such manner as he considers appropriate.

Art. 125. Inspection of further education institutions

(1) The Chief Inspector must inspect all institutions within the further education sector [F20, and all 16 to 19 Academies,] [F21subject to subsection (1A)].

[F22(1A) The Secretary of State may by regulations provide that the duty of the Chief Inspector in subsection (1) does not apply to prescribed categories of institution in prescribed circumstances.

(1B) An institution to which the duty in subsection (1) does not apply by virtue of regulations under subsection (1A) is an “exempt institution”.]

(2) [F23Inspections under subsection (1)] are to be conducted at such intervals as may be specified by the Secretary of State.

(3) *On completing an inspection under this section, the Chief Inspector must make a written report on it.*

(4) *The report—*

(a) must state whether the Chief Inspector considers the education or training inspected to be of a quality adequate to meet the reasonable needs of those receiving it,

[F24(aa) must, in a case where it relates to an institution within the further education sector, comment on the careers guidance provided to relevant students at the institution,] and

(b) may deal with such other matters as he considers relevant.

(5) *The Chief Inspector must send copies of the report to—*

(a) the Secretary of State,

F25[F26(b)].

(ba) F27... and

(c) the provider of the education or training inspected.

(6) *Copies may also be sent to such other persons as the Chief Inspector considers appropriate.*

(7) *The Chief Inspector must arrange for the report to be published in such manner as he considers appropriate.*

[F28(8) In this section—

“careers guidance” includes guidance about undertaking any training, education, employment or occupation;

“relevant student” means a student—

(a) who is aged under 19, or

(b) who is aged 19 or over and is someone for whom an EHC plan is maintained.]

ART. 126. Other inspections

(1) *The Chief Inspector may inspect any education or training to which this Chapter applies (in a case where he is not required to do so by virtue of any provision of this Chapter).*

[F29(1A) The Chief Inspector must inspect an exempt institution if requested to do so by the Secretary of State.]

(2) *The Chief Inspector may inspect any education or training to which this Chapter does not apply if—*

(a) it is further education (whether for persons aged 16 or over but under 19, or for persons aged 19 or over) or training for persons aged 16 or over, and

(b) he is requested to conduct the inspection by the provider of the education or training.

[F30(2A) On completing an inspection under subsection (1) or (1A) conducted in response to a request from the Secretary of State or any other person or body, the Chief Inspector must—

(a) make a written report on the inspection;

(b) arrange for the report to be published in such manner as the Chief Inspector considers appropriate.]

(3) On completing an inspection under this section [F31 conducted in any other case], the Chief Inspector may—

(a) make a written report on it;

(b) arrange for the report to be published in such manner as he considers appropriate.

(4) If the Chief Inspector makes a report of an inspection conducted under subsection (1) [F32 or (1A)], he must send copies of the report to—

(a) the Secretary of State,

F33[F34(b)].

F35(ba).

(c) any [F36 local authority in England] providing funds for the education or training inspected, and

(d) the provider of the education or training inspected.

(5) Copies may also be sent to such other persons as the Chief Inspector considers appropriate.

[F37(5A) In the case of an inspection conducted under subsection (1) in response to a request from the provider of the education or training concerned, the Chief Inspector may charge the provider for the cost of the inspection.]

(6) In the case of an inspection conducted under subsection (2) the Chief Inspector may charge the provider of the education or training concerned for the cost of the inspection.

(7) For the purposes of that subsection it is immaterial whether the education or training concerned is provided in the United Kingdom or elsewhere.

[F38(8) In this section “exempt institution” has the meaning given by section 125(1B).

- Education and Skills Act 2008¹⁸⁴

Education and Skills Act 2008, o la Ley de Educación y Habilidades de 2008 es una norma de alto nivel promulgada por el Parlamento del Reino Unido. Esta ley elevó la edad mínima para abandonar el sistema educativo a los dieciocho años. Esta disposición también introdujo otro tipo de cambios interesantes, como, por ejemplo, el derecho de elección y apelación para los jóvenes con respecto a su centro de enseñanza superior, o la imposición de obligaciones al *Learning and Skills Council*, Consejo de Aprendizaje y Competencias, para la financiación de los cursos tanto para niños, como para adultos.

Se utilizan los mismos parámetros, obviando las modificaciones o enmiendas al texto.

¹⁸⁴ Fuente en la web de <https://www.legislation.gov.uk/> en la url:

<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/25/part/4> con accesos el 22 de mayo de 2022.

2008 CHAPTER 25

An Act to make provision about education and training; and for connected purposes.

[26th November 2008]

Be it enacted by the Queen's most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows:—

Part 4. Regulation and inspection of independent educational provision in England

Chapter 1. Independent educational institutions in England

Art. 109. Duty to inspect registered institution on direction of Secretary of State

(1)The Secretary of State may at any time direct the Chief Inspector to inspect a registered independent educational institution specified in the direction.

(2)Where such a direction is made the Chief Inspector must—

(a)inspect the institution, and

(b)make a report to the Secretary of State on the extent to which any relevant standard is being met in relation to the institution.

(3)The Secretary of State may at any time arrange for an independent inspectorate—

(a)to inspect a registered independent educational institution in relation to which it is approved under section 106, and

(b)to make a report to the Secretary of State on the extent to which any relevant standard is being met in relation to the institution.

(4)In this section “any relevant standard” means any independent educational institution standard that is—

(a)specified by the Secretary of State for the purposes of the inspection, or

(b)considered to be relevant by the person carrying out the inspection in the circumstances of the case.

- The Education (Independent School Standards) Regulations 2014¹⁸⁵

The Education (Independent School Standards) Regulations 2014, o los Reglamentos que establecen los Estándares para las Escuelas Independientes de 2014, establecen los parámetros a los que las instituciones educativas independientes serán inspeccionadas, como consecuencia de la aplicación de la Ley de Educación y Habilidades de 2008, *Education and Skills Act 2008*.

A efectos prácticos, este reglamento conforma el protocolo a seguir por los inspectores, que es conocido por los propios centros y por la sociedad. Este reglamento, que sustituyó al publicado en el año 2010, se aplica únicamente en Inglaterra.

¹⁸⁵ Fuente en la web de <https://www.legislation.gov.uk/> en la url:

<https://www.legislation.gov.uk/uksi/2014/3283/contents/made> con accesos el 22 de mayo de 2022.

Tras la inspección se elabora un informe sobre el grado de cumplimiento de las oportunas disposiciones, considerada así por el Secretario de Estado a efectos de la inspección o por el propio inspector, si lo considera pertinente, llegado el caso, en base al criterio de oportunidad.

Dada su singularidad, se mantiene al final del texto, la nota explicativa, *explanatory note*.

Part 1. Quality of education provided

1. The standards about the quality of education provided at the school are those contained in this Part.

2.—(1) The standard in this paragraph is met if—

(a) the proprietor ensures that a written policy on the curriculum, supported by appropriate plans and schemes of work, which provides for the matters specified in sub-paragraph (2) is drawn up and implemented effectively; and

(b) the written policy, plans and schemes of work—

(i) take into account the ages, aptitudes and needs of all pupils, including those pupils with an EHC plan; and

(ii) do not undermine the fundamental British values of democracy, the rule of law, individual liberty, and mutual respect and tolerance of those with different faiths and beliefs.

(2) For the purposes of paragraph (2)(1)(a), the matters are—

(a) full-time supervised education for pupils of compulsory school age (construed in accordance with section 8 of the Education Act 1996), which gives pupils experience in linguistic, mathematical, scientific, technological, human and social, physical and aesthetic and creative education;

(b) that pupils acquire speaking, listening, literacy and numeracy skills;

(c) where the principal language of instruction is a language other than English, lessons in written and spoken English, except that this matter does not apply in respect of a school which provides education for pupils who are all temporarily resident in England and which follows the curriculum of another country;

(d) personal, social, health and economic education which—

(i) reflects the school's aim and ethos; and

(ii) encourages respect for other people, paying particular regard to the protected characteristics set out in the 2010 Act(1);

(e) for pupils receiving secondary education, access to accurate, up-to-date careers guidance that—

(i) is presented in an impartial manner;

(ii) enables them to make informed choices about a broad range of career options; and

(iii) helps to encourage them to fulfil their potential;

(f) where the school has pupils below compulsory school age, a programme of activities which is appropriate to their educational needs in relation to personal, social, emotional and physical development and communication and language skills;

(g)where the school has pupils above compulsory school age, a programme of activities which is appropriate to their needs;

(h)that all pupils have the opportunity to learn and make progress; and

(i)effective preparation of pupils for the opportunities, responsibilities and experiences of life in British society.

3. *The standard in this paragraph is met if the proprietor ensures that the teaching at the school—*

(a)enables pupils to acquire new knowledge and make good progress according to their ability so that they increase their understanding and develop their skills in the subjects taught;

(b)fosters in pupils self-motivation, the application of intellectual, physical and creative effort, interest in their work and the ability to think and learn for themselves;

(c)involves well planned lessons and effective teaching methods, activities and management of class time;

(d)shows a good understanding of the aptitudes, needs and prior attainments of the pupils, and ensures that these are taken into account in the planning of lessons;

(e)demonstrates good knowledge and understanding of the subject matter being taught;

(f)utilises effectively classroom resources of a good quality, quantity and range;

(g)demonstrates that a framework is in place to assess pupils' work regularly and thoroughly and use information from that assessment to plan teaching so that pupils can progress;

(h)utilises effective strategies for managing behaviour and encouraging pupils to act responsibly;

(i)does not undermine the fundamental British values of democracy, the rule of law, individual liberty, and mutual respect and tolerance of those with different faiths and beliefs; and

(j)does not discriminate against pupils contrary to Part 6 of the 2010 Act(2).

4. *The standard in this paragraph is met where the proprietor ensures that a framework for pupil performance to be evaluated, by reference to the school's own aims as provided to parents or national norms, or to both, is in place.*

Part 2. Spiritual, moral, social and cultural development of pupils

5. *The standard about the spiritual, moral, social and cultural development of pupils at the school is met if the proprietor—*

(a)actively promotes the fundamental British values of democracy, the rule of law, individual liberty, and mutual respect and tolerance of those with different faiths and beliefs;

(b)ensures that principles are actively promoted which—

(i)enable pupils to develop their self-knowledge, self-esteem and self-confidence;

(ii)enable pupils to distinguish right from wrong and to respect the civil and criminal law of England;

(iii) encourage pupils to accept responsibility for their behaviour, show initiative and understand how they can contribute positively to the lives of those living and working in the locality in which the school is situated and to society more widely;

(iv) enable pupils to acquire a broad general knowledge of and respect for public institutions and services in England;

(v) further tolerance and harmony between different cultural traditions by enabling pupils to acquire an appreciation of and respect for their own and other cultures;

(vi) encourage respect for other people, paying particular regard to the protected characteristics set out in the 2010 Act; and

(vii) encourage respect for democracy and support for participation in the democratic process, including respect for the basis on which the law is made and applied in England;

(c) precludes the promotion of partisan political views in the teaching of any subject in the school; and

(d) takes such steps as are reasonably practicable to ensure that where political issues are brought to the attention of pupils—

(i) while they are in attendance at the school,

(ii) while they are taking part in extra-curricular activities which are provided or organised by or on behalf of the school, or

(iii) in the promotion at the school, including through the distribution of promotional material, of extra-curricular activities taking place at the school or elsewhere, they are offered a balanced presentation of opposing views.

Part 3. Welfare, health and safety of pupils

6. The standards about the welfare, health and safety of pupils at the school are those contained in this Part.

7. The standard in this paragraph is met if the proprietor ensures that—

(a) arrangements are made to safeguard and promote the welfare of pupils at the school; and

(b) such arrangements have regard to any guidance issued by the Secretary of State.

8. Where section 87(1) of the 1989 Act(1) applies in relation to a school the standard in this paragraph is met if the proprietor ensures that—

(a) arrangements are made to safeguard and promote the welfare of boarders while they are accommodated at the school; and

(b) such arrangements have regard to the National Minimum Standards for Boarding Schools or, where applicable, the National Minimum Standards for Residential Special Schools or the National Minimum Standards for Accommodation of Students under Eighteen by Further Education Colleges.

9. The standard in this paragraph is met if the proprietor promotes good behaviour amongst pupils by ensuring that—

(a) a written behaviour policy is drawn up that, amongst other matters, sets out the sanctions to be adopted in the event of pupil misbehaviour;

(b) the policy is implemented effectively; and

(c) a record is kept of the sanctions imposed upon pupils for serious misbehaviour.

10. The standard in this paragraph is met if the proprietor ensures that bullying at the school is prevented in so far as reasonably practicable, by the drawing up and implementation of an effective anti-bullying strategy.

11. The standard in this paragraph is met if the proprietor ensures that relevant health and safety laws are complied with by the drawing up and effective implementation of a written health and safety policy.

12. The standard in this paragraph is met if the proprietor ensures compliance with the Regulatory Reform (Fire Safety) Order 2005(2).

13. The standard in this paragraph is met if the proprietor ensures that first aid is administered in a timely and competent manner by the drawing up and effective implementation of a written first aid policy.

14. The standard in this paragraph is met if the proprietor ensures that pupils are properly supervised through the appropriate deployment of school staff.

15. The standard in this paragraph is met if the proprietor ensures that an admission and attendance register is maintained in accordance with the Education (Pupil Registration) (England) Regulations 2006(3).

16. The standard in this paragraph is met if the proprietor ensures that—

(a) the welfare of pupils at the school is safeguarded and promoted by the drawing up and effective implementation of a written risk assessment policy; and

(b) appropriate action is taken to reduce risks that are identified.

Part 4. Suitability of staff, supply staff, and proprietors

17. The standards about the suitability of staff, supply staff, and proprietors are those contained in this Part.

18.—(1) The standard in this paragraph relates to the suitability of persons appointed as members of staff at the school, other than the proprietor and supply staff.

(2) The standard in this paragraph is met if—

(a) no such person is barred from regulated activity relating to children in accordance with section 3(2) of the 2006 Act where that person is or will be engaging in activity which is regulated activity within the meaning of Part 1 of Schedule 4 to that Act;

(b) no such person carries out work, or intends to carry out work, at the school in contravention of a prohibition order, an interim prohibition order, or any direction made under section 128 of the 2008 Act or section 142 of the 2002 Act, or any disqualification, prohibition or restriction which takes effect as if contained in either such direction;

(c) the proprietor carries out appropriate checks to confirm in respect of each such person—

(i) the person's identity;

(ii) the person's medical fitness;

(iii) the person's right to work in the United Kingdom; and

(iv) where appropriate, the person's qualifications;

(d) the proprietor ensures that, where relevant to any such person, an enhanced criminal record check is made in respect of that person and an enhanced criminal record certificate is obtained before or as soon as practicable after that person's appointment;

(e) in the case of any person for whom, by reason of that person living or having lived outside the United Kingdom, obtaining such a certificate is not sufficient to establish the person's suitability to work in a school, such further checks are made as the proprietor considers appropriate, having regard to any guidance issued by the Secretary of State; and

(f) in the case of staff who care for, train, supervise or are in charge of boarders, in addition to the matters specified in paragraphs (a) to (e), the proprietor checks that Standard 14 of the National Minimum Standards for Boarding Schools or, where applicable, Standard 14 of the National Minimum Standards for Residential Special Schools, is complied with, and in the light of the information from the checks referred to in paragraphs (c) to (f) the proprietor considers that the person is suitable for the position to which the person is appointed.

(3) The checks referred to in sub-paragraphs (2)(c) and (except where sub-paragraph (4) applies) (2)(e) must be completed before a person's appointment.

(4) The checks specified in sub-paragraphs (2)(d), (e) and (f) do not need to be carried out where the new member of staff ("M") has worked in—

(a) a school or a maintained school in England in a position which brought M regularly into contact with children or young persons;

(b) a maintained school in England in a position to which M was appointed on or after 12th May 2006 and which did not bring M regularly into contact with children or young persons; or

(c) an institution within the further education sector in England or in a 16 to 19 Academy in a position which involved the provision of education or which brought M regularly into contact with children or young persons, during a period which ended not more than three months before M's appointment.

19.—(1) This paragraph relates to the suitability of supply staff at the school.

(2) The standard in this paragraph is met if—

(a) a person offered for supply by an employment business to the school only begins to work at the school if the proprietor has received—

(i) written notification from the employment business in relation to that person—

(aa) that the checks referred to in paragraph 21(3)(a)(i) to (iv), (vii) and (b) have been made to the extent relevant to that person;

(bb) that, where relevant to that person, an enhanced criminal record check has been made and that it or another employment business has obtained an enhanced criminal record certificate in response to such a check; and

- (cc) if the employment business has obtained such a certificate before the person is due to begin work at the school, whether it disclosed any matter or information; and*
 - (ii) a copy of any enhanced criminal record certificate obtained by an employment business before the person is due to begin work at the school;*
 - (b) a person offered for supply by an employment business only begins work at the school if the proprietor considers that the person is suitable for the work for which the person is supplied;*
 - (c) before a person offered for supply by an employment business begins work at the school the person's identity is checked by the proprietor of the school (irrespective of any such check carried out by the employment business before the person was offered for supply);*
 - (d) the proprietor, in the contract or other arrangements which the proprietor makes with any employment business, requires the employment business to provide—*
 - (i) the notification referred to in paragraph (a)(i); and*
 - (ii) a copy of any enhanced criminal record certificate which the employment business obtains, in respect of any person whom the employment business supplies to the school; and*
 - (e) except for those persons to whom sub-paragraph (4) applies, in the case of supply staff who care for, train, supervise or are in charge of boarders, the proprietor checks that the relevant parts of Standard 14 of the National Minimum Standards for Boarding Schools or where applicable, Standard 14 of the National Minimum Standards for Residential Special Schools are complied with.*
 - (3) Except in the case of a person to whom sub-paragraph (4) applies, the certificate referred to in sub-paragraph (2)(a)(i)(bb) must have been obtained not more than 3 months before the date on which the person is due to begin work at the school.*
 - (4) This sub-paragraph applies to a person ("P") who has worked in—*
 - (a) a school or a maintained school in England in a position which brought P regularly into contact with children or young persons;*
 - (b) a maintained school in England in a position to which P was appointed on or after 12th May 2006 and which did not bring P regularly into contact with children or young persons; or*
 - (c) an institution within the further education sector in England or in a 16 to 19 Academy in a position which involved the provision of education or which brought P regularly into contact with children or young persons, during a period which ended not more than three months before P is due to begin work at the school.*
- 20.—(1) The standard in this paragraph relates to the suitability of the proprietor of the school.*
- (2) Sub-paragraph (3) relates to the suitability of the proprietor where the proprietor is an individual.*
 - (3) The standard in this paragraph is met if—*
 - (a) the individual—*

(i) is not barred from regulated activity relating to children in accordance with section 3(2) of the 2006 Act where that individual is or will be engaging in activity which is regulated activity within the meaning of Part 1 of Schedule 4 to that Act; and

(ii) does not carry out work, or intend to carry out work, at the school in contravention of a prohibition order, an interim prohibition order, or any direction made under section 128 of the 2008 Act or section 142 of the 2002 Act or any disqualification, prohibition or restriction which takes effect as if contained in either such direction; and

(b) the Secretary of State makes the following checks relating to the individual before the school is entered in the register or, in the case of a registered school, before or as soon as practicable after the individual takes over as proprietor—

(i) where relevant to the individual, an enhanced criminal record check, countersigned by the Secretary of State where an application for such a check is made under section 113B(1) of the 1997 Act;

(ii) checks confirming the individual's identity and their right to work in the United Kingdom; and

(iii) in the case of an individual for whom, by reason of that individual living or having lived outside the United Kingdom, obtaining an enhanced criminal record certificate is not sufficient to establish the individual's suitability to work in a school, such further checks as the Secretary of State considers appropriate; and, where an enhanced criminal record check is made, the Secretary of State obtains an enhanced criminal record certificate relating to the individual.

(4) Sub-paragraphs (5) to (8) relate to the suitability of the proprietor where the proprietor is a body of persons corporate or unincorporate.

(5) The standard in this paragraph is met in relation to an individual who is the Chair of the school if—

(a) the individual—

(i) is not barred from regulated activity relating to children in accordance with section 3(2) of the 2006 Act where that individual is or will be engaging in activity which is regulated activity within the meaning of Part 1 of Schedule 4 to that Act; and

(ii) does not carry out work, or intend to carry out work, at the school in contravention of a prohibition order, an interim prohibition order, or any direction made under section 128 of the 2008 Act or section 142 of the 2002 Act or any disqualification, prohibition or restriction which takes effect as if contained in either such direction; and

(b) subject to sub-paragraphs (7) and (8), the Secretary of State makes the following checks relating to the individual—

(i) where relevant to the individual, an enhanced criminal record check, countersigned by the Secretary of State where an application for such a check is made under section 113B(1) of the 1997 Act;

(ii) checks confirming the individual's identity and their right to work in the United Kingdom; and

(iii) in the case of an individual for whom, by reason of the individual living or having lived outside the United Kingdom, obtaining an enhanced criminal record certificate is

not sufficient to establish the individual's suitability to work in a school, such further checks as the Secretary of State considers appropriate; and, where an enhanced criminal record check is made, the Secretary of State obtains an enhanced criminal record certificate relating to the individual.

(6) The standard in this paragraph is met in relation to an individual ("MB"), not being the Chair of the school, who is a member of a body of persons corporate or unincorporate named as the proprietor of the school in the register or in an application to enter the school in the register, if—

(a) MB—

(i) is not barred from regulated activity relating to children in accordance with section 3(2) of the 2006 Act where that individual is or will be engaging in activity which is regulated activity within the meaning of Part 1 of Schedule 4 to that Act; and

(ii) does not carry out work, or intend to carry out work, at the school in contravention of a prohibition order, an interim prohibition order, or any direction made under section 128 of the 2008 Act or section 142 of the 2002 Act or any disqualification, prohibition or restriction which takes effect as if contained in either such direction;

(b) subject to sub-paragraphs (7) to (8), the Chair of the school makes the following checks relating to MB—

(i) where relevant to the individual, an enhanced criminal record check;

(ii) checks confirming MB's identity and MB's right to work in the United Kingdom; and

(iii) where, by reason of MB's living or having lived outside the United Kingdom, obtaining an enhanced criminal record certificate is not sufficient to establish MB's suitability to work in a school, such further checks as the Chair of the school considers appropriate, having regard to any guidance issued by the Secretary of State; and, where an enhanced criminal record check is made, the Chair obtains an enhanced criminal record certificate relating to the individual; and

(c) subject to sub-paragraph (8), where the Secretary of State makes a request for an enhanced criminal record check relating to MB countersigned by the Secretary of State to be made, such a check is made.

(7) In a case where—

(a) the suitability of the proprietor is being considered in response to an application by the governing body of a maintained school to enter the school on the register, and

(b) the local authority maintaining the school has made one or more of the checks referred to in sub-paragraph (5)(b) or (6)(b) in relation to the Chair of the school or MB, sub-paragraph (5)(b) or (6)(b) (as the case may be) is treated as complied with so far as relating to that check.

(8) In the case of a registered school—

(a) sub-paragraph (5)(b) is met where the checks referred to in that sub-paragraph are completed before or as soon as practicable after the Chair of the school starts acting as such;

(b) sub-paragraph (6)(b) is met where the checks referred to in paragraph (b)(i) and (iii) are completed before or as soon as practicable after MB starts acting as a member of

the body of persons corporate or unincorporate named in the register as the proprietor of the school; and

(c) sub-paragraph (6)(c) is met where the enhanced criminal record check is made as soon as practicable after the Secretary of State's request.

(9) In this paragraph a reference to the Chair of the school is a reference to an individual who is the Chair of a body of persons corporate or unincorporate named as the proprietor of the school in the register or in an application to enter the school in the register and includes a reference to a similar officer.

21.—(1) The standard in this paragraph is met if the proprietor keeps a register which shows such of the information referred to in sub-paragraphs (3) to (7) as is applicable to the school in question.

(2) The register referred to in sub-paragraph (1) may be kept in electronic form, provided that the information so recorded is capable of being reproduced in legible form.

(3) The information referred to in this sub-paragraph is—

(a) in relation to each member of staff ("S") appointed on or after 1st May 2007, whether—

(i) S's identity was checked;

(ii) a check was made to establish whether S is barred from regulated activity relating to children in accordance with section 3(2) of the 2006 Act;

(iii) a check was made to establish whether S is subject to any direction made under section 128 of the 2008 Act or section 142 of the 2002 Act or any disqualification, prohibition or restriction which takes effect as if contained in such a direction;

(iv) checks were made to ensure, where appropriate, that S had the relevant qualifications;

(v) an enhanced criminal record certificate was obtained in respect of S;

(vi) checks were made pursuant to paragraph 18(2)(d);

(vii) a check of S's right to work in the United Kingdom was made; and

(viii) checks were made pursuant to paragraph 18(2)(e), including the date on which each such check was completed or the certificate obtained; and

(b) in relation to each member of staff ("S"), whether a check was made to establish whether S is subject to a prohibition order or an interim prohibition order, including the date on which such check was completed.

(4) The information referred to in this sub-paragraph is, in relation to each member of staff in post on 1st August 2007 who was appointed at any time before 1st May 2007, whether each check referred to in sub-paragraph (3) was made and whether an enhanced criminal record certificate was obtained, together with the date on which any check was completed or certificate obtained.

(5) The information referred to in this sub-paragraph is, in relation to supply staff—

(a) whether written notification has been received from the employment business that—

(i) checks corresponding to those referred to in sub-paragraph (3)(a)(i) to (iv), (vi) and (vii) have been made to the extent relevant to any such person; and

(ii) an enhanced criminal record check has been made and that it or another employment business has obtained an enhanced criminal record certificate in response to such a check, together with the date the written notification that each such check was made, or certificate obtained, was received;

(b) whether a check has been made in accordance with paragraph 19(2)(e) together with the date the check was completed; and

(c) where written notification has been received from the employment business in accordance with a contract or other arrangements referred to in paragraph 19(2)(d) that it has obtained an enhanced criminal record certificate, whether the employment business supplied a copy of the certificate to the school.

(6) The information referred to in this sub-paragraph is, in relation each member ("MB") of a body of persons named as the proprietor appointed on or after 1st May 2007, whether the checks referred to in paragraph 20(6)(b) were made, the date they were made and the date on which the resulting certificate was obtained.

(7) The information referred to in this sub-paragraph is, in relation to each member of a body of persons named as the proprietor in post on 1st August 2007 who was appointed at any time before 1st May 2007—

(a) whether each check referred to in sub-paragraph (6) was made; and

(b) whether an enhanced criminal record certificate was obtained, together with the date on which any check was completed or certificate obtained.

(8) It is immaterial for the purposes of sub-paragraphs (3), (4), (5)(a) and (b), (6) and (7) whether the check was made or certificate obtained pursuant to a legal obligation.

Part 5. Premises of and accommodation at schools

22. The standards about the premises of and accommodation at the school are those contained in this Part.

23.—(1) Subject to sub-paragraph (2), the standard in this paragraph is met if the proprietor ensures that—

(a) suitable toilet and washing facilities are provided for the sole use of pupils;

(b) separate toilet facilities for boys and girls aged 8 years or over are provided except where the toilet facility is provided in a room that can be secured from the inside and that is intended for use by one pupil at a time; and

(c) suitable changing accommodation and showers are provided for pupils aged 11 years or over at the start of the school year who receive physical education.

(2) Where separate facilities are provided under sub-paragraph (1)(a) for pupils who are disabled, they may also be used by other pupils, staff, supply staff, volunteers and visitors, whether or not they are disabled.

24.—(1) The standard in this paragraph is met if the proprietor ensures that suitable accommodation is provided in order to cater for the medical and therapy needs of pupils, including—

- (a) accommodation for the medical examination and treatment of pupils;*
 - (b) accommodation for the short term care of sick and injured pupils, which includes a washing facility and is near to a toilet facility; and*
 - (c) where a school caters for pupils with complex needs, additional medical accommodation which caters for those needs.*
- (2) The accommodation provided under sub-paragraphs (1)(a) and (b) may be used for other purposes (apart from teaching) provided it is always readily available to be used for the purposes set out in sub-paragraphs (1)(a) and (b).*
- (3) For the purposes of sub-paragraph (1)(c), a pupil has “complex needs” if the pupil has profound and multiple learning difficulties in addition to other significant difficulties, such as a physical disability or sensory impairment, which require provision which is additional to or different from that generally required by children of the same age in schools other than special schools or by children with special requirements.*
- 25. The standard in this paragraph is met if the proprietor ensures that the school premises and the accommodation and facilities provided therein are maintained to a standard such that, so far as is reasonably practicable, the health, safety and welfare of pupils are ensured.*
- 26. The standard in this paragraph is met if the proprietor ensures that the acoustic conditions and sound insulation of each room or other space are suitable, having regard to the nature of the activities which normally take place therein.*
- 27. The standard in this paragraph is met if the proprietor ensures that—*
- (a) the lighting in each room or other internal space is suitable, having regard to the nature of the activities which normally take place therein; and*
 - (b) external lighting is provided in order to ensure that people can safely enter and leave the school premises.*
- 28.—(1) The standard in this paragraph is met if the proprietor ensures that—*
- (a) suitable drinking water facilities are provided;*
 - (b) toilets and urinals have an adequate supply of cold water and washing facilities have an adequate supply of hot and cold water;*
 - (c) cold water supplies that are suitable for drinking are clearly marked as such; and*
 - (d) the temperature of hot water at the point of use does not pose a scalding risk to users.*
- (2) The facilities provided under sub-paragraph (1)(a) will be suitable only if—*
- (a) they are readily accessible at all times when the premises are in use; and*
 - (b) they are in a separate area from the toilet facilities.*
- 29.—(1) The standard in this paragraph is met if the proprietor ensures that suitable outdoor space is provided in order to enable—*
- (a) physical education to be provided to pupils in accordance with the school curriculum; and*
 - (b) pupils to play outside.*

(2) Sub-paragraph (1) does not apply in relation to an alternative provision Academy.

30. The standard in this paragraph is met if the proprietor ensures that, where the school provides accommodation, regard is had to Standard 5 of the National Minimum Standards for Boarding Schools or, where applicable, Standard 5 of the National Minimum Standards for Residential Special Schools.

31. For the purposes of this Part—

(a) “physical education” includes the playing of games;

(b) any requirement that anything provided under this Part must be “suitable” means that it must be suitable for the pupils in respect of whom it is provided, having regard to their ages, numbers and sex and any special requirements they may have; and

(c) a pupil has “special requirements” if the pupil has any needs arising from physical, medical, sensory, learning, emotional or behavioural difficulties which require provision which is additional to or different from that generally required by children of the same age in schools other than special schools.

Part 6. Provision of information

32.—(1) The standard about the provision of information by the school is met if the proprietor ensures that—

(a) the information specified in sub-paragraph (2) is provided to parents of pupils and parents of prospective pupils and, on request, to the Chief Inspector(1), the Secretary of State or an independent inspectorate(2);

(b) the information specified in sub-paragraph (3) is made available to parents of pupils and parents of prospective pupils and, on request, to the Chief Inspector, the Secretary of State or an independent inspectorate;

(c) particulars of the arrangements for meeting the standard contained in paragraph 7 are published on the school’s internet website or, where no such website exists, are provided to parents on request;

(d) following an inspection under section 108 or 109 of the 2008 Act, a copy of the report of the inspection (if it has been sent to the proprietor) is published and maintained on the school’s internet website, and provided to the parents of each registered pupil, by any date specified by the body who conducted the inspection;

(e) following an inspection under section 87(1) of the 1989 Act, a copy of the report of the inspection (if it has been sent to the proprietor) is published and maintained on the school’s internet website, and provided to the parents of each boarder;

(f) an annual written report of each registered pupil’s progress and attainment in the main subject areas taught is provided to the parents of that registered pupil except that no report need be provided where the parent has agreed otherwise;

(g) any information reasonably requested in connection with an inspection under section 109 of the 2008 Act which is required for the purposes of the inspection is provided to the body conducting the inspection and that body is given access to the school’s admission and attendance registers;

(h) where a pupil wholly or partly funded by a local authority (except where funding is solely for free of charge early years provision in accordance with the duty contained in section 7 of the Childcare Act 2006(3)) is registered at the school, an annual account of

income received and expenditure incurred by the school in respect of that pupil is provided to the local authority and, on request, to the Secretary of State;

(i)where a pupil with an EHC plan wholly or partly funded by a local authority or other body through public funds is registered at the school, such information as may reasonably be required for the purpose of the annual review of the EHC plan is provided to the responsible local authority; and

(j)particulars of any action specified in sub-paragraph (4) are published and maintained on the school's website or, where no such website exists, are provided to parents.

(2) The information specified in this sub-paragraph is—

(a)the school's address and telephone number and the name of the head teacher;

(b)either—

(i)where the proprietor is an individual, the proprietor's full name, address for correspondence during both term-time and holidays and a telephone number or numbers on which the proprietor may be contacted, or

(ii)where the proprietor is a body of persons, the address and telephone number of its registered or principal office;

(c)where there is a governing body, the name and address for correspondence of its Chair; and

(d)a statement of the school's ethos (including any religious ethos) and aims.

(3) The information specified in this sub-paragraph is—

(a)particulars of the school's policy on and arrangements for admissions, misbehaviour and exclusions;

(b)particulars of educational and welfare provision for pupils with EHC plans and pupils for whom English is an additional language;

(c)particulars of the policy referred to in paragraph 2;

(d)particulars of arrangements for meeting the standards contained in paragraphs 9, 10, 11 and 13;

(e)particulars of the school's academic performance during the preceding school year, including the results of any public examinations;

(f)details of the complaints procedure referred to in paragraph 33, and the number of complaints registered under the formal procedure during the preceding school year; and

(g)a copy of the report of any inspection carried out under sections 108 or 109 of the 2008 Act or section 87(1) of the 1989 Act.

(4) The action specified in this sub-paragraph is—

(a)any decision of the Secretary of State to remove the school from the register under sections 100, 105, 112, 116, 119, or 123 of the 2008 Act;

(b)any decision of the Secretary of State to impose a relevant restriction on the proprietor under section 116 of the 2008 Act; and

(c) any order of a justice of the peace under section 120 of the 2008 Act to remove the school from the register.

(5) For the purposes of sub-paragraph (4)(b), “relevant restriction” has the meaning given in section 117(1) of the 2008 Act.

Part 7. Manner in which complaints are handled

33. The standard about the manner in which complaints are handled is met if the proprietor ensures that a complaints procedure is drawn up and effectively implemented which deals with the handling of complaints from parents of pupils and which—

(a) is in writing;

(b) is made available to parents of pupils;

(c) sets out clear time scales for the management of a complaint;

(d) allows for a complaint to be made and considered initially on an informal basis;

(e) where the parent is not satisfied with the response to the complaint made in accordance with sub-paragraph (d), establishes a formal procedure for the complaint to be made in writing;

(f) where the parent is not satisfied with the response to the complaint made in accordance with sub-paragraph (e), makes provision for a hearing before a panel appointed by or on behalf of the proprietor and consisting of at least three people who were not directly involved in the matters detailed in the complaint;

(g) ensures that, where there is a panel hearing of a complaint, one panel member is independent of the management and running of the school;

(h) allows for a parent to attend and be accompanied at a panel hearing if they wish;

(i) provides for the panel to make findings and recommendations and stipulates that a copy of those findings and recommendations is—

(i) provided to the complainant and, where relevant, the person complained about; and

(ii) available for inspection on the school premises by the proprietor and the head teacher;

(j) provides for a written record to be kept of all complaints that are made in accordance with sub-paragraph (e) and—

(i) whether they are resolved following a formal procedure, or proceed to a panel hearing; and

(ii) action taken by the school as a result of those complaints (regardless of whether they are upheld); and

(k) provides that correspondence, statements and records relating to individual complaints are to be kept confidential except where the Secretary of State or a body conducting an inspection under section 109 of the 2008 Act requests access to them.

Part 8. Quality of leadership in and management of schools

34.—(1) The standard about the quality of leadership and management is met if the proprietor ensures that persons with leadership and management responsibilities at the school—

(a) demonstrate good skills and knowledge appropriate to their role so that the independent school standards are met consistently;

(b) fulfil their responsibilities effectively so that the independent school standards are met consistently; and

(c) actively promote the well-being of pupils.

(2) For the purposes of paragraph (1)(c) “well-being” means well-being within the meaning of section 10(2) of the Children Act 2004(1).

Explanatory note. (This note is not part of the Regulations).

These Regulations replace the Education (Independent School Standards) (England) Regulations 2010 (“the 2010 Regulations”). Both these Regulations and the 2010 Regulations apply only in relation to England.

These Regulations set out the Independent School Standards (“the standards”) to which independent educational institutions which are independent schools will be inspected under Part 4 of the Education and Skills Act 2008 (“the 2008 Act”).

A person conducting such an inspection will make a report on the extent to which any relevant standard is met, which the Secretary of State will consider along with any other evidence in determining whether to register a new school or to take enforcement action against an existing one. A standard is a relevant one if it is specified by the Secretary of State for the purposes of the inspection or considered to be relevant by the person carrying out the inspection in the circumstances of the case.

Regulation 2 is an interpretation provision. The definitions are largely unchanged from the 2010 Regulations, but new definitions have been inserted to reflect changes to the standards as a result of changes to primary legislation, for example in the areas of safeguarding and special educational needs.

Regulation 3 provides that the standards in the Schedule apply to all independent schools and alternative provision Academies that are not independent schools, save for some limited exceptions, most notably that Part 1 does not apply to Academies. Regulation 3 also introduces the Schedule which contains the new standards for independent schools for the purposes of Part 4 of the 2008 Act. The paragraph numbers below are references to the paragraphs contained in the Schedule to these Regulations.

Part 1 of the Schedule sets out the standards on the quality of education to be provided. The standard in paragraph 2(1) is met if the proprietor ensures that a written policy on the curriculum, supported by plans and schemes of work, is drawn up and implemented effectively which provides for the matters set out in paragraph 2(2). It is a new requirement that the written policy, plans and schemes of work do not undermine the fundamental British values of democracy, the rule of law, individual liberty, and mutual respect and tolerance of those with different faiths and beliefs. Another new requirement is that personal, social, health and economic education encourages respect for other people, paying particular regard to the protected characteristics set out in the Equality Act 2010. Paragraph 3 relates to the teaching at the school. The two main new requirements are that the teaching does not undermine the fundamental British values of democracy, the rule of law, individual liberty, and mutual respect and tolerance of those with different faiths and beliefs and does not discriminate against pupils contrary to Part 6 of the Equality Act 2010.

Part 2 sets out the standard relating to the spiritual, moral, social and cultural development of pupils. It is the same as in Part 2 of the 2010 Regulations as amended by the Education (Independent School Standards) (England) (Amendment) Regulations 2014. It has been amended by those Regulations so as to require a proprietor of an independent school to actively promote British values.

Part 3 sets out the standards on the welfare, health and safety of pupils. These include standards on the promotion of good behaviour (paragraph 9), the prevention of bullying (paragraph 10), compliance with health and safety laws (paragraph 11) and the administration of first aid (paragraph 13). There is now a new standard requiring the proprietor to ensure that a written risk assessment policy is drawn up and implemented effectively and that appropriate action is taken to reduce risks that are identified (paragraph 16).

Part 4 sets out the standards on the suitability of proprietors and staff. All members of staff (separate provision is made for proprietors and supply staff) must be subject to checks on any bar from working with children and young persons, and on their identity, medical fitness, right to work in the United Kingdom and their qualifications (paragraph 18(2)(a) and (c)). It is also a requirement that, subject to exceptions, such a member of staff, prior to or as soon as practicable after, their appointment be subject to an enhanced criminal record check under the Police Act 1997 (paragraph 18(2)(d)). Paragraph 18(2)(e) provides that any person who has lived outside the United Kingdom must be subject to further checks if an enhanced criminal record check is insufficient to establish suitability to work in a school.

There are also new requirements to check that no member of staff carries out work at a school, or intends to do so, in contravention of a prohibition order, an interim prohibition order, or any direction made under section 128 of the 2008 Act that they may not take part in the management of an independent school (paragraph 18(2)(b)). A prohibition order is an order prohibiting the person to whom it relates from carrying out teaching work and an interim prohibition order may be made by the Secretary of State at any time pending a decision as to whether to make a prohibition order should she consider it necessary in the public interest to do so.

A person supplied by an employment business (supply staff) cannot work at a school until the employment business has confirmed that checks have been carried out (paragraph 19(2)(a)) and schools are required in their arrangements with agencies to place them under an obligation to provide this information (paragraph 19(2)(d)(i)). The person cannot work at a school unless the proprietor considers them suitable for the work for which they are being supplied (paragraph 19(2)(b)) and has checked their identity (paragraph 19(2)(c)). The new requirement that no member of staff carries out work at a school, or intends to do so, in contravention of a prohibition order or an interim prohibition order, or any direction made under section 128 of the 2008 Act that they may not take part in the management of an independent school also applies to supply staff (paragraphs 19(2)(a)(i)(aa) and 21(3)(a)(iii)) and proprietors (paragraphs 20(3)(a)(ii), 20(5)(a)(ii) and 20(6)(a)(ii)).

Part 5 sets out the standards relating to school premises and accommodation. These require the proprietor to ensure that the school premises and the accommodation and facilities provided are maintained to a proper standard. There must be suitable toilet and washing facilities as well as suitable accommodation provided to cater for the medical and therapy needs of pupils. No changes have been made to this Part and it is the same as it is in the 2010 Regulations.

Part 6 sets out the standard on the provision of information, requiring certain information to be provided or made available to parents of pupils and parents of prospective pupils. The standard is largely unchanged from the standard contained in Part 6 of the 2010 Regulations. The main change is that there is a new requirement for a proprietor to publish information relating to certain regulatory action that has been taken in relation to the school.

Part 7 sets out the standard on the handling of complaints. The proprietor must ensure that a complaints procedure is drawn up and effectively implemented which deals with the handling of complaints from parents of pupils and which meets the requirements set out in the standard. The only significant change to the standard as set out in Part 7 of the 2010 Regulations is that there is no longer a requirement for the complaints procedure to provide for a written record to be kept of all complaints, only those that are made in accordance with the formal complaints procedure.

Part 8 sets out the new standard on the quality of leadership and management. The proprietor can now be held accountable for ensuring that those with leadership and management responsibilities at the school demonstrate good skills and knowledge, fulfil their responsibilities effectively and actively promote pupil well-being. There is no leadership and management standard contained in the 2010 Regulations.

The National Minimum Standards for Boarding Schools can be found at <https://www.gov.uk/government/publications/boarding-schools-national-minimum-standards>

and the National Minimum Standards for Residential Special Schools can be found at <https://www.gov.uk/government/publications/residential-special-schools-national-minimum-standards>

The National Minimum Standards for Further Education Colleges have been archived but they still apply to some independent schools and can be found via http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_4005629

An impact assessment of the effect that this instrument will have on the costs of business and the public and voluntary sector is available from the Independent Education and Boarding Team, Department for Education, LG11, Mowden Hall, Staindrop Road, Darlington DL3 9BG and accessible on the Department's internet website at <http://www.education.gov.uk> Copies have also been placed in the Library of each House of Parliament.

- Childcare Act 2006¹⁸⁶

Childcare Act 2006, o la Ley del Cuidado de la Infancia de 2006, es una norma de alto rango promulgada por el Parlamento del Reino Unido. Esta ley establece, entre otros aspectos, los derechos y deberes de las autoridades locales y otros organismos en Inglaterra, en relación con la mejora del bienestar de los menores; dispone sobre los derechos y deberes de las autoridades locales en Inglaterra y Gales, en relación con la organización y financiación de la atención a

¹⁸⁶ Fuente en la web de <https://www.legislation.gov.uk/> en la url:

<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/21/contents> con accesos el 22 de mayo de 2022.

menores y la gestión de la información a los padres o tutores; de la misma forma, establece la regulación de los procedimientos de inspección de los centros de atención a menores en Inglaterra.

La disposición se compone de cuatro secciones: los deberes de las autoridades locales en Inglaterra; los deberes de las autoridades locales en Gales; las disposiciones de organización e inspección para los centros de menores en Inglaterra; y una última sección de disposiciones generales.

Con el ánimo de simplificar el texto y dadas las numerosas reiteraciones, solo reproducimos el epígrafe de los artículos más significativos. Se puede accederse al original en la url citada.

- Part 3. Regulation of Provision of Childcare in England

Art. 31. General functions of the Chief Inspector

Art. 32. Maintenance of the two childcare registers

Art. 49. Inspections

(1) This section applies to early years provision in respect of which the early years provider is registered [F1 in the early years register].

(2) The Chief Inspector—

(a) must at such intervals as may be prescribed inspect early years provision to which this section applies,

(b) must inspect early years provision to which this section applies at any time when the Secretary of State requires the Chief Inspector to secure its inspection, and

(c) may inspect early years provision to which this section applies at any other time when the Chief Inspector considers that it would be appropriate for it to be inspected.

Art. 50. Report of inspections

- Chapter 2A. Regulation of early years childminder agencies

Art. 51D. Inspections of early years childminder agencies

Art. 51E. Reports of inspections

- Chapter 3. Regulation of later years provision for children under 8

Art. 60. Inspections of later years childminders for children under eight

Art. 61. Report of inspections

- Chapter 3A. Regulation of later years childminder agencies

[F1 Art. 61E. Inspections of later years childminder agencies

- Chapter 5. Common provisions

Rights of entry

Art. 77. Chief Inspector's powers of entry: early years provision and later years provision]

Art. 78A. Chief Inspector's powers of entry: childminder agencies

- Part 3a. Inspection of Children's Centres

Part 3A. Inspection of children's centres

Art. 98A. Inspections

Art. 98B. Reports

Art. 98C. Action to be taken by local authority on receiving report

Art. 98D. Inspections of children's centres: powers of entry

Art. 98E. Obstruction of power of entry, etc.

Art. 98F. Power of constable to assist in exercise of power of entry

Art. 98G. Inspection of children's centres: interpretation

3.4. El caso particular de Finlandia

Nos corresponde en este momento, como complemento al estudio comparado internacional, realizar un acercamiento al sistema educativo de Finlandia, dadas sus aparentes especiales características, en lo relativo al control y supervisión.

3.4.1. Acercamiento a la historia, a la estructura del sistema educativo y a la asignación de funciones, propias de la inspección de educación, en Finlandia

La Constitución Finlandesa, sancionada en Helsinki el 11 de junio de 1999, recoge en su art. 16 el derecho a la educación en los siguientes términos¹⁸⁷, tal y como se ha consultado en la web de FINLEX¹⁸⁸.

16 §. Sivistykselliset oikeudet

Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuudesta säädetään lailla.

Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä.

Tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus on turvattu.

El Ministerio de Justicia de Finlandia ofrece en su web una traducción no oficial, en los siguientes términos¹⁸⁹:

Artículo 16 Derecho a la educación

Todas las personas tienen derecho a una educación básica gratuita. La obligatoriedad de la educación estará regulada por Ley.

El poder público debe asegurar a todas las personas, de acuerdo con lo que se regule más precisamente por Ley, la posibilidad igualitaria de acceder, conforme a sus capacidades y necesidades especiales, a una educación diferente de la básica, y de desarrollarse pese a la escasez de recursos.

Se garantiza la libertad científica, artística y de educación superior.

Se constata, por tanto, en su texto constitucional, una clara orientación al derecho a la educación, no exclusivamente centrada en lo relativo a la enseñanza básica, y una materialización normativa del principio de equidad educativa: «pese a la escasez de recursos». Igualmente se recoge el concepto de libertad de cátedra.

¹⁸⁷ Fuente en la web de FINLEX en la url: <https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#a731-1999> con acceso el 26 de mayo de 2022

¹⁸⁸ Finlex es un servicio de Internet público y gratuito de material jurídico, propiedad del Ministerio de Justicia de Finlandia, equivalente al BOE español. Su acceso público se realiza en la url:

<https://www.finlex.fi/fi/>. El contenido de Finlex es producido y mantenido por Edita Publishing Oy.

¹⁸⁹ Traducción no oficial del Ministerio de Justicia de Finlandia. Fuente en la url:

<https://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1999/es19990731.pdf> con acceso el 25 de mayo de 2022.

Las autoridades finlandesas, según información directa de la embajada de Finlandia en España¹⁹⁰, se orgullecen de no tener inspectores de educación porque dicen que sus profesores son tan excelentes que no lo necesitan. En esa misma línea, es importante apuntar que disponen de un sistema muy implantado de evaluación y diagnóstico por lo que, si se detectaran fallos o errores o posibilidades de mejora, lo desarrollan ellos en base a estos estudios. En ese sentido se debe apuntar que parte de las funciones que desarrollan los inspectores de educación en nuestro país, según las mismas fuentes, las desempeñan los directores de los centros que cuentan también con funciones muy importantes.

Un acercamiento al sistema educativo de Finlandia, según datos del Ministerio de Educación y cultura de Finlandia¹⁹¹, de Eurydice, del banco de datos legislativos de Finlandia¹⁹², de Laukkanen (2013, 2014) y de Galicia Mangas (2016) nos muestra como características clave fundamentales de su sistema educativo, las siguientes:

- La equidad en la educación

La equidad en la educación es una característica clave de la cultura educativa nacional de Finlandia orientada a garantizar la igualdad de oportunidades para todos. En ese sentido existen medidas de apoyo individual para garantizar que todos los alumnos y estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial por lo que se procura que las diferencias entre los centros educativos sean pequeñas y la calidad de la enseñanza sea alta.

En Finlandia, la educación se financia con fondos públicos; solo un dos por ciento de los alumnos en edad de educación obligatoria asisten a escuelas de los denominados proveedores privadas; aunque estas escuelas se financian también con fondos públicos.

Todo el ámbito educativo, desde la educación infantil hasta la superior, es gratuita; e igualmente el comedor escolar y las actividades complementarias y extraescolares es también gratuito garantizándose, en esta misma línea, el acceso y el transporte escolar gratuito en las zonas remotas o escasamente pobladas.

En Finlandia cada alumno tiene derecho a los apoyos que requiera. La idea rectora es que se debe maximizar el potencial de cada alumno; por lo tanto, la orientación de los estudios se considera esencial. La orientación y el asesoramiento procuran apoyar, ayudar y guiar a los alumnos para que puedan obtener el mejor rendimiento posible en sus estudios a fin de que sean capaces de tomar las decisiones adecuadas sobre su futuro académico y laboral. La orientación y el asesoramiento se asumen como un trabajo de todo el personal docente, por lo tanto, los maestros tratan a los niños y a los jóvenes como individuos y les ayudan a desarrollarse de acuerdo con sus propias posibilidades. Los alumnos deben saber experimentar el sabor del éxito y la felicidad de aprender. El apoyo puede consistir en una enseñanza personalizada u orientada según sus necesidades de cada alumno.

¹⁹⁰ Distintos mensajes de correo electrónico intercambiados durante el mes de mayo de 2022, tanto con la Consejería de Educación de la Embajada de España en Alemania [<http://www.educacionyfp.gob.es/alemania>]. Lichtensteinallee, 1. 10787 - Berlin, RFA. Email: consejeria.de@educacion.gob.es - Tel. +49 (0)30 8871590, como unidad responsable cultural en Finlandia, como con la Embajada de Finlandia en España; Paseo de la Castellana 15-4, Madrid – Tel. +34 91 319 6172. [www.finlandabroad.fi/espana].

¹⁹¹ Web del Ministry of Education and Cultura [Opetus-Ja Kulttuuriministeriö] en la url: <https://okm.fi/en/frontpage> con acceso el 23 de mayo de 2022.

¹⁹² Web del Banco de datos Finlex en la url: <https://www.finlex.fi/en/> con acceso el 23 de mayo de 2022.

La atención a las necesidades especiales del alumnado se imparte de forma general integrada en la dinámica educativa ordinaria. En Finlandia el motor clave consiste en educar primariamente a los alumnos con necesidades especiales integrados con el resto de sus compañeros. Si un alumno no puede aprender en un grupo ordinario se le transfiere a la educación para necesidades especiales. Siempre que es posible, esta se imparte en los centros ordinarios. Todos los niños en edad de escolaridad obligatoria tienen derecho a un apoyo general, que consiste en una educación que en Finlandia se define como de alta calidad, junto a una adecuada orientación. A los alumnos que necesitan medidas regulares de apoyo, o diferentes formas de apoyo simultáneamente, se les brinda una ayuda especial: el objetivo consiste en evitar que se agraven los problemas existentes. Si los alumnos no pueden seguir adecuadamente la enseñanza regular a pesar de recibir apoyo general o intensivo, se les brinda un apoyo especial a fin de proporcionarles una ayuda amplia y sistemática para que puedan completar la enseñanza obligatoria y acceder al ciclo secundario. El apoyo a las necesidades especiales se proporciona también en los centros de secundaria superior. Además, en la formación y capacitación profesional los alumnos con necesidades educativas especiales reciben un plan de estudios personalizado. Este contiene detalles de los estudios que el estudiante debe completar, los requisitos observados y las medidas de apoyo que se le brindan.

Finlandia tiene dos idiomas oficiales, el finlandés y el sueco. Aproximadamente un 5 % de los alumnos de los ciclos básico y secundario superior asisten a escuelas en las que el sueco es el idioma de enseñanza. Ambos grupos lingüísticos poseen sus propias instituciones también en el ciclo superior. Además, hay centros de enseñanza donde toda o una parte de la instrucción se imparte en un idioma extranjero, generalmente el inglés. Las autoridades locales organizan la educación en sami en las regiones de Laponia donde se habla ese idioma, procurando asegurar las oportunidades educativas a los gitanos y otras minorías, como a los alumnos que utilizan la lengua de signos. Los centros educativos pueden solicitar fondos adicionales para organizar la educación para niños gitanos, sami e inmigrantes y también en las lenguas maternas de los alumnos. De esta forma los centros de enseñanza organizan una enseñanza preparatoria para los inmigrantes a fin de facilitarles ingresar en los ciclos primario o secundario.

Finlandia muestra como criterio clave de su sistema educativo la confianza y la responsabilidad mutua y compartida. Su organización de la educación se sustenta a través de regulaciones, informaciones y financiamiento. La autonomía local es alta y la mayor parte de la financiación proviene de los presupuestos locales y las transferencias gubernamentales.

En su regulación el plan de estudios básico nacional deja amplia margen para iniciativas locales y como consecuencia, las escuelas y los propios docentes cuentan con mucha libertad para modificar y diseñar los planes de estudio e instrucción.

En este mismo sentido, las instituciones de educación superior finlandesas también disfrutan de una amplia autonomía: tienen independencia con respecto a sus finanzas y administración y son autónomas en su docencia e investigación.

En Finlandia hay muy poco control externo, como inspecciones escolares o autorización previa de libros de texto. En Finlandia el primer examen nacional tiene lugar al final de la educación secundaria superior general; el mecanismo de garantía de calidad más importante es la autoevaluación realizada por los propios centros o proveedores de educación. Las evaluaciones nacionales, de carácter muestral, se llevan a cabo de acuerdo con un plan de evaluación, aunque existe la posibilidad de solicitar sus auditorías externas, con abono de tasas específicas, cuando la institución o centro lo requiere.

- El aprendizaje permanente.

El aprendizaje a lo largo de toda la vida se garantiza al hacer posible que los ciudadanos y estudiantes emprendan estudios en cualquier etapa de sus vidas. La educación para adultos se imparte en todos los niveles educativos, reconociendo la educación informal y no formal como elemento sustancial a la adquisición de competencias. De esta forma en la educación profesional se utilizan las cualificaciones basadas en aprendizajes previos.

En Finlandia el aprendizaje de adultos es muy popular. Diferentes instituciones organizan una gran variedad de actividades, cursos y programas para adultos en todos los niveles de educación formal, y la oferta de educación no formal y/o complementaria para adultos es muy amplia. La educación de adultos incluye la auto-educación, la formación del personal y la formación para el mercado laboral. Puede orientarse a la calificación profesional o estar encaminada al autodesarrollo.

De esta forma, en 2017, más del 27 % de los adultos finlandeses participaron en alguna actividad de educación de adultos; superando con creces la media de la UE situada ese año en el 11 %. La mayor parte de estas actividades fueron de educación no formal.

- Obtención de buenos resultados con un gasto medio.

Los costes medios por alumno o estudiante están próximas a las tasas medias de la UE y de la OCDE. Así, por ejemplo, en 2015, el gasto medio en USD por alumno fue:

	Ed. Primaria	Ed. Secundaria (Total)	Ed. Superior y (I + D)
Finlandia	9 305	10 482	17 591
Media EU22	8 656	10 105	15 998
OCDE	8 631	10 010	15 656

Cuadro 3.5. Costes medio por alumno o estudiante en el año 2015¹⁹³.

De todo el gasto público en Finlandia, según los datos extraídos de Eurydice, el 11 por ciento se utilizó para educación en 2015 (en el año 2018 ascendió al 11,75 %¹⁹⁴) y de ese importante porcentaje, la mayor parte, el 38 % se centró en la educación básica. La enseñanza comprende el montante más importante en esa distribución, pero en la educación básica, el gasto por alumno comprende además de la escolarización, el comedor escolar, el transporte y los servicios de salud y bienestar.

¹⁹³ Datos extraídos de <https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/finlandia>.

¹⁹⁴ Información extraída de la url: <https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/educacion/finlandia> con acceso el 26 de mayo de 2022.

En cuanto a la organización del sistema educativo, Finlandia se organiza de la siguiente forma¹⁹⁵:

. CINE 0 - Educación y cuidado de la primera infancia (*varhaiskasvatus*)

En Finlandia la participación en la educación y el cuidado de la primera infancia es un derecho universal de todos los niños en esa edad, es decir, de 0 a 6 años. Se organiza principalmente en las guarderías y las llamadas guarderías familiares. Las tarifas son asequibles y moderadas para las familias, independientemente del permiso por maternidad-paternidad, que se encuentran equiparados y que se prolongan hasta los 14 meses.

. Educación infantil (*esiopetus*)

La educación preescolar puede organizarse en centros de educación y cuidado de la primera infancia (*early childhood education and care* (ECEC)), escuelas u otros entornos adecuados. La mayoría de los niños asisten a la educación preescolar en los ECEC.

Los municipios divulgan los lugares que ofrecen esta educación preprimaria, las fechas de inicio y finalización del calendario escolar, e informan sobre los procedimientos de solicitud para esta etapa educativa. La organización de estos centros se decide en el ámbito local.

Los municipios asignan plazas de educación preescolar cerca del domicilio familiar, pero los padres también pueden solicitar una plaza distinta de la asignada por la autoridad local. Los criterios de admisión son los mismos en los centros, pero las autoridades locales pueden priorizar a los solicitantes que viven dentro de su área. Los padres pueden reclamar a las Agencias Administrativas Estatales o Regionales contra la decisión relativa a la admisión a un entorno preescolar.

. CINE 1-2 - Educación básica (*perusopetus*)

La escolaridad obligatoria comienza en Finlandia a los 7 años y dura 9 años. Su sistema educativo, según Eurydice proporciona una estructura única llamada educación básica que incluye nueve grados: del 1 hasta el 9. Tanto la educación, como los materiales de aprendizaje, el comedor escolar, el servicio de transporte, con los servicios de salud y bienestar son gratuitos para los alumnos.

. CINE 3 - Educación secundaria superior (*toisen asteen koulutus*)

Esta comprende:

- La educación secundaria superior general (*lukiokoulutus*)
- La educación secundaria superior profesional (*ammattillinen koulutus*)

La educación secundaria superior se imparte en instituciones de secundaria superior general y profesional. La edad general para desarrollar los estudios de secundaria superior abarca de los 16 a los 19 años. En la educación secundaria superior profesional muchos de los estudiantes son mayores.

. CINE 6-8 - Educación superior (*korkeakoulutus*)

Que comprende:

- La universidad (*yliopisto*)
- La universidad de ciencias aplicadas (*ammattikorkeakoulu*)

¹⁹⁵ Información extraída de la url de Eurydice: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/finland_en con acceso el 24 de mayo de 2022.

La educación superior se imparte en las universidades y en las universidades de ciencias aplicadas. Las primeras (*korkeakoulutus*) tienen una orientación más académica y las segundas, son instituciones con una orientación más profesional. Las titulaciones de nivel CINE 8, como los doctorados, solo pueden ser concedidas por universidades.

Estructura del Sistema Educativo Nacional (Eurydice)¹⁹⁶

Finland – 2020/21

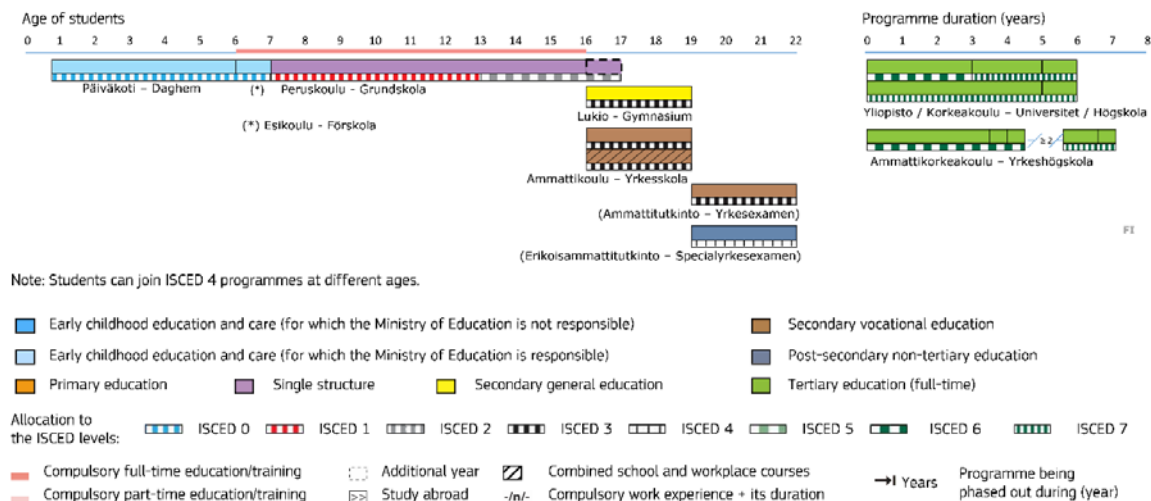


Figura 3.6. Estructura del sistema educativo en Finlandia¹⁹⁷.

Según los responsables del Ministerio de Educación y Cultura de Finlandia y sus folletos informativos, la calidad se garantiza orientando, no controlando. Las inspecciones escolares fueron abolidas a principios de los años noventa. La idea clave consiste en dirigir mediante la información, el apoyo y la asignación de recursos. Las actividades de los centros educativos y de los proveedores de educación se guían por objetivos establecidos en la legislación, así como por las pautas nacionales sobre planes de estudios y requisitos generales de las titulaciones.

En este sentido el sistema confía en la competencia de los docentes y del resto del personal, prestando gran importancia a la autoevaluación de los centros educativos y de los proveedores de educación, y a las evaluaciones nacionales de los resultados del aprendizaje.

Las evaluaciones nacionales de los resultados del aprendizaje se hacen regularmente, de manera que cada año hay una prueba de lengua y literatura o de matemáticas. Las restantes asignaturas se evalúan de acuerdo con el plan de evaluación del Ministerio de Educación y Cultura. No se evalúan sólo las materias académicas sino también otras como artes, manualidades y temas transversales o interdisciplinarios. Estas evaluaciones tienen carácter muestral. Los centros educativos y los proveedores de educación reciben los resultados de las evaluaciones de su gestión, y los emplean para mejorar su labor. El objetivo principal de las evaluaciones nacionales de los resultados del aprendizaje es realizar un seguimiento de escala nacional del cumplimiento de los objetivos establecidos en las pautas nacionales de planes de estudios y titulaciones. Por lo tanto, los resultados no se usan para clasificar los centros, colegios o escuelas. En la educación terciaria las escuelas superiores profesionales y las universidades son responsables de la

¹⁹⁶ Fuente de la url: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/finland_en con acceso el 24 de mayo de 2022.

¹⁹⁷ Imagen estraida de Baïdak, Sicurella & Matti Riiheläinen. (2020).

evaluación de sus operaciones y resultados. Para ello reciben apoyo del Consejo de Evaluación de la Educación Superior.

En Finlandia el Centro Finlandés de Evaluación de la Educación (*Finnish education evaluation centre –FINEEC-*), que cuenta con una normativa específica: La Ley del Centro Nacional de Evaluación Educativa de 2013 (*Laki Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksesta*)¹⁹⁸ es una unidad independiente responsable de la evaluación externa en todos los niveles de la educación que opera como unidad autónoma de la Agencia Nacional de Educación de Finlandia (*Finnish National Agency for Education*).

El FINEEC está en funcionamiento desde mayo de 2014 y aglutina a tres organizaciones anteriores: la Unidad de resultados del aprendizaje del Consejo Nacional de Educación de Finlandia, el Consejo de Evaluación de la Educación Superior de Finlandia del Ministerio de Educación y Cultura y el Consejo de Evaluación de la Educación de Finlandia.

En su origen el FINEEC era una agencia gubernamental independiente, y a partir de enero de 2018, pasó a formar parte de la organización de la Agencia Nacional de Educación de Finlandia como una unidad independiente. En la práctica, ello significa que FINEEC conserva su independencia financiera y de fondo como autoridad de evaluación independiente, pero utiliza los servicios de apoyo comunes de la administración de la Agencia Nacional.

El número total de personal que desarrollan las funciones de FINEEC, se aproximan a la cincuenta¹⁹⁹. Su sede se encuentra en Helsinki, pero algunas de sus actividades se desarrollan en Jyväskylä.

Las unidades de FINEEC son:

- Unidad de Educación General
- Unidad de Formación Profesional y Educación Infantil
- Unidad de Educación Superior y Educación Liberal de Adultos
- Servicios de desarrollo compartido.

Las funciones que realiza FINEEC son las evaluaciones que abarcan todo el sistema educativo, desde la educación y atención a la primera infancia (ECEC) hasta la educación superior.

Con su unidad de evaluación, FINEEC afirma en su web oficial²⁰⁰ que no inspecciona centros educativos, ni proveedores de servicios educativos; al contrario, afirma que su función es llevar a cabo evaluaciones externas de los resultados del aprendizaje en la enseñanza preescolar, básica, secundaria superior y profesional. Además, las funciones de FINEEC incluyen el apoyo a los proveedores de educación y a los centros de educación y cuidado de la primera infancia (*Early childhood education and care – ECEC-*), así como a los centros de educación secundaria, en cuestiones relacionadas con la evaluación y la garantía de calidad, así como el desarrollo de la evaluación de la educación.

El objetivo de las evaluaciones es desarrollar la educación y apoyar el aprendizaje, garantizando al mismo tiempo la calidad de la educación. Las evaluaciones proporcionan información para la

¹⁹⁸ Fuente de la web de FINLEX (<https://www.finlex.fi/>) en la url:

<https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131295> con acceso el 25 de mayo de 2022.

¹⁹⁹ Fuente en la web de FINEEC en la url: <https://karvi.fi/en/fineec/> con acceso el 24 de mayo de 2022.

²⁰⁰ acceso en la url: <https://karvi.fi/en/fineec/> con acceso el 24 de mayo de 2022.

toma de decisiones locales, regionales y nacionales en materia de educación, así como para el trabajo de desarrollo y la comparación internacional.

El eje sobre el que dice basarse su función es la «previsión y evaluación eficaz».

FINEEC es una autoridad de evaluación independiente. Su primera obligación es informar sobre los resultados de las evaluaciones al Ministerio de Educación y Cultura. Sin embargo, la independencia es el principio operativo clave de FINEEC. Esa independencia se materializa en la libertad de los métodos de evaluación, la organización y los resultados con total independencia del Ministerio de Educación y Cultura, de la Agencia Nacional o de otros organismos. De hecho, se les permite realizar informes sobre la política del gobierno y publicar informes sin la aprobación del gobierno.

FINEEC rinde cuentas al Ministerio de Educación y Cultura y está obligado a informar anualmente. A partir de 2018 el informe anual es entregado a la Agencia Nacional de Educación de Finlandia. Las evaluaciones que programa se recogen en el Plan Nacional de Evaluaciones Educativas (plan actual: 2020-2023)²⁰¹.

En lugar de las inspecciones externas de las escuelas o de los proveedores de educación, el sistema finlandés de garantía de calidad hace hincapié en la autoevaluación, así como en los resultados del aprendizaje y en las evaluaciones temáticas. Hasta principios de los años 90, la garantía de calidad del sistema educativo finlandés se basaba en gran medida en normas e inspecciones. Desde entonces, se suprimieron las inspecciones de colegios y los libros de texto.

Desde 1998, FINEEC evalúa la consecución de los resultados del aprendizaje relacionados con los objetivos de los planes de estudio básicos de la educación preescolar y básica. Los resultados del aprendizaje se evalúan sobre la base de un muestreo para que puedan extrapolarse y aplicarse a todo el grupo de edad de la educación preescolar y básica. En este sentido aproximadamente el 5-10 % de los alumnos del grupo de edad que se va a evaluar participan en la evaluación. La muestra de centros educativos que imparten enseñanza en sueco es mayor para mejorar la comparabilidad. La muestra también puede ser mayor en algunos programas de estudios determinados. El objetivo principal de las evaluaciones nacionales es desarrollar la educación y apoyar el aprendizaje garantizando la igualdad y la calidad de la educación.

Las evaluaciones temáticas y de sistemas se centran en algún aspecto de contenidos o tema. De esta forma los objetivos pueden abarcar desde la evaluación del estado de una determinada metodología; el sistema educativo completo o una parte del mismo; la política educativa y su aplicación, e incluso los procesos de renovación y desarrollo del sistema educativo. Las evaluaciones pueden dirigirse a un nivel educativo o abarcar varios niveles. Para el diseño de las evaluaciones se forman grupo multidisciplinarios de planificación y evaluación.

El proceso de evaluación puede incluir también visitas a las escuelas. En la mayoría de los casos, esta visita va precedida de una investigación y/o un análisis de documentos. Los centros educativos son seleccionados en función de sus resultados y la visita a los centros educativos

²⁰¹ National education evaluation plan 2020-2023. Finnish Education Evaluation Centre en la url: https://karvi.fi/wp-content/uploads/2021/05/KARVI_National_educational_plan_2020-2023.pdf con acceso el 24 de mayo de 2022.

Focus area 1: Developing learning and competence.

Focus area 2: Promoting equality.

Focus area 3: Increasing the functionality of the education system.

Focus area 4. Supporting continuous development.

puede incluir también la observación de las aulas, conversaciones con los alumnos y el personal, así como con el representante del titular o gestor. Estas visitas sirven para contextualizar mejor las evaluaciones y proporcionan información muy relevante que se transfiere al propio centro.

En relación a los sistemas de calidad de las instituciones de enseñanza superior, en Finlandia se llevan a cabo auditorías específicas desde 2005. Su objetivo es igualmente apoyar a las instituciones finlandesas en el desarrollo de sistemas de calidad que respondan adecuadamente a los principios europeos de garantía de calidad. Estas auditorías abarcan la gestión de la calidad de todas las funciones básicas de las instituciones de enseñanza superior y constan de las siguientes etapas principales:

- La institución de enseñanza superior realiza primero una autoevaluación y prepara el material de auditoría.
- Un equipo de expertos revisa el material, tras lo cual visita la institución.
- Y, por último, los resultados se publican en un informe.

Las instituciones de enseñanza superior que superan la auditoría reciben un sello de calidad que tiene una validez de seis años.

La autoevaluación es uno de los métodos más importantes de evaluación orientada a la mejora en FINEEC. La autoevaluación ayuda a los centros y a las instituciones a identificar los puntos fuertes y, sobre todo, a determinar las áreas que necesitan desarrollo.

Tanto la Ley de Educación de la Primera Infancia de 2018 (*Varhaiskasvatustaki*)²⁰², la Ley de Educación Básica (*Perusopetuslaki*)²⁰³, con sus múltiples modificaciones, la Ley de Derecho de la escuela secundaria de 2018 (*Lukiolaki*)²⁰⁴, desarrollado por el Decreto sobre educación secundaria superior de 2018 (*Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksesta*)²⁰⁵, como la Ley del Centro Nacional de Evaluación Educativa de 2013 (*Laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta*)²⁰⁶ establecen que los centros y las instituciones educativas tienen el deber de evaluar la educación que imparten, participar en evaluaciones externas y publicar sus resultados.

Por el contrario, no se han encontrado referencias a las funciones específicas en la Ley de Educación Obligatoria -1214/2020- de 30 de diciembre de 2020 [*Oppivelvollisuuslaki*]²⁰⁷ más allá de los deberes de los gestores del centro, del tutor o de los responsables educativos, de garantizar la continuidad del efectivo derecho a la educación, la asistencia al centro educativo y a la promoción educativa. Interesante resulta igualmente el Reglamento sobre requisitos de

²⁰² Fuente de la web de FINLEX [<https://www.finlex.fi/>] en la url:

<https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540> con acceso el 25 de mayo de 2022.

²⁰³ Fuente de la web de FINLEX [<https://www.finlex.fi/>] en la url:

<https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/1998/19980628> con acceso el 25 de mayo de 2022.

²⁰⁴ Fuente de la web de FINLEX [<https://www.finlex.fi/>] en la url:

<https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2018/20180714> con acceso el 25 de mayo de 2022.

²⁰⁵ Fuente de la web de FINLEX [<https://www.finlex.fi/>] en la url:

<https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180810> con acceso el 25 de mayo de 2022.

²⁰⁶ Fuente de la web de FINLEX [<https://www.finlex.fi/>] en la url:

<https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131295> con acceso el 25 de mayo de 2022.

²⁰⁷ Fuente de la web de FINLEX [<https://www.finlex.fi/>] en la url:

<https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20201214> con acceso el 26 de mayo de 2022.

cualificación del profesorado de 12 de diciembre de 1998 [*Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista*]²⁰⁸, con múltiples modificaciones (la última de 4 de febrero de 2022).

3.4.2. Las funciones propias de la inspección de educación, en la legislación de Finlandia

Pasemos ahora a exponer la normativa específica finlandesa, relacionada con las funciones asignadas en la inspección de educación en nuestro sistema educativo, utilizando el mismo esquema introductorio. Véase la tabla 3.4.1.

- *Perusopetuslaki*²⁰⁹

Perusopetuslaki, o la Ley de Educación Básica de 1998, es un texto normativo finés de alto rango, que junto al *Perusopetusasetuksessa*, Decreto de Educación Básica (851/1998), modificaron el sistema educativo finés establecido en las Leyes 467/1968 y 476/1983. El principio básico que rige dicha ley consiste en determinar que la escuela básica es una escuela integral que comprende nueve años y proporciona la educación básica, completando, de esta forma, su educación obligatoria. En este contexto se entiende como *yhtenäiskoulu*, escuela unificada, como aquella que cubre toda la educación básica de nueve años, aunque en ocasiones, incorpora también la enseñanza secundaria.

Esta ley determina los principios de la educación básica, así como la educación preescolar, la educación para inmigrantes y la educación básica adicional voluntaria. Esta disposición se compone de nueve capítulos: alcance y objetivos; La organización de la educación en el entorno municipal; otros organizadores de la enseñanza; la educación formal; la evaluación; el calendario y horario escolar; los derechos y obligaciones de los alumnos en la enseñanza básica; el capítulo octavo dedicado a distintos aspectos (confidencialidad, financiación, negligencia docente, etc.); y el noveno y último relativo a la entrada en vigor y a las disposiciones transitorias.

Se han seleccionado artículos que se consideran muy significativos. De esta forma el art. 21, perteneciente al capítulo relativo a la evaluación –capítulo quinto–, establece la evaluación de la educación y de la formación; y el art. 36, en la redacción modificada en el año 2013, que pertenece al capítulo séptimo, dedicado a los derechos y obligaciones de los estudiantes de educación obligatoria, establece el procedimiento antes las normas de indisciplina: así el art. 36 e, se centra a la inspección de las pertenencias de los estudiantes, y el art. 36 f, se centra a los principios generales de control e inspección.

21.8.1998/628

- 21 § (30.12.2013/1296). *Koulutuksen arviointi*

Koulutuksen arvioinnin tarkoituksena on turvata tämän lain tarkoituksen toteuttamista ja tukea koulutuksen kehittämistä ja parantaa oppimisen edellytyksiä.

Opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin.

²⁰⁸ Fuente de la web de FINLEX [<https://www.finlex.fi/>] en la url:

<https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980986> con acceso el 26 de mayo de 2022.

²⁰⁹ <https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/1998/19980628>.

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta säädetään Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetussa laissa (1295/2013).

Arviointien keskeiset tulokset tulee julkistaa.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä arvioinnista ja sen kehittämisestä.

- 36 e § (30.12.2013/1267). Oikeus tarkastaa oppilaan tavarat

Koulun opettajalla ja rehtorilla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat, oppilaan hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa, sellaisen 29 §:n 2 momentissa tarkoitetun kielletyn esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta, jos tällaisen esineen tai aineen hallussa pito on ilmeistä ja oppilas pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole.

Oppilaalle tulee ennen tarkastusta ilmoittaa tarkastuksen syy.

Tarkastajan tulee olla oppilaan kanssa samaa sukupuolta. Tarkastuksessa tulee olla läsnä tarkastajan lisäksi toinen täysi-ikäinen koulun henkilökuntaan kuuluva. Oppilaan pyynnöstä tarkastuksessa tulee olla läsnä hänen valitsemansa koulun henkilökuntaan kuuluva, jos tämä on saapuvilla.

Edellä 3 momentissa säädetystä tarkastuksen suorittamistavasta voidaan kuitenkin poiketa, jos se on asian kiireellinen luonne huomioon ottaen turvallisuuden kannalta ehdottoman välttämätöntä.

Pykälässä säädetyt oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa myös ajan, jolloin oppilas osallistuu opetussuunnitelman tai opetuksen järjestäjän hyväksymän muun tämän lain tai sen nojalla annettujen säädösten nojalla laaditun suunnitelman mukaiseen opetukseen tai toimintaan.

- 36 f § (30.12.2013/1267). Haltuunoton ja tarkastamisen yleiset periaatteet

Edellä 36 d ja 36 e §:ssä tarkoitetut toimenpiteet on toteutettava mahdollisimman turvallisesti. Toimenpiteillä ei saa puuttua oppilaan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja yksityisyyteen enempää kuin on välttämätöntä opiskelurauhan ja turvallisuuden varmistamiseksi. Esineiden ja aineiden haltuun ottamisessa ja oppilaan tarkastuksessa on noudatettava olosuhteiden edellyttämää hienotunteisuutta. Toimenpiteiden käyttö tulee kouluissa suunnitella ja ohjeistaa.

Edellä 36 d §:n mukaisten voimakeinojen käyttöön turvautuneen opettajan tai rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta opetuksen järjestäjälle. Oppilaan tarkastaminen ja esineiden ja aineiden haltuun ottaminen tulee kirjata. Edellä 36 d ja 36 e §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä on ilmoitettava oppilaan huoltajille mahdollisimman pian.

- Varhaiskasvatustaki²¹⁰

Varhaiskasvatustaki, o Ley de Educación de la Primera Infancia de 2018, también denominada de la Educación Temprana, entró en vigor el 1 de septiembre de ese año y derogó la anterior Ley de Educación Infantil, varhaiskasvatustaki (36/1973), el Decreto sobre centros de primera

²¹⁰ <https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540>.

infancia, *päivähoidosta* (239/1973) y el Decreto sobre guardería privadas, *yksityisestä lasten päivähoidosta* (1050/2012). El texto fue elaborado por la Junta Nacional de Educación de Finlandia, y define a la educación de la primera infancia, como un conjunto global de educación, enseñanza y atención orientado pedagógicamente; el juego juega un papel central en la educación infantil. La educación de la primera infancia se orienta a la interacción educativa de los niños entre sí; el objetivo es promover el crecimiento, el desarrollo y el aprendizaje equilibrados de los niños.

La Ley de Educación de la Primera Infancia, se compone de catorce capítulos, de los que consideramos más importantes, para el objeto de la investigación doctoral, el capítulo segundo relativo a la organización de la educación en la primera infancia; el capítulo tercero, centrado en el derecho a la educación en la primera infancia; el capítulo cuarto, dedicado a la escolarización; el capítulo quinto, centrado en la planificación y la evaluación de la educación de la primera infancia; y el capítulo décimo, entre otros, sobre la administración y el control.

Por su importancia para el objeto de la tesis reproducimos distintos artículos: el 16 del capítulo cuarto; los arts. del 21 al 24, del capítulo quinto; el art. 25 del capítulo sexto, dedicado al personal de los centros de primera infancia; los arts. del 50 al 58, del capítulo décimo, dedicado a la administración y el control.

13.7.2018/540

4 luku. Menettelysäännökset

- 16 §. Ohjaus ja neuvonta

Kunnan on järjestettävä varhaiskasvatukseen oikeutetun lapsen vanhemmille tai muille huoltajille neuvontaa ja ohjausta heidän käytettävissään olevista varhaiskasvatuspalveluista. Ohjauksessa on selvitettävä varhaiskasvatuksen eri toimintamuodot ja tarjolla olevat vaihtoehdot sekä muut seikat, joilla on vaikutusta lapsen varhaiskasvatuksen järjestämiseen.

5 luku. Varhaiskasvatuksen suunnittelu ja arviointi

- 21 §. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet

Opetushallitus määrää tähän lakiin perustuen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tarkoituksena on edistää varhaiskasvatuksen yhdenvertaista toteuttamista koko maassa, toteuttaa tässä laissa säädettyjä varhaiskasvatuksen tavoitteita sekä ohjata varhaiskasvatuksen laadun kehittämistä. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määrätään varhaiskasvatuksen toteuttamisen keskeisistä sisällöistä, varhaiskasvatuksen järjestäjän ja lapsen vanhempien tai muiden huoltajien välisestä yhteistyöstä, monialaisesta yhteistyöstä sekä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman sisällöstä. Opetushallitus valmistelee perusteet yhteistyössä tarvittavien tahojen kanssa.

- 22 §. Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat

Kunta, kuntayhtymä ja yksityinen palveluntuottaja laatii valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman. Suunnitelma voidaan laatia palvelujen tuottaja-, yksikkö-, ryhmä- tai toimintamuotokohtaisesti, ja siinä otetaan huomioon pedagogiset painotukset ja muut varhaiskasvatuksen järjestämisen kannalta merkitykselliset valtakunnallisia

varhaiskasvatussuunnitelman perusteita täydentävät seikat. Kunnat voivat tehdä yhteisen suunnitelman.

Paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa on otettava huomioon yhteistyö varhaiskasvatuksen, opetuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavien viranomaisten ja muiden 7 §:ssä tarkoitettujen yhteistyötahojen välillä sekä luotava tarvittavat yhteistyörakenteet.

- 23 § (16.12.2021/1183). Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevalle lapselle on laadittava henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon toteuttamiseksi. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan on kirjattava tavoitteet lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevalla tavalla sekä toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi. Lisäksi suunnitelmaan on kirjattava lapsen 15 b §:ssä tarkoitetun tuen tarve, tukitoimenpiteet ja niiden toteuttaminen sekä tuen vaikuttavuuden arviointi.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on laadittava yhteistyössä henkilöstön ja lapsen vanhemman tai muun huoltajan kanssa. Sen laatimiseen osallistuvat lapsen opetuksesta, kasvatuksesta ja hoidosta vastaavat henkilöt. Päiväkodeissa sen laatimisesta vastaa varhaiskasvatuksen opettajaksi kelpoinen henkilö. Varhaiskasvatuksen sosionomin osaamista voidaan hyödyntää erityisesti lasten ja perheiden palvelujärjestelmän tuntemuksen osalta. Lapsen mielipide on selvitettävä ja otettava huomioon varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen voivat osallistua lapsen kehitystä ja oppimista tukevat muut viranomaiset, asiantuntijat ja muut tarvittavat tahot.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista ja tarkoituksenmukaisuutta on arvioitava, ja suunnitelma on tarkistettava vähintään kerran vuodessa. Tätä useammin se on tarkistettava, jos lapsen tarpeet sitä edellyttävät.

- 24 §. Varhaiskasvatuksen arviointi

Varhaiskasvatuksen arvioinnin tarkoituksena on turvata tämän lain tarkoituksen toteuttamista ja tukea varhaiskasvatuksen kehittämistä ja edistää lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin edellytyksiä. Varhaiskasvatuksen järjestäjän ja tuottajan tulee arvioida antamaansa varhaiskasvatusta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin.

Arviointien keskeiset tulokset tulee julkistaa.

6 luku. Henkilöstö ja kelpoisuusvaatimukset

- 25 §. Riittävä henkilöstö

Kunnan, kuntayhtymän ja yksityisen palveluntuottajan on huolehdittava, että varhaiskasvatuksessa on riittävä määrä tässä luvussa säädettyä eri kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilöstöä, jotta varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan saavuttaa ja jotta myös vammaisten ja muiden lasten tuen tarpeisiin vastataan. Kunnan käytettävissä on oltava varhaiskasvatuksessa esiintyvää tarvetta vastaavasti varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluja. Lisäksi varhaiskasvatuksessa voi olla lasten tarpeet ja varhaiskasvatuksen tavoitteet huomioiden myös muuta henkilöstöä. Lain 1 §:ssä tarkoitettulla päiväkodilla tulee olla toiminnasta vastaava johtaja.

10 luku. Hallinto ja valvonta

- 50 §. Kunnan monijäseninen toimielin

Kunnalle tässä laissa säädettyistä tehtävistä huolehtii yksi tai useampi kunnan määräämä monijäseninen toimielin.

Toimielimen tehtävänä on myös edustaa kuntaa, valvoa sen oikeutta ja käyttää puhevaltaa lasten varhaiskasvatuksen yksilöllistä toimeenpanoa koskevissa asioissa ja tehdä sen puolesta näissä asioissa sopimukset ja muut oikeustoimet.

Toimielimen laissa säädettyä päätösvaltaa ja oikeutta puhevallan käyttämiseen voidaan kuntalaissa tarkoitetulla hallintosäännöllä siirtää toimielimen alaisille viranhaltijoille.

Milloin kahden tai useamman kunnan koko lasten varhaiskasvatuksesta huolehtii kuntayhtymä, sen on asetettava yksi tai useampi 1 momentissa tarkoitettu toimielin yhteisesti jäsenkuntia varten.

- 51 §. Valtion ohjausjärjestelmä

Varhaiskasvatuksen yleinen suunnittelu, ohjaus ja seuranta kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Varhaiskasvatuksen alueellinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta sekä valtakunnallisen lupaviranomaisen tehtävät kuuluvat aluehallintovirastolle. (13.5.2022/326)

- 52 §. Valvontaviranomaiset

Varhaiskasvatuksen valvontaviranomaisia ovat kunnan tai kuntayhtymän järjestämän ja tuottaman varhaiskasvatuksen osalta aluehallintovirasto ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto. Varhaiskasvatuksen valvontaviranomaisia ovat yksityisen palveluntuottajan järjestämän ja tuottaman varhaiskasvatuksen osalta aluehallintovirasto, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto sekä 50 §:ssä tarkoitettu kunnan toimielin tai sen määräämä viranhaltija.

- 53 §. Ohjaus, neuvonta ja sosiaaliasiamies

Edellä 52 §:ssä tarkoitettujen valvontaviranomaisten on toteutettava valvontaa ensisijaisesti antamalla varhaiskasvatuksen järjestäjälle tarpeellista ohjausta ja neuvontaa sekä seuraamalla toiminnan kehitystä yhteistyössä toiminnan järjestäjän kanssa.

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 24 §:ssä tarkoitetun kunnan sosiaaliasiamiehen tehtävänä on myös varhaiskasvatuksen osalta neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä, tiedottaa asiakkaan oikeuksista, toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle.

- 55 §. Tarkastusoikeus

Valvontaviranomainen voi tarkastaa varhaiskasvatuksen järjestäjän ja palveluntuottajan tässä laissa tarkoitetun toiminnan sekä toiminnan järjestämisessä käytettävät toimipaikat ja toimitilat.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto tai aluehallintovirasto voi määrätä kunnan toimielimen perustellusta syystä tarkastamaan yksityisen palveluntuottajan toimipaikan.

- 56 §. Tarkastuksen toimittaminen

Tarkastaja on päästettävä kaikkiin toimipaikan tiloihin. Pysyväisluonteiseen asumiseen käytettävät tilat voidaan kuitenkin tarkastaa ainoastaan, jos tarkastaminen on välttämätöntä asiakkaan aseman ja asianmukaisten palvelujen turvaamiseksi. Muilta osin tarkastuksessa noudatetaan, mitä hallintolain 39 §:ssä säädetään.

Tarkastajalle on salassapitosäännösten estämättä esitettävä kaikki hänen pyytämänsä asiakirjat, jotka ovat välttämättömiä tarkastuksen toimittamiseksi. Lisäksi tarkastajalle on annettava maksutta hänen pyytämänsä jäljennökset tarkastuksen toimittamiseksi välttämättömistä asiakirjoista. Tarkastajalla on oikeus ottaa valokuvia tarkastuksen aikana. Tarkastajan apuna voi olla tarkastuksen toteuttamiseksi tarpeellisia ulkopuolisia asiantuntijoita. Ulkopuoliseen asiantuntijaan sovelletaan hallintolakia, kielilakia (423/2003), viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia sekä valtion virkamieslain (750/1994) 14 ja 15 §:ää. Asiantuntijalla ei ole oikeutta suorittaa tehtäväänsä pysyväisluonteiseen asumiseen käytettävissä tiloissa muutoin kuin yhdessä tarkastajan kanssa, jota hän avustaa.

- 57 §. Huomautus ja huomion kiinnittäminen

Jos varhaiskasvatuksen ohjauksen ja valvonnan yhteydessä todetaan, että toiminnan järjestäjä on tämän lain mukaista toimintaa järjestäessään tai toteuttaessaan menetellyt virheellisesti tai jättänyt velvollisuutensa täyttämättä eikä asia anna aiheutta muihin toimenpiteisiin, valvontaviranomainen voi antaa varhaiskasvatuksen järjestäjälle, kunnan tai kuntayhtymän virheellisestä toiminnasta vastuussa olevalle henkilölle tai yksityisen palvelujentuottajan toiminnasta vastaavalle vastuuhenkilölle huomautuksen vastaisen toiminnan varalle.

Jos asia ei anna aiheutta huomautukseen tai muihin toimenpiteisiin, voivat valvontaviranomaiset kiinnittää 1 momentissa tarkoitettujen huomiota toiminnan asianmukaiseen järjestämiseen ja hyvän hallintotavan noudattamiseen.

- 57 a § (4.6.2021/453). Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus

Lain 26–30 §:ssä tarkoitettuun varhaiskasvatushenkilöstöön kuuluvan on toimittava siten, että lapsen varhaiskasvatus toteutetaan tässä laissa edellytetyllä tavalla.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun työ- tai virkasuhteisen henkilön on ilmoitettava viipymättä varhaiskasvatuksen toimipaikan toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos hän tehtävissään huomaa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamisessa tässä laissa säädetyn mukaisesti. Ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava asiasta varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle.

Ilmoitus voidaan tehdä salassapitosäännösten estämättä, jos se on välttämätöntä ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi ja epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan poistamiseksi.

Varhaiskasvatuksen järjestäjän ja tuottajan on tiedotettava henkilöstölleen ilmoitusvelvollisuudesta ja sen käyttöön liittyvistä asioista. Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamista koskevat menettelyohjeet on laadittava kirjallisena ja pidettävä julkisesti nähtävillä. Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena.

Tässä pykälässä tarkoitetut ilmoitukset säilytetään, kunnes vuosi on kulunut sen kalenterivuoden päättymisestä, jona ilmoitus tehtiin.

- 57 b § (4.6.2021/453). Toimenpiteet ilmoituksen johdosta

Edellä 57 a §:n 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottaneen varhaiskasvatuksen toimipaikan toiminnasta vastaavan henkilön tulee ilman aiheetonta viivytystä käynnistää tarvittavat toimet epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan poistamiseksi.

Jos epäkohtaa tai ilmeisen epäkohdan uhkaa ei pystytä itsenäisesti poistamaan varhaiskasvatuksen toimipaikassa, on varhaiskasvatuksen johtavan viranhaltijan annettava asiassa tarpeellista ohjausta ja neuvontaa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan poistamiseksi.

Varhaiskasvatuksen johtavan viranhaltijan on ilmoitettava asiasta edelleen aluehallintovirastolle tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle, jos epäkohtaa tai ilmeisen epäkohdan uhkaa ei 1 ja 2 momentissa mainituista toimenpiteistä huolimatta poisteta. Ilmoitus voidaan tehdä salassapitosäännösten estämättä, jos se on välttämätöntä asian käsittelemiseksi ja epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan poistamiseksi.

Aluehallintovirasto tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi antaa määräyksen epäkohdan poistamiseksi ja päättää sitä koskevista lisätoimenpiteistä siten kuin 58 §:ssä säädetään.

Ilmoituksen tehneellä henkilöllä on kohtuullisen ajan kuluessa oikeus saada tietää mihin toimenpiteisiin ilmoituksen johdosta on ryhdytty.

Jos varhaiskasvatustoimintaa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan poistamiseksi muutetaan ja muutoksella on erityistä merkitystä lapsen kasvun ja kehityksen kannalta, on varhaiskasvatustoiminnan muutoksesta ilmoitettava muutoksen kohteena olevan lapsen vanhemmalle tai muulle huoltajalle.

- 58 §. Määräyksen antaminen

Jos varhaiskasvatuksen järjestämisessä tai toteuttamisessa havaitaan asiakasturvallisuutta vaarantavia puutteita tai muita epäkohtia taikka toiminta on muutoin tämän lain vastaista, valvontaviranomainen voi antaa määräyksen puutteiden korjaamisesta tai epäkohtien poistamisesta. Määräystä annettaessa on asetettava määräaika, jonka kuluessa tarpeelliset toimenpiteet on suoritettava. Jos asiakasturvallisuus sitä edellyttää, toiminta voidaan määrätä välittömästi keskeytettäväksi taikka toimipaikan, sen osan tai laitteen käyttö kieltää välittömästi. Jos palvelujentuottaja ei ole täyttänyt ilmoitusvelvollisuuttaan tai palveluntuottajalle ei ole myönnetty lupaa päiväkotitoiminnan harjoittamiselle, tulee toimipaikka määrätä välittömästi suljettavaksi. (13.5.2022/326)

- Laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta²¹¹

Laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta, o Ley del Centro Nacional de Evaluación Educativa de 2013, regula la agencia independiente de evaluación de la educación en Finlandia que evalúa la educación y las actividades de la enseñanza y los proveedores o suministradores de educación, desde la educación infantil, hasta la educación superior y genera estudios e informes orientados a la toma de decisiones sobre política educativa. Sus formas de evaluación incluyen auditorías de sistemas de calidad, evaluaciones de resultados de aprendizaje, y distintas

²¹¹ <https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131295>.

evaluaciones de temas concretos. La ley, que ha sufrido significativas modificaciones, regula sus funciones y su organización.

El breve texto legal (que reproducimos en su integridad, por su importancia) se compone de once artículos, de los que consideramos que el más importante el art. 2 pues establece las funciones del Centro de Evaluación.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (16.6.2017/372). Toimiala

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen ulkopuolisen arvioinnin riippumattomana asiantuntijaorganisaationa on Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Arviointikeskus tuottaa arviointiin perustuvaa tietoa koulutuspoliittista päätöksentekoa ja koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämistä varten.

Arviointikeskus toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla Opetushallituksesta annetun lain (564/2016) 6 a §:ssä tarkoitettuna Opetushallituksen erillisyyksikkönä.

2 §. Tehtävät

Arviointikeskuksen tehtävänä on:

1) toteuttaa koulutukseen ja varhaiskasvatukseen sekä varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen toimintaan liittyviä arviointeja 5 §:ssä tarkoitetun arviointisuunnitelman mukaisesti; (8.5.2015/582)

2) tehdä 5 §:ssä tarkoitetun arviointisuunnitelman mukaisesti:

a) perusopetuslain (628/1998) 14 §:ssä tarkoitettujen tuntijaon ja opetussuunnitelman perusteiden sekä lukiolain (714/2018) 11 §:ssä tarkoitetun oppimäärän ja 12 §:n 1 momentissa tarkoitettujen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden saavuttamista koskevia oppimistulosten arviointeja; (30.12.2020/1231)

b) ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 15 §:ssä tarkoitettujen tutkinnon perusteiden sekä taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) 5 §:ssä tarkoitettujen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden saavuttamista koskevia oppimistulosten arviointeja; (11.8.2017/545)

3) tukea varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä sekä korkeakouluja arviointia ja laadunhallintaa koskevissa asioissa; (8.5.2015/582)

4) kehittää koulutuksen ja varhaiskasvatuksen arviointia; sekä (8.5.2015/582)

5) huolehtia muista tehtävistä, jotka säädetään tai määrätään sen tehtäviksi.

3 § (16.6.2017/372). Johtaja

Arviointikeskuksessa on johtaja, joka johtaa keskuksen toimintaa. Valtioneuvosto nimittää johtajan.

Johtaja ratkaisee arviointikeskuksessa ratkaistavat asiat, jos muuta ei ole säädetty tai erillisyyksikön työnjaossa määrätty. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin johtajan ratkaisuvallasta.

4 §. Arviointineuvosto

Arviointikeskuksen yhteydessä toimii arviointineuvosto, joka seuraa ja kehittää arviointikeskuksen toimintaa. Arviointineuvoston jäsenillä tulee olla tehtävän edellyttämää asiantuntemusta.

Arviointineuvoston kokoonpanosta, tehtävistä ja päätösvaltaisuudesta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Valtioneuvosto nimittää arviointineuvoston enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Johtajalla ja henkilöstön edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus arviointineuvoston kokouksissa. Arviointikeskuksen henkilöstö valitsee keskuudestaan edustajan arviointineuvostoon.

Arviointineuvoston yhteydessä voi toimia jaostoja, joihin kuuluu myös arviointineuvoston ulkopuolisia jäseniä. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimittää jaostot arviointineuvoston esityksestä.

Jaostojen kokoonpanosta, päätösvaltaisuudesta, toimikaudesta ja ratkaisuvallasta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

5 §. Arviointisuunnitelma

Arviointineuvosto laatii esityksen arviointisuunnitelmaksi, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy. Arviointisuunnitelma sisältää arvioitavat kohteet ja arviointien aikataulun.

Arviointisuunnitelman laadinnassa noudatettavista periaatteista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

6 § (13.3.2020/114). Salassa pidettävien henkilötietojen saaminen ja säilyttäminen

Arviointikeskuksella on oikeus saada varhaiskasvatuksen järjestäjiltä ja palvelujentuottajilta, opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä sekä Opetushallitukselta maksutta ja salassapitosäännösten estämättä muita kuin korkeakoulujen opiskelijoita koskevat 2 §:n 1 ja 2 kohdassa säädettyjen arviointitehtävien suorittamiseksi välttämättömät henkilötiedot, jotka liittyvät:

- 1) varhaiskasvatukseen tai opetukseen osallistumiseen;
- 2) varhaiskasvatuksen tai opetuksen laajuuteen ja järjestämistapoihin;
- 3) perusopetuslain 22 §:ssä, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 53 §:ssä, lukiolain 37 §:ssä, tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain (1215/2020) 15 §:ssä ja taiteen perusopetuksesta annetun lain 8 §:ssä tarkoitetun oppilaan tai opiskelijan oppimisen tai osaamisen arvioinnin tuloksiin; (30.12.2020/1231)
- 4) kasvatusta tai opetusta varten laadittuihin päätöksiin ja suunnitelmiin;
- 5) varhaiskasvatuslaissa (540/2018), perusopetuslaissa, lukiolaissa, ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa ja tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun tuen saamiseen ja järjestämistapoihin; sekä (30.12.2020/1231)
- 6) näihin rinnastuvia arviointitehtävän suorittamiseksi välttämättömiä annettuun varhaiskasvatukseen, opetukseen tai tukeen liittyviä tietoja.

Sen estämättä mitä 1 momentissa säädetään arviointikeskuksella ei ole oikeutta saada tietoa varhaiskasvatuksessa olevaa lasta, oppilasta tai opiskelijaa koskevista lääketieteellisistä tai psykologisista arvioinneista, terveydenhuollon tai sosiaalihuollon ammattihenkilöiden asiakirjoista taikka muista vastaavista salassa pidettävistä opiskeluhuollon palveluiden asiakirjoista.

Arviointikeskus voi säilyttää 1 momentissa tarkoitetut tiedot niin kauan kuin se on välttämätöntä sen arvioinnin toteuttamiseksi, jota varten tiedot on kerätty ja jota varten tietoja käsitellään. Tämän jälkeen tiedot on tuhottava yhden vuoden kuluessa.

8 § (16.6.2017/372)

Asetuksenantovaltuus

Arviointikeskuksen toimintaperiaatteista, neuvottelukunnista ja palkkioiden määräytymisestä säädetään valtioneuvoston asetuksella.

9 §. Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

10 §. Toiminnan aloittamista koskevat siirtymäsäännökset

Yliopistolain (558/2009) 87 §:n 2 momentissa ja ammattikorkeakoululain (351/2003) 9 §:n 2 momentissa tarkoitetun korkeakoulujen arviointineuvoston tehtävät, perusopetuslain 21 §:ssä, lukiolain 16 §:ssä, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 24 §:ssä, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 15 §:ssä, vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 7 §:ssä ja taiteen perusopetuksesta annetun lain 7 §:ssä tarkoitetun koulutuksen arviointineuvoston tehtävät sekä opetushallituksesta annetun lain (182/1991) nojalla opetushallitukselle säädetyt oppimistulosten seuranta-arviointeihin liittyvät tehtävät siirtyvät arviointikeskukselle 1 päivänä toukokuuta 2014. Mainitusta ajankohdasta lukien siirtyvät myös korkeakoulujen arviointineuvostossa, koulutuksen arviointineuvostossa ja opetushallituksessa siirtyvien tehtävien osalta tehdyt sopimukset ja sitoumukset sekä niistä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä siirtyviin tehtäviin liittyvät aiemmat arviointiaineistot arviointikeskukselle, jollei toisin ole sovittu.

Arviointitoiminnassa noudatetaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan laadittua arviointisuunnitelmaa, kunnes 5 §:n mukainen arviointisuunnitelma on hyväksytty.

11 §. Henkilöstöä koskevat siirtymäsäännökset

Korkeakoulujen arviointineuvoston sihteeristön sekä opetushallituksesta siirtyvän henkilöstön siirtymisestä arviointikeskuksen palvelukseen 1 päivästä toukokuuta 2014 säädetään valtion virkamieslain (750/1994) 5 a §:ssä.

Koulutuksen arviointineuvoston sihteeristö siirtyy arviointikeskuksen palvelukseen työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 10 §:ssä tarkoitetulla liikkeen luovutuksella. Siirtyvä henkilöstö nimitetään virkasuhteisiin 1 päivästä toukokuuta 2014. Määräaikaisessa työsuhteessa oleva henkilö nimitetään määräaikaiseen virkasuhteeseen työsopimuksessa sovituksi määräajaksi.

Arviointikeskuksen johtajan virka perustetaan 1 päivästä tammikuuta 2014. Opetus- ja kulttuuriministeriö voi ennen tämän lain voimaantuloa nimittää virkamiehiä arviointikeskuksen virkoihin niitä ensimmäisen kerran täytettäessä.

- **Lukiolaki**²¹²

Lukiolaki, o Ley de Derecho a la ESCUELA SECUNDARIA de 2018, es una norma de alto rango que organiza la educación secundaria superior. La ley se compone de diez capítulos: el primero sobre aspectos generales y ámbito; el segundo relativo a la organización de la formación; el tercero sobre la enseñanza y los planes de estudio; el cuarto sobre la admisión; el quinto relativo a los derechos y deberes de los estudiantes; el sexto sobre la evaluación del alumnado; el séptimo, relativo al clima de estudio; el octavo, sobre los procedimientos de reclamación; el noveno, abierto a disposiciones variadas; y el décimo sobre la entrada en vigor y las disposiciones transitorias.

Por su importancia para el objeto de la investigación doctoral reproducimos, en su literalidad, el art. 7, del capítulo segundo, que trata de la supervisión y de la retirada de autorizaciones educativas; y los arts. 46 y 47, del capítulo séptimo, que tratan del derecho a inspeccionar las pertenencias del alumnado y de los principios generales de inspección; y los arts. 56 y 57, del capítulo noveno, sobre la evaluación de la calidad de la educación y el personal.

714/2018

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

- 7 §. *Erityisen koulutustehtävän edellytysten täyttymisen seuraaminen ja peruuttaminen*

Opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa erityisen koulutustehtävän ja siihen sisältyvän valtakunnallisen kehittämistehtävän edellytysten täyttymistä säännöllisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi peruuttaa erityisen koulutustehtävän ja siihen sisältyvän valtakunnallisen kehittämistehtävän, jos erityisen koulutustehtävän mukaista toimintaa ei enää järjestetä, se ei enää täytä 6 §:n 3 momentissa erityisen koulutustehtävän myöntämiselle säädettyjä edellytyksiä tai sitä järjestetään olennaisesti vastoin tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä.

- 46 §. *Oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat*

Opettajalla ja rehtorilla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa opiskelijan mukana olevat tavarat, opiskelijan hallinnassa olevat oppilaitoksen säilytystilat sekä päällisin puolin hänen vaatteensa, sellaisen 40 §:n 2 momentissa tarkoitetun esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta, jos on ilmeistä, että opiskelijan hallussa on tällaisia esineitä tai aineita ja opiskelija pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole.

Opiskelijalle tulee ennen tarkastusta ilmoittaa tarkastuksen syy.

Tarkastajan tulee olla opiskelijan kanssa samaa sukupuolta. Tarkastuksessa tulee olla läsnä tarkastajan lisäksi toinen täysi-ikäinen oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluva. Opiskelijan pyynnöstä tarkastuksessa tulee olla läsnä hänen valitsemansa oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluva, jos tämä on saapuvilla.

Edellä 3 momentissa säädetystä tarkastuksen suorittamistavasta voidaan kuitenkin poiketa, jos se on asian kiireellinen luonne huomioon ottaen turvallisuuden kannalta ehdottoman välttämätöntä.

²¹² <https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180714>.

Tässä pykälässä säädetyt oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa myös ajan, jolloin opiskelija osallistuu opetussuunnitelman tai koulutuksen järjestäjän hyväksymän muun tämän lain nojalla laaditun suunnitelman mukaiseen koulutukseen tai toimintaan.

- 47 §. Haltuun ottamisen ja tarkastamisen yleiset periaatteet

Edellä 45 ja 46 §:ssä tarkoitetut toimenpiteet on toteutettava mahdollisimman turvallisesti. Toimenpiteillä ei saa puuttua opiskelijan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja yksityisyyteen enempää kuin on välttämätöntä opiskelurauhan ja turvallisuuden varmistamiseksi. Esineiden ja aineiden haltuun ottamisessa ja opiskelijan tarkastamisessa on noudatettava olosuhteiden edellyttämää hienotunteisuutta. Toimenpiteiden käyttö tulee oppilaitoksissa suunnitella ja ohjeistaa.

Edellä 45 §:n mukaisten voimakeinojen käyttöön turvautuneen opettajan tai rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta koulutuksen järjestäjälle. Opiskelijan tarkastaminen ja esineiden ja aineiden haltuun ottaminen tulee kirjata. Haltuun ottamisesta ja tarkastamisesta on ilmoitettava alaikäisen opiskelijan huoltajille mahdollisimman pian.

9 luku. Erinäiset säännökset

- 56 §. Koulutuksen arviointi ja laadunhallinta

Koulutuksen järjestäjä vastaa järjestämänsä koulutuksen laadusta ja laadunhallinnan jatkuvasta kehittämisestä. Koulutuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua säännöllisesti ulkopuoliseen toimintansa ja laadunhallintajärjestelmiensä arviointiin. Koulutuksen järjestäjän tulee julkistaa järjestämiensä arviointien keskeiset tulokset.

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta säädetään Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetussa laissa (1295/2013).

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä koulutuksen arvioinnista ja sen kehittämisestä.

- 57 §. Henkilöstö

Jokaisella oppilaitoksella, jossa järjestetään tässä laissa tarkoitettua koulutusta, tulee olla toiminnasta vastaava rehtori.

Koulutuksen järjestäjällä tulee olla riittävä määrä opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi koulutuksen järjestäjällä voi olla tuntiopettajia ja muuta henkilöstöä.

Rehtorin ja opettajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Aluehallintovirasto voi erityisestä syystä myöntää kelpoisuusvaatimuksista erivapauden.

- Peruskoululaki²¹³

Peruskoululaki, o Ley de Escuelas Primarias de 1983, es una norma de alto rango finlandesa, que organiza los centros y las enseñanzas de educación primaria. La densa norma se compone de doce capítulos, en ciento ocho artículos.

²¹³ <https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1983/19830476>.

La norma fue modificada, como ya se ha apuntado, por la disposición *Perusopetuslaki*, o Ley de Educación Básica de 1998. Por su singularidad con la temática de la investigación doctoral, reproducimos los arts. del 18 al 21, perteneciente al capítulo tercero, dedicado a la administración de la escuela primaria. En dichos arts. se describen, de forma muy general, las figuras del director y del subdirector, así como sus funciones.

476/1983

18 §. Peruskoulussa on johtaja. Yläasteella ja sellaisella ala-asteella, jossa on pysyvästi vähintään kaksitoista perusopetusryhmää, koulun johtajana on rehtori. Erityisluokista muodostettuun peruskouluun on perustettava rehtorin virka, jos koulussa on pysyvästi vähintään kolme perusopetusryhmää, joista ainakin yhdessä on peruskoulun yläasteen oppilaita.

Jollei peruskoulussa ole rehtoria, tulee koululautakunnan valita opettajien keskuudesta koululle johtaja kuultuaan opettajakuntaan kuuluvia ja johtokuntaa. Johtaja valitaan toistaiseksi, ja hänen määräyksensä voidaan peruuttaa, kun siihen on syytä. Jos koulussa on vain yksi opettajanvirka, on sen haltija koulun johtaja.

Johtosäännössä voidaan määrätä, että kahdella tai useammalla peruskoululla on yhteinen johtaja.

Milloin peruskoulun yläaste ja kunnan lukio toimivat samassa rakennuksessa tai rakennusryhmässä, voidaan johtosäännössä määrätä, että lukion rehtori hoitaa myös peruskoulun yläasteen johtajan tehtävät. Kouluhallituksen luvalla voidaan vastaavasti johtosäännössä määrätä, että lukion rehtori hoitaa sekä peruskoulun yläasteen että ala-asteen johtajan tehtävät.

19 §. Johtajan tehtävänä on johtaa, ohjata ja valvoa peruskoulun opetus- ja kasvatustyötä sekä suorittaa hänelle määrätty hallinto-, taloudenhoito [H ja opetustehtävät. Tarkempia säännöksiä ja määräyksiä johtajan tehtävistä annetaan asetuksella ja tarvittaessa johtosäännössä.

20 §. Peruskoulussa on apulaisjohtaja sen mukaan kuin asetuksella säädetään.

Apulaisjohtajan valitsemisesta ja hänen määräyksensä peruuttamisesta on voimassa, mitä johtajan osalta on 18 §:n 2 momentissa säädetty.

Johtajan tehtävien jakamisesta johtajan ja apulaisjohtajan kesken päättää koululautakunta, jollei asetuksella toisin säädetä.

21 §. Peruskoulussa voi olla varajohtaja.

Varajohtajan valitsemisesta ja määräyksen peruuttamisesta on voimassa, mitä johtajan osalta on 18 §:n 2 momentissa säädetty.

3.5. Síntesis reflexiva

Durante este estudio hemos realizado un acercamiento a los sistemas educativos y a la historia y a las unidades de inspección de dos modelos de nuestro entorno europeo: la inspección en la República Francesa y en la inspección en la República Italiana, en cuanto al parámetro establecido en relación al modelo centralizado; y la inspección en Inglaterra, como muestra representativa del resto de países del Reino Unido, en cuanto al modelo descentralizado, y hemos realizado también un acercamiento a la situación de Finlandia como caso especial, al no contar en la actualidad con la figura de los inspectores de educación.

El estudio se ha realizado con los parámetros marcados, como un estudio comparado internacional y la utilización de la yuxtaposición de funciones, en relación a la normativa en la que se desarrolla y a las funciones asignadas a la inspección de educación en el Estado Español. Dicho estudio se puede encontrar en las tablas: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.3.1 y 3.4.1.

De este estudio, como componente sustancial y significativo de esta tesis, podemos realizar una síntesis reflexiva con relevantes conclusiones.

El primer dato a tener en cuenta y en cuanto al parámetro histórico establecido, es que los sistemas de inspección en el ámbito educativo por medio de unidades específicas, se constituyeron normativamente en la primera mitad del siglo XIX, cuando los países de nuestro entorno se estaban conformando como estados modernos tras la Revolución Francesa: esta situación se da claramente en los tres ejemplos estudiados.

Merece la pena puntualizar la singularidad de la inspección en el Reino Unido, como antecedente de la inspección en Inglaterra, pues sus primeros pasos se encuentran en el control de fondos públicos destinados a la financiación de la educación, más que en aspectos formativos, escolares u organizativos. Este singular aspecto es susceptible de mostrar vinculaciones interesantes con el siguiente capítulo.

El siguiente aspecto a significar, dentro del parámetro organizativo y estructural, de una forma inequívoca es la alta jerarquización de las unidades de inspección, si bien dentro de las posibles estructuras descentralizadas. Los modelos de inspección muestran una estructura muy jerarquizada y dependiente: del ministro o del consejero (en el caso español) con un desarrollo marcadamente piramidal. En este parámetro también se percibe una alta y diferenciada estructuración, en cuanto a la inspección francesa, sobre todo en aspectos académicos y en enseñanzas secundarias, como exponente diferenciador del resto de las inspecciones estudiadas.

En cuanto al último de los parámetros marcados, si bien las funciones asignadas a las distintas inspecciones son muy parecidas, con algunas singularidades, que consideramos menores y que veremos más adelante, es preciso apuntar que en el modelo francés y en el modelo inglés –y de alguna forma también en el finés–, se percibe una clara diferencia entre la dimensión micro y macro; diferenciando y acentuando la dimensión macro: evaluación del sistema, seguimiento de la política educativa, evaluación de los resultados globales del sistema educativo, estudio de temas de actualidad, informes globales y propuestas de carácter holístico con posibles relaciones con organismos internacionales o de otros países. Sus funciones en esta dimensión también abarcan la supervisión y control sobre la propia organización y la coordinación de las otras unidades de inspección.

Estas funciones corresponden en Francia a la Inspección General de Educación, Deporte e Investigación (IGÉSR) –lo que antiguamente era la Inspección General de la Educación Nacional [IGEN]–, en Inglaterra al Inspector Jefe de Su Majestad (en la actualidad Inspectora Jefe de Su Majestad, como ya se ha apuntado) como responsable del OFSTED y en Finlandia al Centro Finlandés de Evaluación de la Educación [FINEEC].

En el caso español esta dimensión –macro- viene asignada a unidades que nada tienen que ver, en principio, con la Inspección Educativa, realizándola en primera instancia los Consejo Escolares tanto autonómicos, como del Estado, en los que no tienen puesto orgánicos la inspección educativa u otros organismos, como el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE)²¹⁴. Merece la pena puntualizar que ni la denominada Alta Inspección, ni la llamada Inspección Central, realizan o pueden realizar esta función de carácter macro: en el caso de la Alta Inspección, como unidades integradas en las Delegaciones del Gobierno de las distintas comunidades autónomas, están compuestas por personal, que no tienen que cumplir el requisito de ser inspector de educación y se ciñen a realizar tareas administrativas (tramitan solicitudes de homologación de estudios, etc.), y a comprobar si los desarrollos legislativos de las comunidades autónomas se ajustan a la normativa básica promulgada por el Estado²¹⁵. En el caso de la denominada Inspección Central, el nombre conduce a confusión, pues esta es la unidad de control e inspección de la que dispone el Ministerio de Educación y Formación Profesional para la supervisión de los centros docentes o de convenio del Estado Español en el extranjero, del control de los centros de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla principalmente, no teniendo ninguna función de coordinación y asesoramiento a nivel nacional del resto de inspecciones.

En cuanto a la dimensión micro, en los ámbitos más cercanos a los centros y al personal docente que trabaja en los mismo, como ya se ha apuntado, las funciones son muy parecidas, recalcando el control de los centros educativos, la supervisión de la práctica docente y educativa, la evaluación de la labor docente, la evaluación de la organización y el funcionamiento de los centros educativos, el impulso de los procesos de autoevaluación docente o de evaluación de la organización, como agentes para hacer cumplir las distintas normativas, disposiciones legislativas o reglamentarias, y también como agentes de asesoramiento e información.

También existe la función de participar en los procesos de selección de personal. Si bien esta función no se encuentra especificada en el caso español (aunque se podría considerar integrada en la redacción inicial del art. 151.h de la LOE 2/2006), la realidad es que sistemáticamente las administraciones educativas asignan la organización de los procesos selectivos de personal docente, para que sean coordinados por inspectores de educación en España.

²¹⁴ Se puede ampliar información sobre sus funciones y sus informes en la url:

<https://www.educacionyfp.gob.es/inee/portada.html>

²¹⁵ Las funciones y actividades asignadas a las áreas funcionales de la Alta Inspección del Estado en el País Vasco y en Cataluña, vienen asignadas en los arts. 2 y 3 del Real Decreto 480/1981, de 6 de marzo, sobre el funcionamiento en el País Vasco y Cataluña de la alta inspección del Estado en materia de enseñanza no universitaria. (BOE, núm. 69 de 21 de marzo). Texto original en la url: <https://www.boe.es/eli/es/rd/1981/03/06/480/dof/spa/pdf> con acceso el 24 de mayo de 2022.

Estas funciones y actividades fueron primero atribuidas a las Altas Inspecciones del resto de comunidades autónomas por Real Decreto 1982/1983, de 23 de mayo, sobre funcionamiento en las Comunidades Autónomas de la Alta Inspección del Estado en materia de enseñanza no universitaria (BOE, núm. 175, de 23 de julio de 1983) [url: <https://www.boe.es/boe/dias/1983/07/23/pdfs/A20582-20583.pdf>]; y finalmente atribuidas a la Alta Inspección de la Comunidad de Madrid por Real Decreto 1448/2000, de 28 de julio, por el que se crean las áreas funcionales de Alta Inspección de Educación integradas en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia y La Rioja (BOE. núm. 186, de 4 de agosto). [url: <https://www.boe.es/boe/dias/2000/08/04/pdfs/A27989-27990.pdf>], tras la promulgación del citado Real Decreto 926/1999.

La misma situación se da en cuanto a la función relativa a la participación en los procesos de formación del personal docente, en sus dimensiones de formación inicial y sobre todo de formación permanente, así como en el de la formación de directivos: en el caso del modelo francés, italiano e inglés es una función asumida, propia y específica, mientras que en el caso español se encuentra igualmente desdibujada y supeditada a decisiones coyunturales, más que estructurales²¹⁶.

E igualmente se ha detectado la función que podemos denominar como estadística, aunque en este caso podemos referirnos al art. 151.g, en el caso español, relativo a la asignación de la elaboración de las estadísticas escolares, acentuada en el resto de modelos, pero camuflada en el caso español [informar sobre los aspectos que se le requieran] aunque es evidente que ha ido desapareciendo protagonismo con la implementación de los recursos tecnológicos.

No se nos puede olvidar que en todos los ejemplos de inspecciones aparecen de una forma o de otra, la disponibilidad de los inspectores, dentro de los principios de jerarquía de las distintas estructuras, para cualquier otra función, encomienda, misión o asignación específica y concreta; en este sentido vinculada con la antigua redacción del art. 151.h. del caso español, pero que continúa utilizándose como inercia funcional colectiva. Sería adecuado ponderar, delimitar esa función y homologarla técnicamente en la línea del resto de inspecciones educativas de nuestro entorno.

En esta misma línea hay que mencionar las iniciativas que van creando y constituyendo unidades de distinto índole y estructura, para desarrollar, siquiera parcialmente, funciones inicialmente inspectoras. Esta, quizá amenaza, se percibe muy claramente en el caso del modelo italiano, y también se percibe en el caso español con los Servicios de Unidades de Programas [SUPEs] y la constitución de grupos de variado objeto de Asesores Técnico Docentes [ATDs].

En la actualidad se percibe la importancia que se da a la intervención frente a fenómenos como el *bullying* escolar y a los problemas y dificultades juveniles, así como en otro aspecto, a la participación en procesos de experimentación, tanto en lo relativo a la definición, como al seguimiento y a la evaluación de los mismos.

Como datos significativos ha llamado poderosamente la atención que, en Inglaterra, los centros puedan solicitar una evaluación específica por el OFSTED, independientemente de la asignada muestralmente cuando corresponda, previo pago de unas tasas; esa circunstancia se da también en el caso de Finlandia con el FINEEC

Igualmente significativa y singular, es el caso de la inspección en Inglaterra, en su dimensión más global (abarca no sólo los centros educativos, sino la atención y cuidado de los menores y los servicios sociales) que cuenta y dispone de registros de quienes pueden *cuidar niños*, abarcando aspectos docentes de centros educativos o simples cuidadores domésticos.

El definido como caso especial de Finlandia ha aportado una información cualitativamente relevante para el estudio. La afirmación previa de la no existencia de los inspectores de educación en dicho país se comprendía como un elemento de discusión, quizá algo llamativo o polémico para quienes realizamos este estudio. Más allá de las afirmaciones de que el sistema educativo finés aprovechaba y confiaba en la cualificación de sus docentes y en la autoevaluación, como forma de mejora y de optimización continua del sistema educativo, que podía ser considerado claramente como un ejemplo y paradigma, susceptible de reproducción,

²¹⁶ No podemos olvidar, como ya se ha apuntado en esta investigación, que el Decreto de 30 de marzo de 1849 tenía como denominación: “*reformando la organización á las escuelas normales de instrucción primaria, y la necesidad de crear Inspectores para este ramo de enseñanza*”, por lo que en sus orígenes la figura del inspector de educación se encontraba vinculado con la formación de los futuros maestros.

replicación y consolidación en nuestro entorno y en todos los entornos de los países próximos, la investigación ha mostrado un escenario algo distinto.

La realidad ha distado bastante de esas conjeturas iniciales pues en el estudio se ha podido comprobar que, si bien no existen inspectores de educación, al estilo del resto de los países estudiados en este capítulo, la realidad es que las funciones asignadas a la inspección de educación en España, si son replicadas en Finlandia, siendo asumidas por distintos órganos, unidades y entidades.

De esta forma tanto los directores de los centros, las agencias administrativas estatales, regionales o locales y el afamado Centro Finlandés de Evaluación de la Educación (FINEEC) realizan dichas funciones, en lo relativo a todos los aspectos y dimensiones (micro o macro), aunque de forma distinta y estratificada según la entidad que corresponda. Así en el nivel micro de la supervisión de la intervención y práctica docente, es el director el que actúa, mientras que, en otras dimensiones, como la supervisión de los centros educativos, actúan las agencias administrativas y el FINEEC y a nivel macro, del sistema educativo, asume el protagonismo claramente el FINEEC, desde los datos de sus inspecciones, muy parecidas –curiosamente- a las inspecciones que realizan el OFSTED y los HMI en Inglaterra.

Se comprueba, por tanto (y debemos confesar que partíamos de esa hipótesis), que las funciones se replican y reproducen, aunque no se cuente con un colectivo específico para esa labor, lo cual se percibe como una posible cierta amenaza por la falta de formación, conocimiento experto y experiencia en dichas funciones, que sí aporta un colectivo específico.

Debemos considerar igualmente, ante este contexto determinado, que hay que tener muy en cuenta la propia historia de Finlandia al respecto. Distinta información de acceso público y abierto en internet²¹⁷ expone, como datos significativos, que hemos resumido y reformulado, los siguientes:

Finlandia fue parte de Suecia hasta que en 1809 fue anexionada por el Imperio ruso, pasando a ser el gran ducado de Finlandia (entidad autónoma de Rusia hasta 1917, cuando obtuvo la independencia). Desde esa independencia el país estuvo marcado por la influencia rusa, que cristalizó en unos tratados firmados en 1947 y 1948. Desde ese momento Finlandia no tomó parte en la guerra fría en ninguno de los dos bandos, sino que mostró una singular neutralidad (finlandización) hasta la extinción de la URSS.

La disolución de la unión Soviética en 1991 cambió la situación geopolítica de Finlandia, al quedar sin efecto los compromisos políticos contraídos con la URSS, lo que tuvo como consecuencia una mayor integración de Finlandia en Europa, que terminó produciendo su entrada en la Unión Europea en 1995.

Actualmente, Finlandia es una república parlamentaria y democrática, y es miembro de las Naciones Unidas desde 1955. La economía finlandesa es una de las más prósperas de Europa, basándose en los importantes sectores de servicios, así como de manufactura. En el país existe un denominado estado del bienestar, así como una política altamente democrática.

²¹⁷ Datos extraídos desde la página de la embajada de Finlandia en España en las urls: <https://finlandabroad.fi/web/esp/etusivu> y en <https://www.infofinland.fi/es/information-about-finland/finnish-history> con acceso el 28 de mayo de 2022.

Estos datos nos muestran que Finlandia ya distaba de Suecia, cuando esta empezó a constituir su inspección de educación, a partir de 1842²¹⁸ por lo que la influencia no debía ser directa, aunque quizá sí, indirecta. Al respecto, en relación a la inspección de educación en Suecia y como sencilla introducción para la ampliación del estudio comparado internacional, debemos exponer que, en la legislatura iniciada en 2006, el nuevo gobierno sueco apostó por una inspección escolar constituida en una autoridad nueva e independiente. Justificaban ese objetivo en los decrecientes resultados de los estudiantes suecos en estudios internacionales y en las preocupaciones acerca de la calidad y los resultados de los centros educativos.

En ese sentido se consideró importante fortalecer y endurecer aún más el control estatal y separarlo de la Agencia Nacional de Educación, como responsable de la normalización y el desarrollo escolar nacional. El resultado fue que el 1 de octubre de 2008, se constituyó la nueva autoridad de inspección: la Inspección de Escuelas de Suecia²¹⁹.

Tenemos entonces que estudiar la posible influencia rusa en el establecimiento de sistemas de control e inspección en la educación de Finlandia, y aunque reconocemos el interés del tema para el equipo de investigación, debemos también mostrar los propios límites al haber encontrado sólo bibliografía en ruso: Раскин, Д. И. (2020) (Raskin, D. I. (2020)), en el que hemos podido concluir que existían sistemas de inspección de escuelas en Rusia, al menos desde 1866, y al menos, en lo que se refiere de la provincia de Sarátov.

Centrándonos nuevamente en las unidades y entidades que realizan las funciones inspectoras en Finlandia, también es significativo, al menos en cuanto a la relatado de la falta de unidades específicas y a la posible carencia de formación y experiencia, lo que apunta Vuohijoki (2006) y que es reiterado por Johnson (2007) y Lehkonen (2009) en el sentido de que los directores escolares en Finlandia, y al menos en ese periodo, se sienten mal pagados, saturados y con ganas de cambiar de empleo en un porcentaje superior al 80 %²²⁰.

Ante todas estas conclusiones: la continuidad de las funciones; el reparto entre unidades poco formadas; y el desencanto de algunas de ellas, podemos concluir que, en los aspectos de control y supervisión escolar, en lo relativo a la dimensión micro, que es la cercana a los centros, servicios, al personal de los centros docentes y al asesoramiento y asistencia a las familias, ante procesos de reclamación, Finlandia no parece representar un ejemplo a reproducir.

²¹⁸ Fuente en la url: <https://www.skolinspektionen.se/om-oss/uppdrag-och-verksamhet/historik/> con acceso el 28 de mayo de 2022.

²¹⁹ Página web de la Inspección de Escuelas de Suecia [skolinspektionen] en la url: <https://www.skolinspektionen.se/> con acceso el 28 de mayo de 2022.

²²⁰ Se puede encontrar información sobre este tema en la url: <https://yle.fi/uutiset/3-5756312> con acceso el 26 de mayo de 2022.

Si la necesidad de los inspectores no estuviese tan reconocida, los resultados en el corto tiempo transcurrido desde su creación serían el mejor comprobante de su utilidad e importancia. No hay reforma en que estos funcionarios no puedan reclamar su parte. Donde quiera que ha llegado su acción, allí ha sido provechosa. Además de las mejoras materiales y visibles, han conseguido obras de mayor influencia en el porvenir, rectificando el espíritu de los pueblos en favor de los maestros, dando a éstos utilísimos consejos para perfeccionar la educación y enseñanza, y poniendo en movimiento a no pocas autoridades locales que, por falta de estímulo y ejemplo, miraban con apatía o indiferencia la suerte de los establecimientos confiados a su vigilancia y cuidado.

Gil de Zárate, A. (1855, 310).

Capítulo 4

Investigación comparada disciplinar

El siguiente estudio que incardina la presente tesis viene a realizar un estudio comparado de las inspecciones de otras disciplinas y ámbitos con la Inspección de Educación en nuestro Estado; es lo que hemos denominado estudio comparado disciplinar.

Dicha pretensión podría tener, a su vez, la profundidad de convertirse en un denso estudio específico al comparar su historia, sus antecedentes y justificaciones para su creación; la evolución que han sobrellevado estructural y funcionalmente; las condiciones y requisitos para la provisión de puestos de trabajo; la percepción que los ciudadanos tienen de esas inspecciones y de cómo contribuyen eficazmente a los servicios y ámbitos públicos esenciales dentro del contexto de rendición de cuentas y eficacia y eficiencia de los servicios públicos, etc.

Lógicamente, no podemos realizar este estudio de forma tan profunda, por ello nos centraremos en lo que consideramos Inspecciones paradigmáticas o representativas en nuestro Estado: la Inspección de Trabajo y Seguridad social, La Inspección de Sanidad y la Inspección de Hacienda. Tres unidades de control y servicios íntimamente ligadas a los servicios públicos y vinculadas, a la idiosincrasia de la mejora y calidad de estos.

Como ya se ha apuntado, denominamos este capítulo como estudio comparado disciplinar en el que pondremos en diálogo la historia, la estructura y las funciones de unidades de control e inspección de objetos y disciplinas distintas: la laboral, la sanitaria y la tributaria con la específicamente educativa, a fin de concluir elementos enriquecedores por su semejanza o diferencia con nuestro estudio. Consideramos que realidades aparentemente asimétricas, dadas sus vinculaciones funcionales, pueden aportar elementos de riqueza organizativa susceptible de

aportar propuestas de mejora o elementos de progreso en objetos o disciplinas distintas. O dicho en otros términos: tenemos la convicción de que la Inspección de Educación, como servicio público que interviene en un derecho constitucional, y en concreto, su desarrollo estructural y funcional, puede aportar elementos teóricos enriquecedores a las unidades de inspección y control laboral, sanitaria o tributaria —entendidos de la misma forma, como derechos constitucionales—; de la misma forma que estas otras inspecciones, pueden, por lo mismos motivos, aportar algún elemento enriquecedor a la Inspección de Educación

Debemos iniciar este capítulo reconociendo la escasa bibliografía que existen sobre la historia, el desarrollo y la dinámica de estas unidades de control, en comparación con la vasta y permanentemente elaborada bibliografía sobre la Inspección de Educación; quizá este aspecto es también un dato significativo de la comparación disciplinar.

De la misma forma que se ha hecho en el capítulo precedente, y tal y como hemos indicado en el capítulo de metodología, antes de iniciar el estudio comparado disciplinar, recordamos que los parámetros que vamos a utilizar serán, por una parte, la historia, organización y estructura, y por otra, las funciones asignadas.

4.1. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social

4.1.1. Acercamiento a la historia y estructura de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en España

Este acercamiento a la historia, organización, estructura e historia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se ha encontrado con poca bibliografía relevante, como se ha apuntado en la introducción; sobre todo si la comparamos con la documentación y bibliografía generada en torno a la Inspección de Educación. Es verdad que existen ciertos manuales de ejecución y reflexiones y comentarios sobre la aplicación de la normativa específica, que son referencia también para los alumnos del grado de derecho en la materia de derecho laboral, pero con referencia al ámbito histórico, comparado o funcional, son pocos los documentos que hemos encontrados.

Es necesario partir del libro de cabecera de Espuny Tomás et al. (2006) con motivo del centenario de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social celebrado en el año 2006, a autores como Ruberte (1983), Beneyto (1998), Pérez Amorós (2008), Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, García Matos (2018) y a documentación de la web del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS)²²¹, así como de los ministerios que influyen en el desarrollo funcional de este cuerpo de Inspección: en estos momentos, y como de una fotografía puntual se tratara el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Ministerio de Sanidad²²².

- Historia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Como apunta Espuny (2006), la Inspección de Trabajo nace en nuestro país a principios del siglo XX como uno de los frutos más importantes del entonces Instituto de Reformas Sociales, siendo aprobado su primer reglamento regulador por el Real Decreto de 1 de marzo de 1906.

Tal y como establece el art. 21 del Real Decreto de 1 de marzo de 1906, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio de la Inspección de Trabajo:

La misión de los inspectores debe tener un carácter preventivo, tanto como represivo. La legislación se dirige a proteger al obrero, pero sin causar vejaciones a la industria, y los

²²¹ Página web en la url: <https://www.inspectoresdetrabajo.org/> con acceso el 5 de septiembre de 2021.

²²² En la actual legislatura corresponden ciertos niveles de dependencia y desarrollo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social al Ministerio de Trabajo y Economía Social, cuya web se puede encontrar en la url: <https://www.mites.gob.es/index.htm> , al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cuya web se puede encontrar en la url: <https://www.inclusion.gob.es/> y al Ministerio de Sanidad, cuya web se puede encontrar en la url: <https://www.sanidad.gob.es/home.htm> con acceso el 5 de septiembre de 2021.

Se puede acceder a los servicios de inspección y de seguridad laboral en la url:

https://www.mites.gob.es/es/Guia/texto/guia_10/contenidos/guia_10_21_1.htm con acceso el 5 de septiembre de 2021.

inspectores habrán de inspirarse en este concepto, sin desposeerse de la autoridad que es aneja o indispensable al cumplimiento de sus deberes^{223 224}.

Desde esa fecha asume la función de la vigilancia del cumplimiento de la incipiente legislación social de la época; no podemos olvidar las promulgadas Leyes de Accidentes de Trabajo de 30 de enero de 1900, sobre Trabajo de Mujeres y Menores de 13 de marzo de 1900 y de Descanso Dominical de 3 de marzo de 1904, entre otras. Las funciones inspectoras son objeto de regulación unos años más tarde, en el año 1909 y, tras la creación del Ministerio de Trabajo el de 20 de mayo de 1920, se consolida una Inspección General de carácter regional que se convertiría más tarde en provincial, con la reestructuración del Ministerio realizada en el año 1932.

Espuny (2006) continúa puntualizando que una importante ampliación de las competencias de la Inspección de Trabajo se produjo en el año 1939, tras la Guerra Civil, con la creación del Cuerpo Nacional de la Inspección de Trabajo y la consecuente integración en el mismo de la Inspección de Seguros Sociales y de la Inspección de Emigración. Posteriormente se produjeron nuevas integraciones como consecuencia de la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo de 1962, que afectó a la Inspección Técnica de Previsión Social y a los Delegados de Trabajo.

En 1984, la Ley 30 de Reforma de la Función Pública²²⁵ conformó de nuevo la Inspección de Trabajo, que se transformó desde ese momento en la que hoy conocemos como Inspección de Trabajo y Seguridad Social, organizando la función inspectora en torno a dos cuerpos, el Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y el de Controladores Laborales, como cuerpo de gestión.

Posteriormente, y ya en el año 1997, a través de la Ley 42 de 14 de noviembre²²⁶ y en coherencia con la nueva organización territorial del Estado surgida de la Constitución de 1978, aunque con cierta tardanza, se conforma el Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social como un conjunto institucional integrado, cuyas funciones se desarrollan y distribuyen de acuerdo con el ámbito de competencias propio del Estado y de las comunidades autónomas, por lo que se implantan las condiciones de participación de las comunidades autónomas en el desarrollo del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Como consecuencia, la citada Ley de 1997 define un sistema institucional de Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se confirma conjuntamente en el ámbito del Estado y de las comunidades autónomas, en función de sus respectivas competencias y bajo el principio de colaboración interinstitucional.

La misma Ley 42/1997 procede a la creación, como cuerpo de gestión, del Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, en el que se integra el Cuerpo de Controladores

²²³ Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento para el servicio de inspección de trabajo, Gaceta de Madrid de 4 de marzo de 1906 en la url: <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1906/063/A00868-00870.pdf> con acceso el 5 de septiembre de 2021.

²²⁴ Nótese el paralelismo fundacional al impulsar la nueva figura, con el Decreto de 30 de marzo de 1849 que crea el Cuerpo de Inspectores de Educación.

²²⁵ La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública (BOE de 3 de agosto) en la url: <https://www.boe.es/boe/dias/1984/08/03/pdfs/A22629-22650.pdf> ya citada afecto también de forma muy significativa a la Inspección de Educación pues llegó a declarar el cuerpo a extinguir.

²²⁶ Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (BOE de 15 de noviembre) en la url: <https://www.boe.es/boe/dias/1997/11/15/pdfs/A33539-33548.pdf> con acceso el 5 de septiembre de 2021.

Laborales, adecuando y actualizando sus funciones inspectoras de apoyo y colaboración dentro del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Por tanto, transcurridos cien años desde la aparición de la Inspección de Trabajo en nuestro país, Espuny (2006) afirma que se ha recorrido un largo camino marcado de forma muy significativa por el cambio en los procesos industriales, por el cambio en las relaciones de trabajo, por la implementación de nuevos modelos organizativos, tanto nacionales, internacionales o supranacionales, y con la asunción de un progresivo e imparable protagonismo por parte de los agentes sociales.

Así, el entorno de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se encuentra sometido lógicamente y por su propia idiosincrasia a un continuo cambio, lo que requiere sin duda de una adaptación constante de la Inspección a las nuevas realidades económicas y sociales para, de esta forma, continuar así prestando una función social fundamental que hoy se demanda como propia de un Estado Social y Democrático de Derecho.

Una vez que hemos realizado un acercamiento a la historia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, procede siguiendo a Pérez Amorós (2008) poner de relieve la significación que el denominado intervencionismo estatal tiene para el correcto entendimiento del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

En ese sentido Pérez Amorós (2008) puntualiza que considera que el protagonismo del Estado en esta esfera es —o quizá debería ser— lo que él denomina de fuste, tanto desde una valoración cuantitativa, como desde una dimensión cualitativa. El autor afirma que el Estado no sólo debe legislar en materia laboral, sino también exacerbar su celo en aras a asegurar el cumplimiento de las normas de tal condición, que es tanto como decir que el Estado está llamado a garantizar que los titulares de los derechos laborales, los puedan ejercitar de forma tanto efectiva, como real; y para ello debe actuar en una triple perspectiva:

- Legislativamente, dictando normas laborales y gubernamentalmente ejecutándolas.
- Administrativamente, controlando y vigilando que las mismas se cumplan.
- Y correctora: reconduciendo las infracciones ya sea por vía administrativa o judicialmente (defensa del derecho subjetivo) según mejor corresponda.

Pérez Amorós (2008) infiere que el Estado no sólo crea el derecho (poder legislativo), sino que también lo sustenta con su poder ejecutivo y su poder judicial, que respectivamente, aseguran el cumplimiento del derecho objetivo y del derecho subjetivo.

En ese sentido, y anclando su concepción en una dimensión diacrónica, el autor desarrolla que, si el derecho en general guarda una estrecha correspondencia con las situaciones de desencuentro que se producen en la sociedad, debido a que su objeto de regulación es, por excelencia, el conflicto, la aparición del Derecho del Trabajo como tal, está estrechamente relacionado con las características que adquirió el conflicto social en una etapa histórica determinada. Este conflicto social -considerado, en esta concepción, como el motor de la historia social más que un factor patológico de la sociedad- se manifestó, en lo fundamental por la concurrencia en el tiempo de varios factores de muy distinta condición. El primero de condición económica, y que se puede sintetizar caracterizándolo como el paso de la manufactura a la maquina-factura y todo lo que ello comporta (revolución industrial versus maduración del sistema de producción capitalista y nuevas formas de organizar el trabajo al amparo de la denominada *primera* revolución tecnológica). El segundo, de condición ideológica, debido al fracaso de la *utopía burguesa* del *laissez faire laissez passer*, patrocinada por una nueva clase social tan refractaria a los privilegios feudales gremiales, como aferrada a la defensa

de las libertades económicas (libertad de trabajo / libertad industrial), a las libertades profesionales (elección de profesión u oficio), y a las libertades sociales individuales, pero todas ellas simplemente formales, y a su vez, una clase social acérrima postulante de un Estado sólo *gendarme* por abstencionista, que percibe las revoluciones burguesas, como generadoras, por sí misma, de la marcha del mercado. En tercer término, el conflicto social adquiere una nueva dimensión al crecer el descontento de la clase trabajadora y a la puesta en práctica por parte de la misma de las primeras manifestaciones de asociacionismo sindical (con el movimiento obrero incipiente y las consiguientes defensas de los derechos sociales colectivos). Y en cuarto y último lugar, el conflicto también se explica debido a que en la época se consolidaron ciertas doctrinas solidaristas (entre otras las socialistas, o las propias del reformismo conservador) defensoras de lo colectivo antes que de lo individual y de la presencia activa del Estado.

De esta forma, continúa Pérez Amorós (2008), las normas jurídicas, y entre tales las sociolaborales, se caracterizan porque su cumplimiento resulta exigible por definición, y es por ello que el propio Estado crea sus órganos públicos de aplicación de las mismas; instancias que, unas son de condición judicial, y las otras administrativas. Las primeras conforman el orden social de la jurisdicción social y las otras la denominada administración laboral. Las instancias judiciales laborales en sentido estricto hunden sus raíces en la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900 en la que, como es conocido, ya se anunciaban los *Tribunales Industriales* de composición paritaria o mixta, pero bajo una presidencia judicial que como tales se crearon en 1908; mientras que la administración laboral tiene su origen en lo que la doctrina denomina el *intervencionismo científico*, es decir en instancias de origen estatal cuya originaria función se constreñía al estudio de los problemas socio-laborales de la época (Comisión de Reformas Sociales -1883-, Instituto de Reformas Sociales -1903-, e Instituto Nacional de Previsión -1908-) y que por lo demás debe tenerse como antecedente de la Inspección de Trabajo, primero y del Ministerio de Trabajo -creado en 1920- más tarde.

- Estructura y funciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

En la web del Ministerio de Trabajo y Economía Social, como ya se ha apuntado, se desarrollan de forma divulgativa el trabajo y la labor de la Inspección de Trabajo y Seguridad social.

En cuanto a la definición de esta Inspección, el propio Ministerio introduce que la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (BOE del 22 de julio)²²⁷, que utilizaremos en nuestro estudio de yuxtaposición, atribuye a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la vigilancia del cumplimiento de la normativa en el orden social. Esta normativa es muy amplia y comprende, entre otras las relativas a materias laborales, de prevención de riesgos laborales, de Seguridad Social y protección social, colocación, empleo, formación profesional para el empleo y protección por desempleo, economía social, emigración, movimientos migratorios y trabajo de extranjeros, igualdad de trato y oportunidades y no discriminación en el empleo, así como cuantas otras le sean atribuidas. También, y este aspecto es significativo en nuestra tesis, realiza funciones de asesoramiento, asistencia técnica y en su caso, de conciliación, mediación y arbitraje.

Por lo que se refiere a su organización y estructura, el Real Decreto 192/2018, de 6 de abril, que aprueba los estatutos del Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y

²²⁷ La Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (BOE de 22 de julio), en su versión consolidada se encuentra en la url:

<https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-8168-consolidado.pdf> con acceso el 5 de septiembre de 2021.

Seguridad Social (BOE de 7 de abril)²²⁸ establece los órganos de dirección, de gobierno y de participación institucional, así como la estructura administrativa central y de ámbito territorial.

En cuanto a la función inspectora es desempeñada por los funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y por los funcionarios del Cuerpo de Subinspectores Laborales.

De acuerdo con la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social tienen competencia en materia de relaciones laborales, prevención de riesgos laborales, Seguridad Social, empleo, migraciones (trabajo de extranjeros y movimientos migratorios) y asistencia técnica. Y por su parte el Cuerpo de Subinspectores Laborales cuenta con dos Escalas especializadas: la Escala de Empleo y Seguridad Social y la Escala de Seguridad y Salud Laboral. Los Subinspectores pertenecientes a la primera Escala tienen competencias en materia de empleo, Seguridad Social, trabajo de extranjeros, comprobación del cumplimiento de las normas que prohíben la admisión al trabajo de los menores de dieciséis años, y comprobación del cumplimiento de la normativa sobre modalidades contractuales, contratos de duración determinada y temporales.

Y los Subinspectores Laborales pertenecientes a la Escala de Seguridad y Salud Laboral tienen competencias en materia de prevención de riesgos laborales, en concreto respecto a la vigilancia del cumplimiento de la normativa en aspectos que afectan directamente a condiciones materiales de trabajo, de la normativa jurídico-técnica con incidencia en materia de prevención de riesgos laborales, la ejecución de programas de actuación preventiva de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social derivados del análisis de la siniestralidad laboral y derivado de actuaciones inspectoras, así como la realización de funciones de asesoramiento e información a empresarios y trabajadores.

Las comunidades autónomas pueden habilitar también a funcionarios públicos, como técnicos en prevención de riesgos laborales, para actuar como colaboradores de la Inspección en materia de prevención de riesgos laborales.

El propio Ministerio en su página web continúa que la acción de denuncia de un posible incumplimiento de la legislación social puede ser pública. En este sentido podrá presentar denuncia toda persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran constituir infracciones en materia laboral, seguridad y salud laboral, Seguridad Social, empleo, etc., y no sólo quienes estuvieran directamente afectados por las supuestas infracciones. De la misma forma, empresarios y trabajadores y sus representantes pueden solicitar al inspector información técnica con ocasión de la actuación inspectora.

La solicitud de actuación de la Inspección de Trabajo se puede realizar, mediante la presentación de una denuncia, a través de las siguientes vías:

- Presentación presencial: Personándose en los registros de las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social, Áreas o Dependencias Provinciales de Trabajo y Economía Social, y unidades correspondientes de las comunidades autónomas, así como de las administraciones locales, siempre que exista el correspondiente convenio.

²²⁸ El Real Decreto 192/2018, de 6 de abril, por el que se aprueban los estatutos del Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social (BOE de 7 de abril), en su versión consolidada, se puede encontrar en la url: <https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-4753-consolidado.pdf> con acceso el 5 de septiembre de 2021.

- Presentación telemática: A través de la Sede Electrónica del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en la siguiente dirección:
https://sede.mites.gob.es/es/sede_electronica/tramites/index.htm
- Presentación por vía postal: Dirigidas a la oficina correspondiente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La denuncia, correctamente identificada, debe contener los hechos presuntamente constitutivos de infracción, fecha y lugar en que se produjo la infracción, identificación de los presuntamente responsables y demás circunstancias relevantes. Las denuncias presentadas tienen siempre carácter confidencial.

Hay que destacar que el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha puesto también a disposición de todos los ciudadanos, un *Buzón de lucha contra el Fraude Laboral*²²⁹ donde se puede facilitar información a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre irregularidades en el ámbito del fraude laboral. Estas comunicaciones, al distinguirse de la acción de denuncia, no requiere de la identificación del comunicante, si bien no se recibirá contestación sobre las actuaciones a que haya podido dar lugar.

- Actuaciones de conciliación, mediación y arbitraje

Es significativo apuntar que a través del V Acuerdo sobre solución autónoma de conflictos laborales (ASAC) se establece un sistema extrajudicial de soluciones de los conflictos colectivos laborales surgidos entre empresarios y trabajadores o sus respectivas organizaciones representativas.

Pueden someterse a los procedimientos previstos en dicho Acuerdo los conflictos colectivos de interpretación y aplicación, así como los que motiven la impugnación de convenios colectivos de forma previa para acceder a la vía judicial, siempre y cuando se den en sectores o subsectores de actividad que excedan del ámbito de una Comunidad Autónoma o en empresas, grupos de empresas o empresas vinculadas, cuando el conflicto afecte a centros de trabajo o empresas domiciliadas en diferentes comunidades autónomas.

Por otra parte, las funciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social comprenden también, como ya se ha apuntado, las de conciliación, mediación y arbitraje en los siguientes supuestos:

- La conciliación y mediación en huelgas y otros conflictos cuando la misma sea aceptada por las partes.
- El arbitraje en huelgas y otros conflictos laborales cuando las partes expresamente lo soliciten, así como en los supuestos legalmente establecidos.

Las funciones de conciliación, mediación y arbitraje de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se desarrollarán sin perjuicio de las facultades atribuidas a otros órganos de las Administraciones Públicas y a los órganos instaurados por los sistemas de solución de conflictos laborales basados y gestionados por la autonomía colectiva.

²²⁹ Acceso al buzón citado en la url:

http://www.mites.gob.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/COLABORA_CON_ITSS.html con acceso el 5 de septiembre de 2021.

4.1.2. Las funciones asignadas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la normativa española

En este momento iniciamos la exposición de la normativa aplicable a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, susceptible de enriquecer el objeto de la investigación, en lo relativo a funciones asignadas en la inspección de educación en nuestro sistema educativo. Véanse las tablas, de la 4.1.1. a la 4.1.3., con la yuxtaposición de principios, funciones, atribuciones y facultades con la normativa en vigor.

Siguiendo la dinámica desarrollada, como criterio de la investigación, las referencias a las unidades de control e inspección, se expondrán literalmente, pero puntualizando el contexto de la norma y su objeto.

- Ley de 15 de diciembre de 1939 que organiza el Cuerpo Nacional de Inspección del Trabajo²³⁰

La Ley de 15 de diciembre de 1939, organizando el Cuerpo Nacional de Inspección del Trabajo, tal y como figura su denominación en el BOE, es una norma de alto rango promulgada por el segundo gobierno de Francisco Franco, tras la finalización de la Guerra Civil, y que se constituyó al día siguiente de la promulgación de la Ley de Reorganización de la Administración Central del Estado²³¹. El ministro de Trabajo designado en ese momento era Joaquín Benjumea Burín que fue el impulsor de una breve disposición cuya exposición de motivos establecía:

Función propia y exclusiva del Estado, la vigilancia para exigir el exacto cumplimiento de las Leyes reguladoras del trabajo, ha de ser ejercida en forma que garantice su mayor eficacia, así como la competencia y espíritu recto de los funcionarios encargados de ella; sin que quepa por parte del Poder Público, delegación de sus atributos, a salvo de la colaboración que puede prestarle, como instrumento de su política económico-social, la Organización Sindical del Movimiento.

Innecesaria la diversidad de Inspecciones que en orden al trabajo se habían establecido en España, se unifican por la presente Ley, consiguiendo así, con una evidente economía de gastos, un mayor rendimiento en el Servicio y simplificando por otra parte la atención que ello siempre supone por parte de los jefes de industrias o centros de trabajo.

La ley se compone de once artículos, dos disposiciones transitorias y dos disposiciones finales. Fue publicada en el BOE el 29 de diciembre de 1939.

- Artículo primero.— *Las funciones que hasta ahora correspondían a las Inspecciones de Trabajo, de Seguros Sociales y de Emigración, quedarán en lo sucesivo encomendadas al Cuerpo Nacional de Inspección del Trabajo, que s e crea por la presente Ley, con la organización y competencia determinadas en los artículos que siguen;*

- Artículo segundo.— *La Inspección del Trabajo tendrá organización provincial y asumirá la misión de:*

²³⁰ Ley de 15 de diciembre de 1939 que organiza el Cuerpo Nacional de Inspección del Trabajo (BOE de 29 de diciembre), ubicada en la url: <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1939/363/A07344-07347.pdf> con acceso el 6 de septiembre de 2021.

²³¹ Acceso en la web del BOE en la url: <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1939/221/A04326-04327.pdf>

- a) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales reguladoras del trabajo, en cuanto a jornada, descanso, etc.*
- b) Vigilancia del cumplimiento de las Leyes de Previsión Social.*
- c) Vigilar el cumplimiento de las normas o reglamentos, tanto nacionales como provinciales locales o de empresa, que establezcan las condiciones en que ha de desarrollarse el trabajo y su retribución.*
- d) Entender en las autorizaciones para regular el cumplimiento de las Leyes de trabajo.*
- e) Vigilar el cumplimiento de las Leyes que se dicten sobre colocación obrera y empleo de extranjeros.*
- f) Inspección de todos los aspectos relacionados con la prevención de accidentes del trabajo cualquiera que fuese la clase de industria.*
- g) Recepción de los partes de accidentes del trabajo.*
- h) Inspección de las Leyes reguladoras de la Migración.*
- i) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones relativas a higiene y comodidad de los trabajadores en los centros de trabajo.*
- j) Informar a los patronos y obreros en la parte relativa al cumplimiento de las Leyes encomendadas a su custodia.*
- k) Informar al Ministerio en cuantas materias se le indiquen.*
- y l) Llevar las estadísticas de su actuación, que comunicarán a los Servicios correspondientes del Ministerio de Trabajo.*

- Ley 39/1962, de 21 de julio, sobre ordenación de la Inspección de Trabajo²³².

La Ley 39/1962, de 21 de julio, sobre ordenación de la Inspección de Trabajo, fue publicada en el BOE el 23 de julio. Es una norma de alto rango, promulgada por el denominado IX gobierno de Franco, en el que ostentaba la cartera de Trabajo Jesús Romeo Gorría.

La finalidad de la norma, tal y como consta en la exposición de motivos, es dar transcendencia a los cambios normativos en *la progresiva evolución hacia el bienestar social bajo incrementos continuos del nivel de vida que se observan en los veinticinco últimos años*.

La norma establece los cometidos de la función inspectora y se organiza en veintitrés artículos, dos disposiciones transitorias y una disposición derogatoria.

- Artículo segundo. Uno. El ámbito de actuación de la función inspectora abarca:

- a) Las Empresas y, en general, Centros de trabajo de toda clase y naturaleza, aun cuando estén directamente regidos o administrados por el Estado, el Municipio u otras Corporaciones de carácter regional, provincial o local. No obstante, quedarán fuera del campo de la Inspección los centros de trabajo excluidos por ley y aquellos otros que el Gobierno, a propuesta de los Ministerios respectivos, señale en interés de la defensa*

²³² Ley 39/1962, de 21 de julio, sobre ordenación de la Inspección de Trabajo (BOE de 23 de julio) ubicada en la url: <https://www.boe.es/boe/dias/1962/07/23/pdfs/A10272-10275.pdf> con acceso el 6 de septiembre de 2021

nacional o de otros fines públicos que así lo aconsejen, encargándose entonces de la inspección los Ministerios respectivos.

b) Los buques de la Marina mercante y de la flota pesquera, incluidas las instalaciones y explotaciones auxiliares o complementarias en tierra para el servicio de aquéllos.

c) En materia de migraciones interiores y exteriores, en el territorio nacional, los puertos, vehículos y puntos de salida y destino en España, durante los viajes a los países de residencia de los emigrados.

d) Las Instituciones, Entidades y Organismos públicos y privados de la Seguridad Social, así como las Sociedades Cooperativas y sus uniones.

Dos. La Inspección se refiere a las personas naturales y jurídicas en cuanto a las obligaciones y derechos que les atribuye la legislación de Trabajo, Seguridad Social, Migración y Empleo.

- Artículo tercero. La función inspectora comprende los siguientes cometidos:

I. Ordenación del trabajo

Asesoramiento general, vigilancia e informe de la autoridad competente sobre el cumplimiento de las normas laborales, convenios sindicales colectivos y Reglamentos interiores de empresa, con propuesta de adopción de medidas correctoras y de sanción adecuada en su caso, especialmente en lo que se refiere a las siguientes materias:

a) Jornada laboral.

b) Retribuciones del trabajador.

c) Régimen interior y relaciones humanas de las Empresas.

d) Cumplimiento de las Ordenanzas y Reglamentaciones laborales de los distintos sectores, ramas de producción y grupos de actividad económica.

e) Seguridad e higiene del trabajo.

f) Sistemas de productividad en el trabajo.

g) Normas sobre trabajo de mujeres y niños y regulación del aprendizaje.

h) Y, en general, normas laborales cuya fiscalización y cumplimiento no estén encomendados por Leyes a otros Cuerpos de funcionarios públicos.

II. Seguridad Social

Inspección, intervención, información técnica y vigilancia sobre aplicación de las disposiciones legales referentes a:

a) La organización, actuación y funcionamiento de las Entidades e Instituciones oficiales y particulares que operan en los Seguros Sociales y de accidentes del trabajo de las Mutualidades Laborales, de los Montepíos y demás Entidades de carácter no oficial que actúan en el campo de la previsión social, así como sus Federaciones y Confederaciones de las Cooperativas y sus uniones.

b) El cumplimiento por parte de las Empresas y de los trabajadores en lo que les afecte sobre desarrollo de los distintos Seguros Sociales, afiliación, cotización y prestaciones y demás actividades integrantes de la Seguridad Social española.

c) La colaboración con las Entidades oficiales y las Empresas privadas que participen en el desarrollo de las prestaciones de Seguridad Social.

d) El funcionamiento de las fundaciones laborales.

e) El desarrollo de los servicios médicos en las Empresas.

III. Migraciones y empleo.

Fiscalización del funcionamiento de organismos y empresas en cuanto al cumplimiento de la legislación vigente en las siguientes materias:

a) Colocación, desempleo y encuadramiento profesional de los trabajadores.

b) Migraciones interiores y compensación interprovincial de mano de obra.

c) Trabajo de los extranjeros en España.

d) Condiciones documentales y del transporte de los emigrantes.

e) Reclutamiento, salidas y regresos de emigrantes de todas clases.

f) Relaciones laborales de los españoles emigrados, con arreglo a la legislación específica vigente.

g) Normas generales y especiales relativas a la emigración y repatriación.

IV. Asistencia técnica

a) La Inspección de Trabajo desarrollará una labor de asistencia técnica facilitando información a empresarios y trabajadores y a las entidades y organismos de Seguridad Social, a los efectos de lo dispuesto en el artículo primero.

b) Colaborará con la Organización Sindical en la impulsión de la política laboral y especialmente en la promoción de convenios colectivos y en el informe de Reglamentos de Empresas, así como en el ejercicio de la función sindical de asesoramiento a sus encuadrados.

c) Velará por el cumplimiento por parte de las Empresas de sus obligaciones legales y reglamentarias respecto de sus Jurados y demás elementos representativos sindicales en las mismas.

d) Ejercerá funciones de mediación en conflictos laborales de carácter colectivo, complementando la acción de los organismos sindicales.

e) Cumplirá el cometido que en consideración a su competencia técnica le encarguen los Servicios Centrales del Ministerio.

f) Elaborará los dictámenes, informes, estadísticas, proyectos y estudios que se le encomienden, así como la redacción de la Memoria anual de actividades desarrolladas por la Inspección de Trabajo, y de la documentación pertinente ante los Organismos internacionales, conforme a lo dispuesto en los Acuerdos o Convenios ratificados por España sobre la materia.

g) Colaborará y auxiliará los servicios técnicos competentes de otros Departamentos ministeriales, en tareas de interés mutuo y en atención al mejor servicio nacional para desenvolvimiento de los planes de desarrollo social-económico del país.

h) Conservará al día el Registro Nacional de Empresas, formalizado con base en los Censos Laborales, así como el de las Entidades, Instituciones y Organismos sujetos a

inspección, a los efectos que la Legislación específica del Ministerio de Trabajo determine.

- Artículo quinto. Uno. Compete a la Organización Sindical, en el ejercicio de su función colaboradora:

Primero.– Poner en conocimiento de la Inspección de Trabajo los hechos constitutivos de infracción de la Legislación de Trabajo y de Seguridad Social.

Segundo.– Notificar al Ministerio de Trabajo las deficiencias o dificultades que observen en el funcionamiento de los Organismos expresados en el artículo tercero y proponer solución a los problemas que de aquéllas deriven.

Tercero.– Facilitar, por propia iniciativa o a requerimiento de la Inspección de Trabajo, la información y documentación u otra asistencia que ésta precise.

Cuarto.– Solicitar el auxilio de la Inspección de Trabajo y coadyuvar con ésta cuando lo considere conveniente al mejor desarrollo de la función.

Dos. Cuando a juicio del Ministerio de Trabajo y de la Organización Sindical se considere conveniente, podrá establecerse esta colaboración a los efectos de la presente Ley, mediante acuerdos especiales.

Artículo duodécimo.

Uno. La actuación de los inspectores de trabajo se desarrollará, principalmente, mediante visita que, en lo referente a los Centros laborales, tendrá lugar con la frecuencia y, en su caso, la urgencia necesaria, atendidas las circunstancias que siguen:

Primera.– La importancia, clase y situación del Centro de trabajo.

Segunda.– El volumen de empleo de las Empresas y las categorías profesionales que comprenda.

Tercera.– La naturaleza de los riesgos del trabajo.

Cuarta.– La extensión y complejidad de las disposiciones legales por cuya aplicación deba velarse.

Quinta.– Las condiciones prácticas en que deba girarse la visita para que sea eficaz.

Dos.– Del resultado de cada visita se extenderá y firmará por el funcionario actuante una diligencia en un Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo.

Tres.– En cuanto a las Instituciones, Entidades y Organismos públicos y privados de la Seguridad Social y cooperativas, la visita se ajustará a lo dispuesto en la normativa de aplicación de la presente Ley.

Cuatro.– La Inspección de Trabajo podrá, igualmente, desempeñar su función fiscalizadora:

a) De oficio, solicitando de las Empresas la aportación de los datos precisos al fin de que se trate.

b) Requiriendo de la Organización Sindical, en su caso, la documentación, informe o dictamen necesario.

c) Utilizando la colaboración del servicio descrita en el artículo sexto.

- Artículo decimotercero. Uno.- En el ejercicio de su función y acreditando si es preciso su identidad, los Inspectores de trabajo estarán autorizados:

Primero.- Para entrar libremente y sin previa notificación, en cualquier momento, en todo establecimiento sujeto a Inspección. En general, al efectuar una visita de inspección, el Inspector deberá notificar su presencia al empresario o a su representante, a menos que considere que dicha notificación pueda perjudicar el éxito de sus funciones.

Segundo.- Para proceder a cualquier prueba, investigación o examen que consideren necesario para cerciorarse de que las disposiciones legales se observan estrictamente y, en particular:

a) Para interrogar, solo o ante testigos, al empresario o al personal de la Empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales.

b) Para exigir la presentación de libros, registros, documentos de afiliación o de justificación del abono de las cuotas o prestaciones de Seguridad Social, o cualquiera otros que se refieran al régimen laboral, de previsión o de emigración, a fin de comprobar que están de conformidad con las disposiciones legales y para obtener copias o extractos de los mismos.

c) Para extender actas de advertencia, de infracción, de obstrucción o de liquidaciones por débitos de Seguridad Social, certificaciones para exigir el pago de cantidades líquidas, en vía de apremio, para promover procedimientos de calificación profesional, o instar, de oficio, procedimientos contenciosos, en interés de los trabajadores, ante la Magistratura de Trabajo. Las actas tienen valor probatorio, salvo demostración en contrario.

d) Para requerir a la Empresa a fin de que en un plazo determinado lleve a efecto las modificaciones que sean precisas en las instalaciones para que se garantice el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a la salud o a la seguridad de los trabajadores.

e) Para acordar la suspensión de trabajos por la existencia de peligros graves e inminentes para la vida o salud de los trabajadores, o por clara infracción de normas restrictivas de trabajo.

f) Para tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados o manipulados en el establecimiento, como asimismo para obtener fotografías y levantar croquis y planos, siempre que se notifique al empresario o a su representante.

g) Para inspeccionar antes de su apertura, ampliación o reapertura todo centro de trabajo, con objeto de conocer si el local y las instalaciones reúnen las exigencias legales relativas a la seguridad e higiene del trabajo.

Tercero.- Para proponer y tomar medidas a fin de eliminar los defectos observados en la instalación, en el montaje o en los métodos de trabajo que, a su entender, constituyan razonablemente un peligro para la salud o seguridad de los trabajadores.

Cuarto.- Para dirigirse a la autoridad competente a fin de que se dicten órdenes o se adopten medidas de aplicación inmediata:

a) Al objeto de introducir en la instalación, dentro de un plazo determinado y razonable, las modificaciones que sean necesarias a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a la salud o seguridad de los trabajadores.

b) En caso de peligro inminente para los trabajadores.

Dos.— Los Inspectores de Trabajo deberán recoger en todo caso la información de los Vocales del Jurado de Empresa y de los Enlaces sindicales y tendrán la facultad de advertir y de aconsejar, en vez de iniciar o de proponer un procedimiento.

Este mismo cuerpo legal derogó las Leyes de quince de diciembre de mil novecientos treinta y nueve y de cuatro de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho.

- Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social²³³.

La Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, fue publicada en el BOE el 15 de noviembre. Su promulgación, ya en la etapa democrática, corresponde al primer gobierno de José M^a Aznar López, del PP, en el que se encontraba como titular de la cartera de Trabajo, Javier Arenas Bocanegra.

La Ley se publicó tras la promulgación de la Constitución de 1978 para propugnar, en el marco de la normativa laboral de control e inspección, los valores supremos del nuevo ordenamiento jurídico: *la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, como propios del estado social y democrático de Derecho.*

El texto se compone de dos capítulos, con veintiún artículos, siete disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y una disposición final.

- Artículo 3. De la función inspectora.

La función inspectora, que será desempeñada en su integridad por funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y por los funcionarios del Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, en los términos establecidos respecto de estos últimos en el artículo 8, comprende los siguientes cometidos:

1. De vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y contenido normativo de los convenios colectivos, en los siguientes ámbitos:

1.1 Ordenación del trabajo y relaciones sindicales.

1.1.1 Normas en materia de relaciones laborales individuales y colectivas.

1.1.2 Normas sobre protección, derechos y garantías de los representantes de los trabajadores en las empresas.

1.2 Prevención de riesgos laborales.

1.2.1 Normas en materia de prevención de riesgos laborales, así como de las normas jurídico-técnicas que incidan en las condiciones de trabajo en dicha materia.

1.3 Sistema de Seguridad Social.

1.3.1 Normas en materia de campo de aplicación, inscripción, afiliación, altas y bajas de trabajadores, cotización y recaudación de cuotas del sistema de la Seguridad Social.

²³³ La Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (BOE de 15 de diciembre), ubicada en la url: <https://www.boe.es/boe/dias/1997/11/15/pdfs/A33539-33548.pdf> con acceso el 6 de septiembre de 2021.

1.3.2 Normas sobre obtención y disfrute de las prestaciones del sistema de la Seguridad Social, así como de los sistemas de mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social, además de cualesquiera modalidades de sistemas complementarios voluntarios establecidos por convenio colectivo.

1.3.3 Normas sobre colaboración en la gestión de la Seguridad Social, así como la inspección de la gestión y funcionamiento de las entidades y empresas que colaboran en la misma o en la gestión de otras prestaciones o ayudas de protección social.

1.3.4 El ejercicio de la inspección por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de conformidad con el artículo 5.2, apartado d), del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

1.4 Empleo y migraciones.

1.4.1 Normas en materia de colocación, empleo y protección por desempleo.

1.4.2 Emigración, movimientos migratorios y trabajo de extranjeros.

1.4.3 Normas en materia de formación profesional ocupacional y continua, excepto cuando la legislación autonómica disponga otras fórmulas de inspección en la materia.

1.4.4 Normas en materia de empresas de trabajo temporal, agencias de colocación y planes de servicios integrados para el empleo.

1.5 Cualesquiera otras normas cuya vigilancia se encomiende específicamente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, en particular, las relativas a cooperativas y otras fórmulas de economía social, así como a las condiciones de constitución de sociedades laborales, salvo que la respectiva legislación autonómica disponga lo contrario y en su ámbito de aplicación.

2. De asistencia técnica.

2.1 Facilitar información técnica a empresas y trabajadores, con ocasión del ejercicio de la función inspectora.

2.2 Prestar asistencia técnica a entidades y organismos de la Seguridad Social, cuando les sea solicitada.

2.3 Informar, asistir y colaborar con otros órganos de las Administraciones públicas respecto a la aplicación de normas de orden social, o a la vigilancia y control de ayudas y subvenciones públicas.

2.4 Emitir los informes que le recaben los órganos judiciales competentes, en el ámbito de las funciones y competencias inspectoras cuando así lo establezca una norma legal.

3. De arbitraje, conciliación y mediación.

3.1 La conciliación y mediación en los conflictos y huelgas cuando la misma sea aceptada por las partes, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Laboral.

3.2 El arbitraje, a petición de las partes, en conflictos laborales y huelgas, u otros que expresamente se soliciten.

3.3 La función de arbitraje por parte de la Inspección, sin perjuicio de las funciones técnicas de información y asesoramiento, si lo solicitan cualesquiera de las partes, será incompatible con el ejercicio simultáneo de la función inspectora por la misma persona

que ostenta la titularidad de dicha función sobre las empresas sometidas a su control y vigilancia.

- Artículo 4. Ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

1. La actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se extiende a las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas y a las comunidades de bienes, en cuanto sujetos obligados o responsables del cumplimiento de las normas de orden social, y se ejerce en:

1.1 Las empresas, los centros de trabajo y, en general, los lugares en que se ejecute la prestación laboral, aun cuando estén directamente regidos o gestionados por las Administraciones públicas o por entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualesquiera de ellas.

1.2 Los vehículos y los medios de transporte en general, en los que se preste trabajo, incluidos los buques de las marinas mercante y pesquera, los aviones y aeronaves civiles, así como las instalaciones y explotaciones auxiliares o complementarias en tierra para el servicio de aquéllos.

1.3 Los puertos, aeropuertos, vehículos y puntos de salida, escala y destino, en lo relativo a los viajes de emigración e inmigración interior, sin perjuicio de lo establecido en el anterior punto 1.1 como centros de trabajo.

1.4 Las entidades y empresas colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social.

1.5 Las entidades públicas o privadas que colaboren con las distintas Administraciones públicas en materia de protección y promoción social.

1.6 Las sociedades cooperativas en relación a su constitución y funcionamiento y al cumplimiento de las normas de orden social en relación a sus socios trabajadores o socios de trabajo, y a las sociedades laborales en cuanto a su calificación como tales, sin perjuicio de lo que establezca la legislación aplicable a la materia.

2. No obstante lo anterior, los centros de trabajo, establecimientos, locales e instalaciones cuya vigilancia esté legalmente atribuida a otros órganos de las Administraciones públicas continuarán rigiéndose por su normativa específica, sin perjuicio de la competencia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en las materias no afectadas por la misma.

- Artículo 5. Facultades de los inspectores de Trabajo y Seguridad Social para el desempeño de sus competencias.

En el ejercicio de sus funciones, los inspectores de Trabajo y Seguridad Social tienen el carácter de autoridad pública y están autorizados para:

1. Entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso en todo centro de trabajo, establecimiento o lugar sujeto a inspección y a permanecer en el mismo. Si el centro sometido a inspección coincidiese con el domicilio de la persona física afectada, deberán obtener su expreso consentimiento o, en su defecto, la oportuna autorización judicial.

Al efectuar una visita de inspección, deberán comunicar su presencia al empresario o a su representante o persona inspeccionada, a menos que consideren que dicha comunicación pueda perjudicar el éxito de sus funciones.

2. Hacerse acompañar en las visitas de inspección por los trabajadores, sus representantes y por los peritos y técnicos de la empresa o habilitados oficialmente que estimen necesario para el mejor desarrollo de la función inspectora.

3. *Proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en particular, para:*

3.1 *Requerir información, sólo o ante testigos, al empresario o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado.*

3.2 *Exigir la comparecencia del empresario o de sus representantes y encargados, de los trabajadores, de los perceptores o solicitantes de prestaciones sociales y de cualesquiera sujetos incluidos en su ámbito de actuación, en el centro inspeccionado o en las oficinas públicas designadas por el inspector actuante.*

3.3 *Examinar en el centro de trabajo la documentación y los libros de la empresa con transcendencia en la verificación del cumplimiento de la legislación del orden social, tales como: libros, registros, incluidos los programas informáticos y archivos en soporte magnético, declaraciones oficiales y contabilidad; documentos de inscripción, afiliación, alta, baja, justificantes del abono de cuotas o prestaciones de Seguridad Social; documentos justificativos de retribuciones; documentos exigidos en la normativa de prevención de riesgos laborales y cualesquiera otros relacionados con las materias sujetas a inspección. El inspector está facultado para requerir la presentación de dicha documentación en las oficinas públicas correspondientes.*

3.4 *Tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados o manipulados en el establecimiento, realizar mediciones, obtener fotografías, vídeos, grabación de imágenes, levantar croquis y planos, siempre que se notifique al empresario o a su representante y obtener copias y extractos de los documentos a que se refiere el apartado 3.3 del presente artículo.*

4. *Adoptar, en cualquier momento del desarrollo de sus actuaciones, las medidas cautelares que estimen oportunas y sean proporcionadas al fin que se persiga, para impedir la destrucción, desaparición o alteración de la documentación mencionada en el apartado anterior, siempre que no cause perjuicio de difícil o imposible reparación a los sujetos responsables o implique violación de derechos.*

5. *Proceder, en su caso, en cualesquiera de las formas a que se refiere el artículo 7 de esta Ley.*

- **Artículo 8. De las funciones de los subinspectores de Empleo y Seguridad Social.**

1. *Las funciones inspectoras de apoyo, gestión y colaboración con los inspectores de Trabajo y Seguridad Social corresponden a los funcionarios del Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, bajo la dirección y supervisión técnica del inspector de Trabajo y Seguridad Social responsable del equipo al que estén adscritos, sin perjuicio de su dependencia de los órganos directivos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.*

2. *Son funciones de los subinspectores de Empleo y Seguridad Social:*

2.1 *Comprobación del cumplimiento en la contratación de las normas en materia de empleo, acceso al empleo, fomento del empleo, bonificaciones, y subvenciones, obtención y percepción de las prestaciones y subsidio por desempleo.*

2.2 *Comprobación del cumplimiento de las normas en materia de campo de aplicación, inscripción, afiliación, cotización, altas y bajas de trabajadores, recaudación del sistema de la Seguridad Social, así como de colaboración obligatoria de las empresas en la*

gestión de la Seguridad Social, y de la obtención y percepción de las prestaciones de Seguridad Social.

2.3 La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas sobre trabajo de extranjeros.

2.4 La colaboración de la investigación y señalamiento de los bienes susceptibles de embargo para la efectividad de la vía ejecutiva y la identificación del sujeto deudor o responsable solidario o subsidiario cuando proceda, en todos aquellos casos que hagan referencia al ordenamiento jurídico laboral, de seguridad social, de emigración y de empleo.

2.5 El asesoramiento a los empresarios y trabajadores en orden al cumplimiento de sus obligaciones, con ocasión de su actuación en los centros de trabajo.

2.6 Cuantas otras funciones de similar nivel y naturaleza les fueren encomendadas por los responsables de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el desarrollo de los cometidos de la misma.

3. En ejecución de las órdenes de servicio recibidas para el desempeño de sus cometidos, los subinspectores de Empleo y Seguridad Social, que tendrán la consideración de agentes de la autoridad, están autorizados para proceder de acuerdo con lo dispuesto en el número 1 de este artículo, en la forma establecida en los apartados 1, 3.1, 3.2 y 3.3 del número 3 y en el número 4, todos ellos del artículo 5 de esta Ley, así como promover internamente las actuaciones a que se refiere el número 6 del artículo 7.

4. Como consecuencia de sus actuaciones inspectoras, que se desarrollarán en la forma establecida y en el ámbito de sus funciones, los subinspectores de Empleo y Seguridad Social podrán proceder en la forma dispuesta en los números 1, 2, 4, 5, 7, 11 y 13 del artículo 7 de esta Ley.

Las actas de infracción practicadas por los subinspectores serán visadas por el inspector de Trabajo y Seguridad Social del que técnicamente dependan cuando superen el grado o cuantías que señale el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

En cuanto a las actas de liquidación, con independencia de la cuantía resultante, sólo procederá el visado del inspector en los supuestos de falta de afiliación, alta o cuando procedan diferencias de cotización a la Seguridad Social.

- Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social²³⁴

La Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, fue publicada en el BOE el 22 de julio. Su impulso corresponde al primer gobierno de Mariano Rajoy Brey, del PP, en el que ostentaba la cartera de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez García.

²³⁴ Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (BOE de 22 de julio) cuyo texto consolidado se puede encontrar en la url: <https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-8168-consolidado.pdf> con acceso el 6 de septiembre.

La Ley tiene una estructura de tres títulos: sistema de inspección de Trabajo y Seguridad social; funcionamiento del sistema; y organización del sistema. El primer título tiene tres capítulos y once artículos; el segundo título se compone de dos capítulos y trece artículos; y el tercer título se compone de otros tres capítulos y once artículos. De esta forma se conforma de treinta y cinco artículos. La norma termina con diez disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y cuatro disposiciones finales.

Se ha realizado una selección de aquellos artículos que se consideran más relacionados con el objeto de la presente investigación doctoral (véanse las tablas 4.1.1., 4.1.2. y 4.1.3.). La norma se encuentra vigente en la actualidad.

(Selección de algunos de los párrafos del preámbulo).

Después de una larga evolución y sucesivos cambios durante todo el siglo XX, desde su creación por el Reglamento de 1 de marzo de 1906, pasando por la Ley 39/1962, de 21 de julio, de Ordenación de la Inspección de Trabajo, que reúne en una única Inspección Nacional del Trabajo la vigilancia y control de la normativa social, hasta entonces competencia de varios servicios de inspección, la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, configuraba por vez primera la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como un Sistema, es decir, como un conjunto organizado de principios legales, órganos, funcionarios y medios materiales.

Dicha ley conjugaba con corrección los principios de unidad de función y actuación inspectora con los de especialización funcional y trabajo en equipo, al tiempo que incorporaba mecanismos útiles de participación y colaboración de todas las Administraciones Públicas, estatales y autonómicas, en el Sistema de Inspección.

(...) Se instituye la Autoridad Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con el fin de consolidar y reforzar la presencia de las Comunidades Autónomas en el Sistema de Inspección, que será el cargo designado por cada gobierno autonómico, a quien la ley le encomienda, entre otras funciones, las de impulso, propuesta y supervisión de las actuaciones inspectoras respecto de las competencias autonómicas en su territorio.

En el ámbito de las relaciones entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, se establecen mecanismos de cooperación más ágiles y ejecutivos, mediante la instauración de Comisiones Operativas Autonómicas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se basan en la interlocución permanente en la esfera territorial entre la Inspección y las Administraciones Públicas titulares de las competencias materiales de ejecución de la legislación del orden social.

(...) Se crean dos escalas dentro del Cuerpo de Subinspectores Laborales: Una Escala de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, conformada por el actual Cuerpo de Subinspectores y otra nueva, de Subinspectores de Seguridad y Salud Laboral, con funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales, lo que permitirá ampliar y reforzar la actuación de la Inspección en esta materia. De este modo, las funciones relativas a la comprobación de las condiciones materiales de trabajo u otras análogas en materia preventiva, que actualmente desarrollan los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, podrán ser también desempeñadas por los Subinspectores, bajo la coordinación y dirección de un Inspector, tal como sucede en materia de empleo y Seguridad Social.

- Artículo 1. Definición y objeto del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

2. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social es un servicio público al que corresponde ejercer la vigilancia del cumplimiento de las normas del orden social y exigir las responsabilidades pertinentes, así como el asesoramiento y, en su caso, conciliación, mediación y arbitraje en dichas materias, lo que efectuará de conformidad con los principios del Estado social y democrático de Derecho que consagra la Constitución Española, y con los Convenios número 81 y 129 de la Organización Internacional del Trabajo.

Artículo 2. Principios ordenadores del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social se ordena, en su organización y funcionamiento, conforme a los siguientes principios:

- a) Eficacia y calidad en la prestación del servicio a los ciudadanos.*
- b) Concepción única e integral del Sistema, garantizándose su funcionamiento cohesionado mediante la coordinación, cooperación y participación de las diferentes Administraciones Públicas.*
- c) Unidad de función y de actuación inspectora en todas las materias del orden social, en los términos establecidos en esta ley, sin perjuicio de los criterios de especialización funcional y de actuación programada.*
- d) Imparcialidad, objetividad e igualdad de trato y no discriminación en el ejercicio de la función inspectora.*
- e) Reserva de la función inspectora en el orden social a los funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y del Cuerpo de Subinspectores Laborales, en los términos previstos en esta ley.*
- f) Organización y desarrollo de la actividad conforme a los principios de trabajo programado y en equipo.*
- g) Ingreso y convocatoria únicos en los Cuerpos Nacionales de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y de Subinspectores Laborales, mediante procesos selectivos unitarios de carácter estatal.*
- h) Movilidad entre las Administraciones Públicas en los procesos de provisión de puestos de trabajo para funcionarios de los Cuerpos Nacionales del Sistema de Inspección.*
- i) Participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas respecto del conjunto de las funciones atribuidas al Sistema.*

- Artículo 9. Deberes y código de conducta.

1. El personal del Sistema está sometido con carácter general al conjunto de deberes establecido para los empleados públicos.

2. Deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.

3. Observarán la máxima corrección en el ejercicio de sus funciones y procurarán perturbar en la menor medida posible el desarrollo de las actividades de los inspeccionados, sin

merma de su autoridad ni del cumplimiento de sus deberes. Asimismo, actuarán con celo en la custodia de la documentación que les sea confiada.

Artículo 10. Deber de sigilo e incompatibilidades.

1. Los funcionarios del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social considerarán confidencial el origen de cualquier queja de que conozcan, en el ámbito de la función inspectora, sobre incumplimiento de las disposiciones legales.

2. También vendrán obligados a observar secreto y a no revelar, aun después de haber dejado el servicio, los datos, informes o antecedentes de que puedan haber tenido conocimiento en el desempeño de sus funciones, salvo para la investigación o persecución de delitos públicos, en el marco legalmente establecido para la colaboración con la Administración Laboral, la de la Seguridad Social, la Tributaria, la de lucha contra el fraude, en sus distintas clases, y con comisiones parlamentarias de investigación, en la forma que proceda.

3. Estarán sujetos a las incompatibilidades y a los motivos de abstención y recusación de los funcionarios al servicio de las Administraciones Públicas, y no podrán actuar cuando tengan interés directo o indirecto en relación con los asuntos que se les encomienden.

Título II. Funcionamiento del Sistema

Capítulo I. De las funciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

- Artículo 12. De la función inspectora.

La función inspectora, que será desempeñada por funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, en su integridad, y por los funcionarios del Cuerpo de Subinspectores Laborales, en los términos establecidos en esta ley, comprende los siguientes cometidos:

1. De vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y del contenido de los acuerdos y convenios colectivos, en los siguientes ámbitos:

a) Sistema de relaciones laborales.

1.º Normas en materia de relaciones laborales individuales y colectivas.

2.º Normas sobre protección, derechos y garantías de los representantes de los trabajadores.

3.º Normas en materia de tutela y promoción de la igualdad de trato y oportunidades y no discriminación en el trabajo.

4.º Normas en materia de desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional.

b) Prevención de riesgos laborales.

1.º Normas en materia de prevención de riesgos laborales, así como de las normas jurídico-técnicas que incidan en las condiciones de trabajo en dicha materia.

2.º Ejercicio de las funciones de investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

c) Sistema de la Seguridad Social.

1.º Normas en materia de campo de aplicación, inscripción, afiliación, altas y bajas de trabajadores, cotización y recaudación de cuotas del Sistema de la Seguridad Social.

2.º Normas sobre obtención y disfrute de las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, incluidas las prestaciones por desempleo y la prestación por cese de actividad, así como de los sistemas de mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social, además de cualesquiera modalidades de sistemas complementarios voluntarios establecidos por convenio colectivo.

3.º Normas sobre Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y sobre otras formas de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, así como la inspección de la gestión y funcionamiento de las entidades y empresas que colaboran en la misma o en la gestión de otras prestaciones o ayudas de protección social, sin perjuicio del ejercicio de las funciones de dirección de la contabilidad y de control de la gestión económico-financiera atribuida a los órganos de control competentes en la materia.

4.º El ejercicio de la inspección de la Seguridad Social por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.2.d) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

5.º La realización de otras funciones de inspección en materia de Seguridad Social, en los términos establecidos en su normativa reguladora.

d) Empleo.

1.º Normas en materia de colocación y empleo.

2.º Control de la aplicación de las subvenciones, ayudas de fomento del empleo o cualesquiera establecidas en programas de apoyo a la creación de empleo o a la formación profesional para el empleo, de acuerdo con la normativa establecida al efecto, sin perjuicio del ejercicio del control financiero de las subvenciones por los órganos competentes en la materia.

3.º Normas en materia de formación profesional para el empleo, distintas de las señaladas en el número anterior, excepto cuando la normativa autonómica disponga otras fórmulas de inspección en la materia.

4.º Normas en materia de empresas de trabajo temporal y agencias de colocación.

e) Migraciones.

1.º Normas en materia de movimientos migratorios.

2.º Normas en materia de trabajo de extranjeros.

f) Cooperativas y otras fórmulas de economía social, así como a las condiciones de constitución de sociedades laborales, salvo que la respectiva legislación autonómica disponga lo contrario en su ámbito de aplicación.

g) Cualesquiera otros ámbitos cuya vigilancia se encomiende legalmente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

2. De asistencia técnica.

a) Dar información y asistencia técnica a las empresas con ocasión del ejercicio de la función inspectora, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, con objeto de facilitarles un mejor cumplimiento de las disposiciones del orden social.

b) Proporcionar información y asistencia técnica a los trabajadores y a sus representantes; comunicarles los resultados y consecuencias de las actuaciones inspectoras cuando medie denuncia por parte de los mismos, en los términos del artículo 20.4; e indicarles las vías administrativas o judiciales para la satisfacción de sus derechos, cuando estos hayan sido afectados por incumplimientos empresariales comprobados en las actuaciones inspectoras.

c) Prestar asistencia técnica a entidades y organismos de la Seguridad Social, y a las autoridades competentes de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas, cuando les sea solicitada.

d) Informar, asistir y colaborar con otros órganos de las Administraciones Públicas respecto a la aplicación de normas del orden social, o a la vigilancia y control de ayudas y subvenciones públicas.

e) Emitir los informes que le recaben los órganos judiciales competentes, en el ámbito de las funciones y competencias inspectoras, cuando así lo establezca una norma legal.

3. De conciliación, mediación y arbitraje.

a) La conciliación y mediación en huelgas y otros conflictos cuando la misma sea aceptada por las partes.

b) El arbitraje en huelgas y otros conflictos laborales cuando las partes expresamente lo soliciten, así como en los supuestos legalmente establecidos.

La función de arbitraje por parte de la Inspección, sin perjuicio de las funciones técnicas de información y asesoramiento, si lo solicita cualquiera de las partes, será incompatible con el ejercicio simultáneo de la función inspectora por la misma persona que tenga atribuida dicha función sobre las empresas sometidas a su control y vigilancia.

c) Los inspectores de Trabajo y Seguridad Social guardarán la debida reserva sobre la información obtenida en el ejercicio directo de las funciones de arbitraje o mediación y no la comunicarán a los servicios de inspección para el ejercicio de las funciones de vigilancia y control a que se refiere el apartado 1.

Las funciones de conciliación, mediación y arbitraje de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se desarrollarán sin perjuicio de las facultades atribuidas a otros órganos de las Administraciones Públicas y a los órganos instaurados por los sistemas de solución de conflictos laborales basados y gestionados por la autonomía colectiva.

- Artículo 13. Facultades de los inspectores de Trabajo y Seguridad Social para el desempeño de sus competencias.

En el ejercicio de sus funciones, los inspectores de Trabajo y Seguridad Social tienen el carácter de autoridad pública y están autorizados para:

1. Entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso en todo centro de trabajo, establecimiento o lugar sujeto a inspección y a permanecer en el mismo. Si el centro sometido a inspección coincidiese con el domicilio de una persona física, deberán obtener su expreso consentimiento o, en su defecto, la oportuna autorización judicial.

Al efectuar una visita de inspección, deberán identificarse documentalmente y comunicar su presencia al empresario o a su representante o persona inspeccionada, a menos que consideren que dicha identificación y comunicación puedan perjudicar el éxito de sus funciones.

2. Hacerse acompañar en las visitas de inspección por el empresario o su representante, los trabajadores, sus representantes y por los peritos y técnicos de la empresa o de sus entidades asesoras que estimen necesario para el mejor desarrollo de la función inspectora, así como por peritos o expertos pertenecientes a la Administración u otros habilitados oficialmente.

3. Practicar cualquier diligencia de investigación, examen, reconstrucción o prueba que consideren necesario para realizar la función prevista en el artículo 12.1 y, en particular, para:

a) Requerir información, sólo o ante testigos, al empresario o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado.

b) Exigir la comparecencia del empresario o de sus representantes y encargados, de los trabajadores, de los perceptores o solicitantes de prestaciones sociales y de cualesquiera sujetos incluidos en su ámbito de actuación, en el centro inspeccionado o en las oficinas públicas designadas por el inspector actuante.

c) Examinar en el centro o lugar de trabajo todo tipo de documentación con trascendencia en la verificación del cumplimiento de la legislación del orden social, tales como: libros, registros, incluidos los programas informáticos y archivos en soporte magnético, declaraciones oficiales y contabilidad; documentos de inscripción, afiliación, alta, baja, justificantes del abono de cuotas o prestaciones de Seguridad Social; documentos justificativos de retribuciones; documentos exigidos en la normativa de prevención de riesgos laborales y cualesquiera otros relacionados con las materias sujetas a inspección. El inspector está facultado para requerir la presentación de dicha documentación en las oficinas públicas correspondientes.

Cuando los libros, registros, documentos o información que el obligado deba conservar en relación con el cumplimiento de las obligaciones, propias o de terceros, establecidas en las normas del orden social, así como cualquier otro dato, informe, antecedente o justificante con trascendencia para la función inspectora, se conserven en soporte electrónico, deberá suministrarse en dicho soporte y en formato tratable, legible y compatible con los de uso generalizado en el momento en que se realice la actuación inspectora, cuando así fuese requerido.

d) Tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados o manipulados en el establecimiento, realizar mediciones, obtener fotografías, videos, grabación de imágenes, levantar croquis y planos, siempre que se notifique al empresario o a su representante y obtener copias y extractos de los documentos a que se refiere el apartado 3.c).

4. Adoptar, en cualquier momento del desarrollo de las actuaciones, las medidas cautelares que estimen oportunas y sean proporcionadas a su fin, para impedir la destrucción, desaparición o alteración de la documentación mencionada en el apartado anterior, siempre que no cause perjuicio de difícil o imposible reparación a los sujetos responsables o implique violación de derechos.

5. Proceder, en su caso, en cualquiera de las formas a que se refiere el artículo 22.

- Artículo 14. Funciones de los Subinspectores Laborales.

1. Los funcionarios del Cuerpo de Subinspectores Laborales están facultados para desarrollar las funciones inspectoras y ejercer las competencias atribuidas en este artículo, bajo la dirección y supervisión técnica del Inspector de Trabajo y Seguridad Social responsable de la unidad, grupo o equipo al que estén adscritos, sin perjuicio de su dependencia de los órganos directivos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

2. A los Subinspectores Laborales, pertenecientes a la Escala de Empleo y Seguridad Social, les corresponderá actuar en las siguientes materias, en los términos que se establezcan reglamentariamente:

a) La comprobación del cumplimiento en la contratación de las normas en materia de empleo, acceso al empleo, bonificaciones, subvenciones, ayudas y demás incentivos o medidas para el fomento del empleo o la formación profesional para el empleo.

b) La comprobación del cumplimiento de las normas que prohíben la admisión al trabajo a los menores de dieciséis años.

c) La comprobación del cumplimiento de la normativa sobre modalidades contractuales, contratos de duración determinada y temporales.

d) La comprobación del cumplimiento de las normas en materia de campo de aplicación, inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas de trabajadores, cotización y recaudación del Sistema de la Seguridad Social, así como las de colaboración obligatoria de las empresas en la gestión de la Seguridad Social, y las de obtención, percepción y disfrute de prestaciones de la Seguridad Social, incluidas las de desempleo y las de cese de actividad.

e) La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa sobre trabajo de extranjeros en España.

f) La colaboración en la investigación y señalamiento de bienes susceptibles de embargo para la efectividad de la vía ejecutiva y la identificación del sujeto deudor, o de los responsables solidarios o subsidiarios cuando proceda, en todos aquellos casos que hagan referencia o afecten al cumplimiento de las normas del orden social.

g) El asesoramiento a los empresarios y trabajadores en orden al cumplimiento de sus obligaciones, con ocasión del ejercicio de su función inspectora.

h) Cuantas otras funciones de similar naturaleza les fueren encomendadas por los responsables de la unidad, grupo o equipo a la que estén adscritos para el desarrollo de los cometidos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el marco de sus competencias.

3. A los Subinspectores Laborales, pertenecientes a la Escala de Seguridad y Salud Laboral, les corresponderá actuar en las siguientes materias, en los términos que se establezcan reglamentariamente:

a) La comprobación del cumplimiento y control de la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales en los aspectos que afecten directamente a las condiciones materiales de trabajo.

b) La vigilancia del cumplimiento de la normativa jurídico-técnica con incidencia en materia de prevención de riesgos laborales.

c) Programas de actuación preventiva de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social derivados del análisis de la siniestralidad laboral.

d) La información y asesoramiento a empresarios y trabajadores, con ocasión del ejercicio de su función inspectora, sobre la forma más efectiva de cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

e) Cuantas otras funciones de análoga naturaleza les fuesen encomendadas por los responsables de la unidad, grupo o equipo a la que estén adscritos para el desarrollo de los cometidos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el marco de sus competencias.

4. En ejecución de las órdenes de servicio recibidas para el desempeño de sus funciones, los Subinspectores Laborales, que tendrán la consideración de agentes de la autoridad, están facultados para proceder en la forma establecida en los apartados 1 a 4 del artículo 13.

5. Como consecuencia de las funciones inspectoras que realicen, los Subinspectores Laborales de la Escala de Empleo y Seguridad Social podrán proceder en la forma dispuesta en los apartados 1, 2, 5, 6, 7, 8, 16, 17 y 18 del artículo 22. Los Subinspectores Laborales de la Escala de Seguridad y Salud Laboral podrán proceder en la forma prevista en los apartados 1, 2, 5, 12 y 18 de dicho artículo 22, así como comunicar internamente las actuaciones a que se refiere los apartados 7, 9 y 10 del mismo artículo.

Las actas de infracción y, en su caso, de liquidación practicadas por los Subinspectores Laborales, serán visadas por el Inspector de Trabajo y Seguridad Social bajo cuya dirección técnica actúen, en los términos y supuestos que se determinen reglamentariamente, en función de la naturaleza o calificación de la infracción o de la cuantía de la sanción propuesta.

- Artículo 15. Garantías en el ejercicio de las funciones inspectoras.

1. Los inspectores de Trabajo y Seguridad Social están facultados para desempeñar todas las competencias que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene atribuidas conforme al artículo 12. En su ejercicio gozarán de plena autonomía técnica y funcional, se les garantizará protección frente a todo tipo de violencia, coacción y amenaza, e independencia frente a cualquier influencia indebida en los términos del artículo 6 del Convenio número 81 y del artículo octavo del Convenio número 129 de la Organización Internacional del Trabajo.

2. La especialización funcional que regula esta ley será compatible con los principios de unidad de función y de actuación inspectora. En su virtud, cualquiera que sea el origen de su actuación, los inspectores de Trabajo y Seguridad Social podrán desplegar cuantas actuaciones de investigación y adoptar cuantas medidas consideren oportunas, respecto de la totalidad de las materias del orden social a que extienden sus competencias, con independencia de la Administración Pública a la que estén adscritos orgánicamente.

En todo caso, cuando el inspector actúe en virtud de un servicio encomendado para la realización de una o varias actuaciones específicas, no serán exigibles otras distintas de las necesarias para la consecución de aquel. No obstante, si se apreciara de manera directa, en el curso de la visita, evidencia manifiesta de un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, podrá adoptar, entre otras medidas, la indicada en el artículo 22.12.

3. Los Subinspectores Laborales están asimismo facultados para desempeñar todas las funciones que les atribuye esta ley, con independencia de la Administración Pública a la que estén adscritos orgánicamente.

En el ejercicio de sus funciones no les serán exigibles otras actuaciones distintas de las necesarias para la consecución del servicio que se les haya encomendado en cada caso. No obstante, los Subinspectores Laborales pertenecientes a la Escala de Seguridad y Salud Laboral que, en el curso de la visita, apreciarán de manera directa evidencia manifiesta de un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, podrán adoptar, entre otras medidas, la indicada en el artículo 22.12.

En el ejercicio de sus funciones se les garantizará protección frente a todo tipo de violencia, coacción y amenaza, e independencia frente a cualquier influencia indebida.

4. A los efectos establecidos en el artículo octavo.uno de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, no se considerarán en ningún caso intromisiones ilegítimas las actuaciones realizadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el cumplimiento de sus fines.

Artículo 16. Auxilio y colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

1. Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, los titulares de los órganos de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales; los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales; las cámaras y corporaciones, colegios y asociaciones profesionales; las demás entidades públicas, y quienes, en general, ejerzan funciones públicas, estarán obligados a suministrar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cuantos datos, informes y antecedentes que tengan trascendencia en el ámbito de sus competencias, así como a prestarle la colaboración que le sea solicitada para el ejercicio de la función inspectora.

2. El Consejo General del Notariado suministrará a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de forma telemática, la información contenida en el índice único informatizado regulado en el artículo 17 de la Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862, que tenga trascendencia en el ejercicio de la función inspectora.

3. La Administración Tributaria cederá sus datos y antecedentes a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en los términos establecidos en el artículo 95.1.c) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Asimismo, las entidades gestoras y colaboradoras y los servicios comunes de la Seguridad Social prestarán su colaboración a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, facilitándole, cuando le sean solicitadas, las informaciones, antecedentes y datos con relevancia en el ejercicio de la función inspectora, incluso los de carácter personal objeto de tratamiento automatizado, sin necesidad de consentimiento del afectado. La Administración Tributaria y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social establecerán programas de mutua correspondencia y de coordinación para el cumplimiento de sus fines.

4. Los órganos de la Administración General del Estado y los de las Comunidades Autónomas colaborarán con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y le prestarán el apoyo y el asesoramiento pericial y técnico necesario.

5. Las mutualidades de previsión social deberán colaborar y suministrar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social los datos e informes que resulten necesarios para el adecuado desarrollo de la actividad de la Inspección, en lo relativo a su condición de entidad

alternativa al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

6. Las obligaciones de auxilio y colaboración establecidas en los apartados anteriores sólo tendrán las limitaciones legalmente establecidas referentes a la intimidad de la persona, al secreto de la correspondencia, o de las informaciones suministradas a las Administraciones Públicas con finalidad exclusivamente estadística.

7. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes estarán obligadas a prestar apoyo, auxilio y colaboración a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el desempeño de sus funciones, a través de los mandos designados a tal efecto por la autoridad correspondiente.

8. Mediante convenios u otros instrumentos se establecerán las formas de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por parte de otros órganos de la Administración General del Estado o de otras Administraciones Públicas para los supuestos en que, como consecuencia de su actuación, tengan conocimiento de hechos presuntamente constitutivos de trabajo no declarado y empleo irregular.

Los hechos comprobados directamente por los funcionarios que ostenten la condición de Autoridad o de agentes de ella, contenidos en comunicaciones que se formulen en ejecución de lo establecido en los convenios o instrumentos indicados en el párrafo anterior, tras su valoración y calificación por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, podrán ser aducidos como prueba en los procedimientos iniciados por esta y serán tenidos por ciertos, salvo prueba en contrario de los interesados.

9. Los Juzgados y Tribunales facilitarán a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de oficio o a petición de la misma, los datos de trascendencia para la función inspectora que se desprendan de las actuaciones en que conozcan y que no resulten afectados por el secreto sumarial.

10. La colaboración de las Autoridades de los Estados Miembros de la Unión Europea con competencias equivalentes a las de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se regirá por la normativa de la Unión Europea o por los instrumentos o acuerdos bilaterales o multilaterales de los que sea parte el Estado Español.

Los hechos comprobados por dichas autoridades en el ámbito de la cooperación administrativa internacional que sean facilitados a las autoridades españolas podrán ser aducidos como prueba por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en los procedimientos iniciados por esta y serán tenidos por ciertos, salvo prueba en contrario de los interesados.

11. La obtención de datos de carácter personal no recabados del interesado por los funcionarios de la Inspección en el ejercicio de sus competencias, no requerirá la información expresa e inequívoca a los interesados prevista en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

- Artículo 17. Colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

1. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social prestará su colaboración y apoyo a las Administraciones Públicas y, en especial, a la autoridad laboral, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y a la Administración Tributaria, a las que facilitará las informaciones que requieran como necesarias para su función, siempre que se garantice el deber de confidencialidad, si procediese.

2. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el ejercicio de las funciones de inspección, procurará la necesaria colaboración con las organizaciones empresariales y sindicales y con los representantes de los trabajadores.

Periódicamente, a través de los órganos establecidos en esta ley, la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social facilitará a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas información sobre extremos de interés general que se deduzcan de las actuaciones inspectoras, memorias de actividades y demás antecedentes, así como las instrucciones de organización de los servicios, criterios operativos generales y criterios técnicos vinculantes, en los términos establecidos en el artículo 20.2.

3. Si apreciase la posible comisión de un delito, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por el cauce orgánico que reglamentariamente se determine, remitirá al Ministerio Fiscal relación circunstanciada de los hechos que haya conocido y de los sujetos que pudieren resultar afectados.

4. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social prestará ayuda y colaboración a las autoridades de otros Estados de la Unión Europea con competencias equivalentes, mediante la remisión de datos e información relativas al ejercicio de sus funciones inspectoras. Asimismo, podrá cooperar con las autoridades de otros Estados, cuando así esté previsto en los convenios y tratados en los que España sea parte.

- Artículo 18. De la colaboración con los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

1. Los empresarios, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden social, están obligados cuando sean requeridos:

a) A atender debidamente a los inspectores de Trabajo y Seguridad Social y a los Subinspectores Laborales.

b) A acreditar su identidad y la de quienes se encuentren en los centros de trabajo.

c) A colaborar con ellos con ocasión de visitas u otras actuaciones inspectoras.

d) A declarar ante el funcionario actuante sobre cuestiones que afecten a las comprobaciones inspectoras, así como a facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones. Quienes representen a los sujetos inspeccionados deberán acreditar documentalmente tal condición si la actuación se produjese fuera del domicilio o centro de trabajo visitado.

2. Toda persona natural o jurídica estará obligada a proporcionar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social toda clase de datos, antecedentes o información con trascendencia en los cometidos inspectores, siempre que se deduzcan de sus relaciones económicas, profesionales, empresariales o financieras con terceros sujetos a la acción inspectora, cuando a ello sea requerida en forma. Tal obligación alcanza a las entidades colaboradoras de los órganos de recaudación de la Seguridad Social y a las depositarias de dinero en efectivo o de fondos en cuanto a la identificación de pagos realizados con cargo a las cuentas que pueda tener en dicha entidad la persona que se señale en el correspondiente requerimiento, sin que puedan ampararse en el secreto bancario. La obligación de los profesionales de facilitar información no alcanza a aquellos datos confidenciales a que hubieran accedido por su prestación de servicios de asesoramiento y defensa o con ocasión de prestaciones o atenciones sanitarias, salvo conformidad previa y expresa de los interesados. El incumplimiento de estos requerimientos se considerará como

infracción por obstrucción conforme al texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. Reglamentariamente se determinará la forma y requisitos aplicables a los referidos requerimientos.

3. La colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se llevará a efecto, preferentemente, por medios electrónicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

4. De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, la transmisión a la Inspección de aquellos datos personales que sean necesarios para el ejercicio de la función inspectora, en virtud de su deber de colaboración, no estará sujeta a la necesidad de consentimiento del interesado.

Los datos que hubieran sido transmitidos únicamente se emplearán para ejercicio de las competencias atribuidas por esta ley a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

- Artículo 22. Medidas derivadas de la actividad inspectora.

Los inspectores de Trabajo y Seguridad Social, finalizada la actividad comprobatoria inspectora, podrán adoptar las siguientes medidas:

1. Advertir y requerir al sujeto responsable, en vez de iniciar un procedimiento sancionador, cuando las circunstancias del caso así lo aconsejen, y siempre que no se deriven perjuicios directos a los trabajadores o a sus representantes.

2. Requerir al sujeto responsable para que, en el plazo que se le señale, adopte las medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden social o subsane las deficiencias observadas en materia de prevención de riesgos laborales, incluso con su justificación ante el funcionario actuante.

3. Informar o proponer la sustitución de sanciones principales o accesorias, de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así como en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.

4. Requerir a las Administraciones Públicas por incumplimiento de disposiciones relativas a la salud o seguridad del personal civil a su servicio.

5. Iniciar el procedimiento sancionador mediante la extensión de actas de infracción o de infracción por obstrucción.

6. Efectuar requerimientos de pago por deudas a la Seguridad Social, así como iniciar expedientes liquidatorios por débitos a la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta o bonificaciones indebidas, mediante la práctica de actas de liquidación.

7. Promover procedimientos de oficio para la inscripción de empresas, afiliación y altas y bajas de trabajadores, así como para el encuadramiento de empresas y trabajadores en el régimen de la Seguridad Social adecuado, sin perjuicio del inicio del expediente liquidatorio a que se refiere el apartado anterior, si procediese.

8. Instar del correspondiente organismo la suspensión o cese en la percepción de prestaciones sociales, si se constatase su obtención o disfrute en incumplimiento de la normativa que las regula.

9. Instar del órgano administrativo competente la declaración del recargo de las prestaciones económicas en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional causados por falta de medidas de seguridad y salud laboral.

10. Proponer recargos o reducciones en las primas de aseguramiento de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en relación a empresas por su comportamiento en la prevención de riesgos y salud laborales, con sujeción a la normativa aplicable.

11. Iniciar el procedimiento para la correcta aplicación o para la devolución de cantidades indebidamente aplicadas en los casos de colaboración en la gestión de la Seguridad Social.

12. Ordenar la paralización inmediata de trabajos o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, de concurrir riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores.

13. Comunicar al organismo competente los incumplimientos que compruebe en la aplicación y destino de ayudas y subvenciones para el fomento del empleo, formación profesional para el empleo y promoción social, e iniciar el correspondiente expediente de devolución de ayudas y subvenciones cuando proceda.

14. Proponer a su superior jerárquico la formulación de comunicaciones y demandas de oficio ante la Jurisdicción de lo Social en la forma prevista en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.

15. En los supuestos en que la actuación inspectora afecte a empresas establecidas en otros Estados Miembros de la Unión Europea y los hechos comprobados sean sancionables por el Estado miembro de origen de la empresa, estos hechos podrán ponerse en conocimiento de la autoridad competente del Estado Miembro de origen para que inicie el procedimiento sancionador, sin perjuicio de que pueda adoptar otras medidas que considere pertinentes.

16. Informar al órgano competente de los resultados de la investigación para la identificación de los distintos sujetos responsables por los incumplimientos de las normas a que se refiere el artículo 12.1, incluyendo los supuestos de responsabilidad solidaria o subsidiaria, así como para el señalamiento de bienes para la efectividad de la vía ejecutiva.

17. Informar a los Servicios Públicos de Empleo a efectos del reconocimiento de acciones de orientación, capacitación y formación profesional para el empleo para los trabajadores en situación de trabajo no declarado, empleo irregular u otros incumplimientos detectados por la actividad inspectora, de acuerdo con la legislación aplicable.

18. Cuantas otras medidas se deriven de la legislación en vigor.

Título III. Organización del Sistema

Capítulo I. Disposiciones generales

- Artículo 25. Cooperación y participación de las Administraciones Públicas.

1. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán el ejercicio y la eficacia del servicio público de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Para ello, dichas Administraciones organizarán la realización de las actuaciones inspectoras con sujeción a los principios establecidos en el artículo 2 y desarrollarán el principio de cooperación a través de los órganos e instrumentos previstos en esta ley y en los acuerdos o convenios suscritos entre las Administraciones competentes.

2. La cooperación entre las Administraciones citadas en el apartado anterior se instrumentará mediante convenios de colaboración según lo establecido en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. Las Comunidades Autónomas participarán asimismo en la dirección del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social a través del Consejo Rector del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

4. Con el fin de garantizar el funcionamiento cohesionado de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Administración General del Estado y la de las Comunidades Autónomas establecerán la realización de los planes y programas de actuación que sean necesarios para el logro de objetivos de carácter general.

Con la misma finalidad, las Administraciones competentes dispondrán de un sistema de información dirigido a garantizar la eficacia de la función inspectora y la coherencia y homogeneidad de los datos y de su tratamiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24.

- Artículo 26. Definición de los servicios y puestos de inspección.

Los puestos de trabajo de Inspector de Trabajo y Seguridad Social y los de Subinspector Laboral, en su doble Escala de Empleo y Seguridad Social y de Seguridad y Salud Laboral, se definirán de acuerdo con criterios únicos en todo el territorio español. El resto de los servicios y puestos de Inspección se acomodarán en su desarrollo a las características de cada demarcación, conforme a las competencias propias de cada Administración, atendiendo de manera preferente a criterios homogéneos para su establecimiento.

Capítulo II. Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social

- Artículo 27. Creación del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

1. Se crea el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, como un organismo autónomo dotado de personalidad jurídica propia y diferenciada de la del Estado y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, consistentes en el ejercicio de las funciones que le encomienda esta ley.

El Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social se articulará en torno a una estructura central y una estructura territorial.

2. El régimen jurídico del Organismo Estatal será el establecido en esta ley y en el capítulo II del título III de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

El régimen contable, presupuestario y de control, así como el de rendición de cuentas del Organismo Estatal será el previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, para las entidades integrantes del sector público administrativo estatal.

3. El Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social está adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, al que corresponde su dirección estratégica, la evaluación y el control de los resultados de su actividad.

4. Corresponde al Gobierno aprobar los Estatutos del Organismo Estatal mediante real decreto, previa consulta con las Comunidades Autónomas, a iniciativa del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

- Artículo 28. Estructura del Organismo Estatal.

1. El Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social se desplegará en la totalidad del territorio español. Tanto su estructura central como territorial se establecerá en los Estatutos a los que se refiere el artículo 27.4, teniendo en cuenta lo establecido en los apartados siguientes y en el artículo 32.

2. La estructura central contará con un Consejo Rector y un Director, como órganos de dirección, y con un Consejo General Consultivo, como órgano de participación institucional en las materias relativas al Organismo.

Dicha estructura comprenderá la organización relativa a la dirección y gestión de sus responsabilidades y la planificación y coordinación de la totalidad de las funciones encomendadas al Organismo tanto en el ámbito central como periférico.

- Artículo 29. El Consejo Rector.

1. El Consejo Rector tendrá composición paritaria y se integrará por los siguientes miembros:

a) El presidente, que será el titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y el Vicepresidente, que será el titular de la Subsecretaría del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

b) Los vocales designados por la Administración General del Estado.

c) Los vocales designados por cada una de las Comunidades Autónomas.

El número de vocales, su forma de designación y el régimen de funcionamiento del Consejo Rector se desarrollarán en los Estatutos del Organismo Estatal.

2. Corresponde al Consejo Rector:

a) Conocer y aprobar los planes y programas generales de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las medidas necesarias para su ejecución.

b) Establecer e impulsar medidas de colaboración con otras Administraciones para el mejor ejercicio de las funciones encomendadas al Organismo Estatal.

c) Aprobar la propuesta del presupuesto de ingresos y gastos del Organismo Estatal y ser informado de su ejecución, así como aprobar las cuentas anuales.

d) Conocer e informar las propuestas normativas relativas al Sistema de Inspección, así como los criterios técnicos y procedimientos operativos comunes para el desarrollo de la función inspectora.

e) Adoptar propuestas en relación con la posición estatal en materia de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ámbito europeo, y la ejecución de las acciones y programas que impulse la Unión Europea y la cooperación administrativa transnacional.

f) Adoptar propuestas sobre las cuestiones que se le sometan en relación con los procesos de ingreso, selección, formación y provisión de puestos de trabajo de los funcionarios de los Cuerpos Nacionales de Inspección, y la planificación de los recursos humanos y medios materiales del Sistema.

g) Proponer la adopción de acuerdos relativos a la aportación de recursos materiales, técnicos o económicos del Organismo Estatal y al perfeccionamiento profesional de los efectivos del Sistema, así como la adopción de criterios comunes sobre la estructura

territorial y funcional del mismo, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y de lo establecido en las respectivas leyes de presupuestos.

h) Aprobar los criterios para evaluar la eficacia y la calidad de los servicios del Organismo Estatal.

i) Conocer los informes, estadísticas y memorias a los que se refiere el artículo 31.3.g).

j) Aprobar, a propuesta del titular de la dirección del Organismo Estatal, los criterios de distribución de los puestos de trabajo de personal inspector correspondientes a la estructura territorial de dicho Organismo.

- Artículo 30. El Consejo General.

1. El Consejo General es el órgano de participación institucional en las materias relativas al Organismo Estatal. Estará integrado por cuatro representantes de la Administración General del Estado, cuatro representantes de las Comunidades Autónomas, ocho representantes de las organizaciones empresariales más representativas y ocho representantes de las organizaciones sindicales más representativas.

2. El Consejo General tendrá funciones de información, audiencia y consulta en las materias de que tenga conocimiento el Consejo Rector de acuerdo con el artículo 29.2.

- Artículo 31. El Director.

1. Sin perjuicio de las atribuciones del Consejo Rector, el titular de la Dirección del Organismo ejerce las funciones de representación del Organismo Estatal, así como su dirección y gobierno.

2. El titular de la Dirección ejercerá las funciones propias de la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Convenio número 81 de la Organización Internacional del Trabajo.

3. Con carácter específico, corresponde al titular de la Dirección el ejercicio de las siguientes funciones:

a) La dirección y coordinación del funcionamiento del Organismo Estatal.

b) Ejercer la representación del Sistema español de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en las instituciones y foros internacionales, así como de la Unión Europea, sin perjuicio de la participación de las Comunidades Autónomas en la forma que se determine.

c) Autorizar la adscripción a la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude de las empresas que deban ser objeto de comprobación e investigación por la Dirección Especial de Inspección, de acuerdo con los planes y programas generales que se establezcan.

d) La dirección de las funciones de Alta Inspección del Estado en el orden social de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de Autonomía, en la forma establecida en la disposición adicional novena.

e) Promover la celebración de convenios con las Comunidades Autónomas o con otras Instituciones del Estado en materias de la competencia del Organismo Estatal y firmar los mismos cuando no corresponda a una autoridad superior.

f) Ostentar la Secretaría del Consejo Rector, así como la relación institucional con las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas, a efectos de asegurar la coherencia general del Sistema y promover la aplicación de los objetivos generales en su actuación.

g) Elaborar y publicar informes, estadísticas y memorias sobre la actuación del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuando se refieran al ámbito general del territorio del Estado o tengan por destinatario instituciones del Estado u órganos supranacionales o internacionales, así como su presentación a las instituciones de dichos ámbitos.

h) Ostentar la jefatura del personal, y organizar y gestionar los recursos humanos y medios materiales del Organismo Estatal, especialmente en materia de selección, formación y movilidad, sistemas de comunicación e información y funcionamiento de los servicios administrativos.

i) La definición de los criterios técnicos y operativos para el desarrollo de la función inspectora, sin perjuicio de la participación de las Comunidades Autónomas.

j) El conocimiento y resolución de los expedientes y recursos señalados por la normativa aplicable, así como de aquellos otros incoados por la Inspección y que no correspondan expresamente a otras autoridades de las Administraciones Públicas.

k) El conocimiento de las cuestiones que se planteen ante el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en relación con actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sin perjuicio de las competencias de las autoridades autonómicas.

l) La elaboración de la propuesta de presupuesto de ingresos y gastos del organismo, así como el seguimiento de la ejecución presupuestaria, así como formular las cuentas anuales y rendirlas, una vez aprobadas, al Tribunal de Cuentas.

m) Adoptar las instrucciones sobre guardias y organización de los servicios en las materias competencia de la Administración General del Estado, en coordinación con las Comunidades Autónomas.

n) Cualesquiera otras que le asignen los Estatutos del organismo u otras normas.

- Artículo 32. Estructura territorial del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

1. Conforme a lo mencionado en el artículo 28.1, el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social se desplegará en la totalidad del territorio español. Su estructura territorial se desarrollará reglamentariamente, teniendo en cuenta lo establecido en los apartados siguientes.

2. En cada Comunidad Autónoma existirá una Dirección Territorial, cuyo titular será designado con la participación de la Comunidad en los términos previstos en el convenio de colaboración, y a quien corresponderá, además de las funciones que se establezcan reglamentariamente, la interlocución permanente con las autoridades de la misma conforme lo establecido en el referido convenio.

El titular de la Dirección Territorial dependerá funcionalmente de la Administración General del Estado o de la Administración Autonómica correspondiente, en atención a la competencia material objeto de las actuaciones inspectoras en las que intervenga.

No obstante lo anterior, en las Comunidades Autónomas que hayan recibido el traspaso del ejercicio de la función pública inspectora y los servicios de la Inspección de Trabajo, se

estará a lo que se acuerde en los mecanismos de cooperación bilateral, que deberá garantizar la prestación eficaz y coordinada del servicio público de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

3. La estructura territorial, en aplicación del principio de trabajo programado y en equipo, deberá contemplar las unidades especializadas precisas en las áreas funcionales de actuación de la inspección.

4. La definición y puestos de inspección de la estructura territorial del Organismo Estatal atenderá a los principios de eficacia, eficiencia y trabajo programado y en equipo y a la necesidad o conveniencia de diversificar las tareas inherentes al ejercicio de las funciones inspectoras.

Capítulo III. Cooperación autonómica

- Artículo 33. Autoridad Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

En cada Comunidad Autónoma tendrá la consideración de Autoridad Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social el cargo público designado por esta para desempeñar específicamente tales funciones en el ámbito de las materias que sean de la competencia de la Comunidad, de acuerdo con lo que disponga el correspondiente convenio de colaboración. Corresponde a la Autoridad Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, conforme a lo que se indique en el convenio de colaboración, el ejercicio de las siguientes funciones en materias de su competencia:

- a) Impulso y seguimiento de la actividad inspectora respecto de las competencias de la Comunidad Autónoma en el territorio de la misma.*
- b) Promover la celebración de acuerdos y convenios entre el Organismo Estatal y la Comunidad Autónoma.*
- c) La presentación de las memorias de actividades de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en su ámbito territorial, conforme a su propia normativa.*
- d) Supervisión de los resultados de las actuaciones inspectoras que afecten a centros regidos o administrados por la Comunidad Autónoma.*
- e) Propuesta de elaboración de planes y programas específicos de formación del personal con funciones inspectoras, adaptados a las peculiaridades de la actividad económica y laboral del territorio de la Comunidad Autónoma.*
- f) Propuestas de criterios técnicos y operativos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en función de las particularidades de la actividad laboral o económica de la Comunidad Autónoma, o cuando existan peculiaridades de tipo geográfico, en especial, por razones de insularidad.*
- g) Propuesta al titular de la Dirección del Organismo Estatal de la instrucción de medidas disciplinarias respecto de los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social adscritos al Organismo Estatal en el territorio de la Comunidad Autónoma.*
- h) Adoptar las instrucciones sobre guardias y organización de los servicios en coordinación con la Administración General del Estado.*
- i) Cuantas otras se dispongan en los convenios de colaboración y en la normativa vigente.*

- Artículo 34. Comisión Operativa Autónoma de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

1. En cada Comunidad Autónoma existirá una Comisión Operativa Autónoma de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, coordinada por el titular de la Dirección Territorial del Organismo Estatal y que será presidida por la Autoridad Autónoma a que se refiere el artículo anterior, cuando acuda a las reuniones. Su composición se determinará de acuerdo con el convenio de colaboración, formando parte de la misma los responsables designados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma por las instituciones y servicios públicos encargados de la ejecución de la legislación cuya vigilancia está atribuida a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de acuerdo con lo señalado en el artículo 12.1.

2. Sin perjuicio de lo que disponga el correspondiente convenio de colaboración, la Comisión Operativa Autónoma de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se ocupará, al menos, de las siguientes cuestiones:

a) El análisis de las situaciones de incumplimiento más frecuente o generalizado de las normas sociales en el territorio de la Comunidad Autónoma, así como la actividad desarrollada en este ámbito por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

b) El establecimiento de los mecanismos de información y apoyo técnico que sean necesarios para el adecuado ejercicio de la función inspectora en el territorio de la Comunidad Autónoma.

c) La integración de los planes y programas de actuación de cada una de las Administraciones, de acuerdo con las prioridades establecidas y la aprobación del programa territorial de objetivos.

d) La información, el control y el seguimiento de la aplicación de los programas territoriales y de los programas generales del Sistema, así como el traslado de los informes oportunos al Consejo Rector del Organismo Estatal.

e) El análisis del número, distribución, especialización y demás características de los efectivos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social radicados en el territorio de la Comunidad Autónoma y el traslado de las conclusiones o propuestas que correspondan al Consejo Rector del Organismo Estatal.

f) Los procedimientos para la mejor distribución de actuaciones entre los efectivos de Inspección con vistas a lograr el equilibrio entre el principio de especialización funcional y el de unidad de función y de actuación inspectora a que se refiere el artículo 2.

- Artículo 35. Participación institucional.

La participación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en los asuntos relativos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, circunscritos al ámbito territorial de las Comunidades Autónomas, se producirá en los órganos de representación de carácter consultivo, en la forma en que se prevea por estas.

4.2. La Inspección de Sanidad

Corresponde en este momento realizar una aproximación a la inspección de servicios sanitarios en lo relativo a su historia, a la evolución, si es el caso, de las funciones que ha desarrollado y a su estructura y funcionamiento.

Es necesario puntualizar que en primer lugar hemos debido realizar una clara diferenciación epistemológica, pues la inspección sanitaria o médica –se denomina de ambas formas-, es diferente a la inspección de salud pública, aunque según algunos autores puede incluirla. Es por este acercamiento a los distintos conceptos que nos hemos decantado por la inspección de sanidad, mucho más cerca del concepto de servicio público de la inspección de educación, pues la inspección de salud pública se encuentra orientada hacia el *conjunto de iniciativas, actividades y servicios organizados por las administraciones públicas para mejorar la salud de la población mediante intervenciones colectivas o sociales. Las intervenciones colectivas o sociales son aquéllas cuyo objetivo es la identificación y modificación, en su caso, de los factores protectores y de riesgo para la salud que evitan o condicionan la aparición de morbilidad, mortalidad prematura y discapacidad*²³⁵.

En segundo lugar, debemos también expresar la seria dificultad en encontrar bibliografía relevante al respecto. De la misma forma que en otros ámbitos de inspección nos hemos centrado en los escasos documentos, en forma de artículo divulgativo, de gran valor, Molero Mesa, J., & Jiménez Lucena, I. (2000); en la documentación proporcionada por academias de preparación de oposiciones para inspección de sanidad, y en concreto el Centro Europeo de Estudios Sociales y de Servicios [CEESS, Centro de Estudios Superiores Sanitarios]²³⁶, y en el ámbito del asociacionismo de los inspectores de sanidad, y en concreto en el Sindicato Médico de Castilla La Mancha²³⁷ y en la Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios Sanitarios²³⁸.

²³⁵ Definición extraída del art. 3 de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de Salud de Galicia (BOE de 21 de agosto) en la url: <https://www.boe.es/boe/dias/2008/08/21/pdfs/A35080-35115.pdf> con acceso el 23 de junio de 2022.

²³⁶ Se puede ampliar información en la web del CEESS, *Centro de Estudios Superiores Sanitarios* en la url: <https://www.ceess.es/> aunque el acceso a la documentación se ha realizado por medio del contacto directo con D^a Rocío García Valriberas, Jefa de Área de Inspección Sanitaria de la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, quien proporcionó el contacto de uno de los profesores del centro de estudios: el Doctor Jesús Hernández Manso, del Servicio de inspección sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

²³⁷ Información de contacto en la web <https://sindicatomedicoclm.es> con acceso el 2 de junio de 2022.

²³⁸ Información de contacto en la web <https://federacionfaiss.com> con acceso el 2 de junio de 2022.

4.2.1. Acercamiento a la historia y estructura de la Inspección de los servicios sanitarios en España

- Los antecedentes

Como se ha comentado es difícil encontrar documentación, libros o estudios sobre la historia de la inspección sanitaria en nuestro país; quizá lo más aventajado, desmereciendo del entorno social, político y económico de la época, es realizar búsquedas en las bases de datos de los boletines oficiales y concretamente de la Gaceta de Madrid. Pero esa tarea, que ha aportado documentación muy relevante, carece del contexto y del barniz que justifique las decisiones y las evoluciones normativas.

No obstante Molero y Jiménez (2000) nos han clarificado y orientado en este camino de búsqueda desglosando los inicios de los cuerpos sanitarios en nuestro estado desde tres prismas: la sanidad exterior, la sanidad interior y las instituciones sanitarias.

. La sanidad exterior

De esta forma estos autores ponen su antecedente más claro en la Ley de Sanidad, promulgada el 28 de noviembre de 1855²³⁹, que extendió el modelo napoleónico a la Administración pública española instituyendo la Dirección General de Sanidad en el Ministerio de la Gobernación y creando un entramado que terminaba con los Directores especiales de Sanidad marítima, implantados para impedir la entrada de *enfermedades pestilenciales exóticas* en España.

Años más tarde, el Real Decreto de 17 de abril de 1867²⁴⁰ estableció ciertas reglas para la organización de plazas en las Direcciones de Sanidad marítima con el posible propósito de formar un *cuerpo perito* con derecho a *inamovilidad* pero al no desarrollarse dicha norma no pudo cumplirse lo establecido en el Decreto.

Molero y Jiménez (2000) afirman que antes de 1879 no existía preocupación por conformar un cuerpo de funcionarios sanitarios; pero ese año Francisco Silvela, Ministro de la Gobernación, pidió al Director General de Beneficencia y Sanidad que le propusiera lo necesario para organizar *la Sanidad terrestre y marítima* en un cuerpo especial que se denominaría de Sanidad civil, *sobre las bases de concursos y oposiciones para el ingreso en el cuerpo, que darán derecho a la inamovilidad a los funcionarios*²⁴¹.

Con este objetivo, fue en 1886, cuando se publicó el Real Decreto²⁴² que creó el Cuerpo de Sanidad Marítima, que incluía a todos los empleados de las Direcciones de Sanidad marítima y de los lazaretos.

La Sanidad terrestre quedó fuera de esta reforma pues la mayor preocupación para el Estado en materia sanitaria era la entrada de *enfermedades pestilenciales exóticas* y, por tanto, al ser el

²³⁹ *Ley sobre Sanidad* (Gaceta de Madrid, núm. 1068, de 07/12/1855) Texto original en la url: <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1855/1068/A00001-00002.pdf> con acceso el 27 de junio de 2022.

²⁴⁰ *Real decreto dictando varias disposiciones para el cumplimiento de la ley de Sanidad vigente* (Gaceta de Madrid, núm. 116, de 26/04/1867). Texto original en la url: <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1867/116/A00002-00002.pdf> con acceso el 27 de junio de 2022.

²⁴¹ Así es como Molero y Jiménez (2000) cita la Real Orden de 14 de octubre de 1879.

²⁴² *Real Decreto reorganizando el Cuerpo de Sanidad marítima* (Gaceta de Madrid, núm. 321, de 17/11/1886). Texto original en la url: <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1886/321/A00494-00496.pdf> con acceso el 27 de junio de 2022.

territorio con alto porcentaje de fronteras marítimas y colonias en ultramar, la base del sistema sanitario debía establecerse en el litoral.

Molero y Jiménez (2000) realizan una descripción estructural, en el que se dividieron las Direcciones de Sanidad de los puertos y lazaretos en cuatro clases. La plantilla de las Direcciones de Sanidad Marítima, aprobada junto al Real Decreto que creaba el Cuerpo de Sanidad Marítima, comprendía 98 Directores médicos de visita de naves, 35 Secretarios médicos, 3 médicos de bahía y 3 médicos de consigna y por último 48 médicos suplentes. El proceso de jerarquización en el ámbito del funcionariado sanitario finalizó un año después con la aprobación del Reglamento Orgánico provisional de la Sanidad marítima²⁴³, en cuyo art. 58 se consignaba la formación de un *escalafón especial de estos médicos por orden de rigurosa antigüedad en el ramo*.

Es en el capítulo III del Reglamento Orgánico en el que se cita:

Art. 5º. En casos inminentes de epidemia ó contagio y siempre que el Gobierno lo acuerde, por sí ó á propuesta del Consejo de Sanidad, se girarán visitas ordinarias ó extraordinarias de inspección, donde el bien público lo exija.

Estas visitas serán desempeñadas por Delegados facultados del Gobierno, nombrados á propuesta, de dicho Consejo.

Art. 6º. Para el mejor cumplimiento de las disposiciones sanitarias, buen orden administrativo y debida uniformidad de los servicios, se ejercerá la inspección general en los puertos y lazaretos por el Director general ó por los funcionarios del Centro directivo, ó de la Secretaría del Consejo de Sanidad, con la frecuencia y en la forma que el Ministro disponga.

De esta forma se establecía un sistema de inspección coyuntural, pero no se creaba una unidad específica de inspección.

Molero y Jiménez (2000) continúan afirmando que, en la última década del siglo XIX, las plantillas de Sanidad Marítima se fueron constriñendo tal y como exigían los presupuestos: si en los años 80 los presupuestos habían sido generosos para los asuntos sanitarios debido a la presencia del cólera, en la década de los 90 del siglo XIX se vieron reducidos a la mitad y con ellos el número de médicos y el gasto de material sanitario de las estaciones marítimas. Esos condicionantes provocaron la reorganización de plantillas que imponía la Ley de presupuestos de 1892²⁴⁴ con el fin de *obtener economías*. Los autores subrayan que todas las medidas incidirían en un aumento de la jerarquización del Cuerpo de Sanidad Marítima, coincidieron con la creación de plazas de Inspectores Provinciales de Sanidad.

La inexistencia de personal fijo en las fronteras con Francia y Portugal se suplía nombrando comisiones de Inspección con miembros de la Secretaría del Real Consejo de Sanidad cuando un peligro epidémico surgía en uno de esos países. De esta forma, en agosto de ese mismo año, se nombró una Comisión con motivo de la epidemia de peste desatada en Oporto.

Las plantillas del Cuerpo de Sanidad exterior continuaron a lo largo del primer tercio del siglo XX adaptándose a las necesidades epidemiológicas, a las normas internacionales suscritas por

²⁴³ *Reglamento orgánico provisional de la sanidad marítima* (Gaceta de Madrid, núm. 176, de 25/06/1887). Texto original en la url: <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1887/176/R00787-00815.pdf> con acceso el 27 de junio de 2022.

²⁴⁴ A este respecto Molero y Jiménez (2000) cita los presupuestos del año 1892, desde el análisis del texto normativo encontrado en la Gaceta de Madrid de 29 de julio de 1892.

España y a los presupuestos estatales. En este caso, con motivo de los acuerdos de la Conferencia Internacional de París de 1903, se volvió a reformar la Sanidad exterior.

Seis años más tarde, en 1909, se publicó un nuevo Reglamento provisional de Sanidad exterior²⁴⁵ que se desarrolló gracias a un crédito extraordinario para atenciones sanitarias que se libraron con motivo de la epidemia de cólera que amenazaba desde Rusia²⁴⁶. Una de las novedades aportadas por este nuevo Reglamento fue la creación de las esperadas inspecciones sanitarias a lo largo de las fronteras con Francia y Portugal con personal permanente. Las inspecciones de primera categoría se dotaron con un inspector facultativo y uno o varios subinspectores médicos y las de segunda sólo con un subinspector médico.

. La sanidad interior

En cuanto a la sanidad interior, la Ley de Sanidad de 1855 sustituyó el sistema de cuarentena clásico interior por otro basado en la inspección médica *para los casos inminentes de epidemia o contagio*. En estos casos el Gobierno podía nombrar los denominados *delegados facultativos* para que realizaran visitas de inspección *allí donde el bien público lo exija*. En tiempos de calma epidémica, la vigilancia estaba en manos de los subdelegados de Sanidad de medicina y cirugía.

No obstante, Molero y Jiménez (2000) afirman que la labor de los subdelegados en este terreno fue siempre criticada pues en la práctica no ejercían su labor de inspección sanitaria. No obstante, y a pesar de la aparente inoperancia de los subdelegados de Sanidad, la primera figura sanitaria que llegaría a encargarse en exclusividad de vigilar la salud colectiva no fue creada hasta el verano de 1892, con motivo de la epidemia de cólera que se estaba desarrollando en Europa. De esta forma una Real Orden de 29 de agosto creó el cargo de Inspector Provincial de Sanidad²⁴⁷. Entre las funciones de los inspectores provinciales se encontraba *proponer a las autoridades las medidas que estimen oportunas sobre el régimen higiénico y sanitario, hacer pedidos de materias desinfectantes y cuidar de que sean útilmente aprovechadas*. Los inspectores provinciales sólo serían remunerados en caso de epidemia y a cargo de los créditos extraordinarios librados para tal fin y debían ejercer su profesión en la capital de la provincia.

La Instrucción General de Sanidad, aprobada provisionalmente en julio de 1903²⁴⁸, suprimió la Dirección General de Sanidad y creó dos Inspecciones Generales: una de Sanidad interior y otra de Sanidad exterior. De esta forma establecía en su capítulo II:

²⁴⁵ *Real Decreto autorizando al Ministro de este Departamento para que presente á las Cortes un proyecto de ley de bases para la organización de los servicios de Sanidad pública del Reino* (Gaceta de Madrid, núm. 129, de 09/05/1911). Texto original en la url: <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1911/129/A00370-00377.pdf> con acceso el 27 de junio de 2022.

²⁴⁶ Molero y Jiménez (2000) cita el preámbulo de la Real Orden de 25 de febrero de 1909 (Gaceta de Madrid, de 26 de febrero).

²⁴⁷ *Real Orden creando Inspecciones de Sanidad con las facultades que se detallan, encaminadas á evitar los efectos de las epidemias coleriformes* (Gaceta de Madrid, núm. 243, de 30/08/1892). Texto original en la url: <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1892/243/A00797-00798.pdf> con acceso el 27 de junio de 2022.

²⁴⁸ *Real Decreto aprobando con carácter provisional la Instrucción general de Sanidad* (Gaceta de Madrid, núm. 196, de 15/07/1903). Texto original en la url: <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1903/196/A01491-01500.pdf> con acceso el 27 de junio de 2022.

Art. 31 Habrá dos Inspectores generales de Sanidad (interior y exterior), á las órdenes inmediatas del Ministro de la Gobernación. Tendrán la categoría y sueldo de Jefes de primera clase de Administración civil, y serán los Jefes efectivos de los servicios y funcionarios en las respectivas Secciones.

Art. 32. De la Inspección general de Sanidad exterior, dependerán todos los servicios de puertos; estaciones sanitarias, de fronteras, servicios sanitarios de Aduanas, importación y exportación de ganados y mercancías; vigilancia sanitaria de transportes dentro de la Península, estadística sanitaria, comunicaciones, publicidad y cooperación sanitaria internacional; organización de propagandas, conferencias y congresos internacionales; comisiones fuera del Reino, y cuanto atañe á la .relación sanitaria con países extraños.

Art. 33. Corresponden á la Inspección general de Sanidad interior todos los servicios de higiene general, municipal y provincial; vacunación é inoculación preventivas; cementerios, inhumaciones, exhumaciones, embalsamamientos y traslación de cadáveres; vigilancia de la asistencia médica domiciliaria ú hospitalaria en Sanatorios, Asilos, Inclusas y Hospicios benéficos, en cuanto se refiere á su funcionamiento higiénico y sanitario, y de las aguas minerales. También estarán, bajo este concepto, sometidos a su acción y vigilancia los Hospitales, Asilos y demás institutos de la Beneficencia particular.

La Instrucción configuró un Cuerpo funcional de Inspectores Provinciales de Sanidad dependientes de la Inspección General de Sanidad interior. La figura de Inspector Provincial se dotó con autoridad sanitaria al señalarse que tendría comunicación directa con los inspectores generales, e incluso con el Gobernador Civil en los casos en los que su propia autoridad fuese desatendida o insuficiente.

En el verano de 1904 se convocaron las primeras oposiciones para cubrir 48 plazas de Inspectores Provinciales²⁴⁹ a las que acudieron 86 opositores²⁵⁰. Es también significativa la lectura de una Real Orden publicada en 1909 convocando plazas de inspectores provinciales de Sanidad y estableciendo el programa de preguntas²⁵¹.

Merece ser acentuado, como comentan Molero y Jiménez (2000), que en 1905 se constituyera la *Asociación Nacional de Inspectores de Sanidad*, presidida por los dos Inspectores Generales. La Asociación, compuesta por los Inspectores Provinciales que habían aprobado las primeras oposiciones, reclamaba, entre otras muchas cuestiones, algunas de carácter económico, la elaboración de un proyecto de Reglamento orgánico para que se *cristalizara administrativamente el Cuerpo de Inspectores*.

²⁴⁹ *Real Orden relativa á oposición de 48 plazas de Inspectores provinciales y disponiendo se publiquen en la Gaceta el adjunto reglamento y el programa para dichas oposiciones* (Gaceta de Madrid, núm. 187, de 05/07/1904). Texto original en la url: <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1904/187/A00048-00050.pdf> con acceso el 27 de junio de 2022.

²⁵⁰ En la Gaceta de Madrid aparecen los nombres de todos los candidatos.

Inspección general de Sanidad interior.- Convocando á los opositores á las plazas de Inspectores provinciales de Sanidad (Gaceta de Madrid, núm. 292, de 20/10/1904). Texto original en la url: <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1904/292/A00251-00252.pdf> con acceso el 27 de junio de 2022.

²⁵¹ *Real Orden convocando á oposiciones para proveer 11 plazas de Inspectores provinciales de Sanidad, con arreglo á los programas que se insertan* (Gaceta de Madrid, núm. 121, de 01/05/1909). Texto original en la url: <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1909/121/A01072-01077.pdf> con acceso el 27 de junio de 2022.

Entre sus reivindicaciones figuraba que su labor inspectora y de vigilancia alcanzara a todas las instituciones sanitarias, aunque dependieran de otros ministerios. De esta forma pedían hacerse cargo de la Inspección escolar y estar presentes en las Juntas de Instrucción pública y Consejos universitarios. Se justificaba esta petición argumentando que si esto se llevara a cabo *la higiene escolar no será una partida más en los gastos presupuestados por la Nación, sino un servicio de Beneficencia y Sanidad pública que mejore la raza, el país, la región y la familia por la virtud admirable de la educación individual*. El alcance de sus peticiones también abarcaba a la inspección y vigilancia de las profesiones sanitarias, en controversia con los Colegios Médicos, a los que criticaba severamente.

. Las instituciones sanitarias

Molero y Jiménez (2000) apuntan que el tercer elemento de la Sanidad Nacional lo configuraban los empleados técnicos que trabajaban en las instituciones sanitarias del Estado que, en un primer momento, se circunscribía al Instituto General de Vacunación creado en 1874 y que posteriormente quedó incorporado al Instituto de Sueroterapia, Vacunación y Bacteriología de Alfonso XIII, creado en 1899.

El Instituto General de Vacunación, que entró en funcionamiento en marzo de 1874 como *Centro provisional*, fue puesto bajo la inspección de la Real Academia de Medicina en 1875²⁵².

En 1885, el Instituto de Vacunación fue reorganizado para equiparar a sus miembros con el Cuerpo facultativo de Beneficencia General, dependiente también de la Dirección General de Beneficencia y Sanidad. De esta forma se creó el Cuerpo médico de Vacunadores del Estado, que por su novedad tuvo que regirse por el Reglamento Orgánico del Cuerpo facultativo de Beneficencia General.

Finalmente, Molero y Jiménez (2000) describen el proceso de unificación de cuerpos de sanidad. La reforma general de la Administración propiciada por la Ley General de funcionarios y empleados públicos de 1918²⁵³ estipulaba que se debía reducir el personal *al estrictamente necesario* para un ahorro significativo del gasto de personal. No obstante, para los Cuerpos especiales se estipuló que el Consejo de Ministros acordaría lo que *considerase oportuno*. Este fue el caso de los funcionarios de Sanidad que no sólo se libraron del recorte, sino que incluso se beneficiaron del aumento de sueldo reglamentario, posiblemente por la alarma social provocada por la epidemia de gripe que coincidió con dicha reforma. Seis meses después de promulgarse esta Ley de funcionarios y empleados públicos, el Gobierno reestructuró la organización sanitaria bajo la iniciativa del Ministro de la Gobernación. Entre las reformas más significativas, que derogaban sustancialmente la Instrucción General de Sanidad, destacaba la división, en tres secciones diferentes, de los servicios de la Administración Central de Sanidad, subordinadas a la Inspección general: una de Sanidad interior, otra de Sanidad exterior y otra de Institutos de Higiene y demás instituciones sanitarias.

Molero y Jiménez (2000) concluyen que una vez terminada la contienda civil, la continuidad del Cuerpo Nacional de Sanidad se vio favorecida por el reparto de poderes entre las distintas facciones del nuevo régimen. Esta separación política marcó el desarrollo de la Sanidad española

²⁵² Así consta en la Real Orden disponiendo que el Centro provisional de vacunación quede bajo la inspección y dirección inmediata de la Real Academia de Medicina (Gaceta de Madrid, núm. 111, de 21/04/1875). Texto original en la url: <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1875/111/A00200-00200.pdf> con acceso el 28 de junio de 2022.

²⁵³ Ley de bases acerca de la condición de los funcionarios de la Administración civil del Estado (Gaceta de Madrid, núm. 205, de 24/07/1918). Texto original en la url: <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1918/205/A00222-00225.pdf> con acceso el 28 de junio de 2022.

al permitir la coexistencia de dos organismos paralelos: la Sanidad Nacional y el Seguro Obligatorio de Enfermedad, puesto en marcha por el Ministerio de Trabajo en 1944. Esta doble intervención favoreció la duplicación de servicios e instalaciones sanitarias sin establecerse ningún tipo de coordinación entre ellas: los autores apuntan que ni la Dirección General de Sanidad intervino en la instauración del Seguro, ni el Ministerio de Trabajo respetó la legislación sobre el mismo incluida en la Ley de Bases de Sanidad Nacional, promulgada en noviembre de 1944²⁵⁴.

Es significativo que en las primeras líneas del título preliminar de la Ley de Bases se estableciera:

Base única. Incumbe al Estado el ejercicio de la función pública de Sanidad. En la consecución de los fines de esta función será ayudado por las Corporaciones públicas, Organismos paraestatales y del Movimiento y por las entidades particulares, bajo la ordenación, inspección, vigilancia, disciplina y estímulo de los Organismos sanitarios dependientes del Estado.

Es muy esclarecedora, por su resumen histórico, la parte expositiva de la Ley, en la que cita la de 1855, el Real Decreto de noviembre de 1904, los Reglamentos de 1925, así como la Ley de Coordinación Sanitaria de 1935²⁵⁵.

- Situación actual

La inspección sanitaria de la Comunidad de Madrid, se deriva fundamentalmente de la inspección del cuerpo sanitario de la seguridad social con la que contaba el INSALUD²⁵⁶ y que a partir del año 2001 se transfirió al ámbito territorial a Madrid. No obstante, la Comunidad de Madrid contaba ya antes de esta fecha, con otros inspectores dedicados a la acreditación de centros y servicios sanitarios provenientes en su mayoría del cuerpo de médicos de salud pública de la Comunidad de Madrid, como también de otro gran grupo dedicado a las funciones de inspección de salud pública.

La Inspección de servicios sanitario es un cuerpo de inspección del extinguido INP [Instituto Nacional de Previsión] -denominación que se mantuvo casi 20 años- y finalmente como Cuerpo de inspección de la administración de la seguridad social. El Insalud, desarrolló sus funciones desde 1978 hasta que en diciembre de 2001 fueron transferidos las diez últimas comunidades autónomas que componían el denominado Insalud, entre ellas la Comunidad de Madrid, quedando las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla integradas en un organismo del ministerio llamado INGESA²⁵⁷.

²⁵⁴ Ley de 25 de noviembre de 1944, de Bases de Sanidad Nacional (Boletín Oficial del Estado, núm. 331, de 26/11/1944). Texto original en la url: <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1944/331/A08908-08936.pdf> con acceso el 28 de junio de 2022.

²⁵⁵ Ley referente a servicios sanitarios (Gaceta de Madrid, núm. 196, de 15/07/1934). Texto original en la url: <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1934/196/A00538-00543.pdf> con acceso el 28 de junio de 2022.

²⁵⁶ Se puede ampliar información, en la url: <https://ingesa.sanidad.gob.es/quienesSomos/estructura.htm> con acceso el 23 de junio de 2022.

²⁵⁷ INGESA: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Web en la url: <https://ingesa.sanidad.gob.es/> con acceso el 23 de junio de 2022.

Al ser transferido el organismo Insalud, se transfirieron también todos los funcionarios que realizaban la inspección sanitaria²⁵⁸. Con posterioridad y con fecha de 23 de diciembre de 2002, la Comunidad de Madrid promulgó la Ley 13/2002 de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid²⁵⁹, modificando la Ley de la Función Pública de la Comunidad de Madrid para crear el Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Comunidad de Madrid (donde se integran Médicos y Farmacéuticos) y también el cuerpo de Subinspección sanitaria fijando las funciones genéricas que les correspondían.

De esta forma el art. 13 de la Ley 13/2002 modificó los arts. 34.8, 35.6, 39.12 y 39.13 en los siguientes términos:

Se modifican los artículos que a continuación se indican de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid.

Uno: Se adiciona un apartado 8 al artículo 34, con el siguiente tenor literal:

«8. El Cuerpo Superior de Inspección Sanitaria, en el que se distinguirán las siguientes Escalas:

a) Médicos de Inspección Sanitaria.

b) Farmacéuticos de Inspección Sanitaria».

Dos: Se adiciona un apartado 6 al artículo 35, con el siguiente tenor literal:

«6. El Cuerpo de Subinspección Sanitaria».

Tres: Se adiciona un apartado 12 al artículo 39, con el siguiente tenor literal:

«12. Son funciones del Cuerpo de Inspección Sanitaria las de inspección en el ámbito sanitario de conformidad con lo que se determine en la normativa vigente, la emisión de informes y asesoramiento en todas aquellas materias en que así se establezca en la normativa vigente, el control y evaluación de las diferentes prestaciones incluidas en el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid, las dirigidas a garantizar los derechos y velar por el cumplimiento de los deberes de los usuarios reconocidos por el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid, así como cualquier otra que en materia de inspección, evaluación, control y asesoramiento sanitario le sean encomendadas por los órganos competentes o por la normativa de aplicación. Para ingresar en la Escala de Médicos de Inspección Sanitaria del Cuerpo de Inspección Sanitaria será preciso estar en posesión del título de Licenciado en Medicina y superar las correspondientes pruebas selectivas, mientras que para el acceso a la Escala de Farmacéuticos de Inspección Sanitaria del Cuerpo de Inspección Sanitaria se requerirá estar en posesión del título de Licenciado en Farmacia y, asimismo, superar las correspondientes pruebas selectivas».

Cuatro: Se adiciona un apartado 13 al artículo 39, con el siguiente tenor literal:

«13. Son funciones del Cuerpo de Subinspección Sanitaria las actividades de apoyo, gestión y colaboración en las funciones inspectoras de las diferentes Escalas del Cuerpo de Inspección Sanitaria. Para ingresar en este Cuerpo se requerirá estar en posesión del título

²⁵⁸ Este proceso parece similar al realizado con el traspaso de funciones y servicios en materia de enseñanza no universitaria por Real Decreto 926/1999; ya citado.

²⁵⁹ Ley 13/2002, de 20 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM de 23 de diciembre), en la url:
http://gestion.madrid.org/rlma_web/html/web/Descarga.icm?idLegislacion=737&idDocumento=1
con acceso el 23 de junio de 2022.

de Diplomado Universitario en Enfermería, así como superar las correspondientes pruebas selectivas».

La importancia de la inspección sanitaria radica en el convencimiento de que toda organización requiere de un instrumento para saber si los objetivos propuestos se han conseguido, respetando determinados principios. Estas unidades, según los manuales de CEESS se conocen como inspección y están en diferentes ámbitos de la administración. De esta forma se considera que la inspección es especialmente importante en ámbitos como el de la Sanidad y el de la Seguridad Social donde están en juego, por una parte, importantes partidas económicas (que deben utilizarse con criterios de justicia, evitando el fraude, pues en otro caso no se podrían atender otras necesidades) y por otra, los derechos fundamentales de los usuarios que deben ser atendidos.

El manual del CEESS continúa afirmando que las funciones de inspección en la administración han de ser desempeñadas por funcionarios públicos con continuidad en el desempeño, con independencia del poder político del momento y con formación suficiente.

En un ámbito tan importante como la sanidad, la Inspección Sanitaria o de Servicios Sanitarios y Prestaciones se constituye como un eje del sistema sanitario y de Seguridad Social donde, a lo largo de su historia, han confluído tareas de:

- Gestión, ordenación, vigilancia y control de centros, (GEORVICON) servicios, establecimientos y prestaciones sanitarias; supervisando el cumplimiento de su normativa.
- Evaluación y acreditación de centros, servicios y establecimientos sanitarios, con actuaciones en relación con su calidad, eficacia y eficiencia. Estas últimas actuaciones también en relación con las prestaciones sanitarias.
- Colaboración con organismos de la Seguridad Social para el cumplimiento de su normativa.
- Tutela de derechos de pacientes y usuarios del sistema sanitario

Históricamente y en el ámbito de la asistencia sanitaria pública y prestaciones de la seguridad social, las tareas de inspección se han desarrollado por los funcionarios del cuerpo de inspección que han tenido a lo largo del tiempo denominaciones diferentes. Los manuales del CEESS las clasifica de la siguiente forma:

. Etapa inicial desde 1942 a 1978. Inspección de Servicios Sanitarios.

El Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social tiene una historia que comienza con la creación de la Inspección de Servicios Sanitarios, en el art. 44 de la Ley Fundacional del Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE) de 1942. En esa ley se señalan una triple función genérica de la Inspección en temas sanitarios:

- Sobre las Instituciones Sanitarias y sobre los facultativos que prestan asistencia.
- Sobre el organismo a que estaba adscrita (Instituto Nacional de Previsión INP), y sobre los servicios que prestaba
- La que competía a los órganos oficiales de Sanidad, referido a prevención y salud pública.

Las dos primeras funciones se atribuían a la Inspección de Servicios Sanitarios y la tercera a la Inspección de Salud Pública.

El Reglamento de 1943, que desarrollaba la Ley de 1942, detallaba como funciones (véase la tabla 4.2.1):

- *Comprobación de los partes de enfermedad y curación*
- *Inspeccionar prestaciones sanitarias y conciertos celebrados por el INP.*
- *Velar por que el enfermo cumpla del médico del seguro y que no exista abuso en la utilización de los recursos.*
- *Proponer medidas profilácticas.*
- *Comprobar su eficacia y la prestación del Servicio Farmacéutico y de las recetas dispensadas.*

La inspección de servicios sanitarios estaba formada por 3 escalas de funcionarios:

1º De Médicos inspectores.

2º De Farmacéuticos inspectores

3º De Enfermeros Visitadores, (por estar entre sus funciones principales el visitar al paciente en baja laboral).

El reconocimiento de los inspectores en aquella etapa, les conducía a una dedicación exclusiva e incompatibilidad para el ejercicio de otras actividades, en una época con mucho pluriempleo en el sector público sanitario y con un reconocimiento al exigirse que solamente los médicos inspectores podrían ser directores de centros sanitarios.

La Ley de Seguridad Social de 1973 les reconoce la condición de autoridad pública en el ejercicio de su función.

. Segunda Etapa desde 1978 a 1998. Cuerpo de inspección sanitaria del extinguido INP.

El manual del CEESS continúa que durante 20 años se mantuvo la denominación, haciendo referencia a un organismo ya extinguido. Con tal denominación se convocaban las oposiciones necesarias y en esta época se produjeron grandes cambios como fueron:

a.- El proceso de transferencias que comenzaron en 1982 en Cataluña, originó la creación, en los servicios de salud, sus propios cuerpos de inspección, manteniendo los funcionarios que se transferían, la doble pertenencia a su cuerpo nacional de origen y el de destino de la propia comunidad. Esto impidió, a efectos prácticos, que la inspección de los servicios de salud tuviera un ámbito nacional, a diferencia de otras como la de trabajo, como ya hemos visto, que aunque presten servicio en las comunidades autónomas tienen una dependencia central del Ministerio de trabajo.

b.- La asunción por parte del INSS²⁶⁰ y del Ministerio de Trabajo, a partir de la Ley 42/1994²⁶¹ y del Real Decreto 1300/1995²⁶² de valoración médica de incapacidades, además de la gestión económica de la prestación, en busca de un mejor control de la prestación incorporando una muy importante plantilla de médicos inspectores para los EVIS²⁶³ que están en todo el territorio nacional a excepción de Cataluña en donde estas tareas las realiza el CRAM (centro de reconocimiento y evaluaciones medicas).

. Tercera Etapa. Desde 1998 hasta la transferencia del Insalud. Nueva denominación: Cuerpo de Administración Sanitaria de la Seguridad Social.

En esta etapa se cambió la denominación a Cuerpo de Administración Sanitaria de la Seguridad Social con independencia del ámbito en que se trabajara: en la administración de la seguridad social (INSS) o en los servicios de salud; además, y en esta misma línea, los enfermeros visitantes adquirieron la denominación de subinspectores y se les reconoció la condición de agentes de la autoridad. La Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud²⁶⁴ reconoció a la Alta inspección del Estado del Ministerio de Sanidad, la coordinación de los planes de inspección de los servicios de salud para la lucha contra el fraude.

Con esta denominación se reconocía a los funcionarios que prestaban servicio en el INSALUD o en el INSS, que se dedican al control de las prestaciones de incapacidad permanente e incapacidad temporal.

. Cuarta etapa: Madrid desde 2002.

Los nuevos funcionarios que se fueron incorporando a los servicios de salud, ya no pertenecían al cuerpo anterior, pues cada servicio de salud había creado sus propios cuerpos de inspección, con denominaciones diferentes.

²⁶⁰ El Instituto Nacional de la Seguridad Social –INSS– es una Entidad Gestora de la Seguridad Social, con personalidad jurídica propia, adscrita al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través de la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones, que tiene encomendada la gestión y administración de las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social, con excepción de aquellas cuya gestión esté atribuida al IMSERSO o servicios competentes de las Comunidades Autónomas, así como el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria, con independencia de que la legislación aplicable tenga naturaleza nacional o internacional.

Fuente en la url: <https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Conocenos/QuienesSomos/29413> con acceso el 23 de junio de 2022.

²⁶¹ Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social (BOE de 31 de diciembre) en la url: <https://www.boe.es/boe/dias/1994/12/31/pdfs/A39457-39504.pdf> con acceso el 23 de junio de 2022.

²⁶² Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, por el que se desarrolla, en materia de incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social, la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social (BOE de 19 de agosto). Texto consolidado en la url: <https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-19848-consolidado.pdf> con acceso el 23 de junio de 2022.

²⁶³ EVIs. Equipos de Valoración de Incapacidades, también conocido como tribunal médicos. Fuente en el art. 2 del Real Decreto 1300/1995.

²⁶⁴ Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (BOE de 29 de mayo). Texto consolidado en la url: <https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-10715-consolidado.pdf> con acceso el 23 de junio de 2022.

Así en Madrid, como ya se ha apuntado, citando los manuales del CEES, a partir de diciembre de 2002 se crearon el Cuerpo Superior de Inspección Sanitaria y el Cuerpo de Subinspección Sanitaria, dentro de la función pública de la Comunidad de Madrid. A estos cuerpos pertenecen los nuevos funcionarios de Madrid que se incorporasen a esta función desde esa fecha. De esta forma en ese cuerpo se integran los funcionarios transferidos, manteniendo también su pertenencia al cuerpo nacional de administración sanitaria de la seguridad social, junto a los nuevos funcionarios.

- Autoridad sanitaria o agente de la autoridad

El carácter de autoridad pública se establece en el art. 124 del Decreto 2065/1974 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social²⁶⁵ para los inspectores médicos y farmacéuticos, en el ejercicio de su función, en los términos: *y recibirán de las autoridades y sus agentes la colaboración y auxilio que a aquella se deben.*

Posteriormente la Ley 55/1999 de Medidas Fiscales Administrativas y de Orden Social extendió la consideración de autoridad pública, en el desempeño de sus funciones, a los inspectores médicos adscritos al INSS, añadiendo que *los enfermeros subinspectores tendrían las funciones inspectoras de apoyo, gestión y colaboración con los inspectores médicos y farmacéuticos y en ejecución de las órdenes recibidas para el desempeño de sus cometidos tendrían la consideración de agentes de la autoridad.*

Esta consideración le da a la inspección sanitaria, en el ejercicio de su función, la posibilidad de poder solicitar a los agentes de la autoridad, las actuaciones en algunos casos coercitivos, para poder cumplir su función. A la autoridad pública se le reconoce el criterio denominado jurídicamente *Iuris Tantum* (siempre que sea justo) que supone la *presunción de veracidad* en el ejercicio de su función.

La Circular 3/1999 del Insalud enumeraba las atribuciones de la Inspección en el ejercicio de su actividad inspectora, que veremos más adelante.

- Organización de la inspección sanitaria.

Los servicios de inspección sanitaria de Madrid se organizan en:

A. Estructura Central.

En la Comunidad de Madrid la estructura central de la inspección sanitaria (médicos y enfermeros) está adscrita a la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria²⁶⁶, que le

²⁶⁵ Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE de 20 de julio). Texto con solido en la url:
<https://www.boe.es/buscar/pdf/1974/BOE-A-1974-1165-consolidado.pdf> con acceso el 23 de junio de 2022.

²⁶⁶ La última referencia normativa relativa a la organización de la Consejería de Sanidad se encuentra en el Decreto 1/2022, de 19 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad (BOCM de 20 de enero). Texto en la url:
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/01/20/BOCM-20220120-1.PDF con acceso el 23 de junio de 2022.

Es necesario mencionar una cierta arbitrariedad de estas estructuras cambiantes, al comienzo de cada legislatura.

corresponde el ejercicio de las funciones a que se refiere el art. 47 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid y, en particular los siguientes:

- a) El fomento del desarrollo de la política de calidad total en el conjunto del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid.
 - b) El desarrollo e implantación de programas de calidad total.
 - c) La promoción de planes de mejora continua de la calidad en los centros sanitarios públicos y privados, en consideración a la eficiencia en el uso de los recursos.
 - d) La promoción del autocontrol en la actividad asistencial.
 - e) La acreditación y evaluación sanitaria de los centros que conforman el Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid.
 - f) El otorgamiento de la autorización administrativa para la creación, construcción, modificación, adaptación o supresión de los Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios, públicos y privados, de cualquier clase o naturaleza.
 - g) La elaboración y seguimiento del Plan Integral de Inspección de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de las competencias de los diferentes Centros Directivos de la Consejería en materia de inspección, y el ejercicio de las competencias en materia de inspección técnico-sanitaria de los Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la Comunidad de Madrid.
 - h) El acuerdo de órdenes de inicio de actuaciones de inspección a los Centros Directivos de la Consejería y a los Entes Públicos y Organismos Autónomos adscritos, sin perjuicio de las competencias de incoación de los mismos en su ámbito competencial.
 - i) El control de la publicidad médico-sanitaria.
 - j) El registro sanitario de los Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la Comunidad de Madrid.
 - k) La autorización y registro de las organizaciones sanitarias privadas de la Comunidad de Madrid.
 - l) El ejercicio de la potestad sancionadora en relación con las materias propias de su competencia.
 - m) Cuantas otras determinen la normativa vigente o le sean expresamente delegadas o atribuidas.
- Estructura de la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria.
- Unidad Jurídica
 - Área de Gestión Económico-Administrativa
 - Subdirección General de Inspección y Ordenación Farmacéutica
 - Área de Control Farmacéutico y Productos Sanitarios
 - Área de Inspección Farmacéutica
 - Área de Autorización de Centros, Servicios y Establecimientos Farmacéuticos

Subdirección General de Autorización y Acreditación de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios

Área de Autorización de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios

Área de Inspección de Centros Sanitarios

Subdirección General de Inspección Médica y Evaluación

Área de Desarrollo de Programas

Área de Evaluación Sanitaria

Área de Inspección Sanitaria

Área de Visado de Recetas

La inspección farmacéutica está adscrita a la Dirección General de Farmacia. Esta es una singularidad, según los manuales del CEESS, con respecto a otras comunidades autónomas en que la inspección está en una única unidad.

B. Estructura periférica.

La Inspección de Área Sanitaria, denominada históricamente como inspección de *zona*, se constituyó con un ámbito de actuación igual o inferior a la provincia y desarrollaba tareas de gestión de prestaciones y evaluación de inspección de servicios sanitarios.

Se ubicaban en lo que el Reglamento de Asistencia Sanitaria -art. 24 del Decreto 2766/1967²⁶⁷- definía como Sectores. Los Sectores eran los ámbitos geográficos donde estaban todas las especialidades. La Orden de 26 de marzo de 1980²⁶⁸ modificó la estructura orgánica periférica del INSALUD y en su art. 10 señaló: *se constituyen como Áreas Sanitarias del INSALUD las Inspecciones médicas de zona ubicadas en las sectoriales creadas por el extinguido INP y vigentes en 30 de septiembre de 1979.*

El manual del CEESS señala que en la práctica hubo pocas diferencias entre la ubicación y funciones de la inspección de zona y la inspección de área sanitaria. El ámbito de actuación de una inspección de área es más pequeño que el de las áreas sanitarias, creadas después de 1986, tras la publicación de la Ley General de Sanidad en Madrid.

Han existido proyectos de crear, o bien una inspección por área de salud (11) o de crear 4 o 5 áreas de inspección tal como tiene otros departamentos como educación según las zonas geográficas (centro, norte, sur, este, oeste). En las áreas de inspección hay médicos inspectores y enfermeros subinspectores y personal administrativo que prestan servicio a un área geográfica

²⁶⁷ Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre, por el que se dictan normas sobre prestaciones de asistencia sanitaria y ordenación de los servicios médicos en el Régimen General de la Seguridad Social (BOE, núm. 284, de 28 de noviembre de 1967). Texto original en la url:

<https://www.boe.es/boe/dias/1967/11/28/pdfs/A16425-16430.pdf> con acceso el 29 de junio de 2022.

²⁶⁸ Orden de 26 de marzo de 1980 por la que se modifican los dígitos de las tasas que se indican, como consecuencia de cambio de competencias del Ministerio de Trabajo al de Sanidad y Seguridad Social (BOE, núm. 106, de 2 de mayo de 1980). Texto original en la url:

<https://www.boe.es/boe/dias/1980/05/02/pdfs/A09494-09495.pdf> con acceso el 29 de junio de 2022.

determinada, aunque en ocasiones se salgan a realizar auditoria o trabajos de campo esporádicos fuera del área.

C. Equipos Territoriales de Inspección (ETI).

En el Insalud tenían ámbito de actuación supraprovincial y desarrollaban exclusivamente tareas de inspección y evaluación trabajando a demanda sin tener trabajos administrativos o burocráticos asignados. La Estructura de Equipos Territoriales de Inspección se daban en el antiguo Insalud y en otros servicios de salud. Los Equipos Territoriales se caracterizaban por su total disponibilidad para viajar y hacer trabajos supraprovinciales.

En la actualidad los componentes del antiguo equipo territorial de Madrid proveniente del Insalud se han integrado en el servicio de evaluación sanitaria y realizan evaluación de centros y actuaciones de inspección y evaluación, especialmente en casos relevantes o complejos.

D.- Grupo de Investigación de la Seguridad Social (GISS).

Se trata de una policía judicial formada por policías y guardias civiles, que ponen a disposición de la justicia personas que presuntamente hayan cometido algún delito. Señala el CEESS que fueron creados por un oficio de febrero de 1978 de la Subsecretaría de Salud del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, *para realizar las actividades inspectoras dirigido al esclarecimiento de posibles anomalías*, con una rama en Sanidad (muy relacionada con la Inspección) y otra en Trabajo.

- Plan anual de inspección (PAI)

La Inspección Sanitaria programa su actividad y la plasma en un Plan Anual de Inspección aprobado por la Dirección General, obligándose a que la memoria de actividades de cumplimiento de los resultados obtenidos.

El Plan Anual de Inspección incluye programas de actuación para la Inspección Médica, Farmacéutica y de Servicios. En el caso de la Comunidad de Madrid se ha realizado el plan integral de inspección sanidad y consumo de la comunidad de Madrid, que comprende todos los planes de las distintas direcciones generales y en donde se crea la comisión de coordinación de inspecciones de la Comunidad de Madrid. En 2004 se publicó una orden²⁶⁹ para fijar los criterios de elaboración del plan integral de inspección: en dicho plan se considera la elaboración de planes de inspección conjuntos de diferentes direcciones generales; las direcciones generales que participan son: Dirección General de Inspección, Calidad, Acreditación y Evaluación, que tiene asignado el seguimiento del plan y además las direcciones generales de Salud Pública, Consumo, Farmacia y Agencia Antidroga, todas estas unidades tienen algunas unidades de inspección, por lo que se pretende realizar planes conjuntos. Los planes de inspección se publican por Resolución de la Dirección General en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid²⁷⁰ como desarrollo de los principios establecidos en la correspondiente orden que

²⁶⁹ Orden 581/2004, de 9 de junio, del Consejero de Sanidad y Consumo, por la que se fijan los criterios de elaboración y seguimiento del Plan Integral de Inspección de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid y se crea la Comisión de Coordinación de las Inspecciones (BOCM núm. 146, de 21 de junio). Texto original en la url: https://www.bocm.es/boletin/CM_Boletin_BOCM/2004/06/21/14600.PDF con acceso el 29 de junio de 2022.

²⁷⁰ El último plan publicado corresponde a la Resolución de 25 de enero de 2022, de la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria, por la que se hace público el Plan de Inspección de Sanidad para el año 2022 (BOCM, núm. 33, de 9 de febrero). Texto original en la url:

establece los criterios de actuación en materia de inspección sanitaria y se aprueba el Plan Integral de Inspección de Sanidad de la Comunidad de Madrid de carácter plurianual²⁷¹. En dicho plan se incluyen los criterios correspondientes al Plan de inspección de la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria y al Plan de Inspección de la Dirección General de Salud Pública.

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/02/09/BOCM-20220209-17.PDF con acceso el 29 de junio de 2022.

²⁷¹ En este caso concreto el último plan plurianual se publicó por Orden 880/2020, de 24 de julio, del Consejero de Sanidad, por la que se aprueban los criterios de actuación y el Plan Integral de Inspección de Sanidad para los años 2020-2022 (BOCM, núm. 189, de 6 de agosto). Texto original en la url: https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/06/BOCM-20200806-15.PDF con acceso el 29 de junio de 2022.

4.2.2. Las funciones asignadas a la Inspección de los servicios sanitarios en la normativa española

Iniciamos ahora la exposición de la normativa aplicable a la Inspección de Servicios Sanitarios, susceptible de enriquecer el objeto de la investigación, en lo relativo a funciones asignadas en la inspección de educación en nuestro sistema educativo. Véanse las tablas, de la 4.2.1. a la 4.2.3., con la yuxtaposición de funciones y atribuciones, en su caso, con la normativa en vigor.

Siguiendo el criterio funcional, las referencias normativas a las unidades de control e inspección, se expondrán literalmente, pero puntualizando el contexto de la norma y su objeto.

- Ley sobre Sanidad de 1855²⁷²

La Ley sobre Sanidad de 1855, fue publicada en la Gaceta de Madrid el 7 de diciembre por el Ministerio de la Gobernación, Julián de Huelbes, siendo Presidente del Consejo de Ministros Joaquín Baldomero Fernández-Espartero Álvarez de Toro, conocido como el General Espartero, durante el reinado de Isabel II, en el denominado como *Bienio Progresista*.

La ley consta de diecinueve capítulos, con cien artículos, dos artículos adicionales y un anexo con *la tarifa de los derechos de sanidad que se exigen en los puertos y lazaretos de España*. La singularidad de esta norma es que es la primera publicada en España en la que aparece la posibilidad de visita e inspección en determinados casos, aunque la unidad específica no se encontrara creada.

Capítulo II. Del Consejo de Sanidad.

*Art. 7º En casos inminentes de epidemia ó contagio, y siempre que el Gobierno lo acuerde por sí ó á propuesta del Consejo se girarán visitas ordinarias ó extraordinarias de inspección donde el bien público lo exija. Estas visitas serán desempeñadas por delegados facultativos del Gobierno, nombrados también á propuesta del Consejo*²⁷³.

Capítulo XVII. De los baños y aguas mineral.

Art. 96. Los establecimientos de aguas y baños minerales están bajo la inmediata inspección y dependencia del Ministerio de la Gobernación.

- Ley de 14 de diciembre de 1942, por la que se crea el seguro obligatorio de enfermedad²⁷⁴

La Ley de 14 de diciembre de 1942, por la que se crea el seguro obligatorio de enfermedad, es una norma de alto rango, publicada en el BOE el 27 de diciembre y rubricada por Francisco

²⁷² Ley sobre Sanidad (Gaceta de Madrid, núm. 1068, de 07/12/1855) Texto original en la url: <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1855/1068/A00001-00002.pdf> con acceso el 27 de junio de 2022.

²⁷³ Nótese que se establece la función, muy desdibujada al confundirse con las tareas básicas sanitarias, pero no se establece la configuración de una unidad permanente de inspección sanitaria.

²⁷⁴ Decreto de 11 de noviembre de 1943 por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley del Seguro de Enfermedad (Gaceta de Madrid de 27 de diciembre). Texto original en la url: <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1942/361/A10592-10597.pdf> con acceso el 2 de septiembre de 2021.

Franco. El impulso de esta ley se debe al Ministerio de la Gobernación, presidido por Blas Pérez González, en el que se encontraba integrada la Dirección General de Sanidad.

La ley se compone de nueve capítulos, con cuarenta y nueve artículos, una disposición adicional y seis disposiciones transitorias. El objetivo de la ley era, siguiendo una declaración del *Fuero del Trabajo*²⁷⁵, establecer un seguro total, con carácter obligatorio, en el que la inspección cobraba una especial importancia

Capítulo Octavo. Inspección del Seguro.

Artículo cuarenta y tres. — «La inspección del Seguro obligatorio de enfermedad, en cuanto se refiere a las obligaciones que impone a trabajadores y empresarios, será encomendada a los mismos órganos que tengan atribuida la de los demás seguros sociales.

Artículo cuarenta y cuatro. — La inspección de Servicios sanitarios será triple:

- a) La ejercida dentro de las instituciones que presten los servicios sanitarios con los facultativos que tengan a su cargo esta inspección.*
- b) La que el Instituto Nacional de Previsión organizará sobre éste como sobre todos los demás servicios del Seguro.*
- c) La que compete a los órganos oficiales de Sanidad.*

Artículo cuarenta y cinco. — La inspección de la gestión administrativa del Seguro obligatorio de enfermedad corresponde a los mismos órganos a los que la legislación general atribuye la inspección administrativa de los demás seguros sociales.

Artículo cuarenta y ocho. — Se incurrirá en sanción por los actos u omisiones que impliquen fraude o vulneren los derechos de los beneficiarios con incumplimiento del Régimen del Seguro obligatorio de enfermedad, o impidan, perturben o difieran el servicio de las inspecciones.

- Decreto de 11 de noviembre de 1943, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley del Seguro de Enfermedad²⁷⁶

El Decreto de 11 de noviembre de 1943, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley del Seguro de Enfermedad, fue publicada el 28 de noviembre; Es una norma de desarrollo de la Ley de 14 de diciembre de 1942, a tenor de lo establecido en su disposición transitoria tercera, e impulsado por los mismos actores.

El decreto se compone de siete títulos, con ciento setenta y siete artículos, dos disposiciones adicionales y dos disposiciones transitorias. Para el objeto de esta investigación es relevante el título sexto, dedicado a la inspección, en el que se desglosan tareas concretas a realizar en las inspecciones, con una singular capacidad ejecutiva.

²⁷⁵ El *Fuero del Trabajo*, fue una de las ocho leyes fundamentales promulgadas por Francisco Franco.

²⁷⁶ Decreto de 11 de noviembre de 1943 por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley del Seguro de Enfermedad (Gaceta de Madrid de 28 de noviembre). Texto original en la url: <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1943/332/A11427-11436.pdf> con acceso el 2 de septiembre de 2021.

Título VI. De la inspección

Capítulo Primero. Inspección del Seguro

Sección I. Sobre la gestión

Art. 159. La Inspección del Seguro Obligatorio de Enfermedad, en cuanto se refiere a las obligaciones que impone a trabajadores y empresarios, se realizará por los mismos Órganos que tengan atribuida la de los demás Seguros Sociales.

Art. 160. La inspección de la gestión administrativa de este Seguro corresponde a los mismos órganos a los que la legislación general atribuye la inspección administrativa de los demás Seguros Sociales.

Sección II. Sobre los Servicios Sanitarios

Art. 161. El Instituto Nacional de Previsión organizará la Inspección de Servicios Sanitarios del Seguro.

Art. 162. Los Inspectores de Servicios Sanitarios deberán poseer el título de Licenciados en Medicina y Cirugía.

Art. 163. Encuadrados en la Inspección de Servicios Sanitarios del seguro existirán Inspectores farmacéuticos, que deberán poseer el título de Licenciados en Farmacia.

Art. 164. Corresponde a la Inspección de Servicios Sanitarios del Seguro, además de las funciones que expresamente le están tribuidas en otros artículos de este Reglamento:

- a) Comprobar los partes de enfermedad y curación a los efectos del artículo siguiente.*
- b) Inspeccionar las prestaciones sanitarias.*
- c) Coadyuvar con el Médico del Seguro para que el enfermo cumpla las prescripciones de éste.*
- d) Inspeccionar el cumplimiento de los conciertos celebrados por el Instituto Nacional de Previsión con las Instituciones públicas o privadas en lo que se refiere a las prestaciones sanitarias.*
- e) Proponer al Seguro la adopción de medidas profilácticas e inspeccionar el cumplimiento de las que aquél acuerde.*
- f) Cooperar para que no se produzcan abusos por parte de los beneficiarios en la utilización de los servicios sanitarios.*
- g) Comprobar la eficacia y buena prestación del servicio farmacéutico e intervenir las recetas dispensadas, utilizando al efecto los farmacéuticos de la Inspección.*
- h) Cualquier otra función de inspección de los Servicios Sanitarios que le encomiende el Seguro.*

Art. 165. Los partes de enfermedad y curación dados por los médicos del Seguro tendrán el valor de bajas y altas, siempre que la Inspección no haya manifestado su oposición a los mismos.

Art. 166. La Inspección de Servicios Sanitarios del Seguro tendrá la facultad de decretar por sí misma altas de todos los beneficiarios, exclusivamente a los efectos de las prestaciones

económicas, cualquiera que sea el servicio que preste la asistencia. Contra esta resolución podrán reclamar los beneficiarios ante la Magistratura del Trabajo.

Art. 167. Los Médicos Inspectores del Seguro podrán solicitar cuantos informes precisen de los Médicos y especialistas de la Obra, quienes estarán Obligados a cumplimentar estas solicitudes.

Art. 168. Los Médicos que presten la asistencia extenderán los partes de enfermedad destinados a la Inspección de Servicios Sanitarios del Seguro, dentro de las primeras veinticuatro horas, expresando: el diagnóstico provisional, pronóstico e indicación de tratamiento, utilizando al efecto los modelos impresos del Seguro.

Tan pronto como sea formulado el diagnóstico definitivo, será notificado al Seguro, expresando la probable duración de la enfermedad. El diagnóstico definitivo deberá, figurar siempre en los partes de curación.

Art. 169. La Inspección de Servicios Sanitarios del Seguro utilizará para el cumplimiento de su misión un Cuerpo de Visitadores. La organización y funcionamiento de este Cuerpo será objeto de reglamentación especial.

Art. 170. Las enfermeras con título oficial, pertenecientes al Cuerpo de Visitadores, podrán desempeñar las funciones inherentes al referido título, a requerimiento de la Obra y con aprobación de la Inspección del Seguro.

Art. 171. Las discrepancias entre la Inspección, del Servicio. Sanitario del Seguro y los Médicos o Farmacéuticos que presten asistencia -a los beneficiarios serán resueltas por el Seguro. Contra estas resoluciones se dará recurso ante la Dirección General de Previsión.

Art. 172. Independientemente de la Inspección de Servicios Sanitarios del Seguro, las Instituciones que presten servicios sanitarios organizarán su propia inspección.

Art. 173. Compete a la Sanidad Nacional la Inspección. sobre el servicio Sanitario del Seguro en todo lo que esté regulado por las leyes generales sanitarias y sometido plenamente a su jurisdicción.

- Decreto 2605/1974, Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social²⁷⁷

El Decreto 2605/1974, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, es una norma de desarrollo, publicada el 24 de julio y promulgada por el Ministerio de Trabajo, bajo el titular, Vicepresidente Tercero y Ministro de Trabajo Licinio de la Fuente y de la Fuente.

Se compone de dos títulos, con ciento treinta y un artículos. El título segundo, dedicado al Régimen General de la Seguridad Social, es en el que se menciona la *inspección de servicios sanitarios*, aunque la norma afecta, en muchos ámbitos a la inspección de trabajo y seguridad social.

²⁷⁷ Decreto 2605/1974, de 30 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE de 20 de julio). Texto original en la url: <https://www.boe.es/boe/dias/1974/07/20/pdfs/A15081-15097.pdf> con acceso el 2 de septiembre de 2021.

Artículo 124. Inspección de los servicios sanitarios.

1. Sin perjuicio de las facultades propias de la Inspección de Trabajo, corresponde a la Entidad Gestora la inspección sobre la organización y funcionamiento de los servicios sanitarios propios o concertados, así como, en su caso, de los de las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo y de los empresarios.

2. Los inspectores médicos y farmacéuticos tendrán la consideración de autoridad pública en el ejercicio de tal función y recibirán de las autoridades y de sus agentes la colaboración y el auxilio que a aquélla se deben.

- Orden de 28 abril 1978, que aprueba el Estatuto de Personal del Instituto Nacional de Previsión²⁷⁸

La Orden de 28 abril 1978, por la que aprueba el Estatuto de Personal del Instituto Nacional de Previsión, en una norma de desarrollo publicada el 31 de mayo, e impulsada por el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, bajo la titularidad de Enrique Sánchez de León, en el gobierno de Adolfo Suárez González, tras las elecciones generales celebradas en junio de 1977.

La intención de esta orden era, tal y como se señala en la exposición de motivos:

La conveniencia de recoger en una sola disposición las modificaciones producidas desde que fue aprobado el Estatuto anterior, por Orden de 31 de octubre de 1970 y la necesidad de incorporar a su articulado determinados aspectos recogidos en los Estatutos de Personal de otras Entidades gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social aprobados con posterioridad.

La orden se compone de ciento tres artículos, organizados en diez capítulos, y catorce disposiciones transitorias. En la disposición aparece una nueva estructuración de los cuerpos y escalas sanitarias, con una mención a los médicos y farmacéuticos inspectores.

Capítulo II. De los Cuerpos de funcionarios del Instituto Nacional de Previsión

Sección 1.ª Cuerpos, escalas y categorías

Artículo 14. El personal de plantilla del Instituto Nacional de Previsión se integrará en los Cuerpos, Escalas y Categorías que a continuación se indican y por el «personal a extinguir».

Capítulo II. Cuerpos, escalas y categorías

II. Cuerpos Especiales

4. Cuerpo Sanitario, dividido en las siguientes Escalas:

a) Escala de Médicos Inspectores, compuesta por las siguientes categorías:

– Médicos-inspectores de 1.ª y 2.ª

b) Escala de Farmacéuticos Inspectores, compuesta de las siguientes categorías:

²⁷⁸ Orden de 28 de abril de 1978 por la que se aprueba el Estatuto de Personal del Instituto Nacional de Previsión (BOE de 31 de mayo). Texto original en la url:

<https://www.boe.es/boe/dias/1978/05/31/pdfs/A12541-12558.pdf> con acceso el 2 de septiembre de 2021.

– *Farmacéuticos-Inspectores de 1.ª y 2.ª*

c) *Escala de Ayudantes Técnicos Sanitarios Visitadores, con categoría única.*

Capítulo III. Selección

Art. 18. II. Cuerpos Especiales

4. Cuerpo Sanitario: Licenciado en Medicina para la Escala de Médicos-Inspectores, Licenciado en Farmacia para la de Farmacéuticos-Inspectores y título de Ayudante Técnico Sanitario para la de Ayudantes Técnicos Sanitarios Visitadores.

- Ley 14/1986, General de Sanidad²⁷⁹

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, es una norma de alto rango, promulgada por las Cortes Generales, como desarrollo del art. 43 de la Constitución Española de 1978. Sus actores principales fueron, Ernest Lluch Martín, como Ministro de Sanidad en la primera legislatura del gobierno socialista presidido por Felipe González.

La ley se compone de siete títulos, con ciento dieciséis artículos, diez disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, dos disposiciones derogatorias y dieciséis disposiciones finales. La singularidad de esta ley, en relación al objeto de esta investigación, es que, en el capítulo quinto del título primero, dedicado a *la intervención pública, en relación con la salud individual colectiva*, se establecen atribuciones de la inspección.

Título I. Del sistema de salud

Capítulo V. De la intervención pública en relación con la salud individual colectiva

Artículo treinta

1. Todos los Centros y establecimientos sanitarios, así como las actividades de promoción y publicidad, estarán sometidos a la inspección y control por las Administraciones Sanitarias competentes.

2. Los centros a que se refiere el artículo 66 de la presente Ley estarán, además, sometidos a la evaluación de sus actividades y funcionamiento, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 67, 88 y 89. En todo caso las condiciones que se establezcan serán análogas a las fijadas para los Centros públicos.

Artículo treinta y uno

1. El personal al servicio de las Administraciones Públicas que desarrolle las funciones de inspección, cuando ejerza tales funciones y acreditando si es preciso su identidad, estará autorizado para:

a) entrar libremente y sin previa notificación, en cualquier momento, en todo Centro o establecimiento sujeto a esta Ley,

b) proceder a las pruebas, investigaciones o exámenes necesarios para comprobar el cumplimiento de esta Ley y de las normas que se dicten para su desarrollo,

²⁷⁹ Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (BOE de 29 de abril). Texto consolidado en la url: <https://www.boe.es/buscar/pdf/1986/BOE-A-1986-10499-consolidado.pdf> con acceso el 2 de septiembre de 2021.

c) tomar o sacar muestras, en orden a la comprobación del cumplimiento de lo previsto en esta Ley y en las disposiciones para su desarrollo, y

d) realizar cuantas actuaciones sean precisas, en orden al cumplimiento de las funciones de inspección que desarrollen.

2. Como consecuencia de las actuaciones de inspección y control, las autoridades sanitarias competentes podrán ordenar la suspensión provisional, prohibición de las actividades y clausura definitiva de los Centros y establecimientos, por requerirlo la salud colectiva o por incumplimiento de los requisitos exigidos para su instalación y funcionamiento.

Título III. De la estructura del sistema sanitario público

Capítulo III. De las Áreas de Salud

Artículo sesenta y siete

5. Los hospitales privados vinculados con el Sistema Nacional de la Salud estarán sometidos a las mismas inspecciones y controles sanitarios, administrativos y económicos que los hospitales públicos, aplicando criterios homogéneos y previamente reglados.

Título IV. De las actividades sanitarias privadas

Capítulo II. De las Entidades Sanitarias

Artículo noventa y cuatro

1. Los hospitales privados vinculados en la oferta pública estarán sometidos a las mismas inspecciones y controles sanitarios, administrativos y económicos que los hospitales públicos.

2. La Administración Pública correspondiente ejercerá funciones de inspección sobre aspectos sanitarios, administrativos y económicos relativos a cada enfermo atendido por cuenta de la Administración Pública en los centros privados concertados.

- Circular 3/1999, de 30 de noviembre, de la Presidencia Ejecutiva del INSALUD, sobre Organización y Funciones de la Inspección Sanitaria²⁸⁰

La Circular 3/1999, de 30 de noviembre, de la Presidencia Ejecutiva del INSALUD, sobre Organización y Funciones de la Inspección Sanitaria, es una norma de bajo rango y de desarrollo, promulgada por la responsable de una unidad administrativa, que cobra especial relevancia, pues establece la estructura, la organización, las atribuciones y deberes de quienes ejerzan la función de la inspección sanitaria. Aunque su publicación fue anterior a que la Comunidad de Madrid asumiera competencias en materia sanitarias, sigue vigente en Madrid, ante la falta de desarrollo legislativo específico. Véanse las tablas 4.2.2. y 4.2.3.

²⁸⁰ Contenido de la Circular 3/1999 del INSALUD en la url:
<https://ingesa.sanidad.gob.es/en/bibliotecaPublicaciones/publicaciones/internet/docs/carteraInspec.c.pdf> con acceso el 18 de junio de 2022.

Se ha comprobado que esta circular es de aplicación en el ámbito autonómico, con carácter supletorio, tal y como establece el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid en su dictamen 388/11 de 13/07/2011²⁸¹.

I. Objeto.

La presente circular tiene por objeto sistematizar e integrar en una sola disposición las funciones básicas que corresponden a la Inspección Sanitaria del INSALUD, así como la ordenación precisa para el ejercicio efectivo y eficiente de tales funciones.

II. Estructura y composición.

La Inspección Sanitaria se organiza a través de una estructura central y de los correspondientes servicios periféricos, estando constituida por Médicos Inspectores, Farmacéuticos Inspectores y Enfermeros Subinspectores.

III. Organización de la estructura central.

1. La Subdirección General de Inspección Sanitaria, con dependencia directa de la Presidencia Ejecutiva, es la unidad a quien corresponde la inspección, evaluación y control de las prestaciones sanitarias, centros y servicios del INSALUD, teniendo atribuidas, por consiguiente, las competencias de dirección y coordinación de la Inspección Sanitaria.

2. La Subdirección General de Inspección Sanitaria se organiza en Inspección Médica, Inspección Farmacéutica e Inspección de Servicios, en los términos recogidos en las correspondientes Relaciones de Puestos de Trabajo. Igualmente dependerán de la Subdirección General los Equipos Territoriales de Inspección.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el punto anterior, y de acuerdo con los programas incluidos en los Planes de Inspección establecidos en cada momento, la Subdirección General de Inspección Sanitaria, propondrá a la Presidencia Ejecutiva las divisiones funcionales que considere necesarias para el mejor y más efectivo funcionamiento de la actividad inspectora.

4. Los responsables de los programas incluidos en los Planes de Inspección serán los encargados de establecer y coordinar los mecanismos necesarios para la correcta relación con los servicios periféricos, con el objetivo de lograr el cumplimiento del Plan Anual de Inspección.

IV. Organización De Los Servicios Periféricos.

1. En el ámbito periférico las actividades de la Inspección Sanitaria se desarrollarán por todas las Direcciones Territoriales y Provinciales, bajo la dirección del respectivo Director Territorial o Provincial, a través del Subdirector Provincial de Asistencia Sanitaria o del responsable de la unidad correspondiente.

2. La Inspección Sanitaria orientará sus actuaciones al desarrollo del trabajo por programas, adaptándolo a las necesidades de cada territorio con el doble objetivo de conseguir un funcionamiento más eficaz y eficiente de sus recursos y de favorecer la accesibilidad de los ciudadanos a los servicios prestados por la Inspección.

²⁸¹ Dictamen en la url:

<https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/dictamenes/2019/dictamen388-11.pdf> con acceso el 20 de junio de 2022.

3. Las Direcciones Territoriales o Provinciales, a los efectos señalados en el punto anterior, podrán proponer a la Subdirección General de Inspección Sanitaria la ordenación funcional de sus recursos dentro de su Comunidad Autónoma o provincia.

4. Las Direcciones Territoriales o Provinciales facilitarán a la Inspección Sanitaria el apoyo administrativo necesario para el adecuado ejercicio de sus funciones.

V. Atribuciones en el desarrollo de la función Inspectora:

Los inspectores médicos y farmacéuticos tendrán la consideración de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones y recibirán de las autoridades y de sus agentes la colaboración y el auxilio que a aquélla se deben, de conformidad con lo establecido en el artículo 124.2 del Decreto 2065/74 de 30 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Los enfermeros subinspectores en el ejercicio de sus funciones actuarán como agentes de la autoridad cuando así venga establecido expresamente por Ley.

Los responsables de los centros, servicios y establecimientos sanitarios del INSALUD, así como el personal que preste sus servicios en los mismos, deberán proporcionar a la Inspección Sanitaria el auxilio y la colaboración que requieran para el ejercicio de sus funciones, incluyendo el libre acceso tanto a la información y documentación como a sus dependencias e instalaciones.

La Asesoría Jurídica del INSALUD prestará a los miembros de la Inspección Sanitaria la asistencia jurídica precisa cuando, como consecuencia del ejercicio de su actuación, sean objeto de citaciones por algún órgano jurisdiccional, en los términos previstos en la Circular 9/91, de 17 de junio, sobre normas de actuación de las asesorías jurídicas del INSALUD ante las diferentes Jurisdicciones.

La Inspección Sanitaria, a través de la Subdirección General, podrá recabar la colaboración del Grupo de Investigación de la Seguridad Social cuando, en el curso de la actividad inspectora, se detecten hechos que sean competencia del ámbito de actuación de dicho Grupo. Del mismo modo, se prestará a dicha unidad policial el auxilio y asesoramiento técnico necesario en las investigaciones que realicen.

Cuando la naturaleza de una determinada inspección requiera asesoramiento especializado, la Inspección Sanitaria del INSALUD podrá solicitarlo tanto a las Instituciones y Servicios propios, como a Instituciones, Organismos Profesionales, Sociedades o Asociaciones Científicas directamente relacionadas con la naturaleza de dicho asunto.

En todo caso, cuando se precise asesoramiento de una Entidad ajena al INSALUD, éste se solicitará a través de los responsables territoriales o provinciales.

El INSALUD proveerá al personal que ejerza actividades inspectoras de un documento de identificación que le acredite para el desempeño de sus funciones.

VI. Deberes.

1. Los miembros de la Inspección Sanitaria, en su condición de funcionarios públicos, servirán con objetividad los intereses generales de la Administración Pública, observando en el ejercicio de sus funciones el debido respeto y consideración a los interesados.

2. El personal que desempeñe puestos de trabajo en las unidades de la Inspección deberá guardar el debido sigilo y confidencialidad, respecto a los asuntos que conozcan en el desempeño de sus funciones. Cuando se trate de datos y documentos contenidos en las

historias clínicas de los pacientes, deberá guardarse secreto profesional y quedará plenamente garantizado el derecho de aquéllos a su intimidad personal y familiar, de conformidad con lo señalado en el art. 61 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

3. Los datos o informes obtenidos en el ejercicio de la función inspectora, sólo podrán utilizarse para los fines asignados a la misma y, en su caso, para la correspondiente denuncia de hechos que puedan ser considerados constitutivos de infracción.

4. Cuando, en el ejercicio de sus funciones, los miembros de la Inspección Sanitaria aprecien que los hechos pudieran ser susceptibles de infracción, lo pondrán en conocimiento de su superior jerárquico, el cual, si procede, remitirá lo actuado al órgano competente para la iniciación del oportuno procedimiento. En los supuestos de posible infracción en materia penal, y con carácter previo a su comunicación a la jurisdicción competente o al ministerio fiscal, se realizará consulta a la Asesoría Jurídica.

VII. Formación Y Promoción Profesional.

1. La Subdirección General de Inspección Sanitaria promoverá la formación continuada de los miembros de la Inspección, los cuales participaran regularmente en las actividades de formación que a tal fin se organicen.

2. La Subdirección General de Inspección Sanitaria analizará las necesidades formativas y propondrá a la Dirección General de Recursos Humanos las acciones que en esta materia consideren necesarias, para su inclusión, si procede, en el Plan de Formación. Asimismo colaborará con dicha Dirección General en el seguimiento y evaluación de estos programas formativos.

3. La experiencia en el ejercicio de sus funciones, así como los cursos de formación que se determinen, se tendrá en consideración para la promoción profesional en los términos que se establezcan en las correspondientes bases de convocatorias para la provisión de puestos de trabajo.

VIII. Ejercicio de la función Inspectora.

1. Las actuaciones inspectoras se realizarán por los funcionarios que desempeñen los puestos de trabajo propios de la Inspección Sanitaria.

2. La Inspección Sanitaria ejercerá todas las funciones que tenga atribuidas en la legislación vigente, así como cuantas actuaciones, incluidas las consultivas y de asesoría, les sean encomendadas por los órganos de quien dependan.

3. Los médicos y farmacéuticos realizarán las funciones inspectoras, ejerciendo de forma exclusiva aquellas que por disposición legal o titulación académica así esté establecido.

4. Los enfermeros subinspectores en sus actuaciones y en el ámbito de sus competencias tendrán las funciones inspectoras de apoyo, gestión y colaboración con los inspectores médicos y farmacéuticos.

IX. Descripción De Las Funciones.

Sin perjuicio de las competencias atribuidas en el Real Decreto 1893/1996, a los Centros Directivos del INSALUD, y específicamente a la Dirección General de Atención Primaria y Especializada, corresponde a la Inspección Sanitaria, en el marco señalado en el punto anterior, el ejercicio de las funciones que se resumen a continuación.

1. Evaluación de Centros y Servicios Sanitarios.

1.1. La inspección y evaluación de todos los centros y servicios sanitarios del INSALUD con independencia de la forma jurídica que tengan establecida.

1.2. En el ejercicio de sus competencias, la Inspección Sanitaria actuará con total independencia de la Dirección del Centro Sanitario. No obstante, se propiciará la necesaria colaboración entre los diferentes órganos para el mejor cumplimiento de sus funciones.

2. Actuaciones de acreditación.

La realización de los informes necesarios para los procedimientos de acreditación y homologación que le sean encomendados por los órganos competentes del INSALUD.

3. Centros y Servicios Concertados.

3.1. La inspección, seguimiento, evaluación y elaboración de informes técnicos sobre concertación de centros y servicios sanitarios que les sean encomendados por los órganos competentes del INSALUD.

3.2. En los supuestos normativamente establecidos, la Inspección Sanitaria, tendrá la capacidad de derivar pacientes a Centros y Servicios concertados o contratados, en los términos previstos en los respectivos conciertos y dentro de los límites presupuestarios establecidos para los mismos.

4. Procedimientos disciplinarios y sancionadores.

4.1. La realización de actas e informes en los procedimientos disciplinarios y sancionadores.

4.2. En relación con el personal al servicio de las Instituciones Sanitarias los miembros de la Inspección realizarán las informaciones previas y expedientes que le correspondan en aplicación de los estatutos y demás normativa vigente.

4.3. Asimismo, llevará a cabo la tramitación de las actuaciones disciplinarias y sancionadoras que le correspondan sobre las Entidades, Establecimientos, Centros y Servicios responsables de la fabricación, distribución y dispensación, de medicamentos y de efectos y accesorios por actos relacionados con la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. Dichas actuaciones disciplinarias y sancionadoras se regirán por lo establecido en los Reales Decretos 946/78 de 14 de abril, Real Decreto 1410/77, de 17 de junio, y Real Decreto 9/1996, de 15 de enero.

5. Prestaciones Sanitarias.

De acuerdo con el Real Decreto 1893/96, de 2 de agosto, en el ámbito central, y el Real Decreto 702/98, de 24 de abril, en el ámbito periférico, corresponde a la Subdirección General de Inspección Sanitaria y a las Direcciones Provinciales, respectivamente, la evaluación y el control de las prestaciones sanitarias reconocidas en la normativa vigente. El ejercicio de estas funciones se realizará fundamentalmente a través de los miembros de la Inspección Sanitaria.

6. Prestación Farmacéutica.

6.1. La inspección, y control de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, en todos los ámbitos de su desarrollo, procesos administrativos, prescripción médica y servicios farmacéuticos.

6.2. La colaboración en la promoción y asesoramiento del programa del uso racional del medicamento desarrollado en las estructuras de Atención Primaria y Especializada

6.3. La evaluación de la utilización de medicamentos y productos sanitarios, con especial referencia al gasto farmacéutico.

6.4. El asesoramiento técnico en la suscripción y en el seguimiento de los conciertos y los contratos suscritos entre el INSALUD y cualquier otro organismo, institución o corporación, en lo relacionado con la prestación farmacéutica.

6.5. El asesoramiento en materia de procedimiento y actuaciones para una adecuada utilización de los recursos destinados a la prestación farmacéutica.

7. Incapacidad Temporal y Permanente.

7.1. La evaluación, gestión y control de la prestación por Incapacidad Temporal.

7.2. En el ejercicio de esta función, y en el marco establecido en la normativa interna del INSALUD que regula esta materia, la Inspección Sanitaria:

a. Podrá solicitar los informes, exploraciones y juicios clínicos precisos para el mejor cumplimiento de su función, pudiendo recomendar excepcionalmente la realización de los mismos con carácter preferente, respetando el principio de equidad en el acceso a las prestaciones.

b. Decretará el alta médica, previa las actuaciones que estime procedentes, en cumplimiento de la legislación vigente.

c. Colaborará con los profesionales y las Gerencias de Atención Primaria, mediante la evaluación, el asesoramiento, la información y la formación en la gestión y el control de la prestación.

7.3. La Inspección Sanitaria efectuará la propuesta de la situación de Incapacidad Permanente y participará en los Equipos de Valoración de Incapacidades en la forma legalmente prevista.

8. Salud Laboral.

8.1. La emisión de cuantos informes sean solicitados al INSALUD por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en relación con la creación, supresión, modificación y/o concertación de servicios sanitarios y recuperadores de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional de la Seguridad Social.

8.2. La realización de los informes, de carácter sanitario, que sean solicitados al INSALUD, en relación con las empresas colaboradoras.

8.3. La elaboración de los informes para la autorización y el control de la prestación médico -farmacéutica para los servicios de prevención que reúnan los requisitos legalmente establecidos para llevar a cabo tal prestación.

8.4. La colaboración con el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en el control periódico de los sistemas de prevención de las Instituciones Sanitarias del INSALUD, a través de auditorías o evaluaciones.

8.5. La inspección, evaluación y asesoramiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional de la Seguridad Social y de las empresas colaboradoras en el ámbito de gestión del INSALUD.

9. Responsabilidad Sanitaria.

9.1. Realizará los informes técnicos necesarios para la gestión del aseguramiento de la responsabilidad civil del INSALUD y elaborará los informes que le sean solicitados, en relación con los expedientes de Responsabilidad Patrimonial.

9.2. Los miembros de la Inspección Sanitaria del INSALUD, cuando actúen como Gestores de Riesgos Sanitarios, serán los encargados de la identificación, evaluación y tratamiento de los mismos, incluyendo las actividades de formación e información de los profesionales que sean necesarias en esta materia.

10. Reintegro de Gastos.

Emitirá los informes técnicos necesarios para la resolución de los expedientes de Reintegro de Gastos por prestaciones sanitarias recibidas fuera del dispositivo asistencial del Sistema Nacional de Salud.

11. Atención a los usuarios.

Evaluará el ejercicio y la efectividad de los derechos y deberes de los usuarios, proponiendo las medidas que se consideren oportunas para el cumplimiento de los mismos.

12. Confidencialidad de bases de datos sanitarios.

La evaluación del cumplimiento de las medidas establecidas para garantizar la confidencialidad de las bases de datos de carácter sanitario cuya gestión corresponde al INSALUD.

13. Otras funciones.

La Inspección Sanitaria realizará cualquier otra función que, en materia de evaluación, inspección, control y asesoramiento sanitario le sea encomendada por los órganos competentes, así como cualesquiera otras funciones que en lo sucesivo le pudieran encomendar las disposiciones legales y administrativas que se dictaran por las autoridades competentes.

X. Plan Anual de Inspección.

1. Las actuaciones de la Inspección Sanitaria se desarrollarán con criterios de planificación mediante la elaboración, con carácter anual, de un Plan de Inspección, que establecerá la programación y las actuaciones que se consideren necesarias para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

2. El Plan será aprobado, a propuesta de la Subdirección General de Inspección Sanitaria, mediante Resolución de la Presidencia Ejecutiva del INSALUD, siendo comunicado a las distintas Direcciones Territoriales y/o Provincia les para su difusión en su ámbito territorial.

3. Las Direcciones Territoriales y/o Provinciales deberán realizar informes que reflejarán la evaluación periódica del cumplimiento de los objetivos previamente establecidos y las medidas adoptadas para su consecución.

4. La Subdirección General de Inspección Sanitaria realizará, con carácter anual, la evaluación general del cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan.

5. Con el objetivo de establecer una adecuada planificación y programación, de la función inspectora, la Subdirección General de Inspección Sanitaria realizará estudios en orden a determinar, para cada actividad básica, su estándar de duración y sus criterios de calidad.

XI. Inspección de servicios.

Con independencia del ejercicio de las funciones de la Inspección Sanitaria, recogidas en la presente Circular, y dependiendo de la Subdirección General de Inspección Sanitaria, la Inspección de Servicios desarrollará las funciones de inspección, auditoría y control económico-administrativo y procedimental de los centros y servicios del INSALUD.

En el ejercicio de estas funciones la Inspección de servicios actuará de forma coordinada con la Inspección Sanitaria.

Igualmente corresponderá a la Inspección de Servicios el asesoramiento a los órganos de dirección en materia de ordenación y procedimientos administrativos

- Real Decreto 1479/2001, de 27 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad de Madrid de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud²⁸².

Se menciona específicamente el Real Decreto 1479/2001, de 27 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad de Madrid de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud, publicado en el BOE el 28 de diciembre, por la singularidad, de alguna forma análoga a la acontecida en el traspaso de funciones y servicios en materia de enseñanza no universitaria, a la Comunidad de Madrid, por RD 926/1999. la enseñanza.

El RD 1479/2001 publica en acuerdo sobre traspaso a la Comunidad de Madrid de las funciones y servicios del Instituto Nacional de Salud. En su anexo se especifica:

B) Funciones que asume la Comunidad Autónoma e identificación de los servicios que se traspasan.

f) Las funciones de gestión que realiza el Instituto Nacional de la Salud a través de sus servicios centrales, en cuanto se refiere al territorio de la Comunidad de Madrid y, entre ellas, la inspección de servicios y la gestión de las prestaciones sanitarias de la Seguridad Social facilitadas por el Sistema Nacional de Salud.

C) Competencias, servicios y funciones que se reserva la Administración del Estado.

b) El ejercicio de la alta inspección, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y en los términos previstos en el artículo 43 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

También es significativo señalar que en el suplemento del RD 1479/2001²⁸³ aparece la estructura y el nombre de los funcionarios inspectores de servicios sanitarios traspasados.

²⁸² Real Decreto 1479/2001, de 27 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad de Madrid de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud (BOE de 28 de diciembre). Texto original en la url: <https://www.boe.es/boe/dias/2001/12/28/pdfs/A50033-50038.pdf> con acceso el 2 de septiembre de 2021.

²⁸³ Se puede acceder al suplemento en la url: <https://www.boe.es/boe/dias/2001/12/28/pdfs/H00001-03935.pdf>

- Ley 41/2002, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica²⁸⁴

La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, es una norma de alto rango, publicada en el BOE el 15 de noviembre de 2002. Sus actores fundamentales fueron la Ministra de Sanidad y Consumo, Ana M^a Pastor Julián, en el segundo gobierno de José M^a Aznar López, del PP.

Esta ley se compone de seis capítulos, con veintitrés artículos, seis disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y una disposición final. La singularidad de esta disposición, con carácter de norma básica conforme al art. 149.1.1.ª de la Constitución Española de 1978 y de aplicación en la Comunidad de Madrid, radica en la atribución que concede a la inspección de acceso a las historias clínicas.

Capítulo V. La historia clínica

Artículo 16. Usos de la historia clínica.

(.../...)

5. El personal sanitario debidamente acreditado que ejerza funciones de inspección, evaluación, acreditación y planificación, tiene acceso a las historias clínicas en el cumplimiento de sus funciones de comprobación de la calidad de la asistencia, el respeto de los derechos del paciente o cualquier otra obligación del centro en relación con los pacientes y usuarios o la propia Administración sanitaria.

6. El personal que accede a los datos de la historia clínica en el ejercicio de sus funciones queda sujeto al deber de secreto.

7. Las Comunidades Autónomas regularán el procedimiento para que quede constancia del acceso a la historia clínica y de su uso.

Competencias.

Corresponde a la Dirección General Inspección y Ordenación Sanitaria, con carácter general, el ejercicio de las funciones a que se refiere el artículo 47 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, y en particular:

a) El análisis, propuesta y desarrollo de las actuaciones que se realicen en relación con la ordenación sanitaria y farmacéutica.

b) La ejecución y seguimiento de las actuaciones en materia de autorización, acreditación, evaluación e inspección del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid.

c) La vigilancia del cumplimiento de la legislación sobre productos farmacéuticos, sanitarios y cosméticos.

d) La acreditación y evaluación sanitaria de los centros y servicios que conforman el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid.

²⁸⁴ Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica (BOE de 15 de noviembre). Texto consolidado en la url: <https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-22188-consolidado.pdf> con acceso el 3 de septiembre de 2021.

e) La tramitación y, en su caso, el otorgamiento de las autorizaciones administrativas, declaraciones responsables y comunicaciones para la instalación, funcionamiento, modificación y cierre de centros, servicios y establecimientos sanitarios, públicos y privados, de cualquier clase o naturaleza, ubicados en la Comunidad de Madrid.

f) El mantenimiento, actualización, organización y gestión de los registros de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Comunidad de Madrid.

g) La elaboración y seguimiento del Plan Anual de Inspección.

h) Las facultades inspectoras en materia sanitaria y farmacéutica, así como la evaluación, inspección y seguimiento de las prestaciones del sistema de seguridad social, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación aplicable.

i) El control de la publicidad médico-sanitaria, así como la evaluación, control y, en su caso, autorización de los soportes válidos y publicidad de medicamentos y productos sanitarios en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

j) La relación con las mutuas colaboradoras en la gestión del sistema de Seguridad Social.

k) La dirección y coordinación de las actividades de farmacovigilancia y vigilancia de productos sanitarios.

l) El ejercicio de la potestad sancionadora en relación con las materias propias de su competencia.

m) Aquellas otras que, en relación con las materias competencia de la dirección general, pudieran derivarse de la normativa aplicable.

4.3. La Inspección de Hacienda

Procedemos ahora a iniciar el estudio comparado disciplinar con la Inspección de Hacienda contando con la fortuna de que la bibliografía es más amplia que la encontrada hasta ahora con el resto de estudios comparados disciplinares.

La relativa abundancia de la documentación se debe, nuevamente, al interés y al impulso, en este caso, de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE)²⁸⁵ que se constituyó como sindicato en el año 2003 y que fusionó a las asociaciones de inspectores de Hacienda del Estado y de inspectores de Aduanas. Además, también hemos realizado una abundante búsqueda informativa en la multitud de academias que preparan oposiciones de acceso a los distintos cuerpos de funcionarios de Hacienda, y especialmente al Cuerpo de Inspectores de Hacienda.

De la bibliografía a la que se ha tenido acceso, y que custodian y distribuyen con excesivo celo, pues se suele utilizar para la formación y preparación de distintos procesos selectivos, es necesario mencionar, por una parte, los escritos de Pan-Montojo (2002, 2007a, 2007b, 2016), y sobre todo la obra de la que fue coordinador, *Los inspectores de hacienda en España una mirada histórica* (2007), en la que participaron Pro (2007), García (2007), Toboso (2007) y Comín (2007) entre otros, junto a los interesantes escritos de Fuentes Quintana (1990), de Albiñana García-Quintana (1974, 1981, 1985, 1993, 2003), los documentos editados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)²⁸⁶ y algún documento divulgativo de academias de preparación de oposiciones para inspectores de hacienda.

4.3.1. Acercamiento a la historia y estructura de la Inspección de Hacienda en España

Tal y como relata Pro (2007) cuando España se introducía en la transición social y política, las autoridades tributarias iniciaron un proceso de modernización del sistema tributario, a semejanza de los europeos, para adaptarlo a la nueva realidad nacional. Una de los primeros pasos que se dieron fue la aprobación del Real Decreto Ley 40/1977, de 7 de septiembre, que reorganizaba la Inspección Financiera y Tributaria²⁸⁷, y que, en su disposición final cuarta, creó el cuerpo especial de inspectores financieros y tributarios, que sustituía a los cuatro cuerpos precedentes con competencia en materia tributaria.

Pro (2007) encuentra las raíces históricas o los precedentes funcionales de la Inspección de Hacienda en la labor de los inspectores en los empleos de los que los monarcas se sirvieron desde tiempos remotos para descubrir a quienes trataban de eludir el peso de los impuestos y obligarles a asumir sus obligaciones fiscales (veedores, visitadores, contadores...). Pero finalmente concluye que, dado que los siglos anteriores a la revolución liberal eran tan distintos

²⁸⁵ Se puede ampliar la información en la página web de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado –IHE– en la url: <https://www.inspectoresdehacienda.org/> con acceso el 8 de junio de 2022.

²⁸⁶ Se puede acceder al actual portal web de la Agencia Tributaria en la url: <https://sede.agenciatributaria.gob.es/> y al portal institucional del Ministerio de Hacienda y Función Pública en la url: <https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx> con sendos accesos el 8 de junio de 2022.

²⁸⁷ Se puede tener acceso al texto original del Real Decreto-ley 40/1977, de 7 de septiembre, por el que se reorganiza la Inspección Financiera y Tributaria (BOE de 12 de septiembre), en la url: <https://www.boe.es/boe/dias/1977/09/12/pdfs/A20444-20445.pdf> con acceso el 6 de septiembre de 2021.

de los actuales los conceptos que se tenían de la relación entre los individuos y el poder político, de la obligación de contribuir, e incluso, de la contribución misma, la idea de inspección no podía tan siquiera ser concebida antes del siglo XIX²⁸⁸.

De esta forma, la aparición de la inspección tributaria manifestaba la voluntad de hacer realidad los principios sobre los que se asienta la convivencia de las sociedades modernas. Por ello debemos comenzar la historia de las unidades de control e inspección tributario o de hacienda en el momento en que la Revolución Francesa puso en crisis a la monarquía absoluta del antiguo régimen y se inició un proceso que llevaría a la modernidad bajo la forma de un modelo liberal de Estado, economía y sociedad.

En España, como en el resto de los países de su entorno, ese paso a la modernidad se produjo entre finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX alrededor al liberalismo; plasmando unos principios, después de un proceso revolucionario más o menos largo, en un texto constitucional. Las constituciones, como verdaderos contratos sociales que impulsaron la creación de las naciones contemporáneas, exponían como eje fundamental la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, así como de seguridad, garantías, derechos y libertades individuales. Llevados al terreno de la fiscalidad, esos elementos suponían la liquidación de la arbitrariedad y los privilegios que habían caracterizado al antiguo régimen, pero con una clara consecuencia: bajo el régimen constitucional la carga fiscal debía repartirse equitativamente, sin distinción de estamentos o territorios, y contribuyendo a cada ciudadano *en proporción a sus facultades*²⁸⁹.

La obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado debía suponer entonces con la implantación de garantías sobre el control de esos gastos y sobre la previsión de los impuestos, mediante un presupuesto anual, por el que las Cortes regularán la carga fiscal y las condiciones para su recaudación. Todo ello, en la medida en que el diseño ideal de nación que se dibujaba en la Constitución, se hiciera realidad gradualmente mediante la construcción de un Estado. Poco a poco, las instituciones constitucionales se fueron desarrollando y asentando, fortaleciéndose para hacer cumplir la ley en todo el territorio, hasta vencer las resistencias que la tradición y el privilegio oponían al proyecto de una nación de ciudadanos prósperos, libres e iguales. Pro (2007) considera acertadamente que la Constitución del Estado nacional recorre toda la historia del siglo XIX en España, supone en el terreno fiscal, en la definición de una Hacienda Pública -distinta de la Real Hacienda del antiguo régimen-, capaz de gestionar las finanzas del Estado con arreglo a los principios de suficiencia y equidad.

Esta historia de la Revolución Liberal en España -desde la invasión francesa de 1808 hasta el final de la Primera Guerra Carlista en 1840, o incluso hasta la restauración borbónica de 1874- hizo que la implantación de un modelo de Estado y de sociedad se pospusiera durante décadas, atravesando periodos de ensayos y conflictos. En el terreno fiscal, la creación de una Hacienda liberal no se abordó hasta la década de 1840, cuando fueron abolidos los diezmos y primicias (poniendo fin a la existencia de una Hacienda eclesiástica paralela a la del Estado); momento en que se aprobó la reforma tributaria de 1845 (que diseñaba un nuevo sistema de contribuciones, inspiradas en los principios del liberalismo moderado) y se desplegaron por el territorio las instituciones que materializaban la Hacienda Pública y la ponían en contacto directo con el ciudadano-contribuyente. La reforma de 1845, obra del ministro Alejandro Mon y de su asesor Ramón Santillán- implantó ese sistema nacional de Hacienda inspirado en los principios liberales

²⁸⁸ Nos resulta interesante esta reflexión, que podríamos replicar con relación a la Inspección de Educación, al circunscribirla a los momentos en que la educación se conforma como un derecho de los estados modernos y se generaliza la escolarización.

²⁸⁹ Ese es el principio constitucional que, citado por Pro (2007), aparece en el art. 339 de la Constitución de 1812 y en el art. 6 de la Constitución de 1837.

que se llevaba persiguiendo desde 35 años antes; y lo hizo arraigar con tal fuerza que constituyó el diseño básico de la tributación en España hasta más de cien años después.

Pro (2007) considera que, en ese contexto tributario, la idea de inspección tenía poco sentido era raramente mencionada. Incluso el concepto de defraudación fiscal tenía un sentido muy diferente del que habría de alcanzar en el siglo XX. En su lugar se hablaba más bien de *ocultación*, para referirse a la omisión o la rebaja de los datos sobre la riqueza imponible que se hacía para evadir la carga de las contribuciones directas; y esta práctica, que llegó a ser generalizada en la segunda mitad del siglo, apenas era perseguida, castigada o ni tan siquiera condenada moralmente. Puesto que, según la lógica de los impuestos de cupo²⁹⁰, utilizado en ese momento, el Estado recaudaba las cantidades previstas cada año, la ocultación de superficies, calidades, rendimientos o actividades llegó a consentirse como parte de la racionalidad de los agentes económicos, ignorando el efecto que tenía sobre la desigualdad social. Por otro lado, la facilidad de unas contribuciones tan ligeras y fáciles de evadir para los ricos y poderosos, como sencillas de recaudar para la administración, hizo que enraizaran en las costumbres de los españoles, estableciendo un límite severo al crecimiento de los ingresos del Estado (por lo que se denominó en la época la *petrificación* de las bases tributarias). Cimentados la Hacienda y los contribuyentes en este pacto tácito, los cupos tributarios se congelaron y quedaron gradualmente desfasados del crecimiento económico de la nación, condenando al Estado a una situación de déficit permanente, de continuo endeudamiento y de incapacidad financiera para transformar la realidad del país. A pesar de los múltiples efectos negativos de las prácticas fiscales instaladas desde mediados del siglo XIX, el sistema demostró una gran capacidad de permanencia, ofreciendo resistencia tenaz durante más de un siglo a todos los intentos de reforma de la fiscalidad²⁹¹.

En 1845, al tiempo que se reformaba el sistema tributario, se reorganizó el Ministerio y se dieron nuevas instrucciones. El Ministerio se estructuró en cuatro direcciones generales (de Contribuciones Directas, de Contribuciones Indirectas, de Rentas Estancadas y de Aduanas y Aranceles) y se extendió por el territorio mediante unas administraciones provinciales de Hacienda. La institucionalización de la nueva Hacienda Pública se hizo palpable dotando al Ministerio de una sede propia amplia y representativa, en la llamada Casa de la Aduana²⁹², edificio del siglo XVIII situado en el comienzo de la calle de Alcalá en Madrid; se trasladaba de esta forma las oficinas centrales de Hacienda de la sede que compartía con otros ministerios, en el entorno del Palacio Real.

²⁹⁰ Los impuestos de cupo, en contra de los impuestos de cuota, fija primero el monto a cubrir por los contribuyentes, y según ese monto se establece la alícuota que se pagará.

Fuente extraída en el Trabajo en opción al Grado de Diplomado en Educación Superior: *Diseño Curricular de la Asignatura Impuestos y Tasas Carrera de Administración Financiera* de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca en Sucre, Bolivia (2003) en la url: http://www.usfx.bo/nueva/Cepi/466_Tesis%20Editadas%20CEPI/189_Diplomado/173_EDUCACION%20SUPERIOR/DISE%20D1O%20CURRICULAR%20DE%20LA%20ASIGNATURA%20IMPUESTOS%20Y%20TASAS/DISE%20D1O1.pdf con acceso el 8 de junio de 2022.

²⁹¹ En este apartado Pro (2007) cita a Fuentes Quintana, E., & Comín, F. (1990).

²⁹² Se puede ampliar información sobre la Real casa de Aduanas en un interesante documento puesto a disposición por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en la url: <https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/SGT/VISITA%20CASA%20DE%20ADUANAS/02-EL%20EDIFICIO%20DE%20LA%20REAL%20CASA%20DE%20LA%20ADUANA-BAJA.pdf>, con acceso en 8 de junio de 2022.

Pro (2007) prosigue que, el paso por el Ministerio de Hacienda de Juan Bravo Murillo entre 1849 y 1852, vino a cerrar el ciclo de las reformas de la hacienda, consolidando y completando el sistema hacendístico liberal conservador del Estado Español²⁹³. Se organizaron los servicios centrales del Ministerio, refundiendo sus negociados bajo ocho Direcciones Generales, incluida una Dirección General de lo Contencioso especializada en la defensa de los intereses de la Hacienda Pública ante los tribunales de justicia. Se unificó el archivo del Ministerio y se dotó a este de un *Boletín*²⁹⁴. Se procedió a la reorganización de la deuda pública, que evitó que siguiera absorbiendo gran parte de los recursos fiscales que generaba el Estado. Se estableció un concordato con la Santa Sede, que hizo irreversible la desamortización del patrimonio eclesiástico; y se adoptó un sistema de contabilidad de la Hacienda Pública, que estableció los mecanismos formales necesarios para someter a toda la Administración del Estado a una disciplina contable y financiera, imponiendo el sometimiento al presupuesto y la elaboración regular de cuentas públicas que pudiera controlar el Tribunal de Cuentas. La reforma hizo realidad la aspiración liberal de la unidad de caja de las administraciones públicas, haciendo nacer el Tesoro Público y sometiendo todo el movimiento financiero a la Intervención General del Estado punto.

Fuera de la capital, la acción del Ministerio se forjaba sobre el territorio por medio de una estructura organizada desde tiempos de la monarquía absoluta alrededor de los intendentes. Con la nueva división provincial de 1833, la red de los intendentes se adaptó al nuevo mapa de cuarenta y nueve provincias. En cada capital, el intendente tenía bajo su mando una Administración Provincial de Hacienda formada por un administrador, un tesorero, una sección de contabilidad, oficiales inspectores y recaudadores. La estructura de los partidos judiciales se utilizaba para subdividir las provincias también a efectos hacendísticos, distribuyendo así por el territorio a los subdelegados de Hacienda, administradores de partido y depositarios; Y en el nivel más bajo de esa estructura se encontraban los administradores subalternos, verederos y estanqueros.

Pro (2007) continúa que con el objetivo de conseguir la máxima simplificación y centralización de la administración provincial, en 1849 la red eliminó las viejas intendencias, y traspasó sus competencias hacendísticas a los gobernadores provinciales. Los nuevos gobernadores, herederos de los antiguos jefes políticos, eran considerados como delegados del Ministerio de la Gobernación para el mantenimiento del orden público en las provincias, función a la que añadían las tareas como representantes del Gobierno en el territorio. En materia de Hacienda, Bravo Murillo quiso que la misión del gobernador se limitara a la supervisión sobre unas Administraciones Provinciales de Rentas que eran quienes de hecho dirigían la administración hacendística en las provincias; de ese modo esperaba evitar que los temas hacendísticos

²⁹³ Juan Bravo Murillo ejerció como Ministro de Hacienda del 19 de agosto, al 29 de noviembre de 1850. Nótese el carácter renovador de Bravo Murillo que poco antes había establecido el Cuerpo de Inspectores de Educación, siendo Ministro de Fomento.

²⁹⁴ El Boletín Oficial de Economía y de Hacienda (BOMEH) es el medio de expresión que, desde 1850, se utiliza para difundir entre todos sus empleados, así como entre los obligados tributarios y ciudadanos, todas las disposiciones, resoluciones, circulares y demás normas reglamentarias de carácter general que puedan estar relacionadas de manera plena o parcial, con las materias que tienen que ver con la administración económica o tributaria y son competencia de los departamentos editores, con independencia de que emanen de estos, de la Unión Europea, los restantes órganos que integran el Gobierno de España, o las Comunidades Autónomas. Aparece el lunes de cada semana, si es día hábil; o al día siguiente inmediato en caso de que el día habitual de publicación coincida con una festividad nacional.

Fuente en la url: <https://www.normadoc.gob.es/es-es/bomeh/default.aspx>, con acceso el 8 de junio de 2022.

quedarán abandonados por unos gobiernos provinciales saturados de competencias y poco preparados técnicamente. Un aspecto importante de la remodelación de Bravo Murillo fue la creación de los visitadores y de los inspectores de aduanas: embrión de los servicios de control e inspección fiscal, que nació, de esta forma, adscrito a los gobiernos provinciales a través de las administraciones de rentas.

A pesar de los intensos vaivenes políticos del bienio progresista y del sexenio revolucionario, el esquema administrativo de la Hacienda Pública experimentó pocos cambios después de la Década Moderada: ni progresistas, ni conservadores consideraron necesario un cambio administrativo profundo por espacio de treinta años, pero la llegada a los gobiernos de la restauración del Partido Liberal, a partir de 1881, volvió a abrir paso al reformismo, cuando el ministro, Juan Francisco Camacho introdujo una novedad tan relevante como la creación de las Delegaciones de Hacienda.

Esta institución de las Delegaciones Provinciales de Hacienda en 1881. fue un hito importante, con el que la administración de la Hacienda Pública en las provincias adquirió la autonomía que requería su carácter técnico y especializado. Aunque la medida fue abolida por el cambio de turno en el Gobierno, regresando los conservadores al sistema de las administraciones dependientes del gobernador civil, acabó por confirmarse tras la vuelta al poder de los liberales, que consolidaron la idea de unas delegaciones dependientes directamente del Ministerio de Hacienda. El plan completo era descentralizar la administración hacendística llegando hasta el nivel de los partidos judiciales, en cuyas cabeceras se crearon unas Administraciones Subalternas de Hacienda; pero tras solo cuatro años de vigencia, se comprobó que esa descentralización resultaba excesivamente costosa, y se eliminó, centralizando de nuevo en las delegaciones la gestión hacendística de toda la provincia.

Desde 1881, la gestión territorial de la Hacienda Pública española estuvo encomendada a las delegaciones de Hacienda; en todo ese tiempo la estructura interna de las delegaciones experimentaron múltiples reformas, que sortearon la figura fundamental del delegado, poniendo bajo su dirección diferentes órganos, secciones y servicios, reflejando de esta forma transformaciones de ámbito mayor en la estructura general del Ministerio o del Gobierno en su conjunto

Pero si importante fue la nacionalización de la Hacienda, eliminando la concurrencia sobre unos mismos contribuyentes de las haciendas señoriales y eclesiásticas, no menos importante fue la unificación del espacio económico y financiero de la nación, que constituía otro de los objetivos fundamentales de la revolución liberal. Por eso Pro (2007) añade que las primeras trabas que desaparecieron para la libre circulación de mercancías fueron las vinculadas a los derechos señoriales, abolidos en 1837: los derechos de peaje, pontazgo, portazgo y barcaje. En cambio, las verdaderas aduanas interiores, conocidas como *almojarifazgos* y *puertos secos*, que separaban los antiguos reinos y territorios que componían la Monarquía, tardaron más en desaparecer completamente. La unificación del mercado peninsular estaba realizada desde comienzos del siglo XVIII, cuando se eliminaron las aduanas que separaban la Corona de Aragón de la Corona de Castilla; pero las que separaban a Navarra y las Provincias Vascongadas del resto de España pervivieron hasta el final del Antiguo Régimen. La supresión de estas últimas aduanas interiores, intentada ya en las Cortes de Cádiz, se retrasó hasta que, terminada la guerra carlista, Espartero las eliminó en 1841.

Fue en ese momento en que pudo organizarse un sistema aduanero destinado a definir un mercado nacional unificado y protegido del exterior. Quedó establecido un perímetro de aduanas en las costas y fronteras, y se implantaron sistemas prácticos de gestión, como los depósitos francos para almacenar las mercancías aprehendidas por no haber satisfecho los aranceles vigentes. De esas fechas fueron también la creación de una burocracia de aduanas,

encuadrada en la Dirección General de Aduanas, Aranceles y Resguardos que creó el ministro de Hacienda de Espartero, Pedro Surrá y Rull, en el Ministerio de Hacienda, al tiempo que implantaba la unidad arancelaria del territorio nacional, en 1841.

El personal al servicio de aquella administración hacendística fue organizado tempranamente, constituyendo el embrión alrededor del cual se desarrollaría posteriormente el resto de la administración pública española. Fue en los momentos más bajos de la crisis de la monarquía absoluta, cuando Fernando VII había encargado a un equipo de tecnócratas reformistas la casi imposible tarea de reformar unas finanzas en quiebra, el ministro Luis López Ballesteros había concebido una organización que Pro (2007) califica como modélica de los empleados de Hacienda. Los procedimientos de gestión de personal que implantó en 1827 estaban basados en la idea de escalafón, en la creación de cuerpos especializados y en la clasificación rigurosa de los cesantes. Se estructuraron los servicios de la Real Hacienda mediante el establecimiento de una escala general y tantas escalas particulares como requiriera la naturaleza de cada uno de los ramos y empleos.

López Ballesteros incluyó también entre sus reformas la creación de un cuerpo de carabineros de costas y fronteras, fuerza de carácter militar que procedía de la reorganización de las antiguas *rondas* y de su reunión en un único Resguardo general de rentas en tiempos de Carlos III. Desde la reforma de 1829, la persecución del contrabando sobre el terreno quedaría en manos de este nuevo Cuerpo de Carabineros, auxiliado por los guardacostas del Resguardo marítimo y por el llamado Resguardo pasivo o interior²⁹⁵. Aunque es indudable el valor de los carabineros para dotar a la Hacienda de una Fuerza Armada propia con la que hacerse respetar, Pro (2007) considera que el cuerpo nació en lastrado por problemas de competencias y por la doble dependencia de los Ministerios de Guerra y Hacienda, así como por las necesidades policiales del Gobierno de Fernando VII que, en una época revolucionaria, llevaron a emplear frecuentemente este cuerpo en funciones represivas no relacionadas con el contrabando.

Finalmente, los carabineros se consolidaron como Fuerza Armada al servicio de la Hacienda. Si en 1834 pasaron a tener carácter civil, en 1842 se reformaron de nuevo, adoptando el nombre de Cuerpo de Carabineros del Reino, y recuperando su carácter inicial de cuerpo militar, dependiendo del Ministerio de la Guerra a efectos orgánicos, pero puesto funcionalmente al servicio del Ministerio de Hacienda. Curiosamente había carabineros de infantería, de caballería y del mar, cuya oficialidad procedía íntegramente del Ejército y de la Armada. Más tarde, al crearse la Guardia Civil en 1844, dicho cuerpo colaboraría también que las tareas de represión del contrabando. En 1848 se creó en el Ministerio una Dirección General de Carabineros para dirigir este cuerpo, que contaba ya con más de diez mil hombres. El cuerpo adquirió mayor autonomía y profesionalización desde que en 1863 se creó el Colegio de Carabineros Jóvenes en Villaviciosa de Odón (Madrid); siendo objeto de reglamentaciones cada vez más precisas en 1854 y en 1866; y completando su despliegue con la creación del Resguardo marítimo, ya durante la restauración.

Pro (2007) mantiene que el esquema del personal de Hacienda que diseñó el ministro López Ballesteros se mantendría más allá de la muerte de Fernando VII. De esta forma, cuando Bravo Murillo dio al Ministerio la organización definitiva que le correspondía a una administración liberal en 1852, conservó la organización en una escala general y varias especiales, avanzando en la clasificación de los empleados en 5 categorías.

²⁹⁵ Esa gestión estaba reglamentada en el Real Decreto de 9 de marzo de 1829 para el establecimiento y organización del cuerpo militar de carabineros de costas y fronteras y en el Real Decreto de 2 de julio de 1829 organizando el resguardo interior de rentas.

Esta implementación de la Hacienda Pública liberal y de una administración eficaz y profesionalizada, encontraba un límite en la inexistencia de la inspección. Aunque el autor considera que esta carencia podría entenderse históricamente en el contexto de la mentalidad fiscal de la época y de la cierta interinidad en la que se movía toda la Administración del Estado, también afirma que resultaba claro que sin un servicio de inspección no era posible poner coto a la impunidad de la evasión de impuestos, fue nuevamente, así lo entendemos nosotros, Bravo Murillo quien dio el primer paso en 1849 al crear unos visitadores generales, a los que se atribuyeron funciones de inspección de los servicios de Hacienda, y unos inspectores de aduanas, ambos adscritos a los gobiernos provinciales²⁹⁶

Aquella iniciativa, a la vista de los resultados, debe ser considerada más que una tentativa de inspección, pues resultó bastante ineficaz, tanto por el limitado número de efectivos, cuatro visitadores y 20 inspectores, como por la falta de una institución central que coordinará su labor. De hecho, aquel principio prometedor no se desarrolló adecuadamente en los años siguientes, pues con la inestabilidad política, las visitas y la inspección fueron objeto de múltiples reformas y contrarreformas que hicieron modificar su número, denominación, competencias y funcionamiento, junto a los estructurales problemas de personal y presupuesto que lo convirtió en totalmente inoperantes.

Fue más tarde, en el sexenio revolucionario, entre 1868 y 1874, cuando en un contexto político más favorable para vencer las resistencias a estas novedades, se plasmó por primera vez la inspección, en sentido estricto, aunque tardara mucho tiempo más en funcionar con eficacia. De esta forma Pro (2007) afirma que fue en 1871, en un momento en el que, dando por fracasada la utopía liberal del ministro Figuerola y sus innovaciones radicales, se buscaba a toda

²⁹⁶ Así consta en el Real Decreto, de 28 de diciembre de 1849, *nombrando para las cuatro plazas de Visitadores generales de Hacienda pública á los Sres. citados* (Gaceta de Madrid, nº 5631, de 30 de diciembre) en la url: <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1849/5631/A00002-00003.pdf> con acceso el 7 de septiembre de 2021. Por su interés reproducimos parte original del citado Real Decreto.

Exposición de motivos. Este deslinde de las atribuciones de los antiguos Intendentes no es suficiente todavía. Para inspeccionar debidamente el sistema de las contribuciones y rentas establecidas; estudiar sus ventajas é inconvenientes; proponer las mejoras de que sean susceptibles; vigilar la marcha de la administración, y ejercer los demás cargos que sobre este punto correspondían á aquellos, son indispensables agentes especiales y con inmediata dependencia del Ministerio de Hacienda.

Art. 5.º Se establecen á las inmediatas órdenes del Ministro de Hacienda cuatro Visitadores generales, y se crean también veinte Inspectores de aduanas y resguardos que se subdividirán en igual número de distritos, cada uno de los cuales abrazará el radio de una ó mas provincias, y todos á la vez las costas y fronteras.

Art. 6.º Será de cargo y Obligación de los Visitadores generales pasar á las provincias o puntos, que se les señalen con el objeto de enterarse de si se hallan bien establecidas las contribuciones, rentas é impuestos, conforme á la legislación y reglamentos vigentes: si se infieren ó no perjuicios, ya á la Hacienda , ya á los particulares, á los pueblos y á las provincias: si los impuestos son desproporcionados á la riqueza; y finalmente, si las dependencias de la Administración provincial llenan cumplidamente sus deberes, proponiendo al Ministerio de Hacienda sobre todos y cada uno do estos particulares cuantas disposiciones puedan y deban adoptarse á su juicio en mejora de la administración y bien del servicio.

Art. 7 Los Inspectores de Aduanas y Resguardos ejercerán por punto general, y en su respectivo distrito ó demarcación, las atribuciones que correspondían á los Intendentes en el servicio de los mismos ramos, sin perjuicio de las de vigilancia y autoridad que competen a los Gobernadores.

costa equilibrar las cuentas del Estado, saneando los ingresos para salvar la revolución. De esta manera, fue con ese espíritu con el que se Segismundo Moret creó el Cuerpo General de Inspectores de Hacienda, con el objeto de mejorar el rendimiento del sistema tributario existente, de imponer reparto más equitativo de la carga fiscal y de afirmar la autoridad del Estado frente a los defraudadores²⁹⁷.

La inspección dependería del ministro de forma directa, para que tuviera la coordinación central, que le había faltado anteriormente y no sufriera interferencias por parte de las direcciones generales; se organizaría territorialmente seis distritos que cubrían todo el estado, cada uno bajo la dirección de un inspector y coordinados por el inspector de distrito central. Pro (2007) afirma que aquellos primeros inspectores gozaron de atribuciones bastante amplias y tenían personal auxiliar a su servicio. No obstante, la inspección nació con una ambigüedad que afectaría a su grado de eficacia, pues no solo estaba encargada de investigar la riqueza sometida a tributación, sino también a vigilar el funcionamiento de los demás ramos de la administración hacendística. Se comportaría de esta forma en un servicio interno de inspección del Ministerio de Hacienda, destinado a poner orden en su propia administración, y solo secundariamente un servicio de investigación, encargado de disolver las grandes bolsas de ocultación de riqueza imponible que enquistaban las bases de las contribuciones. Por otro lado, aquel servicio apenas pudo desarrollar su labor, no solo por la limitación de la plantilla, sino porque tras las crisis políticas que determinaron el cambio de régimen, en los primeros años de la restauración quedó descentralizado y volvió a perder su potencial.

Pero fue con el regreso de los liberales al poder 1881 cuando la inspección empezó a cobrar fuerza, al reorganizarla el ministro Camacho con un sentido centralizador, creando la Inspección General de la Hacienda Pública²⁹⁸. La importancia de esta disposición estriba en que la institución, como tal, se incorporó al entramado administrativo de la Hacienda Pública española. No obstante, la inspección centralizada que concibió Camacho desapareció más tarde de forma intermitente, primero por decisión de un Gobierno conservador –Cos-Gayón la disolvió en 1884²⁹⁹– y más tarde, de otro liberal, López Puigcerver volvió a centralizarla en 1887, pues entretanto había sido restablecida por el propio Camacho. Y cambiando repetidas veces su reglamentación: en 1892, en 1893, en 1895 y en 1900. La investigación para perseguir el fraude y la ocultación no tuvo, desde ese momento, un servicio específico, sino que dependió alternativamente de las direcciones generales responsables de la gestión de cada impuesto, o bien de una secretaría especial creada en la subsecretaría de Hacienda, en un continuo baile de cambios institucionales. En todo caso Pro (2007) concluye que ni unas, ni otras disponían de

²⁹⁷ Decreto creando el cuerpo general de Inspectores de hacienda (Gaceta de Madrid de 22 de enero) en la url: <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1871/022/A00169-00170.pdf> con acceso el 7 de septiembre de 2021

²⁹⁸ Real Decreto de 24 de febrero de 1881 creando en el servicio de inspección de la administración económica provincial un centro directivo denominado inspección general de la Hacienda Pública a cargo de un inspector superior de la administración (Gaceta de Madrid, de 26 de febrero) en la url: <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1881/057/A00551-00553.pdf> con acceso el 7 de septiembre de 2021.

²⁹⁹ Real decreto de 5 de febrero de 1884 suprimiendo los cargos que constituyen la planta del personal de la Inspección general de la Hacienda pública, y disponiendo que desempeñen el servicio de inspección de la Administración económica provincial cinco Inspectores con la denominación que se expresa (Gaceta de Madrid, de 6 de febrero) en la url:

<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1884/037/A00363-00364.pdf> con acceso el 7 de febrero de 2021.

verdaderos servicios de inspección, ni de un criterio común con el que abordar el problema de la elusión fiscal.

De esta forma, a finales de siglo la inspección sufrió modificaciones de gran importancia, ligadas al cambio de tendencia general ocurrido en esos años en torno a las grandes cuestiones políticas que tenía planteada el país, y en particular con respecto a la lucha contra el fraude fiscal. Se empezaron a formar cuerpos especializados en la inspección de otros tributos: ingenieros agrónomos y arquitectos para la territorial (con el impulso del levantamiento catastral), peritos mercantiles para la contribución de utilidades (dividida de la industrial en 1900), peritos electricistas para el impuesto de gas, electricidad y carburo, e ingenieros de minas para las inspecciones regionales de los impuestos mineros. El reglamento del servicio de 1903 diseñó los procedimientos para esta nueva era³⁰⁰.

Pro (2007) afirma que, en este trasiego normativo, no fue fácil que se consolidará la inspección como una institución normal de la administración pública española y que su actuación fuera aceptada como legítima, beneficiosa y conveniente por una opinión pública y social acostumbrada al fraude y a la corrupción. El control de las contribuciones exigía una serie de indagaciones y averiguaciones que se prestaban a ser criticadas como inquisitoriales, o como intromisiones en la vida privada de los ciudadanos afectados. Este tipo de planteamientos solían aparecer en las protestas de los empresarios y de sus portavoces políticos durante el último tercio del siglo XIX, dando a entender en ocasiones que las infracciones impuestas por los inspectores a raíz de ocultaciones eran fruto de su capricho, en un marco de persecución contra la industria y el comercio.

Es necesario apuntar que aquel primer servicio de inspección, nacido en 1871 y reformado en 1881, no fue acompañado de la constitución formal de los inspectores como cuerpo especial. Y así se mantuvieron durante todo el siglo XIX, a pesar de las sucesivas refundaciones y reformas posteriores del servicio. Por tal motivo, Pro (2007) afirma que el ministro de Hacienda en 1895, Juan Navarro Reverter, añoraba los resultados que en otros países daban la existencia de un cuerpo de inspectores. Así consta en la exposición de motivos del Reglamento de octubre de 1895³⁰¹:

Elementos necesarios para administrar bien la Hacienda Pública son los servicios de investigación, comprobación e inspección, y es su importancia tal con que en otras naciones, donde la tradición ha dado a los organismos administrativos una solidez que en el nuestro no alcanzan todavía, el Cuerpo de Inspectores ha contribuido poderosamente a crear sanas costumbres tributarias, siendo además utilísima escuela práctica en donde han completado su educación rentística notables funcionarios de la Hacienda Pública que, ilustrando su nombre, honraron a sus respectivos países. Lejos estamos en España de semejante perfección sin duda porque, fundados nuestros organismos administrativos sobre erróneos conceptos, conviértese la función investigadora en tarea subalterna, ordinariamente desempeñada por humildes empleados, sin conocimientos y sin

³⁰⁰ Real decreto, de 13 de octubre, aprobando, con carácter definitivo, el adjunto Reglamento para el servicio de la Inspección de la Hacienda pública (Gaceta de Madrid de 16 de octubre) en la url: <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1903/289/A00204-00209.pdf> con acceso el 12 de junio de 2022.

³⁰¹ Reglamento provisional de 4 de octubre de 1895, de la Inspección y la Investigación de la Hacienda Pública (Gaceta de Madrid de 17 de octubre) en la url: <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1895/290/A00186-00189.pdf> con acceso el 7 de septiembre de 2021.

responsabilidad suficientes, sin estabilidad y sin porvenir bastantes para desempeñar en toda ocasión sus delicadas funciones con la independencia que su índole requiere.

En la evolución histórica del Cuerpo de Inspectores de Hacienda (García, 2007) señala que el nuevo siglo se inauguró con importantes cambios en el régimen fiscal, que fueron acompañados de reformas también en el campo de la inspección. La reforma de Raimundo Fernández Villaverde (1899 a 1900) no tuvo un carácter rupturista pues tenía la idea de que las grandes transformaciones y cambios solo conducían a una perturbación del orden establecido. Además, en una época de penurias hacendísticas, como aquellas, era totalmente desaconsejable, ya que podían provocar una disminución en la recaudación.

Los proyectos de Fernández Villaverde abarcaban un Plan General de ordenación hacendística cuyo objetivo fundamental era la nivelación del presupuesto: el déficit crónico de la hacienda decimonónica se había disparado como consecuencia de la guerra colonial, de forma que en 1898 los intereses de la deuda absorbían el 43 % de todo el presupuesto del Estado.

A lo largo de estas primera décadas del siglo XX la modernización de los principios impositivos fue limitada, mientras que a partir de la Primera Guerra Mundial la mayoría de los países avanzados tendieron a introducir la personalización en los impuestos y las escalas progresivas, en España, se completaba la tributación real, incorporando los nuevos *impuestos de producto*, a la vez que se consolidaban los impuestos sobre consumos específicos.

Para conseguir mayores ingresos el Estado quería recuperar parte del protagonismo cedido durante el siglo XIX en la gestión de los impuestos, lo que implicaba un refuerzo de las labores inspectoras. Así como la reforma de Fernández Villaverde inauguraba una nueva etapa en el campo de la inspección, caracterizada por el afán de dotar de medios humanos a lo que, en aquella época se denominaba *investigación de los tributos*; de igual forma, a partir del año 1900, en el seno de esa investigación, se fue produciendo una paulatina especialización de funciones. En base a las características del sistema impositivo español, en los gravámenes de producto y en los impuestos sobre consumos específicos, se acabó imponiendo una división de la labor inspectora por impuestos, requisito que se consideraba conveniente para alcanzar una mayor productividad. Así, cada figura impositiva dispuso de su propio cuerpo de investigadores, y esa compartimentación se realizó atendiendo a la especial preparación profesional de los diferentes facultativos, lo que supuso la creación de diversos cuerpos especiales, de facultativos o técnicos, a los que se fue asignando la inspección de determinados tributos.

Desde finales del siglo XIX se venía denunciando la escasa preparación del personal dedicado a la labor inspectora; así lo apunta Banalache (1984) calificándolos como *humildes empleados*. Por ello en el plan general de arreglo de la Hacienda diseñado por Villaverde, junto a la reordenación tributaria y la contención de los gastos, se incluyese también una mejora de la inspección, pues según el Ministerio todas las modificaciones propuestas ante las cámaras *resultarían estériles sino se contará con el poderoso auxilio que está llamado a prestar en todas las contribuciones e impuestos... la investigación de la Hacienda Pública*³⁰². Su principal función consistía en el descubrimiento de la ocultación de la riqueza tributaria por ello en esta época se materializó un marcado interés por disponer de mayores recursos humanos, que posean de la preparación técnica adecuada para cada impuesto.

Este afán tuvo un desarrollo muy parcelado: de hecho e en el reglamento provisional de la investigación de la Hacienda aprobado por Villaverde en enero de 1900 se establecía: *... que deben desempeñarse preferentemente por los ingenieros agrónomos, los trabajos de investigación y comprobación de la riqueza rústica y pecuaria; por los arquitectos, los de la*

³⁰² García (2007) cita el Diario de sesiones de 17 de junio de 1899.

riqueza urbana; por los ingenieros industriales, los de la tarifa de la contribución industrial y los del impuesto especial sobre el alcohol. Ahora bien, esa designación no implicaba exclusividad pues en la misma norma se especificaba que cualquier inspector que *visite un pueblo debe investigar y procurar descubrir las defraudaciones por todos los conceptos.* La división de funciones entre los facultativos señalados que se incluía en el citado reglamento de Fernández Villaverde no era nueva, pues se venía apuntando desde 1893.

En cuanto a los cometidos que se fueron adjudicando a cada uno de los facultativos señalados y los que correspondieron a los nuevos técnicos que se fueron incorporando a la inspección durante las primeras décadas del siglo XX, García (2007) apunta que la labor de los arquitectos se ligó a la elaboración del catastro y a su plasmación práctica desde una perspectiva tributaria; lo que terminó creando dos contribuciones: urbana y rústica y pecuaria.

En lo que se refiere a los ingenieros agrónomos, en un principio se les encomendó, junto a los peritos agrícolas, la inspección del impuesto especial sobre el alcohol, aunque en la misma norma en la que se les encargaba esas tareas ya se señalaba *sin perjuicio de la principal misión que desempeñarán más tarde*³⁰³. Como no podía ser de otra manera, esa misión exigía la investigación de la riqueza rústica, tal y como se recogía en el reglamento de 1900. No obstante, es importante mencionar que los ingenieros y peritos agrónomos nunca constituyeron un cuerpo especial al servicio de la Hacienda Pública, pues en el mismo año de 1900 el Ministerio de Hacienda transfirió al de Fomento todo el personal agronómico con el que contaba

Otro de los cuerpos al que la ley de 1906 adjudicaba tareas catastrales fue el de ingenieros de minas. En realidad, como cuerpo especial de facultativos, dentro del Ministerio de Hacienda, no se constituyó hasta 1910, aunque desde 1900 los ingenieros de minas dependientes del Ministerio de Fomento actuaban como inspectores de los gravámenes que recaían sobre las explotaciones mineras para evitar la ocultación en cantidad y valor por lo que se encomendó la inspección minera a los únicos funcionarios en condición de ejercerla como se debe, o sea el cuerpo de ingenieros de minas³⁰⁴.

En el campo de la tributación indirecta, García (2007) señala que se encomendó a los ingenieros industriales la inspección de los impuestos que gravaban el consumo de gas, electricidad y carburo de calcio y los que recaían sobre el transporte de tracción mecánica, así como la investigación del impuesto especial del alcohol. En las diversas provincias estos inspectores, los llamados inspectores liquidadores, actuaban en un pequeño radio y estaban obligados a realizar frecuentes visitas a las fábricas a su cargo con el fin de comprobar el correcto cumplimiento de la normativa. García (2007) apunta que las investigaciones realizadas para algunas provincias han puesto de manifiesto que el sistema que empezó a diseñarse resultó ineficaz por los sobornos de inspectores y la doble contabilidad.

³⁰³ Así consta en la *Real Orden de 27 de marzo de 1893 excitando el celo de los empleados en la inspección provincial de Hacienda para llevar á cabo con el mayor rigor el cumplimiento de lo prevenido acerca del descubrimiento de lo prevenido acerca del descubrimiento de los fraudes y ocultaciones en la riqueza imponible* (Gaceta de Madrid de 1 de abril) en la url:

<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1893/091/A00003-00003.pdf> con acceso el 13 de junio de 2022.

³⁰⁴ Así consta en el *Real Decreto de 28 de marzo de 1900, aprobando el reglamento sobre los impuestos mineros* (Gaceta de Madrid de 29 de marzo) en la url:

<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1900/088/A01126-01133.pdf> con acceso el 13 de junio de 2022.

Los profesores mercantiles comenzaron a incorporarse a la plantilla inspectora del Ministerio de Hacienda en 1907, cuando ocupaba la cartera el liberal Juan Navarro Reverter. Al este cuerpo de profesores mercantiles se le atribuyó la inspección del impuesto del timbre que gravaba la negociación de valores mobiliarios, pero su cometido fundamental estuvo ligado hasta 1936 a la investigación de la denominada contribución de utilidades.

Durante la época de la dictadura, el Real Decreto de 30 de marzo y su posterior reglamento de 13 de julio de 1926 introdujeron significativas reformas en las competencias, organización y formas de actuación de la inspección. En primer lugar, siguiendo pautas de etapas anteriores, el esquema organizativo de 1926 distinguía entre la inspección de los servicios y la inspección de los tributos; ahora bien, tanto una como otra modalidad se encuadraban en los mismos organismos, puesto que ambas funciones pasaron a depender de las Direcciones Generales.

Es importante mencionar que, en la normativa de la Dictadura de Primo de Ribera, tal y como señala Albiñana (1981), se contempló que los inspectores de tributos, pertenecientes a los diversos cuerpos técnicos, habían de pasar cada 3 años una contrainspección, a fin de verificar la eficacia y corrección de su actuación. Ese control debía ser realizado por funcionarios *designados libremente por el Ministerio de Hacienda o el Director General correspondiente, por delegación de aquel*. Al margen de este plazo, el ministro podía ordenar una contrainspección, en el momento que considerase oportuno.

Ya en la época de la República y con Carner al frente del Ministerio, se promulgó la ley de bases de 3 de diciembre de 1932, que reorganizaban los servicios de la Hacienda Pública³⁰⁵. En ella se creaba un Consejo de Dirección constituido por los Jefes de Centro y presidido por el Ministro que llevaría a cabo una inspección permanente de todos los servicios del Ministerio de Hacienda, que se realizaría por funcionarios dependientes del mencionado órgano colegiado.

La documentación oficial del periodo, como señala García (2007) declara que con los nuevos procedimientos se buscaba educar al contribuyente, persuadiéndole de que había de cumplir sus obligaciones tributarias, algo que no se había conseguido con el sistema anterior, basado únicamente en la sanción; persiguiendo también una relación más cordial entre la administración y contribuyente, y especialmente acabar con la *odiosidad que generalmente despertaba la inspección*³⁰⁶. Sin duda al suprimir la participación directa de la inspección en las multas esa animosidad se redujo, y es posible que también se crease un clima de mayor confianza entre los contribuyentes y la Hacienda Pública con la nueva caracterización de los hechos que suponía ocultación o defraudación.

Merece la pena señalar, tal y como expone García (2007) que en el esquema legal de 1926 se mantuvieron independientes las inspecciones de las rentas de aduanas, de los impuestos especiales de alcoholes, azúcares, cerveza y achicoria, del impuesto de derechos reales y del timbre del Estado

Finalmente hay que referirse a la Contribución General sobre la renta. Al implantarse en el bienio social-azañista seguía rigiendo el reglamento de la inspección de 1926. La ley de 20 de diciembre de 1932 que regulaba la nueva figura impositiva guardó silencio sobre la inspección de la misma, quizá porque se quería introducir con el menor estrépito (Albiñana, 1981). Desde el inicio de su etapa ministerial, Carner se había planteado su introducción, pero la fue posponiendo, consciente de no disponer de la organización administrativa adecuada: el sistema imperante de

³⁰⁵ Ley de 3 de diciembre de 1932, relativa a la Administración de la Hacienda pública (Gaceta de Madrid de 6 de diciembre) en la url: <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1932/341/A01651-01652.pdf> con acceso el 13 de junio de 2022.

³⁰⁶ Así lo apunta Ferreiro (1976), citado por García (2007).

especialización de los inspectores por impuestos ofrecía dificultades de adaptación a la contribución general sobre la renta, pues en ella habían desfigurado rendimientos de muy diversas clases.

En el recorrido histórico, Toboso (2007) señala que las autoridades franquistas mostraron escaso interés por realizar una reforma fiscal que aumentará la capacidad económica y redistributiva del Estado. Tanto en la reforma tributaria del ministro José Larraz de 1940, como las de Mariano Navarro Rubio de 1957 y 1964, tuvieron como objetivo principal alcanzar la suficiencia presupuestaria, posiblemente porque el régimen de Franco optó por mantener una presión fiscal reducida para favorecer a las clases medias y altas que lo apoyaban³⁰⁷. Toboso (2007) puntualiza que en este ámbito el franquismo supuso un parón, cuando no una regresión, en el proceso de modernización de la Hacienda Pública en su camino iniciado a comienzos del siglo XX, en especial tras el establecimiento de la citada contribución sobre la renta durante la segunda República. Ese retroceso alejó a la dinámica española de las pautas seguidas en los países europeos más desarrollados, que en la segunda mitad del siglo lograron consolidar sistemas fiscales de carácter progresivo con un resultado significativo del aumento de sus ingresos por la vía impositiva. Sin embargo, las autoridades españolas mostraron una incapacidad crónica para recaudar, pues a pesar de la limitada presión fiscal, el fraude se convirtió, en opinión de Toboso (2007) en una práctica habitual.

En este contexto la inspección de los tributos y la investigación de los hechos imponibles no declarados adquirió una relevancia especial. Se encomendó a cuerpos concretos, con carácter de exclusividad y aunque los cuerpos técnicos especiales al servicio de la Hacienda (arquitectos, ingenieros de montes, de minas o agrónomos) siguieron realizando tareas de inspección, perdieron peso a favor de los cuerpos y especialidades tributarias: profesores mercantiles, diplomados para el servicio de la inspección de los tributos e inspectores técnicos del timbre, transformados a partir de los años sesenta en intendentes al servicio de la Hacienda Pública, inspectores diplomados de los tributos e inspectores técnicos fiscales del Estado. Una situación que favoreció el corporativismo, característico de la dictadura. Los inspectores ejercieron su actividad de forma individual, en muchas ocasiones en solitario y en condiciones precarias, con una carencia de efectivos, medios e información constante.

Durante el franquismo prevaleció el criterio de otorgar competencias exclusivas y excluyentes en favor de inspectores libremente designados por las autoridades ministeriales, dentro de los cuerpos o escalas competentes -tal y como asevera Toboso (2007) citando a Albiñana (1974)-, para lo que se promulgaron sucesivas disposiciones: la Ley de 29 de marzo de 1941³⁰⁸ asignó la inspección de los impuestos sobre las empresas individuales exclusivamente a funcionarios designados por la Dirección General respectiva, entre los profesores mercantiles al servicio de la Hacienda Pública y los liquidadores de utilidades; la Orden ministerial de 22 de diciembre de 1941 atribuyó la inspección de la contribución general sobre la renta a los diplomados para el servicio de la inspección de los tributos; y la Ley de 17 de febrero de 1942, la inspección del timbre a los inspectores con este nombre.

³⁰⁷ En este inciso Toboso (2007) cita de Fuentes Quintana (1990).

³⁰⁸ Ley sobre aplicación de la tarifa III de la Contribución sobre Utilidades a Comerciantes e Industriales individuales (BOE de 16 de abril) en la url: <https://boe.es/datos/pdfs/BOE//1941/106/A02581-02585.pdf> con acceso el 14 de junio de 2022.

Esa exclusividad quedó recogida en una circular de la Dirección General de contribución de la renta de 14 de abril de 1943, que cita Toboso (2007) en la que se ordenaba:

los inspectores no podrán extender su actuación a ningún otro tributo, cuya inspección corra a cargo de [otras] inspecciones de Hacienda [y que] los jefes respectivos cuidarán que no se comentan extralimitaciones de una a otra parte, dando cuenta a esta Dirección General de cualquier transgresión que pudiera producirse, para proponer en su caso a la comisión coordinadora las determinaciones que deban adoptarse.

De manera que el principio de exclusividad inspectora, que había cuajado desde 1903 e implicaba asignar a un cuerpo específico la comprobación e investigación de un tipo de impuesto concreto, se consolidó en esta etapa, aunque su aplicación no siempre fue posible por falta de personal especializado. Además, su aceptación no impedía que cuando un inspector visitaba un pueblo, investigará la totalidad de contribuciones o impuestos, ya que todos los inspectores estaban obligados a descubrir ocultaciones.

Toboso (2007) señala que el análisis de los cuerpos de inspección de tributos y de su evolución en el franquismo es complejo porque la duración del régimen y los cambios socioeconómicos a los que asistió el país obligaron a sucesivas modificaciones. Durante la dictadura convivieron cuerpos de etapas anteriores, con otros de nueva creación y mientras algunos se suprimieron, otros simplemente cambiaron de nombre. Inicialmente se mantuvieron todos los creados en el primer tercio del siglo XX, pero las funciones de algunos quedaron vacías de contenido. Así, aunque nominalmente siguieron en activo cuerpos especiales como los arquitectos o los ingenieros de minas o de montes al servicio de la Hacienda Pública, sus funciones y efectivos sufrieron una drástica limitación. Toboso (2007) señala que, en 1972, en el Ministerio de Hacienda, constaban los mismos 119 arquitectos de 1940, mientras que los 17 ingenieros de minas y los 24 de montes de 1940, se había reducido a 15 y 23 respectivamente en 1972. No obstante, se mantuvieron como cuerpos especiales con el argumento de que aportaban una formación adicional, de la que carecían otros cuerpos de la Hacienda Pública. También el cuerpo de inspectores de aduanas siguió desempeñando una función investigadora en asuntos relacionados con el comercio exterior, tanto sobre importaciones como exportaciones y la excepción de impuestos especiales, al tiempo que se ocupaba de la liquidación y recaudación de los impuestos de la denominada renta de aduanas.

De esta manera y con las consideraciones señaladas, hasta finales de los años cincuenta, las tareas inspectoras fueran asumidas con por los siguientes cuerpos:

- Ingenieros industriales al servicio de la Hacienda Pública.

Cuerpo especial dentro de la escala superior de la administración, para comprobar e investigar la tarifa tercera de la contribución industrial, los impuestos sobre gas y electricidad y aquellos que gravan las industrias de transporte y al que en 1945 también se le encargó de la inspección de ciertas parcelas de la contribución de usos y consumos.

- Profesores mercantiles al servicio de la Hacienda Pública.

Cuerpo creado en 1912, con el encargo de inspeccionar los impuestos que gravan las rentas y beneficios de sociedades y entidades jurídicas; los rendimientos de valores mobiliarios y en casos concretos, los rendimientos de trabajo personal y las rentas de capital.

- inspectores técnicos del timbre.

Cuerpo creado en 1941, con una plantilla inicial de 120 funcionarios, dependiente del Ministerio de Hacienda. En su origen el timbre era un impuesto sobre los documentos, pero más adelante se aplicó a determinados actos y negocios jurídicos y finalmente se convirtió en un gravamen

sobre el tráfico Mercantil documentado. En 1964 fue sustituido por el impuesto general sobre el tráfico de empresas.

- Diplomados para el servicio de la inspección de los tributos.

Toboso (2007) señala que no era un cuerpo propiamente, sino una especialidad, a la que se dio la posibilidad de acceder desde 1926 a los funcionarios del cuerpo general de la administración de la Hacienda Pública, con la finalidad de investigar el impuesto sobre la renta, tanto del trabajo, como del capital, la contribución industrial (salvo la parte reservada a los ingenieros industriales), la tarifa primera de la contribución sobre utilidades de la riqueza mobiliaria, el impuesto de cédulas personales, el impuesto sobre el transporte de tracción animal y el resto de impuestos cuya inspección no estuviera atribuida en exclusiva a los cuerpos técnicos de la inspección ya señalados.

Toboso (2007) apunta que la existencia de cuerpos con competencias y retribuciones diferenciadas fomentó un corporativismo difícil de erradicar, para cuyo mantenimiento se argumentaron razones subjetivas y objetivas: el orgullo del título o de la función; el afán de poder político por vías no políticas; el prestigio social; la diferencia salarial, etc. No obstante, la exclusividad absoluta fue inviable por la complejidad del sistema tributario, con numerosos conceptos impositivos y la escasez de efectivos en todos los cuerpos de inspección. Así entre 1941 y 1946 la insuficiencia de profesores mercantiles hizo que el impuesto que ellos gestionaban, fueran inspeccionados por liquidadores de utilidades, cuando los sujetos pasivos eran empresas individuales, y se permitió que todos los inspectores, independientemente del cuerpo al que pertenecieran, inspeccionaran los impuestos sobre los beneficios extraordinarios, así como que la Guardia Civil y la policía de tráfico investigará la Patente Nacional de circulación de automóviles y que ciertos cuerpos de Hacienda y funcionarios de telecomunicaciones se ocuparán del impuesto de radiodifusión.

Toboso (2007) expone que, aunque la llegada de un inspector a un pueblo o provincia pequeña representaba un acontecimiento social, que solía publicarse incluso en el periódico local y las autoridades solían dispensarles de un trato deferente: entradas gratuitas para cines, teatro y espectáculos y un lugar preferente en los actos públicos, en su vida cotidiana y en su trabajo diario encontraban numerosos obstáculos. En ocasiones tenían dificultades para hospedarse y eran rechazados en hoteles y fondas con falsas excusas y siempre carecían de medios y recursos para realizar la inspección, y en el mejor de los casos contaban con un auxiliar, como único apoyo, que durante los años cuarenta y cincuenta solía ser un militar que les acompañaba a visitar al contribuyente y les ayudaba a tomar notas y a comprobar las cuentas. Así recordaba un inspector su experiencia:

En el año 42 en que empezamos a trabajar en nuestro cometido inspector, España no tenía gasolina. A los coches de alguna potencia les estaba prohibido circular, y, a los pequeños que se les permitía, se les entregaba un cupo de carburante totalmente insuficiente para quienes, como nos sucedía a nosotros, teníamos que recorrer periódicamente muchos kilómetros dentro de nuestra provincia. No existía entonces la ventaja de hoy de traer a los contribuyentes a la delegación de Hacienda, en la que no teníamos despacho, ni siquiera una mesa de trabajo. Trabajábamos exclusivamente en los despachos de las empresas y era en nuestro domicilio donde realizábamos el trabajo de oficina y conservábamos los balances que nos entregaban para su comprobación. (Gómez Aparisi, 1967, 29).

Las reformas tributarias de 1957 y 1964 intentaron, aunque con escaso éxito, superar los inconvenientes que presentaba la competencia exclusiva con una mayor coordinación

inspectora. La orden ministerial de 14 de febrero de 1958³⁰⁹ aludió por primera vez al pluralismo no integrado de la inspección, obligó a los inspectores, independientemente del cuerpo al que pertenecieran, a poner en conocimiento de la administración las ocultaciones que descubrieran, aunque no tuvieran competencia para su comprobación y puso en marcha el servicio central de información, que custodiaba y facilitaba datos y antecedentes de los contribuyentes a las oficinas provinciales. Con ello se intentó mejorar la gestión e investigación de los tributos, sin embargo, esa norma, necesaria porque en la práctica habían funcionado tantas inspecciones de Hacienda como cuerpos, tuvo un efecto nulo, según señala Toboso (2007), pues los funcionarios de cada cuerpo siguieron respetando de modo absoluto las competencias de los otros.

La Ley General tributaria de 28 de diciembre de 1963³¹⁰, también intentó poner orden a las actuaciones inspectoras, pero las sucesivas normas y disposiciones que se habían dado desde 1926, en muchos casos sin derogar las anteriores, habían generado una enorme confusión y no pocas contradicciones. Era la primera vez que una ley con carácter general, abordaba de forma separada las cuestiones relacionadas con la inspección, de las relacionadas con las infracciones y sanciones tributarias y catalogaba de forma detallada los deberes y derechos tanto de los inspectores como de los contribuyentes.

Más tarde, continua Toboso (2007) y como consecuencia de las reformas tributarias de 1957 y 1964, los cuerpos de inspección también sufrieron transformaciones. Las más significativas fueron: el cambio de denominación de los profesores mercantiles, ahora intendentes al servicio de la Hacienda Pública; la creación del cuerpo de inspectores diplomados de los tributos, en el que se integraron los diplomados para el servicio de la inspección de los tributos y la creación del cuerpo de inspectores técnicos fiscales del Estado que absorbió a los inspectores técnicos del timbre. Pero no fueron simples cambios de denominación, también afectaron a las competencias y a los requisitos de acceso a los distintos cuerpos. Entre los cambios más significativos hay que destacar la pérdida progresiva de competencias inspectoras que sufrieron los ingenieros industriales al servicio de la Hacienda, sobre todo tras la reforma administrativa de 1963-64, que reivindicó la Función Pública frente a los cuerpos técnicos facultativos.

Estas modificaciones provocaron que desde los años sesenta la inspección de los tributos fuera asumida fundamentalmente por intendentes al servicio de la Hacienda Pública, inspectores diplomados de los tributos e inspectores técnicos fiscales del Estado.

El Decreto de 11 de marzo de 1971 creó las unidades funcionales especializadas con el objetivo, de reorganizar el funcionamiento de la inspección, acabar con la fragmentación corporativa que suponía un despilfarro administrativo y optimizar los escasos recursos humanos. La idea era integrar a los inspectores en cuatro U.F.E. (unidades, funcionales especializadas) adscritas a materias imponderables concretas: unidad funcional especializada en propiedades inmobiliarias-urbanas, unidad funcional especializada en propiedades inmobiliarias-rústicas, unidad funcional especializada en empresas, con dos modalidades: titularidad de personas jurídicas y titularidad de personas físicas y unidad funcional especializada en personas físicas, encargada de valorar los patrimonios, bienes, rentas, inversiones y gastos de estas.

Diversos decretos y órdenes de 1964 y 1965 habían establecido un total de 23 cuerpos especiales del Ministerio de Hacienda. Con la llegada de la democracia, se pudo acometer una profunda

³⁰⁹ Orden de 14 de febrero de 1958 por la que se regula su régimen de coordinación (BOE de 19 de febrero) en la url: <https://boe.es/datos/pdfs/BOE//1958/043/A00280-00281.pdf> con acceso el 14 de junio de 2022.

³¹⁰ Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria (BOE de 31 de diciembre) en la url: <https://www.boe.es/boe/dias/1963/12/31/pdfs/A18248-18261.pdf> con acceso el 9 de septiembre de 2021.

modernización de la organización de estos cuerpos, siguiendo las directrices generales marcadas por los reformadores del Instituto de Estudios fiscales, dirigidos por Enrique fuentes Quintana. Esta reforma de la inspección había sido orientada a realizar una serie de reformas organizativas con el fin de: facilitar la actuación de la inspección de los tributos. Aunque se ocultaba en el Decreto que el fin último –como sí reconocía los informes del Instituto de Estudios Fiscales–, era preparar la reforma tributaria. Ese Decreto autorizó al Gobierno a proceder a una integración de los cuerpos que tenía competencia legal en la inspección de tributos sobre beneficios y tráfico empresarial, que recaían sobre las personas jurídicas, para buscar *la comprobación unificaba de los mismos*. Además, autorizaba al Gobierno a reorganizar la inspección de los impuestos relativos a los hechos imponible relacionados con las personas físicas.

Tras la llegada al Gobierno de la Unión del Centro Democrático –UCD–, con la presidencia de Adolfo Suárez en junio de 1977, Enrique fuentes Quintana fue nombrado vicepresidente de asuntos económicos y Francisco Fernández Ordóñez, ministro de Hacienda. Comín (2007) señala que Fuentes Quintana inicio las reformas con la orden de 23 de julio de 1977, por la que se iniciaba la liberalización de los tipos de interés y la reducción gradual de los coeficientes obligatorios de inversión. En septiembre Fuentes Quintana convenció al presidente y al resto del Gobierno de la necesidad de alcanzar un pacto político para sacar adelante el programa de saneamiento y reforma económica que provocó que el 25 de octubre se firmaran los Pactos de la Moncloa. Comín (2007) señala que los elementos clave del éxito de los Pactos de la Moncloa fueron, por un lado, la subordinación de la negociación colectiva a la estabilidad de los precios, y por otro, la utilización de la política fiscal como un instrumento de redistribución de la renta. De esa época fue el Real Decreto-Ley 4077 de reorganización de los cuerpos de inspección³¹¹.

Con respecto a este periodo Comín (2007) apunta que la no institucionalización de la reforma tributaria trajo consigo la debilidad de la Administración Tributaria y la deficiente información estadística que obstaculizaron una gestión recaudatoria eficaz y retardaron el crecimiento de la recaudación. La ruptura del consenso político, tras las elecciones de 1979, implicó que las reformas estructurales planificadas en los pactos de la Moncloa quedarán paralizadas, entre ellas la reforma de los cuerpos de gestión e inspección tributaria. Además del estancamiento de la nueva normativa tributaria, prevista por los reformadores, el Gobierno centrista también frenó el desarrollo normativo de las leyes que ya habían sido aprobadas en 1978 y 79 y, sobre todo, no acometió ninguna reforma administrativa. El resultado fue que los medios personales de la inspección no aumentaron en la década de 1970, en contra de lo previsto por Fuentes Quintana. En 1981, la plantilla total del Ministerio de Hacienda tenía la misma dimensión que en 1972; De esta forma, la reforma tributaria no podía administrarse adecuadamente, ante la falta de medios personales. Este insuficiente crecimiento de personal de la inspección tributaria trajo consigo graves consecuencias, pues la inadecuación e insuficiencia de la Administración Tributaria a las funciones inspectoras reclamadas por los nuevos tributos establecidos desde 1978 fue la causa principal de que las reclamaciones fiscales de los contribuyentes colapsarán el Tribunal Económico Administrativo Central.

Como pequeño resumen conclusivo y utilizando a Comín (2007) señalaremos por último que la inspección tributaria no es ni mucho menos una institución joven. Las tareas de inspección fiscal y la propuesta de disponer de funcionarios especializados en dichas tareas se remontan al siglo XIX, mientras que su traducción en el establecimiento de cuerpos funcionariales se acometió en

³¹¹ Real Decreto-ley 40/1977, de 7 de septiembre, por el que se reorganiza la Inspección Financiera y Tributaria. (BOE de 12 de septiembre) en la url:

<https://www.boe.es/boe/dias/1977/09/12/pdfs/A20444-20445.pdf> con acceso el 14 de junio de 2022.

las cuatro primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, la existencia de un cuerpo o una especialidad única de inspección tributaria es un fenómeno nuevo: uno de los principales subproductos administrativos de la reforma que inició la reconstrucción de la fiscalidad española entre 1977 y 1978.

La transformación de la inspección tributaria se inició en la década de 1970 con el establecimiento en 1974 de la escuela de inspección financiera. Esta nueva institución buscaba, en los términos de su preámbulo, *asegurar el nivel adecuado de competencia profesional de los funcionarios de nuevo ingreso, así como el adiestramiento y la formación permanente, pero ya integrados en los cuadros de la administración de la Hacienda Pública.*

Al llegar a este apartado y en la seguridad de que el resto del contenido, histórico y funcional, se verá desarrollado o se podrá inferir del marco normativo expuesto en el próximo epígrafe, nos permitimos la exposición, a modo de resumen, de la información contenida en algunas de las señaladas academias de preparación de oposiciones para el Ministerio de Hacienda³¹², en la *consideración de su carácter de resumen y divulgativo.*

- El Inspector de Hacienda del Estado

La disposición final cuarta del Real Decreto-Ley 40/1977 creó el Cuerpo Especial de Inspectores Financieros y Tributarios que sustituía a los cuatro cuerpos anteriores que tenían competencia en materia tributaria. Este Cuerpo es el precedente más inmediato del actual Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (grupo A1), creado por el artículo 57 de la Ley 66/1997 y adscrito a la AEAT. Dispone dicha norma que la AEAT, en su relación de puestos de trabajo, adscribirá a funcionarios pertenecientes a este Cuerpo Superior, aquellos puestos que tuviesen asignadas las funciones de gestión del sistema tributario estatal y del sistema aduanero.

Además, en la relación de puestos de trabajo del Ministerio de Economía y Hacienda se adscribirán funcionarios pertenecientes al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, aquellos puestos que tuviesen asignadas las funciones relacionadas con la elaboración, la interpretación o el análisis de la normativa tributaria (en la Dirección General de Tributos) o la resolución de reclamaciones en dicho ámbito (Tribunales Económico-Administrativos), así como aquellos puestos que así lo exigieran en razón de las características de las funciones asignadas a los mismos.

Un punto que tienen en común todas estas funciones es que todas ellas persiguen el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31.1 de la Constitución:

Todos contribuirán al sostenimiento de las cargas públicas de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que ningún caso tendrá alcance confiscatorio.

- Funciones de un Inspector de Hacienda del Estado.

Las funciones pueden desarrollarse en la AEAT, Dirección General de Tributos, o los Tribunales Económico-Administrativos.

³¹² Portal web: *estudiandotributario* en la url: <https://www.estudiandotributario.es/> con acceso el 11 de septiembre de 2021. Según los datos de la web, el apartado *El Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda de la AEAT* fue publicado el 11 de enero de 2016; su última modificación se realizó el 17 de diciembre de 2017 y ha tenido un total de 33.081 visitas. Se omite los apartados relativos al horario y salario por el objeto de la investigación.

La función más conocida, a la que más Inspectores de Hacienda se dedican es de la Inspección de los tributos, cuya misión fundamental es el control del fraude fiscal, es decir, detectar comportamientos defraudatorios (comprobar e investigar), aplicar las normas defraudadas (regularizar) y aplicar las medidas para evitar que estos comportamientos continúen (sistema sancionador). En palabras de la Ley 58/2003, General tributaria (artículo 141):

La investigación de los supuestos de hecho de las obligaciones tributarias para el descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración. La comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones presentadas por los obligados tributarios.

En los Servicios Centrales de la AEAT son funciones de Inspectores Asesores/Coordinadores, Subdirectores Generales de área, Directores de Departamento, Director de Gabinete y Director General, Delegados de la AEAT...

En los Servicios Territoriales de la AEAT, el Inspector de Hacienda del Estado comienza su actividad como actuario de una Unidad de las distintas áreas funcionales (Gestión, Inspección, Recaudación y Aduanas), y en su desarrollo profesional pasará a ocupar las Jefaturas de Dependencia, Administrador Jefe de una Administración de la AEAT.

En las áreas de inspección, recaudación y aduanas pasan a ser Jefes o Coordinadores de Equipos/Unidades. En el área de gestión pueden ser nombrados Administradores de una Administración de la Agencia de tipo «A». Asimismo, pueden ocupar el puesto de Administrador en una Administración de Aduanas.

Cabe destacar que los nombramientos de Administradores (tanto en Gestión como en Aduanas) son por libre designación. Como puestos de libre designación en el resto de áreas funcionales, pueden ser nombrados, entre otros puestos, Inspector Jefe, Jefes de Dependencia Regional Adjuntos y Jefes de Dependencia Regional. En el ámbito de la Delegación Especial, puede ser nombrado Delegado Provincial, Delegado Ejecutivo y Delegado Especial.

En la Dirección General de Tributos, los inspectores de hacienda realizan funciones de asesores/coordinadores de área. Como puestos de libre designación pueden ser Subdirector General de Tributos, Subdirector General de Área (Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuestos sobre las Personas Jurídicas e Impuestos sobre el Consumo) y Director General de Tributos.

En el Tribunal Económico Administrativo Central pueden ser Adjuntos a una de las diferentes Vocalías. Los puestos de Vocal son de libre designación, ya éstos tienen la consideración de Subdirectores Generales del Ministerio de Hacienda. En los Tribunales Económico Administrativo Regionales pueden ocupar el puesto de vocal.

El mismo portal web recomienda la lectura del documento de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado: «La Inspección de Hacienda. Una aproximación profesional» de Francisco de la Torre Díaz³¹³.

³¹³ Documento ubicado en la url:

<https://drive.google.com/file/d/1UbX2onowDdE1oAtCwCpQttevv5TbZun/view> con acceso el 11 de septiembre de 2021.

4.3.2. Las funciones asignadas a la Inspección de Hacienda en la normativa española

Procedemos en este momento a la exposición de la normativa aplicable a la Inspección de Hacienda, susceptible de enriquecer el objeto de la investigación, en lo relativo a funciones asignadas en la inspección de educación en nuestro sistema educativo. Véanse las tablas 4.3.1. y 4.3.2. con la yuxtaposición de funciones y facultades, con la normativa en vigor.

Siguiendo el criterio establecido, las referencias normativas a las unidades de control e inspección, se expondrán literalmente, pero puntualizando el contexto de la norma, el objeto y el hito que supuso.

- Ley de Reforma Tributaria³¹⁴

La Ley de 16 de diciembre de 1940 de Reforma Tributaria, fue publicada en el BOE el 22 de diciembre. El contexto histórico en el que se promulgó esta norma, de alto rango, tras la finalización de la contienda civil, justifica su pertinencia ante el propósito de acometer una reforma tributaria que, los acontecimientos desarrollados, en los últimos años, *habían obvia y natural* y ante la *natural, indispensable y obligada* necesidad del *concurso de todos a la obra de restauración financiera*.

Los principales agentes de esta norma se encuentran en el ministro de Hacienda, durante el segundo gobierno de Franco, José Larraz López. La singularidad que pretendemos señalar en esta disposición es la potestad inspectora que menciona en los arts. 38 y 40.

Artículo treinta y ocho.— Las Empresas que, estando sujetas en principio a la Contribución de Utilidades, se dedicaren exclusivamente a la adquisición o construcción de fincas urbanas para su explotación en forma de arriendo, estarán exentas de la Tarifa tercera de Utilidades, y de la segunda, los dividendos o participaciones que correspondan a sus socios, o condueños.

Para gozar de esta exención, como asimismo para la admisión en Bolsa de los títulos de las citadas Compañías, será necesario que la Memoria anual que habrá de publicarse contenga una valoración certificada de los inmuebles que constituyan el activo de la Sociedad, suscrita por tres Arquitectos, designados por el Colegio Oficial. Las acciones de las Compañías de referencia gozarán, asimismo, exención del timbre y sobretimbre de emisión y del de negociación.

Se concede exención de los Impuestos de Derechos Reales y Timbre a las Sociedades inmobiliarias que se constituyan al amparo del presente artículo antes del treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y uno, en relación con los actos de constitución de la Compañía, puesta en circulación de acciones correspondientes al capital inicial y la escritura de constitución social, siempre que tales actos o documentos queden autorizados antes de la citada fecha.

Las obligaciones emitidas por las citadas Compañías se regirán por el derecho financiero común.

³¹⁴ Ley de 16 de diciembre de 1940 de Reforma Tributaria (BOE de 22 de diciembre). Texto original en la url: <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1940/357/A08746-08770.pdf> con acceso el 9 de septiembre de 2021.

El Estado se reserva el derecho de inspeccionar la valoración de los inmuebles pertenecientes a las Empresas a que se refiere este artículo, con fines de pura protección de los socios, partícipes u obligacionistas.

Artículo ochenta.— El Ministerio de Hacienda podrá inspeccionar la producción, venta y circulación de los productos gravados por los impuestos a que se refiere el artículo setenta y dos, quedando facultado para instaurar por cuenta de la Hacienda en los Centros de producción y puntos estratégicos de la economía nacional inspecciones e intervenciones permanentes.

- Ley 230/1963, General Tributaria³¹⁵

La Ley General tributaria de 28 de diciembre de 1963, publicada en el BOE el 31 de diciembre, es una norma de alto rango, publicada cuando presidía el Ministerio de Hacienda, Mariano Navarro Rubio, en el IX gobierno de Francisco Franco. Este ministro, próximo al Opus Dei, ha sido catalogado del entorno de los tecnócratas que asumieron grandes responsabilidades tras el Plan Nacional de Estabilización aprobado por el gobierno de España en 1959.

El tejido normativo promulgado hasta ese momento había intentado poner orden a las actuaciones inspectoras, pero las distintas iniciativas legislativas se habían dado desde 1926, en muchos casos sin derogar las anteriores, habían generado una enorme confusión y no pocas contradicciones. La Ley de 1963 supuso la primera vez que una ley con carácter general, abordaba de forma separada las cuestiones relacionadas con la inspección, de las relacionadas con las infracciones y sanciones tributarias y catalogaba de forma detallada los deberes y derechos tanto de los inspectores, como de los contribuyentes.

Capítulo VI. La inspección de los tributos

Artículo ciento cuarenta.

Uno. Corresponde a la Inspección de los Tributos:

- a) La investigación de los hechos imponible para el descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración.*
- b) La integración definitiva de las bases tributarias, mediante las actuaciones de comprobación en los supuestos de estimación directa, y a través de las actuaciones inspectoras y de los estudios generales de actividades o profesiones en los supuestos de estimación objetiva o por Jurados.*
- c) Realizar, por propia iniciativa o a solicitud de los demás órganos de la Administración, aquellas actuaciones inquisitivas o de información que deban llevarse a efecto cerca de los particulares o de otros organismos y que directa o indirectamente conduzcan a la aplicación de los tributos.*

³¹⁵ Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria (BOE de 31 de diciembre). Texto original en la url: <https://www.boe.es/boe/dias/1963/12/31/pdfs/A18248-18261.pdf> con acceso el 9 de septiembre de 2021.

Artículo ciento cuarenta y uno.

Uno. Los Inspectores de los tributos podrán entrar en las fincas, locales de negocios y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen para ejercer las funciones prevenidas en el artículo ciento nueve de esta Ley.

Dos. Cuando el dueño o morador de la finca o edificio, o la persona bajo cuya custodia se hallare el mismo, se opusieren a la entrada de los Inspectores, no podrán llevar a cabo éstos su reconocimiento sin la previa autorización escrita del Delegado o Subdelegado de Hacienda; cuando se refiera al domicilio particular de cualquier español o extranjero, será preciso la obtención del oportuno mandamiento judicial.

Artículo ciento cuarenta y dos.

Uno. Los libros y la documentación del sujeto pasivo que tengan relación con el hecho imponible deberán ser examinados por los Inspectores de los tributos en la vivienda, local, escritorio, despacho u oficina de aquél en su presencia o en la de la persona que designe.

Dos. Tratándose de registros y documentos establecidos por normas de carácter tributario podrá exigirse sean presentados en las oficinas de la Administración para su examen.

Artículo ciento cuarenta y tres.

Los actos de inspección podrán desarrollarse indistintamente:

- a) En el lugar donde el sujeto pasivo tenga su domicilio tributario o en el del representante que a tal efecto hubiere designado;*
- b) En donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas;*
- c) Donde exista alguna prueba, al menos parcial, del hecho imponible;*
- d) En las oficinas públicas a que se refiere el apartado dos del artículo ciento cuarenta y cinco, si mediare conformidad del contribuyente y a los elementos sobre que hayan de realizarse pudieran ser examinados en dicho lugar.*

Artículo ciento cuarenta y cuatro.

Las actuaciones de la inspección de los tributos, en cuanto hayan de tener alguna trascendencia económica para los sujetos pasivos, se documentarán en diligencias, comunicaciones y actas previas o definitivas.

Artículo ciento cuarenta y cinco.

Uno. En las actas de inspección que documenten el resultado de sus actuaciones se consignarán:

- a) El nombre y apellidos de la persona con la que se extienda la diligencia y el carácter o representación con que comparece en la misma.*
- b) Los elementos esenciales del hecho imponible y de su atribución al sujeto pasivo.*
- c) La regularización de las situaciones tributarias que estime procedente; y*
- d) La conformidad o disconformidad del sujeto pasivo.*

Dos. Las actas a que se refiere el apartado anterior podrán ser extendidas, a elección del contribuyente, bien en la oficina, local de negocio, despacho o vivienda del sujeto pasivo; bien en las oficinas de la Delegación de Hacienda o del Ayuntamiento del término municipal en que hayan tenido lugar las actuaciones.

Artículo ciento cuarenta y seis.

Uno. Cuando el sujeto pasivo no suscriba el acta o, suscribiéndola, no preste su conformidad a las circunstancias en ella consignadas, dicho documento determinará la incoación del oportuno expediente administrativo.

Dos. No será preciso que el sujeto pasivo o su representante autoricen la correspondiente acta de inspección de los tributos cuando exista prueba preconstituida del hecho imponible, si bien, en este caso deberá notificarse a aquél o a su representante la iniciación de las correspondientes actuaciones administrativas, otorgándole un plazo de quince días para que pueda alegar posibles errores e inexactitudes acerca de dicha prueba preconstituida.

Tres. Las actas suscritas por personas sin autorización suficiente se tramitarán según el apartado uno de este artículo.

- Real Decreto-ley 40/1977, por el que se reorganiza la Inspección Financiera y Tributaria³¹⁶

El Real Decreto-ley 40/1977, por el que se reorganiza la Inspección Financiera y Tributaria fue publicado en el BOE el 12 de septiembre, siendo ministro de Hacienda, Francisco Fernández Ordóñez, durante el segundo gobierno de Adolfo Suárez González, en plena legislatura constituyente, tras el advenimiento de la democracia a España.

Esta breve norma, que se compone de cinco artículos, dos disposiciones transitorias y cuatro disposiciones finales, se publicó ante la necesidad de dar efectividad a la reorganización y la ampliación de los recursos dotacionales de la hacienda pública, en la que la Inspección Tributaria, tenía gran importancia. De esta forma la norma crea el Cuerpo Especial de Inspectores Financieros y Tributarios, establece su dependencia, marca su forma de acceso, lo organiza jerárquicamente y determina sus funciones y su régimen de incompatibilidad.

- Artículo primero. Uno. Se crea el Cuerpo Especial de Inspectores Financieros y Tributarios que se integrará por los funcionarios que, estando en posesión del título universitario superior, pertenezcan a los actuales Cuerpos de Intendentes al Servicio de la Hacienda Pública, Inspectores Técnicos Fiscales del Estado, Inspectores de los Tributos e Ingenieros Industriales al Servicio de la Hacienda Pública, los cuales se declaran a extinguir.

Los funcionarios de los Cuerpos mencionados, que no estuvieran en posesión del título universitario superior, mientras no lo obtengan, no se integrarán en el nuevo Cuerpo, si bien continuarán desempeñando sus actuales funciones, sin merma alguna de sus derechos.

Dos. La plantilla del Cuerpo Especial de Inspectores Financieros y Tributarios se fija en mil quinientas plazas.

- Artículo segundo. Uno. El Cuerpo Especial de Inspectores Financieros y Tributarios, manteniendo su actual adscripción administrativa al Ministerio de Hacienda, desarrollara sus funciones en el ámbito de la Inspección Tributaria y en el de la Inspección Financiera.

³¹⁶ Real Decreto-ley 40/1977, de 7 de septiembre, por el que se reorganiza la Inspección Financiera y Tributaria (BOE de 12 de septiembre). Acceso al texto original en la url: <https://www.boe.es/boe/dias/1977/09/12/pdfs/A20444-20445.pdf> con acceso el 9 de septiembre de 2021.

Sin perjuicio de las que en el futuro pudieran atribuírsele, al Cuerpo Especial que se crea por el presente Real Decreto-ley le corresponderán las siguientes competencias:

- a) En materia de inspección tributaria, las que actualmente tienen atribuidas los Cuerpos Especiales que se integran.*
- b) En materia de inspección financiera, las que le encomiende el Ministerio de Economía, en el ámbito propio de sus competencias.*

Dos. Las funciones de inspección financiera se desarrollarán bajo la dependencia orgánica y funcional del Ministerio de Economía y se equiparán a los de inspección tributaria.

- Artículo tercero. El ingreso en el Cuerpo Especial de Inspectores Financieros y Tributarios se realizará a través de la Escuela de Inspección Financiera, mediante oposición libre a la que tendrán acceso los Licenciados en Derecho, Ciencias Económicas o Ciencias Empresariales e Ingenieros Industriales.

A esta oposición podrán concurrir, en las condiciones especiales que se determinarán reglamentariamente, y con reserva del veinte por ciento de las vacantes que se convoquen, los funcionarios del Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública, Especialidad de Inspección Auxiliar, que estén en posesión del título académico requerido en el párrafo anterior y cuenten con un mínimo de tres años de servicios efectivos en el Cuerpo.

Reglamentariamente se determinará, asimismo, la forma de incorporación, con reserva del veinte por ciento de las vacantes que se convoquen, de los funcionarios destinados en el Ministerio de Hacienda pertenecientes a Cuerpos para los que se exija la titulación académica señalada en el párrafo primero de este artículo y estén en posesión de los mismos.

- Artículo cuarto. El Cuerpo Especial de Inspectores Financieros y Tributarios se escalonará en tres categorías que se denominarán: Inspección Tributaria, Inspección Especializada e Inspección Directiva.

Los Inspectores de nuevo ingreso se integrarán en la Inspección Tributaria.

A la Inspección Especializada accederán los Inspectores que, con un mínimo de cinco años de servicio en la Inspección Tributaria, cubran por antigüedad las vacantes que se produzcan.

A la Inspección Directiva accederán los Inspectores que, con un mínimo de cinco años de servicio en la Inspección Especializada, sean seleccionados a través de los concursos de méritos que se convoquen para cubrir las vacantes que se produzcan.

Reglamentariamente se determinarán las funciones a desarrollar por los integrantes de cada de las categorías.

Para el paso de una categoría a la inmediata superior, podrá ser exigida la realización de los cursillos de perfeccionamiento que por el Ministerio de Hacienda se estimen necesarios.

- Artículo quinto. Uno. Serán funciones del Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública, Especialidad de Inspección Auxiliar:

- a) La inspección, investigación y comprobación de los tributos en el régimen de estimación directa, así como la determinación de bases imponibles y cuotas en el régimen de estimación objetiva, dentro de los límites y condiciones que reglamentariamente se determinen.*

b) La colaboración con los funcionarios del Cuerpo Especial de Inspectores Financieros y Tributarios, y bajo la dirección de los mismos, en cuantas tareas se les encomiende.

Dos. Se incrementa en mil quinientas plazas la plantilla del Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública, dotándose con efectos de uno de enero de mil novecientos setenta y ocho las quinientas plazas previstas como ampliación correspondiente a mil novecientos setenta y nueve en el Real Decreto-ley catorce/mil novecientos setenta y seis, de diez de agosto, de creación del Cuerpo.

Las anteriores dotaciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo segundo del mismo Real Decreto-ley catorce/mil novecientos setenta y seis, se destinarán a la especialidad de Inspección Auxiliar.

- Artículo sexto. Los funcionarios en activo pertenecientes al Cuerpo de Inspectores Financieros y Tributarios y al Cuerpo Especial de Gestión, Especialidad de Inspección Auxiliar, no podrán realizar ninguna otra actividad pública o privada retribuida, y tendrán dedicación exclusiva a su función.

El incumplimiento de la prohibición contenida en el número anterior se calificará, en todo caso, de falta muy grave.

Disposiciones Transitorias

Primera. Inicialmente, el número de plazas que componen cada una de las categorías serán las siguientes:

Inspectores Directivos: 250.

Inspectores Especializados: 500.

Inspectores Tributarios: 750.

El Gobierno, a propuesta de la Presidencia del Gobierno, y previo informe de la Comisión Superior de Personal, podrá modificar la distribución expresada.

- Ley 44/1978, de 8 de septiembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas³¹⁷

La Ley 44/1978, de 8 de septiembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, fue publicada el 11 de septiembre y tuvo como principales actores a los mismos que el citado RD 40/1977. Esta Ley, junto a la Ley 61/1978³¹⁸, de 27 de diciembre, del impuesto de Sociedades, supuso la reorganización tributaria, tras la entrada de la democracia en España.

La singularidad de esta importante norma radica en la utilización de la investigación, como función básica de la inspección tributaria, para la resolución de controversias, de forma previa a la derivación, propia de un Estado de Derecho a la jurisdicción contenciosa-administrativa.

³¹⁷ Ley 44/1978, de 8 de septiembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (BOE de 11 de septiembre). Texto original en la url: <https://www.boe.es/boe/dias/1978/09/11/pdfs/A21191-21199.pdf> con acceso el 9 de septiembre de 2021.

³¹⁸ La Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (BOE de 30 de diciembre). Texto original en la url: <https://www.boe.es/boe/dias/1978/12/30/pdfs/A29429-29437.pdf> con acceso el 9 de septiembre de 2021.

Capítulo VIII. Jurisdicción competente

- *Artículo treinta y tres. Uno. La jurisdicción contencioso-administrativa, previo agotamiento de la vía económico-administrativa, será la única competente para dirimir todas las controversias de hecho y de derecho que se susciten entre la Administración y los contribuyentes en relación con cualquiera de las cuestiones a que se refiere la presente Ley.*

Dos. Cuando la base imponible declarada sea inferior en un quinto a la cantidad que resulte en virtud de la estimación del consumo de la unidad familiar, más las diferencias puestas de manifiesto en las variaciones del patrimonio, será preceptiva la investigación de las operaciones bancarias del contribuyente, sin perjuicio de la utilización de los demás medios de prueba.

La liquidación girada por la Administración como consecuencia de esta investigación no se suspenderá, en ningún caso, aunque sea recurrida.

Los índices de consumo y sus valoraciones necesarios para la aplicación de este artículo se aprobarán por Ley.

Tres. El valor de los elementos patrimoniales ocultados en la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio o, en su caso, en la de este impuesto, será renta del período en que se descubran, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el artículo veintisiete de esta Ley, con un divisor fijo de cinco, salvo que la Administración pruebe que el período de generación de los incrementos es inferior, en cuyo caso se aplicará el divisor que corresponda.

- Real Decreto 3255/1978, por el que se desarrollan las funciones atribuidas al Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública, especialidad de Inspección Auxiliar³¹⁹.

El Real Decreto 3255/1978, por el que se desarrollan las funciones atribuidas al Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública, especialidad de Inspección Auxiliar fue publicado en el BOE, el 25 de enero de 1979. La norma se encuentra rubricada por el ministro de Hacienda, Francisco Fernández Ordóñez, quien también fue el impulsor de los citados: Real Decreto-ley 40/1977, por el que se reorganiza la Inspección Financiera y Tributaria y de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La justificación de este real decreto queda explicitada en su exposición de motivos:

El Real Decreto-Ley 14/1976, de 10 de agosto, había creado el cuerpo especial de gestión de la hacienda pública, incorporando al mismo entre otras especialidades el diploma de inspección auxiliar de tributos, que debía desempeñar funciones que no fueran de nivel superior, de acuerdo con las normas que se establecieran reglamentariamente.

Para efectividad de dicho Decreto-Ley, el Real Decreto 2828/1976, de 26 de noviembre, dispuso que los trabajos a desempeñar por los funcionarios que habiendo obtenido el diploma citado, se adscribieran a las tareas de inspección tributaria, serían las previstas en el artículo once del Decreto 1554/1974, de 30 de mayo, y disposiciones complementarias dictadas para el servicio administrativo de investigación tributaria, y las de la Orden de 31 de octubre de 1975, que desarrolló el citado Decreto 1554/1974.

³¹⁹ Real Decreto 3255/1978, de 29 de diciembre, por el que se desarrollan las funciones atribuidas al Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública, especialidad de Inspección Auxiliar (BOE de 25 de enero). Texto original en la url: <https://www.boe.es/boe/dias/1979/01/25/pdfs/A01908-01908.pdf> con acceso el 9 de septiembre de 2021.

Por su parte, ya en la etapa democrática, el Real Decreto-Ley 40/1977 que se reorganizaba la inspección financiera y tributaria, estableció como funciones del cuerpo especial de gestión de la hacienda pública, especialidad de inspección auxiliar, la inspección de los tributos en régimen de estimación directa y la determinación de bases imponible y cuotas en el régimen de estimación objetiva con los límites y condiciones determinadas reglamentariamente, así como la colaboración con los inspectores financieros y tributarios bajo la dirección de los mismos.

Por todo ello se hacía necesario concretar las funciones encomendadas al mencionado cuerpo especial, no solo en orden a la obtención de informes y pruebas relativas a elementos o circunstancias integrantes de los supuestos de hecho sometidos a gravamen, sino también en relación con las actuaciones inspectoras en los distintos tributos.

Por todo ello, el real decreto fue aprobado, a propuesta del Ministro de Hacienda y previo acuerdo del Consejo de Ministros, en la reunión celebrada el 29 de diciembre del año de promulgación.

Primero.- sin perjuicio de las competencias atribuidas a la inspección financiera y tributaria, los funcionarios pertenecientes al cuerpo especial de gestión de la hacienda pública, especialidad de inspección auxiliar, que en lo sucesivo pasaran a denominarse subinspectores de tributos, realizarán las siguientes actuaciones:

Primera.- la investigación y comprobación de aquellos tributos que determine el Ministerio de Hacienda respecto a los sujetos pasivos cuyas bases o cuotas en relación a los mismos estén dentro de los límites cuantitativos o cualitativos que les hagan susceptibles de ser determinados en régimen de estimación objetiva global o singular.

Asimismo, les corresponderá la investigación y comprobación de sujetos pasivos en relación a tributos censales o de mera apreciación material con las condiciones y límites que se determinen por el Ministerio de Hacienda, regularizando su situación tributaria cuando proceda o, en otro caso, poniendo en conocimiento de la inspección financiera los hechos y datos descubiertos.

Las actuaciones se documentarán, en su caso, en las correspondientes diligencias, comunicaciones y actas previas o definitivas.

Segunda.- la participación en las ponencias de las estimaciones objetivas globales, así como la determinación de rendimientos, bases imponible y cuotas en el régimen de estimación objetiva singular y la emisión de informes en los recursos formulados contra las asignaciones individuales por los contribuyentes incluidos en los regímenes de estimación objetiva.

Tercera.- la colaboración con los funcionarios de los cuerpos especiales de la inspección financiera y tributaria y de la inspección financiera, bajo la dirección de los mismos, en la toma de datos con trascendencia tributaria cerca de las personas públicas o privadas a que se refiere el artículo 111 de la ley general tributaria, tales como la obtención de información sobre hechos determinantes de exenciones, reducciones y bonificaciones tributarias, sobre la exactitud de las declaraciones de alta y baja en imposición directa e indirecta, sobre datos necesarios para la regularización de los procesos recaudatorios y sobre verificación de índices o signos relacionados con la imposición personal.

Las funciones atribuidas en los números uno y dos de este artículo al cuerpo especial de gestión de la hacienda pública, especialidad de subinspección de tributos, no

comprenderán actuaciones específicas concernientes o relacionadas con el censo y valoración de la propiedad inmobiliaria rustica y urbana.

Segundo.- los subinspectores de tributos tendrán las facultades de los artículos 141 y 142 de la Ley General Tributaria, con la condición de agentes de la autoridad, y estarán obligados a la observancia del secreto profesional en los términos señalados en el artículo 114 de la Ley de 16 de diciembre de 1940.

Tercero.- queda facultada la Dirección General de Inspección Tributaria para llevar a efecto los destinos y distribución territorial de los funcionarios pertenecientes al cuerpo especial de gestión de la hacienda pública que se incorporen en la especialidad de subinspectores de tributos en atención a las necesidades del servicio y de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente relativa a la función pública.

Cuarto.- corresponderá a los subdelegados de inspección en su calidad de inspectores jefes de zona la distribución de tareas que deban ser asignadas a cada uno de los funcionarios a que se refiera el artículo primero de este real decreto, conforme a las directrices que señale la dirección general de inspección tributaria de acuerdo con los pertinentes planes de actuación.

Quinto.- los subinspectores de tributos estarán bajo la dependencia directa de los subdelegados de inspección, jefe de zona y de los inspectores jefes de las respectivas delegaciones, y podrán actuar en unidades administrativas de inspección o de información cuya dirección corresponderá a los inspectores financieros y tributarios o de la inspección financiera designados al efecto.

Los inspectores jefes de zona y los inspectores jefes podrán recabar en cualquier momento para la inspección financiera y tributaria o la inspección financiera las actuaciones levadas a cabo por los subinspectores de tributos, cuando así lo estimen conveniente.

- Orden de 10 de marzo de 1979 por la que se desarrollan las funciones atribuidas al Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública, especialidad Subinspectores de Tributos³²⁰

La Orden de 10 de marzo de 1979 por la que se desarrollan las funciones atribuidas al Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública, especialidad Subinspectores de Tributos, fue publicada en el BOE el 7 de abril. Aunque los impulsores de la norma fueron los mismos: a la sazón, Francisco Fernández Ordóñez, como ministro del segundo gobierno de Adolfo Suárez González, se produjo la singular circunstancia de que, tras la promulgación de la Constitución española de 1978, se celebraron las primeras elecciones, bajo la nueva constitución, el 1 de marzo de 1979. Ante ese escenario, el segundo gobierno de Adolfo Suárez, del que formaba parte Francisco Fernández Ordóñez, se disolvió al asumir sus nuevas responsabilidades los ministros del tercer gobierno de Adolfo Suárez, el 6 de abril; por ello Francisco Fernández Ordóñez, ya no era ministro cuando se publicó la orden, estando en ese momento como titular de la cartera de hacienda, Jaime García Añoveros.

La orden especificó cada una de las actuaciones a realizar por los subinspectores de tributos en los distintos órdenes de la función inspectora; se explicitaba así, aquellos tributos que podrían

³²⁰ Orden de 10 de marzo de 1979 por la que se desarrollan las funciones atribuidas al Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública, especialidad Subinspectores de Tributos (BOE de 7 de abril). Texto original en la url: <https://www.boe.es/boe/dias/1979/04/07/pdfs/A08328-08329.pdf> con acceso el 9 de septiembre de 2021.

ser objeto de investigación y comprobación en régimen de estimación directa y las tareas a realizar en los regímenes de estimación objetiva y toma de datos.

1. Actuaciones en general.

Los funcionarios pertenecientes al cuerpo especial de gestión de la hacienda pública, especialidad subinspectores de tributos, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la inspección financiera y tributaria y a la inspección financiera, realizarán las actuaciones de toma de datos y de investigación y comprobación en régimen de estimación directa o en régimen de estimación objetiva de los tributos que se especifican en la presente orden.

2. Actuaciones en régimen de estimación directa.

Corresponderá a los subinspectores de tributos la investigación y comprobación de los siguientes tributos:

1. El impuesto sobre la renta de las personas físicas referente a sujetos pasivos integrados o no en una unidad familiar en los siguientes supuestos:

A) que la renta, excluidos los rendimientos derivados de la vivienda propia que constituya domicilio habitual de el o de los declarantes, este compuesta principalmente por rendimientos del trabajo que no excedan de 700.000 pesetas.

B) que la renta excluidos los rendimientos derivados de la vivienda propia que constituya domicilio habitual de el o de los declarantes, este compuesta por rendimientos de actividades empresariales, profesionales o artísticas, y estos puedan determinarse en régimen de estimación objetiva singular, aunque el sujeto pasivo haya ejercitado el derecho de renuncia a este régimen.

2. Cuando conforme al apartado anterior corresponda a los subinspectores de tributos la investigación y comprobación del impuesto sobre la renta de las personas físicas, investigarán y comprobarán también:

A) las retenciones que los sujetos pasivos han de efectuar sobre los rendimientos gravados por el impuesto que abonen como consecuencia del ejercicio de sus actividades empresariales, profesionales o artísticas.

B) el impuesto general sobre el tráfico de las empresas y el impuesto sobre el lujo, adquisiciones en general, que recaigan sobre las operaciones que los sujetos pasivos realicen en el ejercicio de su actividad.

C) el impuesto sobre el patrimonio neto o el impuesto extraordinario sobre el patrimonio que recaiga sobre los bienes y derechos atribuibles al sujeto pasivo.

3. El impuesto sobre el lujo que grava las adquisiciones y la tenencia o disfrute de automóviles, aviones de turismo y embarcaciones de recreo, y de palacios, hoteles particulares o chalets.

4. Las tasas sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias, y sobre el juego.

5. En tanto no prescriba el derecho de la administración para la determinación de la correspondiente deuda tributaria, los subinspectores de tributos investigarán y comprobarán en régimen de estimación directa los siguientes tributos:

A) licencia fiscal del impuesto sobre los rendimientos del trabajo personal correspondientes a actividades profesionales o artísticas ejercidas por personas físicas.

B) licencia fiscal del impuesto industrial correspondiente a actividades ejercidas por personas físicas.

C) cuota de beneficios del impuesto industrial respecto de aquellos sujetos pasivos que, sin haber estado expresamente excluidos del régimen de estimación objetiva de bases imponibles, según lo dispuesto en el artículo 36,4 del texto refundido del impuesto, renunciaron a él en tiempo y forma.

D) impuesto general sobre la renta de las personas físicas respecto de aquellos contribuyentes cuyas fuentes de renta, excluidos los ingresos procedentes de la vivienda propia, estén constituidas principalmente por el ejercicio de actividades sujetas a la licencia fiscal del impuesto sobre los rendimientos del trabajo personal o la licencia fiscal del impuesto industrial, cuando la base imponible de los correspondientes impuestos a cuenta haya de ser investigada o comprobada en régimen de estimación directa por los subinspectores de tributos o hay sido fijada en régimen de estimación objetiva global.

E) impuesto general sobre el tráfico de las empresas respecto de aquellos sujetos pasivos que sin haber estado expresamente excluidos del régimen de estimación objetiva global no se acogieron al mismo.

F) impuesto sobre el lujo, adquisiciones en general, respecto de aquellos sujetos pasivos que sin haber estado expresamente excluidos del régimen de estimación objetiva global no se acogieron al mismo.

G) impuesto sobre los rendimientos del trabajo personal e impuesto sobre las rentas del capital, cuando debieran ser objeto de retención por aquellos contribuyentes de la cuota proporcional del impuesto sobre los rendimientos del trabajo personal o de la cuota de beneficios del impuesto industrial, cuya base imponible haya de ser investigada o comprobada en régimen de estimación directa por los subinspectores de tributos o haya de ser determinada en régimen de estimación objetiva.

6. Los subinspectores de tributos, en la investigación y comprobación de los tributos a que se refiere el presente número, se regirán por lo dispuesto en los artículos 110 y 141 a 146 de la ley general tributaria.

7. Cuando con motivo de la investigación y comprobación de los tributos a que se refiere esta orden los subinspectores de tributos descubran hechos, situaciones, actos o documentos, y en general elementos de hechos imponibles que se consideren desconocidos para la administración y tengan relación con tributos cuya investigación o comprobación no les este atribuida, pondrán dichos hechos, situaciones, actos, documentos o elementos en conocimiento del jefe de inspección de la delegación de hacienda.

3. Actuaciones en régimen de estimación objetiva.

1. En el régimen de estimación objetiva singular, los subinspectores de tributos comprobarán las declaraciones anuales presentadas por los contribuyentes, formularán, en su caso, las oportunas propuestas razonadas de rendimientos, ingresos o valores distintos a los que figuren en la declaración y procederán, en caso de discrepancia, a la formalización de las correspondientes actas por impuestos directos e indirectos, realizando a estos efectos los estudios y actuaciones a que se refiere el artículo 140 de la ley general tributaria, y en particular:

- Examen de los requisitos objetivos del contribuyente para estar sometido a este régimen y de las renunciaciones presentadas.
- Emisión de las oportunas propuestas de exclusión.
- Comprobación de la veracidad de los datos consignados en las declaraciones formuladas.
- Examen de los libros y registros que han de llevar los sujetos pasivos sometidos a este régimen.
- Propuesta de las sanciones que procedan y, en su caso, propuestas de denuncia del régimen de estimación objetiva singular.
- Emisión de informes en los recursos que se formulen por los contribuyentes incluidos en el régimen de estimación objetiva singular.

2. En tanto que subsista el régimen de estimación objetiva global, los subinspectores de tributos podrán participar en las correspondientes ponencias como vocales y como ponentes, realizando a estos efectos los estudios y las actuaciones a que se refiere el artículo 140 de la ley general tributaria, y en particular:

- Depuración de los censos correspondientes y la comprobación de altas y bajas o de las inclusiones indebidas y renunciaciones.
- La toma de datos, preparación de propuestas y propuestas de estimación objetiva.
- Emisión de informes en los recursos que se formulen por los contribuyentes incluidos en el régimen de estimación objetiva global.

4. Actuaciones para la toma de datos.

Bajo la dirección de los funcionarios de los cuerpos especiales de la inspección financiera y tributaria y de la inspección financiera, los subinspectores de tributos realizarán las siguientes actuaciones:

- La comprobación e investigación de toda clase de datos, actos, situaciones y demás elementos de hechos con trascendencia tributaria.
- En general cuantas actuaciones análogas sean ordenadas por la jefatura del servicio de inspección tributaria de las que orgánica o funcionalmente dependan.

2. Las actuaciones a que se refiere este número se formalizarán en diligencias o comunicaciones conforme a lo dispuesto en el artículo 144 de la ley general tributaria.

5. Facultades.

Los subinspectores de tributos tendrán las facultades de los artículos 141 y 142 de la ley general tributaria, con la consideración de agentes de la autoridad a efectos de la responsabilidad penal de quienes cometieran desacatos contra sus personas, de hecho o de palabra, en actos de servicio o con motivo del mismo, y estarán obligados a la observancia del secreto profesional en los términos señalados en el artículo 114 de la ley de 16 de diciembre de 1940.

6. Distribución territorial.

La Dirección General de Inspección Tributaria, en atención a las necesidades del servicio, determinará la distribución territorial de los funcionarios pertenecientes al cuerpo especial

de gestión de la hacienda pública, especialidad subinspectores de tributos, y propondrá a la subsecretaría de hacienda la celebración de concursos para la atribución de destinos.

7. Dependencia orgánica.

Los subinspectores de tributos se integrarán en los servicios provinciales de inspección bajo la dependencia directa de los subdelegados de inspección-jefes de zona y de los inspectores jefes de las respectivas delegaciones, los cuales podrán recabar en cualquier momento para la inspección financiera, las actuaciones llevadas a cabo por los subinspectores de tributos, cuando así lo estimen conveniente.

Conforme a las directrices que señale la Dirección General de Inspección Tributaria en los pertinentes planes de actuación, los subdelegados de inspección en su calidad de inspectores-jefes de zona y los inspectores jefes de las delegaciones de hacienda distribuirán las tareas que deben realizar los subinspectores de tributos afectos a cada delegación de hacienda individualmente o integrados en unidades administrativas de inspección o información, bajo la dirección de los inspectores financieros y tributarios o de los inspectores financieros designados al efecto.

- Ley 44/1983, de Presupuestos Generales del Estado para 1984³²¹

La Ley 44/1983, de Presupuestos Generales del Estado para 1984, fue publicada en el BOE el 30 de diciembre. Su principal impulsor fue el ministro de economía y hacienda, Miguel Boyer Salvador, como miembro del primer gobierno socialista de Felipe González Márquez.

Hay que reconocer la singularidad coyuntural de esta norma, de gran importancia para los sistemas parlamentarios y de generación normalmente anual. La singularidad radica en que se utilizó la ley de presupuestos, para introducir una disposición adicional, la primera, para modificar y flexibilizar los sistemas de ingreso en los Cuerpos Especiales de Inspectores Financieros y Tributarios del Estado, de Inspectores de Aduanas e Impuestos Especiales, y de Intervención y Contabilidad de la Administración Civil del Estado. Parecería, en este sentido, que lo que a la inspección de educación supuso la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1984, a las inspecciones de hacienda, lo supuso la disposición adicional primera de la Ley 44/1983, de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 1984, si no en la supresión de un cuerpo, declarándolo a extinguir, sí en la apertura, para provocar una renovación de sus activos.

Disposiciones adicionales. Primera.

1. A las oposiciones para ingreso en los Cuerpos Especiales de Inspectores Financieros y Tributarios del Estado, a través de la Escuela de Inspección Financiera y Tributaria, de Inspectores de Aduanas e Impuestos Especiales, a través de la Escuela Oficial de Aduanas, y de Intervención y Contabilidad de la Administración Civil del Estado, podrán concurrir, en las condiciones especiales que se determinarán reglamentariamente, y con el 25 por 100 de las vacantes que se convoquen, los funcionarios del Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública, en activo o supernumerario, en cualquiera de las especialidades, que estén en posesión del título académico requerido para el ingreso en aquellos Cuerpos y cuenten con un mínimo de tres años de servicios efectivos en el Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública en cualquiera de sus especialidades.

³²¹Ley 44/1983, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1984 (BOE de 30 de diciembre). Texto original en la url: <https://www.boe.es/boe/dias/1983/12/30/pdfs/A34866-34884.pdf> con acceso el 9 de septiembre de 2021.

Queda modificado en los términos señalados en el apartado anterior, el párrafo dos del artículo 3 del Real Decreto-ley 40/1977, de 7 de septiembre, y se reduce al 15 por 100 la reserva de vacantes convocadas a que se refiere el párrafo tres de dicho artículo.

Asimismo, podrán concurrir en oposición restringida para ingreso en el Cuerpo Especial de Intervención y Contabilidad del Estado con reserva del 10 por 100 adicional de las plazas convocadas, los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Seguridad Social con dos años de servicios efectivos en dicho Cuerpo y siempre que reúnan los mismos requisitos exigidos en oposición libre.

2. Durante tres años se podrán nombrar funcionarios interinos para cubrir las plazas vacantes en el Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Administración Civil del Estado. Estos funcionarios cesarán en el momento en que la plaza ocupada sea provista por los correspondientes procedimientos selectivos.

- Real Decreto 939/1986, por el que se aprueba el Reglamento General de la Inspección de los Tributos³²²

El Real Decreto 939/1986, por el que se aprueba el Reglamento General de la Inspección de los Tributos, fue publicado en el BOE el 14 de mayo. Su principal impulsor fue Carlos Solchaga Catalán, que había sustituido en la cartera de Hacienda a Miguel Boyer Salvador, en la remodelación del primer gobierno socialista de Felipe González, producida el 5 de julio de 1985; en esas fechas el gobierno se encontraba en funciones tras la disolución de las Cortes, firmada el 22 de abril³²³.

La singularidad de esta norma, para el objeto de la investigación, radica en que la disposición, ya derogada, estableció las funciones de la inspección de tributos; las fuentes en las que establecer las funciones, facultades y actuaciones de la inspección de los tributos; los derechos, prerrogativas y consideraciones del personal inspector; y por último tanto sus deberes, como el el registro y establecimiento de los planes de actuación. Se señalan algunos artículos importantes, aunque sea en su enunciación, como antecedentes del actual reglamento y para facilitar el proceso de yuxtaposición.

Art. 2. Funciones de la inspección de los tributos.

Corresponde a la inspección de los tributos:

A) La investigación de los hechos imponibles para el descubrimiento de los que sean ignorados por la administración y su consiguiente atribución al sujeto pasivo u obligado tributario.

B) La integración definitiva de las bases tributarias mediante el análisis y evaluación de aquellas en sus distintos regímenes de determinación o estimación y la comprobación de las declaraciones y declaraciones-liquidaciones para determinar su veracidad y la

³²² Real Decreto 939/1986, de 25 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de la Inspección de los Tributos (BOE de 14 de mayo). Texto original en la url:

<https://www.boe.es/boe/dias/1986/05/14/pdfs/A17200-17219.pdf>, con acceso el 15 de junio de 2022.

³²³ Las siguientes elecciones generales se celebraron el 22 de junio de 1986. Fuente: página web de la Junta Electoral Central, en la url: <http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/elecciones/Generales-junio1986?p=1379061494717>, con acceso el 15 de junio de 2022.

correcta aplicación de las normas, estableciendo el importe de las deudas tributarias correspondientes.

C) Comprobar la exactitud de las deudas tributarias ingresadas en virtud de declaraciones-documentos de ingreso.

D) Practicar las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de comprobación e investigación.

E) Realizar, por propia iniciativa o a solicitud de los demás órganos de la administración tributaria, aquellas actuaciones inquisitivas o de información que deban llevarse a efecto cerca de los particulares o de otros organismos, y que directa o indirectamente conduzcan a la aplicación de los tributos.

F) La comprobación del valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos del hecho imponible.

G) Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la concesión o disfrute de cualesquiera beneficios, desgravaciones o restituciones fiscales, así como comprobar la concurrencia de las condiciones precisas para acogerse a regímenes tributarios especiales, principalmente los relacionados con el tráfico exterior de mercancías.

H) La información a los sujetos pasivos y demás obligados tributarios sobre las normas fiscales y acerca del alcance de las obligaciones y derechos que de las mismas se deriven.

I) El asesoramiento e informe a los órganos de la hacienda pública en cuanto afecte a los derechos y obligaciones de esta, sin perjuicio de las competencias propias de otros órganos.

J) Cuantas otras funciones se le encomienden por los órganos competentes del ministerio de economía y hacienda.

Art. 3. Fuentes

1. Las funciones, facultades y actuaciones de la inspección de los tributos se regirán:

A) Por la ley general tributaria, en cuanto esta u otra disposición de igual rango no preceptúe lo contrario.

B) Por las leyes reguladoras de los distintos tributos.

C) Por el presente reglamento y los propios de los distintos tributos.

D) En su caso, por las disposiciones dictadas por las comunidades autónomas o por las demás haciendas territoriales en el ámbito de sus respectivas competencias.

E) Por cuantas otras disposiciones integren el ordenamiento jurídico vigente y resulten de aplicación.

2. En todo caso, tendrán carácter supletorio la Ley de Procedimiento Administrativo, en cuanto no sea directamente aplicable, y las demás disposiciones generales de derecho administrativo.

Art. 4. Atribución de las funciones inspectoras a los órganos administrativos

1. Las funciones propias de la inspección de los tributos del estado será ejercidas por los siguientes órganos:

A) En la esfera central y respecto de todo el territorio nacional, por las direcciones generales de inspección financiera y tributaria y de aduanas e impuestos especiales, así como por el centro de gestión y cooperación tributaria, según sus respectivas competencias y las normas que regulan sus estructuras orgánicas y bajo la dirección de los órganos superiores correspondientes del ministerio de economía y hacienda.

B) En la esfera de la administración periférica de la hacienda pública, por los órganos correspondientes según las normas que regulan sus competencias y estructura orgánica.

Los órganos periféricos del centro de gestión y cooperación tributaria desarrollarán las funciones propias de la inspección de los tributos respecto de las contribuciones territoriales, cuya gestión tienen encomendada. El servicio de vigilancia aduanera ejercerá cuantas funciones le atribuya el ordenamiento jurídico vigente.

2. La inspección de los tributos del estado desempeñará sus funciones propias respecto de los tributos estatales. Asimismo, actuara respecto de los recargos establecidos sobre tales tributos en favor de otros entes públicos, de acuerdo con la ley y sin perjuicio de las fórmulas de colaboración que se establezcan.

3. Respecto de los tributos cedidos a las comunidades autónomas, corresponde a estas el ejercicio de las funciones propias de la inspección de los tributos, a través de sus órganos competentes, aplicando las normas legales y reglamentarias que regulen las actuaciones inspectoras del estado en materia tributaria y sin perjuicio de las actuaciones conjuntas que prevean los respectivos acuerdos de transferencia en materia de tributos cedidos respecto de las funciones en que han de concurrir la administración tributaria del estado y de las comunidades autónomas respectivas.

No obstante, en cuanto al impuesto extraordinario sobre el patrimonio de las personas físicas, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 12 de la ley 30/1983, de 28 de diciembre.

4. La inspección de los tributos locales cuya gestión esté a cargo del Estado, corresponderá a la inspección de los tributos del Estado, sin perjuicio de las fórmulas de colaboración por parte de las corporaciones locales, que establezca la normativa correspondiente. En otro caso, la inspección de los tributos se realizará por las corporaciones locales aplicando las normas legales y reglamentarias a que se refiere el artículo 3 de este reglamento.

Art. 5. Personal inspector

1. Las actuaciones derivadas de las funciones señaladas en el artículo 2 de este reglamento se realizarán por los funcionarios que desempeñen los correspondientes puestos de trabajo de los órganos con competencia para la inspección de los tributos. No obstante, actuaciones meramente preparatorias, o de comprobación, o prueba de hechos, o circunstancias con trascendencia tributaria podrán encomendarse a otros empleados públicos que no ostenten la condición de funcionarios, destinados en dichos órganos de acuerdo con la ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública.

2. El ministerio de economía y hacienda determinará, en los distintos órganos con competencias inspectoras, los puestos de trabajo que supongan el desempeño de funciones propias de la inspección de los tributos y determinará sus características y atribuciones específicas.

3. Los funcionarios que ocupen puestos de trabajo que supongan el desempeño de funciones propias de la inspección de los tributos, desde la toma de posesión en los mismos,

estarán investidos de los correspondientes derechos, prerrogativas y consideraciones y quedaran sujetos tanto a los deberes inherentes al ejercicio y dignidad de la función pública como a los propios de su específica condición.

Art. 6. Derechos, prerrogativas y consideraciones del personal inspector.

1. Los funcionarios de la inspección de los tributos, en el ejercicio de las funciones inspectoras, serán considerados agentes de la autoridad, a los efectos de la responsabilidad administrativa y penal de quienes ofrezcan resistencia o cometan atentado o desacato contra ellos, de hecho o de palabra, en actos de servicio o con motivo del mismo. Los jefes del centro respectivo o los delegados de hacienda darán cuenta de aquellos actos a los servicios jurídicos del estado para que ejerciten la acción legal que corresponda.

2. Los jefes de los centros directivos correspondientes proveerán al personal inspector de un carné u otra identificación que les acredite para el desempeño de su puesto de trabajo.

3. Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza; los jefes o encargados de oficinas civiles o militares del estado y de los demás entes públicos territoriales, las otras entidades a que se refiere el artículo 112 de la ley general tributaria y quienes en general ejerzan funciones públicas, deberán prestar a los funcionarios y demás personal de la inspección de los tributos, a su petición, el apoyo, concurso, auxilio y protección que le sean precisos.

Si así no se hiciere, se deducirán las responsabilidades a que hubiere lugar; en particular, los jefes del centro respectivo o los delegados de hacienda trasladarán, en su caso, lo actuado a los servicios jurídicos del estado, para que ejerciten las acciones que procedan.

Art. 7. Deberes.

1. La inspección de los tributos servirá con objetividad los intereses generales y actuará de acuerdo con los principios constitucionales de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho.

2. En el ejercicio de sus funciones, sin merma de su autoridad y del cumplimiento de sus deberes, la inspección de los tributos observará la más exquisita cortesía, guardando a los interesados y al público en general la mayor consideración e informando a aquellos, con motivo de las actuaciones inspectoras, tanto de sus derechos como acerca de sus deberes tributarios y de la conducta que deben seguir en sus relaciones con la administración, para facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, apoyando sus razones con textos legales.

3. Los funcionarios de la inspección de los tributos deberán guardar sigilo riguroso y observar estricto secreto respecto de los asuntos que conozcan por razón de su cargo.

La infracción de cualquiera de los deberes de secreto o sigilo constituirá falta administrativa grave, sin perjuicio de que por su naturaleza la conducta pudiera ser constitutiva de delito.

Constituirá falta administrativa muy grave la publicación o utilización indebida de secretos oficiales, así declarados por ley o clasificados como tales, y la infracción del particular deber de sigilo establecido en el apartado sexto del artículo 111 de la ley general tributaria.

4. Los resultados de cualesquiera actuaciones de la inspección de los tributos serán utilizados en todo caso por el órgano que haya realizado tales actuaciones en orden al adecuado desempeño de sus funciones inspectoras respecto del mismo o de otros sujetos pasivos u obligados tributarios.

Los órganos que tengan atribuidas las funciones propias de la inspección de los tributos se comunicaran cuantos datos conozcan con trascendencia tributaria, atendiendo a sus respectivas competencias funcionales o territoriales. Asimismo, comunicaran tales datos a cualesquiera otros órganos para los que sean de trascendencia en orden al adecuado desempeño de las funciones de gestión tributaria que tengan encomendadas.

La inspección de los tributos dará cuenta a la autoridad judicial, al ministerio fiscal o al órgano competente que proceda de los hechos que conozca en el curso de sus actuaciones y puedan ser constitutivos de delitos públicos o de infracciones administrativas, las cuales lesionen directa o indirectamente los derechos económicos de la hacienda pública. Del mismo modo facilitará los datos que le sean requeridos por la autoridad judicial competente con ocasión de la persecución de los citados delitos.

Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la inspección de los tributos en virtud de lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley General Tributaria y en la disposición adicional primera de la ley 14/1985, de 29 de mayo, de régimen fiscal de determinados activos financieros, solo podrán utilizarse para los fines tributarios encomendados al ministerio de economía y hacienda de acuerdo con los párrafos primero y segundo de este mismo apartado, y, en su caso, para la denuncia de hechos que puedan ser constitutivos de delitos monetarios, de contrabando, contra la hacienda pública y, en general, de cualesquiera delitos públicos.

5. Los funcionarios de la inspección de los tributos no estarán obligados a declarar como testigos en los procedimientos civiles ni en los penales, por delitos privados, cuando no pudieran hacerlo sin violar los deberes de secreto y sigilo que están obligados a guardar.

6. Todo el personal con destino en órganos o dependencias con competencias inspectoras queda sujeto al mismo deber de secreto y sigilo acerca de los hechos que conozca por razón de su puesto de trabajo, siéndole de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior.

Art. 8. Registro de las actuaciones.

La inspección de los tributos relacionara o registrara sus actuaciones en la forma que se determine por los centros directivos y con el detalle preciso para el debido control y constancia de las mismas.

Art. 9. Enumeración.

Las actuaciones inspectoras podrán ser:

- A) De comprobación e investigación.*
- B) De obtención de información con trascendencia tributaria.*
- C) De valoración.*
- D) De informe y asesoramiento.*

Art. 16. Forma de actuación.

Las actuaciones inspectoras podrán realizarse, bien por uno o varios actuarios, bien por equipos o unidades de inspección, en los términos que se establezcan por el ministerio de economía y hacienda.

Art. 19. Clases de planes.

1. En el ministerio de economía y hacienda se elaborará anualmente un plan nacional de inspección, utilizando, a tal efecto, el oportuno apoyo informático, con base en criterios de oportunidad, aleatoriedad u otros que se estimen pertinentes.

2. El plan nacional de inspección se formará por agregación de los planes elaborados y aprobados por las direcciones generales y centros competentes del ministerio de economía y hacienda. Dichos centros directivos prepararan los planes correspondientes a partir de las propuestas de los órganos territoriales competentes y bajo la superior coordinación de los órganos superiores del departamento de quienes dependan.

3. El plan nacional de inspección establecerá los criterios sectoriales o territoriales, cuantitativos o comparativos, o bien de cualquier otra especie que hayan de servir para seleccionar a los sujetos pasivos u obligados tributarios cerca de los cuales hayan de efectuarse las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación o de obtención de información para el próximo año.

4. Aprobado el plan nacional de inspección y de acuerdo con los criterios recogidos en el, los órganos que hayan de desarrollar las correspondientes actuaciones inspectoras formaran sus propios planes de inspección, los cuales se desagregaran mediante comunicación escrita en planes de cada funcionario, equipo o unidad de inspección.

Los planes de inspección a que se refiere este apartado tendrán la extensión temporal que se determine por el centro directivo competente.

Título II Documentación de las actuaciones inspectoras

Art. 44. Normas generales.

Las actuaciones de la inspección de los tributos se documentarán en diligencias, comunicaciones, informes y actas previas o definitivas.

Capítulo primero. Comunicaciones, diligencias e informes

Art. 45. Comunicaciones.

Art. 46. Diligencias.

Art. 48. Informes.

1. La inspección de los tributos emitirá, de oficio o a petición de terceros, los informes que:

A) sean preceptivos conforme al ordenamiento jurídico.

B) le soliciten otros órganos y servicios de la administración o los poderes legislativos y judicial en los términos previstos por las leyes.

C) resulten necesarios para la aplicación de los tributos; en cuyo caso, se fundamentará la conveniencia de emitirlos.

2. En particular, la inspección deberá emitir informe:

A) Para completar las actas de disconformidad o de prueba preconstituida que incoe.

B) Cuando resulte aplicable el régimen de estimación indirecta de bases tributarias o proceda la utilización de métodos indirectos.

C) Cuando se promueva la iniciación del procedimiento especial de declaración de fraude de ley en materia tributaria.

D) Para recoger los resultados de la comprobación de las regularizaciones o actualizaciones efectuadas por la empresa.

E) Cuando se solicite autorización para iniciar actuaciones de obtención de información cerca de personas o entidades que desarrollen actividades bancarias o crediticias y que afecten a movimientos de cuentas u operaciones conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de este reglamento.

F) Para completar aquellas diligencias que recojan hechos que pudieran ser constitutivos de infracción tributaria simple, detallando las circunstancias que pudieran servir para graduar en su caso la sanción correspondiente.

G) Con el fin de recoger la propuesta de determinación de la cifra relativa de negocios para su ulterior asignación o de la proporción de tributación a efectos del impuesto sobre el valor añadido en relación con los regímenes forales de concierto o convenio.

3. Cuando otros órganos o servicios de la administración o los poderes legislativo y judicial soliciten informe de la inspección, se emitirá, tramitándose, en su caso, a través de la dirección general competente o de la delegación de hacienda que corresponda.

En particular, se solicitará informe a la inspección:

A) cuando se reclame el correspondiente expediente por el tribunal económico-administrativo competente ante el que se haya solicitado la condonación graciable de sanciones impuestas con ocasión de actuaciones inspectoras, de acuerdo con el artículo 128 del reglamento de procedimiento de las reclamaciones económico-administrativas. Se solicitará, asimismo, informe por los órganos económico-administrativos cuando se interponga directamente reclamación contra la liquidación tributaria resultante de un acta de conformidad.

B) cuando se solicite por una persona o entidad que desarrolle actividades empresariales el aplazamiento o fraccionamiento del pago de deudas tributarias y el órgano competente para concederlo lo considere preciso en orden al aseguramiento de aquellas. En este caso, el informe versará acerca de la situación económico-financiera y patrimonial de la empresa.

Asimismo, habrá de acompañar informe de la inspección al expediente que se remita al órgano judicial competente o al ministerio fiscal, cuando se hayan apreciado indicios de posible delito contra la hacienda pública.

4. Siempre que el actuario lo estime necesario para la aplicación de los tributos podrá emitir informe, justificando la conveniencia de hacerlo.

Asimismo, los jefes de los órganos o entidades con funciones propias de la inspección, cuando lo juzguen conveniente para completar actuaciones inspectoras, podrán disponer que se emita informe por los actuarios o emitirlo ellos mismos a la vista del expediente.

La inspección de los tributos podrá emitir informe para describir la situación de los bienes o derechos del sujeto pasivo, retenedor o responsable al objeto de facilitar la gestión recaudatoria del cobro de las deudas tributarias liquidadas.

5. Cuando los informes de la inspección complementen la propuesta de liquidación contenida en un acta, recogerán, especialmente, el conjunto de hechos y los fundamentos de derecho que sustente aquella.

Art. 49. Actas de inspección.

1. Son actas aquellos documentos que extiende la inspección de los tributos con el fin de recoger los resultados de sus actuaciones de comprobación e investigación, proponiendo, en todo caso, la regularización que estime procedente de la situación tributaria del sujeto pasivo o retenedor o bien declarando correcta la misma.

Las actas son documentos directamente preparatorios de las liquidaciones tributarias derivadas de las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación, incorporando una propuesta de tales liquidaciones.

2. En las actas de la inspección que documenten el resultado de sus actuaciones se consignaran:

A) el lugar y la fecha de su formalización.

B) la identificación personal de los actuarios que la suscriben.

C) el nombre y apellidos, número del documento nacional de identidad y la firma de la persona con la que se entienden las actuaciones y el carácter o representación con que interviene en las mismas; así como, en cualquier caso, el nombre y apellidos o la razón o denominación social completa, el número de identificación fiscal y el domicilio tributario del interesado.

D) los elementos esenciales del hecho imponible y de su atribución al sujeto pasivo o retenedor, con expresión de los hechos y circunstancias con trascendencia tributaria que hayan resultado de las actuaciones inspectoras o referencia a las diligencias donde se hayan hecho constar.

E) en su caso, la regularización que los actuarios estimen procedente de las situaciones tributarias, con expresión, cuando proceda, de las infracciones que aprecien, incluyendo los intereses de demora y las sanciones pecuniarias aplicables, con especificación de los criterios para su graduación, y determinando la deuda tributaria debida por el sujeto pasivo, retenedor o responsable solidario.

F) la conformidad o disconformidad del sujeto pasivo, retenedor o responsable tributario.

G) la expresión de los tramites inmediatos del procedimiento incoado como consecuencia del acta y, cuando el acta sea de conformidad, de los recursos que procedan contra el acto de liquidación derivado de aquella, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.

3. Cuando sea empresario o profesional el sujeto pasivo o retenedor y respecto de los tributos para los que sea trascendente, deberá hacerse constar en el acta la situación de los libros o registros obligatorios del interesado, con expresión de los defectos o anomalías advertidos o, por el contrario, de que del examen de los mismos cabe deducir racionalmente que no existe anomalía alguna que sea sustancial para la exacción del tributo de que se trate.

4. Salvo lo dispuesto en el artículo 52 de este reglamento para las actas de comprobado y conforme, la inspección incoará un acta por cada periodo impositivo a que se extienda la comprobación respecto de los impuestos sobre la renta o el patrimonio de las personas físicas y sobre sociedades. En cuanto a los demás tributos, y respecto de las obligaciones que incumben a los retenedores, la inspección podrá extender una única acta respecto de todo el periodo objeto de comprobación.

En los impuestos sobre la renta y el patrimonio de las personas físicas, la inspección incoará un acta respecto de todos los contribuyentes integrados en la correspondiente unidad familiar.

5. Cuando de la regularización de la situación tributaria del sujeto pasivo o retenedor no resulte, total o parcialmente, la existencia de acciones y omisiones constitutivas de infracciones tributarias, pero sí de cuotas, cantidades o recargos debidos a la hacienda pública, se hará constar así expresamente en el acta, incluyéndose en la propuesta de regularización los intereses de demora correspondientes de acuerdo con el artículo 58 de la ley general tributaria.

6. La inspección de los tributos extenderá sus actas en los modelos oficiales aprobados al efecto por el ministerio de economía y hacienda.

Si por su extensión no pudieran recogerse en el modelo de acta todas las circunstancias que deban constar en ella, se reflejarán en anexo a la misma; el anexo formará parte del acta a todos los efectos y se formalizará en modelo oficial.

Art. 50. Actas previas.

1. Las actas que extiende la inspección de los tributos pueden ser previas o definitivas. Son actas previas las que dan lugar a liquidaciones de carácter provisional, a cuenta de las definitivas que posteriormente se puedan practicar.

Art. 51. Actas sin descubrimiento de deuda.

Art. 52. Actas de comprobado y conforme.

Art. 53. Actas sin descubrimiento de deuda con regularización de la situación tributaria del sujeto pasivo o retenedor.

Art. 54. Clases de actas a efectos de su tramitación.

Art. 55. Actas de conformidad.

Art. 56. Actas de disconformidad.

Art. 57. Actas con prueba preconstituida.

Art. 58. Lugar de formalización de las actas.

Art. 59. Tramitación de las diligencias.

Art. 62. Valor probatorio de las actas y diligencias de la inspección.

Art. 66. Delitos contra la hacienda pública.

1. Cuando la inspección de los tributos aprecie la existencia de acciones u omisiones que pudieran ser constitutivas de los delitos contra la hacienda pública regulados en el código penal pasará el tanto de culpa al órgano judicial competente o remitirá las actuaciones al ministerio fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador de carácter administrativo por los mismos hechos mientras el ministerio fiscal no devuelva las actuaciones o, en su caso, la autoridad judicial no dicte sentencia o auto de sobreseimiento firmes.

2. Si los hechos pudieran ser constitutivos del delito previsto en el artículo 349 del código penal, la inspección hará constar en diligencia los hechos y circunstancias determinantes a su juicio de la posible responsabilidad penal.

Art. 67. Actuaciones de colaboración.

- Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas³²⁴

La Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, fue publicado en el BOE el 7 de junio. Su principal impulsor fue Carlos Solchaga Catalán, ministro de Economía y Hacienda, en el tercer gobierno socialista de Felipe González.

La norma, de alto rango y de promulgación periódica, es utilizada en sus disposiciones adicionales, para dotar de nuevas herramientas, funciones y atribuciones a las inspecciones tributarias.

Disposiciones Adicionales

Decimotercera. Canje de activos financieros.

Tres. Régimen fiscal de los activos de la Deuda Pública Especial:

Se añade el punto:

e) Eficacia frente a las actuaciones administrativas realizadas en vía de gestión o inspección tributaria.

Decimoséptima. Modificación del artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991.

Dos. El número 3 del apartado Uno tendrá la siguiente redacción:

Corresponde a la Agencia Estatal de Administración Tributaria desarrollar las actuaciones administrativas necesarias para que el sistema tributario estatal y el aduanero se apliquen con generalidad y eficacia a todos los obligados tributarios, mediante los procedimientos de gestión, inspección y recaudación tanto formal como material, que minimicen los costes indirectos derivados de las exigencias formales necesarias para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Seis. Se da nueva redacción a los números 2 y 3 y al párrafo 1.º del número 4 del apartado Tres.

Número 4, párrafo 1.º:

Existirá un Consejo de Dirección presidido por el Presidente de la Agencia e integrado por el Director general de ésta, el Subsecretario de Economía y Hacienda, los Directores Generales de Tributos, de Coordinación con las Haciendas Territoriales, de Presupuestos, el Interventor General de la Administración del Estado, el Inspector General del Ministerio de Economía y Hacienda y por las demás personas que, con rango mínimo de Director General, pueda nombrar el Ministro de Economía y Hacienda a propuesta del Presidente de la Agencia.

³²⁴ Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (BOE de 7 de junio). Texto original en la url: <https://www.boe.es/boe/dias/1991/06/07/pdfs/A18665-18691.pdf> con acceso el 9 de septiembre de 2021. Deroga la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Ocho. El párrafo 1.º del número 2 del apartado Cuatro tendrá la siguiente redacción:

Se adscriben a la Agencia las Especialidades de Inspección Financiera y Tributaria y Gestión y Política Tributaria, e Inspección y Gestión de Aduanas e Impuestos Especiales, mencionadas en las letras a) y b) del artículo único, uno, del Real Decreto-Ley 2/1989, de 31 de marzo, la Escala de Técnicos de Hacienda a extinguir, el Cuerpo de Profesores Químicos de los Laboratorios de Aduanas, las Escalas Técnica, de Maquinistas Navales, y de Oficiales Marítimos del Servicio de Vigilancia Aduanera, las especialidades de Gestión y Liquidación, Gestión Aduanera y de Subinspectores de Tributos del Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública, las Escalas de Inspectores Jefes y de Oficiales de Radiocomunicación del Servicio de Vigilancia Aduanera, la especialidad de Agentes de la Hacienda Pública del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, el Cuerpo Administrativo de Aduanas a extinguir, las Escalas de Inspectores, Mecánicos Navales y Patrones del Servicio de Vigilancia Aduanera, el Cuerpo Especial de Auxiliares de Intervención de Puertos Francos de Canarias, las Escalas de Agentes de Investigación y de Marineros del Servicio de Vigilancia Aduanera, la Escala de Operadores Radiotelefonistas del Servicio de Vigilancia Aduanera a extinguir, y la Escala de Conductores del Servicio de Vigilancia Aduanera.

Catorce. El apartado siete, queda con la siguiente redacción:

La Intervención General de la Administración del Estado ejercerá en relación con la Agencia las facultades que como Centro directivo y gestor de la contabilidad pública le atribuyen los artículos 125 y 126 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, correspondiéndole:

Se añade el punto:

c) La inspección y verificación de la contabilidad de la Agencia para comprobar la fiabilidad de los estados contables y el cumplimiento de los principios y reglas establecidos para su formación.

Diecisiete. El apartado Diez, con el título «Servicio de auditoría» tendrá la siguiente redacción:

1. La Agencia dispondrá de un servicio de auditoría interna propio, que actuará bajo la superior coordinación de la Inspección General del Ministerio de Economía y Hacienda, sin perjuicio de las funciones que corresponden a la Inspección General de Servicios de la Administración Pública.

Dicho servicio ejercerá, además de las funciones anteriormente desarrolladas por la Inspección General del Ministerio, cualesquiera otras funciones de auditoría que correspondan a los nuevos criterios sobre organización y funcionamiento fijados a la Agencia. En particular, apoyará a los órganos rectores de la Agencia para el más adecuado cumplimiento de los objetivos y programas de actuación de ésta. Las relaciones de puestos de trabajo podrán adscribir con carácter exclusivo puestos de trabajo a los Inspectores de los Servicios del Ministerio de Economía y Hacienda.

2. Será de aplicación al personal destinado en la Inspección General que resulte integrado en el servicio mencionado en el apartado anterior, lo previsto en los párrafos tercero y séptimo del número 2, apartado Cuatro, de este artículo.

Decimonovena. Modificación de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

2. Se modifica el apartado 3 del artículo 92 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, que queda redactado en los términos siguientes:

3. La inspección de este impuesto será llevada a cabo por los órganos competentes de la Administración Tributaria del Estado, sin perjuicio de las delegaciones que puedan hacerse en los Ayuntamientos que lo soliciten, y de las fórmulas de colaboración que puedan establecerse con éstos y, en su caso, con las Diputaciones Provinciales, Cabildos o Consejos Insulares, en los términos que se disponga por el Ministro de Economía y Hacienda.

- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria³²⁵

- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, fue publicada en el BOE el 18 de diciembre. Su principal impulsor fue Cristóbal Ricardo Montoro Romero, como titular de la cartera de Hacienda, en el segundo gobierno popular de José M^a Aznar López.

La ley se compone de cinco títulos, con doscientos cuarenta y nueve artículos, dieciséis disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y once disposiciones finales.

La singularidad de esta norma de alto rango, radica en que es el actual compendio normativo general, que regula los principios generales del ordenamiento tributario y la relación entre la administración tributaria y los contribuyentes o sujetos pasivo. La ley dedica parte del título III a la inspección de tributos, desarrollando las facultades de la inspección de tributos, el objeto del procedimiento de inspección, el procedimiento de inspección, así como detalles concretos, como son los tipos de actas. Véanse las tablas 4.3.1 y 4.3.2.

- *Artículo 141. La inspección tributaria.*

La inspección tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas dirigidas a:

a) La investigación de los supuestos de hecho de las obligaciones tributarias para el descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración.

b) La comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones presentadas por los obligados tributarios.

c) La realización de actuaciones de obtención de información relacionadas con la aplicación de los tributos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 93 y 94 de esta ley.

d) La comprobación del valor de derechos, rentas, productos, bienes, patrimonios, empresas y demás elementos, cuando sea necesaria para la determinación de las obligaciones tributarias, siendo de aplicación lo dispuesto en los artículos 134 y 135 de esta ley.

³²⁵ Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18 de diciembre). Texto original en la url: <https://www.boe.es/boe/dias/2003/12/18/pdfs/A44987-45065.pdf> con acceso el 9 de septiembre de 2021.

Análisis normativo del BOE en la url: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23186&p=20210710&tn=6> con acceso el 15 de junio de 2022.

e) La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios o incentivos fiscales y devoluciones tributarias, así como para la aplicación de regímenes tributarios especiales.

f) La información a los obligados tributarios con motivo de las actuaciones inspectoras sobre sus derechos y obligaciones tributarias y la forma en que deben cumplir estas últimas.

g) La práctica de las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de comprobación e investigación.

h) La realización de actuaciones de comprobación limitada, conforme a lo establecido en los artículos 136 a 140 de esta ley.

i) El asesoramiento e informe a órganos de la Administración pública.

j) La realización de las intervenciones tributarias de carácter permanente o no permanente, que se regirán por lo dispuesto en su normativa específica y, en defecto de regulación expresa, por las normas de este capítulo con exclusión del artículo 149.

k) Las demás que se establezcan en otras disposiciones o se le encomienden por las autoridades competentes.

- Artículo 142. Facultades de la inspección de los tributos.

1. Las actuaciones inspectoras se realizarán mediante el examen de documentos, libros, contabilidad principal y auxiliar, ficheros, facturas, justificantes, correspondencia con transcendencia tributaria, bases de datos informatizadas, programas, registros y archivos informáticos relativos a actividades económicas, así como mediante la inspección de bienes, elementos, explotaciones y cualquier otro antecedente o información que deba de facilitarse a la Administración o que sea necesario para la exigencia de las obligaciones tributarias.

2. Cuando las actuaciones inspectoras lo requieran, los funcionarios que desarrollen funciones de inspección de los tributos podrán entrar, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, en las fincas, locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen, existan bienes sujetos a tributación, se produzcan hechos impositivos o supuestos de hecho de las obligaciones tributarias o exista alguna prueba de los mismos.

Para el acceso a los lugares mencionados en el párrafo anterior de los funcionarios de la inspección de los tributos, se precisará de un acuerdo de entrada de la autoridad administrativa que reglamentariamente se determine, salvo que el obligado tributario o la persona bajo cuya custodia se encontraren otorguen su consentimiento para ello.

Cuando para el ejercicio de las actuaciones inspectoras sea necesario entrar en el domicilio constitucionalmente protegido del obligado tributario, se aplicará lo dispuesto en el artículo 113 de esta Ley. La solicitud de autorización judicial requerirá incorporar el acuerdo de entrada a que se refiere el mencionado artículo, suscrito por la autoridad administrativa que reglamentariamente se determine.

3. Los obligados tributarios deberán atender a la inspección y le prestarán la debida colaboración en el desarrollo de sus funciones.

El obligado tributario que hubiera sido requerido por la inspección deberá personarse, por sí o por medio de representante, en el lugar, día y hora señalados para la práctica de las

actuaciones, y deberá aportar o tener a disposición de la inspección la documentación y demás elementos solicitados.

Excepcionalmente, y de forma motivada, la inspección podrá requerir la comparecencia personal del obligado tributario cuando la naturaleza de las actuaciones a realizar así lo exija.

4. Los funcionarios que desempeñen funciones de inspección serán considerados agentes de la autoridad y deberán acreditar su condición, si son requeridos para ello, fuera de las oficinas públicas.

Las autoridades públicas prestarán la protección y el auxilio necesario a los funcionarios para el ejercicio de las funciones de inspección.

- Artículo 145. Objeto del procedimiento de inspección.

1. El procedimiento de inspección tendrá por objeto comprobar e investigar el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias y en el mismo se procederá, en su caso, a la regularización de la situación tributaria del obligado mediante la práctica de una o varias liquidaciones.

2. La comprobación tendrá por objeto los actos, elementos y valoraciones consignados por los obligados tributarios en sus declaraciones.

3. La investigación tendrá por objeto descubrir la existencia, en su caso, de hechos con relevancia tributaria no declarados o declarados incorrectamente por los obligados tributarios.

Artículo 146. Medidas cautelares en el procedimiento de inspección.

1. En el procedimiento de inspección se podrán adoptar medidas cautelares debidamente motivadas para impedir que desaparezcan, se destruyan o alteren las pruebas determinantes de la existencia o cumplimiento de obligaciones tributarias o que se niegue posteriormente su existencia o exhibición.

Las medidas podrán consistir, en su caso, en el precinto, depósito o incautación de las mercancías o productos sometidos a gravamen, así como de libros, registros, documentos, archivos, locales o equipos electrónicos de tratamiento de datos que puedan contener la información de que se trate.

2. Las medidas cautelares serán proporcionadas y limitadas temporalmente a los fines anteriores sin que puedan adoptarse aquellas que puedan producir un perjuicio de difícil o imposible reparación.

3. Las medidas adoptadas deberán ser ratificadas por el órgano competente para liquidar en el plazo de 15 días desde su adopción y se levantarán si desaparecen las circunstancias que las motivaron.

. Subsección 2.ª Iniciación y desarrollo

- Artículo 147. Iniciación del procedimiento de inspección.

1. El procedimiento de inspección se iniciará:

a) De oficio.

b) A petición del obligado tributario, en los términos establecidos en el artículo 149 de esta ley.

2. Los obligados tributarios deben ser informados al inicio de las actuaciones del procedimiento de inspección sobre la naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones.

Artículo 148. Alcance de las actuaciones del procedimiento de inspección.

1. Las actuaciones del procedimiento de inspección podrán tener carácter general o parcial.

2. Las actuaciones inspectoras tendrán carácter parcial cuando no afecten a la totalidad de los elementos de la obligación tributaria en el período objeto de la comprobación y en todos aquellos supuestos que se señalen reglamentariamente. En otro caso, las actuaciones del procedimiento de inspección tendrán carácter general en relación con la obligación tributaria y período comprobado.

3. Cuando las actuaciones del procedimiento de inspección hubieran terminado con una liquidación provisional, el objeto de las mismas no podrá regularizarse nuevamente en un procedimiento de inspección que se inicie con posterioridad salvo que concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el párrafo a) del apartado 4 del artículo 101 de esta ley y exclusivamente en relación con los elementos de la obligación tributaria afectados por dichas circunstancias.

Artículo 149. Solicitud del obligado tributario de una inspección de carácter general.

1. Todo obligado tributario que esté siendo objeto de unas actuaciones de inspección de carácter parcial podrá solicitar a la Administración tributaria que las mismas tengan carácter general respecto al tributo y, en su caso, períodos afectados, sin que tal solicitud interrumpa las actuaciones en curso.

2. El obligado tributario deberá formular la solicitud en el plazo de 15 días desde la notificación del inicio de las actuaciones inspectoras de carácter parcial.

3. La Administración tributaria deberá ampliar el alcance de las actuaciones o iniciar la inspección de carácter general en el plazo de seis meses desde la solicitud. El incumplimiento de este plazo determinará que las actuaciones inspectoras de carácter parcial no interrumpan el plazo de prescripción para comprobar e investigar el mismo tributo y período con carácter general.

- Artículo 150. Plazo de las actuaciones inspectoras.

1. Las actuaciones del procedimiento de inspección deberán concluir en el plazo de:

a) 18 meses, con carácter general.

b) 27 meses, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias en cualquiera de las obligaciones tributarias o períodos objeto de comprobación:

1.º Que la Cifra Anual de Negocios del obligado tributario sea igual o superior al requerido para auditar sus cuentas.

2.º Que el obligado tributario esté integrado en un grupo sometido al régimen de consolidación fiscal o al régimen especial de grupo de entidades que esté siendo objeto de comprobación inspectora.

Cuando se realicen actuaciones inspectoras con diversas personas o entidades vinculadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, la concurrencia de las circunstancias previstas en esta letra en

cualquiera de ellos determinará la aplicación de este plazo a los procedimientos de inspección seguidos con todos ellos.

El plazo de duración del procedimiento al que se refiere este apartado podrá extenderse en los términos señalados en los apartados 4 y 5.

2. El plazo del procedimiento inspector se contará desde la fecha de notificación al obligado tributario de su inicio hasta que se notifique o se entienda notificado el acto administrativo resultante del mismo. A efectos de entender cumplida la obligación de notificar y de computar el plazo de resolución será suficiente acreditar que se ha realizado un intento de notificación que contenga el texto íntegro de la resolución.

En la comunicación de inicio del procedimiento inspector se informará al obligado tributario del plazo que le resulte aplicable.

En el caso de que las circunstancias a las que se refiere la letra b) del apartado anterior se aprecien durante el desarrollo de las actuaciones inspectoras el plazo será de 27 meses, contados desde la notificación de la comunicación de inicio, lo que se pondrá en conocimiento del obligado tributario.

El plazo será único para todas las obligaciones tributarias y periodos que constituyan el objeto del procedimiento inspector, aunque las circunstancias para la determinación del plazo sólo afecten a algunas de las obligaciones o periodos incluidos en el mismo, salvo el supuesto de desagregación previsto en el apartado 3.

A efectos del cómputo del plazo del procedimiento inspector no será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 104 de esta Ley respecto de los periodos de interrupción justificada ni de las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración.

3. El cómputo del plazo del procedimiento inspector se suspenderá desde el momento en que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) La remisión del expediente al Ministerio Fiscal o a la jurisdicción competente sin practicar la liquidación de acuerdo con lo señalado en el artículo 251 de esta Ley.

b) La recepción de una comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la suspensión o paralización respecto de determinadas obligaciones tributarias o elementos de las mismas de un procedimiento inspector en curso.

c) El planteamiento por la Administración Tributaria que esté desarrollando el procedimiento de inspección de un conflicto ante las Juntas Arbitrales previstas en la normativa relativa a las Comunidades Autónomas, en la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, y en la Ley 12/2002, de 23 de mayo, del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, o la recepción de la comunicación del mismo.

d) La notificación al interesado de la remisión del expediente de conflicto en la aplicación de la norma tributaria a la Comisión consultiva.

e) El intento de notificación al obligado tributario de la propuesta de resolución o de liquidación o del acuerdo por el que se ordena completar actuaciones a que se refiere el artículo 156.3.b) de esta Ley.

f) La comunicación a las Administraciones afectadas de los elementos de hecho y los fundamentos de derecho de la regularización en los supuestos a los que se refiere el artículo 47 ter del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco,

aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, y aquellos supuestos de carácter análogo establecidos en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por la Ley 28/1990, de 26 de diciembre.

g) La concurrencia de una causa de fuerza mayor que obligue a suspender las actuaciones.

Salvo que concurra la circunstancia prevista en la letra e) de este apartado, la inspección no podrá realizar ninguna actuación en relación con el procedimiento suspendido por las causas anteriores, sin perjuicio de que las solicitudes previamente efectuadas al obligado tributario o a terceros deban ser contestadas. No obstante, si la Administración Tributaria aprecia que algún periodo, obligación tributaria o elemento de esta no se encuentran afectados por las causas de suspensión, continuará el procedimiento inspector respecto de los mismos, pudiendo, en su caso, practicarse por ellos la correspondiente liquidación. A los solos efectos del cómputo del periodo máximo de duración, en estos casos, desde el momento en el que concurre la circunstancia de la suspensión, se desagregarán los plazos distinguiendo entre la parte del procedimiento que continúa y la que queda suspendida. A partir de dicha desagregación, cada parte del procedimiento se regirá por sus propios motivos de suspensión y extensión del plazo.

La suspensión del cómputo del plazo tendrá efectos desde que concurran las circunstancias anteriormente señaladas, lo que se comunicará al obligado tributario a efectos informativos, salvo que con esta comunicación pudiera perjudicarse la realización de investigaciones judiciales, circunstancia que deberá quedar suficientemente motivada en el expediente. En esta comunicación, se detallarán los periodos, obligaciones tributarias o elementos de estas que se encuentran suspendidos y aquellos otros respecto de los que se continúa el procedimiento por no verse afectados por dichas causas de suspensión.

La suspensión finalizará cuando tenga entrada en el registro de la correspondiente Administración Tributaria el documento del que se derive que ha cesado la causa de suspensión, se consiga efectuar la notificación, o se constate la desaparición de las circunstancias determinantes de la fuerza mayor. No obstante, en el caso contemplado en la letra d), el plazo de suspensión no podrá exceder del plazo máximo para la emisión del informe.

En el caso contemplado en la letra f), la suspensión finalizará cuando transcurra el plazo previsto en el párrafo segundo del apartado tres del artículo 47 ter del Concierto Económico sin que se hubiesen formulado observaciones por las Administraciones afectadas, cuando se hubiese llegado a un acuerdo sobre las observaciones planteadas en el seno de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa o cuando se puedan continuar las actuaciones de acuerdo con lo previsto en el apartado cuatro del citado artículo. Las referencias al artículo 47 ter del Concierto Económico deberán entenderse también realizadas al artículo equivalente del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.

Una vez finalizada la suspensión, el procedimiento continuará por el plazo que reste.

4. El obligado tributario podrá solicitar antes de la apertura del trámite de audiencia, en los términos que reglamentariamente se establezcan, uno o varios periodos en los que la inspección no podrá efectuar actuaciones con el obligado tributario y quedará suspendido el plazo para atender los requerimientos efectuados al mismo. Dichos periodos no podrán exceder en su conjunto de 60 días naturales para todo el procedimiento y supondrán una extensión del plazo máximo de duración del mismo.

El órgano actuante podrá denegar la solicitud si no se encuentra suficientemente justificada o si se aprecia que puede perjudicar el desarrollo de las actuaciones. La denegación no podrá ser objeto de recurso o reclamación económico-administrativa.

5. Cuando durante el desarrollo del procedimiento inspector el obligado tributario manifieste que no tiene o no va a aportar la información o documentación solicitada o no la aporta íntegramente en el plazo concedido en el tercer requerimiento, su aportación posterior determinará la extensión del plazo máximo de duración del procedimiento inspector por un período de tres meses, siempre que dicha aportación se produzca una vez transcurrido al menos nueve meses desde su inicio. No obstante, la extensión será de 6 meses cuando la aportación se efectúe tras la formalización del acta y determine que el órgano competente para liquidar acuerde la práctica de actuaciones complementarias.

Asimismo, el plazo máximo de duración del procedimiento inspector se extenderá por un periodo de seis meses cuando tras dejar constancia de la apreciación de las circunstancias determinantes de la aplicación del método de estimación indirecta, se aporten datos, documentos o pruebas relacionados con dichas circunstancias.

6. El incumplimiento del plazo de duración del procedimiento al que se refiere el apartado 1 de este artículo no determinará la caducidad del procedimiento, que continuará hasta su terminación, pero producirá los siguientes efectos respecto a las obligaciones tributarias pendientes de liquidar:

a) No se considerará interrumpida la prescripción como consecuencia de las actuaciones inspectoras desarrolladas durante el plazo señalado en el apartado 1.

La prescripción se entenderá interrumpida por la realización de actuaciones con posterioridad a la finalización del plazo al que se refiere el apartado 1. El obligado tributario tendrá derecho a ser informado sobre los conceptos y períodos a que alcanzan las actuaciones que vayan a realizarse.

b) Los ingresos realizados desde el inicio del procedimiento hasta la primera actuación practicada con posterioridad al incumplimiento del plazo de duración del procedimiento previsto en el apartado 1 y que hayan sido imputados por el obligado tributario al tributo y período objeto de las actuaciones inspectoras tendrán el carácter de espontáneos a los efectos del artículo 27 de esta Ley.

c) No se exigirán intereses de demora desde que se produzca dicho incumplimiento hasta la finalización del procedimiento.

7. Cuando una resolución judicial o económico-administrativa aprecie defectos formales y ordene la retroacción de las actuaciones inspectoras, éstas deberán finalizar en el período que reste desde el momento al que se retrotraigan las actuaciones hasta la conclusión del plazo previsto en el apartado 1 o en seis meses, si este último fuera superior. El citado plazo se computará desde la recepción del expediente por el órgano competente para ejecutar la resolución.

Se exigirán intereses de demora por la nueva liquidación que ponga fin al procedimiento. La fecha de inicio del cómputo del interés de demora será la misma que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 26, hubiera correspondido a la liquidación anulada y el interés se devengará hasta el momento en que se haya dictado la nueva liquidación.

- Artículo 151. Lugar de las actuaciones inspectoras.

1. Las actuaciones inspectoras podrán desarrollarse indistintamente, según determine la inspección:

- a) En el lugar donde el obligado tributario tenga su domicilio fiscal, o en aquel donde su representante tenga su domicilio, despacho u oficina.*
- b) En el lugar donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas.*
- c) En el lugar donde exista alguna prueba, al menos parcial, del hecho imponible o del presupuesto de hecho de la obligación tributaria.*
- d) En las oficinas de la Administración tributaria, cuando los elementos sobre los que hayan de realizarse las actuaciones puedan ser examinados en ellas.*
- e) En los lugares señalados en las letras anteriores o en otro lugar, cuando dichas actuaciones se realicen a través de los sistemas digitales previstos en el artículo 99.9 de esta Ley. La utilización de dichos sistemas requerirá la conformidad del obligado tributario.*

2. La inspección podrá personarse sin previa comunicación en las empresas, oficinas, dependencias, instalaciones o almacenes del obligado tributario, entendiéndose las actuaciones con éste o con el encargado o responsable de los locales.

3. Los libros y demás documentación a los que se refiere el apartado 1 del artículo 142 de esta ley deberán ser examinados en el domicilio, local, despacho u oficina del obligado tributario, en presencia del mismo o de la persona que designe, salvo que el obligado tributario consienta su examen en las oficinas públicas. No obstante, la inspección podrá analizar en sus oficinas las copias en cualquier soporte de los mencionados libros y documentos.

4. Tratándose de los registros y documentos establecidos por normas de carácter tributario o de los justificantes exigidos por éstas a los que se refiere el párrafo c) del apartado 2 del artículo 136 de esta ley, podrá requerirse su presentación en las oficinas de la Administración tributaria para su examen.

5. Reglamentariamente se podrán establecer criterios para determinar el lugar de realización de determinadas actuaciones de inspección.

6. Cuando el obligado tributario fuese una persona con discapacidad o con movilidad reducida, la inspección se desarrollará en el lugar que resulte más apropiado a la misma, de entre los descritos en el apartado 1 de este artículo.

- Artículo 152. Horario de las actuaciones inspectoras.

1. Las actuaciones que se desarrollen en oficinas públicas se realizarán dentro del horario oficial de apertura al público de las mismas y, en todo caso, dentro de la jornada de trabajo vigente.

2. Si las actuaciones se desarrollan en los locales del interesado se respetará la jornada laboral de oficina o de la actividad que se realice en los mismos, con la posibilidad de que pueda actuarse de común acuerdo en otras horas o días.

3. Cuando las circunstancias de las actuaciones lo exijan, se podrá actuar fuera de los días y horas a los que se refieren los apartados anteriores en los términos que se establezcan reglamentariamente.

. Subsección 3.ª Terminación de las actuaciones inspectoras

- Artículo 153. Contenido de las actas.

Las actas que documenten el resultado de las actuaciones inspectoras deberán contener, al menos, las siguientes menciones:

- a) El lugar y fecha de su formalización.*
- b) El nombre y apellidos o razón social completa, el número de identificación fiscal y el domicilio fiscal del obligado tributario, así como el nombre, apellidos y número de identificación fiscal de la persona con la que se entienden las actuaciones y el carácter o representación con que interviene en las mismas.*
- c) Los elementos esenciales del hecho imponible o presupuesto de hecho de la obligación tributaria y de su atribución al obligado tributario, así como los fundamentos de derecho en que se base la regularización.*
- d) En su caso, la regularización de la situación tributaria del obligado y la propuesta de liquidación que proceda.*
- e) La conformidad o disconformidad del obligado tributario con la regularización y con la propuesta de liquidación.*
- f) Los trámites del procedimiento posteriores al acta y, cuando ésta sea con acuerdo o de conformidad, los recursos que procedan contra el acto de liquidación derivado del acta, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.*
- g) La existencia o inexistencia, en opinión del actuario, de indicios de la comisión de infracciones tributarias.*
- h) Las demás que se establezcan reglamentariamente.*

- Artículo 154. Clases de actas según su tramitación.

- 1. A efectos de su tramitación, las actas de inspección pueden ser con acuerdo, de conformidad o de disconformidad.*
- 2. Cuando el obligado tributario o su representante se niegue a recibir o suscribir el acta, ésta se tramitará como de disconformidad.*

- Artículo 155. Actas con acuerdo.

1. Cuando para la elaboración de la propuesta de regularización deba concretarse la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados, cuando resulte necesaria la apreciación de los hechos determinantes para la correcta aplicación de la norma al caso concreto, o cuando sea preciso realizar estimaciones, valoraciones o mediciones de datos, elementos o características relevantes para la obligación tributaria que no puedan cuantificarse de forma cierta, la Administración tributaria, con carácter previo a la liquidación de la deuda tributaria, podrá concretar dicha aplicación, la apreciación de aquellos hechos o la estimación, valoración o medición mediante un acuerdo con el obligado tributario en los términos previstos en este artículo.

2. Además de lo dispuesto en el artículo 153 de esta ley, el acta con acuerdo incluirá necesariamente el siguiente contenido:

- a) El fundamento de la aplicación, estimación, valoración o medición realizada.*

b) Los elementos de hecho, fundamentos jurídicos y cuantificación de la propuesta de regularización.

c) Los elementos de hecho, fundamentos jurídicos y cuantificación de la propuesta de sanción que en su caso proceda, a la que será de aplicación la reducción prevista en el apartado 1 del artículo 188 de esta ley, así como la renuncia a la tramitación separada del procedimiento sancionador.

d) Manifestación expresa de la conformidad del obligado tributario con la totalidad del contenido a que se refieren los párrafos anteriores.

3. Para la suscripción del acta con acuerdo será necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Autorización del órgano competente para liquidar, que podrá ser previa o simultánea a la suscripción del acta con acuerdo.

b) La constitución de un depósito, aval de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución, de cuantía suficiente para garantizar el cobro de las cantidades que puedan derivarse del acta.

4. El acuerdo se perfeccionará mediante la suscripción del acta por el obligado tributario o su representante y la inspección de los tributos.

5. Se entenderá producida y notificada la liquidación y, en su caso, impuesta y notificada la sanción, en los términos de las propuestas formuladas, si transcurridos diez días, contados desde el siguiente a la fecha del acta, no se hubiera notificado al interesado acuerdo del órgano competente para liquidar rectificando los errores materiales que pudiera contener el acta con acuerdo.

Confirmadas las propuestas, el depósito realizado se aplicará al pago de dichas cantidades. Si se hubiera presentado aval o certificado de seguro de caución, el ingreso deberá realizarse en el plazo al que se refiere el apartado 2 del artículo 62 de esta ley, o en el plazo o plazos fijados en el acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento que la Administración tributaria hubiera concedido con dichas garantías y que el obligado al pago hubiera solicitado con anterioridad a la finalización del plazo del apartado 2 del artículo 62 de esta Ley.

6. El contenido del acta con acuerdo se entenderá íntegramente aceptado por el obligado y por la Administración tributaria. La liquidación y la sanción derivadas del acuerdo sólo podrán ser objeto de impugnación o revisión en vía administrativa por el procedimiento de declaración de nulidad de pleno derecho previsto en el artículo 217 de esta ley, y sin perjuicio del recurso que pueda proceder en vía contencioso-administrativa por la existencia de vicios en el consentimiento.

7. La falta de suscripción de un acta con acuerdo en un procedimiento inspector no podrá ser motivo de recurso o reclamación contra las liquidaciones derivadas de actas de conformidad o disconformidad.

- Artículo 156. Actas de conformidad.

1. Con carácter previo a la firma del acta de conformidad se concederá trámite de audiencia al interesado para que alegue lo que convenga a su derecho.

2. Cuando el obligado tributario o su representante manifieste su conformidad con la propuesta de regularización que formule la inspección de los tributos, se hará constar expresamente esta circunstancia en el acta.

3. Se entenderá producida y notificada la liquidación tributaria de acuerdo con la propuesta formulada en el acta si, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la fecha del acta, no se hubiera notificado al interesado acuerdo del órgano competente para liquidar, con alguno de los siguientes contenidos:

a) Rectificando errores materiales.

b) Ordenando completar el expediente mediante la realización de las actuaciones que procedan.

c) Confirmando la liquidación propuesta en el acta.

d) Estimando que en la propuesta de liquidación ha existido error en la apreciación de los hechos o indebida aplicación de las normas jurídicas y concediendo al interesado plazo de audiencia previo a la liquidación que se practique.

4. Para la imposición de las sanciones que puedan proceder como consecuencia de estas liquidaciones será de aplicación la reducción prevista en el apartado 1 del artículo 188 de esta ley.

5. A los hechos y elementos determinantes de la deuda tributaria respecto de los que el obligado tributario o su representante prestó su conformidad les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 144 de esta ley.

- Artículo 157. Actas de disconformidad.

1. Con carácter previo a la firma del acta de disconformidad se concederá trámite de audiencia al interesado para que alegue lo que convenga a su derecho.

2. Cuando el obligado tributario o su representante no suscriba el acta o manifieste su disconformidad con la propuesta de regularización que formule la inspección de los tributos, se hará constar expresamente esta circunstancia en el acta. Se podrá acompañar un informe del actuario cuando sea preciso completar la información recogida en el acta.

3. En el plazo de 15 días desde la fecha en que se haya extendido el acta o desde la notificación de la misma, el obligado tributario podrá formular alegaciones ante el órgano competente para liquidar.

4. Antes de dictar el acto de liquidación, el órgano competente podrá acordar la práctica de actuaciones complementarias en los términos que se fijen reglamentariamente.

5. Recibidas las alegaciones, el órgano competente dictará la liquidación que proceda, que será notificada al interesado.

- Real Decreto 1065/2007, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos³²⁶

El Real Decreto 1065/2007, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, fue publicado en el BOE el 5 de septiembre. Su principal impulsor fue Pedro Solbes Mira, como titular de la cartera de Economía y Hacienda, perteneciente al primer gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero

Esta densa y larga norma se compone de siete títulos, con doscientos ocho artículos, diecisiete disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias y una disposición final única. El real decreto desarrolla la Ley 58/2003, General Tributaria, que había establecido los principios y las normas jurídicas generales del sistema tributario español. Es muy sorprendente comprobar hasta qué nivel se encuentran reglamentadas las actuaciones de la inspección tributaria.

TÍTULO V. Actuaciones y procedimiento de inspección

CAPÍTULO I. Disposiciones generales

. Sección 1.ª Funciones de la inspección de los tributos

- Artículo 166. Atribución de funciones inspectoras a los órganos administrativos.

1. A efectos de lo dispuesto en este reglamento, se entiende por órganos de inspección tributaria los de carácter administrativo que ejerzan las funciones previstas en el artículo 141 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, así como aquellos otros que tengan atribuida dicha condición en las normas de organización específica.

2. En el ámbito de competencias del Estado, el ejercicio de las funciones de inspección tributaria corresponderá a:

a) Los órganos con funciones inspectoras de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en los términos establecidos en la normativa aplicable.

b) Los órganos de la Dirección General del Catastro que tengan atribuida la inspección catastral de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, en la forma que se determine mediante Orden del Ministro de Economía y Hacienda, y sin perjuicio de las posibles actuaciones conjuntas que puedan realizarse con las entidades locales.

3. Los órganos con funciones inspectoras de la Agencia Estatal de Administración Tributaria ejercerán sus funciones respecto de los siguientes tributos:

a) Aquellos cuya aplicación corresponda a la Administración tributaria del Estado, así como sobre los recargos establecidos sobre tales tributos a favor de otros entes públicos.

b) Los tributos cedidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.3 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo

³²⁶ Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (BOE de 5 de septiembre). Texto consolidado en la url: <https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-15984-consolidado.pdf> con acceso el 15 de junio de 2022.

sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, así como, en su caso, con lo dispuesto en las leyes reguladoras del régimen de cesión de tributos del Estado y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión a cada comunidad autónoma.

c) El Impuesto sobre Actividades Económicas de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora de las Haciendas Locales.

- Artículo 167. Colaboración de los órganos de inspección con otros órganos y Administraciones.

1. Las actuaciones inspectoras podrán realizarse mediante colaboración entre las distintas Administraciones tributarias, de oficio o a solicitud de la otra Administración.

Cuando los órganos de inspección de una Administración tributaria conozcan hechos o circunstancias con trascendencia tributaria para otras Administraciones tributarias, los pondrán en conocimiento de estas y los acompañarán de los elementos probatorios que procedan.

Las actuaciones inspectoras que tenga que efectuar una entidad local fuera de su territorio serán realizadas por los órganos competentes de su comunidad autónoma cuando deban realizarse en el ámbito territorial de esta, y por los órganos de la Administración tributaria del Estado o de la comunidad autónoma competente por razón del territorio en otro caso, previa solicitud del presidente de la corporación local.

Las actuaciones inspectoras que tenga que efectuar una comunidad autónoma fuera de su territorio serán realizadas, a solicitud de esta, por los órganos de inspección de la Administración tributaria del Estado o de la comunidad autónoma competente por razón de territorio, en función de las competencias correspondientes.

Los resultados de las actuaciones inspectoras a que se refieren los párrafos anteriores se documentarán en diligencia, a la que podrá acompañarse un informe si se estima conveniente, que se remitirá directamente al órgano competente de la Administración pública correspondiente.

2. Los órganos de inspección comunicarán a otros órganos de la misma Administración tributaria cuantos datos conozcan con trascendencia para el adecuado desempeño de las funciones que tengan encomendadas. A estos efectos, tendrán en cuenta sus respectivas competencias funcionales o territoriales.

Los órganos de inspección deberán prestar la colaboración necesaria a otros órganos inspectores de la misma Administración tributaria.

- Artículo 168. Inspecciones coordinadas con las comunidades autónomas.

1. Las Administraciones tributarias del Estado y de las comunidades autónomas podrán realizar actuaciones y procedimientos de inspección coordinados, cada una en su ámbito de competencias y de forma independiente, en relación con aquellos obligados tributarios que presenten un interés común o complementario para la aplicación de los tributos cuya inspección les corresponda.

Los órganos de las distintas Administraciones tributarias que intervengan en las actuaciones y procedimientos inspectores coordinados podrán realizar actuaciones concretas de modo simultáneo.

Las Administraciones tributarias implicadas tendrán acceso a toda la información y elementos de prueba obtenidos en las diferentes actuaciones y procedimientos de

inspección coordinados en cuanto resulten relevantes para la resolución del procedimiento iniciado, para su ampliación o para el inicio de otros procedimientos de acuerdo con sus respectivas competencias.

2. La Administración tributaria que se proponga la realización de estas actuaciones o procedimientos dirigirá escrito motivado a la otra Administración con indicación de los obligados tributarios, conceptos y periodos que pretende comprobar y señalará los conceptos y periodos que solicita que se comprueben por la otra Administración. La Administración tributaria destinataria de la propuesta comunicará, en el plazo de un mes desde que reciba el escrito, si acepta o no la propuesta.

3. En la comunicación del inicio de las actuaciones al obligado tributario o del inicio del procedimiento de inspección que se notifique en último lugar, o en ambas si se inician simultáneamente, se informará al obligado tributario de que se trata de actuaciones coordinadas.

4. Las actuaciones y procedimientos inspectores coordinados se finalizarán de forma independiente por cada Administración tributaria. Las resoluciones o, en su caso, las liquidaciones que se practiquen en cada uno de ellos sólo serán recurribles de forma independiente.

- Artículo 169. Personal inspector.

1. Las actuaciones inspectoras se realizarán por los funcionarios y demás personal al servicio de la Administración tributaria que desempeñen los correspondientes puestos de trabajo integrados en los órganos con funciones de inspección tributaria y, en su caso, por aquellos a que se refiere el artículo 61.2.

Corresponde a cada Administración tributaria, de acuerdo con la normativa que le sea aplicable, determinar en los distintos órganos con funciones inspectoras los puestos de trabajo que tengan a su cargo el desempeño de tales funciones y concretar sus características y atribuciones específicas.

2. Las actuaciones preparatorias y las de comprobación o prueba de hechos o circunstancias con trascendencia tributaria podrán encomendarse al personal al servicio de la Administración tributaria que no tenga la condición de funcionario.

. Sección 2.ª Planificación de las actuaciones inspectoras

- Artículo 170. Planes de inspección.

1. La planificación comprenderá las estrategias y objetivos generales de las actuaciones inspectoras y se concretará en el conjunto de planes y programas definidos sobre sectores económicos, áreas de actividad, operaciones y supuestos de hecho, relaciones jurídico-tributarias u otros, conforme a los que los órganos de inspección deberán desarrollar su actividad.

2. Cada Administración tributaria integrará en el Plan de control tributario a que se refiere el artículo 116 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el plan o los planes parciales de inspección, que se basarán en los criterios de riesgo fiscal, oportunidad, aleatoriedad u otros que se estimen pertinentes.

3. En el ámbito de la inspección catastral, corresponderá a la Dirección General del Catastro la aprobación de los planes de inspección, conforme a lo establecido en el texto refundido

de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, en las disposiciones dictadas en su desarrollo y en este reglamento.

4. En el ámbito de las competencias de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el plan o los planes parciales de inspección se elaborarán anualmente basándose en las directrices del Plan de control tributario, en el que se tendrán en cuenta las propuestas de los órganos inspectores territoriales, y se utilizará el oportuno apoyo informático.

5. El plan o los planes parciales de inspección recogerán los programas de actuación, ámbitos prioritarios y directrices que sirvan para seleccionar a los obligados tributarios sobre los que deban iniciarse actuaciones inspectoras en el año de que se trate.

6. El plan o los planes parciales de inspección en curso de ejecución podrán ser objeto de revisión, de oficio o a propuesta de los órganos territoriales.

7. Los planes de inspección, los medios informáticos de tratamiento de información y los demás sistemas de selección de los obligados tributarios que vayan a ser objeto de actuaciones inspectoras tendrán carácter reservado, no serán objeto de publicidad o de comunicación ni se pondrán de manifiesto a los obligados tributarios ni a órganos ajenos a la aplicación de los tributos.

8. La determinación por el órgano competente para liquidar de los obligados tributarios que vayan a ser objeto de comprobación en ejecución del correspondiente plan de inspección tiene el carácter de acto de mero trámite y no será susceptible de recurso o reclamación económico-administrativa.

Para la determinación de los obligados tributarios que vayan a ser objeto de comprobación se podrán tener en cuenta las propuestas formuladas por los órganos con funciones en la aplicación de los tributos.

9. Respecto de los tributos cedidos por el Estado a las comunidades autónomas, estas dispondrán de plena autonomía para elaborar sus propios planes de inspección con adecuación a su respectiva estructura orgánica. No obstante, en el caso de que se hayan aprobado planes conjuntos de actuaciones inspectoras de acuerdo con lo previsto en el artículo 50.1 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, las correspondientes Administraciones tributarias deberán adecuar sus respectivos planes de inspección a los criterios generales establecidos en los planes conjuntos por ellas aprobados, en relación con aquellas cuestiones o aspectos previstos en los mismos.

. Sección 3.ª Facultades de la inspección de los tributos

- Artículo 171. Examen de la documentación de los obligados tributarios.

1. Para realizar las actuaciones inspectoras, se podrán examinar, entre otros, los siguientes documentos de los obligados tributarios:

a) Declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos o solicitudes presentadas por los obligados tributarios relativas a cualquier tributo.

b) Contabilidad de los obligados tributarios, que comprenderá tanto los registros y soportes contables como las hojas previas o accesorias que amparen o justifiquen las anotaciones contables.

c) Libros registro establecidos por las normas tributarias.

d) Facturas, justificantes y documentos sustitutivos que deban emitir o conservar los obligados tributarios.

e) Documentos, datos, informes, antecedentes y cualquier otro documento con trascendencia tributaria.

2. La documentación y los demás elementos a que se refiere este artículo se podrán analizar directamente. Se exigirá, en su caso, la visualización en pantalla o la impresión en los correspondientes listados de datos archivados en soportes informáticos o de cualquier otra naturaleza.

Asimismo, se podrá obtener copia en cualquier soporte de los datos, libros o documentos a los que se refiere el apartado anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 34.1.h) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

3. Los obligados tributarios deberán poner a disposición del personal inspector la documentación a la que se refiere el apartado 1.

Cuando el personal inspector solicite al obligado tributario datos, informes o antecedentes que no deban hallarse a disposición inmediata de la Administración tributaria, se concederá con carácter general un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la notificación del requerimiento, para cumplir con el deber de colaboración. El plazo concedido para la contestación a las reiteraciones de los requerimientos de información que no deba hallarse a disposición inmediata de la Administración tributaria será con carácter general de 5 días hábiles.

Cuando los sujetos obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas a los que se refiere el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, aporten documentación directamente al órgano de inspección actuante en el curso de su comparecencia, la documentación podrá ser admitida por dicho órgano con el objeto de lograr la eficacia de la actuación administrativa. En caso de admitirse, el obligado tributario no estará obligado a remitir tales documentos por medios electrónicos.

- Artículo 172. Entrada y reconocimiento de fincas.

1. Los funcionarios y demás personal al servicio de la Administración tributaria que desarrollen actuaciones inspectoras tienen la facultad de entrada y reconocimiento de los lugares a que se refiere el artículo 142.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuando aquellas así lo requieran.

2. En el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, cuando el obligado tributario o la persona bajo cuya custodia se encontraran los mencionados lugares se opusiera a la entrada de los funcionarios de inspección, se precisará autorización escrita del delegado o del director de departamento del que dependa el órgano actuante, sin perjuicio de la adopción de las medidas cautelares que procedan.

En el ámbito de la Dirección General del Catastro la autorización a que se refiere el párrafo anterior corresponderá al Director General.

3. Cuando la entrada o reconocimiento afecte al domicilio constitucionalmente protegido de un obligado tributario, se precisará el consentimiento del interesado o autorización judicial.

4. En la entrada y reconocimiento judicialmente autorizados, los funcionarios de inspección podrán adoptar las medidas cautelares que estimen necesarias.

Una vez finalizada la entrada y reconocimiento, se comunicará al órgano jurisdiccional que las autorizaron las circunstancias, incidencias y resultados.

5. A efectos de lo dispuesto en este artículo, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 anterior, se considerará que el obligado tributario o la persona bajo cuya custodia se encuentren los lugares a que se refiere el artículo 142.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, prestan su conformidad a la entrada y reconocimiento cuando ejecuten los actos normalmente necesarios que dependan de ellos para que las actuaciones puedan llevarse a cabo.

Si se produce la revocación del consentimiento del obligado tributario para la permanencia en los lugares en los que se estén desarrollando las actuaciones, los funcionarios de inspección, antes de la finalización de estas, podrán adoptar las medidas cautelares reguladas en el artículo 146 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

- Artículo 173. Obligación de atender a los órganos de inspección.

1. Los obligados tributarios deberán atender a los órganos de inspección y les prestarán la debida colaboración en el desarrollo de sus funciones.

Tratándose de un grupo que tribute en el régimen de consolidación fiscal, en relación con el Impuesto sobre Sociedades, o en el régimen especial del grupo de entidades, en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido, deberán atender a los órganos de inspección tanto la sociedad representante del grupo como las entidades dependientes.

2. Cuando el personal inspector se persone sin previa comunicación en el lugar donde deban practicarse las actuaciones, el obligado tributario o su representante deberán atenderles si estuviesen presentes. En su defecto, deberá colaborar en las actuaciones cualquiera de las personas encargadas o responsables de tales lugares, sin perjuicio de que en el mismo momento y lugar se pueda requerir la continuación de las actuaciones en el plazo que se señale y adoptar las medidas cautelares que resulten procedentes.

3. El obligado tributario o su representante deberán hallarse presentes en las actuaciones inspectoras cuando a juicio del órgano de inspección sea preciso para la adecuada práctica de aquellas.

4. En los puertos, estaciones de ferrocarril y de los demás transportes terrestres, en los aeropuertos o en los mercados centrales, mataderos, lonjas y lugares de naturaleza análoga, se permitirá libremente la entrada del personal inspector a sus estaciones, muelles, oficinas y demás instalaciones para la toma de datos de facturaciones, entradas y salidas u otros similares, y se podrá requerir a los empleados para que ratifiquen los datos y antecedentes tomados.

5. Asimismo, el personal inspector está facultado para:

a) Recabar información de los trabajadores o empleados sobre cuestiones relativas a las actividades en que participen.

b) Realizar mediciones o tomar muestras, así como obtener fotografías, croquis o planos. Estas operaciones podrán ser realizadas por el personal inspector en los términos del artículo 169.

c) Recabar el dictamen de peritos. A tal fin, en los órganos con funciones de inspección podrá prestar sus servicios el personal facultativo.

d) Exigir la exhibición de objetos determinantes de la exacción de un tributo.

e) Verificar los sistemas de control interno de la empresa, cuando pueda facilitar la comprobación de la situación tributaria del obligado.

f) Verificar y analizar los sistemas y equipos informáticos mediante los que se lleve a cabo, total o parcialmente, la gestión de la actividad económica.

. Sección 4.ª Lugar de las actuaciones inspectoras

- Artículo 174. Lugar de las actuaciones inspectoras.

1. Las actuaciones inspectoras podrán desarrollarse en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 151.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, según determinen los órganos de inspección.

2. Las actuaciones relativas al análisis de la documentación a que se refiere el artículo 142.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, deberán practicarse en el lugar donde legalmente deban hallarse los libros de contabilidad o documentos, con las siguientes excepciones:

a) Cuando exista previa conformidad del obligado tributario, que se hará constar en diligencia, podrán examinarse en las oficinas de la Administración tributaria o en cualquier otro lugar en el que así se acuerde.

b) Cuando se hubieran obtenido copias en cualquier soporte de los libros y documentos a que se refiere el artículo 142.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, podrán examinarse en las oficinas de la Administración tributaria.

c) Cuando se trate de registros y documentos establecidos por normas de carácter tributario o de los justificantes exigidos por estas, se podrá requerir su presentación en las oficinas de la Administración tributaria para su examen.

d) Cuando las actuaciones de inspección no tengan relación con el desarrollo de una actividad económica, se podrá requerir la presentación en las oficinas de la Administración tributaria correspondiente de los documentos y justificantes necesarios para la debida comprobación de su situación tributaria, siempre que estén establecidos o sean exigidos por normas de carácter tributario o se trate de justificantes necesarios para probar los hechos o las circunstancias consignados en las declaraciones tributarias.

3. Los órganos de inspección en cuyo ámbito de competencia territorial se encuentre el domicilio fiscal del obligado tributario podrán examinar todos los libros, documentos o justificantes que deban ser aportados, aunque se refieran a bienes, derechos o actividades que radiquen, aparezcan o se desarrollen en un ámbito territorial distinto.

Del mismo modo, los órganos de inspección cuya competencia territorial no corresponda al domicilio fiscal del obligado tributario podrán desarrollar en cualquiera de los demás lugares a que se refiere el artículo 151 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las actuaciones que procedan en relación con dicho obligado.

. Sección 5.ª Documentación de las actuaciones inspectoras

- Artículo 175. Normas generales.

Las actuaciones inspectoras se documentarán en comunicaciones, diligencias, informes, actas y demás documentos en los que se incluyan actos de liquidación y otros acuerdos resolutorios, en los términos establecidos en este reglamento.

Artículo 176. Actas de inspección.

1. *En las actas de inspección a que se refiere el artículo 143.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se consignarán, además de las menciones contenidas en el artículo 153 de dicha ley, los siguientes extremos:*

a) Nombre y apellidos de los funcionarios que las suscriban.

b) La fecha de inicio de las actuaciones, el plazo del procedimiento y las circunstancias que afectan a su cómputo de acuerdo con los apartados 3, 4 y 5 del artículo 150 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

c) La presentación o no de alegaciones por el obligado tributario durante el procedimiento o en el trámite de audiencia y, en el caso de que las hubiera efectuado, la valoración jurídica de las mismas por el funcionario que suscribe el acta. No obstante, cuando se suscriba un acta de disconformidad, la valoración de las alegaciones presentadas podrá incluirse en el informe a que se refieren los artículos 157.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 188.2 de este reglamento.

d) El carácter provisional o definitivo de la liquidación que derive del acta. En el caso de liquidación provisional se harán constar las circunstancias que determinan dicho carácter y los elementos de la obligación tributaria a que se haya extendido la comprobación.

e) En el caso de actas con acuerdo deberá hacerse constar, además de lo señalado en el artículo 155.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la fecha en que el órgano competente ha otorgado la preceptiva autorización y los datos identificativos del depósito o de la garantía constituidos por el obligado tributario.

2. *Cuando el obligado tributario esté sujeto a obligaciones contables y registrales en relación con la obligación tributaria y periodo comprobado, deberá hacerse constar en el acta la situación de los libros o registros obligatorios, con expresión, en su caso, de los defectos o anomalías que tengan trascendencia para la resolución del procedimiento o para determinar la existencia o calificación de infracciones tributarias.*

3. *En relación con cada obligación tributaria podrá extenderse una única acta respecto de todo el ámbito temporal objeto de la comprobación a fin de que la deuda resultante se determine mediante la suma algebraica de las liquidaciones referidas a los distintos periodos comprobados.*

Capítulo II

Procedimiento de inspección

. Sección 1.ª Iniciación del procedimiento de inspección

- Artículo 177. Iniciación de oficio del procedimiento de inspección.

1. *El procedimiento de inspección podrá iniciarse mediante comunicación notificada al obligado tributario para que se persone en el lugar, día y hora que se le señale y tenga a disposición de los órganos de inspección o aporte la documentación y demás elementos que se estimen necesarios, en los términos del artículo 87.*

2. *Cuando se estime conveniente para la adecuada práctica de las actuaciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 172 de este reglamento, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 147.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el procedimiento de inspección podrá iniciarse sin previa comunicación mediante personación en la empresa,*

oficinas, dependencias, instalaciones, centros de trabajo o almacenes del obligado tributario o donde exista alguna prueba de la obligación tributaria, aunque sea parcial. En este caso, las actuaciones se entenderán con el obligado tributario si estuviese presente y, de no estarlo, con los encargados o responsables de tales lugares.

- Artículo 178. Extensión y alcance de las actuaciones del procedimiento de inspección.

1. Las actuaciones del procedimiento inspector se extenderán a una o varias obligaciones y periodos impositivos o de liquidación, y podrán tener alcance general o parcial en los términos del artículo 148 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2. Las actuaciones del procedimiento de inspección tendrán carácter general, salvo que se indique otra cosa en la comunicación de inicio del procedimiento inspector o en el acuerdo al que se refiere el apartado 5 de este artículo que deberá ser comunicado.

3. Las actuaciones del procedimiento inspector tendrán carácter parcial en los siguientes supuestos:

a) Cuando las actuaciones inspectoras no afecten a la totalidad de los elementos de la obligación tributaria en el periodo objeto de comprobación.

b) Cuando las actuaciones se refieran al cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios o incentivos fiscales, así como cuando las actuaciones tengan por objeto la comprobación del régimen tributario aplicable.

c) Cuando tengan por objeto la comprobación de una solicitud de devolución siempre que se limite exclusivamente a constatar que el contenido de la declaración, autoliquidación o solicitud presentada se ajusta formalmente a lo anotado en la contabilidad, registros y justificantes contables o extracontables del obligado tributario, sin perjuicio de la posterior comprobación completa de su situación tributaria.

4. La extensión y el alcance general o parcial de las actuaciones deberán hacerse constar al inicio de estas mediante la correspondiente comunicación. Cuando el procedimiento de inspección se extienda a distintas obligaciones tributarias o periodos, deberá determinarse el alcance general o parcial de las actuaciones en relación con cada obligación y periodo comprobado. En caso de actuaciones de alcance parcial deberán comunicarse los elementos que vayan a ser comprobados o los excluidos de ellas.

5. Cuando en el curso del procedimiento se pongan de manifiesto razones que así lo aconsejen, el órgano competente podrá acordar de forma motivada:

a) La modificación de la extensión de las actuaciones para incluir obligaciones tributarias o periodos no comprendidos en la comunicación de inicio o excluir alguna obligación tributaria o periodo de los señalados en dicha comunicación.

b) La ampliación o reducción del alcance de las actuaciones que se estuvieran desarrollando respecto de las obligaciones tributarias y periodos inicialmente señalados. Asimismo, se podrá acordar la inclusión o exclusión de elementos de la obligación tributaria que esté siendo objeto de comprobación en una actuación de alcance parcial.

- Artículo 179. Solicitud del obligado tributario de una inspección de alcance general.

1. La solicitud a que se refiere el artículo 149 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, deberá formularse mediante escrito dirigido al órgano competente para liquidar o comunicarse expresamente al actuario, quien deberá recoger esta manifestación en

diligencia y dará traslado de la solicitud al órgano competente para liquidar. Esta solicitud incluirá el contenido previsto en el artículo 88.2 de este reglamento.

2. Recibida la solicitud, el órgano competente para liquidar acordará si la inspección de carácter general se va a realizar como ampliación del alcance del procedimiento ya iniciado o mediante el inicio de otro procedimiento.

3. La inadmisión de la solicitud por no cumplir los requisitos establecidos en el artículo 149 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, deberá estar motivada y será notificada al obligado tributario. Contra el acuerdo de inadmisión no podrá interponerse recurso de reposición ni reclamación económico-administrativa, sin perjuicio de que pueda reclamarse contra el acto o actos administrativos que pongan fin al procedimiento de inspección.

. Sección 2.ª Tramitación del procedimiento de inspección

- Artículo 180. Tramitación del procedimiento inspector.

1. En el curso del procedimiento de inspección se realizarán las actuaciones necesarias para la obtención de los datos y pruebas que sirvan para fundamentar la regularización de la situación tributaria del obligado tributario o para declararla correcta.

2. La dirección de las actuaciones inspectoras corresponde a los órganos de inspección. Los funcionarios que tramiten el procedimiento decidirán el lugar, día y hora en que dichas actuaciones deban realizarse.

Se podrá requerir la comparecencia del obligado tributario en las oficinas de la Administración tributaria o en cualquier otro de los lugares a que se refiere el artículo 151 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Cuando exista personación, previa comunicación o sin ella, en el domicilio fiscal, oficinas, dependencias, instalaciones o almacenes del obligado tributario, se deberá prestar la debida colaboración y proporcionar el lugar y los medios auxiliares necesarios para el ejercicio de las funciones inspectoras.

3. Al término de las actuaciones de cada día que se hayan realizado en presencia del obligado tributario, el personal inspector que esté desarrollando las actuaciones podrá fijar el lugar, día y hora para su reanudación, que podrá tener lugar el día hábil siguiente. No obstante, los requerimientos de comparecencia en las oficinas de la Administración tributaria no realizados en presencia del obligado tributario deberán habilitar para ello un plazo mínimo de 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento.

4. Sin perjuicio del ejercicio de las facultades y funciones inspectoras, las actuaciones del procedimiento deberán practicarse de forma que se perturbe lo menos posible el desarrollo normal de las actividades laborales o económicas del obligado tributario.

- Artículo 181. Medidas cautelares.

1. Los funcionarios que estén desarrollando las actuaciones en el procedimiento de inspección podrán adoptar las medidas cautelares que sean necesarias para el aseguramiento de los elementos de prueba en los términos previstos en el artículo 146 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2. El precinto se realizará mediante la ligadura sellada o por cualquier otro medio que permita el cierre o atado de libros, registros, equipos electrónicos, sobres, paquetes,

cajones, puertas de estancias o locales u otros elementos de prueba, a fin de que no se abran sin la autorización y control de los órganos de inspección.

El depósito consistirá en poner dichos elementos de prueba bajo la custodia o guarda de la persona física o jurídica que se determine por la Administración.

La incautación consistirá en la toma de posesión de elementos de prueba de carácter mueble y se deberán adoptar las medidas que fueran precisas para su adecuada conservación.

Los documentos u objetos depositados o incautados podrán, en su caso, ser previamente precintados.

3. Para la adopción de las medidas cautelares, se podrá recabar el auxilio y colaboración que se consideren precisos de las autoridades competentes y sus agentes, que deberán prestarlo en los términos del artículo 142.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

4. La adopción de las medidas cautelares deberá documentarse mediante diligencia en la que junto a la medida adoptada y el inventario de los bienes afectados se harán constar sucintamente las circunstancias y la finalidad que determinan su adopción y se informará al obligado tributario de su derecho a formular alegaciones en los términos del apartado siguiente. Dicha diligencia se extenderá en el mismo momento en el que se adopte la medida cautelar, salvo que ello no sea posible por causas no imputables a la Administración, en cuyo caso se extenderá en cuanto desaparezcan las causas que lo impiden, y se remitirá inmediatamente copia al obligado tributario.

Cuando la medida consista en el depósito se dejará constancia de la identidad del depositario, de su aceptación expresa y de que ha quedado advertido sobre el deber de conservar a disposición de los órganos de inspección en el mismo estado en que se le entregan los elementos depositados y sobre las responsabilidades civiles o penales en las que pudiera incurrir en caso de incumplimiento.

5. En el plazo improrrogable de cinco días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la medida cautelar, el obligado tributario podrá formular alegaciones ante el órgano competente para liquidar, que deberá ratificar, modificar o levantar la medida adoptada mediante acuerdo debidamente motivado en el plazo de 15 días desde su adopción, que deberá comunicarse al obligado.

El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior no podrá ser objeto de recurso o reclamación económico-administrativa, sin perjuicio de que se pueda plantear la procedencia o improcedencia de la adopción de las medidas cautelares en los recursos y reclamaciones que, en su caso puedan interponerse contra la resolución que ponga fin al procedimiento de inspección.

6. Cuando las medidas cautelares adoptadas se levanten se documentará esta circunstancia en diligencia, que deberá comunicarse al obligado.

La apertura de precintos se efectuará en presencia del obligado tributario, salvo que concurra causa debidamente justificada.

- Artículo 182. Horario de las actuaciones del procedimiento inspector.

1. Las actuaciones inspectoras que se desarrollen en las oficinas públicas podrán realizarse fuera del horario oficial de apertura al público de dichas oficinas o de la jornada de trabajo

vigente cuando lo requieran las circunstancias de dichas actuaciones o medie el consentimiento del obligado tributario.

2. Cuando las actuaciones inspectoras se desarrollen en los locales del obligado tributario, podrán realizarse fuera de la jornada laboral de oficina o de la actividad en los siguientes supuestos:

a) Cuando medie el consentimiento del obligado tributario.

b) Cuando sin el consentimiento del obligado tributario se considere necesario para que no desaparezcan, se destruyan o alteren elementos de pruebas o las circunstancias del caso requieran que las actuaciones de inspección se efectúen con una especial celeridad que exija su desarrollo fuera de la jornada laboral y se obtenga, en ambos supuestos, la previa autorización del órgano competente de la Administración tributaria.

En el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la autorización a que se refiere el párrafo anterior corresponderá al delegado o al director de departamento del que dependa el órgano actuante

En el ámbito de la Dirección General del Catastro la autorización a que se refiere el párrafo anterior corresponderá al Director General.

El obligado tributario podrá exigir que se le entregue copia de la autorización.

- Artículo 183. Trámite de audiencia previo a las actas de inspección.

Cuando el órgano de inspección considere que se han obtenido los datos y las pruebas necesarios para fundamentar la propuesta de regularización o para considerar correcta la situación tributaria del obligado, se notificará el inicio del trámite de audiencia previo a la formalización de las actas de conformidad o de disconformidad, que se regirá por lo dispuesto en el artículo 96.

En la misma notificación de apertura del trámite de audiencia podrá fijarse el lugar, fecha y hora para la formalización de las actas a que se refiere el artículo 185.

. Sección 3.ª Duración del procedimiento inspector

- Artículo 184. Duración del procedimiento inspector.

1. El obligado tributario podrá solicitar antes de la apertura del trámite de audiencia uno o varios periodos a los que se refiere el apartado 4 del artículo 150 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, de un mínimo de 7 días naturales cada uno. Los periodos solicitados no podrán exceder en su conjunto de 60 días naturales para todo el procedimiento.

2. Para que la solicitud formulada pueda otorgarse serán necesarios los siguientes requisitos:

a) Que se solicite directamente al órgano actuante con anterioridad a los siete días naturales previos al inicio del periodo al que se refiera la solicitud.

b) Que se justifique la concurrencia de circunstancias que lo aconsejen.

c) Que se aprecie que la concesión de la solicitud no puede perjudicar el desarrollo de las actuaciones.

En caso de no cumplirse los requisitos anteriores, el órgano actuante podrá denegar la solicitud.

La solicitud que cumpla los requisitos establecidos en el primer párrafo de este apartado se entenderá automáticamente concedida por el periodo solicitado, hasta el límite de los 60 días como máximo, con su presentación en plazo, salvo que se notifique de forma expresa la denegación antes de que se inicie el periodo solicitado. Se entenderá automáticamente denegada la solicitud de un periodo inferior a 7 días.

La notificación expresa de la concesión antes de que se inicie el periodo solicitado podrá establecer un plazo distinto al solicitado por el obligado tributario.

3. La realización de actuaciones con conocimiento formal del obligado tributario con posterioridad a la finalización del plazo máximo de duración del procedimiento tendrá efectos interruptivos de la prescripción respecto de la totalidad de las obligaciones tributarias y periodos a los que se refiera el procedimiento. Si la superación del plazo máximo se constata durante el procedimiento de inspección, esta circunstancia se le comunicará formalmente al obligado tributario indicándole las obligaciones y periodos por los que se continúa el procedimiento.

. Sección 4.ª Terminación del procedimiento de inspección

Subsección 1.ª Actas de inspección

- Artículo 185. Formalización de las actas.

1. Concluido, en su caso, el trámite de audiencia, se procederá a documentar el resultado de las actuaciones de comprobación e investigación en las actas de inspección.

En aquellos supuestos en los que la competencia para dictar el acto de liquidación corresponda a una Administración tributaria distinta de la que haya llevado a cabo las actuaciones de comprobación e investigación, el órgano competente para liquidar de la Administración tributaria que hubiera realizado estas actuaciones deberá autorizar previamente y de forma expresa la suscripción del acta. Esta autorización deberá ser solicitada una vez finalizado el trámite de audiencia previo a la suscripción del acta.

2. Las actas serán firmadas por el funcionario y por el obligado tributario. Si el obligado tributario no supiera o no pudiera firmarlas, si no compareciera en el lugar y fecha señalados para su firma o si se negara a suscribirlas, serán firmadas sólo por el funcionario y se hará constar la circunstancia de que se trate. Las actas podrán suscribirse mediante firma manuscrita o mediante firma electrónica.

En caso de que el acta se suscriba mediante firma manuscrita, de cada acta se entregará un ejemplar al obligado tributario, que se entenderá notificada por su firma.

En el caso de que el acta se suscriba mediante firma electrónica, la entrega del ejemplar se podrá sustituir por la entrega de datos necesarios para su acceso por medios electrónicos adecuados.

Si el obligado tributario no hubiera comparecido, las actas deberán ser notificadas conforme lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y se suspenderá el cómputo del plazo del procedimiento inspector desde el intento de notificación del acta al obligado tributario hasta que se consiga efectuar la notificación. Si el obligado tributario compareciese y se negase a suscribir las actas se considerará rechazada la notificación a efectos de lo previsto en el artículo 111 de dicha ley.

Cuando el interesado no comparezca o se niegue a suscribir las actas, deberán formalizarse actas de disconformidad.

3. En los supuestos regulados en los artículos 106 y 107 de este reglamento, la firma de un acta con acuerdo o de conformidad exigirá la aceptación de todos los obligados tributarios que hayan comparecido en el procedimiento.

4. Las actas de inspección no pueden ser objeto de recurso o reclamación económico-administrativa, sin perjuicio de los que procedan contra las liquidaciones tributarias resultantes de aquellas.

- Artículo 186. Tramitación de las actas con acuerdo.

1. Cuando de los datos y antecedentes obtenidos en las actuaciones de comprobación e investigación, el órgano inspector entienda que pueda proceder la conclusión de un acuerdo por concurrir alguno de los supuestos señalados en el artículo 155 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo pondrá en conocimiento del obligado tributario. Tras esta comunicación, el obligado tributario podrá formular una propuesta con el fin de alcanzar un acuerdo.

2. Una vez desarrolladas las oportunas actuaciones para fijar los posibles términos del acuerdo, el órgano inspector solicitará la correspondiente autorización para la suscripción del acta con acuerdo del órgano competente para liquidar.

3. La fecha y el lugar de formalización del acta se comunicarán al obligado tributario junto con los datos necesarios y los trámites a realizar para la constitución del depósito o garantía a que se refiere el artículo 155.3.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

4. La autorización del órgano competente para liquidar deberá ser expresa y anterior o simultánea a la suscripción del acta, y se adjuntará a esta.

5. Antes de proceder a la firma del acta, el obligado tributario deberá acreditar fehacientemente la constitución del depósito o garantía en los siguientes términos:

a) En el caso de constitución de depósito, mediante la aportación del justificante de constitución del depósito en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales. Dicho depósito deberá cubrir el importe total de la deuda tributaria y, en su caso, de la sanción.

b) En el caso de formalización de aval o seguro de caución, mediante la aportación del certificado de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o de la entidad aseguradora. La garantía deberá cubrir el importe total de la deuda tributaria, de la sanción y el 20 por ciento de ambas cantidades. Será de duración indefinida y permanecerá vigente hasta que se produzca la extinción del importe garantizado.

La garantía deberá constituirse a disposición del órgano competente para liquidar. Si posteriormente no se pagase el importe consignado en el acta con acuerdo, el documento en que se formalice la garantía deberá ponerse a disposición del órgano competente para su recaudación.

Una vez satisfecha la deuda sin haber sido necesaria la ejecución de la garantía, se procederá de oficio a su devolución.

6. Si en el momento señalado para la firma del acta no se hubiese aportado por el obligado tributario el justificante de la constitución del depósito o garantía se entenderá que ha desistido de la formalización del acta con acuerdo.

7. Una vez firmada el acta con acuerdo, el órgano competente para liquidar dispone de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha del acta, para notificar al obligado tributario una liquidación que rectifique los errores materiales. Si dicha

notificación no se produce en el plazo citado, la liquidación se entenderá dictada y notificada el día siguiente conforme a la propuesta contenida en el acta.

En el caso de que se hubiese notificado liquidación rectificando los errores materiales, se seguirán los siguientes trámites:

- a) Si la liquidación es inferior al importe del depósito, se procederá a aplicar este al pago de la deuda y a liberar el resto.*
- b) Si la liquidación es superior al importe del depósito, se aplicará este al pago de la deuda y se entregará documento de ingreso por la diferencia.*
- c) Si la liquidación es superior al importe de la garantía, se entregará documento de ingreso por el importe de la liquidación*

8. Cuando el obligado tributario suscriba un acta con acuerdo que no afecte a todos los elementos regularizados de la obligación tributaria, se procederá de la siguiente forma:

- a) Si se manifestase la conformidad al resto de los elementos regularizados no incluidos en el acta con acuerdo, la propuesta de liquidación contenida en el acta de conformidad incluirá todos los elementos regularizados de la obligación tributaria. La cuota tributaria incluida en la propuesta de liquidación contenida en el acta con acuerdo minorará la contenida en el acta de conformidad.*
- b) Si se manifestase la disconformidad al resto de los elementos regularizados no incluidos en el acta con acuerdo, la propuesta de liquidación contenida en el acta de disconformidad incluirá todos los elementos regularizados de la obligación tributaria. La cuota tributaria incluida en la propuesta de la liquidación contenida en el acta con acuerdo minorará la contenida en el acta de disconformidad.*
- c) Si respecto a los elementos regularizados de la obligación tributaria no incluidos en el acta con acuerdo se otorgase la conformidad parcial, se procederá de la siguiente manera:*

1.º Si de la propuesta derivada de los hechos a los que el obligado tributario haya prestado su conformidad no resultara una cantidad a devolver, se formalizarán simultáneamente, además del acta con acuerdo, dos actas relacionadas entre sí en los siguientes términos:

Un acta de conformidad que contendrá los elementos regularizados de la obligación tributaria a los que el obligado tributario haya prestado su conformidad.

Un acta de disconformidad que incluirá la totalidad de los elementos regularizados de la obligación tributaria. Las cuotas tributarias incluidas en las propuestas de liquidación contenidas en el acta de conformidad y en el acta con acuerdo minorarán la contenida en el acta de disconformidad.

2.º Si de la propuesta derivada de los hechos a los que el obligado tributario haya prestado su conformidad resultara una cantidad a devolver, se formalizará una única acta de disconformidad en la que se harán constar los elementos regularizados de la obligación tributaria a los que el obligado tributario presta su conformidad a efectos de la aplicación de la reducción de la sanción prevista en el artículo 188.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. La cuota tributaria incluida en la propuesta de liquidación contenida en el acta con acuerdo minorará la contenida en el acta de disconformidad.

- Artículo 187. Tramitación de las actas de conformidad.

1. Cuando el obligado tributario preste su conformidad a los hechos y a las propuestas de regularización y liquidación incorporadas en el acta, se hará constar en ella dicha conformidad.

2. Cuando el obligado tributario preste su conformidad parcial a los hechos y a las propuestas de regularización y liquidación formuladas se procederá de la siguiente forma:

a) Si de la propuesta derivada de los hechos a los que el obligado tributario presta su conformidad no resultara una cantidad a devolver, se formalizarán simultáneamente dos actas relacionadas entre sí en los siguientes términos:

1.º Un acta de conformidad que contendrá los elementos regularizados de la obligación tributaria a los que el obligado tributario haya prestado su conformidad.

2.º Un acta de disconformidad que incluirá la totalidad de los elementos regularizados de la obligación tributaria. La cuota tributaria incluida en la propuesta de liquidación contenida en el acta de conformidad minorará la contenida en el acta de disconformidad.

b) Si de la propuesta derivada de los hechos a los que el obligado tributario presta su conformidad resultara una cantidad a devolver, se formalizará una única acta de disconformidad en la que se harán constar los elementos regularizados de la obligación tributaria a los que el obligado tributario presta su conformidad a efectos de la aplicación de la reducción de la sanción prevista en el artículo 188.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

3. Una vez firmada el acta de conformidad, el órgano competente para liquidar dispone de un plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la fecha del acta, para notificar al obligado tributario un acuerdo con alguno de los contenidos previstos en el artículo 156.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en cuyo caso se procederá de la siguiente forma:

a) Si se confirma la propuesta de liquidación contenida en el acta o se rectifican errores materiales, se notificará el acuerdo al obligado tributario. El procedimiento finalizará con dicha notificación.

b) Si se estima que en la propuesta de liquidación ha existido error en la apreciación de los hechos o indebida aplicación de las normas jurídicas, se notificará al obligado tributario acuerdo de rectificación conforme a los hechos aceptados por este en el acta y se concederá un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo, para que formule alegaciones. Transcurrido dicho plazo se dictará la liquidación que corresponda, que deberá ser notificada.

c) Si se ordena completar el expediente mediante la realización de actuaciones complementarias, se dejará sin efecto el acta formalizada, se notificará esta circunstancia al obligado tributario y se realizarán las actuaciones que procedan cuyo resultado se documentará en un acta que sustituirá a todos los efectos a la anteriormente formalizada y se tramitará según proceda.

De no notificarse alguno de dichos acuerdos en el plazo citado, la liquidación se entenderá dictada y notificada el día siguiente conforme a la propuesta contenida en el acta.

El plazo del mes del que dispone el órgano competente para liquidar en los supuestos de las letras b) y c) anteriores se suspenderá cuando concurra la circunstancia a la que se

refiere el apartado e) del artículo 150.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

4. El obligado tributario no podrá revocar la conformidad manifestada en el acta, sin perjuicio de su derecho a recurrir contra la liquidación resultante de esta y a presentar alegaciones de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3.b) de este artículo.

5. Si resultase una deuda a ingresar, se entregará junto con el acta el documento de ingreso. Para el inicio de los plazos de pago previstos en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se tendrá en cuenta la fecha en que se entienda dictada y notificada la liquidación, salvo que se dicte expresamente liquidación en cuyo caso se estará a la fecha de su notificación.

- Artículo 188. Tramitación de las actas de disconformidad.

1. Cuando el obligado tributario se niegue a suscribir el acta, la suscriba pero no preste su conformidad a las propuestas de regularización y de liquidación contenidas en el acta o no comparezca en la fecha señalada para la firma de las actas, se formalizará un acta de disconformidad, en la que se hará constar el derecho del obligado tributario a presentar las alegaciones que considere oportunas dentro del plazo de los 15 días, contados a partir del día siguiente al de la fecha en que se haya producido la negativa a suscribir, se haya suscrito o, si no se ha comparecido, se haya notificado el acta.

2. En el acta de disconformidad se expresarán con el detalle que sea preciso los hechos y fundamentos de derecho en que se base la propuesta de regularización. Los fundamentos de derecho serán además objeto de desarrollo en un informe ampliatorio que se entregará al obligado tributario de forma conjunta con el acta.

También se recogerá en el acta de forma expresa la disconformidad manifestada por el obligado tributario o las circunstancias que determinan su tramitación como acta de disconformidad, sin perjuicio de que en su momento pueda alegar cuanto convenga a su derecho.

3. Una vez recibidas las alegaciones formuladas por el obligado tributario o concluido el plazo para su presentación, el órgano competente para liquidar, a la vista del acta, del informe y de las alegaciones en su caso presentadas, dictará el acto administrativo que corresponda que deberá ser notificado.

Si el órgano competente para liquidar acordase la rectificación de la propuesta contenida en el acta por considerar que en ella ha existido error en la apreciación de los hechos o indebida aplicación de las normas jurídicas y dicha rectificación afectase a cuestiones no alegadas por el obligado tributario, notificará el acuerdo de rectificación para que en el plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo, efectúe alegaciones y manifieste su conformidad o disconformidad con la nueva propuesta formulada en el acuerdo de rectificación. Transcurrido dicho plazo se dictará la liquidación que corresponda, que deberá ser notificada.

4. El órgano competente para liquidar podrá acordar que se complete el expediente en cualquiera de sus extremos. Dicho acuerdo se notificará al obligado tributario y se procederá de la siguiente forma:

a) Si como consecuencia de las actuaciones complementarias se considera necesario modificar la propuesta de liquidación se dejará sin efecto el acta incoada y se formalizará una nueva acta que sustituirá a todos los efectos a la anterior y se tramitará según corresponda.

b) Si se mantiene la propuesta de liquidación contenida en el acta de disconformidad, se concederá al obligado tributario un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo, para la puesta de manifiesto del expediente y la formulación de las alegaciones que estime oportunas. Una vez recibidas las alegaciones o concluido el plazo para su realización, el órgano competente para liquidar dictará el acto administrativo que corresponda que deberá ser notificado.

. Subsección 2.ª Formas de terminación del procedimiento inspector

- Artículo 189. Formas de terminación del procedimiento inspector.

1. El procedimiento inspector terminará mediante liquidación del órgano competente para liquidar, por el acto de alteración catastral o por las demás formas previstas en este artículo.

2. Las actuaciones que se refieran a la comprobación del Impuesto sobre Sociedades de una entidad en régimen de consolidación fiscal o del Impuesto sobre el Valor Añadido de una entidad en régimen especial del grupo de entidades, que no sea la representante del grupo, terminarán conforme a lo dispuesto en el artículo 195 de este reglamento y en la normativa reglamentaria reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido, respectivamente.

3. Cuando el objeto del procedimiento inspector sea la comprobación e investigación de la aplicación de métodos objetivos de tributación y se constate la exclusión de la aplicación de dichos métodos por el incumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa específica, el procedimiento podrá terminar por el inicio de un procedimiento de comprobación limitada cuando el órgano que estuviese realizando dicha comprobación carezca de competencia para su continuación.

4. Cuando haya prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria, cuando se trate de un supuesto de no sujeción, cuando el obligado tributario no esté sujeto a la obligación tributaria o cuando por otras circunstancias no proceda la formalización de un acta, el procedimiento terminará mediante acuerdo del órgano competente para liquidar a propuesta del órgano que hubiese desarrollado las actuaciones del procedimiento de inspección, que deberá emitir informe en el que constarán los hechos acreditados en el expediente y las circunstancias que determinen esta forma de terminación del procedimiento.

5. Las actuaciones de comprobación de obligaciones formales terminarán mediante diligencia o informe, salvo que la normativa tributaria establezca otra cosa.

Artículo 190. Clases de liquidaciones derivadas de las actas de inspección.

1. Las liquidaciones derivadas de un procedimiento de inspección tendrán carácter definitivo o provisional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en este artículo.

Las liquidaciones derivadas de las actuaciones de comprobación e investigación de alcance parcial tendrán siempre el carácter de provisionales.

Las liquidaciones derivadas de las actuaciones de comprobación e investigación de alcance general tendrán el carácter de definitivas, salvo en los casos a que se refieren los apartados 2, 3 y 4 de este artículo, en los que tendrán el carácter de provisionales.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101.4.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las liquidaciones derivadas de un procedimiento de inspección podrán tener carácter provisional cuando alguno de los elementos de la obligación tributaria se

determine en función de los correspondientes a otras obligaciones que no hubieran sido comprobadas, o que hubieran sido regularizadas mediante liquidación provisional o mediante liquidación definitiva que no fuera firme. Se entenderá, entre otros supuestos, que se producen estas circunstancias:

a) Cuando se dicten liquidaciones respecto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre la Renta de no Residentes o Impuesto sobre el Patrimonio en tanto no se hayan comprobado las autoliquidaciones del mismo año natural por el Impuesto sobre el Patrimonio y el impuesto sobre la renta que proceda.

b) Cuando se dicten liquidaciones respecto del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y no se haya comprobado el impuesto directo del pagador de los correspondientes rendimientos.

c) Cuando se compruebe la actividad de un grupo de personas o entidades vinculadas y no se haya finalizado la comprobación de todas ellas.

d) Cuando se dicte liquidación que anule o modifique la deuda tributaria inicialmente autoliquidada como consecuencia de la regularización de algunos elementos de la obligación tributaria porque deba ser imputado a otro obligado tributario o a un tributo o período distinto del regularizado, siempre que la liquidación resultante de esta imputación no haya adquirido firmeza.

3. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101.4.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las liquidaciones derivadas de un procedimiento de inspección podrán tener carácter provisional cuando existan elementos de la obligación tributaria cuya comprobación con carácter definitivo no hubiera sido posible durante el procedimiento por concurrir alguna de las siguientes causas:

a) Cuando exista una reclamación judicial o proceso penal que afecte a los hechos comprobados.

b) Cuando no se haya podido finalizar la comprobación e investigación de los elementos de la obligación tributaria como consecuencia de no haberse obtenido los datos solicitados a terceros o debido a que no se hayan recibido los datos, informes, dictámenes o documentos solicitados a otra Administración.

c) Cuando se compruebe la procedencia de una devolución y las actuaciones inspectoras se hayan limitado en los términos previstos en el artículo 178.3.c) de este reglamento.

d) Cuando se realicen actuaciones de comprobación e investigación por los servicios de intervención en materia de impuestos especiales.

4. De acuerdo con lo dispuesto el artículo 101.4.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las liquidaciones derivadas de un procedimiento de inspección podrán tener carácter provisional, además de en los supuestos previstos en dicho párrafo, en los siguientes:

a) Cuando se haya planteado un supuesto de conflicto en la aplicación de la norma tributaria y no constituya el objeto único de la regularización, siempre que sea posible la práctica de liquidación provisional por los restantes elementos de la obligación tributaria.

b) Cuando concluyan las actuaciones de comprobación e investigación en relación con parte de los elementos de la obligación tributaria, siempre que esta pueda ser

desagregada. El procedimiento de inspección deberá continuar respecto de los demás elementos de la obligación tributaria.

c) Cuando en un procedimiento de inspección se realice una comprobación de valores de la que se derive una deuda a ingresar y se regularicen otros elementos de la obligación tributaria. En este supuesto se dictarán dos liquidaciones provisionales, una como consecuencia de la comprobación de valores y otra que incluirá la totalidad de lo comprobado. Esta última tendrá carácter provisional respecto de las posibles consecuencias que de la comprobación de valores puedan resultar en dicha liquidación.

d) Cuando por un mismo concepto impositivo y periodo se hayan diferenciado elementos respecto de los que se aprecia delito contra la Hacienda Pública, junto con otros elementos respecto de los que no se aprecia esa situación. En estos casos, ambas liquidaciones tendrán carácter provisional.

e) Cuando así se determine en otras disposiciones legales o reglamentarias.

5. Las liquidaciones provisionales minorarán los importes de las que posterior o simultáneamente se practiquen respecto de la obligación tributaria y período objeto de regularización.

6. Los elementos de la obligación tributaria comprobados e investigados en el curso de unas actuaciones que hubieran terminado con una liquidación provisional no podrán regularizarse nuevamente en un procedimiento inspector posterior, salvo que concurra alguna de las circunstancias a que se refieren los apartados 2 y 3 de este artículo y, exclusivamente, en relación con los elementos de la obligación tributaria afectados por dichas circunstancias. Cuando concurren las circunstancias del artículo 190.3.b) de este reglamento, la regularización se podrá realizar con los nuevos datos que se hayan podido obtener y los que se deriven de la investigación de los mismos.

7. Los elementos de la obligación tributaria a los que no se hayan extendido las actuaciones de comprobación e investigación podrán regularizarse en un procedimiento de comprobación o investigación posterior.

- Artículo 191. Liquidación de los intereses de demora.

1. La liquidación derivada del procedimiento inspector incorporará los intereses de demora hasta el día en que se dicte o se entienda dictada la liquidación, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 6 del artículo 150 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y de acuerdo con lo previsto en los apartados siguientes.

2. En el caso de actas con acuerdo los intereses de demora se calcularán hasta el día en que deba entenderse dictada la liquidación por el transcurso del plazo legalmente establecido.

En el caso de actas de conformidad, los intereses de demora se calcularán hasta el día en que deba entenderse dictada la liquidación por transcurso del plazo legalmente establecido.

En el caso de actas de disconformidad, los intereses de demora se calcularán hasta la conclusión del plazo establecido para formular alegaciones.

3. Las actas y los actos de liquidación practicados deberán especificar las bases de cálculo sobre las que se aplican los tipos de interés de demora, los tipos de interés y las fechas de comienzo y finalización de los períodos de devengo.

4. Cuando la liquidación resultante del procedimiento inspector sea una cantidad a devolver, la liquidación de intereses de demora deberá efectuarse de la siguiente forma:

a) Cuando se trate de una devolución de ingresos indebidos, se liquidarán a favor del obligado tributario intereses de demora en los términos del artículo 32.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. A efectos del cálculo de los intereses, no se computarán los días a los que se refiere el apartado 4 del artículo 150 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ni los periodos de extensión a los que se refiere el apartado 5 de dicho artículo.

b) Cuando se trate de una devolución derivada de la normativa de un tributo, se liquidarán intereses de demora a favor del obligado tributario de acuerdo con lo previsto el artículo 31 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el artículo 125 de este reglamento.

- Artículo 192. Comprobación de obligaciones formales.

1. Cuando el objeto del procedimiento de inspección sea comprobar e investigar el cumplimiento de obligaciones tributarias formales, se dará audiencia al obligado tributario por un plazo de 15 días, contados a partir del siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo, una vez concluidas las actuaciones de comprobación e investigación.

2. Finalizado el trámite de audiencia, se procederá a documentar el resultado de las actuaciones de comprobación e investigación en diligencia o informe.

Cuando el procedimiento finalice mediante diligencia o informe, esta se incorporará al expediente sancionador que, en su caso, se inicie como consecuencia del procedimiento de inspección, sin perjuicio de la remisión que deba efectuarse cuando resulte necesario para la iniciación de otro procedimiento de aplicación de los tributos.

. Sección 5.ª Disposiciones especiales del procedimiento inspector

- Artículo 193. Estimación indirecta de bases o cuotas.

1. El método de estimación indirecta de bases o cuotas será utilizado por la Administración de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 53 y 158 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en este artículo.

La estimación indirecta podrá aplicarse en relación con la totalidad o parte de los elementos integrantes de la obligación tributaria.

2. La apreciación de alguna o algunas de las circunstancias previstas en el artículo 53.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no determinará por sí sola la aplicación del método de estimación indirecta si, de acuerdo con los datos y antecedentes obtenidos a lo largo del desarrollo de las actuaciones inspectoras, pudiera determinarse la base o la cuota mediante el método de estimación directa u objetiva.

3. A efectos de lo dispuesto en el artículo 53.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se entenderá que existe resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la actuación inspectora cuando concurra alguna de las conductas reguladas en el artículo 203.1 de dicha ley.

4. A efectos de lo dispuesto en el artículo 53.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se entenderá que existe incumplimiento sustancial de las obligaciones contables o registrales:

a) Cuando el obligado tributario incumpla la obligación de llevanza de la contabilidad o de los libros registro establecidos por la normativa tributaria. Se presumirá su omisión cuando no se exhiban a requerimiento de los órganos de inspección.

b) Cuando la contabilidad no recoja fielmente la titularidad de las actividades, bienes o derechos.

c) Cuando los libros o registros contengan omisiones, alteraciones o inexactitudes que oculten o dificulten gravemente la constatación de las operaciones realizadas.

d) Cuando aplicando las técnicas o criterios generalmente aceptados a la documentación facilitada por el obligado tributario no pueda verificarse la declaración o determinarse con exactitud las bases o rendimientos objeto de comprobación.

e) Cuando la incongruencia probada entre las operaciones contabilizadas o registradas y las que debieran resultar del conjunto de adquisiciones, gastos u otros aspectos de la actividad permita presumir, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que la contabilidad o los libros registro son incorrectos.

5. Cuando los datos utilizados para la estimación indirecta a que se refiere la letra d) del apartado 3 del artículo 158 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, procedan de la propia Administración tributaria, se utilizarán aquellos métodos que permitan preservar el carácter reservado de los datos tributarios de terceros sin perjudicar el derecho de defensa del obligado tributario. En particular, se disociarán los datos de forma que no pueda relacionarse entre sí:

a) la identificación de los sujetos contenidos en la muestra.

b) los datos contenidos en sus declaraciones tributarias que sirvan para el cálculo de los porcentajes o promedios empleados para la determinación de las bases, los cálculos y estimaciones efectuados.

La Administración indicará las características conforme a las cuales se ha seleccionado la muestra elegida. Entre otros, podrán tenerse en cuenta el ámbito espacial y temporal de la muestra, la actividad que desarrollan o el intervalo al que corresponde su volumen de operaciones

6. En el supuesto en el que las actas en que se proponga la regularización de la situación tributaria del obligado mediante la aplicación del método de estimación indirecta se suscriban en disconformidad, podrá elaborarse un único informe que recoja ambas circunstancias.

- Artículo 194. Declaración de conflicto en la aplicación de la norma tributaria.

1. Cuando el órgano de inspección que esté tramitando el procedimiento estime que pueden concurrir las circunstancias previstas en el artículo 15 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo notificará al obligado tributario y le concederá un plazo de alegaciones de 15 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo.

2. Una vez recibidas las alegaciones y, en su caso, practicadas las pruebas procedentes, el órgano que esté tramitando el procedimiento emitirá un informe sobre la concurrencia o no de las circunstancias previstas en el artículo 15 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que se remitirá junto con el expediente al órgano competente para liquidar.

En caso de que el órgano competente para liquidar estimase que concurren dichas circunstancias remitirá a la Comisión consultiva a que se refiere el artículo 159 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el informe y los antecedentes. La remisión

se notificará al obligado tributario con indicación de la suspensión del cómputo del plazo del procedimiento inspector prevista en el apartado 3 del artículo 150 de dicha Ley.

En caso de que el órgano competente para liquidar estimase motivadamente que no concurren dichas circunstancias devolverá la documentación al órgano de inspección que esté tramitando el procedimiento, lo que se notificará al obligado tributario.

3. La Comisión consultiva emitirá un informe en el que, de forma motivada, se indicará si procede o no la declaración del conflicto en la aplicación de la norma tributaria. Dicho informe se comunicará al órgano competente para liquidar que hubiese remitido el expediente, que ordenará su notificación al obligado tributario y la continuación del procedimiento de inspección.

En el caso de acordarse la ampliación del plazo para emitir el mencionado informe, el acuerdo deberá notificarse al obligado tributario y se dará traslado, asimismo, al órgano de inspección.

4. En el ámbito de competencias del Estado, la Comisión consultiva estará compuesta por dos representantes de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda designados por resolución del Director General de Tributos, uno de los cuales actuará como presidente con voto de calidad, salvo que el conflicto en la aplicación de la norma tributaria afecte a las normas dictadas por las comunidades autónomas en materia de tributos cedidos, en cuyo caso, los representantes del órgano competente para contestar las consultas tributarias escritas serán designados por resolución del titular de dicho órgano.

Los representantes de la Administración tributaria actuante serán:

a) Cuando la Administración tributaria actuante sea la Agencia Estatal de Administración Tributaria, dos representantes de esta designados por el director del departamento competente.

b) Cuando la Administración tributaria actuante sea una comunidad autónoma, dos representantes de la Administración tributaria autonómica.

c) Cuando la Administración tributaria actuante sea una entidad local, dos representantes de la entidad local.

En los supuestos anteriores, uno de los dos representantes de la Administración tributaria actuante podrá ser el órgano de inspección que estuviese tramitando el procedimiento o el órgano competente para liquidar que hubiese remitido el expediente.

5. La suspensión del cómputo del plazo de duración del procedimiento se producirá por el tiempo que transcurra desde la notificación al interesado a que se refiere el apartado 2 de este artículo hasta la recepción del informe por el órgano competente para continuar el procedimiento o hasta el transcurso del plazo máximo para su emisión.

Dicha suspensión no impedirá la práctica de las actuaciones inspectoras que durante esta situación pudieran desarrollarse en relación con los elementos de la obligación tributaria no relacionados con los actos o negocios analizados por la Comisión consultiva, en cuyo caso continuará el procedimiento respecto de los mismos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

6. Trimestralmente se publicarán los informes de la Comisión consultiva en los que se haya apreciado la existencia de conflicto en la aplicación de la norma tributaria. En el ámbito de

competencias del Estado se publicarán en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, salvo que se trate de tributos cuyo órgano competente para la emisión de las consultas tributarias por escrito se integre en otras Administraciones tributarias, en cuyo caso deberán publicarse a través del medio que las mismas señalen.

En dichas publicaciones se guardará la debida reserva en relación a los sujetos afectados.

- Artículo 195. Entidades que tributen en régimen de consolidación fiscal

1. La comprobación e investigación de la sociedad representante y del grupo fiscal se realizará en un único procedimiento de inspección, que incluirá la comprobación de las obligaciones tributarias del grupo fiscal y de la sociedad representante objeto del procedimiento.

En relación con los grupos fiscales que tributen en el régimen de consolidación fiscal en los que la entidad dominante sea no residente en territorio español, cuando no se haya comunicado la entidad que ostente la condición de representante del grupo, la Administración tributaria podrá considerar como tal a cualquiera de las entidades integrantes del mismo. En estos grupos fiscales, cuando se comunique el cambio de sociedad representante una vez iniciado el procedimiento, éste continuará por el mismo órgano actuante, por lo que afecta a las actuaciones relativas al grupo, con la nueva entidad representante.

2. En cada entidad dependiente, que no sea representante del grupo, que sea objeto de inspección como consecuencia de la comprobación de un grupo fiscal, se desarrollará un único procedimiento de inspección. Dicho procedimiento incluirá la comprobación de las obligaciones tributarias que se derivan del régimen de tributación individual del Impuesto sobre Sociedades y las demás obligaciones tributarias objeto del procedimiento e incluirá actuaciones de colaboración respecto de la tributación del grupo por el régimen de consolidación fiscal.

3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 68.1.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el plazo de prescripción del Impuesto sobre Sociedades del grupo fiscal se interrumpirá:

a) Por cualquier actuación de comprobación e investigación realizada con la sociedad representante del grupo respecto al Impuesto sobre Sociedades.

b) Por cualquier actuación de comprobación e investigación relativa al Impuesto sobre Sociedades realizada con cualquiera de las sociedades dependientes, siempre que la sociedad representante del grupo tenga conocimiento formal de dichas actuaciones.

4. Las circunstancias a que se refieren los apartados 4 y 5 del artículo 150 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que se produzcan en el curso de un procedimiento seguido con cualquier entidad del grupo afectarán al plazo de duración del procedimiento seguido cerca de la sociedad representante y del grupo fiscal, siempre que la sociedad representante tenga conocimiento formal de ello. La concurrencia de dichas circunstancias no impedirá la continuación de las actuaciones inspectoras relativas al resto de entidades integrantes del grupo.

El periodo de extensión del plazo a que se refiere el artículo 150.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se calculará para la sociedad representante y el grupo teniendo en cuenta los periodos no coincidentes solicitados por cualquiera de las sociedades integradas en el grupo fiscal. Las sociedades integradas en el grupo fiscal podrán solicitar hasta 60 días naturales para cada uno de sus procedimientos, pero el

periodo por el que se extenderá el plazo de resolución del procedimiento de la sociedad representante y del grupo no excederá en su conjunto de 60 días naturales.

5. La documentación del procedimiento seguido cerca de cada entidad dependiente, que no sea representante del grupo, se desglosará, a efectos de la tramitación, de la siguiente forma:

a) Un expediente relativo al Impuesto sobre Sociedades, en el que se incluirá la diligencia resumen a que se refiere el artículo 98.3.g) de este reglamento. Dicho expediente se remitirá al órgano que esté desarrollando las actuaciones de comprobación e investigación de la sociedad representante y del grupo fiscal.

b) Otro expediente relativo a las demás obligaciones tributarias objeto del procedimiento.

6. La documentación del procedimiento seguido cerca de la entidad representante del grupo se desglosará, a efectos de su tramitación, de la siguiente forma:

a) Un expediente relativo al Impuesto sobre Sociedades del grupo fiscal, que incluirá las diligencias resumen a que se refiere el apartado anterior.

b) Otro expediente relativo a las demás obligaciones tributarias objeto del procedimiento.

- Artículo 196. Declaración de responsabilidad en el procedimiento inspector.

1. Cuando en el curso de un procedimiento de inspección, el órgano actuante tenga conocimiento de hechos o circunstancias que pudieran determinar la existencia de responsables a los que se refiere el artículo 41 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se podrá acordar el inicio del procedimiento para declarar dicha responsabilidad. El inicio se notificará al obligado tributario con indicación de las obligaciones tributarias y períodos a los que alcance la declaración de responsabilidad y el precepto legal en que se fundamente.

Cuando el alcance de la responsabilidad incluya las sanciones será necesario que se haya iniciado previamente el procedimiento sancionador.

La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá la previa declaración de fallido del deudor principal y, si los hubiera, de los responsables solidarios. Los órganos de recaudación acreditarán, a petición de los de inspección, la condición de fallido de los deudores principales y responsables solidarios, de lo que se dejará constancia en la comunicación de inicio del procedimiento de declaración de responsabilidad.

2. El trámite de audiencia al responsable se realizará con posterioridad a la formalización del acta al deudor principal y, cuando la responsabilidad alcance a las sanciones, a la propuesta de resolución del procedimiento sancionador al sujeto infractor.

El responsable dispondrá de un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo, para formular las alegaciones y aportar la documentación que estime oportunas, tanto respecto del presupuesto de hecho de la responsabilidad como de las liquidaciones o sanciones a las que alcance dicho presupuesto.

Durante el trámite de audiencia se deberá dar, en su caso, la conformidad expresa a la que se refiere el artículo 41.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Salvo el supuesto previsto en el apartado 4 de este artículo, el responsable no tendrá la condición de interesado en el procedimiento de inspección o en el sancionador y se tendrán por no presentadas las alegaciones que formule en dichos procedimientos.

3. El acuerdo de declaración de responsabilidad corresponderá al órgano competente para dictar la liquidación y habrá de dictarse con posterioridad al acuerdo de liquidación al deudor principal o, en su caso, de imposición de sanción al sujeto infractor.

El acuerdo de declaración de responsabilidad se notificará al responsable. De no efectuarse la notificación antes de la finalización del plazo voluntario de ingreso otorgado al deudor principal, o si en dicho plazo no se hubiera acreditado al menos un intento de notificación que contenga el texto íntegro del acuerdo o, en su caso, de no haberse efectuado la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración tributaria o en la dirección electrónica habilitada, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 124.3 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.

4. En aquellos supuestos en los que la ley disponga que no es necesario el acto previo de derivación de responsabilidad, las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación podrán realizarse directamente con el responsable. En estos supuestos, las actas se formalizarán y las liquidaciones se practicarán a nombre del responsable.

Capítulo III

Otras actuaciones inspectoras

- Artículo 197. Otras actuaciones inspectoras.

1. Las actuaciones de valoración podrán desarrollarse por los órganos de inspección a iniciativa propia o a petición de otros órganos de la misma u otra Administración tributaria. En particular, los órganos de inspección podrán practicar estas actuaciones a petición de las comunidades autónomas respecto de los tributos cedidos a estas.

2. Cuando así les sea solicitado y sin perjuicio de las competencias propias de otros órganos de la Administración, los órganos de inspección informarán y asesorarán en materias de carácter económico, financiero, jurídico o técnico relacionadas con el ejercicio de sus funciones a los demás órganos de las Administraciones tributarias, a los órganos dependientes del Ministerio de Economía y Hacienda, así como a cualquier organismo que lo solicite.

3. Los órganos de inspección podrán realizar los estudios individuales, sectoriales o territoriales de carácter económico o financiero que puedan ser de interés para la aplicación de los tributos, así como los análisis técnicos, químicos, informáticos o de cualquier otra naturaleza que se consideren necesarios.

4. Las actuaciones de intervención en materia de los impuestos especiales de fabricación se regirán por lo dispuesto en su normativa específica y, en lo no previsto en la misma, por las normas de este título con exclusión del artículo 179 de este reglamento.

Cuando como consecuencia de las actuaciones de comprobación o investigación que le son propias a los servicios de intervención, se pongan de manifiesto hechos que supongan el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa de los impuestos especiales, las actuaciones de intervención continuarán mediante la notificación al obligado tributario del inicio de actuaciones destinadas a la regularización tributaria, que deberán concluir en el plazo previsto en el artículo 150 de la Ley 58/2003, de 17 de

diciembre, General Tributaria o, en su caso, mediante la iniciación del procedimiento sancionador.

5. Los órganos de inspección podrán realizar actuaciones dirigidas a la aprobación de propuestas de valoración previa de operaciones, gastos, retribuciones, así como criterios de imputación temporal, conforme a la normativa específica que resulte aplicable.

6. Los órganos de inspección podrán desarrollar actuaciones de comprobación limitada, para lo que se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 136 a 140, ambos inclusive, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en los artículos 163 a 165, ambos inclusive, de este reglamento.

7. En los supuestos en que las actuaciones de control censal sean desarrolladas por los órganos de inspección, estos podrán proponer, en su caso, a los órganos competentes, el acuerdo de baja cautelar, el inicio del procedimiento de rectificación censal, la rectificación de oficio de la situación censal o la revocación del número de identificación fiscal, regulados en los artículos 144 a 147, ambos inclusive, de este reglamento.

8. Para la ejecución de las resoluciones administrativas y judiciales, los órganos de inspección podrán desarrollar las actuaciones que sean necesarias pudiendo, en su caso, ejercer las facultades previstas en el artículo 142 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y realizar las actuaciones de obtención de información pertinentes. No obstante, cuando de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66.4 del Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, las mencionadas resoluciones hayan ordenado la retroacción de actuaciones, éstas se desarrollarán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150.7 de la citada Ley.

Capítulo IV. Actuaciones en supuestos de delito contra la Hacienda Pública

Artículo 197 bis. Actuaciones a seguir en caso de existencia de indicios de delito contra la Hacienda Pública.

.../...

4.4. Síntesis reflexiva

Consideramos, al inicio de este epígrafe, que era necesario que valoráramos como adecuada la selección y desarrollo del estudio, que hemos denominado como comparado disciplinar. El poner en diálogo los parámetros seleccionados: la historia, las funciones, la estructura y la organización de distintas unidades de control e inspección de ámbitos o disciplinas distintas, y contemplados, como derechos de los ciudadanos, mayoritariamente de forma directa, aunque en el caso de la gestión de tributos, de forma indirecta, ha aportado un interesante, sugerente y singular información cualitativa que sin duda coadyuvará en el proceso prospectivo.

Las realidades asimétricas que se mencionaban en el capítulo primero se han visto realmente enraizadas y vinculadas en las distintas disciplinas con semejanzas, similitudes y diferencias, también enriquecedoras y susceptibles de aportación de datos relevantes y de peso específico desde distintos ángulos.

Creemos que el diseño ha aportado una información que ha respondido con creces a los objetivos planteados, como veremos a continuación.

El estudio de yuxtaposición con la inspección de educación ha quedado materializado en las tablas 4.1.1, 4.1.2 y 4.1.3 en lo relativo a la inspección de trabajo y seguridad social; en las tablas 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3 en lo relativo a la inspección de sanidad; y en las tablas 4.3.1 y 4.3.2 en lo relativo a la inspección de hacienda.

Creemos muy importante presentar la convicción de que el estudio realizado, y que se desglosa en cada una de las tres inspecciones, muestran una fotografía concreta, en un momento histórico determinado y como consecuencia de los vaivenes y necesidades sociales y económicas, aunque con los antecedentes y orígenes que también se han pretendido plasmar. Y en esta línea es necesario determinar que las distintas inspecciones se deben y deben su labor al propio momento histórico, por lo que, en todos los casos, se deberán ajustar y acomodar a las necesidades de las propias sociedades a las que sirve; mostrando de esta forma un carácter también cambiante y adaptativo.

De igual forma, y en esta línea, se muestra el carácter intencional y programático de las funciones inspectoras al encontrarse delimitadas por los impulsos sociales y políticos, utilizando, en su práctica totalidad, planes de carácter temporal (anuales, bianuales o plurianuales) donde se materializan las prioridades en las actuaciones³²⁷.

Es significativo mencionar, en cuanto al parámetro histórico, que las unidades de control en los tres ámbitos o disciplinas que hemos estudiado, tienen su inicio y materialización orgánica desde mediados del siglo XIX, cuando se estaba configurando España como estado moderno. En ese

³²⁷ A este respecto y en relación a la inspección de educación en la Comunidad de Madrid es necesario mencionar las siguientes resoluciones, íntimamente vinculadas, pues plantean un plan plurianual que se desglosa anualmente en un específico plan anual.

La Resolución de 17 de agosto de 2021, de la Viceconsejería de Organización Educativa, por la que se aprueba el Plan General Plurianual de Actuación de la Inspección Educativa (BOCM, núm. 203, de 26 de agosto). Texto en la url: https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/08/26/BOCM-20210826-4.PDF, con acceso el 7 de septiembre de 2021.

Y la Resolución de 30 de agosto de 2021, de la Viceconsejería de Organización Educativa, por la que se aprueba el Plan Anual de Actuación de la Inspección Educativa para el curso 2021-2022 (BOCM, núm. 213, de 7 de septiembre). Texto en la url:

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/09/07/BOCM-20210907-14.PDF con acceso el 7 de septiembre de 2021.

sentido creemos importante acentuar, generalizando lo que apunta de forma muy acertada Ramírez Aísa (2006a), que las nociones sociales, la relación entre los individuos y el poder político, y la propia concepción de derechos, eran tan distintas a las actuales, en los siglos anteriores a la revolución liberal, que la idea de inspección, no podía ser concebida como tal, antes del siglo XIX.

De esta forma la inspección de educación tiene su acta fundacional en 1849, aunque con los enriquecedores antecedentes que hemos desarrollado ampliamente; la inspección de trabajo en 1906, en un momento de importantes y trascendentales cambios sociales e ideológicos de carácter laboral; la inspección sanitaria, de forma algo desdibujada en 1855, reconociendo la importancia de la función, aunque no la unidad que debía desempeñarla de forma permanente; y la inspección de tributos, en forma de visitadores generales, en el mismo año de 1849, y con el protagonismo de la misma figura gestora en el Ministerio. Es significativo considerar que los responsables políticos y administrativos consideran a las unidades de control e inspección como aparatos indispensables para la puesta en marcha de servicios necesarios para el desarrollo social y económico. Muy posiblemente esos criterios son los que en la actualidad alimentan, y son orígenes, de conceptos muy de actualidad, como la eficiencia de los servicios, la transparencia en la gestión y la rendición de cuentas.

Consideramos también significativo, en lo relativo al parámetro organizativo y estructural, que las tres disciplinas estudiadas, en contra de la organización de la inspección de educación, cuentan con niveles distintos de desarrollo orgánico: inspectores y subinspectores³²⁸, e incluso ámbitos disciplinares más sectorizados: inspección sanitaria, farmacológica, de salud pública o subinspección enfermera, etc. entre otros. Esa división no existe en la inspección de educación, ni siquiera a nivel de especialidades docentes, aunque como ya se ha apuntado, hubo un conato de sectorización por especialidades en la Ley 10/2010 de Calidad de la Educación³²⁹. Y sabemos

³²⁸ En el caso de los subinspectores de tributos o gestión recaudatoria, estos quedaron integrados en el Cuerpo Técnico de Hacienda, a tenor de lo dispuesto en la disposición adicional vigésima octava de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (BOE, núm. 313, de 31 de diciembre). Texto consolidado en la url: <https://www.boe.es/buscar/pdf/1998/BOE-A-1998-30155-consolidado.pdf> con acceso el 7 de septiembre de 2021.

³²⁹ Así consta en el art. 106, Organización de la inspección educativa, de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (BOE» núm. 307, de 24 de diciembre de 2002). Texto original en la url: <https://www.boe.es/boe/dias/2002/12/24/pdfs/A45188-45220.pdf> con acceso el 2 de agosto de 2019.

- 1. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las especialidades básicas de inspección educativa, teniendo en cuenta, en todo caso, los diferentes niveles educativos y especialidades docentes.*
- 2. Las Administraciones educativas, de acuerdo con sus competencias, podrán desarrollar las especialidades a que se refiere el apartado anterior y regularán la estructura y el funcionamiento de los órganos que establezcan para el desempeño de la inspección educativa en sus respectivos territorios.*
- 3. El acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación y la provisión de puestos de trabajo mediante concursos de traslados de ámbito nacional se desarrollarán a través de las especialidades a que se refiere el apartado 1 de este artículo.*

Estos principios normativos fueron desarrollados en el Real Decreto 1538/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen las especialidades básicas de inspección educativa (BOE núm. 295, de 10 de diciembre de 2003). Texto original en la url: <https://www.boe.es/boe/dias/2003/12/10/pdfs/A43813-43816.pdf> con acceso el 2 de agosto de 2019, pero nunca llegaron a implantarse al quedar, la Ley Orgánica 10/2002, derogada en la disposición derogatoria única de la Ley Orgánica 2/2006.

que hubo alguna iniciativa, por parte de una determinada formación política, para realizar una propuesta de ese tipo en la décima legislatura de la Asamblea de Madrid, pero nunca llegó a materializarse y no se cuenta con información documental –sólo oral– para describirla detalladamente. Dicha iniciativa no hubiera podido implementarse en una comunidad autónoma al afectar a un cuerpo de carácter estatal.

En lo relativo al parámetro funcional, y desplegando la síntesis reflexiva de una forma más parcelada, encontramos que la inspección de trabajo, o de servicios laborales y de seguridad social, tiene asignadas unas funciones que se mimetizan de forma muy significativa con las asignadas a la inspección de educación. De esta forma debe realizar las tareas de vigilancia del cumplimiento de las normas generales y sectoriales (acuerdos y convenidos); no llegan a integrarse para comprobar la concreta labor laboral, aunque por otra parte son agentes de prevención de riesgos laborales; tienen asignadas tareas de asistencia técnica, de conciliación, mediación y arbitraje, que guardan gran paralelismo con las funciones de asesoramiento, orientación e información que desempeñan los inspectores de educación y que tienen una singular vertiente de desarrollo en la atribución de los inspectores de participar en las reuniones de los órganos colegiados y, muy significativamente, en la orden promulgada por la Comunidad de Madrid de realizar procesos de mediación para el seguimiento de medidas que impulsen a convivencia, la participación y la resolución de conflictos.

La función relativa a la permanente disponibilidad para aquellas tareas que las autoridades contemplen (eliminada, en principio, en lo relativo a la inspección de educación, por la nueva redacción del art. 151.h de la LOE 2/2006), que aparece en la normativa organizativa del resto de inspecciones, como veremos, también se encuentra, aunque algo más desdibujada.

En cuanto a los principios que rigen a la inspección de trabajo, también cuentan con gran paralelismo con los correspondientes a los principios de actuación de la inspección educativa: de esta forma en el ámbito laboral los inspectores se mueven por principios de eficacia, calidad, imparcialidad, objetividad e igualdad. En este sentido hay un conjunto de principios que consideramos que podrían aportar un valor añadido a la inspección de educación y son los que se recogen en los apartados b y c del art. 2 de la Ley 23/2015 y en concreto en lo relativo a la concepción única e integral del sistema, garantizándose un funcionamiento cohesionado mediante la coordinación, la cooperación y la participación, y la correspondiente a la unidad de función y actuación inspectora.

Si bien estos principios son horizontes que los servicios de inspección de educación pretenden conseguir, la realidad demuestra su carencia entre los servicios de una misma comunidad autónoma, y de igual manera, entre los de las distintas comunidades autónomas, pues no existe un eficiente órgano de coordinación institucional entre las dieciocho inspecciones³³⁰.

En cuanto a las atribuciones, la consideración como autoridad pública está recogida en todas las unidades de control e inspección estudiadas, aunque es necesario mencionar que este es un concepto cada vez más generalizado³³¹ entre los funcionarios de servicios básicos. El resto de

³³⁰ Incluyo aquí a las inspecciones de las diecisiete comunidades autónomas y a la denominada inspección central del Ministerio de Educación y Formación Profesional que gestiona la inspección de los centros de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y la inspección de los centros educativos de titularidad del Estado Español en el extranjero.

³³¹ La Ley Orgánica de Educación siempre ha considerado a la Inspección como autoridad pública. Así se recoge en el art. 153 c.- del texto original. Ha sido, a partir de la modificación realizada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa [LOMCE], cuando se incluyó en el art. 124 un epígrafe con el número tres, del siguiente tenor:

las atribuciones son muy parecidas en las distintas inspecciones disciplinarias: libre acceso, investigación, aunque en el caso concreto de la inspección de trabajo se desglosan de forma muy enriquecedora: advertir, requerir, informar, promover procedimientos, instar a la suspensión o la declaración de recargo, etc. Este aspecto está muy difuso en la inspección de educación, que pocas veces es desglosada en la normativa de desarrollo, por la falta de capacidad ejecutiva.

Continuando con este parámetro funcional, en cuanto a la inspección sanitaria, es verdad que se ha percibido que la propia terminología puede conducir a unos errores de base, pues la propia inspección es parte de las tareas básicas de intervención de los cuerpos sanitarios. No obstante se ha encontrado que, en la poca normativa de desarrollo, pues debemos circunscribirnos a las funciones asignadas en el Decreto de 1943 y a la circular (normativa de rango mínimo) de la presidenta ejecutiva del INSALUD de 1999, se desarrollan a nivel micro: proponer la adopción de medidas profilácticas, comprobar partes de enfermedad, inspeccionar prestaciones sanitarias, inspeccionar cumplimiento de conciertos, etc... que se desglosan de forma más pormenorizada en la citada circular 3/1999. No se ha detectado un desglose de funciones macro en relación al cumplimiento de la normativa, más allá de la relación existente con la normativa general, en el control de los partes de bajas, ni se han encontrado funciones de asesoramiento, mediación e información, quizá justificado por el propio objeto disciplinar, más allá de la función de *atención a los usuarios, evaluando el ejercicio y la efectividad de los derechos y deberes de los usuarios y proponiendo las medidas que se consideren oportunas para el cumplimiento de los mismos*.

Sin embargo, sí se encuentra nuevamente la función de emitir informes que sean solicitados por las autoridades sanitarias, abriendo una parcela a la permanente y polivalente disponibilidad a los ámbitos jerárquicos, de forma equivalente a lo establecido en el art. 151.g de la LOE 2/2006, para el caso de la inspección de educación.

El equipo investigador considera que hay un aspecto singular, en cuanto a la inspección de servicios sanitarios, y es el correspondiente a la posibilidad de recabar colaboración de grupos de investigación o de contar con asesoramiento especializado de instituciones, organismos o asociaciones científicas. Este es un aspecto del que se encuentra muy huérfana la inspección de educación orgánicamente, pues parece considerarse a nivel institucional, que es autónoma y competente *-per se-*, cuando la realidad demuestra, que en muchas ocasiones necesita contar con especialistas y apoyos externo.

El estudio realizado sobre la inspección de tributos, inspección de hacienda o inspectores financieros, en cuanto al mismo parámetro funcional, ha demostrado que es la unidad más diferenciada dentro del cuarteto, aunque llama la atención, como se ha visto en el capítulo precedente, que la inspección de educación en Inglaterra tuvo sus orígenes en el control económico de las subvenciones y becas concedidas. Sus funciones se muestran también muy circunscritas a las funciones micro: investigar, obtención de información, comprobación de

Los miembros del equipo directivo y los profesores y profesoras serán considerados autoridad pública. En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por profesores, profesoras y miembros del equipo directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad «iuris tantum» o salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios alumnos y alumnas.

Esta redacción ha sido mantenida literalmente en la modificación realizada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación [LOMLOE].

veracidad, etc. Sus tareas se centran en el descubrimiento del fraude, dirigiendo el asesoramiento, no hacia la población, como agente fundamental de un estado democrático de derecho³³², sino hacia los órganos de la administración pública: es decir, lo que administrativamente se define con *ad-intra*, cuando en el resto de las unidades de inspección y control tienen una orientación *ad-extra*, y se orienta más, aunque no prioritariamente, a procesos, que a resultados.

Las facultades de los inspectores de tributos son muy parecidos al resto de los ámbitos estudiados: consideración de autoridades públicas, con el matiz de agentes de la autoridad (es decir con una misión específica de ejecutar mandatos y decisiones de la autoridad); entrada libre en establecimientos (fincas, locales, etc.); estudio de documentación; la atención y disposición de los denominados *obligados tributarios* con un desglose, más significativo, de las actuaciones documentales inspectoras: comunicaciones, diligencias, informes, actas, etc.

También es un aspecto significativo a señalar, que se han encontrado de forma tangible e intangible en las cuatro inspecciones, los principios éticos y los criterios deontológicos recogidos en el capítulo VI, *deberes de los empleados públicos: código de conducta* de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público³³³, que fue el antecedente directo de los arts. 52, 53 y 54 del actual Real Decreto Legislativo 5/2015 que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público³³⁴.

Una de las fuentes más significativas de recogida de documentación, como se ha descrito, ha sido el ámbito asociativo de cada una de las disciplinas: al respecto debemos dejar constancia de que se ha percibido una potente estructura asociativa en el ámbito tributario y que, a nivel prospectivo, sería muy interesante realizar un estudio comparado histórico y disciplinar de esas estructuras asociativas. A nivel comparado se ha percibido la gran fortaleza de las inspecciones de trabajo y seguridad social, y de hacienda, en contra de las inspecciones de servicios sanitarios y de educación. Estas aparentes debilidades se consideran fruto de la delegación de competencias a las distintas comunidades autónomas: mientras que las inspecciones de trabajo y de hacienda siguen dependiendo de la administración central, las otras dos han sido transferidas, reorientando sus funciones hacia aspectos más sectoriales, *débiles* y sesgados, y perdiendo la visión macro y sistémica. Este aspecto volverá a hacerse patente en las conclusiones.

No podemos terminar este epígrafe sin insistir en la riqueza que ha aportado este estudio comparado disciplinar, poniendo en valor la iniciativa, y también y tras el estudio, la pertinencia y oportunidad de los elementos relevantes encontrados y que enriquecerán, sin lugar a dudas y de forma muy significativa, las propuestas y conclusiones.

³³² A este respecto es necesario mencionar el art. 1, punto 1 y 2 de la Constitución española de 1978 (BOE, núm. 311 de 29 de diciembre):

1. *España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.*
2. *La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.*

³³³ Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE, núm. 89, de 13 de abril). Texto original en la url: <https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-7788-consolidado.pdf> con acceso el 2 de julio de 2022.

³³⁴ Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE, núm. 261, de 31 de octubre). Acceso al texto consolidado en la url: <https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11719-consolidado.pdf> con acceso el 2 de julio de 2022.

En ese sentido consideramos muy enriquecedora la evolución y el contenido relacionado de los estudios desarrollados: estudio histórico, estudio comparado internacional y estudio comparado disciplinar. Los tres estudios, como estudio multifocal, pueden conformar una entidad sólida de visión, percepción y profundización multiforme, al estilo quizá, del triángulo de Penrose (Cáceres González, J., Gegúndez Arias, M. E., Maestre Hachero, M., & Márquez Pérez, A, 2002), pues pareciendo aspectos con entidad propia, muy heterogéneos, pueden llegar a acomodarse como una única concepción de carácter holístico.

Considerábamos al inicio de este epígrafe que era necesario que valoráramos como adecuada la selección y desarrollo del estudio comparado disciplinar. El poner en diálogo la historia, las funciones, la estructura y la organización de distintas unidades de control e inspección, tenemos el convencimiento de que ha aportado una interesante y singular información cualitativa que sin duda coadyuvará en el análisis y en el proceso prospectivo.

INVESTIGACIÓN EVALUATIVA

El constructo teórico de la competencia en la acción combina de un modo integrado en un sistema complejo esas habilidades intelectuales, conocimientos de contenido específico, habilidades cognitivas, estrategias específicas de un determinado ámbito, rutinas y subrutinas, tendencias motivacionales, sistemas de control de la voluntad, orientaciones personales del valor y comportamientos sociales.

Weinert (1999, 10)

Capítulo 5

Estudio de encuesta

5.1. Resultados obtenidos en el estudio de encuesta³³⁵

Una vez que, en el capítulo primero, hemos mostrado las respuestas conseguidas, en lo relativo a la aplicación de la herramienta, nos corresponde ahora exponer y analizar los resultados obtenidos con los estadísticos descriptivos.

En las tablas 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 y 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3. y 1.2.4 se han presentado las cargas factoriales de cada ítem, así como los estadísticos descriptivos (media y desviación típica) de cada uno de los ítems del cuestionario.

Como ya se ha apuntado en el cuadro 1.9, los coeficientes de alfa de Cronbach se situaron todos entre .97 y .98, superando los valores que se habían alcanzado en los análisis realizados en la primera versión de la herramienta. La correlación entre todos los ítems y sus escalas presentó valores adecuados (>.30).

³³⁵ Se puede acceder a los archivos de procesamiento de datos y análisis de la información generados por el software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences o Soporte Estadístico para las Ciencias Sociales), mediante los accesos que aparecen en la imagen 11.

En el siguiente cuadro se muestran los estadísticos descriptivos de las correspondientes dimensiones en las que se estructuran los ítems del estudio de encuestas:

	n.	<	>.	\bar{X}	σ
Dimensión Personal	309	,15	5,00	3,7568	,96201
Dimensión Institucional	309	,00	5,00	3,3402	1,14888
Dimensión de Gestión del Conocimiento	309	,00	5,00	3,5726	1,00345
Dimensión de Cultura Institucional.	309	,00	5,00	3,9175	,86521

Cuadro 5.1.1. Estadísticos descriptivos (media y desviación típica) de cada dimensión.

Seguidamente se realizó el cálculo de las correlaciones de Pearson entre las cuatro dimensiones que se evaluaron, a fin de descubrir las diferencias significativas en la composición de las dimensiones; no percibiéndose diferencias.

		Dimensión Personal	Dimensión Institucional.	Dimensión de gestión del Conocimiento	Dimensión de Cultura Institucional
Dimensión Personal	Correlación de Pearson	1	,749**	,667**	,739**
	Sig. (bilateral)		,000	,000	,000
	N	309	309	309	309
Dimensión Institucional.	Correlación de Pearson	,749**	1	,854**	,757**
	Sig. (bilateral)	,000		,000	,000
	N	309	309	309	309
Dimensión de gestión del Conocimiento	Correlación de Pearson	,667**	,854**	1	,803**
	Sig. (bilateral)	,000	,000		,000
	N	309	309	309	309
Dimensión de Cultura Institucional	Correlación de Pearson	,739**	,757**	,803**	1
	Sig. (bilateral)	,000	,000	,000	
	N	309	309	309	309

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Cuadro 5.1.2. Correlaciones entre las distintas dimensiones.

A continuación, y en la posibilidad de diferencias significativas entre las puntuaciones de los dos grupos prioritarios (inspectores y directores), se plasmaron los datos de ambos sectores en tablas para un estudio más visual (véanse las tablas 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 y 5.4.4).

Posteriormente se realizó una prueba de normalidad para verificar la distribución de los datos. El Test de Kolmogorov-Smirnov reveló que los datos no seguían una distribución normal ($p < .05$), y, por tanto, que había que utilizar pruebas no paramétricas para el análisis de los datos.

Es por esto que posteriormente se realizó el test de Mann-Whitney para analizar las diferencias entre las puntuaciones de directores e inspectores.

En la tabla 5.3. se presentan los resultados de dichos análisis por dimensiones.

Dados los resultados se realizó también el estudio por ítems, que se presentan en las tablas 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 y 5.5.4.

Corresponde en este momento realizar la interpretación de los datos, extraer las conclusiones más relevantes y realizar un estudio prospectivo que sirva para aportar mejora a los procesos, funciones y competencias profesionales que realiza la inspección de educación en la Comunidad de Madrid.

Debemos por tanto dar luz a los datos y cifras extraídas y hacerlas comprensibles para sacar conclusiones y propuestas.

Todas partes y procesos realizados son también susceptibles de reflexión, tanto en lo conseguido, como en aquello por conseguir y como equipo investigador debemos sacar conclusiones y propuestas de carácter académico y práctico.

5.2. El ejercicio de las competencias inspectoras visto por los grupos prioritarios

Nos corresponde en este momento realizar una interpretación de los resultados obtenidos, que será uno de los elementos de engranaje, junto a las conclusiones del estudio multifocal, para la construcción de la propuesta prospectiva.

El objetivo que nos habíamos planteado era el de estudiar y delimitar el perfil profesional de la Inspección Educativa en la Comunidad de Madrid, definido por el ejercicio de sus competencias. Para conocer ese ejercicio se había planteado la percepción de dicho ejercicio por parte de los cinco grandes actores de un sistema educativo, aquellos agentes que intervienen de forma directa de su gestión y en la percepción de sus logros: los propios inspectores de educación, los directores de los centros docentes en los que se imparte la enseñanza básica –obligatoria-, los docentes -maestros y profesores-, las familias de los alumnos y los responsables educativos. Finalmente, y en base a los resultados extraídos nos centramos en los datos de lo que denominamos como grupos prioritarios, pues son los grupos que de forma más directa intervienen en el desarrollo del trabajo de los inspectores: los propios inspectores de educación y los directores de los centros educativos de las etapas de la enseñanza básica. Por tanto, nos centramos en la percepción que del ejercicio de las competencias profesionales por parte de los inspectores de educación tienen los inspectores de educación y los directores de los centros educativos.

En el primer acercamiento a este objetivo el equipo investigador quiere realizar una propuesta gráfica, visual y cercana en base a los resultados obtenidos. Consideramos que será el preámbulo del desarrollo posterior de forma más pormenorizada.

De esta forma y como respuesta al objetivo y tal y como se recoge en la tabla 5.1, podemos afirmar que el perfil profesional de la inspección educativa en la Comunidad de Madrid se encuentra representada de la siguiente forma:

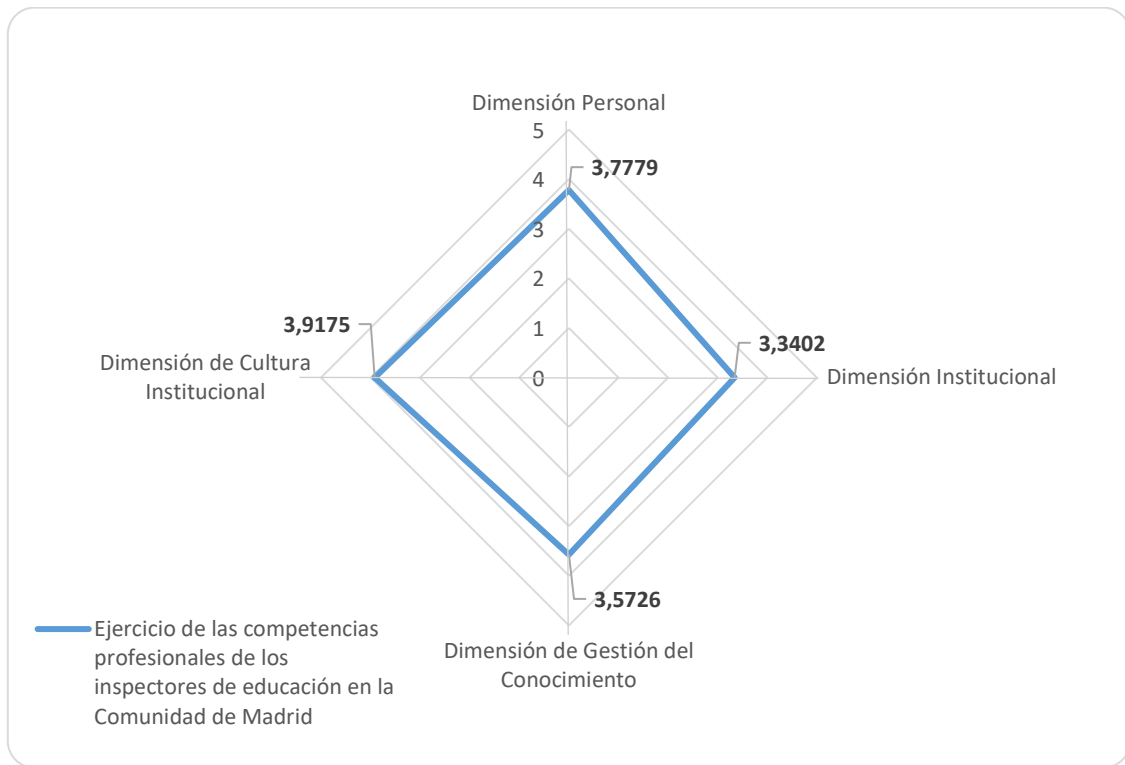


Figura 5.2.1. Representación gráfica en diagrama radial del ejercicio de las competencias profesionales por parte de los inspectores de educación de la Comunidad de Madrid.

Esa descripción gráfica nos proporciona un acercamiento realmente enriquecedor.

Podemos concluir que el ejercicio de las competencias profesionales, organizadas en las cuatro dimensiones descritas, se manifiesta de una forma homogénea y con cierta uniformidad: el ejercicio de las competencias profesionales por parte de los inspectores de educación no muestra desequilibrios en alguna de las dimensiones. Tanto la dimensión personal, la dimensión institucional, la dimensión de gestión del conocimiento y la dimensión de cultura institucional tienen un ejercicio aceptable y homogéneo.

Podemos también aseverar, en los mismos términos en los que actualmente se expresan los desarrollos competenciales (por ejemplo, el relativo al marco común europeo de referencia de las lenguas –MCER–, en las escalas de dominio), que los inspectores de educación de la Comunidad de Madrid desarrollan sus competencias con un 73 % de eficacia (3,6520 según la escala utilizada).

Esos mismos parámetros, pueden ser expresados en términos académicos clásicos, con una calificación de notable.

Esa percepción satisfactoria no debe obstaculizar un estudio más detallados de los datos, pues siguiendo con la percepción visual expuesta, la dimensión institucional recoge una percepción más baja que la dimensión de la cultura institucional (3,3402, frente a 3,9175), mientras que las dimensiones, personal y de gestión del conocimiento reciben una percepción más pareja y equilibrada (3,7779 y 3,5726 respectivamente).

Podemos afirmar que la percepción global y dimensional es aceptable por parte de los agentes de los grupos prioritarios. No podemos perder de vista que los resultados tienen un valor tanto

de autoevaluación: la percepción que los propios inspectores de educación tienen del ejercicio de sus competencias; y de evaluación externa: la percepción que los directores de los centros tienen del ejercicio de las competencias profesionales por parte de los inspectores de educación.

Pasemos ahora a realizar una descripción más detallada, y menos gráfica, del ejercicio de las competencias por parte de los inspectores de educación, en el marco dimensional expuesto.

Podemos analizar el ejercicio de las competencias profesionales por parte de los inspectores de educación en la Comunidad de Madrid, de forma organizada en las cuatro dimensiones establecidas y siguiendo los datos recogidos en las tablas 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 y 5.4.4, en los siguientes términos.

5.2.1. Dimensión personal

En lo relativo a la dimensión personal, que es la que permite valorar el nivel de desempeño personal de las competencias propias de cada inspector, podemos afirmar que los inspectores de educación de la Comunidad de Madrid identifican de forma aceptable las prácticas educativas y los modelos de enseñanza que se desarrollan en los centros educativos que supervisan y que constituyen sus señas de identidad, pues son parte sustancial de su proyecto educativo (3,78). Estos datos se encuentran recogidos, de forma global en la tabla 5.3 y de forma detallada para cada uno de los ítems, en la tabla 5.4.1.

Realizando un análisis más detallado, la percepción aumenta, en relación a la media de la dimensión, cuando se juzga cómo los inspectores de educación valoran la adaptación de las prácticas, tanto docentes y organizativas, a la normativa del sistema educativo (4,05); y es significativamente muy superior cuando se estima la forma en que los inspectores de educación reconocen la contribución de la labor de los centros al ejercicio efectivo del derecho a la educación (4,14).

Estas afirmaciones colocan a los inspectores de educación en un nivel de valoración alto en lo relativo al control de la adaptabilidad contextual que realizan los centros educativos. Los inspectores de educación son percibidos personalmente como conocedores y facilitadores de las normas generales para el desarrollo en los centros educativos del ejercicio del derecho a la educación de sus alumnos.

En esta misma dimensión, se estima de una forma igualmente aceptable que los inspectores de educación facilitan una comunicación abundante y fructífera para intercambiar información y conocimiento con los centros educativos (3,96) y de la misma forma, aunque de forma algo menor, también proporciona relaciones de comunicación fluidas con los distintos miembros de las comunidades educativas para intercambiar información y conocimiento (3,70).

Estos datos colocan a los inspectores de educación en un nivel de mediadores y facilitadores de intercambio realmente provechosa para las comunidades educativas.

La percepción que se tienen de los inspectores de educación es que generan confianza con sus actuaciones, para que los distintos actores del sistema educativo desarrollen sus labores en un clima de mutua colaboración (4,07); y se percibe de una forma importante que además planifican sus actuaciones de modo que sus actuaciones en los centros se desarrollan de forma global y contextualizada (3,97). Esta percepción acentúa igualmente la dimensión de los

inspectores de educación, a nivel personal, como mediadores y facilitadores de relaciones, de comunicaciones y de adaptaciones en lo que la normativa específica permita.

Además, la imagen que los actores del sistema educativo tienen de la labor de los inspectores de educación es que estos tienen en cuenta la evolución de los servicios y de los centros educativos para impulsar sus propios procesos de mejora que repercuta en todo su alumnado (3,73) y promueven en el seno de los servicios y centros educativos el análisis de los distintos resultados del centro (académicos, de convivencia, etc.), para impulsar la elaboración y desarrollo de planes de mejora que contribuyan, en su contexto a la calidad del sistema educativo (3,91).

Es importante señalar estos detalles, pues los inspectores de educación de la Comunidad de Madrid se perciben como agentes facilitadores de comunicación e información (en la relación intra y extra) y de cambio y proceso.

De la misma forma, aunque en un nivel algo inferior, se considera que los inspectores de educación, en su desempeño personal, facilitan un conocimiento real (podemos afirmar que aunando operatividad, practicidad y, en su caso, evidencia científica) y una reflexión serena sobre las posibilidades de las innovaciones educativas y de sus consecuencias para los centros (3,36); y en esta línea, y de forma equiparable, impulsa la implantación de distintos programas, proyectos o innovaciones educativas que mejor se ajusten mejor a las necesidades y características del centro educativo y que contribuyan a mejorar su capacidad y su perspectiva profesional (3,37).

Son en estos parámetros de la selección, la evaluación y la promoción de los proyectos y de las innovaciones educativas en las que los inspectores tienen la menor valoración en esta dimensión, dando una imagen quizá algo conservadora y reticente a la que podemos denominar como la *innovación por la innovación*, poniendo en valor los métodos contrastados y las propuestas facilitadoras de mejora tangible en un espacio, el educativo, tan sensible y amenazada por distintas y en ocasiones desafortunadas propuestas no validadas.

La percepción que se tiene del ejercicio de las competencias profesionales por parte de los inspectores de educación es que comparten sus distintas inquietudes con los centros educativos y les anima a plasmarlas en sus memorias anuales, como impulsora de mejora (3,89) y además, aunque de forma algo menor, favorece la transformación de los centros educativos en comunidades que comparten tanto su misión y su visión, como sus planes y proyectos (3,38).

Por último, y de una forma aceptable, se percibe que los inspectores de educación construyen una imagen concreta para cada situación educativa, integrando, desde su contexto, los puntos de vista de los diferentes agentes que intervienen en las comunidades educativas de los centros (3,57), manifestando un alto conocimiento, desde la práctica y desde la formación y la acción, del sistema educativo y de las posibilidades adaptativas y contextuales de los centros educativos.

5.2.2. Dimensión institucional

Los ítems de la dimensión institucional permiten valorar el nivel de desempeño alcanzado por el Servicio de Inspección (SIE) en las competencias profesionales consideradas como propias: por tanto, estos indicadores no se refieren a su desempeño personal, que ya se ha visto en la dimensión anterior, sino a su desempeño institucional.

La primera apreciación que debemos realizar es que en lo relativo a la dimensión institucional la percepción del ejercicio de las competencias profesionales por parte de los inspectores de

educación en la Comunidad de Madrid, es sensiblemente menor que la percepción tenida por los grupos prioritarios, en cuanto a la dimensión personal (3,3402 frente a 3,779), tal y como muestran los datos recogidos, de forma global en la tabla 5.3 y de forma detallada para cada uno de los ítems de la dimensión, en la tabla 5.2.2. Esas más de cuatro décimas de diferencia se desglosan de la siguiente forma.

Los grupos prioritarios aseveran que los servicios de inspección educativa en la Comunidad de Madrid disponen de una forma aceptable (3,66) de procedimientos y orientaciones suficientes para apoyar y facilitar el desempeño adecuado de las funciones y tareas que tiene asignadas. Además, y de una forma sensiblemente mayor, se considera que los servicios de inspección estudian y analizan de forma detallada la normativa del sistema educativo, a fin de definir criterios institucionales para poder aplicarla de forma homogénea, imparcial y objetiva (4,03). Este aspecto es significativo pues evidencia una homogeneidad en las actuaciones inspectores, que como se ve, no es puesta en duda.

Sin embargo, la valoración disminuye cuando se pregunta si los servicios de inspección realizan, de forma institucional, actividades de formación dirigidas a actualizar los conocimientos y competencias necesarios para el desarrollo de las funciones específicas de la inspección (3,39). Es una condición que evidencia una correcta, aunque mejorable, formación específica, que parece orientarse, o al menos complementarse, a nivel personal. La valoración expuesta es muy similar a la percibida en cuanto a si los servicios de inspección, de forma institucional, facilitan el reconocimiento de buenas prácticas docentes y organizativas para que puedan servir de referencia en los procesos de mejora de los centros educativos (3,38); e incluso disminuye al valorar si facilita en los servicios educativos, el reconocimiento de buenas prácticas, para que puedan servir de referencia de mejora (3,30).

Parece pues que los servicios de inspección educativa se centran más en la aplicación de la normativa, e incluso utiliza argumentos coercitivos para ello, pero pierde eficacia al reconocer prácticas de centro y servicios, susceptibles de ser expuestos y utilizados como muestra de mejora.

La valoración que realizan los grupos prioritarios en cuanto a si los servicios de inspección reconocen y valoran las metodologías más frecuentes y su aplicación práctica en procesos que facilitan la mejora del aprendizaje, es un poco superior a la media de esta dimensión (3,46) y lo sitúa en un nivel aceptable. No obstante, la percepción baja de forma muy significativa cuando se valora si los servicios de inspección planifican reuniones para intercambiar experiencias vividas en los distintos ámbitos del sistema educativo con la finalidad de definir casos que podrían servir de referencia (3,10) y aumentan poco significativamente, al valorar si los propios servicios de inspección facilitan el intercambio de ideas y experiencias para que puedan compartir tanto el conocimiento implícito, es decir, el que posee y utiliza de forma inconsciente, como el conocimiento explícito, es decir, el estructurado y plenamente consciente, para mejorar el desempeño de sus funciones y tareas (3,22). Estos aspectos deberán ser tenidos en cuenta en el estudio prospectivo, pues sin evidenciar una clara deficiencia, muestran particularidades que no rentabilizan los activos de los propios servicios de inspección educativa.

La percepción que los grupos prioritarios tienen sobre si los servicios de inspección contribuyen a crear una visión específica de la realidad educativa y colaboran para que esa visión pueda ser compartida por todos sus miembros, se encuentra igualmente por debajo de la media de la dimensión (3,28) y algo inferior ante la pregunta de si los servicios de inspección incorporan a su plan anual de trabajo, actividades dirigidas a evaluar y mejorar la capacidad profesional de sus miembros, de sus equipos y de la propia institución (3,38).

Estos ítems pueden mostrar una cierta falta de rentabilidad colectiva de los servicios de inspección, como institución, aunque no preocupante, para la implementación de la realidad del sistema educativo sobre el que interviene, y para poner en marcha iniciativa que evalúen y mejoren su capacidad profesional.

Y en el resto de aspectos de esta dimensión institucional, nos encontramos con una percepción inferior a la media, aunque igualmente de forma no preocupante. Así se percibe que los servicios de inspección promueven y facilitan, de forma correcta, aunque no significativa, una eficaz gestión del conocimiento entre sus miembros y anima a formar equipos que compartan experiencias y saberes (3,25); y en la misma línea se valora si promueven y facilita la creación entre sus miembros de una cultura colegiada y si anima a formar equipos que compartan responsabilidades en una misma actuación, con una valoración similar (3,28).

La valoración más baja en esta dimensión se refiere a la cuestión de si el servicio de inspección impulsa la reflexión entre sus miembros, sobre el sistema educativo, tomando como referencia los informes nacionales e internacionales (3,06), evidenciando una carencia, no preocupante y ya contrastada, y reiterando una cierta laguna institucional en la utilización de elementos y dimensiones internacionales y supranacionales.

Y por último, la percepción disminuye de la media en la dimensión, al preguntarse si los servicios de inspección facilitan el conocimiento necesario a sus miembros, sobre metodologías, técnicas e instrumentos que puedan mejorar el desempeño de las funciones y tareas que tiene asignadas (3,20); en cuanto a si promueven la realización de actuaciones integrales y colegiadas que, por sus circunstancias o por sus características, así lo aconsejan (3,29); y en lo relativa a si el servicio de inspección se preocupa por construir una visión diferencial del sistema educativo que integre sus niveles constitutivos (general, centro y aula) como instrumento que oriente su actuación tanto en un sentido normativo como en un sentido perfectivo –encaminado a la mejora y la perfección- (3,16).

Esta dimensión, que cuenta con la valoración más baja del resto de dimensiones, muestra ciertas insuficiencias, aunque no alarmantes, en la rentabilidad de los elementos personales y organizativos de los servicios de inspección, en la reflexión y construcción de una visión completa y nivelar del sistema educativo, y en la intervención colegiada, con clara intención enriquecedora, sobre los centros y servicios del sistema educativo.

5.2.3. Dimensión de gestión del conocimiento

En esta dimensión los indicadores permiten valorar el nivel de desempeño alcanzado, tanto por la inspección educativa en su conjunto, como por un determinado servicio en un territorio concreto –Dirección de Área Territorial-, en base a variables utilizadas. La herramienta considera al nivel de desempeño en esta dimensión, como una contribución decisiva para alcanzar el máximo nivel de desarrollo en el resto de dimensiones.

Su nivel de percepción, como ya se ha mostrado, se encuentra en el rango medio (3,5726) del resto, por debajo de la dimensión de la cultura institucional y personal, y por encima de la dimensión institucional, que acabamos de ver. Estos datos se encuentran igualmente recogidos, de forma global en la tabla 5.3 y de forma detallada para cada uno de los ítems de la dimensión, en la tabla 5.2.3.

El primer aspecto señalado recibe la percepción más alta en esta dimensión y es el relativo a si la inspección educativa dispone de un conocimiento adecuado de las evidencias, así como de los modelos y teorías que sirven de fundamento a las normas reguladoras del sistema educativo (3,84).

Este aspecto se encuentra muy vinculado al siguiente, que se refiere a si la inspección educativa posee un conocimiento adecuado de las evidencias, disponibles sobre la realidad educativa, así como de los métodos, procedimientos e instrumentos utilizados en su obtención, en el que consigue una puntuación ligeramente inferior (3,74).

Estos primeros aspectos colocan a la inspección educativa en un nivel de disponibilidad y posesión de un conocimiento experto sobre el por qué, el para qué y el cómo del tejido organizativo y normativo que regula el sistema educativo, y de las herramientas y criterios para el establecimiento de la realidad educativa sobre la que interviene.

Los grupos prioritarios consideran que la inspección educativa maneja, en un nivel inferior al anterior, pero de forma adecuada, los modelos y teorías en los distintos niveles del sistema educativo, para describir y valorar adecuadamente las diversas situaciones educativas y reconocer sus posibilidades de mejora (3,59); y es valorada de forma inferior en esta dimensión, la disponibilidad de canales de comunicación interna en las que se puedan intercambien prácticas de actuación y se fomente el intercambio de casos relevantes, así como de prácticas inspectoras innovadoras (3,18).

Esta última particularidad, ya señalada en un aspecto de la dimensión institucional, muestra una cierta percepción de que el conocimiento teórico y práctico de los inspectores de educación no se encuentra debidamente rentabilizado, ni para optimizar la intervención institucional, ni para la constitución de un conocimiento colectivo experto, concepto indispensable para un posible desarrollo de la capacidad profesional de la inspección educativa.

Seguidamente, la percepción de si la inspección educativa dispone del conocimiento necesario sobre metodologías, técnicas e instrumentos que pueden mejorar el desempeño de las funciones y tareas que tiene asignadas, recibe una valoración aceptable (3,60); que baja ligeramente en la consideración de si participa en grupos de trabajo para el análisis de los problemas relevantes de los centros, teniendo en cuenta el marco global del sistema educativo (3,41); y baja algo más en la valoración de si comparte el análisis de casos prácticos relacionados con situaciones problemáticas para ofrecer una visión técnica y cualificada y proponer las correspondiente posibles soluciones (3,37).

Se insiste, de esta forma, en la percepción de que la inspección educativa cuenta con conocimiento específico y experto, pero este se rentabiliza en menor nivel tanto en el marco de grupos de trabajo, como en el intercambio de estudio de casos prácticos para la generación de soluciones adecuadas.

Siguiendo con esta dimensión de gestión del conocimiento, se percibe que la inspección educativa dispone, de una forma altamente adecuada, de procedimientos, técnicas y orientaciones adecuadas, tanto para examinar documentos de los diferentes centros y servicios educativos (3,81), como para diseñar y desarrollar las visitas a estos (3,79).

Pero baja algo en la percepción de si dispone de las herramientas adecuadas para la comunicación y reflexión sobre las actuaciones de modo que todos los miembros del servicio desarrollen juicios de las distintas situaciones educativas ajustadas al conocimiento actualizado disponible (3,45).

Las afirmaciones de los grupos prioritarios parecen orientar la percepción de que la inspección educativa dispone del conocimiento y de las herramienta necesarias y adecuadas para realizar la planificación de la intervención en los centros y servicios, en forma de visitas, y para el examen de la documentación de estos, pero baja en la disposición de herramientas de intercambio y reflexión conjunta que configuren un conocimiento colectivo relevante.

Por último y en esta dimensión se valora de una forma satisfactoria que la inspección educativa dispone del conocimiento y de las habilidades necesarias para superar con éxito las situaciones en las que se presenten conflictos dentro de los centros educativos (3,78); no obstante vuelve a bajar tanto en la percepción de que la inspección educativa facilita los procesos que requieren la gestión del conocimiento tanto explícito como implícito (3,45), como en la apreciación de si aporta a los diferentes actores del sistema educativo de una reflexión que permita interpretar sus acciones para alinearlas con las finalidades generales de la educación (3,45).

Por lo tanto, se considera que la percepción global de la intervención educativa de la inspección educativa cuenta con la valoración estimable en cuanto a los elementos, herramientas y conocimientos necesarios, pero baja en los procesos de comunicación, intercambio y reflexión conjunta, tanto dentro de sus estructuras organizativas, como en los contextos de los equipos docentes y de las comunidades educativas.

5.2.4. Dimensión de cultura institucional

Los aspectos seleccionados en esta dimensión permiten valorar la contribución que realizan los servicios de inspección, como servicios esenciales para lograr que la ordenación del sistema educativo consiga que todas las personas puedan alcanzar el ejercicio efectivo de este derecho.

La valoración de esta dimensión es claramente la más alta de todas las dimensiones (3,9175), por encima de la valoración conseguida en la dimensión institucional, que es la más baja, sin ser preocupante, o las conseguidas en la dimensión de gestión del conocimiento o en la dimensión personal. Los datos se encuentran expresados, de forma global en la tabla 5.3 y de forma detallada para cada uno de los ítems de la dimensión, en la tabla 5.2.4.

El primer aspecto de esta dimensión valora como significativamente muy adecuada la percepción de que la inspección educativa evidencia y comparte los valores esenciales para el ejercicio de las funciones que tiene asignadas, como son la imparcialidad, el rigor, el respeto a todas las personas e instituciones, la equidad y el cuidado y protección del alumnado (4,21); pero baja en la percepción de participar, con sus diversas actuaciones, en la construcción de comunidades de práctica profesional (3,73).

Se vuelve a considerar que la inspección educativa tiene claros los criterios que fundamentan su labor, pero pierde, no de forma significativa, en la manera de configurar y alimentar colectividades profesionales.

En estos mismos parámetros, se valora de forma adecuada, que la inspección educativa reconoce y valora la necesidad de una visión específica y diferenciada de la realidad educativa que integra los niveles del aula, el centro y el nivel sistémico (3,70); y sube algo en la percepción de que considera esencial tanto la propia reflexión, como la de los actores del sistema educativo, para comprender las fortalezas y debilidades que este presenta (3,86); subiendo, de forma clara, en la valoración de que todos los actores del sistema educativo cooperen para alcanzar el mayor nivel posible de éxito (4,02).

Se considera, con los matices expuestos, que la inspección educativa valora la visión específica de la realidad educativa, sobre la que interviene, y de sus tres niveles –sistema, centro y aula-, y valora como esencial, de forma significativa, la reflexión propia y la de los actores que intervienen sobre el propio sistema educativo y sobre la necesidad de que coadyuven en la consecución de su mayor nivel posible.

En relación al aspecto relativo a si la inspección educativa impulsa procesos de mejora en los centros educativos, desde la consideración de las memorias anuales y de informes

institucionales, este recibe una valoración aceptable, por debajo de la media de la dimensión (3,78) y baja de forma muy considerable al valorarse por parte de los grupos prioritarios si la inspección educativa dispone de tiempos e infraestructuras para celebrar encuentros en los que se compartan criterios con distintos agentes de la comunidad educativa de los centros (2,97).

Es significativo señalar que este es el aspecto con menos puntuación de toda la herramienta y lo sitúa en lo que en el vulgo académico se denominaría como *aprobado raspado*. Este aspecto, cuyo núcleo son las infraestructuras temporales y locales, con elementos tan sensibles como son los agentes de las comunidades educativas, deberán ser tenidas muy en cuenta en el estudio prospectivo.

La valoración sobre el aspecto correspondiente a si la inspección educativa promueve la acción coordinada de todos sus miembros, recibe una baja puntuación, en relación a la media de la dimensión (3,53), dando una semblanza algo quijotesca de la intervención ligada a criterios y protocolos comunes, sin que se considere preocupante; pero sube al valorar si asume, de forma corresponsable, las acciones que se desarrollan dentro del mismo servicio (3,74).

Estos también son aspectos que deben promover la reflexión en el seno del equipo investigador, pues en la consideración de una coordinación no extraordinaria, sí se asumen, aceptan y se apropian, en mayor medida, las acciones que se despliegan en cada uno de los servicios.

En el aspecto relativo a si la inspección educativa comparte la necesidad de promover una cultura inclusiva en los centros educativos, con la finalidad de facilitar la igualdad de oportunidades de aprendizaje, esta recibe una valoración correspondiente a la media de la dimensión (3,92), poniendo en valor unos de los principios que establece nuestro sistema educativo y que es asumido teórica y prácticamente por la labor que realiza la inspección educativa.

A partir de este aspecto los siguientes indicadores se muestran con valoraciones claramente superiores y marcan los criterios que movilizan las competencias profesionales de la inspección educativa.

De esta forma al valorar si la inspección educativa considera la educación, como derecho constitucional, como un derecho universal y promueve que todas las personas puedan hacer un uso efectivo de ese derecho, el aspecto recibe una puntuación alta (4,38), muy por encima de la media; y esta valoración se incrementa ante la pregunta de si la inspección educativa asume el derecho a la educación como fundamento de todo el sistema educativo y de su propia práctica profesional (4,42), con la puntuación más alta de la dimensión y de todos los resultados de la herramienta.

Las siguientes preguntas, también reciben una valoración alta, con relación a la media de la dimensión. De esta forma al preguntar si la inspección educativa considera la realización de sus funciones y tareas como una garantía para el funcionamiento de un servicio público esencial como es la educación, se recibe una alta puntuación (4,34), que baja, solo ligeramente ante el aspecto de si la inspección educativa asume la responsabilidad de contribuir para que la ordenación del sistema educativo contribuya a que los centros y los servicios educativos orienten su organización y funcionamiento hacia la mejora continua (4,24).

Estos últimos cuatro aspectos ponen en valor las motivaciones y los criterios que se perciben por parte del sistema educativo: la inspección de educación tiene claros sus principios y motivaciones y es percibida de forma clara y rotunda por los distintos agentes en esa dirección.

Este aspecto, de especial transcendencia para el equipo investigador, justifica en sí misma la existencia de la inspección de educación y del desarrollo de sus tareas, funciones y competencias

profesionales. La inspección educativa es percibida como un servicio comprometido con los valores esenciales del derecho a la educación y en la dinámica de mejora permanente y continua. La percepción contraria: una inspección educativa, que realiza tareas y funciones de forma sustraída a los principios fundamentales de nuestro sistema, el derecho a la educación, la inclusión como principio fundamental y la mejora continua del sistema, del centro y de la intervención docente en el aula, sería un indicador de unidades instrumentales, burocráticas y desvinculadas de las finalidades del sistema educativo.

5.3. Los aspectos diferenciadores, en la percepción del ejercicio de las competencias inspectoras, por parte de los inspectores y de los directores

Si bien el estudio se orientó, de una manera global, hacia la percepción de los denominados como grupos prioritarios, del ejercicio de las competencias profesionales por parte de los inspectores de educación, como ya se ha expuesto, los datos mostraron ciertas diferencias significativas en la percepción de los distintos grupos que componían esos colectivos prioritarios: los inspectores de educación y los directores de los centros docentes donde se imparten enseñanzas básicas.

De esta forma, la percepción es que los directores de los centros donde se imparte la enseñanza básica tiene una percepción sutilmente más positiva, aunque consideramos que no significativa (3,67) que los propios inspectores de educación, sobre el ejercicio de sus competencias profesionales (3,58) (véase la tabla 6.2).

Estas diferencias son también plasmadas, de una forma gráfica en la figura 5.2.2, en el que se muestra los resultados diferenciados de cada uno de estos grupos en las cuatro dimensiones.

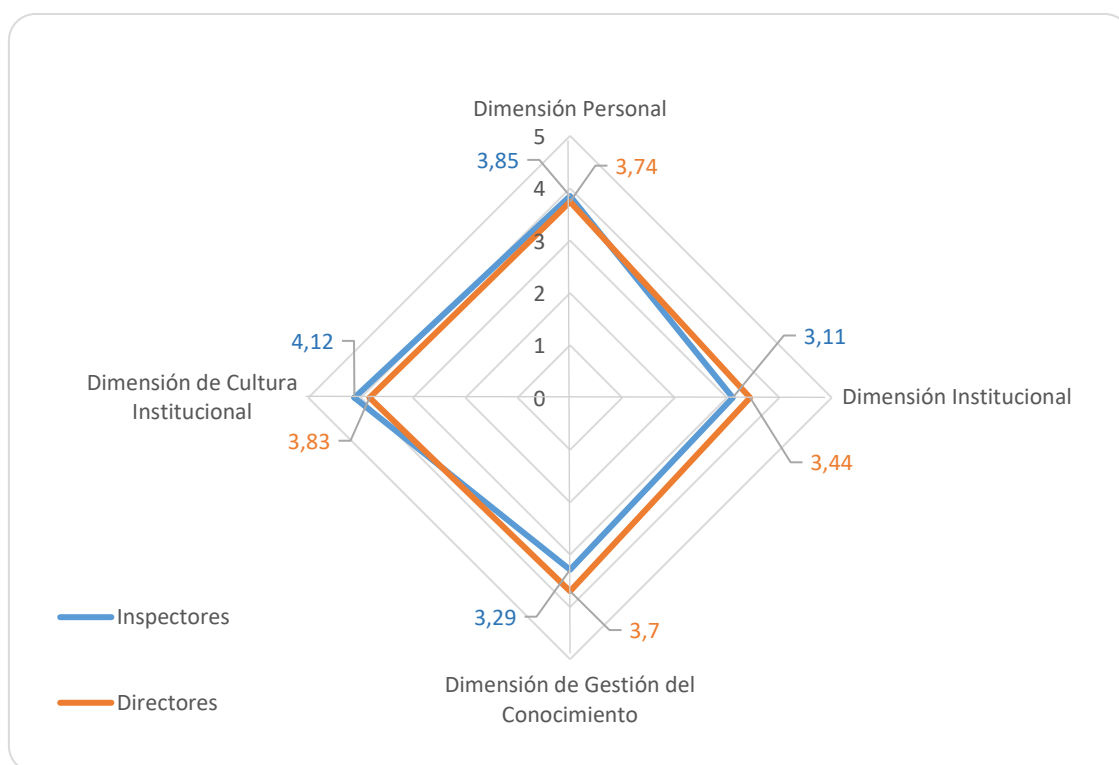


Figura 5.2.2. Representación gráfica, en diagrama radial, de las dimensiones que componen el ejercicio de las competencias profesionales por parte de los inspectores de educación de la Comunidad de Madrid, percibida por los propios inspectores de educación y por lo directores de los centros docentes donde se imparte la enseñanza básica.

Este diagrama muestra una cierta igualdad en lo relativo a la dimensión personal, en la percepción de los propios inspectores de educación y de los directores (3,85 y 3,74), pero algunas diferencias en las dimensiones institucional y de gestión del conocimiento: menor en

los inspectores y mayor en los directores (en la dimensión institucional, 3,11 y 3,44; y en la dimensión de gestión del conocimiento, 3,29 y 3,70). Esta percepción bascula en la dimensión de cultura institucional, mostrando una mayor valoración por parte de los inspectores de educación, con relación a la de los directores de los centros educativos (4,12 y 3,83).

Como ya se ha expuesto, se realizó primeramente una prueba de normalidad para verificar la distribución de los datos. El Test de Kolmogorov-Smirnov reveló que los datos no seguían una distribución normal ($p < .05$) –datos recogidos, de forma global en la tabla 5.2 y de forma desglosada en las tablas 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 y 5.4.4-, y por tanto, que había que utilizar pruebas no paramétricas para el análisis de los datos. Por ese motivo, se realizó el test de Mann-Whitney para analizar las diferencias entre las puntuaciones de inspectores y de directores. En la tabla 5.3 se recogen de forma global y por dimensiones, los resultados de dichos análisis; y en las tablas 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 y 5.5.4 se recogen de forma más específica y desglosada.

Veamos a continuación aquella significatividad en esas diferencias, y la posible relación con las variables utilizadas (cuya fragmentación está expuesta para los directores de los centros, en los cuadros 1.28.1, 1.28.2 y 1.28.3, y para los inspectores de educación, en los cuadros 1.29.1 y 1.29.2; y cuyos resultados, por dimensiones se pueden encontrar en las tablas 5.6 para los directores; y en la tabla 5.7 para los inspectores), que aportarán un enfoque más concreto para el estudio prospectivo.

En esta particularidad relativa a las variables y de forma global, se debe apuntar (véase la tabla 5.6.1. -columna \bar{x} -), en relación a la variable *Dirección de Área*, los directores de los centros con una valoración global superior son los pertenecientes a la DAT Este y los que muestran una valoración global menor son los pertenecientes a la DAT Sur; estando el resto de DAT en el campo intermedio (DATN: 3,86, DATS: 3,37, DATE: 4,20, DATO: 3,74 y DATC: 3,46).

En relación a la variable *antigüedad en el desempeño de la función directiva* (véase la tabla 5.6.2. -columna \bar{x} -) los directores que muestran una valoración global mayor son los que llevan ejerciendo entre 5 y 8 años (3,91), frente a los que acaban de empezar, con una antigüedad entre 0 y 4 años (3,55) o los que llevan ejerciendo más de 9 años, con valoración similar (3,50).

Por último y en el estudio de los directores de los centros, la valoración global de la variable *tipo de centro* (véase la tabla 5.6.3. -columna \bar{x} -) muestra en esta dimensión una mayor valoración por parte de los directores de los centros concertados (3,71), que la de los directores de los centros públicos (3,04).

Como ya se ha apuntado no existen datos correspondientes a los directores de centros privados, pues no se ha logrado su participación.

Por otra parte, y en relación al estudio de los inspectores de educación, de una forma global y en la variable de *Dirección de Área* (véase la tabla 5.7.1. -columna \bar{x} -) la mayor valoración la muestran los inspectores de la DAT Este, frente a los que muestran valoración algo menor, sin que se considere muy significativo, que son los inspectores de la DAT Oeste (DATN: 3,52, DATS: 3,57, DATE: 3,70, DATO: 3,49 y DATC: 3,60).

En relación a la valoración global de la variable *antigüedad en el desempeño de la función inspectora* (véase la tabla 5.7.2. -columna \bar{x} -) por parte de los inspectores de educación, la valoración es muy pareja, sin diferencias significativas. De esta forma la valoración de los inspectores con experiencia entre 0 y 4 años es de 3,60; de los que llevan ejerciendo entre 5 y 8 años es de 3,55, y de los que llevan ejerciendo 9 años o más es de 3,58.

Este dato muestra, como será reiterado específicamente en el resto de dimensiones, más adelante, que la percepción de los inspectores no varía significativamente a lo largo de los años de ejercicio.

5.3.1. Dimensión personal

En lo relativo a la dimensión personal, las diferencias entre los componentes de los grupos prioritarios (inspectores de educación y directores), mostraron significatividad –nivel de significación asintótica [bilateral] $p<.05$ -, tal y como se muestra en la tabla 5.5.1, en los ítems: A.1, A.2.B, A.3.A, A.4, A.5, A.7, A.8, A.9 y A.12.

En cuanto a las variables de estudios, tal y como puede apreciarse en los desarrollos de la tabla 5.6., se muestran singularidades por variables que también se deben considerar.

De esta forma (véase la tabla 5.6.1. -columna D1-) y en relación a la variable *Dirección de Área*, los directores de los centros con una valoración superior son los pertenecientes a la DAT Este y los que muestra una valoración menor son los pertenecientes a la DAT Sur; estando el resto de DAT en el campo intermedio (DATN: 3,86, DATS: 3,39, DATE: 4,19, DATO: 3,73 y DATC: 3,69).

En relación a la variable *antigüedad en el desempeño de la función directiva* (véase la tabla 5.6.2. -columna D1-) los directores que muestran una valoración mayor son los que llevan ejerciendo entre 5 y 8 años (3,96), frente a los que acaban de empezar, con una antigüedad entre 0 y 4 años (3,61) o los que llevan ejerciendo más de 9 años, con valoración similar (3,60).

Por último, y en el estudio de los directores de los centros, la variable *tipo de centro* (véase la tabla 5.6.3. -columna D1-) muestra en esta dimensión una mayor valoración por parte de los directores de los centros concertados (3,75), que la de los directores de los centros públicos (3,51). No existen datos correspondientes a los directores de centros privados, pues no se ha logrado su participación.

Por otra parte, y en relación al estudio de los inspectores de educación, en esta dimensión personal y en la variable de *Dirección de Área* (véase la tabla 5.7.1. -columna D1-) la mayor valoración la muestran los inspectores de la DAT Capital, frente a los que muestran valoración menor, que sin que se considere muy significativo, son los inspectores de la DAT Este (DATN: 3,78, DATS: 3,80, DATE: 3,70, DATO: 3,83 y DATC: 4,00).

Muestra interés el hecho de que, mientras son los directores de los centros de la DAT Este quienes valoran de forma superior la dimensión personal del ejercicio de las competencias profesionales de los inspectores de educación, son los propios inspectores de educación de esa Dirección de Área quienes se valoran de forma inferior.

En relación a la variable *antigüedad en el desempeño de la función inspectora* (véase la tabla 5.7.2. -columna D1-) y en esta dimensión personal, la valoración es muy pareja sin diferencias significativas. De esta forma la valoración de los inspectores con experiencia entre 0 y 4 años es de 3,89; de los que llevan ejerciendo entre 5 y 8 años es de 3,83, y de los que han ejercido 9 años o más es de 3,88.

Este dato muestra que la percepción de los inspectores en los aspectos de la dimensión personal no varía significativamente a lo largo de los años de ejercicio.

Pasemos ahora a ver detalladamente las diferencias con mayor significatividad en cada uno de los ítems señalados.

Ante la pregunta de si el inspector de educación identifica las prácticas educativas que se desarrollan en un centro educativo y los modelos de enseñanza que les sirven de referencia para definir sus propias señas de identidad, los directores muestran una valoración superior a la de los propios inspectores (3,83, frente a 3,66). Es significativo que la percepción de los directores de los centros sea superior a la que tienen los propios inspectores de educación y da imagen de

un reconocimiento de autoridad técnica, por una parte, y de una autoexigencia por parte de los inspectores, en un valor inferior a las dos décimas.

Por otra parte, ante la cuestión de si los inspectores de educación reconocen la contribución del trabajo de los centros al ejercicio efectivo del derecho a la educación, la valoración es superior en los inspectores de educación contra la percepción de los directores (4,35, frente a 4,05). Esta diferencia de tres décimas muestra que los directores no se sienten especialmente reconocidos por los inspectores en el desarrollo del ejercicio del derecho a la educación. Es necesario mencionar que la valoración, de cualquier forma, es alta.

En cuanto al ítem A.3.A. relativo a si los inspectores de educación facilitan relaciones de comunicación fluidas con los centros educativos para intercambiar información y conocimiento, la percepción se reproduce, pues es más alta en los inspectores de educación que en los directores (4,33, frente a 3,80).

El aspecto correspondiente a valorar si los inspectores de educación generan confianza, con sus actuaciones, en los distintos actores del sistema educativo, para que estos desarrollen sus distintas tareas en un clima de colaboración con la Inspección, es igualmente valorada de forma más alta por los inspectores que por los propios directores (4,36 frente a 3,94).

Dentro de la dimensión personal y con relación a si los inspectores de educación planifican sus actuaciones de modo que sus intervenciones adquieran a la vez un carácter global y adaptado a las características de los centros y/o servicios, tiene igualmente una valoración superior en los inspectores de educación, que en los directores (4,20, frente a 3,87). Este aspecto muestra la necesidad de contextualizar las intervenciones inspectoras, más allá de aspectos teóricos y protocolizados de forma global.

También se percibe cierta significatividad diferenciada en la valoración de si los inspectores de educación promueven en los equipos directivos y en los equipos docentes el análisis de los resultados del centro, tanto en el ámbito académico, como en el de la convivencia, para impulsar la elaboración y desarrollo de planes de mejora que contribuyan al desarrollo de un sistema educativo de calidad; pues de la misma forma, es superior en los inspectores de educación que en los directores (4,23 frente a 3,77).

Estos aspectos deberán ser especialmente considerados en el estudio prospectivo, pues parece que la labor realizada por los inspectores de educación, no se encuentra percibida, en el mismo nivel por los directores de los centros.

En otro ámbito y en relación a si los inspectores de educación facilitan un conocimiento informado y una reflexión serena de las posibilidades y limitaciones de las diferentes innovaciones educativas, así como de sus consecuencias para el centro, al contrario de los últimos aspectos vistos y tal y como se ha recogido en el epígrafe 5.2, recibe una valoración superior en los directores, que en los inspectores (3,47 frente a 3,11).

En esa misma línea y en la valoración de si los inspectores de educación impulsan en los centros la implantación de aquellos programas, proyectos e innovaciones educativas (tanto institucionales, como no institucionales) que se ajusten mejor a las necesidades y características de los mismos y que contribuyan a mejorar su capacidad profesional, dotándolos de nuevas perspectivas, se recibe una valoración mayor por los directores de los centros que en los inspectores de educación (3,42 frente a 3,26).

Este aspecto muestra que los directores de los centros perciben una mayor orientación e impulso hacia estas iniciativas, que los propios inspectores.

Y en último lugar, y en aquellos aspectos detectados en los que existe una significatividad diferenciada entre la valoración realizada por los inspectores de educación y los directores de

los centros, como componentes de lo que hemos denominado como grupos prioritarios, en cuanto a si los inspectores de educación construyen una imagen concreta para cada situación educativa, integrando, desde su contexto, los puntos de vista de los diferentes agentes de la comunidad educativa del centro, recibe una valoración superior por parte de los directores, que por parte de los inspectores (3,61 frente a 3,47).

Todos estos aspectos y en relación a la dimensión personal, deberán ser tenidos en cuenta para las propuestas de la investigación.

5.3.2. Dimensión institucional

En cuanto a la dimensión institucional, las diferencias entre los componentes de los grupos prioritarios - $p<.05$ -, tal y como se expone en la tabla 5.5.2, se mostraron en los ítems: B.4, B.5, B.6, B.7, B.9, B.10, B.12, B.13, B.14, B.15 y B.16.

De la misma forma y en cuanto a las variables de estudios, tal y como ya se ha apuntado en los desarrollos de la tabla 5.6., se muestran especificidades por variables que igualmente se deben considerar.

De esta forma (véase la tabla 5.6.1. -columna D2-) y en relación a la variable *Dirección de Área*, los directores de los centros con una valoración superior son igualmente los pertenecientes a la DAT Este y los que muestran una valoración menor son los pertenecientes a la DAT Capital; estando el resto de DAT en el campo intermedio (DATN: 3,71, DATS: 3,15, DATE: 4,17, DATO: 3,60 y DATC: 3,04).

En relación a la variable *antigüedad en el desempeño de la función directiva* (véase la tabla 5.6.2. -columna D2-) los directores que muestran una valoración mayor son igualmente los que llevan ejerciendo entre 5 y 8 años (3,80), frente a los que acaban de empezar, con una antigüedad entre 0 y 4 años (3,32) o los que llevan ejerciendo más de 9 años, con valoración menor (3,15).

Por último, y en el estudio de los directores de los centros, la variable *tipo de centro* (véase la tabla 5.6.3. -columna D2-) muestra, de la misma forma en la dimensión personal, una mayor valoración por parte de los directores de los centros concertados (3,52). La valoración de los directores de los centros públicos, no llega al aprobado (2,22).

Por otra parte, y en relación al estudio de los inspectores de educación, en esta dimensión institucional y en la variable de *Dirección de Área* (véase la tabla 5.7.1. -columna D2-) la mayor valoración la muestran los inspectores de la DAT Este, frente a los que muestran valoración menor, que sin ser muy significativo, son los inspectores de la DAT Oeste (DATN: 3,16, DATS: 3,10, DATE: 3,39, DATO: 2,91 y DATC: 3,05).

En relación a la variable *antigüedad en el desempeño de la función inspectora* (véase la tabla 5.7.2. -columna D2-) y en esta dimensión institucional, la valoración es igualmente muy pareja sin diferencias significativas. De esta forma la valoración de los inspectores con experiencia entre 0 y 4 años es de 3,13; de los que llevan ejerciendo entre 5 y 8 años es de 3,11, y de los que han ejercido 9 años o más es de 3,09.

Este dato muestra igualmente que la percepción de los inspectores en los aspectos de la dimensión institucional, no varía a lo largo de los años de ejercicio.

Veamos ahora de forma más detallada las diferencias con mayor significatividad en cada uno de los aspectos señalados - $p<.05$ -.

En lo relativo a si el servicio de inspección educativa facilita el reconocimiento de buenas prácticas docentes y organizativas para que puedan servir de referencia en los procesos de mejora de los centros educativos, la valoración es superior para los directores de los centros que para los inspectores de educación (3,50 frente a 3,09).

En esa misma línea y ante la pregunta de si facilita el reconocimiento de buenas prácticas en los servicios educativos para que puedan servir de referencia en los procesos de mejora de los servicios educativos, de la misma forma se muestra una valoración superior de los directores de los centros que de los inspectores (3,43 frente a 2,99).

En el aspecto correspondiente a si el servicio de inspección educativa reconoce y valora las metodologías más frecuentes y su aplicación práctica en procesos que permitan la mejora del aprendizaje, se muestra de la misma forma una valoración superior por parte de los directores de los centros, que por parte de los inspectores (3,54 frente a 3,27).

Estos aspectos evidencian que existe una percepción más positiva en estos aspectos de la dimensión institucional, por parte de los responsables de los centros que por parte de los propios agentes.

En cuanto a si el servicio de inspección planifica reuniones del servicio en donde intercambian experiencias relacionadas con hechos vividos por inspección en los distintos ámbitos del sistema educativo y se definen casos que podrían servir de referencia, la valoración es igualmente superior para los directores de los centros que para los inspectores (3,24 frente a 2,80).

Y en cuanto a ítem B.9. que pregunta si el servicio de inspección contribuye activamente a crear una visión específica de la realidad educativa, en todos sus niveles, y colabora para que esa visión pueda ser compartida por todos sus miembros, de la misma forma se valora de forma superior por los directores, que por parte de los inspectores (3,42 frente a 2,98).

En cuanto al aspecto concreto de si el servicio de inspección incorpora a su plan anual de trabajo actividades dirigidas a evaluar y mejorar la capacidad profesional de sus miembros, así como de los equipos y de la propia institución, en la misma línea y de forma muy significativa, es valorado de forma ostensiblemente superior por los directores, que por los inspectores (3,57 frente a 2,96). Este aspecto se muestra significativo para el estudio prospectivo.

En lo relativo al aspecto de si el servicio de inspección promueve y facilita la creación de una cultura colegiada entre sus miembros y anima a formar equipos que compartan responsabilidades en una misma actuación, se valora, de la misma forma, de forma más alta por parte de los directores, que por parte de los inspectores (3,37 frente a 3,06).

Con relación a la pregunta formulada de si el servicio de inspección impulsa la necesaria reflexión sobre el sistema educativo tomando como referencia los informes nacionales e internacionales, la valoración es superior para los directores y muy significativamente inferior para los inspectores, pues no se llega al aprobado (3,39 frente a 2,34).

Siguiendo con los aspectos significativos en los que existe una diferencia entre la percepción de los componentes de los grupos prioritarios (directores e inspectores de educación) y en cuanto a si el servicio de inspección facilita a sus miembros el conocimiento necesario sobre metodologías, técnicas e instrumentos que pueden mejorar el desempeño de las funciones y tareas que tiene asignadas, es en la misma línea mejor valorado por los directores, que por los inspectores (3,34 frente a 2,89).

En cuanto al aspecto de si el servicio de inspección promueve y facilita la realización de actuaciones integrales y colegiadas en los centros y servicios educativos que, por sus circunstancias o por sus características, así lo aconsejan, tiene en la misma línea una valoración superior por parte de los directores, que por parte de los inspectores (3,44 frente a 2,94).

Y por último lugar, en el aspecto de si el servicio de inspección se preocupa por construir una visión diferencial del sistema educativo que integre sus niveles constitutivos (general, centro y aula) y lograr que esa visión oriente su actuación tanto en un sentido normativo, como en un sentido perfectivo, la valoración es igualmente superior para los directores, que para los inspectores (3,31, frente a 2,81)

Se percibe, por tanto, que en los aspectos con diferenciación significativa entre los sectores que componen los grupos prioritarios, es siempre superior en los directores, que en los inspectores. Este aspecto deberá ser tenido en cuenta de forma muy significativa.

5.3.3. Dimensión de gestión del conocimiento

En la dimensión de gestión del conocimiento, las diferencias que se han encontrado entre los componentes de los grupos prioritarios - $p<.05$ -, recogidas en la tabla 5.5.3, se encontraron en los ítems: C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.10, C.11, C.12 y C.13

Igual que se ha realizado con las dimensiones precedentes y en cuanto a las variables de estudios, ya apuntado en los desarrollos de la tabla 5.6., se muestran especificidades por variables que se deben tener en cuenta.

De esta forma (véase la tabla 5.6.1. -columna D3-) y en relación a la variable *Dirección de Área*, los directores de los centros con una valoración superior son, de la misma forma, los pertenecientes a la DAT Este y los que muestran una valoración menor son los pertenecientes a la DAT Capital; estando el resto de DAT en el campo intermedio (DATN: 3,87, DATS: 3,51, DATE: 4,24, DATO: 3,75 y DATC: 3,44).

En relación a la variable *antigüedad en el desempeño de la función directiva* (véase la tabla 5.6.2. -columna D3-) los directores que muestran una valoración superior son, de la misma forma que en las dimensiones anteriormente estudiadas, los que llevan ejerciendo entre 5 y 8 años (3,90), frente a los que acaban de empezar, con una antigüedad entre 0 y 4 años (3,57) o los que llevan ejerciendo más de 9 años, con valoración menor (3,50).

Por último y en el estudio de los directores de los centros, la variable *tipo de centro* (véase la tabla 5.6.3. -columna D3-) se reitera en esta dimensión una mayor valoración por parte de los directores de los centros concertados (3,74), que por parte de los directores de los centros públicos (3,08).

En relación al estudio de los inspectores de educación, en esta dimensión de gestión del conocimiento y en la variable de *Dirección de Área* (véase la tabla 5.7.1. -columna D3-) la mayor valoración la muestran, igualmente, los inspectores de la DAT Este, frente a los que muestran valoración menor que son los inspectores de la DAT Norte y de la DAT Oeste (DATN: 3,05, DATS: 3,34, DATE: 3,50, DATO: 3,05 y DATC: 3,35).

En relación a la variable *antigüedad en el desempeño de la función inspectora* (véase la tabla 5.7.2. -columna D3-) y en esta dimensión de gestión del conocimiento, la valoración es igualmente muy pareja sin diferencias significativas. De esta forma la valoración de los inspectores con experiencia entre 0 y 4 años es de 3,25; de los que llevan ejerciendo entre 5 y 8 años es de 3,24, y aumenta un poco de los que han ejercido 9 años o más, con un 3,34.

Pasemos ahora a exponer de forma más detallada las diferencias con mayor significatividad en cada uno de los aspectos señalados - $p<.05$ -.

En relación al aspecto relativo a si el servicio de inspección dispone de un conocimiento adecuado de las evidencias, así como de los modelos y teorías que sirven de fundamento a las normas reguladoras del sistema educativo, la valoración es superior en los directores que en los inspectores (4,05 frente a 3,38).

En cuanto a si el servicio de inspección posee un conocimiento adecuado de las evidencias, disponibles sobre la realidad educativa, así como de los métodos, procedimientos e instrumentos utilizados en su obtención, se reproduce el resultado, siendo superior en los directores, que en los inspectores (3,92 frente a 3,34).

Con relación al aspecto de si el servicio de inspección maneja con facilidad modelos y teorías en los distintos niveles del sistema educativo para describir y valorar las diversas situaciones educativas y reconocer sus posibilidades de mejora, es también valorado de forma superior por los directores, que por los inspectores (3,82 frente a 3,06).

Sobre el aspecto que valora si el servicio de inspección dispone de canales de comunicación interna en las que se puedan intercambien prácticas de actuación y se fomenta el intercambio de casos relevantes, así como de prácticas inspectoras innovadoras, de la misma forma es valorado de forma superior por los directores, que por los inspectores (3,36 frente a 2,78).

Y en cuanto a si dispone del conocimiento necesario sobre metodologías, técnicas e instrumentos que pueden mejorar el desempeño de las funciones y tareas que tiene asignadas, es también valorado de forma superior por los directores, que por los inspectores (3,74 frente a 3,28).

Todos estos aspectos son muy significativos en la dimensión de gestión de conocimiento y provocarán propuestas concretas para la mejora de los servicios de inspección.

En cuanto al ítem C.10. de la dimensión de gestión del conocimiento que pregunta si el servicio de inspección dispone de las herramientas adecuadas para la comunicación y reflexión sobre las actuaciones de modo que todos los miembros del servicio desarrollen juicios de las distintas situaciones educativas ajustadas al conocimiento actualizado disponible, se muestra, en la misma línea, una valoración superior por parte de los directores, que por parte de los inspectores (3,61 frente a 3,08).

Con relación al aspecto de si el servicio de inspección dispone del conocimiento y las habilidades necesarias para superar con éxito las situaciones en las que se presentan conflictos dentro de los centros educativos, la valoración es igualmente superior en los directores que en los inspectores, pero sin menos diferencias (3,84 frente a 3,65).

En la valoración de si el servicio de inspección facilita los procesos que requieren la gestión del conocimiento tanto explícito, como implícito, se reitera una valoración superior por parte de los directores, que por parte de los inspectores (3,57 frente a 3,18).

Y por último en el aspecto de si el servicio de inspección aporta a los diferentes actores del sistema educativo una reflexión que permite interpretar sus acciones para alinearlas con las finalidades generales de la educación, se reproduce el mismo esquema, siendo valorado de forma superior por parte de los directores que por parte de los inspectores (3,58, frente a 3,15).

Se reproduce, por tanto y como se ha visto en la dimensión institucional, que en los aspectos con diferenciación significativa entre los sectores que componen los grupos prioritarios, es siempre superior en los directores, que en los inspectores.

5.3.4. Dimensión de cultura institucional

Y por último, en lo relativo a la dimensión de cultura institucional, las diferencias encontradas entre los componentes de los grupos prioritarios - $p < .05$ -, recogidas en la tabla 5.5.4, se encontraron en los ítems: D.1, D.4.A, D.4.B, D.6, D.8, D.9, D.10, D.11 y D.12.

De la misma forma que se ha realizado con las dimensiones precedentes y en cuanto a las variables de estudios, señalados en los desarrollos de la tabla 5.6., se muestran especificidades por variables con especial singularidad.

De esta forma (véase la tabla 5.6.1. -columna D4-) y en relación a la variable *Dirección de Área*, los directores de los centros con una valoración superior son, de forma reiterada, los pertenecientes a la DAT Este y los que muestran una valoración menor son los pertenecientes a la DAT Sur; encontrándose el resto de DAT en el campo intermedio (DATN: 4,02, DATS: 3,47, DATE: 4,22, DATO: 3,90 y DATC: 3,72).

En relación a la variable *antigüedad en el desempeño de la función directiva* (véase la tabla 5.6.2. -columna D4-) los directores que muestran una valoración superior son igualmente, los que llevan ejerciendo entre 5 y 8 años (3,99), frente a los que acaban de empezar, con una antigüedad entre 0 y 4 años (3,73) o los que llevan ejerciendo más de 9 años, con la misma valoración (3,73).

Por último y en el estudio de los directores de los centros, la variable *tipo de centro* (véase la tabla 5.6.3. -columna D4-) se reitera nuevamente en esta dimensión una mayor valoración por parte de los directores de los centros concertados (3,85), que por parte de los directores de los centros públicos (3,49).

En relación al estudio de los inspectores de educación, en esta dimensión de cultura institucional y en la variable de *Dirección de Área* (véase la tabla 5.7.1. -columna D4-) la mayor valoración la muestran, igualmente, los inspectores de la DAT Este, con una franja de valoración muy parecida en el resto de las DAT (DATN: 4,11, DATS: 4,11, DATE: 4,26, DATO: 4,23 y DATC: 4,05).

En relación a la variable *antigüedad en el desempeño de la función inspectora* (véase la tabla 5.7.2. -columna D4-) y en esta dimensión de cultura institucional, la valoración es también muy parecida sin diferencias significativas. De esta forma la valoración de los inspectores con experiencia entre 0 y 4 años es de 4,18; de los que llevan ejerciendo entre 5 y 8 años es de 4,06, y aumenta también un poco de los que han ejercido 9 años o más, con un 4,08.

Veamos ahora de forma más detallada las diferencias con mayor significatividad en cada uno de los aspectos de la dimensión señalados - $p < .05$ -.

De esta forma, en el aspecto concreto de si la inspección educativa comparte valores esenciales para el ejercicio de las funciones que tiene asignadas como son la imparcialidad, el rigor, el respeto a todas las personas e instituciones, la equidad y el cuidado y protección del alumnado, tiene una valoración superior por parte de los inspectores, que por parte de los directores (4,25 frente a 4,08).

Al preguntar si la inspección educativa considera esencial la propia reflexión, de los actores del sistema educativo, para comprender las fortalezas y debilidades que este presenta, muestra igualmente una mayor valoración por parte de los inspectores, que por parte de los directores (4,15 frente a 3,73).

Ante el aspecto de si la inspección educativa valora que todos los actores del sistema educativo cooperen para alcanzar el mayor nivel posible de éxito, se valora igualmente de manera superior por parte de los inspectores, que por parte de los directores (4,35 frente a 3,87).

En relación a la pregunta de si la inspección educativa dispone de tiempos e infraestructuras para celebrar encuentros, en los que se compartan criterios con distintos agentes de la comunidad educativa de los centros, se valora de forma superior por parte de los directores, que la valoración de los inspectores, que no llega al aprobado (3,23 frente a 2,38).

En relación al ítem D.8. de la dimensión de cultura institucional, en el que se pregunta si la inspección educativa comparte la necesidad de promover una cultura inclusiva en los centros educativos que facilite la igualdad de oportunidades de aprendizaje, la valoración es superior para los inspectores, que para los directores (4,13 frente a 3,83).

Por otra parte, en relación a la pregunta de si la inspección educativa considera la educación como un derecho universal, incorporado al marco constitucional, y vela para que todas las personas puedan hacer un uso efectivo de ese derecho, la valoración es muy superior para los inspectores, que para los directores (4,80 frente a 4,19).

En relación al aspecto de si la inspección educativa asume el derecho a la educación como fundamento de todo el sistema educativo y de su propia práctica profesional, se valora de la misma forma, de forma superior por los inspectores que por los directores (4,91 frente a 4,21).

Al preguntar si la inspección educativa considera la realización de sus funciones y tareas como una garantía para un funcionamiento de un servicio público esencial como es la educación, la valoración es también superior para los inspectores, que para los directores (4,73 frente a 4,17).

Y por última, con relación al aspecto de si la inspección educativa asume la responsabilidad de contribuir para que el ordenamiento del sistema educativo contribuya a que los centros y los servicios educativos orienten su organización y funcionamiento hacia la mejora continua, se valora, de la misma forma, de forma superior por parte de los inspectores, que por parte de los directores (4,72 frente a 4,03).

En esta dimensión de cultura institucional se invierte la tendencia de la dimensión institucional y de la dimensión de gestión del conocimiento con una mayoritaria valoración superior por parte de los inspectores que la realizada por los directores; en todos los aspectos significativos, excepto en el ítem D.6. que es el único en el que la valoración es mayor para los directores.

Mantener el adecuado equilibrio entre los intereses generales de la Administración y los intereses particulares de cada centro no es una tarea fácil y al inspector se le exige en todo momento. En cualquier caso, siempre he estado convencida de que si la inspección ha de dar ejemplo en el cumplimiento de la ley, pues está encargada de velar por ella, también debe ser incansable en denunciar a la superioridad las posibles consecuencias negativas de su aplicación, aunque eso nos convierta con frecuencia en unos funcionarios *molestos*.

López del Castillo, M^a.T. (1993, 294)

Capítulo 6

Conclusiones

6.1. Conclusiones finales y propuestas

Una vez realizado el estudio de los datos extraídos de la investigación, con un análisis específico de las dimensiones, de las variables y de las especificidades diferenciales, se inicia el proceso prospectivo, enriquecido por el estudio multifocal previo y por sus correspondientes estudios: estudio histórico, estudio comparado internacional y estudio comparado disciplinar. Las síntesis reflexivas de cada estudio, junto a los resultados del estudio de encuestas, son los pilares sobre los que se construyen las conclusiones de la presente investigación doctoral.

Dado su desarrollo, las propuestas utilizan como sujeto activo a la inspección educativa de la Comunidad de Madrid, aunque dada su envergadura, cuentan con otros sujetos orgánicos, que fundamentalmente son sus responsables, a distintos niveles, en la consideración de que muchas de ellas pudieran desbordar los límites autonómicos y podrían realizarse para la inspección educativa de todo el Estado.

Como se ha descrito previamente la percepción global es que las competencias profesionales se desarrollan de una manera aceptable, desde la apreciación de los grupos prioritarios. Si bien habría multitud de aspectos sobre los que realizar propuestas, hemos considerado conveniente simplificar su enunciado a fin de centrarnos en las que consideramos más nucleares e importantes, así como generadoras de modificaciones y mejoras a largo plazo. Cada una de las propuestas se organizan en tres apartados específicos: justificación, propuesta y procedimiento de desarrollo.

Se realizan propuestas justificadas, por muy ambiciosas que parezcan, con un específico enunciado de carácter global, a modo de un específico heptálogo conclusivo.

6.1.1. La inspección educativa como agente del sistema educativo y facilitador de políticas de desarrollo educativo

A. Justificación. Los resultados de algunos de los ítems de las distintas dimensiones han aportado una visión de la inspección educativa parcelada y sustraída de las orientaciones globales de la política educativa. Esa percepción se extrae de los resultados de los ítems: A.11, que pregunta sobre si el inspector de educación contribuye a la transformación de los centros educativos en auténticas comunidades que comparten un proyecto educativo y un conjunto bien definido de planes y proyectos; en el B.13, que pregunta sobre si impulsa la necesaria reflexión sobre el sistema educativo tomando como referencia los informes nacionales e internacionales; en el B.16, que pregunta sobre si el servicio de inspección se preocupa por construir una visión diferencial del sistema educativo, que integre sus niveles constitutivos (general, centro y aula) y logre que esa visión oriente su actuación tanto en un sentido normativo, como en un sentido perfectivo; y en el C.6, que estudia el aspecto de si la inspección educativa participa en grupos de trabajo para el análisis de los problemas relevantes del centro, teniendo en cuenta el marco global del sistema educativo.

Además y como extracción de la investigación comparada disciplinar y en el contexto de un cuerpo único de funcionarios de carácter estatal, parece adecuado vincular y materializar un sistema de coordinación estatal con cierta capacidad ejecutiva, tal y como disponen unidades de inspección y control de otras disciplinas, que se materialice en forma de principios, tareas y actuaciones generales que se establezcan para todas las comunidades autónomas, a fin de que éstas las complementen o amplíen en sus desarrollos normativos correspondientes.

B. Propuesta. Ante la realidad de que nuestro sistema educativo, cuenta con unos mínimos comunes y una distribución de competencias, establecidos en los arts. 6 y 6.bis de la actual Ley orgánica de Educación 2/2006, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, la propuesta se concreta en formalizar una capacidad ejecutiva concreta para la inspección educativa y en que sus planes de actuación se conformen con un porcentaje común de actuaciones, establecido por el Ministerio de Educación, al que se añadan, complementen y contextualicen las iniciativas y propuestas de cada comunidad autónoma.

Se considera que esta propuesta redundaría en una articulación común del sistema educativo y en una mejor percepción interna y externa de los inspectores de educación como agentes globales y reales del sistema educativo, aportando a estos elementos comunes y vertebradores del sistema, y posibilitando también la contextualización necesaria de cada comunidad autónoma y, consecuentemente y en cascada, de cada correspondiente centro o servicio. Es fundamental que los responsables educativos se sirvan de la inspección educativa, como agentes de intermediación de las políticas educativas a diversos niveles, pero también es necesario que la inspección educativa se convierta en agente, con cierto carácter ejecutivo de las directrices básicas de nuestro sistema educativo, de forma diferenciada a los intereses parciales y sectoriales.

Esta propuesta se verá enriquecida con otras propuestas que se mostrarán a continuación vinculadas a aumentar la coordinación y la transferencia de conocimiento a los inspectores de educación para que sean conocedores y participen en iniciativas políticas y en el establecimiento de programas y proyectos para implementarlos por medio de los servicios de inspección en las distintas áreas o zonas, y consecuentemente, en los distintos centros y servicios. De esta forma

la inspección educativa podría encauzar o matizar propuestas, y desarrollarlas y contextualizarlas en los centros o servicios.

C. Procedimiento de desarrollo. Esta propuesta de calado y muy ambiciosa se llevaría a cabo mediante el establecimiento jerárquico del adecuado tejido normativo. De esta forma sería necesario modificar la Ley Orgánica de Educación, en su artículo 6 y en su título VII, y desarrollar los nuevos artículos promulgados en el correspondiente Real Decreto que desarrollará el citado título VII de la Ley Orgánica de Educación relativo a la inspección del sistema educativo.

Así se establecerían y desarrollarían dos aspectos que se consideran muy relevantes: por una parte, el Ministerio de Educación y Formación Profesional establecería que los planes de actuación de las inspecciones educativas de todas las comunidades autónomas, contarán con un porcentaje común de actuaciones establecidas por el propio Ministerio de Educación, en porcentaje parecido al que actualmente se establece para el currículo común de las enseñanzas mínimas –del 50 %–, para el desarrollo y supervisión de políticas educativas generales; ese porcentaje sería completado y rematado por cada comunidad autónoma, en forma de actuaciones complementarias, de desarrollo o específicas de políticas educativas más parciales. La inspección educativa fortalecería su función como agente global, técnico y profesional, en sintonía con la necesaria contextualización.

Esta coyuntura posibilitaría el establecimiento de sistemas de coordinación con las unidades de alta inspección, integradas actualmente en las delegaciones de gobierno, respetando la autonomía estatutaria de nuestra organización territorial.

Y por otra parte y como desarrollo de los arts. 148 y 151 de la Ley Orgánica de Educación, se establecerían y articularían mecanismos de carácter global y de carácter parcial, para que la inspección de educación desarrolle funciones de carácter ejecutivo (de forma diferenciada, autónoma e independiente a los requerimientos de carácter político), con relación a los principios rectores y globales del sistema educativo, y como agentes de evaluación del sistema educativo, integrándolo por ejemplo, en el funcionamiento del actual INEE (Instituto Nacional de Evaluación Educativa) o en las unidades que desarrollen esa función e integrándolo igualmente y de forma orgánica, tanto en el Consejo Escolar del Estado, como en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid o en los consejos escolares de las distintas comunidades autónomas.

Se considera que estas iniciativas enfocarán el establecimiento de la inspección educativa como agentes del sistema educativo y facilitadores de políticas de desarrollo educativo.

6.1.2. La inspección educativa como agente de protección de menores

A. Justificación. Aunque el objeto de este epígrafe no ha sido enunciado, más allá que sutilmente, en los ítems, D.9, que trata sobre si la inspección educativa considera la educación como un derecho universal, incorporado al marco constitucional, y vela para que todas las personas puedan hacer un uso efectivo de ese derecho; el D.10, relativo a si asume el derecho a la educación como fundamento de todo el sistema educativo y de su propia práctica profesional; o en el D.11, centrado en si la inspección educativa considera la realización de sus funciones y tareas como una garantía para un funcionamiento de un servicio público esencial como es la educación, se considera muy oportuna la realidad de la inspección del Reino Unido en General y de Inglaterra, en particular –que ha sido expuesta en el apartado 3.3 de la presente investigación–, relativa a la asunción de responsabilidades y competencias en materia de protección de menores y de inspección de servicios de menores. Como señala Sims (2022), de

forma muy general, la inspección proporciona en Inglaterra una evaluación externa independiente e identifica lo que se debe mejorar para que la provisión sea buena o mejor. Esta dimensión también se ha hecho visible en el estudio histórico, al relacionar las tareas asignadas al Zelador General en la Real Orden de 1791 (véase tabla 2.1.12) o a las tareas asignadas al Celador y al Visitador en los Estatutos de la Real Academia de Primeras Letras de 1797 (véase tabla 2.1.13).

Se considera que ese importante aspecto, totalmente vinculado con el desarrollo armónico y pleno del derecho a la educación, no se encuentra bien desarrollado en nuestro sistema de protección a la infancia y pudiera beneficiarse de un colectivo formado y experimentado en dichas tareas. Aunque la percepción inicial es que sobrepasa los entornos educativos, en sentido estricto, la utilización de los inspectores de educación aportaría, sin duda, un beneficio vinculado a sinergias de desarrollo personal global, en el colectivo de menores, tan vulnerable; y evidenciaría igualmente una eficiente gestión del talento por parte de las administraciones públicas.

B. Propuesta. La concreción de la propuesta se centraría en ampliar las funciones y competencias de los inspectores de educación en el sentido de que también puedan colaborar y asumir responsabilidades, activa y orgánicamente, en los sistemas de protección y en las unidades y órganos oportunos. Los inspectores de educación podrían formar parte de comisiones de protección, tutela y/o adopción, podrían inspeccionar centros de menores o podrían peritar realidades o situaciones (físicas o virtuales) en las que los menores se encuentren en situaciones directas de desprotección, o generadoras de desprotección para otros menores.

C. Procedimiento de desarrollo. El desarrollo de la propuesta debería ser también global y multifocal: de esta forma sería necesario modificar la Ley Orgánica de Educación ampliando, de forma general, las funciones en esta línea. Esa modificación podría dar pie a que en el Real Decreto de desarrollo del título VII, ya mencionado y en proceso de elaboración, aparezcan propuestas y líneas de actuación en ese sentido; y sobre todo abriría la posibilidad de que las distintas comunidades autónomas, y en concreto la Comunidad de Madrid, desarrolle en ese sentido y con esos nuevos recursos, sus sistemas de protección, rentabilizando un colectivo formado, capacitado y muy sensible a esos objetos, con las modificaciones de las disposiciones que fueran necesarias.

6.1.3. La inspección educativa como agente de innovación educativa

A. Justificación. A lo largo del análisis de los resultados de la herramienta se han percibido aspectos concretos sobre la validación y evaluación de la innovación educativa, pendientes de articulación en el sistema educativo de la Comunidad de Madrid.

Este aspecto se recoge en los resultados de los ítems: A.8, que pregunta si facilita un conocimiento informado y una reflexión serena de las posibilidades y limitaciones de las diferentes innovaciones educativas, así como de sus consecuencias para el centro; el A.9, que se centra en si el inspector de educación impulsa en los centros la implantación de aquellos programas, proyectos e innovaciones educativas (tanto institucionales, como no institucionales) que se ajusten mejor a las necesidades y características de los mismos y que contribuyan a mejorar su capacidad profesional, dotándolos de nuevas perspectivas; y el B.6. centrado en si reconoce y valora las metodologías más frecuentes y su aplicación práctica en procesos que permitan la mejora del aprendizaje.

En este singular aspecto se propone encauzarlo de una forma multidimensional. Es verdad que la normativa actual dota de autonomía pedagógica y organizativa a los propios centros docentes,

pero esa autonomía no se constituye en una autorización inopinada a iniciativas de innovación educativa. Se considera muy importante que la validación de la innovación educativa sólo se realice con evidencias científicas por parte de los expertos: centros universitarios y de investigación, pues son los que cuentan con el conocimiento experto, para articular un sistema adecuado de validación y generalización.

B. Propuesta. En este principio, que garantiza la oportuna confirmación de su pertinencia, se propone que los inspectores de educación sean los agentes que, en coordinación con los centros universitarios y de investigación, realicen las tareas de facilitadores, validadores y evaluadores, junto a ellos, a fin de realizar convenientemente la autorización y fundamentación, la evaluación y validación y, en su caso, la generalización y divulgación de las propuestas innovadoras.

En esta línea se considera muy necesario vincular a los inspectores de educación con los centros universitarios y enriquecer de esta forma la necesaria comunicación entre los centros universitarios de estudio e investigación con los centros educativos para un enriquecimiento mutuo.

C. Procedimiento de desarrollo. En la misma línea de propuestas anteriores se propone institucionalizar esta necesaria coordinación mediante la articulación de la modificación de la correspondiente orden que regula la organización y funcionamiento de la Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid, así como los necesarios convenios con las entidades universitarias y de investigación, para que los inspectores de educación sean los agentes de planificación, propuesta, evaluación, validación y divulgación de las innovaciones educativas en los centros y servicios educativos, en permanente y continua coordinación con los centros universitarios y de investigación.

Se considera esta necesaria relación muy importante, nuclear y con gran recorrido de mejora.

6.1.4. La inspección educativa como agente de comunicación fluida con los sectores de las comunidades educativas

A. Justificación. A lo largo de la herramienta se ha percibido cierta falta de acercamiento –así se observa– de los inspectores de educación hacia los sectores de las comunidades educativas, de forma grupal y/o de forma orgánica: con las familias, docentes, alumnos, agentes sociales; o claustros, consejos escolares, comisiones de coordinación pedagógica, departamentos, ciclos, etc.

El propio desarrollo de la encuesta; las pocas respuestas recibidas por parte de los docentes y familias manifiestan, además de la complicación de la herramienta para estos grupos, un cierto desconocimiento de la labor, tareas, competencias y atribuciones que tiene la inspección de educación. A estos datos hay que añadir los niveles alcanzados en los ítems: A.3.B, relativo a si el inspector facilita relaciones de comunicación fluidas con los miembros de las comunidades educativas para intercambiar información y conocimiento; C.6, relativo a si participa en grupos de trabajo para el análisis de los problemas relevantes del centro, teniendo en cuenta el marco global del sistema educativo; C.13, que se centra en si aporta a los diferentes actores del sistema educativo una reflexión que permite interpretar sus acciones para alinearlas con las finalidades generales de la educación; y en el D.6, que se centra en si dispone de tiempos e infraestructuras para celebrar encuentros en los que se compartan criterios con distintos agentes de la comunidad educativa de los centros.

B. Propuesta. En este aspecto se considera oportuno establecer y ampliar estas comunicaciones para que los distintos agentes conozcan y se aprovechen, tanto de las funciones y atribuciones

que tiene asignada la inspección de educación como de las específicas funciones de asesoramiento, orientación e información que realizan los inspectores y para que se utilicen como mecanismos de mejora, así como articuladores y facilitadores del ejercicio efectivo del derecho a la educación.

En esta línea se considera necesario, por una parte, el establecimiento de herramientas específicas, distinta de la utilizada en la presente investigación y de mayor simplicidad, para que los responsables educativos, las familias, los docentes, e incluso los alumnos, puedan valorar el ejercicio de las competencias profesionales de los inspectores de educación, tras el conocimiento de sus funciones y tareas y como criterio básico de evaluación de un elemento que consideramos nuclear del sistema educativo.

De la misma forma se realiza la propuesta de ampliar y sistematizar la información, comunicación y coordinación con los distintos agentes del sistema educativo en la forma, generalmente realizada, pero últimamente señalada en el art. 153.d.- de la Ley Orgánica 2/2006, en la redacción realizada por la Ley Orgánica 3/2020, de articular la participación de los inspectores de educación en reuniones de consejos escolares, claustros, comisiones de coordinación pedagógica, reuniones de AMPAs, etc... para presentar las funciones, atribuciones y principios de actuación de la inspección educativa, así como para realizar la presentación de las actuaciones específicas de los planes generales de actuación, como compromiso de la administración pública en la mejora del servicio educativo.

Esta propuesta aportaría una visión global de la inspección educativa ante la comunidad educativa y contribuiría a convertir a esta también en herramienta de cohesión.

C. Procedimiento de desarrollo. En cuanto al desarrollo de nuevas investigaciones centradas en la percepción de familias, docentes, responsables e incluso alumnos sobre el ejercicio de las competencias profesionales por parte de los inspectores de educación, se realizará concretamente en el apartado específico de nuevas líneas de investigación.

En lo relativo a la divulgación, e información de la labor realizada por la inspección educativa a los distintos agentes de los centros, la forma de llevarse a cabo podría circunscribirse al desarrollo autónomo de cada inspector de educación, aunque para un mayor, global, homogéneo y general desarrollo, se considera que la mejor forma sería que fuera establecido y materializado en el Plan General de Actuación de la Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid, como herramienta organizativa plurianual, con concreción anual, estableciendo que los inspectores de educación participaran anualmente en convocatorias de los distintos órganos colegiados para exponer las funciones, atribuciones y principios de actuación con los que desarrollan su labor; las actuaciones establecidas en los propios planes de actuación de la Comunidad de Madrid y del Servicio Territorial; la forma de comunicarse y acceder a sus servicios; y en su caso y siempre que termine de publicarse, los compromisos adquiridos y los indicadores de logro establecidos por la inspección educativa de la Comunidad de Madrid, en su futura carta de Servicios³³⁶, actualmente en proceso de validación.

³³⁶ Las Cartas de Servicios de la Comunidad de Madrid se encuentran reguladas por el Decreto 27/1997, de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan las Cartas de Servicios y los premios anuales a la excelencia y calidad del servicio público en la Comunidad de Madrid (BOCM de 14 de marzo), modificado por el Decreto 44/1998, de 18 de marzo, por el que se modifica el Decreto 27/1997, de 6 de marzo (BOCM 27 de marzo de 1998) y por el Decreto 85/2002, de 23 de mayo, por el que se regulan los sistemas de evaluación de la calidad de los servicios públicos y se aprueban los Criterios de Calidad de la Actuación Administrativa en la Comunidad de Madrid (BOCM 5 de junio de 2002).

6.1.5. La inspección educativa y la comunicación y coordinación interna para la mejora de la intervención educativa

A. Justificación. La anterior propuesta se encuentra intrínsecamente vinculada con una dimensión de comunicación y coordinación interna como mecanismo de mejora hacia los centros y servicios educativos. Del análisis de los datos obtenidos se percibe igualmente una falta de optimización de los recursos comunicativos propios de los servicios de inspección.

De esta forma en los resultados de los siguientes ítems se detecta esta peculiaridad, susceptible de propuestas específicas de mejora: el B.3, sobre si el servicio de inspección realiza institucionalmente actividades de formación dirigidas a actualizar los conocimientos y competencias necesarios para el desarrollo de las funciones específicas de la inspección; el B.4, que pregunta si los servicios de inspección facilitan el reconocimiento de buenas prácticas docentes y organizativas para que puedan servir de referencia en los procesos de mejora de los centros educativos; el B.5, centrada en el mismo aspecto, pero en los servicios educativos; el ítem B.7, relativo a si planifica reuniones del servicio en donde se intercambien experiencias relacionadas con hechos vividos por inspección en los distintos ámbitos del sistema educativo y se definan casos que podrían servir de referencia; el B.8, centrado en si facilita el intercambio de ideas y experiencias entre sus miembros para que puedan compartir tanto el conocimiento implícito, como el conocimiento explícito y mejorar, de esta forma, el desempeño de sus funciones y tareas; el B.11, relativo a si el servicio de inspección promueve y facilita una eficaz gestión del conocimiento entre sus miembros y anima a formar equipos que compartan experiencias y saberes; el B.12, centrado en si promueve y facilita la creación de una cultura colegiada entre sus miembros y anima a formar equipos que compartan responsabilidades en una misma actuación; el B.13, que pregunta sobre si impulsa la necesaria reflexión sobre el sistema educativo tomando como referencia los informes nacionales e internacionales; el ítem C.4, sobre si la inspección educativa dispone de canales de comunicación interna en las que se puedan intercambien prácticas de actuación y se fomente el intercambio de casos relevantes, así como de prácticas inspectoras innovadoras; el C.7, relativo a si la inspección educativa comparte el análisis de casos prácticos relacionados con situaciones problemáticas, para ofrecer una visión técnica y cualificada y proponer posibles soluciones; el C.10, centrado en si dispone de las herramientas adecuadas para la comunicación y reflexión sobre las actuaciones de modo que todos los miembros del servicio desarrollen juicios de las distintas situaciones educativas ajustados al conocimiento actualizado disponible; o el D.7.A, que pregunta si la inspección educativa promueve la acción coordinada de todos sus miembros.

B. Propuesta. La propuesta se centra, por una parte, en facilitar y ampliar las comunicaciones dentro de los servicios de inspección, y también entre estos, para el intercambio tanto de problemáticas detectadas en los centros educativos, como de buenas prácticas susceptibles de divulgarse en el resto de los centros, mediante la articulación específica de tiempos y espacios internos y externos; y por otra de implementar actuaciones formativas para el descubrimiento, el conocimiento y el intercambio de las prácticas de los centros y servicios educativos. De esta forma los inspectores también desarrollarán tareas como mediadores y divulgadores de buenas prácticas. Esta propuesta no se circunscribe a los aspectos pedagógicos y organizativos de los

Las Cartas de Servicios son herramientas de mejora de la calidad, comunicación, participación y transparencia y pretenden comunicar y orientar a los ciudadanos sobre los servicios y prestaciones que puedan ser de su interés, de la manera más sencilla y concisa, así como sobre los compromisos y responsabilidades que adquieren las unidades administrativas al prestar el servicio. Fuente en la url: <https://www.comunidad.madrid/transparencia/servicios-procedimientos/cartas-servicios> con acceso el 27 de agosto de 2022.

centros y/o servicios y podría ampliarse, en esta visión global, a distintos sectores, como los relativos a asociaciones de familias, a asociaciones de alumnos, a iniciativas de agentes sociales, etc.

C. Procedimiento de desarrollo. Es verdad que los servicios de inspección cuentan con autonomía para poder poner en marcha la propuesta realizada, pero a fin de que la propuesta fuera institucionalizada y abarcara no solo la mejora del intercambio, diálogo y coordinación dentro de los servicios, sino también entre los servicios, sería adecuado articularla por medio del Plan General de Actuación de la Inspección Educativa, en su dimensión plurianual o anual, o de forma más eficiente en la propia orden que regula la organización, estructura y funcionamiento de la Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid, mediante una modificación de la disposición, en la consideración de que la modificación de la Orden del Consejero requiere muy poca complejidad y dotaría de homogeneidad funcional.

6.1.6. La inspección educativa como agente formativo

A. Justificación. Tanto el estudio diacrónico realizado en forma de estudio comparado histórico, como en la dimensión comparada internacional, se percibe la gran importancia que los inspectores de educación han tenido en los procesos formativos, de forma global y a distintos niveles: de formación inicial o de formación continua; de formación global o de formación en los centros educativos o servicios; de formación individual o de formación de equipos y colectivos; etc.

Esta realidad, algo desdibujada en la actualidad, se empodera al desarrollar propuestas de coordinación y rentabilidad de los activos con los que cuenta la inspección educativa, y aunque no ha sido específicamente cuestionada en la herramienta, se considera de gran importancia, en la línea de rentabilizar los recursos humanos con los que cuenta nuestro sistema educativo para conducirlo hacia la mejora continua.

Esta función reiterada históricamente y de gran trascendencia en inspecciones de otros estados (Sims, 2022), no se encuentra específicamente detallada en las funciones que establece el art. 151, de la Ley Orgánica de Educación, excesivamente vagas y difusas.

B. Propuesta. Se considera muy oportuno volver a vincular orgánicamente a la inspección de educación con los procesos formativos, como agentes fundamentales de mejora y desarrollo en aquellos contextos formativos nucleares: en las facultades de formación del profesorado y en los centros de formación y perfeccionamiento de los docentes.

C. Procedimiento de desarrollo. Se considera que la forma de llevar a cabo esta propuesta, tendría que partir de la necesaria y explícita materialización en el art. 151 de la Ley Orgánica de Educación, en forma de la modificación necesaria.

No obstante y dado que el cuerpo legal encauza, como ya se ha comentado de forma algo desdibujada, esa posibilidad, se considera que los inspectores de educación podrían desarrollar funciones formativas a iniciativas de las facultades de educación de las universidades e integrados en las dinámicas formativas de los centros de formación del profesorado³³⁷.

³³⁷ En el momento de escribir este estudio la red de centros de formación permanente del profesorado de la Comunidad de Madrid se encuentra constituida por el Instituto Superior Madrileño de Innovación Educativa; por los Centros Territoriales de Innovación y Formación; por los Centros de Formación Ambiental; y por el Centro de Formación para Intercambios Internacionales.

Estas propuestas tendrían una mayor relevancia y calado permanente si fueran recogidas en las disposiciones correspondientes.

6.1.7. La formación y evaluación de los inspectores de educación

A. Justificación. Se considera de gran importancia y significatividad el resultado obtenido en el ítem B.10, relativo a si el servicio de inspección educativa incorpora a su plan anual de trabajo actividades dirigidas a evaluar y mejorar la capacidad profesional de sus miembros, así como de los equipos y de la propia institución.

B. Propuesta. Se hace necesario que, en esta percepción poliédrica y multifocal, se establezcan sistemas reglados y ordinarios de evaluación de los inspectores de educación, para la mejora continua de los procesos de inspección y también como ejemplo y engranaje para otros sistemas de evaluación de la función directiva, de la función docente, etc. No se nos olvida que el Estatuto Básico del Empleado Público³³⁸ contempla la evaluación de los funcionarios —a nivel general— como una necesidad y obligación que no se puede posponer. Este sistema de evaluación debe estar perfectamente imbricado con un sistema de formación y perfeccionamiento de los inspectores de educación.

Además, debe tenerse muy en cuenta que, en un sistema democrático de servicio público, con los criterios de gobernanza, buen gobierno y transparencia, no puede entenderse que los evaluadores, no sean evaluados.

C. Procedimiento de desarrollo. De la misma forma se considera de gran calado esta propuesta, por lo que tiene la convicción de que su puesta en marcha debe realizarse a nivel estatal y como desarrollo del título VII de la Ley Orgánica de Educación que trata de la Inspección del Sistema Educativo. El procedimiento sería incluir en el Real Decreto, que en estos momentos se encuentra en fase de elaboración, dos apartados esenciales: uno relativo a la evaluación de los inspectores de educación, con el procedimiento general, las fases, los indicadores, los subindicadores, los agentes, etc.; y otro con una descripción abierta de un sistema de formación continua, vinculada con las necesidades que se vayan detectando en el sistema educativo y en sus unidades de control e inspección y relacionadas con las prioridades establecidas en nuestro sistema educativo.

Aunque lo oportuno es que estos sistemas de evaluación y formación sean desarrollados por las correspondientes administraciones educativas, se considera muy necesario que las líneas básicas y las coyunturas necesarias sean diseñadas a nivel estatal.

Esos procedimientos de evaluación y formación deberían ser tenidos en cuenta en los procesos de asunción de responsabilidades, dentro de la propia inspección educativa, o en la

Fuente extraída del Decreto 60/2022, de 13 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se crea el Instituto Superior Madrileño de Innovación Educativa y se establece el régimen jurídico y la estructura de la red de formación permanente del profesorado de la Comunidad de Madrid (BOCM de 15 de julio) con acceso en la url: https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/15/BOCM-20220715-4.PDF el 29 de agosto de 2022.

³³⁸ Aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE de 31 de octubre). Texto consolidado en la url: <https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11719-consolidado.pdf> ya citado en la presente investigación.

administración educativa y establecería líneas generales para enriquecer la articulación de los sistemas de selección de los inspectores de educación.

6.2. Propuesta de líneas generales para el establecimiento de un Código Deontológico para la Inspección de Educación en la Comunidad de Madrid

Una vez realizado el estudio multifocal, compuesto por el estudio comparado histórico, el estudio comparado internacional y el estudio comparado disciplinar, así como el estudio de encuestas sobre la percepción del ejercicio de las competencias profesionales por parte de la inspección de educación de la Comunidad de Madrid; y una vez que hemos realizado el análisis de los resultados y de forma previa a las propuestas y esbozos de futuras líneas de investigación, el equipo investigador considera muy oportuno y pertinente aprovechar el conocimiento experto adquirido para formular unas líneas generales para el establecimiento de un código deontológico para la inspección de educación de la Comunidad de Madrid.

Emprender esta labor podría considerarse como muy aventurada dentro de la investigación realizada, pues no ha sido el objeto fundamental de esta, y pudiera circunscribirse a entornos investigadores cercanos a la Filosofía de la Educación; no obstante, la pretensión no es en absoluta cerrada y profunda, sino cercana y doméstica en base, como se ha comentado a los estudios realizados.

Es cierto que para emprender esta tarea hay que referirse necesariamente y entre otros al art. 85 de la Ley de 17 de julio de 1945 sobre Educación Primaria, que se considera como una importante, aunque simple novedad, por la época en que fue elaborada; al hoy anacrónico planteamiento de Serrano de Haro (1970); a la ponencia de Chavarría (2003); al código ético de la inspección de educación en Cataluña, establecido por la Associació d'Inspectors d'Educació de Catalunya –AIEC– (2010), que presentan valores específicos, de adhesión libre, con conductas a promover y conductas a evitar³³⁹; a la Resolución que se establece la Carta de Buenas Prácticas de la Inspección de Educación en la Comunitat Valenciana³⁴⁰, con una interesante propuesta de buenas prácticas de carácter general y de buenas prácticas en las relaciones profesionales –con las administraciones, con los agentes educativos, con la sociedad y con los compañeros de profesión–; a la propuesta de criterios o principios de actuación formalizados en 2012 en la Carta de Ética de la IGAENR³⁴¹ [Inspección General de la Administración de la Educación Nacional y la Investigación de la República Francesa], como antecedente de la Código Deontológico de la Inspección General de la Educación, el Deporte y la Investigación (IGÉSR) aprobado en 2021³⁴²; a Torres Vizcaya (2021); al sencillo planteamiento realizado en el capítulo VII de Rodríguez Bravo et al. (2021); y a los vagos, aunque incipientes, marcos normativos que se van promulgando.

³³⁹ Página web en la url: http://www.aiec.cat/wp-content/uploads/2015/04/Codigo_etico_esp.pdf con acceso el 16 de septiembre de 2022.

³⁴⁰ Resolución de 2 de junio de 2011, de la Secretaría Autonómica de Educación, por la que se establece la Carta de Buenas Prácticas de la Inspección de Educación en la Comunitat Valenciana. [2011/7562]. Acceso en la url https://dogv.gva.es/datos/2011/07/01/pdf/2011_7562.pdf el 16 de septiembre de 2022.

³⁴¹ Ya citada con acceso en la url: http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013/85/4/Charte_de_deontologie_de_l_IGAENR_254854.pdf el 19 de abril de 2022.

³⁴² Ya citada con acceso en la url: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044346563?init=true&page=1&query=Decision+du+29+octobre+2021+portant+de+la+charte+de+d%C3%A9ontologie+de+l%27inspection&searchField=ALL&tab_selection=all el 19 de abril de 2022.

Versión en pdf en la url: <https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=s8Q4r0nDPeSNpynq3hZEDmgPIRv7gOmlegJaPV6kUU0=>

Pero quisiéramos abrir el foco y ampliar las propuestas desde planteamientos más globales y abiertos en los que aspectos o dimensiones muy distintas, o quizá asimétricas, puedan aportar algún elemento de relevancia y enriquecimiento singular o incluso estructural, junto a la modesta aportación del ámbito experiencial. No dudamos que estas propuestas de líneas generales deberán concretarse y evolucionar, como evoluciona la propia sociedad y deben también evolucionar los parámetros organizativos y criterios de actuación de un servicio vinculado, desde la mejora continua, a la renovación de la sociedad.

Iniciaremos nuestro epígrafe con una breve referencia a lo que es y significa la deontología profesional, y del porqué de una deontología profesional para los inspectores de educación y después realizaremos una propuesta de líneas generales y criterios deontológicos.

- La deontología profesional

Se define la deontología (del griego δέον, -οντος *déon*, -ontos 'lo que es necesario', 'deber' y -logía 'conocimiento', 'estudio') como *la parte de la ética que trata de los deberes, especialmente de los que rigen una actividad profesional, así como el conjunto de deberes relacionados con el ejercicio de una determinada profesión*³⁴³. Se también como *la parte de la filosofía moral dedicada al estudio de las obligaciones o deberes morales*. La citada Carta de Ética de la Inspección General de la Administración de la Educación Nacional y la Investigación [IGAENR] la define como *l'ensemble des règles de comportement qui régissent une profession et l'ensemble des devoirs que s'imposent à eux-mêmes des professionnels dans l'exercice de leur métier (el conjunto de normas de comportamiento que rigen una profesión y el conjunto de deberes que los profesionales se imponen en el ejercicio de su profesión)*.

Sanroman et al. (2015) establece dos tipos de deontología: la deontología prescriptiva que determina el comportamiento con base en las reglas planteadas o necesarias para la convivencia; y la deontología aplicada que establece los deberes de la vida cotidiana.

Los orígenes del término se establecen en el primer tercio del siglo XIX como la *ciencia de los deberes*. En este sentido y aplicada a las profesiones podemos concretar que la denominada como deontología profesional se ocupa de determinar y regular el conjunto de responsabilidades éticas que surgen en relación con el ejercicio de una profesión, especialmente aquellas cuyas dimensiones tienen repercusión social, como es, en primera instancia, la sanitaria o la docente.

El código deontológico por antonomasia se corresponde con el juramento hipocrático que realizan los profesionales sanitarios y que orienta al profesional en la práctica de su profesión, tal y como establece y desarrolla Remis (2009).

Dadas las características de la docencia y su gran repercusión social, siempre se ha llegado a concluir que la profesión docente también debería tener un código deontológico y, de diversas formas, ha llegado a concretarse en distintos modelos. Este es el caso de la inspección de educación, como cuerpo docente e intrínseca, orgánica y normativamente vinculado con el estamento docente.

³⁴³ Fuente: web de la Real Academia Española en la url: <https://dle.rae.es/deontolog%C3%ADa> con acceso el 15 de octubre de 2021.

En esta línea y dentro del estamento docente se hace necesario citar el encuentro de los Consejos Escolares Autonómicos y del Estado celebrado en 2012, que concluyó³⁴⁴:

Era necesario añadir una conciencia clara de la dimensión ética de la profesión docente, entendida como un compromiso profesional compuesto por valores, actitudes y estilos de comportamiento con una meta social: la de la formación de los ciudadanos del futuro.

Es así porque enseñar es una actividad intelectual y moral, en el sentido de que está destinada al beneficio de las personas y de la humanidad. Y lo es también porque el profesor es una fuente de influencia para sus estudiantes, y estos pueden emplearlo como modelo e, incluso, como guía en asuntos que poco tienen que ver con la materia concreta objeto de instrucción.

A este respecto es pertinente mencionar los códigos deontológicos de la profesión docente desarrolladas por el Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, en 1996 y en 2010³⁴⁵ que han recogido Jover & Ruiz (2013) y que aportan también una estructura y unas líneas muy interesantes.

Dentro de lo que Sanroman et al. (2015) denominaba deontología prescriptiva se hace necesario mencionar dos dimensiones diferenciadas, pero muy vinculadas entre sí: una dimensión de carácter general que afecta a los empleados públicos y otra dimensión más específica vinculada con la inspección de educación.

La dimensión general tiene como partida el art. 103 de la Constitución Española de 1978³⁴⁶ que establece:

1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

[.../...]

3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones

Desde ese principio general de actuación de las administraciones públicas se deriva lo establecido en el epígrafe tercero y que ha sido materializado en el capítulo VI -Deberes de los

³⁴⁴ Consejo Escolar del Estado (2015). *El profesorado del siglo XXI. XXI encuentro de consejos escolares autonómicos y del Estado*. Madrid: Secretaría General Técnica. Acceso en la url:

<https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:f88f1d40-af31-4fae-8c6b-fb5536f8ab71/21encuentroconsejos Escolares2012-pdf.pdf> el 15 de octubre de 2021.

³⁴⁵ Acceso en la url: https://www.consejogeneralcdl.es/archivos/profesion_docente.pdf el 15 de octubre de 2021.

³⁴⁶ Documento ya citado. Constitución española de 1978 en la url:

https://www.congreso.es/docu/constituciones/1978/1978_cd.pdf. Texto consolidado en la url: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229>

empleados públicos. Código de Conducta- del título III -Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos- del Real Decreto Legislativo 5/2015³⁴⁷.

Este último marco normativo establece el código de conducta en el art. 52; los principios éticos en el art. 53 y los principios de conducta en el art. 54.

El código de conducta que establece (art. 52) se centra en el desempeño diligente de las tareas encomendadas con arreglo al marco normativo y una serie de principios de actuación: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez y respeto a la igualdad entre mujeres y hombre.

Los principios éticos (art. 53) comprenden doce puntos concretos, que consideramos organizados en tres apartados. Los cuatro primeros de carácter general: respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico; satisfacción de los intereses generales con imparcialidad ajustados a principios de lealtad y buena fe con la administración y con una conducta basada en el respeto a los derechos fundamentales. Los tres siguientes (5, 6, 7) y el noveno se presentan con una formulación negativa: se abstendrán de asuntos en los que tengan interés personal; no contraerán obligaciones económicas con entidades que puedan suponer conflicto de intereses; no aceptarán trato de favor, privilegio o ventajas; y no influirán en la agilización de trámites que le aporte de forma directa o indirecta beneficio. Y los cuatro restantes también de carácter general y de formulación positiva: actuación con los principios de eficacia y eficiencia; cumplimiento diligente; ejercicio con dedicación; y guarda imperativa de sigilo y secreto.

En cuanto a los principios de conducta (art. 54) se desarrollan con once puntos que pasamos a exponer:

- 1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos.*
- 2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.*
- 3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.*
- 4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.*
- 5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación.*
- 6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.*
- 7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables.*

³⁴⁷ Disposición ya citada correspondiente al Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE, núm. 261, de 31 de octubre). Texto consolidado en la url: <https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11719-consolidado.pdf>

8. Mantendrán actualizada su formación y cualificación.

9. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral.

10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados. A estos efectos se podrá prever la creación de la instancia adecuada competente para centralizar la recepción de las propuestas de los empleados públicos o administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio.

11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio.

En cuanto a la dimensión más específica, esta se encuentra recogida por una parte en el art. 153 bis -Principios de actuación de la inspección educativa- de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/2020³⁴⁸; y por otra y de forma concreta para la inspección educativa de la Comunidad de Madrid en el capítulo VII de la Orden 732/2021³⁴⁹.

El art. 153 bis de la Ley Orgánica 2/2006, que ha marcado una novedad en el desarrollo normativo de la inspección educativa, establece cuatro principios generales de actuación.

a) Respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas, defensa del interés común y los valores democráticos y evitación de cualquier conducta que pueda generar discriminación por razón de origen, género, orientación sexual, religión opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.

b) Profesionalidad e independencia de criterio técnico.

c) Imparcialidad y eficiencia en la consecución de los objetivos fijados.

d) Transparencia en cuanto a los fines de sus actuaciones, los instrumentos y las técnicas utilizados.

La Orden 732/2021 dedica, de la misma forma, tres artículos a este importante objeto: el art. 58, dedicado a la ética profesional (véase la tabla 6.1); el art. 59 a los principios éticos (véase la tabla 6.2) y el art. 60 a los principios de conducta (véase la tabla 6.3). Se hace necesario señalar el gran paralelismo que existe entre los arts. 52, 53 y 54 del Real Decreto Legislativo 5/2015 y los art. 58, 59 y 60 de la orden 732/2021 tal y como puede apreciarse en las tablas 6.1, 6.2 y 6.3, sin que la propuesta de la Orden 732/2021 haya supuesto ninguna novedad específica.

A la hora de proponer unas líneas generales para el establecimiento de un código deontológico para la inspección de educación, el equipo investigador había considerado pertinente organizarlas en distintas dimensiones siguiendo la propuesta del Consejo General de Colegios de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencia para los docentes (Jover & Ruiz, 2013), que tras unos principios de actuación generales, plantea cuatro dimensiones

³⁴⁸ Texto normativo ya citado correspondiente a la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE, núm. 295, de 10 de diciembre, pp. 97858-97921). Acceso en la url: <https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf>

³⁴⁹ Texto normativo ya citado correspondiente a la Orden 732/2021, de 24 de marzo, de la Consejería de Educación y Juventud, por la que se desarrolla el Decreto 61/2019, de 9 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la organización, estructura y funcionamiento de la Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid (BOCM, núm. 82, de 7 de abril, pp. 90-113). Acceso en la url: https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/07/BOCM-20210407-20.PDF

(compromisos y deberes en relación con el alumnado; compromisos y deberes en relación con las familias y los tutores del alumnado; compromisos y deberes en relación con la institución educativa; y compromisos y deberes en relación con los compañeros), aunque con una organización acorde a las tres dimensiones en las que se ha asumido que interviene la inspección de educación –sistema, centro, aula– (Moya, 2018), y una cuarta específica vinculada con la propia profesión. De esta forma la estructura inicial se consideraba conformarla con las siguientes dimensiones: líneas orientadas al sistema educativo; líneas orientadas a los centros y a las comunidades educativas; líneas orientadas al aula y al proceso de enseñanzas/aprendizaje; y líneas orientadas a la propia profesión.

No obstante el propio planteamiento de presentar unas líneas generales de carácter global, sinergias estructurales y carácter holístico nos ha encaminado a desestimar las dimensiones expuestas al percibir que cada línea propuesta, muestra vinculaciones en las distintas dimensiones. No obstante, se considera que la estructura planteada puede ser susceptible de conformar un detallado código deontológico desarrollado y concreto.

Como preámbulo a la propuesta de líneas generales para el establecimiento de un código deontológico de la inspección educativa de la Comunidad de Madrid, se hace necesario mencionar la necesidad de que la inspección educativa cuente con un organismo, con la necesaria autonomía, que realice las veces de Comité de Ética de la Inspección, Consejo de Ética, etc., tal y como tiene la propia Universidad Autónoma de Madrid³⁵⁰ o la administración tributaria³⁵¹. Esta entidad, que en el ámbito de la inspección educativa francesa tiene su reflejo en el Colegio de Ética de la Inspección General de la Administración de la Educación Nacional y de la Investigación y posteriormente en el Colegio Nacional de Ética de la Educación, la Juventud y el Deporte³⁵², sería la encargada de resolver conflictos de carácter ético, marcar criterios de actuación y mantener actualizado un posible código deontológico de la inspección educativa de la Comunidad de Madrid. Es necesario que de dicho organismo formen parte personalidades de reconocido prestigio en el ámbito de la inspección educativa, con una larga trayectoria y personalidades externas con sólida formación y experiencia en la materialización de códigos éticos y deontológicos.

³⁵⁰ Se puede ampliar información en la web del Comité de Ética de la UAM en la url: <https://www.uam.es/uam/investigacion/comite-etica> con acceso el 1 de octubre de 2020 (url: actualizada en un posterior acceso).

³⁵¹ Referencia extraída de la Resolución de 17 de junio de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se crea la Comisión Consultiva de Ética (BOE, núm. 214, de 7 de septiembre, pp. 108239-108242), con acceso el 20 de septiembre de 2022 en la url: <https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/07/pdfs/BOE-A-2021-14649.pdf>

³⁵² Se puede ampliar información en la web: *Le collège de déontologie de l'Éducation Nationales, de la Jeunesse et des Sports* en la url: <https://www.education.gouv.fr/le-college-de-deontologie-de-l-education-nationale-de-la-jeunesse-et-des-sports-12302> con acceso el 20 de septiembre de 2022.

Es significativa la existencia en la República Francesa del Comité de Ética de los Datos Educativos (*Le Comité d'Éthique pour les Données d'Éducation*). Datos extraídos el 20 de septiembre de 2022 de la url: <https://www.education.gouv.fr/le-comite-d-ethique-pour-les-donnees-d-education-12146>.

Pasemos en este momento a establecer líneas generales para el establecimiento de un código deontológico para la inspección de educación de la Comunidad de Madrid.

A. El derecho a la educación y la equidad

El eje fundamental que debería regir la constitución de un código deontológico de la inspección educativa es la base y finalidad de la labor que realiza: garantizar el derecho a la educación, así como los derechos y la observancia de los deberes de todos los que participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje. De este fundamento y base, se vehiculan dos elementos que consideramos igualmente nucleares: una es la que establece Rodríguez et al. (2021) al vincular a la inspección educativa con la equidad de forma global: equidad en el trato con los distintos centros educativos; equidad con el tratamiento de alumnos y alumnas; equidad en el tratamiento con alumnado nativo o inmigrante; equidad con el tratamiento entre docentes y en sus relaciones con los equipos directivos, los padres, etc. Este planteamiento es una consecuencia del ejercicio efectivo al derecho a la educación de los menores y se materializa en dar el tratamiento más justo en cada caso para que la educación sea uno de los factores decisivos de nivelación social. Rodríguez (2021) concluye con una afirmación que asumimos plenamente en el sentido de que la justicia no está en un tratamiento igualitario, sino en el necesario en cada caso. Esta perspectiva debe orientar la labor de los inspectores de educación orientando las actuaciones y los recursos hacia la población más vulnerable.

Y la otra es la consecuente flexibilidad para que el cumplimiento de las normativas y reglamentos se orienten hacia esa finalidad. Torres (2021, 96) utiliza el término *epiqueya*³⁵³ que consideramos que define perfectamente el ejercicio prudente, equilibrado y flexible según el contexto. Torres (2021, 97) apunta que la utilización de la *epiqueya* no es la de *jugar a retorcer las normas y mucho menos recrearse en la difícil y grave tarea de la hermenéutica jurídica; al contrario, el inspector debe interpretar las leyes educativas, siempre intentando cumplirlas, desde luego, pero con el plus irrenunciable y con la pretensión de ser justo y equitativo*.

Junto a esos elementos hay que presentar otras importantes herramientas: la primera la *empatía*³⁵⁴, que es la capacidad de entender el punto de vista del otro y de contextualizar sus intereses. Y la segunda, que también cita Torres (2021, 89), es la *prudencia*³⁵⁵ entendida como sabiduría práctica: forma característica de la sabiduría cuyos objetos son los asuntos específicamente humanos.

De esta forma y desde un conocimiento riguroso del sistema y de sus mimbres, el inspector podrá orientar los procedimientos y disposiciones para garantizar, con prudencia y de forma adaptada, el ejercicio al derecho a la educación en equidad.

³⁵³ La Real Academia Española define el término *epiqueya*, del griego ἐπιείκεια, *epieíkeia* 'moderación', 'equidad', der. de ἐπιεικής *epieikḗs* 'moderado', 'equitativo'; (f) Interpretación moderada y prudente de la ley, según las circunstancias de tiempo, lugar y persona.

³⁵⁴ La Real Academia Española define el término *empatía*, del griego ἐμπάθεια, *empátheia*.

1. f. Sentimiento de identificación con algo o alguien.
2. f. Capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos.

³⁵⁵ La Real Academia Española define el término *prudencia*, del latín *prudētia* como (f.) templanza, cautela, modelación; y (f.) sensatez y buen juicio.

B. Independencia

La siguiente línea no puede ser otra que la de la independencia, la libertad de criterio, la imparcialidad y la objetividad. Esta línea va intrínsecamente vinculada con la lealtad de la inspección educativa con la sociedad y con las funciones que le han sido encomendadas. De esta forma la inspección educativa debe velar porque sus análisis, informes, recomendaciones o dictámenes se basen en procedimientos oportunos y pertinentes de recogida y tratamiento de información de todo tipo.

Los inspectores de educación deben abstenerse de todo tipo prejuicio. Sus criterios no pueden estar distorsionados o contaminados por posiciones previas, situaciones similares o cualquier interés material o moral que puedan tener. Sus análisis y conclusiones deben basarse únicamente en los resultados de sus indagaciones, investigaciones y en su experiencia, respetando los requisitos profesionales de neutralidad, objetividad e imparcialidad.

La independencia de la inspección educativa debe aplicarse de forma imperativa en todos sus ámbitos –incluso en los personales-. De esta forma no debe existir ninguna circunstancia que pueda hacer vulnerable al inspector de educación, ni siquiera en apariencia, a ninguna presión o influencia, ni deben correr el riesgo de dañar, ni su reputación, ni la dignidad de su función.

C. Discrecionalidad

Otras de las líneas de actuación que se consideran indispensable es la de la discrecionalidad, la confidencialidad profesional y la reserva. Los inspectores de educación se encuentran sujetos a la discreción profesional en lo relativo a la información que deben conocer o generar en el trascurso de su trabajo. Los informes y la documentación generada por la inspección de educación se encuentran destinadas exclusivamente a sus responsables, que son los únicos que pueden hacerlos públicos y son los únicos que pueden establecer la conveniencia de su utilización y publicación.

Los inspectores de educación deben poner especial cuidado en sus documentos, en sus términos y escritos, respetando los secretos protegidos y la pertinencia y oportunidad de los datos expuestos. Esta obligación de confidencialidad debe imponerse tanto durante las gestiones, como una vez finalizadas estas e incluso tras un cese temporal o definitivo de las funciones como inspector.

D. Ejemplaridad

Una nueva línea para el establecimiento de un código deontológico de la inspección de educación es la dignidad y la ejemplaridad. Dado su situación como funcionario docente, la repercusión de sus actuaciones y la visibilidad entre los funcionarios y los distintos sectores de las comunidades educativas, el inspector de educación debe ser especialmente cuidadosos a la hora de evitar cualquier comportamiento o acción que pueda dañar la dignidad³⁵⁶, el honor³⁵⁷ y la reputación de la inspección.

³⁵⁶ El diccionario de la Real Academia española define el término *dignidad* como (f.) *gravedad y decoro de las personas en la manera de comportarse*. Fuente extraída de la url:

<https://dle.rae.es/dignidad?m=form> con acceso el 21 de septiembre de 2022.

³⁵⁷ El diccionario de la Real Academia española define el término *honor* como (m.) *la cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto al prójimo y de uno mismo* y (m.) *m. gloria o*

Incluso en la vida privada, el inspector de educación, como cualquier otro funcionario, pero aún más por su pertenencia a un órgano de control, debe ser irreproachable en el respeto a las leyes y reglamentos.

Los miembros del cuerpo de inspección deben informar a los centros y servicios o entidades sobre los que intervengan de la naturaleza, objeto y, en su caso, protocolo de su actuación. Durante sus intervenciones y actuaciones el inspector de educación se comportará de forma equilibrada y cortés, sin agresividad ni complacencia hacia la persona que están siendo escuchadas, y mantendrá esta actitud sean cuales sean las circunstancias. En el transcurso de sus actuaciones los inspectores de educación no pueden aceptar o solicitar nada que pueda poner en duda su independencia, imparcialidad y honradez.

E. Sigilo profesional

Otra de las líneas generales de actuación, muy acorde con lo establecido en la normativa general, es el del necesario deber de sigilo y obligación de reserva.

Los inspectores de educación deben respetar estrictamente la obligación personal de reserva que obliga a todos los funcionarios, y más particularmente a aquellos cuyo criterio y actuación tienen un valor específico con valor probatorio y *cuasi* notarial.

En sus actuaciones y actividades externas, el inspector de educación no destacará su pertenencia a la institución, ni trasladará detalles de su trabajo, ni se referirán públicamente a las actuaciones realizadas o actuales.

El inspector de educación, en la línea propuesta en el citado Código Deontológico de la Inspección General de la Educación, el Deporte y la Investigación (IGÉSR) de 2021, se abstendrá de adoptar cualquier posición pública, ya sea por escrito, oralmente o a través de las redes sociales, que pueda perjudicar la dignidad del puesto o la reputación del servicio.

En el caso de la participación como candidatos en procesos electorales o del ejercicio de mandatos electivos los inspectores de educación tendrán mucho cuidado de evitar cualquier confusión entre su calidad de inspector de educación, que no utilizará como argumento electoral, y la de candidato electo. Se asegurarán de que cuando formen parte de órganos deliberantes, hagan declaraciones públicas o respondan a entrevistas en calidad de representantes elegidos o candidatos a las elecciones, no mencionen su condición de inspector de educación. En esta misma línea velarán porque su mandato electivo no perjudique el ejercicio de sus funciones.

F. Integridad

Otra línea general que consideramos importante para el establecimiento de un código deontológico de los inspectores de educación es el de la integridad y la prevención de conflictos de intereses. Los conflictos de intereses son situaciones de interferencia entre los intereses públicos y los intereses públicos o privados que pueden influir o parecer influir en el ejercicio independiente e imparcial de sus funciones. Los inspectores de educación cuidarán de poner fin

buena reputación que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones heroicas, la cual trasciende a las familias, personas y acciones mismas de quien se la granjea. Fuente extraída de la url:

<https://dle.rae.es/honor?m=form> con acceso el 21 de septiembre de 2022.

inmediatamente a las situaciones de conflicto de intereses en las que se encuentren o puedan encontrarse.

Al respecto, corresponden en primera instancia a los propios inspectores de educación (de cuerpo o de forma accidental) el velar porque sus actividades, acciones personales de carácter voluntario o actividades privadas, así como sus vínculos personales y familiares, no les coloquen en estas situaciones. La existencia de un posible conflicto de intereses debe trasladarse al Consejo de Ética³⁵⁸.

En ningún caso un inspector de educación podrá participar en actuaciones relativas a centros, servicios u organismo en el que haya ejercido responsabilidades o con los que haya tenido relación durante los cuatro años anteriores, y con más razón, cuando las personas con las que ha trabajado en relación jerárquica, siguen en activo.

En estos casos, los inspectores de educación están obligados a informar de la posible situación de conflicto de intereses a su jefatura y deben retirarse de la actuación. Los inspectores de educación se abstendrán de cualquier relación de interés con los implicados en el ámbito de sus responsabilidades que pueda comprometer o parecer comprometer la garantía de imparcialidad con respecto a ellos.

G. Conocimiento y Formación

Otra de las líneas que se consideran fundamentales para el establecimiento de un código deontológico de la inspección de educación es el del permanente compromiso con la formación y con la actualización científica.

La situación profesional de los inspectores de educación, su continuo asesoramiento e intervención en centros y servicios y la obligada investigación e intervención para la realización de informes sobre cualquier dimensión educativa, debe provocar un sólido compromiso con la formación y la actualización científica sobre los más diversos campos: psicológicos, pedagógicos, curriculares, organizativos, normativos, etc.

La situación del inspector de educación le hace configurarse como ejemplo y asesor permanente, por lo que la actualización constante y la investigación pertinente y necesaria debe ser una seña de identidad de los inspectores de educación en las prácticas de sus funciones y en su vida privada. Esa dinámica le proporcionará un conocimiento profundo de todo el sistema y de sus distintas dimensiones, que favorecerá la epiqueya que mencionábamos en un punto anterior.

Ese conocimiento actualizado y permanente dotará al inspector de educación de la necesaria anticipación, entendida como el *talento práctico adquirido por la madurez del oficio* (Torres, 2021, 117).

Los inspectores de educación deben ser, en ese sentido, referentes formativos de sus centros y servicios y del sistema educativo en su conjunto; por lo que tanto el acceso, la permanencia y su evaluación debe tener en consideración este importante aspecto. La percepción del conocimiento experto y del bagaje experiencial de los inspectores de educación debe ser equiparable con la formación científica de los docentes universitarios, dando siempre garantía de sólido conocimiento y éxito en sus intervenciones formativas.

³⁵⁸ Organismo cuya creación se ha propuesto al comienzo del epígrafe.

H. Colegialidad

Dentro de las líneas a desarrollar, el equipo investigador considera necesario marcar la colegialidad y el cumplimiento de las normas de trabajo colectivo.

La colegialidad debe entenderse como un principio general del trabajo de los inspectores de educación, tanto en la realización, como en la transferencia de su trabajo, pues promueve la objetividad y la calidad de su labor como colectivo. De esta forma y en el marco de los procedimientos y protocolos establecidos, los miembros del cuerpo deben estar atentos a la complementariedad de los enfoques y a la expresión de la polivalencia y la diversidad de los distintos puntos de vista. En esta línea los inspectores de educación deben compartir sus conocimientos, competencias y experiencias, combinando el respeto mutuo, el rigor, la capacidad de escucha y la libertad de juicio.

En caso de desacuerdo, los inspectores deberán trabajar juntos para llegar a un consenso razonable bajo la responsabilidad del responsable del asunto o de la jefatura. Es en el caso de desacuerdo profundo e irreconciliable cuando se hace necesaria la intervención del Consejo de Ética señalado previamente.

Este trabajo conjunto tiene también una dimensión externa al vincularse con otras unidades u organismos de control con los que la inspección de educación puede y debe cooperar de forma plena, estableciendo altos estándares, ofreciendo sus metodologías específicas y defendiendo los puntos de vista e intereses legítimos que promueven en el servicio público educativo.

Sin pretender ser excluyentes, estos son los criterios generales y las líneas básicas sobre las que se considera que se debería construir un código deontológico para la inspección de educación en la Comunidad de Madrid, perfectamente extrapolable a las otras inspecciones educativas de las distintas comunidades autónomas o a las inspecciones educativas de otros países o estados.

6.3. Limitaciones y futuras líneas de investigación

Es significativo señalar las limitaciones que hemos encontrado en la investigación y las posibles causas. Una muy importante es la escasa participación en alguno de los sectores, y en concreto en los sectores de familias, docentes y responsables educativos.

Se atribuye esta situación a la complejidad y densidad de la herramienta utilizada, en lo relativo a los dos primeros sectores mencionados: familias y docentes. En cuanto a la escasa participación de los responsables educativos, esta parece deberse a otras circunstancias, de carácter personal o político, en el que se tiene escasa o nula influencia. Estas limitaciones, que han sido causa para modificar las pretensiones iniciales, también son elementos para reorientar futuras líneas de investigación, pues se considera que una tesis debe ser un eslabón para nuevas propuestas de investigación. No se entiende el esfuerzo investigador, sino como herramienta y puente para nuevas propuestas e inquietudes académicas e investigadoras.

Las propuestas que aquí se plantean como líneas futuras de investigación, toman como punto de partida los estudios realizados en la presente tesis. Podrían ser ingentes, pero intentamos priorizarlas y seleccionar aquellas que se consideran relevantes y encrucijadas para nuevas iniciativas investigadoras.

En este sentido y con la intención de ordenarlas según la propia estructura de la tesis, pero con una visión más poliédrica y global, se proponen las siguientes líneas de investigación.

I. Globales:

- Justificación epistemológica y científica de la supervisión educativa como disciplina de las ciencias de la Educación.
- El asociacionismo en la inspección de educación a lo largo de la historia. Oportunidades multidisciplinares.
- Definir, reconocer y valorar las capacidades desarrolladas por la inspección de educación en nuestro sistema educativo, desde una perspectiva sistémica (CPIE).
- Establecimiento de un código deontológico para la inspección de educación. Estudio histórico, internacional y disciplinar.

II. Estudios históricos:

- Estudio histórico de las formas de provisión y de los requisitos para el acceso al cuerpo de inspectores de educación desde 1849. Correlación de formas de provisión y ratio inspector – centros/servicios. La permanencia en la inspección de educación según la forma de provisión: Fortalezas, amenazas y debilidades.
- Estudio cuantitativo sobre la organización territorial de la intervención inspectora en educación y ratio centros/servicios. La España de las autonomías y su influencia en las unidades de control e inspección de educación.
- Estudio comparado sobre la organización de los planes generales de actuación de las distintas comunidades autónomas: semejanzas y diferencias. Los planes generales de actuación educativa, como elementos centrífugos o centrípetos, con relación a los parámetros y criterios establecidos en la normativa básica.

III. Estudios comparados internacionales:

- Estudio comparado internacional sobre las funciones y atribuciones de la inspección de educación en todos los países de la Unión Europea: semejanzas, diferencias y propuestas de mejora.
- Estudio comparado internacional sobre las funciones y atribuciones de la inspección de educación en los países de América: semejanzas y diferencias entre los países de América Latina, y EE.UU. y Canadá. La influencia de los modelos europeos en los modelos americanos.
- Estudio comparado internacional sobre las funciones y atribuciones de la inspección de educación en África: fuentes y evolución; semejanzas y diferencias.
- Estudio comparado internacional sobre las funciones y atribuciones de la inspección de educación en Asia y Oceanía: modelos representativos. Fuentes y evolución; semejanzas y diferencias.
- Estudio global sobre los modelos de control e inspección de educación en Europa, América, África y Asia – Oceanía: semejanzas y diferencias. Propuestas de enriquecimiento mutuo.
- Estudio comparado supranacional sobre propuestas de organización, modelos, funciones y atribuciones de las unidades de control e inspección de educación: OCDE, Unión Europea, UNESCO, OEA, etc.
- Los resultados de las investigaciones y de las evaluaciones internacionales y las unidades de control e inspección: utilización, pertinencias, paradojas, fortalezas y debilidades.
- Estudio comparado internacional sobre las formas de provisión y los requisitos para el acceso a la inspección educativa en los países de la UE.
- Estudio comparado internacional e histórico sobre la evolución de las formas de provisión y los requisitos para el acceso a la inspección educativa en los distintos países de la Unión Europea.
- El ejercicio de las competencias profesionales para el ejercicio de la inspección de educación en los países de la UE. Percepción por parte de los principales actores de los sistemas educativos: propuestas de mejora.

IV. Estudios comparados disciplinares:

- Estudio del ejercicio de las competencias profesionales por parte de distintas unidades de control e inspección. Semejanzas, diferencias; fortalezas y debilidades. Propuestas de mejora y enriquecimiento mutuo.
- Estudio comparado disciplinar internacional de unidades de control e inspección en diferentes ámbitos, en países de la UE. Establecimiento de modelos.
- Estudio comparado del asociacionismo en unidades de control e inspección en distintas disciplinas. Evolución histórica: semejanzas, diferencias, fortalezas y debilidades.

V. Estudios de encuestas:

- Estudio del ejercicio de las competencias profesionales por parte de los inspectores de educación, desde la percepción de los docentes, las familias y los responsables educativos: elaboración de herramienta y conclusiones comparadas.
- Las diferencias entre los resultados de la percepción del ejercicio de las competencias profesionales por parte de los inspectores de educación y de los principales agentes del sistema educativo y las distintas zonas en que se organiza la inspección educativa. El caso singular de Madrid: propuestas de mejora.
- Estudio comparado de la percepción del ejercicio de las competencias profesionales por parte de los propios inspectores de educación en las Comunidades Autónomas.
- Estudio comparado de los resultados de la percepción del ejercicio de las competencias profesionales por parte de los inspectores de educación en las distintas comunidades autónomas y su influencia en la consideración de la ratio inspector/centros-servicios.

A modo de epílogo

Pusimos el motor de la investigación en la permanente duda sobre la existencia y pertinencia de una inspección de educación en nuestro sistema educativo: múltiples autores analizados, el sorprendente desconocimiento general de las funciones y atribuciones conferidas al cuerpo de inspectores de educación y la propia práctica del oficio fundamentaban esa percepción. Por esto, y en este escenario, propusimos como finalidad de la investigación *delimitar el perfil profesional de los inspectores de educación de la Comunidad de Madrid, desde el análisis de la percepción que tienen los principales agentes del sistema educativo acerca del desarrollo de las competencias específicas inspectoras*. La intención que nos encaminó en esa dirección era de cierto carácter sistémico, al pretender captar el conocimiento y la percepción que los principales agentes del sistema educativo tienen del trabajo de los inspectores de educación en la Comunidad Autónoma de Madrid.

Esa finalidad, y con esa intención global, se ha visto enriquecida con distintos estudios. De esta forma y en esa intención, se diseñó un estudio, denominado multifocal, para descubrir elementos de gran riqueza cualitativa, que enriquecieran la investigación. Así, la evolución de las funciones y tareas encomendadas a la inspección de educación a lo largo de su historia; el estudio de la historia, la estructura y las funciones asignadas a la inspección de educación en países de nuestro entorno, según distintos modelos de gestión; y el diálogo construido entre la funciones designadas a unidades de control e inspección de distintas disciplinas y las propias de la inspección de educación, han aportado una amplia riqueza de simientes que, no dudamos, podrán encauzar nuevos caminos de investigación. Las conclusiones a las que hemos llegado han enriquecido la propia investigación evaluativa, ponderando, matizando, justificando y encauzando las conclusiones de la percepción que los grupos prioritarios (finalmente, ese ha sido el alcance de nuestros desvelos) tienen sobre las competencias profesionales para el ejercicio de la inspección de educación, en el contexto de nuestra comunidad autónoma, en las primeras décadas del siglo XXI.

Los resultados nos dan pie para afirmar que la inspección de educación, como entidad encomendada para la información, el asesoramiento, el control y la evaluación del sistema educativo -como funciones integradas en la supervisión educativa-, tiene sentido, pertinencia e incluso oportunidad en nuestro sistema educativo; es percibido así por los agentes; y dispone de un amplio e ilusionante recorrido de mejora y optimización de su labor.

Estos resultados nos reconcilian con nuestra última intención en este proyecto, que no era otra que la de investigar si tiene cabida la existencia de los inspectores de educación en nuestro sistema, pues han quedado bien justificadas sus funciones; se ha demostrado que son percibidos de una forma satisfactoria, en el desempeño de sus competencias profesionales; se ve justificada su pertinencia de forma histórica, internacional y disciplinar; se ha aportado un esbozo de líneas generales sobre las que construir un específico código deontológico; y, en esta línea global, la justificación de sus funciones y sus líneas de actuación, fundamentan la existencia de un colectivo, especialmente dedicado a esas funciones y en un identitario y permanente proceso de formación y enriquecimiento, para optimizar la propia labor.

Señalaba en el resumen, al principio de la investigación, que también pretendía *aportar una visión algo diferenciada, que enriqueciera el propio deambular profesional y pretendía devolver a la institución algo de lo mucho que de ella había recibido, en forma de un compromiso académico e investigador, con la doble función de enriquecer el propio futuro desempeño profesional y de contribuir a enriquecer el desarrollo de quienes, ya hoy y en el futuro, desempeñen estos mismos caminos y estas mismas funciones*. Al surcar, solo un pequeño quicio de este proyecto, debo reconocer mi gran error, pues ha sido mucho más lo que he recibido de

este proyecto académico, que lo que creo que pueda aportar: ahora veo consolidado mi horizonte profesional y fundamentada una labor, con nuevas, ilusionantes y renacidas inquietudes.

Las conclusiones que se han hecho fruto en este proyecto, y que espero que ilusionen y animen a quienes lo compartan, deben entenderse como caminos de mejora, optimización y diseño de una nueva inspección de educación, pues esa continua adaptación, también se ve como fundamento en su desarrollo histórico y en su comparación internacional y disciplinar. Debe ser una *continuamente nueva inspección de educación*, sin perder su esencia y su trayectoria, que se acomode y se adapte a las necesidades y a los requerimientos, en continuo proceso de cambio y mejora de nuestro sistema educativo y, en suma y última instancia, en continuo proceso de cambio y mejora de nuestra sociedad, pues sólo será pertinente, si sirve para su mejora continua.

Referencias documentales

Referencias bibliográficas

- Abós, Á., Sevil, J., Martín-Albo, J., Aibar, A., & García-González, L. (2018). Validation evidence of the motivation for teaching scale in secondary education. *The Spanish journal of psychology*, 21.
- Albiñana García-Quintana, C. (1974). La inspección de los tributos: una evolución significativa. *Civitas. Revista española de Derecho financiero*, 4, 767-794.
- Albiñana García-Quintana, C. y otros (1981). *Estudios conmemorativos de la Inspección General de la Hacienda Pública*. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales.
- Albiñana García-Quintana, C. (1985). Los orígenes de la tributación bancaria en España. *Estudios sobre tributación bancaria* (1st ed., pp. 165-180) Civitas.
- Albiñana García-Quintana, C. (1986). *Sistema tributario español y comparado* (1st ed.) Tecnos.
- Albiñana García-Quintana, C. (1993). *La construcción del derecho tributario español: Las aportaciones de las doctrinas científica y jurisprudencial* (1st ed.) Centro de Estudios Financieros - CEF.
- Albiñana García-Quintana, C. (2003). Deontología del inspector de los tributos. *Ética de las profesiones jurídicas: Estudios sobre deontología* (1st ed., pp. 685-693) Universidad Católica San Antonio de Murcia: Cátedra de Ciencias Sociales, Morales y Políticas.
- Antuña, V. M. Á., & Guerra, D. G. (1994). Regeneracionismo y Salud Pública: el bienio de Ángel Pulido al frente de la Dirección General de Sanidad (1901-1902). *Dynamis: Acta hispanica ad medicinae scientiarumque historiam illustrandam*, 14, 23-41.
- Araque Hontangas, N. (2013). Manuel José Quintana y la instrucción pública. *Manuel José Quintana y la Instrucción pública*, 1-427.
- Arnal, J., Rincón, D., y Latorre, A. (1994). *Investigación educativa. Fundamentos y metodología*. Barcelona: Labor.
- Ávila Fernández, A. (1986). La formación de maestros de primeras letras en España y en Sevilla durante los siglos XVII y XVIII. *Cuestiones pedagógicas*, 3, 23-40.
- Bagworth, H. (1998). *The role of agents, visitors and inspectors in the development of elementary education c. 1826-c. 1870*. (Tesis doctoral). Ed. Universidad de Brunel. Londres.
- Baïdak, N., & Sicurella, A. (2019). The Structure of the European Education Systems, 2019/20: Schematic Diagrams. Eurydice--Facts and Figures. *Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, European Commission*.
- Baïdak, N., Sicurella, A., & Matti Riiheläinen, J. (2020). The Structure of the European Education Systems, 2020/21: Schematic Diagrams. Eurydice--Facts and Figures. *Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, European Commission*.
- Ballesteros Y Usano, A. La Inspección. *Organización Escolar*, dirigida por Santiago Hernández Ruiz. México DF.: UTHEA, II, 672-690.
- Banaloché, J. (1984). Función y formación de la Inspección de la Hacienda pública en el siglo XIX. *Hacienda Pública Española*, 87, 295-309.
- Barbero García, M., Vila Abad, E., Suárez Falcón, J., & Universidad Nacional de Educación a Distancia. (2006). *Psicometría* (2ª ed., Unidades didácticas (Universidad Nacional de Educación a Distancia (España))). Madrid: UNED.

- Barclay, D., Higgins, C., & Thompson, R. (1995). The partial least squares (PLS) approach to casual modeling: personal computer adoption and use as an Illustration. *Technology Studies*, 2 (Special Issue on Research Methodology, 2), 285-309.
- Barrantes, R. (2004). Proyectos pedagógicos como aproximación a la investigación. *Praxis Pedagógica*, 4(5), 72-77.
- Bartlett, M. S. (1950). Tests of significance in factor analysis. *British journal of psychology*.
- Beneyto Calabuig, D., España, & España Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. (1998). *La inspección de trabajo: Funciones y facultades, procedimiento de actuación, actas y recursos: Análisis práctico y comentarios de la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Ley 42/1997, de 14 de noviembre...* (1a ed.). Valencia: CISS.
- Bentler, P. M. (1989). *EQS structural equations program manual*. Los Angeles, CA: BMDP Statistical Software.
- Bereday, G. (1968). *El método comparativo en pedagogía*. Barcelona: Herder.
- Berengueras Pont, M. & Vera Mur, J. M. (2015). Las leyes de educación en España en los últimos doscientos años. *Supervisión 21: revista de educación e inspección*, (38), 1.
- Bisquerra Alzina, R. (coord.) (2004). *Metodología de la investigación educativa*. Madrid: La Muralla.
- Blanco López, J.L. (2018). La competencia profesional del inspector de educación. En Miguel Pérez, V. (Ed.) *La inspección de la educación en España; una visión de futuro. Cuadernos de Pedagogía*, 494, 68-72.
- Blanco Valdés, Roberto L. (2014). *El laberinto territorial español. Del cantón de Cartagena al secesionismo catalán*. Madrid: Alianza Editorial.
- Bloch, M. (1952). Marie Helmer, ouvrages sur l'Amérique espagnole. *Annales*, 7(3), 430-432.
- Bloch, M. (1952). *Introducción a la Historia*. Méjico, Fondo de Cultura Económica.
- Bloch, M. (2001). *Apología para la historia o el oficio de historiador* (3ª ed.). México: Fondo de Cultura Económica.
- Bohigas Gavilanes, F. (1941). *La inspección de primera enseñanza y la educación de la generación nueva*. Madrid: Editorial Cigüeña.
- Browne, M. W., y Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. En K. A. Bollen y J. S. Long (Eds.), *Testing Structural Equation Models* (pp. 136-162). Beverly Hills, CA: Sage.
- Bruggen, J.C. van (2010). Inspectorates of Education in Europe; some comparative remarks about their tasks and work. *Standing International Conference of Inspectorates (SICI)*. (April, 2010). Bruselas.
- Caballero, Á., Manso, J., Matarranz, M., & Valle, J. M. (2016). Investigación en Educación Comparada: Pistas para investigadores noveles. *Revista latinoamericana de Educación comparada*, 7(9), 39-56.
- Cáceres González, J., Gegúndez Arias, M. E., Maestre Hachero, M., & Márquez Pérez, A. (2002). Algunas notas sobre mosaicos de Penrose.
- Calatayud Soler, R. (1991). *Cuestiones histórico-educativas España: Siglos XVIII-XX* (Universidad de Valencia Departamento de Educación Comparada e Historia de la Educación Cuadernos Serie maior). Valencia: Universitat de València.

- Camacho Prats, A. (2015). Los antecedentes remotos de la inspección educativa española durante el antiguo régimen. *Supervisión* 21, 38.
- Carmines, E. G., & Zeller, R. A. (1979). *Reliability and validity assessment*. Sage publications.
- Carr, E. (2017). *¿Qué es la historia?* (1ª ed. en esta presentación. ed., Ariel 75, 1942-2017). Barcelona: Ariel.
- Casanova Rodríguez, M.A. (2015). La supervisión, eje del cambio en los sistemas educativos. *REICE: Revista Electrónica Iberoamericana Sobre Calidad, Eficacia Y Cambio En Educación*, 13(4), 7-20.
- Castán Esteban, J.L. (2019). Fuentes bibliográficas y documentales para la investigación histórica sobre la Inspección de Educación. *Educa Nova: colección de artículos técnicos de educación*, 9, 59-84.
- Castán Esteban, J. L. (2021a). *Historias de vida de la inspección. Referentes en la historia de la educación española*. (1st ed., pp. 13-20) Anaya: Unión Sindical de Inspectores de Educación, USIE.
- Castán Esteban, J. L. (2021b). La investigación sobre la historia de la inspección de educación en España. Balance y perspectivas. *Espacio, Tiempo y Educación*, 8(1), pp. 219-245.
- Ceballos, B. A. de (1692). *Libro histórico y moral sobre el origen y excelencias del nobilísimo arte de leer, escribir y contar y su enseñanza*.
- Chavarria Navarro, X., & Borrell Closa, E. (2003). La deontología profesional del inspector de educación como compromiso de calidad docente. *Jornadas Estatales Fórum Europeo de Administradores de la Educación. El profesorado: el compromiso docente con la educación*. Palma de Mallorca, 2003; p. 69-78.
- Chin, W. W. (1998). Issues and opinion on structural equation modeling. *MIS Quarterly*, 22(1), 7-17.
- Coats, D. & Passmore, E. (2008). *Public Value: The Next Steps in Public Service Reform*. London: The Work Foundation.
- Comín Comín, F. (2007). Reforma tributaria y reforma de la inspección durante la transición a la democracia en España. *Los inspectores de hacienda en España una mirada histórica* (1st ed., pp. 27-556) Centro de Estudios Financieros/APIFE-APIHA.
- Condette, J. F. (Ed.). (2022). *Les personnels d'inspection: Contrôler, évaluer, conseiller les enseignants. Retour sur une histoire, France-Europe (XVIIe-XXe siècle)*. Presses universitaires de Rennes.
- Conejero Paz, E. (2012a). Gobierno abierto y democracia participativa. *Revista 3c Empresa, Investigación y pensamiento crítico*, 13:1-12
- Conejero Paz, E. (2012b). Midiendo el riesgo en las administraciones públicas. *Revista de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas*, 9: 95-113.
- Conejero Paz, E. (2015). Rendimiento, evaluación y rendición de cuentas de las administraciones públicas en España. *RIPS: Revista De Investigaciones Políticas Y Sociológicas*, 13(2).
- Consejo Escolar del Estado (2015). *El profesorado del siglo XXI. XXI encuentro de consejos escolares autonómicos y del Estado*. Madrid: Secretaría General Técnica
- Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid (2020). *Informe 2020 sobre el sistema educativo de la Comunidad de Madrid. Curso 2018-2019*. Madrid: Comunidad de Madrid.

- Cotarelo y Mori, E. (1913). *Diccionario biográfico y bibliográfico de calígrafos españoles*. Madrid: Tip. de la Revista de Arch., Bibl. y Museos.
- Cotarelo y Mori, E. (1916). *Diccionario biográfico y bibliográfico de calígrafos españoles (II)*. Madrid: Tip. de la Revista de Arch., Bibl. y Museos.
- Cuervo-Martínez, A. Escobar-Pérez, J. «Validez de contenido y juicio de expertos: una aproximación a su utilización», *Avances en Medición*, vol. 6, pp. 27-36, 2008.
- Cuevas, R., Sánchez-Oliva, D., & Fernández-Bustos, J. G. (2016). Adaptación y validación de la escala de compromiso agéntico al contexto educativo español. *Revista Mexicana de Psicología*, 33(2), 135-142.
- De Anduaga, J. (1781). *Arte de escribir por reglas y sin muestras establecido de orden superior en los Reales Sitios de San Ildefonso y Valsain*.
- De Anduaga, J. (1795). *Arte de escribir por reglas y sin muestras establecido de orden superior en los Reales Sitios de San Ildefonso y Valsain...* en la Imprenta Real.
- De Fuentes Garcia, C., & Valmorisco Pizarro, S. (2021). La actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación con las personas con discapacidad. *Revista Española De Discapacidad*, 9(2), 7-22.
- De las Heras, J.L. (1991). Un proyecto frustrado de la ordenación de la enseñanza de las primeras letras en el Madrid del siglo XVI. *Studio Histórica. Historia Moderna*, IX, 89, 106.
- De Vicente Algueró, F.J. (2022). *Crónica de la Educación en España 1977-2022*. Círculo Rojo.
- Department for Education. (2005). *Higher standards, better schools for all: More choice for parents and pupils* (Vol. 6677). The Stationery Office.
- Díaz Alcaraz, F. & Moratalla Isasi, S. (2008). La segunda enseñanza hasta la dictadura de Primo de Rivera. *Ensayos: Revista de la Facultad de Educación de Albacete*, (23), 255-282.
- Díaz, J., Dópido, A., García, J., García, M., García, S., Garrido, L., . . . Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. (2018). Proyecto «Capacidad Profesional Docente en Extremadura» (CPDEx), una nueva visión de los Centros educativos extremeños.
- Diestro, A. (2011). *La dimensión europea en la educación: Análisis comparado de su desarrollo en perspectiva supranacional* (Tesis doctoral). Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid.
- Egido Gálvez, I. (1994). La evolución de la enseñanza primaria en España: organización de la etapa y programa de estudio. *Tendencias pedagógicas*, (1), 75-86.
- Escolano Benito, A. (1982). Las escuelas normales, siglo y medio de perspectiva histórica. *Revista De Educación*, (269), 55-76.
- España (1971). *Inspección de trabajo: Ley y reglamentos* (Biblioteca de Textos Legales Relaciones laborales). Madrid: Ministerio de Trabajo, Servicio de Publicaciones.
- España Inspección Central de Trabajo. (1979). *1as. Jornadas Técnicas: Cuerpo Nacional de la Inspección de Trabajo, 19 al 22 de junio, 1978*. Madrid: Inspección Central de Trabajo.
- Espuny Tomás, Paz Torres, Pérez Amorós, & Universidad Autónoma de Barcelona Facultad de Derecho. (2008). *Inspección de trabajo 1906-2006* (Homenajes y congresos). Valencia: Tirant lo Blanch.
- Esteban Frades, S. (2019). La supervisión educativa como función principal de la Inspección. Características y propósitos. *Aula (Salamanca, Spain)*, 25, 27.

- Estudio comparado de los modelos de inspección de España, Francia y Reino Unido. *Temas para la Educación*. Julio 2009(3).
<https://www.feandalucia.ccoo.es/docuipdf.aspx?d=5023&s=>
- Eurydice. (1996). *Directores de centros docentes en la Unión Europea*. Bruselas: Eurydice.
- Fabila Echauri, A. M., Minami, H., & Sandoval, M. J. I. (2012). La Escala de Likert en la evaluación docente: acercamiento a sus características y principios metodológicos. *Perspectivas docentes*, (50).
- Farina, A. (2009) *La funzione ispettiva e le nuove tematiche amministrative (autonomia e scuola)*. Ed. Anicia. Roma.
- Fernández Garrido, A. (2019). Funciones y atribuciones de la inspección de educación en Castillo García, M., Mata Silva, V.A., Palacios Pavón, P.J (Eds.). *La Inspección de Educación del siglo XXI* (pp. 111-129). Madrid: Santillana.
- Ferreiro, J.J. (1976). Las funciones liquidadoras de la inspección de los tributos. *Civitas. Revista española de derecho financiero*, 11, 401-436.
- Ferrer, F. (1990). *Educación comparada: Fundamentos teóricos, metodología y modelos*. Barcelona: PPU.
- Ferrer, F. (2002). *La educación comparada actual*. Barcelona: Ariel.
- Frades, S. E. (2010). Los últimos cuarenta años de historia de la Inspección Educativa en España. *Avances en Supervisión Educativa*, 12.
- Franco Álvarez, E. (2015). *Motivación, flow e intención de práctica físico-deportiva en estudiantes de educación física de España y Latinoamérica* (Doctoral dissertation, Ciencias).
- Fuentes Quintana, E., & Comín, F. (1990). *Las reformas tributarias en España: Teoría, historia y propuestas* (1st ed.). Barcelona: Crítica.
- Galicia Mangas, F. J. (2016). *La inspección de educación: Régimen jurídico* (1st ed.) Ministerio de Educación Cultura y Deporte, Subdirección General de Documentación y Publicaciones.
- Galicia Mangas, F. J. (2017). El régimen jurídico de la Inspección de Educación en Derecho comparado. *Educa Nova: colección de artículos técnicos de educación*, (7), 13-32.
- Galicia Mangas, F. J. (2019). La Inspección de Educación en la Unión Europea. *Aula: revista de pedagogía de la Universidad de Salamanca*, 25, 129-146.
- Galván Palomo, F. (2007). Competencias básicas: centro educativo e inspección. *Avances en Supervisión Educativa*, 7. Recuperado de <https://avances.adide.org>
- García Barbarín, E. (1915). *Historia de la Pedagogía Española*. Madrid: Librería de los sucesores de Hernando.
- García García, C. (2007). Los primeros cuerpos inspectores, 1899-1936. *Los inspectores de hacienda en España una mirada histórica* (1st ed., pp. 27-556) Centro de Estudios Financieros/APIFE-APIHA.
- García Garrido, J. L. (1982). *Educación comparada. Fundamento y problemas*. Madrid: Dykinson.
- García Garrido, J. L. (1986). *Fundamentos de educación comparada*. Madrid: Dykinson.
- García Garrido, J. L. (1991). *Fundamentos de educación comparada*. Madrid: Dykinson.

- García Martín, F. (2015). *José E. Lillo Rodelgo (1887-1960): biografía (biografías de Castilla-La Mancha)*. Toledo: Almud Ediciones de Castilla-La Mancha.
- García Matos, R. (2018). El organismo estatal inspección de trabajo y seguridad social. Algo más que un lugar en común. *Foro: Revista De Ciencias Jurídicas Y Sociales*, 21(1), 253.
- Garrido Palacios, M. (2005). Hª de la Educación, una visión hasta lo local. *Contraluz: Revista de la Asociación Cultural Arturo Cerdá y Rico*, (2), 89-146.
- Gil de Zárate, A. (1885). *De la Instrucción pública en España*. Madrid: Imprenta del Colegio de Sordomudos.
- Gómez Aparisi, R. (1967). *Crónica de las bodas de plata de la sexta promoción del Cuerpo de Intendentes al Servicio de la Hacienda Pública*. Madrid: Mutualidad del Cuerpo de Intendentes al Servicio de la Hacienda Pública.
- González Fernández, J.L. (2019). *Estudio sobre aspectos relacionados con la profesión de inspector de educación y el modelo de inspección*. (Tesis doctoral en elaboración). Universidad de La Laguna.
- Gonzalo, L. (2008). En memoria de César Albiñana. *ICADE. Revista de la Facultad de Derecho*, (74), 344-344.
- Gota Losada, A. (1973). *Tratado del Impuesto sobre la renta*. Madrid: Editorial de Derecho Financiero.
- Granero-allegos, A., & Extremera, A. B. (2016). Validación española de la Escala de Predisposición hacia la Educación Física (PEPS) en educación secundaria. *Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación*, (30), 125-131.
- Gutiérrez Maestre, J. A. (1994). Estudio comparado de la función inspectora en educación en la Unión Europea: los casos de Inglaterra, Francia y España.
- Hargreaves, A. y Fullan, M. (2014). *Capital profesional*. Madrid: Morata.
- Hernández Díaz, J. M. (2019). La Inspección Educativa y la cultura escolar en España. Génesis, proceso constituyente y actualización de funciones. *Revista de Pedagogía de la Universidad de Salamanca*, 25, 59-89.
- Hilker, F. (1964). *La pedagogie comparée. Introduction à son histoire, sa théorie et sa pratique*. Paris: Institut Pédagogique National.
- Howe, K., & Eisenhart, M. (1993). Criterios de investigación cualitativa (y cuantitativa): prolegómenos. *Revista de Educación*.
- Hu, L., y Bentler, P. M. (1995). Evaluating model fit. En R. Hoyle (Ed.), *Structural equation modeling: Issues, concepts, and applications*. Newbury Park, CA: Sage.
- Hu, L., y Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. *Structural Equation Modeling*, 6(1), 1-55.
- IBE- UNESCO (2018). *Curriculum Glossary Terminology*. Ginebra: IBE International Bureau of Education (UNESCO).
- Jardón, E. (2022). La inspección francesa. Del trabajo individual al trabajo en equipo. *Supervisión* 21, (64), 4.
- Jiménez Eguizabal, A. (1983). Caracterización general de la función inspectora de primera enseñanza en el siglo XIX. *Historia de la educación: Revista interuniversitaria*.

- Johnson, P. (2007). Educational System and School Democracy in Finland. *Solidarity for National Movements for Educational Welfare*, 131.
- Jover Olmeda, G., & Ruiz Corbella, M. (2013). El código deontológico de la profesión docente: Evolución y posibilidades. *Edetania: Estudios Y Propuestas Socio-Educativas*, (43), 113-131.
- Lacave Rodero, C., Molina Díaz, A. I., Fernández Guerrero, M., & Redondo Duque, M. Á. (2015, July). Análisis de la fiabilidad y validez de un cuestionario docente. In *Actas de las XXI Jornadas de la Enseñanza Universitaria de la Informática* (pp. 136-143). Universitat Oberta La Salle.
- Laukkanen, R. (2013). Es nefasto elegir profesores mediante exámenes. Entrevista, en: José Joaquín Brunner, Información, Análisis y Discusión sobre Educación y Políticas Educativas, <http://www.bbc.com/mundo/noticias-36591625> (26/07/2017).
- Laukkanen, R. (2014). El modelo finlandés para la formación continua del profesorado. *Revista Fuentes: Revista de la Facultad de Ciencias de la Educación.*, (15), 19-42.
- Lehkonen, H. (2009). *¿Qué hace que un director sea un sobreviviente? Percepciones de los directores de escuelas primarias sobre su supervivencia en el trabajo.*
- Les, J. A. H. (2005). Ética de la investigación comparada: una propuesta metodológica. *Estudios sobre el Mensaje Periodístico*, 11, 329-348.
- Lê Thành Khôi (1981). *L'éducation comparée*. París: Armand Colin.
- Llorent, V. (2002). *Educación Comparada*. Sevilla: Universidad de Sevilla.
- Llorent, V. (2013). La educación infantil en Alemania, España, Francia e Inglaterra: estudio comparado.
- López del Castillo, M.T. (1993). La Inspección que he vivido. In Soler, E. (Coord.), *Fundamentos de Supervisión Educativa* (pp. 249-311). Madrid: Ed. La Muralla.
- López del Castillo, M. T. (2003). *Defensoras de la educación de la mujer: las primeras inspectoras escolares de Madrid (1861-1926)*. Madrid: Comunidad de Madrid, Dirección General de Ordenación Académica, 2003.
- López del Castillo, M. T. (2013). *Historia de la Inspección de primera enseñanza en España*. Madrid: Ministerio de Educación.
- Los inspectores de hacienda en España una mirada histórica* (2007). (1st ed.) Centro de Estudios Financieros/APIFE-APIHA.
- Lozano Salinas, J.M. (2019). *El ADN de la Inspección*. Poster presentado en el XX Encuentro Nacional de Inspectores de Educación. Sevilla. USIE.
- Lozano Salinas, J. M. (2021). Semblanza humana y profesional del inspector de educación Eduardo Soler Fiérrez: el poder transformador de la educación (1942-2021). In *Historias de vida de la inspección. Referentes en la historia de la educación española*. (pp. 269-326). Anaya.
- Luengo Horcajo, F., Hernández Ortega, J., Clavijo Ruiz, M. J., & Gómez Alfonso, J. A. (2021). Fortalezas y debilidades de la propuesta curricular LOMLOE: proyecto Atlántida. *Avances en supervisión educativa*.
- Luzuriaga Medina, L. (1916). *Documentos para la historia escolar de España*. Tomo I. Madrid: Junta de Ampliación de Estudios.

- Luzuriaga Medina, L. (1917). *Documentos para la historia escolar de España*. Tomo II. Madrid: Junta de Ampliación de Estudios.
- Maíllo, A. (1959). Historia y problemas de la Inspección de Enseñanza Primaria. *La Enseñanza Religiosa En Los Centros Educativos*, (84), 215-239.
- Maíllo, A. (1967). *La inspección de enseñanza primaria: Historia y funciones*. Madrid: Escuela Española.
- Maíllo, A. (1989). *Historia crítica de la Inspección escolar en España*. Madrid: Impr. Josmar.
- Marín, F. G. Calidad, contexto y desarrollo de la evaluación del desempeño docente en México.
- Manso, J. (2012). *La formación inicial del profesorado de Educación Secundaria análisis y valoración del modelo de la LOE* (Doctoral dissertation, Universidad Autónoma de Madrid).
- Marope, M. (2017). *Reconceptualizing and Repositioning Curriculum in the 21st Century: A Global Paradigm Shift*. Ginebra: IBE International Bureau of Education (UNESCO).
- Marsh, H. W., Hau, K. T., y Wen, Z. (2004). In search of golden rules: Comment on hypothesis-testing approaches to setting cutoff values for fit indexes and dangers in overgeneralizing hu and Bentler's (1999) findings. *Structural Equation Modeling*, 11(3), 320-341.
- Martínez Navarro, A. (1982) Ordenanzas de la Hermandad de San Casiano de 1647. *Revista de ciencias de la educación*, 111, 269-283.
- Matarranz, M., & Valle, J. M. (2018). Educación y supranacionalidad: aproximación a los conceptos básicos. *Journal of Supranational policies of Education*.
- Matarranz, M. (2019). Propuesta metodológica para estudiar la política educativa supranacional: alumbrando el marco axiológico de la Unión Europea. *Revista Española de Educación Comparada*, (34).
- Mayntz, R. (1993). Governing Failure and the problem of governability: Some comments and the problem of governability, en J. Kooiman (ed.). *Modern Governance*. Londres: Sage.
- Mayorga Manrique, A. (1999). La Inspección en el nivel de la Educación Primaria. Proceso histórico. *Revista de Educación*, (320), 11-38.
- Méndez, E. G. (1985). *Italia desde la unificación hasta 1914* (Vol. 9). Ediciones AKAL.
- Messick, S. (1989a). Meaning and values in test validation: The science and ethics of assessment. *Educational researcher*, 18(2), 5-11.
- Messick, S. (1989b). Validity. En R.L. Linn (Ed.), *Educational measurement* (pp- 13-103). New York: American Council on Education.
- Miguel Pérez, V., Vázquez Aguilar, E., Prados Gómez, A., Arias Bejarano, R., Domingo de la Riva, R., Varela Pose, F. J., & Peinado González, R. (2018). La supervisión educativa en Europa: Sistemas educativos y modelos de inspección educativa. *Journal of Supranational Policies of Education*.
- Ministerio de Educación y Ciencia (1985). *Historia de la educación en España. Tomo I: Del despotismo ilustrado a las cortes de Cádiz*. Madrid: Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación y Ciencia

- Ministerio de Educación y Formación Profesional (2021). *Anuario estadístico: Las cifras de la educación en España (Edición 2021). Curso 2018-2019*. Madrid: MEFP.
- Molero Mesa, J., & Jiménez Lucena, I. (2000). Salud y burocracia en España. Los cuerpos de Sanidad Nacional (1855-1951). *Revista Española de Salud Pública*, 74, 45-79.
- Molinari, L. (1994) *La funzione docente dirigente e ispettiva nella scuola di Stato*. Ed. Giufrrè. Milano.
- Molinari, L. (2007) *La funzione ispettiva tecnica nella scuola autonoma*. Ed. Spaggiari. Parma.
- Mollo [IGEN], C. (1999). La inspección general de la educación nacional y la inspección pedagógica regional en el sistema educativo francés. *Revista De Educación*, (320), 61-80.
- Monarca, H. y Fernández González, N. (2016). El papel de la inspección educativa en los procesos de cambio. *Cadernos de Pesquisa*, 46(159), 212-233.
- Montero Alcaide, A. (2020). VEEDORES, VISITADORES, EXAMINADORES, INSPECTORES Antecedentes históricos de la Inspección de Educación. *Cabás*, (23), 17-47.
- Montero Alcaide, A. (2021a). *La Inspección de Educación en España. Hasta aquí hemos llegado (I)*. Madrid: Ministerio de Educación y Formación Profesional y Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, 2021.
- Montero Alcaide, A. (2021b). *La Inspección de Educación en España. Negro sobre blanco (II)*. Madrid: Ministerio de Educación y Formación Profesional y Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, 2021.
- Montero Alcaide, A. (2021c). La Inspección educativa en la LOMLOE. Proyecto, enmiendas y ley. Significación de los cambios. *Avances en Supervisión Educativa*, (35).
- Montero Alcaide, A. (2021d). *Veedores de ciencia y conciencia. Orígenes y constitución de la Inspección de Educación*. Madrid: La Muralla, 2021.
- Montoya Melgar, A. (1981). *La inspección de trabajo y los conflictos laborales*. S.l: S.n.
- Moya, J. (2018). Capacidad profesional de la Inspección de Educación (CPIE). Propuesta investigadora.
- Moya, J. y Luengo, F. (2019). *Capacidad Profesional Docentes, Buscando la Escuela de nuestro tiempo*. Madrid: Anaya.
- Moya, J., Luengo, F., Valle, J., & Manso, J. (2020). Capacidad Profesional Docente (CPD): un modelo de auto-evaluación para centros escolares. *Evaluación, responsabilidad y mejora Educativa*, 57. Madrid: Anele
- Murray R. Spiegel y Larry J. Stephens. (2009). *Estadística*. 4ta edición. México, D.F.: Mc Graw-Hill.
- Myers, N. D., Ahn, S., & Jin, Y. (2011). Sample size and power estimates for a confirmatory factor analytic model in exercise and sport: A Monte Carlo approach. *Research quarterly for exercise and sport*, 82(3), 412-423.
- Namakforoosh, M. N. (2000). *Metodología de la investigación*. Editorial Limusa.
- Naranjo González, M. et Pozo Pérez, M. del. (2019). La visita de inspección. Competencias profesionales y capacidades humanas del inspector de educación en Castillo García, M., Mata Silva, V.A., Palacios Pavón, P.J (Eds.). *La Inspección de Educación del siglo XXI* (pp. 181-196). Madrid: Santillana.

- Navarro, M. L. (2017). La levedad de la inspección educativa. *Educa Nova: colección de artículos técnicos de educación*, (7), 71-76.
- Nievas Soriano, B. J., García Duarte, S., Fernández Alonso, A. M., Bonillo Perales, A., & Parrón Carreño, T. (2020). Validation of a questionnaire developed to evaluate a pediatric ehealth website for parents. *International journal of environmental research and public health*, 17(8), 2671.
- Noreña, A. L., Alcaraz-Moreno, N., Guillermo, J. Y Rebolledo-Malpica, D. (2012). Aplicabilidad de los criterios de rigor y éticos en la investigación cualitativa. *Aquichan*, 12(3), 263-274.
- OCDE/INAP (2010). *Panorama de las Administraciones Públicas*. Madrid: INAP/MAP.
- ONU (2015) *Resolución Asamblea General Naciones Unidas. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*.
- Oraá, C. G. (2000). La inspección educativa en España y la Unión Europea.
- Pan-Montojo, J. (2002). Política y gasto social en la transición, 1975-1982. *Historia de la hacienda en el siglo XX. monografía 2002* (1st ed., pp. 229-252) Ministerio de Hacienda, Instituto de Estudios Fiscales.
- Pan-Montojo, J. (2007a). El asociacionismo y la acción colectiva de los inspectores. *Los inspectores de hacienda en España una mirada histórica* (1st ed., pp. 211-236) Centro de Estudios Financieros/APIFE-APIHA.
- Pan-Montojo, J. (2007b). La organización, la formación y las tareas profesionales de los inspectores, 1977-2007. *Los inspectores de hacienda en España una mirada histórica* (1st ed., pp. 125-150) Centro de Estudios Financieros/APIFE-APIHA.
- Pan-Montojo, J. (2016). El estado según los altos funcionarios de la hacienda española, 1881-1936. *Historia Y Política: Ideas, Procesos Y Movimientos Sociales*, (36), 75-101.
- Paredes Giménez, J. (2019). Los antecedentes históricos al nacimiento de la inspección educativa en 1849. *EDUCA NOVA Nº 9*, 85.
- Pérez Amorós, F. (2008). El intervencionismo estatal y el derecho del trabajo: La inspección de trabajo y seguridad social. *La inspección de trabajo, 1906-2006* (1st ed., pp. 11-38) Tirant lo Blanch.
- Pérez Figueiras, E. M. (2015). Disquisición teórica alrededor de la función supervisora. *REICE. Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*.
- Pérez Jiménez, J. M. & García Ballesteros, P. E. (2022). *La inspección de educación: teoría crítica y práctica comprometida*. Ministerio de Educación y Formación Profesional.
- Prats, J., Raventós, F., Gasòliba, E., Cowen, R., Creemers, B. P., Gauthier, P. L., ... & Standaert, R. (2005). Los sistemas educativos europeos ¿Crisis o transformación? *Colección de estudios sociales*, (18).
- Prieto, G., & Delgado, A. R. (2010). Fiabilidad y validez. *Papeles del psicólogo*, 31(1), 67-74.
- Pujol, J. (1971). Apuntes sobre el origen y desarrollo histórico de la inspección escolar (y ii). *Revista española de Pedagogía*, 49-66.
- Pro, J. (2007). La administración de la hacienda en el siglo XIX y la función inspectora. *Los inspectores de hacienda en España una mirada histórica* (1st ed., pp. 1-26) Centro de Estudios Financieros/APIFE-APIHA.

- Ramírez Aísa, E. (1998). *Génesis y configuración de la Inspección de Educación en la España liberal, 1808-1874*. (Tesis doctoral). UNED, Madrid.
- Ramírez Aísa, E. (2003). *Educación y control en los orígenes de la España liberal* (1st ed.) Universidad Nacional de Educación a Distancia – UNED.
- Ramírez Aísa, E. (2006a). Breve resumen de la historia de la Inspección de Educación. *Avances en Supervisión Educativa*, (3).
- Ramírez Aísa, E. (2006b). Reflexiones en torno al origen e historia de la Inspección de Educación. *Avances en Supervisión Educativa*, (2).
- Ramírez Aísa, E. (2021). *La Inspección de Educación y el artículo 27.8 de la Constitución Española*. Madrid: Ministerio de Educación y Formación Profesional.
- Ramírez Aísa, E. (2022). *La Inspección de Educación desde el estado*. USIE.
- Raskin, D. I. (2020). Historia de la educación pública en el Imperio Ruso en documentos de archivo. 1802-1917. Snfarodnik.
- Раскин, Д. И. (2020). *История народного образования в Российской империи в архивных документах. 1802–1917 гг.* Справочник
- Real Academia Española (Madrid). (1783). *Diccionario de la lengua castellana compuesto por la Real Academia Española, reducido a un tomo para su más fácil uso*. Por D. Joachin Ibarra.
- Remis, J. A. (2009). Pasado y presente del juramento Hipocrático: Análisis de su vigencia. *Revista argentina de radiología*, 73(2), 139-141.
- Reyzábal, M. V. (1993). *La inspección, entre la «obediencia debida» y la responsabilidad crítica*. Fundamentos de supervisión educativa, 95-110.
- Reyzábal, M. V. (2015). *La supervisión educativa: Una profesión compleja, ética e imprescindible*. REICE. Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación.
- Rodríguez Bravo., M. F., Alcalá Ibáñez, M. L., Miguel Pérez, V., Montero Alcaide, A., Camacho Prats, A., Galicia Mangas, F. J., & Tébar Cuesta., F. (2021). Marco para el buen desempeño de la inspección educativa. MBDIE. Retos y desafíos por alcanzar. *Supervisión 21: Revista De Educación E Inspección*, (62).
- Rodríguez Pinilla, H. (1916). La medicina política en España (Recuerdos de mis días de Inspector sanitario). *La Medicina Social Española*, 10, 405.
- Rossiter, J. (2008). Content Validity of Measures of Abstract Constructs in Management and Organizational Research. *British Journal of Management*, 19(4), 380-388.
- Ruberte Isturiz, J., & España Ministerio de Economía y Hacienda. (1983). *Inspección de trabajo, Seguridad Social e Inspección financiera y tributaria*. Madrid: Ministerio de Economía y Hacienda Escuela de Inspección Financiera y Tributaria.
- Ruiz Berrio, J. (1970). *Política escolar de España en el siglo XIX (1808-1833)*. Madrid. CSIC.
- Ruiz Berrio, J. (2004). El oficio de maestro en tiempos de Cervantes. *Revista de Educación*, número extraordinario, 11-26.
- Sanromán Aranda, R., González Jaimes, I., & Villa Caballero, M. S. (2015). Los principios éticos y las obligaciones civiles. *Boletín mexicano de derecho comparado*, 48(142), 313-338.
- Santamaría, F. R. (1983). El fundamento de la metodología comparativa en educación. *Educación*, 61-75.

- Sarasúa Ortega, A. (2019). La Inspección de Educación, un futuro incierto. *Revista de Pedagogía de la Universidad de Salamanca*, 25, 91-104.
- Saraz, Alfredo. (1922). *Vicende Storiche ed attuale ordinamento della Direzione ed Ispezione Scolastica*. Ed. Giovanni Battista Paravia e C. Torino.
- Serrano de Haro, A. (1970). *Deontología del inspector de enseñanza primaria*. Madrid: Paraninfo.
- Sevilla Merino, D. (2007). La Ley Moyano y el desarrollo de la educación en España. *Hespérides: Anuario de investigaciones*, 15, 625-7.
- Simons, H. (2011). *El estudio de caso: Teoría y práctica*. Madrid: Morata.
- Sims, M. (2022). Organización: Oficina para estándares en educación OFSED). *Supervisión 21: Revista de Educación e Inspección*, (65).
- Soler Fierrez, E. (1991). *La visita de inspección: Encuentro con la realidad educativa* (1st ed.) La Muralla.
- Soler Fierrez, E. (1992a). *Fuentes documentales para el estudio histórico-comparado de la inspección educativa en España y en Iberoamérica*.
- Soler Fierrez, E. (1992b). *La supervisión escolar como ciencia de la educación*. Madrid: La Muralla.
- Soler Fierrez, E. (1993). *Fundamentos de supervisión Educativa*. Madrid: La Muralla, S.A.
- Soler Fierrez, E. (1994). *La inspección en las distintas concepciones y sistemas pedagógicos: Características y funciones*.
- Soler Fierrez, E. (1995). Introducción. Situación de los estudios históricos sobre la Inspección educativa. In Soler Fierrez, E. (Coord.), *Estudios históricos sobre la Inspección Educativa*. Madrid: Escuela Española
- Soler Fierrez, E. (2002). *La visita de inspección: Encuentro con la realidad educativa* (1st ed.) La Muralla.
- Soler Fierrez, E. (2013). *La visita de inspección: Encuentro con la realidad educativa* (3rd ed.) La Muralla.
- Soler Fierrez, E. (2015). Decálogo de las Competencias Profesionales del Inspector de Educación. *REICE: Revista Electrónica Iberoamericana Sobre Calidad, Eficacia Y Cambio En Educación*, 13(4), 149-160.
- Soler Fierrez, E. (2017). *¿Qué es la educación?* (Aula abierta. Serie historia de la educación). Madrid: La Muralla.
- Soler Fierrez, E. (2019). Inspección: las lecciones de su historia. Fuentes para su investigación y estudio. *Educa Nova: colección de artículos técnicos de educación*, 9, 15-57.
- Taylor, W. (1977). Educación y democratización. *Revista de educación*.
- Tébar Cuesta, F. (2022). *La visita de Inspección*. Madrid: Viceconsejería de Organización Educativa.
- Terigi, F. (2010). Los sistemas nacionales de inspección y/o supervisión escolar. *Revisión de literatura y análisis de casos*. Buenos Aires: IIPE UNESCO.
- Textos constitucionales que aluden a la educación (1977). *Revista De Educación*, (253), 198-206.
- Tiana Ferrer, A. (2016). ¿Cómo piensa un académico que se hace una ley y cómo se hace una ley realmente?: reflexiones a partir de la intrahistoria de la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006. *Historia y memoria de la educación (HMe)*, (3), 71-97.

- Tiana Ferrer, A. (2018). Leyes y reformas educativas: consideraciones sobre sus actores. *Conciencia social: Segunda Época*, (1), 89-102.
- Tilga, H., Hein, V., & Koka, A. (2017). Measuring the perception of the teachers' autonomy-supportive behavior in physical education: Development and initial validation of a multi-dimensional instrument. *Measurement in Physical Education and Exercise Science*, 21(4), 244-255.
- Toboso, P. (2007). La fragmentación corporativa de la inspección fiscal en el franquismo. *Los inspectores de hacienda en España una mirada histórica* (1st ed., pp. 27-556) Centro de Estudios Financieros/APIFE-APIHA.
- Tomas, M. J. E. (2006). Los orígenes de la Inspección de Trabajo en España (1906-2006). *IUSLabor. Revista d'anàlisi de Dret del Treball*, (1).
- Torres Vizcaya, M. (2019). *La Inspección Educativa. Una mirada desde la experiencia*. Editorial: La Muralla.
- Torres Vizcaya, M. (2021). *Deontología de la inspección educativa. Vademécum de normas de proximidad*. Editorial: La Muralla.
- Vega Gil, L. (2005). Los sistemas educativos europeos y la formación de profesores: Los casos de Francia, Reino Unido, España y Finlandia. *Revista de educación*.
- Vega Ruiz, M. L. (2009). *La inspección de trabajo en Europa: Retos y logros en algunos países seleccionados aún en tiempos de crisis*. OIT.
- Vicino Paganoni, M. (1929). "Statuta Saone del 1404-1405". *Giornale Storico e Letterario della Liguria*. Vol. V. G. B. Marsano. Génova.
- Vitoria, I. (2013). Competencias autonómicas de ejecución e inspección de trabajo: asimetrías territoriales e igualdad de derechos. *Revista Española De Derecho Constitucional*, 33(97), 115-148.
- Vuohijoki, T. (2006). Pitää vain selviytyä. Tutkimus rehtorin työstä ja työssä jaksamisesta sukupuolen ya virka-aseman suhteen tarkasteltuna. Turku: Turun yliopisto. Turun yliopiston julkaisuja C 250.
- Weinert, F.W. (1999). *Concepts of Competence. Definition and Selection of Competencies. Theoretical and Conceptual Foundations* (DeSeCo). SFSO, NCES, OECD (Documento interno).
- Weir, D. (2003). Her Majesty's Inspectorate of Education (HMIE). *Scottish education second edition: Post devolution*, 151-58.

Referencias normativas nacionales y extranjeras

- Normativa de carácter general y educativa española. Organizada de forma jerárquica y cronológica.

Constitución española de 1812

https://www.congreso.es/docu/constituciones/1812/ce1812_cd.pdf

Estatuto Real de 1834

https://www.congreso.es/docu/constituciones/1834/estatuto_real.pdf

Constitución española de 1837

https://www.congreso.es/docu/constituciones/1837/ce37_cd.pdf

Constitución española de 1845

https://www.congreso.es/docu/constituciones/1845/1845_cd.pdf

Constitución española de 1869

https://www.congreso.es/docu/constituciones/1869/1869_cd.pdf

Proyecto de constitución federal española de 1873

https://www.congreso.es/docu/constituciones/1869/cons1873_cd.pdf

Constitución española de 1876

https://www.congreso.es/docu/constituciones/1876/1876_cd.pdf

Constitución española de 1931

https://www.congreso.es/docu/constituciones/1931/1931_cd.pdf

Constitución española de 1978

https://www.congreso.es/docu/constituciones/1978/1978_cd.pdf

Texto consolidado: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229>

Reglamento general de instrucción pública decretado por las Cortes en 29 de junio de 1821. (1821). S.l.: [s.n.].

<https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/51929/C-001-055%20%2850%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Real decreto de 4 de agosto de 1836 por el que se aprueba el Plan General de Instrucción Pública. (Gaceta de Madrid. Suplemento de 9 de agosto de 1836, pp. 1-7).

<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1836/600/C00001-00007.pdf>

Ley de 21 de Julio de 1838 que autoriza al Gobierno para plantear provisionalmente el plan de Instrucción primaria (Gaceta de Madrid, núm. 1381, de 28 de agosto de 1838).

<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1838/1381/A00001-00001.pdf>

Ley de bases autorizando para formar y promulgar una Ley Instrucción pública. 14 de julio de 1857 (Gaceta de Madrid, núm. 1660, de 22 de julio).

<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1857/1660/A00001-00001.pdf>

- Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857. (Gaceta de Madrid, núm. 1710, de 10 de septiembre).
<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1857/1710/A00001-00003.pdf>
- Ley de instrucción primaria de 1868 (Gaceta de Madrid, año CCVII, núm. 156, de 4 de junio).
<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1868/156/A00001-00004.pdf>
- Real decreto reformando los estudios de segunda enseñanza y las enseñanzas técnicas del Magisterio, Agricultura, Industria, Comercio, Bellas Artes y Artes industriales. (Gaceta de Madrid, núm. 231, de 19 de agosto de 1901).
<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1901/231/A00790-00795.pdf>
- Real Decreto autorizando al Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes para que en los presupuestos generales de su departamento, á partir del que se forme para el año 1902, incluya las partidas necesarias, conforme á las disposiciones de este decreto, para el pago de las atenciones de personal y material de las Escuelas públicas de primera enseñanza. (Gaceta de Madrid, núm. 303, de 30 de octubre de 1901)
<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1901/303/A00497-00499.pdf>
- Ley de 17 de julio de 1945 sobre Educación Primaria (BOE, núm. 199, de 18 de julio de 1945, pp. 385-416).
<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1945/199/A00385-00416.pdf>
- Ley de 26 de febrero de 1953 sobre Ordenación de la Enseñanza Media (BOE, núm. 58, de 27 de febrero, pp. 1119-1130).
<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1953/058/A01119-01130.pdf>
- Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa (BOE, núm. 58, de 6 de agosto, pp. 1119-1130).
<https://www.boe.es/boe/dias/1970/08/06/pdfs/A12525-12546.pdf>
- Ley Orgánica 5/1980, de 19 de junio, por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares (BOE de 27 de junio).
<https://www.boe.es/boe/dias/1980/06/27/pdfs/A14633-14636.pdf>
- Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. (BOE, núm. 154, de 4 de julio, pp. 14633-14636).
<https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-12978-consolidado.pdf>
- Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. (BOE, núm. 238, de 4 de octubre, pp. 28927-28942).
<https://www.boe.es/boe/dias/1990/10/04/pdfs/A28927-28942.pdf>
- Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes (BOE, núm. 278, de 21 de noviembre, pp. 33651-33665).
<https://www.boe.es/boe/dias/1995/11/21/pdfs/A33651-33665.pdf>
- Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (BOE, núm. 307, de 24 de diciembre, pp. 45188-45220).
<https://www.boe.es/boe/dias/2002/12/24/pdfs/A45188-45220.pdf>
- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. (BOE, núm. 313, de 29 de diciembre de 2004).
Texto consolidado:
<https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf>

Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE, núm. 106, de 4 de mayo, pp. 17158-17207).

Texto original: <https://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf>.

Texto consolidado:

<https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf>

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE, núm. 89, de 13 de abril).

Texto consolidado:

<https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-7788-consolidado.pdf>

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE, núm. 261, de 31 de octubre).

Texto consolidado:

<https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11719-consolidado.pdf>

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE, núm. 295, de 10 de diciembre, pp. 97858-97921).

<https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf>

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (BOE, núm. 134, de 5 de junio, pp. 68657-68730).

<https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/05/pdfs/BOE-A-2021-9347.pdf>

Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual (BOE, núm. 215, de 7 de septiembre, pp. 124199-124269).

<https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/07/pdfs/BOE-A-2022-14630.pdf>

Real Decreto creando un cuerpo especial de fuerza armada de infantería y caballería bajo la dependencia del Ministerio de la Gobernación de la Península, y con la denominación de Guardias civiles (Gaceta de Madrid, núm. 3486 de 31 de marzo de 1844, pp. 1-2).

<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1844/3486/A00001-00002.pdf>

Real Decreto de 30 de marzo de 1849 Reformando la organización á las escuelas normales de instrucción primaria, y la necesidad de crear Inspectores para este ramo de enseñanza (Gaceta de Madrid, núm. 5315, de 02 de abril, pp. 1-2).

<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1849/5315/A00001-00002.pdf>

Reglamento para los Inspectores de Instrucción primaria del reino de 20 de mayo de 1849 (Gaceta de Madrid de 25 de mayo, pp. 1-2).

<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1849/5368/A00001-00002.pdf>

Real Decreto de Organización de la Inspección de Primera Enseñanza de 5 de mayo de 1913 (Gaceta de Madrid, núm. 5368, de 13 de mayo, pp. 1-2).

<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1913/133/A00446-00451.pdf>

Real Orden dictando reglas complementarias y explicativas del Real decreto de 5 de Mayo último, reorganizando la Inspección de Primera enseñanza. (Gaceta de Madrid, núm. 178, de 27 de junio de 1913, pp. 892-893).

<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1913/178/A00892-00893.pdf>

Decreto de organización de la Inspección de Educación de 2 de diciembre de 1932 (Gaceta de Madrid, núm. 342, de 7 diciembre de 1932, pp. 1684-1689).

<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1932/342/A01684-01689.pdf>

Decreto 2915/1967, de 23 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento del Cuerpo de Inspección Profesional de Enseñanza Primaria del Estado (BOE, núm. 295, de 11 de diciembre, pp. 17110-17116).

<https://www.boe.es/boe/dias/1967/12/11/pdfs/A17110-17116.pdf>

Decreto 2832/1972, de 15 de septiembre, sobre organización y funciones de la Inspección General de Servicios del Ministerio de Educación y Ciencia (BOE, núm. 250, de 18 de octubre, pp. 18503-18504).

<https://www.boe.es/boe/dias/1972/10/18/pdfs/A18503-18504.pdf>

Decreto 664/1973, de 22 de marzo, sobre funciones del Servicio de Inspección Técnica de Educación (BOE, núm. 86, de 10 de abril, pp. 7130-7132).

<https://www.boe.es/boe/dias/1973/04/10/pdfs/A07130-07132.pdf>

Real Decreto 480/1981, de 6 de marzo, sobre el funcionamiento en el País Vasco y Cataluña de la alta inspección del Estado en materia de enseñanza no universitaria. (BOE, núm. 69, de 21 de marzo, pp. 6155-6156).

<https://www.boe.es/eli/es/rd/1981/03/06/480/dof/spa/pdf>

Real Decreto 1982/1983, de 23 de mayo, sobre funcionamiento en las Comunidades Autónomas de la Alta Inspección del Estado en materia de enseñanza no universitaria (BOE, núm. 175, de 23 de julio de 1983, pp. 20582-20583).

<https://www.boe.es/boe/dias/1983/07/23/pdfs/A20582-20583.pdf>

Real Decreto 1524/1989, de 15 de diciembre por el que se regulan las funciones y la organización del Servicio de Inspección Técnica de Educación (BOE, núm. 302, de 18 de diciembre, pp. 39167-39169).

<https://www.boe.es/boe/dias/1989/12/18/pdfs/A39167-39169.pdf>

Orden de 27 de septiembre de 1990 por la que se dictan normas de desarrollo del Real Decreto 1524/1989 (BOE, núm. 235, de 1 de octubre, pp. 28429-28431).

<https://www.boe.es/boe/dias/1990/10/01/pdfs/A28429-28431.pdf>

Real Decreto 2193/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas básicas para el acceso y la provisión de puestos de trabajo en el Cuerpo de Inspectores de Educación y la integración en el mismo de los actuales Inspectores (BOE, núm. 312, de 30 de diciembre de 1995, pp. 37635-37640).

<https://www.boe.es/boe/dias/1995/12/30/pdfs/A37635-37640.pdf>

Normativa consolidada en:

<https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-27975-consolidado.pdf>

Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria (BOE, núm. 44, de 20 de febrero, pp. 6061-6074).

<https://www.boe.es/boe/dias/1996/02/20/pdfs/A06061-06074.pdf>

Orden de 29 de febrero de 1996 por la que se regula la organización y funcionamiento de la Inspección de Educación (BOE, núm. 54, de 2 de marzo, pp. 8421-8427).

<https://www.boe.es/boe/dias/1996/03/02/pdfs/A08421-08427.pdf>

Decreto 27/1997, de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan las Cartas de Servicios y los premios anuales a la excelencia y calidad del servicio público en la Comunidad de Madrid (BOCM, núm. 62, de 14 de marzo, pp. 4-6).
https://www.bocm.es/boletin/CM_Boletin_BOCM/1997/03/14/06200.pdf

Normativa consolidada en:

http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=127

Decreto 44/1998, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas complementarias de regulación de las Cartas de Servicios (BOCM, núm. 73, de 27 de marzo, pp. 4-7).
https://www.bocm.es/boletin/CM_Boletin_BOCM/1998/03/27/07300.pdf

Real Decreto 926/1999, de 28 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de enseñanza no universitaria (BOE, núm. 149, de 23 de junio, pp. 23969-23972).
<https://www.boe.es/boe/dias/1999/06/23/pdfs/A23969-23972.pdf>

Relaciones anexas del Real Decreto 926/1999, de 28 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de enseñanza no universitaria (BOE, núm. 149, de 23 de junio, pp. 3-989).
<https://www.boe.es/boe/dias/1999/06/23/pdfs/C00001-00989.pdf>

Real Decreto 1448/2000, de 28 de julio, por el que se crean las áreas funcionales de Alta Inspección de Educación integradas en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia y La Rioja (BOE, núm. 186, de 4 de agosto, pp. 27989-27990).
<https://www.boe.es/boe/dias/2000/08/04/pdfs/A27989-27990.pdf>

Decreto 85/2002, de 23 de mayo, por el que se regulan los sistemas de evaluación de la calidad de los servicios públicos y se aprueban los Criterios de Calidad de la Actuación Administrativa en la Comunidad de Madrid (BOCM, núm. 132, de 5 de junio, pp. 3-8).
https://www.bocm.es/boletin/CM_Boletin_BOCM/2002/06/05/13200.PDF

Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, por el que se establecía el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (BOE, núm. 154, de 28 de junio de 2003, pp. 25057-25060).
<https://www.boe.es/boe/dias/2003/06/28/pdfs/A25057-25060.pdf>

Real Decreto 1538/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen las especialidades básicas de inspección educativa (BOE núm. 295, de 10 de diciembre de 2003, pp. 43813-43816).
<https://www.boe.es/boe/dias/2003/12/10/pdfs/A43813-43816.pdf>

Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo, posponiendo su aplicación hasta el curso 2006/2007 y dando el espacio de tiempo suficiente para que fuera promulgada la Ley Orgánica 2/2006, de 2 de mayo, (BOE, núm. 130, de 29 de mayo de 2004, pp. 19924-19925).
<https://www.boe.es/boe/dias/2004/05/29/pdfs/A19924-19925.pdf>

Resolución de 20 de abril de 2007, de la Viceconsejería de Educación, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento de la Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid (BOCM, núm. 116, de 17 de mayo, pp. 25-28).
https://www.bocm.es/boletin/CM_Boletin_BOCM/2007/05/17/11600.pdf

- Resolución de 2 de junio de 2011, de la Secretaría Autonómica de Educación, por la que se establece la Carta de Buenas Prácticas de la Inspección de Educación en la Comunitat Valenciana. [2011/7562]. (DOGV, núm. 6556, de 1 de julio, pp. 27015-27018).
https://dogv.gva.es/datos/2011/07/01/pdf/2011_7562.pdf
- Resolución de 31 de julio de 2012, de la Viceconsejería de Organización Educativa, por la que se modifica la Resolución de 20 de abril de 2007, de la Viceconsejería de Educación, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento de la Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid (BOCM, núm. 100, de 31 de agosto, p. 34).
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/08/21/BOCM-20120821-6.PDF
- Decreto 133/2014, de 27 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el procedimiento de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación en el ámbito de la Comunidad de Madrid (BOCM, núm. 283, de 28 de noviembre, pp. 25-31).
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/11/28/BOCM-20141128-4.PDF
- Decreto 61/2019, de 9 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la organización, estructura y funcionamiento de la Inspección Educativa en la Comunidad de Madrid (BOCM, núm. 166, de 15 de julio, pp. 9-15).
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/07/15/BOCM-20190715-1.PDF
- Decreto 288/2019, de 12 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Juventud (BOCM núm. 271, de 14 de noviembre, pp. 25-37).
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/11/14/BOCM-20191114-2.PDF
- Orden 732/2021, de 24 de marzo, de la Consejería de Educación y Juventud, por la que se desarrolla el Decreto 61/2019, de 9 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la organización, estructura y funcionamiento de la Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid (BOCM, núm. 82, de 7 de abril, pp. 90-113).
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/07/BOCM-20210407-20.PDF
- Decreto 88/2021, de 30 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la estructura orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid (BOCM, núm. 155, de 1 de julio, pp. 13-22).
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/01/BOCM-20210701-1.PDF
- Resolución de 17 de agosto de 2021, de la Viceconsejería de Organización Educativa, por la que se aprueba el Plan General Plurianual de Actuación de la Inspección Educativa (BOCM. núm. 203, de 26 de agosto, pp. 16-22).
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/08/26/BOCM-20210826-4.PDF
- Resolución de 30 de agosto de 2021, de la Viceconsejería de Organización Educativa, por la que se aprueba el Plan Anual de Actuación de la Inspección Educativa para el curso 2021-2022 (BOCM, núm. 213, de 7 de septiembre, pp. 74-87).
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/09/07/BOCM-20210907-14.PDF
- Decreto 236/2021, de 17 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía (BOCM, núm. 275, de 18 de noviembre, pp. 8-24).
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/11/18/BOCM-20211118-1.PDF

Decreto 38/2022, de 15 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se crea la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades Madrid (BOCM, núm. 142, de 16 de junio, pp. 15-16).

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/06/16/BOCM-20220616-1.PDF

Decreto 60/2022, de 13 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se crea el Instituto Superior Madrileño de Innovación Educativa y se establece el régimen jurídico y la estructura de la red de formación permanente del profesorado de la Comunidad de Madrid (BOCM, núm. 167, de 15 de julio, pp. 25-34).

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/15/BOCM-20220715-4.PDF

Resolución de 10 de agosto de 2022, de la Viceconsejería de Organización Educativa, por la que se aprueba el Plan Anual de Actuación de la Inspección Educativa para el curso 2022-2023 (BOCM, núm. 202, de 25 de agosto, pp. 15-33).

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/08/25/BOCM-20220825-4.PDF

- Normativa francesa organizada de forma cronológica.

Légifrance.

<https://www.legifrance.gouv.fr/>

Constitución Francesa de 1791.

<http://www.ub.edu/ciudadania/hipertexto/evolucion/textos/cf1791.htm#DP>

Constitución Francesa de 4 de octubre de 1958.

https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/lng/constitution-espagnol_juillet2008.pdf

Code de l'éducation.

<https://codes.droit.org/PDF/Code%20de%20l'%C3%A9ducation.pdf>

Décret n° 2019-1001 du 27 septembre 2019 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, JORF n°0227 du 29 septembre 2019.

<https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039146771/>

Le rapport d'activité 2020-2021 de l'IGÉSR

<https://www.education.gouv.fr/media/113471/download>

Décret n° 2021-7 du 6 janvier 2021 relatif à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.

<https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/6/MENI1936581D/jo/texte>

Décret n° 2021-334 du 26 mars 2021 portant suppression des limites au nombre de présentations aux concours et examens de la fonction publique civile et de la magistrature.

<https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/26/TFPF2105080D/jo/texte>

Décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021 adaptant divers statuts particuliers de corps de la fonction publique de l'Etat aux évolutions législatives et réglementaires relatives aux compétences des commissions administratives paritaires

<https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/10/26/TFPF2124811D/jo/texte>

Décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services
<https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/9/TFPF2139304D/jo/texte>

- Normativa italiana organizzata de forma cronológica.

Gazzetta Ufficiale. Boletín Oficial de la República Italiana, (GU o GURI).
<https://www.gazzettaufficiale.it>

Constitución de la República Italiana, promulgada el 27 de diciembre de 1947.
<https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf>

Texto traducido: <http://www.ces.es/TRESMED/docum/ita-cttn-esp.pdf>

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (s.o. G.U. n°. 115 del 19/5/1994)
<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1994/05/19/115/so/79/sg/pdf>

Decreto del presidente della repubblica. 6 novembre 2000, n. 347. Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione
<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2000/11/27/277/sg/pdf>

Decreto del presidente della repubblica. 11 agosto 2003, n. 319. Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2003/11/20/270/so/177/sg/pdf>

Decreto del presidente della repubblica. 3 giugno 2011, n. 132. Regolamento recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009, n. 17, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.».
<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2011/08/08/183/sg/pdf>

- Normativa inglesa organizada de forma cronológica.

The official home off UK legislation.
<https://www.legislation.gov.uk/> con acceso el 14 de mayo de 2022.

Education act 1944.
<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/7-8/31/contents/enacted>

Children Act 1989.
<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/41/contents>

Education act 2005.
<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/18/contents>

Childcare Act 2006.
<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/21/contents>

Education and Inspections Act 2006.
<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/40/contents>

Education and Skills Act 2008.

<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/25/part/4>

The Education (Independent School Standards) Regulations 2014.

<https://www.legislation.gov.uk/uksi/2014/3283/contents/made>

- Normativa finlandesa organizada de forma cronológica.

Finlex

<https://www.finlex.fi/fi/>

<https://www.finlex.fi/en/>

Constitución Finlandesa, sancionada en Helsinki el 11 de junio de 1999

<https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#a731-1999>

Texto traducido: <https://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1999/es19990731.pdf>

Peruskoululaki

Ley de Escuelas Primarias

<https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1983/19830476>

Perusopetuslaki. 21.8.1998/628.

Ley de Educación Básica de 1998

<https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/1998/19980628>

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista

Reglamento sobre requisitos de cualificación del profesorado de 12 de diciembre de 1998.

<https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980986>

Laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta

Ley del Centro Nacional de Evaluación Educativa de 2013.

<https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131295>

Varhaiskasvatuslaki. 13.7.2018/540.

Ley de Educación de la Primera Infancia de 2018.

<https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540>

Lukiolaki. 714/2018

Ley de Derecho a la escuela secundaria de 2018.

<https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180714>

Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksesta

Decreto sobre educación secundaria superior de 2018.

<https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180810>

Oppivelvollisuuslaki

Ley de Educación Obligatoria -1214/2020.

<https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20201214>

- Normativa relativa a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Organizada de forma cronológica.

Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento para el servicio de inspección de trabajo (Gaceta de Madrid, núm. 63, de 4 de marzo de 1906, pp. 868-870).

<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1906/063/A00868-00870.pdf>

Ley de 8 de agosto de 1939 modificando la organización de la Administración Central del Estado establecida por las de 30 de enero y 29 de diciembre de 1938 (BOE 9 de agosto de 1939, pp. 4326-4327).

<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1939/221/A04326-04327.pdf>

Ley de 15 de diciembre de 1939 que organiza el Cuerpo Nacional de Inspección del Trabajo (BOE de 29 de diciembre de 1939, pp. 7344-7347).

<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1939/363/A07344-07347.pdf>

Ley 39/1962, de 21 de julio, sobre ordenación de la Inspección de Trabajo (BOE, núm. 175, de 23 de julio, pp. 10272-10275).

<https://www.boe.es/boe/dias/1962/07/23/pdfs/A10272-10275.pdf>

La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública (BOE, núm. 185, de 3 de agosto, pp. 22629-22650).

<https://www.boe.es/boe/dias/1984/08/03/pdfs/A22629-22650.pdf>

Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (BOE, núm. 274, de 15 de noviembre, pp. 33539-33548).

<https://www.boe.es/boe/dias/1997/11/15/pdfs/A33539-33548.pdf>

La Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (BOE, núm. 174, de 22 de julio).

Texto consolidado:

<https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-8168-consolidado.pdf>

El Real Decreto 192/2018, de 6 de abril, por el que se aprueban los estatutos del Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social (BOE, núm. 85, de 7 de abril).

Texto consolidado:

<https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-4753-consolidado.pdf>

- Normativa relativa a la Inspección de Sanidad. Organizada de forma cronológica.

Ley sobre Sanidad (Gaceta de Madrid, núm. 1068, de 07 de diciembre de 1855, pp. 1-2).

<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1855/1068/A00001-00002.pdf>

Real decreto dictando varias disposiciones para el cumplimiento de la ley de Sanidad vigente (Gaceta de Madrid, núm. 116, de 26 de abril de 1867).

<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1867/116/A00002-00002.pdf>

Real Orden disponiendo que el Centro provisional de vacunación quede bajo la inspección y dirección inmediata de la Real Academia de Medicina (Gaceta de Madrid, núm. 111, de 21 de abril de 1875, p. 200).

<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1875/111/A00200-00200.pdf>

Real Decreto reorganizando el Cuerpo de Sanidad marítima (Gaceta de Madrid, núm. 321, de 17 de noviembre de 1886, pp. 494-496).

<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1886/321/A00494-00496.pdf>

- Reglamento orgánico provisional de la sanidad marítima (Gaceta de Madrid, núm. 176, de 25 de junio de 1887, pp. 787-815).
<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1887/176/R00787-00815.pdf>
- Real Orden creando Inspecciones de Sanidad con las facultades que se detallan, encaminadas á evitar los efectos de las epidemias coleriformes (Gaceta de Madrid, núm. 243, de 30 de agosto de 1892, pp. 797-798).
<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1892/243/A00797-00798.pdf>
- Real decreto aprobando con carácter provisional la Instrucción general de Sanidad (Gaceta de Madrid, núm. 196, de 15 de julio de 1903, pp. 1491-1500).
<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1903/196/A01491-01500.pdf>
- Real Orden relativa á oposición de 48 plazas de Inspectores provinciales y disponiendo se publiquen en la Gaceta el adjunto reglamento y el programa para dichas oposiciones (Gaceta de Madrid, núm. 187, de 5 de julio de 1904, pp. 48-50).
<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1904/187/A00048-00050.pdf>
- Inspección general de Sanidad interior.- Convocando á los opositores á las plazas de Inspectores provinciales de Sanidad (Gaceta de Madrid, núm. 292, de 20 de octubre de 1904, pp. 251-252).
<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1904/292/A00251-00252.pdf>
- Real Orden convocando á oposiciones para proveer 11 plazas de Inspectores provinciales de Sanidad, con arreglo á los programas que se insertan (Gaceta de Madrid, núm. 121, de 01 de mayo de 1909, pp. 1072-1077).
<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1909/121/A01072-01077.pdf>
- Real Decreto autorizando al Ministro de este Departamento para que presente á las Cortes un proyecto de ley de bases para la organización de los servicios de Sanidad pública del Reino (Gaceta de Madrid, núm. 129, de 9 de mayo de 1911, pp. 370-377).
<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1911/129/A00370-00377.pdf>
- Ley de bases acerca de la condición de los funcionarios de la Administración civil del Estado (Gaceta de Madrid, núm. 205, de 24 de julio de 1918, pp. 222-225).
<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1918/205/A00222-00225.pdf>
- Ley referente a servicios sanitarios (Gaceta de Madrid, núm. 196, de 15 de julio de 1934, pp. 538-543).
<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1934/196/A00538-00543.pdf>
- Ley de 14 de diciembre de 1942, por la que se crea el seguro obligatorio de Enfermedad (Gaceta de Madrid de 27 de diciembre, pp.10592-10597).
<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1942/361/A10592-10597.pdf>
- Decreto de 11 de noviembre de 1943 por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley del Seguro de Enfermedad (Gaceta de Madrid, núm. 332, de 28 de noviembre, pp. 11427-11436).
<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1943/332/A11427-11436.pdf>
- Ley de 25 de noviembre de 1944, de Bases de Sanidad Nacional (BOE, núm. 331, de 26 de noviembre de 1944, pp. 8908-8936).
<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1944/331/A08908-08936.pdf>

- Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre, por el que se dictan normas sobre prestaciones de asistencia sanitaria y ordenación de los servicios médicos en el Régimen General de la Seguridad Social (BOE, núm. 284, de 28 de noviembre de 1967, pp. 16425-16430).
<https://www.boe.es/boe/dias/1967/11/28/pdfs/A16425-16430.pdf>
- Decreto 2605/1974, de 30 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE, núm. 173, de 20 de julio, pp. 15081-15097).
<https://www.boe.es/boe/dias/1974/07/20/pdfs/A15081-15097.pdf>
Texto con solidado:
<https://www.boe.es/buscar/pdf/1974/BOE-A-1974-1165-consolidado.pdf>
- Orden de 28 de abril de 1978 por la que se aprueba el Estatuto de Personal del Instituto Nacional de Previsión (BOE, núm. 129, de 31 de mayo, pp. 12541-12558).
<https://www.boe.es/boe/dias/1978/05/31/pdfs/A12541-12558.pdf>
- Orden de 26 de marzo de 1980 por la que se modifican los dígitos de las tasas que se indican, como consecuencia de cambio de competencias del Ministerio de Trabajo al de Sanidad y Seguridad Social (BOE, núm. 106, de 2 de mayo de 1980, pp. 9494-9495).
Texto original: <https://www.boe.es/boe/dias/1980/05/02/pdfs/A09494-09495.pdf>
- Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (BOE, núm. 102, de 29 de abril).
Texto consolidado:
<https://www.boe.es/buscar/pdf/1986/BOE-A-1986-10499-consolidado.pdf>
- Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social (BOE, núm. 313, de 31 de diciembre, pp. 39457-39504).
<https://www.boe.es/boe/dias/1994/12/31/pdfs/A39457-39504.pdf>
- Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, por el que se desarrolla, en materia de incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social, la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social (BOE, núm. 198, de 19 de agosto).
Texto consolidado:
<https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-19848-consolidado.pdf>
- Circular 3/1999 del INSALUD.
<https://ingesa.sanidad.gob.es/en/bibliotecaPublicaciones/publicaciones/internet/docs/carteraInspecc.pdf>
- Real Decreto 1479/2001, de 27 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad de Madrid de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud (BOE, núm. 311, de 28 de diciembre, pp. 50033-50038).
<https://www.boe.es/boe/dias/2001/12/28/pdfs/A50033-50038.pdf> con acceso el 2 de septiembre de 2021.
- Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica (BOE, núm. 274, de 15 de noviembre).
Texto consolidado:
<https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-22188-consolidado.pdf>
- Ley 13/2002, de 20 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM, núm. 304, de 23 de diciembre, pp. 304-305).
http://gestion.madrid.org/rlma_web/html/web/Descarga.icm?idLegislacion=737&idDocumento=1

Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (BOE, núm. 128, de 29 de mayo).

Texto consolidado:

<https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-10715-consolidado.pdf>

Orden 581/2004, de 9 de junio, del Consejero de Sanidad y Consumo, por la que se fijan los criterios de elaboración y seguimiento del Plan Integral de Inspección de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid y se crea la Comisión de Coordinación de las Inspecciones (BOCM, núm. 146, de 21 de junio, pp. 4-6).

https://www.bocm.es/boletin/CM_Boletin_BOCM/2004/06/21/14600.PDF

Dictamen 192/10 de este Consejo, el carácter facultativo del informe de la Inspección Sanitaria encuentra, asimismo, su respaldo en el apartado IX.9.1 de la Circular 3/1999, de 30 de noviembre, de la Presidencia Ejecutiva del INSALUD, sobre Organización y Funciones de la Inspección Sanitaria -cuya aplicación opera en el ámbito autonómico con carácter supletorio-, en el que se afirma que la Inspección Médica «elaborará los informes que le sean solicitados, en relación con los expedientes de Responsabilidad Patrimonial».

<https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/dictamenes/2019/dictamen192-10.pdf>

Dictamen de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, emitido por unanimidad, en su sesión de 13 de julio de 2011, sobre consulta formulada por el Consejero de Sanidad, al amparo del artículo 13.1.f) 1º de su Ley Reguladora, 6/2007, de 21 de diciembre en el asunto promovido por J.B.A., en adelante «el reclamante», sobre responsabilidad patrimonial de la Comunidad de Madrid por la asistencia sanitaria dispensada en el Hospital La Paz.

<https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/dictamenes/2019/dictamen388-11.pdf>

Orden 880/2020, de 24 de julio, del Consejero de Sanidad, por la que se aprueban los criterios de actuación y el Plan Integral de Inspección de Sanidad para los años 2020-2022 (BOCM, núm. 189, de 6 de agosto, pp. 80-97).

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/06/BOCM-20200806-15.PDF

Decreto 1/2022, de 19 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad (BOCM, núm. 16, de 20 de enero, pp. 8-19).

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/01/20/BOCM-20220120-1.PDF

Resolución de 25 de enero de 2022, de la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria, por la que se hace público el Plan de Inspección de Sanidad para el año 2022 (BOCM, núm. 33, de 9 de febrero, pp. 67-81).

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/02/09/BOCM-20220209-17.PDF

- Normativa relativa a la Inspección de Tributos [Hacienda]. Organizada de forma cronológica.

El Boletín Oficial de Economía y de Hacienda (BOMEH)

<https://www.normadoc.gob.es/es-es/bomeh/default.aspx>

Real Decreto de 9 de marzo de 1829 para el establecimiento y organización del cuerpo militar de carabineros de costas y fronteras (Gaceta de Madrid, núm. 39, de 31 de marzo de 1829, p. 153)

<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1829/039/A00153-00153.pdf>

Continúa el Real Decreto sobre la organización de carabineros de costas. Instituto, organización personal é inspección general del Cuerpo de Carabineros de costas y fronteras (Gaceta de Madrid, núm. 40, de 02 de abril de 1829, p. 157).

<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1829/040/A00157-00157.pdf>

(Gaceta de Madrid, núm. 41, de 04 de abril de 1829, p. 161)

<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1829/041/A00161-00161.pdf>

(Gaceta de Madrid, núm. 45, de 14 de abril de 1829, p. 177)

<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1829/045/A00177-00177.pdf>

Continúa el Real decreto sobre la organización de carabineros de costas. Servicio ordinario y extraordinario. Revistas de inspección (Gaceta de Madrid, núm. 46, de 16 de abril de 1829, pp. 181-182)

<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1829/046/A00181-00182.pdf>

(Gaceta de Madrid, núm. 47, de 18 de abril de 1829, p. 185).

<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1829/047/A00185-00185.pdf>

(Gaceta de Madrid, núm. 49, de 23 de abril de 1829, .p. 193).

<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1829/049/A00193-00193.pdf>

(Gaceta de Madrid, núm. 50, de 25 de abril de 1829, p. 197).

<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1829/050/A00197-00197.pdf>

(Gaceta de Madrid, núm. 51, de 28 de abril de 1829, p. 201).

<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1829/051/A00201-00201.pdf>

(Gaceta de Madrid, núm. 52, de 30 de abril de 1829, p. 205)

<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1829/052/A00205-00205.pdf>

(Gaceta de Madrid, núm. 53, de 02 de mayo de 1829, p. 209).

<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1829/053/A00209-00209.pdf>

(Gaceta de Madrid, núm. 54, de 05 de mayo de 1829, p. 213).

<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1829/054/A00213-00213.pdf>

(Gaceta de Madrid, núm. 55, de 07 de mayo de 1829, p. 217)

<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1829/055/A00217-00217.pdf>

Presupuesto correspondiente al Real decreto sobre la organización de carabineros de costas (Gaceta de Madrid, núm. 56, de 09 de mayo de 1829, pp. 221 a 222).

<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1829/056/A00221-00222.pdf>

Real Orden sobre la admisión de individuos del ejército en el cuerpo de Carabineros de costas y fronteras (Gaceta de Madrid, núm. 110, de 06 de agosto de 1829, p. 405)

<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1829/110/A00405-00405.pdf>

- Real Decreto de 2 de julio de 1829 organizando el resguardo interior de rentas. Aunque se han encontrado referencias a este Real Decreto (en el Real decreto confirmando la Real Orden de 22 de Abril de 1854, y en mandar que se lleve á efecto (Gaceta de Madrid, núm. 1562, de 15 de abril de 1857, p. 1)
<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1857/1562/A00001-00001.pdf>)
No se ha encontrado el cuerpo normativo original en la base de datos de la Gaceta de Madrid.
- Real Decreto, de 28 de diciembre de 1849, nombrando para las cuatro plazas de Visitadores generales de Hacienda pública á los Sres. citados (Gaceta de Madrid, núm. 5631, de 30 de diciembre, pp. 2-3)
<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1849/5631/A00002-00003.pdf>
- Decreto creando el cuerpo general de Inspectores de hacienda (Gaceta de Madrid, núm. 22, de 22 de enero de 1871, pp. 469-470)
<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1871/022/A00169-00170.pdf>
- Real Decreto de 24 de febrero de 1881 creando en el servicio de inspección de la administración económica provincial un centro directivo denominado inspección general de la Hacienda Pública a cargo de un inspector superior de la administración (Gaceta de Madrid, núm. 57, de 26 de febrero, pp. 551--552)
<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1881/057/A00551-00553.pdf>
- Real decreto de 5 de febrero de 1884 suprimiendo los cargos que constituyen la planta del personal de la Inspección general de la Hacienda pública, y disponiendo que desempeñen el servicio de inspección de la Administración económica provincial cinco Inspectores con la denominación que se expresa (Gaceta de Madrid, núm. 37, de 6 de febrero, pp. 363-364).
<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1884/037/A00363-00364.pdf>
- Real Orden de 27 de marzo de 1893 excitando el celo de los empleados en la inspección provincial de Hacienda para llevar á cabo con el mayor rigor el cumplimiento de lo prevenido acerca del descubrimiento de lo prevenido acerca del descubrimiento de los fraudes y ocultaciones en la riqueza imponible (Gaceta de Madrid, núm. 91, de 1 de abril, p. 3)
<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1893/091/A00003-00003.pdf>
- Reglamento provisional de 4 de octubre de 1895, de la Inspección y la Investigación de la Hacienda Pública (Gaceta de Madrid, núm. 290, de 17 de octubre, pp. 186-189)
<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1895/290/A00186-00189.pdf>
- Real Decreto de 28 de marzo de 1900, aprobando el reglamento sobre los impuestos mineros (Gaceta de Madrid, núm. 88, de 29 de marzo, pp. 1126--1133).
<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1900/088/A01126-01133.pdf>
- Real decreto, de 13 de octubre de 1903, aprobando, con carácter definitivo, el adjunto Reglamento para el servicio de la Inspección de la Hacienda pública (Gaceta de Madrid, núm. 289, de 16 de octubre, pp. 204-209)
<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1903/289/A00204-00209.pdf>
- Ley de 3 de diciembre de 1932, relativa a la Administración de la Hacienda pública (Gaceta de Madrid, núm. 341, de 6 de diciembre, pp. 1651-1652).
<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1932/341/A01651-01652.pdf>

- Ley de 16 de diciembre de 1940 de Reforma Tributaria (BOE, núm. 357, de 22 de diciembre, pp. 8746-8770).
<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1940/357/A08746-08770.pdf>
- Ley sobre aplicación de la tarifa III de la Contribución sobre Utilidades a Comerciantes e Industriales individuales (BOE, núm. 106, de 16 de abril de 1941, pp. 2581-2585).
<https://boe.es/datos/pdfs/BOE//1941/106/A02581-02585.pdf>
- Orden de 14 de febrero de 1958 por la que se regula su régimen de coordinación (BOE, núm. 43, de 19 de febrero, pp. 280-281).
<https://boe.es/datos/pdfs/BOE//1958/043/A00280-00281.pdf>
- Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria (BOE, núm. 313, de 31 de diciembre, pp. 18248-18261).
<https://www.boe.es/boe/dias/1963/12/31/pdfs/A18248-18261.pdf>
- Real Decreto-ley 40/1977, de 7 de septiembre, por el que se reorganiza la Inspección Financiera y Tributaria. (BOE, núm. 218, de 12 de septiembre, pp. 20444-20445).
<https://www.boe.es/boe/dias/1977/09/12/pdfs/A20444-20445.pdf>
- Ley 44/1978, de 8 de septiembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (BOE, núm. 217, de 11 de septiembre, pp. 21191-21199).
<https://www.boe.es/boe/dias/1978/09/11/pdfs/A21191-21199.pdf>
- La Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (BOE, núm. 312, de 30 de diciembre, pp. 29429-29437). <https://www.boe.es/boe/dias/1978/12/30/pdfs/A29429-29437.pdf>
- Real Decreto 3255/1978, de 29 de diciembre, por el que se desarrollan las funciones atribuidas al Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública, especialidad de Inspección Auxiliar (BOE, núm. 22, de 25 de enero, p. 1908).
<https://www.boe.es/boe/dias/1979/01/25/pdfs/A01908-01908.pdf>
- Orden de 10 de marzo de 1979 por la que se desarrollan las funciones atribuidas al Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública, especialidad Subinspectores de Tributos (BOE, núm. 84, de 7 de abril, pp. 8328-8329).
<https://www.boe.es/boe/dias/1979/04/07/pdfs/A08328-08329.pdf>
- Ley 44/1983, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1984 (BOE, núm. 312, de 30 de diciembre, pp. 34866-34884).
<https://www.boe.es/boe/dias/1983/12/30/pdfs/A34866-34884.pdf>
- Real Decreto 939/1986, de 25 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de la Inspección de los Tributos (BOE, núm. 115, de 14 de mayo, pp. 17200-17219).
<https://www.boe.es/boe/dias/1986/05/14/pdfs/A17200-17219.pdf>
- Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (BOE, núm. 136, de 7 de junio, pp. 18665-18691).
<https://www.boe.es/boe/dias/1991/06/07/pdfs/A18665-18691.pdf>
- Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (BOE, núm. 313, de 31 de diciembre, pp. 44412-44495).
<https://www.boe.es/boe/dias/1998/12/31/pdfs/A44412-44495.pdf>
Texto consolidado:
<https://www.boe.es/buscar/pdf/1998/BOE-A-1998-30155-consolidado.pdf>

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE, núm. 302, de 18 de diciembre, pp. 44987-45065).

<https://www.boe.es/boe/dias/2003/12/18/pdfs/A44987-45065.pdf>

Análisis normativo:

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23186&p=20210710&tn=6>

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (BOE, núm. 213, de 5 de septiembre).

Texto consolidado:

<https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-15984-consolidado.pdf>

Tablas

Tabla I. Dimensión Personal. Evolución de la formulación de ítems desde la fase inicial, a la definitiva

Formulación Inicial	Propuesta Definitiva
El Inspector, la Inspectora de Educación ...	El Inspector, la Inspectora de Educación ...
A.1. Identifica las prácticas educativas que se desarrollan en un centro educativo y los modelos de enseñanza que les sirven de referencia para definir sus propias señas de identidad.	A.1. Identifica las prácticas educativas que se desarrollan en un centro educativo y los modelos de enseñanza que les sirven de referencia para definir sus propias señas de identidad.
A.2. Valora la adaptación de las prácticas docentes y organizativas a las normas reguladoras del sistema educativo y su contribución al ejercicio efectivo del derecho a la educación.	A.2.A.- Valora la adaptación de las prácticas docentes y organizativas de los centros a la normativa del sistema educativo.
	A.2.B.- Reconoce la contribución del trabajo de los centros al ejercicio efectivo del derecho a la educación.
A.3. Crea vías y relaciones de comunicación suficientemente fluidas para intercambiar información y conocimiento con cada uno de los centros educativos y con los miembros de las comunidades educativas.	A.3.A.- Facilita relaciones de comunicación fluidas con los centros educativos para intercambiar información y conocimiento.
	A.3.B.- Facilita relaciones de comunicación fluidas con los miembros de las comunidades educativas para intercambiar información y conocimiento.
A.4.- Genera confianza y seguridad en sus actuaciones tanto en las comunidades educativas como en las administraciones públicas para que pueden desarrollar con la mayor colaboración posible las funciones y tareas que le son propias.	A.4.- Genera confianza, con sus actuaciones, en los distintos actores del sistema educativo, para que estos desarrollen sus distintas tareas en un clima de colaboración con la Inspección.
A.5.- Planifica sus acciones en relación con cada centro de modo que sus intervenciones puedan adquirir un carácter sistemático y adaptado de las características de los centros y/o servicios.	A.5.- Planifica sus actuaciones de modo que sus intervenciones adquieren a la vez un carácter global y adaptado a las características de los centros y/o servicios.
A.6. Tiene en cuenta la evolución de los centros educativos y/o de los servicios para impulsar sus procesos de mejora para lograr el éxito educativo en todo el alumnado.	A.6. Tiene en cuenta la evolución de los centros educativos y de los servicios para impulsar sus procesos de mejora con el fin de lograr el éxito educativo en todo el alumnado.
A.7. Promueve en los equipos directivos y equipos docentes el análisis de los resultados del centro, tanto en el ámbito académico como en el de la convivencia, para impulsar la elaboración y desarrollo de planes de mejora que contribuyan al desarrollo de un sistema educativo de calidad	A.7. Promueve en los equipos directivos y equipos docentes el análisis de los resultados del centro, tanto en el ámbito académico como en el de la convivencia, para impulsar la elaboración y desarrollo de planes de mejora que contribuyan al desarrollo de un sistema educativo de calidad.
A.8. Facilita un conocimiento informado y una reflexión serena de las posibilidades y limitaciones, así como de sus consecuencias para el centro, de las diferentes innovaciones educativas.	A.8. Facilita un conocimiento informado y una reflexión serena de las posibilidades y limitaciones de las diferentes innovaciones educativas, así como de sus consecuencias para el centro.
A.9. Impulsa en los centros la implantación de aquellos programas, proyectos e innovaciones educativas (tanto institucionales como no institucionales) que se ajusten mejor a las necesidades y características de los mismos y que contribuyan a mejorar su capacidad profesional, dotándolos de nuevas perspectivas de mejora	A.9. Impulsa en los centros la implantación de aquellos programas, proyectos e innovaciones educativas (tanto institucionales, como no institucionales) que se ajusten mejor a las necesidades y características de los mismos y que contribuyan a mejorar su capacidad profesional, dotándolos de nuevas perspectivas.
A.10. Comparte con los centros educativos sus inquietudes y preocupaciones y les anima a dejar constancia de ellas en sus memorias anuales y hacer de ellas un motor para la mejora	A.10. Comparte con los centros educativos sus inquietudes y preocupaciones y les anima a dejar constancia de ellas en sus memorias anuales y a hacer de ellas un motor para la mejora.
A.11. Contribuya a la transformación de los centros educativos en auténticas comunidades que comparten un proyecto educativo y un conjunto bien definido de planes y proyectos.	A.11. Contribuye a la transformación de los centros educativos en auténticas comunidades que comparten un proyecto educativo y un conjunto bien definido de planes y proyectos.
A.12. Construye una imagen de cada situación educativa, así como de los casos que tiene que resolver, que integre los diferentes niveles del sistema educativo, así como la visión de los agentes educativos y su relación con el contexto.	A.12. Construye una imagen concreta para cada situación educativa, integrando, desde su contexto, los puntos de vista de los diferentes agentes de la comunidad educativa del centro.

Tabla II. Dimensión Institucional. Evolución de la formulación de ítems desde la fase inicial a la definitiva

Formulación Inicial	Propuesta Definitiva
	El Servicio de Inspección Educativa ...
B.1. El servicio de inspección educativa (en adelante, SIE) dispone de procedimientos y orientaciones suficientes para apoyar y facilitar el desempeño adecuado de las funciones y tareas de sus miembros.	B.1. Dispone de procedimientos y orientaciones suficientes para apoyar y facilitar el desempeño adecuado de las funciones y tareas de sus miembros.
B.2. El SIE estudia y analiza la normativa del sistema educativo y define criterios institucionales para poder aplicarla de forma homogénea, imparcial y objetiva.	B.2. Estudia y analiza la normativa del sistema educativo y define criterios institucionales para poder aplicarla de forma homogénea, imparcial y objetiva.
B.3. El SIE realiza institucionalmente actividades de formación dirigidas a actualizar los conocimientos y competencias necesarios para el desarrollo de las funciones específicas de la inspección.	B.3. Realiza institucionalmente actividades de formación dirigidas a actualizar los conocimientos y competencias necesarios para el desarrollo de las funciones específicas de la inspección.
B.4. El SIE facilita el reconocimiento de buenas prácticas docentes y organizativas para que puedan servir de referencia en los procesos de mejora de los centros educativos.	B.4. Facilita el reconocimiento de buenas prácticas docentes y organizativas para que puedan servir de referencia en los procesos de mejora de los centros educativos.
B.5. El SIE facilita el reconocimiento de buenas prácticas en los servicios educativos para que puedan servir de referencia en los procesos de mejora de los servicios educativos.	B.5. Facilita el reconocimiento de buenas prácticas en los servicios educativos para que puedan servir de referencia en los procesos de mejora de los servicios educativos.
B.6. El SIE reconoce y valora las metodologías más frecuentes y su aplicación práctica en procesos que permitan la mejora del aprendizaje	B.6. Reconoce y valora las metodologías más frecuentes y su aplicación práctica en procesos que permitan la mejora del aprendizaje
B.7. El SIE planifica reuniones del servicio en donde intercambian experiencias relacionadas con hechos vividos por inspección en los distintos ámbitos del sistema educativo y se definen casos que podrían servir de referencia.	B.7. Planifica reuniones del servicio en donde intercambian experiencias relacionadas con hechos vividos por inspección en los distintos ámbitos del sistema educativo y se definen casos que podrían servir de referencia.
B.8. El SIE facilita el intercambio de ideas y experiencias entre sus miembros para que puedan compartir tanto el conocimiento implícito como el conocimiento explícito y mejorar el desempeño de sus funciones y tareas.	B.8. Facilita el intercambio de ideas y experiencias entre sus miembros para que puedan compartir tanto el conocimiento implícito como el conocimiento explícito y mejorar el desempeño de sus funciones y tareas.
B.9. El SIE contribuya activamente a crear una visión específica de la realidad educativa, en todos sus niveles, y colabora para que esa visión pueda ser compartida por todos sus miembros.	B.9. Contribuye activamente a crear una visión específica de la realidad educativa, en todos sus niveles, y colabora para que esa visión pueda ser compartida por todos sus miembros.
B.10. El SIE incorpora a su plan anual de trabajo actividades dirigidas a evaluar y mejorar la capacidad profesional de sus miembros, así como de los equipos y de la propia institución.	B.10. Incorpora a su plan anual de trabajo actividades dirigidas a evaluar y mejorar la capacidad profesional de sus miembros, así como de los equipos y de la propia institución.
B.11. El SIE promueve y facilita una eficaz gestión del conocimiento entre sus miembros y anima a formar equipos que compartan experiencias y saberes.	B.11. Promueve y facilita una eficaz gestión del conocimiento entre sus miembros y anima a formar equipos que compartan experiencias y saberes.
B.12. El SIE promueve y facilita la creación de una cultura colegiada entre sus miembros y anima a formar equipos que compartan responsabilidades en una misma actuación.	B.12. Promueve y facilita la creación de una cultura colegiada entre sus miembros y anima a formar equipos que compartan responsabilidades en una misma actuación.
B.13. El SIE impulsa la necesaria reflexión sobre el sistema educativo tomando como referencia los informes nacionales e internacionales.	B.13. Impulsa la necesaria reflexión sobre el sistema educativo tomando como referencia los informes nacionales e internacionales.
B.14. El SIE facilita a sus miembros el conocimiento necesario sobre metodologías, técnicas e instrumentos que pueden mejorar el desempeño de las funciones y tareas que tiene asignadas.	B.14. Facilita a sus miembros el conocimiento necesario sobre metodologías, técnicas e instrumentos que pueden mejorar el desempeño de las funciones y tareas que tiene asignadas.
B.15. El SIE promueve y facilita la realización de actuaciones integrales y colegiadas en los centros y servicios educativos que, por sus circunstancias o por sus características, así lo aconsejan.	B.15. Promueve y facilita la realización de actuaciones integrales y colegiadas en los centros y servicios educativos que, por sus circunstancias o por sus características, así lo aconsejan.
B.16. El SIE se preocupa por construir una visión diferencial del sistema educativo que integre sus niveles constitutivos (general, centro y aula) y lograr que esa visión oriente su actuación tanto en un sentido normativo como en un sentido perfectivo.	B.16. Se preocupa por construir una visión diferencial del sistema educativo que integre sus niveles constitutivos (general, centro y aula) y lograr que esa visión oriente su actuación tanto en un sentido normativo como en un sentido perfectivo.

Tabla III. Dimensión de Gestión del Conocimiento. Evolución de la formulación de ítems desde la fase inicial a la definitiva

Formulación Inicial	Propuesta Definitiva
La inspección Educativa ...	La inspección Educativa ...
C.1. La inspección educativa (en adelante, IE) dispone de un conocimiento adecuado de las evidencias, así como de los modelos y teorías que sirven de fundamento a las normas reguladoras del sistema educativo.	C.1. Dispone de un conocimiento adecuado de las evidencias, así como de los modelos y teorías que sirven de fundamento a las normas reguladoras del sistema educativo.
C.2. La IE posee un conocimiento adecuado de las evidencias, disponibles sobre la realidad educativa, así como de los métodos, procedimientos e instrumentos utilizados en su obtención.	C.2. Posee un conocimiento adecuado de las evidencias, disponibles sobre la realidad educativa, así como de los métodos, procedimientos e instrumentos utilizados en su obtención.
C.3. La IE maneja con facilidad modelos y teorías en los distintos niveles del sistema educativo para describir y valorar las diversas situaciones educativas y reconocer sus posibilidades de mejora.	C.3. Maneja con facilidad modelos y teorías en los distintos niveles del sistema educativo para describir y valorar las diversas situaciones educativas y reconocer sus posibilidades de mejora.
C.4. La IE dispone de canales de comunicación interna en las que se puedan intercambien prácticas de actuación y se fomenta el intercambio de casos relevantes, así como de prácticas inspectoras innovadoras.	C.4. Dispone de canales de comunicación interna en las que se puedan intercambien prácticas de actuación y se fomenta el intercambio de casos relevantes, así como de prácticas inspectoras innovadoras.
C.5. La IE dispone del conocimiento necesario sobre metodologías, técnicas e instrumentos que pueden mejorar el desempeño de las funciones y tareas que tiene asignadas.	C.5. Dispone del conocimiento necesario sobre metodologías, técnicas e instrumentos que pueden mejorar el desempeño de las funciones y tareas que tiene asignadas.
C.6.- La IE tiene la oportunidad de participar en grupos de trabajo para el estudio y análisis de diversos aspectos relacionados con el mundo educativo y, singularmente, con los problemas más relevantes de sus centros educativos.	C.6.- Participa en grupos de trabajo para el análisis de los problemas relevantes del centro, teniendo en cuenta el marco global del sistema educativo.
C.7. La IE comparte el análisis de casos prácticos relacionados con situaciones problemáticas para ofrecer una visión técnica y cualificada y proponer posibles soluciones.	C.7. Comparte el análisis de casos prácticos relacionados con situaciones problemáticas para ofrecer una visión técnica y cualificada y proponer posibles soluciones.
C.8. La IE dispone de procedimientos, técnicas y orientaciones adecuadas para examinar documentos de los diferentes centros y servicios educativos.	C.8. Dispone de procedimientos, técnicas y orientaciones adecuadas para examinar documentos de los diferentes centros y servicios educativos.
C.9. La IE dispone de procedimientos, técnicas y orientaciones adecuadas para diseñar y desarrollar las vistas a los diferentes centros y servicios educativos.	C.9. Dispone de procedimientos, técnicas y orientaciones adecuadas para diseñar y desarrollar las visitas a los diferentes centros y servicios educativos.
C.10. La IE dispone de las herramientas adecuadas para la comunicación y reflexión sobre las actuaciones de modo que todos los miembros del servicio desarrollan juicios de las distintas situaciones educativas ajustados al conocimiento actualizado disponible.	C.10. Dispone de las herramientas adecuadas para la comunicación y reflexión sobre las actuaciones de modo que todos los miembros del servicio desarrollan juicios de las distintas situaciones educativas ajustados al conocimiento actualizado disponible.
C.11. La IE dispone del conocimiento y las habilidades necesarias para superar con éxito las situaciones en las que se presentan conflictos dentro de los centros educativos.	C.11. Dispone del conocimiento y las habilidades necesarias para superar con éxito las situaciones en las que se presentan conflictos dentro de los centros educativos.
C.12.- La inspección educativa tiene la oportunidad en procesos que facilitan la gestión del conocimiento tanto explícito como implícito.	C.12.- Facilita los procesos que requieren la gestión del conocimiento tanto explícito como implícito.
C.13.- La IE aporta al conjunto del sistema educativo una capacidad de reflexión que le permite a los diferentes agentes comprender tanto los fundamentos de sus acciones como la necesidad de cooperar en el logro de la finalidad general de la educación.	C.13.- Aporta a los diferentes actores del sistema educativo una reflexión que permite interpretar sus acciones para alinearlas con las finalidades generales de la educación.

Tabla IV. Dimensión de Cultura Institucional. Evolución de la formulación de ítems desde la fase inicial a la definitiva

Formulación Inicial	Propuesta Definitiva
La Inspección Educativa ...	La Inspección Educativa ...
D.1. La IE comparte valores esenciales para el ejercicio de las funciones que tiene asignadas como son la imparcialidad, el rigor, el respeto a todas las personas e instituciones, la equidad y el cuidado y protección del alumnado.	D.1. Comparte valores esenciales para el ejercicio de las funciones que tiene asignadas como son la imparcialidad, el rigor, el respeto a todas las personas e instituciones, la equidad y el cuidado y protección del alumnado.
D.2.-La inspección educativa participa en la construcción de una comunidad de práctica profesional compartiendo experiencias, ideas, conocimiento y procedimientos de actuación.	D.2.- Participa, con sus diversas actuaciones, en la construcción de una comunidad de práctica profesional.
D.3. La inspección educativa reconoce y valora la necesidad de una visión específica y diferenciada de la realidad educativa que integra los niveles del aula, el centro y el nivel sistémico.	D.3. Reconoce y valora la necesidad de una visión específica y diferenciada de la realidad educativa que integra los niveles del aula, el centro y el nivel sistémico.
D.4.- La IE considera esencial elevar la reflexividad del sistema educativo para comprender tanto sus fortalezas como sus debilidades, así como la necesidad de todos los agentes cooperen para alcanzar el mayor nivel posible de éxito educativo.	D.4.A.- Considera esencial la propia reflexión, de los actores del sistema educativo, para comprender las fortalezas y debilidades que este presenta.
	D.4.B.- Valora que todos los actores del sistema educativo cooperen para alcanzar el mayor nivel posible de éxito.
D.5.- La IE impulsa procesos de mejora en todos los centros y servicios educativos, basándose en la información aportada por sus propias memorias anuales y los informes institucionales.	D.5.- Impulsa procesos de mejora en los centros educativos teniendo en cuenta, entre otras evidencias, sus memorias anuales y sus informes institucionales.
D.6.- La IE dispone de tiempos y espacios adecuados para celebrar encuentros y reuniones entre las personas que desarrollan acciones en centros de la misma zona o ámbito de inspección, de modo que puedan compartir visiones y criterios.	D.6.- Dispone de tiempos e infraestructuras para celebrar encuentros en los que se compartan criterios con distintos agentes de la comunidad educativa de los centros.
D.7.- La IE promueve la acción conjunta de todos sus miembros y considera necesario asumir la corresponsabilidad de las acciones que se desarrollan dentro del mismo servicio.	D.7.A.- Promueve la acción coordinada de todos sus miembros.
	D.7.B.- Asume de forma corresponsable las acciones que se desarrollan dentro del mismo servicio.
D.8. La IE comparte la necesidad de promover una cultura inclusiva en los centros educativos que facilite la igualdad de oportunidades de aprendizaje.	D.8. Comparte la necesidad de promover una cultura inclusiva en los centros educativos que facilite la igualdad de oportunidades de aprendizaje.
D.9. La IE considera la educación como un derecho universal, incorporado al marco constitucional, y vela para que todas las personas puedan hacer un uso efectivo de ese derecho.	D.9. Considera la educación como un derecho universal, incorporado al marco constitucional, y vela para que todas las personas puedan hacer un uso efectivo de ese derecho.
D.10. La IE asume el derecho a la educación como fundamento de todo el sistema educativo y de su propia práctica profesional.	D.10. Asume el derecho a la educación como fundamento de todo el sistema educativo y de su propia práctica profesional.
D.11. La IE considera la realización de sus funciones y tareas como una garantía para un funcionamiento de un servicio público esencial como es la educación.	D.11. Considera la realización de sus funciones y tareas como una garantía para un funcionamiento de un servicio público esencial como es la educación.
D.12. La IE asume la responsabilidad de contribuir para que el ordenamiento del sistema educativo contribuya a que los centros y los servicios educativos orienten su organización y funcionamiento hacia la mejora continua.	D.12. Asume la responsabilidad de contribuir para que el ordenamiento del sistema educativo contribuya a que los centros y los servicios educativos orienten su organización y funcionamiento hacia la mejora continua.

Tabla 1.1.1. Dimensión Personal. Cargas factoriales de cada ítem en su factor

Como puede observarse, y en relación a todas las dimensiones, estas oscilaron entre .70 y .93, estando todas por encima de los umbrales recomendados por Carmines y Zeller (1979).

		Carga factorial
	El Inspector, la Inspectora de Educación ...	
Dimensión Personal.	A.1. Identifica las prácticas educativas que se desarrollan en un centro educativo y los modelos de enseñanza que les sirven de referencia para definir sus propias señas de identidad.	,818
	A.2.A.- Valora la adaptación de las prácticas docentes y organizativas de los centros a la normativa del sistema educativo.	,764
	A.2.B.- Reconoce la contribución del trabajo de los centros al ejercicio efectivo del derecho a la educación.	,843
	A.3.A.- Facilita relaciones de comunicación fluidas con los centros educativos para intercambiar información y conocimiento.	,827
	A.3.B.- Facilita relaciones de comunicación fluidas con los miembros de las comunidades educativas para intercambiar información y conocimiento.	,866
	A.4.- Genera confianza, con sus actuaciones, en los distintos actores del sistema educativo, para que estos desarrollen sus distintas tareas en un clima de colaboración con la Inspección.	,865
	A.5.- Planifica sus actuaciones de modo que sus intervenciones adquieren a la vez un carácter global y adaptado a las características de los centros y/o servicios.	,872
	A.6. Tiene en cuenta la evolución de los centros educativos y de los servicios para impulsar sus procesos de mejora con el fin de lograr el éxito educativo en todo el alumnado.	,897
	A.7. Promueve en los equipos directivos y equipos docentes el análisis de los resultados del centro, tanto en el ámbito académico como en el de la convivencia, para impulsar la elaboración y desarrollo de planes de mejora que contribuyan al desarrollo de un sistema educativo de calidad.	,846
	A.8. Facilita un conocimiento informado y una reflexión serena de las posibilidades y limitaciones de las diferentes innovaciones educativas, así como de sus consecuencias para el centro.	,853
	A.9. Impulsa en los centros la implantación de aquellos programas, proyectos e innovaciones educativas (tanto institucionales, como no institucionales) que se ajusten mejor a las necesidades y características de los mismos y que contribuyan a mejorar su capacidad profesional, dotándolos de nuevas perspectivas.	,855
	A.10. Comparte con los centros educativos sus inquietudes y preocupaciones y les anima a dejar constancia de ellas en sus memorias anuales y a hacer de ellas un motor para la mejora.	,856
	A.11. Contribuye a la transformación de los centros educativos en auténticas comunidades que comparten un proyecto educativo y un conjunto bien definido de planes y proyectos.	,882
	A.12. Construye una imagen concreta para cada situación educativa, integrando, desde su contexto, los puntos de vista de los diferentes agentes de la comunidad educativa del centro.	,890

Tabla 1.1.2. Dimensión Institucional. Cargas factoriales de cada ítem en su factor

		Carga factorial
	El Servicio de Inspección Educativa ...	
Dimensión institucional.	B.1. Dispone de procedimientos y orientaciones suficientes para apoyar y facilitar el desempeño adecuado de las funciones y tareas de sus miembros.	,774
	B.2. Estudia y analiza la normativa del sistema educativo y define criterios institucionales para poder aplicarla de forma homogénea, imparcial y objetiva.	,728
	B.3. Realiza institucionalmente actividades de formación dirigidas a actualizar los conocimientos y competencias necesarios para el desarrollo de las funciones específicas de la inspección.	,839
	B.4. Facilita el reconocimiento de buenas prácticas docentes y organizativas para que puedan servir de referencia en los procesos de mejora de los centros educativos.	,878
	B.5. Facilita el reconocimiento de buenas prácticas en los servicios educativos para que puedan servir de referencia en los procesos de mejora de los servicios educativos.	,880
	B.6. Reconoce y valora las metodologías más frecuentes y su aplicación práctica en procesos que permitan la mejora del aprendizaje	,883
	B.7. Planifica reuniones del servicio en donde intercambian experiencias relacionadas con hechos vividos por inspección en los distintos ámbitos del sistema educativo y se definen casos que podrían servir de referencia.	,885
	B.8. Facilita el intercambio de ideas y experiencias entre sus miembros para que puedan compartir tanto el conocimiento implícito como el conocimiento explícito y mejorar el desempeño de sus funciones y tareas.	,920
	B.9. Contribuye activamente a crear una visión específica de la realidad educativa, en todos sus niveles, y colabora para que esa visión pueda ser compartida por todos sus miembros.	,933
	B.10. Incorpora a su plan anual de trabajo actividades dirigidas a evaluar y mejorar la capacidad profesional de sus miembros, así como de los equipos y de la propia institución.	,838
	B.11. Promueve y facilita una eficaz gestión del conocimiento entre sus miembros y anima a formar equipos que compartan experiencias y saberes.	,918
	B.12. Promueve y facilita la creación de una cultura colegiada entre sus miembros y anima a formar equipos que compartan responsabilidades en una misma actuación.	,917
	B.13. Impulsa la necesaria reflexión sobre el sistema educativo tomando como referencia los informes nacionales e internacionales.	,870
	B.14. Facilita a sus miembros el conocimiento necesario sobre metodologías, técnicas e instrumentos que pueden mejorar el desempeño de las funciones y tareas que tiene asignadas.	,906
	B.15. Promueve y facilita la realización de actuaciones integrales y colegiadas en los centros y servicios educativos que, por sus circunstancias o por sus características, así lo aconsejan.	,908
	B.16. Se preocupa por construir una visión diferencial del sistema educativo que integre sus niveles constitutivos (general, centro y aula) y lograr que esa visión oriente su actuación tanto en un sentido normativo como en un sentido perfectivo.	,908

Tabla 1.1.3. Dimensión de Gestión del Conocimiento. Cargas factoriales de cada ítem en su factor

		Carga factorial
	La inspección Educativa ...	
Dimensión de gestión del conocimiento.	C.1. Dispone de un conocimiento adecuado de las evidencias, así como de los modelos y teorías que sirven de fundamento a las normas reguladoras del sistema educativo.	,760
	C.2. Posee un conocimiento adecuado de las evidencias, disponibles sobre la realidad educativa, así como de los métodos, procedimientos e instrumentos utilizados en su obtención.	,818
	C.3. Maneja con facilidad modelos y teorías en los distintos niveles del sistema educativo para describir y valorar las diversas situaciones educativas y reconocer sus posibilidades de mejora.	,823
	C.4. Dispone de canales de comunicación interna en las que se puedan intercambien prácticas de actuación y se fomenta el intercambio de casos relevantes, así como de prácticas inspectoras innovadoras.	,810
	C.5. Dispone del conocimiento necesario sobre metodologías, técnicas e instrumentos que pueden mejorar el desempeño de las funciones y tareas que tiene asignadas.	,877
	C.6.- Participa en grupos de trabajo para el análisis de los problemas relevantes del centro, teniendo en cuenta el marco global del sistema educativo.	,849
	C.7. Comparte el análisis de casos prácticos relacionados con situaciones problemáticas para ofrecer una visión técnica y cualificada y proponer posibles soluciones.	,864
	C.8. Dispone de procedimientos, técnicas y orientaciones adecuadas para examinar documentos de los diferentes centros y servicios educativos.	,791
	C.9. Dispone de procedimientos, técnicas y orientaciones adecuadas para diseñar y desarrollar las visitas a los diferentes centros y servicios educativos.	,831
	C.10. Dispone de las herramientas adecuadas para la comunicación y reflexión sobre las actuaciones de modo que todos los miembros del servicio desarrollan juicios de las distintas situaciones educativas ajustados al conocimiento actualizado disponible.	,921
	C.11. Dispone del conocimiento y las habilidades necesarias para superar con éxito las situaciones en las que se presentan conflictos dentro de los centros educativos.	,856
	C.12.- Facilita los procesos que requieren la gestión del conocimiento tanto explícito como implícito.	,896
	C.13.- Aporta a los diferentes actores del sistema educativo una reflexión que permite interpretar sus acciones para alinearlas con las finalidades generales de la educación.	,875

Tabla 1.1.4. Dimensión de Cultura Institucional. Cargas factoriales de cada ítem en su factor

		Carga factorial
	La Inspección Educativa ...	
Dimensión de cultura institucional.	D.1. Comparte valores esenciales para el ejercicio de las funciones que tiene asignadas como son la imparcialidad, el rigor, el respeto a todas las personas e instituciones, la equidad y el cuidado y protección del alumnado.	,846
	D.2.- Participa, con sus diversas actuaciones, en la construcción de una comunidad de práctica profesional.	,897
	D.3. Reconoce y valora la necesidad de una visión específica y diferenciada de la realidad educativa que integra los niveles del aula, el centro y el nivel sistémico.	,918
	D.4.A.- Considera esencial la propia reflexión, de los actores del sistema educativo, para comprender las fortalezas y debilidades que este presenta.	,906
	D.4.B.- Valora que todos los actores del sistema educativo cooperen para alcanzar el mayor nivel posible de éxito.	,903
	D.5.- Impulsa procesos de mejora en los centros educativos teniendo en cuenta, entre otras evidencias, sus memorias anuales y sus informes institucionales.	,870
	D.6.- Dispone de tiempos e infraestructuras para celebrar encuentros en los que se compartan criterios con distintos agentes de la comunidad educativa de los centros.	,695
	D.7.A.- Promueve la acción coordinada de todos sus miembros.	,856
	D.7.B.- Asume de forma corresponsable las acciones que se desarrollan dentro del mismo servicio.	,857
	D.8. Comparte la necesidad de promover una cultura inclusiva en los centros educativos que facilite la igualdad de oportunidades de aprendizaje.	,851
	D.9. Considera la educación como un derecho universal, incorporado al marco constitucional, y vela para que todas las personas puedan hacer un uso efectivo de ese derecho.	,771
	D.10. Asume el derecho a la educación como fundamento de todo el sistema educativo y de su propia práctica profesional.	,776
	D.11. Considera la realización de sus funciones y tareas como una garantía para un funcionamiento de un servicio público esencial como es la educación.	,835
	D.12. Asume la responsabilidad de contribuir para que el ordenamiento del sistema educativo contribuya a que los centros y los servicios educativos orienten su organización y funcionamiento hacia la mejora continua.	,875

Tabla 1.2.1. Estadísticos descriptivos (media y desviación típica) de cada uno de los ítems de la Dimensión Personal

	n	<	>	\bar{X}	σ
El Inspector, la Inspectora de Educación ...					
A.1. Identifica las prácticas educativas que se desarrollan en un centro educativo y los modelos de enseñanza que les sirven de referencia para definir sus propias señas de identidad.	309	0	5	3,78	1,061
A.2.A.- Valora la adaptación de las prácticas docentes y organizativas de los centros a la normativa del sistema educativo.	309	0	5	4,05	,972
A.2.B.- Reconoce la contribución del trabajo de los centros al ejercicio efectivo del derecho a la educación.	309	0	5	4,14	,979
A.3.A.- Facilita relaciones de comunicación fluidas con los centros educativos para intercambiar información y conocimiento.	309	0	5	3,96	1,155
A.3.B.- Facilita relaciones de comunicación fluidas con los miembros de las comunidades educativas para intercambiar información y conocimiento.	309	0	5	3,70	1,244
A.4.- Genera confianza, con sus actuaciones, en los distintos actores del sistema educativo, para que estos desarrollen sus distintas tareas en un clima de colaboración con la Inspección.	309	0	5	4,07	,990
A.5.- Planifica sus actuaciones de modo que sus intervenciones adquieren a la vez un carácter global y adaptado a las características de los centros y/o servicios.	309	0	5	3,97	1,027
A.6. Tiene en cuenta la evolución de los centros educativos y de los servicios para impulsar sus procesos de mejora con el fin de lograr el éxito educativo en todo el alumnado.	309	0	5	3,73	1,160
A.7. Promueve en los equipos directivos y equipos docentes el análisis de los resultados del centro, tanto en el ámbito académico como en el de la convivencia, para impulsar la elaboración y desarrollo de planes de mejora que contribuyan al desarrollo de un sistema educativo de calidad.	309	0	5	3,91	1,106
A.8. Facilita un conocimiento informado y una reflexión serena de las posibilidades y limitaciones de las diferentes innovaciones educativas, así como de sus consecuencias para el centro.	309	0	5	3,36	1,303
A.9. Impulsa en los centros la implantación de aquellos programas, proyectos e innovaciones educativas (tanto institucionales, como no institucionales) que se ajusten mejor a las necesidades y características de los mismos y que contribuyan a mejorar su capacidad profesional, dotándolos de nuevas perspectivas.	309	0	5	3,37	1,398
A.10. Comparte con los centros educativos sus inquietudes y preocupaciones y les anima a dejar constancia de ellas en sus memorias anuales y a hacer de ellas un motor para la mejora.	309	0	5	3,89	1,174
A.11. Contribuye a la transformación de los centros educativos en auténticas comunidades que comparten un proyecto educativo y un conjunto bien definido de planes y proyectos.	309	0	5	3,38	1,350
A.12. Construye una imagen concreta para cada situación educativa, integrando, desde su contexto, los puntos de vista de los diferentes agentes de la comunidad educativa del centro.	309	0	5	3,57	1,217

Tabla 1.2.2. Estadísticos descriptivos (media y desviación típica) de cada uno de los ítems de la Dimensión Institucional

	n	<	>	\bar{X}	σ
El Servicio de Inspección Educativa ...					
B.1. Dispone de procedimientos y orientaciones suficientes para apoyar y facilitar el desempeño adecuado de las funciones y tareas de sus miembros.	309	0	5	3,66	1,072
B.2. Estudia y analiza la normativa del sistema educativo y define criterios institucionales para poder aplicarla de forma homogénea, imparcial y objetiva.	309	0	5	4,03	1,059
B.3. Realiza institucionalmente actividades de formación dirigidas a actualizar los conocimientos y competencias necesarios para el desarrollo de las funciones específicas de la inspección.	309	0	5	3,39	1,304
B.4. Facilita el reconocimiento de buenas prácticas docentes y organizativas para que puedan servir de referencia en los procesos de mejora de los centros educativos.	309	0	5	3,38	1,344
B.5. Facilita el reconocimiento de buenas prácticas en los servicios educativos para que puedan servir de referencia en los procesos de mejora de los servicios educativos.	309	0	5	3,30	1,303
B.6. Reconoce y valora las metodologías más frecuentes y su aplicación práctica en procesos que permitan la mejora del aprendizaje.	309	0	5	3,46	1,272
B.7. Planifica reuniones del servicio en donde intercambian experiencias relacionadas con hechos vividos por inspección en los distintos ámbitos del sistema educativo y se definen casos que podrían servir de referencia.	309	0	5	3,10	1,495
B.8. Facilita el intercambio de ideas y experiencias entre sus miembros para que puedan compartir tanto el conocimiento implícito como el conocimiento explícito y mejorar el desempeño de sus funciones y tareas.	309	0	5	3,22	1,411
B.9. Contribuye activamente a crear una visión específica de la realidad educativa, en todos sus niveles, y colabora para que esa visión pueda ser compartida por todos sus miembros.	309	0	5	3,28	1,401
B.10. Incorpora a su plan anual de trabajo actividades dirigidas a evaluar y mejorar la capacidad profesional de sus miembros, así como de los equipos y de la propia institución.	309	0	5	3,38	1,308
B.11. Promueve y facilita una eficaz gestión del conocimiento entre sus miembros y anima a formar equipos que compartan experiencias y saberes.	309	0	5	3,25	1,362
B.12. Promueve y facilita la creación de una cultura colegiada entre sus miembros y anima a formar equipos que compartan responsabilidades en una misma actuación.	309	0	5	3,28	1,341
B.13. Impulsa la necesaria reflexión sobre el sistema educativo tomando como referencia los informes nacionales e internacionales.	309	0	5	3,06	1,480
B.14. Facilita a sus miembros el conocimiento necesario sobre metodologías, técnicas e instrumentos que pueden mejorar el desempeño de las funciones y tareas que tiene asignadas.	309	0	5	3,20	1,380
B.15. Promueve y facilita la realización de actuaciones integrales y colegiadas en los centros y servicios educativos que, por sus circunstancias o por sus características, así lo aconsejan.	309	0	5	3,29	1,376
B.16. Se preocupa por construir una visión diferencial del sistema educativo que integre sus niveles constitutivos (general, centro y aula) y lograr que esa visión oriente su actuación tanto en un sentido normativo como en un sentido perfectivo.	309	0	5	3,16	1,393

Tabla 1.2.3. Estadísticos descriptivos (media y desviación típica) de cada uno de los ítems de la Dimensión de Gestión del Conocimiento

	n	<	>	\bar{X}	σ
La inspección Educativa ...					
C.1. Dispone de un conocimiento adecuado de las evidencias, así como de los modelos y teorías que sirven de fundamento a las normas reguladoras del sistema educativo.	309	0	5	3,84	1,062
C.2. Posee un conocimiento adecuado de las evidencias, disponibles sobre la realidad educativa, así como de los métodos, procedimientos e instrumentos utilizados en su obtención.	309	0	5	3,74	1,081
C.3. Maneja con facilidad modelos y teorías en los distintos niveles del sistema educativo para describir y valorar las diversas situaciones educativas y reconocer sus posibilidades de mejora.	309	0	5	3,59	1,180
C.4. Dispone de canales de comunicación interna en las que se puedan intercambien prácticas de actuación y se fomenta el intercambio de casos relevantes, así como de prácticas inspectoras innovadoras.	309	0	5	3,18	1,372
C.5. Dispone del conocimiento necesario sobre metodologías, técnicas e instrumentos que pueden mejorar el desempeño de las funciones y tareas que tiene asignadas.	309	0	5	3,60	1,163
C.6.- Participa en grupos de trabajo para el análisis de los problemas relevantes del centro, teniendo en cuenta el marco global del sistema educativo.	309	0	5	3,41	1,415
C.7. Comparte el análisis de casos prácticos relacionados con situaciones problemáticas para ofrecer una visión técnica y cualificada y proponer posibles soluciones.	309	0	5	3,37	1,348
C.8. Dispone de procedimientos, técnicas y orientaciones adecuadas para examinar documentos de los diferentes centros y servicios educativos.	309	0	5	3,81	1,091
C.9. Dispone de procedimientos, técnicas y orientaciones adecuadas para diseñar y desarrollar las visitas a los diferentes centros y servicios educativos.	309	0	5	3,79	1,141
C.10. Dispone de las herramientas adecuadas para la comunicación y reflexión sobre las actuaciones de modo que todos los miembros del servicio desarrollan juicios de las distintas situaciones educativas ajustados al conocimiento actualizado disponible.	309	0	5	3,45	1,241
C.11. Dispone del conocimiento y las habilidades necesarias para superar con éxito las situaciones en las que se presentan conflictos dentro de los centros educativos.	309	0	5	3,78	1,158
C.12.- Facilita los procesos que requieren la gestión del conocimiento tanto explícito como implícito.	309	0	5	3,45	1,193
C.13.- Aporta a los diferentes actores del sistema educativo una reflexión que permite interpretar sus acciones para alinearlas con las finalidades generales de la educación.	309	0	5	3,45	1,300

Tabla 1.2.4. Estadísticos descriptivos (media y desviación típica) de cada uno de los ítems de la Dimensión de Cultura Institucional

	n	<	>	\bar{X}	σ
La Inspección Educativa ...					
D.1. Comparte valores esenciales para el ejercicio de las funciones que tiene asignadas como son la imparcialidad, el rigor, el respeto a todas las personas e instituciones, la equidad y el cuidado y protección del alumnado.	309	0	5	4,21	,957
D.2.- Participa, con sus diversas actuaciones, en la construcción de una comunidad de práctica profesional.	309	0	5	3,73	1,140
D.3. Reconoce y valora la necesidad de una visión específica y diferenciada de la realidad educativa que integra los niveles del aula, el centro y el nivel sistémico.	309	0	5	3,70	1,124
D.4.A.- Considera esencial la propia reflexión, de los actores del sistema educativo, para comprender las fortalezas y debilidades que este presenta.	309	0	5	3,86	1,127
D.4.B.- Valora que todos los actores del sistema educativo cooperen para alcanzar el mayor nivel posible de éxito.	309	0	5	4,02	1,029
D.5.- Impulsa procesos de mejora en los centros educativos teniendo en cuenta, entre otras evidencias, sus memorias anuales y sus informes institucionales.	309	0	5	3,78	1,125
D.6.- Dispone de tiempos e infraestructuras para celebrar encuentros en los que se compartan criterios con distintos agentes de la comunidad educativa de los centros.	309	0	5	2,97	1,487
D.7.A.- Promueve la acción coordinada de todos sus miembros.	309	0	5	3,53	1,247
D.7.B.- Asume de forma corresponsable las acciones que se desarrollan dentro del mismo servicio.	309	0	5	3,74	1,226
D.8. Comparte la necesidad de promover una cultura inclusiva en los centros educativos que facilite la igualdad de oportunidades de aprendizaje.	309	0	5	3,92	1,171
D.9. Considera la educación como un derecho universal, incorporado al marco constitucional, y vela para que todas las personas puedan hacer un uso efectivo de ese derecho.	309	0	5	4,38	,869
D.10. Asume el derecho a la educación como fundamento de todo el sistema educativo y de su propia práctica profesional.	309	0	5	4,42	,829
D.11. Considera la realización de sus funciones y tareas como una garantía para un funcionamiento de un servicio público esencial como es la educación.	309	0	5	4,34	,863
D.12. Asume la responsabilidad de contribuir para que el ordenamiento del sistema educativo contribuya a que los centros y los servicios educativos orienten su organización y funcionamiento hacia la mejora continua.	309	0	5	4,24	,974

Tabla 2.1.1. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación las tareas asignadas a los veedores en la cédula de Enrique II (1370).

LOE. 2/2006. Art. 151	Cédula de Enrique II (1370)
Inspectores de educación	Veedores de ciencia y conciencia [5]
Funciones	
a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como los programas que en ellos inciden.	<i>No siendo suficiente, le quitad, y le poned pena de seis mil ducados no usen más la tal enseñanza [5]</i>
b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.	<i>Vean la enseñanza de los muchachos, y las letras de las Escuelas, y vean lo que enseñan [5]</i>
c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.	
d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.	
e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres	
f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.	
g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.	
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.	Examinar previamente a los maestros [1] Otorgar cartas, Leyes y letras de examen [1-5] Vayan con los justicias cada cuatro meses [5]

Tabla 2.1.2. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las tareas asignadas a los *veedores* en la Real Cédula de Felipe II (1573).

LOE. 2/2006. Art. 151	Real Cédula de Felipe II (1573).
Inspectores de educación	Veedores
Funciones	
a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como los programas que en ellos inciden.	
b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.	<i>visiten las Escuelas, para ver si los tales Maestros hacen bien su oficio, si se reza la Doctrina Cristiana, y en qué libros leen, y si son verdaderos, o no, y si son los tales aptos para dicho Arte, y si son examinados</i>
c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.	
d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.	
e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres	
f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.	
g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.	
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.	<i>Comprobar que el que se examine, además de no tener mezcla de mala sangre os ha de constar ser Cristiano viejo, y no ha de ser penitenciado por el Santo Oficio de la Inquisición, ni de los que nuevamente convertidos</i>

Tabla 2.1.3. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las tareas asignadas a *los justicias* en la Real Cédula de Felipe II (1588).

LOE. 2/2006. Art. 151	Real Cédula de Felipe II (1588)
Inspectores de educación	Justicias de estos reinos
Funciones	
a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como los programas que en ellos inciden.	
b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.	<i>visiten [...] las escuelas y los maestros examinados y aprobados, para ver si enseñan bien y en el cuidado que deben</i>
c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.	
d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.	
e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres	
f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.	
g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.	
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.	<i>visiten cada año una vez las escuelas y los maestros examinados y aprobados,</i>

Tabla 2.1.4. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las tareas asignadas a los aprobadores por parte del Consejo de Castilla (1600).

LOE. 2/2006. Art. 151	Disposición del Consejo de Castilla de 28 de mayo de 1600
Inspectores de educación	Aprobadores
Funciones	
a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como los programas que en ellos inciden.	
b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.	
c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.	
d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.	
e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres	
f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.	
g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.	
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.	<i>el Corregidor de esta Villa examine os maestros que en ella enseñan a leer, escribir y contar, por personas que sepan del arte y se informen de sus vidas y costumbres y habilidades</i>

Tabla 2.1.5. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las tareas asignadas a *los examinadores* en la Real Cédula de Felipe III (1609).

LOE. 2/2006. Art. 151	Real Cédula de Felipe III (1609).
Inspectores de educación	Examinadores
Funciones	
a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como los programas que en ellos inciden.	
b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.	
c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.	
d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.	
e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres	
f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.	
g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.	
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.	
	Observaciones: No atribuye tareas o funciones pero recoge dar continuidad a los recogido en las Cédulas Reales en lo relativo a las preeminencias y privilegios de los maestros examinados

El Rey Felipe IV les concedió la facultad de examinar a los que querían ser maestros, privilegio que fue aprobado por el Consejo de Castilla.

Tabla 2.1.6. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación a las tareas asignadas a los miembros de la Hermandad de San Casiano (1647).

LOE. 2/2006. Art. 151	Ordenanzas de la Congregación o Hermandad del glorioso San Casiano. Aprobadas en 1647.
Inspectores de educación	Examinadores Visitadores - Veedores Celadores
Funciones	
a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como los programas que en ellos inciden.	
b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.	Vigilen el desempeño de los maestros
c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.	
d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.	
e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres	
f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.	
g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.	
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.	
	Observaciones. Establecía requisitos para el ejercicio de la docencia.

Tabla 2.1.7. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las tareas asignadas a los *visitadores* en la Real Cédula de Felipe V (1743).

LOE. 2/2006. Art. 151	Real Cédula de Felipe V (1743).
Inspectores de educación	Hermanos mayores, Examinadores Que haya Veedores en dicha Congregación que cuiden y celen el cumplimiento de la obligación de los maestros [...] profesores más antiguos y beneméritos, dándoseles por él el título de Visitadores. (V)
Funciones	
a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como los programas que en ellos inciden.	<i>A los maestros que faltaren y contravinieren a esto se les castigará severamente (II)</i> Comprobar que <i>sepan la Doctrina cristiana (VI)</i>
b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.	
c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.	
d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.	
e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres	
f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.	
g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.	
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.	Aprobar a los maestros de primeras letras (I) <i>Seguir las diligencias dispuestas por las Ordenanzas y acuerdos de la Hermandad (II)</i>

Tabla 2.1.8. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las tareas asignadas a los *celadores* e inspectores de cuarteles en la Real Cédula de 1778.

LOE. 2/2006. Art. 151	Real Cédula de 30 de marzo de 1778. Constituye la Junta General de Caridad
Inspectores de educación	Celadores Inspectores de cuarteles
Funciones	
a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como los programas que en ellos inciden.	
b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.	vigilar el cumplimiento de los maestros con sus ministerios y que tengan calidades que, para ello, se requieren. ... velar que instrucción que se dé a los jóvenes de ambos sexos sea sana y útil a los mismos y a la causa pública
c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.	
d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.	
e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres	
f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.	
g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.	
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.	Examinar a maestros y maestras ... designar y trasladar a los maestros de las escuelas gratuitas

Tabla 2.1.9. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las tareas asignadas a los *examinadores* y *visitadores* en la Real Provisión de Carlos III (1780).

LOE. 2/2006. Art. 151	Real Provisión de Carlos III de 22 de diciembre de 1780. Crea: Colegio Académico del noble arte de las primeras letras.
Inspectores de educación	Examinadores y visitadores
Funciones	
a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como los programas que en ellos inciden.	
b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.	... cuidado de la buena enseñanza
c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.	
d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.	
e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres	
f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.	
g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.	
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.	Aprobaciones de maestros

Tabla 2.1.10. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las tareas asignadas a los *examinadores y comisionados* en la Real Cédula de Carlos III (1783).

LOE. 2/2006. Art. 151	Real Cédula de 11 de mayo de 1783 de Carlos III. «Reglamento para el restablecimiento de Escuelas gratuitas en los barrios de Madrid, en que se dé la buena educación a las niñas tan necesaria y útil al Estado, al bien público y a la patria».
Inspectores de educación	Examinadores. Comisionados
Funciones	
a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como los programas que en ellos inciden.	
b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.	
c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.	
d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.	... recomendando la observancia de este Reglamento y dar puntual cuenta a la Diputación de cuanto considerasen digno de remedio para que se ponga con la mayor suavidad y prudencia, con especial encargo de que a la Maestra nunca se la rependa delante de sus Discípulas, y de que estas advertencias se la hagan en términos suaves y discretos (IV.1)
e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres	
f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.	... deberán visitar y auxiliar a las Maestras, , (IV.1)
g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.	
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.	

Tabla 2.1.11. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las tareas asignadas al *Visitador e Inspector y Censor* en la Real Orden de 1791.

LOE. 2/2006. Art. 151	Creación de las Escuelas Reales [Real Orden de 25 de diciembre de 1791]
Inspectores de educación	Visitador e inspector Censor
Funciones	
a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como los programas que en ellos inciden.	
b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.	... velar que instrucción que se dé a los jóvenes de ambos sexos sea sana y útil a los mismos y a la causa pública
c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.	
d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.	
e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres	
f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.	
g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.	
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.	

Tabla 2.1.12. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las tareas asignadas al *Zelador General* en la Real Orden de 1791.

LOE. 2/2006. Art. 151.	Real Orden de 26 de marzo de 1791.
Inspectores de educación	Zelador General
Funciones	
a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como los programas que en ellos inciden.	
b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.	<i>Velar sobre la enseñanza que se da en las escuelas gratuitas, la aplicación de sus maestros y maestras, y de sus discípulos y discípulas podres;</i>
c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.	
d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.	
e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres	
f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.	<i>Sobre el cuidado o descuido de los padres, madres y parientes en enviar los niños y niñas a las escuelas, y demás correspondiente para uniformar en lo posible este importante punto de educación</i>
g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.	
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.	

Tabla 2.1.13. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las tareas asignadas al Celador y al Visitador en los Estatutos de la Real Academia de Primeras Letras (1797).

LOE. 2/2006. Art. 151.	Estatutos de la Real Academia de Primeras Letras. Aprobados el 13 de junio de 1797.
Inspectores de educación	Celador - visitador
Funciones	
a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como los programas que en ellos inciden.	<p><i>Celador</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - ... cuidará de que los edificios de las escuelas se conserven con la solidez, luces y distribución material con que se construyan. - Celará la puntual asistencia de los maestros y de los niños a las escuelas, [...] y reconvendrá a los padres que se descuiden esta obligación. - Presenciará la entrada de los niños en las escuelas la primera vez que se presente en ellas; [...] leerá a los padres el decreto que deberá haber en las aulas, y cuidará de su cumplimiento. - Será uno de los que intervengan en que se pague puntualmente a los maestros. <p><i>Visitador:</i></p> <p>El visitador cuidará de la distribución interior de las escuelas con respecto a sus clasificaciones, y de que tengan mesas, asientos, pautas, inscripciones y demás enseres correspondientes a la enseñanza.</p>
b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.	<p>Hará todas las variaciones que juzgue conveniente para la mayor perfección de la referida enseñanza</p> <p><i>Visitador:</i></p> <p>Tendrá cuidado de la puntual observancia del método establecido para la educación, y de que esta se dé por los tratados y libros determinados por la academia, así para los maestros como para los discípulos.</p>
c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.	
d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.	
e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres	
f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.	<p><i>Visitador:</i></p> <p>Oír las quejas que le den los padres de familia sobre la educación de sus hijos, y será puntual en satisfacer cuando fuesen fundadas</p>
g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.	
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.	<p><i>Celador:</i></p> <p>Y en caso que halle dificultades para el cumplimiento de estos encargos recurrirá a la Academia y a los jueces y tribunales competentes por el orden debido y regular.</p>

LOE. 2/2006. Art. 151.

Disposición adicional cuarta, punto 3.
La supervisión de los libros de texto y otros materiales curriculares es competencia de las administraciones educativas y constituirá parte del proceso ordinario de inspección que ejerce la Administración educativa sobre la totalidad de elementos que integran el proceso de enseñanza y aprendizaje, [...]

Art. 153.e de la LO 2/2006 en la redacción dada por la LO 3/2020, «atribuciones de los inspectores».
Eleva informes y hacer requerimientos cuando se detecten incumplimientos en la aplicación de la normativa, y levantar actas, ya sea por iniciativa propia o a instancias de la autoridad administrativa correspondiente

**Estatutos de la Real Academia de Primeras Letras.
Aprobados el 13 de junio de 1797.**

Visitador:
Estará a su cargo la convocatoria para los exámenes anuales de niños, y el decoro, formalidad y rectitud con que deben celebrarse
Tendrá obligación de visitar las escuelas con toda la frecuencia posible.

...Realizaba la censura de los libros o documentos referidos a la primera educación, así como elección de las obras en que debe leer la niñez para el uso de todas las escuelas del reino y «en ninguna podrá enseñarse por otros tratados».

Tabla 2.1.14. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las tareas asignadas a la Junta de Vigilancia en el Reglamento de la Junta de Exámenes (1804).

LOE. 2/2006. Art. 151	Reglamento de la Junta de Exámenes. Real Orden de 27 de marzo de 1804
Inspectores de educación	Suprime estas figuras Mantiene las funciones. Se crea la Junta de Vigilancia para la primera enseñanza de Madrid y las escuelas normales (ejemplo). Las Capitanías generales realiza esta función en el resto de escuelas del reino.
Funciones	
a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como los programas que en ellos inciden.	
b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.	La Junta de exámenes asume la función de examinar a los aspirantes a maestros «y a todo cuanto diga en relación con la primera enseñanza, celando la conducta de los maestros de todas las escuelas de Madrid, sean o no reales y meditando y proponiendo a S.M las mejoras y planes de reforma que crea útiles en la materia».
c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.	
d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.	
e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres	
f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.	
g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.	
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.	La Junta de exámenes asume la función de examinar a los aspirantes a maestros «y a todo cuanto diga en relación con la primera enseñanza, celando la conducta de los maestros de todas las escuelas de Madrid, sean o no reales y meditando y proponiendo a S.M las mejoras y planes de reforma que crea útiles en la materia».

Tabla 2.1.15. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las tareas asignadas a los *Censores* en la Instrucción de 1816.

LOE. 2/2006. Art. 151	Instrucción de 21 de febrero de 1816 por el que se crean los Censores en la escuelas de niños y niñas pobres de Madrid.
Inspectores de educación	Censores
Funciones	
a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como los programas que en ellos inciden.	... policía interior y situación de las escuelas de ambos sexos (...) los edificios, de reconocida y total seguridad; las salas o aulas de la enseñanza y su cabida correspondiente, con proporción al número de niños y niñas que concurran; evitando cuidadosamente que la multitud pueda causar infección, respirando un aire mal sano, y de consiguiente perjudicial a la salud de maestros y maestras y sus respectivos discípulos. La disposición de las escuelas de uno y otro sexo, los muebles y demás que contengan, su figura, orden y colocación, ...(6).
b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.	... cuidarán de la puntual asistencia a sus respectivos escuelas de los maestros, maestras, pasantes, pasantas, discípulos y discípulas y de todo lo demás que sea concerniente a la debida y mejor enseñanza, observando las horas que están establecidas para la entrada y salida en las escuelas, ... (7).
c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.	... en las escuelas de niñas se verifique la enseñanza de las labores de manos, (...), siendo obligación de las maestras enseñar a leer, y aun a escribir, a las niñas, si alguna quisiera dedicarse a ello.
d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.	
e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres	
f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.	
g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.	
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.	
Disposición adicional cuarta, punto 3. La supervisión de los libros de texto y otros materiales curriculares es competencia de las administraciones educativas y constituirá parte del proceso ordinario de inspección que ejerce la Administración educativa sobre la totalidad de elementos que integran el proceso de enseñanza y aprendizaje, [...]	
Art. 153.e de la LO 2/2006 en la redacción dada por la LO 3/2020, «atribuciones de los inspectores».	...y en el caso de notar alguna falta en los maestros de ambos sexos, o sus discípulos, lo harán presente a la Diputación que

LOE. 2/2006. Art. 151

Elevar informes y hacer requerimientos cuando se detecten incumplimientos en la aplicación de la normativa, y levantar actas, ya sea por iniciativa propia o a instancias de la autoridad administrativa correspondiente

Instrucción de 21 de febrero de 1816 por el que se crean los Censores en la escuelas de niños y niñas pobres de Madrid.

corresponda, para que se ponga el conveniente remedio, y si, lo que no debe esperarse, omitiese el hacerlo, lo manifestará el Seños Censor a la Junta General, para que en su vista tome la providencia que estime (7).

Tabla 2.1.16. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las tareas análogas aparecidas en el Reglamento General de Instrucción Pública de 1821.

LOE. 2/2006. Art. 151	Reglamento General de Instrucción pública. 29 de junio de 1821.
Inspectores de educación	
Funciones	
a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como los programas que en ellos inciden.	
b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.	
c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.	
d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.	<i>Art. 101. Primera, velar sobre toda la enseñanza pública, y cuidar de que se observen los reglamentos establecidos.</i>
e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres	
f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.	
g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.	<i>Art. 101. Séptima, dar cuenta anualmente a las Cortes del estado de la enseñanza pública en una memoria que deberá pasarles por medio del Gobierno.</i>
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.	
Disposición adicional cuarta, punto 3. La supervisión de los libros de texto y otros materiales curriculares es competencia de las administraciones educativas y constituirá parte del proceso ordinario de inspección que ejerce la Administración educativa sobre la totalidad de elementos que integran el proceso de enseñanza y aprendizaje, [...]	
Art. 153.e de la LO 2/2006 en la redacción dada por la LO 3/2020, «atribuciones de los inspectores». Elevar informes y hacer requerimientos cuando se detecten incumplimientos en la aplicación de la normativa, y levantar actas, ya sea por iniciativa propia o a instancias de la autoridad administrativa correspondiente	

Tabla 2.1.17. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las tareas asignadas a las Juntas Inspectoras en el Plan y Reglamento de Primeras Letras de 1825.

LOE. 2/2006. Art. 151	Plan y Reglamento de Primeras Letras. 6 de febrero de 1825.
Inspectores de educación	Juntas inspectoras: superior, de capital de provincia y de pueblo.
Funciones	
a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como los programas que en ellos inciden.	<ul style="list-style-type: none"> - Junta superior: promover la dotación de las escuelas y el celo en esa misma materia de las Juntas de capital de provincia y de pueblo. - Juntas de capital: inspección y vigilancia de las escuelas de la provincia, con posibilidad extraordinaria de nombrar visitadores para la inspección de escuelas. - Juntas de pueblo: de visitar regularmente las escuelas cada dos meses, para inspeccionar la instrucción, los métodos de enseñanza, corregir a los «niños desaplicados y díscolos» y amonestar, si era necesario, privadamente a los maestros,
b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.	<ul style="list-style-type: none"> - Junta Superior: Admitir y examinar, proyectos o métodos
c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.	
d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.	
e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres	
f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.	<ul style="list-style-type: none"> - Junta superior: Resolver las dudas leves, consultar las de más alcance al rey o al Consejo
g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.	
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.	<ul style="list-style-type: none"> - Junta superior: Reconocer méritos, o registrar los títulos expedidos por el Consejo - Juntas de capital: Dar cuenta a la Junta Superior de las oposiciones, exámenes y otras provisiones que se verifiquen, con especificación de las clases y dotaciones de las escuelas y de los arbitrios que hayan o puedan proporcionarse, además de los certificados de aprobación que expidiesen
Disposición adicional cuarta, punto 3. La supervisión de los libros de texto y otros materiales curriculares es competencia de las administraciones educativas y constituirá parte del proceso ordinario de inspección que ejerce la Administración educativa sobre la totalidad de elementos que integran el proceso de enseñanza y aprendizaje, [...]	<ul style="list-style-type: none"> - Junta superior: Vigilar la impresión, distribución y, en caso de niños pobres, gratuidad de los libros que han de enseñarse en las escuelas; - Juntas de pueblo: Cuidaban también de pago puntual a los maestros y pasantes. Cuidaban que la enseñanza sea «muy cristiana y metódica», (...) y reclamaban al ayuntamiento los auxilios necesarios para las escuelas; sobre todo, el menaje y libros para los pobres.

LOE. 2/2006. Art. 151

Art. 153.e de la LO 2/2006 en la redacción dada por la LO 3/2020, «atribuciones de los inspectores».
Eleva informes y hacer requerimientos cuando se detecten incumplimientos en la aplicación de la normativa, y levantar actas, ya sea por iniciativa propia o a instancias de la autoridad administrativa correspondiente

**Plan y Reglamento de Primeras Letras.
6 de febrero de 1825.**

La inspección y vigilancia sobre la educación moral correspondía a los obispos y párrocos; función que realizan visitándolas.
Podían suspender maestros que enseñaran errores de doctrina

Tabla 2.1.18. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las atribuciones y obligaciones asignadas a la Inspección General de Instrucción Pública en el Reglamento de 1826.

LOE. 2/2006. Art. 151	Reglamento de la Inspección General de Instrucción Pública. 13 de marzo de 1826.
Inspectores de educación	Inspección General de Instrucción pública
Funciones	Atribuciones y obligaciones
a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como los programas que en ellos inciden.	Inspeccionar todas las Universidades, Escuelas de Latinidad y de Primeras Letras, los Colegios de Humanidades, los seminarios no Conciliares y los demás establecimientos literarios no exceptuados; pero aun estos, velará para que se observen los Reglamentos en orden al método científico y literario. Ejercer la policía más activa y vigilante sobre catedráticos, profesores y maestros de todas clases.
b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.	
c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.	
d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.	Consultar al Rey las providencias, reformas y variaciones que crea convenientes en el sistema de instrucción pública ya establecido
e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres	Promover, por todos los medios que el Rey ha puesto a su disposición, la propagación de sanas doctrinas en todos los ramos del saber. Hacer que se ejecuten en todas sus partes y según su tenor literal los Reglamentos de Universidades, Colegios de Humanidades y Escuelas de Latinidad y Primeras letras, y las leyes anteriores no derogadas por ellos.
f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.	Decidir sobre las reclamaciones de los maestros que se consideren agraviados en las elecciones para escuelas de oposición.
g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.	Evacuar los informes que se le pidan por la superioridad y despachar sin demora los expedientes que por sí misma pueda resolver.

LOE. 2/2006. Art. 151

h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.

Disposición adicional cuarta, punto 3.
La supervisión de los libros de texto y otros materiales curriculares es competencia de las administraciones educativas y constituirá parte del proceso ordinario de inspección que ejerce la Administración educativa sobre la totalidad de elementos que integran el proceso de enseñanza y aprendizaje, [...]

Art. 153.e de la LO 2/2006 en la redacción dada por la LO 3/2020, «atribuciones de los inspectores».
Eleva informes y hacer requerimientos cuando se detecten incumplimientos en la aplicación de la normativa, y levantar actas, ya sea por iniciativa propia o a instancias de la autoridad administrativa correspondiente

Reglamento de la Inspección General de Instrucción Pública. 13 de marzo de 1826.

Mandar cerrar las escuelas, pensiones y casas de enseñanza regidas por empresa particular que no deban subsistir según los reglamentos.
Expedir los títulos a los Maestros y Maestras, registrar los ya expedidos por el Consejo y concederles la carta de jubilación. Consultar al Rey lo que estimen sobre las solicitudes que decidan para establecer escuelas, colegios o casas de pensión.
Conceder y negar permisos para tener academias.
Proponer al Rey, cuando convenga, Visitadores
Reconocer, coordinar y custodiar en su archivo cuantos expedientes y papeles relativos a la enseñanza pública existan
Dar cuenta fin de curso del estado en que se hallen todos los establecimientos literarios, de los progresos que se noten en las enseñanzas y de cuanto la inspección haya hecho para mejorarla añadiendo las observaciones que considere dignas de la Soberana atención.
Dar cuenta anual de los caudales que ingresen en su tesorería, y de su inversión.
Proponer al Rey cuantas disposiciones, leyes y providencias crea útiles para fomentar la ilustración general.

Determinar las obras que en todos los ramos de la enseñanza pública deban escribirse de nuevo, adicionarse, corregirse o traducirse.

Disponer que se escriban, adicionen, corrijan o traduzcan las obras que se estimen necesarias para las escuelas públicas de todas clases

Pedir informes y dar órdenes, en las materias de su competencia, a las personas y corporaciones a quienes corresponda

Tabla 2.2.2.1. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las funciones atribuidas al Servicio de Inspección Técnica de Educación en la Ley 14/70.

LOE. 2/2006. Art. 151	LGE. 14/1970. Art. 142
Inspectores de educación	Servicio de Inspección Técnica de Educación
Funciones	Funciones
a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como los programas que en ellos inciden.	
b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.	d) Evaluar el rendimiento educativo de los Centros docentes y Profesores de su zona respectiva o de la especialidad a su cargo en colaboración con los Institutos de Ciencias de la Educación. A tal efecto tendrá en cuenta la actividad orientadora y de inspección interna que, en su caso, puedan establecer para sus Centros las Entidades promotoras.
c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.	
d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.	a) Velar por el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones en todos los Centros docentes estatales y no estatales, en el ámbito de la función educativa.
e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres	
f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.	c) Asesorar a los Profesores de Centros estatales y no estatales sobre los métodos más idóneos para la eficacia de las enseñanzas que impartan.
g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.	
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.	b) Colaborar con los Servicios de Planeamiento en el estudio de las necesidades educativas y en la elaboración y actualización del mapa escolar de las zonas donde ejerza su función, así como ejecutar investigaciones concernientes a los problemas educativos de estas. e) Colaborar con los Institutos de Ciencias de la Educación en la organización de cursos y actividades para el perfeccionamiento y actividad del personal docente.

Tabla 2.2.2.2. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las funciones atribuidas a la inspección educativa en la Ley 1/90.

LOE. 2/2006. Art. 151	LGE. 14/1970. Art. 142
Inspectores de educación	Inspección educativa.
Funciones	Funciones
a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como los programas que en ellos inciden.	
b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.	a) Colaborar en la mejora de la práctica docente y del funcionamiento de los centros y en los procesos de renovación educativa.
c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.	b) Participar en la evaluación del sistema educativo.
d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.	c) Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones generales en el ámbito del sistema educativo.
e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres	
f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.	d) Asesorar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.
g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.	
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.	

Tabla 2.2.2.3. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las funciones asignadas a los inspectores de educación en la LOPEGCE 9/1995.

LOE. 2/2006. Art. 151.	LOPEGCD 9/1995. Art. 36.
Inspectores de educación	Inspectores de educación
Funciones	Funciones
a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como los programas que en ellos inciden.	a) Controlar y supervisar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos, tanto de titularidad pública como privada.
b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.	b) Colaborar en la mejora de la práctica docente y del funcionamiento de los centros, así como en los procesos de reforma educativa y de renovación pedagógica.
c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.	c) Participar en la evaluación del sistema educativo, especialmente en la que corresponde a los centros escolares, a la función directiva y a la función docente, a través del análisis de la organización, funcionamiento y resultados de los mismos.
d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.	d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.
e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres	
f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.	e) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.
g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.	f) Informar sobre los programas y actividades de carácter educativo promovidos o autorizados por las Administraciones educativas competentes, así como sobre cualquier aspecto relacionado con la enseñanza que le sea requerido por la autoridad competente o que conozca en el ejercicio de sus funciones, a través de los cauces reglamentarios.
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.	

Tabla 2.2.2.4. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las funciones y atribuciones asignadas a los inspectores de educación en la LOCE 10/2002.

LOE. 2/2006. Art. 151.	LOCE 10/2002. Art. 105.
Inspectores de educación	Inspectores de educación
Funciones	Funciones y atribuciones
a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como los programas que en ellos inciden.	a) Controlar y supervisar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos, tanto de titularidad pública como privada.
b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.	b) Supervisar la práctica docente y colaborar en su mejora continua y en la del funcionamiento de los centros, así como en los procesos de reforma educativa y de renovación pedagógica.
c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.	c) Participar en la evaluación del sistema educativo, especialmente en la que corresponde a los centros escolares, a la función directiva y a la función docente, a través del análisis de la organización, funcionamiento y resultados de los mismos.
d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.	d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.
e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres	
f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.	e) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.
g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.	f) Informar sobre los programas y actividades de carácter educativo promovidos o autorizados por las admones. educativas competentes, así como sobre cualquier aspecto relacionado con la enseñanza que le sea requerido por la autoridad competente o que conozca en el ejercicio de sus funciones, a través de los cauces reglamentarios
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.	

Tabla 2.2.2.5.A. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las funciones asignadas a los inspectores de educación en la LOMLOE 3/2020 (I).

LOE. 2/2006. Art. 151	LOMLOE. 3/2020. Art. 151
Inspectores de educación	Inspectores de educación
Funciones	Funciones
a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como los programas que en ellos inciden.	a) Supervisar, evaluar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos, así como los proyectos y programas que desarrollen, con respeto al marco de autonomía que esta Ley ampara
b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.	b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua
c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.	c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran
d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.	d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo
e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres	e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres.
f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.	f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones
g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.	g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.	h) Orientar a los equipos directivos en la adopción y seguimiento de medidas que favorezcan la convivencia, la participación de la comunidad educativa y la resolución de conflictos, impulsando y participando, cuando fuese necesario, en los procesos de mediación

Tabla 2.2.2.5.B. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las atribuciones asignadas a los inspectores de educación en la LOMLOE 3/2020 (II).

LOE. 2/2006. Art. 153	LOMLOE. 3/2020. Art. 153
Inspectores de educación	Inspectores de educación
Atribuciones de los inspectores.	Atribuciones de los inspectores.
a) Conocer directamente todas las actividades que se realicen en los centros, a los cuales tendrán libre acceso.	a) Conocer, supervisar y observar todas las actividades que se realicen en los centros, tanto públicos como privados, a los cuales tendrán libre acceso.
b) Examinar y comprobar la documentación académica, pedagógica y administrativa de los centros.	b) Examinar y comprobar la documentación académica, pedagógica y administrativa de los centros.
c) Recibir de los restantes funcionarios y responsables de los centros y servicios educativos, públicos y privados, la necesaria colaboración para el desarrollo de sus actividades, para cuyo ejercicio los inspectores tendrán la consideración de autoridad pública.	c) Recibir de los restantes funcionarios y responsables de los centros y servicios educativos, públicos y privados, la necesaria colaboración para el desarrollo de sus actividades, para cuyo ejercicio los inspectores tendrán la consideración de autoridad pública.
d) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.	d) Participar en las reuniones de los órganos colegiados o de coordinación docente de los centros, respetando el ejercicio de la autonomía que la Ley les reconoce, así como formar parte de comisiones, juntas y tribunales, cuando así se determine.
	e) Elevar informes y hacer requerimientos cuando se detecten incumplimientos en la aplicación de la normativa, y levantar actas, ya sea por iniciativa propia o a instancias de la autoridad administrativa correspondiente.
	f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.

La Ley Orgánica 3/2020 añade el art. 153 bis. relativo a los *Principios de actuación de la inspección educativa*.

Tabla 2.2.3.1. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las tareas asignadas a los Inspectores de Educación en el Decreto de 30 de marzo de 1849.

LOE. 2/2006. Art. 151	Decreto de 30 de marzo de 1849.
Inspectores de educación	Inspectores de educación
Funciones	
a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como los programas que en ellos inciden.	
b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.	
c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.	
d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.	
e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres	
f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.	
g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.	
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.	Los mismos Inspectores en las provincias donde exista escuela normal elemental tendrán obligación de enseñaren ella. Reemplazarán a los Directores en ausencias y enfermedades. Los Inspectores generales tendrán por principal objeto visitar las escuelas normales y las ordinarias de las capitales de provincia

Tabla 2.2.3.2. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las correspondencias asignadas a los Inspectores de Educación en el Reglamento de 20 de mayo de 1849.

LOE. 2/2006. Art. 151	Reglamento de 20 de mayo de 1849.
Inspectores de educación	Inspectores de educación.
Funciones	Correspondencia
a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como los programas que en ellos inciden.	Indagar necesidades de instrucción (1) Proponer cuantas mejoras crean convenientes (1) Investigar los recursos con que se sostienen las escuelas y vigilar sobre la recta administración de los bienes (4). Art. 20. 1, 2, 3,
b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.	Art. 20. 4, 5, 6
c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.	
d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.	Vigilar sobre el cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones vigentes (2)
e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres	
f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.	
g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.	Extender y elevar al Gobierno en el mes de Enero de cada año un informe sobre el estado de la instrucción primaria en sus respectivas provincias (6)
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.	Gestionar para que los maestros estén puntualmente pagados (3) Desempeñar en las comisiones de examen, tribunales de censura y demás corporaciones o actos a que deban asistir (5). Formar la estadística de los establecimientos de Instrucción primaria (7)

Tabla 2.2.3.3. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las atribuciones y deberes asignadas a los inspectores de educación en el Real Decreto de 1913.

LOE. 2/2006. Art. 151	Real Decreto de Organización de la Inspección de Primera Enseñanza de 5 de mayo de 1913.
Inspectores de educación	Inspectores de educación
Funciones	Atribuciones y deberes.
a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como los programas que en ellos inciden.	Inspeccionar las escuelas públicas en lo concerniente a los métodos y el material pedagógico, al estado y condiciones de los edificios, sus anejos y dependencias, a las salas destinadas a clases, a la asistencia escolar y a todo cuanto directa o indirectamente pueda contribuir al buen régimen y adelanto de la educación popular (1) Inspeccionar igualmente las instituciones circum y post escolares (2). Visitar muy especialmente los edificios en construcción para nuevas escuelas (7)
b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.	
c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.	
d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.	
e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres	Tramitar los expedientes de permuta, licencia, recompensas, sustituciones y cualquiera otra petición que formulen los maestros (9). Oír las quejas de los maestros, de las Autoridades locales y de los pueblos, inquiriendo imparcialmente el fundamento de ellas, y dando cuenta a la Superioridad de todo (10)
f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.	Formar y tramitar todos los expedientes que afecten a derechos de los maestros, condiciones de las escuelas y creación de estas, y acordar los traslados voluntarios de los maestros dentro de la localidad (5). Conceder diez días de licencia a los maestros de su jurisdicción, mediando causa urgente y justificándola (12).
g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.	
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.	Proponer a la Dirección General la suspensión o reforma de las juntas locales (3). Remitir anualmente a la Dirección General una memoria sobre el estado de la enseñanza en la zona de visita (4). Informar los escalafones de los maestros para el percibo del aumento gradual de sueldo (6). Incoar los expedientes de incompatibilidad (6). Llevar los libros y registros (8) Imponer a los maestros, por causas que no se consideren graves, las correcciones disciplinarias (11). Conceder diez días de licencia a los maestros de su jurisdicción, mediando causa urgente y justificándola (12)

Tabla 2.2.3.4. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las funciones asignadas a los inspectores de educación en el Decreto de 1932.

LOE. 2/2006. Art. 151.	Decreto de organización de la Inspección de Educación de 2 de diciembre de 1932.
Inspectores de educación	Inspectores de educación
Funciones	Funciones propias y exclusivas
a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como los programas que en ellos inciden.	Orientar, impulsar y dirigir el funcionamiento de las Escuelas nacionales (11.1) Orientar, impulsar y dirigir las Instituciones auxiliares de las Escuelas nacionales (11.1)
b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.	Visitar las demás Escuelas públicas y privadas para comprobar si en su labor se someten a los preceptos legales (11.3)
c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.	
d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.	Velará igualmente por el cumplimiento de las leyes en los demás Establecimientos de Primera enseñanza de carácter público o particular (1) Visitar las demás Escuelas públicas y privadas para comprobar si en su labor se someten a los preceptos legales (11.3)
e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres	
f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.	Informar los expedientes de sustitución, licencias y permutas de los Maestros racionales (11.6)
g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.	
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.	Contribuir al mejoramiento profesional de los Maestros. Perfeccionar la vida pedagógica de las Escuelas e intensificar su acción social (11.1) Cuidar especialmente de que sea respetada en todo momento la conciencia del niño (11.2) Conceder a los Maestros de su zona votos de gracias y proponerles para otras recompensas (11.4) Intervenir en la instalación material de la Escuela, visitando los edificios en construcción y proponiendo las reformas necesarias (11.5) Informar los expedientes de construcción y creación de Escuelas y los de sustitución, licencias y permutas de los Maestros racionales (11.6)

Tabla 2.2.3.5. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las funciones asignadas a los inspectores de educación en el Decreto 2915 de 1967.

LOE. 2/2006. Art. 151	Decreto 2915/1967 que aprueba el Reglamento del Cuerpo de Inspección Profesional de Enseñanza Primaria del Estado.
Inspectores de educación	Inspectores de educación
Funciones	Funciones
a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como los programas que en ellos inciden.	Ejercer las tareas de supervisión, dirección técnica y orientación pedagógica de la enseñanza y de los servicios escolares (2.2). Inspeccionar los Centros, Instituciones y servicios docentes de nivel primado, estatales y no estatales (2.4)
b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.	Comprobar el rendimiento del sistema escolar primario, en su doble aspecto educativo e instructivo (2.9)
c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.	
d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.	Velar por la observancia en todos los Centros de Enseñanza Primaria, estatales y no estatales de la Nación, de las Leyes y Reglamentos vigentes para este grado de enseñanza (2.1). Velar por el cumplimiento de las normas promulgadas a propuesta de los Organismos correspondientes (2.5)
e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres	
f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.	Asesorar a los Centros de Enseñanza Primaria sobre aplicación de los cuestionarios, confección de programas y utilización de textos (2.7)
g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.	Realizar y mantener actualizado un estudio detallado dela población escolar, su tendencia y distribución geográfica (2.3). Emitir cuantos informes o dictámenes en materias propias de su competencia sean solicitados por la superioridad (2.15). Recoger, depurar y elaborar los datos estadísticos relativos a la Enseñanza Primaria y promoción cultural de adultos (2.16). Informar las solicitudes de autorización de Centros no estatales (2.19)

LOE. 2/2006. Art. 151

h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.

Disposición adicional cuarta, punto 3.
La supervisión de los libros de texto y otros materiales curriculares es competencia de las administraciones educativas y constituirá parte del proceso ordinario de inspección que ejerce la Administración educativa sobre la totalidad de elementos que integran el proceso de enseñanza y aprendizaje, [...]

Decreto 2915/1967 que aprueba el Reglamento del Cuerpo de Inspección Profesional de Enseñanza Primaria del Estado.

Intervenir en la elaboración de los planes de estudio y actividades educativas de nivel primario (2.6)
Promover o informar, la implantación y orientar el funcionamiento de las Instituciones, servicios y actividades complementarias (2.8).
Promover la proyección de la Escuela (2.10)
Autorizar el uso oficial del Libro de Escolaridad Primaria (2.11)
Presidir las Comisiones Examinadoras para otorgar el certificado de estudios primarios (2.12)
Organizar los Centros de Colaboración Pedagógica y otras reuniones orientadas al perfeccionamiento del Magisterio en ejercicio (2.12).
Asumir las funciones rectoras, asesoras y ejecutivas que se le encomienden en la elaboración y realización de los planes de construcciones escolares (2.17).
Informar y promover los expedientes de creación, transformación clausura temporal o supresión de Centros estatales de Enseñanza Primaria (2.18).
Formar parte de los tribunales y Comisiones para la selección, promoción y cambio de destino de Directores escolares y Maestros (2.20). E inspectores (2.21).
Conceder por delegación, hasta diez días de permiso durante el curso escolar a los Directores escolares (2.22).
Proponer a la superioridad las distinciones o recompensas a las Juntas Municipales de Enseñanza Primaria (...) o el apercibimiento, la sanción o modificación de aquellas en cuyo funcionamiento se observen negligencias (2.23).
Informar y promover los expedientes de recompensas a Directores escolares y Maestros (2.24).
Las demás atribuidas por Leyes y Reglamentos (2.25)

Participar en los dictámenes y concursos para la selección de textos (2.14)

Tabla 2.2.3.6. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las funciones y atribuciones de los inspectores de educación en el Decreto 664 de 1973.

LOE. 2/2006. Art. 151.	Decreto 664/1973, de 22 de marzo, sobre funciones del Servicio de Inspección Técnica de Educación.
Inspectores de educación	Inspectores de educación.
Funciones	Funciones y atribuciones
a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como los programas que en ellos inciden.	d) Evaluar el rendimiento educativo de los Centros docentes y Profesores de su zona respectiva o de la especialidad a su cargo en colaboración con los Institutos de Ciencias de la Educación.
b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.	
c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.	d) Evaluar el rendimiento educativo de los Centros docentes y Profesores de su zona respectiva o de la especialidad a su cargo en colaboración con los Institutos de Ciencias de la Educación.
d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.	a) Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones en todos los Centros docentes estatales y no estatales, en el ámbito de la función educativa
e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres	
f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.	c) Asesorar a los Profesores de Centros estatales y no estatales sobre los métodos más idóneos para la eficacia de las enseñanzas que impartan. Atribución_ a) Asesorar, orientar e inspeccionar los Centros docentes estatales y no estatales para vigilar el cumplimiento de cuanto disponga la Ley General de Educación y sus normas reglamentarias en el ámbito de la función educativa actuando, en su caso, en la forma prevenida en el párrafo tercero del artículo noveno del Decreto dos mil ochocientos treinta y dos/mil novecientos. setenta y dos, de quince de septiembre
g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.	Atribución-b) Proponer al Subsecretario las medidas oportunas para corregir las deficiencias, e irregularidades de orden educativo que haya podido advertir en el ejercicio de las funciones inspectoras. c) Proponer al órgano competente: (...) la apertura de expedientes por infracción de la legislación de cuyo cumplimiento está encargada de velar, (...). d) Informar respecto a las condiciones pedagógicas en las actuaciones siguientes: Uno. Creación, apertura, modificación. traslado, clausura y supresión de Centros docentes estatales y no estatales, así como en los expedientes de conciertos y subvenciones con estos últimos. Dos. Construcción de edificios destinados a actividades educativa. Tres. Clasificación de Centros experimentales; así como sobre los cursos y programas de experimentación Cuatro. Selección y distribución de mobiliario y material de enseñanza. Cinco. En cuantos asuntos y expedientes requiera un informe la superioridad.

LOE. 2/2006. Art. 151.

h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.

Decreto 664/1973, de 22 de marzo, sobre funciones del Servicio de Inspección Técnica de Educación.

- b) Colaborar con los Servicios de planeamiento en el estudio de las necesidades educativas y en la elaboración y actuación del mapa escolar de las zonas donde ejerza su función, así como ejecutar investigaciones concernientes a los problemas educativos de éstas.
- e) Colaborar con los Institutos de Ciencias de la Educación en la organización de cursos y actividades para el perfeccionamiento y actividad del personal docente.

Atribución - e) Sin perjuicio de las competencias que según el artículo ciento treinta y seis coma tres y cuatro de la Ley General de Educación corresponden en cuanto a la educación religiosa, a las enseñanzas de formación política, Cívico-social, educación física y deportiva- y enseñanzas de actividades domésticas a la Iglesia y a los Organismos del Movimiento cuyas funciones y actividades supervisoras especiales se regularán coordinadamente con las que se establecen en el presente Decreto, el Servicio de Inspección Técnica de Educación velará por el cumplimiento de las normas que al efecto se promulguen por el Gobierno para la regulación y el ordenamiento de estas enseñanzas.

Tabla 2.2.3.7. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las funciones y atribuciones asignadas a los inspectores de educación en el Real Decreto 1524 de 1989.

LOE. 2/2006. Art. 151.	Real Decreto 1524/1989 que regula las funciones y la organización del Servicio de Inspección Técnica de Educación.
Inspectores de educación	Inspectores de educación.
Funciones	Funciones y atribuciones
a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como los programas que en ellos inciden.	
b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.	
c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.	Evaluar el rendimiento educativo del sistema, a través del análisis de la organización, funcionamiento y resultados de los Centros docentes y servicios (2.3)
d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.	Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes (2.1)
e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres	
f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.	Asesorar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa y a los órganos unipersonales y colegiados de los Centros docentes (2.4)
g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.	Informar sobre todo aquello que le haya sido requerido por la autoridad (2.6).
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.	Colaborar en las reformas educativas, actividades de perfeccionamiento del Profesorado, procesos de renovación pedagógica y programas experimentales (2.2). Colaborar con las unidades de planificación en el estudio de las necesidades educativas de cada provincia (2.5)
	Atribuciones: Visitar los Centros docentes públicos y privados, así como los servicios e instalaciones (3.1.a) Acceder a la documentación académica y administrativa que precise (3.1.b) Los Inspectores, en el ejercicio de su función, tendrán la consideración de autoridad pública (3.2)

Tabla 2.2.3.8. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las funciones asignadas a los inspectores coordinadores en la Orden de 1990.

LOE. 2/2006. Art. 151.	Orden de 27 de septiembre de 1990. Normas de desarrollo del Real Decreto 1524/1989.
Inspectores de educación	Inspectores de educación.
Funciones	Establece las funciones de inspectores coordinadores.
a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como los programas que en ellos inciden.	
b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.	
c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.	
d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.	
e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres	
f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.	
g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.	
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.	

Sin relación análoga.

Tabla 2.2.3.9. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con los fines y funciones asignados a los inspectores de educación en la Orden de 1996.

LOE. 2/2006. Art. 151.	Orden de 29 de febrero de 1996 por la que se regula la organización y funcionamiento de la Inspección de Educación.
Inspectores de educación	Inspectores de educación.
Funciones	Diferencia entre fines (art. 2) –art. 148 LO 2/06- y funciones (art. 3)
a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como los programas que en ellos inciden.	Controlar y supervisar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos, tanto de titularidad pública como privada (3.a)
b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.	Contribuir a la mejora del sistema educativo y a la calidad de la enseñanza (2.c) Colaborar en la mejora de la práctica docente y del funcionamiento de los centros (3.b)
c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.	c) Participar en la evaluación del sistema educativo (3.c)
d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.	Asegurar el cumplimiento de las leyes (2.a). Velar por el cumplimiento, en los centros docentes, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes (3.d)
e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres	
f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.	Garantizar los derechos y la observancia de los deberes de cuantos participan en los procesos educativos (2.b) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones (3.e)
g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.	Inspeccionar e informar, a través de los cauces reglamentarios, sobre los servicios, programas y actividades de carácter educativo promovidos o autorizados por la Administración educativa (3.f).
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.	

Tabla 2.2.4.1. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las funciones asignadas a los inspectores de educación en el Decreto 61/2019.

LOE. 2/2006. Art. 151	Decreto 61/2019. Art. 3
Inspectores de educación	Inspectores de educación
Funciones	Establece funciones, atribuciones y principios de actuación
a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como los programas que en ellos inciden.	a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos, así como los programas que en ellos inciden.
b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.	b) Supervisar y evaluar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.
c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.	c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.
d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.	d) Asesorar y potenciar la evaluación interna de los centros
e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres	e) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.
f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.	f) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en particular los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres, así como velar por la igualdad y no discriminación de otros colectivos que por razón no sólo de género sino de orientación o identidad sexual o por cualquier otra circunstancia, puedan ser objeto de discriminación.
g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.	g) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.	h) Emitir los informes solicitados por la Administración educativa de la Comunidad de Madrid o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.
	j) Cualesquiera otras que se le encomiende de acuerdo con la normativa vigente
	h) Orientar a los equipos directivos en la adopción y seguimiento de medidas que favorezcan la convivencia, la participación de la comunidad educativa y la resolución de conflictos, impulsando y participando, cuando fuese necesario, en los procesos de mediación
	i) Colaborar y participar en los órganos consultivos y de evaluación del sistema educativo no universitario de la Comunidad de Madrid.

Tabla 2.2.4.2. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las funciones, atribuciones y actuaciones asignadas a los inspectores de educación en la Orden 732/2021.

LOE. 2/2006. Art. 151	Orden 732/2021 de organización, estructura y funcionamiento de la Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid.
Inspectores de educación	Inspectores de educación
Funciones	Establece funciones, atribuciones, actuaciones, ética profesional, principios éticos y principios de conducta.
a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como los programas que en ellos inciden.	a) Supervisar, evaluar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos, así como los proyectos y programas que desarrollen, con respeto a su marco de autonomía.
b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.	b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.
c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.	c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.
d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.	d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.
e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres	e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en las leyes, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres.
f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.	f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones
g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.	g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.	
	h) Orientar a los equipos directivos en la adopción y seguimiento de medidas que favorezcan la convivencia, la participación de la comunidad educativa y la resolución de conflictos, impulsando y participando, cuando fuese necesario, en los procesos de mediación.

Tabla 3.1.1. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las funciones de los inspectores de educación en países de la UE (I). República Francesa.

LOE. 2/2006. Art. 151	Reglamento General de Instrucción pública, de 29 de junio de 1821
Inspectores de educación	L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR)
Funciones	<p>Missions</p> <p>Competente en educación, enseñanza superior, investigación, juventud, deporte, educación popular, vida comunitaria, lectura, documentación y bibliotecas públicas (R241-3).</p> <p>Bajo el mandato directo de los ministros correspondientes; puede recibir encargos del Primer Ministro Francés (R241-4).</p>
a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como los programas que en ellos inciden.	<p>Control de los departamentos, establecimientos, instituciones u organismos que participen o contribuyan a la aplicación de la legislación en materia de educación, educación superior, investigación y tecnología (L241-2).</p> <p>La inspección de los establecimientos de educación primaria y secundaria, públicos o privados (L241-4 I).</p> <p>Ello se relaciona con la moral, la higiene, la salubridad y con el cumplimiento de las obligaciones impuestas; y puede referirse a la enseñanza sólo para verificar si no es contraria a la moral, a la Constitución, a las leyes y en particular a la educación obligatoria (L241-4 II)</p>
b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.	... puede referirse a la enseñanza sólo para verificar si no es contraria a la moral, a la Constitución, a las leyes y en particular a la educación obligatoria (L241-4 II)
c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.	
d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.	Las verificaciones (...) se refieren al cumplimiento de las leyes y al destino de estos concursos o contribuciones (...) para la que fueron concedidas; y a la gestión de los recursos humanos en los establecimientos (L241-2).
e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres	
f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.	
g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.	<p>Elaboración de informes específicos o solicitados por otros organismos; aunque se encuentren en el exterior (L241-2 II) – (R241-9).</p> <p>Emitir informe anual sobre la evaluación de la actividad de educación continua de adultos (D241-1)</p>
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.	<p>Control e inspección del personal, de los servicios centrales y descentralizados, de los establecimientos públicos y de todos los organismos que reciban o se beneficien de ayudas directas o indirectas de los ministerios afectados (R241-5).</p> <p>Participa en la selección, formación y evaluación del personal; contribuye al control del personal de inspección, dirección, enseñanza, educación y orientación y coordina la actuación de los órganos de inspección con competencia educativa (R241-7).</p> <p>Auditoría de la utilización de los recursos públicos (L241-2 - II)</p>

LOE. 2/2006. Art. 151

Reglamento General de Instrucción pública, de 29 de junio de 1821

Atribuciones:

libre acceso a todas las administraciones del Estado y de las autoridades públicas, así como a todos los servicios, establecimientos, instituciones u organismos (L241-2 III)

Las administraciones del Estado, los poderes públicos, los servicios, los establecimientos, las instituciones o los organismos mencionados en el párrafo anterior están obligados a prestar su auxilio a los miembros de la Inspección General, a proporcionarles todas las justificaciones y toda información útil y a comunicarles todos los documentos necesarios para el cumplimiento de sus misiones. La falta de colaboración por parte de los directores se sanciona con multa de 15000€ (L241-7 II)

- Para las operaciones que utilizan TI, el derecho de comunicación implica el acceso al software y los datos, así como la capacidad de solicitar su transcripción por cualquier tratamiento (L241-2).

los auditores de las organizaciones controladas quedan relevados del secreto profesional respecto de los miembros de la inspección general de la educación, el deporte e investigar (L241-2)

Los inspectores están obligados a respetar la obligación de secreto profesional. La IGÉSR) toma todas las medidas para garantizar el secreto de sus investigaciones (R241-14).

Tabla 3.1.2. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las funciones de los inspectores de educación en países de la UE (II). República Francesa.

LOE. 2/2006. Art. 151	Reglamento General de Instrucción pública, de 29 de junio de 1821
Inspectores de educación	L'Inspection d'académie – Inspection Pédagogique regional (IA-IPR)
Funciones	Missions
a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como los programas que en ellos inciden.	Realizan la evaluación del personal (...) con miras a promover la calidad de la educación continua para adultos y la coherencia global entre la formación inicial y la educación continua (D241-2). Inspeccionan, según sus especialidades, al personal docente, educativo y de orientación de las escuelas, colegios y escuelas secundarias y velan por el cumplimiento de los objetivos y programas nacionales de formación, en el marco de los ciclos de enseñanza; son responsables de las misiones de control educativo (R241-19 b).
b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.	Evalúan el trabajo individual y el trabajo en equipo del personal docente, educativo y de orientación de las escuelas, colegios y escuelas secundarias y contribuyen a la evaluación de la enseñanza de las disciplinas, unidades didácticas, procedimientos y resultados de la política educativa. Proceden, en particular, a la observación directa de actos pedagógicos (R241-19 a). Inspeccionan al personal directivo de los establecimientos educativos o de formación, a los directores de los centros de información y orientación, a los profesores asociados, así como a los docentes en cursos de posgrado (R241-21).
c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.	
d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.	Velan por la implementación de la política educativa adoptada por el ministro responsable de la educación (R241-19)
e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres	
f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.	
g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.	

LOE. 2/2006. Art. 151

h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.

Reglamento General de Instrucción pública, de 29 de junio de 1821

c) Participan en las actividades docentes de formación inicial, continua y estudio-trabajo, prestan su apoyo al desarrollo de los proyectos escolares y colaboran con la inspección general de educación, deporte e investigación en la evaluación de las experiencias educativas y su generalización;

d) Participarán en la contratación y formación del personal educativo nacional y en la organización de los exámenes;

e) Aportan su experiencia en estos diferentes campos, así como en la orientación de los alumnos, los exámenes, la gestión del personal educativo y la elección del equipamiento educativo (R241-19). Puede recibir misiones específicas por tiempo determinado por parte del Rector de la Academia (R241-20).

Tabla 3.1.3. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las funciones de los inspectores de educación en países de la UE (III). República Francesa.

LOE. 2/2006. Art. 151	Reglamento General de Instrucción pública, de 29 de junio de 1821
Inspectores de educación	L'Inspection de l'Éducation Nationale (IEN)
Funciones	Missions
a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como los programas que en ellos inciden.	La inspección de los establecimientos de educación primaria y secundaria, públicos o privados (L241-4). Realizan la evaluación del personal (...) con miras a promover la calidad de la educación continua para adultos y la coherencia global entre la formación inicial y la educación continua (D241-2). Inspeccionan, según sus especialidades, al personal docente, educativo y de orientación de las escuelas, colegios y escuelas secundarias y velan por el cumplimiento de los objetivos y programas nacionales de formación, en el marco de los ciclos de enseñanza; son responsables de las misiones de control educativo (R241-19 b).
b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.	Evalúan el trabajo individual y el trabajo en equipo del personal docente, educativo y de orientación de las escuelas, colegios y escuelas secundarias y contribuyen a la evaluación de la enseñanza de las disciplinas, unidades didácticas, procedimientos y resultados de la política educativa. Proceden, en particular, a la observación directa de actos pedagógicos (R241-19 a). Inspeccionan al personal directivo de los establecimientos educativos o de formación, a los directores de los centros de información y orientación, a los profesores asociados, así como a los docentes en cursos de posgrado (R241-21).
c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.	
d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.	Velan por la implementación de la política educativa adoptada por el ministro responsable de la educación (R241-19)
e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres	
f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.	
g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.	

LOE. 2/2006. Art. 151

h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.

Reglamento General de Instrucción pública, de 29 de junio de 1821

c) Participan en las actividades docentes de formación inicial, continua y estudio-trabajo, prestan su apoyo al desarrollo de los proyectos escolares y colaboran con la inspección general de educación, deporte e investigación en la evaluación de las experiencias educativas y su generalización;

d) Participarán en la contratación y formación del personal educativo nacional y en la organización de los exámenes;

e) Aportan su experiencia en estos diferentes campos, así como en la orientación de los alumnos, los exámenes, la gestión del personal educativo y la elección del equipamiento educativo (R241-19).

Puede recibir misiones específicas por tiempo determinado por parte del Rector de la Academia (R241-20)

Atribuciones:

Recibir de los delegados departamentales de educación nacional toda la información útil que han obtenido durante sus visitas a las escuelas (R241-31).

Tabla 3.2.1. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las funciones de los inspectores de educación en países de la UE (I). República Italiana.

LOE. 2/2006. Art. 151	Decreto Legislativo nº 297 del 16 aprile 1994
Inspectores de educación	Ispettori tecnici che operano in campo nazionale, in campo regionale e provinciale.
Funciones	Funzione ispettiva
a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como los programas que en ellos inciden.	
b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.	
c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.	
d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.	1. La función de inspección contribuye, de acuerdo con las directrices del Ministro de Educación y en el marco de las normas generales de la educación, a la consecución de los objetivos de educación y formación encomendados a los centros escolares y educativos.
e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres	
f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.	... Pueden ser consultados por los consejos escolares provinciales en relación con su función; prestan asistencia técnica y pedagógica a las instituciones educativas y asisten a las inspecciones ordenadas por el Ministerio de Educación, la Superintendencia Regional de Escuelas o la Superintendencia de Educación.
g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.	
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.	3. Los inspectores técnicos contribuyen a la promoción y coordinación de cursos de perfeccionamiento para el personal directivo y docente de los centros educativos de todos los niveles. Formulan propuestas y dictámenes sobre los programas de enseñanza y exámenes y su adaptación, sobre la utilización de medios didácticos y tecnologías de aprendizaje, así como sobre las iniciativas experimentales que coordinan. Asisten y colaboran en los cursos de actualización para el personal directivo y docente en el contexto de los círculos de enseñanza, las escuelas, los distritos, las regiones y a nivel nacional. 4. Los inspectores técnicos también realizan estudios, investigaciones y asesoramiento técnico para el Ministro, los Directores Generales, los jefes de los servicios centrales, los directores de los centros escolares y las autoridades educativas. 5. Al final de cada curso escolar, los inspectores elaboran un informe sobre la marcha general de las actividades y servicios escolares.

Tabla 3.3.1. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las funciones de los inspectores de educación en países de la UE (I). Inglaterra.

LOE. 2/2006. Art. 151	Education Act 2005 Education and Inspections Act (2006) Education and Skills Act (2008) The Education (Independent School Standards) Regulations (2014) Childcare Act (2006)
Inspectores de educación	Her Majesty Inspector Inspector
Funciones	Duties of the inspector
a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como los programas que en ellos inciden.	Art. 5.1. Education Act (2005) Art. 126. Education and Inspections Act (2006). Capacidad de inspeccionar cualquier centro Art. 109. Education and Skills Act (2008). Deber de inspeccionar un centro registrado por orden del Secretario de Estado Art. 49. Childcare Act (2006) Part 3A. Childcare Act (2006)
b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.	Art. 118.7. Education and Inspections Act (2006). Inspección de enseñanza, clase de educación y emitir informe.
c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.	Education and Inspections Act (2006)
d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.	The Education (Independent School Standards) Regulations (2014) - En lo relativo a la calidad de la enseñanza impartida (P1). - Desarrollo espiritual, moral, social y cultural de los alumnos (P2). - Bienestar, salud y seguridad de los alumnos (P3). - Idoneidad del personal, del personal suplente y de los titulares (P4). - Locales y establecimiento de los centros educativos (P5). - Gestión de datos e información y a transparencia de los informes (P6). - Supervisión de la tramitación de reclamaciones (P7). - Y calidad de la dirección y gestión de los centros educativos (P8)..
e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres	
f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.	Art. 116. Education and Inspections Act (2006) Art. 118. Functions of the Chief Inspector. Education and Inspections Act (2006) El Inspector Jefe tiene la obligación general de mantener informado al Secretario de Estado (...)
g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.	Art. 5.5A. Education Act (2005) Part 3A. Childcare Act (2006)
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.	Art. 118.7. Education and Inspections Act (2006) Capacidad de inspeccionar documentos (...)

Tabla 3.4.1. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las funciones de los inspectores de educación en países de la UE (I). Finlandia.

LOE. 2/2006. Art. 151	Normativa variada.
Inspectores de educación	Valvoja (no existe la figura como tal)
Funciones	
a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como los programas que en ellos inciden.	<p>En esta función existen tres niveles:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Como función propia del Ministerio de Educación y Cultura. - Como Función del Centro Finlandés de Evaluación de la Educación (FINEEC) <p>Ley del Centro Nacional de Evaluación de la Educación (1295/2013) .</p> <ul style="list-style-type: none"> - Y funciones de las Agencias Administrativas Estatales Regionales. <p>https://avi.fi/en/services/individuals/enforcement-and-reporting-violations/oversight-of-education-services</p>
b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.	<p>El papel del director es conducir, dirigir y supervisar la labor docente y educativa de la escuela primaria y realizar las tareas administrativas, financieras y docentes que le sean asignadas</p> <p>Art. 19 de la Ley de Escuelas Primarias de 476/1983.</p> <p>El FINEEC también puede realizar visita a las aulas, dentro de lo establecido en el Plan Nacional de Evaluaciones Educativas.</p>
c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.	<p>Función del Centro Finlandés de Evaluación de la Educación (FINEEC) a nivel macro y a nivel micro.</p> <p>Ley del Centro Nacional de Evaluación de la Educación (1295/2013) .</p>
d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.	<p>En esta función existen tres niveles:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Como función propia del Ministerio de Educación y Cultura. - Como Función del Centro Finlandés de Evaluación de la Educación (FINEEC) <p>Ley del Centro Nacional de Evaluación de la Educación (1295/2013) .</p> <ul style="list-style-type: none"> - Y funciones de las Agencias Administrativas Estatales Regionales. <p>https://avi.fi/en/services/individuals/enforcement-and-reporting-violations/oversight-of-education-services</p>
e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres	
f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.	<p>Agencias Administrativas Estatales Regionales.</p> <p>https://avi.fi/en/services/individuals/enforcement-and-reporting-violations/oversight-of-education-services</p> <p>El FINEEC también puede mantener reuniones con personal y alumnos en sus procesos de evaluación, dentro de lo establecido en el Plan Nacional de Evaluaciones Educativas.</p>
g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.	<p>Función del Centro Finlandés de Evaluación de la Educación (FINEEC) a nivel macro y micro.</p> <p>Ley del Centro Nacional de Evaluación de la Educación (1295/2013) .</p>
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.	

Tabla 4.1.1. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las funciones de los inspectores de trabajo y seguridad social (I).

LOE. 2/2006.	Ley 23/2015 Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Inspectores de educación	Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Cuerpo de Subinspectores Laborales.
<p>Art. 148.3. La inspección educativa se realizará sobre todos los elementos y aspectos del sistema educativo, a fin de asegurar el cumplimiento de las leyes, la garantía de los derechos y la observancia de los deberes de cuantos participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la mejora del sistema educativo y la calidad y equidad de la enseñanza</p>	<p>Art. 1.1. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social es un servicio público al que corresponde ejercer la vigilancia del cumplimiento de las normas del orden social y exigir las responsabilidades pertinentes, así como el asesoramiento y, en su caso, conciliación, mediación y arbitraje en dichas materias, lo que efectuará de conformidad con los principios del Estado social y democrático de Derecho que consagra la Constitución Española, y con los Convenios número 81 y 129 de la Organización Internacional del Trabajo.</p>
<p>Art. 153.bis (LO 3/2020). Principios de actuación de la inspección educativa. a) Respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas, defensa del interés común y los valores democráticos y evitación de cualquier conducta que pueda generar discriminación por razón de origen, género, orientación sexual, religión opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.</p>	<p>Art. 2. Principios. a) Eficacia y calidad en la prestación del servicio a los ciudadanos.</p>
b) Profesionalidad e independencia de criterio técnico.	
c) Imparcialidad y eficiencia en la consecución de los objetivos fijados.	d) Imparcialidad, objetividad e igualdad de trato y no discriminación en el ejercicio de la función inspectora.
d) Transparencia en cuanto a los fines de sus actuaciones, los instrumentos y las técnicas utilizados	
	<p>b) Concepción única e integral del Sistema, garantizándose su funcionamiento cohesionado mediante la coordinación, cooperación y participación de las diferentes Administraciones Públicas. c) Unidad de función y de actuación inspectora en todas las materias del orden social, en los términos establecidos en esta ley, sin perjuicio de los criterios de especialización funcional y de actuación programada. e) Reserva de la función inspectora en el orden social a los funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y del Cuerpo de Subinspectores Laborales, en los términos previstos en esta ley. f) Organización y desarrollo de la actividad conforme a los principios de trabajo programado y en equipo. g) Ingreso y convocatoria únicos en los Cuerpos Nacionales de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y de Subinspectores Laborales, mediante procesos selectivos unitarios de carácter estatal. h) Movilidad entre las Administraciones Públicas en los procesos de provisión de puestos de trabajo para funcionarios de los Cuerpos Nacionales del Sistema de Inspección. i) Participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas respecto del conjunto de las funciones atribuidas al Sistema</p>

Tabla 4.1.2. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las funciones de los inspectores de trabajo y seguridad social (II).

LOE. 2/2006.	Ley 23/2015 Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Art. 151. Funciones.	Artículo 12. De la función inspectora.
a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como los programas que en ellos inciden.	1. De vigilancia y exigencia del cumplimiento (...) del contenido de los acuerdos y convenios colectivos
b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.	
c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.	
d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.	1. De vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y (...).
e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres	
f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.	2. De asistencia técnica.
g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.	
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.	Art. 14. Funciones de los Subinspectores Laborales. 1. Los funcionarios del Cuerpo de Subinspectores Laborales están facultados para desarrollar las funciones inspectoras y ejercer las competencias atribuidas en este artículo, bajo la dirección y supervisión técnica del Inspector de Trabajo y Seguridad Social responsable de la unidad, grupo o equipo al que estén adscritos
Art. 153. Atribuciones de los inspectores. d) Participar en las reuniones de los órganos colegiados o de coordinación docente de los centros, respetando el ejercicio de la autonomía que la Ley les reconoce, así como formar parte de comisiones, juntas y tribunales, cuando así se determine.	Art. 12. 3. De conciliación, mediación y arbitraje.
Art. 3.1.h de la Orden 732/21 h) Orientar a los equipos directivos en la adopción y seguimiento de medidas que favorezcan la convivencia, la participación de la comunidad educativa y la resolución de conflictos, impulsando y participando, cuando fuese necesario, en los procesos de mediación.	

Tabla 4.1.3. Vinculación de las atribuciones de la Ley Orgánica de Educación con las facultades de los inspectores de trabajo y seguridad social (III).

LOE. 2/2006.	Ley 23/2015 Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Artículo 153. Atribuciones de los inspectores.	Artículo 13. Facultades de los inspectores de Trabajo y Seguridad Social para el desempeño de sus competencias.
a) Conocer, supervisar y observar todas las actividades que se realicen en los centros, tanto públicos como privados, a los cuales tendrán libre acceso.	1. Entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso en todo centro de trabajo, establecimiento o lugar sujeto a inspección y a permanecer en el mismo. Si el centro sometido a inspección coincidiese con el domicilio de una persona física, deberán obtener su expreso consentimiento o, en su defecto, la oportuna autorización judicial. Al efectuar una visita de inspección, deberán identificarse documental y comunicar su presencia al empresario o a su representante o persona inspeccionada, a menos que consideren que dicha identificación y comunicación puedan perjudicar el éxito de sus funciones.
b) Examinar y comprobar la documentación académica, pedagógica y administrativa de los centros.	3. Practicar cualquier diligencia de investigación, examen, reconstrucción o prueba que consideren necesario para realizar la función prevista en el artículo 12.1 y, en particular, para: <ul style="list-style-type: none"> a) Requerir información, sólo o ante testigos, al empresario o al personal de la empresa (...). b) Exigir la comparecencia del empresario o de sus representantes y encargados, de los trabajadores, de los perceptores o solicitantes de prestaciones sociales y de cualesquiera sujetos (...) c) Examinar en el centro o lugar de trabajo todo tipo de documentación con trascendencia en la verificación del cumplimiento de la legislación del orden social, (...) d) Tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados o manipulados en el establecimiento, realizar mediciones, obtener fotografías, videos, grabación de imágenes, levantar croquis y planos, siempre que se notifique al empresario o a su representante y obtener copias y extractos de los documentos a que se refiere el apartado 3.c).
c) Recibir de los restantes funcionarios y responsables de los centros y servicios educativos, públicos y privados, la necesaria colaboración para el desarrollo de sus actividades, para cuyo ejercicio los inspectores tendrán la consideración de autoridad pública .	2. Hacerse acompañar en las visitas de inspección por el empresario o su representante, los trabajadores, sus representantes y por los peritos y técnicos de la empresa o de sus entidades asesoras que estimen necesario para el mejor desarrollo de la función inspectora, así como por peritos o expertos pertenecientes a la Administración u otros habilitados oficialmente. En el ejercicio de sus funciones, los inspectores de Trabajo y Seguridad Social tienen el carácter de autoridad pública y están autorizados para: (Introducción del art. 13: Facultades)
d) Participar en las reuniones de los órganos colegiados o de coordinación docente de los centros, respetando el ejercicio de la autonomía que la Ley les reconoce, así como formar parte de comisiones, juntas y tribunales, cuando así se determine.	
e) Elevar informes y hacer requerimientos cuando se detecten incumplimientos en la aplicación de la normativa, y levantar actas, ya sea por iniciativa propia o a instancias de la autoridad administrativa correspondiente	4. Adoptar, en cualquier momento del desarrollo de las actuaciones, las medidas cautelares que estimen oportunas y sean proporcionadas a su fin, para impedir la destrucción, desaparición o alteración de la documentación mencionada en el apartado anterior, siempre que no cause perjuicio de difícil o imposible reparación a los sujetos responsables o implique violación de derechos.

LOE. 2/2006.

f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias

Art. 153. Atribuciones de los inspectores.

Para cumplir las funciones de la inspección educativa los inspectores tendrán las siguientes atribuciones:

e) Elevar informes y hacer requerimientos cuando se detecten incumplimientos en la aplicación de la normativa, y levantar actas, ya sea por iniciativa propia o a instancias de la autoridad administrativa correspondiente.

f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias

Ley 23/2015 Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social

5. Proceder, en su caso, en cualquiera de las formas a que se refiere el artículo 22.
(advertir, requerir, informar, proponer, iniciar o promover procedimiento; instar, ordenar la paralización; comunicar, proponer al superior jerárquico; informar al órgano competente; informar a los servicios públicos; etc.)

Art. 22. Medidas derivadas de la actividad inspectora.

Los inspectores de Trabajo y Seguridad Social, finalizada la actividad comprobatoria inspectora, **podrán adoptar las siguientes medidas:**

1. Advertir y requerir al sujeto responsable, en vez de iniciar un procedimiento sancionador, cuando las circunstancias del caso así lo aconsejen, y siempre que no se deriven perjuicios directos a los trabajadores o a sus representantes.
2. Requerir al sujeto responsable para que, en el plazo que se le señale, adopte las medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden social o subsane las deficiencias observadas en materia de prevención de riesgos laborales, incluso con su justificación ante el funcionario actuante.
3. Informar o proponer la sustitución de sanciones principales o accesorias, de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así como en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.
4. Requerir a las Administraciones Públicas por incumplimiento de disposiciones relativas a la salud o seguridad del personal civil a su servicio.
5. Iniciar el procedimiento sancionador mediante la extensión de actas de infracción o de infracción por obstrucción.
6. Efectuar requerimientos de pago por deudas a la Seguridad Social, así como iniciar expedientes liquidatorios por débitos a la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta o bonificaciones indebidas, mediante la práctica de actas de liquidación.
7. Promover procedimientos de oficio para la inscripción de empresas, afiliación y altas y bajas de trabajadores, así como para el encuadramiento de empresas y trabajadores en el régimen de la Seguridad Social adecuado, sin perjuicio del inicio del expediente liquidatorio a que se refiere el apartado anterior, si procediese.
8. Instar del correspondiente organismo la suspensión o cese en la percepción de prestaciones sociales, si se constata su obtención o disfrute en incumplimiento de la normativa que las regula.
9. Instar del órgano administrativo competente la declaración del recargo de las prestaciones económicas en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional causados por falta de medidas de seguridad y salud laboral.

Tabla 4.2.1. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las funciones de los inspectores de sanidad (I).

LOE. 2/2006. Art. 151	Decreto de 11 de noviembre de 1943. Reglamento para la aplicación de la Ley del seguro de enfermedad. Art. 164
Inspectores de educación	Inspección de Servicios Sanitarios del Seguro.
Funciones	Funciones
a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como los programas que en ellos inciden.	Con las salvedades propias de la diferencia de objetos. e) Proponer al Seguro la adopción de medidas profilácticas e inspeccionar el cumplimiento de las que aquél acuerde.
b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.	a) Comprobar los partes de enfermedad y curación a los efectos del artículo siguiente. b) Inspeccionar las prestaciones sanitarias.
c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.	d) Inspeccionar el cumplimiento de los conciertos celebrados por el instituto Nacional de Previsión con las Instituciones públicas o privadas en lo que se refiere a las prestaciones sanitarias. g) Comprobar la eficacia y buena prestación del servicio farmacéutico e intervenir las recetas dispensadas, utilizando al efecto los farmacéuticos de la Inspección.
d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.	
e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres	
f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.	c) Coadyuvar con el Médico del Seguro para que el enfermo cumpla las prescripciones de este. f) Cooperar para que no se produzcan abusos por parte de los beneficiarios en la utilización de los servicios sanitarios.
g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.	
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.	h) Cualquier otra función de inspección de los Servicios Sanitarios que le encomiende el Seguro.

Tabla 4.2.2. Vinculación de las funciones de la Ley Orgánica de Educación con las funciones de los inspectores de sanidad (II).

LOE. 2/2006. Art. 151	Circular 3/1999 de la Presidenta Ejecutiva del INSALUD. Organización y funciones de la Inspección Sanitaria. Apto. IX
Inspectores de educación	Inspección Sanitaria.
Funciones	Funciones
a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como los programas que en ellos inciden.	Con las salvedades propias de la diferencia de objetos. 3. Centros y Servicios Concertados. 3.1. La inspección, seguimiento, evaluación y elaboración de informes técnicos sobre concertación de centros y servicios sanitarios que les sean encomendados por los órganos competentes del INSALUD.
b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.	5. Prestaciones Sanitarias. (...) la evaluación y el control de las prestaciones sanitarias reconocidas en la normativa vigente. 6. Prestación Farmacéutica. 6.1. La inspección, y control de la prestación farmacéutica. 6.3. La evaluación de la utilización de medicamentos y productos sanitarios, con especial referencia al gasto farmacéutico. 7. Incapacidad Temporal y Permanente. 7.1. La evaluación, gestión y control de la prestación por Incapacidad Temporal.
c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.	1. Evaluación de Centros y Servicios Sanitarios. 8. Salud Laboral. 8.4. La colaboración con el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en el control periódico de los sistemas de prevención de las Instituciones Sanitarias del INSALUD, a través de auditorías o evaluaciones 8.5. La inspección, evaluación y asesoramiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional de la Seguridad Social y de las empresas colaboradoras en el ámbito de gestión del INSALUD.
d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.	
e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres	
f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.	6. Prestación Farmacéutica. 6.2. La colaboración en la promoción y asesoramiento del programa del uso racional del medicamento. 6.4. El asesoramiento técnico en la suscripción y en el seguimiento de los contratos y los contratos suscritos entre el INSALUD. 6.5. El asesoramiento en materia de procedimiento y actuaciones para una adecuada utilización de los recursos destinados a la prestación farmacéutica 8. Salud Laboral. 8.4. La colaboración con el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en el control periódico de los sistemas de prevención de las Instituciones Sanitarias del INSALUD, a través de auditorías o evaluaciones. 8.5. La inspección, evaluación y asesoramiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional de la Seguridad

LOE. 2/2006. Art. 151

g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.

h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.

Circular 3/1999 de la Presidenta Ejecutiva del INSALUD.

Organización y funciones de la Inspección Sanitaria. Apto. IX

Social y de las empresas colaboradoras en el ámbito de gestión del INSALUD.

11. Atención a los usuarios. Evaluará el ejercicio y la efectividad de los derechos y deberes de los usuarios, proponiendo las medidas que se consideren oportunas para el cumplimiento de los mismos.

4. Procedimientos disciplinarios y sancionadores.

4.1. La realización de actas e informes en los procedimientos disciplinarios y sancionadores.

4.2. En relación con el personal al servicio de las Instituciones Sanitarias los miembros de la Inspección realizarán las informaciones previas y expedientes que le correspondan en aplicación de los estatutos y demás normativa vigente.

8. Salud Laboral.

8.1. La emisión de cuantos informes sean solicitados al INSALUD (...) en relación con la creación, supresión, modificación y/o concertación de servicios sanitarios. (...)/ 8.2. ... en relación con las empresas colaboradoras./ 8.3. para la autorización y el control de la prestación médico -farmacéutica para los servicios de prevención.

9. Responsabilidad Sanitaria.

9.1. Realizará los informes técnicos necesarios para la gestión del aseguramiento de la responsabilidad civil del INSALUD y elaborará los informes que le sean solicitados, en relación con los expedientes de Responsabilidad Patrimonial.

10. Reintegro de Gastos. Emitirá los informes técnicos necesarios para la resolución de los expedientes de Reintegro de Gastos por prestaciones sanitarias recibidas fuera del dispositivo asistencial del Sistema Nacional de Salud.

2. Actuaciones de acreditación.

4. Procedimientos disciplinarios y sancionadores.

4.1. La realización de actas e informes en los procedimientos disciplinarios y sancionadores.

4.2. En relación con el personal al servicio de las Instituciones Sanitarias los miembros de la Inspección realizarán las informaciones previas y expedientes que le correspondan en aplicación de los estatutos y demás normativa vigente.

9. Responsabilidad Sanitaria.

9.2. Los miembros de la Inspección Sanitaria del INSALUD, cuando actúen como Gestores de Riesgos Sanitarios, serán los encargados de la identificación, evaluación y tratamiento de los mismos, incluyendo las actividades de formación e información de los profesionales que sean necesarias en esta materia

12. Confidencialidad de bases de datos sanitarios. La evaluación del cumplimiento de las medidas establecidas para garantizar la confidencialidad de las bases de datos de carácter sanitario cuya gestión corresponde al INSALUD.

13. Otras funciones. La Inspección Sanitaria realizará cualquier otra función que, en materia de evaluación, inspección, control y asesoramiento sanitario le sea encomendada por los órganos competentes, así como cualesquiera otras funciones que en lo sucesivo le pudieran encomendar las disposiciones legales y administrativas que se dictaran por las autoridades competentes.

Tabla 4.2.3. Vinculación de las atribuciones de la Ley Orgánica de Educación con las atribuciones de los inspectores de sanidad (III).

LOE. 2/2006.	Circular 3/1999 de la Presidenta Ejecutiva del INSALUD. Atribuciones en el desarrollo de la función inspectora. Apto. V
Artículo 153. Atribuciones de los inspectores.	Inspección Sanitaria.
a) Conocer, supervisar y observar todas las actividades que se realicen en los centros, tanto públicos como privados, a los cuales tendrán libre acceso.	Atribuciones
b) Examinar y comprobar la documentación académica, pedagógica y administrativa de los centros.	
c) Recibir de los restantes funcionarios y responsables de los centros y servicios educativos, públicos y privados, la necesaria colaboración para el desarrollo de sus actividades, para cuyo ejercicio los inspectores tendrán la consideración de autoridad pública .	<p>Los inspectores médicos y farmacéuticos tendrán la consideración de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones y recibirán de las autoridades y de sus agentes la colaboración y el auxilio que a aquella se deben, de conformidad con lo establecido en el artículo 124.2 del Decreto 2065/74 de 30 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.</p> <p>Los enfermeros subinspectores en el ejercicio de sus funciones actuarán como agentes de la autoridad cuando así venga establecido expresamente por Ley.</p> <p>Los responsables de los centros, servicios y establecimientos sanitarios del INSALUD, así como el personal que preste sus servicios en los mismos, deberán proporcionar a la Inspección Sanitaria el auxilio y la colaboración que requieran para el ejercicio de sus funciones, incluyendo el libre acceso tanto a la información y documentación como a sus dependencias e instalaciones.</p>
d) Participar en las reuniones de los órganos colegiados o de coordinación docente de los centros, respetando el ejercicio de la autonomía que la Ley les reconoce, así como formar parte de comisiones, juntas y tribunales, cuando así se determine.	
e) Elevar informes y hacer requerimientos cuando se detecten incumplimientos en la aplicación de la normativa, y levantar actas, ya sea por iniciativa propia o a instancias de la autoridad administrativa correspondiente	
f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias	
g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.	
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.	<p>La Asesoría Jurídica del INSALUD prestará a los miembros de la Inspección Sanitaria la asistencia jurídica precisa cuando, como consecuencia del ejercicio de su actuación, sean objeto de citaciones por algún órgano jurisdiccional, en los términos previstos en la Circular 9/91, de 17 de junio, sobre normas de actuación de las asesorías jurídicas del INSALUD ante las diferentes Jurisdicciones.</p> <p>La Inspección Sanitaria, a través de la Subdirección General, podrá recabar la colaboración del Grupo de Investigación de la Seguridad</p>

LOE. 2/2006.

**Circular 3/1999 de la Presidenta Ejecutiva del INSALUD.
Atribuciones en el desarrollo de la función inspectora. Apto. V**

Social cuando, en el curso de la actividad inspectora, se detecten hechos que sean competencia del ámbito de actuación de dicho Grupo. Del mismo modo, se prestará a dicha unidad policial el auxilio y asesoramiento técnico necesario en las investigaciones que realicen.

Cuando la naturaleza de una determinada inspección requiera asesoramiento especializado, la Inspección Sanitaria del INSALUD podrá solicitarlo tanto a las Instituciones y Servicios propios, como a Instituciones, Organismos Profesionales, Sociedades o Asociaciones Científicas directamente relacionadas con la naturaleza de dicho asunto.

El INSALUD proveerá al personal que ejerza actividades inspectoras de un documento de identificación que le acredite para el desempeño de sus funciones.

Tabla 4.3.1. Vinculación de funciones de la Ley Orgánica de Educación con las funciones de los inspectores de hacienda (I).

LOE. 2/2006, de Educación.	Ley 58/2003, General Tributaria.
Inspectores de educación	Cuerpo Especial de Inspectores Financieros y Tributarios.
Art. 151. Funciones	Art. 141. Funciones administrativas.
a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como los programas que en ellos inciden.	Con las salvedades relativas a los distintos objetos a) La investigación de los supuestos de hecho de las obligaciones tributarias para el descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración. c) La realización de actuaciones de obtención de información relacionadas con la aplicación de los tributos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 93 y 94 de esta ley.
b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.	b) La comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones presentadas por los obligados tributarios. d) La comprobación del valor de derechos, rentas, productos, bienes, patrimonios, empresas y demás elementos, cuando sea necesaria para la determinación de las obligaciones tributarias, siendo de aplicación lo dispuesto en los artículos 134 y 135 de esta ley. e) La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios o incentivos fiscales y devoluciones tributarias, así como para la aplicación de regímenes tributarios especiales.
c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.	
d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.	
e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres	
f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.	f) La información a los obligados tributarios con motivo de las actuaciones inspectoras sobre sus derechos y obligaciones tributarias y la forma en que deben cumplir estas últimas. i) El asesoramiento e informe a órganos de la Administración pública.
g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.	g) La práctica de las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de comprobación e investigación h) La realización de actuaciones de comprobación limitada, conforme a lo establecido en los artículos 136 a 140 de esta ley. j) La realización de las intervenciones tributarias de carácter permanente o no permanente, que se regirán por lo dispuesto en su normativa específica y, en defecto de regulación expresa, por las normas de este capítulo con exclusión del artículo 149.
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias.	k) Las demás que se establezcan en otras disposiciones o se le encomienden por las autoridades competentes.

Tabla 4.3.2. Vinculación de atribuciones de la Ley Orgánica de Educación con las facultades de los inspectores de hacienda (II).

LOE. 2/2006, de Educación.	Ley 58/2003, General Tributaria.
Art. 153. Atribuciones de los inspectores.	Art. 142. Facultades de la inspección de los tributos.
a) Conocer, supervisar y observar todas las actividades que se realicen en los centros, tanto públicos como privados, a los cuales tendrán libre acceso.	2. Cuando las actuaciones inspectoras lo requieran, los funcionarios que desarrollen funciones de inspección de los tributos podrán entrar, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, en las fincas, locales de negocio y demás establecimientos o lugares
b) Examinar y comprobar la documentación académica, pedagógica y administrativa de los centros.	1. Las actuaciones inspectoras se realizarán mediante el examen de documentos, libros, contabilidad principal y auxiliar, ficheros, facturas, justificantes, correspondencia con transcendencia tributaria, bases de datos informatizadas, programas, registros y archivos informáticos relativos a actividades económicas, así como mediante la inspección de bienes, elementos, explotaciones y cualquier otro antecedente o información que deba de facilitarse a la Administración o que sea necesario para la exigencia de las obligaciones tributarias.
c) Recibir de los restantes funcionarios y responsables de los centros y servicios educativos, públicos y privados, la necesaria colaboración para el desarrollo de sus actividades, para cuyo ejercicio los inspectores tendrán la consideración de autoridad pública .	3. Los obligados tributarios deberán atender a la inspección y le prestarán la debida colaboración en el desarrollo de sus funciones. 4. Los funcionarios que desempeñen funciones de inspección serán considerados agentes de la autoridad y deberán acreditar su condición, si son requeridos para ello, fuera de las oficinas públicas.
d) Participar en las reuniones de los órganos colegiados o de coordinación docente de los centros, respetando el ejercicio de la autonomía que la Ley les reconoce, así como formar parte de comisiones, juntas y tribunales, cuando así se determine.	
e) Elevar informes y hacer requerimientos cuando se detecten incumplimientos en la aplicación de la normativa, y levantar actas, ya sea por iniciativa propia o a instancias de la autoridad administrativa correspondiente	Art. 175 del Real Decreto 1065/2007, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos Las actuaciones inspectoras se documentarán en comunicaciones, diligencias, informes, actas y demás documentos El art. 171 y la Ley 39/2015 da cobertura para los requerimientos
f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias	

Tabla 5.1. Estadísticos descriptivos (media y desviación típica) de cada dimensión

	n.	<	>.	\bar{X}	σ
Dimensión Personal	309	,00	5,00	3,7779	,96201
Dimensión Institucional	309	,00	5,00	3,3402	1,14888
Dimensión de Gestión del Conocimiento	309	,00	5,00	3,5726	1,00345
Dimensión de Cultura Institucional.	309	,00	5,00	3,9175	,86521

Tabla 5.2. Diferencias en las puntuaciones entre inspectores y directores. Estudio por dimensiones

	Inspectores = 95 \bar{X} (σ)	Directores = 214 \bar{X} (σ)	Z	P
Dimensión Personal	3,85 (.59)	3,74 (1,09)	-,54	,59
Dimensión Institucional	3,11 (.90)	3,44 (1,23)	-3,627	,000
Dimensión de Gestión del Conocimiento	3,29 (.82)	3,70 (1,05)	-4,403	,000
Dimensión de Cultura Institucional.	4,12 (.52)	3,83 (.97)	-2,114	,035

Tabla 5.3. Resultados de pruebas no paramétrica aplicada a las muestras de los grupos prioritarios: inspectores y directores, por dimensiones.

	U de Mann-Whitney	W de Wilcoxon	Z	Sig. asintótica (bilateral)
Dimensión Personal	9774,500	14334,500	-,540	,589
Dimensión Institucional	7539,000	12099,000	-3,627	,000
Dimensión de Gestión del Conocimiento	6977,000	11537,000	-4,403	,000
Dimensión de Cultura Institucional.	8637,500	31642,500	-2,114	,035

Tabla 5.4.1. Diferencias en las puntuaciones entre inspectores y directores. Dimensión Personal. Estudio por ítems.

	Sector	N	Media	σ
A.1. Identifica las prácticas educativas que se desarrollan en un centro educativo y los modelos de enseñanza que les sirven de referencia para definir sus propias señas de identidad.	Directores	214	3,83	1,113
	Inspectores	95	3,66	,930
A.2.A.- Valora la adaptación de las prácticas docentes y organizativas de los centros a la normativa del sistema educativo.	Directores	214	4,00	1,059
	Inspectores	95	4,18	,729
A.2.B.- Reconoce la contribución del trabajo de los centros al ejercicio efectivo del derecho a la educación.	Directores	214	4,05	1,052
	Inspectores	95	4,35	,755
A.3.A.- Facilita relaciones de comunicación fluidas con los centros educativos para intercambiar información y conocimiento.	Directores	214	3,80	1,229
	Inspectores	95	4,33	,868
A.3.B.- Facilita relaciones de comunicación fluidas con los miembros de las comunidades educativas para intercambiar información y conocimiento.	Directores	214	3,66	1,332
	Inspectores	95	3,79	1,020
A.4.- Genera confianza, con sus actuaciones, en los distintos actores del sistema educativo, para que estos desarrollen sus distintas tareas en un clima de colaboración con la Inspección.	Directores	214	3,94	1,079
	Inspectores	95	4,36	,667
A.5.- Planifica sus actuaciones de modo que sus intervenciones adquieren a la vez un carácter global y adaptado a las características de los centros y/o servicios.	Directores	214	3,87	1,101
	Inspectores	95	4,20	,794
A.6. Tiene en cuenta la evolución de los centros educativos y de los servicios para impulsar sus procesos de mejora con el fin de lograr el éxito educativo en todo el alumnado.	Directores	214	3,71	1,215
	Inspectores	95	3,80	1,027
A.7. Promueve en los equipos directivos y equipos docentes el análisis de los resultados del centro, tanto en el ámbito académico como en el de la convivencia, para impulsar la elaboración y desarrollo de planes de mejora que contribuyan al desarrollo de un sistema educativo de calidad.	Directores	214	3,77	1,174
	Inspectores	95	4,23	,856
A.8. Facilita un conocimiento informado y una reflexión serena de las posibilidades y limitaciones de las diferentes innovaciones educativas, así como de sus consecuencias para el centro.	Directores	214	3,47	1,390
	Inspectores	95	3,11	1,047
A.9. Impulsa en los centros la implantación de aquellos programas, proyectos e innovaciones educativas (tanto institucionales, como no institucionales) que se ajusten mejor a las necesidades y características de los mismos y que contribuyan a mejorar su capacidad profesional, dotándolos de nuevas perspectivas.	Directores	214	3,42	1,501
	Inspectores	95	3,26	1,132
A.10. Comparte con los centros educativos sus inquietudes y preocupaciones y les anima a dejar constancia de ellas en sus memorias anuales y a hacer de ellas un motor para la mejora.	Directores	214	3,79	1,287
	Inspectores	95	4,11	,831
A.11. Contribuye a la transformación de los centros educativos en auténticas comunidades que comparten un proyecto educativo y un conjunto bien definido de planes y proyectos.	Directores	214	3,40	1,465
	Inspectores	95	3,34	1,048
A.12. Construye una imagen concreta para cada situación educativa, integrando, desde su contexto, los puntos de vista de los diferentes agentes de la comunidad educativa del centro.	Directores	214	3,61	1,306
	Inspectores	95	3,47	,988

Tabla 5.4.2. Diferencias en las puntuaciones entre inspectores y directores. Dimensión Institucional.
Estudio por ítems.

	Sector	N	Media	σ
B.1. Dispone de procedimientos y orientaciones suficientes para apoyar y facilitar el desempeño adecuado de las funciones y tareas de sus miembros.	Directores	214	3,69	1,133
	Inspectores	95	3,58	,918
B.2. Estudia y analiza la normativa del sistema educativo y define criterios institucionales para poder aplicarla de forma homogénea, imparcial y objetiva.	Directores	214	3,98	1,098
	Inspectores	95	4,16	,960
B.3. Realiza institucionalmente actividades de formación dirigidas a actualizar los conocimientos y competencias necesarios para el desarrollo de las funciones específicas de la inspección.	Directores	214	3,33	1,386
	Inspectores	95	3,53	1,090
B.4. Facilita el reconocimiento de buenas prácticas docentes y organizativas para que puedan servir de referencia en los procesos de mejora de los centros educativos.	Directores	214	3,50	1,403
	Inspectores	95	3,09	1,158
B.5. Facilita el reconocimiento de buenas prácticas en los servicios educativos para que puedan servir de referencia en los procesos de mejora de los servicios educativos.	Directores	214	3,43	1,361
	Inspectores	95	2,99	1,106
B.6. Reconoce y valora las metodologías más frecuentes y su aplicación práctica en procesos que permitan la mejora del aprendizaje	Directores	214	3,54	1,327
	Inspectores	95	3,27	1,125
B.7. Planifica reuniones del servicio en donde intercambian experiencias relacionadas con hechos vividos por inspección en los distintos ámbitos del sistema educativo y se definen casos que podrían servir de referencia.	Directores	214	3,24	1,515
	Inspectores	95	2,80	1,411
B.8. Facilita el intercambio de ideas y experiencias entre sus miembros para que puedan compartir tanto el conocimiento implícito como el conocimiento explícito y mejorar el desempeño de sus funciones y tareas.	Directores	214	3,24	1,481
	Inspectores	95	3,18	1,246
B.9. Contribuye activamente a crear una visión específica de la realidad educativa, en todos sus niveles, y colabora para que esa visión pueda ser compartida por todos sus miembros.	Directores	214	3,42	1,451
	Inspectores	95	2,98	1,238
B.10. Incorpora a su plan anual de trabajo actividades dirigidas a evaluar y mejorar la capacidad profesional de sus miembros, así como de los equipos y de la propia institución.	Directores	214	3,57	1,275
	Inspectores	95	2,96	1,288
B.11. Promueve y facilita una eficaz gestión del conocimiento entre sus miembros y anima a formar equipos que compartan experiencias y saberes.	Directores	214	3,30	1,426
	Inspectores	95	3,13	1,205
B.12. Promueve y facilita la creación de una cultura colegiada entre sus miembros y anima a formar equipos que compartan responsabilidades en una misma actuación.	Directores	214	3,37	1,367
	Inspectores	95	3,06	1,262
B.13. Impulsa la necesaria reflexión sobre el sistema educativo tomando como referencia los informes nacionales e internacionales.	Directores	214	3,39	1,429
	Inspectores	95	2,34	1,334
B.14. Facilita a sus miembros el conocimiento necesario sobre metodologías, técnicas e instrumentos que pueden mejorar el desempeño de las funciones y tareas que tiene asignadas.	Directores	214	3,34	1,398
	Inspectores	95	2,89	1,292
B.15. Promueve y facilita la realización de actuaciones integrales y colegiadas en los centros y servicios educativos que, por sus circunstancias o por sus características, así lo aconsejan.	Directores	214	3,44	1,385
	Inspectores	95	2,94	1,295
B.16. Se preocupa por construir una visión diferencial del sistema educativo que integre sus niveles constitutivos (general, centro y aula) y lograr que esa visión oriente su actuación tanto en un sentido normativo como en un sentido perfectivo.	Directores	214	3,31	1,434
	Inspectores	95	2,81	1,232

Tabla 5.4.3. Diferencias en las puntuaciones entre inspectores y directores. Dimensión de Gestión del Conocimiento. Estudio por ítems.

	Sector	N	Media	σ
C.1. Dispone de un conocimiento adecuado de las evidencias, así como de los modelos y teorías que sirven de fundamento a las normas reguladoras del sistema educativo.	Directores	214	4,05	1,011
	Inspectores	95	3,38	1,033
C.2. Posee un conocimiento adecuado de las evidencias, disponibles sobre la realidad educativa, así como de los métodos, procedimientos e instrumentos utilizados en su obtención.	Directores	214	3,92	1,084
	Inspectores	95	3,34	,963
C.3. Maneja con facilidad modelos y teorías en los distintos niveles del sistema educativo para describir y valorar las diversas situaciones educativas y reconocer sus posibilidades de mejora.	Directores	214	3,82	1,150
	Inspectores	95	3,06	1,080
C.4. Dispone de canales de comunicación interna en las que se puedan intercambien prácticas de actuación y se fomenta el intercambio de casos relevantes, así como de prácticas inspectoras innovadoras.	Directores	214	3,36	1,341
	Inspectores	95	2,78	1,362
C.5. Dispone del conocimiento necesario sobre metodologías, técnicas e instrumentos que pueden mejorar el desempeño de las funciones y tareas que tiene asignadas.	Directores	214	3,74	1,178
	Inspectores	95	3,28	1,069
C.6.- Participa en grupos de trabajo para el análisis de los problemas relevantes del centro, teniendo en cuenta el marco global del sistema educativo.	Directores	214	3,45	1,416
	Inspectores	95	3,31	1,415
C.7. Comparte el análisis de casos prácticos relacionados con situaciones problemáticas para ofrecer una visión técnica y cualificada y proponer posibles soluciones.	Directores	214	3,48	1,338
	Inspectores	95	3,11	1,341
C.8. Dispone de procedimientos, técnicas y orientaciones adecuadas para examinar documentos de los diferentes centros y servicios educativos.	Directores	214	3,85	1,117
	Inspectores	95	3,72	1,028
C.9. Dispone de procedimientos, técnicas y orientaciones adecuadas para diseñar y desarrollar las visitas a los diferentes centros y servicios educativos.	Directores	214	3,83	1,204
	Inspectores	95	3,72	,986
C.10. Dispone de las herramientas adecuadas para la comunicación y reflexión sobre las actuaciones de modo que todos los miembros del servicio desarrollan juicios de las distintas situaciones educativas ajustados al conocimiento actualizado disponible.	Directores	214	3,61	1,280
	Inspectores	95	3,08	1,069
C.11. Dispone del conocimiento y las habilidades necesarias para superar con éxito las situaciones en las que se presentan conflictos dentro de los centros educativos.	Directores	214	3,84	1,232
	Inspectores	95	3,65	,965
C.12.- Facilita los procesos que requieren la gestión del conocimiento tanto explícito como implícito.	Directores	214	3,57	1,238
	Inspectores	95	3,18	1,041
C.13.- Aporta a los diferentes actores del sistema educativo una reflexión que permite interpretar sus acciones para alinearlas con las finalidades generales de la educación.	Directores	214	3,58	1,304
	Inspectores	95	3,15	1,246

Tabla 5.4.4. Diferencias en las puntuaciones entre inspectores y directores. Dimensión de Cultura Institucional. Estudio por ítems.

	Sector	N	Media	σ
D.1. Comparte valores esenciales para el ejercicio de las funciones que tiene asignadas como son la imparcialidad, el rigor, el respeto a todas las personas e instituciones, la equidad y el cuidado y protección del alumnado.	Directores	214	4,08	1,025
	Inspectores	95	4,52	,697
D.2.- Participa, con sus diversas actuaciones, en la construcción de una comunidad de práctica profesional.	Directores	214	3,67	1,232
	Inspectores	95	3,87	,890
D.3. Reconoce y valora la necesidad de una visión específica y diferenciada de la realidad educativa que integra los niveles del aula, el centro y el nivel sistémico.	Directores	214	3,68	1,199
	Inspectores	95	3,73	,939
D.4.A.- Considera esencial la propia reflexión, de los actores del sistema educativo, para comprender las fortalezas y debilidades que este presenta.	Directores	214	3,73	1,190
	Inspectores	95	4,15	,911
D.4.B.- Valora que todos los actores del sistema educativo cooperen para alcanzar el mayor nivel posible de éxito.	Directores	214	3,87	1,108
	Inspectores	95	4,35	,726
D.5.- Impulsa procesos de mejora en los centros educativos teniendo en cuenta, entre otras evidencias, sus memorias anuales y sus informes institucionales.	Directores	214	3,71	1,217
	Inspectores	95	3,92	,871
D.6.- Dispone de tiempos e infraestructuras para celebrar encuentros en los que se compartan criterios con distintos agentes de la comunidad educativa de los centros.	Directores	214	3,23	1,517
	Inspectores	95	2,38	1,231
D.7.A.- Promueve la acción coordinada de todos sus miembros.	Directores	214	3,55	1,358
	Inspectores	95	3,49	,955
D.7.B.- Asume de forma corresponsable las acciones que se desarrollan dentro del mismo servicio.	Directores	214	3,65	1,276
	Inspectores	95	3,95	1,085
D.8. Comparte la necesidad de promover una cultura inclusiva en los centros educativos que facilite la igualdad de oportunidades de aprendizaje.	Directores	214	3,83	1,183
	Inspectores	95	4,13	1,123
D.9. Considera la educación como un derecho universal, incorporado al marco constitucional, y vela para que todas las personas puedan hacer un uso efectivo de ese derecho.	Directores	214	4,19	,915
	Inspectores	95	4,80	,557
D.10. Asume el derecho a la educación como fundamento de todo el sistema educativo y de su propia práctica profesional.	Directores	214	4,21	,892
	Inspectores	95	4,91	,329
D.11. Considera la realización de sus funciones y tareas como una garantía para un funcionamiento de un servicio público esencial como es la educación.	Directores	214	4,17	,919
	Inspectores	95	4,73	,554
D.12. Asume la responsabilidad de contribuir para que el ordenamiento del sistema educativo contribuya a que los centros y los servicios educativos orienten su organización y funcionamiento hacia la mejora continua.	Directores	214	4,03	1,025
	Inspectores	95	4,72	,630

Tabla 5.5.1. Resultados de pruebas no paramétrica aplicada a las muestras de los grupos prioritarios:
inspectores y directores. Ítems de la Dimensión Personal.

	U de Mann-Whitney	W de Wilcoxon	Z	P
El Inspector, la Inspectora de Educación ...				
A.1. Identifica las prácticas educativas que se desarrollan en un centro educativo y los modelos de enseñanza que les sirven de referencia para definir sus propias señas de identidad.	8564,000	13124,000	-2,356	.018
A.2.A.- Valora la adaptación de las prácticas docentes y organizativas de los centros a la normativa del sistema educativo.	9698,000	32703,000	-,692	,489
A.2.B.- Reconoce la contribución del trabajo de los centros al ejercicio efectivo del derecho a la educación.	8670,500	31675,500	-2,223	,026
A.3.A.- Facilita relaciones de comunicación fluidas con los centros educativos para intercambiar información y conocimiento.	7580,500	30585,500	-3,807	,000
A.3.B.- Facilita relaciones de comunicación fluidas con los miembros de las comunidades educativas para intercambiar información y conocimiento.	10122,500	14682,500	-,062	,051
A.4.- Genera confianza, con sus actuaciones, en los distintos actores del sistema educativo, para que estos desarrollen sus distintas tareas en un clima de colaboración con la Inspección.	8135,500	31140,500	-3,003	,003
A.5.- Planifica sus actuaciones de modo que sus intervenciones adquieren a la vez un carácter global y adaptado a las características de los centros y/o servicios.	8692,500	31697,500	-2,179	.029
A.6. Tiene en cuenta la evolución de los centros educativos y de los servicios para impulsar sus procesos de mejora con el fin de lograr el éxito educativo en todo el alumnado.	10027,500	33032	-,199	,842
A.7. Promueve en los equipos directivos y equipos docentes el análisis de los resultados del centro, tanto en el ámbito académico como en el de la convivencia, para impulsar la elaboración y desarrollo de planes de mejora que contribuyan al desarrollo de un sistema educativo de calidad.	7954,500	30959,500	-3,217	,001
A.8. Facilita un conocimiento informado y una reflexión serena de las posibilidades y limitaciones de las diferentes innovaciones educativas, así como de sus consecuencias para el centro.	7864,000	12424,000	-3,275	.001
A.9. Impulsa en los centros la implantación de aquellos programas, proyectos e innovaciones educativas (tanto institucionales, como no institucionales) que se ajusten mejor a las necesidades y características de los mismos y que contribuyan a mejorar su capacidad profesional, dotándolos de nuevas perspectivas.	8752,000	13312,000	-2,010	,044
A.10. Comparte con los centros educativos sus inquietudes y preocupaciones y les anima a dejar constancia de ellas en sus memorias anuales y a hacer de ellas un motor para la mejora.	9307,500	32312,500	.1,263	,207
A.11. Contribuye a la transformación de los centros educativos en auténticas comunidades que comparten un proyecto educativo y un conjunto bien definido de planes y proyectos.	8988,000	13548,000	-1,689	,091
A.12. Construye una imagen concreta para cada situación educativa, integrando, desde su contexto, los puntos de vista de los diferentes agentes de la comunidad educativa del centro.	8803,500	13363,500	-1,966	,049

Tabla 5.5.2. Resultados de pruebas no paramétrica aplicada a las muestras de los grupos prioritarios: inspectores y directores. Ítems de la Dimensión Institucional.

	U de Mann-Whitney	W de Wilcoxon	Z	P
El Servicio de Inspección Educativa ...				
B.1. Dispone de procedimientos y orientaciones suficientes para apoyar y facilitar el desempeño adecuado de las funciones y tareas de sus miembros.	8998,500	13558,500	-1,715	,086
B.2. Estudia y analiza la normativa del sistema educativo y define criterios institucionales para poder aplicarla de forma homogénea, imparcial y objetiva.	9323,000	32328,000	-1,238	,216
B.3. Realiza institucionalmente actividades de formación dirigidas a actualizar los conocimientos y competencias necesarios para el desarrollo de las funciones específicas de la inspección.	9720,500	32725,500	-,640	,522
B.4. Facilita el reconocimiento de buenas prácticas docentes y organizativas para que puedan servir de referencia en los procesos de mejora de los centros educativos.	7703,000	12263,000	-3,517	,000
B.5. Facilita el reconocimiento de buenas prácticas en los servicios educativos para que puedan servir de referencia en los procesos de mejora de los servicios educativos.	7489,500	12049,500	-3,831	,000
B.6. Reconoce y valora las metodologías más frecuentes y su aplicación práctica en procesos que permitan la mejora del aprendizaje	8439,500	12999,500	-2,464	,014
B.7. Planifica reuniones del servicio en donde intercambian experiencias relacionadas con hechos vividos por inspección en los distintos ámbitos del sistema educativo y se definen casos que podrían servir de referencia.	8144,500	12704,500	-2,861	,004
B.8. Facilita el intercambio de ideas y experiencias entre sus miembros para que puedan compartir tanto el conocimiento implícito como el conocimiento explícito y mejorar el desempeño de sus funciones y tareas.	9378,000	13938,000	-1,120	,263
B.9. Contribuye activamente a crear una visión específica de la realidad educativa, en todos sus niveles, y colabora para que esa visión pueda ser compartida por todos sus miembros.	7787,500	12347,500	-3,376	,001
B.10. Incorpora a su plan anual de trabajo actividades dirigidas a evaluar y mejorar la capacidad profesional de sus miembros, así como de los equipos y de la propia institución.	7187,500	11747,500	-4,245	,000
B.11. Promueve y facilita una eficaz gestión del conocimiento entre sus miembros y anima a formar equipos que compartan experiencias y saberes.	8988,000	13548,000	-1,678	,093
B.12. Promueve y facilita la creación de una cultura colegiada entre sus miembros y anima a formar equipos que compartan responsabilidades en una misma actuación.	8421,000	12981,000	-2,496	,013
B.13. Impulsa la necesaria reflexión sobre el sistema educativo tomando como referencia los informes nacionales e internacionales.	5743,000	10303,000	-6,249	,000
B.14. Facilita a sus miembros el conocimiento necesario sobre metodologías, técnicas e instrumentos que pueden mejorar el desempeño de las funciones y tareas que tiene asignadas.	7930,000	12490,000	-3,183	,001
B.15. Promueve y facilita la realización de actuaciones integrales y colegiadas en los centros y servicios educativos que, por sus circunstancias o por sus características, así lo aconsejan.	7622,500	12182,500	-3,640	,000
B.16. Se preocupa por construir una visión diferencial del sistema educativo que integre sus niveles constitutivos (general, centro y aula) y lograr que esa visión oriente su actuación tanto en un sentido normativo como en un sentido perfectivo.	7717,500	12277,500	-3,471	,001

Tabla 5.5.3. Resultados de pruebas no paramétrica aplicada a las muestras de los grupos prioritarios:
inspectores y directores. Ítems de la Dimensión de Gestión del Conocimiento.

	U de Mann-Whitney	W de Wilcoxon	Z	P
La inspección Educativa ...				
C.1. Dispone de un conocimiento adecuado de las evidencias, así como de los modelos y teorías que sirven de fundamento a las normas reguladoras del sistema educativo.	6163,500	10723,500	-5,862	,000
C.2. Posee un conocimiento adecuado de las evidencias, disponibles sobre la realidad educativa, así como de los métodos, procedimientos e instrumentos utilizados en su obtención.	6456,500	11016,500	-6,055	,000
C.3. Maneja con facilidad modelos y teorías en los distintos niveles del sistema educativo para describir y valorar las diversas situaciones educativas y reconocer sus posibilidades de mejora.	5954,500	10514,500	-6,055	,000
C.4. Dispone de canales de comunicación interna en las que se puedan intercambien prácticas de actuación y se fomenta el intercambio de casos relevantes, así como de prácticas inspectoras innovadoras.	7613,500	12173,500	-3,608	,000
C.5. Dispone del conocimiento necesario sobre metodologías, técnicas e instrumentos que pueden mejorar el desempeño de las funciones y tareas que tiene asignadas.	7446,000	12006,000	-3,929	,000
C.6.- Participa en grupos de trabajo para el análisis de los problemas relevantes del centro, teniendo en cuenta el marco global del sistema educativo.	9473,000	14022,000	-,989	,322
C.7. Comparte el análisis de casos prácticos relacionados con situaciones problemáticas para ofrecer una visión técnica y cualificada y proponer posibles soluciones.	8342,500	13664,500	-1,544	,122
C.8. Dispone de procedimientos, técnicas y orientaciones adecuadas para examinar documentos de los diferentes centros y servicios educativos.	9104,500	13664,500	-1,544	,122
C.9. Dispone de procedimientos, técnicas y orientaciones adecuadas para diseñar y desarrollar las visitas a los diferentes centros y servicios educativos.	8948,500	13508,500	-1,771	,077
C.10. Dispone de las herramientas adecuadas para la comunicación y reflexión sobre las actuaciones de modo que todos los miembros del servicio desarrollan juicios de las distintas situaciones educativas ajustados al conocimiento actualizado disponible.	7106,000	11666,000	-4,388	,000
C.11. Dispone del conocimiento y las habilidades necesarias para superar con éxito las situaciones en las que se presentan conflictos dentro de los centros educativos.	8467,000	13027,000	-2,466	,014
C.12.- Facilita los procesos que requieren la gestión del conocimiento tanto explícito como implícito.	7641,000	12201,000	-3,634	,000
C.13.- Aporta a los diferentes actores del sistema educativo una reflexión que permite interpretar sus acciones para alinearlas con las finalidades generales de la educación.	7786,500	12346,500	-3,423	,001

Tabla 5.5.4. Resultados de pruebas no paramétrica aplicada a las muestras de los grupos prioritarios: inspectores y directores. Ítems de la Dimensión de Cultura Institucional.

	U de Mann-Whitney	W de Wilcoxon	Z	P
La Inspección Educativa ...				
D.1. Comparte valores esenciales para el ejercicio de las funciones que tiene asignadas como son la imparcialidad, el rigor, el respeto a todas las personas e instituciones, la equidad y el cuidado y protección del alumnado.	7608,000	30613,000	-3,829	,000
D.2.- Participa, con sus diversas actuaciones, en la construcción de una comunidad de práctica profesional.	9751,500	32756,500	-,602	,547
D.3. Reconoce y valora la necesidad de una visión específica y diferenciada de la realidad educativa que integra los niveles del aula, el centro y el nivel sistémico.	9680,000	14240,000	-,703	,482
D.4.A.- Considera esencial la propia reflexión, de los actores del sistema educativo, para comprender las fortalezas y debilidades que este presenta.	8291,000	31296,000	-2,737	,006
D.4.B.- Valora que todos los actores del sistema educativo cooperen para alcanzar el mayor nivel posible de éxito.	7720,000	30725,000	-3,622	,000
D.5.- Impulsa procesos de mejora en los centros educativos teniendo en cuenta, entre otras evidencias, sus memorias anuales y sus informes institucionales.	9757,500	32762,500	-,601	,548
D.6.- Dispone de tiempos e infraestructuras para celebrar encuentros en los que se compartan criterios con distintos agentes de la comunidad educativa de los centros.	6440,000	11000,000	-5,282	,000
D.7.A.- Promueve la acción coordinada de todos sus miembros.	9043,500	13603,500	-1,640	,101
D.7.B.- Asume de forma corresponsable las acciones que se desarrollan dentro del mismo servicio.	8837,500	31842,500	-1,928	,054
D.8. Comparte la necesidad de promover una cultura inclusiva en los centros educativos que facilite la igualdad de oportunidades de aprendizaje.	8370,000	31375,000	-2,641	,008
D.9. Considera la educación como un derecho universal, incorporado al marco constitucional, y vela para que todas las personas puedan hacer un uso efectivo de ese derecho.	5696,000	28701,000	-6,912	,000
D.10. Asume el derecho a la educación como fundamento de todo el sistema educativo y de su propia práctica profesional.	5025,500	28039,500	-8.041	,000
D.11. Considera la realización de sus funciones y tareas como una garantía para un funcionamiento de un servicio público esencial como es la educación.	6313,500	29317,500	-5,892	,000
D.12. Asume la responsabilidad de contribuir para que el ordenamiento del sistema educativo contribuya a que los centros y los servicios educativos orienten su organización y funcionamiento hacia la mejora continua.	5737,000	28742,000	-6,672	,000

Tabla 5.6. Resultados por variables y dimensiones de la población de directores de centros docentes de enseñanza básica.

Tabla 5.6.1.- Variable correspondiente a la Dirección del Área Territorial.

DAT	Frecuencia	D1	D2	D3	D4	\bar{x}
DAT Norte	46	3,86	3,71	3,87	4,02	3,86
DAT Sur	42	3,39	3,15	3,51	3,47	3,37
DAT Este	27	4,19	4,17	4,24	4,22	4,20
DAT Oeste	36	3,73	3,60	3,75	3,90	3,74
DAT Capital	63	3,69	3,04	3,44	3,72	3,46
Total del sector	214	3,74	3,44	3,70	3,83	3,67

Tabla 5.6.2. Variable correspondiente a la antigüedad en el desempeño de la función directiva.

Antigüedad en la dirección	Frecuencia	D1	D2	D3	D4	\bar{x}
De 0 a 4 años	62	3,61	3,32	3,57	3,73	3,55
De 5 a 8 años	80	3,96	3,80	3,90	3,99	3,91
Más de 9 años	72	3,60	3,15	3,59	3,73	3,50
Total del sector	214	3,74	3,44	3,70	3,83	3,67

Tabla 5.6.3. Variable correspondiente al tipo de centro en el que desarrollan sus funciones directivas.

Tipo de centro	Frecuencia	D1	D2	D3	D4	\bar{x}
Centro público	201	3,51	2,22	3,08	3,49	3,04
Centro concertado	13	3,75	3,52	3,74	3,85	3,71
Centro privado	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total del sector	214	3,74	3,44	3,70	3,83	3,67

Tabla 5.7. Resultados por variables y dimensiones de la población de inspectores de educación en la Comunidad de Madrid.

Tabla 5.7.1. Variable correspondiente a la Dirección del Área Territorial.

DAT	Frecuencia	D1	D2	D3	D4	\bar{X}
DAT Norte	16	3,78	3,16	3,05	4,11	3,52
DAT Sur	20	3,80	3,10	3,34	4,11	3,57
DAT Este	12	3,70	3,39	3,50	4,26	3,70
DAT Oeste	8	3,83	2,91	3,05	4,23	3,49
DAT Capital	39	4,00	3,05	3,35	4,05	3,60
Total del sector	95	3,85	3,11	3,29	4,12	3,58

Tabla 5.7.2. Variable correspondiente a la antigüedad en el desempeño de la función inspectora.

Antigüedad en la inspección	Frecuencia	D1	D2	D3	D4	\bar{X}
De 0 a 4 años	35	3,89	3,13	3,25	4,18	3,60
De 5 a 8 años	18	3,83	3,11	3,24	4,06	3,55
Más de 9 años	42	3,88	3,09	3,34	4,08	3,58
Total del sector	95	3,85	3,11	3,29	4,12	3,58

Tabla 5.8. Resultados globales diferenciados de los sectores componentes de los grupos prioritarios.

Sector	Frecuencia	D1	D2	D3	D4	\bar{X}
Directores.	214	3,74	3,44	3,70	3,83	3,67
Inspectores	95	3,85	3,11	3,29	4,12	3,58
Total	309	3,78	3,34	3,57	3,92	3,65

Tabla 6.1. Relación del Real Decreto Legislativo 5/2015 y la Orden 732/2021 en lo relativo a la ética profesional, los principios éticos y el código de conducta de los inspectores de educación.

Real Decreto Legislativo 5/2015.	Orden 732/2021.
Artículo 52. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta.	Artículo 58.- Ética profesional
<p>Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes.</p> <p>Los principios y reglas establecidos en este capítulo informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos.</p>	<p>1. Como empleados públicos, los inspectores de educación están sometidos a la regulación de la función pública que se establece en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. El Estatuto recoge los deberes básicos de los empleados públicos y los principios éticos y de conducta que inspiran el Código de Conducta para la Inspección Educativa.</p> <p>2. La Inspección Educativa, de acuerdo con el artículo 3 del Decreto 61/2019, de 9 de julio, ejerce las funciones de supervisar, evaluar, participar en el desarrollo de acciones para la mejora, velar por el respeto y el cumplimiento de las normas, asesorar, orientar e informar a los diferentes sectores de la comunidad educativa y emitir informes.</p> <p>3. Los inspectores deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por el interés general con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres.</p>

Tabla 6.2. Relación entre el Real Decreto Legislativo 5/2015 y la Orden 732/2021 en lo relativo a los principios éticos.

Real Decreto Legislativo 5/2015.	Orden 732/2021.
Artículo 53. Principios éticos.	Artículo 59.- Principios éticos
1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico.	1. Los inspectores de educación en el desarrollo de su labor actuarán de acuerdo con la Constitución y con el ordenamiento jurídico.
2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio.	2. La labor de la Inspección Educativa garantizará los derechos y los deberes de cuantos participan en los procesos educativos y se fundamentará en consideraciones y actuaciones objetivas e imparciales y orientadas a los fines objetivos de todos, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales y corporativas.
3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos.	3. Los inspectores de educación ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos.
4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.	4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público.	5. Los inspectores de educación se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público.
6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público.	
7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.	6. No aceptarán ningún trato de favor o situación por parte de personas físicas o entidades privadas que implique privilegio o ventaja injustificada.
8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.	7. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia y eficiencia.
9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros.	8. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros.
10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia.	9. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia.

Real Decreto Legislativo 5/2015.

11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos.

12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público.

Orden 732/2021.

10. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público absteniéndose de conductas contrarias al mismo y cualesquiera otras que comprometan la neutralidad e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

11. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio.

Tabla 6.3. Relación entre el Real Decreto Legislativo 5/2015 y la Orden 732/2021 en lo relativo a los principios de conducta.

Real Decreto Legislativo 5/2015,	Orden 732/2021.
Artículo 54. Principios de conducta.	Artículo 60.- Principios de conducta
1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos.	1. Los inspectores de educación tratarán con atención y respeto a sus superiores, compañeros, subordinados y a todos los miembros de la Comunidad educativa.
2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.	2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.
3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.	3. Cumplirán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos procedentes.
4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.	4. Asesorarán, orientarán e informarán a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.
5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación.	
6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.	
7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables.	5. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables.
8. Mantendrán actualizada su formación y cualificación.	6. Mantendrán actualizada su formación y cualificación.
9. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral.	
10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados. A estos efectos se podrá prever la creación de la instancia adecuada competente para centralizar la recepción de las propuestas de los empleados públicos o administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio.	7. Informarán y harán propuestas a los órganos competentes de la Administración educativa sobre aquellas cuestiones que contribuyan a la mejora de la calidad de la educación.
11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio	

Imágenes

Imagen 2. Estructura dimensional testada en el análisis factorial confirmatorio.

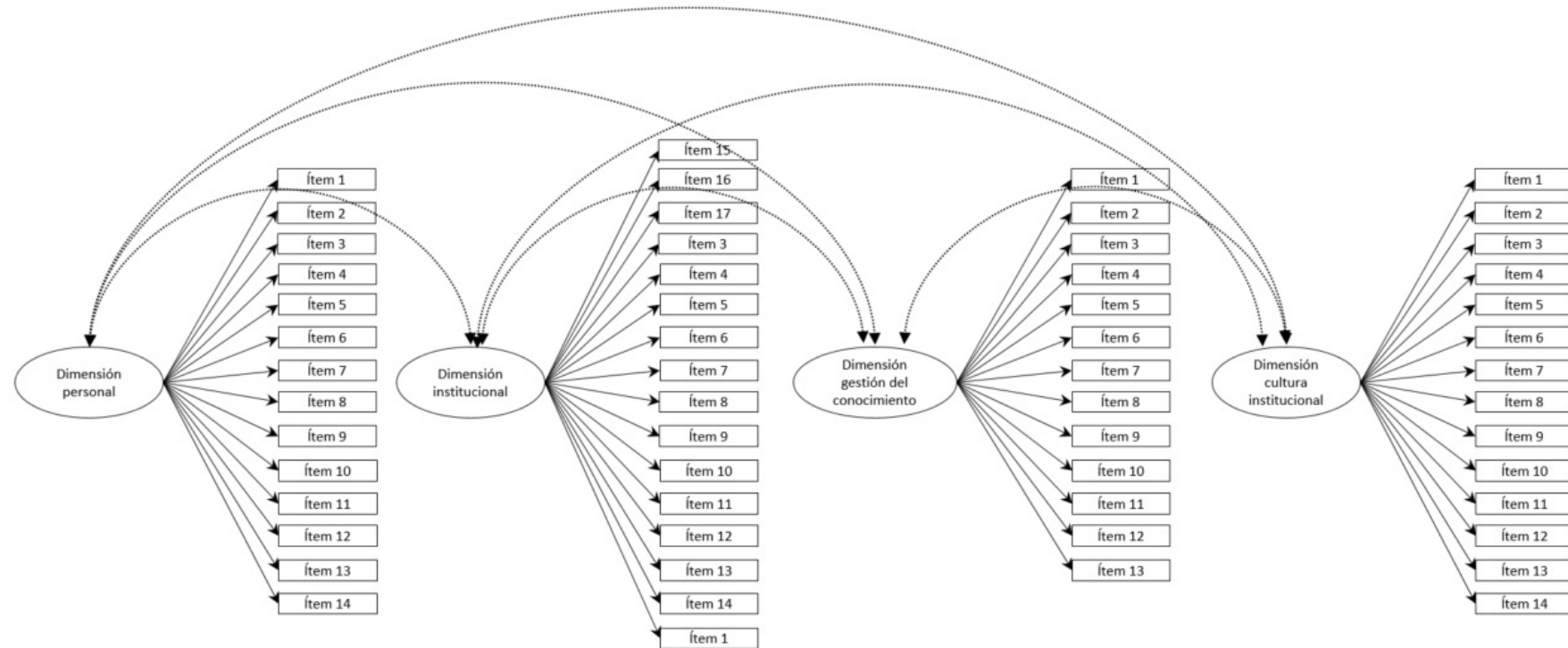
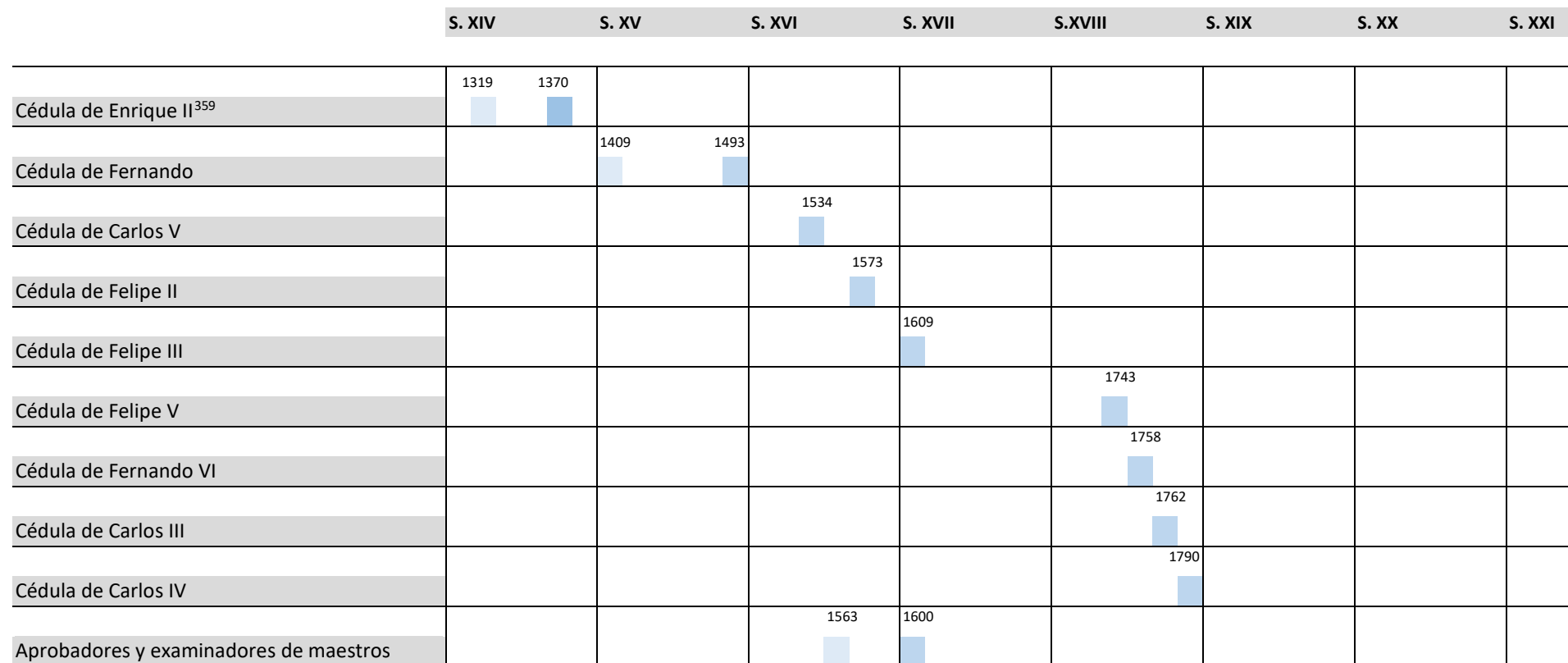


Imagen 3. Evolución histórica. Etapa prenortativa I.



³⁵⁹ Las fechas sombreadas en claro, que constan en la petición de los maestros de Granada, como expediente de la Sala de Gobierno del Consejo de Castilla (Archivo Histórico Nacional) se consideran erróneas o al menos apócrifas, por las fechas históricas de los correspondientes reinados.

El sombreado oscuro corresponde a la propuesta en base a los periodos históricos correctos.

Imagen 4. Evolución histórica. Etapa prenORMATIVA II.

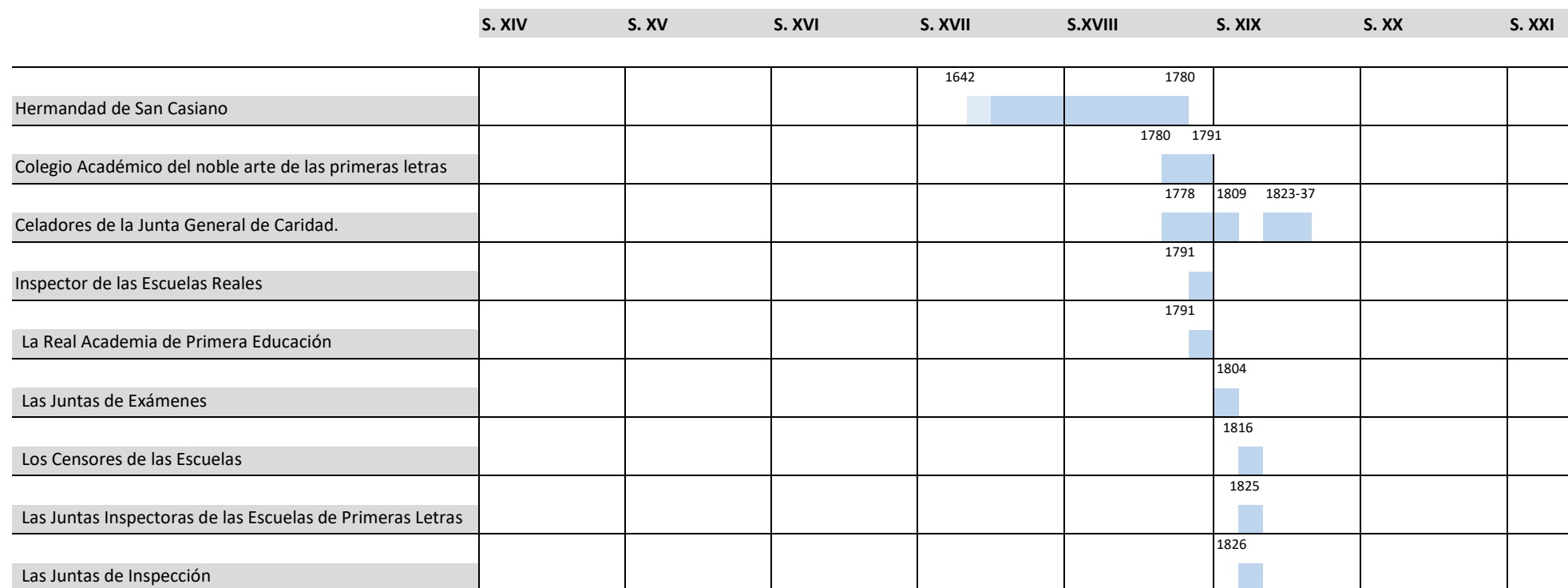


Imagen 5. Evolución histórica. Etapa normativa. Cuerpos constitucionales.



Imagen 6. Evolución histórica. Etapa normativa. Normativa educativa general I.

	S. XIV	S. XV	S. XVI	S. XVII	S. XVIII	S. XIX	S. XX	S. XXI
Plan Jovellanos. 1809.						1809		
Informe Quintana. 1814.						1814		
Reglamento de Instrucción Pública. 1821.						1821		
Plan Duque de Rivas. 1836.						1836		
Ley de 21 de Julio de 1838.						1838		
Plan Pidal. 1845.						1845		
Ley de bases para LIP. 1857.						1857		
Ley de Instrucción Pública 1857.						1857		
Ley de instrucción primaria de 1868.						1868		
Real Decreto de segunda enseñanza de 1901.							1901	
Real decreto de primera enseñanza de 1901							1901	

Imagen 7. Evolución histórica. Etapa normativa. Normativa educativa general II.

	S. XIV	S. XV	S. XVI	S. XVII	S. XVIII	S. XIX	S. XX	S. XXI
Ley de 17 de julio de 1945 de Ed. Primaria.							1945	
Ley de Ordenación de Enseñanzas Media. 1953							1953	
Ley 14/1970, General de Educación.							1970	
Ley Orgánica 5/1980, Estatuto de Centros Esc.							1980	
Ley Orgánica 8/1985. LODE.							1985	
Ley Orgánica 1/1990. LOGSE.							1990	
Ley Orgánica 9/1995. LOPEGC.							1995	
Ley Orgánica 10/2002. LOCE.								2002
Ley Orgánica 2/2006. LOE.								2006
Ley Orgánica 8/2013. LOMCE.								2013
Ley Orgánica 3/2020. LOMLOE.								2020

Imagen 8. Evolución histórica. Etapa normativa. Normativa que ha regulado a la Inspección Educativa.

	S. XIV	S. XV	S. XVI	S. XVII	S. XVIII	S. XIX	S. XX	S. XXI
Decreto de 30 de marzo de 1849						1849		
Reglamento de 20 de mayo de 1849						1849		
Real Decreto de 1913.							1913	
Decreto de 1932.							1932	
Decreto 2915/1967.							1967	
Decreto 664/1973.							1973	
Ley 30/1084. DA 15ª.							1984	
Real Decreto 1524/1989.							1989	
Orden de 27 de septiembre de 1990.							1990	
Orden de 29 de febrero de 1996.							1996	

Imagen 9. Evolución histórica. Etapa normativa. Normativa que ha regulado la Inspección Educativa en la Comunidad de Madrid.






	S. XIV	S. XV	S. XVI	S. XVII	S. XVIII	S. XIX	S. XX	S. XXI
Resolución de 20 de abril de 2007.								2007 
Resolución de 31 de julio de 2012.								2012 
Decreto 133/2014, de 27 de noviembre.								2014 
Decreto 61/2019, de 9 de julio.								2019 
Orden 732/2021, de 24 de marzo.								2021 

Imagen 10. Acceso a los archivos de resultados.

- Acceso en la url:

https://drive.google.com/drive/folders/18PjGDtGg9EiQNJtE-biBMIDq97K0_E1sr?usp=sharing

- Acceso en la url acortada:

<https://cutt.ly/4CSTgbf>

- Acceso por código bidi:



Imagen 11. Acceso a los archivos de tratamiento de datos.

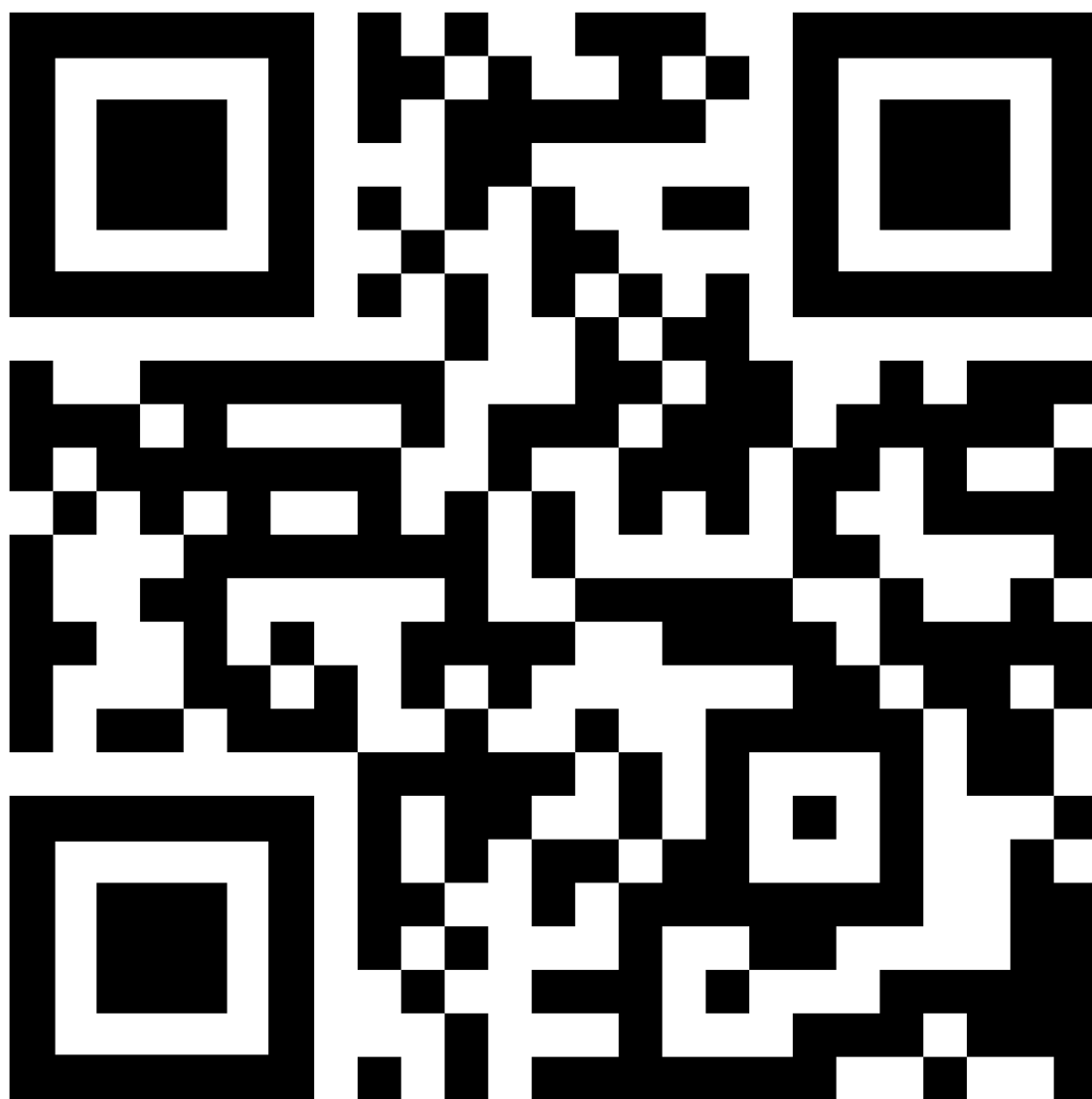
- Acceso en la url:

https://drive.google.com/drive/folders/1CXTgo18T9uxvvHlDyP_g50hHFddpjgYO?usp=sharing

- Acceso en la url acortada:

<https://cutt.ly/UCSYcsc>

- Acceso por código bidi:



Anexos

Anexo I.A. Solicitud de Informe Favorable al Comité de Ética de la Investigación de la Universidad Autónoma de Madrid (CEI-UAM) para la realización del estudio de encuesta.

A la atención del
Comité de Ética de la Investigación
Universidad Autónoma de Madrid
Edificio Rectorado 5ª Planta Despacho 505
Ciudad Universitaria de Cantoblanco.
C/ Einstein, 3
28049 Madrid

José M^a Lozano Salinas, con DNI 11785674-Z (NIA: 413327; NIP: 676395), como alumno de doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid [UAM] en el programa Educación con una tesis cuyo título propuesto es «Competencias profesionales para el ejercicio de la inspección de educación en la Comunidad de Madrid» que se encuentra dirigida por los doctores D. Javier M. Valle López, profesor titular y coordinador general del Grupo de Investigación sobre Políticas Educativas Supranacionales, en el departamento de Pedagogía de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid y D. Jesús Manso Ayuso, del departamento de Pedagogía de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid,

SOLICITO :

Informe favorable, según el Anexo I: «Solicitud de evaluación para el Comité de Ética de la Investigación de la UAM INVESTIGACIÓN» que acompaña a este documento, para la realización del subestudio 3: «Estudio de caso único», del proyecto de investigación relativo a las *Competencias profesionales para el ejercicio de la inspección de educación en la Comunidad de Madrid*, que se adjunta como Anexo II y ya evaluado por el Programa de Doctorado, en el que se pretende realizar una encuesta a los que se consideran como agentes más significativos del sistema educativo: inspectores de educación, directores de centros educativos, docentes en ejercicio, familias de alumnos y responsables del sistema educativo, según los datos, parámetros y variables que aparecen en el Anexo 0 y que se desarrollan en el resto de anexos.

Se adjunta relación de anexos:

En Madrid, a 13 de enero de 2021.

Firmado por JOSÉ MARÍA LOZANO SALINAS - 11785674Z como alumno del Programa de Doctorado de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la UAM el día 13/01/2021 con un certificado emitido por AC CAMERFIRMA AAPP

José M^a Lozano Salinas

RELACIÓN DE ANEXOS DE LA SOLICITUD:






		Pág.
Anexo I	Solicitud de evaluación para el Comité de Ética de la Investigación de la UAM INVESTIGACIÓN	D.A.(*)
Anexo II	Proyecto de investigación relativo a las <i>Competencias profesionales para el ejercicio de la inspección de educación en la Comunidad de Madrid</i>	D.A.
Anexo 0	Cuadrante resumen de sectores, población, variables y url de acceso	3.-
Anexo A	Datos básicos de la encuesta a Inspectores de Educación	4.-
Anexo B	Datos básicos de la encuesta a directores de centros educativos	5.-
Anexo C	Datos básicos de la encuesta a docentes	6.-
Anexo D	Datos básicos de la encuesta a familias	7.-
Anexo E	Datos básicos de la encuesta a responsables del sistema educativo	8.-
Anexo A.1.	Propuesta de escrito al SGIE solicitando autorización para ponerme en comunicación con todos los inspectores de educación de la Comunidad de Madrid	9.-
Anexo A.2.	Propuesta de Consentimiento Informado para los inspectores de educación	10.-
Anexo A.3.	Modelo de cuestionario	12.-

Los siguientes anexos son replicas adaptadas de los anteriores documentos y se encuentran actualmente produciéndose y pendientes de su realización.

Anexo B.1.	Propuesta de escrito a asociaciones y organizaciones representativas de directores de centros educativos solicitando su colaboración para la divulgación del estudio entre sus asociados
Anexo B.2.	Propuesta de Consentimiento Informado para los directores de centros educativos
Anexo B.3.	Modelo de cuestionario
Anexo C.1.	Propuesta de escrito a asociaciones, organizaciones sindicales y entidades representativas de docentes, maestros y profesores de centros educativos solicitando su colaboración para la divulgación del estudio entre sus asociados
Anexo C.2.	Propuesta de Consentimiento Informado para los docentes de centros educativos
Anexo C.3.	Modelo de cuestionario
Anexo D.1.	Propuesta de escrito a asociaciones y federaciones de AMPAS solicitando su colaboración para la divulgación del estudio entre sus asociados
Anexo D.2.	Propuesta de Consentimiento Informado para las familias de alumnos de centros educativos
Anexo D.3.	Modelo de cuestionario
Anexo E.1.	Propuesta de Consentimiento Informado para los responsables del sistema educativo
Anexo E.2.	Modelo de cuestionario.

(*) D.A. Documento Adjunto

ANEXO 0. Cuadrante resumen.

Sector	Población	Variables	URL	Cód. Bidi	Anexo
Inspectores	Inspectores de Educación en la Comunidad de Madrid.	Años de Ejercicio: - 0 – 4 años - 5 – 8 años - más de 9 años	https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/INSED_EncuestaUAM		A
Directores	Directores de centros educativos de enseñanzas de régimen general en la Comunidad de Madrid.	Tipo de centro - Centro público - Centro concertado - Centro Privado Años de experiencia directiva: - 0 – 4 años - 5 – 8 años - más de 9 años	https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DIRCD_EncuestaUAM (Pendiente de habilitación)		B
Docentes	Maestros y profesores en centros educativos en enseñanzas de régimen general en la Comunidad de Madrid.	Tipo de centro - Centro público - Centro concertado - Centro Privado Años de experiencia docente: - 0 – 8 años - 9 – 18 años - más de 19 años	https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PROCD_EncuestaUAM (Pendiente de habilitación)		C
Familias	Padres, madres, tutores cuyos hijos cursan enseñanzas de régimen general en la Comunidad de Madrid.	Tipo de centro - Centro público - Centro concertado - Centro Privado	https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FAMCD_EncuestaUAM (Pendiente de habilitación)		D
Responsables	Responsables educativos de la Consejería de Educación con rango de Subdirector General o superior. Se incluyen miembros de la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid	Años en la responsabilidad: - 0 – 4 años - 5 – 8 años - más de 9 años	https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RESSE_EncuestaUAM (Pendiente de habilitación)		E

Información para el acceso a la población:

ANEXO A

Encuesta a los Inspectores de Educación.

Acceso: Se dirigirá un escrito al Subdirector General de Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid (según Anexo A.1) solicitando autorización para ponerme en comunicación por correo electrónico con los 184 Inspectores de educación en ejercicio en la Comunidad de Madrid para solicitarles su participación en la encuesta.

Ubicación: La encuesta, de cumplimentación electrónica (por ordenador, teléfono móvil y posible acceso por código Bidi), se encuentra ubicado en los Servidores de la Unión Europea (<http://ec.europa.eu/eusurvey>) para garantizar la seguridad e integridad de los datos.

Enlace: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/INSED_EncuestaUAM

Código Bidi:



Información a la población: se remitirá un escrito (según anexo A.2) a los Inspectores solicitando su participación como consentimiento informado. El contenido de dicho escrito forma parte también de la cabecera de la encuesta. No se recoge ningún dato de carácter personal y las variables relativas a la experiencia ejercida en la función inspectora se encuentran anonimizadas para desvincularla de los sujetos que participan.

Variables de investigación en el sector:

* Años de Ejercicio en la función inspectora:

- 0 – 4 años
- 5 – 8 años
- más de 9 años

Encuesta: Se adjunta encuesta en el anexo A.3

ANEXO B

Encuesta a los directores de centros que impartan enseñanzas de régimen general en centros educativos de la Comunidad de Madrid.

Acceso: Se dirigirá un escrito a entidades profesionales y representativas de los directores de los centros educativos (Consejo de directores, Asociación de Directores de Institutos de la Comunidad de Madrid [ADIMAD], representantes y patronal de centros concertados y/o privados [Escuelas Católicas, CECE, CICAIE, ACADE], etc.), según Anexo B.1, solicitando la divulgación de la encuesta entre los directores.

Ubicación: La encuesta, de cumplimentación electrónica (por ordenador, teléfono móvil y posible acceso por código Bidi), se encuentra ubicado en los Servidores de la Unión Europea (<http://ec.europa.eu/eusurvey>) para garantizar la seguridad e integridad de los datos.

Enlace: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DIRCD_EncuestaUAM

Código Bidi:



Información a la población: se proporcionará a las entidades señaladas un escrito (según anexo B.2) para los directores solicitando su participación como consentimiento informado. El contenido de dicho escrito forma parte también de la cabecera de la encuesta. No se recoge ningún dato de carácter personal y las variables relativas al tipo de centro en el que trabajan y a la experiencia directiva se encuentran anonimizadas para desvincularla de los sujetos que participan.

Variables de investigación en el sector:

* Tipo de centro donde ejerce la función directiva

- Centro público
- Centro concertado
- Centro Privado

* Años de experiencia directiva:

- 0 – 4 años
- 5 – 8 años
- más de 9 años

Encuesta: Se adjunta encuesta en el anexo B.3

ANEXO C

Encuesta a los docentes (maestros y profesores) de centros que impartan enseñanzas de régimen general en centros educativos de la Comunidad de Madrid.

Acceso: Se dirigirá un escrito a los sindicatos y a las entidades profesionales y representativas de los docentes de los centros educativos (ANPE, CSIF, CSIT, UGT, CCOO, CGT, FSIE, Colegio Oficial de Docentes, etc.), (según Anexo C.1) solicitando la divulgación de la encuesta entre los docentes. También se fomentará la participación en las redes sociales; fundamentalmente twitter.

Ubicación: La encuesta, de cumplimentación electrónica (por ordenador, teléfono móvil y posible acceso por código Bidi), se encuentra ubicado en los Servidores de la Unión Europea (<http://ec.europa.eu/eusurvey>) para garantizar la seguridad e integridad de los datos.

Enlace: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PROCD_EncuestaUAM

Código Bidi:



Información a la población: se proporcionará a las entidades señaladas un escrito (según anexo C.2) para los docentes solicitando su participación como consentimiento informado. El contenido de dicho escrito forma parte también de la cabecera de la encuesta. No se recoge ningún dato de carácter personal y las variables relativas al tipo de centro en el que trabajan y a la experiencia docente se encuentran anonimizadas para desvincularla de los sujetos que participan.

Variables de investigación en el sector:

* Tipo de centro donde ejerce como docente

- Centro público
- Centro concertado
- Centro Privado

* Años de experiencia directiva:

- 0 – 8 años
- 9 – 18 años
- más de 19 años

Encuesta: Se adjunta encuesta en el anexo C.3

ANEXO D

Encuesta a las familias (padres, madres, tutores) de los alumnos que cursan enseñanzas de régimen general en centros educativos de la Comunidad de Madrid.

Acceso: Se dirigirá un escrito a las entidades representativas de los padres y madres y familias (FAPA Giner de los Ríos, CEAPA, CONCAPA, etc.), según Anexo D.1) solicitando la divulgación de la encuesta entre las familias asociadas. También se fomentará la participación en las redes sociales; fundamentalmente twitter.

Ubicación: La encuesta, de cumplimentación electrónica (por ordenador, teléfono móvil y posible acceso por código Bidi), se encuentra ubicado en los Servidores de la Unión Europea (<http://ec.europa.eu/eusurvey>) para garantizar la seguridad e integridad de los datos.

Enlace: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FAMCD_EncuestaUAM

Código Bidi:



Información a la población: se proporcionará a las entidades señaladas un escrito (según anexo D.2) para las familias de alumnos solicitando su participación como consentimiento informado. El contenido de dicho escrito forma parte también de la cabecera de la encuesta. No se recoge ningún dato de carácter personal y las variables relativas al tipo de centro en el que trabajan se encuentran anonimizadas para desvincularla de los sujetos que participan.

Variables de investigación en el sector:

* Tipo de centro al que asisten tus hijos.

- Centro público
- Centro concertado
- Centro Privado

Encuesta: Se adjunta encuesta en el anexo D.3

ANEXO E

Encuesta a los responsables educativos de la Comunidad de Madrid. La encuesta se dirige a las personas que ejercen o hayan ejercido en las dos últimas legislaturas los cargos de Subdirector General y superiores: Subdirector General, Director General, Viceconsejo, Presidente del Consejo Escolar, Secretario General Técnico, Consejero de Educación o miembro de la Comisión de Educación en la Asamblea de Madrid.

Acceso: Se dirigirá un escrito por correo electrónico a la población de la muestra que será extraído del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid y de la web de la Asamblea de Madrid, según Anexo E.1 solicitando la participación en la encuesta.

Ubicación: La encuesta, de cumplimentación electrónica (por ordenador, teléfono móvil y posible acceso por código Bidi), se encuentra ubicado en los Servidores de la Unión Europea (<http://ec.europa.eu/eusurvey>) para garantizar la seguridad e integridad de los datos.

Enlace: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RESSE_EncuestaUAM

Código Bidi:



Información a la población: el contenido del escrito señalado forma parte también de la cabecera de la encuesta como consentimiento informado. No se recoge ningún dato de carácter personal y las variables relativas a los años en los que ha ejercido la responsabilidad se encuentran anonimizadas para desvincularla de los sujetos que participan.

Variables de investigación en el sector:

* Años durante los cuales ha ejercido la responsabilidad o representación

- 0 – 4 años
- 5 – 8 años
- más de 9 años

Encuesta: Se adjunta encuesta en el anexo E.2

ANEXO A.1.

A/A Sr. Luis Abad

Subdirector General de Inspección Educativa

Estimado Sr,

Nos dirigimos a usted para solicitar formalmente su autorización para recabar la participación de los Inspectores de Educación de la Comunidad de Madrid en un proyecto de investigación relativo a las competencias requeridas para el ejercicio de la función inspectora. Dicho proyecto forma parte de la tesis doctoral de D. José María Lozano y está dirigida por los Doctores Javier M. Valle y Jesús Manso. La tesis está inscrita en el Programa de Doctorado en Educación de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

El proyecto en cuestión se encuentra aprobado por la Comisión de Doctorado del mencionado programa, cuenta con el informe positivo del Comité de Ética de la Investigación de la UAM y requiere la participación de los agentes fundamentales que intervienen en el sistema educativo: Inspectores de educación, directores de centros educativos, docentes en ejercicio, familias de alumnos y responsables del sistema educativo.

La participación de los inspectores consistirá en la cumplimentación de un cuestionario sobre el grado de acuerdo del participante en una serie de afirmaciones sobre las competencias que realiza la inspección de educación en la Comunidad de Madrid. Consta de alrededor de cincuenta ítems, organizados en cuatro dimensiones y el tiempo requerido para su cumplimentación no supera los 20 minutos.

Le solicitamos autorización para ponernos en contacto con los inspectores de educación de la Comunidad de Madrid por correo electrónico para solicitarles su participación, de forma electrónica por ordenador, teléfono móvil y posible acceso por código bidi para facilitar el acceso.

Si tiene alguna duda sobre el estudio o le gustaría comentar algún aspecto de esta propuesta, antes de aceptar participar en ella, puede ponerse en contacto con nosotros por e-mail (jm.valle@uam.es, jesus.manso@uam.es o josemaria.lozanos@estudiante.uam.es) o por teléfono (+34 690 960 211).

Muy cordialmente,

El Equipo Investigador:

Doctor Javier M. Valle López

Doctor Jesús Manso Ayuso

José M^a Lozano Salinas

ANEXO A.2.

A/A Inspector de Educación
Comunidad de Madrid.

Estimado Sr./estimada Sra.:

Me pongo en contacto con Vd. para solicitarle la participación en una investigación cuyo objetivo consiste en delimitar las competencias requeridas para el ejercicio de la inspección educativa.

Su participación consistirá en la cumplimentación de un cuestionario sobre las competencias que como Inspector de Educación considera imprescindibles para realizar la función Inspectora.

Se utiliza el método de estudio de encuestas con seis opciones según afinidad a la afirmación (0-5) ya testado previamente por GIPES: Grupo de Investigación sobre Políticas Educativas Supranacionales de la UAM, el grupo Atlántida y la Fundación COTEC, en el que hemos participado previamente.

El cuestionario, implementado en los entornos digitales de la Unión Europea -EUsurvey- (para garantizar la confidencialidad, la protección y anonimato de los datos) consiste en distintas preguntas organizadas en cuatro dimensiones a las que accederá si acepta el presente **consentimiento informado**.

Al aceptar se accede a una sencilla pregunta sobre los años de experiencia como inspector de educación y al propio cuestionario con las preguntas concretas en forma de matriz organizadas en cuatro dimensiones.

El tiempo requerido para su cumplimentación no supera los 20'.

La investigación cuenta con el informe favorable del Comité de Ética de la Universidad Autónoma de Madrid y los datos conseguidos serán extraídos de la plataforma a una unidad USB donde se custodiarán durante cinco años en el departamento de Pedagogía de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid (despacho I-316).

Es muy importante su participación en la presente investigación, pues sin Vd., agente imprescindible del sistema no se podría realizar, ni sacar conclusiones. La participación proporcionará información importante para la investigación y para la elaboración de conclusiones relevantes que pudieran influir en la selección, formación y organización de los inspectores de educación en el futuro; además de ser imprescindible para la elaboración y defensa de la tesis doctoral.

La participación es absolutamente voluntaria y anónima y se puede revocar en cualquier momento: abandonando el cuestionario o pulsando la tecla de retroceso en el navegador se anulará su participación.

El único dato personal que se recogerá será el relativo al grupo de pertenencia y el de la variable señalada (años de experiencia como inspector), que quedarán anonimizados.

Si tiene alguna duda sobre el estudio o le gustaría comentar algún aspecto de esta información, puede ponerse en contacto con cualquiera de los miembros del grupo investigador, antes de aceptar participar en ella, por e-mail: jm.valle@uam.es, jesus.manso@uam.es o josemaria.lozanos@estudiante.uam.es o por teléfono en el +34 690 960 211.

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en el presente documento y en la encuesta hacen referencia a miembros de la comunidad educativa y se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituidos por términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino.

Si una vez leída esta información y aclaradas las dudas que pudieran haberle surgido decide participar, deberá pulsar el siguiente enlace o acceder por el código QR y aceptar la participación, validando de esta forma el "consentimiento informado" y entrando, en el cuestionario.

Url – enlace:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/INSED_EncuestaUAM

Código bidi



Muchas gracias por su participación.

Doctor Javier M. Valle López

Doctor Jesús Manso Ayuso

José M^a Lozano Salinas

ANEXO A.3.

A. Dimensión Personal

	0	1	2	3	4	5
A.1. El inspector, la inspectora de educación identifica las prácticas educativas que se desarrollan en un centro educativo y los modelos de enseñanza que les sirven de referencia para definir sus propias señas de identidad.						
A.2. Valora la adaptación de las prácticas docentes y organizativas a las normas reguladoras del sistema educativo y su contribución al ejercicio efectivo del derecho a la educación.						
A.3. Crea vías y relaciones de comunicación suficientemente fluidas para intercambiar información y conocimiento con cada uno de los centros educativos y con los miembros de las comunidades educativas.						
A.4. Genera confianza y seguridad en sus actuaciones tanto en las comunidades educativas como en las administraciones públicas para que pueda desarrollar con la mayor colaboración posible las funciones y tareas que le son propias.						
A.5. Planifica sus acciones en relación con cada centro de modo que sus intervenciones puedan adquirir un carácter sistemático y adaptado a las características de los centros y de los servicios.						
A.6. Tiene en cuenta la evolución de los centros educativos y de los servicios para impulsar sus procesos de mejora con el fin de lograr el éxito educativo en todo el alumnado.						
A.7. Promueve en los equipos directivos y equipos docentes el análisis de los resultados del centro, tanto en el ámbito académico como en el de la convivencia, para impulsar la elaboración y desarrollo de planes de mejora que contribuyan al desarrollo de un sistema educativo de calidad.						
A.8. Facilita un conocimiento informado y una reflexión serena de las posibilidades y limitaciones de las diferentes innovaciones educativas, así como de sus consecuencias para el centro.						
A.9. Impulsa en los centros la implantación de aquellos programas, proyectos e innovaciones educativas (tanto institucionales como no institucionales) que se ajusten mejor a las necesidades y características de los mismos y que contribuyan a mejorar su capacidad profesional, dotándolos de nuevas perspectivas.						
A.10. Comparte con los centros educativos sus inquietudes y preocupaciones y les anima a dejar constancia de ellas en sus memorias anuales y hacer de ellas un motor para la mejora.						
A.11. Contribuye a la transformación de los centros educativos en auténticas comunidades que comparten un proyecto educativo y un conjunto bien definido de planes y proyectos.						
A.12. Construye una imagen de cada situación educativa, así como de los casos que tiene que resolver, que integre los diferentes niveles del sistema educativo, así como la visión de los agentes educativos y su relación con el contexto.						

B. Dimensión Institucional

	0	1	2	3	4	5
B.1. El servicio de inspección educativa (en adelante, SIE) dispone de procedimientos y orientaciones suficientes para apoyar y facilitar el desempeño adecuado de las funciones y tareas de sus miembros.						
B.2. El SIE estudia y analiza la normativa del sistema educativo y define criterios institucionales para poder aplicarla de forma homogénea, imparcial y objetiva.						
B.3. El SIE realiza institucionalmente actividades de formación dirigidas a actualizar los conocimientos y competencias necesarios para el desarrollo de las funciones específicas de la inspección.						
B.4. El SIE facilita el reconocimiento de buenas prácticas docentes y organizativas para que puedan servir de referencia en los procesos de mejora de los centros educativos.						
B.5. El SIE facilita el reconocimiento de buenas prácticas en los servicios educativos para que puedan servir de referencia en los procesos de mejora de los servicios educativos.						
B.6. El SIE reconoce y valorar las metodologías más frecuentes y su aplicación práctica en procesos que permitan la mejora del aprendizaje						
B.7. El SIE planifica reuniones del servicio en donde intercambian experiencias relacionadas con hechos vividos por inspección en los distintos ámbitos del sistema educativo y se definen casos que podrían servir de referencia.						
B.8. El SIE facilita el intercambio de ideas y experiencias entre sus miembros para que puedan compartir tanto el conocimiento implícito como el conocimiento explícito y mejorar el desempeño de sus funciones y tareas.						
B.9. El SIE contribuya activamente a crear una visión específica de la realidad educativa, en todos sus niveles, y colabora para que esa visión pueda ser compartida por todos sus miembros.						
B.10. El SIE incorpora a su plan anual de trabajo actividades dirigidas a evaluar y mejorar la capacidad profesional de sus miembros, así como de los equipos y de la propia institución.						
B.11. El SIE promueve y facilita una eficaz gestión del conocimiento entre sus miembros y anima a formar equipos que compartan experiencias y saberes.						
B.12. El SIE promueve y facilita la creación de una cultura colegiada una entre sus miembros y anima a formar equipos que compartan responsabilidades en una misma actuación.						
B.13. El SIE impulsa la necesaria reflexión sobre el sistema educativo tomando como referencia los informes nacionales e internacionales.						
B.14. El SIE facilita a sus miembros el conocimiento necesario sobre metodologías, técnicas e instrumentos que pueden mejorar el desempeño de las funciones y tareas que tiene asignadas.						
B.15. El SIE promueve y facilita la realización de actuaciones integrales y colegiadas en los centros y servicios educativos que, por sus circunstancias o por sus características, así lo aconsejan.						
B.16. El SIE se preocupa por construir una visión diferencial del sistema educativo que integre sus niveles constitutivos (general, centro y aula) y lograr que esa visión oriente su actuación tanto en un sentido normativo como en un sentido perfectivo.						

C. Dimensión Gestión del conocimiento

	0	1	2	3	4	5
C.1. La inspección educativa (en adelante, IE) dispone de un conocimiento adecuado de las evidencias, así como de los modelos y teorías que sirven de fundamento a las normas reguladoras del sistema educativo.						
C.2. La IE posee un conocimiento adecuado de las evidencias, disponibles sobre la realidad educativa, así como de los métodos, procedimientos e instrumentos utilizados en su obtención.						
C.3. La IE maneja con facilidad modelos y teorías en los distintos niveles del sistema educativo para describir y valorar las diversas situaciones educativas y reconocer sus posibilidades de mejora.						
C.4. La IE dispone de canales de comunicación interna en las que se puedan intercambien prácticas de actuación y se fomenta el intercambio de casos relevante, así como de prácticas inspectoras innovadoras.						
C.5. La IE dispone del conocimiento necesario sobre metodologías, técnicas e instrumentos que pueden mejorar el desempeño de las funciones y tareas que tiene asignadas.						
C.6. La IE tiene la oportunidad de participar en grupos de trabajo para el estudio y análisis de diversos aspectos relacionados con el mundo educativo y, singularmente, con los problemas más relevantes de sus centros educativos.						
C.7. La IE comparte el análisis de casos prácticos relacionados con situaciones problemáticas para ofrecer una visión técnica y cualificada y proponer posibles soluciones.						
C.8. La IE dispone de procedimientos, técnicas y orientaciones adecuadas para examinar documentos de los diferentes centros y servicios educativos.						
C.9. La IE dispone de procedimientos, técnicas y orientaciones adecuadas para diseñar y desarrollar las vistas a los diferentes centros y servicios educativos.						
C.10. La IE dispone de las herramientas adecuadas para la comunicación y reflexión sobre las actuaciones de modo que todos los miembros del servicio desarrollan juicios de las distintas situaciones educativas ajustados al conocimiento actualizado disponible.						
C.11. La IE dispone del conocimiento y las habilidades necesarias para superar con éxito las situaciones en las que se presentan conflictos dentro de los centros educativos.						
C.12. La IE tiene la oportunidad de participar en procesos de formación teórica y práctica, así como de reflexión compartida que facilitan la gestión del conocimiento tanto explícito como implícito.						
C.13. La IE aporta al conjunto del sistema educativo una capacidad de reflexión que les permite a los diferentes agentes comprender tanto los fundamentos de sus acciones como la necesidad de cooperar en el logro de la finalidad general de la educación.						

D. Dimensión Cultura institucional

	0	1	2	3	4	5
D.1. La IE comparte valores esenciales para el ejercicio de las funciones que tiene asignadas como son la imparcialidad, el rigor, el respeto a todas las personas e instituciones, la equidad y el cuidado y protección del alumnado.						
D.2. La IE participa en la construcción de una comunidad de práctica profesional que comparte experiencias, ideas, conocimiento y procedimientos de actuación.						
D.3. La inspección educativa reconoce y valora la necesidad de una visión específica y diferenciada de la realidad educativa que integra los niveles del aula, el centro y el nivel sistémico.						
D.4. La IE considera esencial elevar la reflexividad del sistema educativo para comprender tanto sus fortalezas como sus debilidades, así como la necesidad de que todos los agentes cooperen para alcanzar el mayor nivel posible de éxito educativo.						
D.5. La IE impulsa procesos de mejora en todos los centros y servicios educativos, basándose en la información aportada por sus propias memorias anuales y los informes institucionales.						
D.6. La IE dispone de tiempos y espacios adecuados para celebrar encuentros y reuniones entre las personas que desarrollan acciones en centros de la misma zona o ámbito de inspección, de modo que puedan compartir visiones y criterios.						
D.7. La IE promueve la acción conjunta de todos sus miembros y considera necesario asumir la corresponsabilidad de las acciones que se desarrollan dentro del mismo servicio.						
D.8. La IE comparte la necesidad de promover una cultura inclusiva en los centros educativos que facilite la igualdad de oportunidades de aprendizaje.						
D.9. La IE considera la educación como un derecho universal, incorporado al marco constitucional, y vela para que todas las personas puedan hacer un uso efectivo de ese derecho.						
D.10. La IE asume el derecho a la educación como fundamento de todo el sistema educativo y de su propia práctica profesional.						
D.11. La IE considera la realización de sus funciones y tareas como una garantía para un funcionamiento de un servicio público esencial como es la educación.						
D.12. La IE asume la responsabilidad de contribuir para que el ordenamiento del sistema educativo contribuya a que los centros y los servicios educativos orienten su organización y funcionamiento hacia la mejora continua.						

El resto de Anexos B.1. y siguientes; C.1. y siguientes; D.1. y siguientes y E.1. y siguientes son replicas adaptadas de los anteriores documentos y se encuentran actualmente realizándose y pendientes de su apertura y publicación.

Anexo I.B. Informe Favorable del Comité de Ética de la Investigación de la Universidad Autónoma de Madrid (CEI-UAM) para la realización del estudio de encuestas.

CEI 113- 2226



COMITÉ DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN

El Comité de Ética de la Investigación de la Universidad Autónoma de Madrid, en su reunión del día 22 de enero de 2021, ha considerado las circunstancias que concurren en el Proyecto de Plan de Investigación de Tesis: **“Competencias profesionales para el ejercicio de la inspección de educación en la Comunidad de Madrid”**, que tiene como Tutor al Dr. **Jesús Manso Ayuso**, como Director al Dr. **Javier M. Valle López**, y como doctorando a D. **José María Lozano Salinas**.

A la vista de la documentación presentada este Comité ha considerado informar favorablemente el Proyecto de investigación, ya que cumple los requisitos éticos requeridos para su ejecución.

Madrid, 22 de enero de 2021

JOSE MANUEL GONZALEZ
SANCHO - 09309294K

Nombre de reconocimiento (DN): JOSE MANUEL GONZALEZ SANCHO
cnsccscaid, givenName=JOSE MANUEL, sn=GONZALEZ SANCHO -
09309294K, serialNumber=DCE5-cnsccscaid, id=nsccscaid,
2.5.4.97=INTS-Comunidad, ou=CENTRO DE ELECTRONICA DE
EMPLEADO PUBLICO, ou=INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION,
ou=UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID, c=ES
Fecha: 2021.01.21 16:00:09 +01:00

José Manuel González Sancho

Presidente CEI-UAM

Anexo 1.1. Carta al Subdirector General de Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid.

A/A

Sr. D. Luis Abad Merino.

Subdirector General de Inspección Educativa.

Viceconsejería de Organización Educativa.

Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía.

[Comunidad de Madrid]

Estimado Don Luis Abad:

Nos dirigimos a usted para solicitar formalmente su autorización para recabar la participación de los Inspectores de Educación de la Comunidad de Madrid en un proyecto de investigación relativo al ejercicio de las competencias requeridas para el desarrollo de las funciones inspectoras. Dicho proyecto forma parte de la tesis doctoral de D. José María Lozano y está dirigida por los Doctores D. Javier M. Valle y D. Jesús Manso. La tesis está inscrita en el Programa de Doctorado en Educación de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

El proyecto en cuestión se encuentra aprobado por la Comisión de Doctorado del mencionado programa, cuenta con el informe favorable del Comité de Ética de la Investigación de la UAM y requiere la participación de los agentes fundamentales que intervienen en el sistema educativo: Inspectores de Educación, directores de centros educativos, docentes en ejercicio, familias de alumnos y responsables del sistema educativo.

La participación de los inspectores consistirá en la cumplimentación de un cuestionario sobre el grado de acuerdo del participante en una serie de afirmaciones sobre el ejercicio de las competencias que realiza la Inspección de Educación en la Comunidad de Madrid. Consta de alrededor de cincuenta ítems, organizados en cuatro dimensiones y el tiempo requerido para su cumplimentación no supera los 20 minutos.

Le solicitamos autorización para ponernos en contacto con los inspectores de educación de la Comunidad de Madrid por correo electrónico para solicitarles su participación, de forma electrónica por ordenador, teléfono móvil y posible acceso por código bidi para facilitar el acceso.

Si tiene alguna duda sobre el estudio o le gustaría comentar algún aspecto de esta propuesta, antes de autorizar el contacto, para la consiguiente solicitud de participación de los inspectores, puede ponerse en contacto con nosotros por e-mail (jm.valle@uam.es, jesus.manso@uam.es o josemaria.lozanos@estudiante.uam.es) o por teléfono (+34 690 960 211).

Muy cordialmente,

El Equipo Investigador:

Doctor Javier M. Valle López

Doctor Jesús Manso Ayuso

José M^a Lozano Salinas

Anexo 1.2. Propuesta de escrito del Subdirector General de Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid.

De: ABAD MERINO, LUIS <luis.abad.merino@madrid.org>

Enviado el: jueves, 2 de septiembre de 2021 10:21

Para: Lozano Salinas, José M^a <josemaria.lozanos@estudiante.uam.es>

Asunto: Texto del correo

Buenos días.

Te adjunto la propuesta de texto para el correo. Dime si quieres modificar algo. Un saludo

Desde la Subdirección General de Inspección Educativa se ha autorizado la participación de los Inspectores de Educación de la Comunidad de Madrid en un proyecto de investigación relativo al ejercicio de las competencias requeridas para el desarrollo de las funciones inspectoras. Dicho proyecto forma parte de la tesis doctoral de D. José María Lozano y está dirigida por los Doctores D. Javier M. Valle y D. Jesús Manso. La tesis está inscrita en el Programa de Doctorado en Educación de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

La participación tiene carácter voluntario y consistirá en la cumplimentación de un cuestionario sobre el grado de acuerdo del participante en una serie de afirmaciones sobre el ejercicio de las competencias que realiza la Inspección de Educación en la Comunidad de Madrid. Consta de alrededor de cincuenta ítems, organizados en cuatro dimensiones y el tiempo requerido para su cumplimentación no supera los 20 minutos.

En breve, se pondrán en contacto con usted en este correo electrónico.



**Comunidad
de Madrid**

Luis Abad Merino

Subdirector General de Inspección Educativa

Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía

Santa Hortensia, 30. 5ª planta. MADRID

Anexo 1.3. Información de inspectores que han comunicado su decisión de no participar en la investigación.

De: ABAD MERINO, LUIS <luis.abad.merino@madrid.org>

Enviado el: jueves, 2 de septiembre de 2021 17:06

Para: Lozano Salinas, José M^a <josemaria.lozanos@estudiante.uam.es>

Asunto: RV: Proyecto de investigación

Hola, José María.

[INom] [IAp] nos ha escrito diciendo que no le interesa participar en la investigación...



Luis Abad Merino
Subdirector General de Inspección Educativa
Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía
Santa Hortensia, 30. 5ª planta. MADRID

Anexo 1.4. Plantilla del escrito remitido a todos los inspectores de educación invitando a participar en la investigación.

A/A.
[INom] [IAp].
Inspector[Idg] de Educación.
Servicio de Inspección Educativa de Madrid [Dat].
[Comunidad de Madrid].

Estimad[Idg] Inspector[Idgs] :

Nos ponemos en contacto con Vd. para solicitarle su participación en una investigación cuyo objetivo consiste en estudiar el ejercicio de las competencias requeridas para el desarrollo de las funciones inspectoras.

Su participación consistirá en la cumplimentación de un cuestionario sobre el ejercicio de dichas competencias comoInspectora de Educación.

Se utiliza el método de estudio de encuestas con seis opciones según afinidad a la afirmación (0-5) ya testado previamente por GIPES: Grupo de Investigación sobre Políticas Educativas Supranacionales de la UAM, el grupo Atlántida y la Fundación COTEC, en el que hemos participado previamente.

El cuestionario, implementado en los entornos digitales de la Unión Europea -EUsurvey- (para garantizar la integridad, confidencialidad, protección y anonimato de los datos) consiste en distintas preguntas organizadas en cuatro dimensiones a las que accederá si acepta el presente **consentimiento informado**.

Al aceptar, se accede a unas sencillas preguntas sobre los años de experiencia como inspector[Idgs] de educación, la Dirección de Área en la que realiza su labor y al propio cuestionario con las preguntas concretas en forma de matriz organizadas en cuatro dimensiones: dimensión personal; dimensión institucional; dimensión de gestión del conocimiento; y dimensión de cultura institucional.

El tiempo requerido para su cumplimentación no supera los 20´.

La investigación cuenta con el informe favorable del Comité de Ética de la Universidad Autónoma de Madrid y los datos conseguidos serán extraídos de la plataforma a una unidad USB donde se custodiarán durante cinco años en el departamento de Pedagogía de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid (despacho I-316).

Es muy importante su participación en la presente investigación, pues sin Vd., agente imprescindible del sistema educativo, no se podría realizar, ni sacar conclusiones. La participación proporcionará información importante para la investigación y para la elaboración de conclusiones relevantes que pudieran influir en la selección, formación y organización de los inspectores de educación en el futuro; además de ser imprescindible para la elaboración y defensa de la tesis doctoral.

La participación es absolutamente voluntaria y anónima y se puede revocar en cualquier momento: abandonando el cuestionario o pulsando la tecla de retroceso en el navegador se anulará su participación.

Los únicos datos personales que se recogerán, serán los relativos al grupo de pertenencia y a las variables señaladas (años de experiencia como inspector[Idgs] y DAT), que quedarán anonimizados.

Si tiene alguna duda sobre el estudio o le gustaría comentar algún aspecto de esta información, puede ponerse en contacto con cualquiera de los miembros del grupo investigador, antes de aceptar participar en ella, por e-mail: jm.valle@uam.es, jesus.manso@uam.es o josemaria.lozanos@estudiante.uam.es o por teléfono en el +34 690 960 211.

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en el presente documento y en la encuesta hacen referencia a miembros de las comunidades educativas y se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituidos por términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino.

Si una vez leída esta información y aclaradas las dudas que pudieran haberle surgido decide participar, deberá pulsar el siguiente enlace o acceder por el código QR y aceptar la participación, validando de esta forma el "consentimiento informado" y entrando, en el cuestionario.

Url – enlace:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/INSED_EncuestaUAM

Código bidi



Muchas gracias por su participación.

Doctor Javier M. Valle López

Doctor Jesús Manso Ayuso

José M^a Lozano Salinas

Anexo 1.5. Plantilla del escrito comunicando la incidencia del navegador IE 11 y la forma de solventarlo.

A/A.
[INom] [IAp].
Inspector[Idg] de Educación.
Servicio de Inspección Educativa de Madrid [Dat].
[Comunidad de Madrid].

Estimad[Idg] Inspector[Idgs] :

La semana pasada nos pusimos con comunicación con Vd. para solicitar su participación en una investigación cuyo objetivo consiste en estudiar el ejercicio de las competencias requeridas para el desarrollo de las funciones inspectoras.

Se ha detectado que la apertura del enlace remitido, en los ordenadores institucionales, se realiza por defecto con el navegador predeterminado, Internet Explorer, versión 11 del año 2013. Dicho navegador es muy obsoleto y no soporta todas las potencialidades de la herramienta EUSurvey, por lo que no termina de cargar la página de la encuesta. Esta incidencia puede haberle causado algún tipo de inconveniente.

El motivo del presente correo es pedirle disculpas si se ha visto afectado por dicha incidencia y rogarle que, si está interesado en participar en la citada investigación, copie el enlace de la encuesta en otro navegador: Google Chrome, Firefox Browser, Microsoft Edge, ...

Igualmente puede escanear el código bidi con la cámara de su móvil y cumplimentar la encuesta desde su smartphone o tableta.

Le rogamos que disculpe las molestias.

Nos permitimos volver a indicarle la url del enlace a la encuesta:

Url – enlace:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/INSED_EncuestaUAM

Código bidi



Le reiteramos nuestro agradecimiento por su atención y por su participación.

Doctor Javier M. Valle López

Doctor Jesús Manso Ayuso

José M^a Lozano Salinas

Anexo 1.6. Plantilla del escrito remitido a todos los inspectores de educación recordando la invitación a participar en la investigación.

A/A.
[INom] [IAp].
Inspector[Idg] de Educación.
Servicio de Inspección Educativa de Madrid [Dat].
[Comunidad de Madrid].

Estimad[Idg] [INomS] :

El pasado mes de septiembre nos pusimos en contacto con Vd. para solicitarle su participación en una investigación cuyo objetivo consiste en estudiar el ejercicio de las competencias requeridas para el desarrollo de las funciones inspectoras en la Comunidad de Madrid.

Dado que la participación no alcanza el nivel de confianza estadístico requerido, nos permitimos volver a ponernos en contacto con Vd., para reiterar la solicitud de participación, sólo en el caso de que no lo haya hecho previamente.

Como recordará, su participación consistirá en la cumplimentación de un cuestionario sobre el ejercicio de las competencias específicas requeridas como Inspectora de Educación.

Le recordamos brevemente los datos y el objeto de la investigación y el procedimiento concreto que le solicitamos.

El equipo de investigación está compuesto por el Doctor Javier M. Valle López, profesor titular del Departamento de Pedagogía de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, coordinador general del Grupo de Investigación sobre Políticas Educativas Supranacionales [GIPES] de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid por el grupo de Universidades Madrileñas; por el Doctor Jesús Manso Ayuso, Decano de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid; y por José M^a Lozano Salinas, alumno del programa de Doctorado en Educación en la misma Universidad.

Se utiliza el método de estudio de encuestas, con seis opciones según afinidad a la afirmación (0-5) con una herramienta elaborada por GIPES, el grupo Atlántida y la Fundación COTEC junto a representantes de las principales asociaciones y sindicatos de inspectores de educación (USIE, ADIDE, ANIE e INSnoave) que actuaron como expertos. La herramienta se encuentra validada estadísticamente.

El cuestionario, implementado en los entornos digitales de la Unión Europea -EUsurvey- (para garantizar la integridad, confidencialidad, protección y anonimato de los datos) consiste en distintas preguntas organizadas en cuatro dimensiones a las que accederá si acepta su participación y el presente **consentimiento informado**.

Al aceptar, se accede a unas sencillas preguntas sobre los años de experiencia como inspector[Idgs] de educación, la Dirección de Área en la que realiza su labor y al propio cuestionario con las preguntas concretas en forma de matriz organizadas en cuatro dimensiones: dimensión personal; dimensión institucional; dimensión de gestión del conocimiento; y dimensión de cultura institucional.

El tiempo requerido para su cumplimentación no supera los 20'.

La investigación cuenta con el informe favorable del Comité de Ética de la Investigación de la Universidad Autónoma de Madrid (CEI-UAM) con un cumplimiento estricto de las pautas deontológicas aceptadas por la comunidad científica; los datos conseguidos, totalmente

anónimos, serán extraídos de la plataforma a una unidad USB donde se custodiarán durante cinco años en el departamento de Pedagogía de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid (despacho I-316).

Como comprenderá, es muy importante su participación en la investigación, pues sin Vd., Inspector[Idgs] de Educación y agente imprescindible del sistema educativo, no se podría realizar ni sacar conclusiones. Su participación proporcionará información esencial para la investigación y podrá generar conclusiones relevantes que nos comprometemos a trasladarle por medio de la Subdirección General de Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid, que conoce nuestros propósitos y que ha autorizado nuestra comunicación con Vd.

No obstante, su participación es absolutamente voluntaria y anónima y se puede revocar en cualquier momento: abandonando el cuestionario o pulsando la tecla de retroceso en el navegador se anulará su participación.

Los únicos datos personales que se recogerán, serán los relativos al grupo de pertenencia y a las variables señaladas (años de experiencia como inspector[Idgs] y DAT), que quedarán anonimizados.

Si le surgiera alguna duda sobre el estudio o le quisiera comentar algún aspecto de esta información, puede ponerse en contacto con cualquiera de los miembros del grupo investigador, antes de aceptar participar en ella, por e-mail: jm.valle@uam.es, jesus.manso@uam.es o josemaria.lozanos@estudiante.uam.es o por teléfono en el +34 690 960 211.

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en el presente documento y en la encuesta hacen referencia a miembros de las comunidades educativas y se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituidos por términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino.

Si una vez leída esta información y aclaradas las dudas que pudieran haberle surgido decide participar, deberá pulsar el siguiente enlace o acceder por el código QR y aceptar la participación, validando de esta forma el "consentimiento informado" y entrando, en el cuestionario.

Url – enlace:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/INSED_EncuestaUAM

Código bidi



Si el enlace le diera problemas al abrirse con el navegador predeterminado de los equipos institucionales de la Comunidad de Madrid, puede copiarlo y pegarlo en cualquier otro navegador: Firefox, Google Chrome o Microsoft Edge.

Si ya hubiera cumplimentado el cuestionario, le agradecemos sinceramente su participación y le rogamos de disculpe este mensaje.

Quedamos a su entera disposición. Muchas gracias.

Doctor Javier M. Valle López

Doctor Jesús Manso Ayuso

José M^a Lozano Salinas

Anexo 2.1. Plantilla del escrito remitido a las entidades representativas de los directores de centros educativos, presentando la investigación y solicitando su divulgación entre los directores de los centros.

A/A.
[DNom] [DAp].
[DCargo]
[DEntidad]

Estimad[Ddg] [DNomS] :

Nos dirigimos a Vd. para solicitar formalmente su colaboración en la **divulgación** de una encuesta para un proyecto de investigación relativo al ejercicio de las competencias inspectoras en la Comunidad de Madrid. Dicho proyecto forma parte de la tesis doctoral de D. José María Lozano y está dirigida por los Doctores D. Javier M. Valle y D. Jesús Manso. La tesis está inscrita en el Programa de Doctorado en Educación de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

El proyecto en cuestión se encuentra aprobado por la Comisión de Doctorado del mencionado programa, cuenta con el informe favorable del Comité de Ética de la Investigación de la UAM y requiere la participación de los agentes fundamentales que intervienen en nuestro sistema educativo: inspectores de educación, directores de centros educativos, docentes en ejercicio, familias de alumnos y responsables del sistema educativo.

La participación de los directores consistirá en la cumplimentación de un cuestionario sobre el grado de acuerdo del participante en una serie de afirmaciones sobre el ejercicio de las competencias que realiza la Inspección de Educación en la Comunidad de Madrid. Consta de alrededor de cincuenta ítems, organizados en cuatro dimensiones y el tiempo requerido para su cumplimentación no supera los 20 minutos.

Le solicitamos que haga llegar la propuesta de escrito que le adjuntamos a pie, o algún otro que pueda considerar, a los directores y directoras miembros del [DEntidad] por correo electrónico, con objeto de solicitarles su participación, de forma electrónica por ordenador, teléfono móvil y posible acceso por código bidi, para facilitar el acceso.

Si tiene alguna duda sobre el estudio o le gustaría comentar algún aspecto de esta propuesta, antes de aceptar participar en ella, puede ponerse en contacto con nosotros por e-mail (jm.valle@uam.es, jesus.manso@uam.es o josemaria.lozanos@estudiante.uam.es) o por teléfono (+34 690 960 211).

Muy cordialmente,

El Equipo Investigador:

Doctor Javier M. Valle López

Doctor Jesús Manso Ayuso

José M^a Lozano Salinas

PROPUESTA DE ESCRITO PARA LA DIVULGACIÓN

A/A

Director / Directora de centro educativo.

Centros que imparten Ed. Primaria y/o Ed. Secundaria
[Comunidad de Madrid].

Estimado Director / estimada Directora :

Nos ponemos en contacto con Vd. para solicitarle la participación en una investigación cuyo objetivo consiste en estudiar el ejercicio de las competencias inspectoras en la Comunidad de Madrid.

Su participación consistirá en la cumplimentación, como Director o Directora, de un cuestionario sobre el ejercicio de las competencias específicas por parte de los Inspectores de Educación.

Se utiliza el método de estudio de encuestas con seis opciones según afinidad a la afirmación (0-5) ya testado previamente por GIPES: Grupo de Investigación sobre Políticas Educativas Supranacionales de la UAM, el grupo Atlántida y la Fundación COTEC, en el que hemos participado previamente.

El cuestionario, implementado en los entornos digitales de la Unión Europea -EUsurvey- (para garantizar la integridad, confidencialidad, protección y anonimato de los datos) consiste en distintas preguntas organizadas en cuatro dimensiones [dimensión personal, dimensión institucional, dimensión de gestión del conocimiento y dimensión de cultura institucional] a las que accederá si acepta el presente **consentimiento informado**.

Al aceptar se accede a unas sencillas preguntas sobre el tipo de centro en el que ejerce, los años de experiencia como Director o Directora de centro educativo, la Dirección de Área Territorial en la que se encuentra su centro y al propio cuestionario con las preguntas concretas en forma de matriz organizadas en las cuatro dimensiones.

El tiempo requerido para su cumplimentación no supera los 20'.

La investigación cuenta con el informe favorable del Comité de Ética de la Universidad Autónoma de Madrid y los datos conseguidos serán extraídos de la plataforma a una unidad USB donde se custodiarán durante cinco años en el departamento de Pedagogía de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid (despacho I-316).

Es muy importante su participación en la presente investigación, pues sin Vd., agente imprescindible del sistema educativo, no se podría realizar, ni sacar conclusiones. La participación proporcionará información importante para la investigación y para la elaboración de conclusiones relevantes que pudieran influir en la selección, formación y organización de los Inspectores de Educación en el futuro; además de ser imprescindible para la elaboración y defensa de la tesis doctoral.

La participación es absolutamente voluntaria y anónima y se puede revocar en cualquier momento: abandonando el cuestionario o pulsando la tecla de retroceso en el navegador se anulará su participación.

Los únicos datos personales que se recogerán serán los relativos al grupo de pertenencia y a las variables señaladas (tipo de centro en el que ejerce, años de experiencia como Director o Directora y DAT en el que se encuentra su centro), que quedarán anonimizados.

Si tiene alguna duda sobre el estudio o le gustaría comentar algún aspecto de esta información, puede ponerse en contacto con cualquiera de los miembros del grupo investigador, antes de aceptar participar en ella, por e-mail: jm.valle@uam.es, jesus.manso@uam.es o josemaria.lozanos@estudiante.uam.es o por teléfono en el +34 690 960 211.

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en el presente documento y en la encuesta hacen referencia a miembros de la comunidad educativa y se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituidos por términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino.

Si una vez leída esta información y aclaradas las dudas que pudieran haberle surgido decide participar, deberá pulsar el siguiente enlace o acceder por el código QR y aceptar la participación, validando de esta forma el "consentimiento informado" y entrando, en el cuestionario.

Url – enlace:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DIRCD_EncuestaUAM

Código bidi



Si el enlace le diera problemas al abrirse con el navegador predeterminado de los equipos institucionales de la Comunidad de Madrid, puede copiarlo y pegarlo en cualquier otro navegador: Google Chrome, Firefox Browser, Microsoft Edge, ...

Igualmente puede escanear el código bidi con la cámara de su móvil y cumplimentar la encuesta desde su smartphone o tableta.

Muchas gracias por su participación.

Doctor Javier M. Valle López

Doctor Jesús Manso Ayuso

José M^a Lozano Salinas

Anexo 2.2. Plantilla del escrito remitido a las entidades representativas de los directores de centros educativos, volviendo a presentar la investigación y solicitando una nueva divulgación entre los directores de los centros.

A/A.
[DNom] [DAp].
[DCargo]
[DEntidad]

Estimad[Ddg] [DNomS] :

Nos volvemos a dirigir a Vd. para solicitar nuevamente su colaboración en la **divulgación** de la encuesta para el proyecto de investigación que conoce relativo al ejercicio de las competencias inspectoras en la Comunidad de Madrid. Recordará que dicho proyecto forma parte de la tesis doctoral de D. José María Lozano y está dirigida por los Doctores D. Javier M. Valle y D. Jesús Manso. La tesis está inscrita en el Programa de Doctorado en Educación de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Si recuerda la participación de los directores consiste en la cumplimentación de un cuestionario sobre el grado de acuerdo del participante en una serie de afirmaciones sobre el ejercicio de las competencias que realiza la Inspección de Educación en la Comunidad de Madrid. Consta de alrededor de cincuenta ítems, organizados en cuatro dimensiones y el tiempo requerido para su cumplimentación no supera los 20 minutos.

Le solicitamos que haga llegar nuevamente la propuesta de escrito que le adjuntamos a los directores y directoras por correo electrónico, para volver a solicitarles su participación, en el caso de que no la hayan participado ya, de forma electrónica por ordenador, teléfono móvil y posible acceso por código bidi, para facilitar el acceso.

Si tuviera alguna duda sobre el estudio o le gustaría comentar algún aspecto de esta propuesta, antes de aceptar participar en ella, puede ponerse en contacto con nosotros por e-mail (jm.valle@uam.es, jesus.manso@uam.es o josemaria.lozanos@estudiante.uam.es) o por teléfono (+34 690 960 211).

Muy cordialmente,

El Equipo Investigador:

Doctor Javier M. Valle López

Doctor Jesús Manso Ayuso

José M^a Lozano Salinas

PROPUESTA DE ESCRITO PARA LA DIVULGACIÓN

A/A

Director / Directora de centro educativo.

Centros que imparten Ed. Primaria y/o Ed. Secundaria
[Comunidad de Madrid].

Estimado Director / estimada Directora :

Nos ponemos nuevamente en contacto con Vd. para reiterarle la solicitud de participación en una investigación cuyo objetivo consiste en estudiar el ejercicio de las competencias inspectoras en la Comunidad de Madrid, en el caso de que no hubiera ya participado en ella.

Su participación consistirá, como ya le comunicamos en el anterior escrito, en la cumplimentación, como Director o Directora, de un cuestionario sobre el ejercicio de las competencias específicas por parte de los Inspectores de Educación.

Se utiliza el método de estudio de encuestas con seis opciones según afinidad a la afirmación (0-5) ya testado previamente por GIPES: Grupo de Investigación sobre Políticas Educativas Supranacionales de la UAM, el grupo Atlántida y la Fundación COTEC, en el que hemos participado previamente.

El cuestionario, implementado en los entornos digitales de la Unión Europea -EUsurvey- (para garantizar la integridad, confidencialidad, protección y anonimato de los datos) consiste en distintas preguntas organizadas en cuatro dimensiones [dimensión personal, dimensión institucional, dimensión de gestión del conocimiento y dimensión de cultura institucional] a las que accederá si acepta el presente **consentimiento informado**.

Al aceptar se accede a unas sencillas preguntas sobre el tipo de centro en el que ejerce, los años de experiencia como Director o Directora de centro educativo, la Dirección de Área Territorial en la que se encuentra su centro y al propio cuestionario con las preguntas concretas en forma de matriz organizadas en las cuatro dimensiones.

El tiempo requerido para su cumplimentación no supera los 20'.

Como ya le comunicamos, la investigación cuenta con el informe favorable del Comité de Ética de la Universidad Autónoma de Madrid y los datos conseguidos serán extraídos de la plataforma a una unidad USB donde se custodiarán durante cinco años en el departamento de Pedagogía de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid (despacho I-316).

Es esencial su participación en la presente investigación, pues sin Vd., agente imprescindible del sistema educativo, no se podría realizar, ni sacar conclusiones. **Hasta la fecha no contamos con una participación que nos garantice la necesaria validación estadística.**

La participación proporcionará información importante para la investigación y para la elaboración de conclusiones relevantes que pudieran influir en la selección, formación y organización de los Inspectores de Educación en el futuro; además de ser imprescindible para la elaboración y defensa de la tesis doctoral.

La participación es voluntaria y anónima y se puede revocar en cualquier momento: abandonando el cuestionario o pulsando la tecla de retroceso en el navegador se anulará su participación.

Los únicos datos personales que se recogerán serán los relativos al grupo de pertenencia y a las variables señaladas (tipo de centro en el que ejerce, años de experiencia como Director o Directora y DAT en el que se encuentra su centro), que quedarán anonimizados.

Si tiene alguna duda sobre el estudio o le gustaría comentar algún aspecto de esta información, puede ponerse en contacto con cualquiera de los miembros del grupo investigador, antes de aceptar participar en ella, por e-mail: jm.valle@uam.es, jesus.manso@uam.es o josemaria.lozanos@estudiante.uam.es o por teléfono en el +34 690 960 211.

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en el presente documento y en la encuesta hacen referencia a miembros de la comunidad educativa y se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituidos por términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino.

Si una vez leída esta información y aclaradas las dudas que pudieran haberle surgido decide participar, deberá pulsar el siguiente enlace o acceder por el código QR y aceptar la participación, validando de esta forma el "consentimiento informado" y entrando, en el cuestionario.

Si ya ha cumplimentado la encuesta, le agradecemos sinceramente su participación y le solicitamos que disculpe y obvie esta nueva solicitud.

Url – enlace:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DIRCD_EncuestaUAM

Código bidi



Si el enlace le diera problemas al abrirse con el navegador predeterminado de los equipos institucionales de la Comunidad de Madrid, puede copiarlo y pegarlo en cualquier otro navegador: Google Chrome, Firefox Browser, Microsoft Edge, ...

Igualmente puede escanear el código bidi con la cámara de su móvil y cumplimentar la encuesta desde su smartphone o tableta.

Le reiteramos nuestro agradecimiento por su participación y por la divulgación de esta iniciativa entre otros Directores o Directoras.

Doctor Javier M. Valle López

Doctor Jesús Manso Ayuso

José M^a Lozano Salinas

Anexo 3.1. Plantilla del escrito remitido a las entidades representativas de los padres y madres de alumno –familias-, para presentar la investigación y solicitando la divulgación entre sus asociados.

A/A.

[FNom] [FAp].

[FCargo]

[DEntidad]

Estimad[Fdg] [FNomS] :

Nos dirigimos a Vd. para solicitar formalmente su colaboración en la **divulgación** de una encuesta para un proyecto de investigación relativo al ejercicio de las competencias inspectoras en la Comunidad de Madrid. Dicho proyecto forma parte de la tesis doctoral de D. José María Lozano y está dirigida por los Doctores D. Javier M. Valle López y D. Jesús Manso Ayuso. La tesis está inscrita en el Programa de Doctorado en Educación de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

El proyecto en cuestión se encuentra aprobado por la Comisión de Doctorado del mencionado programa, cuenta con el informe favorable del Comité de Ética de la Investigación de la UAM y requiere la participación de los agentes fundamentales que intervienen en nuestro sistema educativo: inspectores de educación, directores de centros educativos, docentes en ejercicio, familias de alumnos y responsables del sistema educativo.

La participación de las familias cuyos/as hijos/as se encuentran escolarizados en centros educativos de la Comunidad de Madrid consistirá en la cumplimentación de un cuestionario sobre el grado de acuerdo del participante en una serie de afirmaciones sobre el ejercicio de las competencias que realiza la Inspección de Educación en la Comunidad de Madrid. Consta de alrededor de cincuenta ítems, organizados en cuatro dimensiones y el tiempo requerido para su cumplimentación no supera los 20 minutos.

Le solicitamos que haga llegar la propuesta de escrito que le adjuntamos a las AMPAS y familias asociadas, por correo electrónico, con objeto de solicitarles su participación, de forma electrónica por ordenador, teléfono móvil y posible acceso por código bidi, para facilitar el acceso.

Si tiene alguna duda sobre el estudio o le gustaría comentar algún aspecto de esta propuesta, antes de aceptar participar en ella, puede ponerse en contacto con nosotros por e-mail (jm.valle@uam.es, jesus.manso@uam.es o josemaria.lozanos@estudiante.uam.es) o por teléfono (+34 690 960 211).

Muy cordialmente,

El Equipo Investigador:

Doctor Javier M. Valle López

Doctor Jesús Manso Ayuso

José M^a Lozano Salinas

PROPUESTA DE ESCRITO PARA LA DIVULGACIÓN

A/A

Familias de alumnos/as de Ed. Primaria y/o Ed. Secundaria de
centros docentes
[Comunidad de Madrid].

Estimado Sr. / estimada Sra. :

Nos ponemos en contacto con Vd. para solicitarle la participación en una investigación cuyo objetivo consiste en estudiar el ejercicio de las competencias inspectoras en la Comunidad de Madrid.

Su participación consistirá en la cumplimentación de un cuestionario, como madre, padre o tutor/a, sobre el ejercicio de las competencias específicas por parte de los Inspectores de Educación.

Se utiliza el método de estudio de encuestas con seis opciones según afinidad a la afirmación (0-5) ya testado previamente por GIPES: Grupo de Investigación sobre Políticas Educativas Supranacionales de la UAM, el grupo Atlántida y la Fundación COTEC, en el que hemos participado previamente.

El cuestionario, implementado en los entornos digitales de la Unión Europea -EUsurvey- (para garantizar la integridad, confidencialidad, protección y anonimato de los datos) consiste en distintas preguntas organizadas en cuatro dimensiones [dimensión personal, dimensión institucional, dimensión de gestión del conocimiento y dimensión de cultura institucional] a las que accederá si acepta el presente **consentimiento informado**.

Al aceptar se accede a unas sencillas preguntas sobre el tipo de centro en el que se encuentran escolarizados/as sus hijos/as, la Dirección de Área Territorial –DAT- en la que se encuentra el centro y al propio cuestionario con las preguntas concretas en forma de matriz organizadas en las cuatro dimensiones.

El tiempo requerido para su cumplimentación no supera los 20´.

La investigación cuenta con el informe favorable del Comité de Ética de la Universidad Autónoma de Madrid y los datos conseguidos serán extraídos de la plataforma a una unidad USB donde se custodiarán durante cinco años en el departamento de Pedagogía de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid (despacho I-316).

Es muy importante su participación en la presente investigación, pues sin Vd., agente imprescindible del sistema educativo, no se podría realizar, ni sacar conclusiones. La participación proporcionará información importante para la investigación y para la elaboración de conclusiones relevantes que pudieran influir en la selección, formación y organización de los Inspectores de Educación en el futuro; además de ser imprescindible para la elaboración y defensa de la tesis doctoral.

La participación es absolutamente voluntaria y anónima y se puede revocar en cualquier momento: abandonando el cuestionario o pulsando la tecla de retroceso en el navegador se anulará su participación.

Los únicos datos personales que se recogerán serán los relativos al grupo de pertenencia y a las variables señaladas (tipo de centro en el que se encuentran escolarizados/as sus hijos/as y DAT en el que se encuentra), que quedarán anonimizados.

Si tiene alguna duda sobre el estudio o le gustaría comentar algún aspecto de esta información, puede ponerse en contacto con cualquiera de los miembros del grupo investigador, antes de aceptar participar en ella, por e-mail: jm.valle@uam.es, jesus.manso@uam.es o josemaria.lozanos@estudiante.uam.es o por teléfono en el +34 690 960 211.

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en el presente documento y en la encuesta hacen referencia a miembros de la comunidad educativa y se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituidos por términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino.

Si una vez leída esta información y aclaradas las dudas que pudieran haberle surgido decide participar, deberá pulsar el siguiente enlace o acceder por el código QR y aceptar la participación, validando de esta forma el "consentimiento informado" y entrando, en el cuestionario.

Url – enlace:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FAMCD_EncuestaUAM

Código bidi



Si el enlace le diera problemas al abrirse con un navegador antiguo o no actualizado, puede copiarlo y pegarlo en cualquier otro navegador actualizado: Google Chrome, Firefox Browser, Microsoft Edge, ...

Igualmente puede escanear el código bidi con la cámara de su móvil y cumplimentar la encuesta desde su smartphone o tableta.

Muchas gracias por su participación.

Doctor Javier M. Valle López

Doctor Jesús Manso Ayuso

José M^a Lozano Salinas

Anexo 3.2. Cuentas de twitter investigadas.

@sindicatopadres	@ceapa_oficial	@BegoLdeG
@FAPA_Giner-Rios@	@FAPA_Valdemoro	@@Villaverde_fapa
@cofapamadrid	@AMPAJaveGoodal	@CopernicoAmpa
@AmpaH2M	@AMPA_LopeDeVega	@DeAmpas
@AFAMenendez	@AMPAsHortaleza	@ssreyesfapa
@ampares_malala	@AmpaJesefajalon	@AmpaGabriela
@MolinesAmpa	@SenecaAmpa	@ampe_artes
@AMercedesvera	@lesCaballe	@AmpaManuela
@AmpaZuloaga	@AngelesAmpa	@apaipamadrid
@lesHumaParla	@ampalaciovaldes	@AmpaMtdc
@ampa_Conde	@AMPA_IESPRADOSD	@APARufino
@ampamvm	@AfaArcangel	@AMPAVDLRibera
@AgoraAmpa	@ampasjbosco	@ampadecroly
@ampaantonitapi1	@AmpaXirgu	@AmpaMoyano
@AmpaVives	@AmpaSCM	@AfaCiudadPegaso
@afasallepaloma	@AmpaCarlie	AmpaMhdes
@ampaluzuriaga	@AmpaAlas	@ampa_sanbenito
@Bavillerato_Ya	@AMPAAntamira	@AmpaCasmayor
@AMPA_Navastolos	@Ampa_FerRios	@ampa_don
@ampacolelereche	@LopeAmpa	@AMPAHerreraOria
@DeMeseta	@AMPAIESHerreraO	@ampaiespicasso
@AFAIESBG	@AFARenacimiento	@mpaiesbfo
@asankris	@AMPA_ElRincon	@FEC_Ampa
@AmpaNeil	@APACervantes_3c	@ampaeijeromin
@AmpaGaldos	@QuevedoAmpa	@AMPAGMoreno
@AmpasDe	@ampa_e	@MachadoAmpa

@AMPAGi	@ampa_averroes	@AMPABregogan
@lesBurgo	@AmpaSatafi	@AmpaJCosta
@Ampa_rey	@DrMaranonAMPA	@AMPAJarama
@ampa_jose	@AmpaGaite	@iesysern
@AmpaDulve	@AMPAPuertoRico	@ampa_clara
@ampa_valera	@ampasjo	@AcaciasAmpa
@ies_frank	@ampantusana	@aparosaluxembu1
@ampasRusinol	@AFAVJaneGoodal	@AmpaBlasdeOtero
@ampa:cajal	@AMPA_MB_Gtafe	@Ampaseiv
@ampacproma	@ampaloyola	@JGuillenAMPA
@amparafaella1	@ampaiesberlanga	@ampaluiscernuda
@AlmendrosAmpa	@SOScoleLavapies	@AmpaSavater
@AmpaOtero	@ampa_camilojc	@AMPACELSOCOIMB1
@ampaprincipemos	@AmpaFCaPedraza	@AmpaEuropa
@AFABenedetti	@CeipPi	@ampadelblas
@PabloCeid	@NampaOrtega	@ampalasciguenas
@AmpaMaestro	@AMPAFloresFortu	@apaceipgandhi
@ampazaraguet	@ampa_MH_Leganes	@ampafdequedo
@AbadyHariaAmpa	@AMPANuriaEspert	@IesVillablanca
@ampajoanmiro	@APAColeLaEncina	@ampasiglo21
@APASanMiguel	@Amalasrozas1	@AMPALosOlivos
@CondeAmpa	@DuqueAmpa	@Ampafelipe2
@AMPA_Ortega	@AMPACEIPRosales	@ampa_cpva
@AmpaFortuny	@AmpaFatou	@AMPA6Diciembre
@NorTEA_	@AmpaAyala	@AmpalesIsidra
@ampaceipsanjose	@MptTribu	@ampaceipsuanzes
@AMPAIESMorato	@AfaAmaploas	@AfsAINZ
@AMPALasMusas	@Ampalameta	@AMPAWSCoslada

@LandaAMPA	@Ampa_Berceo	@AmpaRosaliaCos
@AmpaEscuela	@PalomerasBajas	@afa_angelnieto
@AmpaQuijoteVK	@Ampaiescomplut1	@GarciaLorcaAMPA
@Ampalsacato	@ampa_duque	@AmpaHaiti
@ampa_ara	@BlasParla	@NicolasAmpa
@AmpaPaqrque	@ParlaLuchaEduca	@AmpaCondeOrgaz
@AmpaFelipeIV	@AMPAiesALAOsUNA	@AMPAOsuna
@AmpaIESAS	@ampacolebrasil	@AmpaElRincon
@Somos_del_Sanjo	@ampaiesbloranca	@Ampa_IES_Serna
@AraujoAmpa	@ampaggm	@SorianoFischer
@Ampaiesmutis	@AmpaGuindalera	@AMPA_SApostol
@AMPABlasdelezo	@AmptaFGLorca	@ampa_la_luna
@AmpaGongora	@AmpaPJulioperez	@AmpaSesenaBena
@AMPAEIBercial	@CeipsoCervantes	@IesSsr
@ampamrodrigo	@apaquevedo	@TravencoAmpa
@AmpaCOnceArenales	@AMpaVictorP	@afa_ies_forges
@AmpaFco	@AMPAAEEAguirre	@Afabravomurillo
@ampaiesSanta	@Ampacarpediemp	@AMPAINmaculada
@AMPAAngelGlez	@AmpaJacinto	@AmpaUruguay
@Ampapareda	@ampaceiprm	@AmpaBerceo
@CEIPBlasDeOtero	@AMPAMEjico	@ampacolegfc
@AmpaQuinto	@infantas_ampa	@ampaleonfelipe
@ampaiesvalde	@ampaSanIsidro	@ampaplacido
@fapaAgzCtr	@miro_ampa	@ampatrempranales
@sanblasfapa	@AMPADaoizGetfe	@AmptaLourdes
@AmpaCalde_barca	@ampacarlosiii	@IESJuande
@APA_IES_JM_3C	@AMPAAETG	@ampamanuelfalla
@AMPAPRJ	@Sam_ampa	@CdeAsociaciones

@AMPADIONISIO	@AMPA_LaLuz	@AMPA_Caldereon
@fontarronAMPA	@ampamarcenado	@ampaelfo
@AmpaSiesCubas	@APACarmenConde	@ampamartinagarc
@ampa_poveda	@Aleixandreampav	@AMPAFRiosGetafe
@AMPACarlosV	@ampadmTorrero	@AmpaValdebebas
@Mariacarmenmors	@AMPAJCIERVA	@APAunamuno
@AmpaSanJuanCruz	@ampatbreton	@ampaalfonsox
@FapaVk	@APAIESCervantes	@ampaiesinfanta
@Ampavicalvaro	@AmpaAlmendros2	@Amplldefonso
@AMPAIESJGN	@AMPACOLUMBIA	@AMPArafaelalber
@ampappicasso	@fuentedlpalomar	@UnionAMPASAlcor
@ApACervantes3C	@publicachamberi	@AMPALOSALMENDRO
@ampaceipvalde	@ampaimirasierra	@AMPACPLisboa
@ampaiespdel	@AMPAdelRosa	@apaseverochoa
@ampa_losrosales	@Ausias_March	@AMPAIESCLA
@apaiesdaganzo	@AmpaD_Martin	@AmpaVillaGuada
@APAIESSierradeG		

Anexo 3.3. Ejemplo de tweet generado para facilitar el acceso y la divulgación de la encuesta entre las asociaciones y federaciones de padres (ejemplo).

← Tweet

↻ Retwitteaste



DoctoEdu_UAM
@doctoedu

...

@cofapamadrid

Si tienes hijos 🧒🧒 estudiando primaria o secundaria en la Comunidad de Madrid, participa en esta investigación 📝 @UAM_Madrid sobre el ejercicio de las competencias inspectoras.

ec.europa.eu/eusurvey/runne...

informe 👍 del Comité de Ética.

👉 RT y divulgación.

Gracias 🙌



Anexo 3.4. Hilo de respuesta generadas al tweet publicado para facilitar el acceso y la divulgación de la encuesta entre las asociaciones y federaciones de padres (ejemplo).



Anexo 4.1. Plantilla del escrito remitido a las entidades y sindicatos representativos de maestros, profesores y docentes, para presentar la investigación y solicitando la divulgación entre sus asociados.

A/A.

[SNom] [SAp].

[SCargo]

[SEntidad]

Estimad[Sdg] [SNomS] :

Nos dirigimos a Vd. para solicitar formalmente su colaboración en la **divulgación** de una encuesta para un proyecto de investigación relativo al ejercicio de las competencias inspectoras en la Comunidad de Madrid. Dicho proyecto forma parte de la tesis doctoral de D. José María Lozano y está dirigida por los Doctores D. Javier M. Valle y D. Jesús Manso. La tesis está inscrita en el Programa de Doctorado en Educación de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

El proyecto en cuestión se encuentra aprobado por la Comisión de Doctorado del mencionado programa, cuenta con el informe favorable del Comité de Ética de la Investigación de la UAM y requiere la participación de los agentes fundamentales que intervienen en nuestro sistema educativo: inspectores de educación, directores de centros educativos, docentes en ejercicio, familias de alumnos y responsables del sistema educativo.

La participación de los docentes de Ed Primaria o Ed. Secundaria en centros educativos de la Comunidad de Madrid consistirá en la cumplimentación de un cuestionario sobre el grado de acuerdo del participante en una serie de afirmaciones sobre el ejercicio de las competencias que realiza la Inspección de Educación en nuestra Comunidad Autónoma. Consta de alrededor de cincuenta ítems, organizados en cuatro dimensiones y el tiempo requerido para su cumplimentación no supera los 20 minutos.

Le solicitamos que haga llegar la propuesta de escrito que le adjuntamos –a pie- a los docentes afiliados a [SEntidad] en la Comunidad de Madrid por correo electrónico, con objeto de solicitarles su participación, de forma electrónica por ordenador, teléfono móvil y posible acceso por código bidi, para facilitar el acceso.

Si tiene alguna duda sobre el estudio o le gustaría comentar algún aspecto de esta propuesta, antes de aceptar participar en ella, puede ponerse en contacto con nosotros por e-mail (jm.valle@uam.es, jesus.manso@uam.es o josemaria.lozanos@estudiante.uam.es) o por teléfono (+34 690 960 211).

Muy cordialmente,

El Equipo Investigador:

Doctor Javier M. Valle López

Doctor Jesús Manso Ayuso

José M^a Lozano Salinas

PROPUESTA DE ESCRITO PARA LA DIVULGACIÓN

A/A

Docente de Ed. Primaria o Ed. Secundaria.

[Comunidad de Madrid].

Estimado Sr. / estimada Sra.:

Nos ponemos en contacto con Vd. para solicitarle la participación en una investigación cuyo objetivo consiste en estudiar el ejercicio de las competencias inspectoras en la Comunidad de Madrid.

Su participación consistirá en la cumplimentación de un cuestionario, como docente en ejercicio en la Comunidad de Madrid, sobre el ejercicio de las competencias específicas por parte de los Inspectores de Educación.

Se utiliza el método de estudio de encuestas con seis opciones según afinidad a la afirmación (0-5) ya testado previamente por GIPES: Grupo de Investigación sobre Políticas Educativas Supranacionales de la UAM, el grupo Atlántida y la Fundación COTEC, en el que hemos participado previamente.

El cuestionario, implementado en los entornos digitales de la Unión Europea -EUsurvey- (para garantizar la integridad, confidencialidad, protección y anonimato de los datos) consiste en distintas preguntas organizadas en cuatro dimensiones [dimensión personal, dimensión institucional, dimensión de gestión del conocimiento y dimensión de cultura institucional] a las que accederá si acepta el presente **consentimiento informado**.

Al aceptar se accede a unas sencillas preguntas sobre el tipo de centro en el que ejerce, sus años de experiencia docente, la Dirección de Área Territorial –DAT- en la que se encuentra el centro donde trabaja y al propio cuestionario con las preguntas concretas en forma de matriz organizadas en las cuatro dimensiones.

El tiempo requerido para su cumplimentación no supera los 20’.

La investigación cuenta con el informe favorable del Comité de Ética de la Universidad Autónoma de Madrid y los datos conseguidos serán extraídos de la plataforma a una unidad USB donde se custodiarán durante cinco años en el departamento de Pedagogía de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid (despacho I-316).

Es muy importante su participación en la presente investigación, pues sin Vd., agente imprescindible del sistema educativo, no se podría realizar, ni sacar conclusiones. La participación proporcionará información importante para la investigación y para la elaboración de conclusiones relevantes que pudieran influir en la selección, formación y organización de los Inspectores de Educación en el futuro; además de ser imprescindible para la elaboración y defensa de la tesis doctoral.

La participación es absolutamente voluntaria y anónima y se puede revocar en cualquier momento: abandonando el cuestionario o pulsando la tecla de retroceso en el navegador se anulará su participación.

Los únicos datos personales que se recogerán serán los relativos al grupo de pertenencia y a las variables señaladas (tipo de centro en el que ejerce, años de experiencia y DAT en el que se encuentra su centro), que quedarán anonimizados.

Si tiene alguna duda sobre el estudio o le gustaría comentar algún aspecto de esta información, puede ponerse en contacto con cualquiera de los miembros del grupo investigador, antes de aceptar participar en ella, por e-mail: jm.valle@uam.es, jesus.manso@uam.es o josemaria.lozanos@estudiante.uam.es o por teléfono en el +34 690 960 211.

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en el presente documento y en la encuesta hacen referencia a miembros de la comunidad educativa y se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituidos por términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino.

Si una vez leída esta información y aclaradas las dudas que pudieran haberle surgido decide participar, deberá pulsar el siguiente enlace o acceder por el código QR y aceptar la participación, validando de esta forma el "consentimiento informado" y entrando, en el cuestionario.

Url – enlace:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PROCD_EncuestaUAM

Código bidi



Si el enlace le diera problemas al abrirse con un navegador antiguo o no actualizado, puede copiarlo y pegarlo en cualquier otro navegador actualizado: Google Chrome, Firefox Browser, Microsoft Edge, ...

Igualmente puede escanear el código bidi con la cámara de su móvil y cumplimentar la encuesta desde su smartphone o tableta.

Muchas gracias por su participación.

Doctor Javier M. Valle López

Doctor Jesús Manso Ayuso

José M^a Lozano Salinas

Anexo 5.1. Plantilla del escrito remitido a todos los responsables educativos, invitando a participar en la investigación.

A/A
[RNom] [RAp].
[RCargo]
Consejería de Educación
[Comunidad de Madrid]

Estimad[Rdg] [RNomS] :

Nos ponemos en contacto con Vd. para solicitar su participación en una investigación cuyo objetivo consiste en estudiar el ejercicio de las competencias inspectoras en la Comunidad de Madrid.

Dicha investigación forma parte de la tesis doctoral de D. José María Lozano y está dirigida por los Doctores D. Javier M. Valle López y D. Jesús Manso Ayuso. La tesis está inscrita en el Programa de Doctorado en Educación de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Su participación consistirá en la cumplimentación de un cuestionario, como [RCargo], sobre el ejercicio de las competencias específicas por parte de los Inspectores de Educación.

Se utiliza el método de estudio de encuestas con seis opciones según afinidad a la afirmación (0-5) ya testado previamente por GIPES: Grupo de Investigación sobre Políticas Educativas Supranacionales de la UAM, el grupo Atlántida y la Fundación COTEC, en el que hemos participado previamente.

El cuestionario, implementado en los entornos digitales de la Unión Europea -EUsurvey- (para garantizar la integridad, confidencialidad, protección y anonimato de los datos) consiste en distintas preguntas organizadas en cuatro dimensiones [dimensión personal, dimensión institucional, dimensión de gestión del conocimiento y dimensión de cultura institucional] a las que accederá si acepta el presente **consentimiento informado**.

Al aceptar se accede a una sencilla pregunta sobre los años ejercidos como Consejero de Educación, y al propio cuestionario con las preguntas concretas en forma de matriz organizadas en las cuatro dimensiones.

El tiempo requerido para su cumplimentación no supera los 20´.

La investigación cuenta con el informe favorable del Comité de Ética para la Investigación de la Universidad Autónoma de Madrid y los datos conseguidos serán extraídos de la plataforma a una unidad USB donde se custodiarán durante cinco años en el departamento de Pedagogía de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid (despacho I-316).

Es muy importante su participación en la presente investigación, pues sin Vd., agente imprescindible del sistema educativo, no se podría realizar, ni sacar conclusiones. La participación proporcionará información importante para la investigación y para la elaboración de conclusiones relevantes que pudieran influir en la selección, formación y organización de los Inspectores de Educación en el futuro; además de ser imprescindible para la elaboración y defensa de la tesis doctoral.

La participación es absolutamente voluntaria y anónima y se puede revocar en cualquier momento: abandonando el cuestionario o pulsando la tecla de retroceso en el navegador se anulará su participación.

Los únicos datos personales que se recogerán serán los relativos al grupo de pertenencia y a la variable señalada (años de experiencia en la responsabilidad), que quedarán anonimizados.

Si tiene alguna duda sobre el estudio o le gustaría comentar algún aspecto de esta información, puede ponerse en contacto con cualquiera de los miembros del grupo investigador, antes de aceptar participar en ella, por e-mail: jm.valle@uam.es, jesus.manso@uam.es o josemaria.lozanos@estudiante.uam.es o por teléfono en el +34 690 960 211.

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en el presente documento y en la encuesta hacen referencia a miembros de la comunidad educativa y se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituidos por términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino.

Si una vez leída esta información y aclaradas las dudas que pudieran haberle surgido decide participar, deberá pulsar el siguiente enlace o acceder por el código QR y aceptar la participación, validando de esta forma el "consentimiento informado" y entrando, en el cuestionario.

Url – enlace:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RESSE_EncuestaUAM

Código bidi



Si el enlace le diera problemas al abrirse con un navegador antiguo o no actualizado, puede copiarlo y pegarlo en cualquier otro navegador actualizado: Google Chrome, Firefox Browser, Microsoft Edge, ...

Igualmente puede escanear el código bidi con la cámara de su móvil y cumplimentar la encuesta desde su smartphone o tableta.

Muchas gracias por su participación.

Doctor Javier M. Valle López

Doctor Jesús Manso Ayuso

José M^a Lozano Salinas

Anexo 5.2. Plantilla del escrito remitido a los responsables educativos, volviendo a presentar la investigación y reiterando la solicitud de participación.

A/A
[RNom] [RAp].
[RCargo]
Consejería de Educación
[Comunidad de Madrid]

Estimad[Rdg] [RNomS] :

El pasado mes de enero nos pusimos en contacto con Vd. para solicitarle su participación en una investigación cuyo objetivo consiste en estudiar el ejercicio de las competencias requeridas para el desarrollo de las funciones inspectoras en la Comunidad de Madrid.

Dado que la participación no alcanza el nivel de confianza estadístico requerido, nos permitimos volver a ponernos en contacto con Vd., para reiterar la solicitud de participación, sólo en el caso de que no lo haya hecho previamente.

Como recordará, su participación consistirá en la cumplimentación de un cuestionario, como [RCargo], sobre el ejercicio de las competencias específicas por parte de los Inspectores de Educación.

Le recordamos brevemente los datos y el objeto de la investigación y el procedimiento concreto que le solicitamos.

El equipo de investigación está compuesto por el Doctor Javier M. Valle López, profesor titular del Departamento de Pedagogía de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, coordinador general del Grupo de Investigación sobre Políticas Educativas Supranacionales [GIPES] de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid por el grupo de Universidades Madrileñas; por el Doctor Jesús Manso Ayuso, Decano de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid; y por José M^a Lozano Salinas, alumno del programa de Doctorado en Educación en la misma Universidad.

Se utiliza el método de estudio de encuestas, con seis opciones según afinidad a la afirmación (0-5) con una herramienta elaborada por GIPES, el grupo Atlántida y la Fundación COTEC junto a representantes de las principales asociaciones y sindicatos de inspectores de educación (USIE, ADIDE, ANIE e INSnoae) que actuaron como expertos. La herramienta se encuentra validada estadísticamente.

El cuestionario, implementado en los entornos digitales de la Unión Europea -EUsurvey- (para garantizar la integridad, confidencialidad, protección y anonimato de los datos) consiste en distintas preguntas organizadas en cuatro dimensiones [dimensión personal, dimensión institucional, dimensión de gestión del conocimiento y dimensión de cultura institucional] a las que accederá si acepta el presente **consentimiento informado**.

Al aceptar se accede a una sencilla pregunta sobre los años ejercidos como Subdirector General, y al propio cuestionario con las preguntas concretas en forma de matriz organizadas en las cuatro dimensiones.

El tiempo requerido para su cumplimentación no supera los 20'.

La investigación cuenta con el informe favorable del Comité de Ética para la Investigación de la Universidad Autónoma de Madrid y los datos conseguidos serán extraídos de la plataforma a una unidad USB donde se custodiarán durante cinco años en el departamento de Pedagogía de

la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid (despacho I-316).

Como comprenderá, es muy importante su participación en la presente investigación, pues sin Vd., agente imprescindible del sistema educativo, no se podría realizar, ni sacar conclusiones. La participación proporcionará información importante para la investigación y para la elaboración de conclusiones relevantes que pudieran influir en la selección, formación y organización de los Inspectores de Educación en el futuro; además de ser imprescindible para la elaboración y defensa de la tesis doctoral.

La participación es absolutamente voluntaria y anónima y se puede revocar en cualquier momento: abandonando el cuestionario o pulsando la tecla de retroceso en el navegador se anulará su participación.

Los únicos datos personales que se recogerán serán los relativos al grupo de pertenencia y a la variable señalada (años de experiencia en la responsabilidad), que quedarán anonimizados.

Si tiene alguna duda sobre el estudio o le gustaría comentar algún aspecto de esta información, puede ponerse en contacto con cualquiera de los miembros del grupo investigador, antes de aceptar participar en ella, por e-mail: jm.valle@uam.es, jesus.manso@uam.es o josemaria.lozanos@estudiante.uam.es o por teléfono en el +34 690 960 211.

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en el presente documento y en la encuesta hacen referencia a miembros de la comunidad educativa y se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituidos por términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino.

Si una vez leída esta información y aclaradas las dudas que pudieran haberle surgido decide participar, deberá pulsar el siguiente enlace o acceder por el código QR y aceptar la participación, validando de esta forma el "consentimiento informado" y entrando, en el cuestionario.

Url – enlace:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RESSE_EncuestaUAM

Código bidi



Si el enlace le diera problemas al abrirse con un navegador antiguo o no actualizado, puede copiarlo y pegarlo en cualquier otro navegador actualizado: Google Chrome, Firefox Browser, Microsoft Edge, ...

Igualmente puede escanear el código bidi con la cámara de su móvil y cumplimentar la encuesta desde su smartphone o tableta.

Si ya hubiera cumplimentado el cuestionario, le agradecemos sinceramente su participación y le rogamos de disculpe este mensaje.

Quedamos a su entera disposición. Muchas gracias.

Anexo 5.3. Mensajes relevantes recibidos desde el sector de responsables.

A.

De: [RNom] [RAp].

Enviado el: miércoles, 12 de enero de 2022 7:54

Para: José M^a Lozano [estudiante doctorado UAM]

<josemaria.lozanos@estudiante.uam.es>

Asunto: RE: Proyecto de investigación sobre el ejercicio de las competencias inspectoras en la Comunidad de Madrid.

Buenos días:

Estaría encantada en participar en el proyecto, pero no estoy cualificada para informar sobre el ejercicio de las competencias específicas de los inspectores de Educación. Les sugiero que se pongan en contacto con el Subdirector General de la Inspección Educativa, D. Luis Abad Merino (correo electrónico: luis.abad.merino@madrid.org)

Gracias.

Un cordial saludo.

B.

De: [RNom] [RAp].

Enviado el: miércoles, 12 de enero de 2022 9:07

Para: José M^a Lozano [estudiante doctorado UAM]

<josemaria.lozanos@estudiante.uam.es>

Asunto: RE: Proyecto de investigación sobre el ejercicio de las competencias inspectoras en la Comunidad de Madrid.

Buenos días,

Antes de dar mi conformidad, tengo que ver el tipo de preguntas para ver si soy la persona idónea, ya que mi función es la dirección de las TIC para los centros educativos, pero no participo en el ejercicio de las competencias inspectoras de la comunidad.

Eso sí, como parte de la gestión TIC, mi equipo participa y gestiona la inclusión en el aplicativo RAICES de las funcionalidades requeridas por la inspección.

Un saludo,

[RNom] [RAp].

[RCargo]

Dirección General de Infraestructuras y Servicios - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
Santa Hortensia, 30. 2ª planta. 28002 MADRID - Tel 917325137

C.

De: [RNom] [RAp].

Enviado el: miércoles, 12 de enero de 2022 9:15

Para: José M^a Lozano [estudiante doctorado UAM]

<josemaria.lozanos@estudiante.uam.es>

Asunto: RE: Proyecto de investigación sobre el ejercicio de las competencias inspectoras en la Comunidad de Madrid.

Estimado Sr. Lozano,

Aunque pertenecemos a la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, en la Subdirección General de Investigación, no tenemos relación alguna con los temas de Educación, y menos con una competencia tan específica como la inspectora. Mis conocimientos sobre esta materia son muy escasos, por lo que no se si mi aportación a este cuestionario le resultaría de interés para su tesis doctoral. Si sigue interesado en que rellene dicho cuestionario, por favor, indíquemelo.

Un saludo,



[RNom] [RAp].

[RCargo]

Dirección General de Investigación e Innovación Tecnológica

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y PORTAVOCÍA

Paseo de Recoletos, 14 28001 MADRID

Tfno: 91 720 04 23

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos

De conformidad con el Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, no se guardarán los datos personales que Vd. nos envía en el correo electrónico al que se contesta con este mail, puesto que el mismo no inicia procedimiento alguno al ser de carácter puramente informativo.

D.

De: [RNom] [RAp].

Enviado el: miércoles, 12 de enero de 2022 9:25

Para: José M^a Lozano [estudiante doctorado UAM]

<josemaria.lozanos@estudiante.uam.es>

Asunto: RE: Proyecto de investigación sobre el ejercicio de las competencias inspectoras en la Comunidad de Madrid.

Buenos días, perdona pero debe haber algún error, yo jamás he ejercido ninguna labor dentro del sistema educativo de la Comunidad de Madrid ni he tenido nada que ver con la inspección.

La misión de mi subdirección, cuyas funciones proceden de la Consejería de Economía en la que se encuadraba hasta hace tres años, es el fomento de la I+D+I empresarial, no tocamos ningún aspecto del sistema educativo madrileño

Un saludo



**Comunidad
de Madrid**

[RNom] [RAp].

[RCargo]

Dirección General de Investigación e Innovación Tecnológica

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y PORTAVOCÍA

P^o de Recoletos, 14

28001 Madrid

Tfno.: 917200480

E.

De: [RNom] [RAp].

Enviado el: miércoles, 12 de enero de 2022 9:26

Para: José M^a Lozano [estudiante doctorado UAM]

<josemaria.lozanos@estudiante.uam.es>

Asunto: Re: Proyecto de investigación sobre el ejercicio de las competencias inspectoras en la Comunidad de Madrid.

Buenos días José M^a, agradezco tu invitación a participar pero tengo que declinar ya que mis competencias en nada se cruzan con las actuaciones de los inspectores de Educación.

Te deseo mucha suerte con tus investigaciones y una estupenda tesis doctoral.

Saludos cordiales,

[RNom] [RAp].

F.

De: [RNom] [RAp].

Enviado el: miércoles, 12 de enero de 2022 10:09

Para: José M^a Lozano [estudiante doctorado UAM]

<josemaria.lozanos@estudiante.uam.es>

Asunto: RE: Proyecto de investigación sobre el ejercicio de las competencias inspectoras en la Comunidad de Madrid.

Buenos días, José María, lamento comunicarte que mis funciones no están relacionadas para nada con los Inspectores de Educación. Me temo que no te puedo ayudar.

Un saludo,

[RNom] [RAp].

G.

De: [RNom] [RAp].

Enviado el: miércoles, 12 de enero de 2022 10:47

Para: José M^a Lozano [estudiante doctorado UAM]

<josemaria.lozanos@estudiante.uam.es>

Asunto: Re: Proyecto de investigación sobre el ejercicio de las competencias inspectoras en la Comunidad de Madrid.

Estimado José María, yo no tengo las competencias de la inspección en la CM, le corresponden a la otra Viceconsejería de organización educativa.

Un saludo, [RNom].

H.

De: [RNom] [RAp].

Enviado el: miércoles, 12 de enero de 2022 12:56

Para: José M^a Lozano [estudiante doctorado UAM]

<josemaria.lozanos@estudiante.uam.es>

Asunto: Re: Proyecto de investigación sobre el ejercicio de las competencias inspectoras en la Comunidad de Madrid.

Hola José María, siento no poder ayudarte. La inspección de educación cubre todo el periodo "preuniversitario". Como DG no tuve ninguna relación con este tema.

Un saludo,

[RNom] [RAp].

Anexo 5.4. Respuesta a los mensajes singulares, recibidos desde el sector de responsables.

Estimad[Rdg] [RNomS] :

Acusamos recibo del mensaje recibido.

La finalidad de la investigación es elaborar el perfil profesional de los Inspectores de Educación la Comunidad de Madrid, desde el ejercicio de sus competencias específicas profesionales. En la investigación es importante recoger la percepción que los distintos agentes del sistema educativo tienen del trabajo de los Inspectores para que ese perfil sea lo más completo y ajustado posible.

No es la intención del equipo investigador realizar un análisis orgánico o estructural, sino recabar la información sobre la percepción que los propios Inspectores, los directores, los docentes, las familias y los responsables educativos tienen del desempeño específico del ejercicio de las competencias inspectoras. En ese sentido su aportación proporcionaría una información cualitativa de gran valor y nos facilitaría contrastar y triangular las distintas percepciones a fin de establecer, de la forma más ajustada posible, el perfil profesional de los Inspectores de Educación en la Comunidad de Madrid.

Es por esto que le reiteramos la invitación a participar, si así lo considera, agradeciéndole de cualquier forma la atención prestada y el contenido de su mensaje que también aporta información para la propia investigación.

Quedamos a su disposición. Un afectuoso saludo:

El equipo investigador:

Doctor Javier M. Valle López

Doctor Jesús Manso Ayuso

José M^a Lozano Salinas

La redacción inicial de la presente tesis doctoral
se finalizó el día 15 de octubre de 2022,
festividad de Santa Teresa de Jesús.

Es tradición asumida
entre los inspectores de educación,
el patronazgo de esta Doctora de la Iglesia,
por su dimensión andariega y visitadora.